



**Universidad de Valladolid**



PROGRAMA DE DOCTORADO EN ARQUITECTURA

TESIS DOCTORAL:

**LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO EN  
COLOMBIA: 1954-2019  
ORIGEN, EVOLUCIÓN Y EFECTOS URBANÍSTICOS EN  
LOS CENTROS HISTÓRICOS DEL ÁMBITO NACIONAL**

Presentada por Oscar Yesid Fonseca Roa para optar el grado de  
Doctor por la Universidad de Valladolid

Dirigida por:  
Dra. María de los Ángeles Castrillo Romón



*“...Una ciudad es un todo único y continuo y, al igual que un ser vivo, no cambia su naturaleza con los cambios de la edad ni se convierte en otra con el paso del tiempo. Al contrario, la ciudad conserva el mismo espíritu y siempre es fiel a sí misma, y de lo que ha hecho en común recibe entera la culpa o el honor, al menos hasta que la comunidad, ligada por lazos operativos, conserve su unidad. No tiene sentido distinguir muchas ciudades dentro de una misma ciudad, según el paso del tiempo: sería como hacer de un solo hombre varios hombres, como si uno pudiera ser distinto de sí mismo al pasar de la infancia a la juventud y a la vejez...” Plutarco*

*“...Jose Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de treinta años y donde nadie había muerto...”  
Cien años de soledad. Gabriel García Márquez*

*“... Ahora, de repente, en mitad de la noche ha regresado la lluvia sobre los cafetales y entre el vocerío vegetal de las aguas me llega la intacta materia de otros días salvada del ajeno trabajo de los años...”  
Nocturno. Alvaro Mutis*

In memoriam a mi madre y ángel María Alcira Roa de Fonseca

## **AGRADECIMIENTOS**

Mi más profundo agradecimiento a la Doctora María de los Ángeles Castrillo Romón por su dedicación, generosidad y orientación durante el desarrollo del doctorado; así como a su familia por su amabilidad.

Gratitud eterna a mi familia Johanna Marcela, Sofia e Isabella por la concesión de su tiempo, comprensión y apoyo amoroso. A Santos, Susan Andrea, Giovanni Andrés, Elkin Leonardo, Norma Constanza, Carlos, Lina y Jhon por su apoyo incondicional.

A Jesús Alfonso y Carlos Fernando Roa Hernández por la vitalidad de su ejemplo, presente en las decisiones de la vida.

A Lida, Nohemí, Daniel, Nubia, María Victoria, Juan, Carolina, Viviana, Carlos y Luz Marina por su atento interés.

A la Universidad de La Salle Colombia, al programa de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, a mis estudiantes del Taller de revitalización urbana, gestión de proyectos, y proyecto final hoy architect@s. A Paula, Jacqueline Rivera, Daniela Forero y Estelita.

Al Instituto Universitario de Urbanística, a los doctores Alfonso Álvarez Mora, Juan Luis de las Rivas, Luis Santos y Ganges, Marina Jiménez, Miguel Fernández Maroto, Rodrigo Almonacid y Enrique Rodrigo por su hospitalidad y acompañamiento durante las estancias en Valladolid.

A l@s bibliotecarios, administradores de archivo y funcionarios de repositorios. A los colaboradores de la Residencia de postgrado Reyes Católicos por su amabilidad y colaboración, mi gratitud y agradecimiento.

A la memoria de Susana, Jesús, Justo y Tránsito.

## CONTENIDO

<b>LISTADO DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS .....</b>	<b>1</b>
<b>Resumen .....</b>	<b>4</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>6</b>
 <b>CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN .....</b>	 <b>9</b>
<b>LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO EN COLOMBIA (1954-2019) COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN: PROBLEMA, OBJETIVOS, MÉTODOS Y FUENTES .....</b>	 <b>9</b>
<b>1.1 De la defensa del patrimonio histórico a la política de protección del patrimonio urbano en Colombia: el problema de investigación .....</b>	 <b>11</b>
<b>1.2 Estado de la cuestión .....</b>	<b>14</b>
1.2.1 Elementos básicos de la creación del patrimonio urbano y su política de protección en Colombia.....	14
1.2.2 Los sectores antiguos y su relación con la planeación urbana en el siglo XX .....	17
1.2.3 De las declaratorias de sectores antiguos a la conformación del patrimonio urbano y su política de protección .....	19
1.2.4 La política de protección del patrimonio urbano como objeto de estudio.....	21
<b>1.3 Objeto y objetivos de la investigación.....</b>	<b>27</b>
1.3.1 Interés científico del problema, preguntas de investigación e hipótesis.....	32
<b>1.4 Marco conceptual .....</b>	<b>36</b>
1.4.1 Aproximación a la definición de política pública.....	36
1.4.2 Definición y composición del patrimonio urbano en Colombia.....	38
<b>1.5 Marco teórico-metodológico: el enfoque del institucionalismo histórico .....</b>	<b>40</b>
1.5.1 El Institucionalismo, el Nuevo Institucionalismo Histórico y el <i>path dependence</i> : aproximación teórica .....	40
1.5.2 Definición, principios y concepciones del institucionalismo .....	42
1.5.3 El Nuevo Institucionalismo Histórico .....	45
<b>1.6 <i>Path dependence</i> o dependencia del camino o de la trayectoria .....</b>	<b>48</b>
1.6.1 Modelo general de la dependencia de la trayectoria.....	52
1.6.2 Coyunturas críticas y beneficios o rendimientos crecientes .....	55
1.6.3 Aplicación del modelo general de la dependencia de la trayectoria a las políticas de protección del patrimonio urbano en Colombia (1954-2019). .....	57
1.6.3.1 Los centros históricos en Colombia desde un enfoque de institucionalismo histórico. ....	60
<b>1.7 Principales fuentes empleadas.....</b>	<b>68</b>
1.7.1 Corpus jurídico: de la declaratoria de Villa de Leyva en 1954 al Decreto único reglamentario del sector cultura (Decreto 2358 de 2019) .....	68
1.7.2 Otras fuentes importantes .....	69

<b>1.8 Estructura del documento .....</b>	<b>71</b>
<b>CAPÍTULO II.....</b>	<b>75</b>
<b>ORIGEN DEL PATRIMONIO URBANO COLOMBIANO (1954-1980). PRIMERAS CREACIONES INSTITUCIONALES: NACIMIENTO Y DESARROLLO DE COLCULTURA (1968-1997) Y DE LAS DECLARATORIAS (1954-2018) .....</b>	<b>75</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>75</b>
<b>2.1 La política cultural en Colombia y su relación con el patrimonio urbano.....</b>	<b>79</b>
2.1.1. Institucionalización de la cultura.....	84
2.1.2 El patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos en Colombia: legislación precursora .....	86
2.1.3 La academia y los institutos universitarios de investigaciones estéticas .....	88
<b>2.2 Del Decreto 3641 de 1954 al Decreto 776 de 1980: orígenes y desarrollo de las primeras instituciones de política patrimonial en Colombia.....</b>	<b>91</b>
2.2.1 La Ley 163 de 1959 de patrimonio histórico y su Decreto reglamentario de 1964: fortalecimiento de la defensa de monumentos nacionales.....	93
2.2.2 Creación de organismos e instituciones públicas para la política patrimonial (1959- 1976) y su desarrollo posterior .....	97
2.2.2.1 El Consejo de Monumentos Nacionales (1959-2007) y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (2008- Actual).....	97
2.2.2.2 Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) (1968-1997).....	104
2.2.2.2.1 La cultura y Colcultura en las estructuras administrativas, planes de desarrollo y planes de cultura de los gobiernos de 1968 al año 1997 .....	107
2.2.2.3 Empresa Colombiana de Turismo (1957-1968) y la Corporación Nacional del Turismo (1968- 1997).....	115
2.2.2.4 Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano (1976).....	119
<b>2.3 Las declaratorias: origen del patrimonio urbano.....</b>	<b>121</b>
<b>2.3.1 Catalogación de las declaratorias (1954-2018).....</b>	<b>124</b>
2.3.1.1 Primera generación de declaratorias: 1954-1963 .....	127
2.3.1.2 Segunda generación declaratorias: 1971-1996 .....	130
2.3.1.3 Tercera generación declaratorias: 1999-2018.....	135
2.3.1.4 Un periodo sin declaratorias: 2006-2017 .....	137
2.4 Conclusiones parciales: del Monumento Nacional al Bien de Interés Cultural .....	141
<b>CAPITULO III .....</b>	<b>145</b>
<b>LA FECUNDIDAD DE LAS IDEAS E INFLUENCIAS EN EL PROGRESO DE LA ACCIÓN PÚBLICA SOBRE EL PATRIMONIO URBANO (1980-1997): LAS REGLAMENTACIONES.....</b>	<b>145</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>145</b>

<b>3.1 El patrimonio urbano y el código de urbanismo: un diálogo inconcluso. Avances y frustraciones en la concepción de la protección patrimonial .....</b>	<b>149</b>
3.1.1 Origen de las reglamentaciones .....	154
3.1.2 Aportaciones seminales: institutos, universidades y otros pioneros (década de 1960) .....	157
3.1.3 De la Declaración de Bucaramanga a la declaración de Ámsterdam (década de 1970) .....	159
3.1.4 Despertar de la política de protección (década de 1980) .....	162
3.1.5 Transición hacia una política cultural para los centros históricos (década de 1990) .....	166
<b>3.2 Del Decreto 2233 de 1980 a la Ley 388 y 397 de 1997: Las reglamentaciones para protección de los centros históricos en la consolidación de las políticas de patrimonio cultural.....</b>	<b>168</b>
3.2.1 Las reglamentaciones: etapas, estado y vigencia .....	172
3.2.2 El papel de Colcultura en el desarrollo de los instrumentos de protección del patrimonio urbano .....	177
3.2.2.1 Del Manual de reglamentación de sectores urbanos antiguos al Manual de poblados de interés patrimonial: evolución, contenido y estructura .....	180
3.2.2.2 El Subprograma de protección de los sectores antiguos .....	185
3.2.2.3 La Division de Centros Históricos y Monumentos .....	190
<b>3.3 El Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina y el Caribe .....</b>	<b>191</b>
<b>3.4 Conclusiones parciales .....</b>	<b>196</b>
<b>CAPITULO IV.....</b>	<b>199</b>
<b>CAMINO A LA MADUREZ DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO (1997-2019): INSTRUMENTOS, GESTIÓN Y EFECTOS ....</b>	<b>199</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>199</b>
<b>4.1 De la Ley 388 y la Ley 397 de 1997 al Decreto 2358 de 2019: Del ordenamiento territorial al patrimonio cultural .....</b>	<b>202</b>
4.1.1 El Ministerio de Cultura .....	210
4.1.2 El Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos.....	213
4.1.3 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia.....	216
4.1.3.1 Estado de la Red Turística de Pueblos Patrimonio.....	224
<b>4.2 Del PEP al PEMP: la gestión como proyecto .....</b>	<b>231</b>
4.2.1 Plan Especial de Protección: PEP.....	236
4.2.2 Plan Especial de Manejo y Protección: PEMP.....	239
4.2.2.1 Contenidos y estructura del PEMP .....	244
4.2.2.2 La conservación, la salvaguarda y protección en el PEMP .....	248
<b>4.3 Del Paisaje Cultural al Paisaje Urbano Histórico en el Patrimonio Urbano .....</b>	<b>252</b>
<b>4.4 La compensación por tratamiento de conservación .....</b>	<b>256</b>

4.4.1 Transferencia de derecho de construcción y desarrollo.....	257
4.4.2 Compensaciones tributarias alternativas .....	262
<b>4.5 El Patrimonio Urbano en el Ordenamiento Territorial y en su gestión .....</b>	<b>263</b>
4.5.1 Las Normas Urbanísticas.....	267
4.5.2 Jerarquía, alcance y principio de las normas urbanísticas .....	270
4.6 Conclusiones parciales .....	274
<b>CAPITULO V .....</b>	<b>277</b>
<b>DE COYUNTURAS CRÍTICAS A SECUENCIAS DINÁMICAS: .....</b>	<b>277</b>
<b>ALTERNATIVAS DE LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL PATRIMONIO URBANO EN COLOMBIA CON ENFOQUE HISTÓRICO- INSTITUCIONAL.....</b>	<b>277</b>
Introducción.....	277
<b>5.1 El dinamismo urbano y la singularidad como mecanismos de lectura.....</b>	<b>280</b>
<b>5.2 Determinantes para la aproximación a la evaluación de la política pública de protección del patrimonio urbano a través de la Propuesta Integral del PEMP .....</b>	<b>281</b>
5.2.1 La delimitación de áreas urbanas históricas: procedencia y sentido del área afectada y zona de influencia.....	285
5.2.2 De los criterios de valoración al nivel permitido de intervención .....	293
5.2.2.1 La protección a través del nivel permitido de intervención.....	297
5.2.2.2 Sentido y significado del nivel permitido de intervención y su relación con el tratamiento urbanístico .....	303
<b>5.2.3 Condiciones de Manejo .....</b>	<b>310</b>
5.2.3.1 Aspectos físico-técnicos .....	313
5.2.3.2 Aspectos administrativos.....	316
5.2.3.3 Aspectos financieros.....	318
<b>5.2.4 El Plan de divulgación.....</b>	<b>322</b>
<b>5.2.5 Seguimiento y control: la incertidumbre de la ejecución .....</b>	<b>323</b>
<b>5.3 Aproximación a la interpretación de los efectos desde los instrumentos de protección .....</b>	<b>327</b>
5.3.1 Secuencias reactivas, rutinas dinámicas, inercia estructural y trayectorias dependientes: punto de partida .....	331
5.3.2 Secuencia 1: Centros históricos con declaratoria + POT .....	337
5.3.3 Secuencia 2: Centros históricos con declaratoria +reglamentación + POT .....	340
5.3.4 Secuencia 3: Centros históricos con declaratoria + POT+PEMP .....	332
5.3.5 Secuencia 4: Centros históricos con declaratoria + reglamentación+ POT+PEMP .....	335
<b>5.4 Interpretación de los efectos de los instrumentos de protección patrimonial desde la singularidad: casos de estudio .....</b>	<b>340</b>
<b>5.4.1 Centros históricos de los municipios de Villa de Leyva y Barichara: Creación de un estilo.....</b>	<b>341</b>

<b>5.4.2 El Socorro, la reglamentación no adoptada .....</b>	<b>356</b>
5.4.2.1 Estudio y reglamentación del sector histórico de El Socorro realizado por el Alberto Corradine Angulo en 1982 .....	359
5.4.2.2 Síntesis de la propuesta de Corradine.....	361
5.4.2.3 Proyecto para el código básico de urbanismo de El Socorro .....	362
5.4.2.4 El sector histórico en el proyecto del código de urbanismo .....	365
5.4.2.5 Acuerdo No. 028 de septiembre 9 de 1989 .....	367
5.4.2.6 La delimitación del centro histórico en el Acuerdo Municipal No. 011 de junio 18 de 2003 .....	367
5.4.2.6.1 El Patrimonio en el Esquema de Ordenamiento Territorial .....	368
5.4.2.6.1 El Área de Influencia Patrimonial .....	369
5.4.2.7 Delimitación del Centro histórico en el EOT del año 2003 .....	370
<b>5.4.3 El paisaje cultural cafetero y su relación con los centros históricos declarados BIC en su ámbito de aplicación .....</b>	<b>372</b>
<b>5.5 Personajes, generaciones e ideales .....</b>	<b>380</b>
<b>5.6 Conclusiones parciales .....</b>	<b>391</b>
 <b>CAPITULO VI.....</b>	<b>393</b>
<b>CONCLUSIONES GENERALES Y NUEVOS RETOS .....</b>	<b>393</b>
<b>6.1. Elementos para interpretación de la política de protección y el patrimonio urbano...</b>	<b>393</b>
6.1.1 Aspecto legislativo: del patrimonio histórico al patrimonio cultural. Variables para la interpretación de la política pública de protección del patrimonio urbano .....	394
6.2 Las fases del patrimonio urbano y su relación con las instituciones de la cultura e ideas de su época.....	397
6.3 El desfase generacional de los instrumentos de protección en relación con los retos a la época de surgimiento .....	403
6.4. Nuevos retos, perspectivas y alternativas para la protección del patrimonio urbano en el futuro inmediato .....	408
6.5 Respuesta a las preguntas de investigación.....	411
 <b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>416</b>
 <b>LISTA DE FIGURAS.....</b>	<b>442</b>
 <b>LISTA DE FUENTE DE FIGURAS .....</b>	<b>445</b>
 <b>LISTA DE TABLAS.....</b>	<b>449</b>

<b>ANEXOS .....</b>	<b>452</b>
<b>ANEXO No. I: LA CULTURA Y COLCULTURA EN LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS, PLANES DE DESARROLLO Y PLANES DE CULTURA DE LOS GOBIERNOS DE 1968 AL AÑO 1997 .....</b>	<b>452</b>
<b>ANEXO II: DETERMINANTES, COMPONENTES Y PROCESOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.....</b>	<b>464</b>
<b>ANEXO No. III: DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA Y ZONA DE INFLUENCIA DE LOS 45 CENTROS HISTÓRICOS BIC DEL ÁMBITO NACIONAL .....</b>	<b>482</b>
<b>ANEXO No. IV: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS 45 CENTROS HISTÓRICOS BIC DEL ÁMBITO NACIONAL .....</b>	<b>513</b>



## **LISTADO DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS**

AGN	Archivo General de la Nación
AMU	Área Morfológica Urbana
BIC	Bien de Interés Cultural
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
COLCULTURA	Instituto Colombiano de Cultura
CMN	Consejo de Monumentos Nacionales
CNPC	Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
CNR	Centro Nacional de Restauración
CNT	Corporación Nacional del Turismo
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
DANE	Departamento Nacional de Estadísticas
DAPA	Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia
DCHM	División de Centros Históricos y Monumentos
DNP	Departamento Nacional de Planeación
EOT	Esquema de Ordenamiento Territorial
FCPCC	Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano
FENALCO	Federación Nacional de Comerciantes
FIN	Fondo de Inmuebles Nacionales
FONTUR	Fondo Nacional del Turismo
ICETEX	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

ICOMOS	Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
IEH	Índice de Edificabilidad Histórica
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
LPHE	Ley del Patrimonio Histórico Español
LICBIC	Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural
MAMU	Museo de Arte Miguel Urrutia
MEN	Ministerio de Educación Nacional
MGDT	Modelo General de Dependencia de la Trayectoria
MINCULTURA	Ministerio de Cultura
MINTIC	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
OEA	Organización de Estados Americanos
PCCC	Paisaje Cultural Cafetero de Colombia
PD	Path Dependence
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PEMP	Plan Especial de Manejo y Protección
PEP	Plan Especial de Protección
PNC	Plan Nacional de Cultura
PNRCH	Programa Nacional de Recuperación de Centros Históricos
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
POT	Plan de Ordenamiento Territorial
PBOT	Plan Básico de Ordenamiento Territorial
PRUCAM	Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina y el Caribe

RPP	Red de Pueblos Patrimonio
RTPP	Red Turística de Pueblos Patrimonio
SAC	Sociedad Colombiana de Arquitectos
SIRCHAL	Seminario Internacional de Revitalización de Centros Históricos en América Latina
SNC	Sistema Nacional de Cultura
SNPC	Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación
TDACA	Transferencia de Derechos Adicionales de Construcción y Desarrollo
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UAU	Unidades de Actuación Urbanística
ZGH	Zonas Geoeconómicas Homogéneas

## Resumen

El objetivo principal de la tesis es la identificación, análisis e interpretación de las ideas, discursos, fases, secuencias, patrones y rutinas de la política de protección del patrimonio urbano en Colombia. Se pretende precisar el origen, evolución y efectos de ésta sobre los espacios urbanos a través del análisis urbanístico y del estudio del marco legal para los centros históricos declarados Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, en el periodo comprendido entre el año 1954 y 2019, desde la perspectiva del Institucionalismo Histórico.

En la segunda mitad del siglo XX, en Colombia, el patrimonio cultural adquiere una posición relevante en la conformación de la identidad nacional. En él está circunscrito el patrimonio urbano, cuyo origen y posicionamiento se da en medio de un proceso de transformación y modernización de la ciudad del siglo pasado y primeras décadas del siglo XXI. La política pública de protección del patrimonio urbano surgida en ese contexto ha sido analizada hasta ahora de manera parcial y fragmentada. Existen vacíos de información referente a la lectura e interpretación de los elementos constitutivos y subyacentes, conducentes a la comprensión del marco normativo. El reconocimiento de las influencias en la creación del patrimonio urbano y la política de protección suponen un aporte de esta tesis en la comprensión del sentido, estructura y alcance de la salvaguarda y conservación de las áreas patrimoniales al urbanismo, la planeación y el ordenamiento territorial de la ciudad en los últimos 70 años, temporalidad que concentra los cambios de mayor relevancia.

La investigación cuestiona la perspectiva empírica y narrativa que es clásica en el estudio de la política pública del patrimonio urbano en Colombia y que usualmente privilegia categorías estáticas. En contraste, se propone una lectura desde el institucionalismo histórico, dinámica y asimétrica en la cooperación y encadenamiento de los distintos actores en la producción del patrimonio urbano. Se resaltan, con ello, las ideas implícitas en la legislación y políticas públicas urbanas como mediadoras activas en la integración y constitución de la protección de los centros históricos, en el marco del desarrollo económico y territorial. Las secuencias, rutinas dinámicas y consecuencias de las decisiones institucionales constituyen factores determinantes para describir lo qué es el patrimonio urbano, además de su trayectoria, función, conexión y posición en la planeación y ordenamiento de la ciudad y el territorio en Colombia.

Dentro de los aportes más importantes de la tesis se encuentran: a) la aproximación a la identificación de la dependencia de la trayectoria (*path dependence*) en el marco jurídico de declaración y conformación del patrimonio urbano. b) La identificación de la concatenación de los instrumentos de planeación y gestión de los centros históricos: declaratoria, reglamentación, plan especial de protección, plan especial de manejo y protección con los diferentes instrumentos del ordenamiento territorial y municipal en el ámbito social, cultural y técnico, conducente al reconocimiento de esta temática como relevante e innovadora dentro de la cultura urbana. c) La identificación de información sobre los centros históricos y su relación con los movimientos ideológicos durante el proceso de conformación conceptual del patrimonio cultural. d) La formulación de categorías de análisis a partir de mecanismos

conceptuales con el fin de aproximarse al patrimonio urbano desde los instrumentos y efectos en su propósito de conservación, salvaguarda y protección a partir del institucionalismo histórico y la aplicación del modelo general de la dependencia de la trayectoria (*path dependence*).

La tesis combina dos estrategias analíticas generales. a) De una parte, reconoce el encadenamiento entre leyes, decretos, declaratorias, el corpus jurídico dedicado al urbanismo, la estructura administrativa del componente cultural y los discursos para proteger o regular la conservación de los valores arquitectónicos y urbanos. Incluye la comprensión del patrimonio desde las instituciones, los sistemas de planeación y ordenamiento, convenciones, cartas, tratados e ideas internacionales influyentes en la formulación y consolidación de la política pública de protección del patrimonio urbano. b) Por otro lado, presenta el análisis y lectura de los instrumentos de protección del patrimonio urbano centrado en las rutinas dinámicas, secuencias reactivas, inercias estructurales y coyunturas críticas, derivados de la interpretación de la protección del patrimonio y sus significados. La estructura de integración de las estrategias analíticas se realiza mediante el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, a partir de los efectos derivados de las categorías de aproximación a este fenómeno, en contraste con las ideas de los personajes determinantes y la trayectoria temporal del surgimiento del patrimonio urbano.

La investigación desarrolla un enfoque transdisciplinar por medio de la incorporación de herramientas teóricas y metodológicas basadas en el institucionalismo histórico, el *path dependence*. Por otro lado, el análisis interescalar ciudad-centro histórico permite poner en foco la trayectoria de la política de protección de las áreas históricas declaradas. Establece relaciones temporales entre las dinámicas sociales, económicas, globales de la ciudad y los procesos dentro del perímetro declarado y decisiones de las instituciones administrativas.

Las limitaciones y retos de la investigación proceden del mismo lugar: las insuficientes y dispersas fuentes documentales sobre el tema, no solo en la producción científica sino técnica. Además del complejo corpus normativo de referencia, las fuentes documentales primarias están constituidas principalmente por el material de archivo del extinto Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura), compuesto por planos urbanos, estudios, fotografías y documentos desarrollados por el instituto entre 1968 y 1997 (año en que es sustituido por el Ministerio de Cultura, donde reposa en el actual centro de documentación) y otra producción científica ligada con la temática (fracciones de los diferentes planes, soportes y registros de los balances de aplicación de los instrumentos de salvaguarda y conservación urbana en el territorio). También es reseñable como fuente para esta investigación el trabajo de campo desarrollado junto con los estudiantes del taller de revitalización urbana del programa de Arquitectura de la Universidad de La Salle Colombia, en los centros históricos de Villa de Leyva, Socorro, San Gil, Bogotá y Zipaquirá.

**Palabras clave:** política pública urbana, protección del patrimonio urbano, centros históricos colombianos, sistemas de gestión urbano-patrimonial, institucionalismo histórico.

## **Abstract**

The main objective of the thesis is the identification, analysis and interpretation of the ideas, discourses, phases, sequences, patterns and routines of the urban heritage protection policy in Colombia. The aim is to specify the origin, evolution and effects on urban spaces through urban analysis and the study of the legal framework for the historic centres declared Assets of Cultural Interest at the national level, in the period between 1954 and 2019, from the perspective of Historical Institutionalism.

In the second half of the 20th century, in Colombia, cultural heritage acquired a relevant position in the shaping of national identity. It is the circumscribed urban heritage, whose origin and positioning occurs in the midst of a process of transformation and modernization of the city of the last century and the first decades of the twenty-first century. The public policy for the protection of urban heritage that emerged in this context has so far been analysed in a partial and fragmented manner. There are gaps in information regarding the reading and interpretation of the constituent and underlying elements, leading to the understanding of the regulatory framework.

The recognition of the influences on the creation of urban heritage and the protection policy is a contribution of this thesis to the understanding of the meaning, structure and scope of the safeguarding and conservation of heritage areas to urbanism, planning and territorial ordering of the city in the last 70 years, temporality that concentrates the most relevant changes.

The research questions the empirical and narrative perspective that is classic in the study of public policy of urban heritage in Colombia and that usually privileges static categories. In contrast, a reading is proposed from the historical institutionalism, dynamic and asymmetrical in the cooperation and chaining of the different actors in the production of urban heritage. This highlights the ideas implicit in urban legislation and public policies as active mediators in the integration and constitution of the protection of historic centres, within the framework of economic and territorial development. The sequences, dynamic routines and consequences of institutional decisions are determining factors to describe what urban heritage is, as well as its trajectory, function, connection and position in the planning and ordering of the city and territory in Colombia.

Among the most important contributions of the thesis are: a) the approach to the identification of path dependence in the legal framework of declaration and conformation of urban heritage. b) The identification of the concatenation of the planning and management instruments of the historic centres: declaration, regulation, special protection plan, special management and protection plan with the different instruments of territorial and municipal planning in the social, cultural and technical fields, leading to the recognition of this theme as relevant and innovative within urban culture. (c) The identification of information on historic centres and their relationship with ideological movements during the process of conceptual shaping of cultural heritage. d) The formulation of categories of analysis based on conceptual mechanisms in order

to approach urban heritage from the instruments and effects in its purpose of conservation, safeguarding and protection based on historical institutionalism and the application of the general model of path dependence.

The thesis combines two general analytical strategies. a) On the one hand, it recognises the link between laws, decrees, declarations, the legal corpus dedicated to urban planning, the administrative structure of the cultural component and the discourses to protect or regulate the conservation of architectural and urban values. It includes the understanding of heritage from the point of view of institutions, planning and management systems, conventions, charters, treaties and influential international ideas in the formulation and consolidation of public policy for the protection of urban heritage. b) Presents the analysis and reading of the instruments for the protection of urban heritage focusing on dynamic routines, reactive sequences, structural inertias, and critical junctures, derived from the interpretation of heritage protection and its meanings. The structure of integration of the analytical strategies is carried out through urban development and territorial planning, based on the effects derived from the categories of approximation to this phenomenon, in contrast, with the ideas of the determining characters and the temporal trajectory of the emergence of urban heritage.

The research develops a transdisciplinary approach through the incorporation of theoretical and methodological tools based on historical institutionalism, path dependence. On the other hand, the interscalar analysis of the city-historic center allows us to focus on the trajectory of the policy of protection of the declared historic areas. It establishes temporal relationships between the social, economic, global dynamics of the city and the processes within the declared perimeter and decisions of administrative institutions.

The limitations and challenges of research come from the same place: the insufficient and dispersed documentary sources on the subject, not only in scientific but also in technical production. In addition to the complex normative corpus of reference, the primary documentary sources are mainly made up of the archive material of the extinct Colombian Institute of Culture (Colcultura), composed of urban plans, studies, photographs and documents developed by the institute between 1968 and 1997 (the year in which it was replaced by the Ministry of Culture, where it rests in the current documentation center) and other scientific production related to the subject (fractions of the different plans, supports and records of the balance sheets of application of the instruments for safeguarding and urban conservation in the territory). Also noteworthy as a source for this research is the fieldwork carried out together with the students of the urban revitalization workshop of the Architecture program of the Universidad de La Salle Colombia, in the historic centers of Villa de Leyva, Socorro, San Gil, Bogotá and Zipaquirá.

Key words: urban public policy, urban heritage protection, Colombian historic centers, urban heritage management systems, historic institutionalism.

**Figura 01 Centro histórico de la ciudad de Santa Marta (Magdalena)**



Fuente<sup>1</sup>: Imagen tomada de OLX

---

<sup>1</sup> Se indicará una fuente corta de la procedencia bajo cada figura. La dirección electrónica y particularidades de su origen se encontrará en la página 444 en el Listado de fuentes de figuras.



## CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN<sup>2</sup>

### LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO EN COLOMBIA (1954-2019) COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN: PROBLEMA, OBJETIVOS, MÉTODOS Y FUENTES

En la primera página del periódico *El tiempo*<sup>3</sup>, que circulaba en Colombia el sábado 18 de diciembre de 1954, a dos columnas y bajo el titular, se observa la siguiente noticia:

#### ***“Discurso del presidente Rojas en la Visita a Villa de Leyva<sup>4</sup>***

*Texto de las palabras del jefe del Estado*

*Durante los actos oficiales en Villa de Leyva, el presidente pronunció el siguiente discurso:*

*Doctores Rafael Azula Barrera y José Umaña Bernal, Compatriotas de la antigua Provincia de Ricaurte:*

*El esplendor histórico y antigua pujanza de Villa de Leyva parece que revivieran hoy en toda su fuerza a través de los centenarios caserones e imponentes ruinas de sus ochenta y dos manzanas, al contemplar esta caudalosa manifestación con que las gentes de la comarca reciben al Presidente de la República, en la cual fraternizan ciudadanos de todos los partidos y sólo existe el deseo de testimoniar su simpatía y manifestar el fervor por un gobierno cuyo primer propósito desde su iniciación fue devolverle al pueblo la paz y cuya máxima aspiración sigue siendo consolidarla y defenderla”<sup>5</sup>.*

El presidente de la República al que hace referencia la noticia es Gustavo Rojas Pinilla, teniente general del ejército, que tomó el poder mediante un golpe de Estado el 13 de junio de 1953. Hasta ese día, había ejercido el cargo de comandante de las Fuerzas Militares en el gobierno

---

<sup>2</sup> Los resultados parciales de la investigación fueron publicados en Fonseca-Roa, O. Y. (2022). Aproximación a la política pública de protección del patrimonio urbano en Colombia en clave del path dependence (1954-2019). *Urbano*, 25(46), 68–77. Disponible en <https://doi.org/10.22320/07183607.2022.25.46.06>

<sup>3</sup> El tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911 por Alfonso Villegas Restrepo y en circulación actualmente.

<sup>4</sup> Villa de Leyva es un municipio localizado a 40 kilómetros de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Se encuentra a 100 kilómetros al norte de Bogotá D.C., capital de Colombia. Fue fundada en 1568 y desde entonces es reconocido por su arquitectura colonial y proximidad a las clases sociales privilegiadas.

<sup>5</sup> Tomado del periódico El tiempo Año 44, No. 15547, publicado el sábado 18 de diciembre de 1954.

Disponible en la página electrónica

<https://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19541218&printsec=frontpage&hl=es>, consultada el 14 de febrero de 2019.

conservador de Laureano Gómez, quien ese mismo día salió del país en un vuelo con destino a España donde vivió exiliado hasta el año 1957. Laureano Gómez fue el único presidente depuesto en Colombia en el siglo pasado, un hecho que, en parte, pudo estar motivado por una situación extrema de desorden público que se denominó “la violencia” y que fue desatada por la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948. Rojas Pinilla asumió el poder aclamado por la oposición liberal y por todos los conservadores que, atendiendo a sus promesas de reconstrucción del país (Bushnell, 1996), le reconocieron como el único capaz de poner fin al derramamiento de sangre. En este ambiente convulso y de incertidumbre política se origina la primera declaratoria de un área urbana como monumento nacional<sup>6</sup>, el municipio de Villa de Leyva. Las razones de esta decisión resultan inciertas, aparentemente más justificadas por motivos personales y de orden público que por criterios soportados en el reconocimiento de los valores arquitectónicos y urbanos.

*El general Rojas Pinilla lo primero que hizo siendo gobernante, en un consejo de ministros que se verificó en la casa del Primer Congreso, el 17 de diciembre de 1954, fue lograr un decreto en virtud del cual la Villa de Leyva se declaró patrimonio nacional. Por otro lado, según la tradición de la familia, el general amaba tanto a la Villa porque su madre lo espero y dio a luz en la finca San Cayetano, vereda de Montasuaréz, en ese entonces de Villa de Leyva. El arqueólogo Luis Duque Gómez, siendo Director del Museo Nacional de Bogotá, presentó un proyecto de decreto declarando a la Villa de Leyva Monumento Nacional<sup>7</sup>*

En el otro extremo del arco cronológico que abarca esta tesis, está la declaratoria más reciente de un centro histórico como Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional en Colombia, la del municipio de Jericó, en el departamento de Antioquia en el año 2018. Pese a las seis décadas transcurridas desde la declaración de Villa de Leyva, éste ha sido el primer caso en la historia de Colombia en que se han aprobado simultáneamente la declaración patrimonial y el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP)<sup>8</sup>. De hecho, ambas aprobaciones formaron parte de las celebraciones por la canonización de la Santa Madre Laura Montoya Upegui, proclamada por el papa Francisco el 12 de mayo de 2013. El gobierno colombiano rendía así honores a la obra y la memoria de la beata reconociendo el municipio donde nació en 1874, si bien la exposición de la declaración argumentaba también otros criterios de valor histórico, estético y simbólico consistentes con la Ley General de Cultura de 1997.

---

<sup>6</sup> Se denomina Monumento Nacional a los bienes muebles e inmuebles declarados mediante decreto o Ley del orden nacional. Esta denominación se abandona con la entrada en vigor de la Ley 397 de 1997, reconocidos como Bien de Interés Cultural.

<sup>7</sup> Tomado Tomo II la Villa de Pág. 21. Disponible en <http://files.villadeleyvapatrimoniohistorico.webnode.com.co/2000000707ad3c7bcd/Libro%203.%20Tomo%202.pdf>, consultado el 30 de abril de 2019.

<sup>8</sup> Se declara Bien de Interés Cultural del ámbito nacional el Centro Histórico de Jericó (Antioquia) y se aprueba su Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), mediante la Resolución 0663 del 9 de marzo de 2018.

El transcurso entre la primera declaratoria de un sector antiguo<sup>9</sup> como monumento nacional en 1954 y la última declaratoria de un centro histórico como BIC del ámbito nacional, en el año 2018 marca el lapso del desarrollo de la acción del gobierno colombiano en materia de patrimonio urbano y su política de protección, cuyo último eslabón ha sido una modificación al corpus legal en el año 2019. En este ámbito temporal y en esas temáticas se centra la presente tesis doctoral: una investigación sobre el patrimonio urbano y las políticas implementadas para su protección por el gobierno en Colombia entre los años 1954 y 2019.

La investigación resulta de especial interés para la sociedad en tres aspectos:

- a) al ser un estudio integral de la política de protección del patrimonio urbano del ámbito nacional actualizado al año 2023, resulta relevante para las decisiones de orden jurídico, administrativo, instrumental y científico para futuras acciones sobre este propósito;
- b) el reconocimiento de las influencias, tendencias y patrones de la trayectoria de la protección del patrimonio urbano declarado del ámbito nacional, por consiguiente las de mayor presencia y significancia en el imaginario nacional;
- c) la identificación y relevancia del patrimonio urbano y su protección en actividades de enorme calado social como son la planeación urbana y el ordenamiento territorial, enfocadas desde la posición institucional de la acción pública, privada y comunitaria en la consolidación del proyecto cultural asociado a su existencia.

El fin de esta investigación es comprender la creación y desarrollo del patrimonio urbano y las políticas para su protección desde la posición teórica y metodológica del institucionalismo histórico y el concepto de *path dependence*. La selección de esta categoría de análisis se realiza desde la oportunidad para incorporar instrumentos no usuales en los estudios urbanos y menos en el patrimonio urbano. La necesidad de una perspectiva emergente facilita la definición de las temporalidades para el abordaje del origen, evolución y efectos sitúa la investigación en el campo del urbanismo desde la perspectiva del marco legal como expresión de los acuerdos colectivos, por lo menos en su aplicación. A continuación, se perfila el problema de investigación y la construcción del estado de la cuestión, para posteriormente exponer los objetivos, métodos y fuentes del estudio realizado.

### **1.1 De la defensa del patrimonio histórico a la política de protección del patrimonio urbano en Colombia: el problema de investigación**

La tradición urbanística en Colombia implantada desde la colonia<sup>10</sup> conformó una particular manera de observar, intervenir e interactuar con la ciudad y la cultura. Instauró un pensamiento

---

<sup>9</sup> Denominación de las áreas urbanas en la Ley de patrimonio histórico de 1959.

<sup>10</sup> El imperio español fue una red de ciudades que eran repúblicas urbanas, embriones de nación-Estado. Entre ellas, fronteras y jurisdicciones abiertas, del Orinoco a los Andes o los Llanos y las pampas, constituyeron espacios interiores de suministro de reserva, en los cuales los ejércitos contendientes consolidaron posiciones y planes futuros. Quien entendió que dominando el territorio controlado la ciudad término por ganar la partida (Lucena, 2016, p. 88).

en la sociedad en el que siempre prima una forma específica de ver la ciudad como un producto del plano, desde la ley y las normas, hacia la realidad, lo que promovió e incitó a buscar en nuevos modelos urbanos las posibilidades de corregir la ciudad presente (Salazar, 1994). Esto cambió con la independencia, pues el costo de ser República significó, entre otras cosas, la pérdida del ordenamiento que España había forjado durante tres siglos de dominación, que se reflejó en la pérdida de la primacía urbana de las ciudades tradicionales que constituían eje ordenador espacial de la Nueva Granada (Zambrano, 2013, p.3).

Como lo menciona Rafael Gutiérrez, la dificultad del planeamiento urbano y regional en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, se inscribe de manera clara dentro de las pautas de su propio subdesarrollo, en la falta de continuidad y sistematización de medidas complejas, en oposición a los criterios ordenadores del Estado por parte de vastos sectores del poder económico y político, tensiones radicalizadas por la urgencia, la escasez de recursos y la ineficiencia (1992:662). La urgencia por afrontar los desafíos del desarrollo urbano en Colombia y América Latina en los últimos 50 años del siglo pasado lleva a la integración de teorías ajenas y técnicas urbanísticas ineficientes para la emergencia que la migración rural produjo en las ciudades colombianas, que no estaban preparadas para esta contingencia, al igual que el magro desarrollo teórico e instrumental de nuestro reciente urbanismo. Las carencias disciplinares que caracterizan al mundo académico americano, más acentuadas en México, América Central y del Sur, en lo que se refiere a la disciplina del urbanismo (Álvarez, 2017, p.7), y las dificultades estructurales tampoco han sido ajenas a las áreas urbanas declaradas patrimonio histórico. A medida que las diversas tendencias de la planeación y el urbanismo se incorporaban a las ciudades colombianas en el siglo XIX y XX, dejaban en evidencia a las edificaciones y sectores urbanos singulares, en una posición indefinida por su doble condición característica: la localización central y las limitaciones regulatorias para la conservación.

Los modelos del urbanismo colombiano, especialmente en las cuatro principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) y en los años 1920, presentan una marcada influencia europea: la idea del ensanche español, el urbanismo inglés, el plano de la ciudad futura propuesto por Ricardo Olano en Medellín, y la tradición austríaca y alemana reflejada en la propuesta de Karl Brunner<sup>11</sup> para Bogotá (Hernández, 2021). Por el contrario, la década de los años 40 se caracterizó por la marcada influencia latinoamericana. En la década de los años 50, predomina la idea del Plan Regulador promovido por Jorge Gaitán Cortés (que introdujo la influencia del urbanismo moderno de Wiener, Sert y Le Corbusier); en los años 60 y 70 se impuso el modelo de planeación económica; y en los años 80, la autonomía municipal y la descentralización del Estado.

En los años 1990, fue determinante la transición al modelo de ordenamiento territorial que actualmente predomina en la política de desarrollo urbano. En medio del dilema urbano y demográfico del crecimiento exponencial, la variabilidad y ausencia teórica-técnica para las prácticas del ordenamiento de la ciudad también afectaron y colonizaron

---

<sup>11</sup> Karl Brunner (1887-1960), arquitecto austriaco, realiza en Colombia asesorías a proyectos de planeación urbana para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Manizales de 1932 a 1947.

*“los territorios aledaños a los centros urbanos heredados del siglo XIX, los cuales se habían mantenido casi intactos por la inercia de nuestro pobre desarrollo económico hasta los años cincuenta, destruyendo sin miramientos el poco y pequeño patrimonio arquitectónico y urbanístico, para dar paso a una pequeña modernidad atragantada”* (Viviescas, 1999, p. 74).

Complementariamente y en oposición a Viviescas, otras lecturas alternativas de la ciudad colombiana, como las investigaciones de Aprile-Gnisset (1991), Salazar (1994), Niño Murcia (1996), Téllez (1995), Zambrano (1993), Salcedo (1996), Mejía (2013), Mejía & Martínez (2021), consideran visiones alternativas de las áreas patrimoniales urbanas y su interacción con los diversos ámbitos del desarrollo urbano en Colombia.

A pesar de las carencias y ausencias urbanísticas de la ciudad colombiana, la capacidad de expresión y el papel que asume en el desarrollo nacional es el de un gran escenario y medio para este propósito. La política pública adquiere una posición principal en la construcción del discurso jurídico y regulador aceptado por la sociedad.

En la historia del urbanismo en Colombia, se identifica un vacío en la comprensión de las políticas públicas urbanas, especialmente la asociada con las áreas históricas declaradas como BIC. La evaluación de sus efectos no ha sido observada con detenimiento, el alcance real de los objetivos de la salvaguarda y conservación implícitos dentro de la normativa sobre patrimonio carecen de una mínima apreciación por parte de las autoridades competentes, promotores culturales y formuladores de la reglamentación legal al respecto. Y cuando se han dado, las evaluaciones del impacto del marco normativo se han centrado en los efectos no previstos en la ley, con énfasis especial en aquellos de orden explícito y evidente para los centros históricos BIC del ámbito nacional.

Durante los últimos cincuenta años -que son aquellos en los que se ha construido la ciudad contemporánea colombiana, por lo demás la única que se ha consolidado en este país- se construyó una urbe que en términos de su relación con la cultura era (es) absolutamente inédita: una ciudad ajena. En otras palabras, ni la cultura en general, ni la cultura ciudadana han hecho parte de su formulación, ni de su configuración. Es la ciudad del estado de sitio<sup>12</sup> (Viviescas, 1994, p.26).

---

<sup>12</sup> Viviescas retoma esta idea en 1999 y amplía el concepto de ciudad del estado de sitio, que procede de la ignorancia y carencias por parte del pensamiento que dejó el proceso de desarrollo urbano y de la conformación de la vida ciudadana, en manos de la especulación profesional y económica. La investigación, el estudio sistemático y análisis crítico cedieron el espacio urbano en conformación al mundo especulativo de la consultoría, asesoría y la planeación urbana tecnocrática, que, en una alianza mortal con el clientelismo y la corrupción política, la especulación inmobiliaria y la industria de la construcción; sintetiza la década de los 90 del siglo pasado (Viviescas, 1999). *La ciudad colombiana o del urbanismo en busca del pensamiento (notas para una investigación necesaria)*.

Esta idea contiene los elementos principales vinculados con el patrimonio: la ciudad contemporánea en la que el centro histórico es un valor singular ante el crecimiento demográfico y urbano desbordado en las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI, y la relación de la cultura con la ciudadanía en general. Algunos elementos como los monumentos históricos interactúan de manera frecuente con esta categoría, ya que, a fuerza de acciones en la ciudad, las comunidades han ganado una posición hoy reconocida e integrada a la participación ciudadana en las decisiones urbanas.

En definitiva, desde 1954 y durante los primeros veinte años del siglo XXI se crea en Colombia el patrimonio urbano y su política de protección, al mismo tiempo que las prácticas y teorías sobre la ciudad se formulan y desarrollan, conviviendo con las mayores transformaciones urbanas y demográficas del país. Como bien lo menciona Viviescas

*“...es una ciudad sin vínculos estructurales con el pasado histórico y sin ninguna valoración por el mismo, es una ciudad que, en su incapacidad de detenerse, no ha sido capaz de generar una mirada avizora hacia el futuro, sin conformar un proyecto cultural, con la ausencia de un propósito arquitectónico y urbanístico...”* (1994: 26).

La búsqueda principal que se plantea esta tesis es cómo, en este contexto, nacen el patrimonio urbano y las diversas instituciones normativas y administrativas en que se expresan las políticas de protección patrimonial de Colombia y cómo se pueden interpretar su sentido o sentidos históricos y su evolución, y cuáles han sido sus efectos sobre los conjuntos urbanos declarados patrimoniales del ámbito nacional.

## **1.2 Estado de la cuestión**

### **1.2.1 Elementos básicos de la creación del patrimonio urbano y su política de protección en Colombia**

En el ámbito de América Latina, la construcción del patrimonio histórico y su marco legal de protección surge en las primeras décadas del siglo XX, con la celebración del primer centenario de la independencia (Carrión, 2000). Se destacan las leyes de Brasil en 1937 y Argentina en 1940, claros productos de la VII Conferencia Interamericana celebrada en Montevideo en 1933, en la que se propuso la cooperación entre los países en diversas materias, y del Congreso de Historia de América llevado a cabo en Buenos Aires en el mismo año, en el que se recomendó hacer el inventario de los patrimonios y legislar sobre ellos (Gutiérrez, 2009, p.188).

Es comúnmente conocido en los ámbitos especializados que, en el caso de Colombia, en 1959 se promulga la Ley 163 sobre la defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos nacionales, donde se menciona:

*“Artículo 2.- En desarrollo de los acordado en la Séptima Conferencia Internacional Americana, reunida en Montevideo en el año de 1933, se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehistórico, los siguientes:*

- a. Los que estén íntimamente vinculados con la lucha por la Independencia y con el periodo inicial de la organización de la República;*
- b. Las obras de la naturaleza de gran interés científico, indispensables para el estudio de la flora y la geología”<sup>13</sup>.*

No obstante, en el año 1954 se había declarado el perímetro urbano de Villa de Leyva “*con la restricción dentro de dicho perímetro para realizar demoliciones, construcciones o reformas sin la previa aprobación de las autoridades, quienes procederán en cada caso aplicando las normas que expida el Gobierno Nacional en reglamentación y desarrollo*”<sup>14</sup>, según Decreto 3461 del mismo año. Esta declaratoria<sup>15</sup> se ratifica en la Ley 163 de 1959 bajo la figura de monumento nacional y su delimitación se ajusta a las edificaciones contenidas en el sector antiguo, siendo “*...el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII*”<sup>16</sup>. Cabe destacar que en la misma Ley 163 de 1959, se declaran los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompos, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Cali, Cerrito y Buga que, junto a Villa de Leyva, conforman el patrimonio histórico reconocido hasta entonces, sin que ésta declaratoria conceda mayores explicaciones sobre los motivos de elección de estos centros urbanos, excepto el estricto cumplimiento del acuerdo de Montevideo en 1933.

Es aceptado que Ley 163 de 1959 y su Decreto Reglamentario 264 de 1963<sup>17</sup> constituyen un avance considerable en la defensa del patrimonio histórico. Sin embargo, con el paso del tiempo se han detectado vacíos importantes que han dificultado una labor de protección más efectiva, debido entre otras razones a una evidente desactualización de tales instrumentos, no sólo por el cambio de las condiciones económicas, políticas y sociales del país, sino también por el avance significativo de la investigación sobre el patrimonio cultural (Salazar et al., 1989, p.29). Asimismo, está asumido convencionalmente que las limitaciones del marco legal para responder al contexto social, económico, político y especialmente urbano con el que interactúan las áreas declaradas patrimonio histórico provienen del interés generado por los sectores antiguos catalogados monumento nacional entre los institutos de investigación de las universidades e investigadores académicos, y surge, entre otras razones, de la necesidad intelectual de explorar e interpretar el concepto del patrimonio cultural hasta entonces limitado

---

<sup>13</sup> Artículo 2, tomado de la Ley 163 del 30 de diciembre de 1959.

<sup>14</sup> Tomado del artículo 1 del Decreto

<sup>15</sup> La declaratoria es un acto administrativo básico para el reconocimiento del patrimonio urbano en Colombia. Para un análisis detallado de la figura de la declaratoria, véase capítulo 2.

<sup>16</sup> Tomado del artículo 4 de la Ley 163 de 1959.

<sup>17</sup> Decreto 263 de 1963 (febrero 12), “*Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la nación*”, por el cual se declaran los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, San Gil, Pamplona, Rionegro (Antioquia), Marinilla y Girón. Sumando de esta forma 21 municipios con sectores antiguos declarados como Monumento Nacional.

al campo arqueológico, artístico y arquitectónico, y de superar el concepto de patrimonio histórico con poca alternativa de aplicación y aparentemente alejado de la realidad urbana que se vivía en los años 70 y 80 del siglo pasado.

El conjunto de instrumentos de carácter jurídico y normativo de diferente rango y cobertura formulados, implementados y aplicados en el corpus urbano reconocido por este mismo marco legal del patrimonio urbano de Colombia constituye una unidad de análisis relativa a 45 centros históricos que, por orden cronológico de declaratoria, son: Villa de Leyva (1954), Santafé de Antioquia, Cartagena de Indas, Santa Cruz de Mompox, Tunja, Popayán, San Miguel de Guaduas, Santa Marta, San Juan de Pasto, San Sebastián de Mariquita, Guadalajara de Buga, Cartago, Santiago de Cali y El Cerrito (1959), Marinilla, Rionegro, Bogotá D.C., Pamplona, San Gil, San Juna de Girón y Socorro (1963), Villa del Rosario (1971), Honda (1977), Barichara (1978), Ambalema (1980), Jardín (1985), Turmequé (1989), Tenjo (1993), Manizales, Ciénaga (1996), Concepción, Barranquilla (1999), Valledupar, Santa Cruz de Lórica (2000), Aguadas (2001), Abejorral, Iza (2002), Pore (2004), Barrio El Prado, Monguít, Salamina, Zipaquirá, El Carmen, Playa de Belén (2005) y Jericó (2018).

En el Anexo No. 1V: “Fichas de caracterización de los 45 centros históricos BIC del ámbito nacional (p. 513 y ss.) se sistematiza una descripción urbanística básica del corpus de tejidos urbanos reconocidos hasta la fecha (2024) como Bienes de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional en Colombia. Muchos de ellos fueron declarados inicialmente como monumento nacional y, desde el año 1997, como BIC del ámbito nacional. Normalmente, después de la declaratoria, las áreas patrimoniales se someten a un proceso de regulación urbana mediante mecanismos como la reglamentación urbana. Se trata de una acción dirigida a evitar la destrucción del patrimonio y de los mejores valores de la ciudad (edificios, paisajes, espacios públicos) (Salazar, 1996). Las reglamentaciones fueron aplicadas a los centros históricos desde 1980 hasta 1999. La última aprobada fue la modificación de la reglamentación del centro histórico de Tunja. El instrumento subsiguiente fue el Plan Especial de Protección (PEP). Lo introdujo la Ley 397 de 1997, “Ley General de Cultura”, en su artículo 11, sobre el régimen para los bienes de interés cultural. Cabe mencionar que solo han se formulado PEP para cuatro ciudades: Manizales (1998), Aguadas (2001), Barranquilla y Santa Marta (2005). La vigencia de los PEP contó con fuerza jurídica desde agosto 7 de 1997 hasta marzo 10 de 2009.

Finalmente, el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que es el instrumento vigente en la actualidad, lo introdujo el Decreto 763 de 2009, capítulo III PEMP, artículo 14:

*“Los Planes Especiales de Manejo y Protección –PEMP– son un instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales si a juicio de la autoridad competente dicho Plan se requiere”.*



El PEMP fue creado en marzo de 2009 y su balance general a diciembre de 2021 era que había 29 PEMP aprobados para igual número de municipios. De manera simultánea a la Ley de patrimonio (Ley 397 de 1997), entra en vigor la Ley de Desarrollo Urbano (Ley 388 de 1997)<sup>18</sup>

## 1.2.2 Los sectores antiguos y su relación con la planeación urbana en el siglo XX

La relación entre la planeación urbana y los monumentos nacionales de carácter urbano ha sido dispar, principalmente por la poca capacidad dinámica, adaptativa y significativa del concepto de patrimonio histórico que permaneció vigente durante 38 años, hasta la emergencia del patrimonio cultural con la Ley de Cultura del año 1997. Durante este tiempo, la concepción del planteamiento urbano en Colombia ha cambiado, como lo indica Cortés, que identifica tres etapas de la evolución de Bogotá, como referente nacional hasta los años 1990, momento de surgimiento del ordenamiento territorial. La primera, desde el inicio del siglo XX y hasta los años cincuenta del siglo pasado, se caracteriza por la organización física de la ciudad:

*“...la primera tuvo un carácter marcadamente instrumental, en el sentido de que proveyó herramientas técnicas (medios y alternativas de coordinación entre tipos de urbanización, de vías, de parques) y parámetros de calidad (estética, funcional, constructiva) de aplicación inmediata e individual, para dar salida a las diversas eventualidades que se fueron entretrejiendo, una a una, en el proceso de construcción de la ciudad; no es, por tanto, para nada casual que el documento más importante de esta etapa fuese un manual de urbanismo. En términos instrumentales, está referida a la figura del Plano para la Ciudad Futura, en una secuencia que va desde su dificultosa adopción a su abandono implícito...” (2007: 165)*

Un segundo periodo de transición podría:

*“considerarse como una etapa fundacional del planeamiento urbanístico de la ciudad como conjunto, en el sentido de que apunta a la provisión de un horizonte temporal tan alejado como son 50 años. Su principal característica fue la de enfatizar la necesidad de construir una nueva realidad acorde con los retos de lo que se dio en llamar la civilisation machiniste; se convirtió así en una de las primeras experiencias en el país dentro de la acepción moderna de la cultura de la planificación. Esta experiencia*

---

<sup>18</sup> La ley 388 de 1997, Ley de desarrollo urbano, capítulo II “Planes de ordenamiento territorial”, artículo 9, ordena: “El plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar en aplicación de la presente Ley, al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”, de igual forma atribuye categoría a los planes de la siguiente manera: “Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes; Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes; Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes”.

*específica de planear lo urbano no se consolidó y no desarrolló relaciones con las posteriores experiencias de planeamiento en el campo económico. En términos instrumentales, sigue un proceso similar de entusiasmo inicial con la figura del Plan Regulador y, en este caso, de reemplazo por una visión más pragmática y a la vez más dinámica” (Cortés, 2007, p.165).*

Este periodo coincide con las declaratorias de los sectores antiguos en los años 1954 y 1959. Se origina la separación del área histórica del conjunto de la ciudad en aspectos relevantes como la planeación urbana, técnica de poca tradición al momento de la declaratoria de Villa de Leyva. Surge un proceso de transición que incorpora el concepto de desarrollo económico, factor determinante en las competencias para transformar la ciudad moderna de los años 50.

Finalmente, el mismo a identifica un tercer periodo:

*“que se puede calificar como el del predominio del enfoque del planeamiento del desarrollo, se caracterizó por el despegue del planeamiento económico; produjo una ruptura consciente con la experiencia previa, y el planeamiento urbano se subordinó al plan económico y social, perdiendo su identidad. Se refiere a la figura del Plan Integral de Desarrollo, se pasó de los estudios (Alternativas y Fase II), a la redacción de instrumentos (Acuerdos 7/78 y 6/90), sin solución de continuidad. La figura del Plan de Desarrollo Municipal, impuesta por la Ley 9/89, resulta ser un híbrido raro entre los acuerdos mencionados” (Cortés, 2007, p.165).*

Este tercer periodo va de finales de los años 50 hasta el inicio de la década de los 90 del siglo XX, poco antes de la promulgación de la Constitución Política de 1991, que genera un cuarto periodo caracterizado por el ordenamiento territorial y la autonomía municipal. Este cuarto periodo está capitalizado por la Ley 338 de 1997- Ley de desarrollo urbano -y la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), que formulan los lineamientos desde los cuales se establecen las directrices para los centros históricos, las áreas urbanas y rurales que comparten modelos de ordenamiento, componentes y mecanismos de planeación, gestión y financiación, aún vigentes.

Una lectura alternativa de la propuesta de Cortés (2007) sobre la transición del urbanismo a la planificación de Bogotá 1900-1990 es el planteamiento de Manco (2010), que identifica cinco momentos (que corresponden en su conjunto con los tres periodos descritos por Cortés):

- a) La regulación del urbanismo (1902-1950),
- b) El urbanismo de los tiempos modernos (1947-1966),
- c) El predominio de la planeación económica (1967-1978),
- d) La planeación y el mercado inmobiliario (1979-1988) y,
- e) El cambio de las jerarquías de planificación (1988-1990) (Manco, 2010).

La desagregación por periodos permite observar dos circunstancias comunes a los planteamientos de Cortés (2007) y de Manco (2010): las inquietudes del urbanismo surgen a

inicios de la década de 1900 y, la planeación urbana y económica se manifiesta a partir de los años 50 hasta principios finales de los años 1990, momento de surgimiento del ordenamiento territorial. La instrumentalización de la ciudad emerge con los primeros códigos de urbanismo a mediados de siglo, sustituidos por los planes urbanos caracterizados por la zonificación de actividades y económicas en las áreas urbanas de finales de los años 1980.

En los centros históricos el instrumento por excelencia para la formulación de la norma urbana es la reglamentación para los sectores antiguos (Salazar, 1989), que emerge a finales de la década de 1980 y está vigente hasta los primeros años de la década siguiente. La reglamentación introduce algunos postulados de la planeación con el fin de conservar las áreas patrimoniales urbanas desde la concepción de la defensa, idea central de la Ley de patrimonio de 1959<sup>19</sup>. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus evidentes vacíos han dificultado una protección más efectiva y expedita, debido, entre otras razones, como ya se mencionó, a la desactualización de tales instrumentos frente al avance significativo de la investigación sobre el patrimonio cultural (Salazar et al., 1989, p.29), además de la falta de formación de personal técnico y científico calificado, y el uso del patrimonio urbano como escenario del turismo cultural, objeto de una divulgación estatal masiva por diferentes medios de comunicación nacional e internacional (Escovar & Cárdenas, 2018).

### **1.2.3 De las declaratorias de sectores antiguos a la conformación del patrimonio urbano y su política de protección**

Junto a la conformación del patrimonio urbano, se han realizado diversos esfuerzos por parte del Estado en la construcción de una legislación acorde con los retos que supone la salvaguarda del patrimonio urbano y arquitectónico, simultáneo al desarrollo urbano y crecimiento de la ciudad que lo contiene. La declaratoria de áreas patrimoniales monumento nacional es una categoría diferencial dentro del tejido urbano de un municipio o ciudad (Melé, 2006). Trae consigo efectos que inciden sobre el propio objetivo de la preservación de los valores históricos, artísticos y culturales a conservar en los bienes muebles e inmuebles representativos en su dimensión social, cultural, económica y física (Mejía, 2013). Estos efectos son derivados e inducidos desde la entrada en vigor del acto administrativo mediante el cual el anonimato del centro histórico, el municipio contenedor y sus valores intangibles son declarados y son expuestos para siempre. La formulación de la política pública urbana de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo XX busca la autonomía municipal. Sus propósitos son el desarrollo urbano ordenado, la planificación de áreas metropolitanas, la conservación de áreas naturales e introducción de un modelo económico, con una deficiencia profunda y notoria en la salvaguarda de las áreas que declara monumento nacional hasta ese momento (Salazar, 1989).

---

<sup>19</sup> La Ley 163 de 1959 y el decreto 264 de 1963 (febrero 12), “*Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la nación*” y se declaran los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, San Gil, Pamplona, Rionegro (Antioquia), Marinilla y Girón, constituyeron un avance considerable en la defensa del patrimonio histórico, forman

La Constitución Política Nacional de 1991 reconoce e incluye la cultura, el patrimonio y el ordenamiento territorial como un horizonte para la construcción de un nuevo país. La década de 1990 marca el inicio de una época disruptiva en las medidas del Estado. Una renovada idea de conservación del patrimonio es el eje central de un nuevo intento de establecer nexos entre la ciudad y la política cultural, especialmente en las ciudades capitales e intermedias (Escovar & Cárdenas, 2018). En 1991, nace la directriz de la política pública sobre desarrollo urbano y cultura vigente hasta la actualidad. Al interior de las leyes enmarcadas en la nueva constitución, se configuran nuevos instrumentos de ordenamiento territorial y protección del patrimonio material e inmaterial, empezando por el PEP (Salazar, 1996).

Varias problemáticas abordadas por autores como Salazar, Cortés & Niño (1989, 1996); Aprile (1991); Salcedo (1996); Cortés (2007); Mejía (2013); Alfonso (2009); y Mejía & Martínez (2021) entre otros, se centran sobre la vigencia de la legislación del patrimonio histórico y su adversidad en los propósitos de la conservación, y advierten sobre las deficiencias producidas por la obsolescencia normativa y jurídica que afecta a las áreas patrimoniales. El encadenamiento de decisiones por parte de las instituciones administradoras de los monumentos nacionales y su conexión con el sector privado en los objetivos de la valoración y catalogación de los bienes muebles e inmuebles de reconocida importancia han sido una aportación, según Centeno (2014) a la construcción de la nacionalidad. En las primeras décadas del siglo XXI, el objeto de estudio prioritario ha migrado a las dificultades para armonizar el plan de ordenamiento territorial de los municipios y ciudades que tienen centros históricos declarados y los planes especiales de manejo y protección.

El debate principal se centra en la actualidad en la pertinencia funcional y operativa de la mayor jerarquía jurídica del PEMP sobre POT determinada por la Ley 388 de 1997 (Escovar & Cárdenas, 2018). Esta discrepancia conceptual es el epicentro de problemas conexos con la actuación singular o complementaria de los instrumentos de planeación y gestión que generan un vacío de interpretaciones sobre aspectos como la delimitación del perímetro del área declarada y la zona afectada que es aprovechado en su propio beneficio por sectores de desarrollo inmobiliario, junto con la variedad de normativa urbana (Alfonso, 2009; Borrero, 2015; Fonseca, 2023). Otro fenómeno conflictivo que está asociado a esta controversia es el turismo cultural promovido por el Estado, que induce una variedad de problemáticas que aquejan con intensidad diversa a las áreas históricas, pero que también alcanzan a otras localizaciones, a veces dentro del sector urbano inmediato al área declarada, en otros casos, fuera del propio perímetro urbano, llegando a las periferias rurales y la región inmediata al centro histórico declarado BIC del ámbito nacional (Salazar, 1994; Pérez, 2019; Fonseca, 2022).

La delimitación del centro histórico, bien sea por declaratoria o por medio de un instrumento local como el POT, expresa la necesidad de defender el área patrimonial de un desarrollo urbano e inmobiliario incoherente con los valores reconocidos. Ese es el sentido de las normas y condiciones que se han determinado para la conservación del área patrimonializada. Esta idea refuerza la presencia de la Ley de patrimonio de 1959 (Fonseca, 2022). En el caso colombiano,

la delimitación por perímetros a partir de la aplicación de la norma urbana a las edificaciones en un área de influencia o en zona afectada, según su localización dentro del perímetro urbano, ha tenido diversos efectos. Por un lado, la manipulación de las delimitaciones del área patrimonial ha permitido intervenciones en las edificaciones que afectan la imagen del sector histórico a pocas manzanas o unidades, identificables a simple vista. Por otro lado, el volumen de edificaciones similares en tipología y morfología dan como resultado centros históricos “homogéneos” cuando su paisaje urbano es similar y “heterogéneos” cuando presentan una densidad menor de edificaciones de carácter histórico (Gómez, 2010). Estas subcategorías encuentran en la apariencia física actual una determinante para referenciar el estado de deterioro e intervención del área patrimonial. En ambos casos es evidente la disrupción del diálogo del centro histórico con la ciudad o municipio que lo contiene, y se percibe la importancia asignada a la aplicación del perímetro de conservación como un instrumento legal definido para autorizar la alteración del sector urbano que queda fuera de la línea del área afectada (Fonseca 2023).

La temática de los centros históricos adquiere cada vez más importancia en el debate y la formulación de políticas urbanas en América Latina (Carrión, 1997). Se ha señalado la existencia de una paradoja entre preservación y desarrollo que surge de la diferencia existente entre la pobreza económica de la población y la riqueza histórico-cultural de los centros históricos. Las nuevas tendencias de la urbanización en América Latina, la revolución científica y tecnológica en el campo de las comunicaciones, y el proceso de globalización imprimen nuevos derroteros a esta tensión y llevan a los centros históricos de la región al dilema actual: ser memoria o protagonistas de la ciudad (Carrión, 2000, p.5).

A este dilema, se agregan, en el caso colombiano, nuevas incertidumbres generadas en la práctica de los instrumentos de la política pública urbana, ya que, entre la implementación y coordinación, surgen nuevos retos asociados a la preservación y desarrollo urbano. Esto resulta paradójico en la medida que hoy el patrimonio urbano tiene un exceso de atención después de largos períodos de ausencia de los mecanismos de protección. Las dinámicas de la globalización también aportan un sin número de variables que están incluso sin respuesta desde la política pública por la diversidad de nuevo retos presentes en centros históricos de diversa jerarquía (Fonseca, 2023).

#### **1.2.4 La política de protección del patrimonio urbano como objeto de estudio**

La aproximación al estudio de la política pública sobre el patrimonio cultural se constituye en un mecanismo adecuado para enfocar, desde la concepción jurídica, una serie de valores asignados para la creación del patrimonio a partir de monumentos (Melé, 1995). En correspondencia a la premisa fundamental que las instituciones y sus acciones surgen de procesos históricos concretos (Thelen, 1999, p. 317), es posible identificar los enfoques tempranos que motivan el interés de diversos sectores por temáticas originarias para trayectorias espontáneas (Sorensen, 2017). El interés por parte de la academia en la política de protección del patrimonio urbano se orienta a dos horizontes: uno relacionado con la génesis de

los estudios e investigaciones de la política pública para los centros históricos y su correlación con la planeación y el ordenamiento de la ciudad; otro centrado en origen en el estudio y análisis de las políticas de conservación, salvaguarda y protección propiamente dichas. Esta tesis participa de ambas líneas de interés.

El inicio de estudios y publicaciones sobre centros históricos en Colombia son posteriores a 1954, año en que se produce la primera declaratoria de un conjunto urbano como patrimonio nacional. Hasta entonces, esta denominación y su investigación carecían de interés para los sectores académicos y especializados. El primer texto divulgado sobre los monumentos históricos y arqueológicos data de 1955, escrito por Luis Duque Gómez (Escovar & Cárdenas, 2018). Para la época de la publicación, el patrimonio estaba relacionado con edificaciones singulares o pequeños conjuntos arquitectónicos. Posteriormente a la declaratoria de Villa de Leyva, las áreas urbanas de carácter monumental adquieren una atención y visibilidad diferente.

Salazar (1994) distingue tres grandes etapas en la formulación de la política pública relacionada con la protección del patrimonio, asociada con la producción de investigaciones sobre el mismo tema. La primera etapa se extiende durante las primeras décadas del siglo XX, determinada por acciones aisladas tanto en el campo legislativo como en investigaciones individuales que apoyan la consolidación de la identidad de la República, realizadas por historiadores y arquitectos. Los estudios desarrollados usualmente en esta época son “*descripciones líricas de monumentos significativos de Bogotá y Cartagena*” (Salazar, 1994, p.19). De esta primera época se destacan las publicaciones: “*Monumentos patrióticos de Bogotá*” (1892) de Ignacio Borda; “*La Capilla del sagrario de Bogotá*” (1886), de Eladio Vergara; de Pedro Rebollo, “*El Convento de Santa Teresa de Cartagena*” (1915); de Enrique Otero D’Costa, “*El Convento de Santa Cruz de la Popa*” (1916); Enrique Naranjo produce “*Los Monumentos de Cartagena*” (1917) y Miguel Tobar, “*El Palacio de la Carrera*” (1918) (Salazar, 1994; Escovar & Cárdenas, 2018).

Entre los años 1920 y 1950, se divulgan estudios realizados por arquitectos cuyo interés apunta a la difusión de la arquitectura colombiana en sus diferentes periodos. Entre los análisis historiográficos de la arquitectura occidental, destacan “*La arquitectura de Bogotá*” (1924), de Alfredo Ortega Díaz; del argentino Mario José Buschiazzi, “*La arquitectura colonial en Colombia*” (1940), publicado en Buenos Aires; del español Enrique Marco Dorta “*Cartagena de Indias: la ciudad y sus monumentos*” (1951); “*La arquitectura del renacimiento en Tunja*” (1957), de Carlos Martínez Jiménez y Jorge Arango (Salazar et al, 1989, p.19). En la década de 1960, fue definitiva la introducción del concepto de conservación del patrimonio construido en Colombia. Las universidades, en medio del auge de la arquitectura moderna, contaron con pioneros que iniciaron la identificación y valoración del patrimonio inmueble que el acelerado progreso no demolió en las dos décadas anteriores. Se crearon dentro de ellas los institutos de investigaciones estéticas que iniciaron su labor con el estudio de la arquitectura colonial y, más tarde, la ampliaron hacia otras actividades y manifestaciones del arte colombiano (Escovar & Cárdenas, 2018).

La segunda fase identificada por Salazar (1994) está marcada por la Ley 163 de 1959, conocida como la Ley de Patrimonio y considerada por especialistas como un resultado tardío de los acuerdos del tratado celebrado por Colombia en la VII Conferencia Panamericana de 1933. La Ley amplía el concepto de patrimonio y además crea la estructura institucional para facilitar la acción del Estado. Así hace presencia el Consejo de Monumentos Nacionales, entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional asumida a manera de ente rector del patrimonio nacional. En este periodo y por la misma Ley, se declara un conjunto de bienes como monumento nacional, incluidos aquellos de origen prehispánico y colonial, los del periodo de la independencia y de la conformación de la República. Además, se realiza la primera declaratoria de sectores antiguos patrimoniales, hoy conocidos como centros históricos (Salazar, 1994).

Con la creación de Colcultura en 1968, se desarrolla un conjunto de trabajos relacionados con el patrimonio al que se adhieren otras entidades estatales, universidades y un grupo de arquitectos con amplia formación y conocimiento de las técnicas y disciplinas de la restauración. Entre los trabajos destacados de la época, sobresalen los realizados por Santiago Sebastián y Carlos Arbeláez Camacho dedicados a la Historia Extensa de Colombia. Germán Téllez culmina para Cartagena la primera reglamentación sistemática de conservación de la ciudad amurallada. Carlos Martínez se centra sobre el urbanismo en el nuevo Reino de Granada y los documentos teóricos del sacerdote Alfonso Borrero Cabal, y Alberto Corradine, sobre las poblaciones de Socorro, Zipaquirá y Mompox entre otros. Todo ello generó una importante reflexión en el país (Salazar et al, 1989; Escovar & Cárdenas, 2018).

Es destacable la labor permanente de inventario de Colcultura, sumado al esfuerzo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación de Universidades y varias facultades de arquitectura. Con la asesoría de José María Buschiazzi de la Universidad de Buenos Aires, trabajan en la implementación de sistemas adecuados de investigación y levantamiento del patrimonio, de la cual se derivan también los centros de investigaciones estéticas de la Universidad Javeriana (1964), la Universidad de Los Andes (1968), Universidad del Valle y Nacional en las sedes de Bogotá y Medellín (Salazar, 1994). Desde los centros de investigación, se amplía el margen de actuación frente al patrimonio, se configura un puente entre la investigación teórica y académica, y se realizan trabajos de restauración y práctica en la preservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico a través de las reglamentaciones de los centros históricos declarados, abordados en el capítulo III de esta tesis.

En el año 1974, la Universidad de Los Andes adelanta el inventario de la arquitectura republicana de Bogotá y el Banco de la República apoya la creación de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico Colombiano<sup>20</sup> que, a lo largo de varias décadas, financió proyectos de restauración de inmuebles religiosos, de carácter civil y la realización de

---

<sup>20</sup> Esta fundación se crea en 1976, por iniciativa del Banco de la República, con co-fundación de Acerías Paz del Río, la Corporación Financiera Popular, Banco de Colombia, Corporación Nacional de Turismo, Banco de Bogotá, Colcultura y la Universidad Javeriana. Su finalidad fue fomentar, patrocinar y ejecutar programas de conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles, considerados como monumentos artísticos, históricos y arquitectónicos de la nación (Paláu, 2012).

inventarios de sectores urbanos, ciudades y colecciones en varias regiones del país (Mincultura, 2005). La política sobre el patrimonio cultural se fue consolidando a través de los diversos programas adelantados por la Subdirección de Patrimonio, y de la formulación, congregación y participación en eventos internacionales, además de la realización de publicaciones que permitieron su divulgación y reconocimiento.

Se reeditan las *Normas mínimas para la conservación de los bienes culturales*<sup>21</sup> y se publican los libros *Monumentos Nacionales de Colombia*<sup>22</sup> y *Levantamientos arquitectónicos y urbanos - Manual de procedimiento*<sup>23</sup>, para facilitar la documentación del patrimonio arquitectónico. Durante los últimos años de la década de 1980, se impulsa el programa *Inventario de Inventarios* en convenio con la Universidad de los Andes (Mincultura, 2005; Escovar & Cárdenas, 2018). En el año 1987, la Subdirección de Información y Fomento de Colcultura realizó el programa *Recuperación del Patrimonio Cultural Municipal*, con el fin de promover en las comunidades la protección y divulgación de las manifestaciones que conforman la producción cultural local.

Para el año 1989, en las *Jornadas Regionales de Cultura Popular, Encuentro de dos Culturas*, realizadas en los municipios de Florencia, Quibdó, Mompox y Silvia, se llevaron a cabo los talleres de introducción al conocimiento del patrimonio histórico, con énfasis en la necesidad e importancia de elaborar los inventarios como acción primordial para su preservación. El Plan Nacional de Rehabilitación, de la Presidencia de la República, convocó a los actores regionales para orientarlos en la formación y consolidación de sus procesos y proyectos culturales (Mincultura, 2005). A comienzos de la década de 1990, se adelantaron varios eventos académicos internacionales como el Seminario “La Valoración e Inventario de la Arquitectura Contextual no Monumental”, cuyas memorias se publican en el año 1991, el cual propuso definir una metodología común para realizar los inventarios en los países de América Latina.

Así mismo, se organiza el “Taller de Inventario del Patrimonio Inmueble”, donde se trata el tema del inventario en relación con la reglamentación de ciudades y centros históricos, recogiendo experiencias de cada país. Se produjo el *Manual de pre-inventario urbano y arquitectónico*<sup>24</sup>, que ilustró el método para realizar los inventarios dentro de una visión regional y sub-regional. Fue el momento de incursión en la sistematización de la información e implantación de una red interna en la Subdirección de Patrimonio Cultural (Mincultura, 2005; Escovar & Cárdenas, 2018).

Es aceptado por los especialistas en temas de conservación y protección que, desde el año 1990, las áreas urbanas patrimoniales son objeto de una política pública específica, iniciada con la

---

<sup>21</sup> Colcultura, Bogotá, editorial Escala, 1987.

<sup>22</sup> Mariana Patiño de Borda, Colcultura, Bogotá: Editorial Escala, 1982.

<sup>23</sup> Franco Salamanca, Germán y Mendoza Laverde, Camilo. Proyecto N 5052. Comisión de Cooperación con la Unesco, Editorial ARCO, 1991.

<sup>24</sup> Colcultura, Subdirección de Patrimonio, Bogotá, 1990



publicación del texto *Política cultural para los centros históricos y el patrimonio Inmueble*<sup>25</sup>, por medio del cual Colcultura adoptó fundamentos conceptuales, políticos y programáticos para la conservación de los centros históricos. Su elaboración y difusión plantea un debate amplio sobre el patrimonio con la participación de diversos sectores de la sociedad civil, especialistas, académicos y funcionarios de las entidades relacionadas con la temática. La adopción de estos lineamientos significa un cambio sustancial en el enfoque y características de los programas impulsados por el Estado, procedentes de los años 60 del siglo XX con la formulación y expedición de la Ley 163 de 1959 (Salazar, 1994), aún vigente. Es un documento seminal que posteriormente daría origen a la Ley General de Cultura en el año 1997.

La tercera fase propuesta por José Salazar corresponde a las políticas estructuradas en la década de los 90. Incorporadas y desarrollados por la Constitución Política de 1991 dando como resultado la expedición de la Ley 397 de 1997. Este proceso de formulación surge de tres estrategias complementarias: a) la primera está relacionada con la acción simultánea en actos urgentes y en la elaboración de mecanismos que aseguren la continuidad de los trabajos, al igual que la definición y puesta en marcha de las políticas y coordinación de las entidades del orden nacional; b) una segunda estrategia es el fortalecimiento de las regiones como respuesta de ese nivel al proceso general de descentralización, para lo cual se buscaba realizar actividades de manera conjunta con departamentos y municipios; c) finalmente, la tercera estrategia se centra en los programas de concientización de la comunidad en dos aspectos principales: el trabajo con las universidades, especialmente las facultades de arquitectura consideradas el medio de capacitación y difusión fundamental y más asequible, y utilizar los medios de comunicación para campañas generales hacia la ciudadanía (Salazar, 1994).

Según Salazar, se establecen siete líneas de acción que hacen concretos los objetivos y definen los programas específicos, a saber:

- Adecuar y fortalecer el aparato legal, institucional y técnico. Propender por una nueva Ley de patrimonio mediante la actualización del Consejo de Monumentos Nacionales y de la Subdirección de Patrimonio de Colcultura.
- Armonizar los mecanismos de coordinación entre entidades, ampliación del inventario y de la cobertura de las reglamentaciones. Creación de instancias de mantenimiento de los monumentos recuperados y fortalecimiento de las acciones de divulgación.
- Vinculación de la política cultural sobre el patrimonio inmueble al desarrollo y puesta en marcha del proceso general de descentralización con la incorporación del componente patrimonial en los planes y programas específicos, para el fortalecimiento de acciones desde el nivel regional y local.
- Hacer compatibles en la planeación e intervención urbana los programas y acciones de protección y valoración del patrimonio con el desarrollo de la ciudad, coordinación y conciliación de las políticas urbanas y las políticas para los centros históricos.

---

<sup>25</sup> Documento resultado de seminarios de consulta nacional promovidos a finales del año 80 y principios de los 90 del siglo pasado, por Colcultura en varias ciudades de Colombia.

- Promover la participación de amplios sectores sociales en los programas y proyectos de salvaguarda, valoración y producción del patrimonio.
- Impulsar la investigación sobre el patrimonio cultural.
- Incorporar la temática del patrimonio en los niveles básicos, intermedio y superior del sistema educativo (Salazar et al.,1989).

El impulso otorgado por Colcultura al Programa de Centros Históricos tuvo un efecto directo en el Programa de Inventario del Patrimonio Inmueble, también implementado por el mismo Instituto de Cultura, por cuanto los procesos reglamentarios exigían estudios e inventarios de los sectores urbanos respectivos. En el año 1992, se planteó el Sistema Nacional de Cultura, con seis programas para su desarrollo, en un esfuerzo de Colcultura por armonizar un mecanismo de cobertura nacional. Allí se estableció la responsabilidad de los departamentos y municipios en la protección del patrimonio cultural. Más adelante, con la Ley 397 de 1997, se formaliza el sistema en el marco de los principios de descentralización, participación y autonomía (Mincultura, 2005). En el año 2000, el Ministerio de Cultura desarrolla el seminario de consulta nacional “Políticas para el Patrimonio Inmueble en Colombia”<sup>26</sup>, con el fin de establecer acciones claras y eficientes en la actuación del Estado:

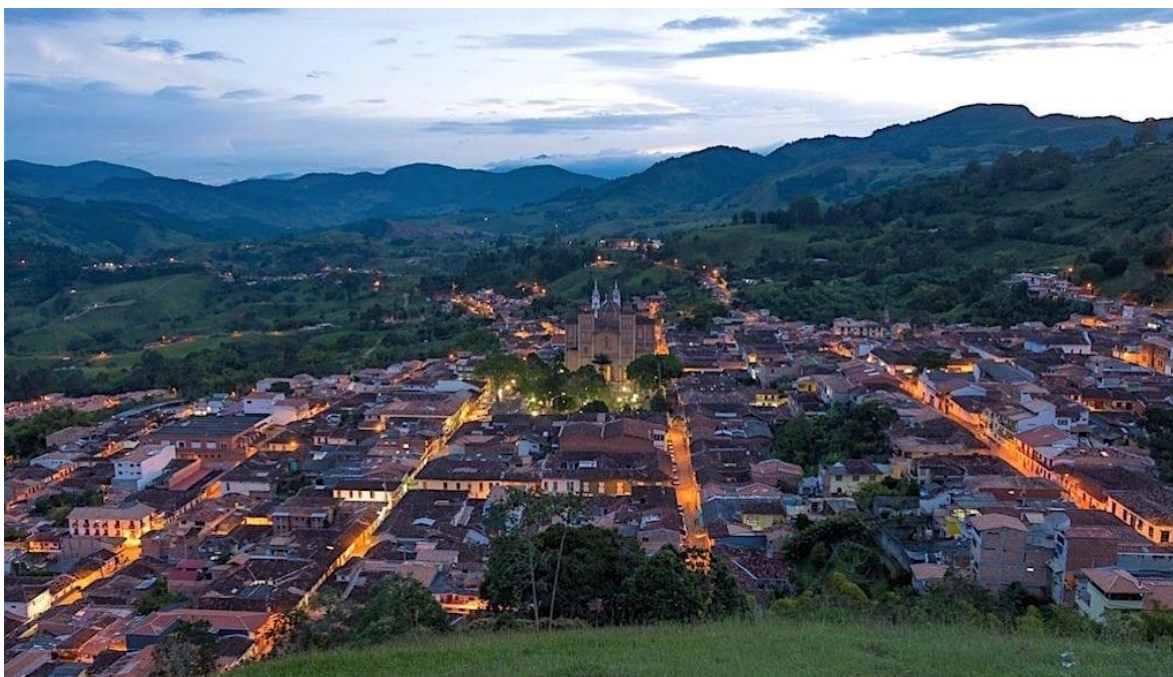
*“...la aproximación al tema de patrimonio cultural durante el último siglo y en especial de trabajo persistente desarrollado desde el nivel nacional durante las últimas tres décadas, con sus logros y falencias, se constituye en insumo fundamental que permitirá avanzar con amplitud la visión en torno a su gestión...”*, (Mincultura, 2000, p. 18).

El Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia una ciudadanía democrática cultural”, plantea que el Estado debe reconocer el derecho que cada grupo humano posee de valorar y conservar su patrimonio cultural de forma integral. El inventario se convierte en una oportunidad para participar en esa construcción para fortalecer las bases de la identidad cultural a través del conocimiento de la memoria. El inventario, valoración y registro del patrimonio urbano y arquitectónico es fundamental para la protección y salvaguarda de las áreas históricas que concentran diversos bienes de interés cultural del ámbito nacional, departamental y municipal (Rey, 2010).

---

<sup>26</sup> El seminario se desarrolla en febrero del año 2000 con el apoyo de Unesco. Tenía como objetivo promover la participación ciudadana en torno al establecimiento de lineamientos para la construcción de Política para el patrimonio cultural inmueble en Colombia, entre todos los actores involucrados.

**Figura 02 Centro histórico del municipio de Jericó (Antioquia)**



Fuente: Imagen tomada de Medellín Guru

### **1.3 Objeto y objetivos de la investigación**

El objeto de esta investigación doctoral es la política pública de protección del patrimonio urbano declarado BIC del ámbito nacional en Colombia, desde la primera declaratoria de un conjunto urbano hasta la expedición del Decreto 2358 de 2019, único reglamentario del sector cultura, sobre patrimonio cultural material e inmaterial.

Para esta investigación, se entiende como patrimonio urbano la agrupación de centros históricos reconocidos y declarados como BIC del ámbito nacional. Es preciso aclarar que también se declaran centros históricos del ámbito departamental y municipal, cuyo interés no es objeto de la investigación. El patrimonio urbano reconocido BIC del ámbito nacional está conformado por sectores antiguos, marcos de plazas, conjuntos urbanos y centros históricos, visibles en la figura 03.

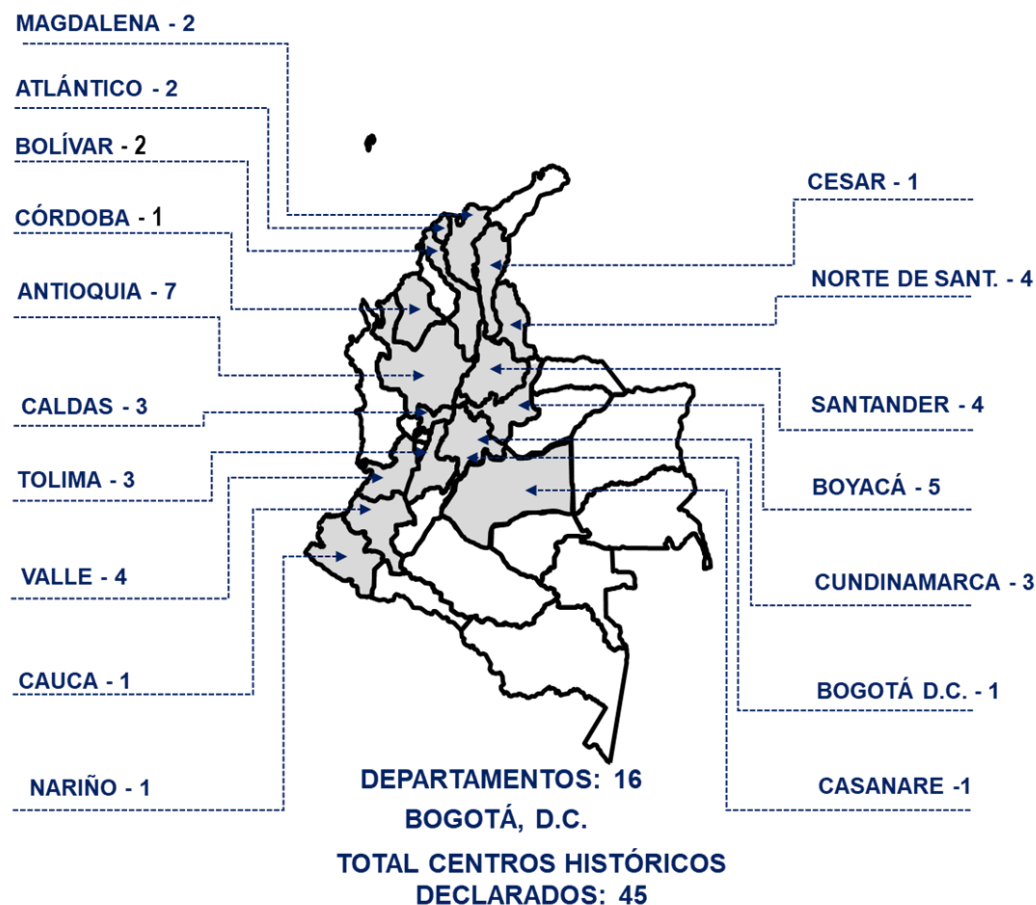
La política pública de protección del patrimonio se define como los actores individuales o institucionales y las acciones desarrolladas en el marco público orientado a establecer medidas, lineamientos e instrumentos para la conservación, salvaguarda y protección de bienes arquitectónicos y urbanos declarados. La protección del patrimonio urbano se comprende bajo dos condiciones: a) el conjunto de acciones y medidas realizadas desde 1954 hasta el año 1997 bajo el concepto del patrimonio histórico y, b) los realizados desde 1997 al año 2019 al amparo

conceptual del patrimonio cultural. En ambos casos, son los procesos e instrumentos de legislación, administración, gestión y manejo formulados desde las entidades competentes del urbanismo y el patrimonio que afectan la intervención edificatoria y urbanística sobre el patrimonio urbano. Dentro del componente regulatorio se reconocen: las declaratorias, reglamentaciones y planes; los instrumentos de fomento (programas de cooperación, inversión pública y privada de carácter nacional e internacional y los de origen académico), así como los mecanismos de la planeación y ordenamiento territorial. La definición temporal (1954-2019), obedece al marco de surgimiento, desarrollo y efectos del encadenamiento de políticas, instrumentos, instituciones, decisiones e ideas en torno al patrimonio urbano bajo el supuesto de ser una creación jurídica (Melé, 2006), amparado por medidas de conservación, salvaguarda y protección para los valores urbanos y arquitectónicos de la declaratoria.

**Figura 03 Áreas declaradas del patrimonio urbano en Colombia**

DEPARTAMENTO	CIUDAD	FUNDACIÓN	DECLARATORIA	ENTIDAD DECLARANTE	ÁREA DECLARADA
BOYACÁ	Villa de Leyva	1572	Dec. 3641/54 Ley 163/59	Gobierno Nacional	Sector antiguo
ANTIOQUIA	Santafé de Ant.		Ley 163 de 1959	Gobierno Nacional	Sector antiguo
BOLÍVAR	Cartagena de Indias	1533		Gobierno Nacional	Sector antiguo
	Santa Cruz de Mompox	1537		Gobierno Nacional	Sector antiguo
BOYACÁ	Tunja	1539		Gobierno Nacional	Sector antiguo
CAUCA	Popayán	1536		Gobierno Nacional	Sector antiguo
CUNDINAMARCA	San Miguel de Guaduas	1644		Gobierno Nacional	Sector antiguo
MAGDALENA	Santa Marta	1524		Gobierno Nacional	Sector antiguo
NARIÑO	San Juan de Pasto	1539		Gobierno Nacional	Sector antiguo
TOLIMA	San Sebastián de Mariquita	1549		Gobierno Nacional	Sector antiguo
VALLE	Guadalajara de Buga	1558-1569		Gobierno Nacional	Sector antiguo
	Cartago	1540-1691		Gobierno Nacional	Sector antiguo
	Santiago de Cali, La Merced	1536		Gobierno Nacional	Sector antiguo
	El Cerrito	1560		Gobierno Nacional	Sector antiguo
ANTIOQUIA	Marinilla	1709	Dec. 264 de 1963	Ministerio de Educación	Sector Antiguo
	Rionegro	1581		Ministerio de Educación	Sector Antiguo
BOGOTÁ D.C.	Bogotá D.C:	1538		Ministerio de Educación	Sector Antiguo
NORTE DE SANTANDER	Pamplona	1549		Gobierno Nacional	Sector Antiguo

SANTANDER	San Gil	1689		Gobierno Nacional	Sector Antiguo
	San Juan de Girón	1631		Gobierno Nacional	Sector Antiguo
	Socorro	1683		Gobierno Nacional	Sector Antiguo
NORTE DE SANTANDER	Villa del Rosario	1734	Dec. 102 de 1971	Ministerio de Educación	Sector Antiguo
TOLIMA	Honda	1560	Dec. 1192 de 1977	Ministerio de Educación	Casco Urbano
SANTANDER	Barichara	1752	Dec. 1654 de 1978	Ministerio de Educación	Sector Antiguo
TOLIMA	Ambalema	S. XVII Y XVIII	Dec. 776 de 1980	Ministerio de Educación	Centro Histórico
ANTIOQUIA	Jardín	1860	Dec. 1132 de 1985	Ministerio de Educación	Conjunto Urbano
BOYACÁ	Turmequé	Siglo XVI	Dec. 1940 de 1989	Ministerio de Educación	Sector de Interés
CUNDINAMARCA	Tenjo	1603	Dec. 2530 de 1993	Ministerio de Educación	Plaza ppal y marco
MAGDALENA	Ciénaga	1538 - 1751	Dec. 2012 de 1996	Ministerio de Educación	Centro histórico
ATLÁNTICO	Barranquilla	1629	Res. 1614 de 1999	Ministerio de Cultura	Conjunto Histórico
ANTIOQUIA	Concepción	1760	Res. 1617 de 1999	Ministerio de Cultura	Centro histórico
CALDAS	Manizales	1849	Dec. 2178 de 1996	Ministerio de Educación	Conjunto de Inmuebles
CÉSAR	Valledupar	1550	Res. 795 de 2000	Ministerio de Cultura	Sector Fundacional
CÓRDOBA	Santa Cruz de Lorica	1722	Res. 796 de 2000	Ministerio de Cultura	Centro histórico
CALDAS	Aguadas	1808-1814	Res. 1883 de 2001	Ministerio de Cultura	Conjunto Urbano
ANTIOQUIA	Abejorral	1808	Res. 619 de 2002	Ministerio de Cultura	Centro histórico
BOYACÁ	Iza	Siglo XVII	Res. 617 de 2002	Ministerio de Cultura	Poblado
CASANARE	Pore		Ley 936 de 2004	Gobierno Nacional	Municipio
ATLÁNTICO	Barrio El Prado, Bellavista y Altos del Prado.	1919-1930	Res. 0087 de 2005	Ministerio de Cultura	Conjunto Urbano
BOYACÁ	Monguí	1601		Ministerio de Cultura	Centro urbano
CALDAS	Salamina	1827		Ministerio de Cultura	Conjunto Urbano
CUNDINAMARCA	Zipaquirá	1692-1758		Ministerio de Cultura	Centro histórico
NORTE DE SANTANDER	Playa de Belén	1862	Res. 0928 de 2005	Ministerio de Cultura	Centro histórico
	El Carmen	1686	Res. 0929 de 2005	Ministerio de Cultura	Centro histórico
ANTIOQUIA	Jericó		Res.0663 de 2018	Ministerio de Cultura	Centro histórico



Fuente: Elaboración propia

La delimitación de las áreas urbanas declaradas se ajusta a las edificaciones contenidas en el sector antiguo, siendo estas “*las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidas casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc, incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII*”<sup>27</sup>. La Ley 163 de 1959 declara monumento nacional los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Cali, Cerrito y Buga, que junto a Villa de Leyva conforman el patrimonio urbano reconocido en ese momento. Esta declaratoria no concede mayores explicaciones sobre los motivos de elección de estos centros urbanos, excepto el estricto cumplimiento del acuerdo de la Séptima Conferencia Panamericana celebrada en Montevideo en 1933<sup>28</sup>. El conjunto de centros históricos declarados

<sup>27</sup> Tomado del artículo 4 de la Ley 163 de 1959.

<sup>28</sup> Hace referencia al artículo 2 de la Ley 163 de 1959

BIC del ámbito nacional representan diversidad de localizaciones, escalas e idiosincrasia de las expresiones urbanas consideradas patrimonio histórico, además del reconocimiento social de las poblaciones y sectores históricos en ámbitos propios de la cultura, el turismo e imaginarios colectivos con el patrimonio cultural.

Cuatro perspectivas o ejes de discusión se derivan del objeto de investigación a:

- a. La producción normativa nacional, regional y local relacionada con el reconocimiento, la conservación, salvaguarda y protección del patrimonio histórico y el patrimonio cultural, que ha afectado las áreas urbanas históricas desde el año 1954 al 2019. Dentro de esto, se incluyen los actos jurídicos y estrategias de la planeación y el ordenamiento territorial asociados con las medidas de conservación, salvaguarda y protección del patrimonio urbano.
- b. Los BIC declarados del ámbito nacional compuesto por 45 centros históricos declarados entre el año 1954 y el 2018.
- c. La política pública como un hecho dinámico con una estructura integrada por actores, instituciones, instrumentos, formas de gestión y administración económica y financiera en ámbito de organizaciones públicas. En el encadenamiento institucional y las decisiones de cada administración permiten comprender la interpretación e implementación del marco legal con la defensa y protección del patrimonio urbano. En esta perspectiva se reconocen las agremiaciones e instituciones cooperantes con el patrimonio histórico y cultural del nivel nacional e internacional.
- d. Los instrumentos de planeación, gestión y financiación del patrimonio urbano y el ordenamiento territorial de los centros históricos declarados son un mecanismo desde el cual se observan aspectos relevantes en cada uno de ellos. La evolución de los intereses y formas de manejo de cada época expresados en los instrumentos permiten comprender a los procesos sociales, culturales y técnicos de la temática indisolublemente asociados a la organización social del territorio y la ciudad.

Los objetivos básicos de la investigación son:

1. Estructurar y comprender la vinculación del patrimonio urbano y la política de protección mediante la identificación del origen, evolución y efectos a través del estudio de los centros históricos declarados como BIC del ámbito nacional en el periodo comprendido entre el año 1954 y el 2019, desde la perspectiva del Institucionalismo Histórico.
2. Proponer las fases de la trayectoria de la política de protección y el patrimonio urbano a partir de la aplicación del Modelo General de la Dependencia de la Trayectoria, con el fin de interpretación de las ideas, discursos, fases, secuencias, patrones y rutinas que subyacen al interior de la legislación dedicada a la conservación de los centros históricos en Colombia.
3. Identificar la conformación, administración, gestión y manejo de los centros históricos en cada una de las fases con el fin de identificar la procedencia de las ideas e



influencias desde la generación de técnicos, profesionales y aportantes en cada una de ellas.

### 1.3.1 Interés científico del problema, preguntas de investigación e hipótesis

El interés del problema de investigación es diverso. Menciona José Salazar Ferro que, a través de la historia, la cultura urbanística imperante en las distintas épocas del desarrollo urbano del país ha rechazado la herencia urbana para adoptar nuevos patrones, presentados en su momento como modernos o contemporáneos. Al respecto recuerda:

*“la ciudad preexistente ha sido muy pocas veces motivo de preocupación para los gobiernos o los profesionales responsables de definir su destino, quiénes sólo han encontrado en las viejas casas y calles impedimentos para implantar una nueva “ciudad”, acorde con las expectativas del desarrollo”* (Salazar, 1994).

Aún hoy se presentan situaciones similares en contextos económicos y sociales diferentes, con trascendencia nacional e internacional<sup>29</sup>, en los que se ocultan hechos cotidianos de otros centros históricos que no superan la denuncia local.

Aunque la investigación y el carácter divulgativo del patrimonio, especialmente en la última década, ha encontrado bajo la tutoría del Ministerio de Cultura un énfasis dinámico, su verdadera aplicación adolece del significado profundo y práctico necesaria para la vitalidad de la conservación. Los programas e iniciativas promovidas aún no impactan de manera decidida la armonización de los instrumentos de planeación y gestión del patrimonio y el ordenamiento territorial. No han logrado unificar el modelo de ordenamiento de la ciudad y el centro histórico, tratados como dos entidades de la misma unidad urbana. En el contexto general, una cuota muy importante de responsabilidad en la armonización de los planes de la ciudad y la conservación del patrimonio le corresponde a las disciplinas académicas y profesionales, debido a que no ha clarificado los componentes estructurales sobre los que se soporta el paso de una sociedad rural a una físicamente urbana en el transcurso del último medio siglo, característica de la Colombia del siglo XX (Viviescas, 1999, p. 72). En la transición rural a

---

<sup>29</sup> Aquí cabe destacar el caso del edificio Aquarela que se construye en la ciudad de Cartagena y su desarrollo inmobiliario de 30 plantas, compromete la permanencia de la ciudad en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, categoría adquirida en 1984. El comité de patrimonio mundial de la Unesco le dio a Cartagena un plazo de dos años –hasta 2021– para demoler el edificio que se levanta a una cuadra del Castillo de San Felipe de Barajas, para que el Distrito Turístico apruebe el Plan Especial de Manejo y Protección y el Plan de Ordenamiento Territorial, con el firme propósito de evitar la violación de las normas de construcción y el caos urbanístico de La Heroica. La posición del Ministerio de Cultura recuerda la aprobación de la Reglamentación del Centro Histórico en 1994 por el Consejo de Monumentos Nacionales donde se define un área afectada y un área de influencia, comprueba con ello, la localización del predio del edificio Aquarela fuera de estas áreas de protección. En el mismo sentido, recuerda la necesidad de actualizar el POT y la elaboración del PEMP. Disponible en <https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Posici%C3%B3n-del-Ministerio-de-Cultura-sobre-proyecto-de-vivienda-%E2%80%98Aquarela%E2%80%99-en-Cartagena.aspx>, consultado el 6 de enero de 2020. En febrero de 2024, se inicia la demolición del edificio Aquarela.



urbana en los últimos 50 años del siglo pasado e intensificada en los primeros 20 del siglo XXI, se originan los debates de la ciudad, en muchos casos subyacente en los instrumentos de política pública. Para mediar la relación conflictiva de la modernidad y la tradición, y transformar las nociones y las prácticas urbanas profundamente arraigadas en la cultura urbanística colombiana que impiden el desarrollo del patrimonio urbano, las políticas culturales subrayaron nuevos principios para sustentar y promover una concepción de la ciudad en la cual el sector antiguo sea un elemento esencial que detenga la destrucción del patrimonio en manos del mercado inmobiliario (Salazar, 1996, p.16).

La noción de ciudad compuesta por elementos y partes diferenciados es una herramienta importante para plantear una nueva concepción de la unidad urbana. Los sectores y construcciones antiguas y modernas se distinguen por su condición en la estructura urbana, pensada como estructura física y cultural con funciones y significados, tanto en la forma urbana como en la vida urbana cultural y no con relación al modelo o sistema abstracto (Salazar, 1996, p.16). La influencia tardía de los teóricos italianos y españoles, Cervellati & Scannavini (1976), Ciardini & Fallini (1983), Lombardi (1994) y Ezquiaga (1994), aportaron a la conformación de una discusión académica en la base teórica sobre la cual se formula la política pública, los criterios de intervención en los centros históricos que son laboratorio experimental, objeto de estudio y centro de observación de las construcciones teóricas e impuestas por la urgencia de los compromisos internacionales y la inevitable aceptación de la ciudad como bien de interés cultural<sup>30</sup>.

La investigación cuestiona, en última instancia, el sentido de la política de protección del patrimonio urbano, sobre la hipótesis de su incoherencia e inoperancia frente a los objetivos de conservación y salvaguarda, y su funcionalidad para los intereses estrictamente económicos, distante de la realidad urbana de los centros históricos.

Una de las hipótesis es que, en los instrumentos de planeación, gestión y administración del patrimonio urbano, subyacen discursos e ideas que a pesar de su potencia no impactaron de manera positiva ni al patrimonio urbano ni a la ciudad que los contiene. La política pública de conservación había sido formulada distante de la planeación del crecimiento y ordenamiento de las áreas urbanas, sino a manera de un regulador de efectos negativos generados por el crecimiento acelerado, ocupación y construcción de los centros urbanos. Por su parte, la política de protección de las áreas fundacionales o centros históricos obedecería a la misma dinámica, con el agravante que su puesta en marcha habría estado interrumpida por la ausencia de una administración identificable y dinámica, constante y supervigilante a los cambios que sufren las áreas de conservación declaradas.

La tesis también avanza sobre una hipótesis según la cual, la atención e interés del Estado se volcaría sobre las áreas históricas cuando son percibidas como un mecanismo impulsor del desarrollo económico, específicamente el turismo, acompañándolos de una fuerte campaña de

---

<sup>30</sup> La ciudad como bien de interés cultural hace referencia al Seminario realizado en Santafé de Bogotá en junio de 1990.

promoción y figuración en los medios de consumo del mal llamado turismo cultural. Otros efectos de mayor incidencia se derivarían por ausencia de reglamentaciones eficientes en la comprensión de las dinámicas urbanas entre el centro histórico, la ciudad y la región. La responsabilidad de esta situación se le otorga a la delimitación y normatización del área patrimonial, olvidando que el límite exterior de esta área patrimonial goza de un aprovechamiento urbanístico suficiente para capitalizar en nuevos desarrollos inmobiliarios el privilegio de la proximidad al centro histórico. El cambio frecuente de las orientaciones sobre los instrumentos de planeación y gestión de los centros históricos, la práctica de armonización de los planes de ordenamiento y desarrollo municipal, sumado a la autonomía en la delimitación de las áreas históricas en Colombia serían el principal generador de vulnerabilidad al patrimonio urbano y arquitectónico declarado que se pretende conservar. La evidente transformación y la influencia de factores internos y externos sobre el corpus legal son aspectos poco investigados que se revelan claves en el cambio de denominación de los sectores antiguos a centros históricos, así como el movimiento en la designación del monumento nacional al bien de interés cultural, finalmente integrados al concepto de patrimonio cultural.

Otra hipótesis es que se subestiman las consecuencias de los PEMP y no se ha valorado con detenimiento el potencial destructivo de su práctica, ni los efectos que genera sobre actividades que adquieren valor a partir de sus restricciones, ausencia y poca efectividad, especialmente por la manipulación frecuente de la delimitación del área afectada y zona de influencia en los centros históricos declarados, ante la revisión o actualización del instrumento de protección y manejo. Las ideas y discursos contenidos en los instrumentos de planeación y gestión, más que otros componentes de la política pública, evidenciarían la verdadera intención de conciliar el ordenamiento territorial con un instrumento único que no excluya desde su formulación el área objeto de la conservación y protección. Este vacío estructural sería interpretado de manera eficiente por el mercado inmobiliario que monetizaría las oportunidades económicas a partir de las deficiencias instrumentales de la salvaguarda y protección del patrimonio urbano.

Algunas preguntas de investigación son:

- a. ¿Son las políticas públicas urbanas las orientadoras del desarrollo urbano en particular, en las áreas históricas o es el desarrollo urbano el determinante de las políticas públicas urbanas?
- b. ¿En qué medida la declaratoria de áreas históricas constituye una herramienta adecuada para la protección del patrimonio urbano en Colombia?
- c. ¿Es la declaratoria un agente de inducción o refuerzo de especulación sobre el valor del suelo, de atracción turística, inmobiliaria y económica, además de generador de cambios urbanos en la cotidianidad social de las comunidades habituales del municipio reconocido como BIC?
- d. ¿Cómo han influido las políticas públicas urbanas en el propósito de conservación y protección del patrimonio urbano y arquitectónico en Colombia?

- e. ¿Cuáles son los efectos principales de la aplicación o ausencia de la delimitación de las áreas patrimoniales?
- f. ¿Cuál es la relación de la planeación urbana y la conservación de las áreas patrimoniales declaradas?
- g. ¿Se conserva con mejores características urbanas y arquitectónicas, un municipio con declaratoria, reglamentación urbana, plan de ordenamiento y plan especial de manejo y protección que uno que carece de alguna de ellas?
- h. ¿Las fases y secuencias del encadenamiento de las políticas públicas de protección del patrimonio urbano expresan el sentido de la época y personajes promotores con su surgimiento?
- i. ¿Cuál es la procedencia de las ideas y referentes subyacentes en los instrumentos de planeación y gestión del patrimonio urbano?

**Figura 04 Centro histórico del municipio de Monguí (Boyacá)**



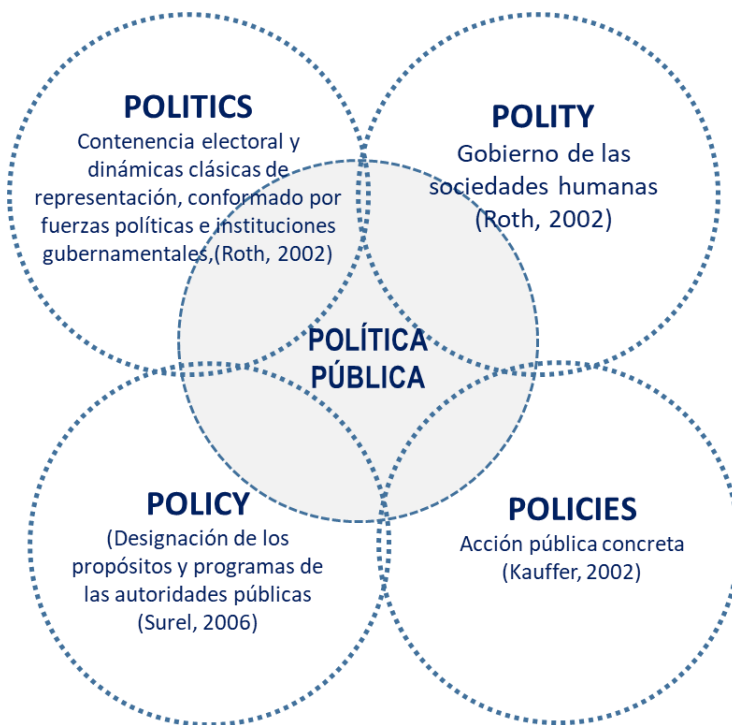
Fuente: Imagen tomada de Tripadvisor

## 1.4 Marco conceptual

### 1.4.1 Aproximación a la definición de política pública

Discutir la noción de política pública requiere partir de la dificultad semántica presente en el castellano con el término política. Tres acepciones se encuentran amparadas por la misma palabra que el idioma inglés diferencia. La política concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas, *polity* en inglés. La segunda, la política como actividad de la organización y lucha por el control del poder centrada en la competencia electoral y las dinámicas clásicas de la representación, *politics* en inglés. Finalmente, la política conforme designación de los propósitos y programas de las autoridades comprendida por el conjunto de actores o mecanismos que presiden la definición y la puesta en práctica de las políticas públicas, *policy* en inglés (Roth, 2002, pág. 26; Surel, 2006), mientras que *policies*, alude a la acción pública concreta (Surel, 2006). (Figura 05).

**Figura 05 Definiciones de política pública**



Fuente: Elaboración propia con base a (Kauffer, 2002; Roth, 2002; Surel, 2006)

En la aproximación a la política (*politics*), el objeto de análisis está conformado por las fuerzas políticas e instituciones gubernamentales y parlamentarias, mientras que el análisis de las

políticas públicas (*policies*) supone aproximarse al aspecto programático de la acción gubernamental en un área concreta de la acción pública (Kauffer, 2002). La política pública es un curso de acción o inacción gubernamental en respuesta a problemas públicos, es decir, la respuesta del Estado a un problema que trasciende la autonomía privada es una opción no obligada para generar soluciones, amparada en su autonomía de autoridad (Velásquez, 2009, p.151). Supone la incorporación de los ideales y anhelos de la sociedad, agrupados en objetivos del bien común colectivo, donde intereses generales de la ciudadanía encuentran una interpretación natural por parte del Estado que legitima su acción en la construcción social a partir de los escenarios de discusión y convergencia de las opiniones de nación, sin desconocer el respeto por la diferencia, expresión no necesaria de la práctica democrática.

Las políticas públicas se generan en el siglo XIX en el marco de la construcción de los Estados Nacionales, proyectos destinados a enfrentar las nuevas demandas de la sociedad industrial para reconstruir la identidad nacional y cultural de los países (Barragán & Mendoza, 2005, p.171). Especialmente en aquellos donde la presencia de las políticas públicas son un medio de manifestación de la acción colectiva mediante la interacción con múltiples y diversos actores sociales y políticos, quienes ejercen la aceptación u oposición a la realidad de la sociedad. Según Velásquez observa los fallos en la definición de política pública, en primer lugar, aquellos que por ser muy específicos dejan por fuera fenómenos considerados de afectación colectiva a la ciudadanía. En particular las de naturaleza normativa que exigen la búsqueda del interés común, aislando del concepto las que no se centran en este deber. En segundo lugar, se ubican las incompletas que carecen de todos los elementos que la constituyen y finalmente las generales que permiten considerar en la política pública decisiones o actividades ajenas a su fin (2009: 153). La propuesta de un concepto por parte de Velásquez es la siguiente:

*Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener (2009, p.156).*

Esta definición de política pública permite interpretar dos condiciones para la operatividad de las directrices gubernamentales: a) un mecanismo o instrumento para materializar los objetivos de la política, b) la institución o entidad administrativa, reguladora y gestora de las soluciones mediante la cual se pretende distribuir el beneficio común a la sociedad. Los propósitos de la política pública son prevenir o solucionar la ocurrencia de un problema de impacto social y contrario a los intereses del Estado en un tiempo de acción que define el carácter de la legislación. El primero de carácter contencioso con un ideal de anticipación, permitiendo así una acción posiblemente efectiva, con disminución del desgaste del aparato estatal en aspectos económicos y sociales. Por su parte, lo que concierne a solucionar infiere una acción correctiva o posterior al acontecimiento, comprometiendo pérdida de recursos en alguna dimensión que puede intensificar el problema, incluso llevando a la menoscabar el sentido y pertinencia de la legislación.

Los mecanismos de participación ciudadana en la formulación de la política pública, siendo los beneficiarios de las decisiones ocupan una posición activa en algunos momentos de la producción, que no se traduce necesariamente en aportes considerados fundamentales capaces de incidir en las resoluciones finales de la legislación sobre una problemática particular. La política pública como integrador de soluciones colectivas media e interpreta sobre los aspectos relevantes dentro de la sociedad que a consideración del ente legislativo son primordiales para el desarrollo de las condiciones esenciales de un progreso equitativo y proporcional en el marco de los retos contemporáneos. De tal forma, el concepto de política pública se ajusta a las condiciones e influencias externas, como el ejercicio de la política electoral, la temporalidad de las representaciones democráticas es una entidad viva, cambiante y adaptable al marco del plan de gobierno con una condición de permanencia incluso que resiste a las iniciativas legislativas tan desfiguradas en la actualidad.

#### **1.4.2 Definición y composición del patrimonio urbano en Colombia**

La noción de patrimonio ha estado ligada a los objetos heredados de padre a hijo, por lo mismo, estos han constituido a lo largo de generaciones el patrimonio familiar, motivo de atesoramiento, conformado por las tierras, las construcciones arquitectónicas y el menaje doméstico (Mincultura, 2005). El dominio de la propiedad, el derecho a suceder la tenencia es legitimado por una instancia exógena con capacidad para ejercer autoridad e inducir un comportamiento aceptado como lícito en la obtención y posterior legado de los bienes adquiridos dentro del marco legal. La idea de patrimonio cambia con el tiempo, las expresiones culturales no permanecen estáticas, están en permanente construcción y cada sociedad escoge su propia manera de valorarlo y transferirlo a futuras generaciones (Molano, 2007).

La condición dinámica, adaptable y evolutiva del patrimonio, lo hace receptor de nuevos atributos y necesidades que la sociedad desea recibir de su acción, además de concentrar un conocimiento acumulada, reinterpretado por el avance permanente de su función social. Desde la concepción activa alejada de la retórica de la nostalgia, el patrimonio es un recurso, en un proceso vivo móvil, generador de identidad y cohesión en tres amplias dimensiones: física, social y cultural (Marcos, 2010).

La exploración sobre el patrimonio ha incursionado en nuevas dimensiones desde escala monumentales próximas a la arquitectura hacia espectros más amplios e incluyentes como el urbanismo, movilizó su interés más allá del significado subyacente, para ocuparse del proceso de producción, los medios de participación ciudadana, la divulgación, circulación social y los atributos asignados por quien interactúa con él. Esta definición le asigna una nueva lógica al patrimonio dotándolo de un significado donde *"todo aquello que socialmente se considera digno de conservación, independientemente de su interés utilitario"* (Prats, 1997, p. 63).

El patrimonio son los bienes que se poseen, inicialmente los recibidos de manera generacional, conformado por los bienes privados y públicos heredados, conservados para el disfrute de la

colectividad debido a su valor general (Capel, 2014). El ámbito de propiedad incluye elementos públicos bajo el dominio del Estado.

El disfrute de los bienes con este carácter se reglamenta por un acuerdo colectivo, sometido a la práctica como regular de los linderos hasta donde es permitido el ejercicio del deleite siendo un medio para la conservación de la representatividad del bien. A pesar de ser un relato constituido en el presente, el patrimonio preserva la riqueza y diversidad cultural de la sociedad y lo transmite a generaciones posteriores (Maldonado, 2009), adquiere de esta forma carácter de testimonio. En el periodo anterior a la llegada de los europeos a América lo más importante que puede destacarse sobre estas nociones, se refiere a lo que se ha podido conocer a través de cronistas e historiadores (Aprile- Gniset, 1991), sobre la idea que poseían los indígenas sobre la tierra, contrasta radicalmente con lo impuesto por los conquistadores. Para los aborígenes lo vital era el suelo que se pisaba, la madre tierra: origen de todo lo viviente, visión que sigue activa y vigente en numerosas comunidades indígenas colombianas y americanas (Niño, 2015).

Dos ideas sobre la noción de patrimonio pueden diferenciarse de la concepción indígena y peninsular. La primera obedece a dimensiones trascendentales en vínculo con la energía y el significado colectivo de la relación del hombre con la naturaleza. Su exploración y dependencia en un ciclo más íntimo con dominio para el uso limitado y responsable de los recursos, más próxima a la idea inmaterial del concepto donde la cotidianidad resulta ser el patrimonio. La segunda idea sobre el patrimonio se introdujo en el encuentro de las dos culturas, como lo denomina Ramón Gutiérrez (1992: 27). Se apoya en una elaboración conceptual próxima a la materialidad, el valor representado en riqueza de los dominios y documental de los bienes. Las concepciones de patrimonio han evolucionado como un acervo que decanta su reinterpretación de la historia, de forma activa, en una especie de reinvención de la continuidad social, en la cual la tradición ocupa una posición central (Rosas, 2005).

El concepto de patrimonio cultural tiene su origen en Europa en el siglo XIX durante el Romanticismo<sup>31</sup>, con la consagración de la noción de monumento histórico transformado a través del tiempo hacia un concepto más amplio y contenedor del bien cultural, engloba manifestaciones y expresiones significativas de la cultura (González, 2000). La progresiva estimación de los aspectos intelectuales y educativos de la condición humana inspirada en las ideas ilustradas del siglo XVIII, además del carácter de símbolos nacionales atribuidos a los monumentos en el XIX, tuvo como consecuencia la presencia de nuevas formas de acercamiento a la cultura por parte de la sociedad (Llull, 2005, p.192)

---

<sup>31</sup> El romanticismo logró establecer una vinculación emocional entre las personas de manera individual y colectiva con su pasado histórico artístico, base del espíritu nacional de los pueblos. La mirada al pasado se hizo con el anhelo de reencontrar las raíces culturales y elementos significativos que habían determinado la forma de ser de las sociedades contemporáneas a lo largo de la historia (Llull, 2005, p.189)



## 1.5 Marco teórico-metodológico: el enfoque del institucionalismo histórico

### 1.5.1 El Institucionalismo, el Nuevo Institucionalismo Histórico y el *path dependence*: aproximación teórica

El institucionalismo es una escuela de pensamiento económico de origen norteamericano. Parte de un enfoque económico que introduce como variable de interés a las instituciones y rechaza la *“racionalidad ilimitada de los agentes, así como los móviles del comportamiento en que se basa la maximización de la utilidad individual”*, según el precepto de sus fundadores en la década de los años cincuenta del siglo XX, Veblen, Commons y Mitchell (Reis, 2007, p. 315). El antecedente del institucionalismo de Commons o norteamericano que goza de mayor reconocimiento y prestigio entre los economistas (Brue, 2000) proviene de una de las ramificaciones de la vertiente del historicismo<sup>32</sup>, que es una corriente de pensamiento económico que pretende *“conciliar la historia con la economía y la sociología, en una rica mezcla de espíritu”* subordinado *“pero también lleno de contradicciones internas, que lo ramifican en varias vertientes”* (Reis, 2007, p. 317).

De esta forma, *“el institucionalismo económico surgió en la academia norteamericana a finales del siglo XIX y comienzos del XX, en oposición a la economía neoclásica”*, con una concepción de la economía *“como un sistema abierto y dinámico, donde la noción de proceso es más importante que la de equilibrio”*, a partir de la aplicación de un enfoque holístico o sistémico, donde las *“acciones individuales y sus consecuencias sólo se pueden explicar”* a partir del reconocimiento de la *“influencia del sistema o subsistema del que forman parte y la posición que allí ocupan”* (Toboso, 1997, p. 183; Caballero, 2004, p. 140). Esta corriente no ofrece un cuerpo unificado de pensamiento ni adopta una sola metodología. Existen al menos dos grandes líneas de investigación: Una está asociada a Veblen y Ayres que subraya el papel de las instituciones y la tecnología. La otra, vinculada a Commons, hace énfasis en la ley, los derechos de propiedad y las organizaciones, estudia su evolución e impacto sobre el poder económico y legal, las transacciones económicas y la distribución del ingreso (Rutherford, 1994).

Los principios básicos de las escuelas norteamericanas referidos al funcionamiento de los mercados fueron adoptados por las siguientes vertientes y enfoques del institucionalismo, ampliando su campo de aplicación a otras ciencias. De hecho, aún predominan las concepciones básicas enriquecidas a partir de la integración de otras áreas del conocimiento, entre las que se destacan:

- a) La negación de las verdades absolutas e ineludibles de los supuestos clásicos y neoclásicos acerca del mercado (con arreglo a la dotación de factores, la condición de *ceteris paribus* y la consideración del precio como una variable fundamental);

---

<sup>32</sup> El término historicismo fue sugerido, en principio, por Friedrich Schlegel (1797) y popularizado por Feuerbach, Braniss y Prantl, en la primera mitad del siglo XIX (Reis, 2007, p. 316).



- b) La valorización de los factores históricos, sociales e institucionales (y no meramente cuantitativos o datos);
- c) El reconocimiento del cambio permanente que afecta la estática clásica de los mercados y la preferencia por los modelos dinámicos;
- d) El complejo sistema de influencias entre individuos, instituciones y sociedad (el análisis bidimensional era demasiado limitado para las pretensiones institucionalistas);
- e) La medición empírica de los ciclos del comercio (en el intento de comprender los ciclos de comportamiento de las empresas);
- f) La explicación de la economía a través de la historia y de las relaciones institucionales (y no meramente mediante presupuestos generalistas y exclusivistas);
- g) El recurso a la inducción en el método de análisis;
- h) La visión de las agrupaciones y de las instituciones en lugar del *homo economicus* individualista del marginalismo;
- i) El énfasis en los efectos previsibles de la producción sobre el mercado (y no en el mercado en sí mismo);
- j) La focalización en el comportamiento de los agentes (y no en valores abstractos como el precio, por ejemplo) y,
- k) el esfuerzo por integrar la economía con otras áreas del conocimiento (como la sociología, el derecho o la historia) (Eggertsson, 1990; North, 1990; Williamson 1998; Reis, 2007; p. 317).

En la interpretación de García (2013), el institucionalismo es un enfoque teórico y empírico que contribuye a explicar la creación, el desarrollo, el funcionamiento, cambio o extinción de las instituciones u organizaciones de derecho público en un marco constitucional (lo que se denominan de forma tradicional instituciones políticas), sobre la base del Estado y los poderes en los cuales se divide el ejercicio de sus funciones (García, 2013, p. 6). Encuentran lugar en esta definición las instituciones de carácter privado que, por su función e impacto se reconocen y consolidan a manera de cooperadoras del propósito del Estado. El estudio de las instituciones se ha abordado por campos del conocimiento como la filosofía, la política, la historia, el derecho, la sociología, la economía, la ciencia política y recientemente la planeación (Sorensen, 2018). Sin embargo, el análisis institucional inicia desde la década de 1950, procedente de la gestión norteamericana, con pensadores comprometidos en explicar las instituciones políticas, económicas, históricas y sociales como el gobierno, la justicia, los mercados, las empresas, las convenciones sociales o la familia (North, 1990), y con una gama amplia de escalas y asuntos por interpretar, no centradas exclusivamente en las instituciones políticas.

La confrontación de las demandas ciudadanas y las decisiones del poder jurídico tienden a buscar acuerdos políticos con resultados inciertos en la complejidad de las decisiones colegiadas. A esto se suma el funcionamiento del gobierno, la operacionalización o puesta en funcionamiento de la política pública por medio de la institución (García, 2013). El institucionalismo considera a las instituciones como reglas de funcionamiento de la sociedad bajo el enfoque de las ciencias sociales, particularmente de la economía, la historia, la ciencia política y las relaciones internacionales; plantea la comprensión de la sociedad a partir de la

instituciones formales e informales (North, 1990; North, 2001). Bajo el precepto que cada sistema humano desempeña una serie de funciones de todo tipo -sociales, políticas, económicas y culturales- para cuya realización se ha dotado de un conjunto de instituciones específicas por medio de las cuales se regula el comportamiento de los individuos (North, 1990).

La agenda de investigación del institucionalismo de las últimas dos décadas coincide con la premisa que las instituciones adquieren un valor relevante y coyuntural, son eficaces en la reducción de los costos de transacción social y contribuyen a la coordinación colectiva a través de la inducción de preferencias, comportamientos y resultados públicos (North, 1990; Ostrom, 1990). Las instituciones son el medio por el cual el Estado o una organización impacta un sector específico con el fin de estructurarlo bajo unas medidas administrativas, que en el fondo aspiran a denotar un comportamiento colectivo rutinario, bajo la aceptación de las condiciones impuestas.

March y Olsen proponen que las instituciones políticas son conjuntos de reglas de rutinas interconectadas que definen las acciones correctas en términos de relaciones entre roles y situaciones, suponen dos eventos principales: actores con alta capacidad para tomar decisiones asertivas que inducen al dominio y posicionamiento adecuado de las problemáticas en el marco funcional de las instituciones (1989). En el mismo sentido Peters, señala cuatro características relevantes para la integración del concepto de institución política: a) una institución constituye un rasgo estructural de la sociedad y/o la forma de gobierno; b) la institución muestra cierta estabilidad a través del tiempo; c) una institución debe afectar al comportamiento individual y, d) entre los miembros de la institución debe haber cierto sentido de valores compartidos (1999).

### **1.5.2 Definición, principios y concepciones del institucionalismo**

Los elementos comunes que comparten la definición de institución coinciden en que son conjuntos de reglas formales e informales que dan estructura al comportamiento, desarrollado en diferentes sociedades a través de procesos históricos específicos (North, 1990, p.3). Esta precisión se asocia al institucionalismo de elección racional. Por su parte, el institucionalismo sociológico incluye elementos que hacen el concepto más amplio al integrar no solo reglas, procedimientos o normas formales, sino también sistemas de símbolos, guiones cognitivos y plantillas orales que proporcionan marcos de significado que guían la acción humana (Hall & Taylor, 1996). Este enfoque sociológico excluye la cultura y vincula a las instituciones más estrechamente con entornos organizativos específicos y reglas aplicables (Sorensen, 2015).

Una alternativa que explica la ausencia de la cultura de los marcos generales del institucionalismo obedece a su origen de carácter singular e identitario, no impuesto desde el Estado sino desde la tradición como consecuencia de la herencia de formas y sentidos de valoración y refinamiento de las manifestaciones integradas a la autenticidad. La cultura posee un carácter amplio en su sentido de transcendencia y masificación al constituirse en una opción de elección racional o sociológica, capaz de influir en comunidades humanas más allá de las fronteras de su injerencia. En el caso particular del patrimonio urbano en Colombia, la cultura

de la cual se origina y sustenta su razón de ser, puede considerarse como institución en el sentido del institucionalismo, las normas e instrumentos de regulación, conservación, salvaguarda y protección obedecen y se enmarcan dentro del institucionalismo al depender de organizaciones conformadas por iniciativas estatales, privadas y mixtas para la promoción, formulación, aprobación y puesta en marcha de los mecanismos mencionados.

La procedencia de las instituciones desde la economía, la sociología y la ciencia política generan el enfoque de las tres principales ramas del institucionalismo (Tabla 1). Las variadas tendencias del origen institucional son consideradas creación deliberada de un grupo de actores que en el tiempo están sometidas a procesos de “*destrucción creativa*”, mecanismo mediante el cual las sociedades exitosas persisten a manera de “*instituciones efectivas, mientras que los procesos de mercado eliminan soluciones menos eficientes*” (Sorensen, 2017, p. 56). Esta idea asociada a la economía pretende posicionar la efectividad de un mecanismo para potenciar las decisiones acertadas y adoptadas por los usuarios o beneficiarios, quienes desvirtúan las menos efectivas para generar utilidades o impactos positivos en las aspiraciones colectivas.

**Tabla 1. Enfoques de las tres ramas principales del Institucionalismo**

	<b>Institucionalismo de elección racional</b>	<b>Institucionalismo sociológico</b>	<b>Institucionalismo histórico</b>
Orígenes	Economía institucional, elección racional, ciencia política	Teoría de la organización en sociología	Ciencia política y ciencia social histórica comparada
Definición de instituciones	“Lo formal y reglas formales del juego... las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana” (North, 1990, p.3)	"No solo reglas formales, procedimientos o normas, pero los sistemas de símbolos, guiones cognitivos y plantillas morales que proporcionan los 'marcos de significado' que guían la acción humana". (Hall & Taylor 1996: 947	"Lo no formal o informal procedimientos, rutinas, normas y convenciones integradas en la estructura organizativa de la política o economía política" (Hall & Taylor 1996: 938)
Principales características de las instituciones	Efectos de coordinación, brindar certeza, información y compromiso creíble.	Entendimientos compartidos, esa forma de acción e imaginación.	Instrumentos de distribución que regulan los procesos sociales y políticos.
Modelo de cambio institucional	Cambio de instituciones principalmente en respuesta a las fuerzas del mercado, a medida que los actores racionales ajustan el comportamiento, los grupos crean instituciones para superar los problemas de acción colectiva	Cambio de instituciones lentamente, a medida que los sistemas culturales y cognitivos más grandes evolucionan gradualmente	Equilibrio exacto modelos de coyunturas críticas y vías de desarrollo, y conceptos recientes de procesos estructurados de cambio endógeno
Concepciones de estructura y agencia	Los actores individuales son agentes interesados, que a veces diseñan reglas colectivas para garantizar la cooperación	Social y cultural contextos y entendimientos compartidos proporcionan configuraciones para la agencia y la conforman	Instituciones generadas Históricamente, a través de los conflictos políticos, se crean escenarios y se configura la agencia
Análisis de poder	El poder no es importante enfoque de RI, que tiende a	Como las instituciones son tan ampliamente definido, y	El poder es central para el Análisis de la formación y

	ver a las instituciones como generadoras de beneficios mutuos al facilitar la cooperación y superar los problemas de acción colectiva	cambia lentamente, SI está menos enfocado en el poder político abierto que HI, y presta más atención al poder sistémico y hegemónico	el cambio institucional. Las instituciones tienen importantes impactos distributivos, por lo que los actores tienen incentivos para movilizarse para dar forma a las instituciones
--	---	--	--

Fuente: Elaboración propia con base en Sorensen (2018) a partir de (North, 1990; Hall & Taylor, 1996)

Las instituciones benefician o desfavorecen a grupos de individuos de formas particulares con sus acciones. Introducen una tendencia para dar forma al interés común de esos grupos y pueden animarlos a identificarse con elementos generales para fines de acción colectiva, a partir de la manipulación de las ideas originarias y de los efectos deseados como un instrumento de exclusividad desde la falsa atención de las necesidades o inquietudes comunitarias. El poder político se ve así reforzado por el carácter fundamentalmente distributivo de las instituciones (Sorensen, 2017). Mahoney menciona que las instituciones son “*instrumentos de distribución que asignan recursos de manera desigual y, por lo tanto, ayudan a constituir actores colectivos asimétricos*” (2010:15). Aún así, con capacidad suficiente para desbalancear el equilibrio a favor de sus intereses e introducir diferencias fundamentales para sus verdaderos propósitos.

Según Sorensen (2017), las diferencias elementales en la estructura y fundamentos de los enfoques del institucionalismo se pueden sintetizar en:

- Las variaciones del institucionalismo pretenden explicar el comportamiento originado en las formas como las instituciones inducen desde su creación y cambios la relación entre la estructura y los problemas colectivos con el fin de garantizar certezas y reducción de riesgos.
- Las instituciones crean normas de profundo arraigo con capacidad de cohesionar entendimientos colectivos que afectan la forma en que los individuos comprenden e interpretan diversas situaciones en un rango de acciones considerados apropiados o incluso razonables para solventar cada situación.
- El enfoque “*sobre el papel del poder en la creación y el cambio de las instituciones*” a manera de un conductor para reafirmar o trastocar los desequilibrios del poder existente en situaciones de distribución de recursos limitados, genera un desequilibrio para alterar o incidir en grupos sociales, lo que ocasiona tendencias en la respuesta a acciones colectivas, en este sentido, la institución puede adquirir un carácter “*fundamentalmente distributivo*” (Sorensen, 2017, p. 67).

Estas perspectivas procedentes de visiones diferentes a la posición política, buscan evidenciar el rol que las “*instituciones desempeñan en el moldeamiento de los resultados políticos y sociales*”, de tal forma, los institucionalistas de la elección racional argumentan que las instituciones políticas son “*concebidas como conjunto de reglamentaciones*”, que estructuran las formas de interacción de los actores relevantes y así ayudan a reducir la incertidumbre en el comportamiento de los demás -dilemas de acción colectiva- (Sorensen, 2018, p.77).

### 1.5.3 El Nuevo Institucionalismo Histórico

El origen del neo-institucionalismo surge de la convergencia de estudios procedentes de la historia, la sociología, la economía y la ciencia política a partir de lo cual se formularon tipologías, entre otras se identifican: el enfoque histórico, sociológico y de elección racional (Hall & Taylor, 1996). Emergen “*como un intento de recuperar las virtudes del viejo institucionalismo y de remontar las limitaciones presentes en el análisis conductista y de la elección racional*”, la denominación de neo-institucionalismo se atribuye a James March y Johan Olsen en 1984, “*para tratar de reorientar el análisis empírico dentro de la teoría política*” (Farfán, 2007, p. 89).

Posterior a estos tres enfoques iniciales se suman el neo-institucionalismo normativo, centrado en el estudio de cómo las normas y los valores representados por las instituciones estructuran e inducen las conductas individuales, además del análisis de los tipos de instituciones y su impacto en los resultados del gobierno donde las instituciones se constituyen en variables independientes de las políticas (Peters, 2003; Fontaine, 2015). Más adelante se adicionan “*dimensiones transdisciplinarias*”, en cuanto el “*enfoque de redes, que analiza los marcos de significación, ideas y narrativas utilizadas para explicar, deliberar o legitimar la acción política*”; el enfoque “*feminista*” centrado en “*cómo las normas de género inciden en las instituciones y cómo los procesos institucionales construyen y mantienen dinámicas de poder sexual*” (Lowndes & Roberts, 2013; Fontaine, 2015, p. 80-81).

Según Peters, considerado uno de los principales impulsores del nuevo institucionalismo histórico, hay siete vertientes principales del nuevo institucionalismo:

- a. el institucionalismo normativo,
- b. el nuevo institucionalismo del rational choice o elección racional,
- c. el nuevo institucionalismo histórico,
- d. el institucionalismo empírico,
- f. el institucionalismo de representación de intereses,
- g. el institucionalismo internacional y
- h. el nuevo institucionalismo sociológico<sup>33</sup> (Peters, 2003, p. 143).

Las vertientes aportan novedosos elementos para conservar el ámbito de la política. Consideran las instituciones de acuerdo con elementos influyentes sobre el comportamiento político y dan forma a los procesos desde la toma de decisiones de los actores de un sistema político o dentro

---

<sup>33</sup> El institucionalismo histórico, el institucionalismo de la elección racional y el institucionalismo sociológico nacen como reacción a las perspectivas conductistas de gran influencia en las décadas de 1960 y 1970. El Institucionalismo histórico, enfatiza la relevancia de las decisiones que se toman tempranamente en la historia de toda política: las decisiones políticas iniciales determinan el rumbo de las políticas y por tanto las decisiones políticas posteriores. Esto implica que existe una dependencia del camino o la senda “*path dependence*” que genera una inercia institucional que hace que las decisiones iniciales del ámbito gubernamental persistan. (Saavedra, 2016; Farfán, 2007; Caballero, 2004; Sorensen, 2018).

de una política pública, hasta las movilizaciones que realizan las organizaciones sociales. Esta clasificación se realiza a partir de un listado más amplio donde emergen otros enfoques (Peters, 1999), hasta otro simplificado (nuevo institucionalismo de la elección racional y nuevo institucionalismo de corte más sociológico e histórico) (Soltan et al., 1998; Farfán, 2007, p.89).  
Tabla 2.

**Tabla 2. Tipos de Neo-institucionalismo**

<b>Tipo de Nuevo Institucionalismo</b>	<b>Enfoque</b>
<b>Institucionalismo normativo</b>	Se destaca para comprender el funcionamiento de las instituciones y cómo afectan al comportamiento individual es clave el papel de las normas y los valores de las organizaciones (March & Olsen, 1984, 1989, 1994), de tal forma, las instituciones moldean a sus participantes y generan sistemas de significación para quienes participan en la vida política, por lo que este enfoque reniega de los factores externos que influyen en las preferencias.
<b>Institucionalismo histórico</b>	Este enfoque no implica un determinismo histórico, sino que habrá cambio y evolución, pero las posibilidades de rumbo de la política estarán restringidas por el período inicial. El término es acuñado por Theda Skocpol, tiene en Peter Hall (1986) a uno de sus principales precursores, mientras Steinmo, Thelen y Pierson constituyen algunas de sus principales referencias.
<b>Institucionalismo de elección racional</b>	Comprende las instituciones como sistemas de reglas y alicientes para el comportamiento dentro de las cuales los individuos tratan de maximizar su beneficio, por lo que se sostiene que los comportamientos son una función de las reglas y los incentivos.
<b>Institucionalismo sociológico</b>	En el campo de la sociología ha existido una fuerte tradición de análisis institucional desde figuras clásicas como Weber o Durkheim, que se ha mantenido en áreas como la sociología histórica o la sociología organizacional, y se puede distinguir entre un viejo y un nuevo pensamiento institucional en sociología dependiendo de las fuentes de irracionalidad de las instituciones, además de la concepción de la relación entre las instituciones, su entorno y el papel moldeador de la política. El nuevo enfoque en sociología debe entenderse en un proceso de individualización de las sociedades (Caballero, 2007). En el seno del institucionalismo sociológico contemporáneo pueden distinguirse diversas perspectivas sociológicas como los modelos de organización basados en la ecología de la población, el enfoque que analiza las dimensiones simbólicas y evaluativos de las organizaciones o el programa que estudia los procesos de “sedimentación” de las organizaciones (Caballero, 2007, p. 25).
	Siendo próximo a la tradición del viejo institucionalismo, estudia empíricamente ciertas diferencias institucionales y sus efectos, señala que la estructura del gobierno marca la forma de las políticas y las decisiones de estos. El institucionalismo

<b>Institucionalismo empírico</b>	empírico se ha centrado en el estudio de un grupo de cuestiones aplicadas a las diferencias entre gobierno presidencialista y gobierno parlamentario, la cuestión del gobierno dividido, la institucionalización legislativa o la independencia de los bancos centrales.
<b>El Institucionalismo de representación de intereses</b>	Señala que en la vida política existen cauces de acción que no parecen muy formales pero que realmente adoptan un alto grado de institucionalización, y este enfoque analiza la estructuración de esas “relaciones institucionalizadas” entre Estado y sociedad. En particular, el institucionalismo de representación de intereses se centra en el análisis de la acción de los partidos políticos y de los grupos de interés.
<b>Institucionalismo internacional</b>	Se enfoca en la conceptualización de la política internacional en términos institucionales y señala el papel de la estructura al explicar el comportamiento de los Estados. El institucionalismo internacional piensa en los regímenes de acuerdo con las instituciones en un nivel internacional, pues generan estabilidad y predicen, moldean el comportamiento de los Estados e impulsan un conjunto de valores

Fuente: Elaboración propia con base en (Saavedra, 2016; Farfán, 2007; Caballero, 2007; Sorensen, 2018).

El institucionalismo histórico es una teoría que explica la creación, desarrollo o extinción de las instituciones, plantea la relación entre agentes e instituciones definiendo los límites en que los actores adoptan sus estrategias (North, 2001; García, 2013). El institucionalismo histórico es la primera versión del nuevo institucionalismo que nace dentro de la ciencia política (Peters, 2003, p.10). Se percibe, poco más o menos, como un cuerpo de ideas coherentes de investigación en dicha disciplina, cuyo objetivo central es realizar una comprensión profunda y contextualizada de los procesos de formación y cambio de las instituciones políticas a lo largo del tiempo (Peters, 2003; Farfán, 2007). Se reconoce que las instituciones estructuran las relaciones sociales aceptadas por la colectividad, son durables, por tanto, determinan el comportamiento individual (Peters, 2003). La dicotomía entre el viejo institucionalismo y el nuevo institucionalismo sugiere que las características del primero giran en torno a la tendencia holística más que individualista, de tal forma, el uso de una estructura conductista<sup>34</sup> en lugar de la elección racional<sup>35</sup> y un marcado énfasis en el desarrollo institucional de los procesos evolutivos y no intencionales de las decisiones y acciones colectivas (Rutherford, 1994). Estos rasgos que el viejo institucionalismo reivindica como virtudes son aspectos hacia los que, desde

<sup>34</sup> El conductismo se caracterizó por utilizar variadas metodologías para el estudio del comportamiento individual, centrado en análisis de casos de tipo experimental, factorial, estadístico y de sistemas. La metodología conductista se basa en realizar observación directa de la conducta individual (Rhodes, 1997), lo que lleva a que se caracterice este enfoque como reduccionista, al restringir la explicación de fenómenos políticos a individuos atomizados, minimizando la importancia de las organizaciones y las instituciones en la conducta; egoísta, al observar las acciones como producto de calcular el interés propio sin considerar las obligaciones y deberes (March & Olsen, 1984, p.735).

<sup>35</sup> La elección racional es una metodología, enfocada en identificar, analizar y explicar el sistema de incentivos que tienen los actores, así como sus preferencias.

el argumento de la falta de teoría, enfila baterías el nuevo institucionalismo (Eslava et al., 2011, p.10).

Según Peters, el nuevo institucionalismo nació conforme a un intento de recuperar las virtudes del viejo institucionalismo y de remontar las limitaciones presentes en el análisis conductista y de la elección racional (1999, p.15-17). Este nuevo institucionalismo se dirige a confrontar los supuestos del conductismo y de la teoría de la elección racional porque se caracterizan por un "*contextualismo, reduccionismo, funcionalismo e instrumentalismo*". El nuevo institucionalismo se distingue por posicionar la acción colectiva en el centro del análisis, o, más bien, porque pretende establecer una vinculación de reciprocidad entre la acción social y su entorno socioeconómico y político (Farfán, 2007, p.89). El Neo-institucionalismo o nuevo institucionalismo ha retomado el programa de investigación del institucionalismo clásico y le ha incorporado los desarrollos metodológicos del conductivismo y de la elección racional de acuerdo con los aportes de diversas disciplinas como la sociología, la historia, la economía y otras ciencias sociales logrando con ello configurar un rico campo donde los temas tradicionales para la política, el Estado, el gobierno, la ciudadanía y los partidos políticos, entre otros, pueden encontrar explicaciones más coherentes y completas (Eslava et al., 2011, p.6). La definición de institución en el neoinstitucionalismo adquiere varios matices que orientan en este mismo sentido su posición, pero conservan en su estructura conceptual elementos comunes.

El nuevo institucionalismo ha sido influyente en la teoría de las ciencias sociales durante más de 40 años con importantes aportes e impactos en disciplinas tan diversas como la ciencia política, la sociología, la economía y la geografía (Sorensen, 2015). Algunas de estas ideas se han integrado en la teoría de la planificación, trabajo que aún se encuentra en una etapa temprana (Sorensen, 2018), donde las instituciones reguladoras o influyentes en la expedición y puesta en operación de políticas ligadas con el conjunto de la ciudad y su complejo contexto regional puedan aportar en la línea de la planificación y gestión en la era urbana contemporánea. Esta tesis se inserta en el marco de reflexión sobre la pertinencia y alcance de aplicar un enfoque neo-institucionalista histórico al estudio de la protección y planeación urbanística en las áreas urbanas históricas patrimonializadas.

A continuación, se realiza el análisis de ciertas categorías o conceptos fundamentales del neoinstitucionalismo histórico – *path dependence*, coyunturas críticas-, los cuales se retoman y discuten más adelante, en relación con el análisis de la evolución de las políticas de protección del patrimonio urbano con Colombia.

## **1.6 *Path dependence* o dependencia del camino o de la trayectoria**

El *path dependence* (PD) o dependencia del camino es una categoría central en el neo-institucionalismo histórico. Se ha incorporado en los últimos 20 años, en el marco del debate multidisciplinar de las ciencias sociales, en distintos niveles de abstracción, ya sea como teoría, modelo o concepto. Este debate ha sido posible debido a la orientación que el estudio de los procesos económicos y políticos institucionales ha conllevado a asumir la idea que la historia



importa (Trigo, 2015, p. 84). Ello genera definiciones que permiten comprender los cambios y continuidades de las estructuras institucionales del sistema político, económico y social desde el supuesto general que los resultados institucionales actuales y futuros se encuentran en estrecho vínculo con eventos particulares del pasado. Esta es una característica recurrente, general, instalada en el supuesto base por el cual surge el concepto (Arthur, 1989, pp.116-131; Trigo, 2015).

El concepto de *path dependence* es traducido como “trayectoria dependiente”, “patrón de dependencia” y generalmente utilizado para reafirmar ideas centrales próximas a: a) “los patrones específicos de tiempo y secuencia importan”; b) una amplia variedad de resultados sociales “puede ser posible” a partir de condiciones de partida similares; “grandes consecuencias pueden resultar de acontecimientos relativamente “pequeños” o contingentes” (Pierson, 2017, p. 12). Se trata de un concepto no privativo del nuevo institucionalismo histórico, en razón a su procedencia “de otro análisis en el campo de la tecnología y de la economía, para extenderse al estudio del efecto de las ideas y de las normas culturales sobre el comportamiento de los individuos y de las organizaciones”. Es un concepto central en el enfoque del institucionalismo histórico porque prioriza como objeto de estudio “el papel de las instituciones en el terreno de las políticas públicas, puesto que se considera que ahí es donde los arreglos institucionales, una vez consolidados, tienden a ser más persistentes” (Pierson, 2000; Farfán, 2007, p. 106).

La idea esencial del *path dependence* es que, una vez que se han establecido algunos particulares cursos de acción en las instituciones, pueden resultar virtualmente imposibles de revertir, con una tendencia a ser cada vez más difíciles de cambiar con el tiempo, por lo que las pequeñas elecciones al principio pueden tener impactos significativos a largo plazo. Esta idea se encuentra en el análisis institucional histórico porque la dependencia de las instituciones con respecto a su formulación inicial se considera una continuación generada en dicha decisión (Sorensen, 2015; Pierson, 2017). En consecuencia, el desarrollo político puede estar definido por momentos o coyunturas que configuran los contornos básicos de la vida social (Ikenberry, 1994). Esto significa que la secuencia de decisiones tomadas por los actores vinculadas con el destino de una institución influye en su resultado y no dependen de las acciones recientes o de último momento.

La “dependencia del camino” (*path dependence*) permite identificar la relación entre las decisiones actuales y las pasadas, generando condiciones para comprender las diferentes etapas transcurridas en la cronología de una institución desde el pasado hacia el futuro (Sewell, 1996; Sorensen, 2015), además dota al institucionalismo histórico de la posibilidad de reconocer los impactos generados por los agentes y los contextos (Vergara, 2020). Una rutina institucional se describe por la incidencia de actores, comportamientos, instrumentos y conexiones causales en la decisión con sus respectivos resultados, con alta tendencia a reproducirse en el tiempo, lo que induce a suponer que conserva rasgos fundamentales caracterizados como patrones. El *path dependence* puede llegar a ser “un término mañoso, sin un significado preciso” (Pierson & Skocpol, 2008, p. 13).

La identificación, caracterización y “*estudio de los efectos inerciales de las instituciones*” a partir de la dependencia de la trayectoria

*“es una forma de análisis institucionalista en donde el énfasis cognitivo está depositado en los procesos históricos –tiempo, instituciones, y secuencia de los acontecimientos-, que llevan al surgimiento de las instituciones, a su consolidación o retroalimentación y, consecutivamente, a su transformación”* (Farfán, 2007, p. 107).

De manera contraria a lo que podría sugerir una interpretación simplista de la temática enfocada en la inercia institucional, desde el punto de vista del nuevo institucionalismo histórico el *path dependence* pretende evitar una explicación determinista de las relaciones institución-actores. Desagrega los elementos de continuidad que están presentes en el desempeño de las instituciones bajo el supuesto, que los procesos que caracterizan el funcionamiento de las políticas públicas están basados en el conflicto de intereses entre los actores y que al interior de los arreglos institucionales subyace la semilla de su propio cambio. El enfoque del nuevo institucionalismo histórico está interesado en explicar tanto los factores de diseño y creación institucional, de estabilidad y continuidad, como los de destrucción y sustitución de las instituciones (Thelen, 1999; Farfán, 2007).

El fomento del discurso sobre la innovación y la exigencia sobre nuevas formas organizativas flexibles y fluidas, al igual que la impronta tradicional de la toma de decisiones es soportada sobre la experiencia histórica (North, 1990). Esto ha suscitado la necesidad de comprender la razón por la cual las instituciones u organizaciones pierden la flexibilidad y adquieren un carácter inerte e incluso rígido, donde la dependencia de la trayectoria apropia una nueva versatilidad en el campo de la investigación sobre el estudio de estrategias, diseño y competencias de manera más enfocada (Sydow et al., 2009). Algunas ambigüedades han sido identificadas en el “*patrón de dependencia*”.

Entre ellas la asociada a una definición precisa del concepto, con una tendencia a “*fluctuar entre una concepción amplia y estrecha*”, la primera se refiere a la “*relevancia causal de etapas precedentes en una secuencia temporal*”, lo cual induce a suponer que dentro de una secuencia influyen los resultados y trayectorias previas, que no necesariamente “*inducen un movimiento adicional en la misma dirección*” (Sewell, 1996; Sewell, 2005). En el segundo caso una trayectoria dependiente significa que:

*“...una vez que un país o una región han comenzado por una trayectoria, los costos de reversión son muy altos. Habrá otros puntos de decisión, pero los atrincheramientos de ciertos arreglos institucionales obstruyen una fácil reversión de la decisión inicial...”* (Levi, 1997, p. 28).

La metáfora de un árbol resulta más apropiada, es relevante la vinculación de escala y proporción, así como, las relaciones causales y temporales:

*“...en el mismo tronco, existen muchas ramas diferentes y ramas más pequeñas. Aunque es posible darle la vuelta o treparlo de un lado a otro —y es esencial si la rama electa muere— la rama sobre la cual empieza un escalador es la que tiende a seguir...”*  
(Levi, 1997, p. 28; Pierson, 2017).

Dentro de los aportes para la comprensión de la dependencia del camino, es significativo el esquema elaborado por James Mahoney y Daniel Schensul (2006) para comprender la utilidad y limitaciones del *path dependence*. Se precisan los principales acuerdos y desacuerdos conceptuales (Tabla 3) que permiten reconocer los principios básicos de lo qué es y no es *path dependence*.

**Tabla 3. Cuatro modos de cambio de política**

<b>Características de la Institución objetivo</b>			
<b>Características del contexto político</b>		Bajos Niveles de discreción en interpretación / ejecución	Altos niveles de discreción en interpretación / ejecución
	<b>Fuertes posibilidades de veto</b>	<p><b>Capas</b> (Creación de nueva política sin eliminación de viejos)</p> <p>Ejemplos: la mayoría de las revisiones constitucionales, las nuevas leyes y políticas de planificación que se basan en el sistema anterior, las revisiones incrementales a los Planes Oficiales, agregando nuevas medidas como las Evaluaciones de Impacto Ambiental al control de desarrollo existente regímenes</p>	<p><b>Deriva</b> (Transformación de política estable debido a circunstancias cambiantes)</p> <p>Ejemplos: no reformar las políticas de bienestar para responder a cambios sociales, falta de revisión de límites municipales en ciudades en crecimiento regionales</p>
	<b>Posibilidades débiles de veto</b>	<p><b>Desplazamiento</b> (Reforma formal, reemplazo o eliminación de la política existente)</p> <p>Ejemplo: cambios de política normales,</p>	<p><b>Conversión</b> (Adaptación interna de la política existente a través de cambios en la implementación)</p> <p>Ejemplo: no cumplimiento de los existentes políticos</p>

Fuente: Tomado de Adaptado por Sorensen (2017) de Mahoney & Thelen (2010)

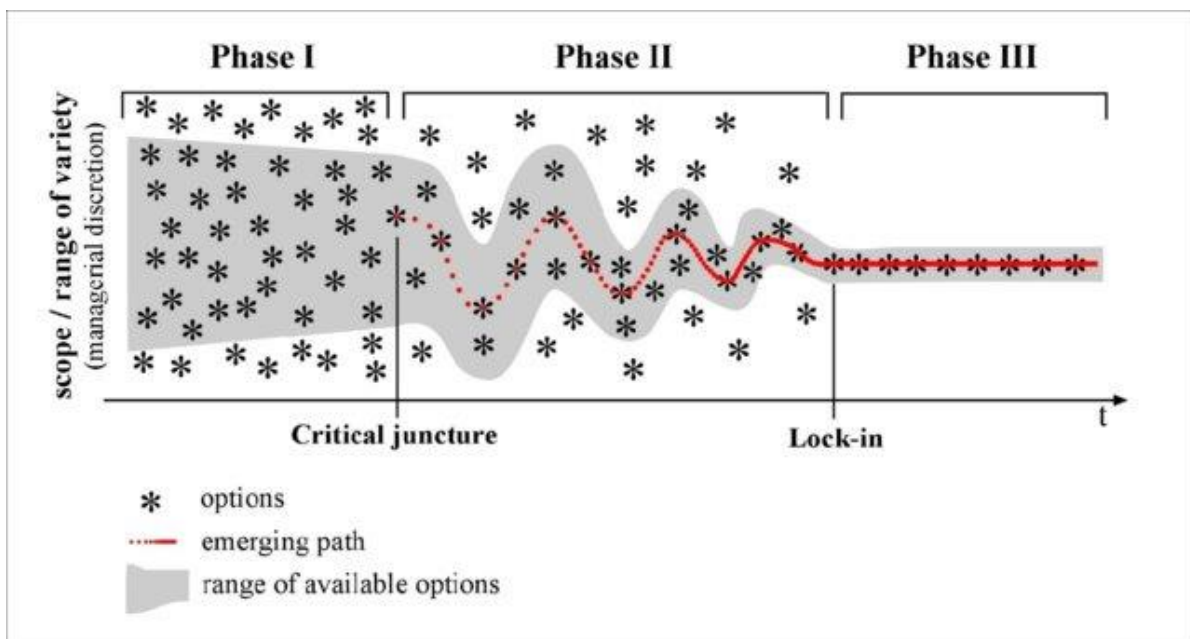
Para una comprensión profunda de los patrones organizativos procedentes del *path dependence* y presentes en los mecanismos causales subyacentes, es necesario abordar el marco dinámico propuesto por Sydow, Schreyögg y Koch para diferenciar las etapas de formación de una rutina y especificar sus propiedades estructurales en la dependencia del camino, siendo esta metodología su aporte principal (2009).

### 1.6.1 Modelo general de la dependencia de la trayectoria

El desarrollo de la teoría de la dependencia de la trayectoria basa su metodología en subdividir el proceso en tres etapas gobernadas por diferentes regímenes causales constituyendo variados escenarios para la interpretación de la acción institucional y la toma de decisiones (Sydow et al., 2009, p.691). Una de las finalidades de este abordaje es aportar a la claridad sobre la comprensión de las condiciones dinámicas bajo las cuales las instituciones se vuelven dependientes del camino. Aquí la noción de temporalidad de acontecimientos asume que: “... los eventos son normalmente `de trayectoria dependiente`, esto es, lo que ha sucedido en un punto previo en el tiempo afectará los posibles resultados de una secuencia de eventos que ocurren en un punto posterior en el tiempo...” (Sewell, 2005, p. 100).

Centra su inquietud en razón a que la historia es de trayectoria dependiente en los procesos políticos, donde un evento que ocurre en etapas previas limita el rango de eventos que son posibles a suceder en etapas posteriores (Tilly, 2006; Trigo, 2015).

**Figura 06 Modelo general de la dependencia de la trayectoria**



Fuente: Elaborado por Sydow, Schreyögg, Koch (2009, p. 692)

El modelo general (Figura 06), ilustra el proceso de la dependencia de la trayectoria en tres fases, con salvedad sobre la probabilidad de diferencias en su funcionamiento, a partir de las condiciones singulares del contexto donde se aplique, según la temática y las dinámicas predominantes. A continuación, se describen los elementos constitutivos y comportamentales de cada una de las fases:

#### a) Fase I.

La fase de preformación se caracteriza por la contingencia e incertidumbre, por un amplio campo de acción donde no existen restricciones para decidir y en la que la “*historia importa*” (North, 1990). Al ser producto de un legado que presenta un espectro amplio de posibles opciones disponibles para el tomador de decisiones, las mismas que no facilitan una predicción sobre la alternativa a implementar (Sydow et al., 2009). En un proceso con características de dependencia de trayectoria la decisión tomada impulsa una diversidad de resultados de muy difícil pronóstico, significa que en principio existirán muchos y variados resultados por lo que la secuencia histórica de las elecciones es decisiva para el resultado final (Wong et al., 2012 p. 180).

Esta primera fase induce un proceso de autoreforzamiento caracterizado por un ámbito de acción restringido con amplias probabilidades de alternativas y decisiones ilimitadas, sin ignorar que la formación seminal de un camino está ligada a las huellas del pasado, siendo los antecedentes determinadores de la preformación. En las instituciones las elecciones y acciones iniciales están integradas en rutinas, prácticas y patrones, que a su vez “*reflejan la herencia, las reglas y la cultura*” esenciales de las organizaciones y sus mecanismos de interacción (March, 1991; Sydow et al., 2009).

Una vez escogida o decidida la alternativa se presenta una tendencia a conformar un rango con lo cual se reducen las opciones. Presenta una propensión a fomentar un comportamiento general, cuando la dificultad de regresar al punto inicial es mayor, debido a la selección de algunas opciones de decisión en el universo de posibilidades (Mahoney, 2000), basándose en la teoría de la complejidad, esta transición se aproxima a una “bifurcación” (Kauffman, 1993; Sydow et al., 2009). La fase de preformación usualmente no inicia desde cero debido a las huellas institucionales preexistentes adquiridas por medio de la experiencia propia o heredada de proximidades, fusiones o emergencias temáticas, en este sentido, la historia no es destino. Impone el diferencial “*entre las influencias e imperativos histórico-institucionales*”, conducen a que la noción de dependencia de la trayectoria no “*se refiere a un estado de determinación desde el principio; arroja luz sobre un proceso de reducción*”, que conduce a un momento de filtro, selección y restricción de opciones (Sydow et al., 2009, p. 692).

El sentido de la teoría de la dependencia de la ruta se encuentra en la elección y alcance de la decisión inicial, la cual concentra los elementos facilitadores conducentes a la comprensión de los procesos de armonización de las opciones y la realidad institucional, allí subyace la historia acumulada, continuidad y supuestos de terminación expresados con el color gris en la figura 06, en el modelo general de la dependencia de la trayectoria (Sydow et al., 2009). El ímpetu desencadenado de la elección inicial “*no es simplemente un evento único*”, es un disparador de estímulos de nuevas acciones acumuladas en la dinámica institucional y determinadores de la dependencia de la trayectoria (Arthur, 1994, p. 14).

Al ser las instituciones sistemas sociales y no mercados o entidades naturales, las elecciones iniciales no son tan aleatorios, inocentes o pequeños (Bassanini & Dosi, 2001), debido a los intereses políticos, económicos y estratégicos concentrados en la decisión. Las motivaciones humanas tienen efectos desencadenantes en su contexto, lo que deriva en una lógica no lineal de la dependencia de la trayectoria, a partir de la independencia de las acciones iniciales bien sean grandes o pequeñas, no pueden considerarse determinantes causales (Sydow et al, 2009).

### **b) Fase II.**

Fase de formación. Surge de un patrón de acción dominante que induce a que la totalidad del proceso genere una tendencia cada vez más irreversible, la gama de opciones se reduce y progresivamente adquiere características de difícil reversión de la elección inicial, permite suponer un camino en evolución. Los procesos de decisión “*siguen siendo contingentes; no son ergódicos (no accidentales), es decir, aún no convergen completamente en una distribución de punto fijo*” (David, 1985; Sydow et al., 2009, p. 691).

La fase de formación se caracteriza por el surgimiento gradual y progresivo de un camino institucional donde se evidencia la estrechez del rango de opciones originados por la tendencia irreversible de la dependencia de la trayectoria en evolución y conformación. La transición de la fase I de preformación a la fase II de formación se inicia con una coyuntura crítica, referida a una situación de cambio basada en discontinuidades o interrupciones de los procesos que tienden a convertirse en momentos fundacionales de nuevas instituciones, estructuras, patrones o rutinas (Collier & Collier, 1991). No necesariamente finalizan con el desarrollo de una dependencia de la trayectoria. El proceso de autoreforzo tiene un papel destacado en la construcción del camino de dependencia (Arthur, 1994), denominado “*rendimientos crecientes*”, comprendidos como los “*beneficios relativos de la actividad actual en comparación con otras opciones posibles que aumentan con el tiempo*” (Pierson, 2017, p.14), de manera afirmativa y gradual, lo que incrementa la retroalimentación positiva.

### **c) Fase III.**

Fase de bloqueo. Se caracteriza por una contracción adicional, por una mayor restricción al alcance que eventualmente conduce a todo el entorno a un bloqueo — es decir, el patrón de decisión dominante se vuelve fijo y adquiere un carácter determinista, circunstancialmente las acciones están completamente ligadas a un camino. Una elección o patrón de acción particular se ha convertido en el modo predominante y ha perdido la flexibilidad siendo el origen del bloqueo u obstrucción de naturaleza cognitiva, relacionado con él mismo. También desarrolla un carácter normativo —con sus propias reglas e instrumentos de regulación— o de recursos de diverso tipo — sociales, económicos, jurídicos e institucionales (Sydow et al., 2009; Sydow, 2020). Incluso los nuevos participantes en este campo de acción no pueden abstenerse de adoptarse y hacer parte de la tendencia establecida y en desarrollo.

Cuando se dispone de alternativas más eficientes los procesos de decisión de los individuos, las organizaciones y las prácticas establecidas continúan reproduciendo este y solo este resultado

en particular. La ocurrencia de un bloqueo hace que un sistema sea potencialmente ineficiente porque pierde su capacidad para adoptar mejores alternativas. En su forma extrema, el patrón dominante adquiere un carácter determinista y los cursos de acción alternativos ya no son factibles por diversas razones: altos costos de cambio, costos irrecuperables, una cultura institucional reconocida e hincada en las acciones de la organización, lo que lleva a la toma de decisiones a replicar la trayectoria de dependencia por la carencia de alternativas reales y eficientes (Sydow et al., 2009; p. 694).

Desde el punto de vista estratégico, la rigidez de una sola trayectoria dependiente conduce a una potencial ineficiencia e induce a la pérdida de rendimientos, establece rutinas fijas con poca capacidad a la adaptabilidad y limita el patrón de atención a condiciones emergentes o imprevistas (Sydow et al., 2009). Reafirma la dificultad de alcanzar tanto la perdurabilidad, la longevidad y la dificultad de adaptarse a las mutaciones del entorno (Lemaire, 1997), si se encuentra asediado en una rutina singular o práctica institucional arraigada.

Se trata de momentos en que los actores relevantes, los tomadores de decisiones tienen la posibilidad de seleccionar distintas trayectorias en tal o cual rumbo dentro de una determinada gama de opciones y, por lo tanto, la sociedad puede evolucionar en diversas direcciones, no obstante, una vez se elige una trayectoria o “*senda de desarrollo*” resulta muy difícil modificar la ruta. Como resultado del efecto inercial que esto conlleva, afecta el costo de modificar el camino y, adicionalmente, reducen los beneficios crecientes que se generan al mantenerse dentro de ese sendero (Thelen, 1999, pp.19-20; Pierson, 2000, p. 251-252).

### **1.6.2 Coyunturas críticas y beneficios o rendimientos crecientes**

El enfoque del nuevo institucionalismo histórico parte de distintas perspectivas para dar respuesta a cuál es el papel de las estructuras o de las instituciones frente a la toma de decisiones políticas. En la mayor parte de los estudios que adoptan este enfoque, junto al concepto del *path dependence*, emergen otros como las coyunturas críticas (critical junctures) y los beneficios crecientes (increasing returns) (Farfán, 2007, p. 105). Se define la coyuntura crítica como una situación en la cual durante un periodo relativamente corto se eleva sustancialmente la probabilidad para que los actores puedan incidir sobre los resultados de sus preferencias, en comparación con la probabilidad que tenían antes y después de la coyuntura (Capoccia & Kelemen, 2007).

Las coyunturas críticas provienen de los factores de creación o surgimiento institucional. El argumento básico se refiere a una situación de cambio basado en discontinuidades o interrupciones de los procesos sociales que tienden a convertirse en momentos fundacionales para explicar los procesos de creación de nuevas instituciones y estructuras políticas (Collier & Collier, 1991, p. 2). Esto significa que los procesos dependientes de la trayectoria son “*estrictamente definidos e involucran una lógica clara*”, consecuente a los resultados en una coyuntura crítica, debido a que “*desatan mecanismos de retroalimentación que refuerzan la recurrencia de un patrón particular en el futuro*” (Pierson & Skocpol, 2008, p. 13).

Los beneficios crecientes (*increasing returns*), rendimientos crecientes o retroalimentación positiva generan dos posiciones; son la fuente de la trayectoria del camino o sólo tipifican una forma de dependencia desde las cuales se desarrollan “*argumentos rigurosos sobre las causas y consecuencias de los rendimientos crecientes*”, centrados en dos elementos claves e imprescindibles. En primer lugar “*señala cómo los costos de cambiar de una alternativa a otra aumentarán notablemente en determinados contextos sociales a lo largo del tiempo*”; en segunda instancia “*centra su atención sobre cuestiones de tiempo y secuencia, distinguiendo los momentos formativos o coyunturas de los periodos que refuerzan trayectorias divergentes*”, integran el tiempo y el momento del suceso como centro del análisis (Pierson, 2017, pp. 12-13).

Los beneficios crecientes contribuyen a evidenciar los momentos de estabilidad y continuidad institucional, siendo

*“...este fenómeno el factor más importante que explica el origen de esa resistencia al cambio institucional o esa tendencia a reforzar las estructuras institucionales ya existentes, como resultado de ciertos beneficios relativos que se generan por el hecho de continuar en un mismo camino y no por uno alterno...”, creando “...una especie de círculo virtuoso entre la ruta que siguen los acontecimientos y los beneficios que implica para los actores acomodarse a esta tendencia, lo que a su vez refuerza la ruta elegida...” (Farfán, 2007, pp.107-108).*

Según Pierson, el concepto de dependencia del camino tiene sus orígenes en la disciplina de la economía, también se denominan rendimientos crecientes. Para algunos teóricos económicos, los rendimientos crecientes son la dependencia del camino (*path dependence*) en sí, para otros, son solo una forma de dependencia del camino. De hecho, los rendimientos crecientes representan el mecanismo que hace posible la dependencia de la trayectoria. Significan que la probabilidad de dar un paso adelante en la misma ruta o en una ruta establecida aumenta cada vez que se avanza en la ruta misma.

Esto se debe a que los beneficios relativos de la actividad actual en comparación con otras opciones posibles aumentan con el tiempo. Los costos de dejar el rastro de alguna alternativa previamente plausible crecen. Por lo tanto, los procesos de rendimientos crecientes también pueden describirse como procesos de auto-reforzamiento o retroalimentación positiva (Pierson, 2000, p. 251).

Los procesos de beneficios crecientes presentan diversas características, según Arthur se sintetizan de la siguiente manera:

*1. Imprevisibilidad. Debido a que los primeros eventos tienen un gran efecto y son en parte aleatorios, muchos resultados pueden ser posibles. No podemos predecir con anticipación cuáles de estos posibles estados finales se alcanzarán.*



2. *Inflexibilidad. Cuanto más avanzados estamos del proceso, más difícil es pasar de una trayectoria a otra. En aplicaciones a la tecnología, un subsidio dado a una técnica particular será más probable que cambie el resultado final si ocurre más temprano que tarde. Un movimiento es suficiente para que una trayectoria concreta pueda bloquear una solución.*

3. *No ergodicidad. Los accidentales primeros eventos en una secuencia no se anulan. No pueden ser tratados (es decir, ignorados) simplemente como “estrepitosos”, porque se retroalimentan en futuras elecciones. Los pequeños eventos son recordados.*

4. *Ineficiencia de la trayectoria potencial. A largo plazo, el resultado que queda bloqueado puede generar pagos inferiores a los que tendría una alternativa perdida (Arthur, 1994, pp. 111-113)*

Los procesos que generan los beneficios crecientes poseen ciertas características particulares: son impredecibles porque al momento en que se presentan las alternativas a seguir (coyuntura crítica) existe la posibilidad de optar por cualquiera de ellas. Son inflexibles, en el sentido que una vez escogida la ruta es cada vez más difícil modificarla; otros eventos accidentales pertenecientes al momento del desenlace no se cancelan, sino que pueden reaparecer en coyunturas críticas futuras. Las consecuencias que resultan de una coyuntura crítica podrían incluso generar menores beneficios, que si se hubiera escogido una alternativa (Thelen, 1999; Pierson, 2000; Pierson, 2004; Farfán, 2007).

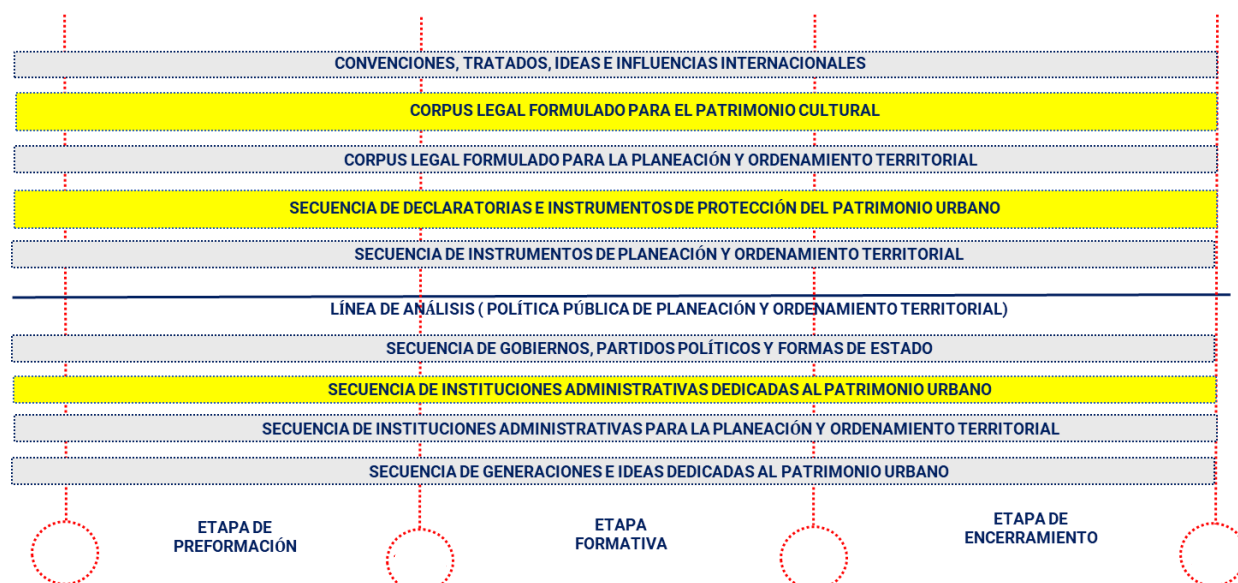
### **1.6.3 Aplicación del modelo general de la dependencia de la trayectoria a las políticas de protección del patrimonio urbano en Colombia (1954-2019).**

La aplicación del Modelo General de la Dependencia de la Trayectoria (MGDT) al objeto de estudio: la política de protección del patrimonio urbano en Colombia se centra en tres objetivos principales:

- a) definir las fases que permiten explicar el *path dependence* en la evolución de las políticas públicas de protección del patrimonio urbano en el marco temporal de los años 1954 y 2019;
- b) reconocer las variables y dimensiones involucradas en la configuración estructural del patrimonio urbano y la política de protección como un hecho político y,
- c) reconocer el encadenamiento de decisiones, secuencias, rutinas y patrones relacionadas en la producción del patrimonio urbano (Melé, 2006) y sus mecanismos de protección.

Si bien, el objetivo principal es la comprensión del origen, evolución y efectos urbanísticos de la política pública de protección del patrimonio, esa comprensión pasa por identificar e interpretar las ideas, discursos e influencias y procesos al interior de la estructura institucional e instrumental conformada para validar, instaurar, gobernar y administrar el patrimonio urbano de Colombia.

**Figura 07 Modelo general de la dependencia de la trayectoria para la línea de análisis de la política pública del patrimonio cultural, la planeación y ordenamiento territorial**



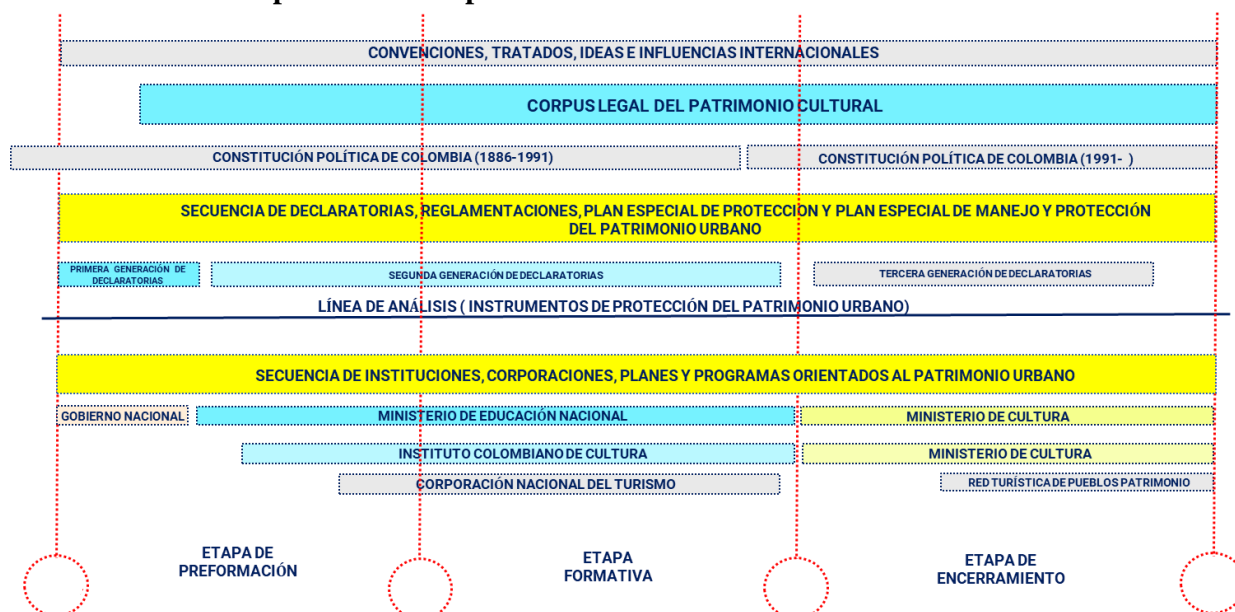
Fuente: Elaboración propia con base al modelo de Sydow, Schreyögg y Koch (2009)

Requiere de manera simultánea identificar los elementos imprescindibles e integrarlos en una interpretación coherente tanto del corpus normativo como los instrumentos de protección. De hecho, las dos líneas de análisis primordial sobre las que se fundamenta la aplicación del MGDТ, son: a) la política pública de protección del patrimonio urbano y el ordenamiento territorial, y, b) los instrumentos de planeación y gestión del patrimonio y el ordenamiento territorial. A cada una de las líneas de análisis le corresponde una escala temporal que facilita la amplitud y conveniencia del enfoque según la temática. En ese sentido, los elementos integrados en la exploración se conectan a la política pública del patrimonio histórico y cultural, la planeación urbana y el ordenamiento territorial. El punto de partida se define por la situación actual de los centros históricos y el corpus de protección en dos ámbitos: a) la legislación que crea el patrimonio urbano como categoría del patrimonio cultural y, b) el encadenamiento del marco legal e instrumental de protección y conservación del patrimonio urbano en el contexto de la planeación urbana y el ordenamiento territorial en el marco temporal de 1954 y 2019.

La aplicación del enfoque del institucionalismo histórico y especialmente del *path dependence* para interpretar el origen, evolución y efectos urbanísticos de la política pública de protección del patrimonio urbano en Colombia, no constituye un cuerpo unificado. Por el contrario, subyacen en él distintas posibilidades para comprender las interacciones de las dimensiones implícitas que no son excluyentes y presentan referencias cruzadas (Thelen, 1999), con la integración de elementos de la teoría deductiva y el análisis contextual propios del institucionalismo. Esto conduce a resultados o visiones variables, totalmente sistemáticas o

asistemáticas en extremo que permiten comprender el contexto institucional en el que ocurren eventos y por qué suceden o pueden llegar a suceder (Sorensen, 2017). La disposición de las temáticas por similitud sugiere un orden de partida sometido a un marco temporal propuesto por condiciones de afinidad, relacionamiento y simultaneidad. Esto refiere a que los hechos vitales de la agrupación ocurren de diversas maneras, pero gobernados por un movimiento sincrónico procedente de motivos comunes con desenlaces afectados por las circunstancias internas y externas del contexto donde surgen. La disposición de los elementos en un modelo facilita la comprensión del encadenamiento secuencial de las decisiones, la vinculación del marco institucional y la definición aproximada de los eventos coyunturales entre el fin e inicio de una fase.

**Figura 08 Modelo general de la dependencia de la trayectoria para la línea de análisis de los instrumentos de protección del patrimonio urbano**



Fuente: Elaboración propia con base al modelo de Sydow, Schreyögg y Koch (2009)

Las diversas dimensiones que generan y contienen las variables de creación, producción, administración y gestión del patrimonio urbano y su política de protección ofrecen variadas alternativas para la aproximación a su lectura, comprensión e interpretación. A partir de la agrupación de elementos comunes útiles para decantar las ideas subyacentes en los posibles periodos resultado de la aplicación del MGD (Sydow et al., 2009). La periodización del itinerario contextual, legal e institucional del patrimonio urbano obedece a formular un mecanismo de identificación de la acción legislativa individual en marcos temporales definidos. Las acciones contenidas en un ciclo de tiempo limitado sugieren la presencia de movimientos hacia beneficios de mayor certeza y eficiencia a través de la variada estructura institucional, instrumentos de regulación e integración de variables externas con incidencia significativa en los resultados de largo plazo (Sorensen, 2017). El reconocimiento preliminar al marco temporal

entre los años 1954 y 2019, obedece a la concentración de la trayectoria vital de la creación y protección de las áreas urbanas históricas en Colombia.

La definición de la temporalidad, fases y secuencias de relación entre las variables seleccionadas contienen un nivel de incertidumbre controlada y que hace parte integral del resultado esperado producto de la aplicación del esquema propuesto, con especial atención a las limitaciones implícitas por la tendencia generada a raíz de las dimensiones identificadas como principales. Se espera de las líneas de análisis que ofrezcan información con potencial para contribuir a la identificación de las singularidades subyacentes y emergentes, a partir de los elementos agrupados en las dimensiones formuladas.

#### **1.6.3.1 Los centros históricos en Colombia desde un enfoque de institucionalismo histórico.**

En algunos países de América Latina, así como en Colombia, la valoración de los monumentos nacionales y bienes de interés cultural ha seguido la evolución de la noción de patrimonio cultural en el ámbito internacional<sup>36</sup> e influencia en la política local y correspondencia e inscripción en los tratados internacionales como las Convenciones de la Unesco (Gutiérrez, 2009). La transformación historiográfica de la segunda mitad del XX en Colombia, deja de reconocer los grandes acontecimientos políticos y héroes para centrarse en la importancia del hombre y su existencia, en los procesos sociales y esencias de la cotidianidad (Molano, 2007).

Se considera desde la Convención de la Unesco de 1954<sup>37</sup> para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, el uso de manera regular de este concepto, conformado por bienes culturales, muebles e inmuebles, monumentos de arquitectura o de historia, campos arqueológicos, obras de arte, libros y edificios cuyo destino sean contenedores de bienes culturales de gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos (Unesco, 1954). Por su carácter integrador el uso frecuente en los diferentes programas, convenciones, recomendaciones y declaraciones de carácter internacional son integradas a las manifestaciones de la Unesco.

El concepto de patrimonio aparece en la legislación nacional, explícitamente en la Ley 163 de 1959:

---

<sup>36</sup> En lo referente al concepto de patrimonio cultural, es determinante la influencia la VII Conferencia Interamericana celebrada en Montevideo en 1933, la Carta de Venecia de 1964, la Carta de Quito de 1967, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 de la Unesco, además de las legislaciones locales que fueron adaptando las múltiples influencias internacionales adaptadas en leyes y normas locales con alcances proporcionales al estado de desarrollo urbano y comprensión propia de su patrimonio nacional.

<sup>37</sup> La Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, celebrada en La Haya en 1954, se realiza como consecuencia de la destrucción del patrimonio cultural durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Se considera un tratado internacional con alcance y convocatoria dedicado a la protección del patrimonio en casos de conflicto armado.

*“Decláranse patrimonio histórico y artístico nacional, los monumentos, tumbas prehispánicas y además objetos, ya sean de naturaleza o de la actividad humana, que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas de la historia o del arte, o para las investigaciones paleontológicas, y que se hayan conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional”<sup>38</sup>.*

Según (Salazar et al, 1989), sobre la definición de patrimonio, menciona que de allí surge un proceso de evolución conceptual que logra un punto relevante en el año 1989, con la definición patrimonio cultural que:

*“Contiene las manifestaciones de diversa índole: el paisaje, sus elementos, su ritmo y equilibrio; lo musical, oral y literario; los bienes muebles, las bellas artes, los utensilios y objetos creados por la mano y la mente del hombre; las costumbres, mitos, ritos y lo lúdico en la sociedad o sus grupos; vestigios arqueológicos, prehistóricos o históricos; y los elementos o espacios construidos por el hombre, surgidos siempre con la doble y simultánea condición de satisfacer una necesidad y expresar unos ideales, elementos que van desde lo arquitectónico hasta lo urbano”* (Salazar, Cortes, Niño, 1989, p. 11)

Lo urbano en esta afirmación se identifica con el concepto de centro histórico, cuya procedencia encuentra diversos orígenes como lo menciona Carrión, en un pasado remoto en las épocas anteriores a la Conquista (1492), sin embargo, la constitución del área se consolida a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se configura el área matriz, pero sin asumir la calidad de centro histórico (2000, p.28). El calificativo de histórico se consolida en un momento cuando la imagen urbana construida fue convertida en símbolo de identidad colectiva, al asumir el patrimonio edificado a manera de ícono y representación del espíritu de una nación (Caraballo, 2000, p.106).

En el desarrollo de este panorama existieron promotores y opositores del cambio. Durante la década de 1950 un grupo de académicos interesados en el tema del patrimonio impulsaron una ley que protegiera el legado nacional. Así se aprobó la Ley 163 de 1959, que sentó sólidas bases para la protección del patrimonio arquitectónico y urbano producido hasta el siglo XIX. (Mincultura, 2005; Escovar & Cárdenas, 2018). Ley vigente en el año 2019. La Ley 163 de 1959 introduce una idea germinal del concepto de patrimonio urbano. En la misma ley se identifican y reconocen como monumento nacional un grupo de poblaciones, delimitadas por su perímetro en la época de la independencia y primer siglo de independencia. La categoría asignada en su primera designación,

*“se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago,*

---

<sup>38</sup> Artículo 1, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

*Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc. Incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII*<sup>39</sup>.

Esta denominación de sector antiguo se realiza bajo el marco conceptual del patrimonio histórico y el monumento nacional. La categorización se ajusta a los principios y el contexto de la época en que la Ley se formula, la cual, carece de conceptos urbanos, sociales, económicos y jerarquías que resalten los valores nacionales, al igual que singularidades regionales y locales (Salazar, Cortés, Niño, 1989, p.27).

Años después de la expedición de la Ley de patrimonio, el concepto de centro histórico emerge motivado en que “... los lugares monumentales deben ser objeto de atenciones especiales a fin de salvaguardar su saneamiento, su tratamiento y su realce...”<sup>40</sup>, como lo indica la Carta de Venecia de 1964, sin embargo, la Carta de Quito de 1977, define

*“... como Centros Históricos a todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo. Como tales se comprenden tanto asentamientos que se mantiene íntegros, desde aldeas a ciudades, como aquellos que, a causa de su crecimiento, constituyen hoy parte o partes de una estructura mayor...”*, (Carta de Quito, 1977).

Se identifica usualmente al centro histórico como el sector fundacional segregado del resto de la ciudad, al cual, “...y por sí mismos y por el acervo monumental que contienen, representan no solamente un incuestionable valor cultural sino también económico y social...”, siendo las áreas históricas “...no sólo patrimonio cultural de la humanidad, sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que los habitan...”<sup>41</sup>. La apropiación social de las comunidades residentes y usuarias de las zonas históricas son catalogadas parte integral de la vitalidad, la conservación y protección implícita en la conexión con el sector antiguo. La declaratoria de sectores antiguos por parte de la Ley de patrimonio, requiere una estructura administrativa delegada al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), creado por la misma acción jurídica.

El centro histórico se debate entre dos dilemas: uno funcional y otro legal. El centro histórico no es un principio y fin en sí mismo, por el contrario, solo existe si cuenta con un reconocimiento jurídico que le confiere esta categoría (Melé, 2006), adicionalmente cuenta con

---

<sup>39</sup> Parágrafo 2, artículo 4, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

<sup>40</sup> Artículo 14, Lugares Monumentales (Conjuntos histórico -artísticos). Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia 1964). II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia 1964. Adoptado por ICOMOS en 1965.

<sup>41</sup> Inciso 1 Definición de centros históricos, Conclusiones del Coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas. Unesco-PNUD (1977).

reglamentación singular y una atención diferencial que el resto de la ciudad (Álvarez, 2006). A partir de los conceptos jurídicos impuestos mediante *“la política patrimonial, fundamentalmente, la que permite la identificación de un subespacio urbano central designado como “centro histórico” y que corresponde en numerosas ciudades a la extensión de la ciudad a fines del siglo XIX o principios del XX”* (Melé, 2006; p.11). El centro histórico no se puede concebir sin una política pública de respaldo, a pesar de que sus valores testimoniales, artísticos, sociales, arquitectónicos y urbanos pueden ser suficientes para gozar de reconocimiento, conductas de consideración, dinamización propia de su prestigio e importancia en el desarrollo y consolidación de la ciudad (Gutiérrez, 1992; Álvarez, 1995).

La declaratoria de un espacio como centro histórico es de reciente data, surgió con el desarrollo de las teorías urbanas de zonificación propuestas por la modernidad, no sin grandes conflictos teóricos (Caraballo, 2000, p.106). El centro histórico amplía su significado a nuevas posibilidades culturales: *“es documento y testimonio de la historia urbana, de las formas de vida y de los estilos arquitectónicos, pero es, además, el lugar principal de la ciudad de hoy y de su cultura”* (Salazar et al., 1989, p.42). El concepto de centro histórico se asocia a las categorías de espacio, función y tiempo, ligados a su carácter histórico temporal vinculado a su vez a la condición de patrimonio cultural. En el siglo XIX se realizan los primeros estudios del urbanismo histórico en Europa, no con la intención de la protección urbanística de áreas antiguas sino con el fin de establecer una organización para solucionar los problemas surgidos del crecimiento acelerado de las ciudades ocasionado por la revolución industrial. Entre 1830 y 1859 *“nace la urbanística moderna, con la promulgación de las primeras leyes sanitarias. Es el momento de los primeros planes urbanos, sin dar demasiada importancia a los valores históricos consolidados”*. (Chateloin, 2008, p. 3; Mejía, 2013). En esta lógica, es contradictoria la declaración, que

*“el todo de la ciudad y todas las ciudades son históricas, si esta afirmación es correcta, se debe cuestionar respecto de las cuáles son los atributos de la centralidad que segregan una parte de la urbe para considerarla centro histórico”* (Carrión; 2010, p. 28).

La realidad urbana del centro histórico se ha consolidado a fuerza de la cotidianidad, compuesta por la tradición y sus dinámicas. Los movimientos de población en busca de servicios, interacciones sociales, desplazamientos humanos sobre el territorio crean *“la centralidad histórica y urbana, como sus periferias están en permanente movimiento y desplazamiento”*, lo que en algún momento fue centro histórico, en otro puede ser su periferia, o viceversa (Carrión, 2000, p. 15).

El centro histórico se constituye como la categoría mayor del patrimonio cultural, el cual contiene todas las manifestaciones derivadas de este concepto, que hasta el año 1991, con la promulgación de la Constitución Política<sup>42</sup>, logra inferir una definición de patrimonio cultural,

---

<sup>42</sup> *“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables,*

en el cual, se reconoce el patrimonio urbano, parte integral de las manifestaciones humanas y sociales.

El término de patrimonio urbano es atribuido a Gustavo Giovannoni (1873-1943) asignándole sentido y valor, en tanto “*elemento y parte de una doctrina original de urbanización*” y no como un objeto autónomo con disciplina propia (Choay, 1992, p. 175). Les otorga a los conjuntos urbanos antiguos un valor de uso y un valor museal, integrados en una concepción general de la ordenación territorial. Al considerarse el patrimonio urbano bien cultural, sobresalen no solo las características generales de las ciudades, sino los hechos urbanos que han sobrevivido a la homogeneización a la cual los sometió el urbanismo moderno. La cultura urbanística contemporánea ha subrayado la necesidad de analizar y valorar cada hecho singular de la historia urbana, haciendo énfasis en las permanencias físicas -los monumentos- de ámbito urbano “*entendidas como clave de la cultura del pasado, del presente y del futuro de la ciudad*” (Salazar, 1994, p17).

El patrimonio urbano asumido en una categoría que carece de una definición normativa que integre o excluya componentes, resalte precisiones sobre lo que hace parte o se excluye, sin embargo, la definición de patrimonio cultural de la Ley de Cultura, lo menciona:

*“El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”*<sup>43</sup>.

La diversidad de categorías que integran el patrimonio urbano en Colombia está constituida por diversas denominaciones: sector antiguo, casco urbano, sector de interés, plaza y marco principal, conjunto de inmuebles de arquitectura republicana, centro y conjunto histórico, sector fundacional, conjunto urbano, centro poblado y centro histórico. Agrupados desde el reconocimiento procedente en las declaratorias de monumento nacional o bien de interés cultural.

---

*inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”,* tomado del Capítulo 2 “De los derechos sociales, económicos y culturales”, Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

<sup>43</sup> Artículo 4. Integración del patrimonio cultural de la nación, Título II. Patrimonio cultural de la nación, Ley 397 de 1997 (agosto 7).



El Decreto 1080 de 2015 en su capítulo II Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) define las categorías de bienes inmuebles, menciona en su artículo 2.4.1.2.1:

*Del Grupo Urbano:*

*Sector urbano: fracción del territorio dotada de fisonomía, características y rasgos distintivos que le confieren cierta unidad y particularidad. La declaratoria como sector urbano contiene a todos los predios del sector del que forman parte y su espacio público; por lo tanto, son objeto del régimen especial de protección por la declaratoria del conjunto, en este grupo se encuentran los Centros Históricos y otras fracciones del territorio.*

*Espacio público: conjunto de bienes de uso público, y de elementos de los inmuebles privados destinados, por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.*

Esta categoría, del grupo urbano se ratifica en la modificación y adición del Decreto 1080 de 2015, por medio del Decreto 2358 de 2019 -Único Reglamentario del Sector Cultura-, en lo relacionado con el patrimonio cultural material e inmaterial. El patrimonio ha surgido como un punto de arranque político relevante, aunque su impacto en la planeación de la ciudad y el desarrollo urbano sigue presentando un reconocimiento desigual, sin embargo, en algunos países, la protección del patrimonio ha alcanzado un estado constitucional, como en el caso colombiano.

En síntesis, el patrimonio urbano del ámbito nacional, está conformado por los municipios que gozan de declaratoria de Bien de Interés Cultural, en ese sentido 45 centros históricos<sup>44</sup> son el corpus que se comprende, acepta y define en esta categoría del patrimonio cultural en Colombia. De esta forma, el patrimonio cultural por su potencial para formar identidad, puede ser una herramienta valiosa para generar cohesión social en sociedades disgregadas y poco equitativas como la nuestra. También se considera en esta categoría las áreas urbanas y conjuntos arquitectónicos “con valores de homogeneidad y autenticidad”, a los cuales se suman los pequeños poblados de interés patrimonial regional, sin valoración técnica, ni protección de las autoridades, “los barrios delimitados dentro de las ciudades y protegidos por las normas de conservación urbanística, ambiental y arquitectónica de tipo municipal” (Isaza, 1999, p.91).

Se considera dentro de sus atributos ser promotor de nuevas fusiones sociales, productivas y políticas, puede generar movilidad social, cuando logra incluir a comunidades tradicionalmente marginadas, dándoles otro papel en las relaciones de poder, incluso ante diferencias ideológicas, el patrimonio puede generar dinámicas de equidad, afinidad, re-significación y nuevas formas de apropiación del territorio, que promuevan la participación y el ejercicio de la

---

<sup>44</sup> En el Anexo IV (página 513 y ss.), se encuentra una caracterización general de los 45 centros históricos declarados y reconocidos como patrimonio urbano.

ciudadanía (Ministerio de Cultura 2013; Hernández, 2021), en el propósito más noble del patrimonio y exigencia de la sociedad que busca un mecanismo para transformar su realidad.

Junto a la categoría de sector antiguo, crea una categoría adicional a la de “*sector antiguo*”- centro histórico-, como Monumento Nacional para aquellos lugares cuyo patrimonio es valioso, pero no amerita la categoría mayor, la cual se denomina “*inscripción como parte del patrimonio histórico-artístico de la Nación*”, en esta categoría se inscriben los municipios de Turmequé<sup>45</sup>, Almaguer, Calarcá y el barrio La Cruces en Bogotá (Salazar et al., 1989, p.27). Las categorías urbanas encuentran de esta forma dos dimensiones y escalas, una mayor, el centro histórico y una menor inscrita parte del patrimonio histórico, con una claridad difusa en cuanto a la composición y reglas para la valoración de la arquitectura y el urbanismo en ambos casos.

José Salazar sugiere tres fases<sup>46</sup> en los programas de conservación de los centros históricos: la primera desde el año 1900 a 1950. Se caracteriza por acciones aisladas en la producción legislativa e investigaciones individuales de historiadores y arquitectos orientadas al estudio de monumentos singulares. En la segunda fase -1950 a 1980-, la Ley 163 de 1959, denominada como “*Ley de patrimonio*” da origen a un periodo que finaliza en la década de los años ochenta del siglo pasado. Una tercera fase se enmarca en las políticas de los años 90, con ocasión de la promulgación de la Constitución Política de Colombia en el año 1991 (Salazar, 1994).

Cuatro momentos referenciales hacen parte de la aproximación propuesta por Salazar: un primer momento de partida es la Ley 48 de 1918, “*sobre fomento de las Bellas Artes*” con la creación de la Dirección Nacional de Bellas de Artes adjunta al Ministerio de Instrucción Pública. Declara patrimonio histórico nacional una serie de edificaciones y monumentos públicos, fortalezas, cuadros, esculturas, ornamentos del periodo colonial, monumentos precolombinos, también prohíbe la destrucción, reparación, ornamentación y destinación sin previo aviso del mencionado ministerio (Salazar, Cortés Niño, 1989, p. 17). Coincide con la singularidad de las declaratorias y la diversidad de muebles e inmuebles catalogados patrimonio.

---

<sup>45</sup> El municipio de Turmequé se localiza en el departamento de Boyacá, tiene una población de 6182 habitantes. Por su parte Almaguer se ubica en el departamento del Cauca, población 21374 habitantes. Calarcá se ubica en el departamento del Quindío, población 74890 habitantes. Y finalmente el barrio las cruces se ubica al sur de la plaza de Bolívar de Bogotá, es considerada el barrio más lejano de la naciente ciudad en el siglo XVII. (Dane, 2020).

<sup>46</sup> José Salazar Ferro realiza la propuesta de las tres etapas, en un artículo que hace parte de la ponencia denominada “*Los programas de conservación de los centros históricos en Colombia. Una visión retrospectiva*”. Formulada para el “*Seminario taller: Rehabilitación integral en áreas o sitios históricos Latinoamericanos*” celebrado en Quito-Ecuador entre el 10 y 14 de enero de 1994, para la época Salazar era asesor de la Subdirección de Patrimonio de Colcultura. El artículo en mención se publica como parte de las memorias del seminario-taller auspiciado por Unesco y la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe (ORLAC).

Un segundo momento se consolida con la entrada en vigencia de la Ley 5 de 1940, “*sobre monumentos nacionales y realización de algunas obras en la ciudad de Cartagena*” y la Ley 107 de 1946, “*por la cual se reforman varios artículos de la ley 5ª de 1940, sobre monumentos nacionales y realización de algunas obras en la ciudad de Cartagena*”, con la declaratoria de utilidad pública de las edificaciones significativas de la ciudad que merecen ser conservados como patrimonio nacional (Salazar, Cortés Niño, 1989, p. 18). Estas iniciativas jurídicas se constituyen en antecedentes que reafirman la visión individual de las edificaciones patrimoniales, sin contemplar su contexto urbano o geográfico.

Un tercer momento se caracteriza por la expedición de la Ley 163 de 1959, “*por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación*”, reconocimiento a los primeros conjuntos urbanos declarados monumento nacional. Por esta razón, se considera origen jurídico del patrimonio urbano. Un cuarto momento se inicia en el año 1968 con la creación del Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) y culmina con la publicación de la “*Política Cultural para los Centros históricos y el patrimonio inmueble*” en 1989 donde se esbozan los lineamientos de lo que será 8 años después la Ley General de Cultura.

**Figura 09 Centro histórico del municipio de Valledupar (Cesar)**



Fuente: Imagen tomada de El Pílon.

## 1.7 Principales fuentes empleadas

### 1.7.1 Corpus jurídico: de la declaratoria de Villa de Leyva en 1954 al Decreto único reglamentario del sector cultura (Decreto 2358 de 2019)

Es frecuente el abordaje de la política pública de protección del patrimonio urbano de manera selectiva, centrada en instrumentos específicos o periodos no delimitados. Autores como Salazar et al., (1989) realizaron compendios parciales en el momento de introducir nuevas disposiciones del orden jurídico o simplemente para disponer la trayectoria del orden legal, en la regulación de la cultura en el tránsito del patrimonio histórico al patrimonio cultural.

El corpus jurídico aplicado a los centros históricos declarados monumento nacional se compone de diversos elementos propios de la formulación y administración de la política pública procedente de las ideas nacionalistas en boga en América Latina al cumplirse el primer centenario de la independencia y la vida republicana (Centeno, 2014; Melo, 2020). Al tratarse de sectores urbanos antiguos, se ven afectados, por un lado, por el marco legal suscrito para la planeación urbana y el ordenamiento territorial, también por los lineamientos sobre el patrimonio cultural (Morcillo, 2009). Pero, aunque el corpus jurídico está compuesto por leyes, decretos, declaratorias y reglamentaciones promovidas desde el ejecutivo por parte del Estado colombiano, sus influencias proceden en muchos casos de tratados, cartas y acuerdos internacionales suscritos por Colombia por adhesión o por reconocimiento.

*La constitución de territorios geopolíticos denominados naciones, con la creación, significación y elección de objetos de carácter artístico, monumentos, ruinas arqueológicas y de expresiones consolidadas por la tradición, dando respuesta a la necesidad de conformar un corpus referencial que identificara mediante el sentido de pertenencia, una estructura fundante de la historia y la localización geográfica que predomina hasta la formulación y consolidación de una política pública que la oriente. (Mincultura, 2005, p.11).*

El Estado como institución referencial, se constituye en una institución privilegiada para la realización de la regulación donde los actores sociales cuentan con una importante cantidad de habilidades, las cuales les permiten adelantar negociaciones y alcanzar acuerdos (Thelen, 2004, p. 5). En el proceso de unificación del Estado moderno, la cultura adquiere “una función de cohesión política”, vinculada con el poder político que se legitima mutuamente al formar e integrarse a la cultura nacional (Álvarez, 1993). Los ideales modernos del Estado naciente se reencarnaron en los objetos seleccionados, construidos en señal de conmemoración, a algunas se les otorgo esta categoría por su especial significado en la manera de hacer historia y representar una secuencia legible de ideas y valores estables largamente madurados (Mincultura, 2005, p.11). Estos integran un camino de dependencia en su construcción más simple, aunque no es evidente se intuye la asociación referencial a factores históricos y variaciones sociopolíticas, cuya influencia es determinante en la selección de los objetos de representación en el marco del patrimonio cultural.

### 1.7.2 Otras fuentes importantes

Otras fuentes primarias de la investigación, más allá del marco jurídico aprobado para el patrimonio urbano y el ordenamiento territorial, son textos académicos, prensa (periódicos y magazines) y, especialmente importante, el material del archivo muerto del extinto Colcultura, que reposa en el actual centro de documentación del Ministerio de Cultura. Este archivo se compone de planos urbanos, estudios, fotografías y documentos desarrollados por el Instituto entre 1968 y 1997, año en que es sustituido por el nuevo ministerio. Para el desarrollo de la investigación, se han identificado y examinado el siguiente acervo de información: la literatura y los estudios especializados del patrimonio histórico, cultural y urbano, las políticas públicas urbanas desde 1954 al año 2019.

En su necesidad de aproximarse a la conceptualización del centro histórico y su asociación con la ciudad como perspectiva espacial de análisis, los procesos socioeconómicos, culturales y políticos de las áreas patrimoniales, la planeación urbana, la delimitación de las áreas históricas y el patrimonio urbano y arquitectónico, la tesis ha recurrido a documentación de naturaleza muy diversas:

- a. Los distintos instrumentos normativos y de política pública urbana del orden nacional, en el caso particular, los elaborados para los centros históricos, declaratorias, reglamentaciones urbanas, directrices de ordenamiento territorial desde el año 1954 hasta al año 2019. Cabe destacar que en este punto se revisan los antecedentes de la política pública urbana y del ordenamiento territorial.
- b. Se analizan trabajos, documentos y propuestas oficiales compuestas por códigos de urbanismo, desarrollo e instrumentos del ámbito municipal, distrital y nacional de las administraciones del periodo de estudio. Se abordan los informes de gestión de las entidades administradoras del patrimonio arquitectónico y urbano. Se revisan los planes de ordenamiento e iniciativas previas de planes urbanos de la política pública centro histórico y el ordenamiento físico de la ciudad. De la misma manera, se examina la política planteada en el Plan Decenal de Cultura, y la propuesta por los gobiernos en el periodo de estudio 1954 al año 2019.
- c. Adicionalmente, y siendo parte de la información secundaria, se revisan convenios a nivel internacional asumidos por el Estado como parte de la política pública urbana y cultural; otros estudios e investigaciones de carácter académico o realizados por diversos actores, como Colcultura, el fondo de protección del patrimonio cultural e instituciones que han abordado las principales problemáticas de los centros históricos. Esta información permite analizar la continuidad de las políticas públicas urbanas que inciden en la salvaguarda y transformación de los centros históricos declarados, así como la claridad y convergencia de políticas e importancia concedida al sector histórico, en el mismo periodo de tiempo.
- d. Para comprender la articulación de las políticas públicas urbanas, se revisan documentos sobre la estructura institucional nacional, regional y municipal, la



metodología en que se formula y gestiona los instrumentos de ordenamiento y manejo que involucran las áreas patrimoniales, también los responsables, competencias y capacidades para hacer frente a los desafíos que tiene el centro histórico en el transcurso de tiempo del año 1954 a 2019.

- e. Se examinan documentos oficiales procedentes de las siguientes entidades: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), para obtener una mayor precisión sobre las características físicas, socioeconómicas, demográficas, ambientales y políticas de los centros históricos declarados, para realizar una visión panorámica y empírica del estado de las delimitaciones de las áreas patrimoniales y su vinculación con el desarrollo urbano del municipio. Así mismo, se utilizan estadísticas oficiales de los diferentes departamentos del orden nacional, departamental y municipal, monografías y textos institucionales sobre la caracterización de los municipios con sector antiguo declarado.
- f. Se revisan además los distintos procesos y proyectos de transformación urbana de incidencia en algunos centros históricos, en particular los de renovación urbana, las decisiones que los promovieron, el marco de la gestión de la política y un balance sobre los principales resultados.

**Figura 10 Centro histórico del municipio de Santa Cruz de Lorica (Córdoba)**



Fuente: Imagen tomada de La Razón

## 1.8 Estructura del documento

El documento está conformado por seis capítulos: un capítulo de introducción, un capítulo por cada una de las fases del modelo general de la dependencia de la trayectoria: preformación, formación y bloqueo (es decir, el capítulo dos, tres y cuatro respectivamente). El capítulo cinco propone alternativas de lectura e interpretación global con enfoque histórico-institucional de la protección del patrimonio urbano. Finalmente, el capítulo seis contiene las conclusiones generales.

La temática de los capítulos dos, tres y cuatro se asocia de forma orientativa a periodos de tiempo específicos entre los años 1954 y 2019, pero esto no quiere decir que el contenido de cada capítulo esté estrictamente contenido dentro del lapso asignado.

Esa flexibilidad temporal permite comprender y esbozar el tema de estudio desde la versatilidad del institucionalismo histórico aplicado a las políticas de protección del patrimonio urbano. En la organización de la presentación de los resultados de investigación, no se ha priorizado el marco temporal apuntado para cada capítulo, que cada uno de ellos gira principalmente en torno a un instrumento de las políticas públicas de protección del patrimonio que surge y se consolida en el periodo indicado, y que protagoniza cada una de las fases del MGD, pero que puede tener un periodo de vigencia y aplicación mucho más allá del lapso nominal de cada capítulo.

Tras el capítulo I de la introducción denominado “*Las políticas de protección del patrimonio urbano en Colombia (1954-2019) como objeto de investigación: problema, objetivos, métodos y fuentes*”, el primer capítulo II se denomina “*Origen del patrimonio urbano Colombiano (1954-1980). Primeras creaciones institucionales: nacimiento y desarrollo de Colcultura (1968-1997) y de las declaratorias (1954-2018)*”, trata los antecedentes de la política cultural en Colombia y la relación con la patrimonialización de áreas urbanas. La política de protección del patrimonio urbano, las declaratorias que hacen parte central y estructural de las temáticas abordadas. Se abordan las instituciones de la cultura - el Consejo de Monumentos Nacionales, el Instituto Colombiano de Cultura y la Corporación Nacional del Turismo- en su conformación, temporalidad y logros. La finalidad del capítulo II es evidenciar las instituciones precursoras del patrimonio urbano y la política de protección bajo la idea de la defensa del patrimonio histórico.

El Capítulo III, “*La fecundidad de las ideas e influencias en el progreso de la acción pública sobre el patrimonio urbano (1980-1997): las reglamentaciones*”, se ocupa de cuatro aspectos principales: a) la reglamentación y el código de urbanismo un diálogo inconcluso: avances y frustraciones en la concepción de la protección patrimonial; b) Del Decreto 2233 de 1980 a la Ley 388 y 397 de 1997: aproximación a la política cultural desde la División de Centros Históricos y Monumentos y la Fundación para la Conservación y restauración del patrimonio cultural colombiano; c) los manuales de reglamentación de sectores urbanos antiguos y el manual de poblados de interés patrimonial; d) El proyecto regional patrimonio cultural, urbano

ambiental para América Latina y el Caribe. El capítulo III expone las alternativas de expansión de la dependencia de la trayectoria en su fase de formación: (1980-1997).

La última fase es el bloqueo del MGDТ, planteada en el Capítulo IV “Camino a la madurez de las políticas de protección del patrimonio urbano (1997-2019): Instrumentos, gestión y efectos”. Se especializa en 4 aspectos: a) la legislación desde la Ley de Cultura y desarrollo urbano de 1997 hasta el último Decreto del patrimonio cultural en el año 2019. Se analizan las instituciones y programas: el Ministerio de Cultura, el plan nacional de recuperación de centros históricos y la red turística de pueblos patrimonio. b) La gestión, el manejo, contenido y estructuras del PEP y el PEMP son valoradas desde la perspectiva del proyecto para el patrimonio urbano. c) Las compensaciones por tratamiento de conservación y transferencia de derechos en el marco tributario derivado de la declaratoria y; d) El patrimonio urbano en el ordenamiento territorial establece las determinantes, componentes, proceso y normas urbanísticas. Busca establecer la armonización y reconocimiento de la protección del patrimonio urbano en el ordenamiento territorial.

Como resultado de la identificación de la dependencia de la trayectoria mediante el MGDТ, el capítulo V pretende observar tres aspectos: las coyunturas críticas y secuencias dinámicas del PEMP; el encadenamiento de los instrumentos de protección del patrimonio urbano y la singularidad de algunos efectos urbanísticos desde casos de estudio. Del primer aspecto son valoradas desde la propuesta integral del PEMP, del segundo aspecto se determinan 4 secuencias de encadenamiento de los instrumentos de protección de los centros históricos. Finalmente, en el tercer aspecto se orienta a la interpretación de los efectos urbanísticos desde la singularidad de casos de estudio: a) la creación de un estilo: Villa de Leyva y Barichara; b) El Socorro la reglamentación que no fue; c) El paisaje cultural cafetero y su conexión con los centros históricos. El capítulo V se denomina “De coyunturas críticas a secuencias dinámicas: alternativas de lectura e interpretación de las políticas del patrimonio urbano en Colombia con enfoque histórico-institucional”.

Finalmente, el capítulo VI contiene las conclusiones generales, respuestas sintéticas a las preguntas de investigación y una reflexión sobre los retos de futuro en la investigación sobre patrimonio urbano en Colombia y sus políticas.



**Figura 11 Centro histórico del municipio de Guadalajara de Buga (Valle)**



Fuente: Imagen tomada de Wikipedia



## **CAPÍTULO II<sup>47</sup>**

### **ORIGEN DEL PATRIMONIO URBANO COLOMBIANO (1954-1980). PRIMERAS CREACIONES INSTITUCIONALES: NACIMIENTO Y DESARROLLO DE COLCULTURA (1968-1997) Y DE LAS DECLARATORIAS (1954-2018)**

#### **Introducción**

El capítulo II tiene tres objetivos principales:

- a) Establecer una aproximación al origen de la protección del patrimonio urbano en Colombia y aportar los elementos fundamentales que permiten argumentar que, en el periodo 1954-1980, se encuentra la procedencia y bases de la dependencia de la trayectoria. A pesar de que ambas ideas se sustentan en la noción de patrimonio histórico, artístico y monumentos de la nación de la Ley 163 de 1959, corresponden a dos nociones y concepciones sobre el sector fundacional de la ciudad.
- b) Evidenciar la importancia, alcance, desarrollo y aportes de algunas creaciones institucionales de este periodo en el campo del patrimonio urbano y su protección, más allá del lapso temporal de este periodo inicial. En particular, se analizan las declaratorias y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), creados por la Ley 163 de 1959. Desde 1997 denominado Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC)-; también se aborda el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) sobre las tendencias persistentes, algunas rutinas y patrones fundamentales en la configuración de la dependencia de la trayectoria.
- c) Argumentar y aportar dentro del marco interpretativo de la dependencia de la trayectoria, el carácter de la fase preformativa (1954-1980), los elementos fundamentales según el Modelo General de la Dependencia de la Trayectoria (MGDT).

Aunque la primera definición jurídica de patrimonio histórico, artístico y monumentos de la Nación colombiana se debe a la Ley 163 de 1959, el margen temporal definido inicia antes, en el año 1954, con la declaratoria como “Monumento nacional” del conjunto urbano del municipio de Villa de Leyva. Esta declaratoria en cierto modo extemporánea y pionera – en el sentido a que es anterior a la existencia de un marco jurídico específico – puede comprenderse sintomática de tres aspectos del objetivo investigado, que se irán develando a lo largo del capítulo:

---

<sup>47</sup> Los resultados parciales de la investigación fueron publicados en Fonseca Roa, O. Y. (2023). Variables, secuencias y rutinas en los instrumentos de protección del patrimonio urbano en Colombia, a partir de la aplicación del modelo de la dependencia de la trayectoria (MDT). *urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 15, e20220078. Disponible en <https://doi.org/10.1590/2175-3369.015.e20220078>

- a) El reconocimiento del valor patrimonial de los sectores antiguos se ha centrado desde un principio de forma preferente en los conjuntos o fracciones de carácter colonial de los municipios y ciudades colombianas con un papel preponderante o definitorio en hechos históricos relacionados con la independencia.
- b) La declaratoria se constituye desde el primer momento como mecanismo fundamental en la definición y protección jurídica de los sectores antiguos hasta la conformación de la política pública del patrimonio urbano como categoría del patrimonio cultural.
- c) A pesar de la permanencia hasta nuestros días de algunas creaciones institucionales – declaratorias, CMN- la acción pública en materia de patrimonio urbano en su primera etapa describe una trayectoria con muchas discontinuidades. Esto genera una figura más próxima a un zigzag debido a su composición por capas de hechos y fenómenos relacionados con el objeto de estudio: el patrimonio urbano y la política de protección.

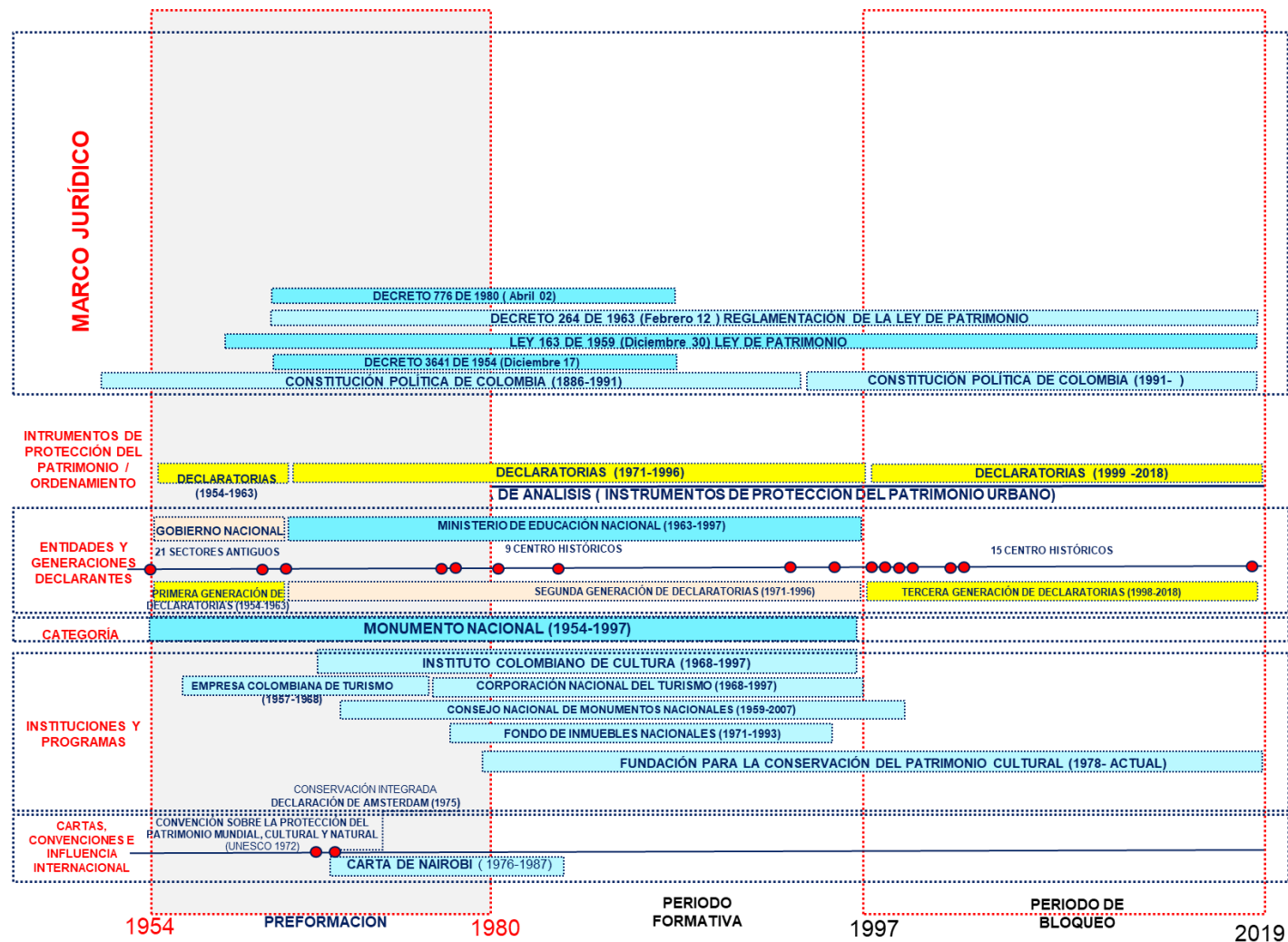
El año 1980 se propone como límite cronológico de la fase preformativa analizada en este capítulo, cuyo momento referencial es la declaratoria del sector antiguo del municipio de Ambalema, en la que, por primera vez, en materia de patrimonio urbano se utiliza la denominación de centro histórico. La aceptación y apropiación de los términos procedentes de las cartas internacionales desencadenan cambios estructurales y persistentes en la concepción de la acción pública en materia de patrimonio urbano. Esto pone en evidencia que la influencia conceptual será importante en el tránsito entre el ámbito nacional colombiano y algunas esferas políticas y académicas internacionales. Son especialmente interesantes los encuentros convocados por instituciones multilaterales en las primeras décadas del siglo XX en América Latina para tratar y acordar lineamientos sobre retos comunes en sus respectivos países, de donde surge un interés singular en el patrimonio inmueble que involucra también, aunque con rasgos propios, a los gobiernos.

En el ámbito nacional, el análisis se centrará en la acción pública de protección del patrimonio urbano y pondrá especial énfasis en el estudio de las declaratorias, sus orígenes y su evolución, pero también en las funciones y desempeño de dos organismos colombianos creados en el periodo de estudio y que serán muy importantes en el sistema de protección del patrimonio en general y, del patrimonio urbano en particular: el CNM y Colcultura. La hipótesis fundamental que se defenderá aquí es que este periodo puede identificarse con una fase preformativa de las políticas de patrimonio urbano en Colombia, en la que se esbozan las tendencias persistentes y el encadenamiento de los primeros instrumentos normativos y acciones de carácter político, técnico e introductoria de la academia que pondrán las condiciones en el periodo posterior – formativo- del patrimonio urbano y la política de protección.

El capítulo está dispuesto para tratar las siguientes temáticas. La sección 2.1 aborda la política cultural en Colombia y su relación con el patrimonio urbano en dos aspectos: la institucionalización de la cultura y, la legislación precursora del patrimonio histórico, artístico y

monumentos públicos. El apartado 2.2 centra su interés en la política de protección, objeto de estudio desde la perspectiva del urbanismo y la tradición de la planeación de la ciudad en Colombia. El apartado 2.3 está dedicado al análisis del marco legal relacionado con la institucionalización de la cultura y su posición en los planes de gobierno entre el año 1968 y 1997, momento del surgimiento del Ministerio de Cultura. El apartado 2.4, se estudian las declaratorias y su papel en la construcción jurídica del patrimonio urbano, instrumento introductorio de esta categoría del patrimonio histórico. Por su parte, en el apartado 2.5 se catalogan las declaratorias en tres generaciones con el fin de establecer periodos de estudio a partir de la conformación del corpus urbano entre la primera (Villa del Leyva-1954) y última declaratoria (Jericó-2018) de centros históricos BIC del ámbito nacional. El periodo sin declaratorias, entre los años 2006 y 2017, mediante la identificación de las razones de este fenómeno. Finalmente, en el apartado 2.7 se generan conclusiones parciales sobre la transformación del monumento nacional al BIC, ratifica la presencia de dos ideas en la concepción del patrimonio urbano.

Figura 2.00 Síntesis gráfica del capítulo II



Fuente: Elaboración propia

## 2.1 La política cultural en Colombia y su relación con el patrimonio urbano

La protección del patrimonio se inscribe dentro de las políticas culturales. Es necesario advertir previo al análisis de las instituciones dedicadas a la defensa, conservación y salvaguarda del patrimonio en Colombia y su evolución, es conveniente esbozar los rasgos básicos de las recientes políticas culturales, pero sujetas a profundos cambios a lo largo de corta su existencia. La aproximación a la política cultural en Colombia es una síntesis producto de eventos jurídicos e investigaciones precedentes. Se estructura sobre un eje cronológico y responde al objetivo de trazar rasgos en el panorama dinámico de las políticas culturales, en las que se encuentra la protección del patrimonio, más específicamente, del patrimonio urbano en Colombia.

Las políticas culturales son recientes en el panorama de las políticas públicas en Colombia, a pesar de que la cultura forme parte de los componentes de toda sociedad junto a la estructura socioeconómica y el ordenamiento político (Mena & Herrera, 1994). Se distinguen dos tipos de políticas culturales en función de su temporalidad: las políticas de Estado de larga duración y las políticas de gobierno correspondientes a los periodos electorales de corta duración y trascendencia. Las primeras son de mayor presencia desde los años 50 del siglo pasado cuando la cultura adquiere carácter de derecho fundamental, individual y colectivo. Este derecho fue ratificado en el año 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la aprobación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales al cual se adhiere Colombia el 21 de diciembre de 1966. Con ratificación, adhesión y sucesión el 29 de octubre de 1969. Desde este momento, la política cultural es objeto de preocupación de los agentes, organizaciones públicas, privadas y el Estado se obliga a legislar sobre la protección, promoción y desarrollo de la cultura. A partir de la vigencia del Pacto, el 3 de enero de 1976<sup>48</sup>, los países miembros de las Naciones Unidas se comprometen a formular, ejecutar y sostener planes de estudio, fomento y protección del patrimonio cultural siendo materializado en la adopción de una política cultural. “Este es origen de las políticas culturales” en Colombia, según Mena & Herrera (1994, p. 7).

Sin embargo, la presencia de la cultura en el diseño de la arquitectura institucional latinoamericana puede remitirse por lo menos a tres grandes momentos en el pasado (Rey, 2010). El primero, ubicado en la segunda mitad del siglo XIX, se podría caracterizar como un intento para construir instituciones culturales sectoriales, considerar campos particulares de las

---

<sup>48</sup> La entrada en vigor del Pacto estaba regulada por su artículo 27. “Artículo 27. 1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del secretario general de las Naciones Unidas. 2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión”. Tomado de la Parte IV del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea general en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

artes y de lo patrimonial. El segundo hacia la primera mitad del siglo XX, mediante movimientos revolucionarios, populistas, nacionalistas y liberales que asumieron la cultura con arreglo a una dimensión básica de la construcción de la nación, la modernidad y, sobre todo de la participación popular. El tercero surge a partir de la segunda mitad del siglo XX (Centeno, 2014) caracterizado por el reforzamiento de la institucionalidad cultural, rediseño de los campos de especialidad, fortalecimiento de los medios de comunicación, aumento de las interacciones de la cultura con otras áreas de la gestión pública e inserción en el escenario global (Rey, 2010, p. 23).

Dos posiciones se han fijado en la relación del Estado con la cultura, expresadas diametralmente en la carta magna de 1886 y 1991. Esta última, reconoce como derecho humano a la cultura debido a la influencia internacional, declara fundamento de la nacionalidad la persistente búsqueda de la identidad nacional cohesionadora (Centeno, 2014). A partir de la diversidad cultural, geográfica e histórica. La Constitución Política de 1886, centro y reafirmo su visión centralista, a pesar de sus múltiples reformas, acorde al ideal decimonónico del Estado-Nación que sopesaba su fortaleza en la unidad de creencias, lengua, religión y cultura (Centeno, 2014). Una posición radical contra la diversidad consecuente con la concepción de un país cuya historia está llena de actos de negación, exclusión y eliminación de las identidades culturales a la oficialmente aceptada (Sanabria, s.f.), prolongada incluso hasta principios del siglo XXI.

En el caso colombiano, los primeros pasos de la acción estatal en materia cultural son visibles con la creación en el siglo XVIII, aun en el periodo colonial, de la Biblioteca Nacional de Colombia (1777, la más antigua de América) y, en 1823, del Museo Nacional (Rey, 2010). Desde el surgimiento de Colombia como República independiente, los diversos sistemas gubernamentales representados en sus respectivas constituciones políticas (sistema federalista de la Constitución de 1863, sistema centralista de Constitución de 1886, y república unitaria de la Constitución de 1991) han ido interpretando las circunstancias del país, incluidas las culturales (Mena & Herrera, 1994). Bajo la constitución de 1863, se crea la Universidad Nacional (1867), y la Academia Colombiana de la Lengua en 1871.

La Constitución Política de 1886<sup>49</sup>, vigente por más de un siglo, “*omitía e ignoraba aspectos culturales, sociales y económicos de la vida nacional*” (Mena & Herrera, 1994, p. 165). La cultura se concibe en ese momento como una expresión asociada a las clases cultas, que gozaban de agremiaciones y asociaciones sociales donde el ejercicio de las manifestaciones ilustradas se consideraban un privilegio. Las prácticas sociales culturales de las clases

---

<sup>49</sup> La Constitución Política de 1886, fue promovida por el presidente Conservador Rafael Reyes, del movimiento de la Regeneración Conservadora, estuvo vigente durante 105 años, y presentó como característica principal el reconocimiento de la religión católica como oficial, lo que derivó en el papel preponderante y censor de la iglesia en instancias como la educación, la literatura, la prensa, la vida política y social. También se cambia el nombre de Estado Unidos de Colombia por la República de Colombia. Fue reformada en los años 1905, 1954, 1958, 1964 y 1984.



populares se observan con desprecio e incluso en algunas ocasiones como un peligro implícito para el orden del Estado:

*“...es significativo en un país cuya historia está llena de actos de negación, exclusión y eliminación de las identidades culturales diferentes a la oficialmente aceptadas, incluyendo el siglo XX que, al amparo de la Constitución de 1886, aún con sus reformas, se caracterizó por una visión eminentemente centralista, acorde con el ideal decimonónico del Estado-Nación, que consideraba como fortaleza la unidad de creencias, lengua, memoria, en síntesis, de cultura, y por ende, como debilidad para los intereses del Estado todo lo diverso...”* ( Sanabria, sf) <sup>50</sup>.

En 1866 se conforma la Escuela de Bellas Artes de Bogotá; en el año 1887, la Sociedad Colombiana de Ingenieros; y en 1902 la Academia Colombiana de Historia. Todas estas instituciones educativas y culturales creadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX son un medio para escribir, retratar y difundir la historia patria (Escovar & Cárdenas, 2018), un concepto que, a principios del siglo XX, quedara vinculada administrativamente a las Bellas Artes y, con ello, a los valores de la nación. La tendencia a la homogenización cultural, la monoalfabetización e imposición de una sola lengua y religión, se conservó y reforzó por la Constitución Política de 1886, hecho que generó inconformidad y descontento por la población en general, en particular por los pueblos históricamente excluidos y marginados (Barragán & Mendoza, 2005).

De hecho, en la primera mitad del siglo XX, se perciben algunos síntomas de cambio hacia una diversificación del campo de la política cultural en Colombia. A finales de los años veinte se promueve una radio cultural adscrita a la Biblioteca Nacional (1929), y, entre 1930 y 1946, se produce un decisivo movimiento cultural promovido por la denominada República Liberal en el que se destacan realizaciones como el Archivo Nacional, la Biblioteca Aldeana, la Extensión Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Etnográfico, el Servicio Arqueológico Nacional, las ferias del libro, la Radiodifusora Nacional de Colombia, la Revista de Indias, la Biblioteca Colombiana de Cultura Popular y el Instituto Lingüístico Caro y Cuervo, entre otras obras de singular importancia (Escovar & Cárdenas, 2018). Cabe destacar los movimientos progresivos con la creación de instituciones culturales y movimientos de participación popular, que impulsaron la construcción de la nación desde las manifestaciones propias y locales.

A partir de los años cincuenta del siglo XX, es cuando se comienza a reforzar la institucionalidad cultural en Colombia. Entre los primeros hitos esta la expedición de la Ley 163 de 1959, la cual crea el Consejo de Monumentos Nacionales y esboza la protección del patrimonio histórico. Pero el concepto de patrimonio histórico procedente de esa ley acusa las tendencias ya apuntadas para la constitución en la que se enmarca (1886). Con la reforma

---

<sup>50</sup> Tomado de “Legislación cultural, principios y definiciones”, documento preparado por Alberto Sanabria, disponible en <http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/5.%20Lectura%204%20-%20Legislaci%C3%B3n%20cultural.pdf>, consultado el 21 de noviembre de 2020.

constitucional del año 1968, se registra una descentralización técnica o por servicios que permitió la presencia de empresas públicas y la transferencia de recursos a las regiones para financiar las áreas de salud y educación. (Mendoza & Barragán, 2005, p. 167). También como resultado de los esfuerzos de sectores sociales para estimular el desarrollo social y económico, se fomenta una mayor expansión de la actividad del Estado en general, y, en particular, se revalúa la administración de la cultura con la creación, mediante el Decreto 3154 de 1968, del Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura), una institución descentralizada, responsable de las políticas culturales, entre éstas, la protección del patrimonio, y dotada de autonomía administrativa y de un patrimonio económico independiente, constituyéndose en un según hito. La Unidad Administrativa Especial Biblioteca Nacional pasó a ser parte de su estructura, al igual que el Archivo Nacional, que se convirtió en Archivo General de la Nación, en virtud de la Ley 80 del 22 de diciembre de 1986 (finalmente adscrito al Ministerio de Cultura, en 1999) (Mincultura, 2005). Antes de la creación de Colcultura, la cultura estaba supeditada orgánicamente a la educación y era responsabilidad de las dependencias secundarias del Ministerio de Educación Nacional. La cultura se asume dentro de la política educativa generalmente ceñida a la producción artística o considerada -al igual que los deportes-, complemento a la educación formal, por medio de actividades a realizar durante el tiempo libre (Barragán & Mendoza, 2005).

A nivel internacional, la década de los años 60 y la primera mitad de la década de 1970, resultan relevantes dentro del proceso de institucionalización de la cultura a partir de dos eventos referenciales, en los que Colombia participará: a) la mesa redonda de políticas culturales de la Unesco celebrada en Mónaco en diciembre de 1967, con un programa de investigación empírica para evaluar la alternativa de formulación de un modelo prospectivo para integrar factores y efectos culturales que promueven la creación de escenarios orientados al desarrollo cultural. b) Un segundo evento, es determinado por las Jornadas de Desarrollo Cultural del Consejo de Europa realizado en la población francesa de Arc et Senans en abril de 1972. Se constata dentro de sus conclusiones la transcendencia de la cultura en sus formas tradiciones presentes en el patrimonio cultural de las naciones hacia nuevos fenómenos cercanos a las innovaciones tecnológicas para los medios de comunicación y las industrias culturales (Carrasco-Campos & Saperas, 2012).

El proceso de transformación y definición de la identidad cultural en términos nacionales llevó a la intervención del Estado colombiano en la cultura en las décadas de los años 50, 60 y 70 del siglo XX, bajo la idea derivada de su obligatoriedad y responsabilidad lo que configuró dos posiciones: un dirigismo estatal de un lado y una imagen paternalista del otro (Mena & Herrera, 1994). No es evidente la configuración de la estructura institucional bajo una legislación de amplitud conceptual con mayor énfasis en la segunda mitad de la década de 1980 y principios de los años 90 del siglo pasado.

La Constitución Política de 1991 otorga a la cultura un lugar central mediante la incorporación del concepto de patrimonio cultural. Allí las manifestaciones nacionales encuentran campo de inclusión, se introducen mecanismos de participación, diversidad y financiación (Escovar &

Cardenas, 2018). Sobre este punto, se consideran tres vertientes principales y fundamentales determinantes en los intereses nacionales en relación con el objetivo de la política cultural. a) La búsqueda de un equilibrio entre la acción del Estado y las propuestas de procedencia ciudadana que esperan sostenimiento, medios de acceso y escenarios para la participación en la vida cultural. b) La construcción de una proporción entre tradición y contemporaneidad con la ruptura entre el “respeto dogmático y la rígida herencia del pasado”, que afianzan las innovaciones en el carácter orientador de la herencia como mecanismo para mitigar los efectos de modelos creados en el marco invasivo de la globalización. c) La interpretación de la armonía entre la “fidelidad a sí mismo y la apertura a un tercero”, con el fin de generar instrumentos para la salvaguarda de la cultura propia e instaurar el diálogo con manifestaciones ajenas del orden nacional, regional e internacional (Mena & Herrera, 1994, p. 175).

Según Rey, los núcleos de las políticas culturales de primera generación – aquellas formuladas antes de 1997- cambiaron notablemente debido a la modificación de los campos que habían monopolizado (bellas artes, patrimonio, estímulos, museos), debido al surgimiento de nuevas dimensiones, actores y articulaciones de política emergentes motivadas por la diversidad de canales, instrumentos e incentivos para el uso de nuevas manifestaciones culturales, amparados en la idea del patrimonio histórico. No sólo se han fortalecido manifestaciones de la cultura que hace años apenas eran visibles frente a las que tradicionalmente han ocupado las definiciones frecuentes de cultura y el ejercicio de construcción de políticas culturales, sino que los propios conceptos y prácticas de las artes o del patrimonio, han sufrido cambios muy significativos (Rey, 2010, p. 28). Incluso con la introducción de la participación colectiva física de instalaciones de diversa índole musical, teatral e instalaciones en formatos de escala diversa.

Finalmente, la definición de política cultural realizada en época contemporánea por el Ministerio de Cultura de Colombia, institución que orienta el proceso de recopilación, discusión y validación social de estas políticas en el “*Compendio de políticas culturales nacionales*”, es la siguiente:

*Las políticas culturales son las grandes definiciones que asume el país para orientar los procesos y acciones en el campo cultural, mediante la concertación y la activa participación del Estado, las entidades privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios, para de esta manera responder con creatividad a los requerimientos culturales de la sociedad. (Ministerio de Cultura, 2008).*

La política cultural y la adopción por parte del Estado mediante su propia regularización amplió las fronteras para generar mecanismos de reconocimiento, fomento e interpretación de manifestaciones propias dentro de la Ley de Cultura, orientadora principal de las condiciones de salvaguarda y protección de un componente indispensable en la construcción de la nacionalidad colombiana. La política pública sustenta su operatividad en las instituciones definidas por: “las reglas formales, los procedimientos y prácticas operativas estándar que estructuran la relación de las unidades de la política y la economía” (Hall & Taylor, 1996).

**Figura 2.01 Municipio El Jardín (Antioquia)**



Fuente: Imagen tomada del diario Qhubo Medellín

### **2.1.1. Institucionalización de la cultura**

La institucionalización de la cultura es producto de la consolidación del Estado, desde el *“momento que adquiere una función de cohesión política, de la que carecían las precedentes culturas agrarias”* que fortalecida con el *“surgimiento del Estado nacional moderno, la cultura se sacraliza, se eleva a principio fundamental de cohesión social y política”*, robustece la unidad cultural en una *“cuestión estrechamente relacionada al poder político y su legitimación; cultura y poder antes separados, tienden a juntarse”* (Álvarez, 1993, p. 31). Las manifestaciones de la unidad cultural se vislumbran en la construcción de fuertes vínculos territoriales, étnicos, políticos, religiosos, lingüístico y jurídicos (Barragán & Mendoza, 2005, p.165), elementos que constituyen el patrimonio cultural. La institucionalización de la cultura genera dos alternativas para su comprensión: a) una relacionada propiamente con la estructura organizacional en su constitución y transformación estratégica; b) la cultura como centro integrador de diversas vertientes identificadas y relacionadas entre sí. Ambas subyacen y se complementan de manera directa, proporcional con pequeños desfases propios de la construcción simultánea de la nación, el Estado y el gobierno (Barragán & Mendoza, 2005; Morcillo, 2009).

El proceso histórico de conformación nacional ha permitido e incentivado la conjunción de diversas manifestaciones procedentes de factores externos, impuestos, propios y transmitidos, por la preexistencia e irrupción sociocultural que provoca la bifurcación del proceso de institucionalización: por una parte, la entronización, desarrollo y respeto de las prácticas de la cultura de élite: blanca, culta, sofisticada; de otra parte, las manifestaciones de la cultura popular despreciada, sofocada, relegada, producto del encuentro de Europa, África y América (Zambrano, 2022). Que en sus influencias mutuas y recíprocas enriquece los elementos culturales configurando culturas distintas, mestizas y heterogéneas (Mena & Herrera, 1994). La comprensión y tratamiento por parte del Estado a las dos tendencias de la cultura, marcó una propensión diametral entre la cultura popular *“caracterizada por la transmisión oral, cuyas producciones artísticas son aceptadas y reconocidas por los miembros de la comunidad”*, con un funcionamiento subordinado, en algunas ocasiones al margen de la cultura dominante y con mecanismos propios de institucionalización (Mena & Herrera, 1994, pp. 101-102), con función para cohesionar la comunidad con su entorno social.

Por su parte, la tendencia de la *“cultura de élite”*, *“demandó especial atención de la administración estatal desde los tiempos de la colonia”*, especialmente, el papel de la iglesia en la fundación de centros educativos en diferentes niveles de escolarización – primaria, secundaria y universitaria-; a parte de la enseñanza propia del proceso curricular *“comenzó el florecer de las artes como la pintura, la música, la escultura y la arquitectura”*. A finales del siglo XVIII y principios del XIX tres acontecimientos lesionan la hegemonía de la iglesia durante aproximadamente 300 años: a) la reforma educativa del fiscal Francisco Moreno y Escandón; b) la Constitución de la Expedición Botánica y, c) la Revolución de los Comuneros (Mena, & Herrera, 1994, p. 102). El aporte del vehículo de la cultura al proceso de emancipación e independencia es evidente, en particular por la difusión lograda a partir del establecimiento de la imprenta en 1738, el periódico<sup>51</sup> y los círculos literarios<sup>52</sup>, donde el intercambio de las ideas influyentes a partir de la literatura. Como se ha mencionado la creación de la Biblioteca Nacional (1777) y el Observatorio Astronómico, primeros en su especialidad en el continente, así como la construcción del Coliseo de Ramírez son manifestaciones culturales destacadas de finales del siglo XVIII e inicios del XIX (Mena & Herrera, 1994, p. 102).

En el periodo de 1810 a 1825, todos los esfuerzos se concentran en las actividades emancipadoras con menoscabo de las propias de la ciencia y la cultura. Desde 1826 y hasta 1850, los resultados de la labor de Celestino Mutis y la reforma educativa de Moreno y Escandón son aspectos sobresalientes en el establecimiento de escuelas del método Lancasteriano. La instalación de la educación pública, gratuita y ajustada a las necesidades particulares, impulso a la educación y cultura ofrecida por centros diferentes a instituciones

---

<sup>51</sup> Dentro de las publicaciones destacadas de la época, cabe reseñar el Papel Periódico de Santafé de Bogotá, fundado y dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez. Se distingue El Redactor Americano y el Alternativo del Redactor Americano, también a cargo de Rodríguez.

<sup>52</sup> En los círculos literarios se destacan la Tertulia Eutropélica, la del Buen Gusto y los Naturalistas, donde se congregaban los futuros conductores de la futura República.

universitarias y escolares; creación de institutos superiores especializados como la Escuela de Minas, Escuela de Medicina y la Academia Militar con el patrocinio y recomendación de textos de tendencias positivistas, materialistas y otras (Mena & Herrera, 1994, p. 103). La Comisión Corográfica encabezada por el geólogo italiano Agustín Codazzi, Manuel Ancizar y algunos trabajadores de apoyo emprenden actividades de carácter científico, en el año 1850. Se encargó de levantar la primera carta geográfica de la República, además de documentar paisajes, itinerarios y descripciones gráficas de las personas, costumbres y recursos naturales de la Nueva Granada. La Comisión visitó y levantó a mano mapas durante las diez expediciones realizadas entre 1850 y 1859, donde se resalta la necesidad de forjar una república que se encontraba dividida por lo que José María Samper denominó “*intereses heterogéneos*”, al resaltar que la separación de España no había conferido un sentido de la “*nacionalidad*” (Appelbaum, 2017, p. 69). La fundación de la Universidad Nacional de Colombia el 22 de septiembre de 1867, sintetiza el proceso de desarrollo educativo, científico y cultural realizado hasta entonces. Su primer rector fue Manuel Ancizar. Inicia labores con las facultades de Artes y oficios, Ingeniería, Medicina, Derecho y Ciencias Naturales como disciplinas y profesiones liberales (Mena & Herrera, 1994).

### **2.1.2 El patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos en Colombia: legislación precursora**

Es necesario advertir el contexto constitucional en el cual se configura el patrimonio urbano del ámbito nacional. Corresponde a la vigencia de dos cartas magnas: la Constitución Política de 1886 (agosto 5), derogada con la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 (julio 4), aún vigente. Esta última resultado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990. Las visiones contenidas en ambas constituciones sobre el patrimonio son opuestas. Mientras en la Constitución de 1886 no se hace mención alguna a medidas de conservación o necesidad de preservar lo considerado como patrimonio, la Constitución Política de 1991 establece el marco jurídico que posteriormente se reglamenta en la Ley General de Cultura de 1997, que introdujo los instrumentos de planeación y gestión del patrimonio cultural con alternativas de armonización especialmente con el ordenamiento territorial (Garcés, 2009).

El interés del Estado colombiano se centró inicialmente en el reconocimiento y posterior valoración de “...*distintos tipos de objetos como patrimonio. El agregado de estas declaraciones conforma un conjunto que representa, desde un punto de vista gubernamental, el inventario de bienes que configuran el ‘patrimonio cultural nacional’...*” (Garavito, 2006, p. 170). Agregación de objetos históricos, aunque carentes de unidad o de una intención definida, identificados como Monumentos nacionales, constituyen hoy el Patrimonio Cultural de la Nación. Las diferentes revisiones o deliberaciones por parte de los grupos de interés sobre el antecedente del patrimonio cultural en el que se encuentra inscrito el patrimonio urbano converge en el reconocimiento a la Ley 163 de 1959<sup>53</sup> como el origen de la conservación del patrimonio, considerada la primera acción legal moderna del Estado colombiano motivada por

---

<sup>53</sup> Ley 163 de 1959 (diciembre 30).



la influencia de varias iniciativas a nivel internacional, expresado en los monumentos nacionales que se encontraban dispersos en varias acciones jurídicas individuales (Salazar et al., 1989; Escovar & Cárdenas, 2018).

A partir de esa la Ley de patrimonio histórico, se observa una manifestación moderada del sistema político nacional con la producción de un conjunto mínimo de normas que delimitan la visión y responsabilidad del gobierno frente al patrimonio, presente en gran medida con la adhesión, adaptación e influencia de convenios y tratados internacionales (Salazar et al, 1989; Garavito, 2006). La Ley 163 de 1959 no es una ley de protección, es sobre la defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos de la nación. Por su carácter su efectividad es proporcional a la pertinencia y vigencia de los conceptos sobre los que se sustenta. Los referentes internacionales aceptados por la academia y vinculados a la legislación sobre el patrimonio proceden de convenciones, tratados y cartas internacionales. Los de mayor representatividad y evidencia son:

a. Tratado sobre la defensa y conservación del patrimonio histórico. Formulado en la VII Séptima Conferencia Panamericana celebrada en Montevideo en 1933<sup>54</sup>. Reconocido y aceptado en la legislación nacional por medio de la Ley 14 de 1936<sup>55</sup>. Referenciado en la Ley 163 de 1959, por la cual se dictan medidas sobre la defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos de la Nación. Se menciona que en “...desarrollo de lo acordado en la Séptima Conferencia Internacional Americana, reunida en Montevideo en el año de 1933, se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehistórico”<sup>56</sup>, los vinculados con la lucha de la independencia, al igual que el periodo inicial de la organización de la República según lo indica su artículo 2.

b. Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Adoptado por la Conferencia General de la Unesco en 1972, aceptado por el gobierno nacional mediante la Ley 45 de 1983 (Garavito, 2006; Escovar & Cárdenas, 2018).

Lo regulado por la legislación del patrimonio cultural presenta un discurso interrumpido, donde según Garavito “...los gobiernos colombianos han demostrado un interés sostenido por el patrimonio a lo largo de la historia...” (2006: 170). Sin embargo, ese sostenimiento parece mantenerse con intensiones que perduran cortos periodos de tiempo que parecen muy sensibles a determinadas manifestaciones internacionales: Esas influencias parecen motivar la reacción gubernativa y fomentar la acción pública según las diferentes conveniencias. En algunos casos obligada a reconocer y adherirse a estos acuerdos multilaterales especialmente a lo que

---

<sup>54</sup> En necesario realizar una precisión en el Artículo 2 de la Ley 163 de 1959, se menciona la “Séptima Conferencia Internacional Americana”, la referencia a la denominación de la Conferencia cambia según el documento al que se refiere. Coincide en todos los casos el año y lugar en que se realiza: 1933, Montevideo.

<sup>55</sup> Esta Ley se adhiere la “*Tratado sobre la protección de muebles de valor histórico*”, la protección de los bienes muebles históricos de la República de Colombia.

<sup>56</sup> Artículo 2, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

concierna a los intereses de América Latina o convenciones para protección del patrimonio cultural de carácter universal.

### 2.1.3 La academia y los institutos universitarios de investigaciones estéticas

Con respecto a la academia, el proyecto original de Carlos Arbeláez era crear el Instituto de Investigaciones Estéticas coordinado desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos<sup>57</sup>. Desde el cual se orientará la labor investigativa de los profesores de historia de la arquitectura de las facultades existentes en el país. A partir del trabajo realizado en las regiones con sus estudiantes y con el material producto de esta experiencia conformar el Archivo Monumental de Colombia. Donde se conservarán los planos de los monumentos, la documentación histórica y estudios monográficos relativos a la arquitectura colombiana en una acción nacional orientada hacia el conocimiento de la evolución, protección y preservación de los edificios culturalmente valiosos (Téllez, 1982, p.3).

El deseo de Carlos Arbeláez interpreta la preocupación del sector de arquitectos y personalidades “cultas” respecto a la urgente regulación del patrimonio en general, en especial por la ausencia de entidades del orden estatal con funciones específicas para la administración, protección y salvaguarda inscritas en la Ley de patrimonio histórico y su Decreto reglamentario de 1963, año de la fundación del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Javeriana. Otra característica destacable es la oportunidad instalada en la academia, por la notable cantidad de facultades de arquitectura fundadas en la misma época ante la llegada de varios colombianos formados en el exterior en pregrado y posgrado en restauración de monumentos, con los ideales del movimiento patrimonialista común en América Latina en esta década.

La dedicación de Arbeláez Camacho al patrimonio, lo lleva a fundar en 1967 la revista apuntes, como órgano de difusión que

*“tiene como tema general las diferentes categorías que conforman el patrimonio cultural, desde los procesos de reconocimiento, valoración y diagnóstico hasta las actuaciones de conservación o salvaguardia en los contextos locales y globales”<sup>58</sup>,*

que aún hoy circula con aportes al conocimiento del patrimonio cultural no solo de Colombia sino de América Latina. Los principales aportes del Instituto, ahora denominado Carlos Arbeláez Camacho para la conservación del patrimonio colombiano ha llevado a cabo obras de restauración de importantes monumentos arquitectónicos como servicio a la conservación de

---

<sup>57</sup> La Sociedad Colombiana de Arquitectos fue fundada como una organización sin ánimo de lucro, de carácter civil, de interés profesional, cuya finalidad consiste en fomentar la arquitectura y el urbanismo. Inicialmente se funda como SCA de Medellín en 1919, posteriormente en 1934 da origen a la SCA de Antioquía y finalmente en 1944 se une a la SCA de Bogotá, para dar origen así a la SCA de carácter nacional.

<sup>58</sup> Tomado de la página electrónica <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/index>, consultado el 29 de enero de 2021.



bienes culturales. Han sido objeto de intervención el templo de Santo Domingo de Tunja, la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta; el claustro y basílica de Monguí, la Catedral de Pamplona, además de elaborar propuestas de restauración para casas, iglesias, templos. Ha organizado seminarios y eventos académicos sobre temas de Bogotá, Medellín, Cali, Pasto, Manizales, Barranquilla, Pamplona y Tunja (Téllez, 1982, pp.3-5). En la década de 1960, se produce un auge de estudios, ensayos sobre la arquitectura y arte coloniales difundidos en revistas y periódicos, destacándose los trabajos del español Santiago Sebastián López y Carlos Arbeláez Camacho.

El Instituto de Investigaciones Estéticas de Universidad Nacional de Colombia fue creado en 1978,

*“con el propósito de organizar y estimular la investigación en historia, teoría, estética y crítica de las Artes en Colombia y América Latina. Se ha consolidado como escenario de investigación interdisciplinar en las áreas de las artes plásticas y visuales, la arquitectura, la música y recientemente en el patrimonio, el cine y la televisión”<sup>59</sup>.*

Sus medios de difusión son la revista Ensayos, la Colección Escala/ IIE, memorias de ciclos de conferencias y eventos de divulgación. La revista *“Ensayos. Historia y Teoría del arte es una publicación bianual del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá”<sup>60</sup>*. Se destaca la dedicación de los Institutos de Investigaciones Universitarios por la restauración de edificios o pequeños conjuntos relacionados con sus campus o propiedades de compañías religiosas, caso de la Pontificia Universidad Javeriana y los jesuitas con la restauración de la iglesia de Santo Domingo (1978-1980) en Tunja; claustro y basílica de Monguí (1978); el templo doctrinero de Tópaga, sumados a obras de ciudades de Cartagena de Indias, Pasto, Pamplona, Popayán y Santa Marta. La Universidad Nacional se ocupó de restaurar la ciudad universitaria en Bogotá. El teatro imperial lo recupera la Universidad de Nariño, el claustro de Santo Domingo en Tunja a cargo de la Universidad Santo Tomás (Escovar & Cárdenas, 2018).

En este esfuerzo de vínculo de la academia y el patrimonio cultural, se suman posteriormente el Centro de Investigaciones Estéticas y Urbanas en la sede Manizales, adscrito a la Universidad Nacional (1982), el Departamento de Investigación en la Universidad La Gran Colombia

---

<sup>59</sup> Tomado de la página de <http://www.iie.unal.edu.co/>, consultada en 27 de diciembre de 2021.

<sup>60</sup> La Revista *“Ensayos. Historia y Teoría del Arte”* tenía como “propósito dar a conocer reflexiones de índole académica en torno a la historia y la teoría de las artes plásticas y visuales, la arquitectura y la música. Sin descartar aportes originales en torno al arte mundial, la revista acoge con especial interés aquellas contribuciones en el área del arte colombiano, en particular, y el latinoamericano en general. Los textos que en la revista se publican se presentan a manera de artículos ilustrados, reseñas de otras publicaciones y reproducciones comentadas de documentos de interés histórico. La revista Ensayos está destinada primordialmente a la comunidad académica internacional. El público al cual están dirigidos sus artículos es especialistas en cada una de las áreas que cubre la revista público académico, estudiantes universitarios y público en general con intereses en las áreas de cobertura de la revista”. Tomado de la página electrónica [http://www.iie.unal.edu.co/Revista\\_Ensayos.html](http://www.iie.unal.edu.co/Revista_Ensayos.html), consultada el 27 de diciembre de 2017.

(1987); el Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica (1983) y los centros de documentación de la Universidad de La Salle y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional caribe en 1986. (Salazar et al., 1989, p.24; Salazar, 1994, p.20). Desde estos centros de investigación se dio continuidad a los trabajos en diferentes temas que permiten avanzar en el patrimonio, estableciendo un puente entre la investigación teórica y académico, los trabajos de restauración y la práctica de la preservación del patrimonio arquitectónico y urbano desde el Estado, a través de reglamentaciones (Salazar, 1994, p.20).

El patrimonio urbano como objeto de estudio hasta 1980, se destaca en el primer trabajo teórico del sacerdote jesuita Alfonso Borrero Cabal sobre: “*La preservación y restauración de monumentos arquitectónicos*” y los trabajos de Alberto Corradine sobre las poblaciones de Socorro, Zipaquirá y Mompox. (Salazar et al., 1989, p.24). A estos estudios se suman los levantamientos urbanos de poblaciones como Tenjo, Cota, Zipaquirá, Facatativá de orden académico, pero que reafirman el interés de lo urbano en medio de la producción de restauración arquitectónica. Durante la fase de formación (1980-1997), la *Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural*, a la cual se integra Colombia mediante la Ley 45 de 1983<sup>61</sup>, el gobierno se asocia a un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a apoyar los estados parte en los esfuerzos para conservar e identificar el patrimonio mundial. Esta misma convención introduce un nuevo referente “*patrimonio mundial*”, propuesta basada en la definición de patrimonio a partir de la dualidad entre patrimonio cultural y natural (Garavito, 2006). Este instrumento internacional propone unos referentes sobre el patrimonio que implican un intento de estandarización de su significado a escala mundial. (Escovar & Cárdenas, 2018)

En balance, el interés gubernamental antes de la Constitución de 1991 no se traduce en la existencia de una política pública sobre patrimonio nacional. Las acciones gubernamentales se enmarcan según convenios internacionales que carecen de las particularidades del contexto nacional. El tema de la legislación nacional sobre patrimonio se encuentra ligado a las propuestas internacionales, donde en esta misma instancia reposan los referentes a los cuales se adhiere, en un modelo de gestión vertical. El gobierno con el apoyo de expertos en la materia identifica los bienes patrimoniales a declarar, sin la participación de las comunidades afectadas o beneficiadas (Salazar, 2000; Garavito, 2006; Escovar & Cárdenas, 2018). El patrimonio inmueble no ha sido objeto nunca de una política en el país, los únicos antecedentes al respecto son fragmentarios: leyes, decretos, trabajos, estudios, que hablan de patrimonio, pero sin llegar a constituir una política de orden efectiva (Salazar et al., 1988).

---

<sup>61</sup> Colombia se vincula a la Convención de Patrimonio Mundial el 24 de mayo de 1983.

**Figura 2.02 Centro histórico de San Juan de Girón (Santander)**



Fuente: Imagen tomada del diario Qhubo Bucaramanga

## **2.2 Del Decreto 3641 de 1954 al Decreto 776 de 1980: orígenes y desarrollo de las primeras instituciones de política patrimonial en Colombia**

La finalidad de este epígrafe es describir el origen del patrimonio urbano mediante los actos administrativos por los cuales se declaran diferentes sectores urbanos de los municipios reconocidos como Monumento nacional. El periodo de preformación (1954-1980) según el MGD, está determinado por dos acciones referenciales: la declaratoria del conjunto urbano del municipio de Villa de Leyva (1954) y la declaratoria del primer centro histórico, bajo esta denominación, en el municipio de Ambalema (1980). Aunque la declaratoria de Villa de Leyva se considera por la academia como la precursora del patrimonio urbano, la Ley 163 de 1959, es la integradora de esta categoría al patrimonio histórico. La ley 163 y su Decreto reglamentario 263 de 1963 son pioneras en la conformación de la política de defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos de la nación. Es importante, diferenciar el sentido de la ley de patrimonio y el encadenamiento de las siguientes declaratorias bajo esta misma idea.

Dentro de los antecedentes del orden nacional para el surgimiento de la Ley de patrimonio histórico se encuentran las decisiones de algunas instituciones oficiales y especialmente el Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 que introdujo innovaciones en la educación en Colombia, provenientes de las ideas dominantes en el siglo XIX, expresión de los anhelos reformistas (Jaramillo, 1980), del pensamiento radical liberal que gobernó entre 1863 y 1886.

Con el inicio de la educación laica y gratuita fundamentada en la triada: educación, higiene y moral, conforme evidencia del progreso y el desarrollo (Guzmán, 2016). El propósito del Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 fue establecer tres grandes sectores de acción: enseñanza, inspección y administración. Por primera vez se crea una Dirección General de Instrucción Pública adscrita al Ministerio del Interior que da origen posteriormente al Ministerio de Instrucción Pública que, en junio de 1923, cambia el nombre y funciones al Ministerio de Instrucción y Salubridad Pública y desde el

*“1 de enero de 1928 el Ministerio de Instrucción y Salubridad Públicas se llamarán Ministerio de Educación Nacional, las funciones relativas a lazaretos quedan adscritas a la Dirección Nacional de Lazaretos, y las respectivas a salubridad e higiene públicas quedan adscritas a la Dirección Nacional de Higiene y Asistencia Públicas”<sup>62</sup>.*

Posterior a este proceso, la cultura comienza a fortalecerse como un sector específico, pero siempre sujeto a la educación a pesar de que:

*“la Constitución de 1886, establece que “El Estado tendrá [...] la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación, intelectual, moral y física de los educandos” (Mena & Herrera, 1994; p.105).*

En relación con lo legislativo, previo a la promulgación de la Ley de patrimonio histórico en la gestión del Estado para la valoración del acervo patrimonial se consideran dos momentos: uno de partida con la Ley 48 de 1918 (noviembre 20), mediante la cual se crea la Dirección Nacional de Bellas Artes anexa al Ministerio de Instrucción Pública (Salazar et al., 1989, p.17), entre cuyas funciones se encuentra el *“fomento en el país del desarrollo del sentimiento de lo bello”* a través del estudio del dibujo y la estética, en todas las escuelas y colegios del país. En otro sentido *“inspeccionar la construcción de edificios y monumentos públicos para que su estructura y ornamentación se ajusten a los principios del arte”*, así como *“visitar [...] los edificios y monumentos públicos, museos, bibliotecas, paseos, parques y jardines públicos y hacer a las entidades correspondientes las indicaciones necesarias para su mejoramiento, conservación y ornato, de conformidad con las reglas del buen gusto”<sup>63</sup>.*

La Ley de 1918 expresa también la necesidad de difundir técnicas que permitan adquirir y ejercitar la sensibilidad a manifestaciones artísticas, en particular la población de niños y jóvenes en proceso de formación. Se declaran parte integral del material de la historia patria *“los edificios y monumentos públicos, fortalezas, cuadros, esculturas y ornamentos de los tiempos coloniales, y monumentos precolombinos y productos meteóricos”*, quedando bajo la acción del Gobierno, dichos edificios, monumentos y objetos *“no podrán ser destruidos, reparados, ornamentados o destinados a fines distintos de los que tiene actualmente”*, sin

---

<sup>62</sup> Artículo 1, Ley 56 de 1927 (noviembre 10): Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre instrucción pública.

<sup>63</sup> Artículo 1, Ley 48 de 1918 (noviembre 20): “sobre fomento de las Bellas Artes”

previa autorización del “Ministerio de Instrucción Pública, de acuerdo con el concepto de la Dirección Nacional de Bellas Artes”<sup>64</sup>.

Un segundo momento constituye la vigencia de la Ley 5 de 1940 (septiembre 06), la Ley 94 de 1945 (diciembre 24) y la Ley 107 de 1946 (diciembre 30). La primera trata sobre monumentos nacionales y la realización de algunas obras en la ciudad de Cartagena, además se declaran “monumentos nacionales, de utilidad pública, todos aquellos edificios lugares que, por su antigüedad y belleza arquitectónica, merezcan ser conservados como patrimonio nacional”. Siendo la Ley donde se usa el termino patrimonio nacional ligado a “disposiciones conducentes a la restauración y conservación”<sup>65</sup>, a partir de la asesoría de la Academia Nacional de Historia. Por medio de la Ley 107 (diciembre 30) de 1946, se reforman varios artículos de la Ley 5 de 1940, el más relevante la prohibición para realizar actividades de construcción, demolición o variación alguna sin la previa aprobación y reglamentación del Gobierno (Salazar et al., 1989, p.18).

Tanto la Academia de Historia como el Ministerio de Instrucción Pública habían tenido actuación pionera en la defensa del patrimonio cultural colombiano durante la presidencia de Rafael Reyes (1904-1909) (Escovar & Cárdenas, 2018), bajo la idea vinculante y relacional del patrimonio y la historia con la intuición de la conservación, apreciación y sensibilización a través de la educación oficial pública y privada. El esfuerzo de transformación institucional, especialización y de desagregación de las funciones permitió una línea donde la cultura encontró alternativas progresivas de desarrollo y visibilidad.

### **2.2.1 La Ley 163 de 1959 de patrimonio histórico y su Decreto reglamentario de 1964: fortalecimiento de la defensa de monumentos nacionales**

La Ley 163 de 1959 y su Decreto reglamentario 263 de 1964, sintetizan la trayectoria de esfuerzos aislados en una acción legislativa que data de las primeras décadas del siglo XX, como se ha señalado. La procedencia indica influencias de dos vertientes principales: las necesidades locales y nacionales, y la influencia internacional. La producción procura dar respuesta a estas variables estructurales de su origen. Las presuntas fases consecutivas de la legislación del corpus sobre la conformación y primeros esbozos de la protección del patrimonio cultural se consideran fuente directa, referente a los resultados de la VII Conferencia Panamericana (Montevideo, 1933) al cual se adhiere Colombia en 1936, mediante la expedición de la Ley 163 de 1959, con la definición de monumentos siendo aquellos de origen prehispánico y colonial. Los del periodo inicial en la organización de la República y los vinculados de manera íntima con las luchas de independencia coincidente en este propósito con el objetivo de la Conferencia (Salazar et al., 1989; Salazar, 1994; Garavito, 2006, Escovar & Cárdenas, 2018).

---

<sup>64</sup> Artículo 2, Ley 48 de 1918 (noviembre 20): “sobre fomento de las Bellas Artes”

<sup>65</sup> Artículo 1, Ley 5 de 1940 (septiembre 6): “Sobre monumentos nacionales y realización de algunas obras en la ciudad de Cartagena

Una de las influencias más relevantes e influyentes fue el denominado Pacto de Roerich, liderado en 1935 por el pintor y filósofo Nicolái Roerich (1874-1947), quien se encargó de iniciar el movimiento moderno en defensa de los bienes culturales. Roerich, preparó en 1929 el primer borrador de un tratado internacional dedicado a la protección de los valores culturales enviado a diferentes gobiernos para su conocimiento. En 1935 el “*Pacto internacional para la protección de las instituciones artísticas y científicas, monumentos históricos, delegaciones y colecciones*”, se firma en Estados Unidos por representantes de 21 países. (Escovar & Cárdenas, 2018, p.151). El Pacto de Roerich, después de la segunda guerra mundial resultó determinante en la conformación de las normas de derecho internacional en el ámbito de la protección del patrimonio cultural, principalmente en las decisiones de la Unesco de manera particular con la firma en 1954 de la “*Convención sobre Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado*”<sup>66</sup> (Escovar & Cárdenas, 2018). Coincide el año de la firma de la Convención con la declaratoria del área urbana de Villa de Leyva como monumento nacional.

Es necesario mencionar que poco tiempo después de ser reglamentada la Ley 163 de 1959, se realiza en Venecia la reunión de un grupo de especialistas en restauración para complementar y actualizar la Carta de Atenas de 1931. La convocatoria la realizan los arquitectos italianos Roberto Pane (1897-1997) y Piero Gazzola (1921-1997), el belga Raymond Lemaire (1921-1997); establecen las condiciones para la denominada Carta de Venecia de 1964 donde se incluyen los principios comunes, la definición y la forma de presidir el monumento histórico, conservación y restauración. (Escovar & Cárdenas, 2018). Se considera por especialistas y académicos como origen del patrimonio urbano, la Ley 163 de 1959:

“ARTÍCULO 1.- Declárense patrimonio histórico y artístico nacional los monumentos, tumbas prehispánicas y demás objetos, ya sean obra de la naturaleza o de la actividad humana, que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, de la historia o del arte, o para las investigaciones paleontológicas, y que se hayan conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional. Los Gobernadores de los Departamentos velarán por el estricto cumplimiento de esta Ley.

ARTÍCULO 2.- En desarrollo de lo acordado en la Séptima Conferencia Internacional Americana, reunida en Montevideo en el año de 1933, se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehistórico, los siguientes: a) Los que estén íntimamente vinculados con la lucha por la independencia y con el período inicial de la organización de la República, b) Las obras de la naturaleza de gran interés científico indispensables para el estudio de la flora y la geología.

ARTÍCULO 3. El Consejo de Monumentos Nacionales a que se refiere la presente Ley, delimitará la extensión superficiaria de las reservas nacionales que deban hacerse en los monumentos de que trata el artículo anterior.

---

<sup>66</sup> La mencionada Convención fue firmada el 14 de mayo de 1954, en La Haya (Holanda), entra en vigor el 7 de agosto de 1956. Colombia se adhiere el 18 de junio de 1998, integra el grupo III.

ARTÍCULO 4.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica).

PARÁGRAFO. - Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

ARTÍCULO 5.- Declárese como Monumento Nacional por su importancia científica, la Sierra de la Macarena, ubicada en la región oriental de Colombia.

ARTÍCULO 6.- Derogado por el art. 26, Ley 1185 de 2008. El Consejo de Monumentos Nacionales, previo estudio de la documentación correspondiente, podrá proponer la calificación y declaración de otros sectores de ciudades, zonas o accidentes geográficos o inmuebles como Monumentos Nacionales, lo cual se hará mediante decretos emanados del Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 7. Se consideran monumentos muebles los enumerados en el Tratado celebrado entre las Repúblicas Americanas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, en la 7ª. Conferencia Internacional Americana y a la cual adhirió Colombia por la Ley 14 de 1936” (Ley 163, 1959).

En términos generales puede afirmarse que la Ley 163 de 1959, sustenta una noción de patrimonio edificado que identificó tres tipos de valores: históricos, artísticos y testimoniales (Castillo, 2022). Los dos primeros corresponden a edificios o conjuntos que por su simple supervivencia física en el tiempo se convirtieron en documentos auténticos e irremplazables del pasado y por lo mismo, sujetos a múltiples y cambiantes condiciones de apropiación por parte de los grupos de ciudadanos. Los testimonios de eventos y personajes del pasado, principalmente de la epopeya libertadora que buscaban hacer tangible su memoria por medio de la materialidad misma de ciertos edificios o lugares (Salazar, 1994).

De esta manera, se inicia la conformación del patrimonio urbano. En palabras de Salazar, se trató, en plena concordancia con la constitución de la nación durante el siglo XIX de marcar el espacio urbano a escala nacional, dando a la arquitectura una condición de soporte físico del proceso de simbolización que era urgentemente requerido por la nueva sociedad civil republicana y sobre todo por el recién constituido Estado Nacional (1994). Medida funcional y efectiva con la declaratoria de los escenarios urbanos históricos donde se gestaron algunas de



las iniciativas y revueltas que finalmente llevaron a la conformación de la independencia con urgencia de símbolos físicos y referenciales.

Mediante el Decreto 264 de 1963, se incluyen sectores antiguos adicionales de ciudades y municipios en diferentes regiones a los indicados en 1959, se amplían las categorías para comprender los sectores antiguos compuestos por elementos del espacio público ciudadano “...calles, plazas, plazoletas, murallas y demás inmuebles.”, procedentes de “los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX”.

“ARTÍCULO 4.- En virtud de la autorización conferida por el artículo 6 de la Ley 163 de 1959, y sin perjuicio de otras reservas que puedan decretarse en el futuro, se incluyen en las reservas especificadas en el artículo 4 de dicha Ley los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, San Gil, Pamplona, Rionegro (Antioquia), Marinilla y Girón.

PARÁGRAFO. - Para los efectos de la declaratoria a que se refieren este artículo y el 4 de la mencionada Ley, se entenderá por sectores antiguos las calles, plazas, plazoletas, murallas y demás inmuebles originarios de los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX.

ARTÍCULO 5.- Se consideran objetos de valor artístico o histórico los enumerados en el Tratado celebrado entre las repúblicas americanas en la Séptima Conferencia Panamericana, al cual adhirió Colombia por medio de la Ley 14 de 1936, así:

a. De la época precolombina: las armas de guerra o utensilios de labor, las obras de alfarería, los tejidos, las joyas y amuletos, los grabados, diseños y códices, los equipos, los trajes, los adornos de toda índole y en general todo objeto muebles que por su naturaleza o procedencia muestre que proviene de algún inmueble que auténticamente pertenece a aquella época histórica;

b. De la época colonial: las armas de guerra y los utensilios de trabajo, trajes, medallas, monedas, amuletos y joyas, los diseños, pinturas, grabados, planos y cartas geográficas, los códices y todo libro raro por su escasez, forma y contenido, los objetos de orfebrería, porcelana, marfil, carey, los de encaje y en general todas las piezas recordatorias que tengan valor histórico o artístico.

c. De la época de la emancipación y de comienzos de la República: los mencionados en la enumeración anterior y que correspondan a este período histórico.

d. De todas las épocas: 1) Las bibliotecas oficiales y de instituciones, las bibliotecas particulares valiosas tomadas en su conjunto, los archivos nacionales y las colecciones de manuscritos oficiales y particulares de alta significación histórica. 2) Como riqueza natural, los ejemplares zoológicos de especies bellas y raras que están



amenazadas de exterminio o de extinción natural y cuya conservación sea necesaria para el estudio de la fauna” (Decreto 163 de 1964).

En el Decreto 263 de 1964, se amplía el rango de cobertura temporal en el que podrán estar inscritas las futuras declaratorias. Igualmente reglamentó con mayor precisión las funciones y composición del Consejo de Monumentos Nacionales (en adelante CMN), complementó las disposiciones sobre trámites y procedimientos relacionados con el patrimonio; designó a los alcaldes y gobernadores como encargados de velar por el cumplimiento de la Ley (Salazar et al., 1989). La relación ambigua de la cultura urbanística colombiana y la conservación del patrimonio producto de una relación histórica conflictiva entre las ideas acerca de la ciudad y su construcción real, han rechazado la herencia urbana para adoptar nuevos patrones acordes con las expectativas del desarrollo (Salazar, 1996).

Sumado a lo anterior, la demora en entrada en pleno funcionamiento del CMN varios años después de ser instaurado por la Ley de patrimonio histórico, además del poco conocimiento e imposibilidad para aplicar las normas por parte de entidades gubernamentales con prioridad por los problemas más apremiantes produjo que la ley no pasara de ser letra muerta. Solo con el tiempo adquirió la importancia capital de la cual carece en su inicio; hay que conceder que el momento de su promulgación sirvió de inspiración para iniciar una lucha que emprendería la academia (Escovar & Cárdenas, 2018). Después de 1963 se han declarado monumento nacional por decretos individuales del Ministerio de Educación los sectores antiguos de Villa del Rosario (1971), Honda (1977), Barichara (1978), Ambalema (1980) y Turmequé (1989). De igual modo, mediante resolución, se propuso la declaratoria de Monguí, Zipaquirá, Salamina, Marmato y Guaduas en 1982. Posteriormente, dos resoluciones emanadas por el CMN declararon parte del patrimonio histórico y artístico de la Nación a Calarcá y Almaguer en 1986 (Salazar et al., 1989). Estas son las últimas poblaciones declaradas bajo el amparo de la Constitución Política de 1886.

## **2.2.2 Creación de organismos e instituciones públicas para la política patrimonial (1959-1976) y su desarrollo posterior**

### **2.2.2.1 El Consejo de Monumentos Nacionales (1959-2007) y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (2008- Actual)**

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) se crea mediante la Ley 163 de 1959 como se ha indicado, para colaborar con el gobierno nacional para el desarrollo de las finalidades consagradas en la misma Ley de patrimonio histórico<sup>67</sup>. Dentro de sus funciones iniciales se encuentra la delimitación de la extensión superficial de las reservas nacionales<sup>68</sup>, “*previo estudio de la documentación correspondiente podrá proponer la calificación y declaración de*

---

<sup>67</sup> Artículo 23, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

<sup>68</sup> Artículo 3, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

*otros sectores de ciudades, zonas o accidentes geográficos o inmuebles como Monumentos Nacionales*<sup>69</sup>. Supervigilar las exploraciones y excavaciones que cuentan con licencia y realizadas por particulares<sup>70</sup>, autorizar la importación y exportación de objetos declarado como patrimonio histórico y artístico nacional<sup>71</sup>. Aprobar la reparación, reconstrucción o modificación de inmuebles con valor histórico o artístico previa verificación de planos de las obras presentadas por el interesado<sup>72</sup>. La integración del CMN en su primera etapa estaba conformada por las siguientes entidades y delegados, según la Ley 163 de 1959:

1. El ministro de Educación Nacional o su delegado.
2. El presidente de la Academia Colombiana de Historia o su delegado.
3. El director del Instituto Colombiano de Antropología o su delegado.
4. El director del Museo Nacional.
5. El director del Museo Colonial.
6. El director del Museo del Oro.
7. El presidente de la Comisión de Arte Sagrado.
8. El presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
9. El presidente de la Academia de la Lengua.
10. El director del Instituto de Ciencias Naturales.
11. El director del Instituto de Bellas Artes<sup>73</sup>.

El CMN se crea como garantía para el cumplimiento de la Ley 163 de 1959 (Escovar & Cárdenas, 2018, p. 158). Considerado un instrumento de gran importancia en la conservación del patrimonio, *“la seriedad de sus actuaciones le ha granjeado una alta estima y respeto nacional, con lo cual ha suplido en parte la falta de una organización administrativa adecuada y de instrumentos efectivos de control”* (Salazar et al., 1989; p. 34). A su vez, en el Decreto 264 de 1963, se agregan otras responsabilidades al CMN como: a) el reconocimiento técnico de hallazgos de carácter histórico, paleontológico o arqueológicos con el fin de determinar *“la importancia o mérito del descubrimiento, y proveer a su seguridad y conservación, si fuere el caso”*<sup>74</sup>; b) reglamentar la nomenclatura urbana de sectores antiguos en lo relacionado con nombres de calles, plazas y sitios públicos al igual que nombres y avisos de almacenes, tiendas, oficinas, edificios y locales<sup>75</sup>, sujeto a condiciones de ornato intuitivas y primarias; c) constituir los medios y llevar a cabo *“el inventario de los monumentos existentes no solo en las ciudades y lugares a que se refieren la Ley 163 de 1959”* y su Decreto Reglamentario, *“sino en cualquiera otra ciudad, población o lugar del territorio nacional”*<sup>76</sup>, dando origen a un

---

<sup>69</sup> Artículo 6, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

<sup>70</sup> Artículo 8, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

<sup>71</sup> Artículo 9, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

<sup>72</sup> Artículo 18, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

<sup>73</sup> Artículo 23, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

<sup>74</sup> Artículo 10, Decreto 264 de 1963 (febrero 12).

<sup>75</sup> Artículo 19, Decreto 264 de 1963 (febrero 12).

<sup>76</sup> Artículo 22, Decreto 264 de 1963 (febrero 12).

repositorio formal liderado por el Estado previa tutela de los monumentos y objetos considerados patrimonio histórico y artístico nacional.

Con relación a los sectores urbanos, el CMN debe generar instrucciones y normas previa ejecución de conservación y restauración de inmuebles<sup>77</sup>. La conformación del CMN es ratificada por el Decreto 264 de 1963, modificada mediante el Decreto 2700 de 1968 (octubre 28) por el cual se crea la Corporación Nacional de Turismo de Colombia, integrada por cinco (5) miembros:

El ministro de Educación o su delegado, quien lo presidirá;  
el ministro de Obras Públicas o su delegado;  
el gerente de la Corporación Nacional de Turismo o su delegado;  
el presidente de la Academia Colombiana de Historia o su delegado;  
el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos o su delegado<sup>78</sup>.

A pesar de contar con las garantías legislativas, *“el Consejo de Monumentos Nacionales no entraría en pleno funcionamiento sino varios años después, y las entidades gubernamentales que se encargaría de aplicar la ley no tenían conocimiento ni la posibilidad de aplicar una norma como esa”* (Escovar & Cárdenas, 2018, p.159).

Hasta el año 1978 el CNM desarrollo una actividad *“esporádica e informal, sin un seguimiento de actividades y decisiones, aunque desde 1976 cuenta con el apoyo técnico de la División de Inventarios de Colcultura, la cual constituye su infraestructura técnica básica”* (Ver apartado sobre Colcultura), para la época en Consejo carece de sede, técnicos y presupuesto (Salazar et al., 1989, pp. 35-36). La función del CMN es incomprensible, además de sus carencias administrativas por la ausencia de una articulación de la realidad conceptual y operativa en todas las escalas de sus obligaciones.

La promoción y creación de filiales de apoyo del CMN *“en los Departamentos, Intendencias y Comisarías, se establecerán Centros Filiales del Consejo de Monumentos Nacionales, cuya organización y funcionamiento serán determinados por esta entidad”<sup>79</sup>*, es uno de sus retos principales con un resultado parcial entre el año 1978 y 1989 se *“conforman cinco centros filiales: Bolívar, Boyacá, Cauca, Santander y Norte de Santander, pero su composición resultó inoperante y fue necesario adoptar una estructura particular para cada caso”* (Salazar et al., 1989, p. 36). El centro filial del CMN en la ciudad de Popayán se crea en 1983, la de los departamentos de Valle del Cauca y del Magdalena en el año 1986. De forma regular funcionan las de Bolívar, Boyacá y Valle del Cauca. De forma irregular la del Magdalena y nunca se han reunida la de los Santanderes (Salazar et al., 1989, p. 36). En el periodo de 1989 y 1990 se crean las filiales de Antioquia, Caldas y Nariño. Se reestructuran: Bolívar, Magdalena, Valle del

---

<sup>77</sup> Artículo 25, Decreto 264 de 1963 (febrero 12).

<sup>78</sup> Artículo 18, Capítulo IV Disposiciones varias, Decreto 2700 de 1968 (octubre 28): por el cual se crea la Corporación Nacional de Turismo de Colombia.

<sup>79</sup> Artículo 20, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

Cauca, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Cauca con un sistema de seguimiento a las filiales (Colcultura, 1990, p. 32).

Dentro del Plan Nacional de Cultura 1992-1994 “*Colombia: El camino de la paz, el desarrollo de la cultura hacia el siglo XXI*”, inscrito en el Programa V denominado “*Protección, investigación y difusión del patrimonio*”, el subprograma 4 “*Fortalecimiento Institucional*”, se dedica al “Fortalecimiento del Consejo de Monumentos Nacionales”. Se orienta a la adecuación de las instituciones involucradas en el manejo del patrimonio inmueble y actualizar la legislación existente mediante las acciones de valoración del marco legal sobre protección cultural y las funciones del CMN. El fortalecimiento de la secretaria técnica del CMN con la incorporación de personal especializado y la conformación de los comités técnicos; definición de funciones y responsabilidades de las filiales en las regiones del país; definición de principios y criterios de actuación (Colcultura, 1992, p.63).

Durante la gestión de Ramiro Osorio frente a Colcultura en el informe del año de 1992, señala en el balance del proyecto de fortalecimiento institucional la realización de la evaluación de la legislación y la contratación de asesores para la elaborar un nuevo proyecto de ley de patrimonio. Al igual se elaboran dos investigaciones, una de ellas “*El reglamento para el Consejo de Monumentos Nacionales*”, con el fin de fortalecer los centros filiales el CMN realiza talleres en los departamentos de Antioquia, Santander, Caldas, Valle del Cauca y Atlántico (Colcultura, 1992, p. 20).

En la Ley General de Cultura de 1997, el CMN conserva su denominación, considerado como “*el órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional*” quien “*reglamentará lo relativo a la composición, funciones y régimen de sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales*”, para garantizar la protección y manejo del patrimonio cultural de la nación dentro de su principal objetivo<sup>80</sup>. Sin embargo, la transformación de mayor profundidad del CMN se presenta en el año 2008. Con el cambio de denominación por el de Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC): “*órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación*”. Integrado de la siguiente forma:

1. El ministro de Cultura o su delegado, quien lo presidirá.
2. El ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.
3. El ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado.
4. El decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia o su delegado.
5. El presidente de la Academia Colombiana de Historia o su delegado.
6. El presidente de la Academia Colombiana de la Lengua o su delegado.
7. El presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos o su delegado.
8. Un representante de las Universidades que tengan departamentos encargados del estudio del patrimonio cultural.

---

<sup>80</sup> Artículo 7. Consejo de Monumentos Nacionales, Título II Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 397 de 1997 (agosto 7).

9. Tres (3) expertos distinguidos en el ámbito de la salvaguardia o conservación del patrimonio cultural designados por el ministro de Cultura.
10. El director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia o su delegado.
11. El director del Instituto Caro y Cuervo o su delegado.
12. El director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien participará en las sesiones con voz, pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural<sup>81</sup>.

La reglamentación del artículo 7 de la Ley 397 de 1997 y modificación del artículo 4 de la Ley 1185 de 2008, relativos al CNPC se lleva a cabo por medio del Decreto 1313 de 2008 (abril 23), donde se menciona la integración al Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación,

*“constituido por el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación”, que, al estar articuladas entre sí, “posibilitan la protección, salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación”<sup>82</sup>.*

En ese sentido, se mantiene su función principal al ser *“el órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación”*. Se integra a su estructura administrativa, el director del Archivo General de la Nación<sup>83</sup> o su delegado con una composición impar. Dentro de las funciones principales de Consejo Nacional de Patrimonio Cultural se encuentran:

1. Asesorar al Ministerio de Cultura, en el diseño de la política estatal relativa al patrimonio cultural de la Nación, la cual tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.
2. Proponer recomendaciones al Ministerio de Cultura en el diseño de las estrategias para la protección y conservación del patrimonio cultural de la Nación que puedan incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, a través del Plan Nacional de Cultura.
3. Recomendar, sin interferir con la facultad legal exclusiva del Ministerio de Cultura, los bienes materiales de naturaleza mueble o inmueble que podrían ser incluidos en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional.

---

<sup>81</sup> Artículo 4, Ley 1185 de 2008 (marzo 12) por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.

<sup>82</sup> Artículo 7, ley 397 de 1997

<sup>83</sup> Artículo 1, Decreto 1313 de 2008 (abril 23) por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 4° de la Ley 1185 de 2008, relativo al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

4. Estudiar y emitir concepto previo al Ministerio de Cultura para efectos de las decisiones que este Ministerio deba adoptar en materia de declaratorias y revocatorias relativas a bienes de interés cultural del ámbito nacional. La declaratoria de un bien o conjunto de bienes como de interés cultural del ámbito nacional, así como la revocatoria de tales declaratorias deberá contar con el concepto previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

5. Estudiar y emitir concepto previo al Ministerio de Cultura respecto de si el bien material del ámbito nacional declarado como Bien de Interés Cultural requiere o no, del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- y, conceptuar sobre el contenido del respectivo PEMP. El concepto de que trata este numeral tendrá carácter obligatorio para el Ministerio de Cultura.

6. Recomendar, sin interferir con la facultad legal exclusiva del Ministerio de Cultura, las manifestaciones que podrían llegar a ser incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial.

7. Estudiar y conceptuar a solicitud conjunta del Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, sobre la inclusión de manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, y sobre el Plan de Salvaguardia propuesto para el respectivo caso, entendiéndose que dicho Plan debe estar orientado al fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación. La inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y el Plan de Salvaguardia que necesariamente deberá adoptarse para el efecto, deberá contar en todos los casos con el concepto previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

8. Asesorar al Ministerio de Cultura en los aspectos que este solicite relativos a la regulación, reglamentación, manejo, salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación.

9. Recomendar si lo estima procedente, lineamientos que pudieran ser tenidos en consideración en el ámbito departamental, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, para efectos de manejo del patrimonio cultural y los bienes de interés cultural en las respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de las competencias que la Ley 1185 de 2008 le atribuye con exclusividad a las autoridades en las jurisdicciones mencionadas y a los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural.

10. Recomendar criterios para la aplicación del principio de coordinación que debe emplearse en la declaratoria y manejo de los Bienes de Interés Cultural y para la inclusión de Manifestaciones en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial en los diferentes ámbitos territoriales.

11. Formular al Ministerio de Cultura propuestas sobre planes y programas de cooperación en el ámbito nacional e internacional que pudieran contribuir a la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación y apoyar en la gestión de tales mecanismos de cooperación<sup>84</sup>.

Mediante el Decreto 2358 de 2019, el CNPC mantiene su denominación, además de generar conceptos sobre los bienes de competencia del Ministerio de Cultura y del Archivo General de la Nación<sup>85</sup>, la conformación determinada es la siguiente:

1. El ministro de Cultura o su delegado, quien lo presidirá.
2. El ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.
3. El ministro de Vivienda, Ciudad y territorio o su delegado.
4. El decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia o su delegado.
5. El presidente de la Academia Colombiana de Historia o su delegado.
6. El presidente de la Academia Colombiana de la Lengua o su delegado.
7. El presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos o su delegado.
8. Un representante de las universidades que tengan departamentos encargados del estudio del patrimonio cultural.
9. Tres (3) expertos distinguidos en el ámbito de la salvaguardia o conservación del patrimonio cultural designados por el ministro de Cultura.
10. El director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH o su delegado.
11. El director del Instituto Caro y Cuervo o su delegado.
12. El director del Archivo General de la Nación o su delegado.
13. El director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, o su delegado.
14. El director del Servicio Geológico Colombiano, o su delegado.
15. Un representante de la sociedad civil a través del programa vigías del patrimonio.
16. El director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien participará en las sesiones con voz, pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Artículo 2 Funciones, Decreto 1313 de 2008 (abril 23) por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 4° de la Ley 1185 de 2008, relativo al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

<sup>85</sup> Artículo 2.3.1.3, IX Del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26) Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

<sup>86</sup> Artículo 2.3.2.1, XII De los Consejos Distritales de patrimonio Cultural, Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26).

La pluralidad de instituciones, actores y representaciones en el CNPC se reafirma con la alternativa de *“invitar a sus deliberaciones a funcionarios públicos, o a particulares representantes de las agremiaciones u organizaciones sectoriales, así como a las demás personas y sectores de la sociedad civil que estime necesario, de acuerdo con los temas específicos a tratar”*, quienes pueden participar con su opinión, pero sin derecho a votar sobre los asuntos a tratar. Los representantes son designados para ejercer durante un periodo de 2 años y podrán ser removidos ante la ausencia al Consejo en tres sesiones sin justa causa<sup>87</sup>.

Las filiales del Consejo de Monumentos Nacionales denominada Consejo Departamental de Patrimonio Cultural fueron sustituidas por los Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 397 de 1997, se modifica por el artículo 4 de la Ley 1185 de 2008. Crea el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y por esta línea los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural, donde la composición *“será definida por las autoridades departamentales y distritales”*, en cada uno de los casos. Se consideran *“las características del patrimonio cultural en el respectivo Departamento o Distrito y se dará participación a expertos en el campo del patrimonio mueble e inmueble, en el del patrimonio cultural inmaterial, y a las entidades públicas e instituciones académicas especializadas en estos campos”*<sup>88</sup>, la fecha límite de su conformación fue 12 de septiembre de 2008, que corresponde a seis meses después de la promulgación de la Ley.

#### **2.2.2.2 Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) (1968-1997)**

Previo a la creación de Colcultura, la responsabilidad administrativa de la cultura estaba encomendada a las dependencias secundarias del Ministerio de Educación Nacional, de la secretaria de extensión cultural y de las secretarías de educación, *“en los departamentos donde aún no existían los institutos departamentales de cultura”* (Barragán & Mendoza; 2005, p.166). Se consideran dos antecedentes en el origen de la institucionalización de los asuntos culturales en Colombia; a) uno proviene de la dimensión educativa, característica general en Latinoamérica; b) el otro se centra en la realización y posterior Declaración Final del Primer Congreso Nacional de Cultura celebrado en Bogotá entre el 20 y 23 de julio de 1966 por convocatoria de la Dirección de Divulgación Cultural del Ministerio de Educación Nacional. El cual congregó a trabajadores y agentes de la cultura en diez áreas básicas: artes plásticas y arquitectura, antropología y sociología, cultura y turismo, literatura y lingüística, folclor y artesanías, historia, música y teatro (Mena & Herrera, 1994, p. 107).

Las recomendaciones que surgen del Congreso Nacional de Cultura para el gobierno nacional – en los últimos meses del mandato de Guillermo León Valencia- fueron las siguientes:

- a. Requerir al Gobierno Nacional, se dicten disposiciones de carácter sustantivo y reglamentario, promotora de una atmósfera legal y administrativa favorable a la

---

<sup>87</sup> Parágrafo 1 y 2, artículo 2.3.2.1, XII De los Consejos Distritales de patrimonio Cultural, Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26).

<sup>88</sup> Parágrafo 1, Artículo 4, Ley 1185 de 2008 (marzo 12).



expresión y desarrollo de talento cultural del país para una presencia más efectiva de la cultura colombiana en la vida nacional.

- b. Reestructurar los organismos encargados de promover, proteger y apoyar la cultura colombiana hacia condiciones funcionales de acuerdo con las necesidades de la vida social contemporánea con la urgencia de rodear al humanista, el letrado, el científico, al artista e investigador, con las garantías esenciales que le permitan realizar una obra acorde con el vigor y las formas características de la nacionalidad.
- c. Revisión de los programas actuales y elaboración de los necesarios, con presupuesto y subsidios económicos para enfatizar la cultura como un hecho más allá de la burocracia.
- d. Incluir en los planes de desarrollo no solo aspectos económicos sino los culturales en la medida que pueden ser un indicador del desarrollo de la sociedad.
- e. La generación de una política cultural sistemática que fortalezca el estímulo, capacitación y aprovechamiento del talento cultural además de la producción de las diferentes manifestaciones propias de la cultura (Mena & Herrera, 1994, pp. 108-109).

**Figura 2.03 Logotipo Instituto Colombiano de Cultura – Colcultura-**



Fuente: Imagen tomada del Ministerio de Cultura

A partir de las necesidades identificadas en el Congreso Nacional de Cultura de 1966 y por medio de las facultades extraordinarias al poder ejecutivo<sup>89</sup>, se crea el Instituto Colombiano de Cultura y el Consejo Nacional de Cultura -Decreto 3154 de 1968 (diciembre 26)- constituyéndose en la entidad rectora de la administración, gestión y promoción de los asuntos culturales en Colombia. Durante su permanencia entre 1968 y el año 1997, sufre una reestructuración en el año 1990 y 1992, en su periodo final antes de ser sustituido por el Ministerio de Cultura en 1997. Aunque la creación de Colcultura reafirma la sujeción de la cultura a la educación, al ser adscrito al Ministerio de Educación Nacional a pesar de ser un *“establecimiento público, esto es, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, para el cumplimiento de las funciones que más adelante se determinan”*; su domicilio será en la ciudad de Bogotá y *“podrá establecer dependencias en otros Municipios”*<sup>90</sup>, del país.

<sup>89</sup> Ley 65 de 1967 (diciembre 28) por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la remuneración y régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se provee al fortalecimiento de la administración fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las partidas presupuestales destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisión Constitucional Permanente en las Cámaras Legislativas.

<sup>90</sup> Artículo 1, Decreto 3154 de 1968 (diciembre 26): *“Por el cual se crean el Instituto Colombiano de Cultura y el Consejo Nacional de Cultura”*

Dentro de las principales funciones asumidas por Colcultura relacionadas con el manejo del patrimonio inmueble según estatutos, son las siguientes:

- a. Contribuir a la conservación y desarrollo de la cultura colombiana, a la creación de una adecuada conciencia de los valores culturales y artísticos de la Nación;
- b. Organizar por sus propios medios y con la cooperación de otras entidades el inventario del patrimonio cultural del país en sus diferentes manifestaciones;
- c. Fomentar las actividades culturales en los planteles educativos y en las universidades del país;
- d. Fomentar la formación de técnicos y profesionales en los distintos aspectos de la cultura
- e. Contratar con entidades oficiales y privadas cuando se considere necesario, estudios, investigaciones y trabajos sobre asuntos relativos a las manifestaciones de la cultura colombiana;
- f. Fomentar planes de turismo cultural dentro del país, en coordinación con la Corporación Nacional del Turismo;
- g. Tomar las medidas que estén dentro de sus atribuciones para que en el proceso de desarrollo social, económico y educativo del país se dé el debido lugar a los valores culturales y artísticos<sup>91</sup> (Salazar et al, 1989, p.36-37).

Es posible diferenciar dos etapas en la gestión de Colcultura con relación a los sectores antiguos: a) una inicial desde su creación en 1968 hasta el año 1990, momento en el cual se establece su estructura orgánica y se determinan las funciones de sus dependencias a través del Decreto 800 de 1990 (abril 17), motivado en que la

entidad se dedicó a los inventarios y cuidado del patrimonio arquitectónico y urbanístico, desde una visión proteccionista muy centrada en los aspectos físicos y estéticos, que resultó útil a su mantenimiento en el tiempo, pero también aisló a este patrimonio de las dinámicas urbanas (Beuf 2015, p.14).

Esta situación fue identificada y divulgada en la “*Política Cultural para los Centros Históricos y el Patrimonio Inmueble*” donde se establecen la articulación de las acciones y criterios bajo procesos administrativos y funcionales acordes con los retos al inicio de la década de los años 90. Las consideraciones sobre “*la valoración y protección del patrimonio cultural inmueble se fundamenta en la reconsideración de la relación entre la cultura y la ciudad*” (Colcultura, 1990, p. 37), vínculo desarrollado de manera intuitiva hasta entonces.

b) Una segunda etapa desde el año 1990 hasta 1997 momento de su extinción para dar paso al Ministerio de Cultura. Con un momento referencial en 1992 a raíz de la restructuración de Colcultura mediante el Decreto 2128 (diciembre 29). Con la centralización de sus funciones en cuatro objetivos específicos, a saber:

---

<sup>91</sup> Artículo 3, Decreto 3154 de 1968 (diciembre 26): “*Por el cual se crean el Instituto Colombiano de Cultura y el Consejo Nacional de Cultura*”

1. Actuar como ente rector del sector institucional de la cultura, ejecutando las políticas trazadas por el Gobierno en coordinación con las entidades de los órdenes departamental y municipal.
2. Fomentar y difundir los procesos, valores manifestaciones culturales colombianos respetando la diversidad de sus expresiones.
3. Proteger, difundir y conservar el patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural de la Nación.
4. Promover la participación de toda la población en la vida cultural de la Nación y el acceso de los ciudadanos a los bienes, servicios y valores de la cultura en igualdad de oportunidades<sup>92</sup>.

#### **2.2.2.2.1 La cultura y Colcultura en las estructuras administrativas, planes de desarrollo y planes de cultura de los gobiernos de 1968 al año 1997**

La integración de la cultura dentro de los planes de desarrollo económico y social durante los diferentes gobiernos que ejercieron el poder durante la existencia del Instituto Colombiano de Cultura (1968-1997), permite observar la relación entre la estructura administrativa de Colcultura, los programas específicos destinados al fomento y difusión de las manifestaciones culturales poniendo de manifiesto la correspondencia de la interpretación de lo que se consideraba cultura y su función en dos sentidos: la adecuación administrativa para los planes de gobierno y la progresiva aproximación a un concepto universal aglutinador de las expresiones aceptadas como patrimonio cultural. Se busca el indicio que motivo al gobierno su interés por las áreas históricas urbanas a partir de la declaración de los sectores antiguos. Surge de esta dualidad la conveniencia y transformación conceptual del monumento nacional a los BIC del ámbito nacional, departamental y municipal. Dentro de esta definición la transición del sector antiguo al centro histórico, previo al surgimiento del patrimonio urbano con la Constitución Política de 1991, desarrollado desde el año 1997 con la Ley General de Cultura, justo con la extinción de Colcultura y la creación del Ministerio de Cultura.

Como se ha mencionado durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970)<sup>93</sup> se crea el Instituto Colombiano de Cultura en el año 1968, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social<sup>94</sup>, con propuestas inexistentes para el sector de la cultura y aún vinculadas al sector de la educación. La cultura se menciona como parte integral de los programas especiales con una orientación a la *“formación y actualización de los recursos humanos que exige el desarrollo*

---

<sup>92</sup> Artículo 2, Capítulo I, Decreto 2128 de 1992 (diciembre 29) Por el cual se reestructura el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura.

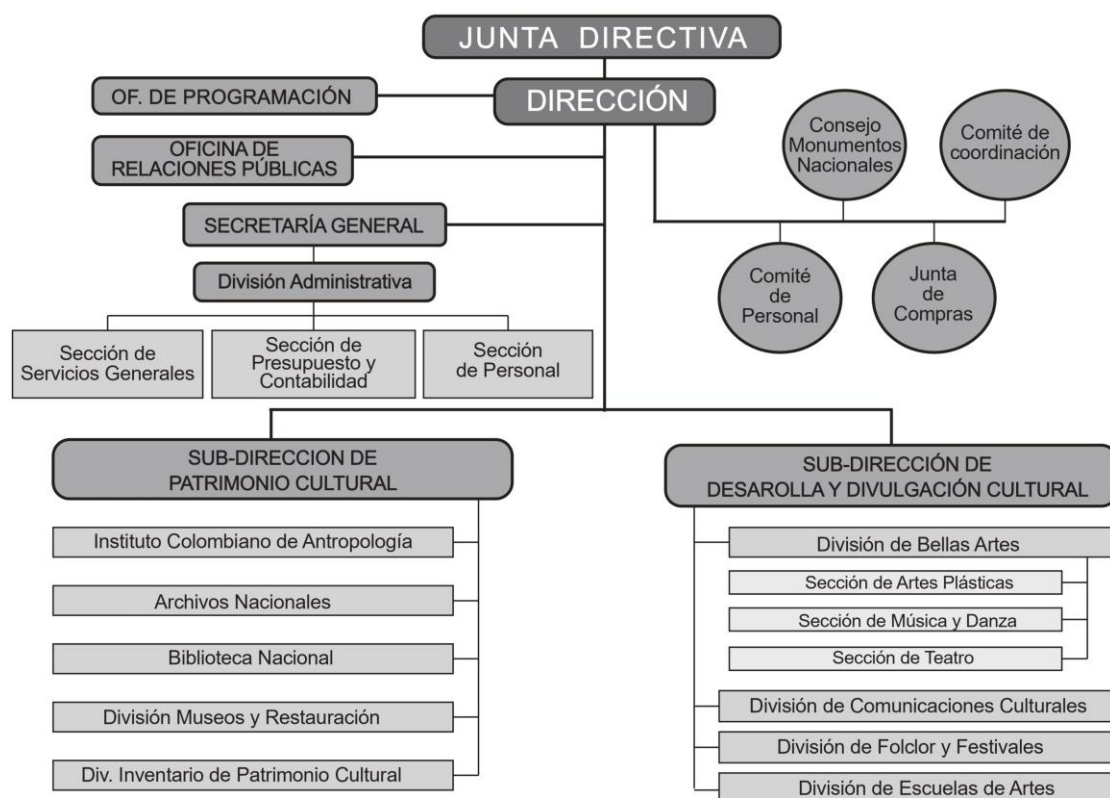
<sup>93</sup> Es necesario mencionar que dentro del periodo presidencial un año el jefe de Estado finaliza el plan de desarrollo económico y social del anterior presidente, mientras plantea y logra la aprobación del suyo, siendo ejecutado durante los tres que restan dentro del periodo constitucional de 4 años.

<sup>94</sup> Departamento Nacional de Planeación. Documento DNP-417. Diciembre 1 de 1967.

*económico, cultural, social y político del país*” siendo un criterio principal dentro de la planeación educativa (Mena & Herrera, 1994, p.109). Además de un fuerte compromiso con el desarrollo de las comunidades locales y el fomento a la preservación de la estructura tradicional de comunidades indígenas, campesinas y raizales. Al año siguiente a la creación de Colcultura, mediante de Decreto 994 de 1969 (junio 10) el presidente de la República aprueba la adopción de los estatutos de Colcultura, el cual modifica y amplía los objetivos y funciones del Instituto, al igual que las de la Junta Directiva y el director, como lo expresa el artículo 4:

el Instituto Colombiano de Cultura tendrá a cargo la elaboración, del desarrollo y la ejecución de los planes de estímulo y fomento de las artes y las letras, el cultivo del folclor nacional, el establecimiento de bibliotecas, museos y centros culturales y otras actividades en el campo de la cultura, correspondiente a la política general que formule el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Educación Nacional, y según las decisiones que tome la Junta del Instituto<sup>95</sup>.

**Figura 2.04 Estructura Interna de Colcultura según el Acuerdo 002 de 1969 (agosto 22)**



<sup>95</sup> Artículo 4, Capítulo I Naturaleza, objetivo, funciones y domicilio, Decreto 994 de 1969 (junio 10).

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo 002 de 1969 (agosto 22) y (Mena, Herrera, 1994; p.119)

En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 3154 de 1968, determina la estructura orgánica de Colcultura con el establecimiento de la línea de autoridad, el sistema de coordinación y funciones de las dependencias *“se pretendió que la estructura obedeciera no solo a conceptos técnicos y preceptos legales, sino, también atendiendo a las necesidades culturales del país”* (Mena & Herrera, 1994, p.118), con el apoyo de la Corporación Nacional del Turismo, en lo relacionado con el patrimonio urbano. A partir de esta necesidad, la Subdirección de Patrimonio Cultural asume la coordinación de las labores relacionadas con la conservación, defensa e incremento y aprovechamiento del patrimonio en sus diferentes componentes mediante el Instituto Colombiano de Antropología, la Biblioteca Nacional y la actividad de museos, el inventario y los archivos nacionales. Por su parte la Subdirección de Desarrollo y Divulgación Cultural, orienta las actividades y acciones de la División de Bellas Artes, por medio de sección de artes plásticas, música y danzas y teatro. Mientras que la División de Comunicaciones Culturales fomenta el folclor, festivales y promueve las escuelas de artes enfocadas en diversas especializadas.

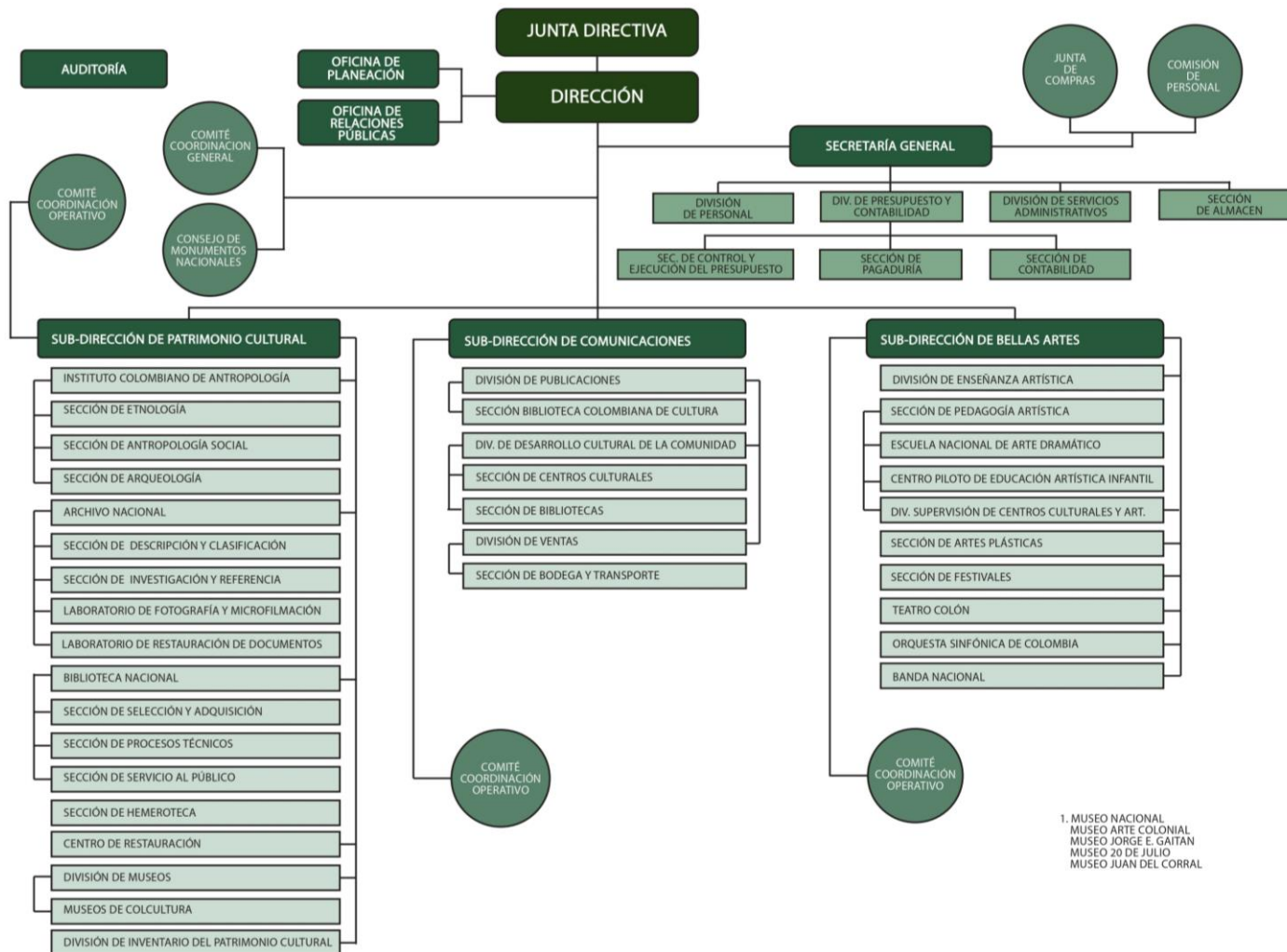
El mismo decreto que crea a Colcultura, menciona la conformación del Consejo Nacional de Cultura (CNC), *“como un organismo en la institucionalización de los asuntos culturales en Colombia a nivel gubernamental”* con funciones para asesor al Ministerio de Educación Nacional, al Gobierno Nacional, al igual que emitir conceptos. Sin embargo, el CNC no había sido activo en su función de comisión asesora y consultora del área cultural institucional. Su primera convocatoria se realiza hasta el año 1990, a pesar de haber sido creado mediante el Decreto 3154 de 1968 (diciembre 26), por el cual se crean el Instituto Colombiano de Cultura y el Consejo Nacional de Cultura (Colcultura, 1990). El Consejo tendrá las siguientes funciones:

- a) Asesorar al Ministerio de Educación en la formulación de la política tendiente a la protección, enriquecimiento y adecuada difusión del patrimonio cultural del país;
- b) Hacer recomendaciones al Gobierno Nacional acerca de las formas como debe fomentar las artes, las letras y en general la cultura en sus diferentes aspectos;
- c) Emitir concepto sobre los planes y proyectos culturales que le sean sometidos por el Ministerio de Educación;
- d) Emitir concepto sobre los programas de las entidades oficiales y privadas que adelanten actividades culturales y que reciban subvención oficial, cuando le sea solicitado por el Ministerio de Educación, y
- e) Oír en sesiones especiales a representantes de los diversos sectores y actividades culturales del país<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Artículo 20, Del Consejo Nacional de Cultural, Decreto 3154 de 1968 (diciembre 26).

**Figura 2.05 Estructura Administrativa del Instituto Colombiano de Cultura Colcultura (1974-1990)**



Fuente: Elaboración propia con base a (Salazar et al., 1989)

Lo conforman 14 miembros de diversas instituciones. El CNC *“se citó excepcionalmente en sus primeros años, sin que se tenga referencia de reuniones realizadas. Apenas en 1989, la directora Liliana Bonilla Otoy, expresó su interés en que Colcultura y el Consejo trabajaran conjuntamente”* (Mena & Herrera, 1994, pp.120-121).

En la primera etapa (1968-1974), la estructura administrativa de Colcultura le corresponde una *“gestión dirigida hacia la planeación, fomento y divulgación de las políticas, acciones y programas que conduzcan a una valoración del patrimonio”* (Salazar et al., 1989, p. 37). Su propósito está orientado a identificar la diversidad cultural, la pedagogía de la cultura y la respuesta del Estado con ideales matizados por la Constitución Política de 1886. A raíz de la aprobación de un proyecto en agosto de 1972<sup>97</sup>, cuya finalidad es identificar la capacidad técnica necesaria para que Colcultura asegurara la adecuada coordinación entre cultura y educación en el periodo de 1974 al año 1978. Como resultado del proyecto se fija una nueva estructura administrativa de Colcultura a través del Acuerdo 003 de 1974, para armonizar los retos consignados en el primer Plan Nacional de Política Cultural expedido en abril de 1974. El cual buscaba objetivos con relación a la formulación de una política pública para el sector cultura, el fomento por la lectura, el libro y las bibliotecas públicas, la implementación de centros piloto de formación artística, organización de museos, además de continuar con el inventario del patrimonio cultural e incentivar su divulgación (Mena & Herrera, 1994).

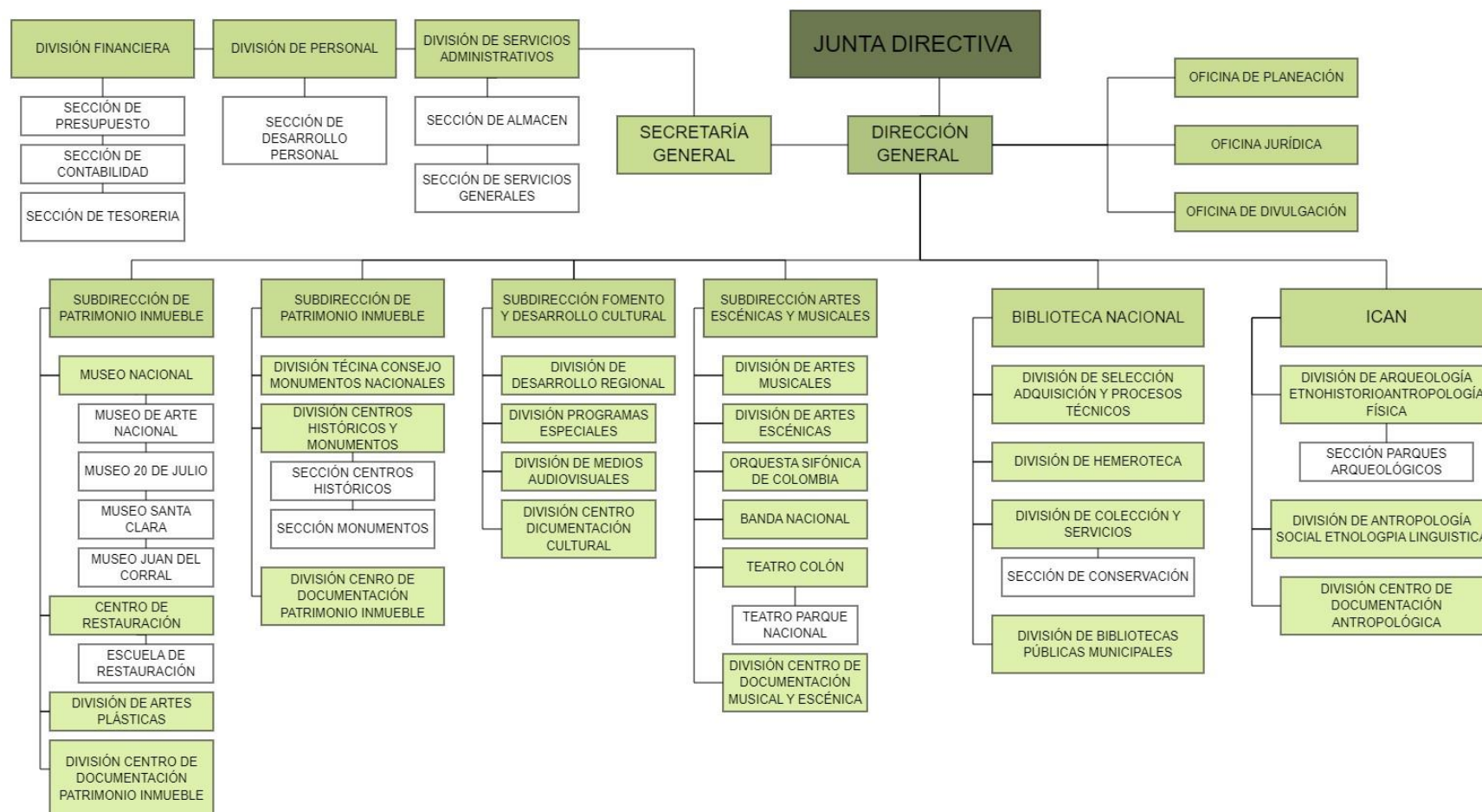
La gestión que Colcultura emprende con la nueva estructura administrativa se orienta hacia la planeación, fomento y divulgación de políticas, acciones y programas encaminados a la valoración, divulgación y apropiación del patrimonio cultural (Salazar et al., 1989). En este sentido, la estructura se compone de tres subdirecciones: la Subdirección de Patrimonio Cultural, la Subdirección de Comunicaciones Culturales y la Subdirección de Bellas Artes. Cada una de ellas concentra un objetivo específico, al igual que una serie de instituciones del Estado relacionadas con el desarrollo de actividades, colecciones, infraestructura y logística para el fomento de esta etapa del Instituto. Por su parte, la subdirección de Patrimonio Cultural concentra la mayor cantidad de especialidades desde el Instituto Colombiano de Antropología, el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, la División de Museos, el Centro de Restauración y la División de Inventario del Patrimonio Cultural. Estas últimas de mayor relación con los centros históricos y el patrimonio inmueble, sin diferenciación para los sectores urbanos declarados y sin declarar. Son funciones de la División de Inventario:

organizar, mantener actualizado y difundir el Banco Nacional de Datos, constituido por fichas de inventario debidamente catalogadas y clasificadas y mantener comunicación permanente con el Consejo de Monumentos Nacionales y con las filiales del mismo para coordinar las actividades comunes. Desde 1976 la División actúa en calidad de Comité Técnico del Consejo (Salazar et al., 1989, p. 37).

---

<sup>97</sup> Proyecto realizado entre el año 1974 y 1977, con aportes financieros de Colombia por un valor de 36.096.900 y por el PNUD con un aporte de US150.000, perfeccionado mediante el Documento DNP-909-URH-DE.

**Figura 2.06 Estructura Administrativa del Instituto Colombiano de Cultura- Colcultura- 1990-1997**



Fuente: Elaboración propia con base a (Salazar et al., 1989)



El proyecto Col/088/015 denominado “Fortalecimiento de la Cultura Regional”, que hace parte del Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina y el Caribe liderado por UNESCO y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se crea con recursos de esta última institución con un capital de 200.000 dólares, utilizados para apoyar a Colcultura en la labor de instrumentalización de las políticas de descentralización, en las siguientes actividades:

- a. La reestructuración administrativa de Colcultura
- b. La sistematización de las actividades
- c. Análisis de la financiación del sector cultural
- d. Manual sobre entidades que prestan asistencia técnica y/o financieras a las actividades culturales.
- e. Puesta en marcha de fundaciones sin ánimo de lucro para la preservación, conservación y mantenimiento del patrimonio cultural.
- f. Seminarios de capacitación interna e interinstitucional.
- g. Difusión regional a través del boletín *Gestión Cultural*<sup>98</sup> (Colcultura, 1990, p. 12).

La reestructuración de Colcultura y la fase de transición entre ambas estructuras administrativas de Colcultura se lleva a cabo en el marco del “Año Nacional de la Cultura”, entre el 1 de julio de 1989 y el 30 de junio de 1990. Declarado por el presidente de la República – Virgilio Barco Vargas- mediante el Decreto 1164 de 1989 (junio 6), donde se llevan a cabo dos actividades relevantes: a) el “*Seminario sobre Políticas Culturales en América Latina*” celebrado en Bogotá en junio de 1989, allí se presenta el documento “*Fundamentos para una política cultural*” y b) la adopción de “*Política Cultural*” por parte del Conpes<sup>99</sup> en el marco de establecido en el Plan de Economía Social del mismo presidente. (Colcultura, 1990).

Cabe destacar que dicha política cultural buscaba, conocer y conservar la naturaleza, contribuir a elevar la productividad y generación de riqueza, defender y conservar el patrimonio cultural, enriquecer la identidad cultural colombiana, afianzar la democracia y el respeto a los derechos humanos, favorecer la integración y la solidaridad social. Elevar la creatividad y mejorar el disfrute de la vida, el cual tuvo varios debates y concertaciones en un amplio número de foros, seminarios, talleres, reuniones y jornadas en diferentes regionales convocando varios niveles de vida cultural del país (Colcultura, 1990, p. 5; DNP, 1990).

Colcultura se reestructura mediante el Decreto 800 de 1990 (abril 17), motivada en las exigencias de la descentralización de la política y administración del Estado “*transformándola en un ente coordinador, planeador y de fomento de la actividad cultural*”. La nueva estructura pretende

---

<sup>98</sup> En el informe de gestión de 1989-1990 de Colcultura, se menciona: “*Se creó este boletín informativo mensual como mecanismo de comunicación nacional e interregional y como apoyo a la gestión de las Entidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del sector. En él se consagran los programas, servicios y experiencias de Colcultura, así como las distintas instituciones regionales. Han salido 12 números, tiraje: 1500 ejemplares*” (Colcultura, 1990, p. 12).

<sup>99</sup> Documento DNP 2475 UDS Colcultura, 4 de julio de 1990.

articular tres aspectos básicos: a) fortalecimiento de la Oficina de Planeación, tratamiento a nivel de las Subdirecciones a 6 áreas temáticas; b) apoyo a la actividad cultural en las regiones y, c) creación de centros de documentación (Colcultura, 1990, p. 7). La última administración de Colcultura se basa en cuatro subdirecciones: Subdirección de Patrimonio Mueble dedicada al Museo Nacional, el Centro de Restauración, la División de Artes Plásticas y División Centro de Documentación Patrimonio Mueble.

La Subdirección de Patrimonio Inmueble cuenta con tres divisiones: a) División Técnica Consejo de Monumentos Nacionales como apoyo al Consejo de Monumentos Nacionales, b) la División de Centros Históricos con la Sección de Centros Históricos y la Sección de Monumentos siendo la primera dependencia dedicada únicamente a esta temática, después de 34 años de la primera declaratoria de un conjunto urbano como monumento nacional y, c) la División Centro de Documentación Patrimonio Inmueble. A las anteriores subdirecciones se suman las de Fomento y Desarrollo Cultural y la Subdirección de Artes Escénicas y Musicales. La gran ausente es una dependencia dedicada al Patrimonio Natural a pesar de la adhesión a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 en el año 1983.

**Figura 2.07 Logotipo de Colcultura en su fase final**



Fuente: Imagen tomada del Ministerio de Cultura

A continuación, se abordan los planes de desarrollo de los gobiernos entre 1968 y el año 1997, teniendo claridad sobre la creación de Colcultura en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social del presidente Carlos Lleras Restrepo, siendo logro principal en relación con esta dimensión. El anexo I “*La cultura y Colcultura en las estructuras administrativas, planes de desarrollo y planes de cultura de los gobiernos de 1968 al año 1997*” (Página 452 y ss.), contiene los planes de gobierno durante la vigencia de Colcultura (1968-1991).

**Figura 2.08 Centro histórico del Municipio de Manizales (Caldas)**



Fuente: Imagen tomada de Destino café, autoría de Ricardo Quintero Londoño

### **2.2.2.3 Empresa Colombiana de Turismo (1957-1968) y la Corporación Nacional del Turismo (1968- 1997)**

La relación del patrimonio cultural y el turismo encuentra en los años 50 y 60 del siglo XX una alternativa conceptual de puesta en valor de los monumentos (Prats, 1997), “...como un modo de atraer turistas y así justificar la necesidad de financiar su restauración para convertirlos en fuentes de ingresos...” (Mutual, 2000, p. 120).

*La idea de “poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habitarlo en las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento”, de tal forma, introduce la variable “de poner en productividad una riqueza inexplorada mediante un proceso de revalorización que lejos de mermar su significación puramente histórica o artística, la acrecienta, pasándola del dominio exclusivo de minorías eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares” (Normas de Quito, 1967).*

Bajo dos acciones simultáneas: la difusión y masificación del acceso al patrimonio. En “*el caso de Iberoamérica sería contribuir al desarrollo económico de la región*”<sup>100</sup>, este concepto de financiación mediante el turismo fue recogido en 1967 por la Organización de Estados Americanos (OEA), que promovió las Normas de Quito sobre restauración (Mutual, 2000,

<sup>100</sup> Inciso 1,2,3 y 4, Capítulo VI. La puesta en Valor del Patrimonio Cultural. Normas de Quito de 1967.

p.121). Las Normas de Quito de 1967, se derivan del Informe final de la Reunión sobre la conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y artístico, promovida por Icomos a través de la OEA, donde se expresa sobre la relación del patrimonio cultural y el turismo:

Los valores propiamente culturales no se desnaturalizan ni comprometen al vincularse con los intereses turísticos y, lejos de ello, la mayor atracción que conquistan los monumentos y la afluencia creciente de admiradores foráneos, contribuyen a afirmar la conciencia de su importancia y significación nacionales. Un monumento restaurado adecuadamente, un conjunto urbano puesto en valor, constituyen no sólo una lección viva de historia sino un legítimo motivo de dignidad nacional. En el más vasto marco de las relaciones internacionales, esos testimonios del pasado estimulan los sentimientos de comprensión, armonía y comunidad espiritual aún entre pueblos que se mantienen rivales en política. Cuanto contribuya a exaltar los valores del espíritu por ajena que la intención promovente resultase ser a la cultura, ha de derivar en beneficio de ésta. Europa debe al turismo, directa o indirectamente, la salvaguarda de una gran parte de su patrimonio cultural condenado a su completa e irremediable destrucción y la sensibilidad contemporánea, más visual que literaria, tiene oportunidad de enriquecerse con la contemplación de nuevos ejemplos de la civilización occidental rescatados técnicamente gracias al poderoso estímulo turístico<sup>101</sup>

La recomendación consignada en las Normas de Quito, con relación al patrimonio cultural y turismo define “*que los intereses propiamente culturales y los de índole turística se conjugan en cuanto concierne a la debida preservación y utilización del patrimonio monumental*”. Sugiere y se “*hace aconsejable que los organismos y unidades de una y otra área de la actividad interamericana laboren en ese sentido en forma coordinada*”<sup>102</sup>. Para la época en Colombia en lo referente a los monumentos se encontraba en cabeza del Ministerio de Educación, mientras el turismo se encontraba liderado por la Empresa Colombiana de Turismo fundada en 1957 y cuyo objeto era promover el desarrollo e industrialización de la actividad en Colombia (Fedesarrollo, 1972).

Los logros de la Empresa Colombiana de Turismo fueron limitados durante su existencia legal, debido a la poca planificación y organización de campañas publicitarias, eventos regionales e inversiones dispersas sin un criterio para formular prioridades. Al igual que la poca destreza administrativa en el uso adecuado de los recursos económicos asignados. En este sentido, las inversiones en infraestructura, así como su desempeño general fueron poco productivos con una deficiente calidad y poca oferta de servicios turísticos, atribuidos principalmente a la carencia de una política pública para el sector. Aunque podría presumirse que el origen de la Corporación Nacional del Turismo en el año 1968 obedece a las recomendaciones de las Normas de Quito, la motivación principal para su creación fue la celebración del XXXIX

---

<sup>101</sup> Inciso 1, Capítulo VII. Los monumentos en función del turismo. Normas de Quito de 1967.

<sup>102</sup> Inciso 5, VII. Los Monumentos en función de turismo. Normas de Quito de 1967.

Congreso Eucarístico Internacional en Bogotá<sup>103</sup> en agosto de 1968, ya que la preparación se encontraba en un estado prematuro (Fedesarrollo, 1972, p. 126).

Con la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en 1957, depuesto por diversas fuerzas políticas, económicas y universitarias y remplazado por la Junta Militar que inicia transición hacia una nueva propuesta democrática denominada el Frente Nacional (1958-1974) caracterizado por la alternancia de los partidos políticos tradiciones liberales y conservadores, cuya finalidad era resolver el conflicto y la agudización de la violencia en varias regiones del país. Para algunos promotores se considera en sí mismo un proyecto cultural por excelencia, con su momento cumbre con la creación de Colcultura y la Corporación Nacional del Turismo en 1968, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (Escovar & Cárdenas, 2018). En 1968 se crea la Corporación Nacional de Turismo (CNT), mediante la Ley 60 de 1968, *“por la cual se establecen estímulos a la industria del turismo y se dictan otras disposiciones”*, dentro de las funciones se encuentran:

- a) Solicitar del gobierno que se declaren recursos turísticos nacionales aquellas zonas urbanas o rurales, plazas, vías, monumentos, construcciones u otras que, a su juicio, deban de desarrollarse con sujeción a planes especiales, preservarse o adquirirse por la Corporación o el Estado, de acuerdo con los fines de aquella;
- b) Coordinar, reglamentar y controlar, de acuerdo con las autoridades competentes, el desarrollo urbanístico dentro de las áreas a que se refiere el literal anterior;
- c) Expropiar, cuando su adquisición por la Corporación aparezca aconsejable siempre y cuando hayan resultado infructuosos los intentos de negociación directa con los propietarios, las zonas urbanas o rurales, monumentos y otras obras declaradas como recursos turísticos nacionales, todo de conformidad con las leyes que regulan el procedimiento ordinario de la expropiación y previa aprobación del Gobierno Nacional, impartida mediante resolución ejecutiva<sup>104</sup>.

Así como otras funciones lo que llevó a la modificación de la composición del Consejo de Monumentos Nacionales para incluirla. La CNT como entidad sucesora de la Empresa Colombiana de Turismo fue concebida con funciones específicas, poder administrativo y económico para orientar el desarrollo del sector turístico. En el campo del patrimonio cultural

---

<sup>103</sup> En 1965 fue seleccionada la ciudad de Bogotá como sede del XXXIX Congreso Eucarístico Internacional, a desarrollarse en agosto de 1968 con la visita del Papa Paulo VI. Este evento, tuvo mayor relieve en el exterior por la asistencia del pontífice, se constituyó el primer contacto de Colombia con el turismo internacional a gran escala. El evento generó la construcción de infraestructura urbana, obras públicas e implementación de la logística necesaria para el hospedaje, transporte y seguridad de un evento de esta envergadura. Muchos turistas fueron hospedados en sitios tan distantes de Bogotá como la ciudad de Medellín, estableciéndose un "puente aéreo" entre las dos ciudades para la comodidad de los peregrinos (IDPC, 2017)

<sup>104</sup> Artículo 3, Ley 60 de 1968 (diciembre 26), por la cual se establecen estímulos a la industria del turismo y se dictan otras disposiciones.

la CNT emprende estudios e investigaciones encaminados al “*reconocimiento y la valorización de los bienes arqueológicos, históricos y monumentales como un recurso para el desarrollo turístico*” (Escovar & Cárdenas, 2018, p. 193). Claramente orientado a suscribirse a lo sugerido en las Normas de Quito de 1967.

La Corporación tiene tres líneas de producción con relación al patrimonio cultural. De un lado la “*elaboración de guías de poblados y lugares de interés, como Popayán (1969), Villa de Leyva y Sáchica (1970)*”, también de los parques arqueológicos de San Agustín y Tierradentro (1976) (Escovar & Cárdenas, 2018; p. 193). Una segunda línea de acción implementada desde inicio de la década de los años 70. La CNT incursiona en la rehabilitación del patrimonio cultural construido con la restauración de la casa de hacienda El Salitre en Paipa (Boyacá), la iglesia de San Ignacio (1972) a cargo de Hernando Acevedo, la casa del Te Deum en Mompox (Bolívar) para acomodar el hostel Doña Manuela, o de la Quinta de San Pedro Alejandrino (1973) en Santa Marta (Magdalena) dirigida por el Arquitecto Jaime Salcedo Salcedo (1943-2013). Una de las más llamativas intervenciones fue la adecuación del antiguo cuartel de las bóvedas [...] en Cartagena de Indias, entre 1969 y 1970 para actividades comerciales, o en esa misma ciudad la casa del marqués de Valdehoyos, adecuada como su sede. También se destaca la restauración de la casa de la hacienda El Paraíso (1986), el cerrito (Valle del Cuaca), dirigida por el arquitecto Jose Luis Giraldo (Escovar & Cárdenas, 2018, pp. 193-194).

En una tercera línea de acción la CNT desarrolló las reglamentaciones de algunos centros históricos a partir de lo determinado en la Ley 163 de 1959, mediante encargo a “*historiadores y restauradores prestigiosos del momento*” (Beuf, 2015, p. 14). Como las de Santa Cruz de Mompox: estudio morfológico y reglamentario realizada por el Arquitecto Alberto Corradine en 1981, el Estudio Repertorio Formal de Arquitectura Doméstica: Cartagena de Indias, época colonial, realizado por el arquitecto Germán Téllez y Ernesto Moure (Escovar & Cárdenas, 2018, p.200). Amparado en esta función la CNT emprende estudios e investigaciones dirigidos al reconocimiento y valoración de bienes arqueológicos, históricos y monumentales como recurso para el desarrollo turístico (Escovar & Cárdenas, 2018, p.193). Con una función complementaria y en ocasiones contradictoria en el campo de la recuperación del patrimonio, en gran medida por estar ligada a las políticas turísticas con la valoración y recuperación del patrimonio inmueble. Realiza la contratación para la elaboración de los estudios de reglamentación de Cartagena, Mompox, Villa de Leyva y Honda, además de apoyar proyectos de restauración de inmuebles y entidades que adecúen los edificios para fines turísticos (Salazar et al.,1989, p.40).

La transformación de la Empresa Colombiana de Turismo en Corporación Nacional de Turismo generó nuevas oportunidades en el campo de la financiación, a partir del conocimiento real de los recursos turísticos en especial los relacionados con el Patrimonio Monumental. Es así, como en mayo de 1969, se celebra el primer contrato que la Universidad Nacional suscribía con el apoyo de la facultad de arquitectura para realizar un estudio sobre la arquitectura y el urbanismo en Mompox (Corradine, p.329). “Mompox: arquitectura colonial” producto de investigación patrocinado por la CNT y elaborado por la Universidad Nacional de Colombia en

cabeza del arquitecto Alberto Corradine fue publicado en 1969, para que desde 1970 Santa Cruz de Mompox contará con disposiciones y normas del orden municipal para su conservación arquitectónica, sin embargo, hasta 1983, mediante el Acuerdo Municipal 016, aprobó el Código de Urbanismo, como complemento al estudio morfológico y reglamentario elaborado en 1969 (Isaza, 1999 p.94).

La Corporación Nacional del Turismo y la Organización de Estados Americanos encargo al arquitecto mexicano Carlos Flores Marini, un nuevo estudio de la ciudad de Cartagena, con el objetivo recuperar y restaurar el recinto amurallado. Fue publicado en 1972 bajo el título “Revitalización de Cartagena Antigua”. (Salazar et al., 1989, p.21). Este trabajo tuvo apoyo por parte del CNT a través de los arquitectos colombianos Roberto de La Vega y Alberto Zamudio Tallero, quienes se encargaron de liderar la elaboración de los levantamientos arquitectónicos y la consecución de la documentación histórica (Escovar & Cárdenas, 2015, p.175). La imagen que impulsa la CNT desde su creación en 1968, “*es una Colombia exótica, folclórica, a la vez moderna y urbana*”, esto debido a la precisión de las políticas para el desarrollo turístico del país, especialmente por la emisión de certificados de desarrollo turístico.

#### **2.2.2.4 Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano (1976)**

Con la ausencia dejada por el cese de funciones de la División de Inventario, en la promoción y difusión del patrimonio, se crea en 1976, la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural Colombiano, iniciativa liderada por el entonces gerente del Banco de la República de Colombia Germán Botero de los Ríos, se integran como cofundadores Acerías Paz del Río, la Corporación Financiera Popular, el Banco de Colombia, la Corporación Nacional de Turismo, el Banco de Bogotá, el Instituto Colombiano de Cultura y la Universidad Javeriana, en su junta directiva se incorporan un delegado de la Academia de Historia, un delegado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y uno del Banco Central Hipotecario (Paláu, 2012, p.33).

El interés del Banco de la República por la cultura se remonta a la solicitud del Ministerio de Educación en el año 1939, sobre la necesidad de consolidar la colección de objetos precolombinos, complementada con la compra de colecciones privadas, con el fin de reconocer el valor cultural e histórico. Culmina con la creación del Museo de Oro en 1944, además de la publicación del “*catálogo elaborado por el arqueólogo Gregorio Hernández de Alba*”; otras instituciones y proyectos vinculados al banco son la Biblioteca Luis Angel Arango, el Museo Casa de la Moneda (Escovar & Cárdenas, 2018, p. 225), el Museo Botero y desde el año 2016 el Museo de Arte Miguel Urrutia –MAMU-.

El objetivo de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural Colombiano (FCPCC), acorde con el concepto de valoración patrimonial vigente al momento de su creación, privilegia la recuperación, rescate del monumento arquitectónico, histórico y de potencial turístico, además de fomentar, patrocinar y ejecutar programas de conservación, restauración de

bienes muebles e inmuebles. A pesar de que estos criterios puedan parecer restrictivos, limitados y hasta anticuados a las nuevas generaciones de restauradores, determinaron en ese entonces, los patrones de valoración patrimonial. Sin embargo, la fundación tanto en teoría como en la praxis asumió posiciones más contemporáneas (Paláu, 2012, p.35)

La presencia de la FCPCC en el ámbito de cultura, especialmente del patrimonio, motivo y facilitó la presencia de profesionales y especialistas internacionales en el país<sup>105</sup>, además de fomentar “*la capacitación de profesionales locales mediante becas de formación en el exterior y auxilios para investigadores*”, de temas relacionados “*con la arqueología, la orfebrería hispánica, la historia, la museología, la museografía*”, estimulando la incursión en la conservación y gestión de bienes muebles, hasta entonces campos poco abordados y necesarios. Las destrezas adquiridas por los técnicos y la gestión de la FCPCC permiten la intervención entre la fundación y el año 1991, un total de 65 obras y proyectos de total o parcial financiación, comprendido por iglesias y casas del periodo colonial de destacados personajes de la historia nacional (Escovar & Cárdenas, 2018, p. 227-231).

Entre la creación de la FPCC en 1976 y el año 1991, se realizan estudios preliminares y obras de restauración parcial y total en ocho sectores antiguos: Tunja, Villa de Leyva, Monguí, Bogotá, Cartagena, Popayán, Pamplona y Pasto y en otros centros urbanos: Chiquinquirá, Tópaga, Sopó, Manizales, Bello y Providencia (Salazar et al., 1989, p.41). Se encuentran también patrocinos, asesorías, estudios, inventarios e intervenciones para municipios Tibasosa, Oicatá, Betétiva y Ramiriquí en Boyacá, estudios, al igual que levantamientos y otras acciones de conservación, restauración o divulgación del patrimonio, como el estudio de reglamentación urbana y protección del casco histórico de Facativá, Suesca y Zipaquirá en los años 90. (Paláu, 2012, p.46)

Como mecanismo para ampliar su capacidad de acción, basados en los esquemas de participación estudiantil y convenios con universidades, principalmente con facultades de arquitectura, se efectúan en diversas regiones del país, acciones de levantamientos de inmuebles arquitectónicos y urbanos, formulación de proyectos de restauración en el municipio de Suesca, encargada a la Universidad de La Salle, en Oicatá a cargo de la Universidad de América, municipio de El Socorro comisionado a la Universidad Santo Tomás y la ciudad de Bogotá con la Universidad La Gran Colombia y la Corporación de Artes y Letras (Paláu, 2012, p.50).

La Corporación Nacional del Turismo (1968), el Fondo de Inmuebles Nacionales (1971) y la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural Colombiano (1976), actúan de forma desarticulada, debido a los mecanismos como se toman las decisiones, además de la composición de las juntas directivas que no se tienen presencia de Colcultura, en gran medida las inversiones responden a criterios coyunturales. A estas características se suma el desacato al fuero del Consejo de Monumentos Nacionales, así como la ausencia en los procedimientos en

---

<sup>105</sup> Entre ellos el restaurados mexicano Rodolfo Vallín Magaña (pintura mural),



la solicitud de autorizaciones para la aprobación de proyectos de intervención (Salazar et al., 1989, p.42).

A pesar de las diferencias con el nivel interinstitucional, el alcance de las intervenciones de la FCPCC adelanta trabajos de restauración en la ciudad de Tunja en las iglesias de Santo Domingo (1983), San Ignacio, Santa Clara la Real, Santa Bárbara, San Agustín y la Catedral Metropolitana (1986), en el departamento de Boyacá se realizan obras de conservación en templos doctrineros de Tópaga, Betéitiva y Turmequé y la estación del ferrocarril de Chiquinquirá (1986). También se realizan trabajos en la ciudad de Popayán<sup>106</sup>, Cali, Pamplona, Barranquilla, Cartagena, Mompox y Simití, intervenciones realizadas con el apoyo de la Corporación Nacional del Turismo, el Fondo de Inmuebles Nacionales, Colcultura y entidades del orden financiero (Escovar & Cárdenas, 2018, p.234, 240).

La década de los setenta fue un periodo de gran actividad académica y técnica en torno al patrimonio construido del país, con la celebración de numerosos eventos académicos, como los Seminarios de Restauración de Monumentos Arquitectónicos, organizados por la Pontificia Universidad Javeriana y su Instituto de Investigaciones Estéticas, complementado en 1976 con el II Seminario Interamericano de Conservación y Restauración del Patrimonio Monumental. (Escovar & Cárdenas, 2018, p.241)

Por su parte, los años 80 del siglo XX la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano apoyo y multiplica la experiencia de los trabajos de recuperación, revitalización, restauración de monumentos nacionales basados en estudios histórico-técnicos arquitectos (Salazar et al., 1989, p. 21), la actividad de la fundación declino a finales de los años 80, siendo concluida con la constitución política del año 1991, donde se prohíbe al Estado realizar aportes económicos a fundaciones, desde esta momento

se centró en temas relacionados con la investigación, con iniciativas como el Centro de Referencias Patrimoniales, que actuó entre los años 1992 y 1997 y posibilito la conformación de una importante base de datos conformados por 15827 registro planimétricos, fotográficos y documentales de 4291 inmuebles con valor patrimonial (Escovar & Cárdenas, 2018, p.243)

### **2.3 Las declaratorias: origen del patrimonio urbano**

Con la Ley 163 de 1959 se crea la declaratoria e instaura como el mecanismo por excelencia para reconocer e incorporar a la categoría de Monumento nacional al patrimonio histórico y artístico nacional de origen prehispánico, colonial, de civilizaciones y culturas pasadas, obra de

---

<sup>106</sup> Especialmente con la financiación de proyectos y obras de restauración derivados del terremoto ocurridos el 31 de marzo de 1983, durante la semana santa, ocurrido en Popayán, con la afectación de todos los edificios eclesiásticos y civiles del centro históricos, planteando dos grandes retos al Estado: la ausencia de un cuerpo técnico profesional capacitado para la intervención del patrimonio y la suficiencia institucional para la recuperación y conservación del patrimonio mueble e inmueble (Escovar & Cárdenas, 2018, p.286-287)

la naturaleza o de la actividad humana que, por la vulnerabilidad de su condición, requería de medidas de defensa y conservación por su característica de monumento público de la nación. La finalidad del epígrafe es describir y contextualizar la declaratoria como el instrumento de protección del patrimonio en Colombia, también se analiza su evolución, encadenamiento en términos institucionales y urbanísticos. La declaratoria es en la actualidad un acto administrativo definido por la Ley 1185 de 2008<sup>107</sup> modificación al artículo 4 de la Ley 397 de 1997<sup>108</sup> – Ley General de Cultura-:

*“...La declaratoria de un bien material como de interés cultural, o la inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial es el acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto en esta ley, la autoridad nacional o las autoridades territoriales, indígenas o de los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según sus competencias, determinan que un bien o manifestación del patrimonio cultural de la Nación queda cobijado por el Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia previsto en la presente ley...”<sup>109</sup>.*

La declaratoria de Bien de Interés Cultural (en adelante BIC) *“podrá recaer sobre un bien material en particular, o sobre una determinada colección o conjunto, caso en el cual la declaratoria contendrá las medidas pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible”<sup>110</sup>*

En este sentido, se consideran:

*“...como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993<sup>111</sup> y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial...”<sup>112</sup>.*

---

<sup>107</sup> Ley 1185 de 2008 (marzo 12), por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 46929 de marzo 12 de 2008.

<sup>108</sup> El artículo 4 define el Patrimonio Cultural de la Nación, así como el ámbito de aplicación. El párrafo 1, determina que *“...Los bienes declarados monumentos nacionales con anterioridad a la presente ley, así como 105 bienes integrantes del patrimonio arqueológico, serán considerados como bienes de interés cultural. También podrán ser declarados bienes de interés cultural, previo concepto del Ministerio de Cultura, aquellos bienes que hayan sido objeto de reconocimiento especial expreso por las entidades territoriales...”*. Ley 397 de 1997 (agosto 07).

<sup>109</sup> Artículo 1, Modificación al artículo 4 de la Ley 397 de 1997. Ley 1185 de 2008 (marzo 12).

<sup>110</sup> Ibidem

<sup>111</sup> Ley 70 de 1993 (agosto 27).

<sup>112</sup> Artículo 1, Modificación al artículo 4 de la Ley 397 de 1997. Ley 1185 de 2008 (marzo 12).

En otras palabras, aunque la función principal de la declaratoria es integrar nuevas expresiones y manifestaciones al patrimonio cultural, se pueden distinguir, al menos en términos jurídicos, dos momentos de declaratorias que corresponden a dos marcos regulatorios y a dos concepciones de las políticas de protección del patrimonio urbano:

- a) Un primer momento, bien estudiado en las páginas precedentes, en el que se atribuye a los sectores urbanos declarados la calidad de monumento nacional al amparo del concepto del patrimonio histórico, artístico y monumentos de públicos de la Nación bajo medidas de defensa y conservación vigente desde 1959 al año 1997<sup>113</sup>.
- b) Un segundo momento, encadenado al anterior, en el que la declaratoria va asociada al reconocimiento como bien de interés cultural, bajo la ideología del patrimonio cultural vigente desde el año 1997 a la fecha.

La declaratoria, en definitiva, es un instrumento que ha mantenido cierta continuidad a lo largo de ambos momentos. Su procedencia obedece a un movimiento general en América Latina de juridicización de la producción del patrimonio que, en el caso de Colombia, queda amparado por su propia ley de protección y conservación de monumentos desde 1959 hasta hoy. En el marco jurídico actual, el acto introductorio de un BIC al reconocimiento en esta dignidad es la declaratoria. Para que una “zona, objeto, edificio o conjunto urbano” pueda ser declarado bien de interés cultural, debe:

*“...contener todos o algunos de valores de orden histórico, estético o simbólico, los cuales contendrán los criterios de valoración que se basan en la antigüedad, autenticidad, constitución, forma, estado de conservación, contexto ambiental, contexto urbano, contexto físico, representatividad y contextualización sociocultural del mismo...”*<sup>114</sup>

El reconocimiento de los valores descritos en un bien requiere la aplicación de un método riguroso según las necesidades de interdisciplinariedad es sometido el objeto o el BIC previo a su declaración. Por último, la declaratoria tiene efectos muy importantes como, por un lado, sujetar a los propietarios a la obligación de solicitar una autorización para intervenir el bien declarado (Melé, 2006, p.81) y, por otro, reconocer también dentro del amparo de protección y conservación al contexto inmediato. A pesar de su continuidad en diversos marcos jurídicos y su consolidación como herramienta de protección del patrimonio urbano, las declaratorias no se han aplicado en Colombia de manera uniforme ni continua y el conjunto de áreas urbanas declaradas está lejos de formar un corpus homogéneo

---

<sup>113</sup> Recordemos, que antes de la definición de la declaratoria realizada por la Ley 397 de 1997 y modificada por la Ley 1185 de 2008, la Ley 163 de 1959 ya había previsto la posibilidad de “calificar y declarar” como “monumentos nacionales”, y por tanto como parte del “patrimonio histórico y artístico nacional”- los sectores antiguos hacen referencia al conjunto urbano, marco de plaza de los sectores de origen colonial de los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX, en la que se incluye los de carácter republicano.

<sup>114</sup> Ibidem.

### **2.3.1 Catalogación de las declaratorias (1954-2018)**

El patrimonio urbano reconocido y declarado en Colombia como BIC del ámbito nacional ésta conformado por 45 centros históricos. Se trata de un corpus integrado a lo largo de 6 décadas y media como resultado de una sucesión de declaratorias que, en su conjunto, permiten observar las características y particularidades del proceso de patrimonialización urbana en Colombia. La apreciación en la dinámica de cambios y permanencias de una trayectoria se enfoca en cuestiones de tiempo y secuencia lo que constituye un mecanismo de apreciación de los procesos históricos (Pierson & Skocpol, 2008).

El análisis de las 45 declaratorias de los centros históricos se ha sintetizado en la figura 2.09 y el anexo IV (pág.513 y ss.). Como resultado de ese estudio, se ha elaborado una catalogación de las declaratorias en términos de tiempo y secuencia que permite aproximarse a reconocer particularidades o concurrencias de recursos políticos, actores y eventos, finalmente se pretende describir patrones de desarrollo o resultados distributivos Farfán, 2007). Junto a ello, la sucesión de argumentos implícitos puede aportar a la explicación del orden de las decisiones y acciones a lo largo de la trayectoria.

La catalogación de las declaratorias por generaciones se apoya en tres categorías construidas a partir de variables:

- a. El área urbanística que se reconoce como monumento nacional o BIC es la primera de las variables que incide en la construcción de las categorías (sector antiguo, centro histórico, marco de plaza, conjunto urbano) Esta variable es significativa en cuanto denota la progresión y encadenamiento de términos para precisar el área urbana objeto de la declaratoria.
- b. Otra variable determinante en la categorización de las generaciones de declaratorias es la entidad encargada de declarar y gestionar el bien patrimonial conforme al marco legal. El encadenamiento de la institución declarante que inicia con el Gobierno nacional mediante Ley, sin previsión de gestión; lo sucede la declaración por Decreto por parte del Ministerio de Educación y gestión por parte de Colcultura y finalmente, en el marco de la Ley de 1997 se declara por medio de Resolución del Ministerio de Cultura y gestión a cargo de la entidad territorial bajo la supervisión de Mincultura. El carácter institucional y la gestión del área urbana declarada permite observar la participación ciudadana, así como la descentralización del acto.
- c. La declaratoria mediante un acto colectivo o individual le otorga un carácter excepcional y un sentido a la selección de los centros históricos integrados al patrimonio urbano reconocido.

La catalogación de las declaratorias en cuestión de tiempo y secuencia, permiten aproximarse a reconocer particularidades o concurrencias de recursos políticos, actores y eventos que pueden

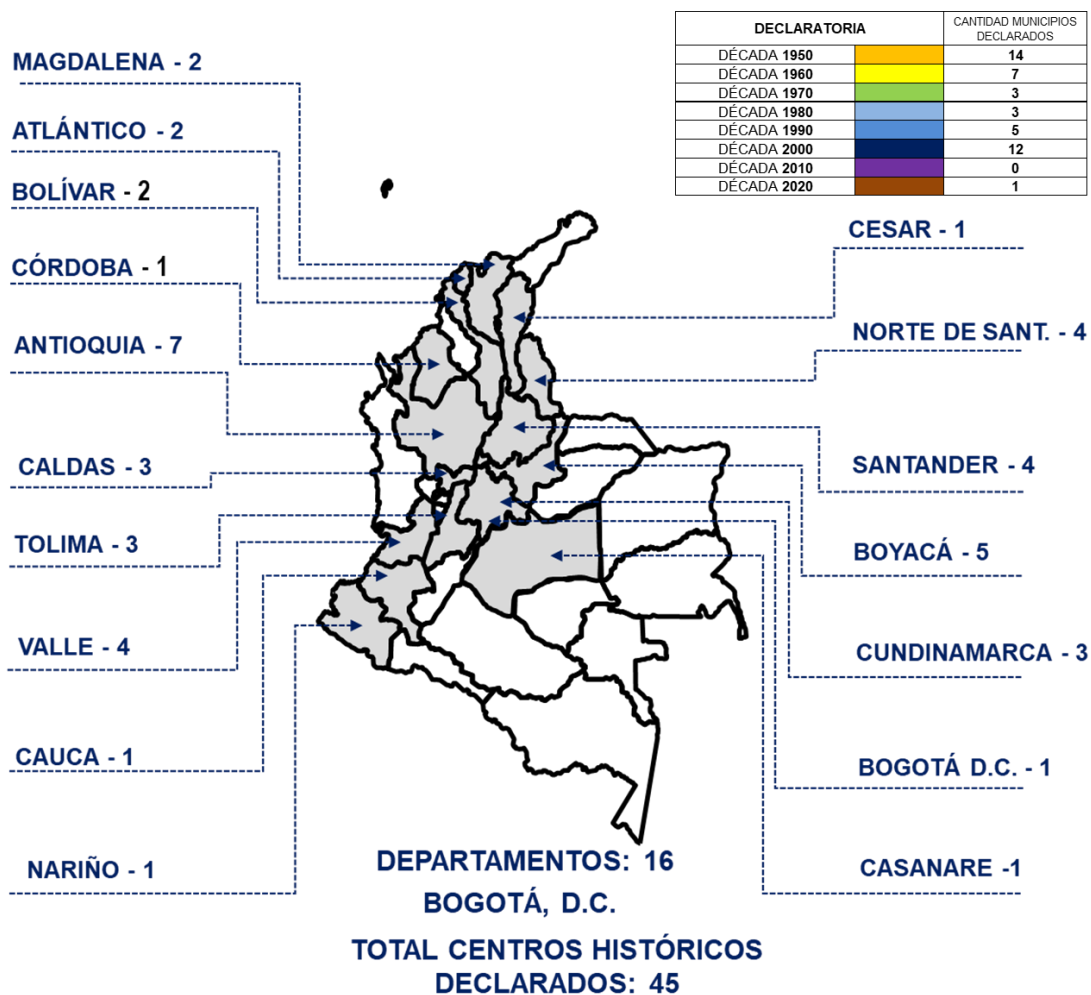
describir patrones de desarrollo o resultados distributivos (Farfán, 2007). Al igual que la sucesión de argumentos implícitos pueden aportar a la explicación del orden de las decisiones y acciones a lo largo de la trayectoria. Desde la aproximación a la “*causalidad histórica*” las dinámicas desatadas por un evento o proceso en un punto en el tiempo se reproducen, incluso en ausencia de la recurrencia del evento o proceso original (Stinchcombe, 1968).

La asignación del reconocimiento al área urbana histórica como Monumento nacional o BIC al igual que la entidad encargada de declarar y gestionar el centro histórico dentro del marco legal, son determinantes en el momento de identificar las generaciones. De tal forma, la primera generación está compuesta por los actos administrativos comprendidos entre los años 1954 a 1963, que corresponden a la declaratoria de Villa de Leyva, la Ley de patrimonio de 1959 y su Decreto reglamentario de 1963, basados en el criterio expresado en el MGDТ se considera como fase preformativa del patrimonio urbano sobre el precepto de la creación jurídica (Melé, 2006). Entre los años 1963 y 1971 no hay declaratorias de sectores antiguos debido a la configuración institucional y administrativa del patrimonio histórico según las nuevas necesidades de gestión y manejo.

La segunda generación comprendida entre el año 1971 a 1996, agrupa la declaratoria de la fase de transición entre el concepto del sector antiguo al centro histórico con un giro evidente en la noción del área urbana patrimonial y el surgimiento de las primeras limitaciones de la ley de patrimonio histórico, corresponde al periodo formativo según el MGDТ. Finalmente, entre el año 1999 y 2018 bajo el marco de la Ley general de cultura se esboza la fase de encerramiento y simultáneamente la emergencia de perspectivas para el manejo y gestión del patrimonio urbano en el futuro inmediato.

La catalogación de las declaratorias en generaciones evidencia de manera preliminar una aproximación científica a los bienes inmuebles urbanos y arquitectónicos mediante técnicas de valoración y mecanismos de reconocimiento de los atributos como factor de igualdad basado en métodos multidisciplinarios, establecidos en la ley general de cultura desde 1997, procedentes de las cartas y tratados internacionales. Los instrumentos jurídicos utilizados para la promulgación de la declaratoria y conformación del corpus urbano del ámbito nacional cambian en cada generación.

**Figura 2.09 Localización del patrimonio urbano BIC del ámbito nacional en Colombia**



DEPARTAMENTO	CIUDAD	FUNDACIÓN	DECLARATORIA
ANTIOQUIA	Santafé de Ant.		Ley 163 de 1959
BOLIVAR	Cartagena de Indias	1533	Ley 163 de 1959
	Santa Cruz de Mompox	1537	Ley 163 de 1959
BOYACÁ	Tunja	1539	Ley 163 de 1959
	Villa de Ieyva	1572	Dec. 3641/54 Ley 163/59
CAUCA	Popayán	1536	Ley 163 de 1959
CUNDINAMARCA	San Miguel de Guaduas	1644	Ley 163 de 1959
MAGDALENA	Santa Marta	1524	Ley 163 de 1959
NARIÑO	San Juan de Pasto	1539	Ley 163 de 1959
TOLIMA	San Sebastián de Mariquita	1549	Ley 163 de 1959
VALLE	Guadalajara de Buga	1558-1569	Ley 163 de 1959
	Cartago	1540-1691	Ley 163 de 1959
	Santiago de Cali, La Merced	1536	Ley 163 de 1959, Dec. 789/71
	El Cerrito	1560	Ley 163 de 1959
ANTIOQUIA	Marinilla	1709	Dec. 264 de 1963
	Rionegro	1581	Dec. 264 de 1963
BOGOTÁ D.C.	Bogotá D.C.	1538	Dec. 264 de 1963
NORTE DE SANTANDER	Pamplona	1549	Dec. 264 de 1963
SANTANDER	San Gil	1689	Dec. 264 de 1963
	San Juan de Girón	1631	Dec. 264 de 1963
	Socorro	1683	Dec. 264 de 1963
NORTE DE SANTANDER	Villa del Rosario	1734	Dec. 102 de 1971
SANTANDER	Barichara	1752	Dec. 1654 de 1978
TOLIMA	Honda	1560	Dec. 1192 de 1977
ANTIOQUIA	Jardín	1860	Dec. 1132 de 1985
BOYACÁ	Turmequé	Siglo XVI	Dec. 1940 de 1989
TOLIMA	Ambalema	S. XVII Y XVIII	Dec. 776 de 1980
ANTIOQUIA	Concepción	1760	Res. 1617 de 1999
ATLÁNTICO	Barranquilla	1629	Res. 1614 de 1999
CALDAS	Manizales	1849	Dec. 2178 2-12-96
CUNDINAMARCA	Tenjo	1603	Dec. 2530 de 1993
MAGDALENA	Ciénaga	1538 - 1751	Dec. 2012 de 1996
ANTIOQUIA	Abejorral	1808	Res. 619 de 2002
ATLÁNTICO	Barrio El Prado, Bellavista y Altos del Prado.	1919-1930	Res. 0087 de 2005
BOYACÁ	Iza	Siglo XVII	Res. 617 de 11-04-2002
	Monguí	1601	Res. 0087 2-2-2005
	Aguadas	1808-1814	Res. 1883 28-09-2001
CALDAS	Salamina	1827	Res. 0087 2-2-2005
CASANARE	Pore		Ley 936 30-7-2004
CESAR	Valledupar	1550	Res. 795 16-6-2000
CORDOBA	Santa Cruz de Lorica	1722	Res. 796 16-6-2000
CUNDINAMARCA	Zipacquirá	1692-1758	Res. 0087 2-2-2005
	El Carmen	1686	Res. 0929 25-07-2005
NORTE DE SANTANDER	Playa de Belén	1862	Res. 0928 25-07-2005
ANTIOQUIA	Jérico		Resolución 0663 de 2018

Fuente: Elaboración propia

### 2.3.1.1 Primera generación de declaratorias: 1954-1963

El Decreto 3641 del 17 de diciembre de 1954 declara monumento nacional y de utilidad pública todo el perímetro urbano del municipio de Villa de Leyva, amparado principalmente en el Decreto 3518 de 1949 (noviembre 9) “*por el cual se declarada turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional*”. Esto debido a la escalada de violencia generada por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 que desencadenó un vandalismo colectivo inicialmente en Bogotá, transformado en una ola generalizada de violencia bipartidista que perturbó el orden público en una guerra civil no declarada (Melo, 2020).

Es paradójico que la primera declaratoria precursora del patrimonio urbano haya sido realizada por el general Rojas Pinilla, durante la dictadura iniciada con la ocupación de facto de la presidencia de Colombia, del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. Manifiesta una sensibilidad desconocida al reconocer que “...*arquitectónicamente Leiva forma un conjunto armónico altamente valioso y representativo del arte colonial, cuya conservación importa al interés público como testimonio que es de una cultura y de un ambiente...*”<sup>115</sup>. La identificación de estos atributos justifica la urgencia de establecer condiciones de protección y salvaguarda por parte del interés público para contribuir a la preservación del testimonio de la cultura y el ambiente contenidos en su unidad urbana.

Una medida ingenua para mitigar los efectos destructivos de la ola de violencia (Melo, 2020). Mediante la Ley 163 de 1959, se ratifica la declaratoria de Villa de Leyva y se adicionan “...*como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompos, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica) ...*”<sup>116</sup>.

Se comprende dentro de los efectos de la Ley:

*“por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompos, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII”*<sup>117</sup>

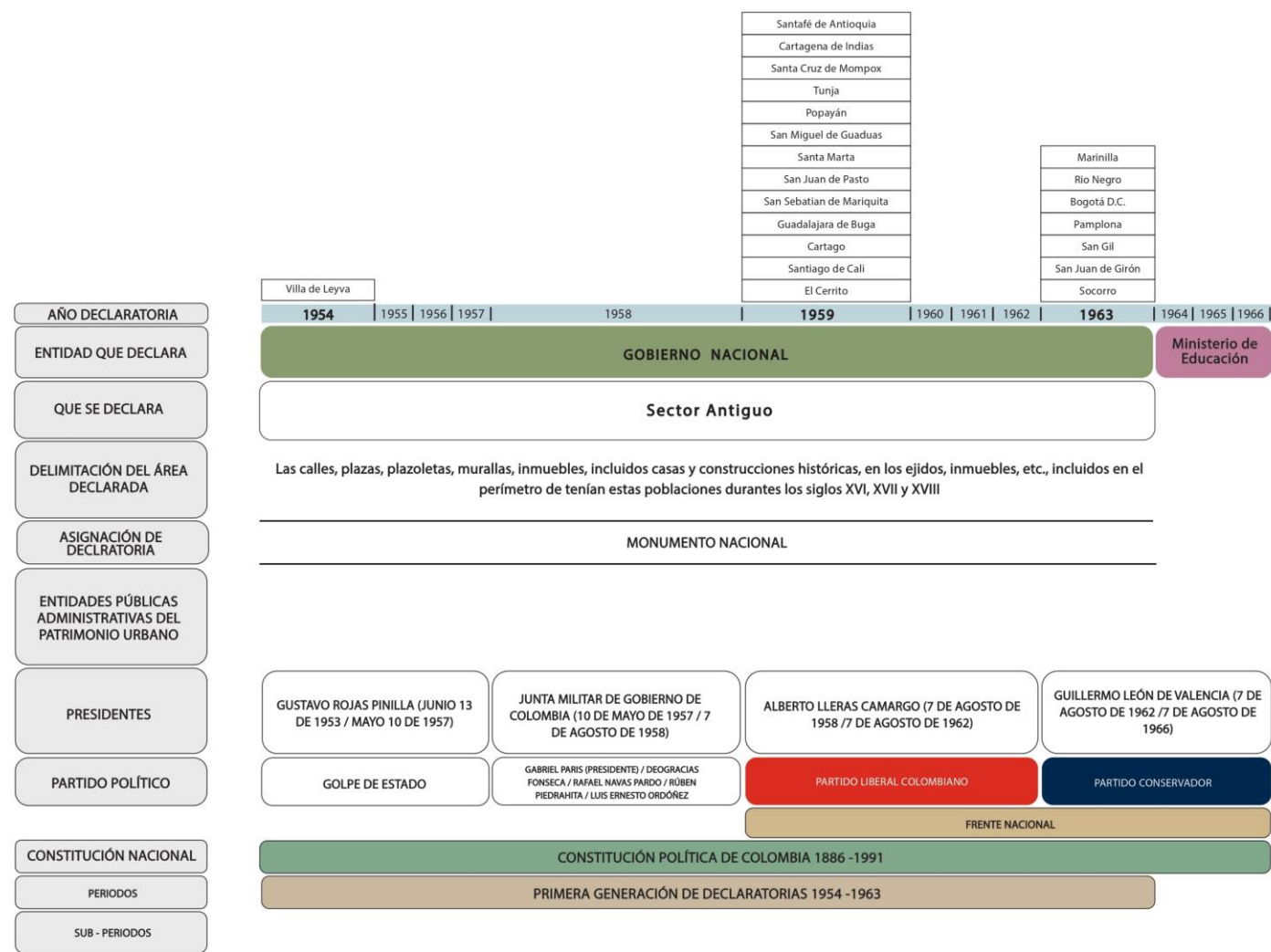
---

<sup>115</sup> Considerando, Decreto 3641 de 1954 (diciembre 17).

<sup>116</sup> Artículo 4. Ley 163 de 1959 (diciembre 30):” Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.”

<sup>117</sup> Parágrafo, artículo 4. Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

Figura 2.10 Primera generación de declaratorias:1954- 1963



Fuente: Elaboración propia



La declaratoria de Villa de Leyva al igual que los sectores antiguos mencionados en la Ley 163 de 1959 son realizados por el Gobierno Nacional, sin determinar con precisión la dependencia destinada a la administración y protección de los Monumentos Nacionales de carácter urbano. En 1963 esta función fue delegada al Ministerio de Educación<sup>118</sup> y tuvo vigencia hasta la creación del Ministerio de Cultura en el año 1997. La reglamentación de la Ley 163 de 1959 se realiza por medio del Decreto 264 de 1963 (febrero 12), el cual integra

*“...los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, San Gil, Pamplona, Rionegro (Antioquia), Marinilla y Girón...”, además de ampliar la definición de sectores antiguos comprendidos como “...las calles, plazas, plazoletas, murallas y demás inmuebles originarios de los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX...”*<sup>119</sup>

El mismo decreto reglamenta las funciones y composición del Consejo de Monumento Nacionales y perfecciona las disposiciones sobre trámites y procedimientos (Salazar et al., 1989, p. 28).

La primera generación de declaratorias incluye 21 sectores antiguos de igual número de municipios y ciudades, lo que representa el 48% del total del patrimonio urbano actual. Fueron declarados de manera masiva y generalizada en dos actos jurídicos – Ley 163 de 1959 y Decreto 264 de 1963- con cuatro años de diferencia. Ordenados por el gobierno nacional dejando la sensación de ser un asunto de Estado procedente de los años de dictadura. Predomina en la primera generación (1954-1963) las leyes<sup>120</sup>, caracterizadas por ser abstractas e impersonales dirigidas a un grupo general, no concreto. En esta categoría existen diversos tipos de leyes<sup>121</sup> expedidas por el Congreso de la República.

---

<sup>118</sup> El Ministerio de Educación Nacional es delegado por el gobierno nacional, mediante la Ley 163 de 1959 para determinar las dependencias administrativas, cargos especializados, asignaciones, funcionamiento interno del Consejo de Monumentos Nacionales, creado por la misma Ley y cuya función principal es colaborar con el Gobierno Nacional en la defensa y conservación que conforman el patrimonio histórico y artístico. El Consejo de Monumentos Nacional depende del mismo Ministerio de Educación, encargado para reglamentar la Ley 163 de 1959.

<sup>119</sup> Parágrafo, Artículo 4 del Decreto 264 de 1963 (febrero 12).

<sup>120</sup> La Ley es “la norma jurídica de mayor rango, después de la constitución política, emanada por el legislador y expedida para llevar el control de la conducta social establecida con carácter permanente. Es aquella que establece obligaciones y/o deberes jurídicos y otorga derechos, el incumplimiento de una ley puede dar lugar a una sanción o castigo impuesto por la misma”, definición tomada del Archivo General de la Nación.

<sup>121</sup> Los tipos de leyes determinados por su jerarquía constitucional son: “*Ley Orgánica: Tienen un sentido ordenador y auto limitante de las funciones ejercidas por el Congreso de la República. Es un mandamiento al Congreso en orden a regular su función legislativa, señalándole límites y condicionamientos. Leyes Estatutarias: Determinado por la Constitución de 1.991, para regular temas de singular importancia como: derechos y deberes fundamentales, administración de justicia, organización y régimen de partidos políticos, instituciones y mecanismos de participación ciudadana, estados de excepción. (Art. 152). Leyes marco: Consisten en regulaciones generales, no detalladas de temas económicos: crédito público, comercio exterior, actividad financiera, bursátil; régimen salarial entre otras. (Art. 150). Leyes de Facultades: Expedida por el Congreso para otorgar al presidente facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley*

### 2.3.1.2 Segunda generación declaratorias: 1971-1996

La segunda generación comprende las declaratorias realizadas entre 1971 y el año 1996. El Ministerio de Educación decreta 8 municipios<sup>122</sup> durante los 25 años de duración de esta fase formativa según el MGD. Es notable un razonamiento progresivo a un sentido cada vez más documentado y reflexivo sobre el patrimonio urbano y su función en el contexto del desarrollo de la ciudad. Esta generación presenta la transición en la denominación de los sectores antiguos a centros históricos con declaratorias singulares en intersticios regulares de tiempo y frecuencia de los actos administrativos.

El primer acto oficial del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) fue la declaración de la zona histórica a un sector de Villa del Rosario de Cúcuta como Monumento Nacional por medio del Decreto 102 de 1971 (enero 27), a partir del “...*estudio practicado por la Universidad de Los Andes...*”<sup>123</sup> con la descripción de la delimitación contenida dentro de linderos producto de la valoración científica donde las “...*construcciones, reconstrucciones, refacciones, remodelaciones de todas las edificaciones debe acogerse a las normas establecidas en el estudio elaborado...*”<sup>124</sup>.

Es notable el reconocimiento a la academia especialmente a las universidades a través de sus institutos de investigaciones estéticas en la realización de los estudios de valoración como ejercicios integrados a las prácticas de docencia e investigación. El CMN por medio de las resoluciones No. 1 de 1972, No. 1 y 2 de 1977 formulan la propuesta para declarar monumento nacional la iglesia del municipio de Confines en el departamento de Santander; la Sierra Nevada de Santa Marta y el casco urbano de la ciudad de Honda en el departamento del Tolima “...*dentro de los siguientes límites: el río Gualí, Calle Ambalemita, la quebrada seca, cuesta del coco, callejón de los burros, carrera 13 y carrera 13A...*”<sup>125</sup>, oficializado mediante el Decreto 1192 de 1997 (26 de mayo). Cabe destacar la ausencia de un estudio previo que documente y justifique la delimitación de Honda en comparación a la esmerada definición del sector histórico en la declaratoria de la Villa del Rosario. Al año siguiente, el presidente Alfonso López Michelsen y el ministro de educación Rafael Rivas Posada, posterior a la declaratoria de Honda se otorga la calidad de monumento nacional al Municipio de Barichara (Santander) a partir de la propuesta del CMN mediante la Resolución No. 005 del 30 de junio de 1975. Tres años le lleva al gobierno nacional la expedición del Decreto 1654 de 1978 para declarar el sector antiguo del municipio de Barichara. Aunque no es explícita la definición del

---

*cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública los haga aconsejables. Leyes Aprobatorias: El legislativo puede aprobar diversos actos jurídicos en cumplimiento de las funciones que se desprenden de tratados o convenios internacionales ratificados. Leyes Ordinarias: Son las leyes que expide el Congreso en ejercicio de su facultad legislativa regular, corresponden a las que se dictan en virtud de sus funciones ordinarias”.* Tomado de Gaceta Constitucional No. 79, V, 1991. Pág. 13.

<sup>122</sup> Equivalente al 18% de la totalidad del patrimonio urbano del ámbito nacional.

<sup>123</sup> Consideraciones del Decreto 102 de 1971 (enero 27).

<sup>124</sup> Artículo 2, Decreto 102 de 1971 (enero 27).

<sup>125</sup> Consideraciones, Decreto 1192 de 1997 (mayo 26).

límite del sector histórico se introduce una idea del paisaje como garantía para evitar la “...afectación del aspecto o fisonomía general, requieren la aprobación...”<sup>126</sup> por parte del Consejo de Monumentos. El centro histórico de la ciudad de Ambalema se declara monumento nacional por medio del Decreto 776 de 1980 (abril 2), primero en ser reconocido en esta categoría -centro histórico- sin definir la delimitación o realizar recomendaciones adicionales a las genéricas y frecuentes en los actos administrativos precedentes. Además de las limitaciones para realizar las intervenciones con el fin de prevenir la afectación del aspecto o fisonomía del conjunto urbano.

Por solicitud del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia (DAPA) y el Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Medellín realizada al CMN, se propone la calificación y declaración del Conjunto de la Plaza Principal del Municipio El Jardín como Monumento Nacional. Dentro de los atributos del conjunto se encuentra “...la notable homogeneidad y armonía, conservando parte de su arquitectura tradicional, como ejemplo importante de la cultura tradicional y que en la actualidad corre peligro de deteriorarse y perderse...”<sup>127</sup>, con el fin de promover el control para un desarrollo urbano armónico e integral siendo una forma de comprender la conservación. Por primera vez, se delega a una institución en este caso al DAPA junto con otras entidades que “...deberán elaborar un estudio y reglamentación del área de influencia del Conjunto de la Plaza Principal en que se determine el tipo de intervención en cada uno de los inmuebles del sector...”<sup>128</sup>, para mantener la unidad del conjunto. En este sentido, las obras de “...protección, defensa y conservación que deban efectuarse tanto en la plaza como en su área de influencia deberán ser aprobadas y supervisadas...”<sup>129</sup>, por el mismo DAPA previa aprobación del CMN. Puede resultar desproporcionado el volumen de recomendaciones en consideración al área declarada, siendo solo el marco de la plaza principal.

La iniciativa de la comunidad del municipio de Turmequé realizada al CMA sugiere “la declaratoria como parte del Patrimonio Histórico y Artístico de la nación” a un sector del área urbana por el “hallazgo de pinturas murales con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento”<sup>130</sup>. A su vez el CMN en su sesión del 21 de noviembre de 1986, según resolución No. 00011, declara un sector del área urbana del municipio. El presidente Virgilio Barco Vargas oficializa mediante el Decreto 1940 de 1989 (29 agosto), la declaratoria como Monumento Nacional. Sobresale la indicación de la nomenclatura catastral en el plano urbano elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, considerada la agencia cartográfica nacional de Colombia encargada de elaborar el catastro e inventario de propiedades inmuebles, naturales y la caracterización del desarrollo territorial.

---

<sup>126</sup> Artículo 2, Decreto 1654 de 1978 (agosto 3).

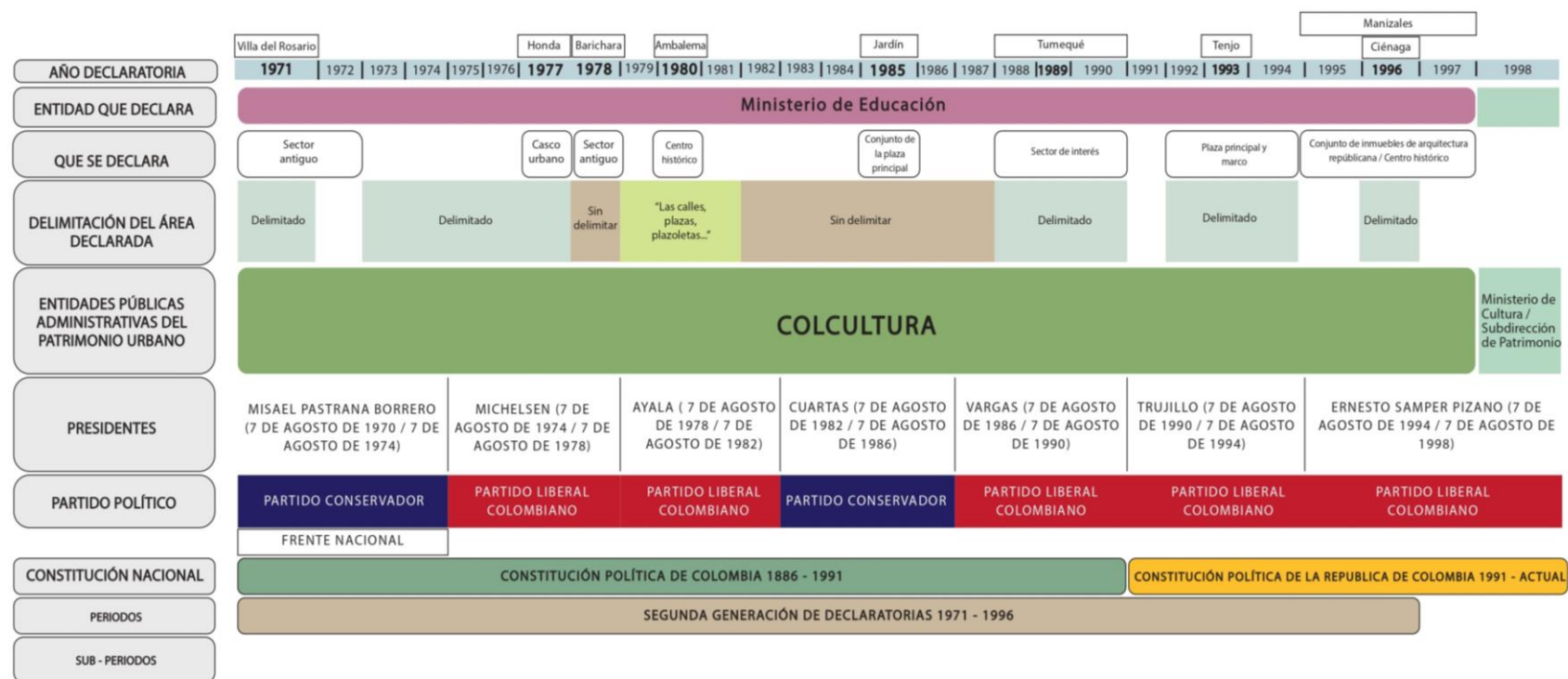
<sup>127</sup> Consideraciones, Decreto 1132 de 1985 (abril 24).

<sup>128</sup> Artículo segundo, Decreto 1132 de 1985 (abril 24).

<sup>129</sup> Artículo tercero, Decreto 1132 de 1985 (abril 24).

<sup>130</sup> Consideraciones, Decreto 1949 de 1989 por el cual se declara Monumento Nacional un sector del municipio de Turmequé.

**Figura 2.11 Segunda generación de declaratorias:1971- 1996**



Fuente: Elaboración propia

Las características del conjunto y el marco de la plaza principal del Municipio de Tenjo compuesta por un templo doctrinero, una iglesia de estilo neogótico del siglo XX, edificios de un solo piso además del edificio francés “*donde actualmente funciona la Alcaldía Municipal; tres capillas pozas, dos de ellas en el costado occidental de la plaza y la tercera en la esquina de la calle 4 con carrera 2*”. Se considera que los “*valores arquitectónicos y ambientales del conjunto hacen necesaria su conservación*”<sup>131</sup>, por tal razón se declara Monumento Nacional por medio del Decreto 2530 de 1993 (17 diciembre).

Al igual que Turmequé, la ciudadanía del municipio de Ciénega presentó al CMN la iniciativa de declaratoria del centro histórico de la ciudad con el respaldo de Colcultura quien “*realizó los estudios fotográficos y planimétrico y definió la delimitación del Centro histórico*”<sup>132</sup> siendo la única mención en una declaratoria con un aporte definido antes de su extinción como Instituto en el año 1997. El estudio de la propuesta por parte del CMN incluyó la verificación de los “*valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos que hacen parte de la traza urbana, sus inmuebles, plaza y manzanas un testimonio singular*”<sup>133</sup>, realizado en sesión ordinaria el 15 de octubre de 1992, según el Acta No. 10. Se ratifica en sesión del 4 de agosto de 1994 para ser el único reconocimiento que requirió dos sesiones y dos años antes de la presentación al gobierno nacional mediante resolución No. 016 del 26 de octubre de 1994. Se declara Monumento Nacional el centro histórico de Ciénega por medio del Decreto 2012 de 1996 de noviembre 5.

El periodo finaliza con la declaratoria del “*...conjunto de inmuebles de la arquitectura republicana localizados en el centro de Manizales y se delimita su área de influencia...*”<sup>134</sup>, reconocido por “*...el trazado urbano del centro de la ciudad se encuentra una arquitectura de gran calidad con características del periodo que se ha denominado Republicano...*” integrando dentro de la valoración “*...las técnicas tradicionales de la región: el bahareque metálico, el bahareque de tabla y el denominado bahareque encementado...*”<sup>135</sup>.

Otra característica determinante es la inclusión de la totalidad de edificaciones dentro del área de influencia identificados con el número catastral de la manzana e inmueble. La declaratoria requirió de parte del CMN una sesión ordinaria celebrada el 31 de mayo de 1994 para el estudio de la propuesta y reconocimiento de la arquitectura tradicional, consignada en el acta No. 6 del mismo año además de aprobar la propuesta de definición del área de influencia del conjunto urbano contenedor de los inmuebles identificados<sup>136</sup>.

---

<sup>131</sup> Consideraciones, Decreto 2530 de 1993 (17 diciembre).

<sup>132</sup> Consideraciones, Decreto 2012 de 1996 (5 noviembre).

<sup>133</sup> Ibidem.

<sup>134</sup> Decreto 2178 de 1996 (diciembre 2) por el cual se declara Monumento Nacional el conjunto de inmuebles de arquitectura republicana localizados en el centro de Manizales, Caldas y se delimita su área de influencia

<sup>135</sup> Artículo 1, Decreto 2178 de 1996 (diciembre 2).

<sup>136</sup> La propuesta al gobierno nacional dentro del documento de declaratoria presenta una impresión con relación al mecanismo donde se menciona que fue realizado “mediante la resolución No. 053 del 28 de octubre de 1954” ya que para la fecha aún no había sido creado el Consejo de Monumentos Nacionales.

**Figura 2.12 Centro Histórico del Municipio de Turmequé (Boyacá)**



Fuente: Imagen fotograma tomada del video “Volando en dorne – Turmequé, cuna del tejo- Boyacá, Colombia”

En la segunda generación de declaratorias se integran 8 municipios con áreas históricas diversas. Desde el área urbana en su totalidad como el caso de Barichara y Ambalema hasta el conjunto y marco de la plaza principal. Lo que enriquece el corpus urbano por las singularidades y características de cada declaratoria. Relevante la evolución conceptual y técnica del CMN con una visible progresión en la precisión de los argumentos, estudios y necesidades propias del reconocimiento de las áreas históricas a partir de la diversidad geográfica, temporal y urbano arquitectónica de cada población estudiada para ser reconocida como monumento nacional. También se destacan las iniciativas sociales, clara manifestación del reconocimiento propio del contexto urbano y la construcción del regionalismo presente en la cultura colombiana.

En un solo acto administrativo se expresan los aportes técnicos de Colcultura. Sin embargo, en la progresiva sistematización de las experiencias en el proceso de postulación y definición de la asignación de la categoría de monumento nacional a los municipios candidatos, subyace la maduración conceptual sobre el patrimonio. En consideración de la transformación conceptual de la restauración a la protección, aceptada como un mecanismo que requería un esfuerzo colectivo con metodologías exigente de visiones más amplias. Requirió de una estructura institucional robusta cimentada en la idea del patrimonio cultural dejando atrás la concepción de la cultura selectiva, clasista y demarcada en el sentido del patrimonio histórico. En la

segunda generación (1971-1996), predomina el Decreto<sup>137</sup> como instrumento jurídico, expedidos por el Ministerio de Educación.

### **2.3.1.3 Tercera generación declaratorias: 1999-2018**

La tercera generación de declaratorias inicia en el año 1999 y finaliza en el año 2018. Es el periodo más irregular en términos de frecuencia en la emisión de las declaratorias con una inusual suspensión de reconocimientos durante 12 años (2006-2017). Coincide con la entrada en vigor de una fluida legislación dedicada principalmente a complementar y reglamentar la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura-, al igual que instrumentalizar la política pública dedicada al patrimonio cultural donde el patrimonio urbano se dinamiza a partir de las alternativas instaladas en el renovado corpus jurídico. Sobresale la Resolución<sup>138</sup> como acto administrativo preponderante expedido por el Ministerio de Cultura.

La gestión a nivel institucional es liderada por el Ministerio de Cultura desde el 7 de agosto de 1997, quien continua y amplía las iniciativas de Colcultura con la generación legislativa de la que carecían la primera y segunda generación de declaratorias. La producción de las resoluciones expone los motivos de valoración, justificados en estudios previos adelantados por los postulantes y verificados por comisiones de esta entidad. Sólo en el caso de 4 municipios se realiza colectivamente la declaratoria. El ministerio otorga calidad de Bien de Interés Cultural del ámbito nacional a 14 municipios, es decir, el 31% del total de áreas históricas reconocidas dentro del patrimonio urbano.

En el año 1999 se declara el centro histórico de Concepción y Barranquilla, los barrios el Prado, Bellavista y Alto Prado de la misma ciudad, como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, el año siguiente, Valledupar y Santa Cruz de Lorica, cuentan con el mismo reconocimiento, siendo las primeras ciudades y municipios declarados por el Ministerio de Cultura bajo las condiciones determinadas en la Ley de Cultura de 1997, sin formular y adoptar un PEP junto a la declaratoria, como lo determina esta misma ley. La fundación Nieto Arteta presenta ante el Ministerio de Cultura la declaratoria de Barranquilla como Bien de Interés Cultural de carácter nacional, aceptada en 1999, por su parte la ciudad de Santa Marta, en el año 1998, formula el proyecto Plan Centro, tipificado como macroproyecto de renovación urbana para el centro histórico, avalado por el gobierno nacional (Ospina, 2015).

---

<sup>137</sup> El Decreto es “un acto administrativo promulgado por el poder ejecutivo con contenido normativo reglamentario sin necesidad de ser sometida al órgano legislativo. Cuando se habla de un decreto ley se trata de un acto que ofrece la posibilidad de tener aplicación con fuerza de ley sin que necesite la intervención del congreso, generalmente se da cuando existen necesidades que deben ser ejecutadas con urgencia”, definición tomada del Archivo General de la Nación.

<sup>138</sup> La Resolución: “Es un acto procesal emanado por un tribunal, mediante el cual se resuelve una controversia originada entre las partes, así mismo puede autorizar u ordenar el cumplimiento de medidas específicas”, definición tomada del Archivo General de la Nación.



[illegible]

Fuente: Elaboración propia



En el año 2001 y por iniciativa de la dirección de patrimonio del Ministerio de Cultura se lleva a cabo en Barranquilla el “*V Seminario Internacional sobre Revitalización de Centros Históricos de ciudades de América Latina y el Caribe*”, donde se presentan herramientas para formular un proyecto integral de recuperación de sectores históricos y se exponen las formas de financiación, con una nueva propuesta gerencial, donde la conservación enfocada en los inmuebles carecía por sí sola de sostenibilidad, dejando claro la necesidad de una política de desarrollo urbano global de escala local (Escovar & Cárdenas, 2018), siendo el evento referente en la consolidación del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (PNRCH), promovido también por el mismo ministerio.

#### **2.3.1.4 Un periodo sin declaratorias: 2006-2017**

A pesar de existir tres periodos sin declaratorias: (1963-1971), (1996-1999) y (2006-2017), las razones obedecen a la incertidumbre del crecimiento del corpus urbano y la carencia o modificación de la estructura administrativa e institucional de cada generación abordada en los epígrafes anteriores. El primer periodo emerge de la crisis y transición institucional del gobierno nacional al ministerio de educación que motiva el surgimiento del Instituto Colombiano de Cultura en 1968. El segundo periodo se enmarca en el periodo de transición normativa del patrimonio histórico (Ley 163 de 1959) al patrimonio cultural (Ley 397 de 1997), institucional y administrativa de Colcultura al Ministerio de Cultura. En el último periodo al que se dedica este apartado, las razones del silencio más prolongado en la ausencia de declaratorias, obedecen a la incertidumbre producto de la gestión y el manejo.

La progresividad de las motivaciones de la no declaratoria de cada periodo parece haberse subsanado en el siguiente, sin embargo, el cambio del contexto legal, conceptual y administrativo impone situaciones que identifican cada uno de ellos con las mismas fases del MGD: preformación, formación y bloqueo. Los periodos temporales son de carácter diferentes, pero las razones proceden de variables originadas en el mismo problema: institucional, conceptual y de gestión. El periodo comprendido entre la Resolución No 0097 de 2005 (febrero 02)<sup>139</sup> y la Resolución No. 0663 de 2018 (marzo 09)<sup>140</sup>, no se presentan declaratorias de nuevos centros históricos como BIC del ámbito nacional por parte del Ministerio de Cultura, debido a varias razones. Entre otras, a la urgencia de formular la legislación reglamentaria que establece la Ley de Cultura promulgada en el año 1997. Otro factor decisivo en la ausencia de nuevas declaratorias es el cumplimiento de la obligatoriedad de la simultaneidad de la declaratoria con la formulación y aprobación del PEP, que era en ese momento una norma vigente para los centros históricos declarados del orden nacional.

---

<sup>139</sup> Resolución No. 0087 de 2005 (febrero 02) por la cual se declaran cuatro (4) sectores urbanos, localizados en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Caldas y Cundinamarca, como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional.

<sup>140</sup> Resolución No. 0663 de 2018 (marzo 09) “por la cual se declara Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional el Centro Histórico (CH) de Jericó (Antioquia) y se aprueba su Plan Especial de manejo y protección (PEMP)”

**Figura 2.14 Periodo sin declaratorias 2006-2017**

	Concepción	Valledupar		Abejorral			Barrio El Prado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	------------	------------	--	-----------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia

En el año 2005 se realiza la prueba piloto para la realización del Plan Especial de Protección (PEP) de los centros históricos de Barranquilla, Santa Marta y Manizales. Según el marco legal, la responsabilidad de cofinanciación de la formulación y aprobación de los restantes 41 PEP de igual número de centros históricos es del Ministerio de Cultura, agudizando la situación debido a los recursos limitados. Así como la capacidad administrativa del Programa Nacional de Recuperación de Centros Históricos (PNRCH), creado para esta actividad específica en el año 2004 a raíz de la prueba piloto, mencionada. El Ministerio de Cultura no cuenta con estrategias institucionales para realizar el seguimiento y garantizar el éxito de los PEP (1997-2007), posteriormente Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) (2008- actual), en su componente económico y administrativo. Es relevante *“la insistencia del Ministerio de Cultura en mantener, a toda costa, el esquema institucional de gestión del patrimonio creado por la Ley 163 de 1959, adoptado por el Ley 397 de 1997 y refrendado por la Ley 1185 de 2008”* (Garcés, 2009).

El cambio no es frecuente ni rutinario, porque es costoso y difícil. Cuando ocurre, probablemente es episódico marcado por breves periodos de crisis o intervención decisiva, y seguido de periodos más largos de estabilidad o desarrollo dependiente de la trayectoria (Powell, 1999); como es el caso de lo determinado en el Decreto 763 de 2009. Establece el tiempo para formulación de PEMP de los centros históricos aún pendientes de este instrumento:

Del mismo modo señalará los plazos máximos para determinar cuáles BIC declarados con anterioridad a la Ley 1185 de 2008 requieren PEMP, así como el plazo máximo para formular y aprobar tales PEMP, sin que el plazo máximo total para el efecto pueda superar cinco (5) años a partir de la vigencia de este decreto.<sup>141</sup>

Es decir, el tiempo límite para este objetivo será el 10 de marzo de 2014, momento para el cual se han aprobado 14 PEMP de centros histórico en el marco del Plan Nacional de Rehabilitación de Centros Históricos (PNRCH), fecha ratificada mediante el artículo 12 de la Resolución 983 de 2010<sup>142</sup>. En el mismo señala un plazo máximo de dos años para la formulación y aprobación de los PEMP. Es notable señalar que dentro del periodo del año 2008 al 2014 se realiza la formulación y divulgación en el año 2011 de la Cartilla *“Formulación e implementación de Planes Especiales de Manejo y Protección Bienes Inmuebles de Interés Cultural”*, que establece los contenidos no expuestos en la legislación sobre el PEMP y se constituye en la guía para el desarrollo del PNRCH.

---

<sup>141</sup> Artículo 36, Capítulo IV, Competencias para la formulación de planes especiales de manejo y protección – PEMP-, Decreto 763 de 2009 (marzo 10).

<sup>142</sup> Resolución 983 de 2010 (mayo 20): Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.

**Tabla 2.01 Relación de PEMP aprobados entre el año 2005 y 2017**

DEPARTAMENTO	CIUDAD	FUNDACION	DECLARATORIA	ENTIDAD	POT- ADOPCION	PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección)	PEP (Plan Especial de Protección)
ATLÁNTICO	Barranquilla	1629	Res. 1614 de 1999	MC Declara	Decreto 154/ Sept. 6 de 2000		Resolución No. 0746 de 2005. Junio 21. Diario Oficial No. 45995. Modificado Res. 3779 de 2014
BOLIVAR	Santa Cruz de Mompox	1537	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 032/ Dic. De 2001	Resolución 2378 de 2009. Noviembre 17. Diario oficial No. 47609	
BOYACÁ	Tunja	1539	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 014/ May. 31 de 2001	Resolución No. 0428 de 2012. Marzo 27. Diario oficial No. 48400. Modificado Res. 1680 de 10 jun y 3275 de 12 nov, ambas de 2015	
CALDAS	Aguadas	1808-1814	Res. 1883 28-09-2001	MC Declara	Acuerdo 080/ Jun 3 de 2000		Resolución No. 1883 de 2001. Diario oficial 44.580 octubre 12 de 2001
	Manizales	1849	Dec. 2178 2-12-96	ME Declara	Acuerdo 508/ Oct. 12 de 2001		Resolución No. 0785 de 1998
CASANARE	Pore		Ley 936 30-7-2004	GN Declara		Resolución No.3914 de 2014. Diciembre 12. Diario Oficial No. 49389.	
CAUCA	Popayán	1536	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 6-7/May. 7 de 2002	Resolución No.2431 de 2009. Noviembre 24. Diario oficial 47684	
CESAR	Valledupar	1550	Res. 795 16-6-2000	MC Declara	Acuerdo 064/ Dic. 9 de 1999	Resolución No. 3722 de 2014. Noviembre 27. Diario oficial No. 49360.	
CORDOBA	Santa Cruz de Lorica	1722	Res. 796 16-6-2000	MC Declara	Acuerdo 042/ Dic. 14 de 2001	Resolución No. 2770 de 2010. Diciembre 15. Diario Oficial No. 48018.	
CUNDINAMARCA	Tenjo	1603	Dec. 2530 de 1993	ME Declara	Acuerdo 014/ Jun. 14 de 2000	Resolución No. 0030 de 2010. Enero 6. Diario Oficial No. 47.673	
MAGDALENA	Santa Marta	1524	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 005/ May. 30 de 2000		Resolución No. 1800 de 2005. Diciembre 16. Diario oficial No. 46137.
NARIÑO	San Juan de Pasto	1539	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 026 de 2009	Resolución No. 452 de 2012. Marzo 29. Diario Oficial No. 48477 Documento formulación. / 48400	
NORTE DE SANTANDER	Villa del Rosario	1734	Dec. 102 de 1971	ME Declara		Resolución No. 1500 de 2012. Julio 23. Diario oficial No. 48518	
VALLE	Guadalajara de Buga	1558-1569	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 068/ Oct. 30 de 2000	Resolución No. 0304 de 2010. Febrero 20. Diario oficial No. 47659	

Fuente: Elaboración propia

Un siguiente periodo (2014-2017) relacionado con el PEMP define un régimen de transición por medio del cual se amplía el plazo para la formulación y aprobación de los PEMP restantes hasta el 26 de diciembre de 2019, fecha de la expedición del Decreto 2358, el cual amplía nuevamente el plazo a 10 años de vigencia para revisión de los PEMP y establece que “*el Ministerio de Cultura reglamentará, por vía general, los plazos para la formulación y la aprobación de PEMP, atendiendo a la extensión del ámbito de actuación y a su complejidad*”<sup>143</sup>.

Sin embargo, el Decreto 1080 del año 2015 señala:

Los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) que antes del 26 de diciembre de 2019 contaban con el concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio

<sup>143</sup> Artículo 2.4.1.1.18, Capítulo I De los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26): por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

Cultural, podrán culminar su trámite de aprobación aplicando las disposiciones vigentes antes de la fecha anteriormente mencionada. Los PEMP que a la misma fecha no cuenten con el concepto favorable, deberán ajustarse a las disposiciones vigentes<sup>144</sup>

De esta manera, se extiende y sostiene la continuidad del PEMP a partir de lo determinado en la legislación en cuanto a los plazos para la formulación y aprobación que superan los dos años, debido en gran medida a la interpretación del instrumento, así como las diferentes etapas que hacen parte de su proceso.

**Figura 2.15 Centro histórico del Municipio de Popayán (Cauca)**



Fuente: Imagen tomada de Blogspot

## **2.4 Conclusiones parciales: del Monumento Nacional al Bien de Interés Cultural**

El capítulo II se ocupa del origen del patrimonio urbano y la legislación de protección en el periodo de preformación (1954-1980), tras la catalogación de las declaratorias, el reconocimiento del contexto político, institucional e instrumental relacionado con los centros históricos declarados monumento nacional. Se evidencia el agotamiento de las ideas y versatilidad de la Ley 163 de 1959. A pesar del interés por parte del Estado a través de los gobiernos por posicionar y reconocer la cultura como un elemento de la democracia. Ni el

---

<sup>144</sup> Artículo 2.4.1.1.17 Régimen de transición, Capítulo I De los Planes Especiales de Manejo y Protección – PEMP- Decreto 1080 de 2015 (mayo 26) “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”

marco legal, ni operativo de Colcultura logran mantener la continuidad de los programas e iniciativas de fortalecimiento del sector. El reconocimiento del patrimonio urbano como creación jurídica carece de estructura administrativa y de gestión, durante el periodo preformativo trata de generar la plataforma para justificar su existencia. Es notable la necesidad de un instrumento de planeación, gestión y manejo de los centros históricos declarados monumento nacional.

¿Qué entender en primer lugar, por monumento?, el sentido original del término proviene del latín *monumentum*, a su vez derivado de *monere* (avisar, recordar) aquello que interpele a la memoria. La naturaleza afectiva de su vocación es esencial: no se trata de constatar cosa alguna, tampoco de entregar información neutra, sino de suscitar mediante la emoción, una memoria viva, en este sentido, el término monumento denomina a todo artefacto edificado por una comunidad de individuos para recordar a otras generaciones y tener presente determinados eventos, sacrificios, ritos o creencias (Choay, 1992, p.12). Durante todo el siglo XIX en el caso colombiano los monumentos quedaron relegados a cumplir una función de soporte del proceso de simbolización requerido de manera urgente por la nueva sociedad civil de carácter republicano y sobre todo por el recién constituido Estado Nacional Soberano, institución sedienta de elementos físicos que le permitan marcar a escala nacional el espacio urbano con los símbolos de la epopeya libertadora (Colcultura, 1990) y con los principios de la doctrina iluminista<sup>145</sup>.

Para que los monumentos adquieran carácter histórico es necesario un cierto distanciamiento temporal y por este medio generar un ambiente de contemplación que promueve un proyecto explícito de preservación producto de esta mirada, en donde el monumento alcanza su categoría histórica (Choay, 2000). A este respecto, la relación que se establece con el monumento es una conexión franca entre una determinada idea de hombre y en consecuencia una idea de mundo, establecidas en el marco epistemológico puesto en valor a través de cada época, identificadas como selectivas dentro del proceso denominado histórico. En ese contexto, el monumento sirve de puente frágil, entre dos abismos, el que señala lo que ha dejado de ser y el que anuncia lo que todavía no llega (Yory, 2002). La idea de patrimonio aparece muy estrechamente relacionada con valores eternos, que reclaman lo histórico y artístico como únicas reservas culturales a preservar (Álvarez, 1995, p. 4).

Los sectores antiguos declarados Monumento nacional

---

<sup>145</sup> Valga señalar que la asociación que se establece entre arte y monumento corresponde a la mitificación, que se gestó en el renacimiento y se consolidó a la par de la razón ilustrada de los siglos XVIII y XIX. Si bien se distingue entre el diseño como tal del monumento, con toda su carga significativa y conmemorativa y la “monumentalización” que de un objeto del pasado llega a hacer la sociedad, en ambos casos, se instaura una mirada artística idealista respecto de lo que convendríamos en llamar un “valor patrimonial”, entrando así en el historicismo a suplantar en el “sentido fuerte” de lo histórico a través de lo que desde la segunda mitad del siglo XIX se conocerá como el “Estilo Histórico”(Yory, 2002).

El concepto de monumento era limitado para contener la diversidad de significados y no lograba representar de manera colectiva el lineamiento instaurado en la Constitución Política de 1991, en el sentido de un país inclusivo, por lo menos en el aspecto cultural. A este respecto señala Corradine:

Todos los antiguos Monumentos Nacionales quedaron comprendidos en la expresión Bien de Interés Cultural, y si bien es cierto que el concepto de Sector Histórico perdura, también es cierto que se introducen algunas categorías a los inmuebles o espacios contenidos en ellos, con lo cual pueden considerarse que no todos se definirán en adelante como equivalentes a los Monumentos anteriores, sino que en su escala pueden llegar a ser renovables, pero dentro de marcos especiales (2012:19)

Durante 58 años y el reconocimiento a diversas expresiones como el patrimonio urbano no encontraron representación plena y se limitaron a coexistir en la coproducción de su concepto y legislación, concebidos de manera simultánea. La participación ciudadana, la democratización y definición del patrimonio cultural, también incorporado por la carta magna de 1991, buscaba mediante el concepto de Bien de Interés Cultural (BIC), la redefinición de los contenidos considerados, valorados y reconocidos como patrimonio en una cultura técnica, metodológica y científica más acorde con la tendencia institucional internacional más contemporánea con los lineamientos que identifican y agrupan las naciones en el marco de la protección del patrimonio cultural sugerido por la Unesco en 1972.

El monumento contiene aspiraciones colectivas, que denota una contradicción: “*el monumento aislado*” manifestación del poder, símbolo de clase social es al “*mismo tiempo, expresión del colectivo social*”, que busca identificar sus aspiraciones con dichas obras, “*al reconocerlas como eternas y transmutables en el tiempo*” (Álvarez, 1995, p.4), asignándoles de esta forma valores históricos, de antigüedad e instrumentales (Riegl, 1987). La transición del monumento nacional al BIC supone el cambio en la concepción en las formas de intervención dando paso de la restauración estilística a la restauración conservacionista, abstrayendo el edificio histórico como momento aislado a un bien en reconocimiento de su contexto urbano y territorial (Yory, 2002), se presume la correspondencia con dos tipos de sociedad, administración, gestión y marco político, que en efecto corresponde con la intención de integrar valores contemporáneos (Riegl, 1987), en la forma de relacionarse, concebir e interactuar con las manifestaciones representativas ya no de la nacionalidad (Centeno, 2014), sino de la cultura y el desarrollo de la personalidad e integridad de los miembros de la sociedad.

Como ocurre en el caso colombiano el cambio de concepción de los elementos constitutivos de los Monumentos Nacionales a BIC, representa dos países diferentes orientados por sus respectivas constituciones políticas, mientras el primero corresponde a un país donde la cultura se debía a las elites y concentraba una forma de identidad exclusivista y letrada, la segunda expresa un país diverso, laico, donde las manifestaciones regionales son el medio para la construcción colectiva, siendo la cultura un medio inherente a la sociedad quien participa con su idiosincrasia en la consolidación de la identidad nacional. El monumento nacional expresión



operativa procedente del patrimonio histórico ligado a las edificaciones singulares o pequeñas agrupaciones, integra las áreas históricas como sectores antiguos con un reconocimiento al conjunto urbano y los elementos que la integran siendo parte de su valor genuino. Es apreciado por la unidad y no por la singularidad de sus componentes. La política cultural renovadora para los centros históricos debe partir de reconocerlos como un bien cultural, por lo tanto, como parte de la riqueza nacional, objeto de las políticas globales para el uso, valoración y disfrute de los bienes culturales, en consecuencia, participe del enfoque y los fundamentos de la política cultural del Estado colombiano (Salazar et al, 1989).

**Figura 2.16 Municipio de Marinilla (Antioquia)**



Fuente: Imagen tomada de Wikiwand.com



## **CAPITULO III**

### **LA FECUNDIDAD DE LAS IDEAS E INFLUENCIAS EN EL PROGRESO DE LA ACCIÓN PÚBLICA SOBRE EL PATRIMONIO URBANO (1980-1997): LAS REGLAMENTACIONES**

#### **Introducción**

Mientras el capítulo II estudia el periodo preformativo, el capítulo III tiene como objetivo la fase formativa según el Modelo General de la Dependencia de la Trayectoria (MGDT) y, como elemento esencial la reglamentación de los centros históricos declarados. Esto constituye un momento singular dentro del proceso de estructuración de los mecanismos de planeación y gestión de las áreas históricas. El planteamiento de la reglamentación como programa orienta una acción dirigida a evitar la destrucción del patrimonio urbano -arquitectónico y los valores de la ciudad (Salazar et al., 1996, p.17). Para la época de su concepción se consideraban edificaciones, paisajes y espacios públicos como elementos integrales susceptibles de regulación y conservación. La reglamentación de los centros históricos declarados surge de manera simultánea a la primera generación de los instrumentos de planeación urbana en Colombia, cuyo aporte a este proceso no es significativo. Se aleja de los propósitos de interpretación del concepto de desarrollo urbano predominante con arreglo a las doctrinas económicas y técnicas de los años 70.

La fuente principal de información del capítulo proviene del extinto archivo de Colcultura, integrado al centro de documentación del Ministerio de Cultura en la ciudad de Bogotá. El archivo ésta compuesto por documentos poco consultados donde reposan primeras versiones de las propuestas de ajuste normativo, documentos técnicos de soporte de las reglamentaciones y planimetría, así como la correspondencia que aporta a evidenciar la importancia de las décadas de los años 80 y 90 en la conformación de la acción pública para la protección del patrimonio urbano.

Surgen del análisis de la información cuatro temáticas principales que le dan estructura a la fase formativa (1980-1997) y al capítulo:

- a) La relación y encadenamiento de la reglamentación y el código de urbanismo para concebir la protección patrimonial a través de la década de los años 60 hasta la transición conceptual del patrimonio histórico hacia el patrimonio cultural a inicio de los años 90 del siglo XX.
- b) La legislación de la primera reglamentación para el sector histórico de La Merced en la ciudad de Cali (Decreto 2233 de 1980) hasta la Ley de desarrollo urbano y cultural en

el año 1997. Bajo este marco normativo nacional se proponen las etapas, estado y vigencia de las reglamentaciones.

c) La consolidación de las reglamentaciones y especialmente las reflexiones suscitadas dan origen a los manuales para la orientar la formulación en sectores urbanos antiguos con declaratoria y, para poblados de interés patrimonial -categoría menor- pero alternativa y estructural en el reconocimiento al patrimonio local, idea procedente de la necesidad de una cultura sobre el patrimonio, incipiente en las décadas de los años 60 y 70.

d) La influencia institucional y sus programas de carácter latinoamericano y nacional aportan al proceso de surgimiento de las ideas, deseos y oportunidad de reorientar la protección de los sectores antiguos a una nueva agrupación, fecundada en este periodo formativo: el patrimonio urbano.

En el contexto nacional, las reglamentaciones se fundamentan en la política cultural que surge a partir del debate democrático de múltiples actores sociales, académicos y gremiales, cuyos aportes se sintetizan en el documento: *“Política Cultural para los centros históricos y el patrimonio Inmueble”*, publicado en el año 1989. La difusión de lineamientos estratégicos dirigidos al posicionamiento de la cultura en el desarrollo social y económico es su objetivo principal. Por su parte, los discursos sobre la función de la planeación urbana se concentran en dos momentos:

a) El inicial con la emergencia del *“paradigma comprehensivo, a partir de factores como la consolidación de las ciencias sociales aplicadas en la esfera científica y la crisis del modelo y planes urbanos tradicionales”*.

b) Un segundo momento, preponderante a finales de la década de los años cuarenta es liderado por economistas formados en las teorías keynesianas, basada en las *“teorías sinópticas de planeación de corte procedimental”* (Ramírez, 2011, p. 117).

En la legislación del desarrollo municipal del año 1989<sup>146</sup> se asigna por primera vez el reconocimiento a la conservación de los sectores urbanos antiguos: *“conservar edificaciones y zonas de interés histórico, arquitectónico y ambiental”*<sup>147</sup>. Las áreas urbanas históricas declaradas adquieren a través de la reglamentación la calidad de norma urbana y se reafirma en su condición de regulador a través de un acuerdo del concejo municipal<sup>148</sup> para las ciudades y municipios que gozan de un centro histórico reconocido. La reglamentación introduce la conservación a una escala urbana, lo cual se considera un *“avance teórico e instrumental en el tratamiento para las áreas con valor histórico”*, siendo el hecho *“más significativo en el desarrollo del urbanismo en Colombia a través de los últimos treinta años”* (Salazar et al.,

---

<sup>146</sup> Ley 9 de 1989 (enero 11) *“por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”*.

<sup>147</sup> Artículo 2, párrafo 5, Ley 9 de 1989 (enero 11).

<sup>148</sup> Los concejos municipales encuentran su antecedente histórico en los Cabildos de España que, a raíz de la política de poblamiento emprendida en América se estimula la generación de una institución con autoridad local que representa la comunidad electoral de sus representantes.

1991, p. 15). Cabe destacar la capacidad de la reglamentación para integrar el planeamiento de la totalidad del área urbana e incluso de las áreas rurales inmediatas al perímetro urbano en los municipios de menor tamaño, cuya idea aporta al ordenamiento municipal incluyente y equitativo para el desarrollo urbano integral. En la planeación urbana predomina la función técnico-metodológica. Un híbrido que integra los principios de la planeación física y el diseño urbano.

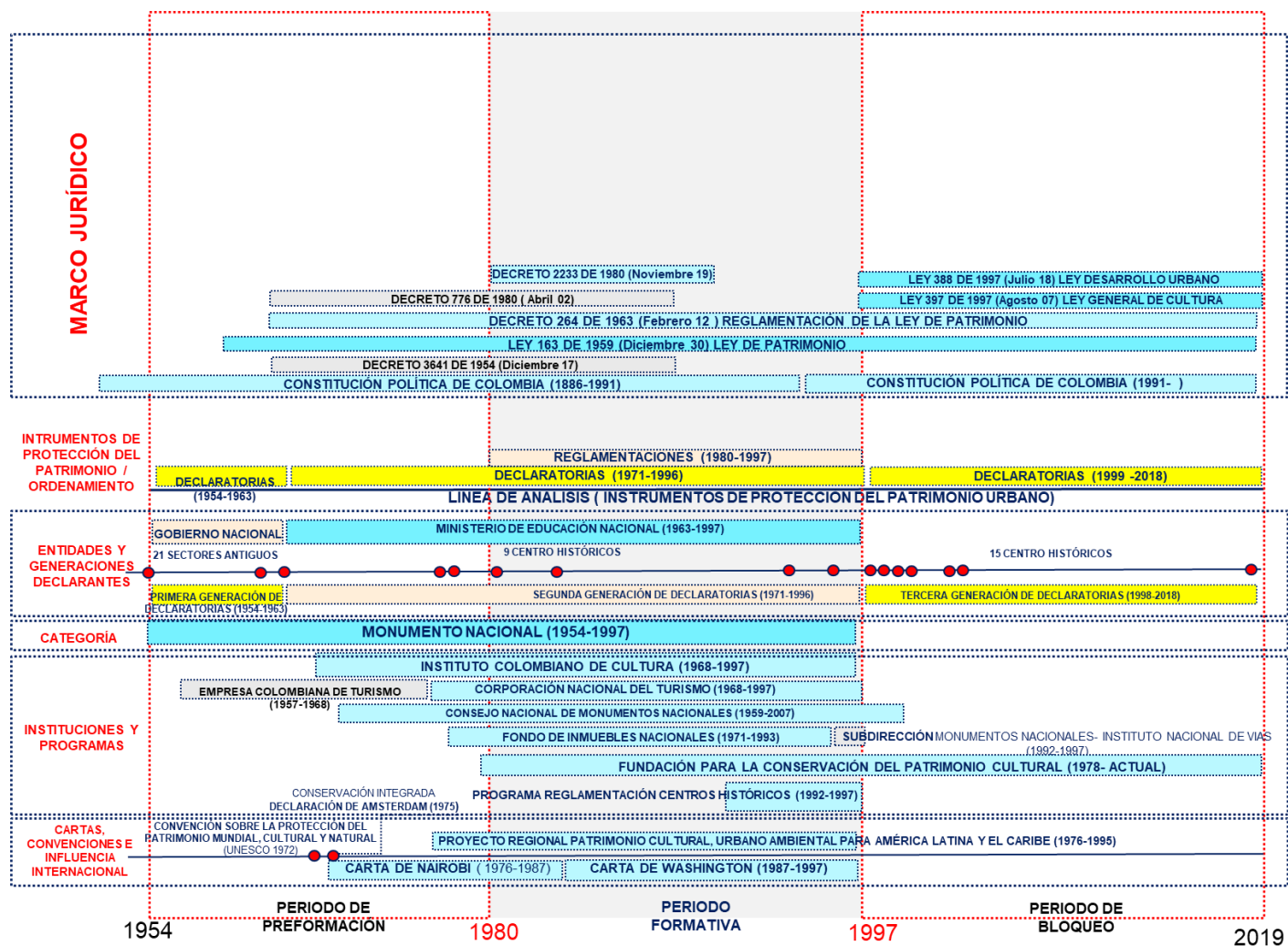
La reglamentación contribuye a materializar la idea de la ciudad como bien cultural<sup>149</sup> (Salazar, 1990). El tratamiento asignado al centro histórico destaca la singularidad de este sector dentro del área urbana integral siendo el elemento estructurador del sentido, carácter y determinación de las alternativas de desarrollo sustentadas en la versatilidad de sus servicios urbanos, económicos, sociales y representativos de la identidad local. Los análisis históricos se desarrollaron con mayor intensidad en la aproximación al reconocimiento singular de las edificaciones desde los estudios de tipología (características) y morfología (contexto urbano) sobre los cuales se formulan la “*norma urbano cultural*” específica. A partir de este contexto se establecen condiciones de valoración de los elementos integrales del área patrimonial e introduce criterios de intervención con métodos diferenciales de actuación según las particularidades de cada edificación (Salazar, 1996, p. 17).

El capítulo III está dispuesto para abordar las siguientes temáticas: en el apartado 3.1 se estudia la reglamentación y el código de urbanismo desde la década de los años sesenta hasta su extinción en 1997. El apartado 3.2 aborda la aproximación a la política cultural entre el Decreto 2233 de 1980 y la Ley 388 de 1997. Se centra en las reglamentaciones en sus diferentes etapas, estado y vigencia en el contexto legislativo de la política cultural entre la primera reglamentación en la ciudad de Cali hasta la expedición de la Ley general de cultura y de ordenamiento territorial. El apartado 3.3 se interesa por el reconocimiento del manual de reglamentación y el de poblados antiguos por su relevancia en la estructuración de las reglamentaciones de los municipios con centros históricos declarados y aquellos con arquitectura y urbanismo relevante para sus comunidades, pero sin gozar de la categoría de Monumento nacional. La temática del 3.4 se ocupa de la dimensión institucional en dos categorías: a) Internacional a través del Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina promovido por la Unesco y PNUD para promover el desarrollo de políticas de reconocimiento y protección del patrimonio latinoamericano con las misma metodología, estrategias e instrumentos europeos. b) La categoría nacional mediante el análisis de los programas y la división de centros históricos de Colcultura en el carácter institucional público, en lo privado desde la fundación para la conservación del patrimonio cultural colombiano. Finalmente, las conclusiones del capítulo.

---

<sup>149</sup> “La ciudad como bien cultural” es la temática del Seminario realizado en Santafé de Bogotá, entre el 19 y 29 de junio de 1990. Promovido por Colcultura y por la Organización de los Estados Americanos (OEA), considerado el momento final del proceso democrático para formular las políticas para el patrimonio cultural inmueble, “*políticas que fueron presentadas oficialmente en este evento, luego de la consulta donde participaron entidades y profesionales interesadas de todas las regiones del país*” (Mallarino, 1990).

Figura 3.00 Síntesis gráfica del capítulo III



Fuente: Elaboración propia

### 3.1 El patrimonio urbano y el código de urbanismo: un diálogo inconcluso. Avances y frustraciones en la concepción de la protección patrimonial

Por definición, la reglamentación es una “colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio”, también se identifica como una “norma jurídica general y con rango inferior a la ley, dictada por una autoridad administrativa” (Morcillo, 2009, p. 324). La procedencia de la reglamentación está ligada a la trayectoria de la autoridad y organización institucional bajo la perspectiva que esta acción genera cierta inercia institucional, con un significado de estancamiento, cristalización de posiciones, patrones y rutinas institucionales (Thelen, 1999; Pierson, 2017; Sydow, 2020). La disposición técnica en términos del alcance jurídico y administrativo de las instituciones a cargo de la protección del patrimonio urbano generan un patrón desde su autonomía estructural, por lo tanto, en sus facultades autorizan o restringen las acciones desde su mecanismo de regulación (Parsons, 2007). La reglamentación desde la perspectiva del *path dependence* se relaciona con la inercia, el patrón y la rutina institucional que obedece a la integración de estas variables de manera imperceptible en su estructura, pero cuya evidencia vital no se encuentra al final del procedimiento. En este caso, la aprobación del reglamento crea los medios para establecer mecanismo de moderación de los impactos exógenos (Sorensen, 2017).

*“Una reglamentación es, ante todo, un documento oficial (legal) que tiene un valor jurídico por el cual el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo Municipal de la respectiva localidad, regulan las posibles intervenciones que los propietarios de los inmuebles puedan realizar al interior de un perímetro determinado para el sector antiguo”* (Salazar et al., 1991, p. 23).

Se introduce una limitación a la propiedad del inmueble regulada por un acuerdo colectivo aprobado por el concejo municipal. La descentralización en la protección, pero no en la administración del patrimonio se valida mediante la autonomía de la salvaguarda de los valores arquitectónicos y urbanos que generan la identidad de la comunidad por medio de la aceptación del bien común implícito en la práctica de la norma urbana (Melé, 2006), inscrita dentro del alcance de la propia regulación. El concepto de estancamiento se vincula a la definición del tiempo necesario para la implementación y validación de acciones emprendidas a través del instrumento: la reglamentación. A partir de la interacción con los efectos inesperados a través de su aplicación o los derivados de su ausencia previos a su vigencia. Al igual que la aceptación expresada en el uso por parte de la sociedad, la administración, gestión y mantenimiento de los inmuebles en las áreas patrimoniales (De Remes, 2001).

Previo a la generación de las reglamentaciones se elaboran los inventarios de algunas edificaciones y sectores antiguos representativos de 21 áreas históricas urbanas declaradas mediante la Ley de patrimonio histórico y su decreto reglamentario. Actividad liderada desde el año 1969 por parte de Colcultura con el apoyo de las facultades de arquitectura de Bogotá

(Universidad Javeriana y Universidad de Los Andes) a través de sus Institutos de Investigaciones Estéticas. En la ciudad de Bucaramanga (Universidad Industrial de Santander), en Cali (Universidad del Valle) y Medellín (Universidad Nacional de Colombia) lideran esta actividad. El ejercicio se desarrolla hasta el año 1975 cuando se revalúa el trabajo realizado dando prioridad a los “*estudios regionales de patrimonio como base para superar lo que se consideraba inventarios puntuales y descontextualizados*”, logrando únicamente y de manera parcial pocos estudios sobre patrimonio cultural: uno en el Valle del Cauca, otro en Antioquia y el viejo Caldas contratados por Colcultura con dos universidades locales (Salazar et al., 1996, p. 38).

Sobre el proceso de inventario emprendido en esta época Téllez menciona:

*La protección y conservación del patrimonio histórico arquitectónico y urbanístico colombiano incluye tareas entre las cuales se cuenta la realización de inventarios y catalogación de ejemplos aislados y, en algunos casos, conjuntos urbanos completos, tarea que se ha realizado parcialmente, dentro de límites conceptuales tradicionalmente restringidos y hasta donde lo han permitido presupuestos limitados. Aparte del inventario – que teóricamente debe proveer la base informativa sobre la cual gravitan las restantes labores de protección patrimonial – el análisis histórico y crítico de la arquitectura y el urbanismo del pasado y el presente en el país ha tenido ya (1974) algún desarrollo, aunque obviamente resiste todavía mucha profundización conceptual sobre la mayoría de sus aspectos.* (Téllez, 2011, p.11)

A finales de los años setenta e inicios de los ochenta del siglo XX se inaugura una segunda etapa en los trabajos de recuperación, revitalización y restauración de “*una importante cantidad de monumentos basados en estudios histórico-técnicos*” realizados por profesionales que en su mayoría regresaban de su proceso de formación posgradual en Europa, especialmente en Italia y España con claras influencias de las teorías y doctrinas de la disciplina que predomina en las escuelas de pensamiento y técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico y urbano. Se destacan los arquitectos Alberto Corradine, Armando Cortés, Germán Franco, Jaime Gutiérrez, Rafael Gutiérrez, Álvaro Barrera, Jaime Salcedo, Germán Téllez y Guillermo Trimmiño (Salazar et al., 1996, p. 41). Impregnaron esta influencia en el desarrollo de su vida profesional y académica. En el aspecto institucional la modificación de Colcultura mediante el Decreto 800 de 1990 (abril 17)<sup>150</sup>, crea la Subdirección de Patrimonio Inmueble. Esto genera un estímulo general a los centros históricos por medio de la elaboración de las reglamentaciones que junto a la Corporación Nacional de Turismo (CNT), las fomentan como un instrumento de control y divulgación de los valores patrimoniales. La estrategia introduce a la academia por intermedio los centros de investigaciones estéticas para ampliar su cobertura en el nivel

---

<sup>150</sup> “*Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0008 del 7 de febrero de 1990, expedido por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Cultura “Colcultura”, mediante el cual se establece su estructura orgánica y se determinan las funciones de sus dependencias*”. Esta será la última restructuración de la entidad antes de su extinción definitiva el 7 de agosto de 1997.

regional (Salazar, 2000; p. 58). Y en sectores culturales con poca presencia en los inventarios culturales.

El proceso de conformación de la reglamentación como instrumento cooperador de la gobernanza de las autoridades locales en la regulación, conservación y protección del patrimonio reconocido y catalogado, exige diferenciar dos etapas en su itinerario de planteamiento: a) Una primera etapa hace referencia al origen, formulación e implementación de la reglamentación desde el marco legal vigente. b) A partir de este hecho se establece una segunda etapa en la reglamentación con el relevo en el instrumento mediante la definición del Plan Especial de Protección (PEP) vigente desde el año 1998 hasta el 2009. A partir de este año se instauró el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) hoy vigente. Las reglamentaciones son precursoras en la concepción de planes urbanos a pequeña escala con la integración de zonas patrimoniales reconocidas cuya pretensión principal está asociada a las áreas urbanas de los municipios que gozan de un centro histórico declarado. Es un instrumento ajustado a los propósitos de la protección y propicio para el ejercicio de la autonomía de la entidad territorial relacionado con el desarrollo de su contexto urbano como contraposición a la influencia dentro de la planeación urbana del plan director derivado del movimiento moderno y su relación reformuladora de la ciudad en la transición del urbanismo moderno a la planeación integral, de especial protagonismo entre el periodo de 1951 a 1969 (Manco, 2010).

El ordenamiento físico urbano procede de la Constitución Política de 1886 heredado a su vez de la Constitución Política de Rionegro<sup>151</sup>. La reforma constitucional de 1945 y 1968 consolida una visión renovada de la planeación de la ciudad expresada con la Ley 88 de 1947 “*sobre el fomento del desarrollo urbano del municipio y se dictan otras disposiciones*”. El Decreto 2811 de 1974 “*por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección al medio Ambiente*”. La Ley 61 de 1978 conocida como la “*Ley Orgánica del Desarrollo Urbano*” y su Decreto Reglamentario 1306 de 1981, al igual que la Ley de Reforma Urbana de 1989<sup>152</sup>. Estas leyes determinan “*sucesivamente tres figuras de planeación que han marcado el desarrollo de la disciplina en el país: el Plan regulador, el Plan Integral de desarrollo y el Plan de desarrollo municipal*”, que antecedieron a la Constitución Política de 1991 y al corpus normativo que las regula (Salazar et al., 1997; p. 8). Durante la permanencia y vigencia del Plan Regulador (1947-1978), el Plan Integral de Desarrollo (1978- 1989) y el Plan de Desarrollo Municipal (1989-1997) surge la Ley de patrimonio histórico y la necesidad de las reglamentaciones de los centros históricos declarados monumento nacional, teniendo especial repercusión la carencia de ideas orientadas a la protección del patrimonio cultural inmueble (Morcillo, 2002). La notable influencia de cartas y tratados internacionales<sup>153</sup> sobre el patrimonio cultural al igual que los programas dispuestos por la Unesco, el Programa de

---

<sup>151</sup> La Constitución de Rionegro hace referencia a la Constitución Política de Colombia de 1863, promulgada el 8 de mayo de este año y vigente hasta el 5 de agosto de 1886. Su importancia radica en la instauración de los principios del ordenamiento territorial nacional que se conserva en la actualidad.

<sup>152</sup> Hace referencia a la Ley 9 de 1989 (enero 11) “*por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones*”.

<sup>153</sup> Especialmente

Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a los cuales Colombia se vincula y son determinante en el desarrollo del programa de reglamentación a partir del marco legal existente sobre el patrimonio histórico como un esfuerzo adicional por reinterpretar sus alternativas de gestión, con mayor vitalidad a finales de 1989.

En tal sentido, para la ciudad de Cali, se formula y aprueba la primera reglamentación de un sector antiguo de carácter patrimonial por medio del Decreto 2233 de 1980 para la “*Conservación de Bienes Culturales. Reglamento Especial para la Zona Histórica y Cultural de la Merced*”, donde se generan las alternativas de convivencia y diálogo entre los mecanismos de planeación de origen económico y el plan del área histórica de origen cultural. A la compleja relación de interpretación del desarrollo urbano, fundamentado en la necesidad de arrasar con el pasado como un mecanismo de superación progresista a partir de destruir el objeto de represión, en este caso la ciudad (Viviescas, 1994). Esta práctica es visible con mayor frecuencia en aquellas poblaciones que han tenido un papel destacado en la campaña libertadora, que han sufrido con mayor ahínco el poder transformador sobre la arquitectura y el urbanismo del pasado colonial, algunas de ellas declaradas monumento nacional. En la larga relación incomprensible del desarrollo y la conservación se fundamenta el diálogo diacrónico del código de urbanismo y la reglamentación en los casos en que el municipio cuenta con ambos instrumentos, situación presente para los centros históricos patrimoniales y hasta el año 2000, momento de la formulación y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Se intensifica aún más la complejidad en la alternancia y concatenación de los instrumentos de planeación y gestión del territorio urbano-rural de municipios y ciudades. Por su parte, la protección del patrimonio recurre a los esfuerzos aislados de la reglamentación liderada por parte de la División de Centros Históricos de Colcultura. Contaba con 23 reglamentos aprobados, de los cuales 14 fueron aceptados por el Consejo de Monumentos Nacionales y 9 por los Consejos Municipales respectivos (Isaza, 1999; p. 100), a mediados de la década de los años 90 del siglo XX.

El código de urbanismo emerge de una política de planeación basada en principios económicos (Morcillo, 2002). Mientras la reglamentación proviene de principios sustentados en la cultura, además de una necesidad de protección de un sector histórico y de consolidar una política cultural dedicada a los bienes inmuebles. Aunque en principio son dos ideas contrarias, en sus elementos irreconciliables subyacen los mecanismos comunes para la convivencia de ambas orientaciones en el marco del territorio. Sin embargo, la reglamentación procura establecer la interpretación del conjunto urbano con los excesos propios de un instrumento centrado en la generación de una normativa cultural. Las frecuentes contradicciones originadas entre los planes de organismos nacionales y estatales de protección y, los planes de desarrollo urbano municipales anulaban o restaban efectividad a muchas medidas de preservación de los centros históricos (Hardoy & Gutman, 1992; pp. 267-268).

En cuanto a la cooperación internacional se destaca el Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano y Ambiental para América Latina y el Caribe, auspiciado por la Unesco/PNUD. Dentro



de sus propósitos se encuentra el fomento a la formulación de políticas de conservación e instrumentos de protección del patrimonio cultural inmueble, del cual se derivan las reglamentaciones especialmente las formuladas, aprobadas e implementadas después del año de 1991. Momento de la divulgación del “*Manual de Reglamentación de Sectores Antiguos*”, producto deriva del proyecto inscrito dentro del marco de la “*Política Cultural para los Centros Históricos y el Patrimonio Inmueble*”, ambos liderados y animados por Colcultura al amparo del “*Fortalecimiento de la Cultura Regional*”, patrocinado por la mencionada iniciativa en latinoamericano de la Unesco y el PNUD (Colcultura, 1992)

Según Carrión, las reglamentaciones sintetizan, integran y conjugan los tres enfoques teóricos desde los cuales se analizan los centros históricos, a saber: a) las ideas funcionalistas urbanas, cuya pretensión es adecuar los inmuebles a condiciones contemporáneas del urbanismo; b) el enfoque progresista desde una visión cultural que observa la centralidad histórica como una oportunidad para el desarrollo urbano propicio para la atracción de inversión financiera en áreas adyacentes de los perímetros históricos y, c) finalmente el enfoque desarrollista focalizado en la visión económica con tendencia al crecimiento desde esta perspectiva, por intermedio de la integración del turismo cultural, las industrias creativas de diverso orden en procura de un equilibrio con la conservación y protección del patrimonio cultural (2004: 32). En lo ideal, bajo el consentimiento de la población residente habitual de los sectores históricos priorizados en planes de inversión.

**Figura 3.01 Centro histórico del Municipios de Iza (Boyacá)**



Fuente: Imagen tomada de Iza verde autoría de Lucas Rodríguez

### 3.1.1 Origen de las reglamentaciones

El origen de las reglamentaciones se deduce como consecuencia de la declaración de monumentos nacionales de los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga determinada por la Ley 163 de 1959, reafirmado con la creación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), con funciones para *“previo estudio de la documentación correspondiente, podrá proponer la calificación y declaración de otros sectores de ciudades, zonas o accidentes geográficos o inmuebles como Monumentos Nacionales”*<sup>154</sup>, en el mismo sentido, el Ministerio de Obras Públicas apoyará al CMN, *“en las tareas de conservación y restauración de los inmuebles y sectores urbanos”*<sup>155</sup>.

Sin embargo, en este periodo de tiempo entre los años 1959 y 1963 no hay claridad sobre el procedimiento y responsabilidad para la elaboración de mecanismos de protección de las áreas declaradas. Por el contrario, existe un interés en investigaciones individuales de edificaciones, que se constituyen en descripciones líricas de monumentos significativos de Bogotá y Cartagena; en este mismo sentido, se consideran acciones aisladas en el campo legislativo la Ley 18 de 1948, sobre el embellecimiento de monumentos históricos de Cartagena y la Ley 5 de 1949 y la Ley 107 de 1946 sobre la declaración de utilidad pública sobre edificaciones y lugares por su antigüedad y belleza arquitectónica (Salazar, 1994, p.19).

En el Decreto 264 de 1963, *“por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre la defensa y conservación del patrimonio histórico, artística y monumentos públicos de la Nación”*, menciona de manera específica:

*“ARTÍCULO 8º.- Las Alcaldías o las oficinas de su dependencia encargadas de expedir las licencias para ejecución de obras, en las ciudades enumeradas en el artículo 4 de la Ley 163 de 1959, el artículo 4 del presente Decreto y aquellas otras que fueren incorporadas dentro de la misma disposición, al tenor de la autorización dada por el artículo 6 de la misma Ley, no podrán conceder licencias para demoliciones, reparaciones, refacciones o reconstrucciones en los sectores antiguos, sin previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales”.*

*“ARTÍCULO 17.- Los planos de edificaciones o construcciones que hayan de hacerse en los sectores de ciudades calificados como antiguos por la Ley 163 de 1959 y disposiciones reglamentarias, o en las inmediaciones de dichos sectores, de modo que hayan de influir en su aspecto o fisonomía general, requieren la previa aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. Y las respectivas Alcaldías, Oficinas de Planeación, Obras Públicas u otras que hayan de autorizar dichas obras, no lo harán sin ponerse de acuerdo con el mencionado Consejo”.*

---

<sup>154</sup> Artículo 6 de la Ley 163 de 1959: *“Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación”*

<sup>155</sup> Artículo 26, Ley 163 de 1959 (diciembre 30).

*“ARTÍCULO 22.- El Consejo de Monumentos Nacionales formará el inventario de los monumentos existentes no solo en las ciudades y lugares a que se refieren la Ley 163 de 1959 y este Decreto, sino en cualquiera otra ciudad, población o lugar del territorio nacional. Se entiende, sin embargo, que aún antes de la formación de dicho inventario, deberá ejercer sus funciones tutelares sobre todos los monumentos y objetos que, en su concepto, hagan parte del patrimonio histórico y artístico nacional, según la definición del artículo 1 de dicha Ley”<sup>156</sup>.*

A pesar de que las limitaciones, restricciones, advertencias y responsabilidades enunciadas en relación con las intervenciones en los sectores antiguos, el procedimiento no es específico. Las orientaciones y sanciones predominan a manera de mecanismo regulador donde el poder político se ve disminuido en la medida que las instituciones son vistas como dispositivos de coordinación que generan beneficios mutuos al facilitar la cooperación y los razonamientos compartidos en operaciones fuera del alcance de la escala de actores individuales o grupales (Sorensen, 2018). Especialmente ante la ausencia de una adecuada localización de las redes instituciones en el territorio, acentuado aún más por el carácter de centralidad del sistema político administrativo. Aunque la Ley 163 de 1959 motivó las reglamentaciones de los centros históricos (Beuf & Martínez, 2015, p.14), no es sino hasta 1968 con la creación de Colcultura que la subdirección de patrimonio y la división de inventario del patrimonio cultural, en su calidad de dependencias encargadas inician el registro de los monumentos nacionales y continúan la gestión del (CMN) (Salazar et al., 1989). Desde la creación el CMN realiza una labor continúa puesta de manifiesto en un avance en los campos del inventario, la protección y la valoración del patrimonio cultural, en la cual Colcultura adquiere un papel importante. Sin embargo, este avance registrado es insuficiente teniendo en cuenta que 30 años después de aprobada la Ley, solo 4 centros históricos<sup>157</sup> tienen reglamentaciones aprobadas (Salazar et al., 1991, p. 14).

En el ámbito político, con la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en el año 1957, depuesto por diversas fuerzas políticas, económicas y universitarias remplazado por la Junta Militar que inicia transición hacia una nueva propuesta democrática denominada el Frente Nacional (1958-1974)<sup>158</sup>. Se caracteriza por la alternancia de los partidos políticos tradiciones liberales y conservadores durante este periodo de tiempo cuya finalidad fue resolver el conflicto y mitigar la agudización de la violencia en varias regiones del país; para algunos simpatizantes

---

<sup>156</sup> Artículo, 8, 17 y 22. Decreto 264 de 196 (febrero 12): “*Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación*”

<sup>157</sup> En esta información se presenta una imprecisión respecto a los centros históricos con reglamentaciones aprobadas, no son cuatro como lo menciona el “*Manual para la reglamentación de los sectores urbanos antiguos*”, publicado por Colcultura en diciembre de 1991. Los municipios con reglamentación aprobada a esta fecha son los siguientes: Villa de Leyva (Resolución No. 025 del 15 de mayo de 1990) elaborada por el arquitecto Jaime Salcedo; Jardín (Acta 12 de 1990); Santiago de Cali (Decreto 2233 de 1980).

<sup>158</sup> El Frente Nacional fue ideado para poner fin de los viejos conflictos bipartidistas (liberales y conservadores), no logró convocar a la nación en su conjunto.

se considera en sí mismo un proyecto cultural por excelencia con un momento cumbre con la creación de Colcultura y la Corporación Nacional del Turismo en 1968, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (Escovar & Cárdenas, 2018). En lo relacionado con las instituciones dedicadas a la cultura. El Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) significó desde la propuesta institucional, la organización de un instituto que seguía dependiendo del Ministerio de Educación Nacional (MEN) con la posibilidad de definir e impulsar políticas culturales, agrupar dependencias del Estado dispersas en diversos organismos, la mayoría de las cuales se encontraban subordinadas al MEN. Congregados en Bellas Artes o Extensión Cultural; a partir de entonces se genera un interés por nombrar las políticas culturales de forma más directa (Salazar, 1994).

También en 1968 se crea la Corporación Nacional de Turismo (CNT) mediante la Ley 60 de 1968, *“por la cual se establecen estímulos a la industria del turismo y se dictan otras disposiciones”*, dentro de las principales funciones se encuentran:

*“...solicitar del gobierno que se declaren como recursos turísticos nacionales aquellas zonas urbanas o rurales, plazas, vías, monumentos, construcciones u otras que, a su juicio, deban de desarrollarse con sujeción a planes especiales, preservarse o adquirirse por la Corporación o el Estado, de acuerdo con los fines de aquella...”<sup>159</sup>.*

También *“coordinar, reglamentar y controlar, de acuerdo con las autoridades competentes, el desarrollo urbanístico dentro de las áreas a que se refiere el literal anterior”<sup>160</sup>*. Al igual que otras funciones<sup>161</sup>, llevó a la modificación de la composición del CMN para incluirla. Amparado en esta función la CNT emprende estudios e investigaciones dirigidos al reconocimiento y valoración de bienes arqueológicos, históricos y monumentales como recurso para el desarrollo turístico (Escovar & Cárdenas, 2018, p.193). Con una función complementaria y en ocasiones contradictoria en el campo de la recuperación del patrimonio en gran medida por estar ligada a las políticas turísticas con la valoración y recuperación del patrimonio inmueble; realiza la contratación para la elaboración de los estudios de reglamentación de Cartagena, Mompox, Villa de Leyva y Honda. Además de apoyar proyectos de restauración de inmuebles y entidades que adecúen los edificios para fines turísticos (Salazar et al., 1989, p.40). La transformación de la Empresa Colombiana de Turismo en la CNT generó nuevas oportunidades en el campo de la financiación, a partir del conocimiento real de los recursos turísticos en especial los relacionados con el patrimonio monumental. De tal forma, en mayo de 1969 se celebra el primer contrato que la Universidad Nacional suscribía con el apoyo

---

<sup>159</sup> Artículo 3, Literal a, de la Ley 60 de 1968 (diciembre 26).

<sup>160</sup> Ibidem.

<sup>161</sup> Además de las anteriores, también se encomendó: *“Expropiar, cuando su adquisición por la Corporación aparezca aconsejable siempre y cuando hayan resultado infructuosos los intentos de negociación directa con los propietarios, las zonas urbanas o rurales, monumentos y otras obras declaradas como recursos turísticos nacionales, todo de conformidad con las leyes que regulan el procedimiento ordinario de la expropiación y previa aprobación del Gobierno Nacional, impartida mediante resolución ejecutiva”*. Artículo 3. Literal c, Ley 60 de 1968 (diciembre 26).

de la facultad de arquitectura, para realizar un estudio sobre la arquitectura y el urbanismo en Mompox. (Corradine, 1989).

Las reglamentaciones encuentran en los instrumentos y planes internacionales un punto referencial con variaciones en la interpretación y adaptación de sus lineamientos a la singularidad de las iniciativas locales de la conservación. Es visible la dificultad de armonizar la orientación y el propósito de los programas institucionales en consecuencia con los mecanismos seleccionados para la protección del patrimonio urbano, en los cuales se puede evidenciar algún tipo de influencia o alusión marginal. Tal es el caso del programa de conservación propuesto por Cervellati y Scanavini para Bolonia cuyo *“objetivo técnico del plan, en un fin único, es de la conservación del centro histórico y su incorporación en la estructura de la ciudad y del territorio”*, siendo una parte diferenciada y calificada a través de su especialización dentro de la ciudad o del entorno urbano que lo contiene (1976:31). Un diferencial principal en la concepción del programa de conservación propuesto para Bolonia radica en la orientación de la conservación e integración del centro histórico basados en la integralidad, mientras que las reglamentaciones se formulan *“para evitar la destrucción del patrimonio y de los mejores valores de ciudad”* (Salazar et al., 1996, p.17). El objetivo y propósito potencia unos resultados contradictorios en el marco de la conservación y salvaguarda del patrimonio urbano por la presencia de finalidades diferentes.

En ambos casos, la relevancia de las áreas históricas y la necesidad de protección son materializadas a través de un plan urbano de escalas proporcionales a sus intereses de salvaguarda, siendo instrumentos aparentemente acondicionados y ajustados al desarrollo teórico y conceptual de la ciudad. El tratamiento del patrimonio es sometido a las exigencias de la vida urbana contemporánea con la menor afectación a los valores esenciales que posee (Salazar et al., 1996, p.17). Se define una posición y un horizonte para los centros históricos mediante la búsqueda de equilibrio entre la conservación y dinamización del sector histórico, lo que condena a los planes a una reinterpretación permanente de las necesidades de la cambiante ciudad actual. En ese sentido, el itinerario por cuatro décadas de formación de las reglamentaciones aporta de manera silenciosa a la activación de instrumentos modernos de protección del patrimonio. Mantiene en su núcleo la condición de verter los proyectos que le permitan ser aceptados en el contexto urbano a través de la triple categoría de conservar, interpretar y proteger el centro histórico como objeto de deseo (Carrión, 2010).

### **3.1.2 Aportaciones seminales: institutos, universidades y otros pioneros (década de 1960)**

En la década de los años 60 del siglo pasado, el interés por el patrimonio monumental mostró un impulso sin precedentes. A partir de 1963 con la entrada en vigor del Decreto 264, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación de Universidades y varias facultades de arquitectura fundan los primeros institutos de investigación estética del país (Salazar et al., 1989, p.20). Las universidades que hacen parte de esta iniciativa son la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), la Universidad de Los Andes,

Universidad de América, Universidad La Gran Colombia y Universidad del Valle. Los profesores de historia de la arquitectura y el arte: Carlos Arbeláez, Hans Rother, Alberto Corradine, Gabriel Uribe, Leopoldo Combariza, Germán Téllez, José Luis Giraldo, Francisco Gil Tovar y Santiago Sebastián (Salazar et al., 1989, p.24), interpretaron la oportunidad de la academia y fomentaron el interés en esta temática. Carlos Arbeláez Camacho motivado por la visita del argentino Mario José Buschiazzi<sup>162</sup> en el año 1958 siguió su consejo y creó en 1963 el Instituto de Investigaciones Estéticas en la Pontificia Universidad Javeriana; es así como un año antes, un alumno destacado de Arbeláez, el arquitecto Germán Téllez funda el Instituto de Investigaciones Estéticas en la Universidad de Los Andes<sup>163</sup> (Escovar & Cárdenas, 2018, p.166).

En esta misma década se crean los institutos de investigaciones estéticas de la Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y sede Medellín en 1968. Acompañados de un auge de estudios y ensayos sobre la arquitectura y arte colonial difundidos en revistas y periódicos. Se destaca desde el año 1962 los trabajos del español Santiago Sebastián López y Carlos Arbeláez Camacho. Se integran en 1967 los estudios de Germán Téllez para el “*Análisis y reglamentación urbanística de la zona histórica de Cartagena*”, en colaboración de los arquitectos Benjamín Barney y Ricardo Ánzola, vinculados al instituto de investigaciones estéticas realizando las primeras fichas de inventario de un sector antiguo (Salazar et al., 1989, p.20). Culminaron en la primera reglamentación sistemática de conservación de la ciudad amurallada (Salazar, 1994, p. 26) de Cartagena de Indias. Sin embargo, su aplicación solo fue posible hasta 1978 cuando fue reglamentado el Plan de Desarrollo por parte de la Alcaldía de la ciudad.

Otros estudios considerados referentes obligatorios para los emprendimientos inmediatos de esta época son: “*Las Fortificaciones de Cartagena y Santa Marta*” elaborados por Juan Manuel Zapatero, restaurador español. El ensayo de Carlos Martínez: “*Apuntes El urbanismo en el Nuevo Reino de Granada*”; además el trabajo teórico sobre “*La preservación y conservación de monumentos arquitectónicos y de conjuntos históricos y artísticos*” del sacerdote jesuita Alfonso Borrero publicado en la revista Apuntes, medio de difusión del instituto de

---

<sup>162</sup> Mario José Buschiazzi profesor de la Universidad de Buenos Aires, dedicado al estudio de la arquitectura argentina e hispanoamericana, relacionada con el periodo colonial, su nombre se encontraba íntimamente vinculado a los profesores españoles Don Diego Angulo Iníguez y Don Enrique Marco Dorta, su principal obra constituía la creación de un Instituto de Investigaciones Históricas y Estéticas, con casi 10 años de actividades, organismo con el cual se integran los intereses y esfuerzos de varios investigadores locales. Fue invitado por Carlos Arbeláez Camacho decano de la Universidad Javeriana y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, llegó a Colombia en el mes de marzo de 1963, pocos días después partió de regreso a Buenos Aires. (Corradine, 1989)

<sup>163</sup> Aquí hay una diferencia en la fecha de fundación del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad de Los Andes, mientras (Salazar et al., 1989, p.20), menciona el año 1968, por su parte (Escovar & Cárdenas M, 2015, p.166), menciona “*el segundo entre 1964 y 1965, en la Universidad de Los Andes, por gestión del Arquitecto Germán Téllez*” (Escovar & Cárdenas M, 2018, p.276). Alberto Corradine, señala que fue en 1962, “*antes de finalizar el año 1963 quedaba establecido el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Javeriana*” (Corradine, 1989).

investigaciones estéticas de la Pontificia Universidad Javeriana en 1971. Del mismo periodo de tiempo “*Observaciones sobre la arquitectura en la provincia del Socorro*” y “*Algunas consideraciones sobre la arquitectura de Zipaquirá*” del arquitecto Alberto Corradine, publicado por la Universidad Nacional de Colombia en 1968 y 1976 respectivamente. (Salazar et al.,1989, p.24). La valoración de los inmuebles desde su condición material a partir de los documentos históricos y “*testimonios del pasado*”, se complementan con una perspectiva en que los edificios adquieren una dimensión de hecho urbano, determinantes en el proceso de construcción de la ciudad contemporánea, “*transformación que implicó un cambio en los principios de la conservación*” (Salazar et al., 1991, p. 15).

Varios factores han incidido en la creación y transformación de las instituciones dedicadas a la cultura en Iberoamérica, una de ellas es la revolución cubana no exenta de contradicciones, cuyos aportes políticos y culturales pueden centrarse en dos etapas: la campaña nacional contra el analfabetismo iniciada en 1961 con la generación de una estructura cultural con niveles reconocidos de “*pluralidad estética y libertad creativa*” promovidas por diversidad de instituciones como el Consejo Nacional de Cultura, la Unión de Escritores, Casa de las Américas, e Instituto Cinematográfico y la Editora Nacional, (Abbattista, 2013, p.5). Entidades inspiradoras y referentes por su capacidad para reconocer las manifestaciones sociales, ésta última la segunda etapa.

Se justifica la generación de instituciones culturales a partir de la aplicación de los nuevos modelos económicos en la década de 1960, esquema que transformo “*la visión de los estados, e implico el tránsito de sociedades agrícolas a sociedades industriales*”, lo que desencadena la adaptación administrativa “*basada en una serie de reformas estructurales*”, con la integración de la institucionalización de la cultura para disipar la “*dispersión en que se encontraba*” (Mejía, 2004, p.1). Esto influye en la generación de movimientos artísticos, literarios, musicales y de diversa manifestación que reclaman una organización pública capacitada para representarlos.

### **3.1.3 De la Declaración de Bucaramanga a la declaración de Ámsterdam (década de 1970)**

El Primer Congreso Colombiano de Bienes Culturales celebrado en la ciudad de Bucaramanga entre el 18 y 23 de marzo de 1971 fue motivado en intereses y objetivos comunes por parte de las entidades del Estado, además de los recién creados institutos de investigación universitarios y profesionales especializados en las temáticas de la conservación y restauración. La síntesis de los criterios y pronunciamientos fue presentada como “*La Declaración de Bucaramanga*”<sup>164</sup>, compuesta por las ponencias expuestas. Entre las que se destacan: el “*Plan de estudios del Centro Histórico de Girón*” dirigido por Gonzalo Romero Mantilla de la Universidad Industrial de Santander y el estudio sobre la “*Reglamentación de Zonas de Interés Histórico y Política*

---

<sup>164</sup> La Declaración de Bucaramanga, se sintetiza en las memorias del evento, editado por la Universidad Industrial de Santander. Cabe recordar que Bucaramanga es la capital del departamento de Santander.

*Municipal*” elaborado por el centro de investigaciones estéticas de la Universidad de Los Andes (Salazar et al.,1989, p.25).

La Ley 47 de 1971 (diciembre 03) crea el Fondo de Inmuebles Nacionales (FIN) y concede facultades extraordinarias al presidente de la República con funciones para: a) administrar y conservar los inmuebles de propiedad de la nación -jardines, monumentos nacionales-; b) construir y adquirir inmuebles que requieran la presidencia de la República, el Congreso Nacional, los Ministerios, los Departamentos Administrativos y Superintendencias; c) se exceptúan los inmuebles destinados a defensa, planteles educativos, cárceles, hospitales y aquellos cuya administración corresponde al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.<sup>165</sup> De los 39 monumentos nacionales propiedad de la nación el FIN administra cerca de 15. En ejercicio de sus funciones celebra contratos de administración delegada y comodato con otras entidades para la gestión de las restantes 24 infraestructuras. Además, ordena la elaboración de estudios para la reglamentación para cinco sectores declarados como centros históricos: Santa Fe de Antioquia, Villa del Rosario, Buga, Socorro y Girón; estudios para sectores antiguos que no cuentan con declaratoria como Cúcuta, Ocaña, Lorica y Bucaramanga. (Salazar et al.,1989, p.41). Por la misma época la Corporación Nacional del Turismo y la Organización de Estados Americanos (OEA) encargan al arquitecto mexicano Carlos Flores Marini<sup>166</sup>, un nuevo estudio de la ciudad de Cartagena con el objetivo de recuperar y restaurar el recinto amurallado, publicado en el año 1972 bajo el título “*Revitalización de Cartagena Antigua*” (Salazar et al.,1989, p.21). Participan por parte del CNT los arquitectos colombianos Roberto de La Vega y Alberto Zamudio Tallero quienes se encargaron de liderar la elaboración de los levantamientos arquitectónicos y la consecución de la documentación histórica (Escovar & Cárdenas, 2018, p.175). “*Mompox: arquitectura colonial*” es producto de investigación patrocinado por la Corporación Nacional de Turismo y elaborado por la Universidad Nacional de Colombia en cabeza del arquitecto Alberto Corradine, publicado en el año 1969. Desde 1970 el municipio Santa Cruz de Mompox cuenta con disposiciones y normas del orden municipal para su conservación arquitectónica. Sin embargo, sólo hasta 1983 mediante el Acuerdo Municipal 016 se aprueba el Código de Urbanismo como complemento del estudio morfológico y reglamentario elaborado en el año 1969 (Isaza,1999, p.94).

Las actividades prioritarias de Colcultura se centraron en tres actividades que definen su estructura administrativa: a) la Subdirección de Comunicaciones Culturales, b) Subdirección de Bellas Artes y, c) la Subdirección de Patrimonio Cultural. A ésta última le corresponde la coordinación de entidades relacionadas con la conservación y protección del patrimonio. La integran la División de Museos y la División de Inventario encargada del registro y manejo del patrimonio cultural mueble e inmueble. Son funciones de la División de Inventario la

---

<sup>165</sup> Ley 47 de 1971 “por la cual se crea el Fondo de Inmuebles Nacionales y se conceden facultades extraordinarias al presidente de la República”.

<sup>166</sup> El arquitecto Carlos Flores Marini (1937-2015), participó en más de 150 proyectos de conservación, remodelación y revitalización de monumentos históricos. Entre sus trabajos en la revitalización de centros históricos se cuentan, Salvador de Bahía (Brasil), Panamá Viejo, Portobello, Casco Antiguo de Panamá (Panamá), Antigua (Guatemala) y Cartagena de Indias en 1972. (Escovar & Cárdenas, 2018, p.175)



actualización y difusión del Banco Nacional de Datos conformado por las fichas de inventario catalogadas y clasificadas. Además de mantener comunicación con el CMN. Desde 1976 actúa como Comité Técnico del CMN hasta 1989 (Salazar et al., 1989; Escovar & Cárdenas, 2018). En respuesta a la declaratoria de los 21 centros históricos<sup>167</sup> la División de Inventario centra sus esfuerzos hasta 1974 en la conformación del catálogo de inventarios de inmuebles ubicados dentro de los perímetros de conservación con la colaboración de cinco facultades de arquitectura<sup>168</sup> - (Salazar et al., 1989, p.38). En el año 1974 se suma el Centro Nacional de Restauración (CNR) a la Subdirección de Patrimonio. Estuvo encargado del diseño de políticas y programas para el patrimonio mueble e inmueble, formuló varios programas que fueron incorporados a los planes de desarrollo municipal. De esta manera se garantizó la continuidad de la iniciativa en el tiempo, a pesar de los cambios de gobierno. Desde 1976, la División de inventario asume la asesoría como Comité Técnico del Consejo Nacional de Monumentos para suplir la carencia instalada con la Ley 163 de 1959 en este aspecto, considerada una verdadera herramienta para la defensa y protección del patrimonio construido (Escovar & Cárdenas, 2018, p.173).

Al asignarse funciones como Comité Técnico del Consejo Nacional de Monumentos, la División de Inventario pierde sus escasos recursos para concentrarlos en el Centro Nacional de Restauración con la suspensión definitiva del trabajo de inventario. Se reevalúa el trabajo adelantado por la subdirección en el año 1975 y se priorizan los estudios regionales del patrimonio para superar la etapa de inventarios puntuales y descontextualizados. A pesar de la sensible situación se desarrollan de manera parcial tres estudios sobre patrimonio cultural: uno en el Valle del Cauca, en Antioquia y el Viejo Caldas contratados por Colcultura a la Universidad del Valle y Universidad Nacional de Colombia sede de Medellín, respectivamente (Salazar et al., 1989, p.38). Posterior a 1978 desaparece la jefatura de la División de Inventario. Actividad relevada por el Ministerio de Obras Públicas y la Corporación Nacional de Turismo, entidades que adelantan trabajos para la reglamentación de los centros históricos de Cartagena - revisión del estudio-, Buga, Bucaramanga, Girón, Mompox y Villa de Leyva (Salazar et al., 1989, p.38).

La ausencia de funciones de la División de Inventario en relación con la promoción y difusión del patrimonio motiva la creación en el año 1976 de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural Colombiano liderada por el Banco de la República de Colombia y otras entidades de orden privado junto el Instituto Colombiano de Cultura y la Pontificia Universidad Javeriana. En la junta directiva se incorpora un delegado de la Academia de Historia, un delegado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y uno del Banco Central Hipotecario (Paláu, 2012, p.33). La década de los setenta fue un periodo de gran actividad académica y técnica en torno al patrimonio construido del país con la celebración de numerosos eventos

---

<sup>167</sup> Los 21 centros históricos son declarados por la Ley 163 de 1959 y el Decreto Reglamentario 264 de 1963.

<sup>168</sup> La facultad de arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de Los Andes en Bogotá, la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga; la Universidad del Valle en Cali y la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia.

académicos como los Seminarios de Restauración de Monumentos Arquitectónicos, organizados por la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto de Investigaciones Estéticas, complementado en 1976 con el II Seminario Interamericano de Conservación y Restauración del Patrimonio Monumental (Escovar & Cárdenas, 2018, p.241).

La Declaración de Ámsterdam (1975)<sup>169</sup> sirve de marco conceptual, al incursionar en una visión integrada de la rehabilitación del patrimonio y la articulación con la planificación urbana (Patiño, 2010, p.67). El concepto de *“la conservación del patrimonio arquitectónico debe ser considerada no como un problema marginal, sino como objetivo principal de la planificación urbana y de la ordenación del territorio”*<sup>170</sup>. Hace un llamado a la armonización de los diferentes actores

La planificación urbana y la ordenación del territorio deben integrar las exigencias de la conservación del patrimonio arquitectónico y no tratarla de forma fraccionaria o como un elemento secundario, como ha sucedido a menudo en el pasado reciente. A partir de ahora, es indispensable un diálogo permanente entre los conservadores y los urbanistas<sup>171</sup>.

El concepto de desarrollo integral esbozado en la Declaración de Ámsterdam se introduce por medio de la Ley 61 de 1978, -orgánica de desarrollo urbano- y su Decreto Reglamentario 1306 de 1980. El centro se reconoce como parte fundamental en el *“conjunto de normas que permiten ordenar, regular y orientar las acciones de los sectores público y privado en los aspectos socio-cultural, económico-financiero, físico-territorial y jurídico-administrativo”*<sup>172</sup>. La finalidad conceptual se orienta a *“...mejorar la calidad de vida de los habitantes y utilizar en forma óptima los recursos existentes...”*<sup>173</sup>. La aplicación de este principio se centró con fuerza en el modelo exhaustivo que poco aportó el esclarecimiento de las funciones del Estado (DNP, 1997, p.8).

### **3.1.4 Despertar de la política de protección (década de 1980)**

En la década de los años 80 del siglo XX las reglamentaciones adquieren un nuevo carácter al ser la materialización de esfuerzos para la ordenación integral del área histórica. La evidente influencia de la producción intelectual sobre los centros históricos, especialmente la proveniente de los teóricos italianos y españoles permearon la concepción y el debate en la

---

<sup>169</sup> El Congreso de Ámsterdam es el evento principal del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico realizado entre el 21 y 25 de octubre de 1975. La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico es la promulgación de Comité de ministros del Consejo de Europa, conocida como la Declaración de Ámsterdam.

<sup>170</sup> Inciso d. II Declaración. Declaración de Ámsterdam (1975.)

<sup>171</sup> Inciso 1. La conservación del patrimonio arquitectónico: uno de los objetivos principales de la planificación urbana y de la ordenación del territorio. II Declaración. Declaración de Ámsterdam (1975.)

<sup>172</sup> Artículo 2, Decreto 1306 de 1980 (junio 02), Por el cual se reglamenta el artículo 3° de la Ley 61 de 1978 sobre planes integrales de desarrollo, y el artículo 9° de la ley 30 de 1969.

<sup>173</sup> Ibidem.

relación de la planeación y conservación del área histórica declarada en la ciudad. Además, preparó un camino que a finales de la década integra los elementos necesarios amparados en el apoyo internacional y nacional para redactar los lineamientos de la política cultural dirigida a los centros históricos que marcaron los años siguientes, siendo definitivo este periodo para la política pública dedicada a la protección del patrimonio cultural. Durante esta década se inician los trabajos de recuperación, revitalización y restauración de una cantidad relevante de monumentos basados en estudios histórico-arquitectónicos y técnicos. Son pioneros los arquitectos Alberto Corradine, Armando Cortés, Germán Franco, Jaime Gutiérrez, Rafael Gutiérrez, Alvaro Barrera, Jaime Salcedo, Germán Téllez y Guillermo Trimmiño (Salazar et al., 1989, p.42). La generalidad en los estudios realizados a edificaciones se basa en las técnicas de la restauración heredada de las teorías europeas en la que la mayoría de los arquitectos pioneros de la restauración fueron formados. Desde el año 1986 se definió la conservación del patrimonio como un programa prioritario dentro del Plan de Economía Social<sup>174</sup>.

En el ámbito de la política urbana, la conservación se incorpora como una estrategia de recuperación de los centros históricos:

*“El Plan de Economía Social identificó como áreas principales de acción para el desarrollo cultural, la preservación del patrimonio cultural colombiano, la democratización del acceso a la cultura y la formación del talento artístico. Para su materialización, asignó a Colcultura la responsabilidad de coordinación y cofinanciación a nivel nacional, a los consejos Regionales de Cultura la función de coordinación a nivel regional, y a las entidades regionales y locales y a la comunidad la realización de los programas. En desarrollo de las tareas propuestas y del trabajo permanente con las regiones y comunidades se hizo evidente la extrema complejidad de la relación del Estado con la cultura, debido a la heterogeneidad de las instituciones culturales existentes, a la diversidad cultural colombiana y a la ausencia de claros lineamientos de política que sirvieran de marco a la acción cultural de las entidades del Estado”<sup>175</sup>.*

A partir de 1989, Colcultura emprende la consolidación de las bases para una nueva política sobre el manejo de los centros históricos y el patrimonio. Se publica el documento *“Consolidación de la política cultural del gobierno”* presentado por el Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Este documento sirve de fundamento para la posterior publicación de la *“Política Cultural para los Centros Históricos y el Patrimonio Inmueble”<sup>176</sup>*. El texto presentado al Conpes fue resultado

---

<sup>174</sup> El Plan de desarrollo económico y social en la presidencia de Virgilio Barco Vargas, 1987-1990, incorpora la política urbana dentro del “Plan de Economía Social”.

<sup>175</sup> Introducción, Documento DNP 2475 UDS Colcultura. “La Política Cultural”, Bogotá, 4 de julio de 1990.

<sup>176</sup> La publicación de este documento se realiza en 1989, por parte de Colcultura como resultado de “un trabajo colectivo elaborado por los consultores del proyecto “Ciudad y Centro Histórico”; que hace parte del Proyecto Colombia 88/015 “Fortalecimiento de la Cultura Regional”, desarrollada desde 1988 por Colcultura

de un proceso de consulta a entidades y especialistas relacionados con la actividad cultural de origen oficial y privada. A su vez se somete a consideración a más de 2000 personas a nivel nacional mediante seminarios y eventos regionales donde las inquietudes y sugerencias son recibidas incluso de organizaciones gremiales de diferente índole profesional. Las líneas principales incorporadas son: a) la cultura en el desarrollo colombiano con subtemas de conocimiento y conservación de la naturaleza; b) contribución de la productividad y generación de riqueza; c) defensa y conservación del patrimonio cultural; d) enriquecer la identidad cultural colombiana; e) afianzar la democracia y respeto a los derechos humanos; f) fortalecimiento de la integridad y solidaridad social; f) fomentar la creatividad y disfrute de la vida. Otra línea general es la justificación y límites de la intervención del estado en la cultura (Colcultura, 1992).

El ambiente de influencias y oportunidades lleva a Colcultura a realizar foros sobre el área urbana histórica<sup>177</sup>, en el cual se presentan por primera vez los avances realizados en la construcción de la política para los centros históricos y el patrimonio. Concluye con el seminario “*La Ciudad como bien de interés cultural*” celebrado en Santafé de Bogotá<sup>178</sup> en junio de 1990. En su momento representó el final del proceso iniciado en el año 1988 con el propósito de formular las políticas para el patrimonio cultural inmueble presentadas de manera oficial en este evento a un grupo de expertos nacionales e internacionales para la confrontación y discusión. Luego de una consulta en la que participaron profesionales de todas las regiones del país se plantea una forma de acción diferente. Se hizo evidente la necesidad de cambiar de actitud, abandonar el centralismo y el paternalismo, fomentar el rol planificador e impulsor de la acción del Estado nacional con respecto al patrimonio cultural (Pizano, 1995). A partir de estas políticas se empezaron a realizar reglamentaciones urbanas encaminadas a la protección de los centros históricos (Escovar & Cárdenas, 2018, p.223)

Otro factor determinante en el impulso de las reglamentaciones proviene de la entrada en vigor de la Ley 9 el 11 de enero de 1989, “*por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo*

---

con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD.” El documento fue elaborado por José Salazar, Rodrigo Cortés, Carolina de Botero y Carlos Niño Murcia.

<sup>177</sup> “*La Conservación del patrimonio Latinoamérica y el Caribe*” se denominó el foro que tuvo dos versiones una inicial en 1986 donde se sus temáticas se centran en reflexiones y desarrollo conceptuales, la modernidad, el concepto oficial de patrimonio, el valor de nuestros centros históricos, razón de ser del espacio público, la restauración, las normas y reglamentos, educación y patrimonio. Una segunda versión en 1998 reunida en Cartagena entre el 24 y 28 de agosto, denominada: “*Segundo Foro Internacional sobre patrimonio arquitectónico y restauración*”, los resultados se centran en los siguientes temas: la arquitectura contemporánea en los centros históricos, la rehabilitación de los sectores históricos, las nuevas tendencias en restauración. (Camacho et al., 2007, p.482).

<sup>178</sup> La Ciudad como bien cultural cuenta con la participación de académicos nacionales e internacionales reunidos en torno a tres temáticas: teoría, investigación y manejo. El evento fue organizado por Colcultura con el apoyo de PNUD, la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), el Banco de la República y la publicación fue auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco del Proyecto Multinacional de Preservación y Uso del Patrimonio Cultural.

*municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones*”. Donde los planes de desarrollo municipal deberán incluir un plan y un reglamento de usos del suelo, cesiones obligatorias, normas urbanísticas específicas, así como la

*“la asignación en las áreas urbanas de actividades, tratamientos y prioridades para desarrollar los terrenos no urbanizados, construir los inmuebles no construidos, conservar edificaciones y zonas de interés histórico, arquitectónico y ambiental, reservar zonas para la protección del medio ambiente y de la ecología, delimitar las zonas de desarrollo diferido, progresivo, restringido y concertado, renovar y redesarrollar zonas afectadas con procesos de deterioro económico, social y físico y rehabilitar las zonas de desarrollo incompleto o inadecuado”*<sup>179</sup>

De esta forma se integra por primera vez la conservación y protección del patrimonio en una norma expedida para la planeación de la ciudad. El área patrimonial adquiere respaldo en las discusiones sobre la política cultural para los centros históricos. El artículo 9 de la Ley 9 de 1989, para efectos de decretar la expropiación declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles urbano y suburbanos para destinarlos a la preservación del patrimonio cultural, incluidos el histórico y el arquitectónico en zonas urbanas y rurales. Como lo menciona el borrador preliminar del trabajo *“Fundamentos de una Política Cultural para los centros históricos”*<sup>180</sup>, la motivación principal para adelantar la modificación administrativa de Colcultura se debe a que treinta años después de aprobada la Ley 163 de 1959 el país sigue asistiendo a un proceso de dilapidación acelerado e irreversible del patrimonio inmueble, situación ante la cual la sociedad y el Estado parecen estar indefensos, pues no cuentan con los instrumentos idóneos para enfrentar la nueva realidad (Salazar et al., 1989, p. 6).

A pesar del esfuerzo disperso de instituciones como la Corporación Nacional de Turismo, la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural Colombiano y Colcultura por realizar estudios para la preservación de centros históricos. El plan de economía social formulado en el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990), genera el impulso y respaldo político para viabilizar escenarios propicios para la discusión sectorial de la política pública cultural y por extensión de las reglamentaciones. El componente estratégico para la rehabilitación y desarrollo de los asentamientos humanos promueve de manera particular el aprovechamiento residual de la infraestructura disponible en las zonas centrales de las ciudades. Propuesta enmarcada dentro de la estrategia de desarrollo social.

---

<sup>179</sup> Numeral 5, artículo 2, Ley 9 de 1989 (enero 11): *“por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”*.

<sup>180</sup> El documento *“Fundamentos de una Política Cultural para los Centros Históricos”*, hace parte de los trabajos realizados dentro del proyecto *“Ciudad y Centro Histórico”* que desarrolla Colcultura y PNUD, con carácter de borrador preliminar de trabajo y con circulación restringida. Hace parte de la tercera versión, Bogotá, octubre 30 de 1989.

### 3.1.5 Transición hacia una política cultural para los centros históricos (década de 1990)

El sentido del patrimonio cultural cambia a partir de los objetivos del proyecto COL/015/88 celebrado entre Colcultura y PNUD, debido “...a un equipo de especialistas que elaboraron el documento de políticas y desarrollaron los instrumentos de manejo para los centros históricos y el patrimonio inmueble”. Los criterios establecidos le otorgan consistencia al manejo y matiza una relación renovada entre la cultura y la ciudad, bajo “el supuesto que todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de acceder al territorio urbano y reconquistarlo como bien cultural”, a través de dos acciones concretas: a) la publicación de la Política Cultural para los Centros Históricos y el Patrimonio Inmueble en 1989 (Colcultura, 1990, p. 32) y, b) la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991. Durante el desarrollo del Proyecto Regional de Patrimonio Cultural y Desarrollo PNUD-Unesco se lleva a cabo una asesoría a la reglamentación del centro histórico de Cartagena. Además de las reglamentaciones de Villa de Leyva, Mompox y Barichara que son asesoradas en su componente de patrimonio cultural y desarrollo urbano. Se plantea la elaboración de un “Manual de reglamentación para los centros históricos y zonas de interés patrimonial” dirigido a alcaldes y funcionarios de la administración local y departamental (Colcultura, 1990, pp. 32-33).

En la década de los noventa el programa de protección de sectores antiguos se sustenta en dos líneas de acción: la investigación y la reglamentación. En la primera se desarrolla el diagnóstico de los centros históricos declarados monumento nacional, con énfasis en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Tolima, realizados con el apoyo técnico del Instituto de Arquitectura de Venecia. Una segunda etapa de investigación incluye los centros históricos de Salamina, Cartagena, Mompox y Santafé de Bogotá. Se adelanta la revisión de las reglamentaciones elaboradas hasta ese momento de los centros históricos de: Santafé de Bogotá, Tunja, Salamina y Pamplona presentadas y aprobadas por el Consejo de Monumentos Nacionales y se complementan la de los municipios de Santa Marta, Honda, Buga y Santafé de Antioquia. También se lleva a cabo la contratación de las reglamentaciones de Pasto, Barichara, Cartago, Ciénaga, Sesquilé y Caloto. Adicionalmente se adoptan y establece un mecanismo de seguimiento a las reglamentaciones aprobadas. A su vez, se hace la entrega a las autoridades municipales de la reglamentación de Pamplona en 1991 y se prevé en el siguiente año las de Tunja y Salamina (Colcultura, 1992, p. 19). A principios de la década de 1990 se promueve un “Programa de Recuperación del Centro Histórico de Barraquilla”, considerado un proyecto especial del programa de protección de sectores antiguos a partir de un convenio marco realizado entre Colcultura, la Alcaldía de Barraquilla, la Gobernación del Atlántico, la Cámara de Comercio de Barraquilla y Federación Nacional de Comerciantes – Fenalco-. La finalidad es “la recuperación de uno de los cascos urbanos republicanos más importantes del país” (Colcultura, 1992, pp. 19-20). El programa fue liderado por el Arquitecto Carlos Bell Lemus cuando se desempeñaba como director del Departamento de Planeación Distrital en la Alcaldía de Barraquilla. Época en que se formulan e implementan las reglamentaciones del centro histórico de la ciudad y del barrio El Prado.

El programa V denominado: Protección, investigación y difusión del patrimonio; subprograma protección de los Sectores Antiguos del Plan Nacional de Cultura 1992-1994, plantea lineamientos para el manejo de los centros históricos. A partir de las problemáticas del área urbana central derivadas del deterioro de los inmuebles reconocidos como patrimonio histórico:

- a. Reglamentación de los centros históricos: programa de descentralización que entrega a los municipios el manejo de sus zonas antiguas en coordinación con Colcultura. Las actividades principales son la puesta en funcionamiento de las reglamentaciones aprobadas por el CMN en Pamplona y Tunja. Finalización, aprobación y adopción de las reglamentaciones de los municipios de Honda, Salamina, Santa Marta y Buga. Realización de nuevas reglamentaciones para los centros históricos de Santafé de Antioquia, Mompox, Ambalema, Barichara, Ciénaga y Pasto, así como la difusión del Manual de Reglamentación.
- b. Realización de un diagnóstico a los centros históricos que pretende evaluar el estado de los sectores históricos declarados para definir las políticas y orientar las acciones a desarrollar de manera conjunta con Colcultura, el CMN y los municipios. Las actividades priorizadas para ejecución son: consulta de archivos, identificación de fuentes de documentación, complementación de información fotográfica y documental; verificación del estado de conservación de inmuebles y reconocimiento de las dinámicas de transformación de las áreas protegidas.
- c. Protección de áreas de interés histórico de pequeñas poblaciones del país: orientado al reconocimiento y valoración del patrimonio de los pequeños conjuntos como alternativa para fortalecer los valores culturales locales. Pretende desarrollar una reglamentación modelo para los municipios de Sesquilé y Caloto. A partir de esta experiencia formular un manual para la reglamentación y manejo de las pequeñas poblaciones de interés histórico y ambiental, además de la respectiva difusión.
- d. Proyecto de zonas de interés patrimonial en las grandes ciudades del país no declaradas centros históricos. Dirigido a la identificación de barrios y sectores urbanos con importantes valores patrimoniales dentro de las grandes ciudades no reconocidos como centros históricos. Para ello se realiza el análisis y reglamentación de la zona central de Barraquilla, modelo para el caso de una zona de interés patrimonial no declarado centro histórico. Elaboración de un manual para la reglamentación y manejo de las zonas históricas de ciudades no declaradas monumento nacional (Colcultura, 1992, pp. 57-60)

El “*Manual para la Reglamentación de los sectores urbanos antiguos*” fue elaborado en etapas sucesivas desde 1989 por Luisa Samper, Rodrigo Cortés y José Salazar, estos últimos profesores de la Universidad Nacional de Colombia. El desarrollo hace parte del programa de valoración y protección de los centros históricos. Específicamente de la estrategia de adecuación del aparato legal, institucional y técnico. Inscrito en el programa de ampliación de la cobertura y efectividad de las reglamentaciones. El manual de reglamentación es posible

gracias a la modificación de la estructura administrativa de Colcultura mediante el Decreto 800 del 17 de abril de 1990, donde la recientemente creada División de Centros Históricos y Monumentos debe propender por el desarrollo de reglamentaciones y acciones preventivas en beneficio de la salvaguarda de las condiciones de los centros históricos.

**Figura 3.02 Centro histórico del Municipio Santafé de Antioquia (Antioquia)**



Fuente: Imagen tomada de Gran Colombia Tours

### **3.2 Del Decreto 2233 de 1980 a la Ley 388 y 397 de 1997: Las reglamentaciones para protección de los centros históricos en la consolidación de las políticas de patrimonio cultural**

El periodo comprendido entre el transcurso del Decreto 2233 del 19 de noviembre de 1980, mediante el cual se aprueba el Reglamento Especial para la Zona Histórica y Cultural de la Merced de la ciudad de Cali, y la Ley 388 y 397 de 1997 de desarrollo urbano y cultura. Se hace evidente la transición, de una legislación aislada dedicada a los monumentos históricos hacia una política pública dedicada a la cultura con diversidad de facetas y elementos que permiten consolidar la protección del patrimonio cultural a partir de instrumentos de regulación y gestión. Tres momentos relevantes en esta etapa son determinantes en la caracterización general hacia la consolidación de la protección del patrimonio urbano, a saber: a) la publicación



de la “*Política Cultural para los Centros Históricos y el patrimonio inmueble*” promovido por Colcultura en 1989, considerado un hito en el pensamiento local sobre el patrimonio (Beuf & Martínez, 2015, p. 14); b) la promulgación de la Constitución Política de 1991, se constituye en una ruptura en la concepción del Estado y su modernización institucional; c) finalmente la entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y la Ley 397 de 1997, Ley de Cultura, por la cual se crea el Ministerio de Cultura, además de establecer el marco legal que rige su destino en los años siguientes.

Previo a la promulgación de la Constitución Política de 1991, los esfuerzos por reorientar la comprensión y práctica de la cultura, especialmente la relacionada con la ciudad histórica, sus inmuebles, urbanismo y sociedad, son materializados con el auspicio del Proyecto Colombia 088/015<sup>181</sup>, se sintetiza en el documento “*Política Cultural para los Centros Históricos y el patrimonio inmueble*”, publicado en 1989, y como lo menciona Liliana Bonilla en la presentación del mismo documento: “*era preciso un trabajo sistemático dentro del Estado mismo, que llevará a delinear una política pública que partiera de definir el territorio de intervención del Estado en el sector cultura y el trazo de programas y proyectos que concretaran la acción gubernamental*”<sup>182</sup>; el aporte de este proyecto origina el horizonte de su contribución en el componente de la cultura en la nueva Constitución Política y la posterior Ley de Cultura en 1997.

Al inicio de esta etapa, los centros históricos suman 24 áreas históricas reconocidos al año de 1979, a los cuales se adhirieron los sectores de Ambalema (1980), Jardín (1985), Turmequé (1989), Tenjo (1993), Manizales y Ciénaga en 1993, declarados como Monumento Nacional bajo el mismo amparo legal establecido en la Ley 163 de 1959 y el Decreto 264 de 1963, quedando constituido el 66% del patrimonio urbano en Colombia. De igual modo, mediante resolución, se propuso la declaratoria de Monguí, Zipaquirá, Salamina, Marmato y Guaduas en 1982. Posteriormente dos resoluciones emanadas por el Consejo de Monumentos Nacionales declararon parte del patrimonio histórico y artístico de la Nación a Calarcá y Almaguer en 1986 (Salazar et al., 1989), sin ser reconocidas dentro del corpus patrimonial reconocido. Estas son las últimas poblaciones declaradas en la vigencia de la Constitución Política de 1886.

A pesar, que la *Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural*, se celebra en París el 16 de noviembre de 1972, Colombia solo se integra hasta 1983, mediante la Ley 45<sup>183</sup>, de esta forma, el gobierno se asocia a un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a apoyar los Estados parte en su esfuerzo para armonizar iniciativas con

---

<sup>181</sup> El proyecto 088/015 correspondiente al “*Fortalecimiento de la Cultura Regional*”, es desarrollado por Colcultura con al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde 1998 hasta el año 1990. Como resultado de esta iniciativa se elabora el documento “*Política Cultural para los Centros Históricos y el Patrimonio Inmueble*”, elaborado por José Salazar, Rodrigo Cortes, Carlos Niño bajo la dirección de Carolina Barco, publicado en 1989.

<sup>182</sup> Tomado de la presentación de la “*Política Cultural para los Centros Históricos y el patrimonio Inmueble*”. Página 9.

<sup>183</sup> Colombia se vincula a la Convención de Patrimonio Mundial el 24 de mayo de 1983.

el fin de promover medidas de conservación e identificación del patrimonio cultural local. Esta misma Convención introduce un nuevo referente “*patrimonio mundial*”, a partir de la dualidad entre patrimonio cultural y natural, este “*instrumento internacional propone unos referentes sobre el patrimonio que implican un intento de estandarización de su significado a escala mundial*”. (Garavito, 2006, p. 176).

El interés de la legislación nacional sobre la política pública para la cultura se encuentra vinculada a las propuestas internacionales, donde en esta misma instancia reposan los referentes a los cuales se adhiere, en un modelo de gestión vertical, donde el gobierno con el apoyo de expertos en la materia identifica los bienes patrimoniales a declarar, sin la debida participación de las comunidades afectadas o beneficiadas (Garavito, 2006). Dentro de la diversidad de manifestaciones culturales, el patrimonio inmueble no ha sido objeto nunca de una política en el país, los únicos antecedentes al respecto son fragmentarios: leyes, decretos, trabajos, estudios, que hablan de patrimonio, pero sin llegar a constituir una política de orden efectiva (Salazar et al., 1988).

La ausencia de nuevas leyes sobre patrimonio cultural antes de 1997 motivó la generación de debates en torno a las necesidades de legislaciones actualizadas. En tal sentido, y bajo el auspicio del Proyecto Regional de Patrimonio Cultural PNUD/UNESCO, se emprende el proyecto de reforma de la Ley 163 de 1959, que en 1982 cursaba su proceso de aprobación en el Congreso de la República. Coincide el inicio de las actividades del Proyecto Regional en los años 70, con el recién constituido Instituto Colombiano de Cultura, propicio para acogerse a las actividades de colaboración a los gobiernos de América Latina centrados en el fomento de la actualización de los marcos regulatorios del patrimonio cultural, al igual que la promoción de este concepto por medio de material didáctico difundido para maestros, promotores culturales y público en general (Proyecto Regional de Patrimonio Cultural PNUD /UNESCO, 1982).

El proyecto de reforma de la Ley 163 de 1959<sup>184</sup>, “*por la cual se dictan medidas sobre el Patrimonio Cultural Nacional*”, donde la definición de patrimonio cultural:

Se entiende por Patrimonio Cultural el conjunto de bienes que, por su valor literario, filológico, artístico, histórico, arquitectónico, urbanístico, folklórico, antropológico, antropológico, etnográfico, arqueológico, ecológico o científico, forma el acervo de la cultura nacional y merece especial protección y respeto por el Estado y los particulares. Dicha protección se ejerce de acuerdo con la Ley y los reglamentos, por las autoridades competentes, en los términos de la presente Ley, cuyas regulaciones desarrollan el principio constitucional de la función social de la propiedad, en su aspecto cultural<sup>185</sup>.

---

<sup>184</sup> La transcripción del Proyecto de Reforma de la Ley 163 de 1959, se encuentra en el libro: Patrimonio Cultural: Selección de legislaciones en América Latina y el Caribe, del Proyecto Regional de Patrimonio Cultural PNUD/UNESCO, Lima, 1982. Páginas 89-106.

<sup>185</sup> Artículo 1. Proyecto de Reforma de la Ley 163 de 1959.

A este respecto, son considerados Bienes Culturales “*aquellos que individualmente son acreedores a la consideración especial, oficial o particular, por vinculación al patrimonio cultural de la nación*”, a su vez, “*pueden tener la categoría de monumentos nacionales, muebles o inmuebles, cuando les ha sido otorgado por la Ley o por la autoridad competente*”<sup>186</sup>, su protección será encargada al Instituto Colombiano de Cultura, “*el cual dictara las normas necesarias para su protección y conservación, dentro del marco de las funciones [...] para asegurar la función social cultural de la propiedad*”<sup>187</sup> al igual que la administración de los bienes propiedad de la nación.

En cuanto al patrimonio urbanístico, como lo denomina el proyecto de reforma de la Ley 163 de 1959, se considera de utilidad pública “*todos los edificios y lugares que por su antigüedad y belleza arquitectónica y por su tradición histórica, merezcan ser conservados como patrimonio nacional*”<sup>188</sup>, en esa línea, declaro especialmente:

Las zonas históricas de las ciudades de Bogotá, Cartagena, Tunja, Popayán, Mompós, Santa Marta, Villa del Rosario de Cúcuta, Ocaña, Bucaramanga, Girón, Pamplona, Vélez, Barichara, Curití, Aratoca, San Gil, Socorro, Monguí, Tópaga, Corrales, Pesca, Iza, Villa de Leyva, Sáchica, Ráquira, Sutamarchán, Guaduas, Tabio, Guasca, Santa Fé de Antioquia, Cartago, Buga, las cuales se declaran monumentos nacionales, de acuerdo con la presente Ley y las leyes anteriores que así lo dispusieron<sup>189</sup>.

Ante el inminente fracaso de aprobación de la reforma de la Ley 163 de 1959 en el año 1982, en el informe de gestión de Liliana Bonilla Otoyá, directora de Colcultura para el periodo 1989-1990, menciona el emprendimiento para elaborar un “*Proyecto de Ley sobre Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación*”, cuya finalidad era “*crear instrumentos específicos para superar los vacíos e inconsistencias detectadas en la legislación vigente*” es decir en la Ley 163 de 1959 y el Decreto Reglamentario 264 de 1963, además de “*crear incentivos para vincular a la ciudadanía y las fuerzas vivas de la comunidad a los programas de protección del patrimonio*”, con asesoría de la Universidad Externado de Colombia (Colcultura, 1990, p. 18).

Con el fin de atender el principio consagrado en la Constitución Política de Colombia de 1991, se establece en el artículo 8: “*es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación*”; de esta forma la participación ciudadana en la protección del patrimonio introduce a la comunidad como un componente activo y principal promotor de su uso y disfrute. El artículo 72, de la Constitución Política, que hace parte del capítulo II dedicado a los derechos sociales, económicos y culturales, señala:

---

<sup>186</sup> Artículo 2, Proyecto de Reforma de la Ley 163 de 1959.

<sup>187</sup> Artículo 3, Proyecto de Reforma de la Ley 163 de 1959.

<sup>188</sup> Artículo 4, Proyecto de Reforma de la Ley 163 de 1959

<sup>189</sup> Párrafo, Artículo 4, Proyecto de Reforma de la Ley 163 de 1959

*“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que podrán tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”.*<sup>190</sup>

En concordancia con lo anterior, en el año 1993 un grupo de juristas y personalidades de la cultura inicio la redacción de tres proyectos de ley que actualizaron la legislación cultural en el campo del patrimonio cultural, las culturas vivas y la creación del Ministerio de Cultura. En el gobierno de Ernesto Samper Ospina (1994-1998) se presentó ante el Congreso un proyecto unificado bajo el título “Ley General de Cultura”, que luego de tres años de debate fue aprobado en 1997, siendo la Ley 397 (Escovar & Cárdenas, 2018). Mientras esto ocurre en 1996 se declara al municipio de Ciénaga como Monumento Nacional mediante el Decreto 2012 de 1996, y el área central de la ciudad de Manizales (Decreto 2178 de 2 de diciembre de 1996), siendo los dos últimos centros históricos declarados por el Ministerio de Educación.

Con la entrada en vigor de la Ley 397 de 1997, Ley de Cultura, se dictan “*normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos*” y se crea el Ministerio de Cultura, quien recibe de Colcultura la obligación de proteger las áreas históricas declaradas.

### **3.2.1 Las reglamentaciones: etapas, estado y vigencia**

Es posible diferenciar dos etapas generales en el proceso de formulación y adopción de las reglamentaciones de los sectores antiguos declarados como monumento nacional: antes del “*Proyecto de reglamentación de los centros históricos*”, inscrito dentro del programa “*Protección, investigación y difusión del Patrimonio*”, subprograma “*Protección de los sectores antiguos*” y posterior a este programa.

En el primero de ellos (1963-1992) hay dos procesos identificables:

- a) la promulgación del Decreto 264 de 1963 junto a la etapa exploratoria de las primeras reglamentaciones en la década de los años ochenta y la publicación de la “*Política Cultural para los Centros Históricos y el Patrimonio Inmueble*” en 1989 que origina los lineamientos del Plan Nacional de Cultura 1992-1994 de Colcultura;
- b) los programas descritos fortalecen el proceso hasta la promulgación de la Ley 397 de 1997, siendo el fin de formulación e implementación de nuevas reglamentaciones. La adopción e implementación condujeron a la pérdida jurídica del instrumento. Aún hoy vigente en algunos centros históricos.

---

<sup>190</sup> Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia.

Dentro de la primera etapa (1963-1992) en el año 1967 se elabora el estudio “*Análisis y reglamentación urbanística de la zona histórica de Cartagena*”, donde se “*realizaron las primeras fichas de inventario de un sector antiguo*” a cargo de Germán Téllez con colaboración de Benjamín Barney y Ricardo Anzola, arquitectos vinculados al centro de investigaciones estéticas de la Universidad de Los Andes. Se destacan los trabajos realizados por el arquitecto Alberto Corradine sobre las poblaciones: “*Observaciones sobre la arquitectura en la provincia del Socorro*” en 1976 y “*Algunas consideraciones sobre la arquitectura de Zipaquirá*” en 1969 realizados con la Universidad Nacional de Colombia en su vinculación como docente. De su autoría “*Mompox: arquitectura colonial*” realizado con la Corporación Nacional del Turismo en 1969, ampliado y complementado en 1971 y denominado “*Santa Cruz de Mompox: estudio morfológico y reglamentario*” (Salazar et al., pp. 20-24).

En el informe de gestión 1989-1990 en la administración de Liliana Bonilla en la dirección de Colcultura se menciona sobre los sectores antiguos declarados, “*asesoría a la reglamentación del centro histórico de Cartagena, organización y participación en los grupos de trabajo y seminarios de evaluación (con el Proyecto Regional de Patrimonio Cultural y Desarrollo PNUD-UNESCO)*” (Colcultura, 1990; p. 31). Bajo el mismo proyecto se realizan asesorías “*a las reglamentaciones de Villa de Leyva, Honda, Mompox y Barichara*”, durante este periodo de gestión se realiza la restructuración de Colcultura (Colcultura, 1990; p. 32).

Según Salazar en 1994, se habían elaborado 12 reglamentaciones para los siguientes sectores antiguos: Cartagena, Bogotá, Villa de Leyva, Pamplona, Tunja, Salamina, Santa Marta, Buga, Santafé de Antioquia, Mompox, Sesquilé y Caloto, este último no declarado monumento nacional. Adicionalmente se encontraban en proceso de aprobación o ejecución las siguientes reglamentaciones: Barichara, Ciénaga, Pasto, Zipaquirá, Honda, el Prado- centro de Barranquilla y Cartago, (1994:24). Priorizadas a partir de los preinventarios y la metodología propuesta en la política de centros históricos. Las reglamentaciones de los municipios de los centros históricos de Villa de Leyva y Buga fueron realizadas por el arquitecto Jaime Salcedo Salcedo (Mendoza, 2001, p.139).

Esta última atribuida al arquitecto Carlos Botero de la Universidad del Valle. Es notable la presencia de académicos de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Los Andes y oficinas de consultoría de propiedad o asociaciones de los mismos docentes.

A continuación, en la Tabla 4 se observa la relación de las reglamentaciones formuladas y aprobadas en la década de 1990.

**Tabla 4. Relación de reglamentaciones de centros históricos declarados en la década de 1990**

DEPARTAMENTO	CIUDAD	DECLARATORIA	ENTIDAD	REGLAMENTACION APROBADA		CONSULTORES
				Nacional	Municipal	
ANTIOQUIA	Jardín	Dec. 1132 de 1985	ME Declara	Acta 12 de 1990	Acuerdo 048 de 1990	
	Santafé de Antioquia.	Ley 163 de 1959	GN Declara	Res. 042 de 1994	Acuerdo 021 de 1994	Universidad Nacional de Colombia (Medellín) Dir. Arq. María Eugenia Martínez 1992-1993
	Jericó		MC Declara	2018		Universidad Nacional de Colombia (Medellín) Dir. Arq. León Restrepo / 1995
BOGOTA D.C.	Bogotá D.C:	Dec. 264 de 1963	ME Declara	Res. 029 de 1994	Decreto 678 de 1994	
BOLIVAR	Cartagena de Indias	Ley 163 de 1959	GN Declara	Res. 043/1994	Acuerdo 40 de 1994	Colcultura / PNUD / Alcaldía de Cartagena Dir. Arq. Germán Bustamante Asesor: Arq. Giorgio Lombardi Complementación: Subdirección de Patrimonio- Alcaldía de Cartagena 1993-1994
	Santa Cruz de Mompox	Ley 163 de 1959	GN Declara	Res. 039/1994	Acuerdo 01 de 1994	Subdirección de Patrimonio Programa Centros Históricos Asesores: Arq. Germán Téllez Arq. José Salazar 1993-1994
BOYACÁ	Tunja	Ley 163 de 1959	GN Declara	Res. 41/94 Acta 11/96	Decreto 311/1995	Arq. Alberto Corradine / 1992 Revisión y complementación: Subdirección de Patrimonio Programa Centros Históricos 1993
	Villa de Leyva	Dec. 3641/54 Ley 163/59	GN Declara	Acta 5 de 1995 (adoptada por)	Acuerdo 007 de 1996	Arq. Jaime Salcedo 1993 Revisión y complementación: Subdirección de Patrimonio Programa Centros Históricos 1994-1995
CALDAS	Manizales	Dec. 2178 2-12-96	ME Declara	Res. 785/98 Mod. Dic./99		Universidad Nacional de

						Colombia (Medellín) Dir. Arq. Jorge Enrique Esguerra 1995
	Salamina	Res. 0087 2-2-2005	MC Declara	Res. 027/1994	Agosto de 1994	Universidad Nacional de Colombia (Medellín) Dir. Arq. Hernán Giraldo 1992
<b>CAUCA</b>	Popayán	Ley 163 de 1959	GN Declara	Res. 0786 de 1998 MC	Acuerdo 29/1997	Subdirección de Patrimonio 1983-1985
<b>CORDOBA</b>	Santa Cruz de Lorica	Res. 796 16-6-2000	MC Declara		Acuerdo 007 de 1994	
<b>CUNDINAMARCA</b>	San Miguel de Guaduas	Ley 163 de 1959	GN Declara	Res. 021 de 1997		Ceam Ltda Dir. Arq. Alberto Saldarriaga 1995
	Zipaquirá	Res. 0087 2-2-2005	MC Declara	Res. 47/94 Mod. Ac. 5/95		Montenegro & Perfetti Dir.: Arq. Fernando Montenegro 1994 Revisión y complementación: Subdirección de Patrimonio Programa Centros Históricos 1995
<b>MAGDALENA</b>	Ciénaga	Dec. 2012 de 1996	ME Declara	Res. 013 de 1995	Acuerdo 027 de 1993	Atrivm Ltda. Dir.: Arq. Pilar Zambrano 1994
	Santa Marta	Ley 163 de 1959	GN Declara		Acuerdo 027 de 1997	Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) Dir. Arq. Fernando Montenegro 1992
<b>NARIÑO</b>	San Juan de Pasto	Ley 163 de 1959	GN Declara			Arq. Liliana Bonilla 1995
<b>NORTE DE SANTANDER</b>	Pamplona	Dec. 264 de 1963	GN Declara	Res. 030/1994		Atrivm Ltda. Dir.: Arq. Pilar Zambrano 1994
<b>SANTANDER</b>	Barichara	Dec. 1654 de 1978	ME Declara	Res. 038 de 1994	Acuerdo 02 de 1994	Ceam Ltda. Dir. Arq. Alberto Saldarriaga 1995
	San Juan de Girón	Dec. 264 de 1963	GN Declara			A.M.A.B. Asesoría: Colcultura 1981
	Socorro	Dec. 264 de 1963	GN Declara			Arq. Alberto Corradine 1982
<b>TOLIMA</b>	Ambalema	Dec. 776 de 1980	ME Declara		Acuerdo 015 de 1998	Estudios previos: Arq. Hernán Giraldo 1992 Diagnóstico final y reglamento:

						Subdirección de Patrimonio Programa Centros Históricos 1995
	Honda	Dec. 1192 de 1977	ME Declara	Res. 48/94 Mod. 7-12-99	Dec. 165 de 1995	Subdirección de Patrimonio Programa Centros Históricos 1994
VALLE	Guadalajara de Buga	Ley 163 de 1959	GN Declara	Res. 015 de 1995	Acuerdo 109 de 1997	Universidad del Valle Dir.: Arq. Carlos Botero 1993-1994
	Cartago	Ley 163 de 1959	GN Declara			
	Santiago de Cali, La Merced	Ley 163 de 1959. Dec. 789/71	GN Declara	Ac. 01/81. Mod. Ac. 13/84	Dec. 2233 de 1980	Subdirección de Patrimonio Programa Centros Históricos 1994

Fuente: Elaboración propia con base en información de resoluciones, acuerdos y (Salazar,1996)

Se comprende que “...existe una gran distancia, en muchos casos, entre el espíritu de las leyes y reglamentos sancionados para proteger el patrimonio arquitectónico y urbanístico, y su aplicación real y efectiva...” (Hardoy & Gutman, 1992, p.263). En particular por las limitaciones propias de las reglamentaciones referidas a sus contradicciones y arraigos en las profundas convicciones conceptuales provenientes de condiciones y dinámicas urbanas cuya temporalidad, alcance y aplicación está restringida por el avance en la implementación de técnicas de la planificación urbana que se encuentran en estado convencional o inexistente.

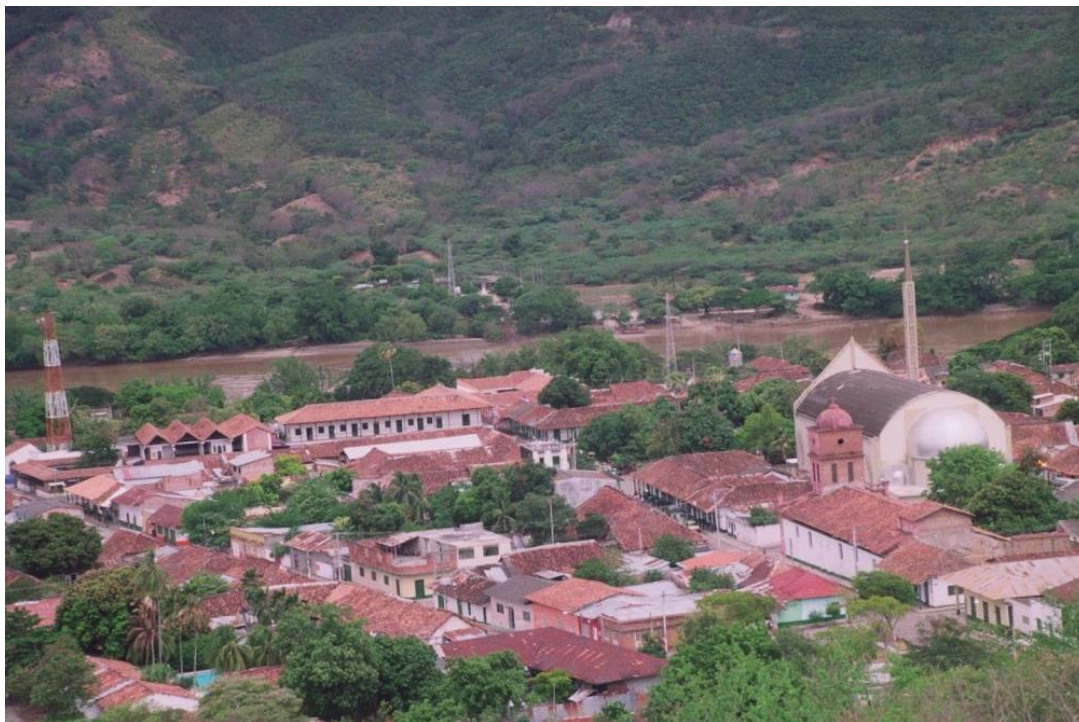
A pesar del esfuerzo de la formulación, aprobación e implementación de la reglamentación para los sectores urbanos patrimoniales los mecanismos utilizados para la protección consideran a las edificaciones de manera individual, con la persistencia de la desvinculación entre la regulación instaurada en este instrumento y el derecho urbanístico vigente (Hardoy & Gutman, 1992).

La norma cultural de las reglamentaciones no se consideraba dentro del derecho urbano sino dentro de la restricción policial civil. Esto indujo una dislocación entre el sentido y el respaldo de la protección a los centros históricos.

Con frecuencia se limitaban a definir la competencia genérica de los organismos públicos en torno a la conservación de monumentos y conjuntos, así como las obligaciones de los poseedores de bienes protegidos, sin aludir a técnicas concretas de planificación urbana y a factores básicos como el régimen de propiedad, los usos del suelo, la tenencia de la vivienda y el equipamiento (Hardoy & Gutman, 1992, p.267).



**Figura 3.03 Centro histórico del Municipio de Ambalema (Tolima)**



Fuente: Imagen tomada de News Press Service

### **3.2.2 El papel de Colcultura en el desarrollo de los instrumentos de protección del patrimonio urbano**

En la década de 1990 es determinante la estructuración y realización de las reglamentaciones de los centros históricos declarados monumento nacional, por la creación y difusión del “*Manual para la reglamentación de los sectores urbanos antiguos*” publicado en diciembre de 1991. Orientado en esencia como “*un instrumento normativo que supone una serie de referencias a las políticas públicas, a otros manuales realizados en otras partes del mundo*”<sup>191</sup> y su condición *estructural de documento técnico*” sugerido para resaltar los valores y “*las características cualitativas del espacio físico*”. Bajo el marco de un laboratorio de reflexión urbana (Colcultura, 1992, p. 2). Posteriormente en el año 1995 la divulgación de “*Pobladors de Interés Patrimonial, Manual de Reglamentación*”, editado “*con el propósito de ampliar el ámbito de lo que se considera tradicionalmente como patrimonio arquitectónico*” (Pizano, 1995), procuraba subsanar la ausencia de instrumentos de protección del patrimonio urbano no declarado. El

---

<sup>191</sup> Se refiere a los programas promovidos por UNESCO a través de PNUD, para la formulación de la política pública de protección del patrimonio cultural en varios países de América Latina, así como las experiencias exitosas de intervención de centros históricos especialmente de Europa. Lo relacionado con los Manuales de Reglamentación son el producto derivado de la aplicación de las políticas y primeras normas para la protección del patrimonio urbano en el caso de Colombia.

origen de ambos manuales dirigidos al patrimonio urbano en dos situaciones jurídicas opuestas, inicialmente para los sectores urbanos antiguos declarados y para poblados con interés patrimonial sin declaratoria en el segundo caso<sup>192</sup>, albergan dos ideas fundamentales: a) la difusión para la valoración del patrimonio más allá de la declaratoria en la memoria colectiva de comunidades urbanas y rurales, “*las asociaciones, los grupos sociales, los profesionales y el gobierno sobre la necesidad de valorar, y proteger el patrimonio cultural como una forma de elevar su calidad de vida*” (Salazar, 1994, p. 23). b) La segunda idea está dirigida a contener la destrucción del patrimonio en diversos niveles de afectación, para ampliar las condiciones de protección mediante la reglamentación de normas urbanas y mecanismos de difusión para el reconocimiento y disfrute por parte de la sociedad.

El manual de reglamentación de poblados de interés patrimonial es publicado en octubre de 1995, promovido por Colcultura desde el año 1992. En ese sentido se señala en el informe de gestión, la elaboración de un manual para la promover la formulación de la reglamentación y manejo de poblados con patrimonio de interés social a partir de una investigación del análisis morfológico, tipológico, histórico y regional en ocho municipios del altiplano Cundiboyacense (Colcultura, 1992, p. 19). Colcultura fomenta tres estrategias formuladas en 1989 centradas en la promoción de acciones de protección urgentes para la elaboración de mecanismos para la puesta en marcha de la política y coordinación de entidades nacionales, a saber: a) fortalecer el proceso de descentralización en las regiones para incentivar el trabajo conjunto con departamentos y municipios como estímulo al empoderamiento sobre la responsabilidad de la salvaguarda local; b) la creación de programas de concientización de la comunidad con dos acciones específicas: capacitación por medio de las universidades y, c) campañas generales hacia la ciudadanía (Salazar, 1994, p.24). Subyace en esta propuesta la necesidad de promover entre la comunidad la arquitectura y el urbanismo histórico como un hecho cultural cotidiano mediante la formación de un público capacitado a partir de la sensibilidad para comprender e interiorizar la experiencia ciudadana a un nivel de responsabilidad compartida con el fin de garantizar la salvaguarda, protección y conservación de su entorno urbano.

La ausencia de una cultura urbanística en Colombia, en especial entre la relación y comprensión del patrimonio urbano y arquitectónico de las áreas históricas como parte integral de la ciudad y elemento fundamental de su construcción (Salazar, 1996, p. 13), emerge una condición estructural a finales de la década de los años 80 del siglo XX. De manera particular, por la promulgación de la Ley 9 de 1989<sup>193</sup>, coincide con la publicación de la “*Política Cultural para los Centros Históricos y el Patrimonio Urbano*” por parte de Colcultura. Se acentúa aún más dos vertientes sobre la cual se pretende fomentar la cultura urbanística en la década de los años 90. Una centrada en la urgencia de implementación de la política cultural para el

---

<sup>192</sup> Dentro de los resultados de Colcultura en la gestión 1989-1990, en el componente de Patrimonio Inmueble, se menciona. “*Elaboración de un Manual de Reglamentación para los Centros Históricos y zonas de interés patrimonial dirigido a alcaldes y funcionarios de administraciones departamentales y municipales*” (Colcultura, 1990, p. 33)

<sup>193</sup> Ley 9 de 1989 (enero 11): “*por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.*”

reconocimiento del patrimonio urbano y las áreas históricas urbanas. De otra parte, la planificación del desarrollo urbano municipal a partir de los planes de desarrollo y la incorporación de instrumentos para la gestión del suelo, a pesar de coexistir en su orientación, cada una construye elementos singulares sin lograr entablar un diálogo de complementariedad. Sin embargo, “...la arquitectura contemporánea colombiana ha destrozado mucho contexto urbano en el país para instalar su presencia...”, lo cual “...desde el punto de vista cultural, tal vez el fenómeno más profundo, y más grave de las últimas tres décadas de la historia urbana del país, ha sido precisamente ese destroz del tejido urbano pre-existente...” (Téllez, 1982, p.392). Amparado en las ideas de desarrollo irreconciliables con la ciudad histórica, revela que

*“... la ausencia de reflexión y de investigación determinaría que el tipo de urbanismo que desde la década del cuarenta “acompañó” al inicio de la consolidación de las ciudades colombianas fuera limitado tanto en su concepción como en sus alcances...”* (Viviescas, 1999, p. 73).

Por concentrar sus ideas en la especulación de los modelos económicos imperantes en la planeación de los años 50 del siglo XX. La búsqueda desde mediados del siglo XX estimula y se consolida en la expedición de la Ley 9 de 1989, siendo un referente esencial y fundamento para establecer acciones integrales para las ciudades colombianas con el propósito de difundir los siguientes principios:

*“defender el derecho a la ciudad para todos los ciudadanos; superar las condiciones de informalidad en las relaciones comunidad-ciudad; introducir factores de racionalidad en el diseño de los centros urbanos; y agilizar los procesos para el manejo del desarrollo urbano”* (Giraldo, 1999, p. 87).

A través de mecanismos para mitigar los efectos de la urbanización masiva originada en la explosión demográfica y la ocupación de las áreas urbanas ocasionadas por diferentes causas que inciden en la planeación del suelo. La ley establece que los planes de desarrollo municipal deben incluir dentro de su estructura un plan y un reglamento de usos del suelo, al igual que las normas urbanísticas, además de

*“...la asignación en las áreas urbanas de actividades, tratamientos y prioridades para desarrollar los terrenos no urbanizados, construir los inmuebles no construidos, conservar edificaciones y zonas de interés histórico, arquitectónico y ambiental, reservar zonas para la protección del medio ambiente y de la ecología, delimitar las zonas de desarrollo diferido, progresivo, restringido y concertado, renovar y redesarrollar zonas afectadas con procesos de deterioro económico, social y físico y rehabilitar las zonas de desarrollo incompleto o inadecuado...”*<sup>194</sup>

---

<sup>194</sup> Parágrafo 5, Artículo 2; Capítulo I De la Planificación del desarrollo municipal, Ley 9 de 1989 (enero 11).

Esta es la primera legislación en reconocer el tratamiento para conservar edificaciones y zonas de interés histórico, de manera independiente a su declaratoria dejando una primera aproximación a la delimitación de las zonas de desarrollo restringido y concertado donde pueden catalogarse las áreas históricas mencionadas. Así como la determinación de las sanciones a infractores de las normas urbanísticas de conservación (Salazar, 2000, p. 79).

### **3.2.2.1 Del Manual de reglamentación de sectores urbanos antiguos al Manual de poblados de interés patrimonial: evolución, contenido y estructura**

El proceso de conformación y estructuración del *Manual de Reglamentación de poblados de interés patrimonial* es resultado del trabajo colectivo del subproyecto Ciudad y Centro Histórico elaborado de manera sucesiva por Luisa Samper, Rodrigo Cortés y José Salazar, discutido en múltiples ocasiones con los funcionarios de la Subdirección de Patrimonio de Colcultura, como se ha mencionado. Una vez finalizado se somete a consideración de los municipios del país, universidades, profesionales, entidades públicas y privadas que trabajan o están relacionadas en el ámbito de la salvaguarda del patrimonio cultural de la nación. Por estas mismas agremiaciones se considera una guía de reflexión y de acción en la elaboración de las normas de protección de los sectores antiguos de las ciudades colombianas como complemento operativo a los principios consignados en la “*Política Cultural para los Centros Históricos y el Patrimonio Inmueble*” publicado en 1989 (Colcultura, 1992).

La reglamentación declarada estrategia y modelo de la conservación mediante la aplicación del manual son manifestaciones de la “*primacía de la norma [cultural] sobre la acción o del código de urbanismo, sobre el plan y la disolución de la planeación física al interior de la organización del desarrollo*”, dejando entrever una comprensión equivocada de las escalas urbanas de aplicación de los instrumentos y la urgencia histórica de la armonización de estos mecanismos. Son factores que “*reafirman las dificultades que ha tenido América Latina para desenvolver una verdadera cultura urbana [...] tanto en los comportamientos, como en la consolidación*”, de una cultura de gobernabilidad e institucionalidad para la administración adecuada desde la planeación, gestión y manejo para la materialización de los proyectos de ciudad (Téllez, 1995, p.35).

Estos ideales son promovidos dentro de los propósitos del Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina y el Caribe, asimilado a manera de doctrina deseable para fomentar la protección del patrimonio urbano. La definición de reglamentación adoptada por el manual es:

“...un documento oficial legal, con un valor jurídico por el cual el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo Municipal de la respectiva localidad, regula las intervenciones que los propietarios de los inmuebles puedan realizar en el perímetro determinado para el sector antiguo, sirve de pauta a las relaciones entre las partes del sector antiguo y el resto de la ciudad, convirtiendo el análisis del primero en una reflexión sobre la segunda...” (Colcultura, 1992, p.23).

Se vislumbra la pretensión que el sector antiguo sea el elemento determinante de las estrategias de la planeación urbana del municipio con el propósito de considerar el área urbana conforme a una unidad a partir del desbalance insinuado en la concepción del instrumento. En relación con el proceso de la reglamentación *“se intentó conciliar la ciudad antigua con la moderna, cuyas existencias parecían irreconciliables desde los años cincuenta, pues se intentaba sobreponer una sobre la otra”* (Escovar & Cárdenas, 2018, pp. 224-225). En ese sentido, Salazar define en su ensayo *“El centro histórico y la ciudad colombiana: un programa de trabajo”*<sup>195</sup>:

*El programa de reglamentación de los centros históricos en Colombia se formuló como una acción dirigida a evitar la destrucción del patrimonio y de los mejores valores de la ciudad –edificios, paisajes, espacio público-. Se trata de una protección del patrimonio urbano construido que entiende su desarrollo futuro como una parte de la ciudad y que, por lo tanto, no se restringe exclusivamente a la conservación de todo aquello que hable de una época o dé un testimonio, sino que busca proteger lo esencial, aquello que se relaciona con la vida de la ciudad y su estructura presente y futura, permitiendo un máximo de transformación posible sin alterar sus fundamentos como hecho urbano y arquitectónico específico (1996: p.17).*

Los contenidos temáticos de las reglamentaciones en los que se sustentan sus objetivos son la protección a través de la normativa, el urbanismo y la conservación, las normas culturales y urbanísticas (Colcultura, 1992). Determinadas por medio de la suma de metodologías referenciales integradas para un nuevo marco conceptual cuyo fundamento se estructura en asumir la *“condición de ciudad – completa, incluidos los sectores antiguos y periferias actuales- como bien cultural de apropiación colectiva”* (Cortés, 1996, p. 108). La idea de urbanismo y conservación contenida en el manual de reglamentación procede de los *“avances teóricos e instrumentales en el tratamiento para las áreas con valor histórico”* siendo el *“hecho más significativo en el desarrollo del urbanismo en Colombia a través de los últimos treinta años”* (Salazar et al., 1991, p. 15).

Una clara referencia a los escenarios de construcción conceptual y operativa establecidos por Colcultura, la academia y las organizaciones culturales interesadas en la protección del patrimonio urbano bajo una fuerte presencia de las directrices del Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina y el Caribe. Según Cortés, la idea de aplicación del manual se centraba en asumir la ciudad incluido el sector antiguo y las periferias propuesta de manera expresa dentro de las normas culturales y urbanísticas:

*“...la solución propuesta por las reglamentaciones sustentadas en las leyes de Patrimonio Cultural – las normas culturales- es la de sustraer al Sector Antiguo del desarrollo y de la modernización de la ciudad en su conjunto (pautados por las normas*

---

<sup>195</sup> Ensayo introductorio realizado por José Salazar Fierro para el libro *“Patrimonio Urbano en Colombia”*, editado y publicado por la Subdirección de Patrimonio de Colcultura en marzo de 1996.

*urbanísticas), con el fin de lograr una conservación efectiva de los bienes declarados” (1996:17).*

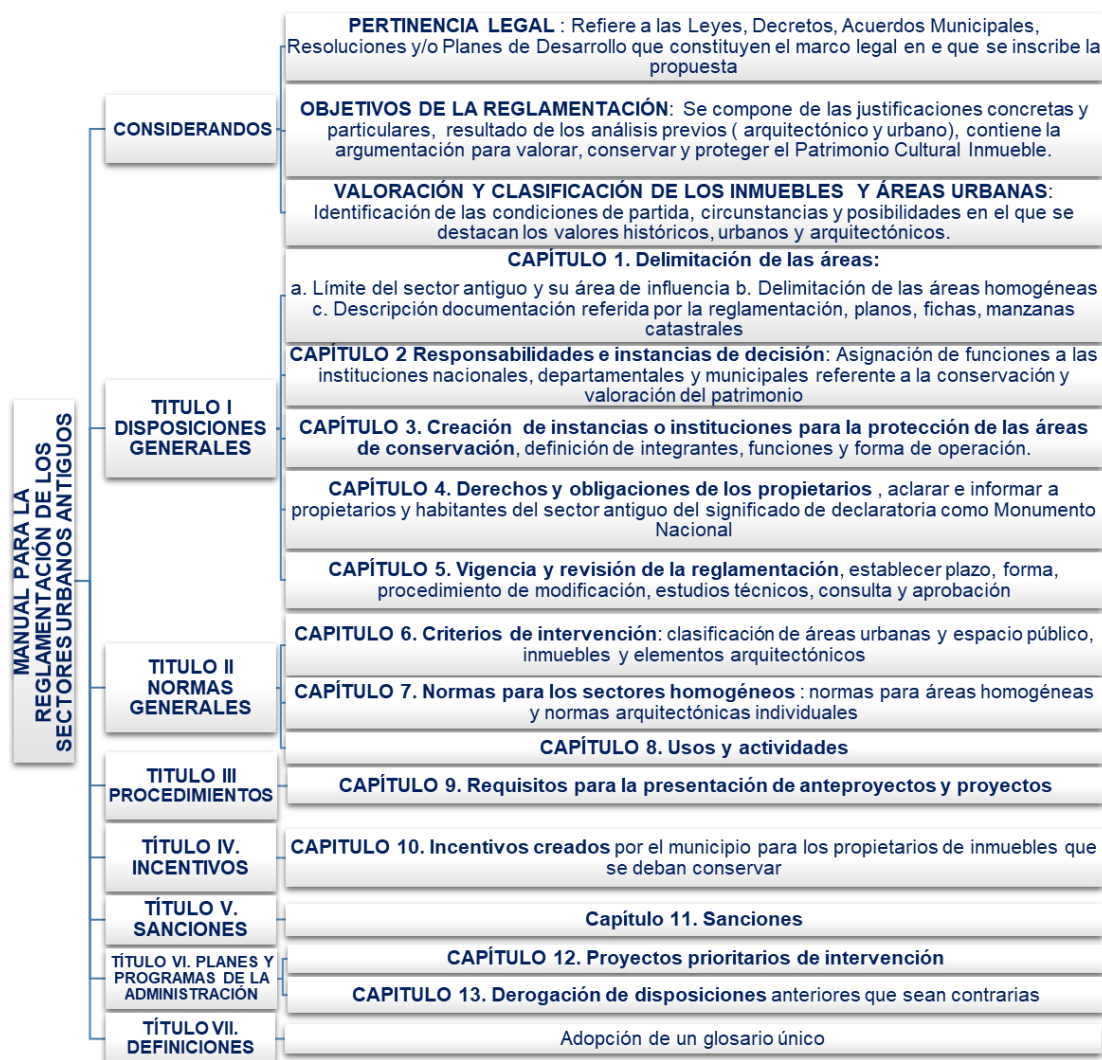
El manual como instrumento formula un “*conjunto mínimo de herramientas y técnicas que permiten realizar descripciones y análisis del patrimonio inmueble urbano, bajo la denominación genérica de instrumentos de análisis tipológico y morfológico*” (Cortés 1996, p. 93). Orientados de manera específica al necesario inventario de los bienes inmuebles considerados patrimonio cultural con el uso del método científico para abandonar los conceptos empíricos predominantes en los países de Iberoamérica donde los estudios de valoración se delegaron a historiadores y críticos.

Tendencia en consideración a obras representativas singulares con la finalidad de identificar la producción edilicia de arquitectos reconocidos o catalogar expresiones procedentes del periodo colonial o precolombino (Hardoy & Gutman, 1992, pp. 56-58). En los estudios tipológicos pueden identificarse tres niveles de componentes: de contexto, primarios y secundarios. Los primeros proceden de factores externos de la edificación pero que afectan el inmueble; los segundos definen el “*carácter del tipo y los últimos los complementan*” (Saldarriaga, 1996, pp. 79-80). Se considerada como una novedad en las reglamentaciones la “*...incorporación de estudios morfológicos y tipológicos, que recuperaron el “tipo” con el fin de identificar una serie de constantes y variables en las edificaciones de cada población...*” (Escovar & Cárdenas, 2018, p.224). Procedente de la metodología de la restauración de los centros históricos difundidos por Cervellati y Scannavini.

El interés por las políticas de conservación urbana en América Latina surge con en la década de los años 80 del siglo XX motivada por la necesidad de establecer balances sobre el estado de la legislación en cada uno de los países que hacen parte del Proyecto Regional de Patrimonio Cultural PNUD-Unesco. Su objetivo es la actualización del corpus jurídico dedicado al patrimonio cultural, la institucionalización y sistematización de mecanismos de protección (Mutual,1982). Animado por la necesidad de armonizar las acciones de los Estados para alinearse e incorporar las influencias internacionales tanto de las cartas y tratados, al igual que los programas y proyectos regionales orientados a promover la formulación o actualización de su propia legislación. Matizada por los beneficios de ayudas técnicas y económicas que comprometen en esencia la autonomía de su propósito.

Dentro del proceso de invención y reafirmación social del patrimonio se comprende la existencia de un repertorio de mecanismos activados mediante un estímulo político, reforzado por instrumentos de idealización que enfatizan los valores materiales identificados por técnicas de protección usadas para conservar la temporalidad material del bien o el conjunto, pero con poca flexibilidad ante el cambio de la comunidad residente (Prats, 1997).

**Figura 3.04 Estructura y contenido del Manual de Reglamentación de los Sectores Urbanos Antiguos**



Fuente: Elaboración propia con base en información de Resoluciones, acuerdos y (Salazar et al.,1991)

La finalidad del manual para la reglamentación de los sectores urbanos antiguos es

*“...la producción de una norma, es decir el establecimiento jurídico para las acciones que tienden a valorar, proteger y conservar el Patrimonio Cultural Inmueble, urbano y arquitectónico de los sectores antiguos, de modo que se relacionen con la vida de las ciudades” (Colcultura, 1992, p. 55).*

Mientras el objetivo del Manual de reglamentación de poblados de interés patrimonial es establecer *“procedimientos para identificar, cuáles son los elementos que conforman la*

*estructura urbana*”, así como las características geográficas, sociales e históricas que generan la “*calidad espacial particular, que lo hace único y por tanto de gran valor para sus pobladores y para el patrimonio de la nación*” (Colcultura, 1995, p. 1-12). No obstante, se resalta la característica de uso y consulta del instrumento por parte de la comunidad y la administración municipal en el ejercicio de su autonomía para el fomento y construcción de una cultura urbana a partir de la responsabilidad del Estado central a través del Instituto Colombiano de Cultura.

El programa de protección de los sectores antiguos del cual surge la elaboración del “*Manual para la reglamentación de los sectores urbanos antiguos*” es un elemento destacado para el desarrollo de nuevas normativas (Salazar, 1994, p. 24). Clasificado dentro del apartado de “*adecuación del aparato legal, institucional y técnico*” en el marco de los programas de valoración y protección que hacen parte de la “*Política Cultural para los Centros Históricos y el Patrimonio Inmueble*”. Reconoce la norma como un “*instrumento indispensable en la protección y salvaguarda del patrimonio inmueble*”, con dificultades “*provenientes tanto de su concepción como de las exigencias de los procesos de elaboración y aprobación consecutiva en distintas instancias*” (Salazar et al., 1989, p.109).

Aún así, se constituye en un mecanismo versátil y apropiado en la medida que los manuales se orientan a la producción de una norma urbana difuminada por la condición cultural para otorgarle el carácter de participación social. Otro elemento relevante en la estructura de los manuales es la incorporación de la norma para los sectores antiguos declarados y los poblados de interés patrimonial dentro de la normativa urbana del municipio correspondiente al centro histórico. En consecuencia, le exige a la formulación de la reglamentación ser coherente, compatible y dócil para cumplir el requisito de ser específica en su objetivo, además de no desconocer el resto de la ciudad o municipio en su propósito de salvaguarda y protección. Esta idea que “*...la reglamentación de las zonas adyacentes al núcleo histórico, debe establecer también la normativa con relación al uso de la tierra, la densidad, la relación volumétrica como factor determinante del paisaje urbano y natural...*”<sup>196</sup> proviene de la Normas de Quito de 1967 y es acentuado por la Carta de Ámsterdam de 1975 donde “*...la conservación del patrimonio arquitectónico debe ser considerada no como un problema marginal, sino como objetivo principal de la planificación urbana y de la ordenación del territorio...*”<sup>197</sup>. Insta la protección del patrimonio urbano en el imaginario de la totalidad de la ciudad. En el orden y contenido del “*manual para la reglamentación de los sectores urbanos antiguos*” subyace un plan estructurado para

...de esta manera, el destino de los centros históricos, aun de los protegidos legalmente, ha sido pensado dentro de los límites fijados para su perímetro, son recordar que forman parte de la ciudad y sin atender, por lo tanto, a su integración y a una redistribución de las funciones de todo el conjunto urbano (Hardoy & Gutman, 1992, p. 267).

---

<sup>196</sup> Parágrafo d, Inciso Medidas Técnicas, Recomendaciones a Nivel Nacional, Capítulo IX Los instrumentos de la puesta en Valor. Normas de Quito, 1967. Informe final de la reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y artístico.

<sup>197</sup> Inciso d, II Declaración, Declaración de Ámsterdam (1975).



La denominación del área de protección está relacionada de manera intrínseca con el plan al cual se encuentra vinculado el instrumento que la define. En este sentido “...la reglamentación no constituye un programa de recuperación de zonas históricas sino hace parte de él...”, (Hardoy & Gutman, 1992, p. 271).

### **3.2.2.2 El Subprograma de protección de los sectores antiguos**

A través del Decreto 800 de 1990 (abril 17), se aprueba el Acuerdo número 0008 de 1990 (febrero 7), expedido por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Cultura –Colcultura-, “*por el cual se establece la estructura orgánica del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, y se determinan las funciones de sus dependencias*”. Allí se crea la División Centros Históricos y Monumentos con dos secciones: la de Centros Históricos y Monumentos, con el fin de elaborar los planes y programas de protección- conservación de los centros históricos. En ese sentido, dentro del Plan Nacional de Cultura 1992-1994 denominado “*Colombia: El camino de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI*”, configurado en tres componentes principales: a) criterios globales sobre la cultura y su papel en la vida nacional; b) las políticas y estrategias para la acción del Estado y la comunidad; c) los programas, subprogramas, proyectos y actividades para desarrollarse entre los años 1992 y 1994 (Colcultura, 1992).

Al interior del Plan Nacional de Cultura se formulan 8 programas. El quinto es dedicado a la protección, investigación y difusión del patrimonio cuyo objetivo es “*promover la recuperación, reciclaje o restauración de inmuebles, sectores urbanos y objetos con valor patrimonial, así como la incorporación a la vida activa del país*”, mediante la formulación y puesta en funcionamiento de instrumentos “*para hacer efectiva la política cultural del Estado sobre el patrimonio y su protección [...] para acelerar la incorporación plena de los bienes culturales al desarrollo social*”(Colcultura, 1992, p. 52).

Parte integral de las comunidades siendo fundamento de su visión de desarrollo. Las estrategias para el logro de los propósitos del programa de protección, investigación y difusión del patrimonio se definen 11 subprogramas dedicados al inventario, protección, valoración, fortalecimiento institucional, proyectos especiales, patrimonio mueble, colecciones, patrimonio bibliográfico, arqueológico e investigación en diversas temáticas. El subprograma de protección de los sectores antiguos considera el manejo de los centros históricos desde la conjunción de variables propias de las dificultades de un área histórica central con las derivadas de su valor como patrimonio cultural. Se definen cuatro proyectos a saber:

- a. reglamentación de los centros históricos;
- b. realización de un diagnóstico sobre los centros históricos;
- c. protección de las áreas de interés histórico de pequeñas poblaciones del país y

- d. protección de zonas de interés patrimonial en las grandes ciudades de país, no declarados centros históricos (Colcultura, 1992, p.57).

El proyecto de reglamentación de los centros históricos se concibe dentro de “*un programa de descentralización, que entrega a los municipios el manejo de las zonas antiguas en coordinación de Colcultura*”, focalizando las acciones en la puesta en funcionamiento de las reglamentaciones aprobadas previamente. La finalización, aprobación e implementación de las que se encuentran en curso y el emprendimiento de nuevas reglamentaciones para los municipios de Santafé de Antioquia, Mompox, Ambalema, Barichara, Ciénaga y Pasto declarados Monumento Nacional (Colcultura, 1992, p. 58).

Un punto principal del proyecto es la difusión del “*Manual para la reglamentación de los sectores antiguos*”, que no está vinculado de manera directa al subprograma de protección mencionado sino hace parte del proyecto de fortalecimiento de la cultura regional que presentó dificultades en el tránsito de la programación a la ejecución. Principalmente por el cambio de gobierno en el año 1990, al igual que en la administración de Colcultura. En relación con esto, el manual surge

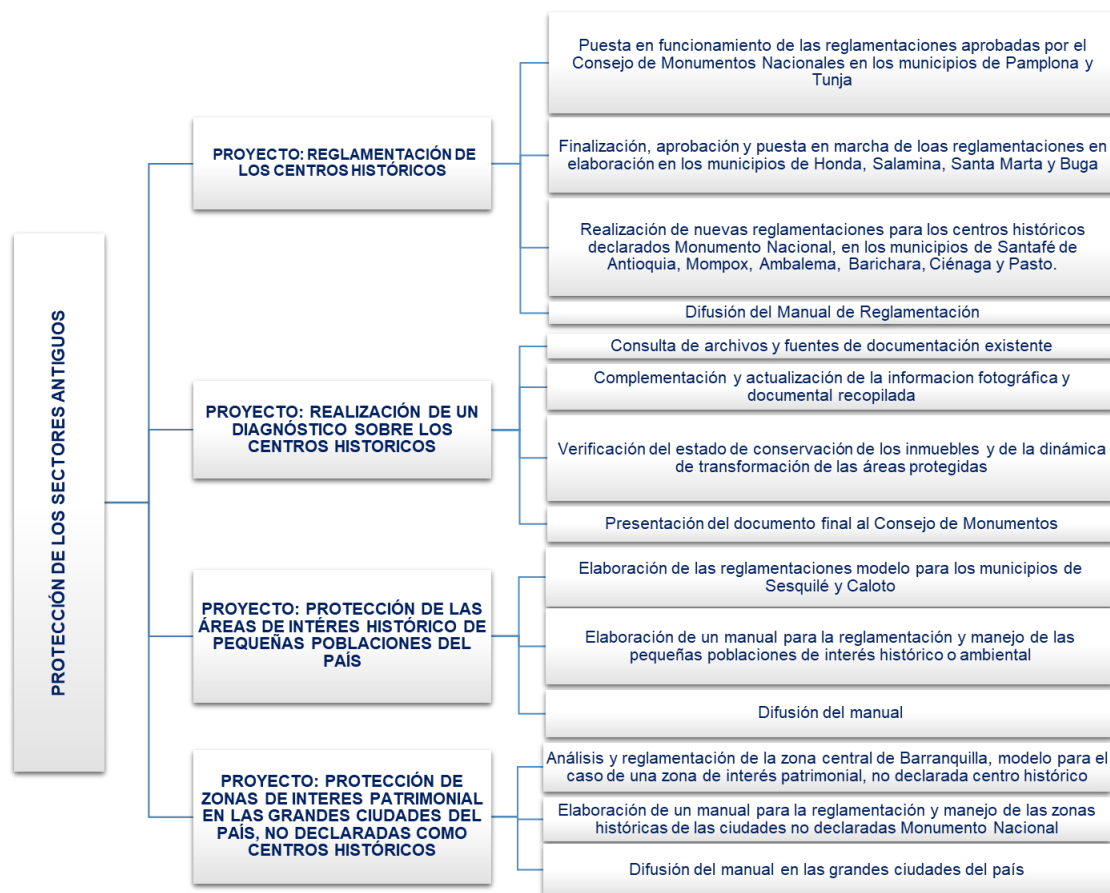
como base para el desarrollo de nuevas normativas para sectores antiguos, que representó la continuidad y concreción de los planteamientos desarrollados en la política cultural para los centros históricos, como mecanismo de difusión y discusión en las regiones (Salazar, 1994, p. 24).

Al proyecto de reglamentación se suma la realización de un diagnóstico sobre los centros históricos, “*para definir las políticas y orientar acciones que se deben tomar de manera conjunta entre Colcultura, el Consejo de Monumentos Nacionales y los municipios*” a partir de la evaluación del estado de los sectores históricos declarados al igual que la “*verificación del estado de conservación de inmuebles y dinámicas de las áreas protegidas*”. Esta iniciativa se constituye un proyecto inscrito dentro de la protección de los sectores antiguos (Colcultura, 1992, p. 58).

Por su parte, los proyectos de protección de las áreas de interés histórico de pequeñas poblaciones del país y protección de zonas de interés patrimonial en las grandes ciudades del país, no declaradas centros históricos, son novedosos al establecer dos dimensiones vinculadas a la incipiente idea de patrimonio urbano hasta ahora no contempladas. Los pequeños municipios que

“*albergan conjuntos patrimoniales de gran importancia tanto desde el punto de vista del patrimonio nacional en su conjunto, como desde la posibilidad de fortalecer los valores culturales locales*” (Colcultura, 1992, p. 59-60).

**Figura 3.05 Subprograma Protección de Sectores Antiguos y los cuatro proyectos estratégicos**



Fuente: Elaboración propia con base en (Colcultura, 1992, p.57-60)

En el mismo sentido, al interior de las ciudades capitales e intermedias “*se puede constatar la existencia de muchos barrios y sectores urbanos con importantes valores patrimoniales, pero que no pueden ser considerados centros históricos*” (Colcultura, 1992, p. 59-60). Derivado del primer proyecto se formula el “*Manual de reglamentación de poblados de interés patrimonial*” divulgado en el año 1995, y a pesar de haberse considerado el desarrollo de un tercer “*Manual para la reglamentación y manejo de las zonas históricas de las ciudades no declaradas Monumento Nacional*”, el cual nunca fue desarrollado. La profusión de las reglamentaciones encuentra en el periodo de 1991 a 1995 un periodo de avance significativo, en el que se centraron los esfuerzos de Colcultura por suplir la carencia en este aspecto desde los años 60. Sobre lo cual menciona la Arquitecta Olga Pizano subdirectora de patrimonio en 1995, al momento de la divulgación del “*Manual de reglamentación de poblados de interés patrimonial*”:

La Subdirección de Patrimonio del Instituto Colombiano de Cultura inició desde 1989 un proceso tendiente a la valorización y protección del patrimonio urbano del país. En el marco de éste, se formularon, por primera vez, las políticas para el patrimonio cultural inmueble y los programas por desarrollar en los años siguientes. Es así como se diseñó una metodología para elaborar las normas para los centros históricos del país como instrumento de protección de este importante patrimonio cultural. Esta metodología, que se publicó en 1991 en el Manual para la Reglamentación de Sectores Urbanos Antiguos, ha sido aplicada en la Reglamentación de 17 centros Históricos de Colombia (Pizano, 1995, p.7)

El “*Manual de reglamentación de poblados de interés patrimonial*”, surge inspirado en el movimiento de revaloración de los centros históricos e interés por los pequeños poblados, el cual tiene origen en la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios -Carta de Venecia- de 1964. Donde:

La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural (Carta de Venecia, 1964, p.1)

Posterior a la Carta de Venecia surge una línea de interés por los pequeños poblados, con estudios dedicados a reconocer la incidencia del turismo sobre ellos. Al igual que la turgurización de los centros antiguos, temática de interés de la Unesco en los años 70 del siglo XX. Ordenando trabajos en Cuzco, Quito y Salvador, posteriormente a ciudades de menor tradición, pero con un patrimonio reconocido como Montevideo, Catamarca, Bogotá (Carrión, 2000; Gutiérrez, 2009). Los pequeños poblados no han sido abordados con profundidad, a pesar de esto, la Unesco, ha mostrado interés en ellos a través de publicaciones difundidas en el marco del Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina y el Caribe, dirigido por Sylvio Mutual, específicamente en la obra “Pequeños poblados” donde se realiza un estudio en el Perú (Gutiérrez, 2009, p. 201).

La reglamentación de los centros históricos es la primera aproximación real al conocimiento, exploración y valoración de los sectores urbanos como patrimonio urbano. La academia y especialmente sus docentes especialistas hacen una presencia significativa en la formulación de los documentos y entregables estimados en el manual para la reglamentación de los sectores urbanos antiguos. Se destacan dos iniciativas consideradas pioneras en la reglamentación de sectores antiguos que paradójicamente no fueron aprobados por sus respectivos municipios, de tal forma “...el esfuerzo oficial, de protección de los núcleos urbanos de interés histórico, tardío y limitado [...] desde luego, por meritorios que sean, no equilibran, [...] lo que es una tendencia emergente y dominante...” (Téllez, 1982, p.393). En referencia al deterioro progresivo de los sectores antiguos a raíz de la idea equivocada y ejecutada del desarrollo urbano. Sin duda, la publicación del manual para la reglamentación de los sectores urbanos

antiguos pretende consolidar un esfuerzo aislado que trata de unificar los criterios de acción para la producción de mecanismos consecuentes con los propósitos de su razón de ser. Ya no en las leyes sino en la necesidad urgente de generar instrumentos de protección, conciliadores de los lineamientos culturales con la norma urbana. La pretensión del manual es generar protección permanente por parte del Estado y de la sociedad con la puesta en marcha de programas de recuperación-mantenimiento, como la *“adopción de reglamentaciones para regular las intervenciones sobre los inmuebles con valor cultural”* (Salazar et al., 1991, p. 4).

El cambio de paradigma integra varios actores sociales e institucionales y estrategias basadas en un empeño bajo un criterio orientado desde un esfuerzo de la política pública de finales de la década de los años 80, bajo el precepto de

“...conservación a ultranza, porque el sector antiguo se separó radicalmente de la ciudad; se le puso parcialmente por fuera de la autoridad municipal, bajo la tutela del Consejo de Monumentos Nacionales, se hicieron nuevas normas, se nombraron profesionales especializados para seguir su desarrollo, en fin, se creó, para usar una analogía, una especie de ciudad dentro de la ciudad...” (Salazar, 1994, p. 20).

El tratamiento diferencial para el centro histórico se considera el primer paso hacia una valoración más estricta de los elementos que lo integran, cuyo objetivo es *“ir diseñando políticas y acciones cada vez más precisas y discriminadas, con el fin de permitir su apropiación viva y contemporánea por el conjunto de ciudadanos”* (Salazar et al., 1988, p. 90). La producción de la ciudad por parte de los actores públicos es visible en la periferia y de manera particular en los *“espacios centrales: políticas patrimoniales, reorganización de flujos, intervención en materia de vivienda, organización de usos de los espacios públicos”* (Melé, 2006, p. 17).

Una alternativa para expresar el dominio sobre el desarrollo de la ciudad, debido el desbordamiento del crecimiento. Estas acciones, además de contribuir a la producción de las reglas particulares de juego que delimitan las modalidades de la convivencia de las poblaciones, modifican los actores involucrados mediante la renovación de funciones tradicionales e introducen profundos cambios en la apropiación de los espacios centrales (Melé, 2006, p. 17). A pesar de ello, las limitaciones propias de la iniciativa, así como la aplicación del manual

...se trasladó al trabajo concreto de conservación una versión recortada, conservación a ultranza de los sectores antiguos, no siempre seguida y respetada, pues su fragilidad conceptual, que la hizo aparecer como un dogma incomprendido por los propios funcionarios del gobierno, se sumó la carencia de los medios técnicos y económicos mínimos, para reglamentar siquiera todos los sectores antiguos declarados; 33 centros históricos para el año 1990 (Salazar, 1993, p. 20).

### 3.2.2.3 La Division de Centros Históricos y Monumentos

Los centros históricos ocupan un lugar destacado dentro de la estructura orgánica del Instituto Colombiano de Cultura a partir de 1990, oficializada mediante el Decreto 800 de 1990 (abril 17)<sup>198</sup>, modificación justificada en la necesidad de adecuar la estructura existente “*a las nuevas exigencias de la descentralización política y administrativa, transformándola en un ente coordinador, planeador de fomento de la actividad cultural*” (Mena & Herrera, 1994, p.189), cabe destacar que desde su creación Colcultura la estructura orgánica inicial se establece mediante el Acuerdo 002 de 22 de agosto de 1969, posteriormente se modifica mediante el Acuerdo 003 del 7 de febrero de 1974, se determina la organización y funciones que estarán vigentes hasta 1990, siendo esta la última etapa antes de dar paso al Ministerio de Cultura en agosto de 1997.

La División de Centros Históricos y Monumentos (DCHM), hace parte de la Subdirección de patrimonio inmueble que, junto a la subdirección de comunicaciones culturales y la subdirección de bellas artes, constituyen la triada desde la cual se administran las entidades y secciones administradas a Colcultura, se encuentran dentro de las funciones de la División de Centros Históricos, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de planes de acción regional; prestar asesoría, a los centros históricos propietarios de monumentos, que así lo requieran; colaborar con la División Técnica del Consejo de Monumentos en el levantamiento o análisis de proyectos de intervención al igual que en proyectos de divulgación editorial en el área inmueble, además de cooperar con la División Centro de Documentación de Patrimonio inmueble en la actualización del inventario inmueble y la biblioteca<sup>199</sup>.

Se espera que la DCHM promueva la ampliación de la cobertura y efectividad de las reglamentaciones, especialmente mediante acciones preventivas para que en el largo plazo desaparezca “*el espíritu coercitivo de la norma e incorporar elementos de fomento*” (Salazar et al., 1989, p. 110), lo que implica un trabajo pedagógico y de difusión, sensibilización y reconocimiento de la norma urbana con el fin de difundir la valoración del patrimonio por parte de la comunidad residente y turistas.

La División de Centros Históricos de Colcultura, entre 1990 y 1997 financió la elaboración de 23 reglamentos de conservación urbana y arquitectónica para los centros históricos declarados como monumento nacional, de los cuales la gran mayoría están aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales y solo 9 (Santafé de Antioquia, Cartagena de Indias, Santa Cruz de Mompox, Tunja, Salamina, Ciénaga, Santa Marta, Barichara y Santa Fe de Bogotá) están aprobados por los Consejos Municipales (Isaza, 1999, p.91), su modesta gestión se debe a la

---

<sup>198</sup> Decreto 800 de 1990 (abril 17), por el cual se aprueba el Acuerdo número 0008 del 7 de febrero de 1990, expedido por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Cultura “Colcultura”, mediante el cual se establece su estructura orgánica y se determinan las funciones de sus dependencias.

<sup>199</sup> Artículo 18. División de Centros Históricos y Monumentos, Capítulo I Estructura orgánica, Decreto 800 de 1990 (abril 17)

clara definición de las funciones así como la carencia en la continuidad de sus acciones y coherencia entre la estructura administrativa, presupuesto y labores a desarrollar (Salazar 1989 et al., 1989, p. 40).

**Figura 3.06 Centro histórico del Municipio de El Carmen (Norte de Santander)**



Fuente: Imagen tomada de Rotaturísticas.com

### **3.3 El Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina y el Caribe**

La preocupación de la UNESCO por el patrimonio cultural de América Latina, se acentúa en consideración a que *“el acervo patrimonial en los países de la región estaba en regresión y las acciones de tutela y conservación del mismo reflejaban la mentalidad política propia del populismo y el nacionalismo”* (Mutual, 2000, p. 114), esta reflexión dio origen al Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina y el Caribe (PRUCAM), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)<sup>200</sup> y con el

---

<sup>200</sup> El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creado en 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir de la integración del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las



World Heritage Center. Su propósito fue brindar asistencia técnica a los gobiernos de América Latina, además de los siguientes objetivos:

- a) Conservación del patrimonio urbano, restauración arquitectónica, Monumentos y Centros históricos, Complejos Arqueológicos, y Rehabilitación/Renovación de centros y monumentos históricos en el ambiente urbano, especialmente en Ciudades Históricas.
- b) Conservación de propiedades culturales urbanas a lo largo de la región. Con especial énfasis en la creación de capacidad institucional. Capacitación de los recursos humanos orientados al establecimiento de una red dinámica de canales comunitarios entre Centros de Conservación y Museos.
- c) Establecimiento de Centros de conservación en varios países que trabajan con respecto a la preservación y mejora del patrimonio movable, tales como: tejidos, piedras, murales, óleos, madera policroma y tallados en madera, entre otros.
- d) Conservación y mejora del Patrimonio Cultural, por medio de la protección y mejora de la diversidad biocultural de diferentes ecosistemas. Esto fue iniciado originalmente en la región Indo Andina, trasladándose gradualmente al Caribe (con CARICOM<sup>201</sup>) y posteriormente en la región Maya de México y de América Central entre los años 1993-1995. (Mundo Maya) (Mutual 2000).

Durante 19 años, la sede del proyecto regional fue la ciudad de Lima donde se inician las actividades con la participación de 6 países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en 1976 y para el año 1995 estaba conformada por 26 países<sup>202</sup> de América Latina y el Caribe. El proyecto conjunto entre el PNUD y la Unesco hizo un llamado a la colaboración de los gobiernos y estableció un ambicioso programa para el conjunto de la región con un presupuesto de casi 20 millones de dólares para asistencia técnica (Mutual, 2000, p. 122). Esta

---

Naciones Unidas (1949) y el Fondo Especial de las Naciones Unidas (1959), tiene como función principal contribuir a la generación de mejoras de la calidad de vida de los ciudadanos de las naciones asociadas a Naciones Unidas.

<sup>201</sup> CARICOM es una organización creada el 4 de julio de 1973 mediante en Tratado de Chaguaramas realizado por 15 países del caribe (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Turcas y Caicos son miembros asociados). Esta organización sustituyó a la Asociación Caribeña de Librecomercio creada en 1965. Tiene su sede principal en Georgetown, Guyana y su objetivo principal es promover la integración económica, la cooperación entre sus miembros, asegurar la distribución equitativa de los beneficios a los países miembros, además de la coordinación de las políticas económicas, planificación del desarrollo, integra un mercado regional único para sus miembros (Mincomercio, 2021).

<sup>202</sup> Los países integrados al Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina y el Caribe (RLA) en el año 1995, son Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Islas Turcas y Caico, Jamaica, México, Monserrate, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Uruguay, Venezuela.



experiencia se encuentra registrada en un sinnúmero de publicaciones resultado de cursos, coloquios, manuales y guías dedicadas a la difusión de técnicas, estrategias de conservación y protección del patrimonio en sus diversas manifestaciones. Al año siguiente del inicio del PRUCAM, el PNUD/UNESCO organiza en marzo de 1977 el “*Coloquio sobre la preservación de los Centros Históricos ante el crecimiento de las ciudades Contemporáneas*”, en la ciudad de Quito, donde se definen como:

Centros Históricos a todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo. Como tales se comprenden tanto los asentamientos que se mantienen íntegros desde aldeas a ciudades, como aquellos que, a causa de su crecimiento, constituyen hoy parte de una estructura mayor. Los Centros Históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que contienen, representan no solamente un incuestionable valor cultural sino también económico y social. Los Centros Históricos no sólo son patrimonio cultural de la humanidad, sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que los habitan (Unesco-PNUD, 1977, p. 11).

En el mismo Coloquio se determinan las condiciones para orientar las acciones hacia una política de conservación integral de los centros históricos, considerada “*una operación destinada a revitalizar no sólo inmuebles, sino primordialmente la calidad de vida de la sociedad que los habita, aplicando su capacidad creativa y equilibrando su tecnología tradicional con la contemporánea*” (Unesco-PNUD, 1977, p. 12). Se establecen tres elementos que serán el rumbo del PRUCAM: a) el fortalecimiento de la política local para la revitalización de los centros históricos; b) el reconocimiento de las comunidades autóctonas de las áreas históricas e integración de las teorías y tecnologías contemporáneas junto a las técnicas locales con el propósito de equilibrar conocimiento y tradición, mediante; c) la capacitación de personal técnico proveniente de los países integrantes del proyecto. Por su parte, la Carta o la Norma de Quito es resultado del informe final de la Reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y artístico celebrada en Quito en el año 1967, una década antes del Coloquio de Quito. Auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se establece la urgencia y la necesidad de reconocer el apoyo internacional debido al “*...acelerado proceso de empobrecimiento que vienen sufriendo una mayoría de los países americanos como consecuencia del estado de abandono e indefensión en que se encuentra su riqueza monumental y artística,*” lo que exige y “*... demanda la adopción de medidas de emergencia, tanto a nivel nacional como internacional*” (Unesco-OEA, 1967, p. 12).

La inclusión del problema que representa la necesaria conservación y utilización del patrimonio monumental en la relación de esfuerzos multinacionales que se comprometen a realizar los Gobiernos de América, resulta alentador en un doble sentido. En primer término, porque con ello los Jefes de Estado dejan reconocida, de

manera expresa, la existencia de una situación de urgencia que reclama la cooperación interamericana, y en segundo lugar, porque siendo la razón fundamental de la Reunión de Punta del Este el común propósito de dar un nuevo impulso al desarrollo del Continente, se está aceptando implícitamente que esos bienes del patrimonio cultural representan un valor económico y son susceptibles de erigirse en instrumentos del progreso (Norma de Quito, 1967, p.1).

Las Normas de Quito de 1967 impulsan la actualización del corpus legal relacionado con el patrimonio en Brasil, Cuba, Chile, México y Guatemala (Gutiérrez, 2009). En Colombia no tuvo un efecto representativo en el marco jurídico. Por su parte, el *Coloquio de Quito* celebrado en 1977, -acentuado por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial en 1972-. Crean un ambiente propicio para la identificación y reflexión sobre la necesidad de cooperación internacional para fortalecer la política dedicada al patrimonio, la técnica, la capacitación de personal calificado, lo económico y financiero. Oportunidad materializada por los organismos internacionales como UNESCO, PNUD e ICOMOS que ofrecen ayuda proporcional al reconocimiento y discusión de problemáticas asociadas a la conservación, utilización de monumentos y lugares de interés histórico y turístico. Emerge en las décadas de 1980, 1990 y 2000 la declaración como “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO, visibles en la Figura 3.07.

La dualidad de acción y reflexión simultánea motivada por las cartas internacionales “*representa a las corrientes de opinión de la comunidad elitista de la restauración inscrita en ciertos marcos institucionales internacionales (ICOMOS o UNESCO)*”, cuya función es referencial “*para la comprensión e intervención en los centros históricos; con lo cual se suplantán los marcos teóricos y se acogen, esquemáticamente y sin crítica, como normas de actuación*” (Carrión, 2000, p. 32). Sumado a los programas y proyectos derivados de la cooperación internacional se alimenta un debate asimétrico entre la autonomía de sus propias políticas culturales (Mejía, 2009), sus propias acciones que reclaman una independencia pérdida por los compromisos ideológicos, económicos y financieros que exigen resultados a nivel local.

Particularmente en Colombia y mediante el programa de Fortalecimiento de la Cultura Regional que hace parte del Proyecto Colombia 88/015, con el auspicio PNUD, liderado por Colcultura se promueve la reflexión y consolidación de la “*Política Cultural para los Centros Históricos y el Patrimonio Inmueble*” publicado en 1989 como producto derivado de esta misma iniciativa. Dirigida a fortalecer la protección y especialmente la conservación, la cual desencadena la formulación y difusión del “*Manual de Reglamentación de los Sectores Urbanos Antiguos*” en diciembre de 1991, que a su vez fomenta la edición del “*Manual de Reglamentación de poblados de interés patrimonial*” en octubre de 1995. En la misma línea de conservación a través de la norma cultural, esta vez para los poblados con patrimonio urbano y arquitectónico sin declaratoria, en el marco de los compromisos materializados para beneficio propio a partir del movimiento instalado en el proyecto PNUD-UNESCO.

**Figura 3.07 Ubicación y listado de los sitios del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe**

Ubicación de los sitios del Patrimonio Mundial en América Latina y El Caribe



**Lista de Centros Históricos Patrimonio de la Humanidad, América Latina y El Caribe**

**Bolivia**

- 1987 Ciudad de Potosí
- 1991 Ciudad histórica de Sucre

**Brasil**

- 1980 Ciudad histórica de Ouro Preto
- 1982 Centro histórico de la Ciudad de Olinda
- 1985 Centro histórico de Salvador de Bahía
- 1987 Brasília
- 1997 Centro histórico de São Luis
- 1999 Centro histórico de Diamantina

**Colombia**

- 1984 Puerto, Fortalezas y conjunto monumental de Cartagena de Indias
- 1995 Centro histórico de Santa Cruz de Mompox

**Cuba**

- 1982 Ciudad vieja de La Habana y su sistema de Fortificaciones
- 1988 Trinidad y el Valle de los Ingenios

**Ecuador**

- 1978 Ciudad de Quito
- 1999 Centro histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca

**Guatemala**

- 1979 Antigua Guatemala

**México**

- 1987 Centro histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán
- 1987 Centro histórico de México y Xochimilco

- 1987 Centro histórico de Puebla
- 1988 Centro histórico de Guanajuato y sus minas adyacentes
- 1991 Centro histórico de Morelia
- 1993 Centro histórico de Zacatecas
- 1996 Zona de monumentos históricos de Querétaro
- 1998 Zona de monumentos históricos de Tlacotalpán
- 1999 Ciudad histórica fortificada de Campeche

**Panamá**

- 1997 Distrito histórico de Panamá con el Salón Bolívar

**Perú**

- 1983 Ciudad de Cuzco
- 1988 Centro histórico de Lima
- 2000 Centro histórico de la ciudad de Arequipa

**Puerto Rico**

- 1983 Sitio histórico de San Juan de Puerto Rico y la Fortaleza

**República Dominicana**

- 1990 Ciudad colonial de Santo Domingo

**Uruguay**

- 1995 Barrio histórico de la Ciudad de Colonia del Sacramento

**Venezuela**

- 1993 Coro y su puerto
- 2000 Ciudad universitaria de Caracas

Fuente: <http://www.unesco.org/whc/patrimonio.htm>  
2 Diciembre 2000

Fuente: Elaboración propia con información de (Unesco, 2021)

### 3.4 Conclusiones parciales

Se establecen cuatro conclusiones preliminares del capítulo:

- a) Las reglamentaciones son el instrumento que sustituye y canaliza las limitaciones de la Ley de patrimonio histórico de 1959. Es un mecanismo de experimentación producto de las presiones ejercidas por los diferentes sectores – institutos de investigaciones universitarios, técnicos, profesionales, agremiaciones privadas- a Colcultura, para materializar acciones de conservación a nivel normativo.
- b) Las reglamentaciones son el mecanismo para facilitar el encadenamiento en la transición de las ideas del patrimonio histórico al patrimonio cultural, proceso que tiene una duración de dos décadas, los años 70 y 80 del siglo XX y, requirió la contribución de diferentes instancias institucionales del orden nacional e internacional. Las reglamentaciones se estructuran, soportan y hacen propias las ideas e influencias de planes de conservación de centros históricos de orden internacional, así como la orientación de cartas de orden institucional de la misma procedencia.
- c) Los manuales de reglamentación pretendían ser el medio de difusión orientador de la protección del patrimonio urbano, se alejan de la idea de conservación y salvaguarda para establecer su acción en el concepto de defensa del patrimonio histórico. Carecen de un sustento legal y un programa de gestión eficiente limitaron su alcance, sin embargo, logran establecer por primera vez, los elementos básicos de un plan urbano orientado a la planeación cultural.
- d) La fase formativa según el MGDТ (1980-1997), cumple su función en tres sentidos: mantener la dependencia de la trayectoria con la Ley de patrimonio de 1959; aceptar la interacción e ideas de diversos actores institucionales y fecundar el progreso de la acción pública sobre el patrimonio urbano y; establecer las alternativas sobre las que se fundamenta la Ley de cultura. Aporta a evidenciar la necesidad de un instrumento de planeación adecuado a los retos no de los bienes inmuebles, sino la urgencia de reconocer el conjunto urbano en la categoría de patrimonio urbano.

### 3.08 Centro histórico del Municipio de Ciénaga (Magdalena)



Fuente: Imagen tomada de Pasión por Santa Marta



## CAPITULO IV

### CAMINO A LA MADUREZ DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO (1997-2019): INSTRUMENTOS, GESTIÓN Y EFECTOS

#### Introducción

El capítulo IV tiene como horizonte los siguientes objetivos:

- a) Analizar la política pública del desarrollo urbano y la general de cultura, ambas expedidas en 1997, que le otorgan característica de madurez al patrimonio urbano. Corresponden a la fase de bloqueo (1997-2021) del MGDТ. La finalidad es develar la transición conceptual e integración de instrumentos para la protección del patrimonio urbano, así como los mecanismos de gestión del paisaje cultural<sup>203</sup> al paisaje urbano histórico, aún no reconocido por la legislación, a través de las instituciones, planes y redes creadas para este fin.
- b) Revisar el encadenamiento y posición de la protección del patrimonio urbano en el ordenamiento territorial, mediante las determinantes, componentes y proceso de formulación y normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT en adelante). En el mismo sentido, establecer los mecanismos de compensación tributaria por la asignación del tratamiento de conservación a los bienes de interés cultural en los centros históricos del ámbito nacional.
- c) Analizar, comprender y establecer la estructura, sentido y componentes del Plan Especial de Protección (PEP en adelante) y Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP en adelante), en el sentido de la gestión como proyecto para materializar los lineamientos y acciones de la protección del patrimonio urbano.
- d) Revisar y comprender la idea de conservación, salvaguarda y protección en el PEMP. En la misma categoría, se establece la relación del paisaje cultural y el paisaje histórico en el ámbito del patrimonio urbano.

El periodo comprendido entre el año 1997 y 2019 se caracteriza por la expedición del corpus jurídico que desarrolla los lineamientos de la Constitución Política de 1991. La Ley 338 y Ley 397 ambas de 1997, orientan el itinerario de las políticas públicas del ordenamiento territorial y la cultura, respectivamente. La sanción presidencial de las leyes se realizó con poca diferencia temporal, con el fin de estimular la armonización entre ambas dimensiones. Sin embargo, se presentan algunas interrupciones en el esfuerzo por formular mecanismos de planeación y gestión derivados de ambas leyes, con el propósito de regular el territorio que contiene los centros históricos catalogados como patrimonio cultural. Los instrumentos de planeación y gestión del territorio y el patrimonio cultural inmueble determinados por las leyes mencionadas tratan “...de orientar la conservación del patrimonio edificado a través de un nuevo tipo de planificación urbanística, que recupere, aunque en función de relaciones diferentes, su sentido

---

<sup>203</sup> Inscrito dentro del Decreto 2358 de 2019

*originario interdisciplinar...*” (Álvarez, 2006, p. 44). La administración y el ordenamiento del territorio han ocupado un lugar central en los diálogos como nación (Zambrano, 2017). Principalmente por la tendencia a la urbanización con la falsa dicotomía entre lo urbano y lo rural, fenómeno de mayor intensidad en Colombia en los últimos 60 años en la transición de un país rural a uno urbano que exigía respuestas acertadas y oportunas del Estado. La categoría de BIC introduce el mecanismo de la participación ciudadana para promover la apropiación y el conocimiento del patrimonio, la promoción de entidades públicas y privadas en el mantenimiento y cooperación en la conservación de los bienes patrimoniales. Además de socializar y masificar el acceso a la cultura, no como un elemento exclusivo para ciertas condiciones socioeconómicas sino amparado en una necesidad y un derecho inherente al desarrollo de la condición humana. Los instrumentos por excelencia de la administración municipal en Colombia son el POT y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM)<sup>204</sup>, establecidos a manera de instrumentos orientadores de las actuaciones urbanas en el municipio o ciudad (Giraldo, 1999). Las autoridades municipales deben integrarlos por su preeminencia, arraigo constitucional y operativo. En la estrategia institucional para implementar la presencia, regulación y difusión del patrimonio urbano en el año 2010 se crea la Red Turística de Pueblos Patrimonio (RTPP), así se ratifica la relación cercana de los centros históricos y el turismo en un vínculo de la larga data, proveniente del Fondo Nacional del Turismo en 1968. En el mismo sentido, se crea el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (PNRCH) en el año 2004, plataforma logística que promueve la formulación y aprobación del PEMP de los centros históricos declarados patrimonio urbano.

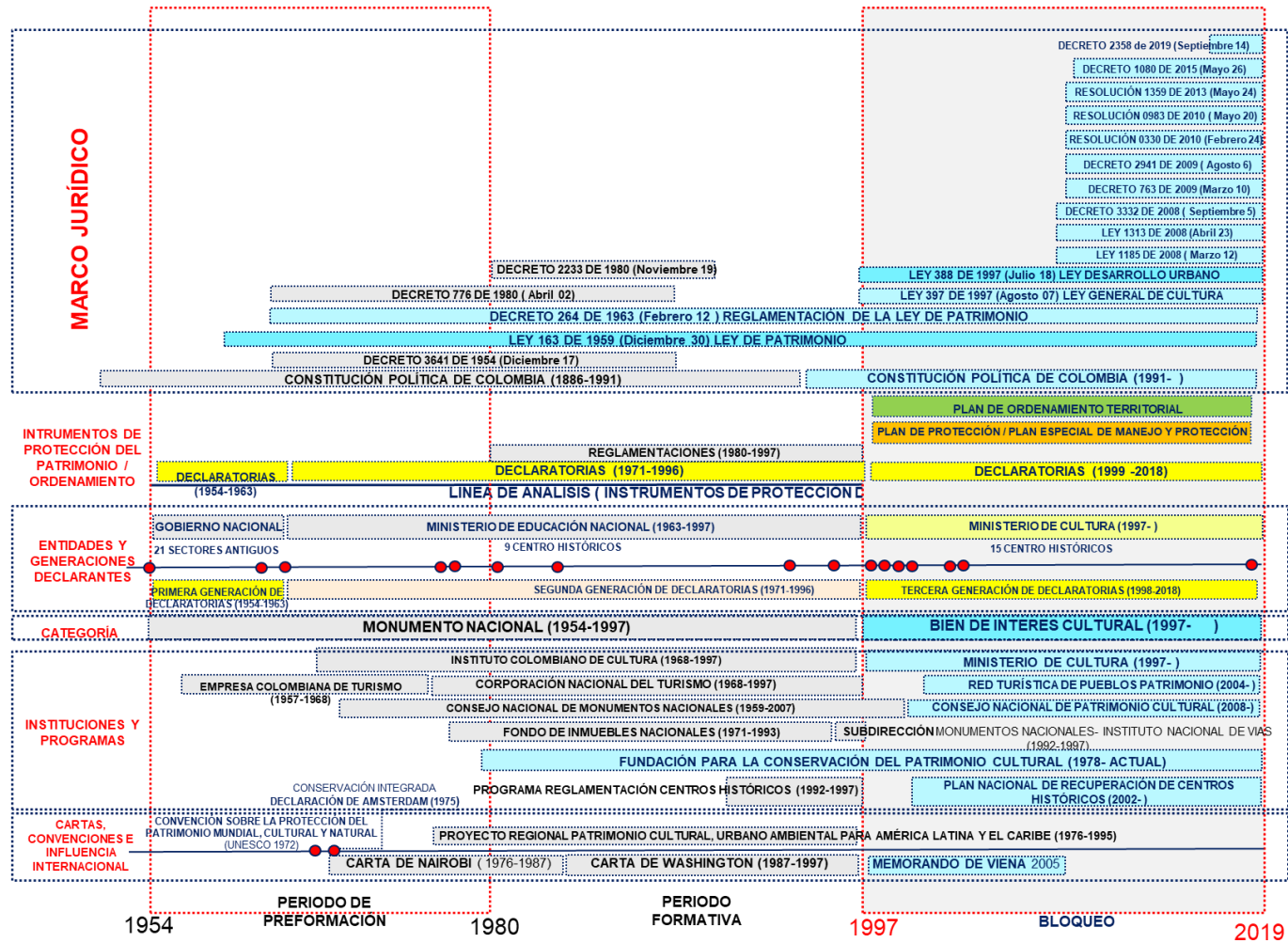
El capítulo está dispuesto para demostrar la forma en que el desarrollo progresivo de la legislación para orientar el ordenamiento territorial y la cultura se constituyen en política pública, en la que se inscribe el patrimonio cultural y confinan al patrimonio urbano en una fase de bloqueo donde se encuentra actualmente. Debido a los instrumentos de planeación, gestión y financiación -POT y PEMP- respectivamente, estructurados de tal forma, que comprenden el territorio y el conjunto histórico en un estándar, sin mayores alternativas para la singularidad. En el apartado 4.1 se analiza y comprende los vínculos formales y espontáneos de la Ley 388 de 1977 y 397 de 1997, además del componente institucional del ministerio de cultura, el PNRCH, la RTPP y el estado de la red. El apartado 4.2 se ocupa el PEP y el PEMP desde su estructura, contenidos y la relación con el componente de la gestión y el manejo del patrimonio urbano. Se revisa la relación instrumental con la conservación, la salvaguarda y protección, así como el vínculo del paisaje cultural y el paisaje urbano histórico con el patrimonio urbano. En el apartado 4.3 se estudia las compensaciones por tratamiento de conservación entre las que se incluye la transferencia de derechos de construcción y desarrollo como mecanismos alternativos. Finalmente, el apartado 4.4 aborda el patrimonio urbano en el ordenamiento territorial a través de las estructuras que lo conforman: las determinantes, los componentes, el proceso de planificación territorial. Un segundo elemento analiza las normas urbanísticas, jerarquía, alcance y principios, medio de materialización de las medidas de protección del patrimonio urbano.

---

<sup>204</sup> Ley 152 de 1994 (julio 15): “*por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo*”.



Figura 4.0 Síntesis gráfica del capítulo IV



Fuente: Elaboración propia

#### **4.1 De la Ley 388 y la Ley 397 de 1997 al Decreto 2358 de 2019: Del ordenamiento territorial al patrimonio cultural**

La última década del siglo XX en Colombia, se caracteriza por una situación de conmoción generalizada en varios aspectos de la vida nacional. Principalmente marcada por la cruenta guerra del Estado y la sociedad contra el narcotráfico y la guerrilla. Lo que incentiva la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, condujo a una oportunidad para fortalecer los derechos humanos, la capacidad de representación de las instituciones políticas, la autonomía de las entidades territoriales mediante la descentralización y la búsqueda de la transformación de la visión del Estado en la Nueva Constitución Política de 1991 (Melo, 2020). La cultura también encuentra una oportunidad para dislocar la posición pasiva asignada por la carta política de 1886. La promulgación de la Constitución Política de 1991 acelera la modernización del Estado, define la línea de actuación del ordenamiento territorial y la cultura; instrumentos de planeación y gestión para el territorio, la ciudad y el patrimonio cultural. La legislación en estas dos dimensiones es decisiva para la garantizar el desarrollo urbano y la salvaguarda del patrimonio cultural en su nueva definición constitucional. Que retoma la idea de la Declaración de Ámsterdam de 1975 en el marco conceptual de la visión integral de la protección del patrimonio y la articulación con la planificación urbana (Patiño, 2010, p.67). Procedente de la influencia de la Ley española 16-1985 de Patrimonio Cultural.

El mensaje subyacente en la Ley 388 de 1997 y Ley 397 de 1997, radica en el reconocimiento a la diversidad, autonomía y descentralización como elemento estructural de la nación. Además, se observa un tránsito de la visión homogénea a la visión heterogénea del patrimonio lo que *“conlleva a una profunda transformación del papel de la cultura en cuanto es considerada fundamento de la nacionalidad”* (Mejía, 1999, p. 210). Devela un necesario ajuste institucional para los nuevos procedimientos con la finalidad de estructurar una nueva conducta social (Thelen & Steinmo, 1992), y operativa. Fomenta e integra novedosas expresiones de la contemporaneidad y diversidad cultural. El origen de la redefinición conceptual del patrimonio cultural en la Constitución Política de 1991, redimensionado en la Ley General de Cultura, procedente de la *“Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”* de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 1972. Que centra la noción en los monumentos, los conjuntos y lugares de la siguiente manera:

*“Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia”,*

*Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,*

*Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico”<sup>205</sup>.*

La institucionalización del concepto patrimonio cultural por parte de la Unesco retoma el pensamiento de finales del siglo XVIII, cuando surge la idea de patrimonio común. Raíz en la cual se sustentan las definiciones más contemporáneas, aun siendo deudoras de la integración de la universalidad, fundamento representativo de la modernidad y del pensamiento ilustrado. Subsanao mediante la Lista del Patrimonio Mundial (Ávila, 2015, p. 94). A este respecto, la definición de patrimonio cultural inscrita en la Ley 397 de 1997, integra manifestaciones sociales que amplían y ratifican un cambio sustancial en la visión del Estado, que retoma la diversidad del concepto formalizado por Unesco en 1972:

*“Definición de patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del patrimonio cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la colonia, la independencia, la república y la contemporánea, sean declarados como bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura”<sup>206</sup>*

Los lineamientos generales del patrimonio cultural son definidos por la Constitución Política de 1991. Enuncia en el artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. En el artículo 8 menciona: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, además en el artículo 72 señala (Escovar & Cárdenas, 2018, p. 254):

*“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y*

---

<sup>205</sup> Tomado del Artículo 1, I. Definiciones del patrimonio cultural y natural, Convención sobre la protección del patrimonio Mundial, cultural y natural. UNESCO. 1972

<sup>206</sup> Tomado del artículo 4, Título II “Patrimonio cultural de la nación”, Ley 397 del 7 de agosto de 1997.

*reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”<sup>207</sup>*

La precisión conceptual de los contenidos del patrimonio cultural no solo recoge las influencias internacionales como el caso de la Unesco, sino que integra la multiculturalidad reconocida a través de la singularidad y expresiones propias, mecanismo para reafirmar la nacionalidad (Centeno, 2014). Desde el ámbito de lo regional se trata de posicionar la cultura como un elemento fundamental en los propósitos de la construcción de la paz territorial. Convergencia en el reconocimiento e integración de la diversidad social, territorial y especialmente ideológica. La Ley 388 de 1997, se ocupa de las orientaciones y estrategias para fomentar el ordenamiento territorial desde la instrumentalización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). De obligatoria formulación, aprobación y adopción, con el fin de incentivar el ejercicio de la “...autonomía municipal, promover el ordenamiento de su territorio, además de la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial...”<sup>208</sup>. Incluye y reconoce de manera integral el patrimonio cultural dentro de la planeación de la ciudad, de allí, la integración y orientación del ordenamiento y la cultura a partir de las Leyes que los regulan. La Ley de Desarrollo Urbano, representa para el patrimonio cultural inmueble un “...sustento muy importante para su protección y consolidación como componente principal de la ciudad contemporánea y referencia esencial de su proceso de desarrollo histórico y cultural...”, toda vez que en la legislación del ordenamiento territorial se “...exige incluir claramente las medidas de protección para la conservación del patrimonio cultural inmueble en los planes de ordenamiento...” (Salazar, 2000, p. 78). De ciudades y municipios.

La Ley General de Cultura, introduce un instrumento de planeación y gestión del patrimonio cultural inmueble. El Plan Especial de Protección (PEP), el cual

*“...indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales correspondientes...”<sup>209</sup>.*

Expresa la fragilidad existente en la protección del patrimonio cultural inmueble, que requiere de un instrumento de dedicación exclusiva. A partir de este momento, los bienes que pertenecen a las épocas prehispánicas, de la colonia, la independencia, la república y época contemporánea podrán ser declarados BIC en los ámbitos local o municipal, departamental y nacional. Esta categoría amplía reemplaza la de monumento nacional (Escovar & Cárdenas, 2018). Menciona el parágrafo 1, del artículo 4:

---

<sup>207</sup> Artículo 72, Capítulo 2 De los derechos sociales, económicos y culturales. Constitución Política de Colombia 1991.

<sup>208</sup> Artículo 1, Capítulo I Objetivos y principios generales, Ley 388 de 1997 (julio 18).

<sup>209</sup> Artículo 11 Régimen para los bienes de interés cultural, Título II Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 397 de 1997.

*“Los bienes declarados monumentos nacionales con anterioridad a la presente ley, así como los bienes integrantes del patrimonio arqueológico, serán considerados como bienes de interés cultural. También podrán ser declarados bienes de interés cultural, previo concepto del Ministerio de Cultura, aquellos bienes que hayan sido objeto de reconocimiento especial expreso por las entidades territoriales”<sup>210</sup>.*

Como estrategia para atender los compromisos derivados de la Constitución Política de 1991, con respecto al patrimonio cultural, la Ley 152 de 1994 (julio 15), *“Ley Orgánica del Plan de desarrollo”*, establece para el ejercicio de la planeación económica y social, la articulación de manera estrecha entre el desarrollo económico con el desarrollo cultural. Esta ley instaura mecanismos para generar fuentes de financiación con el fin de dar cobertura a las iniciativas en procura de la ejecución de los proyectos ligados al patrimonio cultural.

Por su parte, el *Plan Nacional de Cultura 2001-2010*<sup>211</sup>; *“Hacia una ciudadanía democrática cultural”*, se comprende como la *“guía de navegación del sector cultural en Colombia”* (Mejía, 2010), dispuesto por la Ley General de Cultura. Los propósitos principales se centran en dos grandes ejes: a) una ciudadanía plural y una ciudadanía democrática, siendo la primera una invitación a la identidad desde la diversidad pluralidad; b) construcción del proyecto colectivo de Nación. Formulados, contruidos y concertados en los territorios con logros moderados por las dificultades propias de la articulación institucional de los territorios (Pérez, 2019). El Plan Nacional de Cultura se estructura mediante el documento Conpes 3162 de 2002, *“Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010 – Hacia una ciudadanía democrática”*. Allí se definen las bases de acción del gobierno, al igual que los criterios de política para su ejecución. En la misma línea, el documento Conpes 3255 de 2003, determina los *“Lineamientos de política para la distribución del 25% de los recursos territoriales provenientes del incremento del 4% del IVA a la telefonía móvil”*, para la apropiación social del patrimonio cultural con actividades relacionadas con la identificación, inventario y elaboración de PEP de bienes culturales.

En el año 2004 se crea el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (PNRCH), por parte del Ministerio de Cultura, para *“...recuperar y revitalizar los centros históricos declarados bienes de interés cultural del ámbito nacional...”*, para apoyar la formulación e implementación de los PEMP<sup>212</sup> para cada uno de los centros históricos declarados. Asimismo,

---

<sup>210</sup> Tomado del párrafo 4 del artículo 4, Título II “Patrimonio cultural de la nación”, Ley 397 del 7 de agosto de 1997.

<sup>211</sup> El Plan Nacional de Cultura es convocado por el Ministerio de Cultura en julio del año 2000, la metodología de construcción colectiva que incluye una consulta ciudadana con participación de 23000 personas en 570 foros municipales, 7 regionales, 32 departamentos, 4 de carácter distrital, uno nacional y varios foros sectoriales. Es formulado por el Consejo Nacional de Cultura y el Ministerio de Cultura (Conpes 3162, 2002)

<sup>212</sup> El Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) es un instrumento de gestión de los bienes de interés cultural mediante el cual se establecen acciones necesarias para garantizar la protección, la conservación y la

la formulación de políticas y ejecución de acciones coordinadas con distintas entidades del ámbito nacional, departamental y municipal (Mincultura, 2004). Sin embargo, solo hasta el año 2010, se formulan los lineamientos conceptuales, institucionales y operativos, para la articulación de las diferentes instituciones del gobierno y territorios para el fortalecimiento y aprovechamiento de los centros históricos. La gestión de recursos vincula al sector privado a este propósito, mediante el Conpes 3658 “*Lineamientos de política para la recuperación de los centros históricos*”.

El patrimonio cultural se vio beneficiado con la consolidación de herramientas específicas para la gestión y protección establecidas en la Ley 1185 de 2008 (marzo 12) “*por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura- y se dictan otras disposiciones*”. La evolución de la visión del patrimonio cultural en Colombia genera nuevos mecanismos acordes con este propósito. Con esta Ley, el Ministerio de Cultura fija procedimientos únicos para la protección y salvaguardia del patrimonio, basado en un principio de coordinación garantizado por el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural (en adelante SNPC) <sup>213</sup>, cuya creación obedece a la necesidad de articular todo lo relativo al patrimonio de manera coherente y orientada (Mejía, 2010, p.227). En el mismo orden, se pretende que dicha Ley pueda establecer condiciones para aliviar la tensión sobre “...*los mecanismos y procedimientos para que se articulen de forma armónica y coherente las competencias de diversos niveles de gobierno sobre el mismo territorio...*” a propósito de las determinantes de superior jerarquía entre el ordenamiento territorial y la protección del patrimonio cultural del mismo municipio. De tal manera la Ley 1185, define que “...*las normas sobre conservación y preservación de inmuebles considerados como de interés cultural nacional prevalecen sobre las normas locales de ordenamiento...*” (Pinilla, 2009, p. 52).

Un mes después de la expedición de la Ley 1185 de 2008, el Decreto 1313 de 2008 (abril 23), reglamenta el artículo 7<sup>214</sup> de la Ley General de Cultura, sobre el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) que había sido instaurado por la Ley 163 de 1959.

---

sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales. Lo introduce la Ley 1185 de 2008 (marzo 12), artículo 7.

<sup>213</sup> El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural es definido como el “conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e información articulados entre sí, que posibiliten el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales según los principios de descentralización, participación y autonomía. El Sistema Nacional de Cultura estará conformado por el Ministerio de Cultura, los consejos municipales, distritales y departamentales de cultura, los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes y, en general, por las entidades públicas y privadas que desarrollen, financien, fomenten o ejecuten actividades culturales. El Sistema Nacional de Cultura estará coordinado por el Ministerio de Cultura, para lo cual fijará las políticas generales, dictará normas técnicas y administrativas a las que deberán sujetarse las entidades de dicho sistema”. Artículo 57, Título IV De la gestión cultural, Ley 397 de 1997 (agosto 07).

<sup>214</sup> “Artículo 7. Consejo de Monumentos Nacionales. El Consejo de Monumentos Nacionales es el órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación. El Gobierno Nacional reglamentará lo relativo a la composición, funciones y régimen de sesiones del

El Decreto 1313 del 2008, establece la composición del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), su régimen de sesiones y sus funciones entre las que se encuentra asesorar el Ministerio de Cultura en la definición de políticas y estrategias para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural. Emitir conceptos previos y favorables sobre la declaratoria de Bienes de Interés Cultural, sobre las necesidades y contenidos de los PEMP. Este decreto establece la creación de los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural, con composición y funciones análogas a la del CNPC (Mejía, 2010, p. 229). El Decreto 3322 de 2008, modifica el artículo 3 del Decreto 1313 de 2008, establece el mecanismo para la elección del representante de las universidades para un periodo de dos años, como reconocimiento a la tradición y presencia de estas instituciones en el patrimonio cultural.

El Decreto 763 de 2009 (marzo 10), *“por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003<sup>215</sup> y 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material”*, además de crear el SNPC, fija las normas técnicas y administrativas, en lo relacionado con la declaratoria del BIC. Establece los objetivos y contenidos generales de los PEMP. Adicionalmente, dispone los tipos de obras, principios y acciones e intervenciones que pueden ser ejecutadas en los BIC de tipo mueble. El Decreto 763 de 2009, reglamenta lo relacionado con la enajenación y contratos sobre BIC de entidades públicas con estímulos tributarios y mantenimiento de los mismos (Mejía, 2010, p. 229).

En el mes de mayo de 2010, la expedición de la Resolución 0983, desarrolla algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la nación de naturaleza material, que aplica a todos los procedimientos, declaratorias y demás aspectos pertinentes de los BIC del ámbito nacional o de los departamentos, municipios, distritos, autoridades de comunidades indígenas o afrodescendientes. Trata sobre los requisitos generales que debe acreditar una persona natural o jurídica para solicitar la declaratoria, ante la instancia competente para integrar la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural (LICBIC). El cual constituye un registro de información donde se ingresan los bienes que se encuentren en proceso de ser declarados BIC.

Los bienes que se encuentren en la LICBIC permanecen de manera temporal mientras se surte el proceso del acto administrativo, que no podrá ser mayor a 2 años. En ese sentido, se define la necesidad de formular un PEMP, en un plazo no superior a 2 meses después de la inclusión en la lista indicativa. En caso de aceptación y definición de la necesidad de un PEMP para el inmueble, el plazo para la formulación y aprobación será máximo de dos años. El registro del BIC le corresponde al Ministerio de Cultura, gobernaciones, alcaldías municipales y distritos, autoridades de comunidades indígenas y afrodescendientes. La elaboración y actualización del

---

Consejo de Monumentos Nacionales”. Artículo 7, Título II Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 397 de 1997 (agosto 07).

<sup>215</sup> La Ley 814 de 2003 de julio 2, *“por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia”*. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 763 de 2009.

registro de los BIC declarado en el ámbito de sus jurisdicciones, en relación con los bienes inmuebles. Las intervenciones mínimas deben estar relacionadas con limpieza, mantenimiento de pintura interiores y exteriores, mantenimiento de cubiertas, reemplazo o restitución de acabados, remoción de elementos ajenos a las características constructivas y arquitectónicas del bien y obras de primeros auxilios.

En la sesión del 16 de septiembre del 2012, el CNPC solicita a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura revisar los BIC del ámbito nacional que no cuenta con delimitación del área afectada y zona de influencia para presentar una propuesta aplicable a los BIC que carecen de tal perímetro. Esto da origen a la Resolución 1359 de 2013 *“por el cual se delimita el área afectada y la zona de influencia de los bienes de interés cultural del ámbito nacional que no cuentan con estas áreas definidas”*, tanto de los BIC del grupo arquitectónico y urbano localizados en áreas urbanas y rurales. El Decreto 1080 de 2015<sup>216</sup>, ratifica al Ministerio de Cultura que *“tendrá como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural de modo coherente con los planes de desarrollo, con los principios fundamentales y de participación contemplados en la Constitución Política”*<sup>217</sup>, dotándolo de mecanismos y un Sistema Nacional de Cultura (SNC)<sup>218</sup>. El establecimiento definitivo de la dimensión municipal para que en su autonomía garantice la cultura tanto en la formulación como en la participación ciudadana de su localidad.

El 26 de diciembre de 2019, se expide el Decreto 2358, *“por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial”*. Contempla entre otros los siguientes aspectos: a) conformación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural al cual se adicionan 3 nuevos integrantes; b) acuerdos sobre el patrimonio cultural donde el Ministerio de Cultura lidera estrategias con diferentes sectores con el fin de propender por la salvaguardia, difusión y sostenibilidad del patrimonio cultural, c) establecer convenios interadministrativos, actos o circulares que permitan definir alcances, compromisos y acciones de armonización con diferentes actores para garantizar la implementación de los PEMP y planes de especiales de salvaguarda. La prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural ratifica la jerarquía de las acciones dirigidas a la preservación, conservación y usos del patrimonio cultural, material e inmaterial, al momento de adoptar, modificar o ajustar los instrumentos de ordenamiento territorial en cualquier ámbito. Así como los demás instrumentos de planificación territorial de distritos y municipios. De esta manera, se busca mitigar y controlar los posibles impactos urbanísticos que pueden generar sobre los valores paisajísticos intrínsecos a los centros históricos y otros inmuebles declarados BIC. Se fortalece el marco regulatorio para la

---

<sup>216</sup> Decreto 1080 de 2015 (mayo 26): *“por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”*

<sup>217</sup> Artículo 1.1.1.1, Parte 1. Sector Central, Decreto 1080 de 2015 (mayo 26).

<sup>218</sup> “Se entiende por Sistema Nacional de Cultura el conjunto de instancias, espacios de participación y procesos de desarrollo institucional, planificación, financiación, formación, e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales”. Artículo 2.2.1.1, Parte II Sistema Nacional de Cultura, Decreto 1080 de 2015 (mayo 26).



formulación del PEMP, tanto para bienes muebles e inmuebles declarados BIC. El Ministerio de Cultura, las autoridades locales y propietarios, tendrán más opciones para la formulación e implementación del instrumento de gestión del patrimonio.

Un avance jurídico sobre el desarrollo de lineamientos normativos para la protección del territorio y sus dinámicas es visible con la identificación y categorización de los paisajes culturales. La incorporación de definidas de la Unesco, entre otros, espacios culturales como los lugares de memoria y los complejos socio culturales. Conforman una enorme oportunidad para el reconocimiento y manejo del valor cultural de los paisajes colombianos.

La agregación de escala al ámbito de reconocimiento e integración del patrimonio urbano, proporcionalmente a la progresión de la legislación de protección, amplía las declaratorias por parte del Estado colombiano. Refuerzan la creación e inducción al reconocimiento de una cultura donde el patrimonio ocupa un lugar de poco reconocimiento al inicio de las acciones, el cual fue afianzado, mediante políticas que reforzaron estas dualidades. Como lo menciona Guénola y Monnet, la creación de los centros históricos como objetos urbanísticos durante los últimos cuarenta años, los hace recientes, dada su identificación desde los años 70 del siglo pasado, al mismo tiempo que los centros “modernos” de negocios que salen del horizonte de las antiguas ciudades coloniales para simbolizar el acceso a la modernidad económica y cultural global. Lo que hace del centro histórico una creación moderna tanto como el centro de negocios (2003).

**Figura 4.1 Panorámica del centro histórico de la ciudad de San Juan de Pasto (Nariño)**



Fuente: Imagen tomada de Revista Semana

#### 4.1.1 El Ministerio de Cultura

Dos años después de la promulgación de la Constitución Política de 1991 fue presentado al Congreso de la República, el proyecto de ley<sup>219</sup> por el cual el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) se transforma en el Ministerio de Cultura. Una estructura orgánica reformada con ampliación y modificación de funciones, adecuada para establecer los lineamientos de las “*las políticas para el desarrollo cultural de la nación*”. Se destacan dentro de los principios fundamentales del proyecto, el espíritu democrático, cohesionador y amplitud en atención a los “*aspectos atinentes al deber ser del Ministerio de Cultura*” (Mena & Herrera, 1994, p.333), según orientaciones constitucionales. Era evidente que Colcultura por sus características y capacidad administrativa instalada, no podía asumir el encargo de protección del patrimonio cultural de la Nación. Al amparo del marco constitucional, en 1993 un grupo de juristas y personalidades de la cultura inician la redacción de tres proyectos de ley. Orientados a la actualización de la legislación del patrimonio cultural, el fomento a la creación y transformación de Colcultura sintetizadas e integradas en la Ley General de Cultura, promovida por el gobierno de Ernesto Samper y finalmente aprobada después de 3 años de debates en 1997 (Escovar & Cárdenas, 2018, p.254).

Las funciones del Ministerio “*son prácticamente las mismas del Colcultura en su reestructuración de 1992*”, en lo que respecta a la “*estructura orgánica*” es posible advertir la capacidad para “*interpretar las necesidades culturales de las comunidades*” (Mena & Herrera, 1994, p. 333) que integran la diversidad de la nación. De esa forma, el 7 de agosto de 1997 se crea el Ministerio de Cultura “*...como organismo rector de la cultura, encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en concordancia con los planes y programas de desarrollo...*”<sup>220</sup>. Según el artículo 66 de la Ley 367 de 1997: “*...es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación*”<sup>221</sup>. Los eventos que desencadenan la creación del Ministerio de Cultura son resultado de un proceso histórico que abarca más de un siglo, considerado lento e inconsistente (Barbosa, 2001).

Los factores que han persistido en contra e influyen en la ralentización de la creación de una autoridad nacional para la cultura, obedecen a factores relacionados con el desarrollo del país, como la desarticulación de las políticas gubernamentales, la inestabilidad presupuestal o la fragilidad de la estructura institucional (Barbosa, 2001, p.79). A pesar de ello, al Ministerio de Cultura le precede una legislación prudente pero seminal, en la que se incluyen los esbozos de su existencia, especialmente la contenida en la “*Política Cultural para los Centros Históricos y el Patrimonio Inmueble*”, formulada en 1989 y promovida por Colcultura.

---

<sup>219</sup> Hace referencia al Proyecto de Ley No. 221 de 1993, presentado al Congreso por los Representantes a la Cámara por Manuel Cepeda Vargas, Ovidio Marulanda Sierra, Octavio Sarmiento Bohórquez y el senador Hernán Motta Motta; con ponencia del representante José Darío Salazar Cruz (Mena & Herrera, 1994)

<sup>220</sup> Artículo 66, Título IV De la gestión cultural, Ley 397 de 1997 (agosto 07).

<sup>221</sup> Artículo 8, Título I De los principios fundamentales. Constitución Política de Colombia 1991.

El sector de la cultura al obtener el rango de Ministerio aumentó su autonomía, su capacidad de convocatoria y su influencia en el ámbito nacional, esto lo demuestra ser miembro del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), así como su participación en escenarios internacionales estratégicos para el diseño de políticas culturales (Conpes 3162, 2002, p. 8). En correspondencia con el posicionamiento de la cultura por parte de organismos internacionales como la Unesco, al igual que la inscripción en la agenda de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (Rey, 2010, p. 27).

De hecho, la segunda mitad del siglo XX es significativa a nivel de Latinoamérica por la creación de instituciones administrativas y de gestión para la cultura. Una trata de una tendencia generalizada a formular bajo una única estructura los diferentes establecimientos culturales y educativos - algunos provenientes de siglos anteriores-, como bibliotecas nacionales, archivos, museos, teatros nacionales, fondos, colecciones de diversa índole y que habían dado origen a las secretarías de cultura, subsecretarías, viceministerios, institutos nacionales, a partir de la referencia del

*modelo francés del Ministerio de Cultura y Asuntos Culturales de 1959 y el de la Unesco, estructurados alrededor de tres áreas básicas de acción: la conservación del patrimonio cultural, el fomento de las artes y la llamada difusión cultural. Su interlocutor era una supuesta nación culturalmente homogénea, blanca, cristiana y con una sola lengua.* (Mejía, 2004).

En la última década el Ministerio de Cultura centra su acción en dos grandes dimensiones: intervenciones en el espacio público de los centros históricos producto especialmente de las operaciones inscritas dentro de los planes de ordenamiento y PEMP aprobados de los municipios y ciudades con patrimonio urbano reconocido. Las intervenciones principales son la recuperación de las plazas y algunos espacios públicos de los centros históricos de Cartagena (1993-1997), Pasto (2000), Zipaquirá (2001-2002), Popayán, (2009), Santa Marta (2010), Barranquilla (2011), Mompox (2013), Pamplona (2015), Buga (2015), Bogotá (2015) y Loricá (2016) (Escovar & Cárdenas, 2018, p.341).

Una segunda dimensión es la intervención a partir de proyectos de restauración de edificaciones de diverso carácter a lo largo de la geografía nacional, incluso en regiones donde por vez primera se realizan este tipo de acciones encaminadas a la recuperación del patrimonio cultural inmueble. Dentro de ellas cabe destacar: la casa Arana en el departamento del Amazonas (2009); el palacio Arzobispal de Quibdó (2009-2014), la Concatedral de San José de Tadó (1999-2006), el teatro Primero de mayo en Andagoya (2013-2014) en el departamento del Chocó; en la misma línea, la restauración de las Capillas doctrineras de San Pedro Apóstol de Togoima, San Antonio de Chinas, San Miguel de Avirama y Santa Rosa de Suin (2015) en el departamento del Cauca (Escovar & Cárdenas, 2018, p.347).

**Tabla 4.01 Ministerios e Instituciones de Cultura en Iberoamérica**

<b>Institución</b>	<b>País</b>
Ministerio de Educación y Cultura (1953-1985)	<b>Brasil</b>
Ministerio de Cultura (1985- )	
Subsecretaría de Cultura de la Nación (1948-1998)	<b>México</b>
Consejo Nacional para la Cultura de la Nación (Conaculta) (1998- )	
Instituto Colombiano de Cultura (1968-1997)	<b>Colombia</b>
Ministerio de Cultura (1997-)	
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2003-)	<b>Chile</b>
Ministerio de Cultura y Educación (1973- 1981)	<b>Argentina</b>
Ministerio de Cultura y Educación (1981-2001)	
Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes (2001-2014)	
Ministerio de Cultura (2014-)	
Ministerio de Cultura (1967-1970)	<b>Uruguay</b>
Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay (1970-)	
Ministerio de Cultura y Patrimonio (2007-2013)	<b>Ecuador</b>
Ministerio de Cultura (2013-)	
Consejo Nacional de la Cultura (1975-2005)	<b>Venezuela</b>
Ministerio del Poder Popular para la Cultura (2005-)	

Fuente: Elaboración propia con base a (Rey, 2010, p. 27)

La intervención en inmuebles es reconocida dentro de la Bienal Colombiana de Arquitectura (BCA) con un premio en restauración hasta su cambio de denominación en el año 2000, a Recuperación del Patrimonio –Carlos Arbeláez Camacho- en homenaje a este arquitecto pionero en el campo del patrimonio cultural (SCA, 2000, p.285). A partir de la BCA del año 2004 se denomina Restauración del patrimonio –Premio Carlos Arbeláez Camacho hasta el año 2008 y desde la bienal del año 2010 se designa como categoría Intervención en el Patrimonio –Premio Carlos Arbeláez Camacho- lo que permite observar el cambio en las consideraciones conceptuales con relación a la interacción con el patrimonio cultural.

Después de dos décadas con la misma estructura administrativa, mediante el Decreto 2120 de 2018 (noviembre 15), “*por el cual se modifica el Ministerio de Cultura*”, se reestructuran las dependencias al interior de la institución para abordar los retos contemporáneos de las industrias culturales, siendo agregada la memoria como un componente fundamental para la construcción de una paz larga y duradera, siendo anexada a la Dirección de Patrimonio y Memoria, a raíz de los acuerdos de paz del año 2016.



**Figura 4.2 Panorámica del centro histórico del Municipio de Santa Cruz de Mompox (Bolívar)**



Fuente: Imagen tomada de Stock Adobe

#### **4.1.2 El Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos**

En concordancia con el documento del Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “*Hacia una ciudadanía democrática cultural, un plan colectivo desde y para un país plural*” en su componente -Redimensionar lo nacional desde lo multicultural-, estrategia 1, la cultura como base del ordenamiento territorial, menciona:

“...los procesos de ordenamiento territorial y los planes que de ellos se deriven deben respetar la relación entre identidades, territorio y región y contribuir a potenciar procesos sociales y culturales. Este ordenamiento no debe producir el replegamiento de las culturas, sino al contrario, servir de aliento para su libre desenvolvimiento...” (Mincultura, 2001, p. 63).

La implementación de la estructura para la formulación de los Planes Especiales de Protección (PEP) para los centros históricos declarados, es posible por la convergencia de varias situaciones entre ellas, la formulación de un plan piloto para cuatro ciudades, la consecución de recursos económicos y el compromiso interinstitucional por parte del Estado. Las cuales permiten la consecución de los elementos mínimos que al articularse matizan el carácter inicial de la operación sin precedentes para el fomento de la protección del patrimonio urbano. El

primero de ellos, es la generación de un plan que concentra las acciones de formulación e implementación, además de agrupar los diferentes actores en una sola estructura.

El Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (PNRCH), es el instrumento diseñado por el Ministerio de Cultura para recuperar y revitalizar los centros históricos declarados Bien de Interés Cultural de ámbito nacional. Se lleva a cabo mediante la formulación e implementación de los Planes Especiales de Protección (PEP) en el inicio, posteriormente los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP). Se trata en ambos casos de instrumentos de planeación definidos con la participación de actores públicos y privados de los ámbitos nacional, departamental y local, lo cual garantiza (o así se pretende) la sostenibilidad de dichas áreas históricas. Implica una metodología que se construye por parte del Ministerio de Cultura y se aplica según las realidades y necesidades particulares de cada centro histórico, y cuenta durante todo el proceso con la participación de la ciudadanía (Mejía, 2010).

El origen formal del PNRCH, es la firma de un Convenio Interadministrativo<sup>222</sup> en el año 2004<sup>223</sup> por parte del Ministerio de Cultura (Rojas, 2015, p. 287), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación y Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial). Surge como:

*“respuesta a la necesidad de recuperar, conservar y actualizar las funciones de los centros históricos de las ciudades con una visión de futuro, donde los cascos urbanos fundacionales, actualicen sus funciones como áreas verdaderamente activas de la ciudad, donde se promueva el desarrollo de una manera sostenible desde la preservación de las estructuras existentes, complementándolas con nuevas acciones al interior de sus territorios”* (Conpes 3658, 2010, p.6).

La recuperación de los centros históricos declarados BIC del ámbito nacional, aborda una estrategia en tres áreas fundamentales: los valores del bien de interés cultural, los riesgos asociados al orden legal, institucional, financiero y físico que amenacen la integridad del bien, y finalmente su puesta en valor (PEMP Jericó, 2018). Desarrollados a partir de la experiencia adquirida por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, debido a la formulación de planes especiales de manejo y protección del grupo urbano<sup>224</sup>, lo cual origina la cartilla *“Formulación e implementación de Planes Especiales de Manejo y Protección. Bienes Inmuebles de Interés Cultural”*, como reflejo del continuo aprendizaje (Mincultura, 2011). La experiencia acumulada por la trayectoria de Colcultura con relación a la *“conservación y*

---

<sup>222</sup> Convenio Interadministrativo No. 299 de 2004.

<sup>223</sup> La fecha de creación presenta diferentes versiones, el Conpes 3733 menciona “...en 2002 fue formulado le PNRCH con el objetivo de guiar las acciones de recuperación y fomento del dinamismo de los centros históricos del país...” (Conpes 3733, 2012; p. 6).

<sup>224</sup> Se refiere a los Planes Especiales de Manejo y Protección para Barranquilla, Buga, Lorica, Manizales, Mompox, Pamplona, Santa Marta y Tenjo y cinco del grupo arquitectónico, Colegio Helvetia, edificio Liévano, muelle de Puerto Colombia, Quinta de Bolívar y Villa Adelaida (Mincultura, 2011).

*recuperación de los conjuntos urbanos declarados en el ámbito nacional”* se convierte en el insumo con el que la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, reformula el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (Escovar & Cárdenas, 2018, p.257). Encuentra una referencia directa en el Seminario Internacional de Revitalización de Centros Históricos en América Latina (SIRCHAL), promovido por Unesco a partir de la iniciativa del gobierno francés a través de la Dirección de Arquitectura y Patrimonio del Ministerio de Cultura y Comunicación (Orellana, 2001; p. 23). Para activar políticas de promoción, fomento y cooperación del orden cultural entre Francia y Latinoamérica (Boscán de Pacheco, 2018).

La SIRCHAL se inaugura en París en mayo de 1998, con el apoyo de la Unesco, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Internacional de Arquitectos, empresas francesas y otros organismos institucionales. La red SIRCHAL logra la creación de un medio en el que Latinoamérica y Europa confronta sus experiencias, instrumentos y métodos en el mes de noviembre de 1998. Se instala en Quito donde queda en evidencia la insuficiente legislación de la mayoría de los países para responder a la dinámica económica, social y cultural (Orellana, 1998). En el año 1999 se instaura en Valparaíso y Santiago de Chile, siendo el tercer Seminario en América Latina (Boscán de Pacheco, 2018). Desde allí orientó el análisis y reflexión sobre la revitalización de centros históricos con una serie de recomendaciones integradas en *“programas de acción a corto y mediano plazo”* (Orellana, 1998, p. 25). El SIRCHAL logró importantes aportes a la generación de los proyectos urbanos y de revitalización de los centros históricos de ciudades de Quito (Ecuador), Antigua (Guatemala), La Habana (Cuba), Rio de Janeiro (Brasil) y Montevideo (Uruguay), (Orellana, 1998, p. 25). En la misma línea el Seminario Internacionales para la Revitalización de Centros Históricos, se realiza en la ciudad de Popayán del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2003, con logros relacionados sobre el futuro de la ciudad a partir de la interacción entre la ciudad como un todo con su centro histórico, bajo la dinámica de su población y la riqueza natural (Mincultura, 2003). El proyecto de ciudad se garantiza inicialmente con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la constitución de un ente gestor integrado por actores de la sociedad civil, las universidades, el sector productivo, y entidades públicas. A esto sumamos los habitantes de Popayán, vinculados con programas de cultura ciudadana y apropiación social del patrimonio, lo que refuerza tradiciones, identidad y diversidad cultural y étnica (Mincultura, 2003). Esta actividad coincide como referente directo para la creación del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos.

El objetivo del PNRCH es el desarrollo de políticas, estrategias, acciones e instrumentos orientados a la identificación, recuperación, conservación y protección de los centros históricos declarados BIC del ámbito nacional, con el propósito de mejorar la calidad de vida en los centros históricos, la implementación de un modelo de manejo integral del patrimonio cultural, fortalecer la identidad cultural, promover la equidad social, estimular la participación comunitaria y la descentralización administrativa (Mincultura, 2004). Iniciativas sintetizadas en los contenidos del PEMP. El desarrollo del PNRCH se realiza mediante cuatro acciones: a) formulación de PEP en una prueba piloto, b) la firma del convenio interadministrativo 299 de 2004, c) el fomento de los PEMP y d) finalmente su implementación. La prueba piloto se lleva

a cabo en el 2001 en las ciudades de Santa Marta, Manizales y Barranquilla con la asistencia técnica del BID, la cual se profundiza en el apartado dedicado al PEP. Esta prueba tiene soporte económico, técnico y jurídico en el Conpes 3658 de 2010 y Conpes 3733 de 2012.

El Conpes 3658 de 2010, define los “*Lineamientos de Política para la recuperación de los Centros históricos de Colombia*”, resultado de la gestión adelantada por el Ministerio de Cultura en el marco del Plan de Recuperación de Centros Históricos donde convoca otras entidades del orden nacional como el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Territorial, primer esfuerzo, no exitoso de vincular entidades gubernamentales en la recuperación de los centros históricos (Escobar, Cárdenas; 2018). Además, recomienda “*estudiar la viabilidad de una operación de crédito con la Banca Multilateral para el financiamiento de obras de recuperación de 10 centros históricos*” (Conpes 3733, 2012, p. 2). Mientras el Conpes 3733 de 2012 genera un “*Concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por us\$15 millones de dólares o su equivalente en otras monedas destinado a financiar el programa para la recuperación de centros históricos*” (Conpes 3733, 2012, p.2).

Busca generar la capacidad técnica para la consolidación institucional para la adecuada ejecución del PNRCH, así como el desarrollo de acciones integrales apoyadas en estrategias socioeconómicas dirigidas a recuperación de los centros históricos de Buga, Mompox y Pamplona (Conpes 3733, 2012, p.2). Motivado principalmente en el artículo 36 del Decreto 763 de 2009, el cual menciona:

“...señalará los plazos máximos para determinar cuáles BIC declarados con anterioridad a la Ley 1185 de 2008 requieren PEMP, así como el plazo máximo para formular y aprobar tales PEMP, sin que el plazo máximo total para el efecto pueda superar cinco (5) años a partir de la vigencia de este decreto...”<sup>225</sup>.

Es decir, hasta el 10 de marzo de 2014.

#### **4.1.3 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia**

La Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia “*es una iniciativa del Ministerio de Comercio Industria y turismo, con el apoyo del Ministerio de Cultura y ejecutada por el Fondo de Turismo*”, cuya finalidad es “*potenciar el patrimonio cultural colombiano, material e inmaterial*”, para fomentar su “*valoración y proyección mediante el turismo y generar más oportunidades de desarrollo y sostenibilidad en sus comunidades*” (Fontur, 2019). Creada en julio de 2010. La relación del patrimonio urbano y el turismo se remonta a lo establecido en la

---

<sup>225</sup> Artículo 36. Términos para formulación y aprobación de PEMP, Capítulo IV Competencias para la formulación de planes especiales de Manejo y Protección –PEMP–, Decreto 763 de 2009 (marzo 10) Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.



Corporación Nacional del Turismo (CNT), creada de manera simultánea con Colcultura en el año 1968. Su propósito era “*preparar programas de desarrollo turístico*”, en cumplimiento de sus funciones. Inicia un vínculo con los centros históricos, al ser considerados potenciales medios para el turismo diferencial y exótico en el sentido de lo autóctono (Escovar & Cárdenas, 2018).

La Red Turística fue inicialmente concebida como la Red de Pueblos Patrimonio (RPP). Cuando se reconoce el potencial del patrimonio cultural nacional “*como recurso para lograr el desarrollo del turismo cultural, soportado en la historia, cultura, cocina tradicional, naturaleza, arquitectura, capital humano y arqueología que ofrecen estos lugares*” (Escovar & Cárdenas, 2018, p. 207). La RPP estaba limitada por las condiciones de seguridad y de orden público en varias regiones donde santuarios de flora y fauna eran ocupados por fuerzas irregulares. La idea de la RPP surge de dos fuentes: una formal desde la política pública y otra referencial de las experiencias de turismo cultural de países con experiencias pioneras en este aspecto. En primer lugar, el fallido diseño de la política pública de turismo cultural emprendida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur en el año 2007, generó interés por diseñar proyectos enfocados en la “*consolidación de itinerarios culturales, en los cuales el patrimonio cultural está representado especialmente por los centros históricos y parques arqueológicos*” (Escovar & Cárdenas, 2018, p. 206). La red de pueblos patrimonio uno de estos proyectos.

**Figura 4.3 Imagen representativa de la Red turística de pueblos patrimonio de Colombia**



Fuente: Imagen tomada de (Fontur, 2021)

El antecedente para el posicionamiento y la difusión del turismo en Colombia, fue delegado a la CNT que presenta dos matices en relación con el patrimonio cultural: a) en cumplimiento de sus funciones se compromete con la intervención de edificaciones de carácter patrimonial,

elaboración de estudios para el reconocimiento y valoración de bienes arqueológicos, históricos y monumentales como recursos para el desarrollo turístico desde 1968 hasta el año 1976, momento en el cual se delega a otras entidades la intervención física en el patrimonio construido (Escovar & Cárdenas, 2018). Esta etapa se desarrolla la formulación, adecuación y dotación de la infraestructura para el turismo de diverso carácter, el patrimonio cultural adquiere una posición estratégica por su atractivo relacionado con la identidad nacional, entonces en construcción. b) Un segundo matiz de la CNT, se centra en las campañas de difusión y reconocimiento a nivel nacional e internacional iniciadas en la década de los años 70 del siglo pasado, entre las que se encuentran: “*Turista satisfecho trae más turistas*” (1970), “*Enamórese de su Colombia*” (1975), “*Por las rutas de Colombia*” (1985). Esta última se complementa por una serie de televisión cuya finalidad era ampliar la oferta de turismo con énfasis en la diversidad regional y su potencial turístico, como mecanismo para ser reconocida parte integral de la cultura. En 1994, la última campaña “*Colombia: para amarla hay que andarla*”, fomenta los recorridos a pueblos y provincias, medio para resaltar las raíces, la autenticidad e identidad del país. Campaña afectada sensiblemente por el recrudecimiento de la seguridad a nivel nacional que condujo a la reducción de movilización por carretera, efecto que posicionó los destinos turísticos considerados seguros (Escovar & Cárdenas, 2018; Melo 2020). Especialmente aquellos que contaban con medios de transporte aéreo.

**Figura 4.4 Panorámica de Barichara – Santander- “El pueblo más lindo de Colombia”**



Fuente: Imagen tomada de la Guía RTPCC (Fontur, 2021)

En 1997 se liquida la Corporación Nacional de Turismo, acto motivado en la Ley 300 de 1996 (Julio 26) “*por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones*”, en la cual se promueve la transición entre esta entidad y el Fondo Nacional de Turismo creado mediante la misma ley como dependencia del Ministerio de Industria y Turismo. Una vez cumplido un año de transición mediante el Decreto 1671 de 1997 (junio 27) se suprime la CNT y se perfecciona su liquidación. El Fondo Nacional de Turismo transforma su denominación en el año 2006 a Fondo de Promoción Turística de Colombia, para a su vez en el año 2012 dar origen al Fondo Nacional del Turismo (FONTUR) que hace parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, creado en el 2002. En el Plan Nacional de Cultura de 1992-1994, denominado “*Colombia: El camino a la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI*”, relacionaba la valoración del patrimonio cultural para el conocimiento no solo del pasado sino para transformar el presente y esbozar el futuro. En ese sentido, adquiere relevancia involucrar la defensa y promoción del patrimonio cultural en “*programas que promuevan nuestra imagen turística a nivel nacional e internacional*” (Colcultura, 1992). Es posible observar una transición al turismo cultural amparado en las declaratorias de Cartagena (1984) y Mompox (1995) como patrimonio de la humanidad, lo cual incentiva la adecuación y especialmente la modernización de la infraestructura incluyendo las áreas patrimoniales.

Con el cambio de siglo, la reactivación de la actividad turística, promovida por el recién creado Ministerio de Industria, Comercio y Turismo utiliza dentro de sus estrategias comerciales campañas como “*Vive Colombia, viaja por ella*” (2002). Con resultados satisfactorios constatables en indicadores económicos favorables para el sector, producto de las condiciones de seguridad para el desplazamiento terrestre. En el año 2008, se promueve “*Rutas seguras*” y “*Colombia: el riesgo es que te quieres quedar*”, genera un complemento derivado de la creación de la marca país “*Colombia es pasión*” (2016), impulso decidido al sector turístico en el territorio nacional (Escovar & Cárdenas, 2018; Melo 2020). Sector estimulado con una legislación de fomento para la inversión en el sector a partir de exenciones a la renta<sup>226</sup>.

El turismo cultural e histórico, se clasifica como un “*tipo de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos –productos culturales, materiales e inmateriales de un destino turístico*”, (Organización Mundial del Turismo, 2019, p. 31). Definición producto del refinamiento de los diversos tipos de “*turismo nacional e internacional*”, vehículo para el intercambio cultural que proporciona oportunidades de responsabilidad compartida, tanto de los anfitriones como de los visitantes en la experimentación y comprensión inmediata de la cultura y el patrimonio de la comunidad (ICOMOS, 1999). Por su parte la UNESCO, menciona que turismo cultural es un concepto innovador eminentemente ético que busca favorecer la paz, la comprensión entre los pueblos y el respeto por el patrimonio cultural y natural, y las especificidades identitarias de las comunidades (2010).

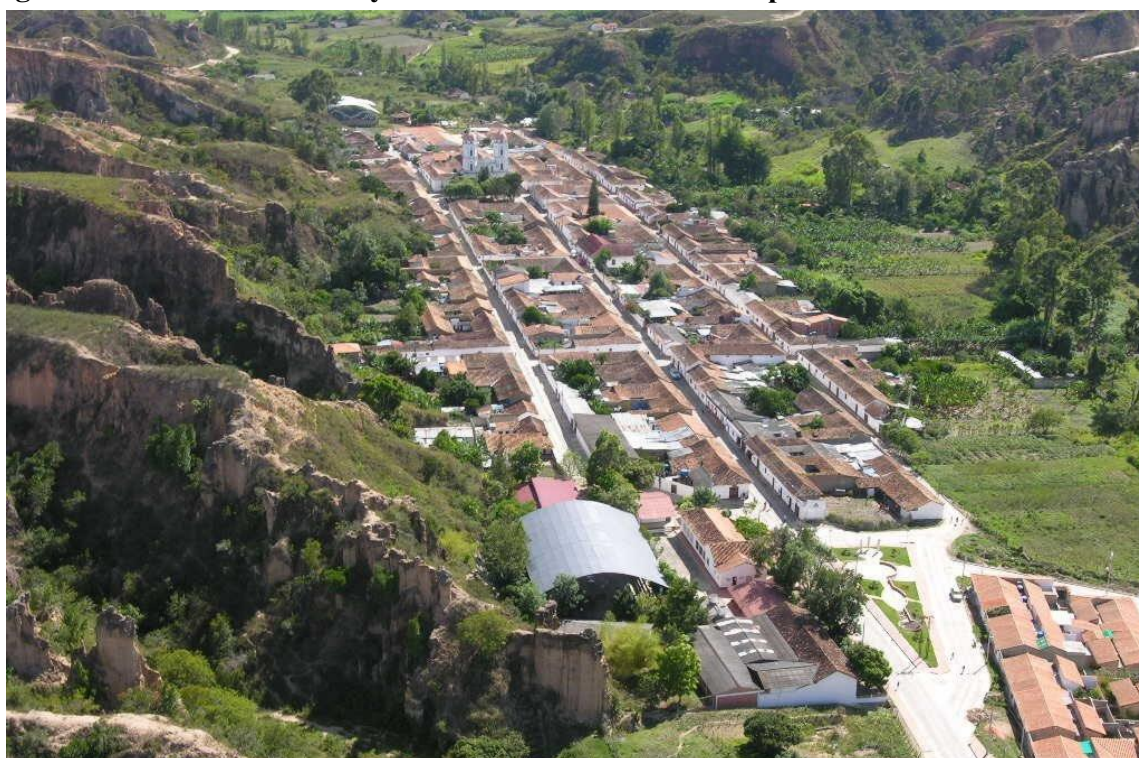
---

<sup>226</sup> La Ley 788 de 2002 (diciembre 27): “*Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones*”, atrajo inversión extranjera directa al sector de hoteles, restaurantes y comercio, siendo el año 2011, el año de mayores ingresos cercanos a los 2500 millones de dólares.



En la misma línea, el turismo cultural se comprende como un fenómeno social con la interacción y complementariedad de dos procesos: la turisficación del territorio “patrimonial” y la dialógica relacional entre sus actores (Pérez, 2018). El primero obedece a la creación de una estética, imágenes e imaginarios producto de la visibilidad otorgada a un territorio desde la declaratoria como monumento o bien de interés cultural. Desde el aspecto jurídico y el segundo proceso, parte de la interrelación de los foráneos y nativos en un pacto de mutuo beneficio con el fin de crear el flujo de experiencias para la construcción de un territorio turístico. La aceptación y comprensión del entorno natural, patrimonial, histórico, gastronómico y social por parte de turista se categoriza dentro de la inmersión en la cultura local, en la comprensión de la atracción de los factores que producen la experiencia del turismo cultural (Pérez, 2018).

**Figura 4.5 Panorámica la Playa de Belén – Santander- “Un pesebre viviente”**



Fuente: Imagen tomada de RCN Radio

El fomento estatal del turismo es producto de la aceptación y adaptación de las disposiciones de organismos internacionales, que aportaron a la generación de un ambiente propicio que motiva la conformación de la Red de Pueblos Patrimonio (RPP), con la migración del turismo monumental al turismo patrimonial (Pérez, 2018, p. 459). Son referente del primero las condiciones naturales propias de la geografía, los centros históricos declarados se constituyen en una oportunidad. De tal forma, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCIT), crea y lleva a cabo el Primer Congreso de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia en

Santafé de Antioquia entre el 29 y 30 de agosto de 2010, en el hotel Mariscal Robledo de dicha población. El objetivo del congreso era presentar la RPP, su marco conceptual, el avance del diagnóstico e integrar alternativas y estrategias para su desarrollo, consolidación y sostenibilidad.

La Red de Pueblos Patrimonio se constituye inicialmente con 10 centros históricos seleccionados de los 44 declarados BIC, bajo la convicción que *“la cultura e identidad de nuestros pueblos están llamadas a tener una profunda relación con el desarrollo económico. Por eso, debemos seguir trabajando para consolidar nuestro patrimonio como producto turístico para el progreso de las regiones”* (MINCIT, 2011). La integración de los pueblos patrimonio pioneros de la Red son Barichara, Honda, Monguí, La Playa de Belén, Salamina, San Juan de Girón, Santa Cruz de Lorica, Santa Cruz de Mompox, Santa Fe de Antioquia y Villa de Leyva (Fontur, 2019). La integración como Pueblo Patrimonio posterior al año 2014, es posible después de superar la candidatura y selección previo cumplimiento de los requisitos determinados inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y desde el año 2012 con el acompañamiento del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) para obtener el respaldo, acompañamiento, inversión y promoción: Los requisitos son los siguientes:

- a. Tener una declaratoria como monumento nacional o Bien de Interés Cultural del orden nacional.
- b. Voluntad y empatía política de las autoridades municipales, principalmente del alcalde, Consejo Municipal, Secretaría u Oficina de Turismo y agremiaciones representativas locales para participar en el diagnóstico, planeación, propuesta de inversión, adecuación y fortalecimiento del turismo local. Inscrita dentro del ordenamiento territorial y política local. En ese sentido, se debe formular, aprobar y adoptar un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico financiado por la RPP a través de Fontur (MINCIT, 2017).
- c. La regularización del gremio turístico local con la inscripción al Registro Nacional de Turismo, mediante la certificación de la solvencia, capacidad y seguridad de los operadores. Cumplimiento de la legislación propia del sector, normas técnicas nacionales conducentes a la certificación como Destino Turístico Sostenible, reconocimiento a la capacidad de adaptación y comprensión de las necesidades locales ajustado a las proyecciones del —Plan Estratégico y de Negocios de Turismo Cultural del MINCIT.
- d. Supervigilancia y actitud participativa de los gremios, autoridades locales en las capacitaciones regionales, convocatorias anuales o encuentros de la Red de Pueblos Patrimonio (RPP), sobre temáticas relacionadas con técnicas de comercialización turística, regulación y actualización en varias dimensiones. Compartir sus experiencias con expertos internacionales representantes de programas, redes o agremiaciones de pueblos históricos turísticos, la igual que fomentar el seguimiento, evaluación y

retroalimentación de los planes y programas de desarrollo turístico local de acuerdo con las dinámicas propias del sector.

- e. Participación en las convocatorias organizadas o promovidas por la RPP. Presencia dinámica en ferias, vitrinas turísticas regionales, nacionales e internacionales con el fin de fomentar la divulgación mediante la historia, la cultura local y regional, la gastronomía auténtica, la arquitectura y el urbanismo de los pueblos integrados a la red.
- f. Una vez aceptado como pueblo patrimonio debe cooperar en el fortalecimiento de la RPP, mediante la adopción de las estrategias, capacitaciones, encuentros, difusión de experiencias a partir de la aplicación de las bases, lineamientos estratégicos, oportunidades y líneas de negocio existentes para el estímulo del turismo en pro de la economía local y el posicionamiento regional de actividades conexas a la experiencia del turista (MINCIT, 2017).

Adicional a los criterios anteriores, el alcalde municipal debe verificar al momento de solicitar a Fontur el registro de su municipio a la Red Turística de Pueblos Patrimonio, los siguientes requisitos:

- a. Hacer parte de las listas de Bienes de Interés Cultural – BIC del Ministerio de Cultura de acuerdo con los criterios del Decreto 2358 de 2019.
- b. No ser capital de departamento.
- c. No tener una población superior a 150.000 habitantes.
- d. El turismo debe ser considerado por la entidad territorial como eje de desarrollo económico, por lo cual debe estar incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto de la respectiva entidad.
- e. En caso de que el Plan de Desarrollo Turístico del Departamento mencione taxativamente una lista de municipios turísticos, el municipio solicitante deberá estar incluido dentro del plan departamental de turismo.
- f. Ahora bien, si en el Plan de Desarrollo Turístico del Departamento no se menciona ningún municipio no se requiere cumplir el requisito.
- g. Contar con un producto turístico ya identificado que se esté desarrollando en el municipio (Fontur, 2017).

Son referente e inciden en la configuración de los Pueblos Patrimonio de Colombia las experiencias internacionales de naciones de América Latina. La de mayor presencia regional es el Programa Pueblos Mágicos de México, promovido por la Secretaría de Turismo, que *“busca orientar el turismo cultural, con intención de valorar determinados destinos y potenciar el desarrollo local”*. La estrategia busca fomentar el turismo cultural como alternativa al *“típico de sol y playa”*, con la intención de promocionar pequeños asentamientos distinguidos por alguna o varias peculiaridades, *“calificadas a partir de un halo mágico, sea este producto del paisaje, la naturaleza, la historia, las leyendas, las tradiciones, anécdotas o acontecimientos o bien de personajes reales o inventados”* (López et al; 2015, p. 9). El Programa de Pueblos



Mágicos surge en el año 2001 durante el primer gobierno federal del presidente Vicente Fox (2000-2006), con la nominación de los municipios de Huasca de Ocampo, Hidalgo, Real de Catorce y San Luis Potosí, hasta llegar a 43 a finales del año 2011. Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) el número de pueblos ascendió a 83, distribuidos en todos los estados de México (López et al., 2015). En el año 2021 el número de pueblos mágicos asciende a 132.

**Figura 4.6 Panorámica Centro Histórico de Honda –Tolima - “La ciudad de los puentes”**



Fuente: Imagen tomada de Wikipedia autoría de Camilo Galeano

### 4.1.3.1 Estado de la Red Turística de Pueblos Patrimonio

El propósito de la Red Turística de Pueblos Patrimonio (RTPP) es, en principio, potenciar el patrimonio cultural colombiano para ser valorado y apreciado mediante el turismo, el cual, supone la generación de oportunidades para el desarrollo y sostenibilidad de sus comunidades. Sin embargo, este propósito induce condiciones adversas para el objetivo de la conservación y protección del patrimonio, especialmente para la permanencia de las comunidades autóctonas, donde subyacen las memorias y prácticas materiales e inmateriales, según Castillo (2021).

**Figura 4.7 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y ocupación hotelera en el año 2019**



Fuente: Elaboración propia con base a imagen del Diario La República

Se presenta como un logro el incremento en la ocupación hotelera en los municipios vinculados a la RTPP, con ocasión de la construcción, dotación y operación de edificaciones para esta actividad que cuenta con el fomento de la política nacional mediante exención de impuestos durante 30 años para este tipo de inversiones<sup>227</sup>, desde el momento de la operación e inicio de la

<sup>227</sup> Artículo 1, Renta exenta en servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles, Decreto 463 de 2016 (marzo 16).



construcción antes del 31 de diciembre del año 2017. Con resultados parciales en el aumento de 32000 habitaciones nuevas – Figura 37-. Otras consecuencias derivadas del fomento del turismo cultural en los pueblos patrimonio, es el incremento de actividades y festivales estratégicamente programados los fines de semana con puente festivo<sup>228</sup>, a las que se suman los atractivos propios del municipio como templos, casas de la cultura, museos, parques, alamedas y pasajes, no siendo suficiente los eventos tradicionales como la semana santa, fiestas patronales que hacen parte del portafolio disponible para turistas.



Una vez superado los atributos de la arquitectura y el urbanismo local, se incluyen actividades turísticas localizadas en inmediaciones al pueblo patrimonio, lo que desborda la capacidad física del municipio con centro histórico. La experiencia rural se compone de expediciones e interacción en los atractivos naturales, la oferta de deportes extremos y en algunos casos, inmersión en las actividades productivas locales o cultivos típicos como el café y la caña de azúcar. A lo anterior, la construcción de parques mecánicos, infraestructura para actividades temáticas, contemplación de aves en parques y santuarios de flora y fauna amplían la oferta al turismo cultural y natural. Al superarse la escala local e inmediata al pueblo patrimonio, la instalación de nuevas atracciones son construidas en poblaciones cercanas que no cuentan con restricción normativa y el apoyo de autoridades locales lo hace propicio para inversionistas y cadenas hoteleras, además de construcción de edificios de apartamentos destinados a la renta temporal. De esta manera, el contexto regional absorbe y asume parte de la carga del turismo con el sacrificio de costumbres locales, pérdida de otros patrimonios tradicionales de manera colateral en la promoción y fomento del “turismo cultural masivo” (Álvarez, 2021).

Después de tres años de la creación de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, había realizado inversiones por cerca de 19 millones de dólares de la época en los 16 municipios integrados hasta ese momento, destinados a proyectos de promoción, competitividad, infraestructura, construcción y dotación de Puntos de Información Turística. Además de coordinar obras de infraestructura como adecuación vial, algunas en estado avanzado de ejecución y otras en etapa de diseño (Mintic, 2013). Lo anterior se debe agregar la adecuación de acceso a internet gratuito en áreas públicas, la dotación y capacitación de la policía de turismo, guías locales y el fomento de una cultura de atención al turista como agente transformador del desarrollo. La creación de una imagen característica de cada municipio de la red turística mediante un lema, un itinerario turístico centrado en la exaltación del patrimonio cultural, soportado en los escenarios dispuestos por la arquitectura y el urbanismo local como atractivo principal. La escenificación y encuadre del patrimonio cultural hace de los pueblos patrimonio un activo ajustado a los imaginarios de la economía global y el desarrollo. Además de ser productos ajustados a la necesidad y velocidad de la imagen, especialmente la de circulación por redes sociales. En las tablas siguientes, se caracterizan los 18 pueblos que hace parte de la RTPP:

---

<sup>228</sup> Hace referencia al descanso remunerado en 18 días festivos al año, para trabajadores del sector público y privado, distribuidos a lo largo del año, determinados por la Ley 52 de 1983 (diciembre 6), conocida como la Ley Emiliani, en referencia al autor de la propuesta Raimundo Emiliani Román.

**Tabla 4.02 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: Aguadas, Barichara, Ciénaga y El Jardín**

	<b>Pueblo Patrimonio desde 2012</b>	<b>Pueblo Patrimonio desde 2010</b>	
	Población: 20619 Hab.	Población: 6959 Hab.	
	Declaratoria: Resolución 1883 de 2001	Declaratoria: Decreto 1654 de 1978	
	Reglamentación: Sin reglamentación	Reglamentación: Resolución 038 de 1994 / Acuerdo 02 de 1994.	
	EOT: Acuerdo 080 de 2000	EOT: Acuerdo No. 014 de junio 25 de 2003	
PEMP: Resolución 1883 de 2001	PEMP: Resolución 688 de 2015 (marzo 20). Diario oficial No. 49499 mayo 2 de 2015		
<b>Atractivos:</b> Casa de la Cultura “Francisco Giraldo”, Pueblito Viejo, Templo de la Inmaculada Concepción, Templo de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Parque de Los Fundadores y Parque de Bolívar.		<b>Atractivos:</b> Templo de la Inmaculada Concepción y San Lorenzo Martin, Capilla de Santa Bárbara, Casa de la Cultura “Emilio Pradilla González”, Calle Real, Cementerio, Puente Grande, Camino de Guane y Parque Nacional del Chicamocha.	
<b>AGUADAS</b> (Caldas) “La ciudad de las brumas”		<b>BARICHARA</b> (Santander) “El pueblito más lindo de Colombia”	
<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Junio: Fiestas de San Antonio de Arma. Julio: Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Agosto: Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Octubre: Encuentro Nacional de Escritores Aguadeños y Festival Equino. Noviembre: Fiestas de la Iraca y Encuentro Nacional de Danzas. Diciembre: Fiestas Patronales de la Inmaculada Concepción		<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Enero: Día del Patrimonio Cultural “Patiamarillo” › Febrero: Día de la Virgen de la Piedra › Agosto: Día de San Lorenzo Mártir, “Patrono de Barichara” › Septiembre: Festival de Cine Verde de Barichara › Octubre: Ferias y Fiestas Culturales de la Solidaridad y el Retorno. › Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción y Día de Santa Lucía.	
	<b>Pueblo Patrimonio desde 2012</b>	<b>Pueblo Patrimonio desde 2012</b>	
	Población: 105807 Hab.	Población: 13345 Hab.	
	Declaratoria: Decreto 2021 de 1996	Declaratoria: Decreto 1132 de 1985	
	Reglamentación: Resolución 013 de 1995 / Acuerdo 027 de 1993	Reglamentación: Acta 12 de 1990 / Acuerdo 048 de 1990	
	POT: Acuerdo 024 de 2001	EOT: Acuerdo 648 de 1999	
PEMP: Resolución 1927 de 2020	PEMP: Fase I Diagnóstico		
<b>Atractivos:</b> Parque centenario, Tempete Municipal, Palacio Municipal, Casa de Balcones o Balcón Colonial, Cementerio de San Miguel, Casa del Diablo, Aguas Termales “El Volcán”, Ciénaga Grande de Santa Marta		<b>Atractivos:</b> Parque El Libertador, Basílica Menor de la Inmaculada Concepción.	
<b>CIÉNAGA</b> (Magdalena) “Capital del realismo mágico”		<b>EL JARDÍN</b> (Antioquia) “El pueblo más bonito de Antioquia”	
<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Enero: Festival Nacional del Caimán Cienaguero. › Abril: Festival Nacional de Música con Guitarra “Guillermo de Jesús Buitrago” › Mayo: Concurso Nacional de Danzas Folclóricas. › Junio: Fiestas Patronales de San Juan Bautista. › Julio: Muestra Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas Trietnia. › Noviembre: Desfile Conmemorativo de la Batalla de Ciénaga		<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Enero: Cabalgata de Los Reyes Magos y Festival de la Rosa (cada 2 años). › Mayo: Celebración de la Fundación de El Jardín. › Julio: Festival de Cine. › Octubre: Cabalgata de la Solidaridad. › Noviembre: Banquete de la Caridad. › Diciembre: Fiestas Patronales en Honor a la Virgen.	

Fuente: Elaboración propia con base a la Guía RTPPC (Fontur, 2021)

**Tabla 4.03 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: El Socorro, Guadalajara de Buga, Honda y Jericó**

	<b>Pueblo Patrimonio desde 2014</b>	<b>Pueblo Patrimonio desde 2013</b>	
	Población: 31231 Hab.	Población: 114053 Hab.	
	Declaratoria: Decreto 264 de 1963	Declaratoria: Ley 163 de 1959	
	Reglamentación: Sin reglamentación	Reglamentación: Resolución 015 de 1995/ Acuerdo 109 de 1997	
	PBOT:	PBOT: Acuerdo 068 de 2000	
	PEMP: Fase I Diagnóstico	PEMP: Resolución No. 0304 de 2010. Febrero 20. Diario oficial No. 47659	
<b>Atractivos:</b> Capitolio del Estado, Basílica Nuestra Señora del Socorro, Parque del Independencia, Casa de la Cultura		<b>Atractivos:</b> Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga, Parque José María Cabal, Casa de la Cultura “Luciano Rivera y Garrido”, Academia de Historia Leonardo Tascón, Teatro Municipal “Ernesto Salcedo Ospina”, Palacio de Justicia, Destino Verde, Destino Paraíso, Parque Natural Regional El Vínculo, Reserva Natural La Isleta.	
<b>EL SOCORRO (Santander)</b> “La muy noble y leal villa del Socorro”		<b>GUADALAJARA DE BUGA (Valle del Cauca)</b> “La ciudad señora de Colombia”	
<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Marzo: Celebración de Semana Santa e Insurrección Comunera. › Junio: Fiesta de Nuestra Señora del Socorro. › Julio: Celebración de la Independencia del Socorro. › Septiembre: Concurso de la Canción Inédita “José A. Morales” › Octubre: Concurso Nacional de Bandas Marciales. › Noviembre: Ferias y Fiestas Ganaderas Comerciales.		<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Marzo: Celebración de Semana Santa y Exposición Filatelia. › Abril: Festival Infantil de Música Mensaje y Encuentro de Poesía Club de Leones. Mayo/Junio: Festival Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas. › Julio: Feria Exposición Nacional Agropecuaria de Guadalajara de Buga. › Septiembre: Rogativas al Señor de los Milagros. Noviembre: Encuentro Internacional de Contadores de Historias.	
	<b>Pueblo Patrimonio desde 2010</b>	<b>Pueblo Patrimonio desde 2013</b>	
	Población: 23590 Hab.	Población: 11679 Hab.	
	Declaratoria: Decreto 1192 de 1997	Declaratoria: Ley 163 de 1959	
	Reglamentación: Decreto 165 de 1995	Reglamentación: Resolución No. 015 de 1995	
	PBOT: Acuerdo 40 de 2000	POT: Acuerdo 068 de 2000	
	PEMP: Resolución 217 de 2017 (febrero 3) Diario Oficial No. 50.283 de 3 de julio de 2017	PEMP: Resolución 304 de 2010 (febrero). Diario oficial No. 47659	
<b>Atractivos:</b> Puente Navarro, Puente López, Plaza Municipal de Mercado, Paseo Bolívar, Barrio Alto del Rosario, Museo del Río Magdalena, Calle de las Trampas,		<b>Atractivos:</b> Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, Museo de Arte Religioso, Calle “100 escalas”, Morro El Salvador, Ecoparque de Las Nubes, Río Piedras.	
<b>HONDA (Tolima)</b> “La ciudad de los puentes”		<b>JERICÓ (Antioquia)</b> “La Atenas del Suroeste”	
<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Enero: Carnaval de la Subienda. › Marzo/Abril: Celebración de Semana Santa. › Junio: Fiestas de San Pedro y Festival de Verano. › Agosto: Ronda de San Bartolomé y Celebración de Erección en Villa.		<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Marzo/Abril: Celebración de Semana Santa. › Mayo: Día Institucional de Santa Laura de Jericó. › Julio: Festival Internacional de la Poesía. › Agosto: Festival de la Cometa y Dulzura, Fiestas del Sagrado Corazón de María. Festival Internacional de Teatro. › Septiembre: Fiestas Patronales de la Virgen de Las Mercedes.	

Fuente: Elaboración propia con base a la Guía RTPPC (Fontur, 2021)

**Tabla 4.04 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: La Playa de Belén, Villa de Guaduas, Monguí y Salamina**

	<b>Pueblo Patrimonio desde 2010</b> Población: 8567 Hab. Declaratoria: Resolución 0928 de 2005 Reglamentación: PBOT: PEMP: Resolución No. 1815 de 2015. Junio 23.	<b>Pueblo Patrimonio desde 2010</b> Población: 41838 Hab. Declaratoria: Ley 163 de 1959 Reglamentación: Resolución 021 de 1997 PBOT: Acuerdo 036 de 2000 PEMP: Fase II Formulación	
<b>Atractivos:</b> Plaza Principal o Parque Ángel Cortés, Templo San José, Cementerio, Mirador de Santa Cruz, Los Estoraques, Los Aposentos.		<b>Atractivos:</b> Plaza de La Constitución, Casa Museo del Virrey Ezpeleta, Catedral San Miguel Arcángel, Casa de Policarpa Salavarrieta Casa Real, Museo de Artes Tradicionales Patio del Moro, Casa Consistorial, Convento La Soledad, la Piedra Capira, Camino Real, Monumento a José Antonio Galán e Inspección Guaduoero	
<b>LA PLAYA DE BELÉN</b> (Norte de Santander) “Un pesebre viviente”		<b>VILLA DE GUADUAS</b> (Cundinamarca) “Tierra de Virreyes y Tierra de Policarpa Salavarrieta”	
<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Marzo/Abril: Celebración de Semana Santa. › Junio: Fiesta de San Antonio de Padua. › Julio: Fiestas de la Virgen del Carmen. › Septiembre: Fiestas de la Virgen de las Mercedes. › Noviembre: Fiestas de Santa Catalina de Alejandría. › Diciembre: Festival del Retorno y Cumpleaños de La Playa de Belén.		<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Enero: Fiesta del Natalicio de La Pola. › Marzo/Abril: Celebración de Semana Santa. › Julio: Baile de Cintureras. › Septiembre: Celebración de la Ronda de la Virgen del Buen Suceso. Feria Comercial, Ganadera y Exposición Equina Grado B. › Diciembre: Celebración del Fin de Año Guaduoero	
	<b>Pueblo Patrimonio desde 2010</b> Población: 4981 Hab. Declaratoria: Resolución 0087 de 2005 Reglamentación: Sin reglamentación PBOT: Acuerdo 007 de 2004 PEMP: Fase I Diagnóstico	<b>Pueblo Patrimonio desde 2010</b> Población: 15090 Hab. Declaratoria: Resolución 0087 de 2005 Reglamentación: Resolución 027 de 1994 PBOT: Acuerdo 025 de 2001 PEMP: Resolución 127 de 2017	
<b>Atractivos:</b> Plaza principal, Basílica Menor de Nuestra Señora de Monguí, Conventos de los Franciscanos, Capilla de San Antonio, Puente Real de Calicanto, Peña de Otí, Páramo de Ocotá, Cascada La Virgen.		<b>Atractivos:</b> Parque Simón Bolívar, Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, Casa del Degüello, Cementerio La Valvanera, Casa de la Cultura “Rodrigo Jimenez Mejía”	
<b>MONGUÍ</b> (Boyacá) “El pueblo más lindo de Boyacá”		<b>SALAMINA</b> (Caldas) “La ciudad de la luz”	
<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Marzo/Abril: Celebración de Semana Santa. › Mayo: Celebración de la Virgen. › Junio: Fiestas del Sagrado Corazón. › Agosto: Fiestas del Tránsito. › Septiembre: Fiesta de Integración Familiar y Fiesta de la Virgen de Monguí. › Octubre: Festival del Balón.		<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Marzo/Abril: Celebración de Semana Santa. › Junio: Exposición Equina Grado B. › Octubre: Tarde de María La Parda. › Noviembre: Fiestas de la Inmaculada Concepción, “Patrona de Salamina” › Diciembre: Noche de Fuego a Salamina y San Félix. Fiestas del Aire.	

Fuente: Elaboración propia con base a la Guía RTPPC (Fontur, 2021)



**Tabla 4.05 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: San Juan de Girón, Santa Cruz de Lorica, Santa Cruz de Mompo y Santa Fe de Antioquia**

	<b>Pueblo Patrimonio desde 2010</b>	<b>Pueblo Patrimonio desde 2010</b>	
	Población: 206005 Hab.	Población: 121793 Hab.	
	Declaratoria: Decreto 264 de 1963	Declaratoria: Resolución 769 de 2000	
	Reglamentación: Sin reglamentación PBOT:	Reglamentación: Acuerdo 007 de 1994 POT: Acuerdo 042 de 2011	
	PEMP: Fase II Formulación municipio	PEMP: Resolución No. 2770 de 2010. Diciembre 15. Diario Oficial No. 48018.	
<b>Atractivos:</b> Mansión del Fraile, Malecón Turístico, Alameda Las Nieves, Quebrada Nuestra Señora de Las Nieves, Cañon de Las Iguanas, Vereda San José de Motoso		<b>Atractivos:</b> Plaza de Mercado, Plaza del Pastelillo, Edificio Afife Matuk, edificio González, Edificio La Isla, Malecón La Muralla.	
<b>SAN JUAN GIRÓN (Santander)</b> “La ciudad blanca”		<b>SANTA CRUZ DE LORICA (Córdoba)</b> “Tierra de aguas encontradas”	
<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Enero: Celebración de Cumpleaños del Municipio. › Marzo/Abril: Celebración de Semana Santa. › Julio: Conmemoración a la Independencia de Girón. › Agosto: Día de Nuestra Señora de las Nieves. › Septiembre: Día del Señor de los Milagros, Día Mundial del Turismo. › Octubre/Noviembre: Concurso de Fachadas, Puertas y Ventanas.		<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Febrero: Carnavales, Corregimiento Palo de Agua. › Mayo: Día de la Santa Cruz y Festival Cultural del Sinú. › Junio: Festival del Campesino, Vereda las Estancias. › Julio: Fiesta de la Virgen del Carmen. › Octubre: Feria Artesanal en San Sebastián y Festival del Arroz. › Noviembre/Diciembre: Festival de Canotaje y Festival de la Chicha.	
	<b>Pueblo Patrimonio desde 2010</b>	<b>Pueblo Patrimonio desde 2010</b>	
	Población: 45706 Hab.	Población: 25395 Hab.	
	Declaratoria: Ley 163 de 1959	Declaratoria: Ley 163 de 1959	
	Reglamentación: Resolución 039 de 1994 / Acuerdo 01 de 1994 PBOT: Acuerdo 032 de 2001	Reglamentación: Resolución 042 de 1994 / Acuerdo 021 de 1994 PBOT: Acuerdo 010 de 2000	
	PEMP: Resolución 2378 de 2009. Noviembre 17. Diario oficial No. 47609	PEMP: En trámite de resolución	
<b>Atractivos:</b> Plaza Fundacional de La Concepción, Antiguo Mercado, Palacio Municipal, Cementerio, Iglesia de Santa Bárbara, Parque Lineal Bosque Santander.		<b>Atractivos:</b> Plaza Mayor Simón Bolívar, Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción, Templo de Santa Bárbara, Iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Puente Colgante de Occidente, Casa Negra.	
<b>SANTA CRUZ DE MOMPOX (Bolívar)</b> “La tierra de Dios”		<b>SANTA FE DE ANTIOQUIA (Antioquia)</b> “La ciudad madre”	
<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Febrero: Carnaval de Mompox y Fiestas de la Virgen de la Candelaria. › Marzo/Abril: Celebración de Semana Santa. › Junio: Maratón Turística Ayapel. › Julio: Fiestas de la Virgen del Carmen. › Septiembre/ Octubre: Mompox Jazz Festival. › Diciembre: Fiestas de la Inmaculada Concepción.		<b>Eventos Ferias y Fiestas:</b> Enero: Fiestas del Río Tonusco. › Marzo/Abril: Celebración de Semana Santa. › Agosto: Celebración de la Independencia de Antioquia y Fiestas del Tamarindo. › Septiembre: Festival de Fotografía. › Octubre: Festival “Antioquia le canta a Colombia”. › Diciembre: Efemérides de Santa Fe de Antioquia, Festival de Cine y Video.	

Fuente: Elaboración propia con base a la Guía RTPPC (Fontur, 2021)



**Tabla 4.06 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: Villa de Leyva y San José de Pore**

	<b>Pueblo Patrimonio desde 2010</b>	<b>Pueblo Patrimonio desde 2021</b>	
	Población: 19171 Hab.	Población: 7912 Hab.	
	Declaratoria: Decreto 364 de 1954 / Ley 163 de 1959	Declaratoria: Ley 936 de 2004 (julio 30 de 2004)	
	Reglamentación: Resolución 785 de 1998/ Mod. Dic. 1999	Reglamentación: Sin reglamentación	
	PBOT: Acuerdo No. 021 de 2004.	PBOT:	
	PEMP: Resolución 2407 de 2020 (30 noviembre de 2020)	PEMP: Resolución No.3914 de 2014. Diciembre 12. Diario Oficial No. 49389.	
<b>Atractivos:</b> Plaza Mayor, Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Casa Museo de Nariño, Plaza de Ricaurte, Calle Caliente, Museo El Carmen, Museo El Fósil, Parque Arqueológico de Moniquirá “El Infiernito”.		<b>Atractivos:</b> Ruinas de la Cárcel e iglesia.	
<b>VILLA DE LEYVA</b> (Boyacá) “Un museo viviente”		<b>SAN JOSÉ DE PORE</b> (Casanare) “Germen de la libertad de los llanos”	
<b>Eventos, Ferias y Fiestas:</b> Enero: Festival Astronómico. › Marzo: Encuentro de Música Antigua Romería Cultural. › Mayo: Encuentro Saberes y Sabores. › Julio: Ferias y Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen. › Agosto: Festival del Viento y las Cometas. › Octubre: Festival Nacional del Árbol		<b>Eventos, Ferias y Fiestas:</b> Marzo: Fiestas en honor al patrono, San José de Pore. › Noviembre: Festival del Plátano, Festival del Mango. › Todo el año: Mercado de Plaza, Toros coleados, Lazo Criollo, Team Peanning.	

Fuente: Elaboración propia con base a la Guía RTPPC (Fontur, 2021; DANE, 2021)

**Figura 4.8 Panorámica Centro Histórico de la ciudad de Tunja (Boyacá)**



Fuente: Imagen tomada de El informante noticias

## 4.2 Del PEP al PEMP: la gestión como proyecto

El origen del Plan Especial de Protección (PEP) encuentra en dos vertientes su procedencia como instrumento dedicado a la planeación, gestión y manejo de la salvaguarda del patrimonio cultural. En lo referente al patrimonio material inmueble donde se inscribe el patrimonio urbano. Por una parte, la deuda heredada con relación a la concreción de un mecanismo exclusivo y efectivo de protección de las áreas urbanas reconocidas monumento nacional de formulación obligatoria para las entidades territoriales contenedoras de las zonas históricas declaradas, toda vez que esta función fue delegada al plan urbano, códigos de régimen municipal antes del año 1997 y recientemente al ordenamiento territorial (Morcillo, 2009). Cabe mencionar la reglamentación de los centros históricos, cuyo carácter era voluntario para las entidades administrativas a cargo de su protección. En la reunión de directores de patrimonio de América Latina y el caribe en Cartagena de Indias en el año 1995, se hacía visible que la *“mayoría de los países de la región han identificado como una de sus necesidades el contar con recursos, no solamente para realizar estudios que permitan diseñar políticas de conservación específicas”*, así como planes de protección de las áreas declaradas a tan solo 5 años del cambio de siglo ratificando de esta forma una trayectoria aparente del patrimonio cultural, relegada a legislaciones de mediados de siglo. Sin constituir una política pública consistente y comprometida con una idea de salvaguarda para el patrimonio nacional (Lombardi, 1994, p. 45).

Desde el año 1997, con el cambio de denominación de los inmuebles de conservación arquitectónica y urbanística, declarados monumento nacional hasta entonces, con la nueva nomenclatura se denominan Bien de Interés Cultural (BIC) <sup>229</sup>, logrando tan sólo esto, toda vez que se mantuvo la normativa vigente desde la Ley 163 de 1959 y su decreto reglamentario (Morcillo, 2009, p. 565). Es evidente la ausencia reiterada de la definición de una estrategia para los centros históricos declarados, obligación delegada a las autoridades municipales e iniciativas inconclusas como el subprograma de Inventarios del Patrimonio Inmueble que hace parte del Programa V: Protección, investigación y difusión del patrimonio, donde se encuentra el Proyecto: Reglamentación de los centros históricos (Colcultura, 1992, p. 58). Cuyo resultado a partir de la publicación en 1991 del Manual para la Reglamentación de Sectores Urbanos Antiguos, fue la reglamentación de 17 centros históricos declarados monumento nacional de Colombia (Pizano, 1995, p.7). Es importante resaltar que, dentro del régimen para los BIC, en el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, se esboza el Plan de Protección con una introducción general, pero sin definir en profundidad su propósito, como efectivamente si lo realiza el Decreto 763 de 2009, doce años después.

---

<sup>229</sup> *“...Los bienes declarados monumentos nacionales con anterioridad a la presente ley, así como 105 bienes integrantes del patrimonio arqueológico, serán considerados como bienes de interés cultural. También podrán ser declarados bienes de interés cultural, previo concepto del Ministerio de Cultura, aquellos bienes que hayan sido objeto de reconocimiento especial expreso por las entidades territoriales...”* Parágrafo 1, artículo 4, Título II patrimonio cultural de la Nación, Ley 397 de 1997 (agosto 07).

La ausencia de un instrumento para la protección de las áreas históricas obedece en parte al estado de la legislación para el patrimonio cultural, antes del año 1997. La Constitución Política de Colombia de 1991 determina el horizonte de la política pública para la cultura, acentuando las deficiencias de los mecanismos para la preservación del patrimonio inmueble en relación con la dimensión urbanística y arquitectónica. Debido al estado esquemático conceptual para la salvaguarda de los sectores urbanos, se identifica el aprovechamiento de la experiencia europea sobre la intención de intervenir realidades urbanas mediadas por la valoración ambiental y el centro histórico (Salazar et al., 1989, p. 68-70). El referente más significativo es el plan para la edificación económica y popular – centro histórico para la ciudad de Bolonia de 1973. La influencia de la cultura europea en la concepción y estructuración de los instrumentos de planeación y gestión para el patrimonio urbano orienta al PEP como el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), en el sentido del plan y la norma hacia el proyecto y la interpretación de las problemáticas urbanas contemporáneas. Ambas posiciones instrumentales se complementan y procuran lo mejor de cada una para proponer la búsqueda de un punto intermedio donde la necesidad del plan y la eficacia del proyecto puedan dialogar en busca del bien común para las áreas históricas objeto de su aplicación. Es evidente la presencia del modelo italiano y español. Con la experiencia del primero, el desarrollo de la visión sobre la capacidad interpretativa enfatiza las condiciones propias de la ciudad histórica como la paramentación, alturas, flexibilidad y materialización (Lombardi, 1995). Ascendencia desde la cual se configuran las líneas generales de la política de protección y los mecanismos derivados para la conservación y salvaguarda del patrimonio urbano.

También la influencia internacional en el origen del PEP agregada a las condiciones anteriores, permite aproximarse al sentido y composición del plan. Es posible observar cuatro manifestaciones determinantes de forma directa, indirecta y por adhesión, a saber: la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural” de 1972, menciona: “... *adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio...*”<sup>230</sup>, al cual se adhiere Colombia en 1983. Por su parte, la Carta de Nairobi de 1976, comprueba “...*que en muchos países falta una legislación suficientemente eficaz y flexible sobre el patrimonio arquitectónico y sus relaciones con el acondicionamiento del territorio...*”. Inscrito dentro de la Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su función en la Vida Contemporánea, donde también sugiere que “... *los Estados Miembros deberían adaptar las disposiciones existentes o, en su caso, promulgar nuevos textos legislativos y reglamentos con objeto de asegurar la salvaguardia de los conjuntos históricos y de su medio...*”, junto a revisión de las “...*leyes relativas a la ordenación del territorio, al urbanismo y a las viviendas, para coordinar y armonizar sus disposiciones con las leyes relativas a la salvaguardia del patrimonio arquitectónico...*”. El fomento, adaptación y “...*adopción de disposiciones en los planos regional o local,*

---

<sup>230</sup> Artículo 5, II. Protección nacional y protección internacional del patrimonio cultural y natural. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural.



*encaminadas a dicha salvaguardia...*”<sup>231</sup>. Cabe resaltar que la Carta de Nairobi de 1976, caracteriza el Plan de Salvaguardia como el instrumento donde

*“...cada conjunto histórico y su medio deberían considerarse globalmente como un todo coherente cuyo equilibrio y carácter específico dependen de la síntesis de los elementos que lo componen y que comprenden tanto las actividades humanas como los edificios, la estructura espacial y las zonas circundantes...”*

El reconocimiento e inclusión de “...las actividades humanas (por modestas que sean), que tienen en relación con el conjunto...”<sup>232</sup>. Establece los alcances del plan de salvaguardia en función de una serie de actividades a realizar y la definición de:

*“...las zonas y los elementos protegidos; las condiciones y las restricciones específicas que les son aplicables; las normas que regulan los trabajos de mantenimiento, de restauración y de mejoramiento; las condiciones generales de instalación de las redes de suministro y de los servicios necesarios para la vida urbana o rural; las condiciones que regirán las nuevas construcciones...”*<sup>233</sup>,

La Carta define la salvaguardia como “...la identificación, la protección, la conservación, la restauración, la rehabilitación, el mantenimiento, y la revitalización de los conjuntos históricos o tradicionales y de su medio...”<sup>234</sup>, expresión inicial de la cual hace parte la protección como componente integral. Colombia participa en la décimo novena reunión celebrada en la ciudad de Nairobi del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976, convocada por Unesco, representada por el delegado Gabriel Betancur Mejía, quien funge de presidente de la Comisión del Programa III (Asuntos de carácter general del programa)<sup>235</sup>. Pero el Estado no se adhiere o reconoce la “*Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o*

---

<sup>231</sup> Parágrafo 3. II Principios generales. Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la vida contemporánea. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 19a reunión, celebrada en la ciudad de Nairobi, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976.

<sup>232</sup> Parágrafo 3. II Principios generales. Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la vida contemporánea. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 19a reunión, celebrada en la ciudad de Nairobi, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976.

<sup>233</sup> Parágrafo 11, IV. Medidas de salvaguardia. Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la vida contemporánea. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 19a reunión, celebrada en la ciudad de Nairobi, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976.

<sup>234</sup> Parágrafo c, I. Definiciones, Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la vida contemporánea. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 19a reunión, celebrada en la ciudad de Nairobi, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976.

<sup>235</sup> Gabriel Betancur Mejía (1918-2002), era embajador de Colombia ante la Unesco, donde llegó a ocupar la posición de subdirector General (Unesco, 1977; p.186), Unesco (1977). Resoluciones. Acta de la Conferencia General 19 reunión. Nairobi. Volumen 1. Paris.

*Tradicionales y su Función en la vida contemporánea*”, por ningún medio o acto legislativo. Pero cuya influencia se hace visible hasta la formulación del PEP en la Ley General de Cultura de 1997, con algunos rasgos generales apreciables en las reglamentaciones de los centros históricos del inicio de los años 90, instrumento precursor del PEP, dedicado más a la planeación del conjunto histórico en su intención de suplir una necesidad de la planeación.

Otra influencia internacional determinante en el PEP es la Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas (Carta de Washington 1987), adoptada por la Asamblea General de ICOMOS<sup>236</sup>, la cual determina:

*“...concierne a los núcleos urbanos de carácter histórico, grandes o pequeños, comprende todo tipo de poblaciones (ciudades, villas, pueblos, etc.) y, más concretamente, los cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales, u otras zonas que posean dicho carácter, con su entorno natural o hecho por el hombre...”*<sup>237</sup>

Se identifica que la conservación de las “poblaciones o áreas urbanas históricas sólo puede ser eficaz si se integra en una política coherente de desarrollo económico y social, y si es tomada en consideración en el planeamiento territorial y urbanístico a todos los niveles”<sup>238</sup>. Mientras la Carta de Nairobi propone un Plan de Salvaguardia (1976), la Carta de Washington (1987), sostiene que la “...planificación de la conservación de las poblaciones y áreas urbanas históricas debe ser precedida por estudios multidisciplinarios...”. Para ello sugiere como método e instrumento el Plan de Conservación, el cual debe “...definir la principal orientación y modalidad de las acciones que han de llevarse a cabo en el plano jurídico, administrativo y financiero...”, debe comprender “...un análisis de datos, particularmente arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos...”, donde además “...tratará de lograr una relación armónica entre el área urbana histórica y el conjunto de la población...”<sup>239</sup>. Adicionalmente se prevé la elaboración de los planes de ampliación de la red vial, la gestión del riesgo, con especial atención a la “...participación activa e implicar a sus habitantes, se debe realizar un programa de información desde la edad escolar...”, así como facilitar “...las acciones de las asociaciones para la conservación y adoptarse las medidas financieras apropiadas para asegurar la conservación y restauración...”<sup>240</sup>, lo cual integra de manera expresa la gestión y sostenibilidad para garantizar la ejecución del plan.

---

<sup>236</sup> El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) es una organización internacional no gubernamental asociada a la Unesco; dedicada a la promoción de la teoría, metodología y tecnología aplicada a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Su trabajo se basa en los principios consagrados en la Carta Internacional de 1964 sobre la Conservación y la restauración de monumentos sitios, denominada carta de Venecia.

<sup>237</sup> Preámbulo y definición. Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Área Urbanas Históricas (Carta de Washington 1987).

<sup>238</sup> Principios y Objetivos. Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Área Urbanas Históricas (Carta de Washington 1987).

<sup>239</sup> Métodos e Instrumentos. Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Área Urbanas Históricas (Carta de Washington 1987).

<sup>240</sup> Ibidem

De manera directa, es evidente la influencia de la Ley 16/1985 de 25 de junio, Ley del Patrimonio Histórico Español (LPHE), señala que para la:

“...declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el informe favorable de la Administración competente para la protección de los bienes culturales afectados [...] La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa del planeamiento general”<sup>241</sup>

Determina el plan especial de protección asumido de manera similar por la Ley de Cultura en Colombia en 1997. La LPHE estuvo vigente en exclusividad hasta que, en ejecución de sus competencias, las Comunidades Autónomas legislaron sobre la materia, quedando la normativa estatal con carácter complementario y supletorio (Tojo, 2000).

Si bien, las cartas internacionales de Nairobi (1976) y Washington (1987) coinciden en la generación de un plan como medida para la salvaguardia y conservación respectivamente, basados en los ideales de la restauración, provenientes de los discursos de la Carta de Atenas de 1931, la cual se consolida con abundante producción científica y técnica sobre el planeamiento urbanístico. La mayor parte de las teorías evolucionan a la determinación de la zona de histórica en el plano urbano general, mediante el uso de métodos de análisis en varias dimensiones para elaborar un plan de protección y el propio mecanismo urbanístico se encargará de gestionar las zonas más antiguas de la ciudad dentro de la maquinaria general del planeamiento (Cervellatti & Scannavini, 1976 ; Ciardini & Fallini, 1983).

La concepción de los planes de protección en Iberoamérica procede de la idea del deber del Estado de formular legislaciones nacionales que ordenan la obligación de realizar inventarios y conservar los bienes culturales patrimoniales. Además del régimen de tenencia de los monumentos, en ese sentido, las leyes de protección extendieron su cobertura a conjuntos, áreas urbanas, sectores urbanos adyacentes a monumentos, y el entorno ambiental y paisajístico como parte integral del patrimonio (Hardoy & Gutman, 1992, p. 267). En el sentido de alinear sus esfuerzos e integrar los lineamientos de la Convención Internacional de Unesco de 1972. La incertidumbre de materializar las iniciativas legislativas a nivel de un plan de protección de patrimonio cultural, especialmente el inmueble en Iberoamérica permitió observar la importancia del municipio como unidad administrativa institucional en el propósito de la conservación y protección de los centros históricos donde la interdependencia del área histórica y la ciudad en la que se inscribe genera relaciones de diverso orden y complejidad (Álvarez,

---

<sup>241</sup> Inciso 1, Artículo veinte, Título II De los bienes inmuebles, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico español.

2006). La revalorización de la pertinencia del plan de protección en contraposición a la planeación urbana local, desencadenan el debate de los años 90 del siglo pasado sobre la pertinencia de un plan o una estrategia como el mecanismo de integración de la acción para el manejo de las áreas patrimoniales identificadas (Hardoy & Gutman, 1992). Procuran la integración de la planeación local y la conservación como unidad de afectación al desarrollo urbano.

Un consenso operativo que integra la estrategia y la gestión se enmarca en el PEMP. El elemento fundamental de la planeación y el manejo, integra nuevas relaciones entre el espacio patrimonial con contextos ambientales, económicos, turísticos, centrados en la sostenibilidad (Hardoy & Gutman, 1992), y divulgación. La generación de mecanismos de participación, usos y apropiación del patrimonio por parte de la comunidad. Durante los años 90 del siglo pasado, surgen tres pilares sobre los cuales se consolida la *“legitimidad social del patrimonio”*, relacionados con la *“dimensión espacial: la autenticidad, defensa de lo público y apoyo al desarrollo”* (Fernández, 2005). La protección pasiva y en parte restrictiva de la conservación inscrita en las reglamentaciones de los años 90 del siglo pasado, migra a una protección del patrimonio urbano dinámica con elementos integrados para dotar al mecanismo en este caso el plan de protección con la gestión. En una segunda generación del instrumento, le asigna al centro histórico herramientas para matizar componentes competitivos en el mercado económico y funcional dentro de las relaciones del entorno urbano donde se encuentra.

De esta forma, se busca posicionar en igualdad de condiciones el área patrimonial donde las limitaciones implícitas asignadas por la declaratoria abstraen el potencial general de la ciudad, dejando mecanismos selectivos que requieren una interpretación más refinada debido a la exigencia de una porción de ciudad contenida en un perímetro simultaneo de visibilidad y exclusión de oportunidades. Al plan de protección se le ha inducido una serie de transformaciones en parte por la identificación de las limitaciones propias del instrumento para los retos del centro histórico en el contexto urbano. Son determinantes la primera generación - 1997-2009 y la segunda generación 2009-2019 a la cual el Decreto 2358 de 2019 le asigna un nuevo horizonte. Es importante resaltar que el PEP, posteriormente PEMP, es el instrumento mediante que desarrolla el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos, soporte interinstitucional del Estado en un esfuerzo colectivo por saldar la deuda histórica con los centros patrimoniales declarados, de donde surge la duda del tratamiento con los centros históricos que no gozan de una declaratoria como BIC.

#### **4.2.1 Plan Especial de Protección: PEP**

La introducción del Plan Especial de Protección (PEP), se realiza bajo el Régimen para los bienes de interés cultural<sup>242</sup>, previstos en el artículo 11 de la Ley General de Cultural. La definición es la siguiente:

---

<sup>242</sup> Artículo 11, Régimen para los bienes de interés cultural, Título II Patrimonio cultural de la Nación, Ley 397 de 1997 (agosto 07).

*“... Plan especial de protección. Con la declaratoria de un bien como de interés cultural se elaborará un plan especial de protección del mismo por parte de la autoridad competente. El plan especial de protección indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales correspondientes...”<sup>243</sup>*

Sólo hasta el año 2008 se reglamenta su contenido, alcance y ámbito de aplicación. Posterior a la vigencia de la obligatoriedad del PEP dentro del acto jurídico de la declaratoria se reconocen los centros históricos de Barranquilla<sup>244</sup> y Concepción<sup>245</sup> como BIC del ámbito nacional en el año 1999, sin el cumplimiento de esta condición. La necesidad de iniciar la formulación del PEP para los centros históricos declarados lleva al Ministerio de Cultura a realizar un proyecto piloto para activar el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos en el año 2002, con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). E esta formase inicia el proceso de formulación del PEP de los centros históricos de Barranquilla, Santa Marta y Manizales (Mincultura, 2010). Aprobados mediante las siguientes resoluciones:

**Tabla 4.7 Prueba Piloto Plan Especial de Protección**

<b>Ciudad</b>	<b>Resolución</b>	<b>Asistencia del BID</b>	<b>Asistencia de Mincultura</b>
Barranquilla 2002-2005	Resolución No. 0746 de 2005 (junio 21) por el cual se adopta el Plan Especial de Protección del Centro histórico y Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla		Leonor Gómez Hernández Coordinadora de protección- Dirección de Patrimonio, Ministerio de Cultura.
Santa Marta 2002-2005	Resolución No. 1800 de 2005 (diciembre 16), por el cual se establece el Plan Especial de Protección del Centro Histórico del Distrito turísticos, Cultural e Histórico de Santa Marta	Lombardi & Asociati Asesoría Técnica BID Giorgio Lombardi Enrico Fontanari Dora Arizaga Federico Acutto Javier de Marcos	Leonor Gómez Hernández Coordinadora de protección- Dirección de Patrimonio, Ministerio de Cultura.
Manizales (1997-1998)	Resolución No. 0785 de 1998 (julio 319 por el cual se aprueba el Plan Especial de Protección para el Conjunto de		Leonor Gómez Hernández Coordinadora de protección- Dirección de Patrimonio, Ministerio de Cultura.

<sup>243</sup> Inciso 3, Artículo 11 Régimen para los bienes de interés cultural, Título II patrimonio cultural de la Nación, Ley 397 de 1997 (agosto 07).

<sup>244</sup> Resolución No. 1614 de 1999 (noviembre 26): por el cual se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el Centro Histórico de Barranquilla- Atlántico y se delimita su área de influencia”.

<sup>245</sup> Resolución No. 1617 de 1999 (noviembre 26): por el cual se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el Centro Histórico de Concepción- Antioquia y se delimita su área de influencia”.

	Inmuebles de Arquitectura Republicana, localizados en el centro de la ciudad de Manizales, Caldas.		
--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia con base en información de Ministerio de Cultura, Municipios y entidades oficiales

El apoyo de la banca multilateral al Ministerio de Cultura a través de expertos internacionales en temáticas como la participación público-privada, mecanismos y estrategias de gestión para la implementación de proyectos urbanos, proyectos de emprendimiento y desarrollo local asociados a los proyectos de recuperación urbana en el contexto de centros históricos, abordaje de actores sociales relevantes en procesos de revitalización se complementan con la contratación de estudios y análisis técnicos para las intervenciones en la ciudades de Buga, Pamplona y Mompox (Conpes, 2010, p. 10). La declaratoria de Mompox como “Patrimonio de la Humanidad” el 6 de diciembre 1995 por parte de la Unesco (código C-742), se suma a la ciudad de Cartagena de Indias declarada previamente en la misma categoría en noviembre de 1984 (código C-285). Esto anima a las ciudades principales del caribe colombiano a la recuperación de sus áreas patrimoniales. La ciudad de Barranquilla y Santa Marta emprenden proyectos para este fin.

Los contenidos del PEP en su prueba piloto son heterogéneos entre las 3 ciudades objeto de la formulación inicial, no solo en su estructura sino en su propósito y orientación con algunos elementos recurrentes que provienen claramente de la metodología aplicada en Bolonia, “*donde no se reglamenta un plan, sin el conocimiento de la formación y transformación de la ciudad que desea intervenir*” (Lombardi, 1994, p. 155). Aplicado a Brescia, donde Giorgio Lombardi<sup>246</sup> funge como asesor internacional, a partir de la experiencia adquirida como consultor en otras apuestas realizadas en centros históricos de América Latina. Las ciudades de Cartagena “Distrito Turístico y Cultural”, Barranquilla “Distrito Especial, Turístico y Portuario” y Santa Marta “Distrito Turístico, Cultural e Histórico” son designadas distritos especiales por la Constitución Política de 1991 (Ospina, 2015, p. 287). Orienta sus acciones urbanas al desarrollo de escenarios e intervenciones urbanas para el fomento del turismo en las áreas históricas y zonas inmediatas con la dotación hotelera e infraestructura complementaria basada en incentivos fiscales<sup>247</sup>.

<sup>246</sup> Giorgio Lombardi es arquitecto de IUUV de Venecia, donde impartía cátedra de diseño y restauración de monumentos, así como desde urbanística. Consultor para el centro histórico de Brescia (Italia). Ha participado como experto de la Unesco para proyectos del centro histórico de Cartagena y Quito, entre otras ciudades latinoamericanas.

<sup>247</sup> Se hace referencia a la exención del impuesto de renta provenientes de la prestación de servicios hoteleros en hoteles que se remodelen y/o amplíen dentro de los 15 años siguientes a partir del 1 de enero de 2003, obtenidas por el establecimiento hotelero o por el operador, estarán exentos del impuesto sobre la renta, por un término de 30 años a partir del año gravable 2003. Artículo 6, Decreto Reglamentario 2755 de 2003 (septiembre 30).

#### 4.2.2 Plan Especial de Manejo y Protección: PEMP

Las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial promovida por Unesco en enero del año 2008 con respeto por la soberanía de los Estados parte al cual se vincula Colombia, los invita a “...adoptar políticas generales encaminadas a atribuir al patrimonio una función en la vida colectiva...”, al igual que “...integrar la protección del patrimonio en los programas de planificación general...”. Además de “...establecer servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio...” y “...llevar a cabo estudios científicos y técnicos para determinar medidas adecuadas que contrarresten los peligros que amenacen al patrimonio...” (Unesco 2008, p. 4). El PEMP cumple estas determinantes en función de alinear sus esfuerzos a las condiciones internas de su organización y sus compromisos internacionales. Posterior a la primera experiencia en la formulación de PEP, en el año 2008 mediante la Ley 1185 (marzo 12), “por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones”, se define el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP):

“Artículo 7. Modifica al Artículo 11 de la Ley 397 de 1997. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así:

Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural. Los bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al siguiente Régimen Especial de Protección:

Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un bien como de interés cultural incorporará el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se requiera de conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo.

Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes”<sup>248</sup>

A pesar de haber transcurrido 11 años entre la primera y segunda definición del instrumento se considera

*“tan genérica y vaga como la que contenía la Ley 397 de 1997, no es claro si la ley está creando una nueva figura de planificación del territorio, o un instrumento de gestión del suelo asociado a este tipo especial de inmuebles”* (Pinilla, 2009, p.54).

---

<sup>248</sup> Artículo 7, Modificación Artículo 11 de la Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 2008 (marzo 12)

Aún más su distancia ideológica y funcional de los instrumentos de planeación, gestión y financiación contenidos en la ley de desarrollo urbano de 1997. Si bien, no se definen los contenidos del PEMP, la misma Ley 1185 de 2009, orienta sobre el particular

El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional el contenido y requisitos de los Planes Especiales de Manejo y Protección y señalará, en dicha reglamentación, qué bienes de interés cultural de la Nación, de los declarados previamente a la expedición de la presente ley, requieren de adopción del mencionado Plan y el plazo para hacerlo<sup>249</sup>.

Es así como el Decreto 763 de 2009 (marzo 10): *“por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material”*, define el PEMP:

“Artículo 14. Objetivo de los PEMP. Los Planes Especiales de Manejo y Protección – PEMP– son un instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales si a juicio de la autoridad competente dicho Plan se requiere.

Los PEMP como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, deben:

- i. Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno sociocultural, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el aprovechamiento de sus potencialidades.
- ii. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean necesarias para la conservación de los bienes.
- iii. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los bienes.
- iv. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de los bienes.
- v. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión a las futuras generaciones”<sup>250</sup>

---

<sup>249</sup> Artículo 7, Modificación Artículo 11 de la Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 2008 (marzo 12)

<sup>250</sup> Artículo 14. Objetivos de los PEMP, Capítulo II Planes Especiales de Manejo y protección –PEMP–, Decreto 763 de 2009 (marzo 10).



Hasta el año 2011 se establecen los contenidos y procedimientos de aprobación del PEMP, mediante la divulgación de la cartilla “Formulación e implementación de planes especiales de manejo y protección”, editada por parte del Ministerio de Cultura. Realizada a partir de una primera versión del arquitecto Gonzalo Navarro y finalmente publicada a cargo de la urbanista Mónica Villalobos “*ajustada a los nuevos marcos legales y las experiencias del desarrollo de proyectos piloto en los centros históricos de Santa Marta, Barranquilla y Manizales*”, finalizados en el año 2005 y 2008 respectivamente. De esta forma, el proceso cronológico de formulación y aprobación del PEMP de los centros históricos declarados BIC del ámbito nacional, es el siguiente:

**Tabla 4.8 Proceso Cronológico de los Planes Especial de Protección**

<b>Municipio</b>	<b>Año Inicio</b>	<b>Año Finalización</b>	<b>Acto Administrativo</b>
<b>PEP Barranquilla</b>	2002	2005	Resolución No. 0746 de 2002
PEP Santa Marta	2002	2008	Resolución No.1880 de 2005
PEP Manizales	2003	2015	Resolución No. 0785 de 1998
Bogotá D.C	2003	2021	Resolución No. 088 de 2021
Marinilla	2004		En Trámite de Resolución
Cartagena de Indias	2004		Formulación Distrito
Popayán	2004	2009	Resolución No. 2431 de 2009
Valledupar	2004	2014	Resolución No. 3722 de 2014
Guadalajara de Buga	2003	2010	Resolución No. 0304 de 2010
Abejorral		2015	Resolución No. 3078 de 2015
<b>Concepción</b>		2020	Resolución No. 2175 de 2020
Jardín			Fase I. Diagnóstico
Jericó		2018	Resolución No. 0663 de 2018
Santa Fe de Antioquia		2018	Resolución No. 4325 de 2018
Rionegro			Fase II. Formulación Municipio
Barrio El Prado, Bellavista y Altos del Prado		2021	Resolución No 0668 de 2021
Santa Cruz de Mompox		2009	Resolución No. 2378 de 2009
Iza		2015	Resolución No. 1811 de 2015
Monguí			Fase II Formulación
Tunja		2012	Resolución No. 0428 de 2012

Turmequé			Fase II Formulación
Villa de Leyva		2020	Resolución No. 2407 de 2020
PEP Aguadas		2001	Resolución No. 1883 de 2001
Salamina		2017	Resolución No. 127 de 2017
Pore		2014	Resolución No. 3914 de 2014
Santa Cruz de Lorica		2020	Resolución No. 2770 de 2020
San Miguel de Guaduas			Fase II Formulación
Tenjo		2010	Resolución No. 0030 de 2010
Ciénaga		2020	Resolución No. 1927 de 2020
El Carmen		2020	Resolución No. 2073 de 2020
La Playa de Belén		2015	Resolución No. 1815 de 2015
Pamplona			
Barichara		2015	Resolución No. 0688 de 2015
San Gil	2011	2015	Resolución No. 2970 de 2015
San Juan de Girón			Fase II Formulación
Socorro			Fase I Diagnóstico
Zipaquirá			
San Juan de Pasto		2012	Resolución No. 452 de 2012
Villa de Rosario		2012	Resolución No. 1500 de 2012
Ambalema			Trámite Resolución
Honda		2017	Resolución No. 217 de 2017
San Sebastián de Mariquita			Fase II Formulación
Santiago de Cali, La Merced		2015	Resolución No. 1810 de 2015
El Cerrito			Sin iniciar
Cartago			Sin iniciar

Fuente: Elaboración propia con base en información de Ministerio de Cultura, Municipios y entidades oficiales

En el año 2019, mediante el Decreto 2358 (diciembre 30), se redefine el Plan Especial de Manejo y Protección como:

un instrumento de gestión de los bienes de interés cultural mediante el cual se establecen acciones necesarias para garantizar la protección, la conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales. Si a juicio de la autoridad competente dicho plan se requiere, los PEMP deben establecer las relaciones que se tiene con el patrimonio cultural de naturaleza material, inmaterial y las condiciones ambientales.

Como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, deben:

1. Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno sociocultural, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos, el aprovechamiento de sus potencialidades y su relación con las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial.
2. Precisar las acciones en diferentes escalas de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean necesarias para la conservación de los bienes.
3. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento, conservación y rehabilitación de los bienes.
4. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de los bienes.
5. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión a las futuras generaciones.
6. Armonizar y garantizar la regulación del uso del suelo, la ocupación y el aprovechamiento para la protección del BIC e integración con el entorno local; para el caso de BIC inmuebles, la incorporación de los elementos de gestión urbanística y los instrumentos de gestión del suelo, en que el BIC no se considere de manera aislada de las demás realidades urbanas, o para bienes muebles cuando aplique<sup>251</sup>

Bajo la última orientación del Decreto 2358 de 2019 aún no se ha formulado y aprobado ningún PEMP. Los aprobados hasta el año 2021 se formularon y adoptaron con los lineamientos de la Ley 397 de 1997 (agosto 07), la Ley 1185 de 2008 (marzo 12) y el Decreto 763 de 2009 (marzo 10). El PEMP como instrumento de planeación y gestión del patrimonio urbano, integra los agentes identificados principales en el proceso de conservación y protección del entorno urbano histórico desafiados por la complejidad, cambio e intervalos de diversa magnitud y nivel asociados a la protección del patrimonio. Equilibrados mediante nuevas sociedades de

---

<sup>251</sup> Artículo 2.4.1.1.1 Definición y objetivo de los PEMP, Capítulo I De los planes especiales de manejo y protección –PEMP-, Decreto 2358 de 2019 (26 diciembre).

cooperación, una mejor coordinación institucional, incremento de recursos financieros y técnicos alienados con la participación ciudadana (Bandarin & Van Oers, 2012, p.207). Constituyen la segunda etapa después de superar la generación de la política cultural en la década de los noventa del siglo XX.

Los agentes principales en el proceso de gestión del patrimonio urbano son:

Los gobiernos: promotores de la política pública y programas nacionales de conservación y desarrollo urbano en el marco de salvaguarda de los centros y sectores históricos que involucren prácticas, medidas y estrategias de protección del patrimonio cultural.

Los proveedores de servicios públicos y el sector privado: comprendidos por las diferentes entidades del sector público y privado que suministran servicios como transporte, salud, educación, turismo y aquellas actividades asociadas al soporte de las económicas de carácter central, regularmente localizadas en los centros urbanos.

Las organizaciones internacionales: representantes, determinadoras conceptuales y centros de asociación de Estados e iniciativas entorno al principio de cooperación y la supervisión colectiva mediante la exposición de planes, proyectos y estrategias de alcance universal.

Las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales: de diversa índole y origen, promotoras, exhortan a las comunidades y agremiaciones a la participación activa a la difusión, reconocimiento y buenas prácticas orientadas a la conservación y salvaguarda del patrimonio inmueble local (Bandarin & Van Oers, 2012, p.207-208).

#### **4.2.2.1 Contenidos y estructura del PEMP**

Por la naturaleza y sentido del PEMP su estructura expresa la influencia en la que se basa la tradición de la conservación y protección del patrimonio urbano en Colombia. Es evidente la incidencia inmediata de las reglamentaciones que contienen una conformación de aproximación generalizada en “*las metodologías convencionales de la conservación morfológica y la recuperación tipológica según el modelo italiano*” (Pol, s.f., p. 117). Sin diferencia y sin contemplar las características singulares de los centros históricos. En la década de los 80 y 90 del siglo XX, la diversidad de resultados a partir del abordaje de los procedimientos de adecuación del Manual de Reglamentación de Sectores Urbanos Antiguos (Colcultura, 1991), reafirma la idea un modelo único y homogéneo para aproximarse al establecimiento de las medidas de protección por medio de la norma cultural.

La definición de la política cultural procedente de varias vertientes y materializada en el año 1997 en la Ley General, sugiere una concepción de la protección con la introducción de planteamientos complejos en el reconocimiento del plan como el mecanismo más adecuado para garantizar la conservación del patrimonio urbano, a partir de la experiencia española. Los

resultados significativos en elaboraciones metodológicas y proyectuales enriquecen el contexto cultural de los años 80 en la península ibérica y tras la expedición de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, se posiciona como referente fundamental de la legislación para el patrimonio cultural colombiano a finales de la década de los años 90. En correspondencia con el artículo 33 del Decreto 763 de 2009, sobre el procedimiento y aprobación de los PEMP “...el Ministerio de Cultura podrá definir aspectos técnicos y administrativos que desarrollen como mínimo dos fases del PEMP: Fase I Análisis y Diagnóstico; Fase II propuesta Integral...”<sup>252</sup>. La definición de los aspectos técnico-administrativos se lleva a cabo mediante la cartilla “Formulación e Implementación de Planes Especiales de Manejo y Protección Bienes Inmuebles de Interés Cultural”, publicada por Mincultura en el año 2011.

Las densas elaboraciones metodológicas, las estrategias urbanísticas y formulaciones proyectuales del orden urbano en escalas menores e intermedias, introducen a la cultura urbanística en “la renovación del interés por la forma urbana, el desarrollo de nuevos tipos de proyecto” de carácter revitalizador en contextos de conservación y de renovación en bordes o en inmediaciones de las áreas patrimoniales por conducto del Plan (Pol, sf., p.118).

Constructo de la fusión de la experiencia italiana y española en los dos componentes principales del PEMP: Fase 1: el análisis y diagnóstico; Fase 2: la propuesta integral. La fase 1 análisis y diagnóstico, se vale del estudio histórico y valoración del bien de interés cultural desde una clara procedencia de las técnicas de restauración clásicas a partir de la clasificación de los inmuebles en sus características desde la singularidad hacia el conjunto urbano. Se valora desde la dimensión regional y local en aspectos de la estructura ecológica y funcional los diferentes elementos de soporte.

La fase de formulación y aprobación del PEMP se determina en dos aspectos generales: los términos indicados en la Ley 763 de 2009,

*“...del mismo modo señalará los plazos máximos para determinar cuáles BIC declarados con anterioridad a la Ley 1185 de 2008 requieren PEMP, así como el plazo máximo para formular y aprobar tales PEMP, sin que el plazo máximo total para el efecto pueda superar cinco (5) años a partir de la vigencia de este decreto...”*<sup>253</sup>.

Señala como fecha máxima el 10 de marzo de 2014. El otro factor determinante es el Plan Nacional de Revitalización de Centros Históricos (PNRCH), el cual “...se ejecutará mediante

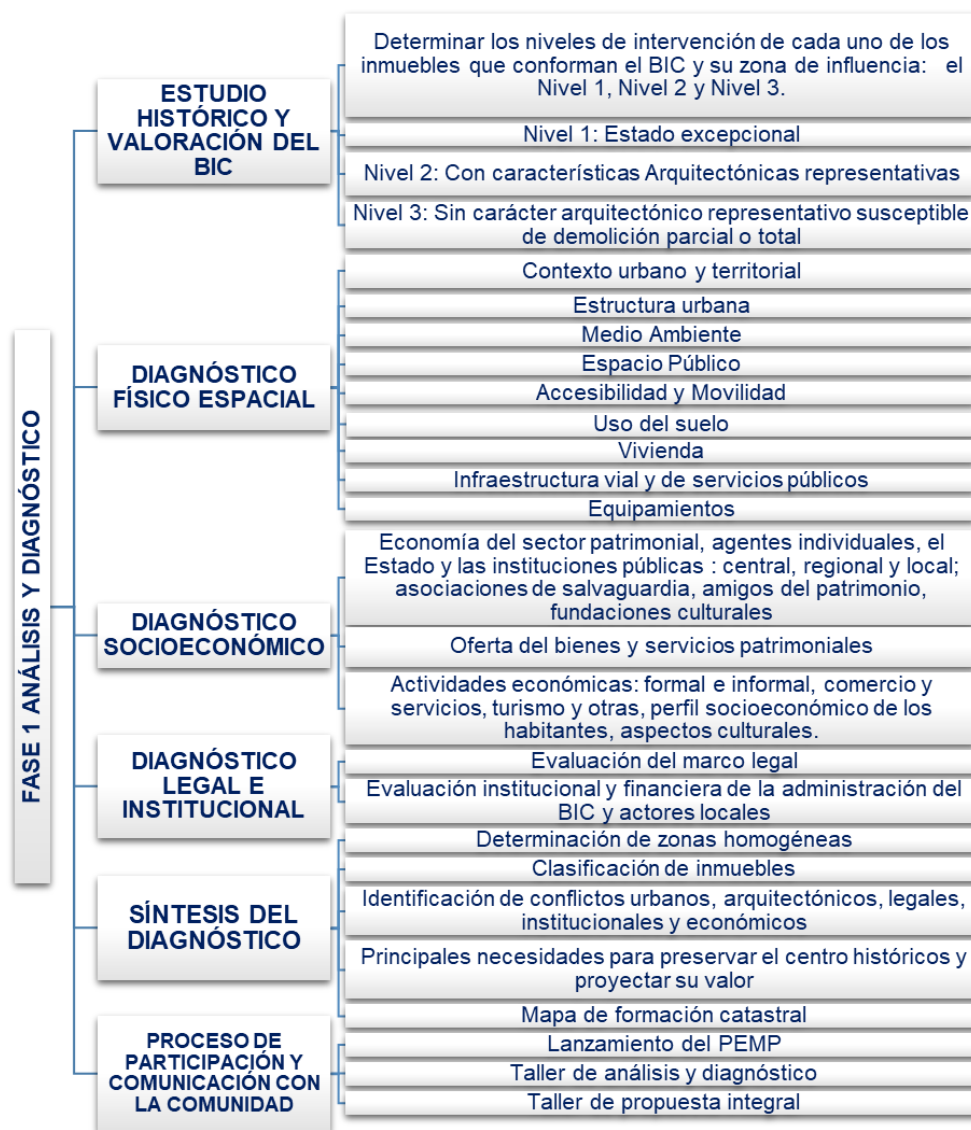
---

<sup>252</sup> Artículo 33 procedimiento para la formulación y aprobación de los PEMP, Capítulo IV Competencias para la formulación de planes especiales de manejo y protección -PEMP-, Decreto 763 de 2009 (marzo 10).

<sup>253</sup> Artículo 36. Términos para formulación y aprobación de PEMP, Capítulo IV Competencias para la formulación de planes especiales de manejo y protección, Decreto 763 de 2009 (marzo 10) Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. Diario oficial 47.287, marzo 1° de 2009.

*la formulación de los Planes Especiales de Protección, con una metodología participativa, que garantice la sostenibilidad del bien...” (Mincultura, 2004).*

**Figura 4.9 Fase 1 Análisis y diagnóstico**

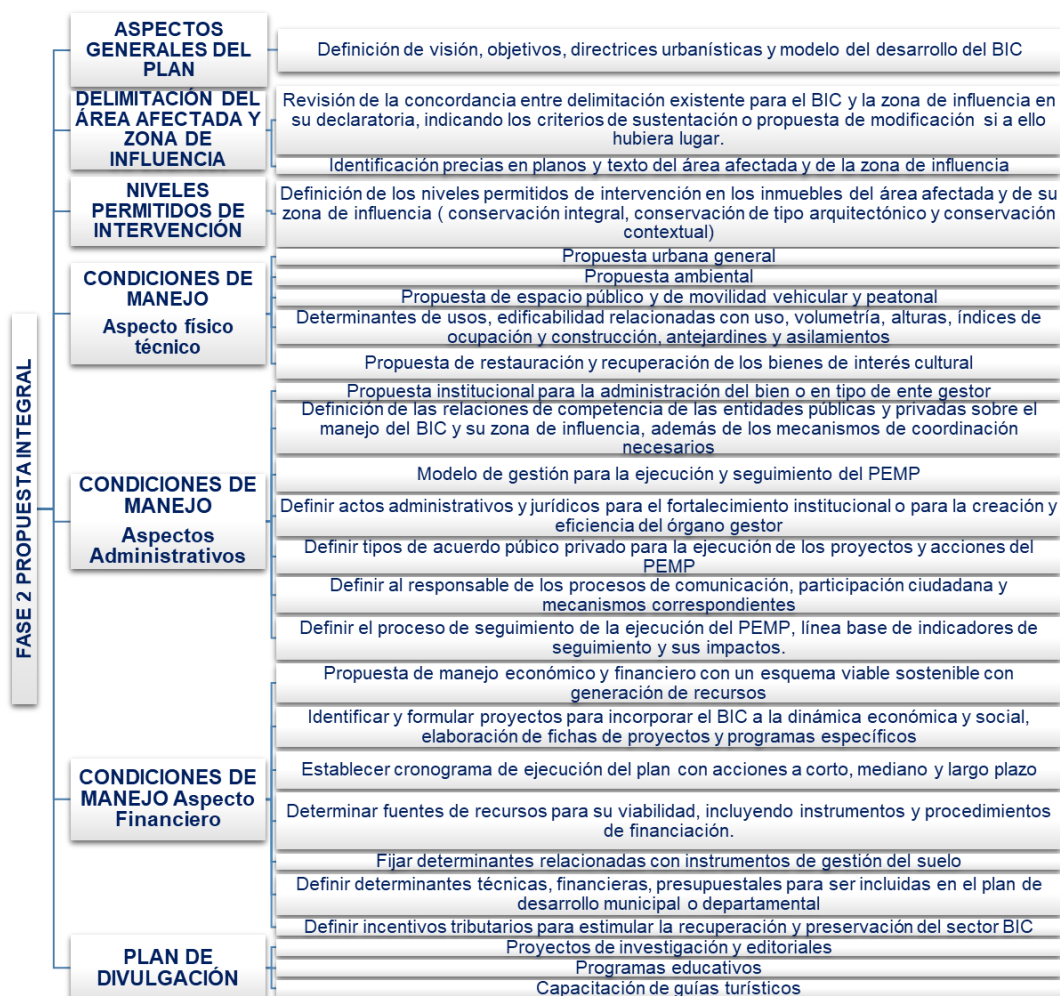


Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 11 de la Ley 388 de 1997

Por su parte, el diagnóstico socioeconómico centra su interés en la definición de la dinámica productiva y su relación con los residentes permanentes y flotantes, con especial atención en el área urbana histórica y los benefactores de su conservación bien sean agremiados o particulares con iniciativas relevantes para mitigar los efectos adversos propios de la atracción turística y oferta de servicios que validan su centralidad funcional.

El componente social adquiere una posición prioritaria dentro del proceso de la gestión de centros históricos contemporáneos, al observar que el éxito de las políticas de conservación debe estar animadas en el tejido social, son un medio para mantener vivos y dinámicos los valores de la identidad y la memoria vinculadas al lugar (Bandarin & Van Oers, 2012, p.80)

**Figura 4.10 Fase 2 Propuesta Integral**



Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 11 de la Ley 388 de 1997

El diagnóstico legal e institucional valida y evalúa el soporte de amparo tanto legítimo como organizativo de los bienes inmuebles y del conjunto histórico. La correspondencia entre la gestión y el soporte institucional son el fundamento sobre el que se desarrollan las estrategias y proyectos conducentes a la conservación y protección. No obstante, las técnicas de gestión requieren dentro de su fundamento las siguientes consideraciones: una estructura administrativa

comprometida con la comprensión y significado del sitio cultural; un inventario completo de los bienes culturales existentes en el lugar; proporcionar normas específicas para enaltecer el significado del sitio; un plan estratégico a partir de proyectos, mantenimiento, gestión de recursos y un programa anual de acciones basado en la prioridad (Feilden & Jokilehto, 1998, p.2).

Los procesos de participación ciudadana y los mecanismos para hacer efectiva esta importante categoría hace parte de un total de cuatro, catalogada imprescindible por introducir el factor geo-cultural del contexto donde se localiza el bien inmueble objeto de conservación, para facilitar la exposición del “*debate sobre conservación urbana, gestión del patrimonio y el desarrollo local*” (Bandarin & Van Oers, 2012, p.209). En esta línea, la participación ciudadana

está encaminado a la apropiación social del BIC, al fortalecimiento de la identidad y la memoria cultural, al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad asociada y si aplica, a evidenciar la relación del BIC con las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial identificadas en el PEMP. Este aspecto debe incluir su participación, así como la coordinación, la responsabilidad y el liderazgo de las instituciones locales y regionales en el proceso.<sup>254</sup>

La fase de diagnóstico surge en su influencia de la tradición española, para dar paso al pragmatismo, visión propia, dinámica de la ciudad histórica “*como un palimpsesto sobre el cual interviene con capacidad interpretativa a través de la arquitectura moderna*” y acepta e integran las condiciones impuestas por el área histórica sobre las condiciones físicas de su conservación (Lombardi, 1995; p. 27). El PEMP para bienes inmuebles, establece el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación. Este último pretende socializar y difundir las condiciones de conservación por parte de la comunidad de conformidad con el artículo 17 del Decreto 763 de 2009, los cuales serán abordados en el capítulo V.

#### **4.2.2.2 La conservación, la salvaguarda y protección en el PEMP**

La idea de conservación, salvaguarda y protección al interior de los PEMP formulados y aprobados presenta matices diferentes relacionados con la singularidad del centro histórico, el tamaño del área protegida en proporción con la ciudad contenedora, la vitalidad funcional de servicios municipales localizados dentro del área declarada, su carácter en la dinámica regional y especialmente la idiosincrasia social expresada en la identidad, representaciones y sistemas culturales de legitimización y expresión simbólica (Prats, 1997). De los residente y usuarios cotidianos o esporádicos. El patrimonio como construcción social, es un artificio, ideado por alguien o en el decurso de algún proceso colectivo (Prats, 1997, p. 20). Legitimado por medio de los acuerdos sociales e inscrito dentro del régimen legal basado en la autonomía de los

---

<sup>254</sup> Artículo 2.4.1.2.6 Capítulo II Planes Especiales de Manejo y Protección -PEMP- para Bienes Inmuebles, Decreto 1080 de 2015 (mayo 26) “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”



sistemas de gobierno, donde los centros históricos son resultado de un proceso social en un ámbito físico colectivo y reconocido como patrimonio urbano mediante la construcción simbólica (Choay, 1994) y la construcción jurídica de manera particular sobre el conjunto de normas de urbanismo y ordenamiento (Melé, 2006, p.77). La construcción jurídica (Melé, 2006), social y simbólica (Prats, 1997), del patrimonio urbano, particularmente, los centros históricos desde la exclusión normativa y legal del conjunto de la ciudad se mantiene en el sentido profundo del PEMP. Formulado de manera exclusiva para planificar y gestionar un sector delimitada y extraído del conjunto urbano, al cual se le instaure un proyecto de conservación, salvaguarda y protección impuesto posteriormente al ordenamiento territorial como de mayor jerarquía, lo que lleva a una configuración proporcional de la conservación, la salvaguarda y la protección.

En principio, la idea de conservación y salvaguarda es excluyente de otras manifestaciones susceptibles de integración a las mismas medidas de protección, genera un proceso de descontextualización y recontextualización, dirigida más al conjunto – composiciones- que, a los elementos, siendo la invención y construcción social como fases complementarias y no procesos antagónicos (Prats, 1997, p. 20). De tal forma, la asociación de los conceptos con los hechos físicos –muebles o inmuebles- vinculados al legado histórico han adoptado la migración *“del monumento como soporte de la memoria, hemos pasado al patrimonio de la identidad”* (Desvallées, 1995). Lo que supone un cambio de pensamiento y acciones relacionadas con la preservación del significado asignado de forma simbólica al objeto, las manifestaciones o las expresiones reconocidas de manera colectiva y destinadas a categoría patrimonial mediante la acción jurídica, además de dos temporalidades diferentes: una señala al pasado y otra al presente, integradas a la vida cotidiana de manera esencial.

La conservación y la salvaguarda surgen en el momento en que un bien material o inmaterial pierde la condición de ser parte similar o integral con el conjunto al que pertenece y se le asignan condiciones diferenciales con el contexto del cual se substraen. La abstracción por sí sola ya es contraproducente para mantener las condiciones que resaltan su singularidad y son objeto de excepcionalidad. El PEMP para bienes del grupo urbano pasa de ser un proyecto dedicado a un sector urbano a un plan de exclusión de un conjunto al que se refuerzan los elementos diferenciales mediante la patrimonialización y la asignación de una norma exclusiva, un sistema de gestión y medio de financiación desigual y discriminatorio. El concepto de conservación definido por la Carta de Venecia está vinculado a la restauración de monumentos, que

*“constituye una disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que pueden contribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental”, a su vez “tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico”, por medio del mantenimiento siempre y cuando “resulta favorecida por su dedicación a una*

*función útil a la sociedad” sin alterar “la ordenación o decoración de los edificios”<sup>255</sup>, proporcionales a su escala.*

Por su parte, la “*Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural*” (Unesco, 1972), asocia la conservación a la protección, orientadas a la eficacia y revalorización activa del patrimonio cultural y natural. Establece una ruptura con la restauración monumental de la Carta de Venecia e instaura una idea amplia no solo en el concepto de patrimonio cultural y natural sino la vinculación a la política y los programas de planificación en la autonomía de cada estado. Los dota de un mecanismo de gestión para garantizar los propósitos de la Convención, mediante la investigación, formación, gestión de recursos económicos y divulgación del patrimonio local. La conservación integral de los centros históricos se concibe en las Normas de Quito de 1977, asumida como “*una operación destinada a revitalizar no sólo inmuebles, sino primordialmente la calidad de vida de la sociedad que los habita, aplicando su capacidad creativa y equilibrando su tecnología tradicional con la contemporánea*”, desde el enfoque del planeamiento. Mediante la integración de la revitalización de los centros históricos a los planes directores de desarrollo urbano y territorial, fundamentados en el “*reordenamiento de la tenencia y uso del suelo, con miras a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes*”<sup>256</sup>, por medio del uso de la metodología de los planes directores procedente de la idea norteamericana del reglamento urbanístico realizada por Edward Bassett en Nueva York en 1916 (Morcillo, 2009), y la tenencia del suelo, conflicto histórico en América Latina que supera el sentido del planeamiento moderno.

La conservación integral fundamenta su operatividad en un plan a manera de la experiencia de Bolonia (Beuf & Martínez, 2015). Sin definir el carácter y menos la independencia e interacción con los instrumentos vigentes a finales de la década de los años 70 en América Latina. La conservación integral establece un itinerario estratégico de revitalización acompañado de políticas de vivienda, financiamiento, reformulación de la legislación vigente para la preservación de los centros históricos, los estudios interdisciplinarios y la formación de arquitectos urbanistas en especialidades afines a este propositivo. Además de “*una amplia campaña de concienciación acerca no sólo del valor cultural sino del carácter social y viviente de los Centros Históricos, a través de los medios de comunicación masiva y los sistemas educacionales en todos sus niveles*”<sup>257</sup>. Un programa que requirió cerca de tres décadas para llevarse a cabo en Colombia.

---

<sup>255</sup> Artículos, 2, 3, 4 y 5, Definiciones, Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia 1964). II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia, 1964.

<sup>256</sup> Conclusión 3, Hacia una política de conservación integral de los centros históricos, Conclusiones del Coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas (Unesco PNUD) Quito, Ecuador, 1977

<sup>257</sup> Conclusión 3, Hacia una política de conservación integral de los centros históricos, Conclusiones del Coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas (Unesco PNUD) Quito, Ecuador, 1977

El concepto de conservación integral de las Normas de Quito (1977), se vincula a la idea de conservación integrada de la Carta de Ámsterdam (1975), que establece una posición para abandonar la concepción de protección de edificaciones patrimoniales de manera individual y reorienta la protección hacia la ciudad histórica,

*“los barrios urbanos y las ciudades de tradición, comprendidos los parques y jardines históricos”, mediante una mirada renovada desde “un nuevo urbanismo trata de volver a encontrar los espacios cerrados, la escala humana, la interpretación de las funciones y la diversidad sociocultural que caracterizan los tejidos urbanos antiguos”<sup>258</sup>.*

La concepción de *“la conservación del patrimonio arquitectónico debe ser considerada no como un problema marginal, sino como objetivo principal de la planificación urbana y de la ordenación del territorio”<sup>259</sup>*, es un aporte principal de la Carta de Ámsterdam (1975). Las medidas de protección manifestada en las diferentes cartas se reiteran de manera regular y sucesiva para dar sustento a la protección del patrimonio cultural: políticas locales, gestión, educación y participación ciudadana. Por su parte, la Carta de Nairobi (1976), comprende la salvaguardia de los conjuntos históricos o tradicionales, como *“la identificación, la protección, la conservación, la restauración, la rehabilitación, el mantenimiento, y la revitalización de los conjuntos históricos o tradicionales y de su medio”<sup>260</sup>*, mediante la introducción del plan de salvaguardia, los cuales deben definir:

- las zonas y los elementos protegidos;
- las condiciones y las restricciones específicas que les son aplicables;
- las normas que regulan los trabajos de mantenimiento, de restauración y de mejoramiento;
- las condiciones generales de instalación de las redes de suministro y de los servicios necesarios para la vida urbana o rural;
- las condiciones que regirán las nuevas construcciones<sup>261</sup>

Tanto la Carta de Ámsterdam (1975), como la Carta de Nairobi (1976) hacen un llamado sobre dos aspectos primordiales de la conservación y salvaguarda de los centros históricos, su inclusión en la función de la vida contemporánea. La Carta de Washington (1987), determina que los valores a conservar son el carácter histórico de la población o del área urbana y todos aquellos elementos materiales y espirituales que determinan su imagen. Especialmente:

- a) la forma urbana definida por la trama y el parcelario;

---

<sup>258</sup> II. Declaración, Declaración de Ámsterdam, 1975.

<sup>259</sup> Punto d, II. Declaración, Declaración de Ámsterdam, 1975.

<sup>260</sup> I. Definiciones, Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la Vida Contemporánea. Nairobi, 1976.

<sup>261</sup> Punto 11, IV. Medidas de salvaguardia, III. Política nacional, regional y local, Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la Vida Contemporánea. Nairobi, 1976.

- b) la relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres;
  - c) la forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración;
  - d) las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre;
  - e) las diversas funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso de la historia.
- Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población o área urbana histórica (Carta de Washington, 1987, p. 2).

La protección de estas características se encuentra inscritas en el Plan de Conservación, que debe considerar análisis de datos encaminados al componente arqueológico, histórico, arquitectónico, técnico, sociológico y económico. Además de definir la orientación y modalidad de acciones en el plano jurídico, administrativo y financiero, que tratará de lograr una relación armónica entre el área urbana histórica y el conjunto de la población. El plan de conservación *“determinará los edificios o grupos de edificios que deben protegerse totalmente, conservar en ciertas condiciones, o los que, en circunstancias excepcionales, pueden destruirse”* (Carta de Washington, 1987, p. 3).

#### **4.3 Del Paisaje Cultural al Paisaje Urbano Histórico en el Patrimonio Urbano**

La relación del patrimonio urbano con el paisaje inmediato y lejano ha adquirido una especial relevancia en las reflexiones sobre el conjunto histórico en la comprensión a una escala relativa en este aspecto, que obedece a las condiciones geográficas, culturales y materiales de su singular implantación en el medio natural y su vínculo, dependencia y complementariedad en la generación de valor recíproco tanto al interior del centro histórico como en el contexto amplio de la región donde se asienta. Revalida el concepto y significado mismo de paisaje y su vínculo con el patrimonio urbano. Las inquietudes sobre el paisaje se encuentran planteadas en la Convención para la protección del Patrimonio Mundial y Cultural de la Unesco (1972),

los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico (Unesco, 1972).

Los paisajes culturales son bienes de interés y representan las *“obras conjuntas del hombre y la naturaleza”* citadas en el Artículo 1 de la Convención. Ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas (Unesco, 2008). A partir de esta definición, el Comité de Patrimonio Mundial reconoce de manera oficial como Paisajes Culturales esta categoría en el 16 periodo de sesiones del Comité del Patrimonio Mundial realizado en Santa Fe, Estados Unidos de América del 7 al 14 de diciembre de 1992. Se

aprueba la “*Directriz Operacional para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial*”, definidos como “*obras de la labor combinada del hombre y la naturaleza*”.

Además de aprobar su inclusión, el Comité establece tres categorías de paisajes:

Paisaje claramente definido, creado y diseñado intencionadamente por el ser humano. Se trata de paisajes ajardinados y parques, contruidos por razones estéticas que generalmente, aunque no siempre, se encuentran asociados a edificios religiosos o monumentos de otra índole.

Paisaje evolucionado orgánicamente, debido a un imperativo inicial de carácter social, económico, administrativo y/o religioso, y que ha evolucionado hasta su forma actual como respuesta a la adecuación a su entorno natural. Este proceso se refleja de formas diferentes, por lo que se establecen dos subtipos:

Paisaje vestigio (o fósil) es aquel en el que su proceso evolutivo concluyó en algún momento del pasado, pero sus rasgos característicos son todavía visibles materialmente.

Paisaje vivo es el que conserva un papel social activo en la sociedad contemporánea asociado con el modo de vida tradicional, y cuyo proceso de evolución sigue activo.

Paisajes culturales asociativos son aquellos en los que existen poderosas asociaciones, religiosas, artísticas o culturales con el medio natural, en lugar de pruebas culturales materiales, que pueden ser inexistentes o poco significativas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, p.22)

El significado del paisaje cultural concentra la conciencia ambiental, centrada en cuestionar los límites entre el ser humano y la naturaleza, a partir de tres categorías: persona, sociedad y cultura mediadas por el territorio. De aquí surge un enfoque antropológico para analizar la acción humana y el medio socio físico que transforma y habita. La pluralidad de sentido del paisaje, su diversidad de escalas, objetos y métodos de análisis derivados a la protección, ordenación y transformación de sus dinámicas subjetivas u objetivas, se reducen en cuatro tipos de miradas sobre el paisaje:

- a. Enfoque estético: unidad visual del paisaje
- b. Enfoque ecológico: unidad ambiente de paisaje
- c. Intervencionista: unidad proyectiva del paisaje
- d. Enfoque antropológico: unidad cultural del paisaje (Álvarez, 2011, p.70).

La categoría de paisaje cultural es anterior al reconocimiento por parte de la Unesco, aborda diferentes visiones disciplinares o especialidades que le impregnan desde los propósitos de la búsqueda singular una visión particular, enriqueciendo su significado y función en la sociedad, que deja en evidencia la insolencia de la clasificación realizada por el Comité del Patrimonio

Mundial realizado en Santa Fe en 1992 (Álvarez, 2011). Con respecto a la incorporación del concepto de paisaje cultural en la legislación cultural de Colombia, el reconocimiento se realiza en la definición de la integración del patrimonio cultural de la Nación, al modificar el artículo 4 de la Ley 397 de 1997 mediante el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008 y el desarrollo del título III en el Decreto 2358 de 2019. Se define:

Son los territorios producto de la interrelación entre grupos sociales, comunidades o colectividades con su territorio o la naturaleza, referentes de procesos históricos, económicos, sociales, políticos, culturales o espirituales, que ilustran las formas de ocupación y manejo del territorio, por lo tanto, son factores de identidad, pertenencia o ciudadanía, contienen bienes, manifestaciones, productos y todos aquellos elementos que son expresiones de la identidad cultural y que son representativos de una región claramente definida e ilustran los elementos culturales esenciales y distintivos; mediante la valoración y el manejo sostenible de estos lugares se posibilita, de manera efectiva, el goce de los derechos culturales<sup>262</sup>.

En el mismo Decreto 2358, se establecen las categorías que están asociadas al concepto:

- a. *Claramente definido, concebido y creado intencionalmente por el hombre.* Se refiere a espacios transformados por la intervención del hombre, estéticamente reconocibles, y, que responden a unas determinadas características estético-formales, y con frecuencia relacionadas con edificaciones o conjuntos, comprende los paisajes de jardines y parques creados.
- b. *Evolucionado orgánicamente.* Es fruto de una exigencia originalmente social, económica, administrativa o religiosa que ha alcanzado su forma actual por asociación y como respuesta a su entorno natural. Estos paisajes reflejan este proceso evolutivo en su forma y su composición; se subdividen en dos categorías:
- c. *Relicto (o fósil).* El que ha experimentado un proceso evolutivo que se ha detenido en algún momento del pasado, ya sea bruscamente o a lo largo de un periodo. Sus características esenciales siguen siendo, materialmente, visibles.
- d. *Vivo.* El que conserva una función social activa en la sociedad contemporánea, estrechamente vinculada al modo de vida tradicional y a los procesos de explotación productiva del territorio, en el cual prosigue el proceso evolutivo, y que, al mismo tiempo, presenta pruebas materiales manifiestas de su evolución en el transcurso del tiempo. Comprende también aquellos territorios constituidos por el desarrollo de sistemas económicos en relación con su entorno o la naturaleza.

---

<sup>262</sup> Artículo 2.4.3.1 Paisajes Culturales, Título III, Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26) por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

- e. *Asociativos*: Expresa la asociación cultural, religiosa, simbólica o espiritual de determinados grupos humanos sobre un territorio y los elementos naturales que contiene, permiten el desarrollo de la vida social y cultural de comunidades o colectividades a través de la práctica y disfrute de manifestaciones relevantes de su patrimonio cultural inmaterial.
- f. *Lugares de memoria*. Espacios o sitios donde comunidades o colectividades a través del recuerdo, dan testimonio de su historia, constituyéndolos en hitos o referentes culturales.
- g. *Complejos socioculturales*: Lugares donde conviven múltiples formas de concebir y habitar el espacio y el territorio. En estos lugares, las diferentes colectividades o comunidades desarrollan prácticas culturales que devienen en referentes de convivencia ciudadana<sup>263</sup>.

Dentro de los instrumentos considerados para la gestión de los paisajes culturales, se han previsto los “*planes especiales de manejo y protección, planes de manejo arqueológico, planes especiales de salvaguardia, planes de manejo ambiental, o los instrumentos que permitan una correcta gestión y articulación institucional del territorio y sus componentes*” de obligatoria formulación al momento de su declaración, definidos por las autoridades competentes “*sobre los elementos integrantes del paisaje a través de comités interinstitucionales, para cumplir el objetivo de la conservación, la protección y la salvaguardia*”<sup>264</sup>. Se especifica que el Ministerio de Cultura “*reglamentará por vía general los demás aspectos relacionados con la identificación, la valoración, el manejo, la protección, la conservación, la salvaguardia, la divulgación y la sostenibilidad de los paisajes culturales y la relación.*”<sup>265</sup>. El Memorándum de Viena, realiza una definición de paisaje urbano histórico basado en la “Recomendación de la Unesco relativa a la salvaguarda de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea” de 1976:

se refiere a conjuntos de cualquier grupo de edificios, estructuras y espacios abiertos, en su contexto natural y ecológico -lo que incluye sitios arqueológicos y paleontológicos- que constituyan asentamientos humanos en un ambiente urbano a lo largo de un período considerable de tiempo, y cuya cohesión y valor sean reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, científico, estético,

---

<sup>263</sup> Artículo 2.4.3.1 Paisajes Culturales, Título III, Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26) por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial

<sup>264</sup> Artículo 2.4.3.4 Paisajes Culturales, Título III, Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26) por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial

<sup>265</sup> Artículo 2.4.3.6 Paisajes Culturales, Título III, Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26) por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial

sociocultural o ecológico. Este paisaje ha conformado la sociedad moderna y resulta de gran valor para ayudarnos a comprender cómo vivimos hoy en día<sup>266</sup>.

Por su parte, el patrimonio urbano concentra una serie de dimensiones ligados a su atributo como son el componente histórico, territorial, urbano, cultural, ambiental y paisajístico (Mejía, & Martínez, 2020), al que se agrega el componente arquitectónico, social y simbólico (Prats, 1997). Es un concepto integrador de deseos y visiones sobre un sector urbano significativo para las comunidades que reconocen e interpretan estos elementos en su conjunto urbano. La relación del centro histórico como unidad del patrimonio urbano, con la escala de su significado adquiere especial atención por la cantidad de instrumentos jurídicos vinculados a su protección que generan impactos de diverso orden en su contexto inmediato, urbano, municipal, regional o territorial y en el mismo orden proporcional a sus valores atribuidos.

#### **4.4 La compensación por tratamiento de conservación**

Los principios rectores de la Ley 388 de 1997 son: función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, la distribución equitativa de las cargas y beneficios sobre los que se fundamenta el ordenamiento del territorio. La Ley de desarrollo urbano *“busca fortalecer el proceso de descentralización y autonomía municipal que consagra al municipio como célula fundamental de Estado”* (Giraldo, 1999, p. 89). El estado transfiere funciones a los municipios antes limitados por la ausencia de instrumentos, bajo el contexto de dos momentos fundamentales: la nueva constitución política de 1991 y la apertura económica (Giraldo, 1999; Morcillo, 2009), bajo la fuerte presencia de la globalización y el neoliberalismo.

La función social y ecológica de la propiedad delimita el ejercicio del derecho de la propiedad (Giraldo, 1999). En correspondencia con el propósito de la Ley, el uso racional del suelo, la defensa y protección del patrimonio ecológico y cultural. En consecuencia, el dominio de la propiedad debe estar dentro del margen propositivo fundamental para promover la sociedad, sus valores y el respeto a las condiciones permitidas de la estructura ecológica y social. El incumplimiento activa las actuaciones urbanísticas definidas para expropiar y enajenar la propiedad con el fin de restablecer el sentido de su existencia en el marco de los acuerdos colectivos. La prevalencia del interés general sobre el particular *“es el fundamento y la garantía de la acción expropiatoria –enajenación voluntaria y expropiación judicial- por motivos de utilidad pública o interés social”* (Giraldo, 1999, p. 92). El mensaje de la disponibilidad del suelo e inmuebles por parte de la comunidad siempre y cuando su usufructo sea necesario para cumplir proyectos inscritos del POT. Este principio garantiza la recuperación de inmuebles de carácter patrimonial con el fin de integrarlos a los inventarios de su identidad local. Finalmente, el principio de la distribución equitativa de cargas y beneficios se asemeja al instrumento con mayor carácter democrático entre la sociedad y propietarios de cualquier tipo de inmueble,

---

<sup>266</sup> Punto 7, Definiciones, Memorándum de Viena sobre el patrimonio Mundial y la Arquitectura Contemporánea. Gestión del Paisaje Histórico Urbano. Viena. 2005



establece un trato idéntico a la totalidad de ciudadanos frente a las normas urbanísticas (Giraldo, 1999). La procedencia de los acuerdos como un hecho colectivo se sustenta en el

principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. Las unidades de actuación, la compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otros, son mecanismos que garantizan este propósito<sup>267</sup>.

En ese sentido, la declaratoria e inclusión de inmuebles y predios dentro de los perímetros de protección, bien sea en el área afectada, la zona de influencia o en la asignación de un perímetro provisional donde la propiedad se vea limitada por la asignación de tratamiento de conservación, será beneficiado según el artículo 48 de la Ley 388 de 1997. La compensación en tratamiento de conservación define que:

Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten<sup>268</sup>

Con el fin de garantizar el reparto equitativo de las cargas y beneficios generados en el ordenamiento territorial para asegurar “*el pago de compensaciones en razón de cargas urbanísticas de conservación, las administraciones municipales y distritales podrán constituir*”, fondos de compensación con la posibilidad de “*ser administrados mediante encargos fiduciarios*”<sup>269</sup>. Con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos destinados a la mencionada compensación, “*los presupuestos de obra incluirán tal rubro y se colocarán en el Fondo de Compensaciones*”. Cuando el municipio los haya creado para el caso de exigencias de compensación por afectación al patrimonio por obras públicas<sup>270</sup>.

#### **4.4.1 Transferencia de derecho de construcción y desarrollo**

Seis meses después de entrar en vigencia la Ley 388 de 1997 (julio 18), el Decreto 151 de 1998 (enero 22), dicta reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la compensación en tratamiento de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, definidos como “*aquellos que en casos particulares y concretos regulan el aprovechamiento del suelo, el subsuelo y el espacio aéreo de un predio, de conformidad con la licencia que*

<sup>267</sup> Artículo 38, reparto equitativo de cargas y beneficios, Capítulo V Actuación urbanística, Ley 388 de 1997.

<sup>268</sup> Artículo 48, Capítulo V Actuación urbanística, Ley 388 de 1997.

<sup>269</sup> Artículo 49, Capítulo V Actuación urbanística, Ley 388 de 1997.

<sup>270</sup> Parágrafo 1, artículo 128, Ley 388 de 1997.

*concede la autoridad competente, con sujeción a las normas urbanísticas*<sup>271</sup>, contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial. Se comprende por conservación:

el tratamiento urbanístico que por razones ambientales, históricas o arquitectónicas limita la transformación de la estructura física de áreas del municipio o distrito, de inmuebles particulares, de obras públicas, y de elementos constitutivos del espacio público. Cada municipio o distrito determinará en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen las áreas o inmuebles sujetos a tratamiento de conservación<sup>272</sup>.

De esta forma, *“la aplicación del tratamiento de conservación a una zona, predio o inmueble limita los derechos de construcción y desarrollo”*, y debido a esta limitación *“se crean los derechos transferibles de construcción y desarrollo”*<sup>273</sup>. De tal manera la compensación se constituye cuando *“por motivos de conveniencia pública se declaren como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental determinados inmuebles, en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen”*<sup>274</sup>. Los derechos transferibles de construcción y desarrollo son

equivalentes a la magnitud en que se ha limitado el desarrollo en una zona, predio o edificación en particular, en comparación con la magnitud de desarrollo que sin esta limitación podría obtenerse dentro de lo definido para la zona o subzona geoeconómica homogénea por el Plan de Ordenamiento Territorial<sup>275</sup>.

Los derechos de construcción y desarrollo asimilados a la Transferencia de Derechos Adicionales de Construcción y Desarrollo (TDACA) por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en el año 2003 se adquieren por medio de licencias y son:

- a) Derechos de urbanización, construcción o parcelación o sus modalidades, que concretan normas generales fijadas para zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas, planes parciales, o unidades de actuación urbanística, contenidos dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen;
- b) Derechos transferibles de construcción y desarrollo que permiten trasladar el potencial de construcción de un predio o inmueble con tratamiento de conservación urbanística a un predio definido como receptor dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen<sup>276</sup>.

---

<sup>271</sup> Artículo 1, Decreto 151 de 1998 (enero 22).

<sup>272</sup> Artículo 2, Decreto 151 de 1998 (enero 22).

<sup>273</sup> Artículo 3, Decreto 151 de 1998 (enero 22).

<sup>274</sup> Artículo 4, Decreto 151 de 1998 (enero 22).

<sup>275</sup> Artículo 3, Decreto 151 de 1998 (enero 22).

<sup>276</sup> Artículo 5, Decreto 151 de 1998 (enero 22).

Es importante destacar que la compensación en tratamiento de conservación, *“solo se aplicará en las áreas clasificadas como suelo urbano y de expansión urbana, pues estas son las únicas a las cuales puede limitarse la posibilidad de desarrollo y construcción”*<sup>277</sup>. Los bienes de interés cultural en suelo rural o suburbanos no son objeto de este beneficio del reparto equitativo de las cargas y beneficios derivados del desarrollo urbano, ni los que por *“sus características físicas, topográficas o geológicas sean inconstruibles ni aquellos que sean declarados como zonas de amenaza o riesgo”*<sup>278</sup>. La transferencia de derechos adicionales de construcción y desarrollo beneficia dos aspectos relevantes del urbanismo: su aplicabilidad en el nivel micro y macro de las operaciones urbanísticas, referidas a inmuebles de valor patrimonial o contextos urbanos históricos en tratamiento de conservación; otro aspecto es *“la desmaterialización de la edificabilidad o aprovechamiento de un bien inmueble, el cual es convertido a un título valor que puede transarse en cualquier momento y se desliga directamente del suelo donde se localiza”* (IGAC,2003, p.74). Producen un mecanismo de valor dentro del mercado inmobiliario para garantizar la compensación. Es autonomía del municipio o distrito la emisión de los derechos adicionales de construcción y desarrollo, mediante la identificación de las Zonas Geoeconómicas Homogéneas (ZGH)<sup>279</sup>, donde una o más zonas o subzonas conforman un Área Morfológica Urbana (AMU). Las AMU son factores determinantes dentro del proceso de planeación urbana ya que facilitan el cálculo del Índice de Edificabilidad Histórica<sup>280</sup>, ligado a las *“características originales del tejido urbano”*, comprendido por calles, tipologías, morfología, patios, espacios libres y dotación del sector delimitado (IGAC,2003, p.76). Para la emisión de los derechos de construcción y desarrollo,

*“el municipio o distrito correspondiente deberá realizar y publicar previamente un estudio de factibilidad que permita establecer la demanda de ellos y su concordancia con las pautas generales de uso, tratamiento y aprovechamiento previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen”*<sup>281</sup>,

Debe identificar las zonas receptoras (excedentarias) y generadoras (deficitarias), siendo las primeras las que presentan limitaciones o restricciones para el aprovechamiento de los índices de edificabilidad por la asignación de un tratamiento de conservación. Presentan una oferta de edificabilidad, mientras que las receptoras presentan condiciones para recibir los excedentes de edificabilidad superior a la media, dando sentido a la compensación (IGAC, 2003; Morcillo,

<sup>277</sup> Considerando, Decreto 1337 de 2002 (junio 29) “Por el cual se reglamenta la Ley 388 de 1997 y el Decreto-ley 151 de 1998, en relación con la aplicación de compensaciones en tratamientos de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo”

<sup>278</sup> Artículo 1, Decreto 1337 de 2002 (junio 29)

<sup>279</sup> Se comprende como zona o subzona geoeconómica homogénea un espacio que presenta características físicas y económicas similares, en cuanto a: topografía, normas urbanísticas, servicios públicos domiciliarios, redes de infraestructura vial, tipología de las construcciones, valor por unidad de área de terreno, áreas morfológicas homogéneas, estratificación socioeconómica. Artículo 6, Capítulo primero, Disposiciones generales. Decreto 1420 de 1998 (julio 24).

<sup>280</sup> El Índice de Edificabilidad Histórica (IEH), hace referencia a un factor determinante del aprovechamiento de un predio en un contexto amparado mediante declaratoria o tratamiento de conservación.

<sup>281</sup> Artículo 6, Decreto 151 de 1998 (enero 22).

2009). La compensación puede presentarse dentro de un mismo Plan Parcial<sup>282</sup>, entre dos o más Unidades de Actuación Urbanística (UAU)<sup>283</sup> preferiblemente. Sin embargo, en el caso del tratamiento de conservación<sup>284</sup>, la zona receptora de los derechos adicionales de construcción y desarrollo debe garantizar la permanencia de las condiciones patrimoniales de la zona generadoras en condiciones excepcionales que no alteren su paisaje urbano histórico. La transferencia de derechos adicionales de construcción y desarrollo

*“podrán ser otorgados mediante el incremento en los índices de edificabilidad o potencial de desarrollo, representado en el aumento de cualquiera de las siguientes formas de medición:*

- a) De la densidad o del número de unidades construibles;*
- b) De los metros cuadrados edificables;*
- c) De los índices de ocupación y construcción, y*
- d) Aquellas que defina la reglamentación específica de los planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que los desarrollen”<sup>285</sup>.*

En su autonomía la administración municipal o distrital, *“previa autorización del concejo municipal o distrital, podrán emitir y colocar en el mercado títulos valores equivalentes a los derechos adicionales de construcción y desarrollo permitidos para determinadas zonas o subzonas con características geoeconómicas homogéneas”<sup>286</sup>*, con dichos títulos se podrán realizar transacciones en el mercado de valores:

los títulos serán representativos en el momento de la emisión de una cantidad de derechos adicionales, expresada en metros cuadrados, y se establecerá una tabla de equivalencias entre cada metro cuadrado representativo del título y la cantidad a la cual equivale en las distintas zonas o subzonas. Dicha tabla de equivalencias deberá estar

---

<sup>282</sup> “Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales”. Artículo 19, Capítulo III Planes de ordenamiento territorial. Ley 388 de 1997.

<sup>283</sup> La Unidad de Actuación Urbanística, es el área conformada por uno o varios inmuebles, delimitada por las normas del POT, la cual será urbanizada o construida como una unidad de planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus propietarios de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos mediante el reparto de cargas y beneficios. Corresponde a la delimitación de área donde a través de un proyecto de intervención urbanística, en suelo urbano o de expansión, se precisa una normatividad particular para su desarrollo (IGAC, 2003, p.42)

<sup>284</sup> “De acuerdo con los objetivos particulares del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen, podrán establecerse relaciones directas y específicas entre zonas generadoras y zonas receptoras de derechos”. Artículo 7, Decreto 151 de 1998 (enero 22).

<sup>285</sup> Artículo 10, Decreto 151 de 1998 (enero 22).

<sup>286</sup> Artículo 88, Capítulo IX Participación en la plusvalía, Ley 388 de 1997.

claramente incorporada en el contenido del título junto con las demás condiciones y obligaciones que le son propias. A la unidad de equivalencia se le denominará Derecho Adicional Básico<sup>287</sup>

El mecanismo para definir el monto de compensación lo determina “*el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones o peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones gremiales de reconocida trayectoria, idoneidad, experiencia en finca raíz, peritazgo y avalúo de inmuebles*” mediante el siguiente procedimiento:

- a) La entidad responsable de otorgar la licencia de urbanización o construcción o en su defecto el curador urbano, emitirá, una certificación en la cual conste que el predio o inmueble en cuestión está bajo el tratamiento de conservación;
- b) Se determina el valor comercial por metro cuadrado del suelo del inmueble limitado por el tratamiento de conservación;
- c) Se determina el valor comercial por metro cuadrado de suelo de los inmuebles colindantes con el predio objeto de la compensación, que no estén calificados como de conservación, y que sean representativos de las condiciones generales de desarrollo del área, o zona geoeconómica homogénea, o plan parcial dentro de la cual se ubica el inmueble en cuestión<sup>288</sup>;
- d) La diferencia entre los dos valores, multiplicada por el número de metros cuadrados del suelo edificable o urbanizable de conservación determina el valor de la compensación<sup>289</sup>.

Una vez determinado el monto “*a compensar será pagado por una sola vez por los fondos de compensación municipales o distritales, a solicitud del propietario del inmueble en cuestión*”, por medio de los siguientes medios, siempre y cuando la disponibilidad presupuestal sea positiva:

- a) Beneficios y estímulos tributarios concedidos por el respectivo municipio o distrito;
- b) La asignación de derechos transferibles de construcción y desarrollo; cuando el titular del predio o inmueble opte por recibir el pago en derechos transferibles de construcción y desarrollo, el valor de éstos para el pago de la compensación será equivalente al cien por ciento (100%) del monto total de la compensación, ajustándose al reglamento que para tal efecto expida el Gobierno Nacional

---

<sup>287</sup> Artículo 89, Capítulo IX Participación en la plusvalía, Ley 388 de 1997.

<sup>288</sup> “*En el caso de edificios a conservar, el monto de la compensación se aplicará sobre el suelo edificable que corresponderá al área de suelo ocupado por la edificación sometida al tratamiento de conservación*”. Parágrafo 2, Artículo 2, Decreto 1337 de 2002 (junio 29) “Por el cual se reglamenta la Ley 388 de 1997 y el Decreto-ley 151 de 1998, en relación con la aplicación de compensaciones en tratamientos de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo”.

<sup>289</sup> Artículo 11, Decreto 151 de 1998 (enero 22) Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la compensación en tratamiento de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo.

c) Otros sistemas que se reglamenten<sup>290</sup>.

Un propietario al ser beneficiario del pago por compensación de un inmueble en tratamiento de conservación adquiere la obligación de *“adoptar las medidas de conservación que se especifiquen para cada caso, y de no hacerlo, deberán devolver el monto de la compensación recibida actualizada en el índice de precios al consumidor más diez (10) puntos porcentuales anuales”*, además de otras sanciones que apliquen según el caso. El proceso de formulación del PEMP bajo la promoción del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos se encuentra en un avance del 64,4% con la aprobación de 29 PEMP, en ninguno de ellos se hace uso del mecanismo de compensación por tratamiento de conservación. En la comprensión que, a pesar de inscribirse en este instrumento, es autonomía de la entidad municipal o distrital la aprobación del mecanismo, así como su regulación.

#### 4.4.2 Compensaciones tributarias alternativas

Se han determinado otros mecanismos de compensación cuando el municipio o Distrito, *“no haya adoptado este mecanismo de compensación, garantizará que los propietarios de los predios o inmuebles a conservar sean objeto de otro tipo de estímulos, beneficios o formas de compensación”*<sup>291</sup>. Pueden ser beneficios y estímulos tributarios concedidos por el respectivo municipio o distrito; la asignación de derechos transferibles de construcción y desarrollo o futuras reglamentaciones<sup>292</sup>. Por consiguiente, el Decreto 1337 de 2002 (junio 29) *“por el cual se reglamenta la Ley 388 de 1997 y el Decreto 151 de 1998, en relación con la aplicación de compensaciones en tratamientos de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo”*, define otros mecanismos alternativos o complementarios para el pago de la compensación por tratamiento de conservación *“cuando no se opte por la asignación de derechos transferibles de construcción y desarrollo”*. Son los siguientes:

1. Asimilación de los inmuebles a los estratos 1 o 2 para efectos del pago del impuesto predial y demás gravámenes municipales o distritales que tengan como base gravable el avalúo o el autoavalúo.

2. Asignación de tarifas reducidas de impuesto predial.

Parágrafo. En el supuesto de zonas o áreas urbanas a conservar por su interés histórico o arquitectónico, donde las propiedades mantienen las características con fundamento en las cuales se declaró la conservación, se podrán aplicar los mecanismos de compensación de que trata el presente artículo<sup>293</sup>.

Las condiciones estimadas para el pago de compensaciones que deben cumplir los propietarios de inmuebles en tratamiento de conservación son las siguientes:

---

<sup>290</sup> Artículo 12, Decreto 151 de 1998 (enero 22)

<sup>291</sup> Artículo 2, Decreto 1337 de 2002 (junio 29)

<sup>292</sup> Artículo 12, Decreto 151 de 1998 (enero 22)

<sup>293</sup> Artículo 3, Decreto 1337 de 2002 (junio 29).

1. Los propietarios de los inmuebles deberán mantener y cumplir en todo momento con las condiciones y requisitos que se establezcan en la declaratoria de conservación.
2. En caso de estimarlo necesario, los municipios y distritos podrán condicionar el pago de la compensación, a la presentación, aprobación y ejecución por parte de los propietarios de un proyecto de recuperación íntegra del inmueble. Durante el estudio de los proyectos integrales de recuperación de inmuebles, se adelantará una visita técnica al predio y se consultarán los datos de archivo, documentación fotográfica y bibliográfica según sea el caso<sup>294</sup>.

Se mantiene la devolución de la compensación recibida actualizada en el índice de precios al consumidor más diez (10) puntos porcentuales anuales, en caso de que el propietario del inmueble incumpla las obligaciones de adoptar las medidas de conservación en su inmueble objeto del beneficio, además de las sanciones adicionales a que haya lugar<sup>295</sup>.

#### **4.5 El Patrimonio Urbano en el Ordenamiento Territorial y en su gestión**

A continuación, se realiza el análisis de dos temáticas vinculadas con el patrimonio urbano: el Plan de Ordenamiento Territorial (en adelante POT) y las compensaciones por tratamiento de conservación. La estructura se encuentra dispuesta para abordar las determinantes, componentes, proceso de planificación territorial, las normas urbanísticas en cuanto a la jerarquía, alcance y principios en el marco del POT. Aquí se comprende la interacción del patrimonio urbano con los aspectos descritos del ordenamiento territorial. La segunda temática aborda los beneficios tributarios derivados de la asignación del tratamiento de conservación a los propietario o poseedores de inmuebles declarados BIC del ámbito nacional. Se analizan la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, la compensación por tratamiento de conservación y las alternativas. A partir de los lineamientos de la Constitución Política de Colombia del año 1991 se institucionaliza el ordenamiento territorial mediante la Ley 388 de 1997, que integra acciones del orden físico político e institucional, además de una serie de instrumentos de planeación, gestión del suelo y financiación, cuya finalidad es enriquecer las estrategias del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) donde se priorizan proyectos de vivienda, así como acciones encaminadas a la conservación del medioambiente y el patrimonio cultural (Escovar & Cárdenas, 2018). El impacto de la Ley 388 de 1997 en la conservación del patrimonio cultural ha sido significativo en varios aspectos, toda vez que se establece en el artículo 10, como determinante. “...las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente...”<sup>296</sup>. Se reconoce de manera expresa la necesidad de incluir dentro del ordenamiento territorial de los municipios, ciudades y

---

<sup>294</sup> Artículo 4, Decreto 1337 de 2002 (junio 29).

<sup>295</sup> Ibidem

<sup>296</sup> Parágrafo 2, Artículo 10, Capítulo III Planes de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997 (Julio 18): “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

mecanismos para garantizar la protección y conservación del patrimonio en sus diversas manifestaciones materiales e inmateriales.

También se debe destacar la simultaneidad temporal en la expedición no solo de la “*Ley de Desarrollo Urbano*” -Ley 388 de 1997- (julio 18) sino de la “*Ley General de Cultura*” -Ley 397 de 1997 (agosto 7). Por medio de las cuales se establecen los instrumentos y condiciones que permitan el desarrollo de los propósitos principales de cada una de ellas: asegurar la interconexión, continuidad y entendimiento mutuo del territorio y el patrimonio cultural, a partir de la participación ciudadana forjadora de las expresiones regionales como medio de libertad ideológica para “*perseverar en la afirmación de los derechos fundamentales*” (Barbosa, 2001, p.85). Ideológicamente, significa la consolidación de la identidad nacional, factor fundamental del país (Salazar, 2000; p.78). En el marco normativo se instalan las condiciones para el ejercicio de la autonomía municipal. De esta forma la descentralización territorial y administrativa del Estado hacia los entes territoriales incentiva el cumplimiento del proceso conducente al ordenamiento de su territorio, la creación de mejores condiciones de vida a la población de su jurisdicción, al igual que generar bases para lograr la mejor productividad de las actividades económicas de la región a partir de sus planes de desarrollo (Salazar, 2000). El ordenamiento del territorio municipal se comprende como:

*“... un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales...”*<sup>297</sup>

El mecanismo para ejercer el ordenamiento territorial es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), definido inicialmente por la Ley de Desarrollo Urbano del año 1997 y ratificado por el Decreto 1232 de 2020:

*“...el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo...”*<sup>298</sup>

---

<sup>297</sup> Artículo 5, Capítulo II Ordenamiento del territorio municipal, Ley 388 de 1997 (julio 18) “*Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones*”.

<sup>298</sup> Artículo 9, Plan de ordenamiento territorial, Capítulo II Planes de ordenamiento territorial (julio 18) “*Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones*”. Artículo 2.2.2.1.2.1 Plan de ordenamiento territorial, Sección 2 Planes de ordenamiento territorial, Decreto 1232 de 2020 (septiembre 14) “*Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del*



Por la diversidad en la conformación demográfica de los municipios en Colombia, se determinan por medio de la Ley 338 de 1997 las denominaciones de los planes de ordenamiento territorial. Se establecen tres tipos de modalidades del instrumento con base en la relación de la cantidad de habitantes del municipio, de manera independiente a otros factores como la extensión del territorio o su capacidad económica. Las categorías son las siguientes:

**Tabla 4.11 Denominaciones, estado y relaciones de los POT con la población y el patrimonio urbano**

Denominación	Característica	Cantidad Municipios	% Municipios sobre el total de Colombia	Cantidad Habitantes afectados	% de población sobre el total de Colombia	Número de Municipios con BIC Centro Histórico Nacional	% Municipios con BIC Centro Histórico Nacional
Planes de Ordenamiento Territorial (POT)	elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes;	56	5.1%	28.360.801	56.30%	14	25%
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT)	elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes;	158	14.3%	9.722.264	19.30%	8	5,1%
Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT)	elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes.	888	80.6%	12.291.359	24,40%	23	2,6%
<b>TOTAL</b>		<b>1102</b>	<b>100%</b>	<b>50.374.424</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>4,1%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del Artículo 9 de la Ley 388 de 1997, (DANE, 2020) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP,2020)

El POT concentra solamente el 5.1 % de la totalidad de municipios a nivel nacional con el 56.30% del total de la población nacional. Eso significa que un poco más de la mitad de la población nacional se concentra en 56 ciudades capitales e intermedias. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) es aplicado a 158 municipios con una población entre 30000

---

*Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial"*

y 70000 habitantes. El 19.30% de la población nacional habita en estos territorios. Por su parte el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) formulado, implementado y adoptado por municipios menores a 30000 habitantes representa el 80.6% de la totalidad de municipios en Colombia con la cuarta parte de la población nacional.

Esta misma relación es asimilable a las ciudades y municipios con centros históricos reconocidos BIC del ámbito nacional: 14 ciudades cuentan con POT, 8 con PBOT y 23 con EOT. En conjunto el patrimonio urbano del ámbito nacional tiene una significancia menor al 5% de la totalidad de los 1102 municipios existentes en Colombia. Esto permite cuestionarse sobre la legitimidad y la pertinencia de la representación del patrimonio urbano de carácter nacional. En el anexo II (pág. 464 y ss.), se analizan las determinantes, componentes y proceso de planificación territorial: elaboración, formulación, aprobación y adopción del POT.

**Figura 4.11 Panorámica Centro Histórico del Municipio de Cartago (Valle)**



Fuente: Imagen tomada de ciudadregión autoría de @cazador de paisajes

#### 4.5.1 Las Normas Urbanísticas

Las normas legales son el medio de regulación y búsqueda del equilibrio de los diversos intereses individuales y colectivos de la sociedad en relación con el contexto. Hacen parte del desarrollo urbano y rural, por consiguiente, la búsqueda genuina de un mejor entorno y convivencia se ha mediado por los acuerdos colectivos donde las normas urbanísticas establecen los pactos para garantizar el equilibrio acordado para las ciudades (Morcillo, 2009). Los diferentes Estados a través de la planeación, especialmente la urbana, han procurado integrar las normas como una vía progresiva para la implementación de las políticas públicas garantizadas por el control urbano y los códigos policivos, además de la regulación social para el uso y dominio de la propiedad en el marco de los derechos y deberes de la jurisdicción nacional y local, según la escala de aplicación. La evolución conceptual y práctica de la legislación, especialmente la dedicada a la estructura ambiental y la propiedad privada, deriva en la adopción o ejecución de acciones o proyectos orientados a rectificaciones, complementaciones e innovaciones en los criterios aplicados e implementados a lo largo de la formulación del corpus legal. Los principales referentes, según Morcillo, son los relacionadas a continuación, cuya influencia es notoria por su aporte en el desarrollo normativo particular de Colombia:

- a. Las normas de asentamientos urbanos: están conformadas *“por las que rigieron las fundaciones y extensiones de los nuevos pueblos, villas, ciudades de las regiones del continente americano que estuvieron bajo la dominación de la Corona española”*. Estas normas se modelaron como *“parte importante de la legislación de Indias y sus orígenes se remontan a los urbanismos griegos y romano”*, con una fuerte presencia del *“espíritu ibérico, céltico y visigodo”* e incluso el *“espíritu árabe”* caracterizado por la relación de las artes y oficios, al igual que el vínculo del hombre y la naturaleza (Morcillo, 2009, p. 438; Brewer-Carias, 2008). La validez de estas normas aún está vigente, ya que le otorgan características de habitabilidad y proporcionalidad humana a una escala física arquitectónica y urbanística que fomentan condiciones sociales, económicas y culturales propicios para el desarrollo de la comunidad asentada en estos conjuntos urbanos. La característica de esta legislación es el amparo de la propiedad individual y la introducción de medidas dirigidas al enfoque colectivo. Ante la ausencia explícita de regulación urbana que favorecían el consumo de suelo destinado a usos que promovían *“el desarrollo desordenado de las ciudades y el deterioro de zonas urbanas”*, lo que generó una *“reacción que se manifiesta en la expedición de reglamentos urbanísticos, pero con otros enfoques y procedimientos”* (Morcillo, 2009, pp. 484-485).
- b. Valoración urbana. La especulación de las fuerzas económicas en los entornos urbanos que provienen del mercantilismo, la industrialización y el desarrollo económico, marginaron las normas de regulación del crecimiento urbano de las legislaciones nacionales, hasta que movimientos sociales de *“recuperación y defensa de los valores urbanos”* surgidos en los países anglosajones, motivados por la transformación de los centros urbanos por la introducción de las adecuaciones industriales y comerciales con

una agitación social marcada por el racismo, el clasismo y desplazamiento de comunidades (Morcillo, 2009, p.485-486). La reflexión en torno de la ciudad, mediada por la calidad urbana en condiciones de bienestar colectivo, derivaron en la conceptualización de la renovación urbana, del espacio público, los equipamientos colectivos, el ambiente natural, la compatibilidad de usos e incluso una escena urbana estética amparada en una teoría urbana más elaborada. Promovida por un activismo social dinámico que a mediados de los años 50 del siglo XX hace parte de los intereses de la ciudad Latinoamérica, siendo el principal generador de la planificación de los centros urbanos.

- c. Reglamentos urbanísticos. El reglamento urbanístico es producto de la zonificación realizada por Edward Bassett en Nueva York en 1916, con la introducción de noción del distrito o zonas, regulación de altura, volumen, uso del suelo y edificio, paramentación y densidad poblacional (Morcillo, 2009). Son una medida de restricción a los intereses de grupos económicos dedicados a la promoción inmobiliaria y el usufructo financiero por la ausencia de regulación y complacencia de las autoridades locales, en particular el caso anglosajón. El concepto de zonificación ingresa a las ciudades latinoamericanas en los años 50 del siglo XX con la contratación de consultores norteamericanos para la elaboración de los planes regulares y de desarrollo urbano. Se introducen las normas de zonificación y regulación inspiradas en Bassett, hasta entonces desconocidas. De manera particular en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Tumaco se contratan los servicios de la firma Wiener y Sert, asociada de manera productiva e ideológica a Le Corbusier. También la formación de profesionales en la arquitectura e ingeniería en las escuelas norteamericanas son un medio de difusión y aplicación de las ideas de la planificación urbana y regional (Morcillo, 2009).

Desde la década del 50 se expiden en las ciudades principales de Colombia reglamentos de zonificación, códigos de construcción y medidas de control urbano con el apoyo de la autoridad policial a partir de la reforma constitucional de 1936, con precarios resultados por la ausencia de una política pública orientada al desarrollo urbano. Sumado a esto, los pocos profesionales y técnicos con conocimiento de la teoría y práctica de la planificación urbana para asistir el volumen de necesidades en esta materia en los municipios, además de dolencias en la aplicación y control de los reglamentos urbanísticos, al igual que la poca destreza en el procedimiento e interpretación de la regulación urbana (Morcillo, 2009).

- d. Las Reglamentaciones separadas son el resultado de la necesidad de regular nuevas y complejas actividades que desbordan el alcance del Código Civil, el cual fue utilizado en las primeras décadas del siglo XX, superado por el aumento y diversidad de temáticas que requieren la expedición de leyes especiales, posteriormente reglamentadas en Códigos como respuesta a la singularidad de cada de cada fenómeno (Morcillo, 2009). De esta manera, se expiden códigos sobre el manejo de aguas, minería, contratación, seguridad industrial, exploraciones del suelo, bosques y recursos

forestales en la cual se incluye las relacionadas sobre el medio urbano y rural debido a la insuficiencia, integración, interrelación, interdependencia, coordinación y complementación a ausencias en el Código Civil, por “*la carencia de enfoque sistémico de las situaciones sociales y económicas*” procedentes de las nuevas actividades e interacciones ejercidas al interior de las comunidades, su relación con las instituciones y marco legal de regulación (Morcillo, 2009, pp. 490-491).

Las anteriores influencias son identificables en la legislación reciente, resultado de una tradición respecto a la normatividad urbana que se ancla en el periodo colonial, una fase de transición en el periodo republicano en el siglo XIX, con dos momentos singulares: la definición de la función social de la propiedad, el régimen municipal y el desarrollo urbano. En consecuencia, la función social de la propiedad se deriva de las precisiones de la conceptualización de la relación compleja entre el interés público y privado, mediado por la voluntad de un propietario en el ejercicio al derecho a la propiedad que no es un principio absoluto en los aspectos de posesión, usufructo y dominio, sin embargo, el legislador garantiza, limita y regula los efectos de este derecho (Morcillo, 2009, pp. 32-35). La Ley 9 de 1989, define:

la propiedad tiene una función social que implica obligaciones, todo propietario de inmuebles dentro del perímetro urbano de las ciudades está obligado a usarlos y explotarlos económica y socialmente de conformidad con las normas sobre usos y atendiendo a las prioridades de desarrollo físico, económico y social contenidas en los planes de desarrollo, o en los planes simplificados, y en su defecto, atendiendo a los usos del suelo que para estos fines establezca la Oficina de Planeación Departamental<sup>299</sup>.

Esta concepción se retoma y hace parte de los principios de la Ley 388 de 1997 donde se comprende la función social y ecológica de la propiedad, en el marco del desarrollo sostenible, el ejercicio de los derechos y deberes mediante la regulación de la propiedad urbana y rural. Al igual que la disposición de la propiedad privada para garantizar la prevalencia del interés general sobre el particular,<sup>300</sup> convicciones sobre los cuales se establece el desarrollo urbano contemporáneo. Por su parte, el régimen municipal y el desarrollo urbano fueron objeto de interés y se consolidaron a partir de la Ley 4 de 1913<sup>301</sup>, “*vigente durante varias décadas, con las modificaciones*” habituales cada cierto tiempo hasta la expedición del Decreto Ley 1333 de 1986 (abril 25) por el cual se expide el Código de Régimen Municipal (Morcillo, 2009, p. 57). Dentro de cuyas finalidades se encuentra la de

dotar a los Municipios de un estatuto administrativo y fiscal que les permita, dentro de un régimen de autonomía, cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento socio-cultural de sus

<sup>299</sup> Artículo 79, Capítulo VIII De la extinción del dominio sobre inmuebles urbanos, Ley 9 de 1989.

<sup>300</sup> Artículo 2, Capítulo I, ley 388 de 1997.

<sup>301</sup> Ley 4 de 1913 “sobre régimen político y municipal”.



habitantes, asegurar la participación afectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos públicos de carácter local y propiciar la integración regional<sup>302</sup>,

Entre otras, acentúa la necesidad de descentralizar y reforzar la autonomía municipal que se consolida con la Constitución Política de Colombia de 1991 y los decretos que lo complementan y regulan con la legislación del desarrollo urbano, el patrimonio cultural y las nuevas complejidades asociadas al ordenamiento territorial municipal, regional, metropolitano y departamental. Por consiguiente, la consolidación de la evolución normativa culmina con la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997, consideradas la primera y segunda reforma urbana, respectivamente. La planificación moderna, instrumento de ordenamiento se impuso en las ciudades con grandes dificultades, pues siempre se prefirió el modelo a la práctica dejando de lado la instrumentación moderna que habían desarrollado los mismos europeos (Salazar, 1994, p. 34). Por tal razón la Ley 388 de 1997 y Ley 902 de 2004, define las normas urbanísticas como aquellas que:

*“... regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación...”<sup>303</sup>.*

#### 4.5.2 Jerarquía, alcance y principio de las normas urbanísticas

En el mismo artículo 15, la Ley 388 de 1997 y la Ley 902 de 2004, establecen la jerarquía en Normas Urbanísticas Estructurales, Normas Urbanísticas Generales y Complementarias con las siguientes características en cada una de ellas:

**Tabla 4.12 Jerarquía de la Norma Urbanística en los Planes de Ordenamiento Territorial**

NORMAS URBANISTICAS ESTRUCTURALES	
Definición	Ámbito de aplicación
Son las que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en el componente general del plan y en las políticas y estrategias de mediano plazo del componente urbano. Prevalen sobre las demás normas, en el sentido de que las regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse contraviniendo lo que en ellas se establece, y su propia	Las que clasifican y delimitan los suelos, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV de esta ley.
	Las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos relacionadas con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos; las que reservan áreas para la construcción de redes primarias de infraestructura vial y de servicios públicos, las que reservan espacios libres para parques y zonas verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al espacio público vinculado al nivel de planificación de largo plazo.
	Las que definan las características de las unidades de actuación o las que

<sup>302</sup> Artículo 2, Decreto 1333 de 1986 (abril 25), “Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”.

<sup>303</sup> Artículo 15, Ley 388 de 1997 (julio 18), artículo 15, Ley 902 de 2004 (julio 26) Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones.

<p>modificación solo puede emprenderse con motivo de la revisión general del plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde municipal o distrital, con base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados.</p> <p>Por consiguiente, las normas estructurales incluyen, entre otras:</p>	establecen criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e incorporación posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e instrumentos de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones urbanísticas vinculadas a su desarrollo.
	Las que establecen directrices para la formulación y adopción de planes parciales.
	Las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la revisión del plan, serán objeto de modificación
<b>NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES</b>	
<b>Definición</b>	<b>Ámbito de aplicación</b>
<p>Son aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión.</p> <p>Por consiguiente, otorgan derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a sus constructores, conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se emplearán para que contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica tal definición de derechos y obligaciones.</p> <p>Debido a la vigencia de mediano plazo del componente urbano del plan, en ellas también debe establecerse la oportunidad de su revisión y actualización e igualmente, los motivos generales que a iniciativa del alcalde permitirán su revisión parcial. En consecuencia, además de las regulaciones que por su propia naturaleza quedan contenidas en esta definición, hacen parte de las normas urbanísticas:</p>	Las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas para los procesos de edificación.
	La determinación de las zonas de renovación, juntamente con la definición de prioridades, procedimientos y programas de intervención.
	La adopción de programas, proyectos y macroproyectos urbanos no considerados en el componente general del plan.
	Las características de la red vial secundaria, la localización y la correspondiente afectación de terrenos para equipamientos colectivos de interés público o social a escala zonal o local, lo mismo que la delimitación de espacios libres y zonas verdes de dicha escala.
	Las especificaciones de las redes secundarias de abastecimiento de los servicios públicos domiciliarios.
	Las especificaciones de las cesiones urbanísticas gratuitas, así como los parámetros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero o en terrenos, si fuere del caso.
	El señalamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como macroproyectos o actuaciones urbanísticas en áreas con tratamientos de conservación, renovación o mejoramiento integral para las cuales se contemplen normas específicas a adoptar y concertar, en su oportunidad, con los propietarios y comunidades interesadas, estableciendo los parámetros, procedimientos y requisitos que deben cumplirse en tales casos excepcionales.
	Las demás previstas en la presente Ley o que se consideren convenientes por las autoridades distritales o municipales
<b>NORMAS COMPLEMENTARIAS</b>	
<b>Definición</b>	<b>Ámbito de aplicación</b>
<p>Se trata de aquellas relacionadas con las actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones contempladas en los componentes general y urbano del plan de ordenamiento, y que deben incorporarse al Programa de ejecución que se establece en el artículo 18 de la presente ley.</p>	La declaración e identificación de los terrenos e inmuebles de desarrollo o construcción prioritaria.
	La localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo.
	Las normas urbanísticas específicas que se expidan en desarrollo de planes parciales para unidades de actuación urbanística y para otras operaciones como macroproyectos urbanos integrales y actuaciones en áreas con tratamientos de renovación urbana o mejoramiento integral, que se aprobarán de conformidad con el artículo 27 de la presente Ley.
	<b>Parágrafo.</b> (sic) Las normas para la urbanización y construcción de

<p>También forman parte de este nivel normativo, las decisiones sobre las acciones y actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser ejecutadas en el corto plazo y todas las regulaciones que se expidan para operaciones urbanas específicas y casos excepcionales, de acuerdo con los parámetros, procedimientos y autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales.</p> <p>Entre otras, pertenecen a esta categoría:</p>	<p>vivienda no podrán limitar el desarrollo de programas de vivienda de interés social, de tal manera que las especificaciones entre otros de loteos, cesiones y áreas construidas deberán estar acordes con las condiciones de precio de este tipo de vivienda.</p> <p><b>Parágrafo 2°.</b> Los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos no podrán establecer usos compatibles entre servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines, con usos para vivienda y dotacionales educativos. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un término no mayor de sesenta (60) días.</p>
---	---

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997 y Ley 902 de 2004

Sobre las normas urbanísticas generales y complementarias se sustenta la expedición de las licencias, fundamentadas en los principios de concordancia, neutralidad, simplicidad y transparencia como lo define el artículo 100 de la Ley 388 de 1997:

1. Por concordancia se entiende que las normas urbanísticas que se expidan para una determinada área o zona del municipio deben estar en armonía con las determinaciones del plan de ordenamiento territorial, de acuerdo con los niveles de prevalencia señalados en la presente Ley.
2. Por neutralidad se entiende que cada propietario tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento normativo que cualquier otro, si las características urbanísticas de una misma zona o área de la ciudad o municipio son iguales.
3. Por simplicidad se entiende que las normas urbanísticas se elaborarán de tal forma que se facilite su comprensión, aplicación y control.
4. Por transparencia se entiende que el régimen normativo debe ser explícito y completamente público para todas las partes involucradas en la actuación urbanística y para los usuarios<sup>304</sup>

En lo referente a las normas urbanísticas inscritas dentro del PEMP, se constituye como norma de superior jerarquía<sup>305</sup>. Por consiguiente, lo aprobado hace parte integral del ordenamiento territorial, en lo relacionado con la expedición de las licencias de construcción particularmente en las acciones donde se involucre el patrimonio cultural y, “*cuando el objeto de la licencia sea una autorización de remodelación o restauración de fachadas o de demolición de un bien*

<sup>304</sup> Artículo 100, Capítulo XI Licencias y sanciones urbanísticas, Ley 388 de 1997.

<sup>305</sup> “Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente”. Inciso 2, Artículo 10, Capítulo III Planes de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997.



*inmueble considerado patrimonio arquitectónico*". El solicitante deberá adjuntar un, "*concepto favorable de la remodelación, restauración o demolición y el destino de uso expedidos por la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas sobre patrimonio existentes en el municipio o distrito*"<sup>306</sup>, en los casos que el BIC sea de ámbito nacional, el concepto le corresponde al Ministerio de Cultura. Cuando se ejecuten obras sin licencia de construcción<sup>307</sup> o intervención en inmuebles del patrimonio cultural, por parte de la autoridad competente que terminen en la

"demolición de una construcción o edificio de valor cultural, histórico o arquitectónico, se procederá de manera inmediata a la paralización de dicha actividad, y se ordenará la reconstrucción de lo indebidamente demolido, según su diseño original, la cual deberá someterse a las normas de conservación y restauración que le sean aplicables"<sup>308</sup>,

En caso de vencimiento del término señalado para el inicio de las obras de intervención conducentes a la reconstrucción o restitución del inmueble patrimonial, "*las obras se acometerán por el municipio, a costa del interesado, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 9 de 1989*"<sup>309</sup>". Estas "*disposiciones se aplicarán igualmente a los propietarios y poseedores de inmuebles de conservación cultural, histórica y arquitectónica, que incumplan con las obligaciones de adecuado mantenimiento de los inmuebles, en razón de lo cual el inmueble amenace ruina*"<sup>310</sup>, en tal caso solo podrá otorgarse licencia de reconstrucción.

---

<sup>306</sup> Dicha entidad deberá conceptuar acerca de la licencia a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Parágrafo 1, Artículo 10, Capítulo I De las licencias, Decreto 1052 de 1998 (junio 10).

<sup>307</sup> La licencia urbanística es una autorización previa para urbanizar, parcelar, subdividir o edificar un predio. Existen cinco tipos de licencias urbanísticas: de urbanización, de parcelación, de subdivisión y sus modalidades, de construcción y sus modalidades, intervención y ocupación del espacio público.

<sup>308</sup> Artículo 106, Capítulo XI Licencias y sanciones urbanísticas, Ley 388 de 1997.

<sup>309</sup> Los alcaldes municipales, el del Distrito Especial de Bogotá, o cualquier ciudadano ante solicitud a la Personería Municipal, podrán "expedir las órdenes de desocupación o lanzamiento, podrán ordenar la demolición de los bienes que se hayan construido sin permiso de autoridad competente, así como también la ejecución de las obras de conservación o restauración del bien inmueble que se estimen necesarias. Las obras que se disponga a realizar de conformidad [...] serán por cuenta del propietario del predio, en el evento que éste no las ejecute en el plazo otorgado por el alcalde, o quien haga sus veces. La administración podrá disponer su ejecución y el costo de las mismas, adicionado en un 10% por concepto de administración, se incluirá en las respectivas facturas del impuesto predial, pudiendo cobrarse por jurisdicción coactiva si es del caso". Artículo 69; Capítulo VI De las licencias y de las sanciones urbanísticas, Ley 9 de 1989.

<sup>310</sup> Artículo 106, Capítulo XI Licencias y sanciones urbanísticas, Ley 388 de 1997.

## 4.6 Conclusiones parciales

De manera preliminar se puede concluir los siguientes aspectos:

- a. El encadenamiento de la Ley de desarrollo urbano y la Ley general de cultura, a pesar de ser aprobadas el mismo año, con poca diferencia, su finalidad y propósito obedecen a dos ideas donde predomina el ordenamiento territorial sobre otras necesidades como la conservación de sectores de la ciudad y el contexto donde se localiza. En la reglamentación de ambas leyes predominan sus intereses con pocas alternativas de diálogo y convergencia entre sí. De la incomprensible relación de las leyes han surgido instituciones, programas y proyectos como los tratados, que permiten suponer que la necesidad principal para un acuerdo es un poco más de tiempo, a pesar acumular una trayectoria de 25 años.
- b. El patrón de sucesión del PEP al PEMP, instrumentos de la gestión del patrimonio urbano, evidencia sus limitaciones en un primer momento durante la transición conceptual y operativa. Con una década de aplicación del PEMP en las áreas urbanas objeto de su formulación, el sustento conceptual y operativo es insuficiente debido a la velocidad en que las transformaciones urbanas de los centros históricos ocurren. Además de las limitaciones urbanísticas del área de aplicación y la dependencia de un acuerdo con el ordenamiento, la autoridad municipal y una oportunidad genuina de adopción, caracterizada por la continuidad y el compromiso con la autonomía negada.
- c. A pesar de la existencia de los mecanismos de compensación, la poca integración funcional entre el POT y PEMP lo dejan aislado en su potencial instrumental para promover la conservación de los bienes inmuebles que hacen parte de las áreas urbanas declaradas. La oportunidad para la generación de recursos económicos para las áreas objeto de conservación, carece de desarrollo instrumental e integración debido a poca existencia de información actualizada de los inmuebles patrimoniales, así como la escasa disposición de integrar dentro del PEMP este componente generador de recursos económicos y financieros. Además, reafirma con esta actitud la necesidad de un mercado inmobiliario que requiere la participación de los BIC declarados para promover su visibilidad, vitalidad patrimonial y económica.

**Figura 4.12 Panorámica Centro Histórico del Municipio de Pore (Casanare)**



Fuente: Imagen tomada de Twitter autoría de Alcibiades Navas



## **CAPITULO V**

### **DE COYUNTURAS CRÍTICAS A SECUENCIAS DINÁMICAS: ALTERNATIVAS DE LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL PATRIMONIO URBANO EN COLOMBIA CON ENFOQUE HISTÓRICO-INSTITUCIONAL**

#### **Introducción**

La definición de las fases de preformación (1954-1980), formación (1980-1989) y bloqueo (1997-2019) de la política de protección del patrimonio urbano según el Modelo General de Dependencia de la Trayectoria (MGDT), realizada en los capítulos precedentes, establece una estructura de aproximación a las diferentes variables institucionales, instrumentales y generacionales que hacen parte constitutiva de esta categoría del patrimonio cultural con relación al contexto del desarrollo urbano y la concepción de la cultura en Colombia. En consideración a lo anterior, el presente capítulo tiene como finalidad:

- a) Formular a través del dinamismo urbano y la singularidad una alternativa de lectura e interpretación con enfoque histórico- institucional de la protección del patrimonio urbano.
- b) Proponer una aproximación a la evaluación de la política pública de protección del patrimonio urbano desde la propuesta integral del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP en adelante).
- c) Establecer las secuencias, rutinas dinámicas, inercia estructural y trayectorias dependientes como una aproximación a la interpretación de los efectos de los instrumentos de protección del patrimonio urbano en Colombia.
- d) Reconocer mediante 4 casos de estudio, -los centros históricos de los municipios de Villa de Leyva, Barichara y El Socorro-, los efectos de la aplicación y ausencia de los instrumentos de protección del patrimonio urbano, en sus trayectorias particulares. El paisaje cultural cafetero integra los centros históricos reconocidos BIC del ámbito nacional con una doble condición, su protección particular y aporte a la conservación del paisaje del cual hacen parte, es el cuatro caso de estudio.

La evaluación de los efectos de la política de protección del patrimonio urbano se realiza desde el instrumento vigente: el PEMP y específicamente desde los contenidos de la propuesta integral. La justificación para realizar una aproximación de evaluación desde este componente del PEMP, se ampara en que las propuestas de planeación, gestión y financiación se concentran en este apartado. Su función instrumental corresponde a la formulación de acciones concretas, viables y conducentes a fomentar acciones de conservación, participación ciudadana y cohesión social, como mecanismos garantes de la protección del patrimonio urbano. La propuesta integral está conformada por los siguientes aspectos: delimitación de las áreas urbanas

históricas, los criterios de valoración, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo (aspectos físico-técnicos, administrativos y financieros) y el plan de divulgación. Algunos aspectos de la propuesta integral provienen de las fases de preformación y formación como la delimitación y la norma urbana cultural establecidas en la reglamentación de finales de los años 80 e inicios de la década de los 90 del siglo XX. Los demás aspectos se originan en el PEP y posteriormente con el PEMP. Constituyen la estructura de formulación, aprobación y adopción del instrumento.

Sin embargo, el encadenamiento de los instrumentos de protección y ordenamiento territorial particular de cada municipio y ciudad con un centro histórico declarado BIC del ámbito nacional inducen un comportamiento, efectos y resultados diferenciales debido a la heterogeneidad temporal en el reconocimiento de la salvaguarda e integración de medidas de conservación del patrimonio local, pero de carácter nacional. La secuencia y orden de los instrumentos genera una interpretación de los efectos a partir de las rutinas instrumentales, institucionales y temporales de cada entidad territorial. De esta forma, se determinan 4 secuencias con orden e itinerancia instrumental con patrones similares para las ciudades y municipios que lo conforman.

La interpretación de los efectos desde la singularidad conduce a la selección de casos de estudios determinados por consecuencias reconocidas como la creación de un estilo arquitectónico en los municipios de Villa de Leyva y Barichara, mediante la aplicación y cooperación social de las normas de conservación en la escena urbana. El análisis de la trayectoria instrumental del municipio de El Socorro evidencia la formulación de medidas de conservación y protección que no fueron aprobadas. La carencia de medidas de salvaguarda que por su naturaleza jurídica fomentan la participación ciudadana, se vieron disminuidas con afectaciones visibles dentro del perímetro urbano de protección. La manipulación del área de conservación generó oportunidades inmobiliarias que hoy afectan la integridad del paisaje urbano histórico del municipio y su centro histórico. Finalmente, el paisaje cultural cafetero incluye dentro de su ámbito de aplicación municipios con centros históricos reconocidos BIC del ámbito nacional, se observa su integración instrumental a las medidas de conservación de un área de protección que supera la escala regional. Los casos seleccionados son una muestra de las diversas oportunidades de análisis que se derivan de la identificación y comprensión de la trayectoria histórico institucional.

Estos casos aportan a la comprensión de la complejidad de la práctica de la protección del patrimonio urbano en la escala municipal, territorial y regional. La diversidad de enfoques en el diálogo entre la conservación del centro histórico y el desarrollo urbano desde el ejercicio de la autonomía produce matices en la interpretación y valoración de los atributos urbanos contrastados con el ideal de desarrollo, al igual que la adaptación de los medios para la apropiación y gestión social del patrimonio. Por lo tanto, los casos abordados no pretenden agotar las alternativas de interpretación, por el contrario, simplemente esbozar nuevas líneas de investigación propuestas o derivadas de este trabajo. Las reflexiones originadas por vía de la formulación, aprobación, adopción e implementación de los instrumentos de protección del

patrimonio urbano bajo el marco jurídico, permite cuestionar la relación de la dependencia de la trayectoria como medio para identificar la rigidez o inflexibilidad de la organización (Sydow et al.,2009). En este caso, las diferentes instituciones del orden municipal, regional y nacional con sus decisiones adoptadas aportan al balance parcial del estado actual, donde subyacen matices de persistencia o determinaciones que explican otras miradas mediadas por la idiosincrasia local.

El capítulo V se estructura para demostrar que la aplicación de las medidas de protección del patrimonio urbano en el ámbito del municipio, ciudad o región goza de oportunidades de interpretación, dentro de sus efectos la idiosincrasia local aporta a la emergencia de singularidades, incluso a negarse a la aplicación de instrumentos de conservación. En ese sentido, la secuencia de los instrumentos en municipios con el mismo encadenamiento produce efectos similares proporcionales al tamaño del centro histórico. El capítulo está dispuesto por 4 apartados: el primero se dedica al dinamismo urbano y la singularidad como mecanismo de lectura a partir de las determinantes para la aproximación de la política de protección del patrimonio urbano desde la propuesta integral de PEMP. Un segundo apartado aborda los componentes de la propuesta integral: la delimitación del área afectada y la zona de influencia; los criterios de valoración y el nivel permitido de intervención, su relación con el tratamiento urbanístico. Los mecanismos de gestión y las condiciones de manejo de los aspectos físico-técnicos, administrativos, financieros y el plan de divulgación. La identificación y definición de las secuencias reactivas, rutinas dinámicas e inercia estructural y trayectorias dependientes del encadenamiento de los instrumentos de protección del patrimonio y el ordenamiento perfilan un origen tipológico de efectos; constituyen el tercer apartado. Como se ha indicado los casos de estudio seleccionados por escalas, mediante el estado de los instrumentos de protección e interacción administrativa finalizan el cuarto apartado.

## 5.1 El dinamismo urbano y la singularidad como mecanismos de lectura

La interpretación de los efectos de la política pública para la protección del patrimonio urbano se realiza por medio del conjunto de instrumentos de planeación y gestión formulados, aprobados, adoptados y aplicados a los centros históricos declarados –la reglamentación, el Plan Especial de Protección (PEP), el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP y su relación con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)- en tres vías, como propuesta metodológica:

- a) Una inicial en correspondencia con la pertinencia y apropiación del marco regulatorio como norma colectiva;
- b) Una segunda vía mediante la variación, formulación y logros presentados por el instrumento en el contexto operativo del municipio o ciudad, es decir la evaluación de su sentido en el logro de los objetivos en concordancia con el modelo de ordenamiento y desarrollo de la jurisdicción a la que corresponde su aplicación.
- c) Finalmente, el nivel institucional administrativo tanto en la promoción, control y divulgación, instancia encargada de la implementación de los discursos de protección y salvaguarda. La aproximación a la interpretación requiere considerar varios aspectos relevantes en el sentido de los posibles hallazgos.

En este horizonte, el marco legal primordialmente la declaratoria se constituye en “...*un modo particular de juridicización sobre el espacio urbano que concede un estatuto jurídico particular a ciertos edificios (monumentos) y a un espacio (centro histórico) ...*” (Melé, 2006, p.77). Además de ser la acción legítima introductoria al reconocimiento de los 45 centros históricos como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. Precisa el sentido exclusivo a este grupo de municipios o ciudades con patrimonio urbano. Por su parte la reglamentación establece un nuevo parámetro para formalizar las relaciones entre sociedad y patrimonio (Melé, 2006). La cual no fue obligatoria, por su carácter opcional o incluso excepcional para aquellas poblaciones con sectores históricos declarados que optaron por formular, aprobar y aplicar este instrumento.

El POT tiene un carácter diferente a los instrumentos dedicados a la protección del patrimonio debido al origen de su concepción dirigida al desarrollo y la competitividad urbana bajo el marco de la equidad territorial (Beuf, 2017). El proceso de formulación, aprobación e implementación tiene un carácter de obligatoriedad para todos los municipios y ciudades, lo que le confiere una condición de homogenización a la totalidad de entidades territoriales al igual que la promoción de la participación ciudadana en las diferentes etapas de su producción, generando una diferencia entre la exclusividad de PEMP y lo indispensable del POT.

El dinamismo urbano hace referencia a los cambios propios de los municipios y ciudades por el desarrollo formal e informal de su territorio, motivado por la aplicación o ausencia de los lineamientos de las políticas e instrumentos de ordenamiento y los programas de gobierno electoral. Con suma dificultad se logra la armonización entre el reto urbano y la respuesta



institucional, ya que presentan un ritmo diferente, agudizado aún más en el letargo cuando la temática a tratar es el patrimonio urbano. No es posible comprender las dinámicas urbanas solo en el sentido de aplicación de los diferentes planes y proyectos. En correspondencia el desarrollo y crecimiento urbano esperado en términos de competitividad y económica urbana, regional y provincial, surge bajo la necesidad de promover la interacción de los centros históricos protegidos con el contexto urbano inmediato, regional y lejano puesto que establece relaciones complejas incluso con el paisaje urbano, el paisaje cultural y su entorno natural, siendo de origen diverso las variables que conviven en el territorio.

En esta misma dimensión, se involucran las prácticas culturales y las expresiones propias de la representatividad del centro urbano en la dinámica económica a la que se integra el potencial turístico y las condiciones conexas de la seguridad, confort y conectividad. Estas necesidades adquieren categorías ligadas a la cultura y al municipio donde se origina, dentro marco general institucional, en el sentido de la planeación y la legislación regulada por el flujo económico, el mercado y el potencial productivo, así como factores del orden presupuestal. Si bien, el contexto de los centros históricos es eminentemente urbano su interacción sobrepasa los elementos funcionales del perímetro urbano para consolidar una relación regional, incluso con el paisaje inmediato y lejano.

La finalidad de la lectura de los efectos como resultados parciales de los instrumentos de protección del patrimonio y su respectiva interacción con los similares del ordenamiento, en concordancia con el propósito principal de los planes, es procurar interpretar el medio, cambios y atributos positivos o negativos derivados de la apropiación de mecanismos determinados por el marco legal dentro de los territorios de los centros históricos, que dependen del orden de formulación y las variaciones propias, consideras como singularidades. La búsqueda, identificación e interpretación de la trayectoria del camino en el orden de ejecución de los planes, posiblemente permite observar singularidades relacionadas con inesperados efectos o situaciones espontáneas: coyunturas críticas, rutinas y secuencias.

## **5.2 Determinantes para la aproximación a la evaluación de la política pública de protección del patrimonio urbano a través de la Propuesta Integral del PEMP**

Si bien, en el capítulo IV se aborda el PEMP como instrumento de gestión, en este apartado se analiza la propuesta integral como mecanismo mediante el cual se formulan proyectos de orden urbanístico en un contexto patrimonial. Se aborda desde los componentes del plan urbano bajo la premisa que estos apartados son un medio para evaluar la política pública de protección del patrimonio urbano, no en el sentido reduccionista de una temática tan amplia como se ha expuesto de manera exhaustiva, sino como un medio de planeación y gestión. En este sentido, la política pública abandona la posición prospectiva para transformarse en proyecto ejecutable.

La evaluación de la política pública de protección del patrimonio urbano adquiere especial importancia cuando *“las instituciones y los gobiernos contemporáneos tienden a fundamentar su legitimidad no sólo en la legalidad de sus decisiones, sino en lo que hacen, es decir en los*

*resultados*” (Roth, 2013, p. 153). Las acciones de gobierno superan en muchas ocasiones los periodos democráticos en los que se toman las decisiones, incluso las instituciones reguladoras de la implementación y operatividad de las políticas públicas se transforman, permanece en su estructura la dependencia de la trayectoria cuya observación evidencia diferentes legados institucionales que afectan el proceso de vigencia, por lo que sus resultados son diversos (Sorensen, 2011). Resultados de carácter incierto e incluso extemporáneo con respecto a los planes gubernamentales, los resultados de largo plazo generan cambios y acción sobre la sociedad urbana y el contexto. El propósito de la evaluación es comprendido *“como una práctica seria de argumentación basada en una información pertinente, que permite opinar de manera más acertada, con menos subjetividad, acerca de los efectos de las acciones públicas”* (Roth, 2013, p. 135). Los resultados de la política pública mientras permanezcan dentro de la vigencia son parciales, exploran una forma de tasación que integra las diferentes variables involucradas en la cronología de su vigor jurídico.

Un aporte a la consolidación de una teoría urbana es la movilidad de las políticas públicas, un área importante en la historia de la planificación (Sorensen, 2018). Es necesario considerar que *“las políticas públicas operan a menudo en un contexto caracterizado por la incertidumbre, la complejidad y la polarización debido tanto a la falta de conocimientos y evidencias científicas como a las diferencias de percepción de los problemas”* (Roth, 2013, p.29). Fenómeno no ajeno al corpus jurídico formulado para la protección del patrimonio urbano. La importancia de la evaluación como mecanismo para concretar a partir de un balance el estado actual y momento de su trayectoria, bajo la idea del modelo general de la dependencia de la trayectoria, propuesto por Sydow, Schreyögg, Koch (2009).

Hay tres tipos de evaluación tradicionales expuestas por Roth, el reflejo de la complejidad de la acción pública, de sus objetivos y de su interpretación aplicada a la política pública, a saber: evaluación ex ante, evaluación concomitante y evaluación ex post, que definen tres momentos o perspectivas en cada uno de ellos. En el primer caso, la *evaluación ex ante* es prospectiva, de factibilidad, fomenta herramientas para la toma de decisiones en la formulación de una política pública y de alguna manera sugiere un pronóstico sobre sus posibles efectos, su ámbito de aplicación son los estudios legislativos, proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura y de impacto ambiental (2013, p. 142-143).

La evaluación concomitante o continua, es aquella que acompaña la puesta en marcha de la acción pública, *“el objetivo es, por una parte, controlar el desarrollo de los procedimientos, y permitir la detección de problemas para realizar los ajustes a tiempo”*, la característica principal es la generación de información permanente sobre la cual se toman las decisiones, exigiendo un cronograma para la revisión controlada (Roth, 2013, p. 149).

Finalmente, la evaluación ex post, retrospectiva o a posteriori, es de uso más frecuente se *“trata de analizar los efectos de un programa o de una política pública luego de efectuada su implementación”*, la finalidad es obtener conocimiento (Roth, 2013, p. 150) y realizar un

balance final para ser aplicada en orientaciones, formulaciones o ajustes a problemas que siguen demandando de la acción de la política pública.

La evaluación de la política pública de protección del patrimonio urbano no es el objeto principal de la investigación, no obstante, la aproximación al reconocimiento de su trayectoria en términos de una aproximación a partir de los PEMP aprobados, con aproximación a la evaluación concomitante. Las escalas de aproximación a la evaluación de la política de protección se encuentran mediadas por el desarrollo de los capítulos dedicados al origen del patrimonio urbano y su política de protección (1954-1980); las reglamentaciones, fecundidad de las ideas (1980-1997) y el camino a la madurez, instrumentos, gestión y efectos (1997-2019) en correspondencia con el Modelo General de la Dependencia de la Trayectoria (MGDT). En el recorrido vital del patrimonio urbano y la política de protección subyace una valoración de actores de diversa procedencia e interacción en la conformación de la dependencia del camino. Un propósito de orden instrumental pretende valorar mediante el componente de la propuesta integral del PEMP, una aproximación a la adaptación de las medidas de salvaguarda exigidas a la singularidad de su contexto urbano.

Como la política pública de protección del patrimonio urbano se encuentra vigente por un proceso de sustitución y actualización normativa, la evaluación de sus consecuencias es necesariamente limitada. De un lado todos los centros históricos declarados cuentan con una declaratoria y, algunos con un PEMP que ha sido aprobado recientemente y su ejecución es inferior a un año. De otro lado, hay áreas patrimoniales que no cuentan aún con un PEMP aprobado, bien sea porque está en proceso o porque aún no lo han emprendido, pero en todos los municipios con centro histórico declarado se ha formulado y aprobado un POT en alguna de sus diferentes categorías.

Los contenidos obligatorios de los planes especiales establecidos por el Decreto 763 de 2009 (marzo 10) y desarrollados en la Cartilla de Formulación e Implementación<sup>311</sup>, aplicados a los PEMP formulados y aprobados al mes de junio del año 2021 son la línea referencial de los instrumentos para realizar la valoración de la política de protección. Se identifican las variables de salvaguarda activas en el corpus legal desde la declaratoria, estos elementos comunes contienen ideas que contribuyen a la conservación, protección y difusión del patrimonio urbano.

En los contenidos y temáticas que conforman la propuesta integral del PEMP se soportan los elementos básicos para que cada entidad municipal ejerza desde la autonomía, la aplicación de las medidas de protección. Se consideran medidas de protección de mayor relevancia: la delimitación del área de conservación, los niveles permitidos de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación. Es determinante la delimitación del área afectada y zona de

---

<sup>311</sup> Los contenidos obligatorios de los PEMP se encuentran descrito en el Capítulo IV, según la Cartilla de Formulación e Implementación de los Planes Especiales de Manejo y Protección. Bienes inmuebles de interés cultural. (Mincultura, 2011). Los contenidos se concentran en la Fase 1 Análisis y diagnóstico y Fase 2 Propuesta Integral.

influencia, debido a que le asigna los perímetros y tratamientos urbanísticos al centro histórico, derivan en los niveles permitidos de intervención en los inmuebles según su localización dentro del área declarada. Estas medidas desencadenan intereses relacionados con el valor del suelo, beneficios tributarios, oportunidades inmobiliarias, además de condiciones de valorización del contexto inmediato e incluso del conjunto urbano en relación con su territorio rural y regional, siendo uno de los factores de mayor sensibilidad al interior del PEMP y el POT.

Propiamente relacionada con la gestión y el manejo de las áreas delimitadas como centros históricos se encuentran tres dimensiones:

- a) Los aspectos físico-técnicos responsable *“de las acciones y proyectos urbanos y/o arquitectónicos que deban realizarse para solucionar las problemáticas del BIC”* mediante la aplicación de instrumentos de planeación y gestión, la normativa urbanística y acciones urbanas vinculadas con el espacio público, movilidad, vivienda, equipamientos, turismo y los demás pertinentes (Mincultura, 2013).
- b) Los aspectos administrativos promueven la creación o fortalecimiento de las instituciones responsables del manejo y la sostenibilidad administrativa del centro histórico. El reconocimiento de su naturaleza jurídica, competencias y capacidad financiera según la orientación definida en el PEMP, hacen parte de este componente.
- c) Los aspectos financieros definen los recursos económicos y mecanismos de financiación para estructurar, viabilizar y ejecutar los proyectos inscritos en el PEMP, según el esquema de operación y cierre financiero más conveniente a las temporalidades señaladas para ser integradas a los planes de desarrollo en los periodos de gobierno local necesarios durante la ejecución de los proyectos en el corto, mediano y largo plazo según su programación (Mincultura, 2013).

La condición pública y estratégica del PEMP no solo dentro del centro histórico sino en el territorio, lo hace un instrumento productor de oportunidades derivadas de la formulación eficiente e interpretación correcta en términos del beneficio común. El seguimiento es un componente innovador en términos de administración y gestión, se constituye en un indicador del impacto y efectividad del plan.

Este importante paso histórico, nos ha permitido superar presupuestos conservacionistas, que sólo consideraban la idea de monumento y, por ampliación, la de tipología arquitectónica, en su calidad de objetos físicos con los que identificar al ámbito de intervención en la ciudad, nos coloca frente a una nueva actitud metodológica y de proyecto a la hora de enfrentarnos a los problemas que se derivan de la conservación y recuperación del patrimonio edificado (Álvarez, 2006, pp.39-40).

**Figura 5.01 Centro Histórico de la ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar)**



Fuente: Imagen tomada de ddailymag.com

### **5.2.1 La delimitación de áreas urbanas históricas: procedencia y sentido del área afectada y zona de influencia.**

La delimitación de las áreas patrimoniales fue sugerida por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En el artículo 3, menciona: “... *incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar y delimitar los diversos bienes situados en su territorio...*”<sup>312</sup> relacionados con el patrimonio cultural y natural. No fue de obligatorio cumplimiento para Colombia sino hasta su adhesión en 1983<sup>313</sup>, mediante la Ley 45 del mismo año (Barbosa, 2001, p. 81; Garavito, 2006, p.174). En este sentido, Unesco promueve la

---

<sup>312</sup> Artículo 3, I. Definiciones del patrimonio cultural y natural. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Unesco 1972.

<sup>313</sup> La Ley 45 de 1983 (diciembre 30), “*por medio de la cual se aprueba la "Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural", hecho en París el 23 de noviembre de 1972 y se autoriza al Gobierno Nacional para adherir al mismo*”, fue votada positivamente en el último momento por el Congreso de la República, ya que de esto dependía la Inscripción del puerto, plaza y fortificaciones de Cartagena de Indias, en la Lista del Patrimonio Mundial (Isaza,1999, P. 100), aprobado el 1 de noviembre de 1984 en Buenos Aires Argentina.

definición de límites como un requisito indispensable para protección de los bienes culturales, indica que el límite debe establecer las áreas y atributos tangibles, expresión directa del bien, además de una zona de amortiguación cuando se requiera la cual tendrá uso y desarrollo restringido a condiciones jurídicas previamente establecidas (Unesco 2005, p. 60). Uno de los principios ordenadores de los centros históricos es la delimitación, comprendida como un acto de política urbana, por tanto, es un hecho político de poder (Carrión, 2010, p.33). Por consiguiente, *“localizar y delimitar el área considerada histórica significa investigar y “codificar” la “forma urbis” existente en el momento del paso de la ciudad a organismo urbano”*, objeto de las políticas de conservación (Ciardini & Falini, 1978, p.104). El reconocimiento de patrimonio cultural a un área de la ciudad, lo otorga la sociedad, siendo un derecho ejercido desde el reconocimiento ciudadano (Hardoy & Gutman, 1992).

No obstante, previamente la Ley 163 de 1959 en su artículo 3, determina que *“...El Consejo de Monumentos Nacionales, delimitará la extensión superficiaria de las reservas nacionales que deban hacerse en los monumentos...”*<sup>314</sup>, donde se categorizan los *“monumentos inmuebles, los de origen colonial y prehistórico”*, al igual que los *“...íntimamente vinculados con la lucha de la Independencia y con el periodo inicial de la organización de la República.”*<sup>315</sup>.

Otro indicio sobre la extensión de los perímetros y características de los elementos contenidos dentro de la delimitación de las áreas declaradas monumento nacional, son aquellas definidas y por las cuales *“...se entenderá por sectores antiguos las calles, plazas, plazoletas, murallas y demás inmuebles originarios de los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX...”*<sup>316</sup> según lo indica el Decreto 264 de 1963. Las leyes han pasado de la preservación de los monumentos históricos aislados al establecimiento de zonas de protección en los centros históricos (Melé, 2006, p. 79). Esto requiere un esfuerzo colectivo, especialmente el institucional, para la comprensión del concepto de bien colectivo, con beneficio de uso público (Alfonso, 2009). De tal forma *“...los bienes de interés cultural que conforman el patrimonio cultural de la Nación que sean propiedad de entidades públicas, son inembargables, imprescriptibles e inalienables...”*<sup>317</sup>, esto se considera en el año 1997 mediante el establecimiento de medios de financiación, para lo cual la Ley 1185 de 2008, permite en casos excepcionales a las entidades propietarias de bienes públicos previa autorización del Ministerio de Cultura, a ofertarlos en comodato a entidades privadas sin ánimo de lucro, hasta por cinco años prorrogables según el marco legal de regulación<sup>318</sup>.

Según Patrice Melé *“...un espacio delimitado estrictamente se vuelve objeto de política, discursos y de prácticas que va mucho más allá de la política del patrimonio”*, debido en parte

---

<sup>314</sup> Artículo 3. Ley 163 de 1959 (diciembre 30): Ley de defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos nacionales. Consejo de Monumentos Nacionales.

<sup>315</sup> Artículo 2, Decreto 264 de 1963 (febrero 12).

<sup>316</sup> Parágrafo, Artículo 4. Decreto 264 de 1963 (febrero 12).

<sup>317</sup> Artículo 10, Título II Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 397 de 1997 (agosto 07).

<sup>318</sup> Artículo 6, Ley 11885 de 2008 (marzo 12), por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.

a la exposición de los valores mediados por la pérdida del anonimato que le genera la declaratoria, *"...tanto los discursos como las acciones de los poderes públicos contribuyen a reforzar la identidad del espacio..."*, (2010:214). Según Trigo, lo relacionado con *"la cuestión temática pasa también por una preocupación no sólo en un macro-nivel de estudio"*, orientado a comprender, *"...que las instituciones mismas interactúan entre sí y que cualquier cambio en las reglas del juego también cambian sus formas de interacción..."*, en sentido contrario, *"...las interacciones institucionales inciden en las reglas del juego para mantenerse estables o eliminar a otras..."* (2015:84), siempre en procura de proyectar un equilibrio medurado en su mensaje.

El centro histórico producido y constituido por el conjunto de bienes que lo integran carece de unidad, aun cuando se percibe, en comparación con el resto del espacio urbano, como un espacio donde deben aplicarse las mismas políticas, siendo su pertenencia a la especie económica de los bienes compuestos cuyos elementos conformantes son indivisibles (Alfonso, 2009, p. 148; Melé, 2010, p. 205). Lo que significa, que la suma de la representatividad de las edificaciones arquitectónicas le transfiere valor al conjunto urbano, del cual hace parte integral el espacio público y recientemente el paisaje urbano histórico. Revalida la definición restrictiva de centro histórico, de forma que

*"...la valoración del ambiente monumental..."* implica *"...la introducción de un elemento novedoso en el tratamiento del centro histórico, de un planteamiento individualizado de la restauración monumental..."* que migra a uno, *"...diferente, con un claro contenido de globalidad, en función del cual el concepto de pieza urbana, intenta superar la idea de monumento histórico, ampliando su presencia en la ciudad más allá de sus límites físicos estrictos..."* (Álvarez, 2006, p. 26).

La protección del patrimonio cultural en Colombia adquiere rango constitucional desde 1991, cuando se determina que *"...es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación..."*<sup>319</sup>, le corresponde al *"...Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo de Monumentos Nacionales, responsable de la declaratoria y del manejo de los monumentos nacionales y de los bienes de interés cultural de carácter nacional..."*<sup>320</sup>, del cual hacen parte los centros históricos declarados. Sin embargo, esta idea de protección del patrimonio es producto de los conceptos derivados del Plan de Salvaguardia de la Carta de Nairobi de 1976, así como la idea de conservación inscrita dentro de la Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas de la Carta de Washington de 1987, principalmente. Con anterioridad, en el año 1967 las Normas de Quito, recomiendan junto a la actualización del marco legal de protección del patrimonio, tres zonas claramente definidas:

---

<sup>319</sup> Artículo 8, Título I, De los principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia.

<sup>320</sup> Artículo 8, Declaratoria y manejo del patrimonio cultural de la Nación, Título II, Patrimonio cultural de la Nación, Ley 397 de 1997.

A los efectos de la legislación proteccionista, el espacio urbano que ocupan los núcleos o conjuntos monumentales y de interés ambiental deben delimitarse como sigue:

Zona de protección rigurosa, que corresponderá a la mayor densidad monumental o ambiental.

Zona de protección o respeto, con una mayor tolerancia.

Zona de protección del paisaje urbano, a fin de procurar una integración de la misma con la naturaleza circundante<sup>321</sup>.

La preocupación por delimitar los sectores antiguos en el plano de la ciudad, proviene del interés surgido en las décadas de 1920 y 1930 a raíz de las diferentes reflexiones e inquietudes en torno al reconocimiento y consolidación del patrimonio como una política nacional que coincide con la celebración del centenario de la independencia en la mayoría de los países de Iberoamérica, pero cuya consolidación se presenta en la década de 1950 con el surgimiento de políticas sobre la protección del patrimonio de edificaciones individuales con valores excepcionales, donde los conjuntos urbanos y centros históricos carecen de mecanismos para su identificación (Hardoy & Gutman, 1992). En casos excepcionales como en Colombia se hace referencia a los perímetros de los municipios declarados en los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX<sup>322</sup>. Aunque la preocupación por identificar los perímetros de conservación de las áreas históricas se centra prioritariamente en los conjuntos o sectores urbanos declarados, la carencia en la legislación también afecta a municipios y pueblos históricos poco conocidos y aislados, que derivan esta responsabilidad al poder municipal, aún sin contar con los criterios para definir el límite de las zonas patrimoniales (Hardoy & Gutman, 1992). Las consecuencias sobre la restricción al derecho de uso, afectación y provecho a los propietarios de los inmuebles contenidos, al igual que la generación de mecanismos de compensación y tarifas diferenciales tributarias que incentiven la conservación de los valores arquitectónicos de manera individual para el beneficio colectivo del conjunto urbano (Morcillo, 2007). La anotación en el folio del certificado de propiedad del bien afectado certifica la aplicación de los beneficios.

La práctica de la delimitación como mecanismo de aplicación de la normatividad exclusiva para los sectores antiguos declarados (Salazar et al., 1989), procede del reconocimiento de valores singulares agrupados dentro de polígonos cuya distinción surge de metodologías basadas en la restauración (Escovar & Cárdenas, 2018) inicialmente. Han evolucionado de manera progresiva al concepto de la revitalización, donde encuentran técnicas contemporáneas para intervenir y dinamizar el centro histórico a las oportunidades de la ciudad actual. La entrada en vigor de la Ley 397 de 1997, la delimitación se asemeja al término de “*área de influencia*”, para los predios colindantes con un “*bien inmueble de interés cultural, que pretenda realizar obras, que puedan afectar las características de éste*”, aplicable solo a las edificaciones inmediatas al bien declarado. En el mismo artículo de Régimen para los bienes de interés cultural, mediante el PEMP determina que

<sup>321</sup> Inciso 3, medidas legales, Recomendaciones (a nivel internacional), IX Instrumentos de puesta en valor, Las Normas de Quito (1967).

<sup>322</sup> Parágrafo, Artículo 4, Decreto 264 de 1963 (febrero 12).



*“...indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales correspondientes...”<sup>323</sup>.*

Sin mayor explicación a los aspectos metodológicos para la aplicación, ni determinar los criterios, alcances o restricción de los nuevos conceptos.

Como se ha mencionado, la Ley 1185 de 2008, redefine el PEMP y ratifica que *“...para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes”<sup>324</sup>*. Ninguna otra aclaración adicional a que los PEMP

*“...relativos a bienes inmuebles deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes de ordenamiento territorial [...] puede limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia, aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial...”<sup>325</sup>.*

Genera la posibilidad correctiva o de ratificación de las delimitaciones realizadas por los POT en el ejercicio de su autonomía. Sólo hasta el año 2009, se define de manera explícita el área afectada como la *“...demarcación física del inmueble o conjunto de inmuebles, compuesta por sus áreas construidas y libres, para efectos de su declaratoria como Bien de Interés Cultural...”<sup>326</sup>*; la zona de influencia se comprende como *“...la demarcación del contexto circundante o próximo del inmueble, necesario para que los valores del mismo se conserven...”*, sugiere para realizar la delimitación de la zona de influencia, *“...un análisis de las potencialidades y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, contexto urbano o rural e infraestructura...”<sup>327</sup>*. Se logra de esta forma unificar los criterios para realizar las delimitaciones de los centros históricos declarados. La delimitación de los polígonos de área afectada y zona de influencia trae consigo la responsabilidad en la formulación del PEMP al asignar el tratamiento urbanístico, uso, determinantes de edificabilidad, nivel permitido de intervención y normativa específica con cobertura para cada uno de los sectores contenidos dentro del límite realizado. Se establecen

---

<sup>323</sup> Inciso 3, artículo 11. Régimen para los bienes de interés cultural, Título II Patrimonio cultural de la Nación, Ley 397 de 1997.

<sup>324</sup> Artículo 7, Ley 1185 de 2008 (marzo 08)

<sup>325</sup> Inciso 1.3, Artículo 7, Ley 1185 de 2008 (marzo 08)

<sup>326</sup> Artículo 18, Capítulo III, Parte I, Planes Especiales de Manejo y Protección para bienes muebles. Decreto 763 de 2009 (marzo 10).

<sup>327</sup> Artículo 19, Capítulo III, Parte I, Planes Especiales de Manejo y Protección para bienes muebles. Decreto 763 de 2009 (marzo 10).

nuevas condiciones para la conservación del centro histórico e introduce parámetros de valorización, depreciación y cambio en el valor del suelo, con efectos incluso hasta el entorno regional (Alfonso, 2009).

Al cumplir un poca más de dos décadas la formulación y aprobación de los POT, se evidencian los programas<sup>328</sup> de revisión, actualización, redimensión de los componentes y contenidos de largo, mediano y corto plazo al vencimiento del término de vigencia de cada uno de ellos<sup>329</sup>. De tal forma, el Ministerio de Cultura mediante la Resolución 1359 de 2013 (mayo 2013), define la delimitación del “*área afectada y zona de influencia de los bienes de interés cultural del ámbito nacional que no cuentan con estas áreas definidas*”, para áreas urbanas y rurales de la siguiente forma:

**Tabla 5.01 Determinación del área afectada y zona de influencia de los Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional**

	<b>ÁREA AFECTADA</b>	<b>ZONA DE INFLUENCIA</b>
<b>BIC Localizado en zonas urbanas</b>	Comprendida por la demarcación física del inmueble, conjunto de inmuebles, unidad predial, o según conste en el correspondiente acto de declaratoria	Está comprendida por 100 metros lineales contados a partir de la finalización del área afectada, por cada lado para cubrir homogéneamente las esquinas, hasta formar un polígono, y toma predios completos en los casos en que estos se vean afectados parcialmente. En caso de intersecar cursos de agua, se incluye la ribera opuesta.
<b>BIC Localizados en zonas rurales</b>	Está comprendida por la demarcación física del inmueble, o conjunto de inmuebles, según conste en el correspondiente acto de declaratoria.	Está comprendida por 300 metros lineales contados a partir de la finalización de cada lado del área afectada, que se extenderán 300 metros en cada uno de los extremos de cada lado para cubrir homogéneamente las esquinas, hasta formar un polígono. En caso de intersecar cursos de agua, se incluye la ribera opuesta.

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 1, Resolución 1359 de 2013 (mayo 24)

<sup>328</sup> El Programa Nacional para la Formulación y Actualización de los Planes de ordenamiento territorial, -POT Modernos- tiene como objetivo la orientación y asistencia técnica a las entidades territoriales en la actualización e implementación de lo POT, así como la formulación de los Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) y Plan de Ordenamiento Departamental (POD) con el fin de contar con una nueva generación de instrumentos de ordenamiento territorial eficaces y con altos estándares de calidad para fomentar la planeación, gestión y financiación del desarrollo territorial, para lo cual se formula el Conpes 3870, aprobado el 24 de octubre de 2016.

<sup>329</sup> El programa de POT Modernos, establece la intervención de entidades territoriales bajo un enfoque de focalización y demanda, en dos fases iniciales entre 2016 y 2018, y en fases subsiguientes según los requerimientos de actualización de los municipios y departamentos. En la primera fase se intervendrán los planes de ordenamiento de 108 municipios, 12 departamentos y 5 áreas metropolitanas. En la segunda fase se contempla la participación de 145 municipios y 10 departamentos (Conpes 3870, p. 4)

Aunque la medida tiene carácter transitorio para la delimitación del área afectada y la zona de influencia de los bienes de interés cultural del ámbito nacional que no cuentan con perímetro reconocido. Se definen “...mediante un estudio específico y su correspondiente acto administrativo o con la aprobación de un Plan Especial de Manejo y Protección, cuando el BIC es del ámbito nacional...”<sup>330</sup>, cuando así lo requiera. La delimitación debe ser “...acogida por cada uno de los entes territoriales, territorios indígenas y de las comunidades negras...”<sup>331</sup>, incluye de esta forma la totalidad de las categorías de dominio del territorio.

El acto administrativo de declaratoria estimado en el Decreto 1080 de 2015, debe incluir entre otros aspectos “... la delimitación del área afectada y la zona de influencia, junto con la indicación de las matrículas inmobiliarias en el caso de bienes inmuebles...”<sup>332</sup>, esto con el fin de realizar la anotación en el folio de propiedad del inmueble<sup>333</sup>. En relación con la especificidad de la delimitación dentro del mismo acto administrativo, se incluye la definición “...del área afectada y de la zona de influencia del BIC, con la identificación de los inmuebles que los conforman, mediante su ubicación, nomenclatura, folio de matrícula y registro catastral...”<sup>334</sup>.

Finalmente, el Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26), define el área afectada y zona de influencia y la aplicación de la delimitación en calidad

*“...de medida transitoria, hasta que se definan el área afectada y la zona de influencia de cada BIC [del ámbito nacional] mediante un estudio específico y su correspondiente acto administrativo o con la aprobación de un PEMP cuando el BIC lo requiera...”<sup>335</sup>.*

---

<sup>330</sup> Artículo 3, Resolución 1359 de 2013 (mayo 24).

<sup>331</sup> Artículo 2, Resolución 1359 de 2013 (mayo 24).

<sup>332</sup> Inciso 2, artículo 2.4.1.9 Contenido del acto administrativo de declaratoria. Título I Bienes de Interés Cultural –BIC-, Decreto 1080 de 2015 (mayo 26).

<sup>333</sup> “...Cuando se trate de bienes inmuebles, la autoridad competente deberá remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos copia del acto de declaratoria y de aprobación del PEMP, si fuere pertinente, para efectos de su registro en é/los respectivo(s) folio(s) de matrículas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la declaratoria. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7.º de la Ley 1185 de 2008, este tipo de inscripciones no tiene ningún costo. Del mismo modo deberá procederse en caso de revocatoria de la declaratoria...”. Tomado del párrafo, artículo 2.4.1.9 Contenido del acto administrativo de declaratoria. Título I Bienes de Interés Cultural –BIC-, Decreto 1080 de 2015 (mayo 26).

<sup>334</sup> Inciso 5, Artículo 2.4.1.1.11 Contenido de resolución que aprueba el PEMP. Capítulo I De los Planes Especial de Manejo y protección –PEMP-, Decreto 1080 de 2015.

<sup>335</sup> Artículos 2.4.1.1.16 del Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26)

**Tabla 5.02 Definición de Área afectada y Zona de Influencia y aplicación de a BIC Urbanos y rural del ámbito nacional.**

	<b>ÁREA AFECTADA</b>	<b>ZONA DE INFLUENCIA</b>
<b>DEFINICIÓN</b>	<p>Es el área de interés o demarcación física del inmueble o conjunto de inmuebles, sectores urbanos o centros históricos, compuesta por sus áreas construidas y libres, para efectos de su declaratoria como BIC.</p> <p>Por la naturaleza de los BIC, el área afectada puede estar conformada por diferentes inmuebles y muebles con o sin valores culturales específicos, sin que ello represente el reconocimiento puntual de estos últimos y su manejo se reflejará en los niveles de intervención. Se entiende que los mismos brindan unidad al conjunto y su inclusión en el área afectada del BIC se realizará para mantener o recuperar las características particulares del contexto y garantizar el comportamiento y estabilidad estructural del conjunto.</p>	<p>Es la demarcación del contexto circundante o próximo al bien declarado, necesario para que sus valores se conserven. Para delimitar la zona de influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien declarado, en términos de paisaje, ambiente, contexto urbano o rural e infraestructura, y si aplica, la relación del bien con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial identificadas por la comunidad.</p>
<b>PARA LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL LOCALIZADOS EN ZONAS URBANAS:</b>	Está comprendida por la demarcación física del inmueble, el conjunto de inmuebles, la unidad predial, o según conste en el correspondiente acto de declaratoria.	Está comprendida por 100 metros lineales contados a partir de la finalización del área afectada, por cada una de sus fachadas, hasta formar un polígono, y toma de predios completos en los casos en que estos se vean afectados parcialmente. En caso de intersección con cursos de agua, se incluye la ribera opuesta.
<b>PARA LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL LOCALIZADOS EN ZONAS RURALES:</b>	Está comprendida por la demarcación física del inmueble, el conjunto de inmuebles, o según conste en el correspondiente acto de declaratoria.	Está comprendida por 300 metros lineales, contados a partir de la finalización del área afectada, hasta formar un polígono. En caso de intersección con cursos de agua, se incluye la ribera opuesta.

Fuente: Elaboración propia con base a los artículos 2.4.1.1.16 y 2.4.1.1.17 del Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26)

En el Anexo No. III “Delimitación del área afectada y zona de influencia de los 45 centros históricos BIC del ámbito nacional” (página 482 y ss.), se puede observar la delimitación del área afectada y zona de influencia de los centros históricos con PEMP aprobado.

**Figura 5.02 Centro Histórico del municipio de San Miguel de Guaduas (Cundinamarca)**



Fuente: Imagen tomada de [redturisticadepueblospatrimonio.com](http://redturisticadepueblospatrimonio.com)

### **5.2.2 De los criterios de valoración al nivel permitido de intervención**

La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural se establecen tres conceptos que en años posteriores se desarrollan y permean no solo la política de protección del patrimonio cultural nacional de los Estados miembros, sino que influyen en la orientación de las acciones encaminadas a este propósito, entre ellos el de valor universal excepcional. Se presenta como un propósito de la comunidad internacional ante la amenaza latente de pérdida del patrimonio cultural y natural. Es fundamental en la definición de los monumentos, los conjuntos y los lugares que a su vez integran el patrimonio cultural y natural, constituido por monumentos naturales, formaciones geológicas, fisiográficas y los lugares naturales (Unesco, 1972). En la misma convención se crea “*el Comité del Patrimonio Mundial*” conformado inicialmente por 15 Estados Partes, que “*aumentará hasta 21, a partir de la reunión ordinaria de la Conferencia General*”, a quienes los Estado Partes presentarán “*un inventario de los*

*bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos en la Lista del patrimonio mundial*”, conformada por los bienes del patrimonio cultural y natural según los criterios a establecer para identificar el valor universal excepcional de cada uno de ellos<sup>336</sup>. El Comité mantendrá actualizada y publicará la “*Lista de Patrimonio Mundial*”, bajo circunstancias de requerimiento, también gestionará la “*Lista del patrimonio mundial en peligro*” integrada por bienes “*cuya protección exija grandes trabajos de conservación [...] amenazados por peligros graves y precisos*” ocasionado por intervenciones de grandes obras públicas o privadas, desarrollo urbano y turístico, conflicto armado, catástrofes y todos aquellos que aumenten la vulnerabilidad del bien cultural<sup>337</sup>.

Derivado de esta responsabilidad “*se crea un Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial del Valor Universal Excepcional, denominado “el Fondo del Patrimonio Mundial”*”, constituido por aportes y contribuciones obligatorias y voluntarias de los Estados Partes, donaciones, recaudaciones administradas bajo el Reglamento Financiero de la Unesco, a la que podrán acudir los estados con patrimonio cultural en peligro, inscrito en el respectivo listado<sup>338</sup>, instrumentos imprescindibles para la protección del patrimonio mundial y natural (Van Hooff, 1994). Durante la celebración en el año 1992 del vigésimo aniversario de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, el director general crea el Centro del Patrimonio Mundial, unifica los sectores cultural y natural del secretariado de la Convención junto a la reflexión y el balance. El Comité de Patrimonio Mundial adopta la siguiente estrategia para la aplicación:

- a. Promover la identificación de sitios para la Lista del Patrimonio Mundial y asegurar la calidad la credibilidad de la Lista del Patrimonio Mundial:
- b. Fortalecer la administración de los sitios del Patrimonio Mundial:
- c. Desarrollar un sistema efectivo de seguimiento del estado de conservación de los sitios;
- d. Buscar formas de concientizar y educar al público sobre los temas relativos al Patrimonio Mundial (Isaza, 1999).

Para postular e incluir un bien de interés cultural, Unesco establece tres requisitos necesarios: a) tener un valor excepcional universal; b) tener una protección legal y gestión adecuada; c) además de autenticidad/integridad. El valor universal excepcional es definido por Unesco:

Valor universal excepcional significa una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la comunidad internacional (Unesco, 2008)

---

<sup>336</sup> Artículo 8, III Comité Intergubernamental de protección del patrimonio mundial cultural y natural. Convención

<sup>337</sup> Artículo 11, III Comité Intergubernamental de protección del patrimonio mundial cultural y natural. Convención

<sup>338</sup> Artículo 15, IV. Fondo para la protección del patrimonio mundial cultural y natural.

Tanto la definición de valor universal excepcional según los criterios de selección para la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial se determina en las Orientaciones Operacionales<sup>339</sup>, que, junto al texto de la Convención, son los principales documentos de trabajo respecto al Patrimonio Mundial.

Por lo tanto, los bienes culturales propuestos deben:

- a. representar una obra maestra del genio creador humano o;
- b. ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante un determinado periodo o en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico, o
- c. aportar un testimonio único o por lo menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización que sigue viva o que desapareció, o
- d. ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de un conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre una etapa significativa o etapas significativas de la historia de la humanidad, o
- e. constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional o del uso de la tierra, que sea representativo de una cultura o de culturas, especialmente si se han vuelto vulnerable por efecto de los cambios irreversibles, o
- f. estar asociado directa o tangiblemente con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, o con obras artísticas o literarias de significado universal excepcional (El Comité considera que este criterio no debería justificar la inscripción en la Lista, salvo en circunstancias excepcionales y en aplicación conjunta con otros criterios culturales o naturales)

Estos criterios estuvieron vigentes hasta la modificación divulgada el 2 de febrero de 2005, mediante las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial del Centro de Patrimonio Mundial, ratificada en enero de 2008 mediante el mismo instrumento de la Unesco<sup>340</sup>. Los bienes propuestos deben cumplir uno o más de los anteriores criterios, ahora integrados en un solo concepto de patrimonio cultural y natural. En el ejercicio de la autonomía de los Estados miembros para garantizar la protección del patrimonio cultural y natural, Colombia establece las directrices sugeridas por Unesco en la Ley de Cultura de 1997, desarrolladas por el Ministerio de Cultura, aplicables a los *“bienes y categorías de bienes que siendo parte del Patrimonio Cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la Colonia, la Independencia, la República y la Contemporánea, sean declarados como*

---

<sup>339</sup> Las Directrices Prácticas son el órgano periódico en el que se reflejan las decisiones del Comité del Patrimonio Mundial.

<sup>340</sup> En ambos casos se hace la siguiente advertencia: *“Anteriormente, estos criterios se presentaban en dos series distintas: los criterios (i)-(vi) aplicables al patrimonio cultural y los criterios (i)-(iv) correspondientes al patrimonio natural. La 6ª sesión extraordinaria del Comité del Patrimonio Mundial decidió fusionar los diez criterios (Decisión 6 EXT.COM 5.1)”* (Unesco, 2008, p.22)



*bienes de interés cultural*<sup>341</sup>. Sin embargo, este propósito se consolida en el año 2009, mediante el Decreto 763<sup>342</sup>, que establece los siguientes criterios y la atribución de valores:

**Tabla 5.03 Criterios de Valoración para Declarar Bienes de Interés Cultural -BIC-**

CRITERIOS DE VALORACIÓN	ATRIBUCIÓN DE VALORES
<b>1. Antigüedad:</b> Determinada por la fecha o época de origen, fabricación o construcción del bien.	<b>1. Valor histórico:</b> Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o testimonio para la reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento científico, técnico o artístico. Es la asociación directa del bien con épocas, procesos, eventos y prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, grupos sociales y personas de especial importancia en el ámbito mundial, nacional, regional o local.
<b>2. Autoría:</b> Identificación del autor, autores o grupo que hayan dejado testimonio de su producción, asociada a una época, estilo o tendencia. La autoría puede ser, excepcionalmente, atribuida	
<b>3. Autenticidad:</b> Determinada por el estado de conservación del bien y su evolución en el tiempo. Se relaciona con su constitución original y con las transformaciones e intervenciones subsiguientes, las cuales deben ser claramente legibles. Las transformaciones o alteraciones de la estructura original no deben desvirtuar su carácter	
<b>4. Constitución del bien:</b> Se refiere a los materiales y técnicas constructivas o de elaboración.	
<b>5. Forma:</b> Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien respecto de su origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con el propósito de reconocer su utilización y sentido estético	<b>2. Valor estético:</b> Un bien posee valor estético cuando se reconocen en este atributo de calidad artística, o de diseño, que reflejan una idea creativa en su composición, en la técnica de elaboración o construcción, así como en las huellas de utilización y uso dejadas por el paso del tiempo.  Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las características formales y físicas del bien y con su materialidad
<b>6. Estado de conservación:</b> Condiciones físicas del bien plasmadas en los materiales, estructura, espacialidad o volumetría, entre otros. Entre las condiciones que lo determinan se encuentran el uso, el cuidado y el mantenimiento del bien.	
<b>7. Contexto ambiental:</b> Se refiere a la constitución e implantación del bien en relación con el ambiente y el paisaje.	
<b>8. Contexto urbano:</b> Se refiere a la inserción del bien como unidad individual, en un sector urbano consolidado. Se deben analizar características tales como el perfil, el diseño, los acabados, la volumetría, los elementos urbanos, la organización, los llenos y vacíos y el color.	<b>3. Valor simbólico:</b> Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver y de sentir el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte poder de identificación y cohesión social. Lo simbólico mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memoria.

<sup>341</sup> Artículo 4, Título II Patrimonio cultural de la Nación, Ley 397 de 1997 (agosto 07).

<sup>342</sup> Decreto 763 de 2009 (marzo 10) “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material”.



<p><b>9. Contexto físico:</b> Se refiere a la relación del bien con su lugar de ubicación. Analiza su contribución a la conformación y desarrollo de un sitio, población o paisaje. Si el bien se ubica dentro de un inmueble debe analizarse si fue concebido como parte integral de este y/o si ha sido asociado con un nuevo uso y función relevantes dentro del inmueble.</p>	<p>Este valor hace referencia a la vinculación del bien con procesos, prácticas, eventos o actividades significativas para la memoria o el desarrollo constante de la comunidad.</p>
<p><b>10. Representatividad y contextualización sociocultural:</b> Hace referencia a la significación cultural que el bien tiene en la medida que crea lazos emocionales de la sociedad hacia los objetos y sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre los bienes de su hábitat toda vez que implica referencias colectivas de memoria e identidad.</p>	

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 6, Decreto 763 de 2009 (marzo 10)

En este sentido, los criterios de valoración “*son pautas generales que orientan y contribuyen a la atribución y definición de la significación cultural de un bien mueble o Inmueble*” a partir “*del análisis integral de los criterios de valoración y de los valores atribuidos*”<sup>343</sup>, desde el estudio y aplicación de técnicas científicas al inmueble o conjunto urbano objeto de valoración. En ese marco, la formulación del PEMP de los Bienes de Interés Cultural deben incluir estas medidas para garantizar las propuestas de protección y conservación del patrimonio cultural, al igual que las declaratorias posteriores al año 2009. La metodología de aplicación de los criterios permite la atribución de valores al bien mueble o inmueble objeto de análisis, en objeción a que la relación puede “*reunir todos o algunos de los valores o basarse en uno o varios de los criterios de valoración señalados [...] para ser declarado por la instancia competente como BIC del ámbito nacional o territorial*”<sup>344</sup>. De esta forma los lineamientos para reconocer la singularidad del patrimonio cultural, deja establecido que los discursos sobre el patrimonio fijan una esencia e identidad de la ciudad, a través de las normas de protección con la introducción de una nueva forma de relacionarse entre la sociedad, el patrimonio y la ciudad (Melé, 2006, p.77). Exige instituciones para mediar esta forma de relacionamiento.

### 5.2.2.1 La protección a través del nivel permitido de intervención

El nivel permitido establece la dicotomía entre la intervención de un inmueble arquitectónico y la afectación al contexto urbano, el primero supone la alteración del *genius loci* mientras el segundo pretende estabilizar el paisaje urbano, con especial acento en conceptos relacionados con la imagen de la ciudad, la memoria colectiva y preexistencias ambientales (De Gracia,

<sup>343</sup> Artículo 6. Criterios de valoración, Título II. Criterios de valoración para declarar Bienes de Interés Cultural – BIC-, Decreto 763 de 2009 (marzo 10)

<sup>344</sup> Parágrafo, artículo 6. Criterios de valoración, Título II. Criterios de valoración para declarar Bienes de Interés Cultural – BIC-, Decreto 763 de 2009 (marzo 10)

1992, p.177-178). La desagregación de las técnicas para abordar un proyecto de restauración arquitectónica y una intervención de un proyecto urbano en un contexto patrimonial, a pesar de que en su sentido profundo provenga de la misma fuente de la restauración monumental (Téllez, 1995). A este respecto, el nivel permitido de intervención establece alternativas de acción sobre el inmueble o el contexto urbano, hace parte integral de la gestión al generar valor en el sentido funcional, estético y económico mediante la determinación del límite inferior y superior para instaurar las operaciones de restauración, rehabilitación, renovación o refuncionalización en proporción a las escalas y mediante el uso de los instrumentos para su ejecución: el proyecto arquitectónico o el plan urbano (Ferrán, 1998). En ambos casos, entre los límites de intervención se establecen las categorías o niveles de injerencia, al igual que las obras permitidas por su técnica de denominación.

El nivel permitido de intervención aloja una condición en doble vía, le otorga carácter de mediación en su función operativa entre las necesidades del inmueble y el centro histórico donde se inscribe; de otra parte, introduce condiciones financieras que potencian o restringen la valorización del suelo, inmuebles y actividades dentro de los perímetros y ámbitos de su aplicación (Borrero, 2015). No obstante, su objetivo principal es definir las *“pautas o criterios relacionados con la conservación de los valores del inmueble y su zona de influencia”*, además de determinar *“el(los) tipo(s) de obra que pueden acometerse en el área afectada y su zona de influencia, con el fin de precisar los alcances de la intervención”*<sup>345</sup>. Según el Decreto 763 de 2009 y Decreto 2356 de 2019, los niveles de intervención y su correspondiente obra permitida, según la primera legislación de 2009, son:

**Tabla 5.04 Definición del nivel permitido de Intervención para el grupo arquitectónico y urbano para inmuebles y sectores patrimoniales**

<b>Nivel</b>	<b>Tipo de Obra permitida</b>
<b>Nivel 1. Conservación Integral</b>	<b>Tipos de obras permitidas en el nivel 1</b>
Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de excepcional valor, los cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En estos, cualquier intervención puede poner en riesgo sus valores e integridad, por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que se realizaron. Si el inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones, en función de promover su revitalización y sostenibilidad.	Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, consolidación y liberación.
En relación con los inmuebles del Grupo Urbano debe garantizarse la preservación del trazado, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, índices de ocupación, vías, parques, plazas y pasajes, entre otros. Se permite la modificación de los espacios	

<sup>345</sup> Artículo 20, Capítulo III, Parte I, Planes Especiales de Manejo y Protección para bienes muebles. Decreto 763 de 2009 (marzo 10).

internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales.	
<b>Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico</b>	<b>Tipos de obras permitidas en el nivel 2</b>
Se aplica a Inmuebles del Grupo Arquitectónico con características representativas en términos de implantación predial (rural o urbana), volumen edificado, organización espacial y elementos ornamentales las cuales deben ser conservadas. Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales.	Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, consolidación y liberación.
<b>Nivel 3. Conservación contextual</b>	<b>Tipos de obras permitidas en el nivel 3</b>
Se aplica a inmuebles ubicados en un Sector Urbano, los cuales, aun cuando no tengan características arquitectónicas representativas, por su implantación, volumen, perfil y materiales, son compatibles con el contexto. De igual manera, se aplica para inmuebles que no son compatibles con el contexto, así como a predios sin construir que deben adecuarse a las características del sector urbano. Este nivel busca la recuperación del contexto urbano en términos del trazado, perfiles, paramentos, índices de ocupación y volumen edificado.	Demolición, obra nueva, modificación, remodelación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural, consolidación y ampliación.

Fuente: Elaboración propia con base al Artículo 20, Decreto 763 de 2009 (marzo 10)

La asignación de tres niveles de intervención relacionados con el estado de los inmuebles le otorga al centro histórico una comprensión de valor desde la sumatoria de bienes según la condición física del BIC, siendo relevante los inmuebles arquitectónicos en el primer nivel de conservación, al contemplar la integración de la edificación con el contexto urbano inmediato en términos de composición integral del “*trazado, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, índices de ocupación, vías, parques, plazas y pasajes, entre otros*”<sup>346</sup>. En el nivel de conservación contextual la relación volumétrica del inmueble con el contexto inmediato adquiere una dimensión escénica “*en términos del trazado, perfiles, paramentos, índices de ocupación y volumen edificado*”<sup>347</sup>. Transmite una idea de paisaje compuesto por la compatibilidad de la implantación arquitectónica del inmueble y la resolución compositiva desde los parámetros normativos del predio con beneficio al conjunto urbano.

<sup>346</sup> Características en los inmuebles del grupo urbano en el primer nivel de conservación integral, según el Decreto 763 de 2009.

<sup>347</sup> Características en los inmuebles del grupo urbano en el tercer nivel de conservación contextual, según el Decreto 763 de 2009.

Los tipos de obra permitidos en los cuatro niveles de intervención son diferenciados por el grupo arquitectónico y grupo urbano, clasificación introducida por el Decreto 763 de 2009, para los bienes inmuebles para efectos de la adopción del PEMP. En el Decreto 2358 de 2019, son definidos de la siguiente manera:

**Tabla 5.05 Clasificación de categorías de bienes inmuebles para adopción del PEMP**

<b>Del Grupo Urbano</b>		
Sector urbano	Fracción del territorio de una población dotada de fisonomía, características y rasgos distintivos que le confieren cierta unidad y particularidad.	fracción del territorio dotada de fisonomía, características y rasgos distintivos que le confieren cierta unidad y particularidad. La declaratoria como sector urbano contiene a todos los predios del sector del que forman parte y su espacio público; por lo tanto, son objeto del régimen especial de protección por la declaratoria del conjunto, en este grupo se encuentran los Centros Históricos y otras fracciones del territorio.
Espacio público	Conjunto de inmuebles de uso público, y de elementos de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.	Conjunto de bienes de uso público, y de elementos de los inmuebles privados destinados, por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes
<b>Del Grupo Arquitectónico</b>		
Grupo Arquitectónico	Construcciones de arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, para el transporte y las obras de ingeniería.	Construcciones de arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, para el transporte y las obras de ingeniería.
	<b>Decreto 763 de 2009</b>	<b>Decreto 2358 de 2019</b>

Fuente: Elaboración propia con base a los artículos 15 y 16 del Decreto 763 de 2009 (marzo 10) y artículo 2.4.1.2.1 y 2.4.1.2.2 del Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26)

Como resultado de la reflexión y balance después de 10 años de aplicación de los tres niveles de intervención y sus obras permitidas en la formulación de los PEMP, surge la necesidad de integrar otros elementos significativos en la conceptualización y reasignación de intervenciones toleradas con la ayuda de una gama de técnicas desagregadas, para el grupo arquitectónico y urbano de los inmuebles contenidos en la delimitación del área afectada y zona de influencia. El Decreto 2358 de 2019, expone los niveles de conservación y obras permitidas para la nueva generación del PEMP que serán formulados en la década de los años 20 del presente siglo:

**Tabla 5.06 Definición del nivel permitido de Intervención para el grupo arquitectónico y urbano para inmuebles y sectores patrimoniales**

<b>Nivel</b>	<b>Tipo de Obra permitida</b>
<b>Nivel 1. Conservación Integral</b>	<b>Tipos de obras permitidas en el nivel 1</b>
<p>Se aplica a inmuebles de excepcional significación cultural de conformidad con el estudio de valoración respectivo, y que por ser irremplazables deben ser preservados en su integralidad. Si las condiciones de los inmuebles lo permiten; se podrán realizar ampliaciones con el objetivo de promover su revitalización y sostenibilidad.</p> <p>Respecto a los inmuebles del grupo arquitectónico, se permite la intervención de los espacios internos siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial, técnica constructiva y materialidad o la vocación de uso relacionado con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.</p> <p>Respecto a los inmuebles del Grupo Urbano debe garantizarse la preservación del trazado, de la estructura urbana; trazado, parcelación, forma de ocupación del suelo, espacios libres, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, índices de ocupación, vías, parques, plazas y pasajes, entre otros. Para los inmuebles que conforman el sector catalogado en este nivel se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad.</p> <p>Con relación a los espacios públicos localizados dentro de los sectores urbanos debe garantizarse la preservación del trazado, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, vías, parques, plazas y pasajes, monumentos en espacio público, usos relacionados con manifestaciones de PCI identificadas en el PEMP, entre otros.</p>	<p><b>Grupo arquitectónico:</b> primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento, demolición parcial para edificaciones que se ubiquen en el mismo predio y que no están cobijados por la declaratoria.</p> <p><b>Grupo urbano:</b> primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento, intervención de redes, generación de enlaces urbanos aéreos o subterráneos, instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano, expresiones artísticas y arborización, obra nueva destinada a equipamientos comunales en espacios públicos, construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares, escaleras y rampas.</p>
<b>Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico</b>	<b>Tipos de obras permitidas en el nivel 2.</b>
<p>Se aplica a inmuebles del área afectada o en zonas de influencia de BIC del grupo urbano y del grupo arquitectónico que cuentan con características representativas en términos de implantación predial (rural o urbana), volumen edificado, organización espacial, circulaciones, elementos ornamentales, disposición de accesos, fachadas, técnica constructiva y materialidad, entre otros, así como prácticas asociadas del PCI identificadas en el PEMP que deben ser conservadas. En estos inmuebles se</p>	<p><b>Grupo arquitectónico:</b> primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, reconstrucción, cerramiento.</p> <p><b>Grupo urbano:</b> primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, reconstrucción, cerramiento, intervención de redes, generación de enlaces urbanos aéreos o</p>

permite la intervención de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial y material	subterráneos, instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano, expresiones artísticas y arborización, obra nueva destinada a equipamientos comunales en espacios públicos, construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares, escaleras y rampas
<b>Nivel 3. Contextual.</b>	<b>Tipos de obras permitidas en el Nivel 3</b>
<p>Se aplica a inmuebles del área afectada o zona de influencia de BIC del grupo urbano o del grupo arquitectónico que, sin mantener valores individuales patrimoniales de especial significación, cuentan aún con características representativas que contribuyen a la consolidación de la unidad de paisaje, del contexto rural o urbano o de un conjunto arquitectónico, que han perdido la legibilidad de su distribución arquitectónica pero que mantienen elementos compositivos del volumen, por lo que se requiere conservar su implantación predial, disposición de accesos, elementos de fachadas y geometría de cubierta, así como otros elementos de valor patrimonial que aún formen parte del edificio, o prácticas asociadas del PCI identificadas en el PEMP. Los anteriores elementos deben ser originales.</p> <p>Se permite la intervención de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la volumetría del cuerpo principal, cuerpos de fachada o su autenticidad material.</p>	<p><b>Grupo arquitectónico:</b> primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, reconstrucción, cerramiento.</p> <p><b>Grupo urbano:</b> primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, reconstrucción, cerramiento, intervención de redes, generación de enlaces urbanos aéreos o subterráneos, instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano, expresiones artísticas y arborización, obra nueva destinada a equipamientos comunales en espacios públicos, construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares, escaleras y rampas.</p>

Fuente: Elaboración propia con base a los artículos 2.4.1.2.4 del Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26)

Aunque se mantienen los niveles de conservación integral y del tipo arquitectónico, el nivel contextual reconoce los inmuebles arquitectónicos y urbanos que “*sin mantener valores individuales patrimoniales de especial significación, cuentan aún con características representativas que contribuyen a la consolidación de la unidad de paisaje, del contexto rural o urbano o de un conjunto arquitectónico*”<sup>348</sup>. El reconocimiento a nuevos ámbitos de localización hasta entonces incluidos de manera intuitiva como el contexto rural amplía el perímetro de influencia del patrimonio urbano. A pesar de ampliar sus alcances en el reconocimiento de los inmuebles en el contexto urbano localizados en el área afectada o la zona de influencia, debido al notable deterioro o predios sin desarrollar de los sectores urbanos en el margen de transición de las delimitaciones patrimoniales del centro histórico y el conjunto urbano, origina un nivel 4 de intervención denominado inmuebles sin valores patrimoniales en

<sup>348</sup> Características en los inmuebles del grupo urbano en el tercer nivel de conservación contextual, según el Decreto 763 de 2009.

el ámbito arquitectónico. Busca la consolidación del tejido urbano centrado en los inmuebles sin construir y las construcciones incompatibles.

**Tabla 5.07 Definición del nivel permitido de Intervención para el grupo arquitectónico y urbano para inmuebles y sectores patrimoniales**

<b>Nivel 4. Inmuebles sin valores patrimoniales en el ámbito arquitectónico</b>	<b>Tipos de obras permitidos en el nivel 4:</b>
<p>Se aplica a inmuebles ubicados tanto en el área afectada como en la zona de influencia de los BIC del grupo urbano o arquitectónico.</p> <p>Este nivel busca consolidar las calidades que brindan unidad al conjunto y mantener o recuperar las características particulares del contexto del BIC en términos de unidad de paisaje, trazado, perfil urbano, implantación, volumen, materiales, uso y edificabilidad (alturas, paramentos, índices de ocupación y volúmenes edificados), entre otros.</p> <p>Entre los inmuebles clasificados en este nivel de intervención pueden presentarse los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmuebles sin construir.</li> <li>• Construcciones incompatibles en las que es posible la demolición y nueva construcción, dirigidas a recuperar las características particulares del contexto BIC según las Normas del PEMP</li> </ul>	<p><b>Grupo arquitectónico:</b> demolición total, obra nueva, modificación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reforzamiento estructural, consolidación y ampliación para adecuarse al contexto urbano.</p> <p><b>Grupo urbano:</b> primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, demolición total, cerramiento, consolidación y ampliación para adecuarse al contexto, intervención de redes, generación de enlaces urbanos aéreos o subterráneos, instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano, expresiones artísticas y arborización, obra nueva destinada a equipamientos comunales en espacios públicos, construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares, escaleras y rampas.</p>

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 2.4.1.2.4 del Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26)

El Decreto 2358 de 2019, integra el nivel 4 dedicado a los inmuebles sin valores patrimoniales en el ámbito arquitectónico. Son identificados aquellos inmuebles incompatibles con el contexto urbano del centro histórico, indiferentes a su localización dentro del área afectada o zona de influencia en la que se considera la demolición y construcción de nuevas edificaciones con el aporte a la consolidación del conjunto y recuperación del área patrimonial y unidad del paisaje. También se catalogan los predios sin construcción, que al hacer uso de su derecho de construcción se someten a las condiciones normativas asignadas por el PEMP.

#### **5.2.2.2 Sentido y significado del nivel permitido de intervención y su relación con el tratamiento urbanístico**

El nivel permitido de intervención presenta un significado implícito en relación con la conservación y protección de los inmuebles y conjuntos urbanos valorados como patrimonio cultural. La clasificación de categorías de los bienes inmuebles en el cual se establecen dos



límites: uno inferior “*marcado por las operaciones de restauración y rehabilitación de los objetos arquitectónicos*” mediados por la conservación integral y del tipo arquitectónico, “*en el otro extremo, en la frontera con el planeamiento urbano, donde se hacen impracticables los instrumentos propios del proyecto de arquitectura*” (De Gracia, 1992, p.189). Son próximos al nivel contextual y de inmuebles sin valores patrimoniales en el ámbito arquitectónico. La correspondencia del nivel permitido de intervención encuentra una relación directa con las operaciones admitidas para el inmueble clasificado en la categoría del grupo urbano o grupo arquitectónico, reconocido en el nivel uno de conservación integral. Denominado la modificación circunscrita, la cual “*se explica y se resume en cuanto limitado al edificio como realidad individual*”, enfocada en un edificio preciso “*se centra de la manipulación de un objeto que entra en regeneración, crece o se modifica; pudiendo abarcar un amplio espectro de posibilidades desde la restauración hasta la ampliación moderada, pasando por la transformación de su estructura interna*” (De Gracia, 1992, p. 189).

El conjunto de obras permitidas en el primer nivel de intervención se orienta a operaciones de la restauración, circunscritas en la conservación de la “*unicidad morfológica*”, donde sus límites son definidos por el propio edificio, “*bien sea en su forma actual o en su forma a reconstruir*”, configuran un paradigma de la “*reconstrucción – restauración rigurosa por una parte y desinhibida por otra*” (De Gracia, 1992, p. 191). Conceptual y operativamente aplicable a los bienes de carácter tanto del sector y espacio público urbano. Si bien, la restauración por excelencia es la intervención más próxima a la conservación, otras actuaciones como los “*primeros auxilios, reparaciones locativas, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento, demolición parcial para edificaciones que se ubiquen en el mismo predio y que no están cobijados por la declaratoria*”<sup>349</sup>, se incluyen en la modificación circunscrita, genera operaciones endógenas según De Gracia (1992:209).

Un segundo nivel denominado por De Gracia, la modificación del locus es sujeto a las intervenciones sobre ámbitos urbanos constituidos, donde la escala de referencia para evaluar el impacto se indica por el entorno del edificio o edificios en los que opera. En consecuencia, afecta el sistema de relaciones características del lugar. El locus es una noción teórica filosófica asociado al espacio existencial, conceptualmente difícil de definir, de tal forma, las intervenciones hacen referencia a la escala del proyecto de arquitectura y no tiene alcance urbanístico, con alteración sobre el ámbito urbano, “*hasta el punto de poderse hablar con propiedad de una alteración del *genius loci**”.

En el ámbito de la modificación del locus, se incluyen las obras de ampliación de dimensiones limitadas por las edificaciones existentes, conexiones para la generación de espacio público, intersticios urbanos que fomentan espacios habitables de la ciudad que hacen parte del campo perceptivo contributivos al carácter del locus (1992:215). Una constante de las intervenciones en la modificación del locus es su incidencia sobre el carácter del lugar, en diversidad de

---

<sup>349</sup> Obras permitidas en el nivel de conservación integral, conservación del tipo arquitectónico, según el Decreto 2358 de 2019.



grados, en este sentido, las obras permitidas en el nivel de conservación integral y del grupo arquitectónico en relación con el espacio urbano son la

*“generación de enlaces urbanos aéreos o subterráneos, instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano, expresiones artísticas y arborización, obra nueva destinada a equipamientos comunales en espacios públicos, construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, vías peatonales y vehiculares, escaleras y rampas”*<sup>350</sup>.

La pauta de conformación urbana es la denominación que De Gracia le asigna a un tercer nivel de intervención, en el que se *“sitúan aquellas operaciones que afectan directamente el carácter morfológico de una parte de la ciudad”*, a través de un proyecto urbano de escala variable, siendo un desarrollo superior de la modificación del locus –segundo nivel- *“por tanto bordea el terreno de la urbanística como disciplina manifiestamente disociada del proyecto de arquitectura”* (1992:230).

Los proyectos en áreas urbanas de carácter patrimonial deben cumplir dos condiciones: a) revitalizar y procurar mantener el locus del sector urbano intervenido; b) resaltar los valores arquitectónicos y urbanos a condiciones de uso, bienestar y confort urbano contemporáneo. Las escalas de intervención del proyecto urbano superan en su nivel inferior la modificación del locus, es decir, sobrepasa el ámbito y contexto del proyecto, en el nivel superior la recuperación del tejido urbano bien sea por medio de acciones de revitalización o un proyecto urbano de mediana envergadura, los cuales aportan a la conformación de la pauta en la conformación urbana (De Gracia, 1992). Que busca la interacción y consolidación de la funcionalidad urbana a través de la reafirmación del carácter morfológico del sector intervenido de la ciudad.

Pese a que los niveles de intervención propuestos por De Gracia, la modificación circunscrita, la modificación del locus y la pauta de conformación urbana aportan a la comprensión del sentido de los niveles de conservación del marco legal relacionado con el PEMP. Resulta insuficiente su operatividad, en el sentido, que requieren del aporte a la homogeneidad concedida por el tratamiento urbanístico. Por este medio se pretende consolidar los sectores en beneficio de la conservación debido al fortalecimiento u adhesión en la forma de planeación del territorio, determinada en los planes de desarrollo municipal en 1998.

Los tratamientos urbanísticos proceden de la asignación de actividades en áreas urbanas determinados en la Ley 9 de 1989, para

desarrollar los terrenos no urbanizados, construir los inmuebles no construidos, conservar edificaciones y zonas de interés histórico, arquitectónico y ambiental, reservar zonas para la protección del medio ambiente y de la ecología, delimitar las zonas de desarrollo diferido, progresivo, restringido y concertado, renovar y

---

<sup>350</sup> Obras permitidas en el nivel de conservación, según el Decreto 2358 de 2019.

redesarrollar zonas afectadas con procesos de deterioro económico, social y físico y rehabilitar las zonas de desarrollo incompleto o inadecuado<sup>351</sup>

En el año 1991 se modifica la Ley 9 de 1989, mediante la Ley 2 (enero 15). Sin embargo, la asignación de las actividades en las áreas urbanas en los planes de desarrollo se deroga por medio de la Ley 388 de 1997, sin definir de manera expresa el tipo y alcance de cada tratamiento. La única referencia se realiza en el marco de las normas urbanísticas, siendo

las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos relacionadas con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos; las que reservan áreas para la construcción de redes primarias de infraestructura vial y de servicios públicos, las que reservan espacios libres para parques y zonas verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al espacio público vinculado al nivel de planificación de largo plazo<sup>352</sup>

La categorización de los tratamientos urbanísticos se realiza a través del Decreto 879 de 1998, como parte integral del articulado del documento técnico de soporte dentro del procedimiento de adopción del POT, de la siguiente manera:

Una quinta parte que define tanto para los suelos urbanos, como de expansión y suburbanos los distintos tratamientos o potencialidades de utilización a partir de la siguiente categorización: desarrollo, consolidación, renovación urbana, conservación y mejoramiento integral, estableciendo para cada uno de ellos, sus particularidades en cuanto a localización, usos principales, complementarios y compatibles, densidades, índices básicos de edificabilidad y demás contenidos técnicos de planificación y gestión que permitan su aplicación real<sup>353</sup>.

El Decreto 075 de 2013, define los tratamientos urbanísticos, de la siguiente manera:

Son las determinaciones del plan de ordenamiento territorial, que, atendiendo las características físicas de cada zona considerada, establecen en función de las mismas las normas urbanísticas que definen un manejo diferenciado del territorio para los distintos sectores del suelo urbano y de expansión urbana. Son tratamientos urbanísticos el de desarrollo, renovación urbana, consolidación, conservación y mejoramiento integral<sup>354</sup>.

Cabe destacar que las definiciones de los tratamientos urbanísticos se desagregan en legislaciones según la temática que se pretende desarrollar entre el año 1998 y el año 2015, donde mediante el Decreto 1077 *“por medio del cual se expide el Decreto Único*

---

<sup>351</sup> Artículo 2, Capítulo I De la planificación del desarrollo municipal, Ley 9 de 1989 (enero 11).

<sup>352</sup> Inciso 1.2, Artículo 15, Capítulo III Planes de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997.

<sup>353</sup> Artículo 20, Capítulo Quinto Presentación de los Planes de Ordenamiento Territorial, Decreto 879 de 1998 (mayo 13).

<sup>354</sup> Inciso 8, Artículo 1, Capítulo I Disposiciones generales, Decreto 0075 de 2013 (enero 23).

*Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio*”. Se integran y definen los tratamientos, siendo referencia en este aspecto en la formulación de los PEMP desde este año. Sobre esta explicación el Decreto 1232 de 2020, agrega la totalidad de tratamientos urbanísticos, que serán usados en la segunda generación de los PEMP:

**Tabla 5.08 Definición de Tratamientos Urbanísticos**

<b>Tratamiento</b>	<b>Descripción</b>
Tratamiento urbanístico de Conservación	Se entiende por Conservación, el tratamiento urbanístico que por razones ambientales, históricas o arquitectónicas limita la transformación de la estructura física de áreas del municipio o distrito, de inmuebles particulares, de obras públicas y de elementos constitutivos del espacio público.
Decreto 151 de 1998 (enero 22)	
Tratamiento Urbanístico de Consolidación	Se entiende por consolidación, el tratamiento mediante el cual en determinadas áreas desarrolladas en el interior del suelo urbano se establecen las directrices para mantener las condiciones del trazado y de edificabilidad, promoviendo su equilibrio con la intensidad del uso del suelo y las infraestructuras de espacio público y equipamientos existentes.
Tratamiento Urbanístico de Desarrollo	Se entiende por Desarrollo, el tratamiento mediante el cual se establecen las directrices aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados, localizados en suelo urbano o de expansión urbana, que permiten orientar y regular su urbanización, a través de la dotación de infraestructuras, equipamientos y la generación de espacio público.
Decreto 0075 de 2013 (enero 23), Inciso 9, Artículo 1.	
Tratamiento Urbanístico de Mejoramiento Integral	Se entiende por Mejoramiento Integral, el tratamiento mediante el cual en determinadas áreas desarrolladas al interior del suelo urbano que carecen o presentan deficiencias en espacio público, servicios públicos, vías o equipamientos, se establecen las directrices que permitan completar los procesos de urbanización a fin de corregir y mejorar las condiciones físicas de estas áreas garantizando su habitabilidad.
Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana	Se entiende por Renovación Urbana, el tratamiento mediante el cual en determinadas áreas desarrolladas al interior del suelo urbano se establecen las directrices para orientar y regular su transformación o recuperación, con el fin de potenciar su ocupación, o detener y revertir los procesos de deterioro físico y ambiental, promover el aprovechamiento intensivo de la infraestructura pública existente; impulsar la densificación racional de áreas para vivienda y otras actividades; promoviendo su uso eficiente y sostenible. Este tratamiento podrá desarrollarse mediante las modalidades de reactivación, redesarrollo y revitalización.
Decreto 0075 de 2013 (enero 23); Inciso 10, Artículo 1.	

<p>Tratamiento de Renovación Urbana modalidad de Reactivación</p>	<p>Se entiende por Reactivación, la modalidad mediante la cual, en determinadas áreas desarrolladas en el interior del suelo urbano, se establecen las directrices para promover una mayor edificabilidad a la existente, si la infraestructura de vías, servicios públicos y espacio público lo permite, y estimular la generación de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de los bienes de propiedad privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos, retrocesos y demás.</p>
<p>Decreto 0075 de 2013 (enero 23); Inciso 11, Artículo 1.</p>	<p>Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o modificar los usos existentes, con el fin de apoyar la redefinición del carácter del sector. Para esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debe contener normas urbanísticas que permitan tanto el desarrollo de uno o varios predios mediante licencias de construcción sin que se requiera adelantar el trámite de Plan Parcial.</p>
<p>Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana modalidad de Redesarrollo.</p>	<p>Se entiende por Redesarrollo, la modalidad mediante la cual en determinadas áreas desarrolladas al interior del suelo urbano se establecen las directrices generales para orientar y regular la sustitución o transformación de las estructuras urbanas y arquitectónicas, mediante procesos de reurbanización que permitan generar una nueva infraestructura vial, de servicios y espacio público, así como la redefinición de la normatividad urbanística de edificabilidad usos y aprovechamientos.</p> <p>En esta modalidad, desde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se definen las directrices generales del tratamiento, que constituyen determinantes para la formulación del Plan o Planes Parciales a través del cual se desarrolla dicho tratamiento.</p> <p>La aplicación de este tratamiento implica la sustitución y/o reconstrucción total o parcial de las edificaciones existentes, recuperación y el manejo ambiental sostenible del sistema de espacio público y redes de infraestructura de acuerdo con las necesidades derivadas de las nuevas condiciones de densidad habitacional y usos del suelo, así como las características ambientales de la zona. Implica, además, la formulación de estrategias sociales para atender las necesidades de los grupos sociales actualmente localizados en el área.</p>
<p>Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana modalidad de Revitalización</p>	<p>Se entiende por Revitalización la modalidad mediante la cual en determinadas áreas desarrolladas al interior del suelo urbano se establecen directrices para promover la densificación y mezcla de usos, a través de intervenciones que promuevan el mejoramiento del entorno y de las edificaciones, así como de mecanismos que faciliten la permanencia en las áreas intervenidas de aquellos propietarios que así lo decidan.</p> <p>Para esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debe contener normas urbanísticas que permitan tanto el desarrollo de uno o varios predios mediante licencias de construcción o las determinantes para la formulación del Plan o Planes Parciales para el desarrollo de dicho tratamiento.</p>

Fuente: Elaboración propia con base en Artículo 1, Decreto 1232 de 2020 (septiembre 14)

Ahora bien, el nivel permitido de intervención encuentra una correlación con el tratamiento urbanístico y el sentido de la modificación circunscrita, la modificación del locus y la pauta de conformación urbana, propuesta por De Gracia (1992):

**Tabla 5.09 Relación de niveles de intervención, tratamiento urbanísticos y sentido**

Nivel de Intervención	Tratamiento Urbanístico	Modificación circunscrita	Modificación del locus	Pauta de conformación urbana
Nivel 1. Conservación Integral	Conservación			
Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico	Conservación / Consolidación			
Nivel 3. Contextual.	Consolidación / Renovación Urbana - Modalidad de revitalización			
Nivel 4. Inmuebles sin valores patrimoniales en el ámbito arquitectónico	Renovación Urbana – Modalidad Revitalización / Reactivación			

Fuente: Elaboración propia con base en el Artículo 2.4.1.2.4 del Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26); Artículo 1 del Decreto 1232 de 2020 y De Gracia (1992)

**Figura 5.03 Panorámica del Centro Histórico del municipio de San Sebastián de Mariquita (Tolima)**



Fuente: Imagen tomada de Twitter

### 5.2.3 Condiciones de Manejo

La gestión y administración de los centros históricos es identificada como una actividad de mayor complejidad en América Latina desde los años 90 del siglo XX, cuando el itinerario en este aspecto presenta resultados modestos en comparación a países de mayor trayectoria conforme es el caso de Italia y España (Lombardi, 1995). Esta disciplina se integra a los planes de protección desde la actualización legislativa en Colombia, a finales del mismo siglo. En esta línea, el término condiciones de manejo es asociado a la gestión de los bienes inmuebles que hacen parte de la propuesta integral del PEMP, formulada a partir de los estudios de diagnóstico, cuya finalidad es la *“conservación y sostenibilidad del BIC, de tal manera que potencie las fortalezas, aproveche las oportunidades, solucione las debilidades y elimine o mitigue las amenazas presentes en el bien”* (Mincultura, 2011, p. 41).

La procedencia de la gestión de los bienes inmuebles en el aspecto legislativo, se mencionan en la Ley 397 de 1997 y están sujetas a los contenidos del Plan Especial de Protección (PEP), el cual

*“indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales correspondientes”*<sup>355</sup>.

En la modificación y adición de la Ley 397, mediante la Ley 1185 de 2008 (marzo 12), se renuevan e integra al Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), como *“una acción necesaria para garantizar la protección y sostenibilidad en el tiempo”* del bien inmueble o mueble<sup>356</sup>. Las políticas de protección de los centros históricos surgen desde los años 80 del siglo XX, a partir de la adhesión de los Estados a los convenios de protección del patrimonio cultural y natural (Capel, 2014, p.139). Momento en que el área urbana histórica, particularmente de las ciudades de mayor tamaño en América Latina pasaba por la pérdida de la calidad de vida, la disminución de su representatividad como centralidad y erosionaba la funcionalidad con el área urbana circundante (Carrión, 2000). Manifestación proporcional a la discreta administración pública local que se debate entre prestar atención al centro patrimonial o la expansión de la periferia por fenómenos sociales vinculadas a la desigualdad y la violencia.

La gestión de los centros históricos emerge como una especialidad desligada de la ciudad, inicialmente a cargo del nivel central nacional, sujeta a los principios de la planeación urbana ante la casi inexistente política de protección del patrimonio, acentuada aún más con el surgimiento del marco organizacional de institutos dedicados a la cultura y de *“políticas públicas inscritas en el fortalecimiento de una llamada identidad nacional”* (Carrión, 2000). Es estimulada por tres momentos: a) la generación de políticas públicas para el patrimonio

---

<sup>355</sup> Artículo 11, Régimen para los bienes de interés cultural, Título II Patrimonio cultural de la Nación. Ley 397 de 1997 (agosto 07).

<sup>356</sup> Artículo 7, Ley 1185 de 2008 (marzo 12).

cultural; b) el uso por parte de las comunidades locales de los mecanismos de participación ciudadana y la necesidad estratégica de integrar nuevas fuentes económicas; c) financiación con el fin de descentralizar la responsabilidad del Estado y compartirla con la empresa privada, la sociedad civil a través de figuras de cofinanciación. Según Carrión, de esta nueva situación surgen dos posiciones: una dedicada a la rehabilitación de la gestión desde lo público, la otra a la “*transposición mecánica de la llamada modernización del Estado hacia los centros históricos (privatización)*” (2000:14). En ambos casos se sirve de un instrumento para integrar las diferentes acciones en un orden estratégico con el fin de implementar la puesta en valor del patrimonio cultural, en términos similares a los exigidos por la economía urbana de la ciudad, en la comprensión que el área patrimonial es un activo fundamental de este mercado.

El concepto de puesta en valor del patrimonio cultural presentado en las Normas de Quito de 1967 orienta su objetivo a tres grandes propósitos:

la identificación y explotación de los recursos de los países americanos al máximo potencial entre los cuales el patrimonio monumental hace parte; por medio de un proceso de revalorización, mediante la introducción de los mecanismos de productividad de riquezas inexploradas como un medio para la democratización y el disfrute de mayorías populares; finalmente, captar las plusvalías urbanas derivadas de la intervención del monumento, las cuales desbordan sus beneficios sobre el perímetro urbano, extendido sus efectos a zonas distantes de la región donde se circunscribe el patrimonio intervenido<sup>357</sup>.

Los altos costos de intervención vinculados a la generación de valor del patrimonio cultural, especialmente aquellos asociados a dotarlos de características de saneamiento, conectividad, seguridad y atractivos “*con el objetivo de asegurar el uso productivo de los monumentos y edificios históricos conservados*” (Rojas, 2001). Es necesaria la integración de diversos actores públicos y privados sobre plataformas de gestión dinámica con garantías para el uso sostenible (Hardoy & Gutman, 1992), no solo de los bienes patrimoniales, sino de los sectores urbanos con el fin de homogeneizar la valorización desde el componente estratégico. Las fuentes de financiación e inversión en los centros históricos han variado tanto en su conformación como en su procedencia. Sin embargo, han estado sujetas a las determinantes definidas en el marco institucional y las políticas públicas del patrimonio cultural. Según Carrión, se identifican tres momentos en el financiamiento de los centros históricos en América Latina: un primer momento de mecenazgo y filantropía inscrito en un momento histórico, en que las “elites locales” promovían las intervenciones en edificaciones patrimoniales de carácter civil y religioso desde la perspectiva de preservación monumental. Su impacto reducido, parcial y aislado es resultado de acciones voluntarias y no se enmarcan en una política pública general de conservación (2010:68).

Un segundo momento donde el financiamiento proviene del sector público y la “*cooperación técnica en sus múltiples expresiones*”, es predominante esta modalidad en el marco institucional

---

<sup>357</sup> Inciso 1 al 8, VI. La puesta en valor del patrimonio cultural. Normas de Quito (1967)



del Estado con la creación de institutos, ministerio de cultura, dependencias o consejos nacionales de patrimonio encargados del diseño de políticas públicas que *“buscan el fortalecimiento de la llamada identidad nacional sustentada en el hecho urbano como expresión cultural”* (Carrión, 2010, p.168). La cooperación técnica de instituciones de carácter internacional como la Unesco, *“estimulan la obtención de recursos de contrapartes locales y nacionales, públicas y privadas”*, motivado por las declaratorias de patrimonio de humanidad y el carácter de corresponsabilidad en la protección y conservación como un programa multinacional. Ninguno de los dos momentos mencionados, *“garantizan la sustentabilidad de la intervención de los centros históricos, porque no representan una política estructural y diversificada de financiamiento”*, con el posicionamiento de la cooperación internacional a manera de *“sujeto patrimonial con peso específico en la temática”* (Carrión, 2010, p.168).

Finalmente, un tercer momento se caracteriza por el crédito internacional, *“con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la cabeza”*. Es evidente un marco institucional *“en transición de lo nacional a lo local y de lo público a lo privado donde la discusión central tiene que ver con los modelos de gestión público-privado”*, mediante una marcada influencia de la organización internacional en el diseño de las políticas públicas. También se presenta una diversificación en las fuentes y modalidades de financiamiento con la presencia de grupos privados, préstamos reembolsables y no reembolsables de cooperación multilateral e inversión directa de empresas privadas con presencia internacional (Carrión, 2010, p.169).

El patrimonio cultural en Colombia, en particular los centros históricos no han sido ajenos al fenómeno generalizado en América Latina donde se introducen conceptos de *“competitividad, planificación estratégica, poder local, descentralización, globalización y cosmopolitismo”* que inicialmente desplazan a *“metropolización, periferización, planificación urbana”* (Carrión, 2001, p. 31). Vista esta percepción con la distancia de dos décadas, hoy complementan y plantean un nuevo sentido de los centros históricos no desde la visión del patrimonio sino desde la gestión como un sector integrado a las dinámicas económicas y financieras de la ciudad, amparado en ámbitos conceptuales de intervención del área histórica como la rehabilitación, la revitalización urbana y capitalización del uso del suelo con un ánimo empresarial (Borrero, 2015). La formulación del plan-programa o plan-gestión se realiza ajustado a las condiciones particulares de cada centro histórico, que es modelo de sí mismo. Eso significa que las complejidades singulares requieren respuestas originales en este mismo sentido (Bandarin & Van Oers, 2012). Dejan en evidencia mecanismos de gestión inadecuados por la idea generalizada que los contenidos universales del plan de protección se deben formular, aun cuando en muchas situaciones el reto local exige respuestas al margen de modos de manejo prefigurados, alejándose de la versatilidad de la gestión ágil anulada por manuales ajustados para un solo tipo de centro histórico. Se revalúa la forma como la política de protección pretende lograr la conservación del patrimonio urbano en condiciones cambiantes y dinámicas asincrónicas del mismo instrumento de manejo y su respectiva armonización con el ordenamiento territorial.



Las condiciones de manejo que hacen parte del PEMP son definidas por el Decreto Reglamentario 763 de 2009 de la Ley General de Cultura, como “... *el conjunto de pautas y determinantes para el manejo del inmueble, en tres (3) aspectos: Físico-Técnicos, Administrativos y Financieros, los cuales deben propender por su preservación y sostenibilidad...*”<sup>358</sup>. Síntesis de una trayectoria de influencias con el referente más cercano en la Declaración de Xi'an sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales, procedente de la 15 Asamblea de ICOMOS en China celebrada del 17 al 21 de octubre de 2005, pero no es el único, toda vez que esboza en su estructura otras recomendaciones relativas a la salvaguardia, conservación y protección de diverso origen y antigüedad.

### 5.2.3.1 Aspectos físico-técnicos

Con el ánimo de imprimir un semblante empresarial a la administración de los centros históricos los planes dedicados al área histórica se valen de los elementos de su inventario económico, fundamento sobre el cual se constituyen los activos financieros independiente del propietario de los bienes inmuebles, basado en reglas esenciales para validar los activos incluidos dentro de los perímetros. Siendo ellos la delimitación del polígono de salvaguarda, la norma, el uso, el nivel permitido de intervención, la participación con el fin de establecer las bases para las operaciones de la especulación inmobiliaria (Castillo, 2022). Todos ellos determinados e impuestos desde la institucionalidad administrativa como mecanismo para facilitar el desarrollo de las intervenciones urbanas en las áreas patrimoniales (Hardoy & Gutman, 1992). El parque inmobiliario histórico es objeto de una catalogación detallada, donde se ha “*intentado plantear la ciudad histórica, en este sentido, como algo ajeno a lo que estaba planteado fuera de ella, es decir como “reserva cultural” frente a lo que era inevitable y que sucedía más allá de sus límites*” (Álvarez, 2006, p. 66). Examinado como un conjunto urbano desde la Declaración de Ámsterdam de 1975, permite una observación en doble vía: a) la identificación de los valores patrimoniales asociados a la trama urbana y recientemente al paisaje urbano histórico, elementos fundamentales del diálogo contemporáneo en la dimensión interesalar de los fenómenos urbanos clasificados conforme a un hecho más político que cultural. b) La valoración social de las comunidades residentes obedece a la misma idea de reserva cultural, siendo quienes finalmente deben asumir la corresponsabilidad de ceder ante las propuestas económicas o asumir las restricciones de un escenario que busca mantenerse en un solo estado físico desde el planteamiento de la gestión del patrimonio urbano.

La reintegración, reutilización y revitalización de los bienes de interés cultural de carácter urbano es la “*forma más paradójica, audaz y difícil de valorización patrimonial de reintroducir un monumento en el circuito de los usos vivos*”, requiere de técnicas y “*una economía logística*”, para garantizar la conservación se apoya en la gestión o el manejo. Aporta la

---

<sup>358</sup> Artículo 21 Condiciones de manejo, Capítulo III, parte I Planes Especiales de Manejo y protección para bienes inmuebles, Decreto 763 de 2009 (marzo 10) Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.

logística administrativa, técnica y económica en el marco legal sintetizado mediante un instrumento jurídico “*que constituye el Plan de Protección y de Valorización*” el cual “*compite con la noción de protección y la pone al servicio de un concepto bueno para todo: el de desarrollo*” (Choay, 1992, pp. 199-203). Con el auspicio de los planteamientos derivados del marco territorial, principalmente

“al que debe su razón de ser, procediéndose a intervenciones concretas [...] que han dependido, en última instancia, de requerimientos impuestos por la “renta del suelo”, es decir, en razón de los beneficios consensuados que podía aportar el uso, y abuso, de los “lugares históricos” (Álvarez, 2006, p. 67).

Si bien, el PEMP después de su proceso de adopción por parte de la entidad administrativa local hace parte integral del POT, la metodología de formulación requiere la identificación de los aspectos físico-técnicos de las condiciones de manejo, los cuales son definidos por el Decreto 763 de 2009, como las

Determinantes relacionadas con usos, volumetría, alturas, índices de ocupación y construcción, accesibilidad, movilidad, parqueaderos, antejardines, aislamientos, señalización, redes de servicios públicos, equipamientos urbanos, espacio público y demás aspectos relacionados con las condiciones físicas del inmueble y su zona de influencia<sup>359</sup>,

Siendo las mismas variables que hacen parte de la tasación económica de los bienes para realizar un avalúo para determinar el precio que el mercado está dispuesto a ofertar por el inmueble. Aunque el contenido expresado en el Decreto 763 de 2009, se orienta a la identificación de las condiciones del inmueble y su contexto, en la descripción de la cartilla de “*Formulación e Implementación de los Planes Especiales de Manejo y Protección, Bienes Inmuebles de Interés Cultural*”, se amplía el campo de aplicación de las directrices del Decreto 763 para el área afectada y la zona de influencia. Además, establece diversas acciones para proyectos arquitectónicos y urbanos, con el fin de fomentar la preservación y puesta en valor:

Las acciones urbanas que deben realizarse en espacio público, en movilidad, vivienda, equipamientos, turismo u otros que se consideren pertinentes.

La normativa urbanística, donde se incluyan los tratamientos, usos, alturas, índices de ocupación, aislamientos y todos los elementos necesarios para reglamentar las intervenciones en el BIC.

Los instrumentos de gestión del suelo que permitan la ejecución de las acciones propuestas en los casos que sean pertinentes, con el objeto de que estos puedan ser integrados a los POT respectivos (Mincultura, 2011, p. 27)

---

<sup>359</sup> Inciso i, Artículo 21. Condiciones de manejo, Capítulo III, parte I Planes Especiales de Manejo y protección para bienes inmuebles, Decreto 763 de 2009 (marzo 10).

La definición de aplicación está dirigida al sector público y los mecanismos de intermediación para los aspectos físico técnico, a través de la restricción a la propiedad privada mediante el acuerdo colectivo como son la norma urbanística y los instrumentos de gestión, estos últimos pensados para el ordenamiento territorial con excepción de la compensación por tratamiento de conservación, dirigido a los bienes de interés cultural. De manera más específica, se incluye dentro de la cartilla de *“Formulación e Implementación de los Planes Especiales de Manejo y Protección, Bienes Inmuebles de Interés Cultural”*, un campo de aplicación de las directrices del Decreto 763, para el área afectada y la zona de influencia. Son:

Propuesta urbana general, que incluye la respuesta a las necesidades del conjunto urbano identificadas en el diagnóstico, y a sus equipamientos específicos.

Propuesta ambiental, que apunta a la implementación, reconstrucción y manejo de zonas de protección ambiental y de los sitios naturales incluidos en el sector de estudio.

Propuesta de espacio público y de movilidad vehicular y peatonal: accesibilidad, estacionamientos, señalización, redes de servicios públicos, etc.

Determinantes de usos y edificabilidad relacionadas con usos, volumetría, alturas, índices de ocupación y construcción, antejardines y aislamientos.

Propuesta de restauración y recuperación de bienes de interés cultural (Mincultura, 2013, p. 42)

Los aspectos físico técnicos planteados en el Decreto 763 de 2009, presentan una variación e interpretación a una escala mayor mediante la integración de instrumentos de gestión de diverso origen desarrollados en la cartilla de formulación, desmarca la posición del centro histórico como *“fragmento de la ciudad total”*, dirigida a contrastar la autonomía del sector antiguo para plantear y asumir intervenciones arquitectónicas o urbanísticas. De manera marginal y reorientada al *“planteamiento-proyecto de ciudad”*, en consideración a la propuesta urbana general, propuesta ambiental, propuesta de espacio público, movilidad vehicular y peatonal que supera la delimitación del área declarada y es reconocida como patrimonio en contraprestación a su integración con el área urbana que lo contiene (Álvarez, 2006, p. 67). La amplitud de la escala de intervención del aspecto físico técnico propone un diálogo con el ordenamiento territorial al proceder de la misma metodología y apropiación que los instrumentos y propuestas de las acciones para armonizar las relaciones históricas y funcionales, en correspondencia con el territorio que reconoce sus características patrimoniales. En este sentido, *“la interdependencia entre un centro histórico y la ciudad en general es múltiple y se produce a través de relaciones sociales y económicas muy complejas”*, mediada por la construcción de un plan-proyecto con *“ciertas precondiciones administrativas, legales, financieras y técnicas”* establecidas por una estrategia limitada en la interpretación de la coexistencia de dimensiones sociales, económicas y culturales de diversa escala físico temporal (Hardoy & Gutman, 1992, p.310-311). Mediante el Decreto 2358 de 2019 se reorientan los aspectos físico-técnicos en la comprensión de determinantes, programas, proyectos, lineamientos y reglamentaciones, entre otros, relacionados con los siguientes aspectos:

**Tabla 5.10 Aspectos físico-técnicos para condiciones de manejo para BIC del grupo arquitectónico y urbano para inmuebles y sectores patrimoniales**

<b>Componente</b>	<b>Descripción</b>
Conjunto de lineamientos y criterios de intervención	De orden arquitectónico, que orienten las acciones de protección y conservación de los bienes inmuebles
Acciones urbanas o proyectos de intervención	asociados a programas y proyectos de naturaleza pública, privada o mixta que deben realizarse en el BIC, ya sea en espacio público, en movilidad, accesibilidad, estacionamientos, señalización, redes, equipamientos, industria, comercio, bienes muebles en espacio público, infraestructura turística u otros que se consideren pertinentes.
Normativa urbanística	donde se incluyan los tratamientos, usos y edificabilidad, alturas, volumetría, antejardines, índices de ocupación y construcción, aislamientos, alineamientos, estacionamientos, englobes y todos los elementos necesarios para reglamentar las intervenciones en el BIC y su zona de influencia
Los instrumentos de gestión del suelo	que permitan la ejecución de las acciones propuestas en los casos que sean pertinentes, con el objeto de que puedan ser integrados y reglamentados en los instrumentos territoriales.
Acciones para la protección del patrimonio cultural mueble	contempla acciones de documentación, conservación, formación, investigación y apropiación social sobre monumentos en espacio público y colecciones que se ubiquen en iglesias, museos, bibliotecas, archivos, casas de cultura, cementerios u otros que se consideren pertinentes.

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 2.4.1.2.5 del Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26)

### 5.2.3.2 Aspectos administrativos

El aspecto administrativo del PEMP presenta dos dimensiones: la formulación y aprobación se enmarca en el plan nacional de recuperación de centros históricos; la adopción e implementación se delega a la administración municipal y la entidad que agremia al gestor cultural de la localidad donde se ubica el centro histórico, según lo estima la Ley 397 de 1997. Dentro de las funciones de la entidad gestora le corresponde el impulso de “...*los procesos culturales al interior de las comunidades y organizaciones e instituciones, de la participación, democratización y descentralización del fomento de la actividad cultural...*”<sup>360</sup>. A su vez, este aspecto se sitúa dentro del “*esquema de manejo administrativo del inmueble, que define y garantice un responsable que se encargue del cuidado del mismo y de la aplicación del PEMP correspondiente*”<sup>361</sup>. La responsabilidad otorgada al ente gestor le obliga a preparar una

<sup>360</sup> Artículo 28, Título III Del fomento y estímulos a la creación, a la investigación y a la actividad artística y cultural. Ley 397 de 1997 (agosto 07).

<sup>361</sup> Inciso ii, Artículo 21. Condiciones de manejo, Capítulo III, parte I Planes Especiales de Manejo y protección para bienes inmuebles, Decreto 763 de 2009 (marzo 10).

*“propuesta institucional que determine cuál es el fortalecimiento que se requiere para que la administración del BIC pueda implementar las medidas de protección del bien”* (Mincultura, 2013, p. 43). La estructura administrativa elaborada a la medida desde la perspectiva físico-técnica para el bien de interés cultural es preparada para percibir las fuentes y mecanismos de financiación. Se presumen los buenos resultados del componente administrativo, no obstante, su contundencia es subyugada al relacionamiento derivado de los compromisos políticos y la alternancia de la administración municipal según los procesos de elección popular.

La capacidad de gestión de la entidad administrativa local para el BIC declarado y propuesta en la formulación del PEMP, define *“las diferentes relaciones de competencia que deben tener las entidades públicas y privadas sobre el manejo del bien y su zona de influencia, así como los mecanismos de coordinación que sean necesarios”*, bajo la interpretación que a mayor integración de interesados públicos y privados se fortalece el sentido y acción del ente gestor. No obstante, dentro de sus propósitos se encuentra:

- a) Indicar los aspectos que deben ser fortalecidos en las entidades correspondientes, que permitan una atención sobre el BIC, así como el modelo de gestión necesario para la ejecución y seguimiento del PEMP.
- b) Definir los actos administrativos y jurídicos necesarios para el fortalecimiento institucional o para la creación y eficiencia del órgano gestor.
- c) Definir los tipos de acuerdo público privado que se puedan realizar para la ejecución de los proyectos y acciones del PEMP (Mincultura, 2013, p. 43).

El gestor del conjunto de inmuebles valorado patrimonio cultural está llamado a armonizar los diferentes mecanismos, corpus y funciones para a través de ellos orientar la protección del sector urbano histórico delimitado y su relación con el paisaje, desde la vitalidad de las acciones propuestas en el Plan (Bandarin & Van Oers, 2012). Además de:

- a) Definir, de manera específica, al responsable de los procesos de comunicación y participación ciudadana y de los mecanismos correspondientes.
- b) Definir el proceso de seguimiento de la ejecución del PEMP y a quién le compete esta responsabilidad. En este punto también hay que determinar la línea de base de indicadores de seguimiento de la aplicación del PEMP y de sus impactos (Mincultura, 2013, p. 43)

Las acciones de la administración, planeación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos del PEMP exigen la integración de entidades y organizaciones culturales comunitarias que promueven la coexistencia, al igual que la vinculación de diversas funcionalidades y actores sociales. Procuran responder a los retos y cualidades de cada uno de ellos: servicios y funciones a diversas velocidades del componente social, económico, histórico y tecnológico. La localización del centro histórico y su carácter dinámico requiere la

articulación compleja de la función de las políticas públicas del patrimonio cultural, la función del plan integrador y el resultado heterogéneo de la gestión (Carrión, 2000, p. 183). Las visiones sobre el potencial de los centros históricos se focalizan en la asociación existente entre el patrimonio construido y la población que lo habita, sus intereses no se encuentran representados en los valores culturales sino en los problemas y presiones económicas, además de las políticas estrictas de conservación (Saldarriaga, 2002). Llevan al patrimonio a un nivel de unidad económica productiva sin que la declaratoria y condiciones de protección los aislé de las características esperadas por el mercado. En ese sentido:

El patrimonio urbano representa también un importante activo inmobiliario con potencial para acoger aquellas actividades económicas y residenciales que requieren localizaciones centrales. Debidamente restaurado, tiene capacidad de generar significativas rentas inmobiliarias que reflejan las ventajas económicas de las localizaciones centrales. El efectivo aprovechamiento de este potencial requiere de una acción decisiva de conservación y rehabilitación con la participación de todos los actores interesados, el gobierno, los grupos culturales, los propietarios y los inversionistas (Rojas, 2001; p.16).

### 5.2.3.3 Aspectos financieros

El PEMP debe fijar diversas alternativas para la consecución de fuentes de recursos económicos, siendo primordial el municipio o ciudad al cual pertenece en centro histórico. El reconocimiento de *“los instrumentos de gestión del suelo tales como planes parciales, unidades de actuación urbanística, procesos de expropiación y de renovación urbana, entre otros”*<sup>362</sup>. Mecanismos susceptibles para ser desarrollados por la administración local, en la búsqueda de recursos económicos derivados de las cargas urbanísticas donde el patrimonio se constituye en una fuente de demanda. Hacen parte los planes de inversión pública y privada. Se definen los aspectos financieros del PEMP como las

*“medidas económicas y financieras para la recuperación y sostenibilidad del inmueble, que comprenden la identificación y formulación de proyectos para incorporarlo a la dinámica económica y social y determinar las fuentes de recursos para su conservación y mantenimiento”*<sup>363</sup>.

El cambio de concepción en cuanto al origen de mecanismos de financiación para los BIC, en el sentido de consecución de recursos y sostenibilidad económica y financiera, se amplían las fuentes a sectores privados y mecanismos de rentabilización de la patrimonialización. Posterior a la aprobación y adopción del PEMP, la administración municipal debe presupuestar previsiones de tipo técnico y financiero para el desarrollo e implementación de actuaciones en los inmuebles del grupo urbano. Se espera que el plan de desarrollo de los mandatarios locales

---

<sup>362</sup> Ibidem.

<sup>363</sup> Inciso III, Artículo 21, Capítulo III, parte I Planes Especiales de Manejo y protección para bienes inmuebles, Decreto 763 de 2009.

incluya vigencias económicas. En el mismo sentido, *“las entidades públicas, propietarias de bienes inmuebles declarados BIC están en la obligación de destinar recursos técnicos y financieros para su conservación y mantenimiento”*<sup>364</sup>.

A nivel de la administración municipal se incluyen los incentivos tributarios como la transferencia de derecho de construcción y desarrollo y las compensaciones alternativas. La función del aspecto financiero busca por varios medios mejorar las condiciones urbanas y salvaguardar los valores patrimoniales, mediante la generación de recursos a partir del parque inmobiliario urbano declarado (Bandarin & Van Oers, 2012). Dentro de las principales funciones se encuentra:

Hacer una propuesta de manejo económico y financiero que genere un esquema económico viable para la ejecución del PEMP, de modo que se propicie su sostenibilidad y la generación de recursos para su conservación y mantenimiento, y que adicionalmente genere beneficios para el ente territorial y para la comunidad asociada al bien. Este aspecto incluye una propuesta socioeconómica que aporte lineamientos para racionalizar y mejorar las actividades económicas en el sector, así como aspectos relacionados con la generación de empleo y demás factores (Mincultura, 2013, pp. 43-44).

La formulación del PEMP debe configurar en su propuesta un plan económico y financiero, donde se establecen desde mecanismos locales hasta la ayuda de gobiernos y organismos internacionales, con la instalación de facilidades y atractivos para la inversión privada. El PEMP cuenta con herramientas para inducir efectos económicos a través de la asignación de atributos y beneficios financieros mediante la norma, índices de construcción, índice de ocupación, usos, tratamiento y actividades (Borrero, 2015), que deben orientarse a la generación de dividendos para viabilizar los recursos para el PEMP. Dentro de ello se deben:

Identificar y formular proyectos para incorporar el BIC a la dinámica económica y social. La identificación incluye la elaboración de fichas de proyectos y programas específicos que resulten de las diferentes propuestas, los cuales deben contar con análisis de prefactibilidad económica y financiera y señalar las prioridades de ejecución. También deben incluir propuesta de manejo de proyectos turísticos para que los productos y servicios existentes se conviertan en oferta turística, de acuerdo con los atractivos presentes en el sector inmediato del BIC, y el esquema para su óptimo aprovechamiento, incluidas acciones para mitigar los impactos negativos del turismo que se hayan identificado en el diagnóstico y formas de potenciar la actividad turística en el ámbito local nacional e internacional, con énfasis en turismo cultural. Establecer el cronograma de ejecución del plan incluyendo acciones a corto, mediano y largo plazos (Mincultura, 2013, pp. 43-44).

---

<sup>364</sup> Ibidem.

En la última década, varios sectores públicos y privados se han integrado a la dinámica de financiación por medio de mecanismos usualmente dedicados a otros sectores urbanos o de obras de infraestructura como son las Asociaciones Público-Privadas (APP)<sup>365</sup>, establecidas por la Ley 1508 de 2012.

Con este mecanismo se realiza la primera infraestructura social de carácter cultural y patrimonial -proyecto del Departamento Nacional de Planeación (DNP)- realizada en dos fases: a) La primera dedicada a la estructuración técnica, legal y financiera en relación con la necesidad de operar y mantener ocho museos propiedad del Ministerio de Cultura. Dentro de ellos se encuentra el Museo Rafael Núñez en Cartagena, el Museo Antonio Nariño de Villa de Leyva, el Museo Juan del Corral en Santafé de Antioquia, el Museo General Francisco de Paula Santander en Villa del Rosario, el Museo Alfonso López en Honda, en Popayán el Museo Nacional Guillermo Valencia y la Casa Museo de Guillermo León Valencia, finalmente el Museo Antonio García en Ocaña (Hoyos, 2016, p. 48-50).

Aunque es un instrumento de vinculación de capital privado es inusual su uso para el sector cultural, con excepción del museo ubicado en Ocaña, los demás hacen parte de municipios con centro histórico declarado. Una vez lograda y estructurada la APP, es viabilizada por el Ministerio de Cultura y el DNP, dando por finalizada la primera etapa. b) La segunda fase se dedica al cierre de la gestión del proyecto para dar apertura a la licitación de operación, siendo atractivo especialmente por fundaciones dedicadas a la cultura, quienes deben proponer la atapa de preconstrucción conformada por estudios y construcción, que al culminar inicia la operación dando apertura a la funcionalidad de la APP (Hoyos, 2016, p. 53-54).

Otra fuente de financiación para los proyectos estructurados en el sector cultura, son el Impuesto Nacional al Consumo Telefonía Móvil determinados en la Ley 1819 de 2016, que *“tiene como hecho generador la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final”*<sup>366</sup>, sobre la prestación de los servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil, servicio de datos *“gravados con la tarifa del cuatro por ciento (4%) sobre la totalidad del servicio”*<sup>367</sup>.

Distribuidos según el artículo 512-2 del Estatuto Tributario de la siguiente manera:

---

<sup>365</sup> “Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio” Artículo 1, Ley 158 de 2012 (enero 10) por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones.

<sup>366</sup> Artículo 200, Parte VI Impuesto Nacional al consumo, Ley 1819 de 2019

<sup>367</sup> Ibidem



**Tabla 5. 11 Base gravable, tarifa y destinación de los servicios de telefonía, datos y navegación**

Impuesto	Distribución		Entidad
4%	70%	Programas de fomento, promoción y desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre	Coldeportes ahora Ministerio del Deporte
	30%	Programas del fomento, promoción y desarrollo de la cultura	Ministerio de Cultura
	100%	Inversión social en Deporte y Cultura	

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 512-2 del Estatuto Tributario

**Figura 5.04 Panorámica del Centro Histórico de la ciudad de Bogotá D.C.**



Fuente: Imagen tomada de es.123rf.com

#### 5.2.4 El Plan de divulgación

La finalidad del plan de divulgación a la dimensión del manejo del patrimonio es asegurar “*el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales correspondientes*”<sup>368</sup>. Ordenada por la Ley 397 de 1997 dentro del régimen para los bienes de interés cultural, junto a la delimitación del área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención se destaca como parte del PEP, esbozado para los bienes muebles e inmuebles. Dicha responsabilidad se ratifica en la Ley 1185 de 2008, el Decreto 763 de 2009 con la inclusión del mismo texto de la Ley 397 de 1997. En el año 2011, se amplía la descripción y funciones en la cartilla de formulación e implementación del PEMP. De la siguiente manera:

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para difundir las características y valores del inmueble. El objetivo principal de este plan es asegurar el respaldo comunitario a la conservación del bien y fortalecer la apropiación social del mismo. Cuando un inmueble se declare BIC, la autoridad competente deberá informar a las entidades encargadas de cultura y turismo en el departamento, municipio y/o distrito al que pertenezca, con el fin de promover su conocimiento y apropiación por la ciudadanía en general (Ministerio de Cultura, 2011, p. 29).

Esta definición orienta la formulación de los PEMP desde el año 2011. Enfoca la divulgación en tres aspectos principales: a) difusión de las características y valores de los BIC, descritos dentro del área afectada y zona de influencia; b) fortalece la apropiación social y el respaldo comunitario de residentes habituales y ocasionales del centro histórico y; c) promover dentro de los destinos del turismo y la cultura los bienes protegidos mediante de delimitación del área declarada. Los tres propósitos del plan de divulgación se enmarcan en las herramientas para la participación de la población. Según Bandarin y Van Oers, deben “*facultar a los diferentes grupos de interés a la hora de identificar los valores fundamentales de las áreas urbanas, [...] acordando acciones para salvaguardar su patrimonio y promover el desarrollo sostenible*” (2014:209).

Se prevén los planes de ampliación de red vial, la gestión del riesgo con especial atención a la “*...participación activa e implicar a sus habitantes, se debe realizar un programa de información desde la edad escolar...*”, así como facilitar “*...las acciones de las asociaciones para la conservación y adoptarse las medidas financieras apropiadas para asegurar la conservación y restauración...*”<sup>369</sup>. Integra de manera expresa la gestión y sostenibilidad para garantizar la ejecución del plan, el objetivo principal de este plan es asegurar el respaldo comunitario a la conservación del bien. Cuando un inmueble se declare BIC, la autoridad competente deberá informar a las entidades encargadas de cultura y turismo en el departamento,

---

<sup>368</sup> Artículo 11, Título II Patrimonio cultural de la Nación, Ley 397 de 1997.

<sup>369</sup> Ibidem

municipio y/o distrito en donde este se localice, para promover su conocimiento y apropiación por parte de la ciudadanía en general.

Los procesos de patrimonialización y la búsqueda de educación patrimonial parecen olvidar ese importante componente estructural de la memoria identitaria y del patrimonio cultural; quien guardó el bien, quien preservó, quien conservó, quien memorizó, fue la comunidad. Antes de las leyes, antes de la educación patrimonial, antes de los instrumentos de interpretación, la sociedad no perdió lo que no quería perder (Meneses, 2012; pp. 24-25).

La participación de la sociedad en la concepción y promoción de mecanismos e instrumentos de protección y salvaguarda del patrimonio, bajo el esfuerzo colectivo para el reconocimiento del valor del *“mensaje espiritual del pasado”*. Presente en las diferentes cartas, convenciones y tratados:

*“...la humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera como un patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad”* (Carta de Venecia, 1964).

### **5.2.5 Seguimiento y control: la incertidumbre de la ejecución**

La responsabilidad de la implementación y seguimiento del PEMP le corresponde a la autoridad distrital o municipal del centro histórico declarado, con la concurrencia de recursos provenientes de instituciones competentes del orden departamental o nacional. En tal caso, posterior a la aprobación del PEMP, quien tenga a cargo la declaratoria del BIC debe realizar visitas periódicas con el fin de verificar la ejecución del plan, mínimo una vez al año (Ministerio de Cultura, 2011, p. 53). Se establecen los mecanismos de seguimiento del PEMP, integrados al momento de la formulación para definir metas e indicadores dentro del componente del Plan de Acción y Plan de Inversiones, bajo el marco de la línea base, antes de la implementación ajustada a los propósitos de la eficiencia mediante el uso de técnicas de la gestión, para garantizar la correspondencia entre objetivos y resultados, se definen los siguientes tipos de indicadores: de impacto, de ejecución y financieros (Ministerio de Cultura, 2011).

Los indicadores de impacto se orientan a reconocer tres aspectos principales al interior de la comunidad relacionada con el BIC objeto del PEMP: a) la calidad de vida mediada por condiciones de bienestar y posibilidad de desarrollo económico; b) el patrimonio en cuanto a la recuperación física de inmuebles y espacio público e identidad cultural y, c) la institucionalidad en cuanto la planificación y control, condiciones de habitabilidad y gestión propia del BIC.

**Tabla 5.12 Indicadores de Impacto**

<b>Dimensiones</b>	<b>Indicador</b>
Calidad de vida de los habitantes	Necesidades básicas insatisfechas (NBI)
	Índice de pobreza
	Esperanza de vida
	Probación en hacinamiento
Desarrollo económico	Ingreso per cápita
	Tasa de analfabetismo
	Hogares pobres
	Empleos generados
	Oferta de vivienda
	Oferta hotelera
Recuperación del patrimonio	Recuperación de inmuebles de valor patrimonial
	Recuperación de espacios públicos patrimoniales
Recuperación de la identidad cultural	Satisfacción colectiva
	Habitantes que valoran el BIC
	Habitantes que participan en organizaciones comunitarias o sociales para la recuperación del BIC o las manifestaciones culturales inmateriales
Condiciones físicas y de habitabilidad	Distribución de usos del suelo
	Estado del espacio público (indicador cualitativo y cuantitativo)
	Condiciones de movilidad vehicular y peatonal
	Seguridad
Capacidades de planificación y control	Violaciones a la norma
	Sanciones impuestas por violaciones a la norma
	Periodicidad de seguimiento del PEMP
	Actualización catastral de BIC
Institucionalidad	Existencia de una oficina encargada del BIC
	Existencia de un ente gestor específico
	Capacidad técnica y financiera de la institución responsable
	Participación de entidades públicas en la implementación del PEMP
	Participación de propietarios en la implementación del PEMP
	Participación del sector privado en la implementación del PEMP

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Cultura (2011, p. 52)

Por su parte, los indicadores de ejecución pretenden cuantificar las acciones encaminadas al desarrollo de proyectos y medir los impactos en las comunidades de menores posibilidades con un rango de acción dentro del perímetro del BIC. En este último aspecto, por lo limitación propia de los grupos identificados: vendedores estacionarios y ambulantes, la población vulnerable desde el mismo indicador, se incluye una forma de exclusión a los diversos usuarios, se privilegia la idea de autoridad sobre el espacio público, la imagen y la sensación de seguridad al interior del área histórica declarada (Carrión, 2000). Al interior de la ejecución, se debaten dos ideas: a) la necesidad de actualizar y homologar el espacio público junto a la recuperación de inmuebles, creación de equipamientos de un lado. b) Del otro, un programa social reafirma la composición de una imagen adecuada al escenario urbano intervenido

mediante la definición de zonas de comercio permitido, beneficios y asistencia social, capacitación de usuarios; bajo un modelo complejo de estrategias y prioridades. Subyacen intenciones de fomento al turismo, creación de seguridad, condiciones de bienestar y cierta cultura postiza que resalta un vínculo digno entre el contexto físico y el usuario (Zambrano, 2022).

**Tabla 5.14 Indicadores de Ejecución**

Dimensiones	Indicador
Proyectos Físicos ejecutados	Número de proyectos ejecutados
	Correspondencia de los proyectos ejecutados con el Plan de Acción
	Espacios públicos recuperados
	Metros cuadrados intervenidos
	Inmuebles recuperados
	Equipamientos creados
Proyectos no físicos ejecutados	Empresas culturales generadas
	Personas capacitadas
	Vendedores estacionarios y ambulantes reubicados
	Población vulnerable beneficiada
	Organizaciones creadas asociadas al BIC

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Cultura (2011, p. 53)

Los indicadores de financieros son:

**Tabla 5.13 Indicadores Financieros**

Dimensiones	Indicador
Inversión pública anual	Recursos propios
	Recursos nacionales o regionales
	Recursos de subsidios
	Cooperación internacional
	Créditos
Inversión privada anual	Recursos propios
	Créditos
Recuperación de la inversión	Ventas o arriendos
	Impuestos: predial, industria y comercio
	Aprovechamiento del espacio público: Arriendo, concesión
Instrumentos de financiación	Participación en plusvalías
	Contribución de valorización
	Transferencia de derechos de construcción y desarrollo
	Compensación

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Cultura (2011, p. 53)

Aunque el propósito de indicadores es tasar la efectividad de las acciones formuladas en el PEMP, la percepción general y los resultados globales no se ven representados en ninguna dimensión del seguimiento, en comprensión a que la suma de variables, proyectos o alcances no



dan cuenta del sentido de un plan. Por el contrario, desagregar las dimensiones por temáticas, sectoriza y reduce el sentido general de los objetivos del manejo y la gestión. La vigencia de los indicadores que cumplen una década de operatividad es revaluada en el Decreto 2358 de 2019, sin mayor desarrollo en sus nuevas dimensiones. Se menciona al respecto una “*matriz de indicadores que permitan establecer las líneas estratégicas base del PEMP*”<sup>370</sup> y se ratifica en la decisión del proceso de seguimiento de la ejecución del plan:

Consiste en la construcción de la línea base para la implementación, a partir de la definición de metas e indicadores, plan de acción y plan de inversiones. Los indicadores deben corresponder a los objetivos y resultados propuestos en el PEMP y definidos como indicadores de impacto, de ejecución y financieros, entre otros<sup>371</sup>.

**Figura 5.05 Panorámica del Centro Histórico del Municipio de San Gil (Santander)**



Fuente: Imagen tomada de baricharavive.com

<sup>370</sup> Inciso 9.6, Artículo 2.4.1.2.9. Análisis y diagnóstico, Capítulo II Planes Especiales de Manejo y protección (PEMP9 para bienes inmuebles, Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26).

<sup>371</sup> Inciso 6, Artículo 2.4.1.2.10. Propuesta integral o formulación, Capítulo II Planes Especiales de Manejo y protección (PEMP9 para bienes inmuebles, Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26).

### 5.3 Aproximación a la interpretación de los efectos desde los instrumentos de protección

La diversidad de efectos en los centros históricos derivados de la política de protección del patrimonio urbano requiere una investigación dedicada a su estudio e identificación. Sin embargo, se aborda en dos sentidos: a) las secuencias, rutinas, inercias y trayectorias dependientes a partir de los instrumentos de protección y; b) La singularidad en cuatro casos de estudio. La aproximación a la comprensión de los efectos de los instrumentos de protección del patrimonio urbano procedentes del corpus legislativo en los centros históricos declarados sugiere varias perspectivas de interpretación, cuyo propósito es evidenciar la relación entre la dependencia de la trayectoria (Sorensen, 2017) y la dinámica de las rutinas (Sydow, 2020). Emergen como producto de las decisiones institucionales y su relación con el contexto, esto significa la identificación de las secuencias con ocasión de la introducción, interacción y conformación de patrones entre la complementariedad y singularidad de los mecanismos de planeación y gestión para las áreas históricas. Surgen y convergen en su propósito bajo la variable del tiempo y los resultados producto de su implementación. Los instrumentos de protección son un elemento relevante, al sintetizar en sí mismo una rutina definida como “*procedimientos operativos estándar*” (March, 1991, p. 74). Necesarios para generar la estabilidad de los procesos de las instituciones involucradas, este concepto, estimula el surgimiento de la dinámica de la rutina, considerada como “*patrones repetitivos y reconocibles de acciones interdependientes, realizadas por múltiples actores*” (Feldman, 2000).

Se reconoce la importancia de la rutina y rutinización de los procedimientos dispuestos para garantizar la eficiencia, confiabilidad, responsabilidad y legitimidad de los actos, reunidos en la aceptación colectiva del marco legal, sus mecanismos y disposiciones (Mahoney & Schensul, 2006). En esta condición, subyace el riesgo asociado a que las organizaciones o subunidades organizacionales se vuelvan inertes, persistentes, difíciles de adaptar a circunstancias cambiantes, sumado a estas variables las rutinas en las relaciones interorganizacionales (Feldman & Pentland, 2003). Usadas regularmente para arreglos o ajustes entre instituciones de diversa cobertura e influencia -nacional o internacional- lo que hace aún más inerte o persistente la rutina (Sydow, 2020). El proceso de formulación, aprobación e implementación de los instrumentos de protección del patrimonio urbano, facilitan la retroalimentación de su función en doble vía: por un lado, se constata el desempeño a partir de la aplicación en el ámbito de la conservación. De otro lado, su relación con el sentido jurídico del corpus legal que los origina y la política pública en que se enmarcan, desencadenan un “*mecanismo interno de reproducción rutinaria*” (Pierson, 2017). En consecuencia, tales mecanismos conectan la historia mediante estructuras y artefactos desarrollados durante el curso de conformación de la ruta del camino – *path dependence*-, esto denota que la rutina está ligada y subordinada a la historia previa (Sydow, 2020). Además de vincular una fuente potencial de inercia y persistencia para la institución.

Las rutinas generan hábito e inercia en su procedimiento a la luz de sus resultados y el proceso realizado facilita la comprensión de los efectos desde el momento del surgimiento hasta el

origen de su causa. Crea una retrospectiva dinámica, dirigida a la comprensión de las interrelaciones entre la estructura e interfaces generadoras del comportamiento con la interacción de actores, decisiones, instrumentos e instituciones mediados por el tiempo. Este último caracterizado como estabilizador de la trayectoria. La lectura en retrospectiva evidencia la variación y cambio, al igual que el carácter generativo e improvisador inherente a las rutinas (Feldman & Pentland, 2003).

Los efectos suponen una correspondencia con una sucesión de hechos generadores de carácter singular y otros de carácter genérico que incluso superan el ámbito local, adquieren una condición global y versátil de aplicación común a situaciones de orden universal; sus matices explican con suficiencia la rutina de las dependencias profundas de su estado actual. Esta visión de la dinámica de la rutina se respalda en la utilidad *“porque, en contraste con la postura clásica, la dependencia de la ruta [institucional] no se considera un resultado probable de la rutinización que no merezca una explicación específica”* (Sydow, 2020, p. 12). Aunque el carácter general de los *“efectos institucionales”* son difundidos como un hecho genérico, en ellos, surgen condiciones emergentes únicas, con arraigo más estrecho que flexible en el contexto (inter) institucional y dependiente de su propia rutina (Sydow, 2020, p. 12).

Los desarrollos más recientes entre las dos líneas de investigación: la teoría de la dependencia del camino y la dinámica de la rutina, permiten que la conexión conceptual entre ellas sea complementaria. Además de incentivar una conversación que involucre los dos campos con arreglo a los hechos probables para explicar la dualidad de la estructura, acciones y resultados de las instituciones (Sydow, 2020). La relación intrínseca entre la dependencia del camino y la dinámica de rutina es referencial en la aproximación, identificación e interpretación desde los instrumentos de protección del patrimonio urbano. Una lectura de los efectos a partir del orden de surgimiento e implementación del encadenamiento del patrimonio urbano y la política de protección, como una alternativa para comprender el sentido procedente de las acciones determinadoras.

Se esboza la dependencia del camino en la política pública de protección del patrimonio urbano entre el año 1954 y 2019. El orden de surgimiento y aplicación de los instrumentos de protección del patrimonio urbano permite observar el proceso interno de encadenamiento de la dependencia del camino mediante rutinas que, aunque pueden tener un carácter lineal, produce efectos no deseados, inesperados o emergentes dentro de las reglas de significación y legitimación. Son relevantes dentro de la creación, transformación y reproducción del mecanismo de refuerzo de la misma institución y el proceso en sí, desde la perspectiva de rutina y dependencia dinámica (Schreyögg, 2009). Las consecuencias son producto de la interacción entre estrategias, prácticas y circunstancias sometidas a las decisiones institucionales.

De tal forma, la caracterización de los resultados de los instrumentos de protección puede obedecer a condiciones de incertidumbre, por los diversos factores esenciales involucrados en la compleja relación de variables tanto de la rutina como de la dependencia. A pesar de ello, la identificación de los elementos principales estructurales permite intuir ideas esenciales



predominantes en cada una de las trayectorias emergentes. Los supuestos desde los cuales se observan las consecuencias de fenómenos como la urbanización, la globalización, el desarrollo urbano, la gestión en las ciudades históricas y centros urbanos patrimoniales proceden de la catalogación de las temáticas incluidas en las declaraciones de las cartas internacionales. Estas establecen los mecanismos para la salvaguarda, conservación y finalmente la protección del patrimonio cultural, especialmente dedicadas al patrimonio urbano como un proceso de endurecimiento progresivo en el que subyacen una rutina dinámica conceptual y ampliación de escalas como mecanismos de garantía universal.

A este respecto, las Directrices para la inscripción de tipos específicos de bienes culturales en la Lista del Patrimonio Mundial, se advierten algunas situaciones presentes en las áreas urbanas de manera reiterada como producto de los procesos de transformación urbana contemporánea. En relación con esto señala que

“...las ciudades históricas que continúan estando habitadas, y que, por su propia naturaleza, han evolucionado y evolucionarán como consecuencia de mutaciones socioeconómicas y culturales, lo que hace más difícil cualquier evaluación en función del criterio de autenticidad y más aleatoria cualquier política de conservación...” (Unesco 2008, p. 97)

La consideración de nuevos criterios para valorar los bienes de interés cultural con el fin de activar sus respectivas medidas de protección supone el reconocimiento y adaptación a fenómenos presentes en los sectores urbanos históricos a causa de “...*la fragilidad de la trama urbana (que ha sufrido a menudo grandes trastornos desde el comienzo de la era industrial) y de la urbanización acelerada de las periferias...*”. Presente en el caso de las ciudades latinoamericanas capitales o ciudades intermedias con concentraciones de población superior al promedio nacional e incluso en los municipios de menor tamaño, aquellos con patrimonio urbano reconocido. Sin embargo, esta característica adquiere una lectura diferente “... *y no podrán evaluarse solamente desde un punto de vista abstracto en función del papel que puedan haber desempeñado en el pasado o como símbolos históricos...*” (Unesco, 2008, p.97).

Las condiciones de estructura urbana, materialidad, tipologías, morfologías, función del conjunto deben ser testimonio de la civilización o sucesión de civilizaciones, dando origen a cuatro escenarios identificados:

- a. El de las ciudades típicas de una época o de una cultura, casi íntegramente conservadas y a las que no haya afectado ningún fenómeno posterior. En ese caso, el bien cuya inscripción se postula coincide con el conjunto de la ciudad y de su entorno, que también debe protegerse;
- b. El de las ciudades de carácter evolutivo ejemplar que hayan conservado, a veces en el marco de un sitio natural excepcional, una organización del espacio y estructuras características de las fases sucesivas de su historia. En ese caso, la parte histórica, netamente delimitada, prevalece sobre el entorno contemporáneo;

- c. El de los “centros históricos” cuyo perímetro coincide con el de la ciudad antigua, en la actualidad englobada en una ciudad moderna. En ese caso, es necesario delimitar con precisión el bien que se ha de inscribir con sus dimensiones históricas más amplias posibles, y prever un tratamiento apropiado de su entorno inmediato;
- d. El de sectores, barrios o manzanas que constituyan, aun en estado residual, una muestra coherente de una ciudad histórica. En ese caso la zona y los edificios en cuestión deben ser suficientemente representativos del conjunto desaparecido (Unesco, 2008, p. 98)

La orientación de la Unesco está dirigida a la inscripción de bienes culturales en la Lista del Patrimonio Mundial. Los parámetros establecen desde las condiciones de admisión en situaciones plenamente identificadas y reconocidas por un organismo de carácter internacional. En consecuencia, esta condición posiciona las ciudades históricas habitadas al nivel de una entidad viva en permanente “*transformación controlada*” a partir de los planes de protección, adquieren una mediación no de control sino de soporte para la aplicación de mecanismos de transformación controlada como la revitalización y renovación urbana.

El proceso de mediación y ajuste de las decisiones desde las instituciones con relación a las transformaciones progresivas identificadas en las ciudades históricas, hacen de la política pública de protección un mecanismo facilitador para la implementación de adecuaciones controladas y autorizadas amparados en la reglamentación de los aspectos técnicos, estratégicos, metodológicos y técnicos para la intervención del patrimonio cultural. De aquí, se deriva una comprensión del sentido de la protección del patrimonio urbano, en el que subyace la convergencia de rutinas, prácticas, estructuras en la manufactura inconsciente de una dependencia del camino, oculta, persistente donde se registran el itinerario de las acciones institucionales en su memoria estabilizadora (Sydow, 2020), en el contexto urbano.

Dentro del conjunto de variables relacionadas para la protección del patrimonio urbano en Colombia, tres de ellas son estructurales y determinantes para aproximarse a la identificación de las posibles rutinas, secuencias y trayectoria dentro del conjunto de los 45 centros históricos declarados unificados como BIC del ámbito nacional. La primera de ellas es el tiempo cronológico transcurrido entre la primera declaratoria de un sector urbano histórico en 1954 hasta el año 2018, momento del último acto jurídico de reconocimiento al área patrimonial de Jericó. En segundo lugar, el marco de la legislación sobre el patrimonio cultural centrado en el patrimonio urbano, la política pública de planeación y ordenamiento territorial en el mismo periodo de tiempo, con salvedad para incluir los antecedentes y emergencias del corpus especializado en esta temática.

El surgimiento, acciones y extinción de las instituciones tanto de la administración del patrimonio cultural como del ordenamiento territorial con énfasis en los centros históricos constituyen el tercer elemento relevante, para establecer la dinámica entre las rutinas, la estructura subyacente y el bosquejo de la trayectoria del camino.

### 5.3.1 Secuencias reactivas, rutinas dinámicas, inercia estructural y trayectorias dependientes: punto de partida

La idea de partida centra los procesos y sistemas políticos en una posición dinámica donde se establecen interacciones variadas entre los distintos componentes e integrantes de una estructura organizacional (Sydow, 2020). Toma distancia de explicaciones mono-causales a análisis micro-causales, posiciona la temporalidad instrumental en el centro del debate (Thelen, 2004). El enfoque del neoinstitucionalismo histórico adquiere una perspectiva sobresaliente, procura

*“ilustrar cómo las luchas políticas son mediadas por los ajustes institucionales en el que ellas toman lugar, planteándose una definición de instituciones como organizaciones formales, reglas informales y procedimientos que estructuran la conducta” con la incorporación del “tiempo como factor preponderante de aquellos procesos” (Trigo, 2015).*

Las metodologías de valoración de las políticas públicas se destacan por una característica principal: el tiempo como factor esencial. No obstante, sus resultados no dependen solamente de su existencia sino de la correspondencia con la capacidad para inducir comportamientos positivos o negativos (Pierson, 2017), a situaciones que dan origen a su expedición. Los procesos de cambio a largo plazo *“son pasados por alto por la mayoría de la investigación en ciencias sociales que se centra en las causas y los resultados a corto plazo”*, debido a efectos de umbral donde *“el cambio gradual en las condiciones fundamentales produce un cambio repentino, o efectos acumulativos”*, con reciprocidad en *“que los procesos a largo plazo producen efectos a largo plazo”* (Pierson, 2004, p. 98).

La concepción de la temporalidad de los acontecimientos descrita por Sewell propone *“...que los eventos son normalmente de ‘trayectoria dependiente’, esto es, lo que ha sucedido en un punto previo en el tiempo afectará los posibles resultados de una secuencia de eventos que ocurren en un punto posterior en el tiempo...”* (2005:100). Dependientes de *“desiguales con patrones variados de evolución e innovación institucional a lo largo del tiempo”*, la contribución del nuevo institucionalismo se sustenta en el desarrollo de nuevas formas para comprender los patrones y procesos de transformación institucional, *“lo que sugiere que la mayoría del cambio institucional puede ocurrir no como desafíos abiertos y formales a las políticas e instituciones existentes, sino como un cambio incremental y gradual”* (Sorensen, 2011, p. 713).

La interacción de las rutinas y de la dependencia de la ruta se benefician mutuamente en un marco de retroalimentación constante (Sydow, 2020). Por medio de procesos de creación de patrones característicos de la dinámica de la rutina (Feldman, 2016), acumulados en una trayectoria de rutinización difícilmente de abandonar. Los patrones de acción repetitiva del pasado crean no solo reconocimiento sino también coordinación, complementariedad e incluso ciclos burocráticos (Becker, 2004), superados por la inercia preponderante del marco jurídico e

institucional, “*en la versión amplia, la trayectoria dependiente se refiere a la relevancia causal de etapas precedentes en una secuencia temporal*” (Pierson, 2017, p.14).

El boceto de la secuencia temporal a partir de la relevancia causal de las etapas precedentes (Pierson, 2017), conforman la dependencia del camino en la política pública de protección del patrimonio urbano, por medio de los instrumentos de planeación, gestión y manejo. Su correlación con las etapas de la planeación urbana y el ordenamiento territorial producen una interacción temporal en el marco de la revisión del origen, coevolución y conexiones dependientes del camino actual, “*con estructuras y mecanismos desarrollados en el pasado previo a través de la rutina, y así sucesivamente*” (Pierson, 2017, p.23).

Esto significa que la revisión se realiza bajo un marco temporal en permanente cambio y transformación. Al interior de la dependencia del camino de los instrumentos de protección subyacen varias rutinas dinámicas, definidas a partir de la secuencia del surgimiento, formulación, aprobación, adopción e implementación de los mecanismos de protección del patrimonio y su acción recíproca con la planeación urbana y el ordenamiento territorial, lo que significa “*que lo que sucedió en un momento anterior afectará los posibles resultados de una secuencia de eventos que ocurren en un momento posterior*” (Sewell, 1996, p.262). Los instrumentos de protección presentan un marco temporal de 65 años, es decir el lapso temporal entre el año 1954 y el 2019.

El panorama general en el cual se pretende identificar las secuencias, patrones y concepción de la trayectoria dependiente de la protección del patrimonio urbano, “*los pasos precedentes en una dirección en particular inducen un movimiento adicional hacia la misma dirección, es bien capturada por la idea de rendimientos crecientes*” (Pierson, 2017, p.14). Esto induce a suponer una estructura fundamentada probablemente en influencias no evidentes, consecuentes con la presencia de algunos efectos o resultados aún no comprendidos o posiblemente interpretados de manera inadecuada para retroalimentar las rutinas futuras y de este modo, permitir la retroalimentación de la secuencia dinámica. Estas condiciones singulares, permiten realizar la aproximación a la interpretación de los efectos de la política de protección desde el marco jurídico e instrumental que crea el patrimonio urbano (Melé, 2006).

El orden de la secuencia de aplicación de la declaratoria, la reglamentación, el Plan Especial de Protección (PEP) y Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), según sea el caso, establece una o varias rutinas dinámicas y las consecuentes secuencias, según el encadenamiento del marco jurídico. Las instituciones influyentes de diverso orden, los planes y programas de promoción nacional e internacional, la administración municipal, el nivel operativo de menor jerarquía se encargan de la decisión e interpretación de la formulación, aprobación, adopción e implementación, seguimiento y control de la conservación del patrimonio urbano local.

El supuesto para el abordaje y organización de las secuencias con el fin de identificar las rutinas dinámicas y trayectorias dependientes requiere de un grupo de variables dispuestas en un marco

temporal. Se consideran siete agrupaciones donde se identifican: la caracterización general instrumental de los centros históricos declarados, la vigencia de las constituciones políticas, las instituciones administrativas de la protección del patrimonio urbano, convenciones y cartas internacionales influyentes en la política pública de protección, además de los programas y planes nacionales dedicados a los centros históricos, dispuestos en el siguiente esquema a manera de panorama general y contextual, como punto de partida para la interpretación de las interacciones entre los instrumentos de protección del patrimonio:

**Figura 5.06 Panorama general y contexto de los instrumentos de Protección del Patrimonio Urbano**

Variable	Marco Temporal							
	Década 1950	Década 1960	Década 1970	Década 1980	Década 1990	Década 2000	Década 2010	Década 2020
Caracterización, fundación, entidad, área y fecha de declaratoria, reglamentación, fecha formulación POT, resolución aprobación PEP y PEMP de los 45 centros históricos declarados.	●						●	
Estado y vigencia de la Constitución Política	●				●			●
Periodos, presidentes y correspondencia partido político	●							●
Instituciones de administración pública del patrimonio urbano		●			●			●
Marco legal formulado para el patrimonio cultural, enfocado en el patrimonio urbano					●		●	
Convenciones, cartas y marco legal internacional influente en la política de protección del patrimonio urbano			●				●	
Programas, subprogramas y planes nacionales dedicados a los centros históricos y el patrimonio urbano					●	●		●

Fuente: Elaboración propia

Las relaciones de dependencia, influencias, coyunturas críticas en el marco temporal propuesto generan múltiples posibilidades de análisis micro-causales (Thelen, 2004). Aproximación que se realiza por medio de la disposición de las variables que inciden de manera directa o indirecta en la identificación de las secuencias y patrones. Caracterizados por el orden de implementación y aplicación de los instrumentos a partir del marco legislativo, sumado a lo anterior, se presume una marcada influencia de las corrientes internacionales institucionales y teóricas sobre el patrimonio cultural. La autonomía municipal para la construcción individual de su propia secuencia de protección del patrimonio urbano surge posiblemente a partir de acciones inciertas o motivados por factores externos que obedecen al carácter singular y emergente de sus decisiones.

De tal forma, se han identificado 4 secuencias justificadas en el encadenamiento cronológico y alternativo del surgimiento de los instrumentos a partir de la legislación que los regula. Es decir –la declaratoria, la reglamentación, el PEP, el PEMP y POT-, toda vez que la sucesión en la formulación, aprobación y adopción en cada entidad municipal es autónoma. En algunos casos, el orden de reconocimiento define la rutina dinámica de protección del patrimonio urbano

dentro de su perímetro urbano, el origen de la trayectoria dependiente del municipio en correspondencia con los instrumentos de protección del patrimonio urbano local.

Las secuencias propuestas son las siguientes:

**Tabla 5.15 Secuencias a partir de los instrumentos de Protección del Patrimonio Urbano**

<b>Secuencia</b>	<b>Instrumentos</b>	<b>Municipios</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
Secuencia 1	<b>Declaratoria + POT</b>	San Sebastián de Mariquita, Cartago, El Cerrito, Marinilla, Rionegro, San Juan de Girón, Socorro, Turmequé, Mongui	(9)	20,0%
Secuencia 2	<b>Declaratoria + Reglamentación + POT</b>	Cartagena de Indias, San Miguel de Guaduas, Ambalema, Jardín	(4)	8,9%
Secuencia 3	<b>Declaratoria +POT+PEMP</b>	San Juan de Pasto, Villa del Rosario, Tenjo, Concepción, Barranquilla, Valledupar, Aguadas, Abejorral, Iza, Pore, Barrios El Prado, Bellavista y Altos del Prado, San Gil, El Carmen, Playa de Belén, Jericó	(15)	33,3%
Secuencia 4	<b>Declaratoria +reglamentación+ POT+PEMP</b>	Villa de Leyva, Santafé de Antioquia, Santa Cruz Mompox, Tunja, Popayán, Santa Marta, Guadalajara de Buga, Santiago de Cali, Bogotá D.C., Pamplona, Honda, Barichara, Ciénaga, Santa Cruz de Lórica, Salamina, Zipaquirá, Manizales	(17)	37,8%
<b>TOTAL</b>			<b>45</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia con base a las variables determinantes del Patrimonio Urbano de diversas fuentes

Si bien, el propósito de la aproximación es reconocer e interpretar los efectos de los instrumentos de protección, no se pretende diagnosticar el estado de los centros históricos, en la comprensión a la limitada información disponible. No se integran variables singulares relacionadas con la cotidianidad y cadenas de decisión local, las cuales obedecen a un objetivo diferente al objetivo propuesto. Por el contrario, se busca validar la lectura de las secuencias en el conjunto de los diferentes centros históricos con condiciones similares en la concatenación de los instrumentos de protección en un mismo orden procedimental, con salvedad a que la temporalidad es propia en cada área urbana patrimonial lo que enriquece y vislumbra la presencia o ausencia de las instituciones inmersas en su estado actual. La declaratoria es el

instrumento introductorio que permite a un sector antiguo, sector de interés, conjunto urbano, centro histórico, poblado, plaza principal y marco, conjunto urbano ser parte del corpus del patrimonio urbano. El amparo jurídico excepcional ocupa un lugar particular dentro del conjunto de normas relacionadas con la ciudad, que a

*diferencia de otros tipos de zonificación del espacio urbano, cuya única legitimidad radica en la coherencia del plan del cual proceden y en la voluntad de lograr un ordenamiento óptimo de la ciudad y su crecimiento, los discursos sobre el patrimonio ponen en juego la esencia misma de la ciudad y su identidad (Melé, 2006, p.77).*

El propósito de concentración en cuatro secuencias de la totalidad de los centros históricos declarados BIC del ámbito nacional, requiere en su dimensión de gestión la definición del componente económico y financiero del municipio donde se inscribe, siendo esta clasificación fundamental para la viabilidad de los proyectos y ejecución del plan de protección y ordenamiento local. En ese sentido, la categoría municipal se establece en el artículo 320<sup>372</sup> de la Constitución Política de Colombia, reglamentada por la Ley 136 de 1994<sup>373</sup> y modificada por la Ley 1551 de 2012<sup>374</sup>, mediante la cual se establecen siete categorías de municipios (especial, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta). Se integran cuatro variables: número de habitantes, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica, con las siguientes características:

**Tabla 5.16 Categorización de Distritos y Municipios y su correlación con el Instrumento de Ordenamiento territorial en Colombia**

PRIMER GRUPO (GRANDES MUNICIPIOS)			Instrumento de Ordenamiento Territorial
Categoría Especial	Población	Superior o igual a los quinientos mil un (500.001) habitantes.	<b>Plan de Ordenamiento Territorial (POT)</b>  elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y
	Ingresos corrientes de libre destinación anuales	que superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	
	Importancia económica	Grado uno.	
	Población	Comprendida entre cien mil un (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes.	
	Ingresos corrientes	Superiores a cien mil (100.000) y hasta de	

<sup>372</sup> Artículo 320. La ley podrá establecer categorías de municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen para su organización, Gobierno y administración. Capítulo 3, Constitución Política de Colombia, 1991.

<sup>373</sup> Ley 163 de 1994 (junio 02): Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

<sup>374</sup> Ley 1551 de 2021 (julio 6): Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Primera Categoría	de libre destinación anuales	cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales	municipios con población superior a los 100.000 habitantes;
	Importancia económica	Grado dos	
<b>II. SEGUNDO GRUPO (MUNICIPIOS INTERMEDIOS)</b>			<b>Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)</b>  elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes;
Segunda Categoría	Población	Con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes.	
	Ingresos corrientes de libre destinación anuales	Superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	
	Importancia económica	Grado Tres	
Tercera Categoría	Población	Con población comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes.	
	Ingresos corrientes de libre destinación anuales	Superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.	
	Importancia económica	Grado cuatro	
Cuarta Categoría	Población	Con población comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes.	
	Ingresos corrientes de libre destinación anuales	<i>Superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.</i>	
	Importancia económica	Grado cinco	
<b>III. TERCER GRUPO (MUNICIPIOS BÁSICOS)</b>			<b>Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)</b>  elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes.
Quinta Categoría	Población	población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes	
	Ingresos corrientes de libre destinación anuales	<i>Superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales.</i>	
	Importancia económica	Grado seis	
Sexta Categoría	Población	Población igual o inferior a diez mil (10.000).	
	Ingresos corrientes de libre destinación anuales	No superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.	
	Importancia económica	Grado siete	

Fuente: Elaboración propia con base en el Artículo 6 de la Ley 136 de 1994 y Artículo 9 de la Ley 388 de 1997



Aunque se pretende establecer la correlación de los municipios en cada una de las secuencias de la protección del patrimonio urbano local y la categorización actual del municipio, esto con el fin de determinar las características integrales entre el desarrollo local y las estrategias instaladas en los instrumentos de protección. El uso del modelo de la dependencia de la trayectoria (Sydow et al., 2009), como instrumento metodológico se orienta en dos aspectos: a) confirmar la relación de las tres fases identificadas – fase de preformación, fase formativa y fase de encerramiento -en la política de protección del patrimonio urbano en Colombia con los instrumentos adoptados por cada municipio con un centro histórico declarado; b) además de observar las relaciones singulares de cada uno de los centros históricos declarados BIC del ámbito nacional en el marco de la secuencia donde se inscriben. En tal sentido, a continuación, se profundiza en cada una de las secuencias propuestas:

### **5.3.2 Secuencia 1: Centros históricos con declaratoria + POT**

Los municipios que hacen parte de la secuencia 1 cuentan con una declaratoria del sector antiguo como monumento nacional, como es el caso de los municipios de Marinilla, Rionegro, San Juan de Girón y Socorro reconocidos mediante el Decreto 264 de 1963 y por la Ley de Patrimonio del año 1959, así mismo San Sebastián de Mariquita, Cartago y El Cerrito en su totalidad declarados por el Gobierno Nacional dentro de la primera generación de declaratorias masivas. Solo los municipios de Turmequé y Monguí son reconocidos como sector de interés y centro urbano, respectivamente. El primero declarado monumento nacional por el Ministerio de Educación y el segundo como BIC del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura. La trayectoria de protección del patrimonio urbano de este grupo de municipios promedia 40 años entre el momento de la declaratoria y la primera delimitación del área urbana patrimonial, con la asignación del tratamiento de conservación, determinado por el ordenamiento territorial municipal. Tres municipios superan los 100000 habitantes -Rionegro, San Juan de Girón y Cartago- obligados a formular, aprobar y adoptar el POT, instrumento garante de las estrategias y orientaciones de la protección del patrimonio en función del desarrollo social, económico y urbano del municipio en su totalidad.

El municipio de Monguí, localizado en el departamento de Boyacá, es la única excepción en cuanto a la delimitación del perímetro del área declarada<sup>375</sup> determinada por el Esquema de Ordenamiento Territorial<sup>376</sup>. Se soporta en el reconocimiento como centro histórico mediante la Resolución No. 000002 de 1982 (marzo 12) expedida por el Consejo de Monumentos Nacionales y retomada según el Acuerdo Municipal No. 015 de 1995. Es el único municipio localizado en la fase de bloqueo o encerramiento dentro del modelo de la dependencia de la trayectoria (Sydow et al., 2009). También en el departamento de Boyacá, la declaratoria de un sector del Municipio de Turmequé es delimitada para resaltar su valor histórico y artístico<sup>377</sup>,

---

<sup>375</sup> Artículo 1, Resolución No. 0087 de 2005 (febrero 2)

<sup>376</sup> Artículo 60, Capítulo Segundo Delimitación de áreas de reserva para la conservación y protección de los recursos naturales, Esquema de Ordenamiento Territorial de Monguí Acuerdo 007 de 2004 (abril 21).

<sup>377</sup> Artículo 1, Decreto No. 1940 de 1989 (agosto 29): por la cual se declara Monumento Nacional un sector del Municipio de Turmequé.

definido en el Decreto de reconocimiento como monumento nacional y ratificado en el EOT del año 1999.

A continuación, la relación de municipios que integran la secuencia 1:

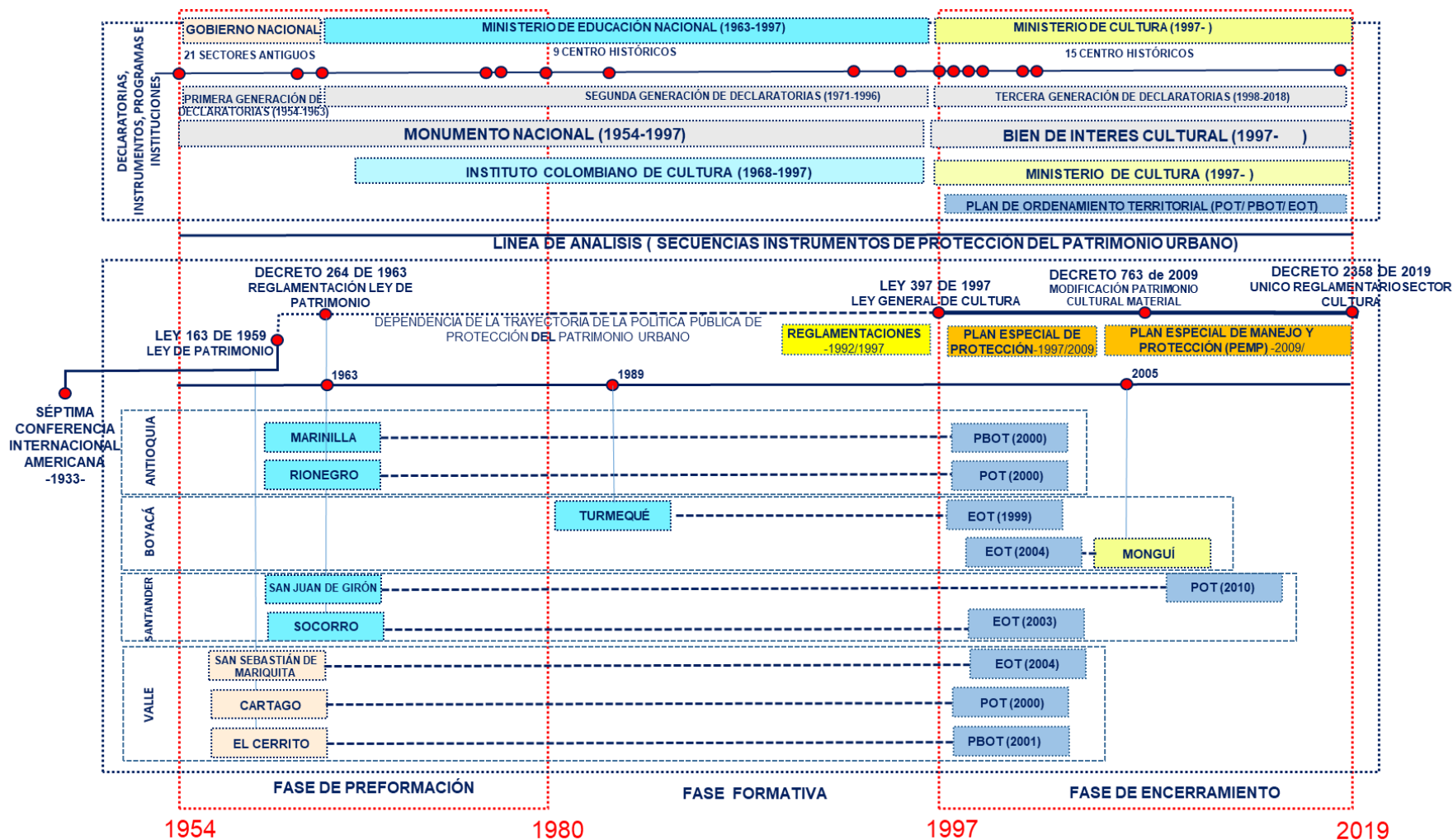
**Tabla 5.17 Secuencia 1: Centros Históricos declarados con Plan de Ordenamiento Territorial**

DEPARTAMENTO	CIUDAD	FUNDACIÓN	DECLARATORIA	ENTIDAD DECLARANTE	ÁREA DECLARADA	POT-ADOPCIÓN	ESTADO PEMP	POBLACIÓN 2021	CATEGORÍA MUNICIPIO
ANTIOQUIA	Marinilla	1709	Decreto 264 de 1963	Ministerio de Educación	Sector Antiguo	PBOT Acuerdo 075/ Abr. 6 de 2000	Trámite Resolución	67.893	4
ANTIOQUIA	Rionegro	1581	Decreto 264 de 1963	Ministerio de Educación	Sector Antiguo	POT Acuerdo 104/ Ene. 13 de 2000	Fase II. Formulación	142.995	1
BOYACA	Turmequé	Siglo XVI	Decreto 1940 de 1989	Gobierno Nacional	Sector de Interés	EOT Acuerdo 042/ Dic. 23 de 1999	Fase II. Formulación	6.156	6
BOYACA	Monguí	1601	Resolución 0087 de 2005	Ministerio de Cultura	Centro urbano	EOT Acuerdo 007 /Abr. 21 de 2004	Fase II. Formulación	4.292	6
SANTANDER	San Juan de Girón	1631	Decreto 264 de 1963	Ministerio de Educación	Sector Antiguo	POT Acuerdo 100 / Nov. 30 de 2010	Fase II. Formulación	171.904	2
SANTANDER	Socorro	1683	Decreto 264 de 1963	Ministerio de Educación	Sector Antiguo	EOT Acuerdo 011/ Junio 18 de 2003	Fase II. Formulación	33.628	6
TOLIMA	San Sebastián de Mariquita	1549	Ley 163 de 1959	Gobierno Nacional	Sector Antiguo	EOT Acuerdo 19 / Dic. 2004	Fase I y II. Diagnóstico y Formulación Mincultura	38.833	6
VALLE	Cartago	1540-1691	Ley 163 de 1959	Gobierno Nacional	Sector Antiguo	POT Acuerdo 015/ Mayo 09 de 2000	Ninguno	137.302	4
VALLE	El Cerrito	1560	Ley 163 de 1959	Gobierno Nacional	Sector Antiguo	PBOT Acuerdo 037/ Dic. 24 de 2001	Ninguno	57.133	5

Fuente: Elaboración propia con base a información de diversas fuentes

Los municipios de Monguí (2010), San Juan de Girón (2010) y El Socorro (2014) hacen parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio desde hace una década. Fueron integrados a las estrategias de mercadeo, publicidad, capacitación y mecanismos de difusión como destinos turísticos para ampliar la exposición y vulnerabilidad a efectos secundarios de esta categoría relacionados con cambios en el valor del suelo, el incremento del comercio direccionado al sector turístico, el fomento de actividades culturales, turismo de naturaleza y las variantes necesarias para ser atractivos a lo largo del año (Álvarez, 2021). En la siguiente imagen (Figura 5.07), se observa en la línea de análisis, la disposición de los instrumentos de protección de los municipios de la secuencia 1, a través del uso del Modelo General de la Dependencia de la Trayectoria (MGDT) (Sydow et al., 2009):

**Figura 5.07 Disposición de los instrumentos de protección de los municipios de la Secuencia 1 en el Modelo de la Dependencia de la Trayectoria**



Fuente: Elaboración propia

La correspondencia de los municipios con los instrumentos de protección bajo el MGDT carece de la fase de formativa. Esto significa que transitaron de la declaratoria en la fase de preformación a la fase de encerramiento sin haber explorado la alternativa de la reglamentación, formulada de manera exclusiva desde la perspectiva de la norma cultural (Salazar et al., 1989), promovida por Colcultura. Se considera una etapa experimental tanto para la administración municipal como para usuarios bien sean propietarios o residentes de las áreas históricas declaradas, en torno a la construcción de un comportamiento fundamentado en el reconocimiento a las limitaciones y posibilidades de la conservación como un acto colectivo. Cabe resaltar la ausencia de las acciones de Colcultura en cuanto a los programas orientados a los centros históricos de los años 90 del siglo XX a excepción del municipio de Turmequé que fue declarado durante su vigencia administrativa.

La ausencia de la cultura operativa de la norma urbana destinada a la conservación de los bienes inmuebles plantea un reto para el instrumento de ordenamiento y posiblemente explica las dificultades en la formulación del PEMP, al carecer el centro histórico de la trayectoria instrumental de protección y delegar esta función de manera simultánea al POT, lo que genera una comprensión social del patrimonio (Prats, 1997). Se soporta sobre el desarrollo y no sobre la conservación. En cuanto a la categoría municipal en términos del desarrollo a excepción del municipio de Rionegro y San Juan de Girón, sus ingresos corrientes son limitados en consideración a los desafíos de la protección y conservación del patrimonio urbano, proporcionales tanto a la población como a la representatividad del centro histórico dentro del municipio.

### **5.3.3 Secuencia 2: Centros históricos con declaratoria +reglamentación + POT**

Tres municipios de la misma categoría y la capital de departamento de Bolívar hacen parte de esta secuencia. Es bastante diciente la presencia de Cartagena de Indias -ciudad patrimonio de humanidad declarada en 1984-, aún sin un PEMP aprobado; objeto del primer estudio de reglamentación en Colombia en el año 1967, encomendado en su momento a Germán Téllez (Salazar et al., 1989), aprobado hasta 1984 y actualizado por medio de la Resolución 043 de 1994 por el Consejo de Monumentos Nacionales y adoptada por la ciudad a través del Acuerdo 40 de 1994. Resulta paradigmático que una ciudad como Cartagena de Indias aún no tenga formulado y aprobado el PEMP. Resulta un caso representativo debido a los diversos intereses que no permiten el surgimiento de un instrumento satisfactorio a los sectores especialmente económicos.

Los centros históricos de los municipios de Jardín y Ambalema se sitúan dentro de la coyuntura crítica entre la fase de preformación y formación. Ambos comparten la declaratoria en la fase formativa, dejan entrever que previo a la primera mitad de la década de los años 80 el estado de conservación de los municipios posiblemente obedecía a una condición cultural instalada en la población. Dos declaratorias del gobierno nacional – Cartagena de Indias y San Miguel de Guaduas y dos del Ministerio de Educación Jardín y Ambalema - permiten evidenciar el efecto

del encadenamiento de los instrumentos de protección en una trayectoria de 20 años, entre la declaratoria y la adopción del esquema de ordenamiento territorial.

**Tabla 5.18 Secuencia 2: Centros Históricos declarados con Reglamentación y Plan de Ordenamiento Territorial**

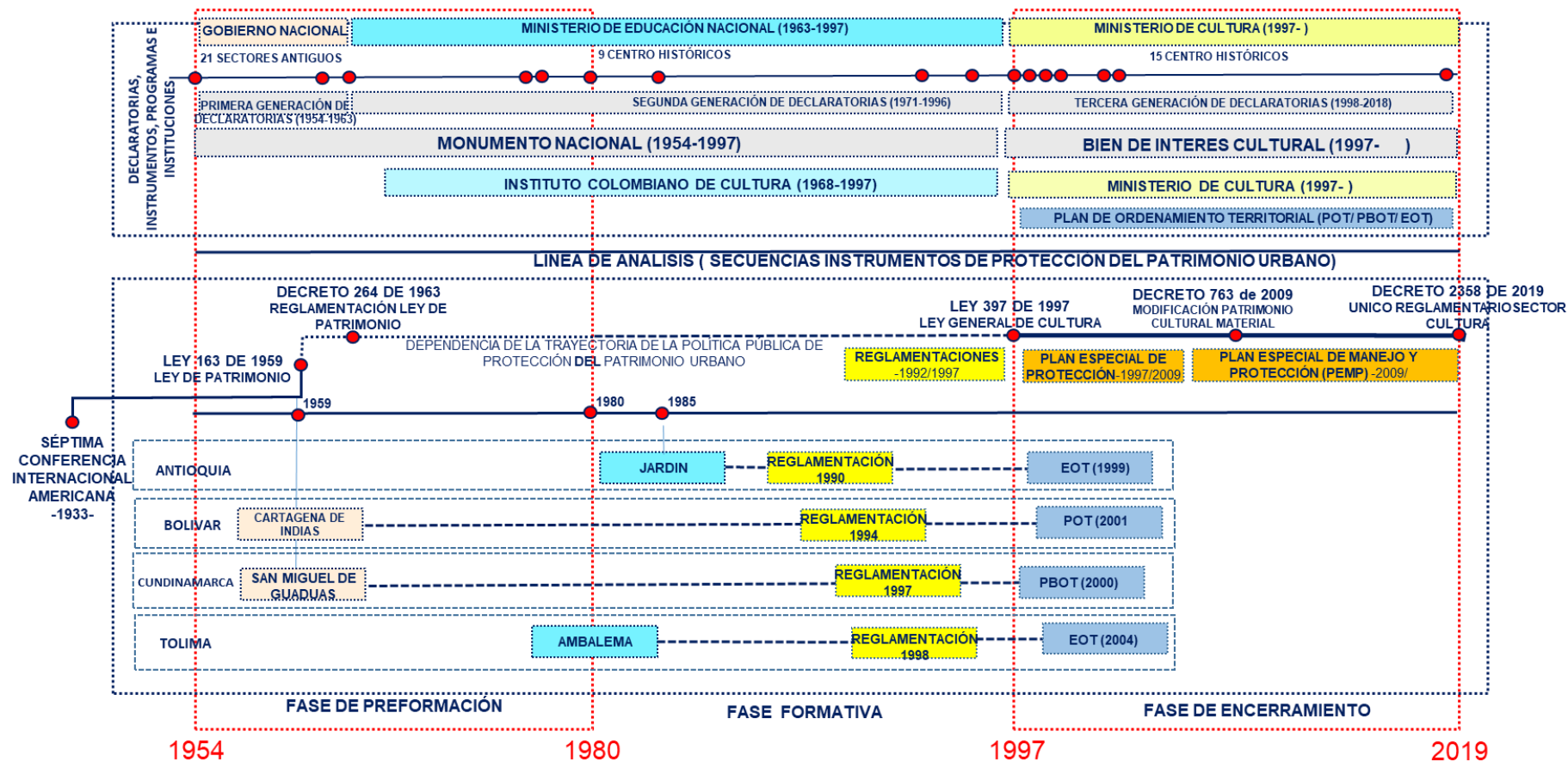
DEPARTAMENTO	CIUDAD	FUNDACIÓN	DECLARATORIA	ENTIDAD DECLARANTE	ÁREA DECLARADA	REGLEMENTACIÓN	POT-ADOPCIÓN	ESTADO PEMP	POBLACIÓN 2021	CATEGORÍA MUNICIPIO
ANTIOQUIA	Jardín	1860	Decreto 1132 de 1985	Ministerio de Educación	Conjunto urbano	Acta 12 de 1990 CMN/ Acuerdo 048 de 1990	Acuerdo 648 /Agos. 26 de 1999	Fase I Diagnóstico	14.830	6
BOLIVAR	Cartagena de Indias	1533	Ley 163 de 1959	Gobierno Nacional	Sector Antiguo	Res. 043/1994 CMN- Acuerdo 40 de 1994	Decreto 977/ Nov. 20 de 2001	Fase II Formulación	1.028.736	ESP.
CUNDINAMARCA	San Miguel de Guaduas	1644	Ley 163 de 1959	Gobierno Nacional	Sector Antiguo	Res. 021 de 1997 CMN	Acuerdo 036 /Sept. 17 de 2020	Fase II Formulación	33.212	6
TOLIMA	Ambalema	S. XVII y XVIII	Decreto 776 de 1980	Ministerio de Educación	Centro Histórico	Res. 022 de 1997 / Acuerdo 015 de 1998	Acuerdo 012/ Jun. 22 de 2004	Trámite Resolución	6.561	6

Fuente: Elaboración propia con base a información de diversas fuentes

Hacen parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio los municipios de San Miguel de Guaduas desde el año 2010 y El Jardín desde el año 2012, con una fuerte presencia de conservación social (Prats, 1997). Se explica posiblemente por la dinámica urbana que se extiende a la totalidad del perímetro urbano contenida en la reglamentación de los municipios al amparo del programa de protección de centros históricos promovido por Colcultura. La representatividad de esta secuencia es equivalente al 8,9% de la totalidad del patrimonio urbano declarado, aún perdura la presencia de Colcultura y la ausencia de la operatividad del Programa de Revitalización de Centros Históricos del Ministerio de Cultura.

La aprobación y adopción de la reglamentación en los cuatro centros históricos de esta secuencia generan un soporte y una obligatoriedad al plan de ordenamiento territorial, con un centro histórico de mayor extensión dentro del perímetro urbano del municipio contenedor. Cartagena de Indias cuenta con un Instituto de Patrimonio y Cultura creado mediante el Acuerdo 001 de 2003 (febrero 4), garante de esta dimensión en la ciudad, reafirma la categoría a diferencia de los demás municipios de la misma secuencia.

**Figura 5.08 Disposición de los instrumentos de protección de los municipios de la Secuencia 2 en el Modelo de la Dependencia de la Trayectoria**



Fuente: Elaboración propia

### 5.3.4 Secuencia 3: Centros históricos con declaratoria + POT+PEMP

15 municipios hacen parte de la secuencia 3 que representan el 33, 3% de la totalidad del patrimonio urbano del ámbito nacional. San Juan de Pasto, Villa del Rosario y San Gil son declarados por el Gobierno Nacional, únicos vinculados a la fase de preformación; el municipio de Tenjo declarado por el Ministerio de Educación durante la vigencia de Colcultura se localiza en la fase formativa. Los demás 11 centros históricos son declarados por el Ministerio de Cultura en dos subagrupaciones: 3 municipios -Concepción, Barranquilla e Iza- son declarados previamente a la formulación del instrumento de ordenamiento y 18 años después se adopta el PEMP. El segundo subgrupo está conformado por los centros históricos de los municipios de Abejorral, Jericó, Aguadas, Pore, El Carmen, Playa de Belén y el Barrio El Prado, Bellavista y Altos del Prado. En la secuencia instrumental primero fue formulado su POT y posteriormente se declara el centro histórico BIC del ámbito nacional. En promedio 12 años después del reconocimiento se adopta el PEMP. La única excepción es el centro histórico de Jericó, que junto a su declaratoria aprueba el PEMP de manera simultánea como lo ordena la Ley General de Cultura de 1997, además es el último BIC del ámbito nacional declarado en el año 2018.

**Tabla 5.19 Secuencia 3: Centros Históricos declarados con Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Especial de Manejo y Protección**

DEPARTAMENTO	CIUDAD	FUNDACIÓN	DECLARATORIA	ENTIDAD DECLARANTE	ÁREA DECLARADA	POT-ADOPCIÓN	ESTADO PEMP	POBLACIÓN 2021	CATEGORÍA MUNICIPIO
ANTIOQUIA	Abejorral	1808	Res. 619 de 2002	Ministerio de Cultura	Centro Histórico	Acuerdo 005/ Mar. 15 de 2000	Resolución No.3078 de 2015 Diario Oficial No. 49.957 / Modificación Resolución No. 0934 de 2019	20.287	6
ANTIOQUIA	Concepción	1760	Res. 1617 de 1999	Ministerio de Cultura	Centro Histórico	Acuerdo 016/ Nov. 30 de 2000	Resolución 2175 de 2020 Diario Oficial No. 51.555 12 de enero de 2021	4.578	6
ANTIOQUIA	Jericó		Resolución No. 0663 de 2018 Diario Oficial 50.579 Abril 29 de 2018	Ministerio de Cultura	Centro Histórico	Acuerdo 02/ Jul. 17 de 2020	Resolución No. 0663 de 2018 Diario Oficial 50.579 Abril 29 de 2018	13.706	6
ATLANTICO	Barranquilla	1629	Res. 1614 de 1999	Ministerio de Cultura	Conjunto Histórico	Decreto 154 /Sept. 6 de 2020	Resolución No. 0746 de 2005. Junio 21. Diario Oficial No. 45995. Modificación Res. 3779 de 2014	1.274.250	ESP
ATLANTICO	Barrio El Prado, Bellavista y Altos de Prado	1919-1930	Res. 0087 de 2005	Ministerio de Cultura	Conjunto Urbano	Decreto 154 /Sept. 6 de 2020	Resolución No. 0068 de 2021 Diario Oficial N° 51.676 del 16 de mayo de 2021	1.274.250	ESP
BOYACA	Iza	Siglo XVII	Res. 617 de 2002	Ministerio de Cultura	Poblado	Acuerdo 030/ Feb. 18 de 2003	Resolución No.1811 de 2015. Junio 23. Diario Oficial No. 49584	1.995	6
CALDAS	Aguadas	1808-1814	Res. 1883 de 2001	Ministerio de Cultura	Conjunto Urbano	Acuerdo 080/ Jun. 3	Resolución No. 1883 de 2001	23.048	6

						de 2000	Diario oficial 44.580 octubre 12 de 2001		
CASANARE	Pore		Ley 936 de 2004	Ministerio de Cultura	Municipio		Resolución No.3914 de 2014. Diciembre 12. Diario Oficial No. 49389.	12.059	6
CUNDINAMARCA	Tenjo	1603	Decreto 2530 de 1993	Ministerio de Educación	Plaza Principal y marco	Acuerdo 014/Jun. 14 de 2000	Resolución No. 0030 de 2010. Enero 6. Diario Oficial No. 47.673	24.096	3
NARIÑO	Pasto	1539	Ley 163 de 1959	Gobierno Nacional	Sector Antiguo	Acuerdo 026 de 2009	Resolución No. 452 de 2012. Marzo 29. Diario Oficial No. 48477 Documento formulación. / 48400	392.589	1
SANTANDER	San Gil	1689	Decreto 264 de 1963	Gobierno Nacional	Sector Antiguo		Resolución 2970 de 2021	46.152	5
NORTE DE SANTANDER	El Carmen	1686	Res. 0929 de 2005	Ministerio de Cultura	Centro Histórico		Resolución No. 2073 de 2020 Diario oficial 51.476 octubre 23 de 2020	14.043	6
NORTE DE SANTANDER	La Playa de Belén	1862	Res. 0928 de 2005	Ministerio de Cultura	Centro Histórico		Resolución No. 1815 de 2015. Junio 23.	8.003	6
NORTE DE SANTANDER	Villa del Rosario	1734	Dec. 102 de 1971	Ministerio de Educación	Sector Antiguo		Resolución No. 1500 de 2012. Julio 23. Diario oficial No. 48518	111.254	4

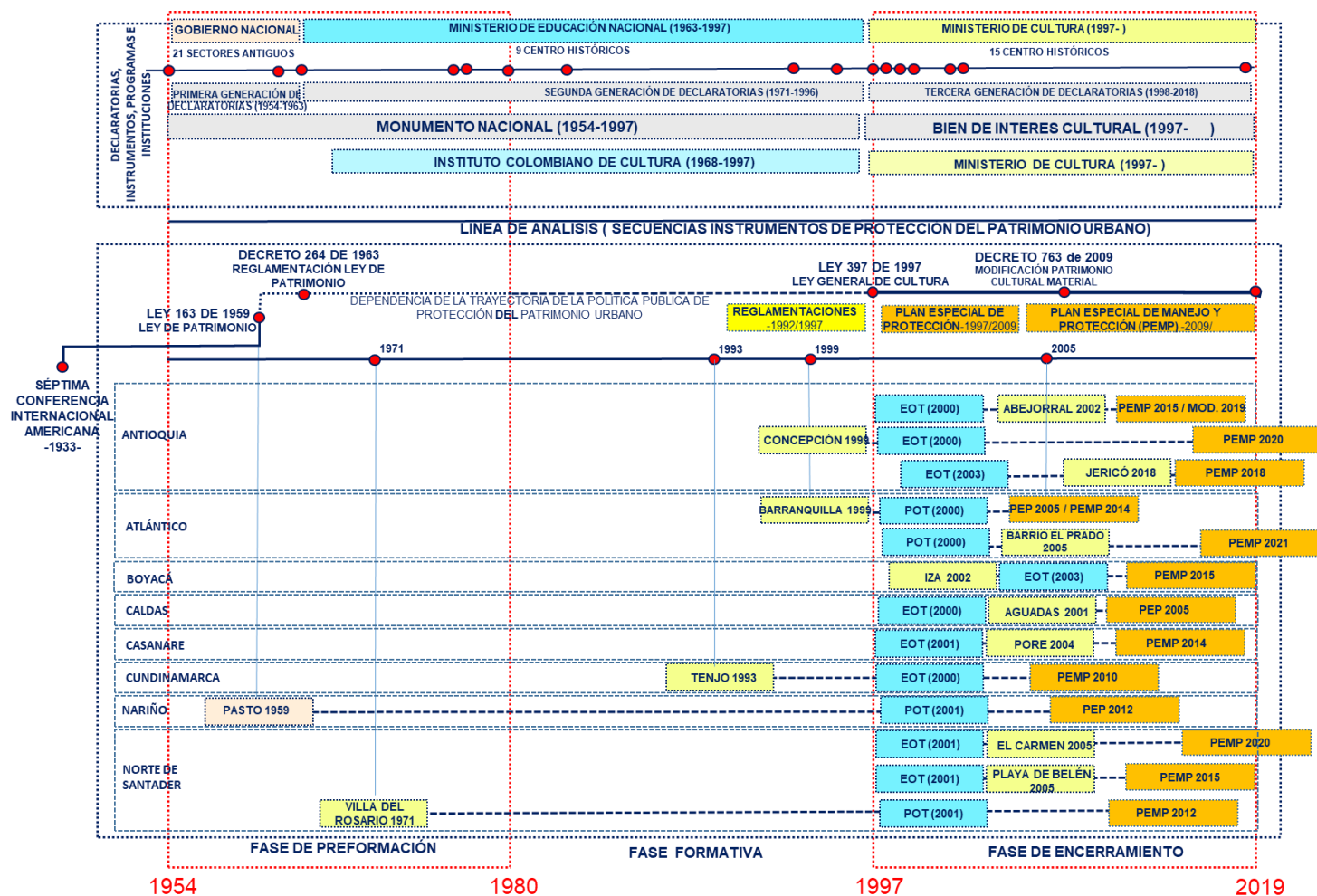
Fuente: Elaboración propia con base a información de diversas fuentes

Como lo hemos mencionado, 11 centros históricos de igual número de municipios están concentrados en la fase de bloqueo del MGDТ con una notable influencia del marco legal derivado de la Ley General de Cultura y mediado por la delimitación incluida dentro de la declaratoria, asumida inicialmente por el POT y redefinida en la mayoría de los casos por el PEMP. Cabe destacar en la declaratoria la ausencia de las ideas de conservación de Colcultura; la plaza y marco principal del municipio de Tenjo es la única declaratoria durante su vigencia En la totalidad de municipios no se aplica el programa de reglamentación de los años 90.

La secuencia 3 se encuentra integrada por los reconocimientos realizados por el Ministerio de Cultura en la tercera generación de declaratorias que representan el 73% de los 15 municipios que hacen parte. Se ubican en la fase de bloqueo o encerramiento. Se presume que sus condiciones de protección y conservación fueron acertadas tanto para las edificaciones como para el urbanismo, relevante las áreas delimitadas como patrimonio urbano de los municipios de: Abejorral (20.287 Hab.), Concepción (4.578 Hab.), Jericó (13.706 Hab.), Iza (1.995 Hab.), Aguadas (23.048 Hab.), Pore (12.059 Hab.), El Carmen (14.043 Hab.), La Playa de Belén (8.003 Hab.). En estos municipios el centro histórico declarada corresponde al 90% de su perímetro urbano y la dinámica funcional se desarrolla en la centralidad patrimonial.



**Figura 5.09 Disposición de los instrumentos de protección de los municipios de la Secuencia 3 en el Modelo de la Dependencia de la Trayectoria**



Fuente: Elaboración propia

Hacen parte de una nueva mirada sobre los centros históricos, sin corresponder a ciudades insignia sino a poblaciones representativas en las gestas de la independencia y más cerca de las tendencias del turismo slow<sup>378</sup>. Presentan similitudes en la conformación de su población y coinciden en la estrategia de conservación social colectiva establecida por sus residentes. Las iniciativas de orden social involucradas con su cultura arraigada en el regionalismo, acentúa el reconocimiento de las expresiones arquitectónicas y urbanas como parte de su identidad cultural, lo que se revierte en el estado no solo del centro histórico sino en la interacción derivada de las actividades de la centralidad del municipio. El reconocimiento de barrios como El Prado, Bellavista y Altos del Prado de la Ciudad de Barranquilla y poblados catalogados de interés cultural dinamizan la composición del patrimonio urbano. Introducen una escala de valoración recientemente identificada e inexplorada en este aspecto. Otro componente relevante se relaciona con el reconocimiento a poblaciones con una presencia significativa y protagónica en las campañas libertadoras, distinguidas y exaltadas en el marco del bicentenario de la independencia como es el caso del municipio de Pore. Hacen parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio los municipios de Aguadas, El Jardín, Jericó, Playa de Belén y Pore integrados después de la *“declaratoria de Bien de Interés Cultural (BIC) a nivel nacional para su valoración y proyección mediante el turismo, generando así más oportunidades de desarrollo y sostenibilidad en las comunidades”* (Fontur, 2021). La ciudad de Barranquilla goza de la declaratoria del centro histórico y los barrios del Prado, Bellavista y Alto del Prado, única con dos sectores reconocidos con BIC del ámbito nacional, se clasifica en la categoría especial en cuanto a ingresos y posicionamiento municipal. Las ciudades de Pasto, Villa del Rosario, San Gil y el municipio de Tenjo y se ubican en la categoría 1, 3, 4 y 5. Respectivamente. Los demás 8 municipios hacen parte de la escala inferior en ingresos e importancia económica, lo que supone una exigencia en cuanto a la conservación y protección del patrimonio urbano.

### **5.3.5 Secuencia 4: Centros históricos con declaratoria + reglamentación+ POT+PEMP**

La secuencia 4 representa el 37,8 %, de la totalidad del patrimonio urbano del ámbito nacional. Los 15 municipios que la integran se caracterizan por contar con la trayectoria integral en relación con la formulación, aprobación y adopción de los instrumentos de protección del patrimonio urbano existente. Se encuentra conformada por capitales de departamento y centros históricos reconocidos a partir de su historia e importancia en las regiones donde se localizan. 11 centros históricos tienen presencia en las tres fases del modelo de la trayectoria, de los restantes 4, fueron reglamentados 2 centros históricos – Salamina y Zipaquirá- previo a la formulación del POT y posteriormente fueron declarados BIC del ámbito nacional. Como característica singular, las declaratorias se encuentran en la fase de preformación y de encerramiento, la ciudad de Manizales es la única reconocida en la fase formativa, con una marcada presencia de Colcultura con su programa de Reglamentación de Centros Históricos y la administración de la conservación y protección del 73% del patrimonio urbano de esta

<sup>378</sup> Cittaslow es un movimiento fundado en Italia en 1999, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida en las ciudades y resistir a la homogenización y americanización, además de celebrar la diversidad cultural y las características de la ciudad, hacen parte de la tendencia cultural del movimiento lento.

secuencia. Sin embargo, en su totalidad son beneficiarios del Programa de Revitalización de Centros Históricos del Ministerio de Cultura.

**Tabla 5.20 Secuencia 4: Centros Históricos declarados con Reglamentación, Reglamentación, Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Especial de Manejo y Protección**

DEPARTAMENTO	CIUDAD	FUNDACIÓN	DECLARATORIA	ENTIDAD DECLARANTE	ÁREA DECLARADA	REGLAMENTACIÓN	POT. ADOPCIÓN	ESTADO PEMP	POBLACIÓN 2021	CATEGORÍA MUNICIPIO
ANTIOQUIA	Santafé de Antioquia		Ley 163 de 1959	GN Declara	Sector Antiguo	Res. 042 de 1994	Acuerdo 010/ Nov. 6 de 2000	Resolución No. 4325 de 2018 Diario oficial 50.819 Diciembre 27 de 2018	27.002	6
BOGOTÁ D.C.	Bogotá D.C.	1538	Dec. 264 de 1963	ME Declara	Sector Antiguo	Res. 029 de 1994	Decreto 619/ Jul. 28 de 2000	Resolución No. 0088 de 2021 Diario oficial 51.669 mayo 09 de 2021	7.743.955	ESP.
BOLIVAR	Santa Cruz de Mompox	1537	Ley 163 de 1959	GN Declara	Sector Antiguo	Res. 039/1994	Acuerdo 032/ Dic. De 2001	Resolución 2378 de 2009. Noviembre 17. Diario oficial No. 47609	46.408	6
BOYACÁ	Tunja	1539	Ley 163 de 1959	GN Declara	Sector Antiguo	Res. 41/94 Acta 11/96	Acuerdo 014/ May. 31 de 2001	Resolución No. 0428 de 2012. Marzo 27. Diario oficial No. 48400. Modificado Res. 1680 de 10 jun y 3275 de 12 nov, ambas de 2015	179.263	1
BOYACÁ	Villa de Leyva	1572	Dec. 3641/54 Ley 163/59	GN Declara	Sector Antiguo	Acta 5 de 1995 (adoptada por)	Acuerdo 021/ Agosto de 2004	Resolución No. 2407 de 2020 Diario oficial 51.523 de 9 de diciembre de 2020	16.973	6
CALDAS	Manizales	1849	Dec. 2178 2-12-96	ME Declara	Conjunto de Inmuebles	Res. 785/98 Mod. Dic./99	Acuerdo 508/ Oct. 12 de 2001		446.160	1
CALDAS	Salamina	1827	Res. 0087 2-2-2005	MC Declara	Conjunto Urbano	Res. 027/1994	Acuerdo 025/ Sept. 7 de 2001	Resolución No. 127 de 2017 Diario oficial No. 50.181 marzo 20 de 2017	19.393	6
CORDOBA	Santa Cruz de Llorca	1722	Res. 796 16-6-2000	MC Declara	Centro histórico		Acuerdo 042/ Dic. 14 de 2001	Resolución No. 2770 de 2010. Diciembre 15. Diario Oficial No. 48018.	115.461	6
CUNDINAMARCA	Zipaquirá	1692-1758	Res. 0087 2-2-2005	MC Declara	Centro histórico	Res. 47/94 Mod. Ac. 5/95	Acuerdo 012/ Jun. 30 de 2000	Resolución No. 3629 de 2015 Diario oficial No. 49.761 enero 20 de 2016	146.352	2
MAGDALENA	Santa Marta	1524	Ley 163 de 1959	GN Declara	Sector Antiguo		Acuerdo 005/ May. 30 de 2000		538.612	1
NORTE DE SANTANDER	Pamplona	1549	Dec. 264 de 1963	GN Declara	Sector Antiguo	Res. 030/1994	Acuerdo 025/ Ago. 31 de 2002	Resolución No. 2111 de 2009. Octubre 14. Diario oficial No. 47667	53.909	6

SANTANDER		1752						Resolución No. 0688 de 2015. Marzo 20. Diario oficial No. 49499	10.815	6
	Barichara		Dec. 1654 de 1978	ME Declara	Sector Antiguo	Res. 038 de 1994	Acuerdo 14/ Jun. 25 de 2003			
SANTANDER		1689						Resolución 2970 de 2015 Diario oficial 49.710 noviembre 28 de 2015	59.670	5
	San Gil		Dec. 264 de 1963	GN Declara	Sector Antiguo					
TOLIMA		1560						Resolución No. 217 de 2017 Diario oficial 50.283 julio 3 de 2017	24.542	6
	Honda		Dec. 1192 de 1977	ME Declara	Casco Urbano	Res. 48/94 Mod. 7-12-99	Acuerdo 40/ Dic. 29 de 2000			
VALLE		1558-1569						Resolución No. 0304 de 2010. Febrero 20. Diario oficial No. 47659	128.945	2
	Guadalajara de Buga		Ley 163 de 1959	GN Declara	Sector Antiguo	Res. 015 de 1995	Acuerdo 068/ Oct. 30 de 2000			
VALLE		1536						Resolución No. 1810 de 2015. Junio 23. Diario Oficial No.49676. Modificado Res. 3038 de 2015	2.252.616	ESP
	Santiago de Cali, La Merced		Ley 163 de 1959. Dec. 789/71	GN Declara	Sector Antiguo	Ac. 01/81. Mod. Ac. 13/84	Acuerdo 006/ Oct. 26 de 2000			

Fuente: Elaboración propia con base a información de diversas fuentes

Los municipios de mayor homogeneidad en su conformación social, urbana y arquitectónica hacen parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio (RTPP), se destacan Santafé de Antioquia (27.002 Hab.), Villa de Leyva (16.973 Hab.), Salamina (19.393 Hab.), Barichara (10.815 Hab.), Honda (24.542 Hab.), Guadalajara de Buga (128.945 Hab.), Santa Cruz de Lórica (115.416 Hab.), y Santa Cruz de Mompox (46.408 Hab.). Este último reconocido en el año 1995 por la Unesco como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. La secuencia 4 concentra el 44% de los municipios que hacen parte de la red turística. El encadenamiento de los instrumentos de protección y conservación generan dentro de sus efectos condiciones de similitud en las áreas urbanas patrimoniales como es el caso de los municipios integrantes de la RTPP, es notable condición de salvaguarda por parte de sus habitantes y el amparo de los programas estatales dirigidos a este grupo de centros históricos. El caso del centro histórico de Bogotá es singular dentro de la secuencia, no solo por ser la capital de la república sino por la temprana instalación de condiciones de protección al sector fundacional de la ciudad en comparación a las demás áreas urbanas patrimoniales. Especialmente, por el surgimiento de las sociedades de mejoras en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, siendo creada en el año 1863 la Sociedad de Embellecimiento. En el año 1898 se convierte en la Junta Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, posteriormente se transforma en la Sociedad de Embellecimiento en 1917 y desde 1930 se denomina la Sociedad de mejoras y ornato de Bogotá, lo que motiva el surgimiento de las sociedades de mejoras y ornato de la ciudad de Cúcuta, Barranquilla y Cali (1904), Cartagena (1923) y Pasto (1949) (Escovar & Cárdenas,

2018, p. 309). A través del Acuerdo 10 de 1980<sup>379</sup> se crea la Corporación la Candelaria, con el objetivo de garantizar

la defensa y conservación, tanto de edificios y lugares declarados específicamente como Monumentos Nacionales, así como de los bienes inmuebles y zonas o sectores de interés histórico, arquitectónico, ambiental y del contexto urbano localizados dentro de los límites de la Zona Especial de La Candelaria<sup>380</sup>

Además de promover la revitalización del centro histórico. No obstante, con la expedición del POT de Bogotá en el año 2000 la Corporación vio comprometida sus funciones llevando a un proyecto de creación de una entidad que agrupara las funciones de la protección y conservación del patrimonio de Distrito Capital (Escovar & Cárdenas, 2018, p. 326). De esta manera, en enero de 2007 inicia funciones el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural mediante el Acuerdo 2 de 2007<sup>381</sup>, cuyo objeto es

Corresponde al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la ejecución de políticas, planes y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de los habitantes del Distrito Capital, así como la protección, intervención, promoción y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible y de los bienes de interés cultural del Distrito Capital<sup>382</sup>.

La representatividad del centro histórico en la ciudad de Bogotá es del 1%. Los centros históricos de Salamina y Zipaquirá son declarados mediante la Resolución 0087 en el año 2005. En ambos casos son reglamentados a mediados de los años 90, formulan y aprueban su EOT y POT respectivamente, con una alteración mínima de la delimitación establecida en la reglamentación a principios del año 2000. Posteriormente son declarados BIC del ámbito nacional y 12 años después es aprobado el PEMP. Un itinerario singular con relación al encadenamiento de los demás municipios de la secuencia 4. El municipio de Santa Cruz de Lorica presenta un proceso donde primero delimita y reglamenta su centro histórico, posteriormente es declarado BIC del ámbito nacional a través de la Resolución 796 de 2000, al año siguiente aprueba su Plan de Ordenamiento Territorial – Acuerdo 042 de 2001 (diciembre 14) – y en el año 2010 es aprobado su PEMP. En lo relacionado con el posicionamiento económico y financiero 6 municipios (Santafé de Antioquia, Santa Cruz de Mompo, Villa de Leyva, Salamina, Santa Cruz de Lorica, Pamplona, Barichara y Honda) son categoría 6.

En categoría 5 se encuentra San Gil, por su parte, Zipaquirá y Guadalajara de Buga son categoría 2, mientras Santa Marta, Manizales y Tunja son categoría 1.

---

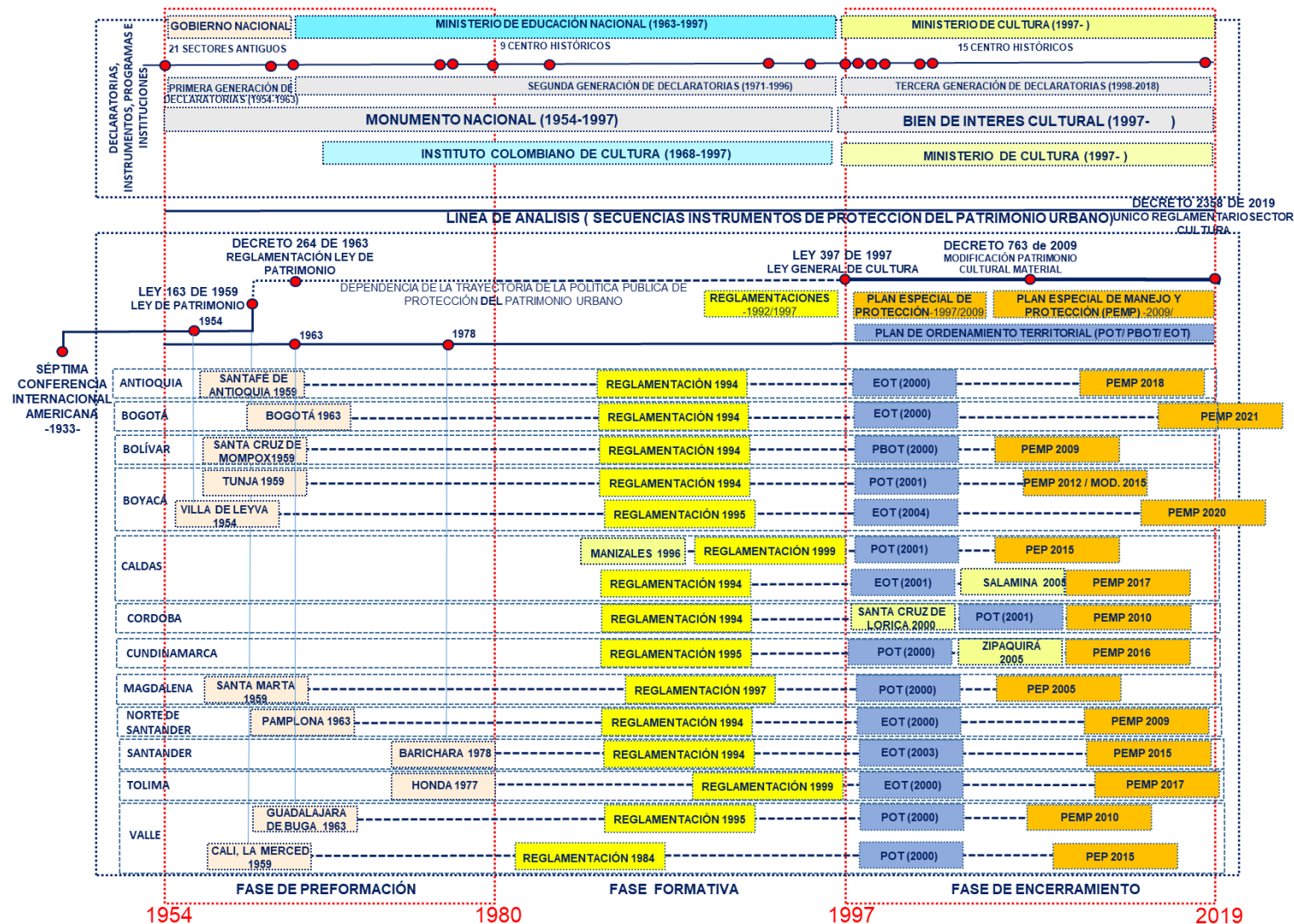
<sup>379</sup> Acuerdo 10 de 1980 (abril 29) Por el cual se crea la "Corporación" para la conservación y protección del Barrio La Candelaria, se dictan medidas sobre la defensa y conservación de dicho Barrio

<sup>380</sup> Artículo 1, Capítulo I Objetivos, Acuerdo 10 de 1980 (abril 29)

<sup>381</sup> Acuerdo 2 de 2007 (02 enero): Por el cual se determina el objeto, estructura organizacional y las funciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y se dictan otras disposiciones.

<sup>382</sup> Artículo 1, Acuerdo 2 de 2007 (02 enero).

**Figura 5.10 Disposición de los instrumentos de protección de los municipios de la Secuencia 4 en el Modelo de la Dependencia de la Trayectoria**



Bogotá por su condición junto a la ciudad de Cali con categoría especial. Hacen parte del RTPP los municipios de Santafé de Antioquia (2010), Santa Cruz de Mompo (2010), Villa de Leyva (2010), Salamina (2010), Santa Cruz de Lorica (2010), Pamplona, Barichara (2010) y Honda (2010). La representatividad del centro histórico dentro del perímetro urbano de los municipios es proporcional a la categoría económica y financiera. A mayor posicionamiento es menor el porcentaje del área declarada dentro de la ciudad, en caso contrario, a menor categoría es mayor la presencia urbana y funcional del centro histórico.

#### **5.4 Interpretación de los efectos de los instrumentos de protección patrimonial desde la singularidad: casos de estudio**

La aproximación a la interpretación de los efectos desde la singularidad se realiza mediante la selección de casos de estudio representativos dentro del corpus del patrimonio urbano del ámbito nacional en Colombia. El marco de verificación de la secuencia de los instrumentos de protección, su relación con las instituciones especialmente en la escala municipal, al igual que las consecuencias producto de la relación entre la protección y el tiempo transcurrido entre su implementación y la complejidad de su aplicación. La metodología utilizada es el Modelo General de la Dependencia de la Trayectoria (MGDT) aplicado a escala local. La categoría de las poblaciones seleccionadas no corresponde a las ciudades capitales con patrimonio urbano declarado, debido a que sus áreas históricas disfrutaban de la exposición suficiente en escenarios académicos y de divulgación, al estar integradas a los itinerarios de turismo de origen estatal y privado.

Los municipios abordados son elegidos por condensar varias rutinas en la secuencia de reconocimiento, formulación e integración de los instrumentos de planeación y protección del patrimonio vinculados a las medidas de control y compromiso ciudadano con sus respectivas áreas históricas, por ser parte de iniciativas turísticas de diverso orden y propósito. Si bien, la totalidad de los 45 centros históricos declarados no cuentan con un PEMP aprobado, muchos de ellos han ejecutado la fase de diagnóstico y fase de formulación o se encuentran en el proceso de aprobación. Esto no garantiza una aproximación a los efectos de la totalidad de los planes en fase de implementación. Los municipios seleccionados esbozan algunas de las singularidades más destacadas dentro del conjunto patrimonial y hacen parte de la compleja realidad del patrimonio urbano contemporáneo a escala municipal.

La singularidad y representatividad de los casos seleccionados para la escala de análisis está integrada por centros históricos BIC del ámbito nacional, declarados en diferentes momentos. El primer caso lo integran los centros históricos de los municipios de Villa de Leyva (1954) y Barichara (1978) con resultados en su paisaje urbano similares, pero con trayectorias instrumentales diversas. Son catalogados por la Red Turística de Pueblos Patrimonio (RTPP) como el “un museo viviente” y el “municipio más lindo de Colombia”, respectivamente. El segundo caso aborda el centro histórico del municipio de El Socorro (1963), que formula la primera reglamentación de un área urbana patrimonial a inicios de la década de los años 80 del siglo XX, siendo pionero en la conformación del instrumento en diálogo con el código de



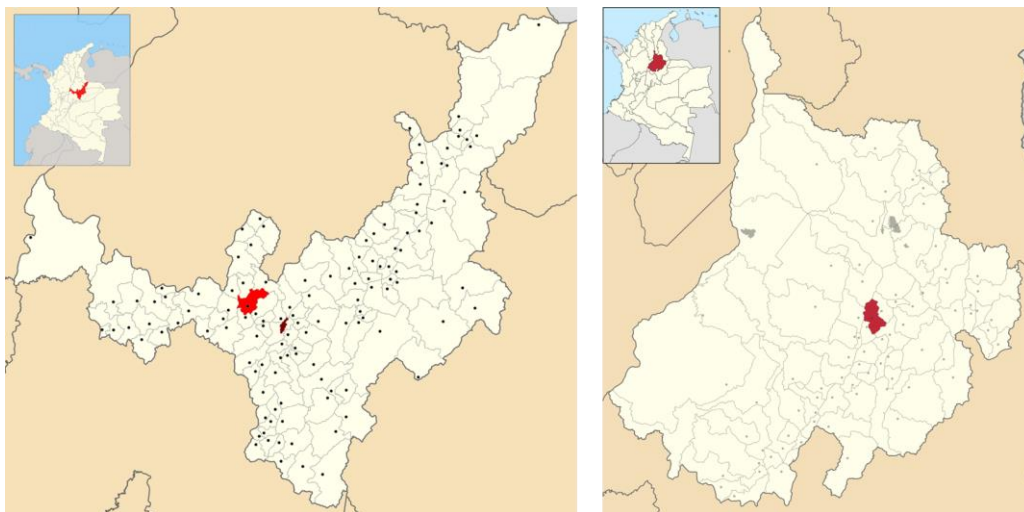
urbanismo, pero nunca fue aprobada e implementada. Hoy es un instrumento referencial que permite evidenciar las consecuencias de la carencia de instrumentos de protección del patrimonio urbano en los gobiernos locales que durante 33 años permitieron la manipulación del perímetro con secuelas hoy visibles en la afectación a su paisaje urbano histórico y el deterioro de su relación con el contexto natural inmediato.

El paisaje cultural cafetero se constituye en un desafío en varios sentidos, uno de ellos la protección en una escala regional que supera los límites departamentales. Allí los centros históricos de los municipios Salamina y Manizales declarados BIC del ámbito nacional, comparten el reto no solo de proteger su patrimonio local sino aportar a la conservación y preservación del paisaje cultural. Los casos seleccionados corresponden a escalas, regiones y geografías diversas que comparten la responsabilidad de la protección del patrimonio inmueble desde los instrumentos matizados por el regionalismo de cada centro histórico.

#### **5.4.1 Centros históricos de los municipios de Villa de Leyva y Barichara: Creación de un estilo**

Los centros históricos de Villa de Leyva (Boyacá) y Barichara (Santander), se localizan en departamentos diferentes. Su función en la consolidación del corpus urbano patrimonial es fundamental por la similitud de su representatividad actual. Son reconocidos como BIC del ámbito nacional e integrados a la RTPP. En reciprocidad a su relevancia se suman otras condiciones de semejanza como su proximidad a ciudades de mayor dinamismo urbano y aunque sus sectores antiguos son declarados con 24 años de diferencia, el paisaje urbano histórico es producto de diversos factores, entre ellos la normativa patrimonial y urbana que les otorgan un estilo propio y singular.

**Figura 5.11 Localización de Villa de Leyva y Barichara en el Departamento de Boyacá y Santander**





Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia

La Villa de Santa María – hoy Villa de Leyva- se funda el 12 de junio de 1572 por el teniente corregidor de la Ciudad de Tunja, Hernán Suárez de Villalobos, por orden del primer presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, Andrés Díaz Venero de Leyva, en el Valle de Saquencipá, más al norte de su ubicación actual, la cual fue trasladada en 1757 al sitio del Infiernito, motivado en la orden de la Audiencia de Santa Fe debido a que su ubicación inicial fue en tierras cultivadas por comunidades indígenas, sin embargo, en el año 1582 se realiza la segunda fundación en la ubicación actual, lugar más apto para los residentes (Buelvas, 2020, p. 138-139). Por su parte, el municipio de Barichara se funda el 29 de enero de 1705 por Francisco Pradilla y Ayerbe, después de un proceso histórico iniciado en 1567 con la instauración de la primera curia doctrinera de Móncora, en la actual población de Guane<sup>383</sup>, con la cual ha mantenido una relación histórica. El hallazgo de la Virgen de la Piedra motiva la fundación de Barichara, al convertirse la ermita en lugar de peregrinación y romería de las comarcas cercanas, incentivando el poblamiento (Silva & Zambrano, 1993). En tal sentido, la población de Barichara adquiere la categoría de vice parroquia en el año 1714, lo que lleva a Francisco Padilla a comprar el predio de propiedad de Maria de Soto en 1741, posterior a la subdivisión de este, obtiene 93 manzanas divididas en 6 solares.

En el año 1750, Barichara se erige como Parroquia “*distinta y separada de la San Gil, con el nombre de Nuestra Señora de la Concepción de Barichara y San Lorenzo Martir*”, así el 27 de junio de 1754 los pobladores hacen constar la erección. En 1800 el cabildo de Barichara solicita la categoría de Villa, para ser separada de la Villa de San Gil y se libre la Real Cédula para la asignación de la categoría solicitada. Posterior a la independencia de España en 1811, ante la solicitud al gobierno republicano de la provincia del Socorro, expide el 19 de junio de 1911, un decreto que le concede el título de Villa de Varaflores, la cual fue suspendida por el ejército español y ratificada nuevamente por el libertador Simón Bolívar en 1821. Restablecida por efecto de la Ley de ordenamiento territorial de 1824. Adquiere su condición de municipio en el año 1897 (Martínez, 1994; Mincultura, 2015).

El presidente de la república declara a Villa de Leyva monumento nacional mediante el Decreto 3641 de 1954 (diciembre 17), considerando a “*que arquitectónicamente Leiva forma un conjunto altamente valioso y representativo del arte colonial, cuya conservación importa al interés público como testimonio que es de una cultura y de un ambiente*”. Al igual que en “*la misma villa nació don Antonio Ricaurte, héroe de San Mateo, y murió don Antonio Nariño, precursor de la independencia nacional*”, además de ser “*sede del primer congreso de las provincias unidas de la Nueva Granada, reunido en 1812 bajo la presidencia de don Camilo Torres*”<sup>384</sup>, declaratoria ratificada por la Ley 163 de 1959. Por otra parte, a cuatro días de la finalización del periodo presidencial de Alfonso López Michelsen, el Ministerio de Educación

---

<sup>383</sup> La población de Guane mantiene una relación con Barichara por medio de un camino, cuya existencia es previa a la fundación de Barichara, posiblemente incluso a la conquista y ocupación de los españoles en la región (Mincultura, 2015).

<sup>384</sup> Considerando, Decreto 3641 de 1954 (diciembre 17) “por el cual se declara a Villa de Leiva Monumento Nacional y se dictan otras disposiciones”

declara el sector antiguo del municipio de Barichara monumento nacional, mediante el Decreto 1654 de 1978 (agosto 03), previa propuesta del Consejo de Monumentos Nacionales a través de la Resolución No. 005 del 30 de junio de 1975. El decreto no realiza mayores explicaciones de las razones que motivan la declaratoria.

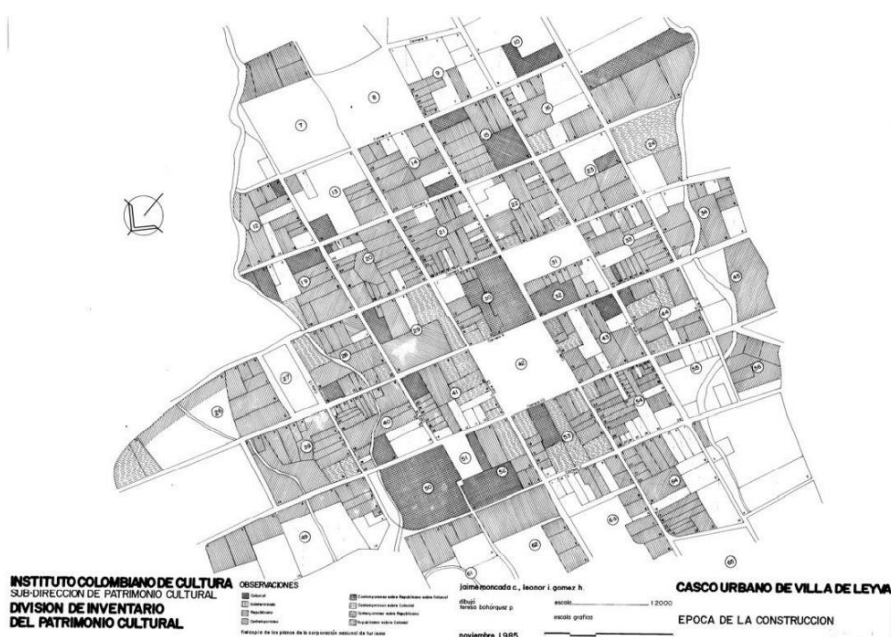
La primera propuesta de delimitación y zonificación de Villa de Leyva la realiza la Universidad de Los Andes en 1968 por encargo de la gobernación de Boyacá, para adelantar el estudio conducente a formular la planeación física de acuerdo con las doctrinas predominantes en la época, sobre el área urbana que ocupaba en ese momento el municipio. Esto con el fin de conservar las características arquitectónicas y urbanísticas del conjunto declarado en 1954 y aún sin definir, además de establecer un mecanismo para reglamentar los nuevos desarrollos. La propuesta precisa dos zonas, una menor contenida dentro de un área mayor diferenciadas en su función, orientadas al propósito de la salvaguarda a partir de fijación de los perímetros y realizar la primera catalogación de las edificaciones de cierto valor arquitectónico e identificar el área de mayor concentración de inmuebles de importancia histórica, arquitectónica y urbana. De esta forma, la reglamentación propuesta se sintetiza en mayor restricción para la intervención en las edificaciones existentes y control estricto para las nuevas edificaciones (Mincultura, 2019).

**Figura 5.12 Plano de Villa de Leyva en 1954 y Zonificación propuesta por la Universidad de Los Andes en el año 1968**



Fuente: Imágenes tomada del archivo de Colcultura

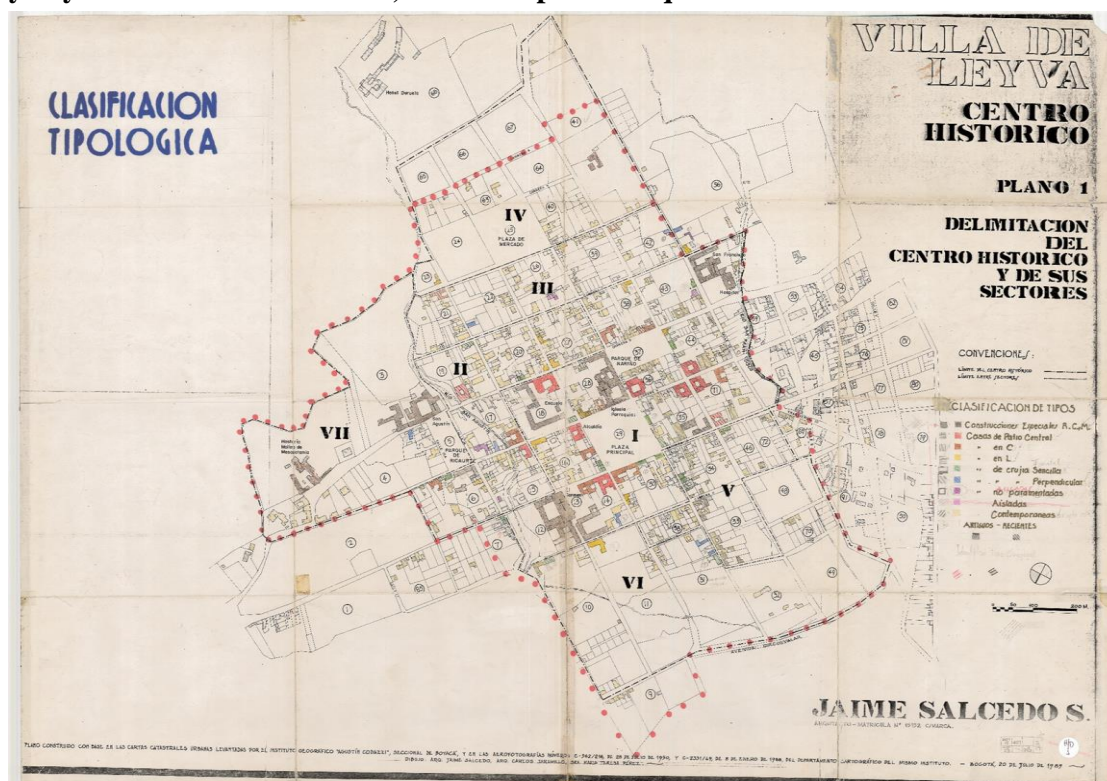
**Figura 5.13 Inventario y propuesta de delimitación del centro histórico de Villa de Leyva 1985**



A mediados de la década de 1980, Colcultura realiza un nuevo inventario y propuesta de delimitación para formular la reglamentación del sector antiguo, a pesar contar con dos definiciones de perímetros y recomendaciones sobre la conservación de los bienes arquitectónicos y urbanos, aún no oficializados. La definición de un nuevo perímetro a cargo de Jaime Moncada y Leonor Gómez en el año 1985, ejecutada para complementar y actualizar el proyecto de reglamentación realizado anteriormente, conduce a una nueva consultoría liderada por el Colcultura a cargo del Arquitecto Jaime Salcedo entonces director del Instituto Carlos Arbeláez Camacho de la Pontificia Universidad Javeriana (López, 2013). Las orientaciones y necesidades de Colcultura para la consultoría fueron la inspección predio a predio para verificación de tipologías de las edificaciones de arquitectura representativa, además de

verificar la delimitación considerada en la categoría monumental y disposiciones reglamentarias, conducentes a la aprobación del Acuerdo 004 de 1989 del Consejo Municipal de Villa de Leyva (Ministerio de Cultura, 2019). Los cambios y redefiniciones de los estudios en los años 1968, 1980 y 1985 obedecen al surgimiento de Colcultura e introducción de los conceptos de planeación urbana en la conservación del patrimonio y el plan de salvaguarda, el primero dirigido a la escala municipal y el segundo al proyecto arquitectónico o agrupación de edificaciones en un radio menor.

**Figura 5.14 Plano delimitación y clasificación tipológica del centro histórico de Villa de Leyva y sus sectores el año 1985, realizado por el Arquitecto Jaime Salcedo**

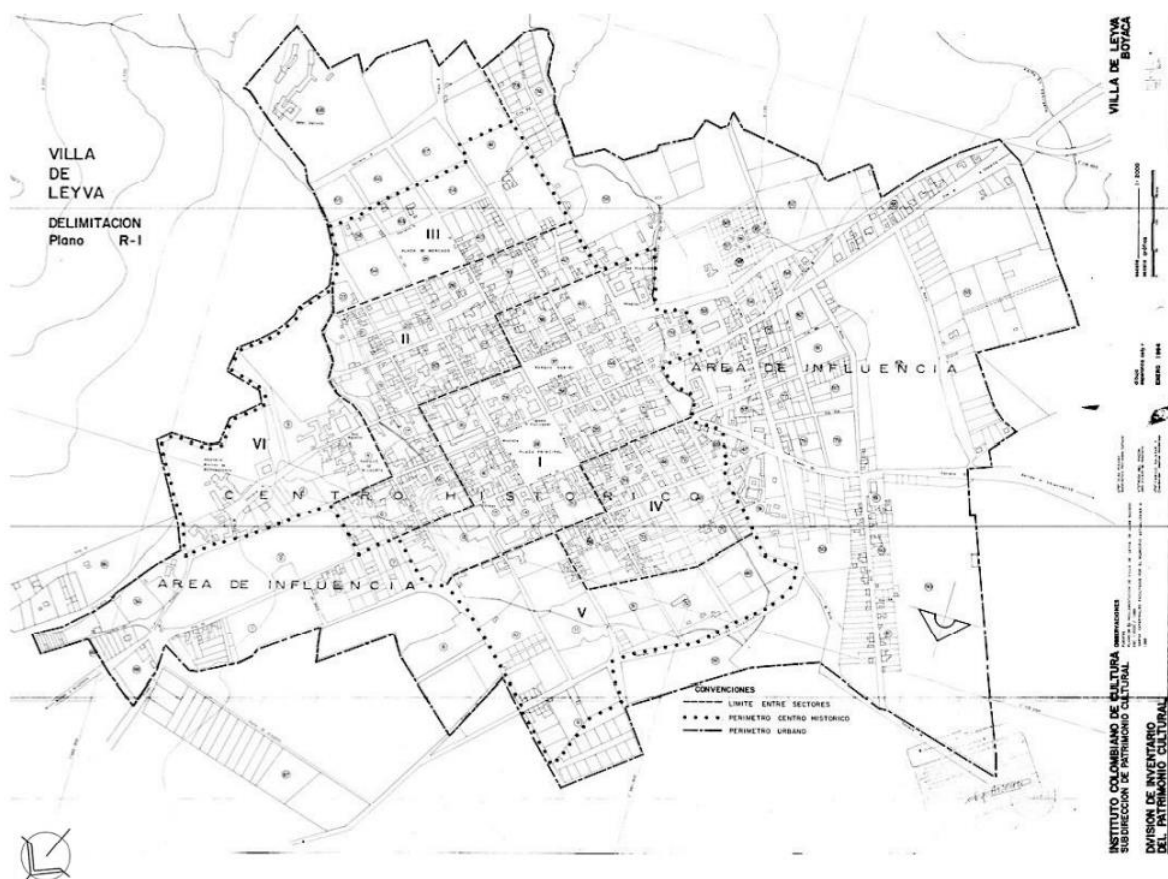


Fuente: Imagen tomada del archivo de Colcultura

El cambio de visión y herramientas metodológicas para la definición de los perímetros de protección propuestos en el año 1968, fija el área de conservación en dos polígonos del área urbana del momento: a) el área central incluye las edificaciones y espacios públicos de mayor relevancia y tradición urbana, parte del área fundacional, b) el área exterior incluye algunas edificaciones de valor arquitectónico singular y la subdivisión predial de las áreas de crecimiento urbano. La delimitación del año 1989, amplía el área urbana patrimonial y subdivide el casco antiguo en 7 sectores especializados al interior de un único perímetro del centro histórico a partir de la valoración progresiva y detallada de las diferentes versiones de estudios y estrategias de aproximación al reconocimiento de los mecanismos adecuados para

garantizar la protección del área patrimonial. La subdivisión en 7 sectores permite la concentración de medidas de conservación y salvaguarda precisas para cada uno de ellos, según las particularidades prediales, vocación de uso y tipologías entre ellas: construcciones especiales, casas de patio central, casas en C, casas en L, casa en crujía sencilla, perpendicular, no paramentadas, aisladas y contemporáneas. La cartografía resultante es incorporada a las cartas catastrales urbanas realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las aerofotografías de julio de 1950. Este trabajo permite la creación de la zona histórica o sector antiguo, aprobado mediante el Acuerdo Municipal 004 de 1989 (Colcultura, 1992; Ministerio de Cultura, 2019).

**Figura 5.15 Plano delimitación del centro histórico de Villa de Leyva y sus sectores 1989, Acuerdo 007 de 1996**



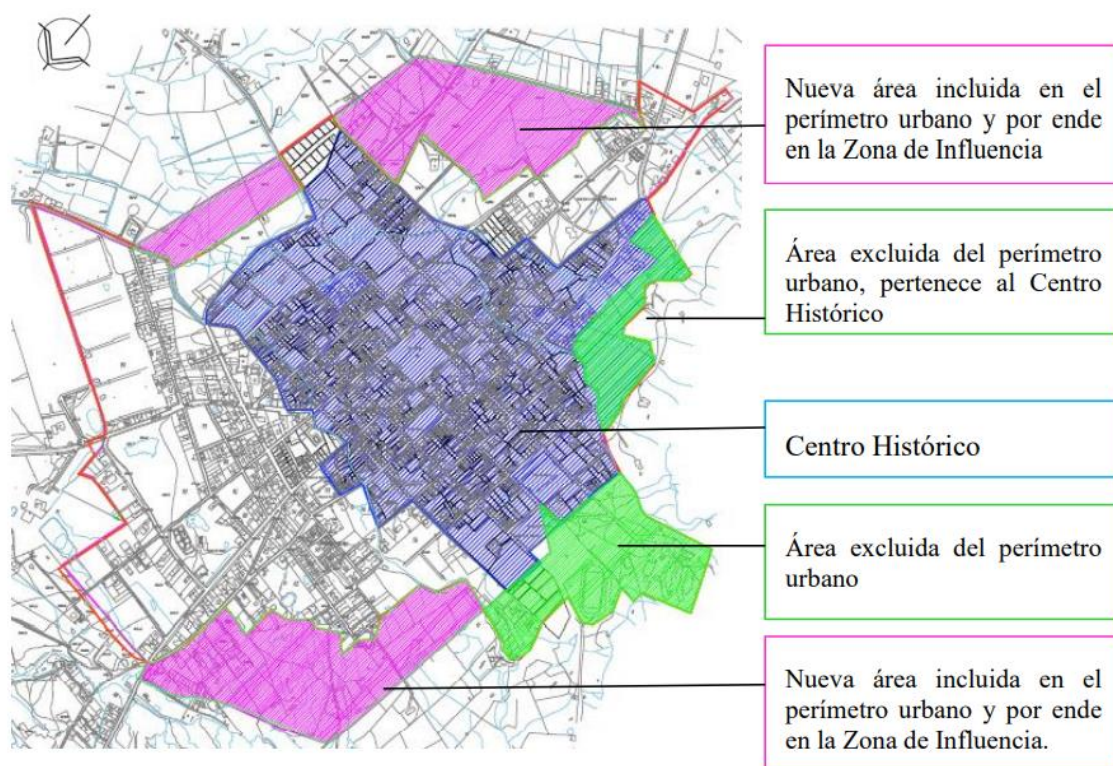
Fuente: Imagen tomada del archivo de Colcultura

Con ocasión de la aprobación de la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 152 de 1994 (julio 15), Ley Orgánica del Plan de Desarrollo en los diferentes niveles que incluyen el municipal, motivan un nuevo estudio de actualización de reglamentación ordenado por



Colcultura, aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales mediante el Acta 5 de 1995. Establece y delimita el centro histórico patrimonial y el resto del perímetro urbano se define como zona de influencia, a través del Acuerdo 007 de 1996 del Consejo Municipal de Villa de Leyva. Acuerdo aprobado después de un año de finalización de la actualización de la delimitación y reglamentación realizada por Colcultura, con base en los estudios precedentes de los cuales retoma el perímetro propuesto por el Arquitecto Jaime Salcedo en el año 1988 y las cartas catastrales de 1993.

**Figura 5.16 Plano delimitación del centro histórico de Villa de Leyva según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 2004.**



Fuente: Imagen tomada de Tomado de (Ministerio de Cultura 2019, p. 43)

En el año 2004, se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Villa de Leyva, mediante el Acuerdo No. 021 del 14 de agosto, en el subcapítulo 5, patrimonio arquitectónico y urbanístico, reglamentación zona urbana centro histórico, menciona:

Artículo 325. Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico. Concepto. Son los valores espaciales que representan testimonio cultural de una época, de un acontecimiento histórico y que aún interactúa nuestra sociedad, permitiendo una dinámica y lectura de la memoria urbana con el mundo contemporáneo. Se entiende como Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico el área declarada como Monumento Nacional desde 1954

delimitada como perímetro del Centro Histórico a partir de los criterios generados por la División de Patrimonio del Ministerio de Cultura y sancionados por el Concejo Municipal. (Acuerdo 007 de septiembre de 1996). Se tiene en cuenta a parte de lo anterior, elementos de gran significado histórico, arquitectónico y urbanístico localizados en las zonas suburbanas y rurales tales como: molinos existentes, las casas de hacienda y los caminos antiguos y de herradura que se declaran Patrimonio Municipal, una vez y al corto plazo se establezca su estado de conservación y su justificación en la historia y su papel como parte de la memoria urbana en torno al beneficio futuro.<sup>385</sup>

**Figura 5.17. Panorámica del centro histórico del municipio de Villa de Leyva (Boyacá)**



Fuente: Imagen tomada de Villa de Leyva sostenible (Findeter, 2019, p. 2)

La delimitación del centro histórico mantiene las condiciones determinadas en el Acuerdo 007 de 1996, con la ampliación del perímetro urbano y exclusión de algunos predios que “continuarán en la misma condición; su uso, y su ocupación se definirá y se reglamentará en concordancia”<sup>386</sup>, que mantendrán sus condiciones normativas hasta que se revise, actualice y apruebe el Plan Especial de Protección del Centro Histórico<sup>387</sup>, como lo expresa el:

Artículo 326. Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico. El Centro Histórico. Declarado Monumento Nacional, mediante decreto 3641 de 1954. La delimitación de perímetros urbanos y definición normativa sobre el Centro Histórico y sus áreas de influencia se encuentran definidas en el Acuerdo Municipal 007 de septiembre de 1996.<sup>388</sup>

<sup>385</sup> Artículo 325. Patrimonio arquitectónico y urbanístico. Concepto. Subtítulo 4 Programas Estructurales, Capítulo 1 Valoración y protección del patrimonio urbano. Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva, Acuerdo No. 021 del 14 de agosto de 2004.

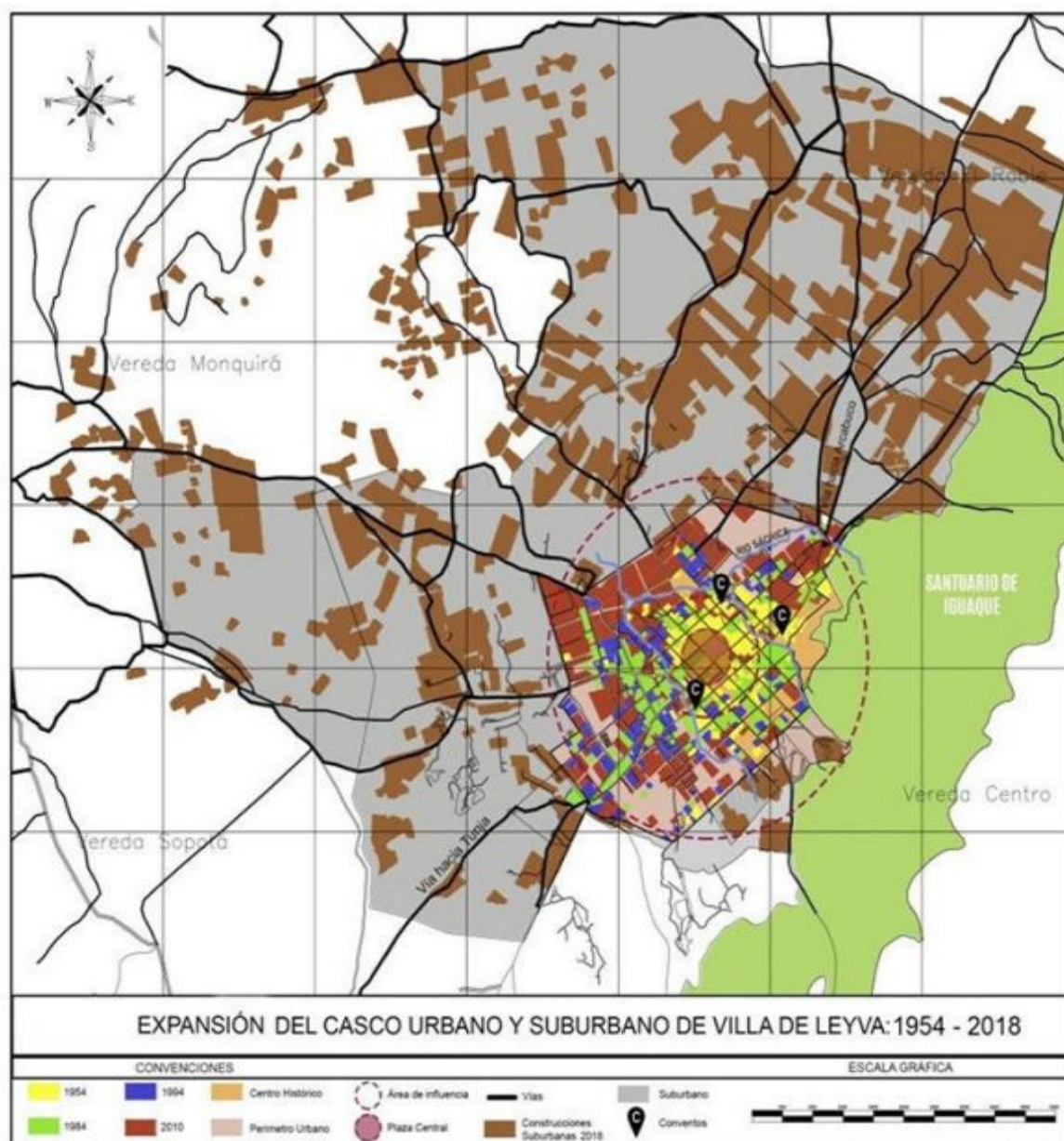
<sup>386</sup> Parágrafo, artículo 101 perímetro del suelo urbano

<sup>387</sup> Determinado en el artículo 327 y 328 del PBOT del año 2004.

<sup>388</sup> Artículo 326



**Figura 5.18 Secuencia de subdivisión predial del área urbana y rural de Villa de Leyva: 1954-2018**



Fuente: Imagen tomada de Tomado de (Álvarez,2021, p. 192)

La formulación del Plan Especial de Protección (PEP) de Villa de Leyva se inicia en el año 2007 con la primera fase del instrumento. El propósito inicial es retomar y actualizar la información de la última reglamentación del año 1996, debido al cambio de la legislación en el



año 2008 y 2009. Continúa la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) en el año 2011 y finalmente es aprobado mediante la Resolución 2407 de 2020 (noviembre 30)<sup>389</sup>. Dentro de los principales efectos de la manipulación de la delimitación y difusión constante de Villa de Leyva como destino turístico es la subdivisión predial, especialmente en el área rural como se observa a continuación:

El municipio de Villa de Leyva tiene 121 Km2, la cabecera municipal cuenta con 10 barrios: San Francisco, El Carmen, los Olivos, El centro, Santander, Ángeles, Galán, San Juan de Dios, La Palma y Senderos de la Villa. El área urbana ocupa 164,13 ha, mientras el área rural ocupa 11904,65 ha, y se distribuye en 12 veredas: Cañuela, Capilla (I y II), Cardonal, Roble (alto y bajo), Salto y Lavandera, Llano Blanco, Llano del Árbol, Monquirá, Rítoque, Sopotá, Sabana (Alta y Baja) y Centro. La población de Villa de Leyva en el año 2020 es de 19171 habitantes. En la cabecera se ubican 11680 habitantes (60,93%) y 7491 habitantes (39,07%) en el área rural. El crecimiento urbano presenta una tendencia hacia el norte y occidente siendo las veredas El Roble (27,39%), Monquirá (14,03%) y La sabana (15,16%), las que absorben el 56,58% del crecimiento de residencias, servicios hoteleros y asociados.

**Tabla 5.21 Desarrollo urbano de Villa de Leyva: 1954-1994-2018**

	<b>1954</b>	<b>1994</b>	<b>2018</b>
<b>Perímetro urbano M2</b>	639.566	1.683.324	1.871.695
<b>Número de Predios</b>	396	1.731	2.604
<b>Área predial M2</b>	359.840	518.779	1.616.500

Fuente: Tomado de (Álvarez,2021, p. 194)

Desde la declaratoria en el año 1954 hasta el año 1994, el perímetro urbano crece 2,9 veces con un promedio anual de 26094 m2. Mientras el crecimiento urbano entre el año 1994 y 2018 es de 1,2 veces con un promedio anual de 7849 M2, eso permite deducir que durante los primeros 40 años la ausencia de una reglamentación en este sentido favoreció el crecimiento del perímetro urbano a pesar de ser declarado el sector antiguo monumento nacional. Posterior a 1994, la apreciación del patrimonio histórico y la aprobación del Acuerdo 007 de 1996 del Consejo Municipal de Villa de Leyva establecen la reglamentación vigente hasta noviembre de 2020, momento de la aprobación del PEMP. La subdivisión predial urbana es evidente, pero la incorporación de suelo rural también es un fenómeno presente en la trayectoria del crecimiento urbano de Villa de Leyva.

El balance realizado para la formulación del Plan de Desarrollo 2016-2019, establece el estado de 12068,64 ha que conforman el municipio de Villa de Leyva, donde el 1.36% corresponde al área urbana con el mayor número de predios (2.748), el 50,1% del área construida total del municipio que dentro del valor total del avalúo corresponde al 66,64%, mientras el 98,64% se

<sup>389</sup> Resolución 2407 de 2020 (noviembre 30) “*Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y protección (PEMP) del Centro Histórico (CH) de Villa de Leyva (Boyacá) y su zona de influencia, declarado Monumento Nacional (hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional- BICN-)*”

encuentra en el área rural con el restante 49,9% del área total construida y el 33,36% del avalúo.

**Figura 5.19 Panorámica del área suburbana de Villa de Leyva (Boyacá)**



Fuente: Imagen tomada de falconsight.com.co

**Tabla 5.22 Distribución área, propietarios y avalúos, sectores urbano y rural**

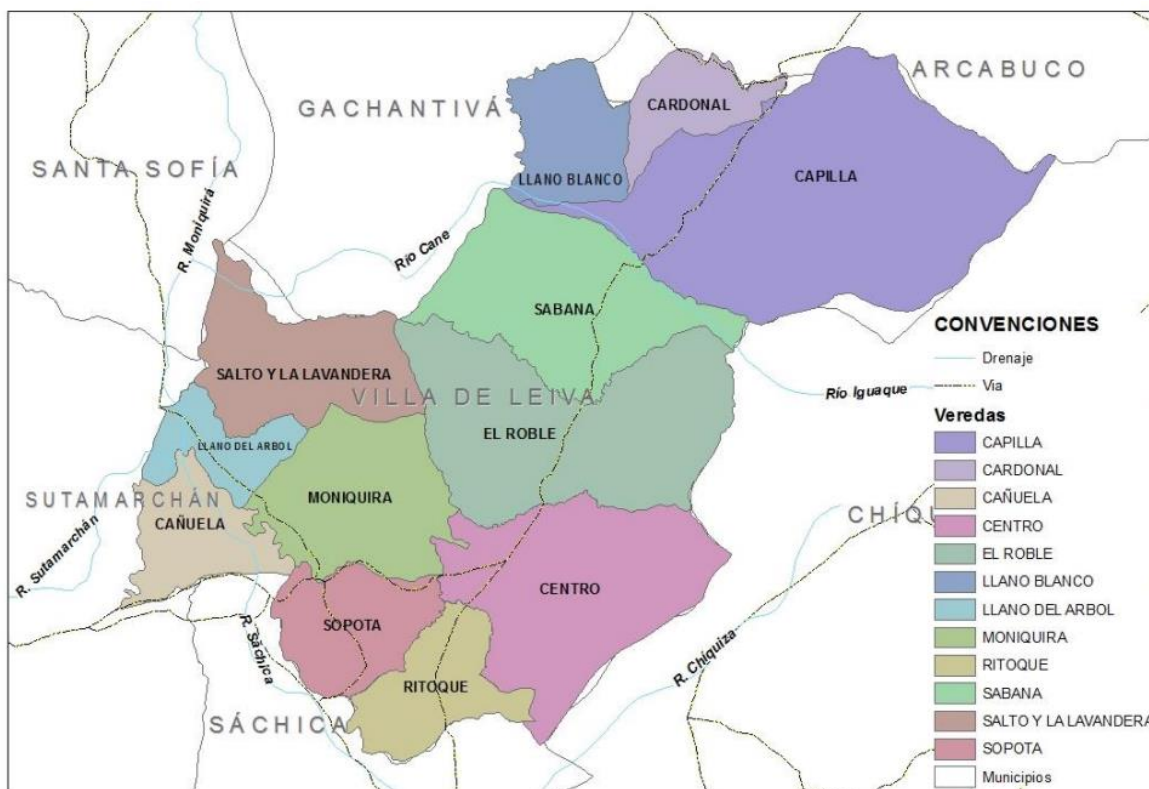
Sector	No. Predios	Propietarios	Área (Ha)	Área Construida (Ha)	Avalúo (Miles de Pesos)	Avalúo promedio (Miles de Pesos)
Urbano	2.748	4.292	164.42	411,155	374.362.673	136.231
Rural	6.017	9.603	11.904,22	409,863	410.372.671	68.202
Total	8.765	13.895	12.068,64	821,018	784.735.344	204.433

Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Primero Villa de Leyva”  
(Alcaldía Municipal, 2016, p.28)

El perímetro urbano concentra las actividades comerciales y servicios asociados al turismo. El alto valor del suelo urbano y las limitaciones propias de la construcción determinadas por la norma extrapolan la población al área rural, allí la misma norma incentiva la construcción de

este tipo de edificaciones residenciales dispersas y en pequeños conjuntos, lo que genera la migración de la población campesina. Las actividades de producción rural en el minifundio a poblaciones cercanas con el incremento de actividades asociadas al servicio de los residentes ocasiones y de fin de semana (Fonseca, 2019; Álvarez 2020).

**Figura 5.20 Distribución área, propietarios y avalúos, sectores urbano y rural**



Fuente: Imagen tomada de Tomado del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Primero Villa de Leyva” (Alcaldía Municipal, 2016, p.28)

**Tabla 5. 23 Distribución política, áreas y predios de la zona rural de Villa de Leyva**

Nombre de la vereda	No. de predios	% predios	Área (Ha)
Llano Blanco	283	4.70%	561,90
Capilla	575	9.56%	2.837,46
Cardonal	252	4.19%	324,06
La Sabana	912	15.16%	1.370,44
El Roble	1648	27.39%	1.675,23
Salto y la Lavandera	341	5.67%	958,85
Monquirá	844	14.03%	985,77
Llano del árbol	104	1.73%	355,06



Cañuela	205	3,41%	525,34
Sopotá	157	2,61%	634,72
Rítoque	225	3,74%	653,48
Centro	471	7,83%	1.021,91
TOTAL	6017	100%	11.904,23

Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Primero Villa de Leyva”, (Alcaldía Municipal, 2016, p.28)

**Figura 5.21 Panorámica del centro histórico del municipio de Barichara (Santander)**



Fuente: Imagen tomada de Vanguardia

Mientras en el año 1978, Villa de Leyva realizaba la segunda delimitación del sector antiguo por medio del Decreto 1654<sup>390</sup> se declaraba el centro histórico del municipio de Barichara monumento nacional, previa propuesta de la declaratoria por parte del Consejo de Monumentos Nacionales oficializada por medio de la Resolución No. 005 del 30 de junio de 1975. Barichara adquiere su condición de municipio en 1897, ante la creación del régimen municipal del departamento de Santander. El desarrollo en el siglo XX estuvo animado por la fundación del

<sup>390</sup> Decreto 1654 de 1978 (agosto 03): Por el cual se declara Monumento Nacional el sector antiguo del Municipio de Barichara, Santander).

Hospital San Juan de Dios en 1918, la inauguración de la carretera de Barichara al municipio de San Gil en el año 1935, “*el inicio del servicio de acueducto en 1948 y el de alcantarillado en 1954 y el traslado del mercado que funciona en la plaza principal en 1952, que cambia el carácter del centro de la ciudad*” (Guerrero & Martínez, 1996; Salazar et al, 1996, p. 113).

Barichara se funda por iniciativa de algunos vecinos de San Gil, con quien mantiene una disputa por la supremacía económica, sin embargo, se beneficia de la relación cercana, funcional y complementaria en sus actividades. San Gil es el principal promotor de la actividad turística en Barichara por construirse en una oferta diferente, especializada en el turismo cultural que en la última década ha perdido su patrocinador. Por la localización geográfica de Barichara, la topografía irregular sobre la que se asienta ha sido limitante para su crecimiento urbano, de tal forma, su trama urbana de manzanas cuadradas incide en el fenómeno de mayor crecimiento y ocupación demográfica cerca de la plaza central (Salazar et al, 1996, p. 113), como se observa a continuación:

**Figura 5.22 Crecimiento urbano del municipio de Barichara**

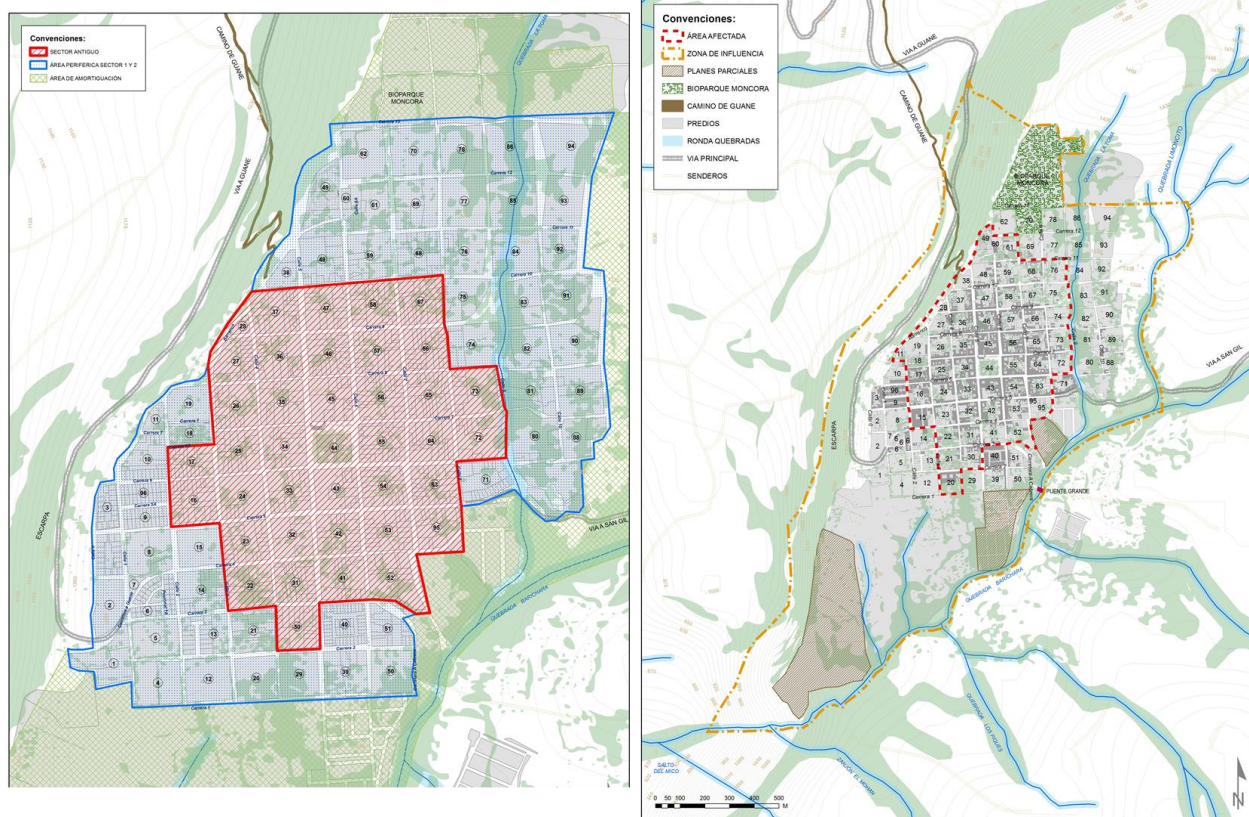


Fuente: Imagen tomada de Tomado de (Ministerio de Cultura, 2014)



El CMN aprueba la reglamentación del centro histórico de Barichara mediante la Resolución 038 de 1994, adoptada por el consejo municipal a través del Acuerdo No. 002 de 1994, la cual expide la reglamentación para el centro urbano de Barichara y establece la delimitación del sector antiguo y la zona de influencia según las recomendaciones del manual de reglamentación de 1991. Con el fin de garantizar la aplicación de las normas urbanísticas y arquitectónicas el sector antiguo se divide en dos sectores según la figura 5.23, de la siguiente manera: Sector 1 (31 Manzanas) y sector 2 (25 Manzanas). El acuerdo municipal establece la norma cultural tanto urbanística como arquitectónica para el sector antiguo y su zona de influencia, es modificada parcialmente por el Acuerdo Municipal 015 de 2000 (agosto 14), adecuada para construirse en la normatividad urbana hasta la formulación y aprobación del EOT. Aun así, a partir de los resultados efectivos de su aplicación fue incluida y hace parte integral del EOT aprobado por medio del Acuerdo 14 de 2003 (junio 25).

**Figura 5.23 Delimitación de Barichara Acuerdo 002 de 1996 y delimitación Resolución 688 de 2015 (PEMP)**



Fuente: Imagen tomada de Tomado de (Ministerio de Cultura, 2014)

#### 5.4.2 El Socorro, la reglamentación no adoptada<sup>391</sup>

La dinámica urbana de los municipios de El Socorro y San Gil ha estado mediada por una historia común que se remonta al siglo XVIII, en la que ha predominado una lucha por el ascenso en estatus político, religioso, social, jurídico y económico, bajo el marco de los

“dos ciclos básicos de poblamiento hispánico: el primero es de las fundaciones de ciudades en los siglos XVI y XVII, que puede calificarse como la legitimación de los derechos políticos de la Corona Castellana sobre el nuevo mundo. El segundo, lo constituyen las erecciones parroquiales iniciadas en la segunda mitad del siglo XVII que florecieron durante el siglo siguiente, erecciones que se caracterizaron por ser llevadas a cabo por grupos de vecinos blancos que deseaban conforme a derecho poblarse” (Cortés, 1998, p.119-120).

**Figura 5.24 Partidos de las villas de Socorro y San Gil, 1776**



Fuente: Imagen tomada de Archivo General de la Nación, Mapas y Planos 4, 450A.

<sup>391</sup> El siguiente apartado se desarrolla a partir de la experiencia del autor como consultor y parte del equipo de formulación del PEMP para el municipio de El Socorro en el año 2019.

La declaratoria del municipio del Socorro, se oficializa mediante el decreto 264 de 1963, por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959<sup>392</sup>, donde ya se habían incorporado una serie de municipios como patrimonio nacional. En el artículo 4 de dicho decreto,

*“en virtud de la autorización conferida por el artículo 6° de la Ley 163 de 1959, y sin perjuicio de otras reservas que puedan decretarse en el futuro, se incluyen en las reservas especificadas en el artículo 4°, de dicha Ley los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, San Gil, Pamplona, Ríonegro (Antioquia), Marinilla y Girón”*<sup>393</sup>.

El área reconocida patrimonio nacional para su momento no especifica una pieza urbana delimitada o contenida dentro de algún sistema de referencia, solo menciona un sector antiguo, especificado por: “las calles, plazas, plazoletas, murallas y demás inmuebles de los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX”<sup>394</sup>. En ningún momento dentro del documento de declaratoria se menciona o sugiere la delimitación del sector antiguo de los municipios reconocidos con esta dignidad. Se consideran monumentos los inmuebles de origen colonial y prehispánico, además de los que estén vinculados a la lucha por la independencia y con el periodo inicial de la organización de la república. El origen que motiva la incorporación del municipio del Socorro se basa en su desempeño en la gesta de independencia de Colombia, además de la inspiración de otras iniciativas en esta búsqueda.

Sobre el control urbano, la labor de conservación a escala de edificación y conjunto urbano en decreto 264 de 1963, sugiere lo siguiente:

*“los planos de edificaciones o construcciones que hayan de hacerse en los sectores de ciudades calificados como antiguos por la Ley 163 de 1959 y disposiciones reglamentarias, o en las inmediaciones de dichos sectores, de modo que hayan de influir en su aspecto o fisonomía general, requieren la previa aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. Y las respectivas Alcaldías, Oficinas de Planeación, Obras Públicas u otras que hayan de autorizar dichas obras, no lo harán sin ponerse de acuerdo con el mencionado Consejo”*<sup>395</sup>.

Este procedimiento es la única mención respecto al futuro desarrollo urbano y transformación de los inmuebles y sectores de los municipios declarados como es el caso de El Socorro. Adicionalmente las alcaldías o las oficinas encargadas de expedir las licencias para la ejecución de obras en los municipios declarados no podrán conceder licencias de demoliciones,

---

<sup>392</sup> La ley 163 de 1959, sobre “Defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y los monumentos de la nación” se encuentra aún vigente. Es considerada como la Ley de patrimonio, resultado tardío de los acuerdos del Tratado celebrado el VII Conferencia Panamericana de 1933, al cual se adhirió Colombia en 1936. (Salazar, 1994)

<sup>393</sup> Tomado del artículo I del decreto 264 de 1963.

<sup>394</sup> Tomado del párrafo 4, artículo 4. Decreto 264 de 1963.

<sup>395</sup> Tomado del artículo 17, decreto 264 de 1963.



reparaciones, refacciones o reconstrucciones en los sectores antiguos, sin previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales<sup>396</sup>.

**Figura 5.25 Aerofotografía del municipio de Socorro en 1963**



Fuente: Imagen tomada del equipo PEMP El Socorro (2019).

En el transcurso del siglo XIX varios extranjeros recorren el país y su travesía culmina con un informe. Diplomáticos, comerciantes, botánicos, mineralogistas, ingenieros de minas, a veces sencillos turistas, estos viajeros dejan testimonios escritos y gráficos de la fisonomía del país; de sus campos, aldeas, pueblos y ciudades. De esta literatura se extrae las descripciones urbanas

---

<sup>396</sup> El Consejo de Monumentos Nacionales nace por la Ley 163 de 1959, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, es considerado el órgano rector del patrimonio cultural.

cubriendo la totalidad del siglo XIX. Gaspar Mollien proporciona un retrato del país de la época de la independencia. (Aprile-Gnisset, 1992). En el relato “Voyage a la Nouvelle Grenade” de 1832, hay una descripción del Socorro de esta época:

*La ciudad de Socorro está muy mal emplazada y peor pavimentada. Situada a ladera de una montaña, pocas veces recibe el efecto refrescante de los vientos debido a que la cadena de montañas del Opón, que va de sur a norte, llega hasta las de Ocaña. El calor, por lo tanto, es muy fuerte; el termómetro a la sombra pocas veces baja de 20 grados centígrados.*

*...Con todo, Socorro tiene unos 12.000 habitantes, muy trabajadores e inteligentísimos; se entregan asiduamente a la agricultura, y sus fábricas no dejan de tener importancia. Se cultiva mucho la caña de azúcar; algodón y arroz; estos productos son baratísimos debido a que hay pocos caminos practicables para exportarlos*

*... En todas las casas, en todas las chozas todo el mundo hila, tiñe o teje; por todas partes se ven telares; muchas gentes prefieren tejer sombreros de paja; a los que dedican a este trabajo se les reconoce por la uña del dedo índice, que se dejan crecer desmesuradamente.*

Para la época de la declaratoria de Socorro como monumento nacional, contaba con aproximadamente 100 manzanas, en configuración de damero.

#### **5.4.2.1 Estudio y reglamentación del sector histórico de El Socorro realizado por el Alberto Corradine Angulo en 1982**

Mediante el contrato 766/1979 y adicionales celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, “quien ocupa asiento en el seno de Consejo de Monumentos Nacionales, resuelve contribuir en forma similar a otros organismos estatales asumiendo los costos de este estudio de limitación del sector históricos de El Socorro”<sup>397</sup> y el arquitecto Alberto Corradine, se adelanta el estudio y reglamentación del sector histórico de El Socorro. Las características del estudio fueron definidas por el arquitecto José Luis Giraldo y adoptadas por el ministerio, lo que introduce la dificultad en el manejo de las fichas técnicas de manzana y calle debido al origen de la metodología concebida para terrenos planos, que dista de la condición topográfica del Socorro. El objetivo principal del estudio mencionado es generar los parámetros que permitan a propietarios y habitantes del sector, claridad respecto al uso y actividades permitidas en los inmuebles, a la administración pública un instrumento de control en el marco del respeto y protección de patrimonio. El informe final es entregado el 20 de agosto de 1982.

En la declaratoria del sector antiguo del Socorro queda estimado que los

---

<sup>397</sup> Tomado del informe del Código de Urbanismo

*“términos enunciados por la Ley 163 de 1959 sobre la extensión de los sectores históricos, que los retrotrae a los perímetros logrados por las ciudades y villa al concluir el periodo colonial, también interesan el caso de El Socorro por cuanto el decreto 264 de 1963, reglamentario de la Ley citada, especifica que esta ciudad se encuentra cobijada por los criterios fijado en ella”*<sup>398</sup>,

Por tal razón el estudio encargado pretende fijar los límites dentro de los cuales se encuentran las edificaciones de valor histórico, artístico, ambiental y la verificación del estado de los inmuebles. El estudio está conformado por tres partes diferentes: las bases generales de la propuesta; el proyecto de código de urbanismo específico para el sector histórico y los planos con información de carácter urbano, reglamentación urbana, fijada por el código de urbanismo con la delimitación del sector histórico. Para esta época y según lo menciona el informe ya se presentan

*“factores transformadores que se han reforzado con las soluciones arquitectónicas adoptadas al utilizar edificios en altura y otras soluciones aún más accidentadas que hasta el presente no puede juzgarse que hayan producido ningún beneficio a las calidades ambientales generales de la ciudad”*<sup>399</sup>,

Desde esta época es visible el desarrollo de edificaciones que afectan de manera sensible el paisaje urbano del municipio. Los factores considerados para estructurar un reglamento de manejo del sector históricos son los siguientes:

- a. Existencia de una vía nacional que cruza el casco urbano en sentido norte sur.
- b. Límites topográficos y artificiales que limitan su expansión física en varias direcciones.
- c. Existen zonas próximas al casco urbano que admiten trabajos de adecuación urbanística, para nuevos sectores de vivienda o de localización de nuevos polos de desarrollo industrial o comercial.
- d. La incidencia transformadora causada por la carretera troncal, con relación a usos y estado de las edificaciones que lo limitan, se expande de manera acelerada y en futuro próximo afectara directamente el sector o las áreas clasificadas como pertenecientes al sector histórico.
- e. Las edificaciones construidas recientemente para uso bancaria no responden, en general a criterios de conservación y defensa de los valores tradiciones; algunas llegan a ser de mal gusto.
- f. La aparición de gran número de obras menores distribuidas por el casco antiguo responde a conceptos y gustos de propietarios, maestros y arquitectos que representan la posición singular y son ajenos al contexto, reforzando la imagen popular de la ciudad. Muy difícil de enmendar y superar.

---

<sup>398</sup> Ibidem.

<sup>399</sup> Tomado del Informe “Estudio y reglamentación del sector histórico de El Socorro. Código de urbanismo”, presentado por el Arquitecto Alberto Corradine el 20 de agosto de 1982. Sin página específica.

- g. La presión de la actividad financiera y económica sobre el contexto conduce a la alteración del pasado arquitectónico y distorsión del pasado urbano.
- h. Cierta forma de dependencia de trabajo con relación al municipio de San Gil, da lugar a la aparición de condiciones propias de ciudad dormitorio. Su condición de ciudad estudiantil y su dependencia del campo como lugar de trabajo confieren calidades especiales a la ciudad.
- i. Es posible apreciar ciertas formas de zonificación en la estructura urbana en cuanto a servicios, administración y comercio, así como cordones periféricos de vivienda de clases pobres y algunos donde predomina la prostitución. No es posible diferencia la vivienda de clases media y alta, en cuanto a zonificación se refiere.
- j. Son significativas las actividades artesanales o las desarrolladas en pequeños talleres familiares, así como dependencia o vinculación diaria con labores de campo.
- k. No existen normas municipales claras completas sobre el control y requisitos que deben cumplir las edificaciones nuevas, en cuanto a áreas, índices de construcción y ocupación, alturas etc. El control está actualmente en el cargo de la personería municipal, pues no existe una oficina de planificación o un profesional al frente de estas actividades.
- l. El mercado es insuficiente para la actual población y genera grandes traumatismos en el tránsito vehicular de las vías aledañas dada su localización (Corradine, 1982).

#### **5.4.2.2 Síntesis de la propuesta de Corradine**

La definición de un sector histórico establece la división clara en el ámbito urbano, sometido a una norma específica con la salvedad que dicho sector hace parte de la ciudad y no puede desligarse de su proceso territorial. Este principio permitió delimitar algunas políticas de carácter urbano sobre el manejo de coeficientes o índices de construcción y ocupación en los predios localizados dentro y fuera del sector histórico. Previendo el desarrollo futuro de la ciudad en consideración del desarrollo de un plan regulador, el cual podría tener en cuenta esta recomendación. Así se deben contemplar algunos incentivos tributarios para los propietarios cuyos predios se ven afectados por la limitación a la explotación y restricciones que se derivan de los índices citados.

A continuación, se describen las medidas particulares previstas para regir el manejo del sector histórico y la ciudad en términos generales:

- a. Fijación de índices de construcción y ocupación en el centro histórico de manera que se restrinja el interés especulador que gravita sobre él. Se parte de mantener las condiciones actuales, tanto en obras de interés histórico como en las modernas.
- b. Fijación de índices de construcción y ocupación superiores en las zonas periféricas del sector histórico y en general en toda la ciudad. Esa misma política se adoptará para los predios correspondientes a nuevas áreas urbanizada, con el fin de orientar a los especuladores de finca raíz hacia las zonas urbanizadas u ocupadas por barridas.
- c. Sugerencia de utilización de áreas próximas a la ciudad para ser urbanizadas.

- d. Modificación del trazado general de la carretera troncal que cruza la ciudad, de manera que se pueda sustraer de ella la presión siempre creciente del tránsito intermunicipal e interdepartamental, creando sobre ella la terminal de buses, central de abastos con proporciones justas a la plaza de mercado actual.
- e. Limitación al uso de las vías en el casco urbano y en especial en el sector histórico, este aspecto se refiere al tránsito vehicular en beneficio del peatón.
- f. Limitación total, en el sector histórico, del empleo de fuerza motriz, producción de ruidos, olores, empleo de materias inflamables o explosivas, etc.
- g. Sugerencia de creación o fomento de otros polos de interés comercial a nivel sectorial que atenúen el interés o presión sobre la zona central de la ciudad, próximos a terminal de buses y central de abasto.
- h. Aceptación de obras modernas en el sector histórico a manera de aportes producidos por el mundo de hoy, pero bajo condiciones que permitan mantener calidades y escalas humanas características o tradicionales.
- i. Normas que señalen los trámites ordinarios para diversos niveles o grados de intervención o ejecución de obras, en especial en el sector histórico. Fijación de requisitos para propietarios, profesionales y contratistas de obra.
- j. Solicitud al municipio de dotación de áreas de expansión.
- k. Recomendación al municipio para creación de oficina de planeación y control de obras.
- l. Recomendación al municipio para la creación de una junta de mejoras y ornato, con participación de la casa de la cultura y centro histórico, para velar por la conservación y recomiende las acciones pertinentes a autoridades locales y consejo de monumentos nacionales.
- m. Recomendación al municipio para reconocer a los ciudadanos que divulguen los valores y sean ejemplo de la conservación de los inmuebles.
- n. Además, recomendación al municipio para que contrate un plan general de desarrollo, con inclusión de plan piloto cuya base será este código de urbanismo (Corradine, 1982)

#### 5.4.2.3 Proyecto para el código básico de urbanismo de El Socorro

La propuesta de reglamentación formulada por Corradine incluía una zonificación para el código de urbanismo susceptible de aplicación en el área urbana, áreas susceptibles urbanizables y agrícolas. El municipio de El Socorro se divide en las siguientes zonas:

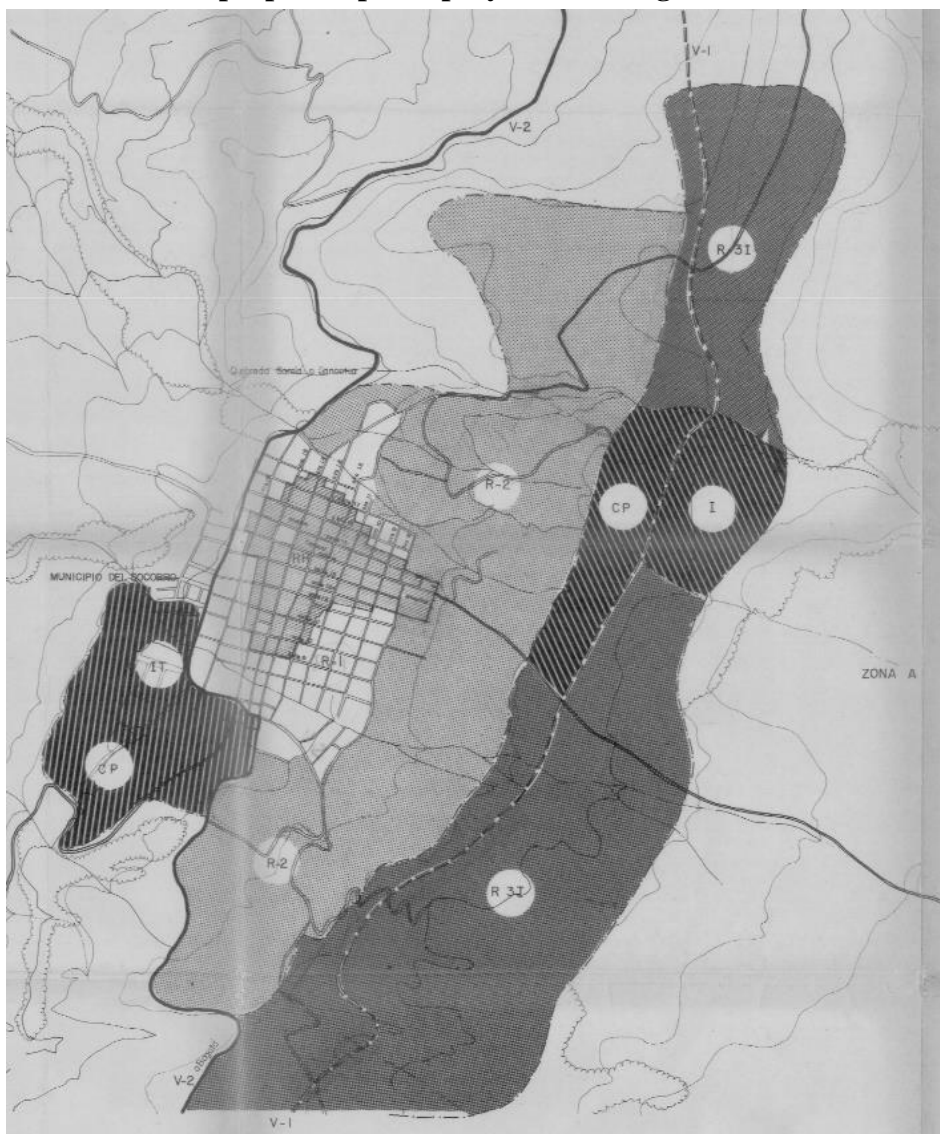
**Tabla 5.24 Zonificación propuesta por el proyecto de Código de urbanismo de 1982**

<b>Zona</b>	<b>Identificación</b>
Zona Agrícola	Zona A
Zona Urbanizable	Zona U
Zona Residencial de baja densidad	Zona R-1
Zona Residencial de media densidad	Zona R-2
Zona Residencial de alta densidad	Zona R-3
Zona Residencial Histórica	Zona R-H
Zona Comercial Histórica	Zona C-H

Zona de Comercio Pesado	Zona C-P
Zona Industrial	Zona I
Zona Institucional	Zona IT
Zona Verde y Parques	Zona V

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Arq. Alberto Corradine, Helga de Corradine, Elisabeth Rubiano, Néstor Gómez, Juan Manuel Sarmiento e Ignacio Guerrero. Septiembre de 1982

**Figura 5.26 Zonificación propuesta por el proyecto de código de urbanismo de 1982**



Fuente: Imagen elaborado por el equipo consultor. Arq Alberto Corradine, Helga de Corradine, Elisabeth Rubiano, Néstor Gómez, Juan Manuel Sarmiento e Ignacio Guerrero. Septiembre de 1982

La aplicación del código de urbanismo es competencia de la oficina de planeación municipal, del alcalde de la ciudad y oficina de obras públicas. En cuanto a las solicitudes realizadas en las zonas residencial y comercial histórica debe contar con la aprobación previa por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, de igual forma para las solicitudes de demolición total o parcial. La solicitud de licencia de construcción en la modalidad de modificación, conservación o restauración deben presentarse planos a escala 1:50 o 1:100 según la magnitud del inmueble con plantas, alzados, cortes y detalles. Adicionalmente el plano de la manzana a 1:500, alzado de la calle en escala 1:200 para verificar el comportamiento de los volúmenes propuestos. El código también sugiere ancho de vías, temporalidad de la licencia, efectos jurídicos de renovación, ampliación y solicitudes adicionales. Respecto a las especificaciones en el loteo inicial y subdivisiones de los predios existentes se ajustan al siguiente cuadro de normas mínimas:

**Tabla 5.25 Cuadro de Normas Mínimas Proyecto de Código de urbanismo de 1982**

<b>Zona</b>	<b>Área Mínima</b>	<b>Frente Mínimo</b>	<b>Índice ocupación</b>	<b>Índice construcción</b>
Urbanizable AU	Según uso	Según uso	Según uso	Según uso
Residencial de baja densidad R-1	800 M2	15.00 M	35%	90%
Residencial de media densidad R-2	350 M2	12.00 M	45%	90%
Residencial de alta densidad R-3	250 M2	9.00 M2	60%	120%
Residencial Histórica R-H	Estado Actual			
Comercial Histórica C-H	Estado Actual			
Comercial de Sector C-S	100 M2	5.00 M	100%	200%
Comercial Pesado CP	250 M2	10.00 M	100%	200%
Industrial I	250 M2	10.00 M	100%	200%
Institucional IT	Según uso			

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Arq Alberto Corradine, Helga de Corradine, Elisabeth Rubiano, Néstor Gómez, Juan Manuel Sarmiento e Ignacio Guerrero, septiembre de 1982

Las normas específicas residenciales están destinadas a la edificación de viviendas con la presencia de consultorios, oficinas profesionales para uso personal del residente, locales para comercio al detal e instalaciones de carácter artesanal según limitaciones determinadas en el articulado. Dentro de las medidas más relevantes se encuentran un índice de ocupación del 35% con incremento máximo hasta el 40% en predios esquineros. Patios con un área superior a 25.00 M2 y dimensión mínima de 4 metros para altura máxima de un piso. Sobre esta base se realiza con algunas variaciones la norma de la vivienda para el sector residencial 2, permitiendo



vivienda bifamiliar. El uso de restaurantes, cafeterías, panaderías, lavanderías automáticas, comercio e industria liviana que no produzcan ruido u emisión de olores se podrán desarrollar sobre las vías clasificadas como V-1 y V-2 según la catalogación del plano oficial. Solo se permite la construcción de edificios de apartamentos en la zona residencial R-3, con la instrucción de cubrir medio garaje por cada unidad de vivienda.

**Figura 5.27 Delimitación del sector histórico del municipio de El Socorro en el año 1982**



Fuente: Imágenes tomadas de a) elaborado por el equipo consultor. Arq Alberto Corradine, Helga de Corradine, Elisabeth Rubiano, Néstor Gómez, Juan Manuel Sarmiento e Ignacio Guerrero (Septiembre de 1982) y b) el equipo PEMP El Socorro (2019).

#### **5.4.2.4 El sector histórico en el proyecto del código de urbanismo**

La zona residencial histórica está comprendida dentro de los límites estimados dentro de los planos de zonificación y sector histórico artístico. Se incorporan las edificaciones definidas monumento con calidades históricas o artísticas, así como aquellas otras de reciente ejecución que se localicen dentro dicha zona, sean de carácter civil o religioso. En la zona residencial histórica se permiten los usos tradicionales diferentes de vivienda siempre que no afecten a vecinos con algún tipo de impacto, ruidos, olores, trepidaciones o empleen líquidos inflamables o venenosos, en cuyo caso la oficina de obras públicas dará un plazo máximo de seis meses para traslado o cierre definitivo del establecimiento. No se permite subdividir alturas de las edificaciones actuales, ni adicionar pisos, salvo en los casos que sean autorizados por el Consejo de Monumentos Nacionales. Para los trabajos de mantenimiento y reparaciones



locativas, se realizará previa solicitud de licencia que será expedida bajo solicitud escrita del propietario con las indicaciones de las intervenciones. La oficina que expida la licencia deberá realizar el control de las reparaciones. Las edificaciones en esta zona no podrán afectar vanos, puertas, ventanas, alterar dimensiones, cambiar materiales de acabados, salvo autorización del consejo de monumentos.

La altura máxima permitida para las nuevas edificaciones será el 60% adicional con respecto a las existentes en ambos costados de las calles. Todos los trabajos de conservación, restauración, adaptación, requieren planos completos para solicitud de licencia de construcción. El control será ejercido por la oficina de planeación o quien haga sus veces y procederá a cancelar la licencia en caso de alteraciones en la ejecución, hasta la restitución del bien sin detrimento de las multas a que haya a lugar. Las discrepancias serán resueltas por las instancias administrativas, jurídicas y legales en el caso que sea necesario. Las nuevas edificaciones dentro del centro histórico tendrán índice de ocupación del 50% y el 100% de índice de construcción, la altura máxima no podrá exceder tres (3) pisos de diferencia con las edificaciones vecinas mayores de un (1) piso. Las edificaciones de carácter monumental sometidas a trabajos de restauración, conservación, reintegración de conformidad con proyectos aprobados y autorizados por la oficina de planeación y obras públicas, del CMN, serán exentas de impuestos municipales de acuerdo con la siguiente tarifa:

**Tabla 5.26 Cuadro de Exención de Impuestos propuesto por Código de urbanismo de 1982**

<b>Inversión Proporcional</b>	<b>Exención</b>	<b>Tiempo de Exención</b>
Hasta 10% de avalúo oficial	25%	2 años
11% -20% avalúo oficial	50%	2 años
21% -40% avalúo oficial	75%	2 años
41% -60% avalúo oficial	100%	2 años
61% -80% avalúo oficial	85%	3 años
81% -100% avalúo oficial	100%	3 años

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Arq Alberto Corradine, Helga de Corradine, Elisabeth Rubiano, Néstor Gómez, Juan Manuel Sarmiento e Ignacio Guerrero. Septiembre de 1982

La oficina de planeación podrá reglamentar el uso de las vías con proyección a la prioridad del peatón, proteger edificaciones de valor histórico, preservar calidades ambientales o peatonalizar aquellas según conveniencia. El tránsito por las calles del sector histórico será preferentemente local, la magnitud de carga será limitada a (3) tres toneladas. Las nuevas edificaciones no podrán alterar el paramento de la construcción existente. La reglamentación del sector comercial pesado será expedida por el consejo municipal como resultado de un estudio específico del Plan Regulador, que ordene el desarrollo de la ciudad de acuerdo con el código básico de urbanismo.

Este proyecto de reglamentación nunca fue aprobado por ninguna estancia administrativa.

#### **5.4.2.5 Acuerdo No. 028 de septiembre 9 de 1989**

El concejo municipal de El Socorro por medio del acuerdo 028, establece los procedimientos y requisitos para obtener licencias de construcción, urbanización, además de establecer tarifas de demarcación, licencias de construcción y usos del suelo. Las consideraciones que motivan este acuerdo se relacionan con el aumento poblacional del municipio y su incidencia urbanística, ausencia de ordenamiento que determine procedimientos, requisitos sobre licencias de construcción; establecer contribuciones por estos procedimientos, ante la ausencia de estos rubros. Lo concerniente al sector antiguo declarado o edificaciones con valores patrimoniales no hay mención ninguna, recomendación especial o ausencia en la determinación de un procedimiento diferencial a los desarrollos en otros sectores de la ciudad. Mediante carta el 10 de septiembre de 1993, por parte de la subdirectora de patrimonio cultural arquitecta Olga Pizano, se dirige a la alcaldesa de El Socorro Luz Alba Porras, la ausencia de una reglamentación debidamente aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales y por el Consejo Municipal, todo proyecto de intervención que se proponga deberá presentarse al Centro Filial de la Seccional Santander<sup>400</sup>.

#### **5.4.2.6 La delimitación del centro histórico en el Acuerdo Municipal No. 011 de junio 18 de 2003**

El modelo de ordenamiento territorial del municipio del *“Socorro se visualiza como un Municipio prestador de servicios educativos, agroforestales y turísticos, con una base económica estable generadora de empleo y mejores condiciones de vida para el bienestar de sus comunidades, protegiendo su patrimonio cultural y recursos naturales”*<sup>401</sup>, incorpora su patrimonio como una visión a largo de plazo de su proyecto de ciudad. El instrumento de ordenamiento territorial de Socorro define como elementos estructurantes los que

*“están referidos a la estructura urbano – rural e intra urbana, la comunicación y servicios, así como el equipamiento de gran escala: los servicios de comunicación entre área urbana y rural y la articulación con los respectivos sistemas regionales, las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales y el paisaje, las áreas de conservación del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico; zonificación de las áreas que presenten altos riesgos; infraestructura y equipamiento básico y la clasificación del territorio en urbano – rural y de expansión urbana”*<sup>402</sup>.

---

<sup>400</sup> Carta dirigida al ingeniero Juan Carlos Aponte, jefe de planeación municipal, consecutivo CMN-464-93, con la información de la disposición por parte de Colcultura y en cabeza de la Subdirección de Patrimonio cultural y secretaria del Consejo de Monumentos Nacionales.

<sup>401</sup> Artículo 17.

<sup>402</sup> Tomado del Artículo 15, Esquema de Ordenamiento Territorial del Socorro.

En las estrategias de ordenamiento se definen las acciones de carácter integral sobre el territorio que impactarán el desarrollo socioeconómico y el modelo de ordenamiento. Respecto al patrimonio arquitectónico y urbano se define: *“Establecer los planes, acciones, políticas y normas que permitan definir los procedimientos de control de crecimiento urbanístico del municipio, desarrollar programas para la recuperación y el mejoramiento de los monumentos históricos”*; adicionalmente

*“en convenio con entidades del orden nacional, departamental y municipal llevar a cabo una investigación de mercados para establecer las necesidades y el portafolio de servicios a ofrecer en materia turística, recreativa, deportiva y cultural, desarrollar un programa de comunicación y fortalecimiento de la imagen histórica del municipio y sus fortalezas”*<sup>403</sup>

Se fortalecerán con la aceptación, desarrollo e implementación del PEMP. Las políticas de protección del patrimonio cultural están orientadas a:

- *“Reconocer y legalizar los bienes de interés cultural, histórico y arquitectónico con potencialidad de patrimonio en el municipio Socorro.*
- *Promocionar y difundir los bienes de interés cultural, histórico, ambiental y arquitectónico del Municipio Socorro.*
- *Promover la organización, unificación y consolidación de una Oficina Cultural y Artística en el Municipio para el manejo de los bienes de interés cultural y patrimonial e igualmente liderar procesos para la formación de la identidad cultural y el Plan municipal”*<sup>404</sup>

#### **5.4.2.6.1 El Patrimonio en el Esquema de Ordenamiento Territorial**

El título 5, artículo 45 del EOT de El Socorro menciona respecto al patrimonio como:

*“Debido a la especial relevancia que los aspectos culturales e históricos de El Socorro tiene como condicionantes propios el desarrollo sostenido en la especialización cultural y turística, se consideró la necesidad de contener dentro del presente documento una articulación especial para el mantenimiento, la preservación, conservación, protección y reglamentación del Patrimonio Cultural, Histórico, Religioso, Artístico y Natural, de Socorro, atendiendo las directrices generales impuestas por el Ministerio de la Cultura, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobernación de Santander y normatización regional en atención a la recuperación de los valores, bienes y memoria histórica local. Por lo anterior, el siguiente articulado contiene la definición, declaración, reglamentación, políticas, estrategias y*

---

<sup>403</sup> Tomado del Artículo 18, Esquema de Ordenamiento Territorial del Socorro.

<sup>404</sup> Artículo 21.

*condicionantes para el Socorro como proveedor de historia local y movilidad cultural y regional.”<sup>405</sup>*

El Centro Histórico y los Corredores y Circuitos Turísticos constituyen los espacios a proteger del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, artístico, religioso y natural. Se transforman en espacio equilibrante de la estructura urbana con fundamento no solo en los niveles funcional, formal, paisajístico, entre otros, sino humano a través de la protección, valoración y respeto comunitario hacia la memoria urbana. En los componentes de los objetos arquitectónicos: “*Se refiere a las edificaciones que definen y/o delimitan el espacio público, como Arquitectura pública, expresión Arquitectónica formal cultural, que relata sucesos a través de la historia, enmarcados en expresiones culturales de diferentes épocas*”<sup>406</sup>.

#### **5.4.2.6.1 El Área de Influencia Patrimonial**

El centro histórico se define dentro del ordenamiento territorial como:

*“Centro Histórico. Se entiende aquella zona de la estructura urbana, a partir de la cual se da origen, a un proceso mediante el cual el desarrollo urbano, económico, político y social, tuvo transcendencia en el tiempo y el espacio para constituir en su momento las bases de nueva sociedad y de nuevas características urbanas que determinan su continuidad en el futuro, a través de la conservación, la valoración y la memoria cultural de quienes forman parte integral de ella”<sup>407</sup>.*

Las áreas de influencia están determinadas por los predios y edificaciones colindantes a cada inmueble patrimonial y, así mismo, por aquellos que se encuentren al frente o que hagan parte de su contexto inmediato. Queda a juicio de la secretaria de planeación y desarrollo, o quien haga sus veces, determinar una mayor o menor área de influencia patrimonial que depende de la representatividad e importancia histórico-cultural de las edificaciones o espacios patrimoniales.

Representan aquellas zonas de la estructura urbana que tiene por finalidad mantener las condiciones urbanísticas, volumétricas, formales funcionales de inmuebles que hacen parte del componente del Inventario Patrimonial, garantizando y asegurando su exaltación, valoración y continuidad urbanística como elemento referencial-representativo.

Para una mayor claridad se establece como área de influencia los predios que rodean los costados laterales del monumento y el frente directo, cuando el ancho de la calzada no supera los 50 metros (es decir, el frente deja de ser área de influencia cuando el monumento está aislado por una autopista o una avenida con más de dos separadores (EOT, 2003).

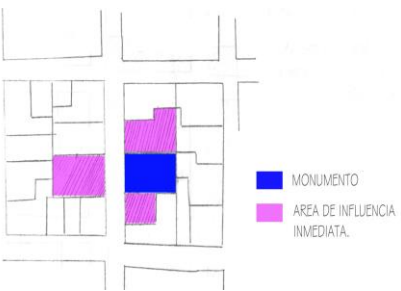

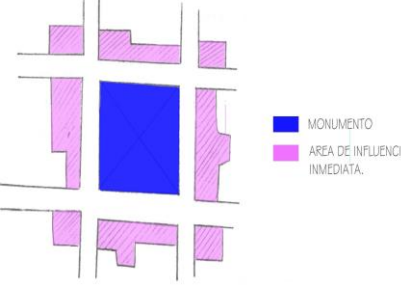
---

<sup>405</sup> Artículo 45.

<sup>406</sup> Ibidem.

<sup>407</sup> Artículo 46.

**Tabla 5.28 Área de influencia de inmuebles en el Sector Histórico en el municipio de Socorro. EOT 2003**

 <p>MONUMENTO ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA.</p>	<p>Cuando el monumento queda en la mitad de una cuadra el área de influencia inmediata la constituyen los dos predios colindantes y el predio de enfrente al monumento, como se indica en la imagen de referencia.</p>
 <p>MONUMENTO ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA.</p>	<p>Si el monumento está ubicado en una esquina, su área inmediata la constituyen los tres (3) predios restantes que conforman la esquina, y los dos (2) laterales adyacentes al monumento.</p>
 <p>MONUMENTO ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA.</p>	<p>Si el monumento es una plaza pública su área de influencia se considera todo el marco total de la plaza como se ilustra en la figura.</p> <p>Se constituye en área de influencia patrimonial todos los frentes de cuadra del Centro Histórico</p>

Fuente: Tomado de Esquema de Ordenamiento Territorial. 2003.

#### 5.4.2.7 Delimitación del Centro histórico en el EOT del año 2003

La delimitación del centro histórico realizada por el EOT del año 2003, el tamaño del área patrimonial se ajusta a 27 manzanas. En la figura 5.29 se observa la delimitación propuesta en el año 1982 con el proyecto de reglamentación y código urbano realizado por el arquitecto Alberto Corradine en el color rojo, se proponía un total de 55 manzanas. La diferencia de manzanas entre la propuesta el EOT y el código de urbanismo de 1982, asciende a 28 manzanas. Es decir que se reduce al 49%, de lo propuesto.

Simultáneo a esta delimitación se incorporan los frentes y fachadas declaradas patrimonio que corresponden a las edificaciones. Dentro de las normas y reglamentación general se tiene en cuenta la instalación de avisos de identificación de locales comerciales. Cuando este se encuentre en esquina, se permitirá un aviso de identificación para cada costado que posea

acceso. Estos avisos deberán guardar coherencia estética con el edificio y sus características y no podrán superar el 5% del área de la fachada. Se prohíben los avisos promocionales o de publicidad de cualquier tipo en todas las edificaciones declaradas patrimonio y el centro Histórico. Se prohíben los avisos pintados directamente sobre la fachada de las edificaciones o alguno de sus elementos componentes, incluyendo los de cierre.

**Figura 5.29 Delimitación del Centro histórico en el municipio de Socorro. EOT 2003**



- Delimitación Reglamentación 1982
- - - Delimitación Esquema de Ordenamiento Territorial 2003

Fuente: Imagen tomada equipo PEMP El Socorro (2019)

Quedan prohibidos además los avisos de neón. Queda prohibida la utilización de parasoles en toda el área del centro Histórico y las edificaciones declaradas patrimonio del municipio. También se prohíbe la construcción de marquesinas a las edificaciones que originalmente no las posean como componente de su fachada. También queda prohibido el cambio de elementos de cierre de sus vanos y sus especificaciones, material y tipología se consideran de carácter restringido. Se considera para todo nuevo proyecto de construcción o intervención dentro del centro histórico, tener como premisas de diseño la armonía y la correspondencia con los elementos volumétricos de fachada de los inmuebles declarados y por las normas dictadas por



el Comité Municipal de Patrimonio tales como altura, ritmos, tipología, proporciones de vanos, remates, materiales, cubiertas, entre otros. Los espacios públicos que hagan parte del área de influencia patrimonial de una edificación de igual valor como parques, plazas, entre otras, deben ser tratados como un proyecto de intervención especial, a fin de hacerlo coherente urbanísticamente con el bien patrimonial y el conjunto urbano que estructura su entorno (EOT, 2003).

**Figura 5.30 Panorámica del centro histórico del municipio de El Socorro (Santander)**



Fuente: Imagen tomada de [dronesskyzoom.com](https://www.dronesskyzoom.com)

#### **5.4.3 El paisaje cultural cafetero y su relación con los centros históricos declarados BIC en su ámbito de aplicación**

Las regiones cafeteras de Colombia se encuentran localizadas en zonas templadas con una temperatura promedio entre 17° C y 25° C grados centígrados y una altura con respecto al nivel del mar entre 1200 y 2100 metros. Son representativos los departamentos de Antioquia, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, aunque 16 de los 32 departamentos del país cumplen estas características especiales y propias para el cultivo del café. Dentro de estos departamentos se conforma una subregión conocida en términos económicos y geográficos como “Eje Cafetero”, dentro de la cual sitúa otra subregión con unas características naturales, urbanas, arquitectónicas y culturales especiales (Sarmiento, 2012), reconocida como el Paisaje Cultural Cafetero (PCC). El eje cafetero además de ser una región geográfica y ecológica, no solo se dedica al cultivo del café sino también al turismo, incentivado por la declaratoria como PCC ha desarrollado una importante infraestructura complementaria para este sector y se

**Figura 5.31 El Paisaje Cultural Cafetero dentro del Eje Cafetero**





En la sesión del 25 de junio de 2011 el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, inscribe el Paisaje Cultural Cafetero mediante la Decisión 35 COM 8B.43, sobre la base de los criterios (v) y (vi), destacando de cada uno de ellos:

Criterio (v): El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC) es un ejemplo destacado de un paisaje cultural, sostenible y productivo centenario, en el que el esfuerzo colectivo de varias generaciones de familias campesinas forjó instituciones sociales, culturales y productivas excepcionales, al mismo tiempo que generando prácticas innovadoras en el manejo de los recursos naturales en condiciones de paisaje extraordinariamente desafiantes. La finca cafetera típica del PCCC se ubica en un paisaje difícil de montañas escarpadas, que articulan la forma y el diseño del paisaje cafetero, su tipología arquitectónica y el estilo de vida de sus comunidades. Lograron crear una identidad cultural inigualable donde el aspecto institucional relacionado con el PCCC no iguala a ningún otro sitio cafetero en el mundo.

Criterio (vi): La tradición cafetalera centenaria es el símbolo más representativo de la cultura nacional en Colombia, por lo que ha ganado reconocimiento mundial. La cultura cafetera ha dado lugar a ricas manifestaciones tangibles e intangibles en el territorio, con un legado único, que incluye, pero no se limita a la música, la gastronomía, la arquitectura e incluso la educación, legados que se han transmitido de generación en generación. La tipología arquitectónica, exclusiva de las fincas cafetaleras y la mayoría de los edificios en las áreas urbanas, evolucionó a través del uso de materiales indígenas disponibles, en particular la especie nativa única conocida como guadua angustifolia. El PCCC representa una integración armónica del proceso productivo, la organización social y la tipología habitacional, única en el mundo,

### Integridad

Los elementos de adaptación social de la propiedad a un uso único de la tierra, y el desarrollo de tradiciones culturales y sociales altamente específicas desarrolladas en torno a la producción de café, demuestran el Valor Universal Excepcional de la propiedad. La cohesión de estas características y su resistencia al cambio aunque sufriendo el impacto de las crisis temporales de precios, demuestran su alto nivel de integridad. Los valores colectivos de la singularidad global de CCLC promueven un desarrollo humano sostenible activo en el panorama cultural.

### Autenticidad

El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia es un auténtico reflejo de un proceso centenario de adaptación del hombre a las condiciones geológicas, hidrológicas, climáticas y naturales de esta zona conocida nacional e internacionalmente como el 'Eje del Café'. El CCLC muestra un grado extraordinario de autenticidad, sin ninguna adición incongruente contemporánea a su patrón arquitectónico tradicional y sin



observa en la Figura 5.32. El Paisaje Cultural Cafetero es reconocido mediante la Resolución 2079 de 2011<sup>408</sup>, y bajo la Política para la Preservación del PCC de Colombia, mediante el documento Conpes 3803<sup>409</sup> del 2014. Allí se fijan los lineamientos con el fin de potenciar la productividad y sostenibilidad, además de un conjunto de estrategias para preservar el patrimonio y garantizar la sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental. Los siguientes departamentos y municipios hacen parte de la delimitación del área principal y amortiguadora del PCC:

**Tabla 5.29 Delimitación del Paisaje Cultural Cafetero**

DEPARTAMENTOS	MUNICIPIOS	ÁREA PRINCIPAL	ÁREA AMORTIGUADORA
CALDAS	Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Manizales, Neira, Pácora, Plaestina, Riosucio, Risaralda, Salamina, San José, Supía, Villamaría, Viterbo*	51.278 Ha Número de veredas: 159	71.437 Ha. Número de veredas: 165
QUÍNDIO	Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento	32.537 Ha Numero de veredas: 108	49.536 Ha. Número de veredas: 133
RISARALDA	Apía, Balboa, Bélen de Umbría, Dosquebradas*, Guática, La Celia, Marsella, Mistrató*, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario	27.476 Ha. Numero de veredas: 70	38.658 Ha. Número de veredas: 58
VALLE DEL CAUCA	Alcalá, Ansermanuevo, Argelia*, Caicedonia, El Águila, El Cairo, Riofrío, Sevilla, Trujillo, Ulloa	29.828 Ha. Número de veredas: 74	47.369 Ha. Número de veredas: 91
Nota: Las veredas cafeteras de estos municipios hacen parte de la zona de influencia de Paisaje Cultural Cafetero (PCC).			

Fuente: Elaboración propia con base en información de Ministerio de Cultura, Municipios y entidades oficiales

Dentro de las estrategias previstas por Política para la Preservación del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, se consideran como fundamentales, las siguientes:

- Estrategia para generar apropiación social del patrimonio cultural material e inmaterial del PCC.
- Estrategia para fortalecer el ordenamiento territorial y garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social, en la zona de influencia del PCC.
- Estrategia para mejorar las condiciones sociales de la población del PCC.
- Estrategia para el fomento de la caficultura en el PCC.

<sup>408</sup> Resolución 2079 de 2011 (octubre 07): por la cual se reconoce al Paisaje Cultural cafetero de Colombia como Patrimonio Cultural de la Nación.

<sup>409</sup> Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes 3083 “Política para la preservación del paisaje cultural cafetero de Colombia”, febrero 13 de 2014, Bogotá D.C.

e. Estrategia para mejorar la accesibilidad y el turismo en el PCC (Conpes 3803, 2014)

Los centros históricos de los municipios declarados como BIC del ámbito nacional que hacen parte del PPC son Aguadas, Salamina y Manizales; los dos primeros integrados a la Red Turística de Pueblos Patrimonio, pero en su totalidad integrados a la estrategia de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial para incorporarlos al PCC. Esta estrategia fue promovida por el Ministerio de Cultura y la Federación Nacional de Cafeteros en el año 2014, se identifican los atributos de la declaratoria relacionados con el ordenamiento territorial, siendo los principales los siguientes:

**Tabla 5.30 Atributos del Paisaje Cultural Cafetero para integrar al ordenamiento territorial**

<b>Atributos del Paisaje Cultural Cafetero Evaluados</b>	<b>Tema por evaluar en los POT (relacionados con el atributo)</b>
Café de montaña Predominio del café	1. Zonificación de usos rurales. Identificación de zonas para actividad agrícola (tipo de actividad y uso potencial)
Cultivo en ladera	2. Delimitación de zonas en amenaza en suelo rural
Patrimonio natural Disponibilidad hídrica	3. Identificación, delimitación y reglamentación de las áreas de protección y conservación de los recursos naturales.
Patrimonio Urbanístico Patrimonio Arquitectónico	4. Identificación, delimitación de las áreas de protección y conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico
Poblamiento concentrado Minifundio cafetero	5. Clasificación del suelo: delimitación del suelo suburbano con respecto al total del suelo rural. Densidades en suelo rural.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Ministerio de Cultura, Municipios y entidades oficiales

Los elementos considerados dentro de los atributos del PCC refieren a hechos físicos modificados o producidos por el hombre con un desconocimiento del patrimonio inmaterial, relacionados con las costumbres asociadas al cultivo del café. La patrimonialización es,

entendida como el proceso legal mediante el cual un bien o expresión cultural es declarada de interés público, signándole medidas para evitar su desaparición o deterioro, pareciera seguir camino inversos o contradictorios en relación con la conformación del patrimonio, que puede ser entendido como la consolidación histórica de una serie de atributos materiales e inmateriales de la cultura que logra ser reconocida por una sociedad que le asigna legitimidad (Ramírez & Saldarriaga , 2013, p. 118).

El municipio de Salamina realiza la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) en el año 2021, después de dos décadas de vigencia del PBOT actual con un énfasis en cinco aspectos principales: gestión adecuada de la estructura ecológica, regulación del fenómeno del cambio climático, mantenimiento de recursos forestales, Gestión del riesgo de desastres y servicios ecoturísticos. En este sentido, la integración del PEMP de Salamina aprobado mediante la Resolución No. 127 de 2017 (Diario oficial No. 50181 marzo 20 de 2017), en el ordenamiento territorial, además de los atributos del Paisaje Cultural Cafetero, lo dota para garantizar los servicios ecosistémicos entre los cuales se reconoce la belleza escénica



del paisaje, la conservación de la biodiversidad, el avistamiento de fauna orientado de manera determinante al turismo como actividad económica principal en palabras del alcalde municipal (ABC noticias, 2012). Esto significa que en el PEMP se encuentran el reconocimiento e integración del PCC, hasta ahora incorporado al ordenamiento territorial. Cabe destacar que el PBOT de Salamina hace parte de la iniciativa del “Programa Nacional para la Formulación y Actualización de Planes de Ordenamiento Territorial: POT Modernos” del Departamento Nacional de Planeación, por medio del Conpes 3870 de octubre de 2016, cuyo objetivo es *“orientar y asistir técnica y financieramente a las entidades territoriales para fortalecer sus capacidades en materia de ordenamiento territorial y sus instrumentos de gestión de la expansión urbana y de desarrollo armónico entre el campo y la ciudad”*<sup>410</sup>.

**Figura 5.33 Municipio de Salamina en el contexto del paisaje cultural cafetero**



Fuente: Imagen tomada de [pelecanus.com.co](http://pelecanus.com.co)

Como lo menciona Duque, el potencial del municipio de Salamina es reconocido por los diferentes agentes, no obstante, los instrumentos y planes de ordenamiento, desarrollo, manejo

---

<sup>410</sup> Resumen ejecutivo, Conpes 3870, 24 de octubre de 2016.

y protección e incluso su posición dentro de la Red de Pueblos Patrimonio adolecen de la integración de la perspectiva identificada:

Si Caldas desea aprovechar mejor la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, debe empezar por Salamina dada su condición de bisagra como articulador de territorios y poblados con historia y etnias, empezando por el desarrollo del bioturismo a partir de estrategias como las “vías lentas”: desde allí se accede al alto occidente, tierra de resguardos y negritudes con potencial minero y opciones agropecuarias en pan coger y caña panelera; por el sur y el norte, parten rutas del bahareque de la colonización hacia Neira o Aguadas y Abejorral; y al oriente sobre la cordillera, desde Letras y Romeral hasta San Félix, Encimadas y Sonsón, ofrece los paisajes de páramo con sus íconos en el cóndor, el pasillo, la ruana de Marulanda, la palma de cera y el sombrero aguadeño (2012:3).

Por su parte, el municipio de Aguadas hizo parte de la prueba piloto del Plan Especial de Protección (PEP), aprobado mediante la Resolución No. 1883 de 2001 (Diario oficial 44580 octubre 12 de 2001), un año después de la adopción del Plan Básico de Ordenamiento Municipal (Acuerdo 80 de junio 03 de 2000) y modificado en el año 2006, que a la fecha no se ha integrado el PCC al ordenamiento del municipio ni al Plan Especial de Manejo y Protección. Al igual que Salamina la armonización de los instrumentos determinantes del ordenamiento, protección y desarrollo requieren de una apuesta política para su integración. En ese sentido, la ciudad de Manizales lidera con el Plan de Ordenamiento Territorial 2017-2031, aprobado mediante el Acuerdo 958 de 2017, la integración de los instrumentos mencionados y orientados al propósito de reconocimiento del paisaje como elementos estructuradores del ordenamiento y la conservación.

La experiencia del PPC le impone al Ministerio de Cultura la interpretación de nuevos escenarios naturales que bien pueden hacer parte representativa de esta categoría del patrimonio material, al ser considerado “*una expresión de la cultura en el territorio, elemento físico tangible ligado a la geografía e historia de vida de los lugares*”, otros paisajes culturales del medio cultural, rural agrícola o forestal, podrían ser:

- a. Las huellas de los sistemas de irrigación de la cultura zenú, en las llanuras de la costa caribe,
- b. Las formas de ocupación muisca en áreas del territorio cundiboyacense
- c. El paisaje nariñense, con su territorio fragmentado y ordenado en pequeñas parcelas, en el que se expresa la organización social y las técnicas de cultivos tradicionales de comunidades campesinas indígenas,
- d. El paisaje de las salinas costeras en el territorio wayúu,
- e. El paisaje resultado de las formas tradicionales de implantación y organización espacial de asentamientos y pueblos de montaña, riberas de ríos, costas, comunidades indígenas y negras (Garcés, 2009, pp.60-61)

## 5.5 Personajes, generaciones e ideales

La aproximación a los personajes, generaciones e ideales a partir de la aplicación del modelo de la dependencia de la trayectoria permite la identificación de las etapas de formación y emergencia de las propiedades estructurales, con el fin de reconocer los regímenes casuales, al igual que los escenarios donde se concibe y lleva cabo la toma de decisiones (Sydow et al, 2009). En este sentido, subyace una intención para identificar en un periodo de tiempo los acontecimientos ocurridos y advertir el sentido de su origen. Se propone una justificación donde se armonizan los diferentes elementos involucrados bajo el marco de las reglas, las instituciones y sus consecuencias.

Desde la perspectiva del *path dependence*, son significativas las rutinas organizativas desde las acciones de las personas al interior de las instituciones (Sydow, 2020). A medida que se toman las decisiones y se ejecutan, se produce un carácter colectivo, al amparo de una estructura o gobierno administrativo donde los eventos fortuitos y las acciones estratégicas conforman la retroalimentación permanente de la dinámica de los agentes. Sin embargo, el reconocimiento de los actores organizacionales supone la consideración de las limitaciones propias en la producción, reproducción o transformación de las prácticas más o menos rutinarias (Feldman & Orlikowski, 2011). Están mediadas por la sucesión de generaciones y relevos tecnológicos vinculados a las estructuras sociales y culturales.

Las rutinas y agentes son dependientes de la trayectoria dinámica. De allí que las condiciones relacionadas con el arraigo probablemente producen una “*rutina dúctil*” intervenida por el pasado y las probabilidades de ocurrencia del futuro “*lo que hace un desempeño flexible y también un cambio de rutina a lo largo del tiempo bastante improbable*” (Sydow, 2020, p. 11). Este lapso induce a unidad espacio-temporal denominada generación (Arango, 2012, p. 15).

La relación entre la duración de una vida humana y su correspondencia con el contexto social, político, económico y cultural en que se desarrolla, además de los vínculos con su grupo de contemporáneos con quienes comparte una ocupación y enfoques comunes, refiere a un aproximación al concepto de generación, en la comprensión que “*los distintos estadios de la vida, no transcurren de manera mecánica y continua por acumulación de días o años, sino de manera vital, por edades*” (Arango, 2012, p. 16).

La segmentación de una vida con un promedio de 75 años de duración está conformada por 5 edades básicas, con una temporalidad promedio de 15 años en cada una de ellas: “*el niño (0-15 años), el joven (15-30 años), el adulto (30-45 años), el hombre maduro (45-60 años) y el anciano (60 a 75 años)*”. Hay salvedades diferenciales a partir de la singularidad de cada persona, los ciclos biológicos, la idiosincrasia propia de las culturas relacionada con el estamento institucional y su capacidad de participación, sometimiento, representación y significado según la edad en que se encuentre. La definición de generación se comprende “*como un grupo de personas que tienen la misma edad y están en contacto*” (Arango, 2012, p.16).

Una preocupación del institucionalismo histórico es la relación entre agentes e instituciones. El límite en que los actores adoptan sus estrategias y las líneas de acción contribuyen a la identificación de la evolución e interacción de los participantes en las diversas situaciones presentes en un lapso temporal, a través de la cohesión formada por los acuerdos, los conflictos, la regulación y transformación institucional, propicias para la contradicción y concertación (Sánchez de Dios, 2004; Sorensen, 2015).

Propio de las dinámicas socio-institucionales. Los lazos de cohesión de una generación se reconocen como vigencias, en palabras de Ortega y Gasset citado por Silvia Arango “*pueden definirse como el conjunto de ideas, creencias, valores y costumbres que conforman la interpretación de la realidad con la que debe contactarse y que, para ellos, constituye la realidad misma*” (2012, p. 16), heredadas o transmitidas de generaciones precedentes a partir de las cuales elaboran las propias. Un mecanismo socialmente aceptado o rechazado corresponde a la filosofía de la época y mediado por la consistencia de las instituciones en relación con su nivel de representatividad y aceptación.

El mecanismo de funcionamiento interno de las generaciones permite identificar la edad de 45 a 60 años como el momento “*de máxima actuación, o periodo en el mando de una generación, son los 15 años en que son adultos mayores*”. Un lapso de 15 años hacia el pasado y 15 hacia el futuro, durante este periodo perdura la influencia e impregna “*todas las esferas de la vida colectiva de su manera de sentir el mundo*” (Arango, 2012, p. 16-17).

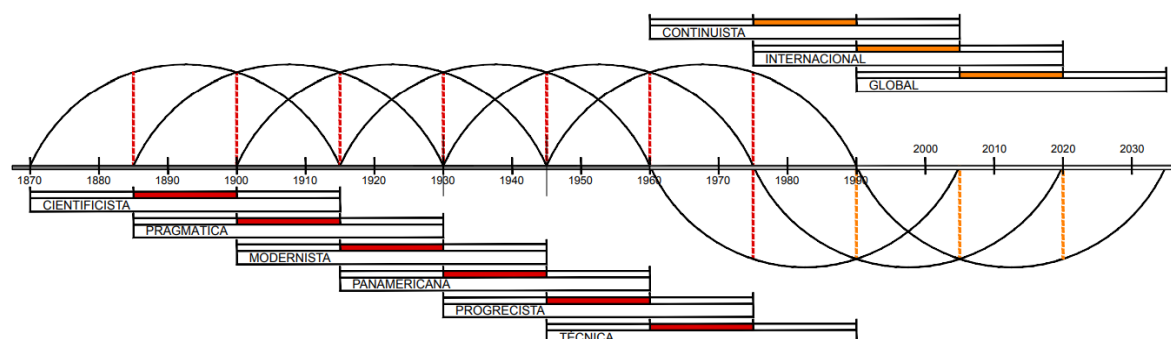
El proceso de consolidación de una conciencia activa para la protección del patrimonio especialmente el urbano, procede de tres vertientes:

- a) el apoyo para la formulación de políticas públicas para el patrimonio cultural,
- b) la formación de técnicos y profesionales especializados y finalmente,
- c) los instrumentos adecuados para la implantación de la tutela sobre la ciudad histórica.

Este proceso requirió de 7 generaciones en el marco de la sucesión propuesta por Arango y Castellanos (Figura 5.34). Esta trilogía hace parte de la discusión permanente en América Latina sobre las estrategias y búsqueda conducentes a un proceso orgánico y extenso (Lombardi, 1995). Orientado a establecer un conjunto coherente de medidas ajustadas a los retos locales propios de la singularidad del patrimonio de cada país latinoamericano. Cuya inquietud se origina a mediados de la década de los años setenta proveniente de principios del siglo XX.



**Figura 5.34 Secuencia de generaciones propuestas para la Arquitectura y Urbanismo de América Latina Moderna**



Fuente: Imagen tomada de (Castellanos, 2020, p.123)

Las generaciones presentes en el origen del patrimonio urbano y su política de protección (1954-1980) son la progresista (1945-1960), la generación técnica (1960-1975) y los primeros cinco años de la generación continuista (1975-1990). Con una fuerte influencia en la formulación y entrada en vigor de la Ley 163 de 1959 de la generación modernista y panamericana. Mientras en la etapa de las reglamentaciones, fecundidad de las ideas: (1980-1997), son visibles la generación continuista (1975-1990) e internacional (1990-2005). Sumada a la ya compleja relación de las generaciones, se debe integrar la influencia de los programas de cooperación y cartas internacionales determinantes en la política de protección, formación de técnicos y formulación de mecanismos de protección del patrimonio urbano -Figura 5.34-.

La experiencia de América Latina relacionada con la conservación de centros históricos se diferencia de la temporalidad europea. En esa independencia se orientan a la “*capacidad organizativa de los municipios y naciones, para apoyar con leyes de financiación (o leyes especiales) la recuperación del patrimonio inmueble*”. La tradición italiana produjo resultados en cuanto al “*método de análisis adecuado a la complejidad de los centros históricos [desde el punto de vista físico y socioeconómico] y ha establecido normas de defensa integrales del patrimonio*”. La tradición española, ha tomado como referente la experiencia italiana y partir de ella ha “*desarrolla una visión propia, más dinámica de la ciudad histórica, como un palimpsesto sobre la cual interviene la capacidad interpretativa*” y acepta las “*condiciones dadas por la ciudad histórica: alineaciones, alturas, flexibilidad y materiales*” (Lombardi, 1995, p. 27).

América Latina absorbe la influencia basada en las dos posiciones procedentes de la cultura europea -experiencias de Italia y España- dirigidas hacia el plan y la norma, hacia el proyecto y la interpretación del problema urbano, posiciones en complementación y retroalimentación tratando de generar nuevos equilibrios entre la necesidad del plan y la importancia del proyecto (Lombardi, 1995, p. 28). Aún hoy se debate entre estas posiciones, dejando en evidencia el predominio de la herencia funcional del Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina. Al igual que la fuerte presencia de las cartas y organismos

internacionales en la esencia de la política pública e instrumentos derivados para la protección del patrimonio cultural, especialmente el patrimonio urbano.

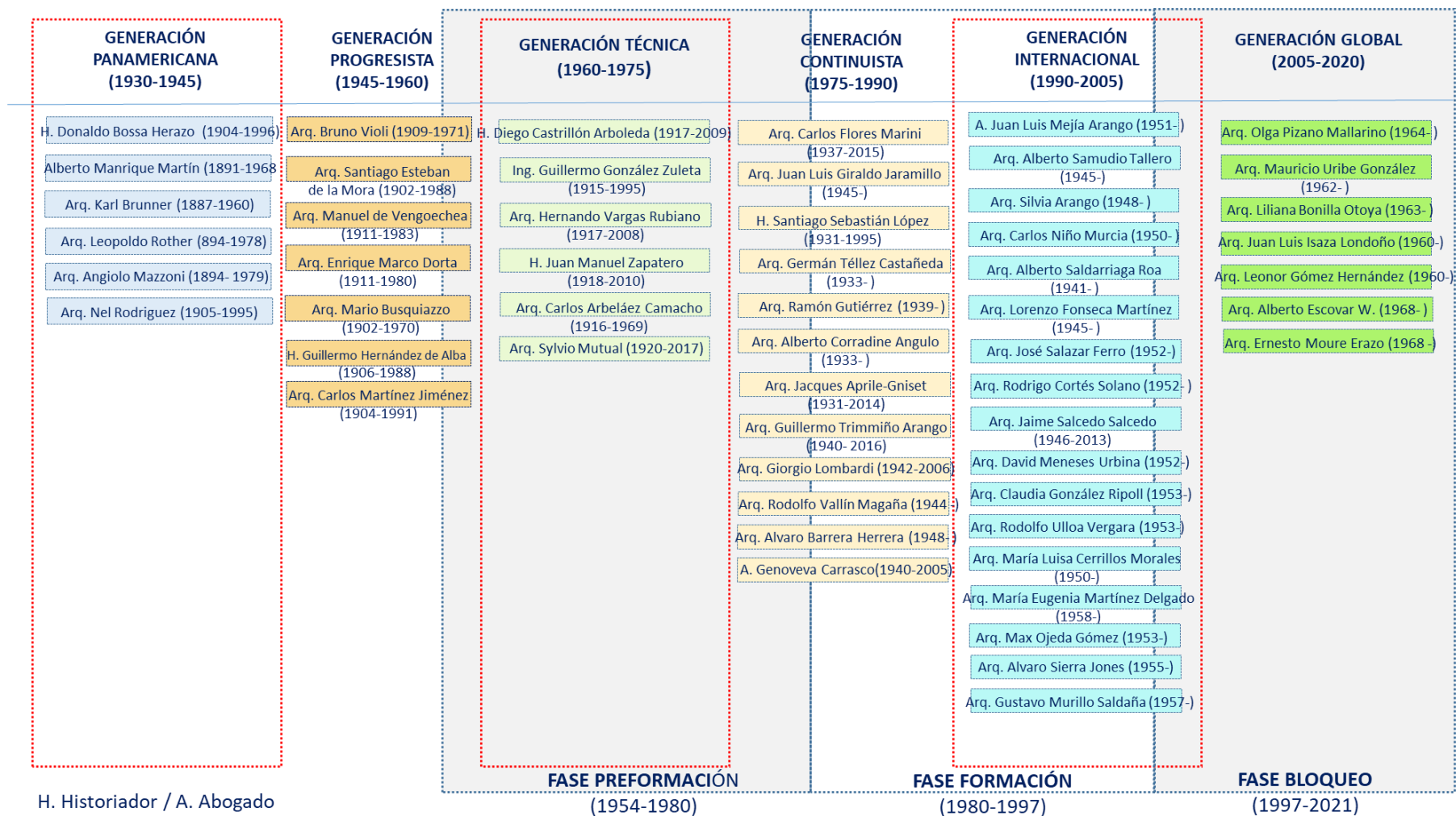
El itinerario realizado por los diferentes actores institucionales, entusiastas, técnicos y profesionales pioneros en diversos campos reflejan un esbozo de la trayectoria y su correspondencia generacional en la concepción, instauración y promoción del estudio del patrimonio como una disciplina inicialmente, a un mecanismo de participación desde el conocimiento individual de los ciudadanos sin distinción de procedencia. Un esbozo de las consideraciones históricas se percibe en el informe final “*Proyecto para la protección y difusión del Patrimonio Cultural Iberoamericano*” resultado de la Misión PNUD en el año 1972, adelantado en Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, donde se destaca:

De todos los países iberoamericanos que el consultor ha recorrido en investigaciones en campo, es Colombia, a su juicio, el que con mayor perseverancia y de acuerdo con una política afirmada en un creador nacionalismo cultural, ha logrado despertar y alimentar una conciencia colectiva de estimación por el patrimonio artístico. Los casos de Popayán y Cartagena, entre otros así lo demuestran (Castedo, 1972, p. 73).

En las primeras décadas del siglo XX ha permanecido un interés acentuado por parte de los profesionales de la arquitectura en Colombia por la intervención en edificaciones monumentales, de tal forma en el año 1964 en la reunión de expertos en restauración y conservación en Venecia, “...contó con la presencia del arquitecto colombiano José Luis Giraldo, en representación del Consejo de Monumentos...” y con ello “...facilitó la vinculación del país a los lineamientos más avanzados en el mundo internacional...” (Corradine, 1980, p. 9). Actitudes tomadas de conceptos surgidos en otros medios culturales, “en otras latitudes geográficas y en otras circunstancias históricas y adaptadas con variable éxito a nuestro medio” (Tellez, 1982, p.353).

Las orientaciones de la Carta de Venecia reconocida ampliamente por los profesionales dedicados a los monumentos nacionales presentan una dificultad con relación a “...las definiciones estrictas que allí se dieron a los conceptos “conservar” y “restaurar”, no fueron asimilados de inmediato y parece que aún hoy son motivo de interpretación a nivel nacional. Algunas circunstancias así lo afirman ...” (Corradine, 1980, p. 9). Especialmente cuando los medios de formación son diversos en su concepción, procedencia y patrocinio.

**Figura 5.35 Secuencia de generaciones relacionadas con la protección del patrimonio urbano en Colombia**



Fuente: Elaboración propia con base a (Salazar et al., 1989; Mutua, 2000; Escovar & Cárdenas, 2018) a partir de (Arango, 2012; Castellanos, 2020)

A pesar de las limitaciones “...es evidente que esa carta [de Venecia] ha servido en muchas ocasiones de guía de las actuaciones del Consejo [de Monumentos Nacionales], el cual llegó a aceptar así, un nuevo concepto de “entorno”, más amplio que el de espacios urbanos ya previsto en 1959...” (Corradine, 1980, p. 9). Sin embargo

“... la llegada al país de varios arquitectos especializados en centros europeos o americanos por el año 70 y con cierta posterioridad de verdaderos expertos en la restauración de obras de arte coincidieron con la acción difusora emprendida poco antes por el entonces decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana sobre los principios y criterios orientadores de la protección y el cuidado de los monumentos, y que concreta su autor, el Padre Alfonso Borrero...” (Corradine, 1980, p. 10).

El debate teórico propuesto desde el siglo XIX y desarrollado a comienzos del XX, en coherencia con la adecuación a las edificaciones de los centros urbanos, proceden de una aplicación “*generalmente parcial, de estas teorías*” (Salazar, 1994, p. 20). En este sentido Corradine menciona sobre las teorías de la restauración originadas de escuelas e ideas internacionales sobre el dominio de las técnicas conducentes a la conservación, facilitaron intervenciones en donde se procuró interpretar lo ideado por el autor, “...*además se generan espacios y formas acordes con la imaginación romántica de los colombianos, o dicho más escuetamente, apropiadas al tropicalismo del país*” (1980: 9). Sobre el cual se construyó un marco jurídico.

...pero más grave aún, el grupo de iluminados intelectuales que estuvo detrás de la concepción y aprobación no parece haber hecho presencia sistemática posteriormente, de tal manera que la ley como instrumento único, no tuvo, salvo honrosas excepciones, el desarrollo necesario para avanzar en la formulación y puesta en marcha de una política de conservación, de una cultura de conservación (Salazar, 1994, p. 20).

El Coloquio sobre la preservación de los Centros Históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas celebrado en Quito en 1977, identifica que “*es necesario, por lo tanto, incrementar la formación de arquitectos urbanistas y otros especialistas afines, paralelamente a la educación de los cuadros profesionales calificados en las técnicas de restauración existentes, a los lineamientos de acción enumerados*”<sup>411</sup>. Previamente en el año 1967, en el Informe final de la reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y artístico, también realizado en Quito, se expresa

“teniendo presente que la escasez de recursos humanos constituye un grave inconveniente para la realización de planes de puesta en valor se hace altamente recomendable proveer lo necesario para la creación de un centro o instituto especializado en materia de restauración, de carácter interamericano. Asimismo, se hace

---

<sup>411</sup> Inciso 6, 3. Hacia una Política de conservación integral de los Centros Históricos, Conclusiones del Coloquios sobre la preservación de los Centros Históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas (Unesco/PNUD) Quito, 1977). Carta de Quito.

recomendable satisfacer las necesidades en materia de restauración de bienes muebles mediante el fortalecimiento de los existentes y la creación de otros nuevos”<sup>412</sup>

En la década de los años 40, el campo de acción de los arquitectos en Colombia se amplía y diversifica, en comprensión a la fundación de la primera facultad de arquitectura del país en la Universidad Nacional en el año 1936, momento desde el cual se fundan de manera consecutivas otras facultades en universidades públicas y privadas (Téllez, 1998, p.63). Los arquitectos que ejercían previo a la creación de la escuela de la nacional, era un reducido grupo procedente de Francia, Alemania, Austria, Italia y Chile, quienes llegaron al país entre 1935 y 1943, para compensar el déficit de técnicos se habilitaba algunos ingenieros para desempeñar el oficio de arquitecto. La planta profesoral de las escuelas recién fundadas en Bogotá y Medellín se conformó por arquitectos graduados de escuelas de Estados Unidos, que se sumaron a la generación de ingenieros habilitados como arquitectos (Salazar et al., 1989; Téllez, 1998). El Decreto 994 de 1969 fomenta la formación de técnicos y profesionales en los diferentes aspectos de la cultura como museólogos, archivadores, restauradores y bibliotecólogos <sup>413</sup>

Merece la pena señalar que, para bien o para mal, los primeros en especializarse en técnicas de restauración fueron arquitectos y expertos en historia del arte, que prestaron su colaboración al Estado en el diseño y aplicación de leyes puntuales de tutela del patrimonio y que a ellos se deben los primeros trabajos teóricos y técnicos sobre conservación y revalorización. A pesar de las críticas que puedan hacerse a su labor, ésta no puede despreciarse, pues se inserta en un contexto que fue evolucionando con el tiempo (Mutual, 2000, p. 116)

Coincide la creación de la escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional (1936) y la preparación de los actos conmemorativos para el Centenario de Bogotá (1938), donde *“gobernantes y arquitectos se aunaron en un insólito esfuerzo para borrar la historia de la ciudad mucho de aquello que precisamente le había otorgado fisonomía y personalidad en el pasado”* (Téllez, 1998, p.81). Sirve simplemente para señalar como el vandalismo arquitectónico y urbanístico en Colombia no ha disminuido con el paso de las décadas, sino que se ha tornado muchísimo más sutil y escoge las víctimas con mayor y más cruel precisión (Téllez, 1998, p.127). Con técnicas y artimañas más sofisticadas incluso en sectores declarados de protección patrimonial. Tras superar la primera ola de demoliciones y desfiguraciones urbanas en varias ciudades en la década de los años 30 y 40, un segundo embate durante 1954 y 1976, en el que los principales afectados fueron las pequeñas iglesias, *“modestas edificaciones religiosas y domésticas de los siglos XVIII y XIX acompañaron el limo de la destrucción parcial o total a muchas casas construidas durante el siglo pasado en todo el país”* (Téllez, 1998, p.124). Gradualmente la necesidad de formar jóvenes arquitectos fue haciéndose patente en la región. Éstos viajaron a Europa y recogieron las conclusiones de la Carta del ICOMOS

---

<sup>412</sup> Inciso 8, Recomendaciones (o nivel interamericano), IX. Los instrumentos de la puesta en valor. Normas de Quito (1967). Informe final de la reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y artístico.

<sup>413</sup> Artículo 4, Capítulo I naturaleza, objetivo, funciones y domicilio, Decreto 994 de 1969 (junio 10).

firmada en Venecia en 1964, dándola a conocer a los arquitectos e instituciones de América Latina (Mutual, 2000, p. 121).

El proyecto conjunto entre el PNUD y la UNESCO hizo un llamamiento a la colaboración de los gobiernos y estableció un ambicioso programa para el conjunto de la región, con un presupuesto de casi US\$ 20.000.000 para asistencia técnica, se crearon así dieciséis centros de conservación, que contaban con profesionales de toda la región. Al cabo de siete años sucesivos, casi 1500 graduados en arquitectura e ingeniería habían recibido formación específica sobre técnicas de conservación del patrimonio a través de cursos de entre seis y nueve meses de duración, celebrados en Cuzco entre 1975 y 1981. Otros seminarios regionales organizados en Quito, México y La Habana generaron a su vez cursos de formación y proyectos de 'barrios'. Cursos similares tuvieron lugar en Córdoba, Belo Horizonte, Bahía, México, Bogotá y Tucumán, y se extendieron gradualmente a La Habana y el Caribe (Mutual, 2000, p. 122)

Los profesionales formados en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional *“establecieron y dieron forma construida a las tendencias estilísticas entonces en boga internacionalmente. Con el trabajo de ellos, el país ingresó de lleno en las corrientes técnicas y culturales propias de la arquitectura del siglo XX”* (Téllez, 1998, p.64). Mientras la percepción con relación al patrimonio según Salazar fue:

El manejo del patrimonio dependió entonces de una entidad del Estado, Colcultura, con los avatares y discontinuidades propias de los funcionarios de turno. Por esto, a pesar de la solvencia intelectual indiscutible de los primeros arquitectos restauradores –muchos especializados fuera del país y con vínculos con asociaciones profesionales y entidades internacionales-, el debate se fue encerrando y languideciendo al interior de los pasillos de la división de inventario y de algunas entidades públicas encargadas de financiar los esporádicos proyectos de restauración (1994:20)

Los programas para la formación de restauradores de bienes muebles de México, Colombia y Chile y los posgrados de restauración de bienes inmuebles se ofrecen en los diferentes países, preparan a los profesionales que tienen a su cargo la tarea de preservar para el futuro el legado de nuestros antecesores. Los centros de investigación de las facultades de arquitectura han desempeñado un papel de gran importancia en el estudio y en la documentación del patrimonio cultural; ellos han sido el puente entre la investigación teórica y académica propiamente dicha y la práctica de la preservación del patrimonio, realizada por el Estado (Pizano, 1995, p. 43). Producto del *“interés nacional por la protección del patrimonio monumental”* durante la década de 1960 entidades como la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación de Universidades con la participación de la universidad Javeriana, Nacional, de Los Andes, de América, Gran Colombia y del Valle, a través de los profesores de historia de la arquitectura y el arte donde se destacan: Carlos Arbeláez Camacho, Hans Rother, Alberto Corradine, Gabriel Uribe, Alberto Combariza, Germán Tellez. José Luis Giraldo, Francisco Gil Tovar y Santiago Sebastian (Salazar et al., 1989, p.24).

En la década de los años 70 se consolidan los institutos de investigaciones estéticas de la Pontificia Universidad Javeriana (1964), el Centro de Investigaciones Estéticas de Universidad de Los Andes (1968), los de la Universidad del Valle y Universidad Nacional de Colombia sedes Bogotá y Medellín fundados en 1978 (Salazar et al., 1989, p.24). El vacío en la formación para el ejercicio profesional como restaurador de bienes muebles fue liderado por el Centro Nacional de Restauración<sup>414</sup>, que en el año 1979 dio origen a la Escuela de Restauración, Conservación y Museología, cuyo plan de estudios se fundamentó en el Decreto 80 de 1980 sobre la reforma universitaria y el Consejo de Monumentos Nacionales. Se estableció la credencial para intervenir el patrimonio cultural. En el año 1992 se suscribe convenio entre el Centro Nacional de Restauración y la Universidad Externado de Colombia para ofrecer el programa de formación profesional en Conservación y Restauración de Bienes Muebles (Escovar & Cárdenas, 2018, p. 179), siendo hoy el único pregrado en la especialidad ofrecido de manera autónoma.

La década de los años 80 del siglo XX se caracteriza por el inicio de varios trabajos de recuperación, revitalización y restauración de monumentos nacionales con estudios elaborados por profesionales formados en el exterior como los arquitectos Alberto Corradine, Germán Franco, Jaime Gutiérrez, Rafael Gutierrez, Álvaro Barrera, Jaime Salcedo, Germán Téllez y Guillermo Trimmíño (Salazar et al., 1989, p. 25). Además del interés de las universidades en la creación del Centro de Investigaciones Estéticas y Urbanas de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales (1982), el Centro de Investigaciones de la Universidad Católica (1983), el Departamento de Investigaciones de la Universidad La Gran Colombia (1987) y los centros de documentación de la Universidad de La Salle y Universidad Jorge Tadeo Lozano en Cartagena en el año 1986 (Salazar et al., 1989, p. 24). A finales de los años ochenta, se manifiesta el deseo de fomentar estudios superiores, posible si a nivel universitario y profesional se genera un proceso dinámico de producción de conocimientos que permea la sociedad en su conjunto. Una revisión amplia de los planes de estudio de las carreras de arquitectura y las ciencias sociales, así como un impulso a los estudios de nivel de posgrado en urbanismo, restauración y temas afines es nuevamente ineludible (Salazar et al., 1989, p. 83).

Al inicio de la década de 1990, Colcultura desarrolla un programa de trabajo orientado al conocimiento y manejo de los centros históricos y el patrimonio con las 18 facultades de arquitectura del país, la cual incluye la realización de cursos semestrales en cada una de ellas y encuentros regionales sobre la temática en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla entre el mes de noviembre de 1989 y agosto de 1990. En el mismo propósito Colcultura, el ICFES y la Universidad Nacional de Colombia organizan y desarrollan el seminario taller internacional de capacitación y formación para docentes de arquitectura y

---

<sup>414</sup> El Centro Nacional de Restauración surge de la necesidad de profesionalizar personal para la restauración de bienes del patrimonio mueble, expresado por Colcultura, el cual fue creado el 6 de agosto de 1974 con el apoyo de la Corporación Nacional del Turismo, la embajada de Italia, el Instituto Italo-Latinoamericano y el Istituto Centrale del Restauro di Roma. El objetivo principal era preservar, proteger y tutelar la integridad del patrimonio mueble colombiano (Escovar & Cárdenas, 2018, p. 179).

ciencias humanas denominado “La ciudad como Bien Cultural” en la ciudad de Bogotá en junio de 1990 (Colcultura, 1990, p.33). En cuanto a la formación técnica próxima a los oficios tradicionales “*relacionados con la recuperación del patrimonio cultural*”, surge el programa de Escuelas Taller en el año 1992 a través del apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Programa con origen en España en 1985, cuya finalidad es constituir centros de trabajo y formación en el que jóvenes sin empleo reciben capacitación en técnicas y oficios útiles en la restauración e intervención del patrimonio. Las Escuelas Taller son implementadas en Latinoamérica por medio del Programa de Preservación del Patrimonio Cultural en Iberoamérica liderado por AECID, siendo la primera instalada en Cartagena de Indias en el año 1992, le siguen Popayán en 1995, Santa Cruz de Mompox en 1996, Bogotá y Salamina en el año 2006 (Escovar & Cárdenas, 2018, p.293-296). A partir del año 2009 en Ministerio de Cultura crea el Programa Nacional de Escuelas Taller de Colombia: Herramientas para la paz, auspiciado por AECID, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), con la apertura de escuelas taller en Tunja (2009), Barichara (2007), Buenaventura (2012), Cali (2016), Quibdó y Tumaco (2016), pasando de un programa de cooperación internacional a la política dentro de la protección del patrimonio cultural (Escovar & Cárdenas, 2018, p.296-300).

Surge en el año 1998 la Maestría en Restauración de Monumentos Arquitectónicos en la Pontificia Universidad Javeriana cuya directora entre 1998 y 2003, es la Arquitecta María Eugenia Martínez Delgado de la generación internacional. La maestría centra su operación curricular en

*“cuatro áreas: la humanística, la relacionada con la metodología y el proyecto de investigación, la de intervención y la complementaria”, orientada a “la conservación preventiva, patología, rehabilitación de materiales y arquitectura de tierra”, los egresados de este programa, “primer contingente de profesionales formados”* Escovar & Cárdenas, 2018, p.291)

Los egresados del programa son incorporados a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Al pasar una década de funcionamiento regular en el año 2008 cambia su denominación a Maestría en Patrimonio Cultural y Territorio<sup>415</sup>, suspendiendo sus actividades definitivas en el año 2014. En las últimas dos décadas que corresponden a la expedición de la Ley General de Cultura, la academia renueva su interés con el patrimonio cultural con la creación de pregrados y posgrados dedicadas o relacionados con temáticas en el propósito de la conservación de expresiones, muebles e inmuebles catalogados como BIC del orden material e inmaterial y natural. En Bogotá, ciudades capitales de departamento y en las regiones donde se destacan el pregrado en Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural Mueble de la Universidad Externado de Colombia, la Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble de la Universidad Nacional de Colombia, la Maestría en Patrimonio Cultural de la

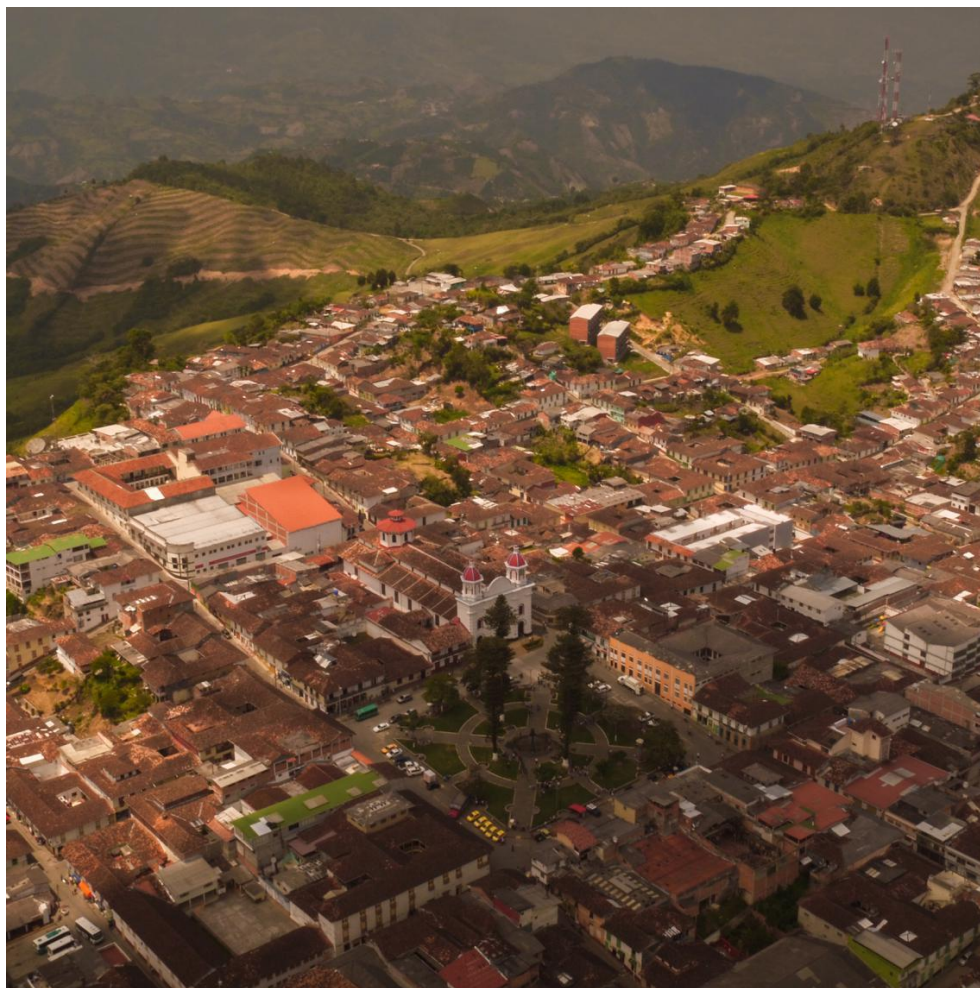
---

<sup>415</sup> Acuerdo No. 460 del Consejo Directivo de la Pontificia Universidad Javeriana del 25 de julio de 2007.



Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la ciudad de Tunja, la Maestría en Patrimonio Cultural Mueble de la Universidad de Los Andes, la Maestría en Patrimonio Arquitectónico, urbano y paisajístico de la Universidad del Atlántico en la ciudad de Barraquilla, entre otros posgrados a nivel nacional. El proceso de formación y capacitación de profesionales aptos para realizar intervenciones en el campo de la restauración con suficiente capacidad intelectual, técnica y dominio de las metodologías propias de este campo, requirió cerca de medio siglo y aún hoy se encuentra en deuda. Si bien, el cuerpo legislativo ha robustecido sus competencias y directrices, ha requerido del apoyo de la universidad y el campo académico como soporte, medio y difusión para concretar una especialidad basada en la madurez conceptual del patrimonio cultural, así como la comprensión de la importancia del patrimonio urbano en el ordenamiento de las ciudades y municipios.

**Figura 5.36 Centro Histórico del Municipio de Aguadas (Caldas)**



Fuente: Imagen tomada de [redturisticadepueblospatrimonio.com.co](http://redturisticadepueblospatrimonio.com.co)

## 5.6 Conclusiones parciales

De manera preliminar se puede concluir:

- a. La propuesta integral del PEMP reúne las acciones de intervención de las áreas patrimoniales declaradas, mediante mecanismos para la formulación de los proyectos en aspectos técnicos – delimitación y nivel permitido de intervención–, aspectos físico-técnicos, administrativo y financieros, al igual que el plan de divulgación. Estos componentes provienen de los aportes de convenciones, cartas, influencias y experiencias de otros países, para la protección del patrimonio, aún sin armonizar, adecuar y escalar a las necesidades locales, diversas y emergentes del patrimonio urbano en Colombia.
- b. La secuencia de los instrumentos de protección del patrimonio urbano en los 45 centros históricos BIC del ámbito nacional, son determinantes en el surgimiento de los efectos urbanísticos, a partir del encadenamiento de las acciones de conservación y salvaguarda de los valores arquitectónicos y urbanos definidos en sus áreas con tratamiento de conservación.
- c. El orden de los instrumentos de protección en diálogo con el ordenamiento territorial, permiten evidenciar las acciones de la participación ciudadana y el reconocimiento del área histórica a la vida cotidiana, así como la integración y fortalecimiento de las dinámicas urbanas.
- d. La aproximación a los efectos de la política de protección del patrimonio urbano en concordancia con el *path dependence*, establece mediante la secuencia de aplicación un patrón característico predominante a la agrupación de centros históricos concentrados en cada uno de ellos. También permite observar diversidad de efectos, apropiación y ejecución de las medidas de conservación, que requieren una investigación exclusiva para comprender su comportamiento y campo de acción.
- e. En los casos de estudio se establece la singularidad como alternativa de futuras exploraciones de los efectos de la política de protección del patrimonio urbano. Sin embargo, en los casos abordados, se comprenden las variaciones y como las decisiones locales prolongan o incentivan resultados muchos inesperados que comprometen la conservación del patrimonio contra el desplazamiento de la población habitual.



## CAPITULO VI<sup>416</sup>

### CONCLUSIONES GENERALES Y NUEVOS RETOS

Las conclusiones giran en torno a tres grandes aspectos, a saber:

- a) elementos para interpretación de la política de protección y el patrimonio urbano;
- b) fases de la política y protección del patrimonio urbano en el MGDТ;
- c) desfase generacional de los instrumentos de protección en relación con los retos a la época de surgimiento;

Como corolario, se une a este capítulo una reflexión sobre los nuevos retos de investigación y perspectivas y alternativas para la protección del patrimonio urbano colombiano en el futuro inmediato. Y para cerrar, se plasma una respuesta sintética a las preguntas de investigación.

#### 6.1. Elementos para interpretación de la política de protección y el patrimonio urbano

Es relevante el desarrollo de las ideas iniciales sobre la política de protección y el patrimonio urbano como temáticas codependientes y consecuentes con las decisiones e influencias institucionales y jurídicas nacionales e internacionales, en concordancia con los movimientos ideológicos del siglo XX e inicios del XXI en Colombia y América Latina. La trayectoria de Colombia en la creación del patrimonio urbano y su protección jurídica entre los años 1954 y 2019, presenta momentos singulares en el origen, evolución y efectos urbanísticos resultado de las cargas heredadas, articuladas a marcos políticos e ideológicos que usualmente se ajustan a las demandas de iniciativas internacionales. Algunas de ellas son correspondidas de manera directa por el gobierno, a través de la adhesión a las convenciones, cartas y orientaciones explícitas en el marco legislativo o mediante la integración de algunos de sus lineamientos generales en acciones marginales.

Como se ha demostrado, estas acciones han dejado trazas en el marco jurídico y operativo, presentes en la estructura subyacente institucional administrativa y en la cadena de decisiones de sus funcionarios, regularmente temporales y matizadas por el mecanismo de sucesión del gobierno según las reglas electorales. En los cinco aspectos principales identificados como hallazgos de la investigación, se establecen elementos prospectivos para nuevas rutas de trabajo provenientes de oportunidades y necesidades, que requieren ser abordados desde otras perspectivas y propósitos a los usuales. Los resultados de la investigación satisfacen la hipótesis y propósitos establecidos, lo que permitió aproximarse a identificar y explicar las

---

<sup>416</sup> Los resultados parciales de la investigación fueron publicados en Fonseca Roa, O. Y. (2022). Variables, secuencias y rutinas en los instrumentos de protección del patrimonio urbano en Colombia, a partir de la aplicación del modelo de la dependencia de la trayectoria (MDT). urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 15, e20220078. Disponible en <https://doi.org/10.1590/2175-3369.015.e20220078>

dependencias de la trayectoria de la política de protección y el patrimonio urbano BIC del ámbito nacional, para comprender el estado de las instituciones, itinerarios y fases de la legislación e instrumentos de regulación desde 1954 al año 2019. También se esbozan algunos retos futuros para los centros históricos declarados BIC del ámbito nacional en cuanto a la protección, salvaguarda y conservación del patrimonio arquitectónico y urbano, ante el crecimiento de las áreas urbanas de mayor escala y la participación ciudadana. La definición de las fases de preformación (1954-1980), formación (1980-1997) y bloqueo (1997-2019) mediante la aplicación de los elementos y variables del MGD, instrumento metodológico empleado para el desarrollo de las cuestiones inicialmente planteadas, se constituye en un elemento estructural de la investigación. Aporta a explicar la política de protección entre la concepción, surgimiento y aplicación de los instrumentos de protección del patrimonio urbano desde el marco legal, institucional, generacional y operativo. Las secuencias de aplicación de los mecanismos de protección en los 45 centros históricos BIC del ámbito nacional, definen algunas alternativas de efectos a partir del encadenamiento de los instrumentos para la protección y gestión del patrimonio urbano, según las necesidades territoriales locales y regionales.

#### **6.1.1 Aspecto legislativo: del patrimonio histórico al patrimonio cultural. Variables para la interpretación de la política pública de protección del patrimonio urbano**

El proceso de surgimiento y consolidación del patrimonio urbano y la política de protección requiere de elementos básicos asociados con ambas dimensiones, que se constituyen en las variables desde las cuales proceden las interpretaciones y las alternativas de lectura de la trayectoria temporal entre los años 1954 y 2019. La docilidad interpretativa de los elementos básicos aporta variadas comprensiones, gobernadas por el proceso metodológico e instrumental en el que emergen aquellas cuestiones que concentran el mayor significado, versatilidad e impacto en la conformación de la estructura, relaciones, secuencias, patrones y rutinas tanto de la política pública de protección como del patrimonio urbano. Los elementos significativos resultantes se caracterizan por emerger de la periodicidad establecida por el proceso histórico involucrado en la formación espacial y el establecimiento de las relaciones sociales, económicas y geoculturales de los centros históricos con la protección del patrimonio.

Dos dimensiones contienen las variables de la política pública de creación y protección del patrimonio urbano: a) la primera agrupa los actores, instituciones, programas y políticas nacionales e internacionales determinantes en la consolidación de un panorama amplio en términos del objetivo propuesto. Además de generar un insumo actualizado y sintético de la temática abordada. b) La segunda dimensión permite determinar con suficiencia la presencia de un proyecto en torno al patrimonio con origen en las concepciones de los monumentos históricos y desplazado conceptualmente al unísono de los cambios e ideales de nación, expresados en las constituciones políticas y la aceptación del significado del patrimonio cultural.

Las variables expuestas corresponden a un inventario sistemático entre los eventos de mayor significancia en la legislación, que ha contribuido a la definición de la trayectoria del patrimonio histórico hacia el patrimonio cultural y en particular en el surgimiento del patrimonio urbano. La presencia del marco legal e instrumental en la ruta organizativa del patrimonio urbano es una constante reafirmada por los matices de las coyunturas y certezas derivadas del marco operativo que generan persistencia, estabilidad, incertidumbre y tendencias como producto de la interacción bajo el ciclo institucional. Está constante se autoreforza en la medida que consolida una línea de ideas y conceptos a partir de su propia experiencia. La secuencia de los acontecimientos ocurridos y relacionados con la creación y protección del patrimonio urbano requiere una observación en marcos temporales de pocos años, esto facilita la identificación de los contextos de donde provienen cada uno de los elementos representativos y fundamentales. Las variables agrupadas en las dos dimensiones son las siguientes:

La dimensión No. 1 concentra las declaratorias, instrumentos, programas e instituciones que corresponden a dos ideas de país expresadas en dos constituciones: el estado controlador y el estado supervisor, el centralismo y la descentralización. Resulta paradigmática su conexión con el significado del concepto de monumento nacional y el de bien de interés cultural, estas ideas son dos formas de aproximarse a la cultura elitista y la cultura popular. Los actores, acciones, decisiones e instituciones de esta dimensión reflejan la transformación conceptual, operativa y funcional del patrimonio cultural desde la particularidad del patrimonio urbano del ámbito nacional. La necesidad de reafirmación del nacionalismo a través del reconocimiento de inmuebles monumentales selectivos, a los que se les atribuye significación y cohesión para homogeneizar los grupos sociales llamados a asumir nuevos símbolos como parte integral de su identidad nacional.

La dimensión No. 2: -Legislación, cartas, proyectos e influencias internacionales- agrupa el marco legal del patrimonio cultural y su relación directa e indirecta con la producción de las diferentes leyes, decretos y resoluciones evidentes en algunos casos y marginales en otros. Concentra los distintos estilos de gestión predominantes en la época de aplicación de la legislación que usualmente define una forma de aproximación y acción sobre el manejo de las áreas históricas. Además, establece las líneas generales del relacionamiento del centro histórico con el modelo de planeación urbana u ordenamiento territorial predominante con sus respectivas escalas de acción e interacción temática. El Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano Ambiental para América Latina y el Caribe Unesco-PNUD (1976-1996), marcó una época de direccionamiento sobre el manejo del patrimonio histórico en 26 países, su impronta aún se observa en acciones persistentes como la frecuente actualización legislativa, la institucionalidad específica, los programas y planes como metodología de gestión del patrimonio urbano.

**Figura 6.01 Elementos para la interpretación de la política pública de protección y el patrimonio urbano**

DIMENSIÓN No. 1 DECLARATORIAS, INSTRUMENTOS, PROGRAMAS E INSTITUCIONES	ENTIDAD DECLARANTE	GOBIERNO NACIONAL (1954-1963)	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (1963-1997)	MINISTERIO DE CULTURA (1997-ACTUAL)
	CENTROS HISTÓRICOS DECLARADOS	21	9	15
	CATEGORIA	MONUMENTO NACIONAL (1954-1997)		BIEN DE INTERÉS CULTURAL (1997- )
	INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO	REGLAMENTACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS (1992-1997)		PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN (PEP) (1997-2007) PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN (PEMP) (2008-
	PROGRAMAS	SUBPROGRAMA: INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE PROYECTO: REGLAMENTACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS (COLCULTURA 1992-1997)		PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS (2002-
	INSTITUCIONES PÚBLICAS	INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA – COLCULTURA- (1968-1997)		MINISTERIO DE CULTURA (1997-ACTUAL)
		CORPORACIÓN NACIONAL DEL TURISMO (1971-1993)		RED TURÍSTICA DE PRUBLOS PATRIMONIO (2004- ACTUAL )
		FONDO DE INMUEBLES NACIONALES (1971-1993)		
		SUBDIRECCIÓN MONUMENTOS NACIONALES- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (1992-1997)		
		UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS E INMUEBLES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ( 1991- ACTUAL )		
	INSTITUCIONES PRIVADAS	FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (1978- ACTUAL)		
DIMENSIÓN No. 2 LEGISLACIÓN, CARTAS, PROYECTOS E INFLUENCIAS INTERNACIONALES	CONSTITUCIONES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA (1886-1991)		CONSTITUCIÓN PÓLITICA (1991- ACTUAL)
	LEGISLACIÓN	LEY 163 DE 1959 (diciembre 30)- Ley de Patrimonio		
		DECRETO 264 DE 1963 (febrero 12)- Reglamentación Ley de Patrimonio		
		LEY 397 DE 1997 (agosto 7) – Ley General de Cultura		
		LEY 1185 DE 2008 (marzo 12) –Modificación y adición Ley General de Cultura		
		LEY 1313 DE 2008 (abril 23)- Reglamentación Artículo 7 Ley General de Cultura		
		DECRETO 3332 DE 2008 (septiembre 5) – Modificación artículo 3 Decreto 1313 de 2008		
		DECRETO 763 DE 2009 (marzo 10) – Reglamentación Ley General de Cultura y Ley 1185 de 2008 sobre el Patrimonio Cultural de la Nación		
		DECRETO 2941 DE 2009 (agosto 6) – Reglamentación y modificación Ley 1185 de 2008 sobre Patrimonio Cultural de naturaleza inmaterial		
		RESOLUCIÓN 0330 DE 2010 (febrero 24)- Desarrollo de aspectos técnicos del Patrimonio Cultural de naturaleza inmaterial		
		RESOLUCIÓN 0983 DE 2010 (mayo 20)- Desarrollo de aspectos técnicos del Patrimonio Cultural de naturaleza material		
		RESOLUCIÓN 1359 DE 2013 (mayo 24)- Delimitación del área afectada y zona de influencia de BIC del ámbito nacional sin áreas definidas		
		DECRETO 1080 DE 2015 (mayo 26) –Decreto Único Reglamentario del sector cultura		
		DECRETO 2358 DE 2019 (diciembre 26) – Modificación y adición al Decreto 1080 de		

CARTAS, LEGISLACIONES, CONVENCIÓNES, PROYECTO E INSTITUCIONES INTERNACIONALE S INFLUYENTES	2015, sobre Patrimonio Cultural Material e Inmaterial
	CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL. UNESCO (1972)
	CARTA DE AMSTERDAM CARTA EUROPEA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (1975)
	CARTA DE NAIROBI. RECOMENDACIÓN RELATIVA A LA SALVAGUARDIA DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS O TRADICIONALES Y SU FUNCIÓN EN LA VIDA CONTEMPORÁNEA. UNESCO (1976)
	CARTA DE WASHINGTON. CARTA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE CIUDADES HISTÓRICAS Y ÁREAS URBANAS HISTÓRICAS, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ICOMOS (1987)
	PROYECTO REGIONAL PATRIMONIO CULTURAL, URBANO AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE UNESCO-PNUD (1976-1996)

Fuente: Elaboración propia

El encadenamiento de las instituciones, programas y planes dedicados a los centros históricos, develan los estilos de gestión de las áreas patrimoniales que aún en la segunda década del siglo XXI, conservan su arraigo en este concepto. Sin apertura visible hacia el patrimonio urbano en la comprensión de las demás manifestaciones que se encuentran en la ciudad, a la espera de emerger y trascender más allá de sus escenarios anónimos locales y regionales. Si bien, es incuestionable una trayectoria intermitente y parcial de 30 años en el surgimiento de medidas de protección de los centros históricos declarados como monumento nacional y BIC, es posible demostrar algunos efectos desde la aplicación o ausencia del encadenamiento de los instrumentos, especialmente en la emergencia de la interpretación, sentido de la protección y la gestión municipal del patrimonio urbano declarado. Se reafirma la migración de una sensibilidad elitista por la cultura a una masiva aceptación de la dimensión cultural como parte de la identidad y el sentir de los ciudadanos, en el marco de los derechos y las expresiones en el desarrollo de la personalidad.

## 6.2 Las fases del patrimonio urbano y su relación con las instituciones de la cultura e ideas de su época

El sometimiento de los elementos relacionados con el patrimonio urbano al MGDT, establece tres fases que corresponden al segundo, tercer y cuarto capítulo de la investigación. Genera una imagen integral en que las variables dispuestas sobre las líneas de análisis de la política e instrumentos de protección de los centros históricos BIC del ámbito nacional, facilitan la identificación de la estructura de interacción de las dimensiones agrupadas por asociatividad temática, para aproximarse a los discursos e ideas de cada fase. La disposición de los elementos relacionados con la política pública de protección del patrimonio urbano agrupados en tres fases permite centrarse en las acciones que corresponden a la contemporaneidad en los aspectos destacados en la dualidad de la creación y protección de los centros históricos, surgidos a mediados del siglo XX, momento de mayor cambio y significancia de las ciudades colombianas en la creciente vida urbana. Las estrategias de regulación urbana y territorial, gobierno, administración y gestión proceden de las decisiones sistemáticas ligadas al corpus jurídico,

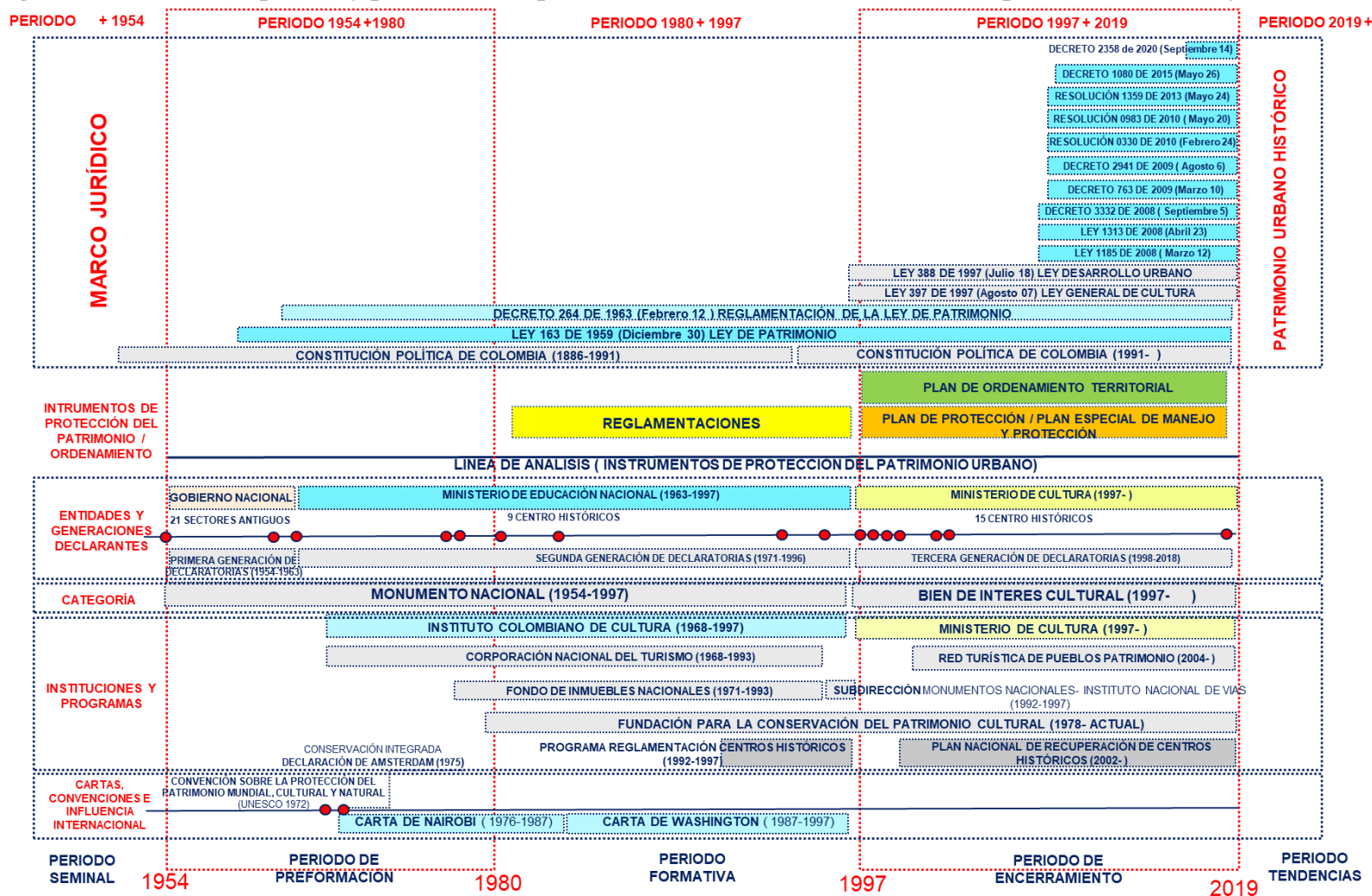


institucional y procedimental como una constante en las diferentes fases progresivas de la dependencia de la trayectoria. Es evidente la relación del patrimonio urbano y la política de protección en doble vía. La existencia del primero depende de la legitimidad, claridad y proporcionalidad del segundo, mientras el segundo delimita las condiciones, alcance y versatilidad del primero en términos estrictos de la conservación. Establece una relación de operatividad mediada por la gestión, siendo el mecanismo habilitante el plan especial en su expresión regulatoria y proyectual, instrumento receptor de las influencias, decisiones y procedimientos en concordancia a los lineamientos estratégicos, normativos, administrativos y financieros. En este sentido, el manejo asociado a la disposición de los contenidos estructurales del plan adquiere e introduce en su concepción orientaciones exógenas de diverso origen e interés, en los que se diversifica no solo su sentido sino determina una época caracterizada con el instrumento de planeación y gestión, que no corresponde regularmente a las exigencias de su tiempo.

En la relación estructural de la política de protección y el patrimonio urbano, la gestión ocupa una función transversal en el fortalecimiento de la trayectoria dependiente del corpus legal. No obstante, su proceso de consolidación operativa y práctica presenta un sumario particular en el que se integran las pautas conceptuales de cartas, tratados y leyes internacionales influyentes en su estabilización, a partir del reconocimiento y aceptación de los aspectos más destacados de cada una de ellas. La gestión en sentido organizacional operativo permite a las instituciones administrativas ser plataforma de decisiones, además de facilitar la formulación, adopción e implementación de políticas, programas y proyectos dirigidos a la protección de los centros históricos en el contexto de la planeación y el ordenamiento del territorio. Queda en evidencia la ruptura fundamental entre la separación del área histórica urbana y el municipio o ciudad que lo contiene, se mantiene una disyuntiva entre la armonización conceptual tanto del plan de ordenamiento como del plan especial de manejo y protección, obedecen a dos ideas y decisiones del desarrollo y la conservación. Se refuerza esta dicotomía con la concentración de estrategias orientadas de manera exclusiva a sus áreas de afectación en cada uno de sus planes.

Las instituciones, centro de estudio del institucionalismo histórico, aportan con su funcionalidad temporal administrativa rasgos generales a partir de su gestión, al igual que encadenamientos y rupturas en la continuidad de las ideas, programas y proyectos destinados al largo, mediano o corto plazo, en el caso de esta tesis, orientadas a la protección del patrimonio. La rotación de directores de las corporaciones, fondos, fundaciones e institutos obedece a la condición política asociada a la actividad electoral, inscrita en las propuestas de campaña y en los planes de desarrollo que, en la sucesión de los diferentes gobiernos, reformulan la orientación o adecuación del sentido de la cultura como un aspecto prioritario de su mandato, usualmente, diferenciado en escala y regiones priorizadas para su implementación. Se destaca la diversidad, escala y variedad temática de los aspectos de la cultura en cada gobierno, dedicado a la promoción del libro, el arte, la lectura, el regionalismo como oportunidad de expresión, las bellas artes, el teatro, la música, que han permitido, enriquecido y viabilizado el surgimiento del concepto de patrimonio cultural, el cual agrupa las manifestaciones de la tan anhelada nacionalidad colombiana presente en la concepción del origen de los monumentos.

Figura 6.02 Fases de la política y protección del patrimonio urbano en el Modelo de la Dependencia de la Trayectoria



Fuente: Elaboración propia

La necesidad de una identidad nacional, una cohesión social y una comprensión política homogénea encuentra una oportunidad en el reconocimiento de la cultura, inicialmente asociada a las expresiones materiales vinculadas a la representatividad de los monumentos nacionales, conformados por las edificaciones de los poderes políticos, religiosos, civiles y militares con suficiencia para argumentar, con su estilo arquitectónico, dimensiones y emplazamiento, la correspondencia entre la adhesión al proyecto cultural pactado en la Séptima Conferencia Panamericana y desarrollado de manera dispersa sin un proyecto político hasta el surgimiento de la Ley 163 de 1959, que siendo estructural en la dependencia de la trayectoria de la protección del patrimonio, no se constituye en una política pública en sí misma.

La variedad de sistemas de gestión, confeccionados en las deudas históricas y la desconfianza propia de la centralización, característica principal de la vida republicana, además de las dimensiones pendientes por abordar, disgregan la administración de los monumentos históricos en instituciones dedicadas al turismo, a los inmuebles nacionales, a las vías nacionales de origen público e instituciones de iniciativa privada que promueven la diversidad administrativa pero no permiten consolidar una continuidad en el manejo del emergente patrimonio cultural. Colcultura fue la plataforma de mayor consistencia en la construcción de un sistema de gestión, afectado por las limitaciones presupuestales de los diferentes gobiernos durante su vigencia e indeterminación temática, discontinuidad, transformaciones a la estructura administrativa, sumado a los desafíos propios del crecimiento demográfico y urbano en las últimas cuatro décadas del siglo XX.

La fase de preformación (1954-1980) corresponde a la transición de los ideales panamericanos de los estados de América Latina de los años 30 del siglo XX, a la acción espontánea de un acto bajo la dictadura de Rojas Pinilla con la declaración del conjunto urbano de Villa de Leyva. Recoge las acciones dispersas y los intereses esporádicos de aproximación a la configuración de un catálogo de monumentos, necesarios para justificar una legislación aislada y un interés genuino por un patrimonio nacional sin declarar. La Ley de patrimonio histórico de 1959, traza una senda conceptual e ideológica obligante para las acciones futuras, matizadas por las ideas y conceptos surgidos en otros escenarios, pero con suficiente resonancia para integrarla de manera marginal a las interpretaciones funcionales de la constitución política de 1886.

Entre los años 1959 y 1963, se llevan a cabo las declaratorias masivas de 21 centros históricos como monumento nacional por el gobierno nacional, mediante la Ley de patrimonio histórico y su Decreto reglamentario. Se constituyen en la primera generación de áreas históricas reconocidas en esta categoría, bajo la denominación de sector antiguo, en correspondencia a un acto urgente para suplir los compromisos de la época panamericana, sin mayor reflexión a las demandas administrativas, funcionales y económicas de esta decisión. El tiempo transcurrido entre las declaratorias y el surgimiento del Instituto Colombiano de Cultura - Colcultura (1968), la conservación y protección sólo se refieren a conceptos no operativos, minimizados en la restricción a intervenciones a los inmuebles sin el surgimiento de las condiciones suficientes para viabilizar la revitalización de algunas edificaciones dentro de los perímetros sugeridos para aproximarse a la ciudad de una época delimitada entre los siglos XVI, XVII, XVIII y principios

del siglo XIX. El primer intento de conformación de un patrimonio urbano, supero con dificultad la agrupación de las ciudades y poblaciones significativas en su proceso histórico, reconoce aquellas que fueron escenario de la opresión colonial, lo que resulta ambigua la forma como se enaltece y desea conservar aquello de lo que se quiere liberar.

Posterior a la adhesión de las ideas y compromisos de la conferencia panamericana de 1933, la Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural de la Unesco, impone un nuevo reto en el año 1972 a la recientemente creada Colcultura, que surge en la fase de preformación, pero es resuelta de manera paulatina y desagregada en la fase formativa (1980-1997), debido a que el nivel de reflexión e incorporación requirió de dos décadas para formular, adaptar y reconocer los lineamientos instaurados por Unesco y obligante para las estados partes. Pocos años después, la Declaración de Ámsterdam en 1975, introduce una postura relacionada con la conservación integral a partir de la adhesión del centro histórico a la planeación urbana de la ciudad, retomada y enriquecida por la Carta de Nairobi (1976) en la estructura del plan de salvaguarda, referente fundamental para la aproximación a la formulación del primer plan denominado Reglamento Especial para la Zona Histórica y Cultural de la Merced, Allí se integran estas características para el sector antiguo de la ciudad de Cali, aprobado en 1980, siendo el precursor en la aceptación, interpretación y uso de una nueva orientación en la gestión de las áreas patrimoniales declaradas. A esta experiencia exploratoria con los criterios del plan de salvaguarda se suma la declaratoria del centro histórico de Ambalema en 1980, primera denominación en la categoría precedente del Coloquio de Quito celebrado en 1977, promovido por el Proyecto Regional Cultural, Urbano Ambiental para América Latina y el Caribe de Unesco y PNUD, del cual hace parte Colombia.

La coyuntura crítica de la adopción de la reglamentación de La Merced y la declaratoria de Ambalema como centro histórico en el año 1980, determinan el final de la fase preformativa e inicio de la fase formativa (1980-1997), en la cual se consolidan y agotan los programas institucionales de Colcultura, la Corporación Nacional del Turismo, el Fondo de Inmuebles Nacionales y el surgimiento de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural, única de carácter privado que aún permanece en funciones. La incertidumbre en el medio académico, institucional y público interesado en el patrimonio histórico, producto del reconocimiento de una legislación obsoleta, promovió el diálogo y reflexión de las necesidades legales, administrativas y de gestión acordes a los requerimientos proporcionales a un nivel de conciencia y reconocimiento de la importancia del patrimonio cultural, animado por la segunda generación de profesionales y técnicos formados como especialistas en la temática, animados y patrocinados en el marco del proyecto de cooperación de Unesco-PNUD.

Durante la fase formativa se lleva a cabo la segunda generación de declaratorias de 9 centros históricos, que a finales de 1997 suman 30 áreas urbanas patrimoniales reconocidas como monumento nacional. La declaratoria se caracteriza por ser actos individuales con la argumentación técnica exigida y justificativa, a partir de la interpretación de los marcos conceptuales internacionales. El agotamiento de la Carta de Nairobi y su referencia al plan de salvaguarda ceden a una mirada inscrita en la Carta de Washington (1987), orientada al Plan de

Conservación con reconocimiento de las diferentes escalas y categorías de los núcleos urbanos de carácter histórico, su integración al desarrollo económico y social en el planeamiento territorial y urbanístico, con el estímulo a la participación ciudadana en la construcción colectiva. Estos ideales son reconocidos e integrados en la producción del Manual para la reglamentación de los sectores urbanos antiguos (diciembre 1991) y el Manual de reglamentación de poblados de interés patrimonial (octubre 1995), que corresponden con los lineamientos de la Carta Internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas.

La adopción de la norma cultural en los manuales de reglamentación en los años 90, al final de la gestión de Colcultura son la respuesta a la expedición de la Ley 9 de 1989, sobre los planes de desarrollo y reglamento de usos del suelo municipal, donde se reconoce de manera genérica el tratamiento de conservación y delimitación de las zonas de desarrollo restringido. La valoración y catalogación de los centros históricos se realiza con un procedimiento técnico no unificado, lo que compromete la autonomía para que cada municipio con patrimonio urbano lo delimite y garantice la restricción de desarrollo, esto somete la conservación urbana a criterios, metodologías de valoración y criterios de intervención propios de la restauración. Emerge la necesidad de un instrumento de protección de mayor integralidad, cobertura y especificidad, responsabilidad temporalmente delegada a las pocas reglamentaciones formuladas, aprobadas y adoptadas por los municipio y ciudades con centros históricos reconocidos monumento nacional

Estas reflexiones, decisiones y proyectos esbozan los acontecimientos de la fase de bloqueo o encerramiento (1997-2019) que surge con la promulgación de la Constitución Política del año 1991 y el posterior desarrollo de las leyes del patrimonio cultural (Ley 397 de 1997) y de desarrollo urbano (Ley 388 de 1997). A pesar de la promulgación simultánea de estas leyes, se mantiene la ruptura entre la conservación y desarrollo urbano, enfatizados por el sentido y orientación de las leyes bajo la pretensión de establecer una armonización entre ellas, pero la supremacía en la aplicación, imponiendo los conceptos de la protección del patrimonio sobre el desarrollo urbano. Se acentúa esa separación conceptual con la designación de un plan por cada ley, un plan de ordenamiento territorial obligatorio para todos los municipios y ciudades y, un plan de manejo y protección para aquellas con patrimonio cultural declarado BIC.

La creación del Ministerio de Cultura (1997) supuso la ruptura con las formas de administración y gestión precedentes ejercidas por Colcultura. La denominación de BIC marca aún más la distancia con el monumento nacional e implanta una forma de relacionarse con la identidad desde la participación social y ciudadana. El desarrollo del marco legal en los últimos 20 años supone la conformación y presencia de una política pública para la protección y regulación del patrimonio, cada vez más rigidizada por la abundancia de reglamentos. En ese sentido, la amplitud de interpretación de la ley de patrimonio del año 1959 se estrecha por el volumen abundante de decretos, siendo inversamente proporcional la relación: a menor volumen de legislación mayor las oportunidades de interpretación y, a mayor volumen de legislación mayor rigidez y pérdida de flexibilidad del corpus legal. Además de la persistencia

del PEMP como el instrumento por excelencia dedicado a la intermediación del diálogo entre el ordenamiento territorial y la conservación, validado para la próxima década hasta el año 2029, momento de la renovación de la legislación del patrimonio cultural.

La continuidad de la conservación del área urbana patrimonial declarada en programas institucionales -inicialmente el Programa de Reglamentación de Centros Históricos en Colcultura y el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos del Ministerio de Cultura, proponen dos miradas ajustadas a la escala de la institución y el propósito mediados por el sistema de gestión. Mientras el primero busca de manera específica la conservación mediante la norma cultural; el segundo pretende mediante el proyecto urbano la revitalización del centro histórico, soportada en la gestión de aspectos técnicos, financieros, económicos y de divulgación para atraer a la ciudad contenedora los atractivos y las actividades desplazadas de la centralidad histórica, por las limitaciones introducidas por el deseo de la protección.

Las incertidumbres sobre la protección del patrimonio urbano, lideradas por las certezas del corpus jurídico de la planeación y el ordenamiento han generado una reacción inmediata desde la cultura y delegada al PEMP, al que se ha dotado de suficiencia para catalizar o redefinir los lineamientos de intervención o delimitación de las áreas patrimoniales donde se manifiesta una desconfianza marcada por la distancia conceptual del ordenamiento territorial, inicialmente desde la productividad y recientemente desde el paisaje cultural e histórico. La mitigación de las iniciativas del ordenamiento urbano para el centro histórico con tratamiento de conservación se realiza mediante el PEMP, al amparo de la mayor jerarquía ordenada por la constitución política para el patrimonio cultural. Esto reafirma una disputa con alternativas cada vez más escasas, que dejan desamparado al centro histórico con un buen plan especial reconocido y adoptado en el ordenamiento, pero con ejecuciones mínimas por parte de la administración municipal.

El hallazgo de las tres fases evidencia la segregación de la trayectoria dependiente de la política e instrumentos de protección del patrimonio urbano, lo que otorga valor a los acontecimientos precedentes de la fase de preformación, al igual que las líneas generales de las tendencias situadas después de la fase de encerramiento o bloqueo. De esta manera, la búsqueda del origen, evolución y efectos de la política de protección del patrimonio urbano en Colombia explica los discursos e ideas subyacentes y emergentes con la dependencia de la trayectoria. Si bien el MGDТ, es un instrumento versátil para el propósito de la investigación, sus limitaciones no se constituyen en un impedimento para lograr un nivel satisfactorio como instrumento metodológico y conceptual del institucionalismo histórico.

### **6.3 El desfase generacional de los instrumentos de protección en relación con los retos a la época de surgimiento**

La versatilidad del MGDТ favorece la identificación de las rutinas y secuencias de la política y protección del patrimonio urbano, útiles en la comprensión de las ideas predominantes y su

adaptación instrumental a las diversas iniciativas en la configuración del corpus urbano patrimonial y legal. El origen de la dependencia de la trayectoria de la política de protección del patrimonio urbano surge de los acuerdos de la séptima conferencia internacional panamericana de 1933, reconocidos y adoptados por Colombia en 1959 y aún vigentes, 64 años después. Se preservan y mantienen los ideales asociados a la misma línea de dependencia, de la cual surge la Ley general de cultura en 1997.

La manifestación ideológica y operativa del corpus legal dedicado al patrimonio urbano ha sido posible al auge, aporte y dedicación de 6 generaciones de técnicos, profesionales y académicos que contribuyeron a la consolidación de las rutinas determinantes en la emergencia de los paradigmas adoptados por los instrumentos y programas dedicados a la protección y conservación del patrimonio urbano del ámbito nacional. Si bien, el MGDТ facilita la identificación de la trayectoria en las líneas de análisis abordadas tanto de la política pública de protección como del patrimonio urbano, de las fases iniciales –preformación, formación y bloqueo- emergen otras variables como las generaciones de técnicos y profesionales relacionadas con la arquitectura y el urbanismo en Colombia entre 1954 y 2019.

La generación panamericana (1930-1945) facilita el surgimiento de los ideales de cooperación y unión de los países Latinoamericanos producto de la celebración del primer centenario de la independencia de la mayoría de las naciones del continente. Se expresa en la propuesta de iniciativas comunes que permitan un progreso homogéneo en la región, en el marco de hermandad y ejercicio de sus libertades. En lo concerniente a la consolidación del patrimonio nacional, se establece la urgencia de formular una política pública local para constituir y proteger los monumentos declarados en esta categoría. Dos años después de la celebración en Montevideo de la conferencia en 1933, el Pacto de Roerich, promueve la defensa de los bienes culturales y refuerza la necesidad de la legislación como un medio efectivo para la declaratoria, configuración y protección de un patrimonio propio. De esta manera, en Colombia las legislaciones aisladas de los años 1940 y 1946, no se consideran respuestas a los tratados internacionales, sin embargo, se consideran antecedentes en este sentido.

En el marco de la generación progresista (1945-1960), se materializa el compromiso de la conferencia panamericana con la formulación de la Ley 163 de 1959 y se establece un vínculo directo con el origen del corpus legal del patrimonio cultural. No obstante, el surgimiento del patrimonio urbano se vincula a la declaratoria de Villa de Leyva en 1954 en la única dictadura del siglo XX en Colombia. En este mismo periodo de la generación progresista y el gobierno nacional lidera la declaratoria de 21 sectores urbanos antiguos con la determinación de conforman un patrimonio histórico. Por su parte, la generación técnica (1960-1975), reglamenta la Ley de patrimonio de 1959, complementa el emergente patrimonio histórico, artístico y monumentos de la nación con un corpus de 21 sectores antiguos declarados y delega en el Ministerio de Educación Nacional el liderazgo de la administración de los monumentos nacionales. Surgen la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia -1964), producto del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. Tres años después en la ciudad de Quito,

surge el Informe final de la reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y artístico – Normas de Quito (1967), con el reconocimiento a la riqueza monumental de Iberoamérica, objeto de conservación, valoración económica y puesta en valor a través del turismo. Se establece la dualidad de la conservación y el turismo cultural.

La Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial –Unesco (1972)- establece la idea del interés internacional en el patrimonio local en términos de regulación, cooperación e incidencia en las formas de legislación y administración, a través de la observación de los Estados miembros<sup>417</sup>, se constituye en una rutina singular que influye en la declaratoria de la ciudad de Cartagena y Mompox como patrimonio de la Humanidad en el año 1984 y 1995, respectivamente.

En la transición de la generación técnica (1960-1975) y la generación continuista (1975-1990), predomina la idea de la planeación urbana y el patrimonio histórico, proveniente de las Normas de Quito (1967), la Declaración de Ámsterdam (1975), la Carta de Nairobi (1976) y el Coloquio de Quito (1977), con predominio de la idea de la conservación integral, esta última en el marco del Proyecto Regional Cultural, Urbano Ambiental para América latina y el Caribe, promovido por Unesco-PNUD (1976-1996). De allí surge la reflexión de la integración de la conservación dentro de la planeación urbana bajo la intención de reconocer la integralidad del patrimonio en las dinámicas y proyectos urbanos. Sin embargo, su incidencia operativa surge a principios de los años 90 en el Programa de Reglamentación de Centros Históricos (1992-1997).

La generación continuista (1975-1990), desarrolla su aporte al patrimonio urbano bajo el concepto de centro histórico instaurado por el Coloquio de Quito (1977), aún hoy es predominante en las diferentes acciones legislativas y oficiales. El plan de salvaguardia y la política de conservación integral definen la acción de esta generación con un importante trabajo en la academia en lo relacionado en la difusión conceptual del patrimonio cultural y natural, la capacitación de profesionales y técnicos, elaboración de repositorios de levantamientos, valoración e identificación del patrimonio regional.

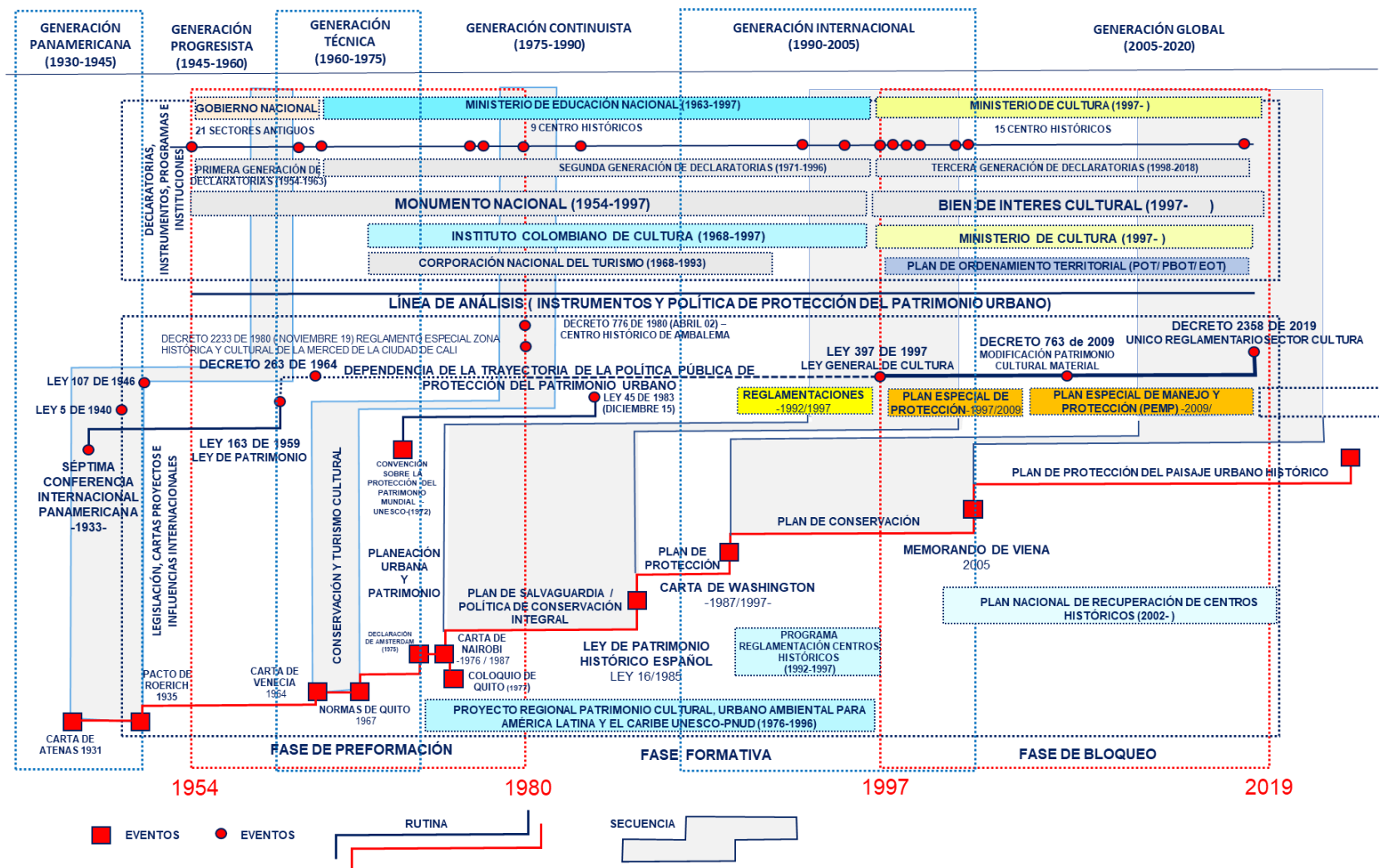
La Ley de Patrimonio Histórico Español (1985), que introduce el Plan Especial de Protección, es referente fundamental y determinante en el sentido y surgimiento de la Ley 397 de 1997. El plan especial de protección español influye de manera determinante tanto en lo conceptual como lo operativo en la configuración tanto del Plan Especial de Protección en Colombia (Ley 397 de 1997), posterior reconfiguración del Plan Especial de Manejo y Protección (Decreto 763 de 2009), cerca de 12 años después

---

<sup>417</sup> Reconocida en Colombia mediante la Ley 45 de 1983



**Figura 6.03 Generaciones, rutinas y secuencias en el surgimiento de la protección y el patrimonio urbano en Colombia**



Fuente: Elaboración propia

El predominio del PEP se introduce como idea en la transición de la generación continuista (1975-1990) y la generación internacional (1990-2005). Esta última asume la transformación estructural de la comprensión, legislación, administración y relevo conceptual del monumento nacional al bien de interés cultural. La transición del plan de protección al plan de conservación, procedente de la Carta de Washington (1987), predominante durante el aporte de la generación internacional (1990-2005). Además, consolida y renueva el proceso de formación de profesionales y técnicos en patrimonio cultural, tanto en el nivel nacional como el internacional, concluye la segunda generación de declaratorias con un corpus del patrimonio urbano conformado por 30 centros históricos declarados del ámbito nacional en el año 1997. En el año 2005 el Memorando de Viena, formula el concepto de Patrimonio Urbano Histórico, reanima el debate conceptual en términos de delimitación y gestión sin llegar a ser reconocido e integrado a la legislación en Colombia, específicamente en la modificación del decreto de 2019. Desde el año 2011, el Paisaje Cultural Cafetero (PCC), goza de reconocimiento por parte de la Unesco, se ha integrado a las dinámicas territoriales de ordenamiento y conservación de la región afectada dentro de la delimitación. Así mismo, se establecen lineamientos y consideraciones para en el futuro inmediato formular un PEMP, para el PCC y los futuros declarados, según el Decreto 2358 de 2019.

El memorando de Viena (2005), marca el inicio de la generación global (2005- 2020), correspondiente a la fase de bloqueo (1997-2019). La contribución de la generación global ha estado mediada por los lineamientos del Ministerio de Cultura y el nutrido corpus legal expedido, que ha desarrollado la Ley General de Cultura con legislaciones complementarias sobre el patrimonio material e inmaterial, lo que incrementa el bloqueo e incentiva la pérdida de flexibilidad del marco legal. Los lineamientos determinados por el Memorando de Viena aún no han sido integrados a la legislación u operatividad del patrimonio cultural en Colombia, su desarrollo posiblemente deba esperar hasta finales de la década de los años 20 del siglo XXI, una vez se renueve el Decreto 2354 de 2019. A pesar, que el ordenamiento territorial tiene una trayectoria de dos décadas, no es visible la armonización con la protección del patrimonio. La legislación más reciente procura reconocer el instrumento del PEMP, más en su función operativa que en su fundamento conceptual, lo que mantiene la disputa histórica entre la conservación y el desarrollo urbano presente desde el surgimiento del patrimonio histórico en 1954.

Una constante desde la séptima conferencia panamericana (1933), es el desfase en promedio de 20 años entre el surgimiento de los referentes conceptuales y su aplicación instrumental a la legislación del patrimonio urbano en Colombia, visible en las diferentes rutinas y secuencias (Figura 6.3). Las ideas de la Carta de Venecia (1964), las Normas de Quito (1967) son introducidas y aplicados a mediados de la década de los años 70 del siglo XX. El plan de salvaguarda procedente de la Carta de Nairobi (1976), la política de conservación integral - Coloquio de Quito (1977), la Ley de Patrimonio Histórico Español (1985), motivan las acciones del final de las reglamentaciones (1992-1997), el surgimiento de la Ley 397 de 1997 y el PEP (1997-2009). Los ideales del plan de conservación dispuesto entre la Carta de Washington (1987) y el Memorando de Viena (2005) han influido en la formulación del

Decreto 2358 de 2019 y la modificación del PEP en el PEMP, así como la estructuración del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (2002-Actual). Queda en espera para la próxima década la integración del concepto del paisaje urbano histórico y la evolución del PEMP a escalas mayores que superen la delimitación del centro histórico declarado e integre el paisaje circundante como parte de su conservación y protección.

La tendencia del turismo cultural surge en los años 60, encuentra en la Corporación Nacional del Turismo (1968-1993) el esbozo de una interpretación centrada en el apoyo a la restauración y rehabilitación de inmuebles. El cambio de la situación general de seguridad en Colombia permitió el avance en la línea de posicionamiento de los destinos nacionales en el mercado internacional y en las facilidades de movilización local, lo cual lleva a la creación en el año 2010 del programa de Pueblos Patrimonio y desde 2014, la Red Turística de Pueblos Patrimonio conformada desde el año 2002 por 18 centros históricos declarados BIC del ámbito nacional. El recrudecimiento del conflicto a partir del proceso de paz ha afectado nuevamente de manera sensible las iniciativas turísticas, especialmente para los centros históricos en regiones apartadas.

#### **6.4. Nuevos retos, perspectivas y alternativas para la protección del patrimonio urbano en el futuro inmediato**

El aporte a la interpretación del patrimonio urbano desde el institucionalismo histórico en el origen, evolución y efectos urbanísticos contribuye a una alternativa de comprensión que genera inquietudes complementarias y nuevas líneas de investigación. Entre ellas, el estudio de los municipios que en algún momento hicieron parte de las ternas para ser declarados sus sectores antiguos bien sea como monumento nacional o BIC, con el fin de reconocer el estado de las edificaciones y urbanismo hoy en día. La revisión, estudio e interpretación de los archivos que contienen documentos, planos y repositorios sobre patrimonio urbano como el heredado del extinto Colcultura al Ministerio de Cultura, consultado en la presente investigación, que no agota sus posibilidades de análisis. El volumen de información del archivo presenta múltiples alternativas de estudio, desde la singularidad de un municipio hasta la revisión de casos individuales de inmuebles que han realizado solicitudes sobre sus predios dentro las variadas posibilidades del corpus legal.

Identificar y divulgar los aportes de los institutos de investigaciones estéticas de la Universidades de los años, 60, 70 y 80 del siglo XX, mediante la clasificación y estudio de los repositorios documentales, es una investigación pendiente. Así mismo, la recolección y divulgación de los testimonios de los arquitectos, técnicos, directores y colaboradores de instituciones y actores relevantes de las generaciones precedentes como mecanismo para humanizar, complementar y comprender las versiones académicas o institucionales de sus acciones y decisiones en relación con su responsabilidad, que aportaron a la construcción de la trayectoria de la dependencia del patrimonio urbano.

El estudio de los centros históricos declarados BIC del ámbito departamental y municipal requieren ser identificados, superar la fase del reconocimiento e identificar su estado actual, así

como verificar las trayectorias de la política de protección del patrimonio urbano en ámbitos municipales menos expuestos a la visibilidad económica y turística. El reconocimiento de las comunidades civiles y sus organizaciones culturales orientadas a la protección del patrimonio cultural, especialmente el urbano, que ha tenido logros o experiencias exitosas, que no superan el ámbito de su marginación.

Los nuevos retos que surgen para la protección del patrimonio urbano en Colombia se centran en cuatro aspectos: a) la integración de nuevas expresiones urbanas diferentes a los centros históricos; b) difusión, consolidación e interacción con la participación ciudadana en la cooperación para la proyección y divulgación del patrimonio cultural; c) nuevos mecanismos de delimitación de los sectores urbanos declarados; d) reorientar y ampliar del mecanismo de protección de los centros históricos declarados y no declarados incluidos dentro del POT.

- A. Los pequeños conjuntos urbanos, poblados de interés patrimonial y manifestaciones de diverso orden en Colombia, permanecen ocultos y sin catalogar por la exigente exposición de los centros históricos del ámbito nacional estratégicamente posicionados en el imaginario de las tipologías representativas en el turismo local e internacional. Su constante presencia en los medios publicitarios hace parte de los itinerarios exóticos del turismo cultural. En ese sentido, la escala, escenificación, adaptabilidad de los pueblos patrimonio a una tipología turística, exigen de los centros históricos del ámbito nacional, un posicionamiento como atractivos no solo arquitectónicos y urbanos sino complementado por otras experiencias como las gastronómicas, naturales y de aventura para construirse en destino integrales a un costo social, económico y lesivo de la protección material e inmaterial, al ser incluidos en el turismo cultural, con la falsa idea proporcional de a mayor turismo mayor conservación, siendo realmente lo contrario. La promoción institucional en las campañas de la marca país no favorecen la conservación y protección de las condiciones patrimoniales, por el contrario, construyen imágenes idílicas con la asignación de epítetos a destinos históricos cuya capacidad instalada y posibilidades de adaptabilidad, son expuestos desde la fragilidad a la depredación de la interpretación del turismo cultural. patrimonio histórico, ampliación del paisaje cultural e integración con parques nacionales
- B. La participación social en la protección del patrimonio es fundamental, en la comprensión que los planes físicos pueden ser ejecutados, pero solo serán integrados a la revitalización del centro histórico por sus residentes bien sean habituales u ocasionales, junto a la permanencia de la residencia de sus habitantes y el fomento de las actividades urbanas dentro del perímetro de conservación, garantizando el uso y mediante la cotidianidad de prácticas en el fomento de la conservación. En ese sentido, las disposiciones normativas, estratégicas y lineamientos de conservación, adquieren sentido en el reconocimiento de los actores locales y en la generación de la cultura como parte del comportamiento social.

La diversificación del patrimonio urbano del ámbito nacional, aunque depende en última instancia de la aprobación por parte del Ministerio de Cultura, la postulación depende de los ciudadanos, comunidades y asociaciones culturales, quienes motivan la aproximación de la valoración a nuevas manifestaciones del patrimonio urbano ausentes del catálogo actual como poblaciones indígenas, raizales, asentamientos de comunidades negras , toda vez que el patrimonio urbano actual obedece a las condiciones del elitismo, la campaña libertadora, las provincias históricas y del proceso de reordenamiento territorial sin reconocimiento a las comunidades autóctonas, oprimidas e itinerantes, en ese sentido, la selección de centros históricos aún se encuentra en deuda con las expresiones de vida urbana propias del desarrollo urbano y social.

- C. Nuevas formas de delimitación de las áreas patrimoniales declaradas diferentes a las ya exploradas y aceptadas como únicas. La explotación de nuevas metodologías que superen
- D. El Plan Especial de Manejo y Protección está llamado a constituirse como el instrumento de mayor trayectoria en la protección del patrimonio urbano, al año 2021, su trayectoria consolida, 16 años desde los primeros formulados y aprobados, su continuidad se garantiza con el Programa de Revitalización de Centros Históricos y el presupuesto específico a este objetivo, en el futuro inmediato su pervivencia por la próxima década también está asegurada, sin embargo, su eficiencia, pertinencia y vigencia aún no ha sido evaluada, con la expedición del Decreto 2358 de 2019, la generación de PEMP que cumplan la década debe ser actualizados a los nuevos retos del centro histórico. La valoración debe extenderse a la determinar la efectividad de su ejecución y el contraste de su pertenencia con la protección del patrimonio urbano, en esta misma línea, el balance de las entidades gestoras, bien aportaran al perfilamiento de un instrumento aceptado con ciertas dudas e incertidumbre por su cuestionada popularidad.

En la misma línea, su controvertida relación y armonización con el Plan de Ordenamiento Territorial, especialmente en los municipios y ciudades con patrimonio urbano declarado del ámbito nacional, conduce a la interpretación no ajustada de jurisdicciones y obligaciones con el procedimiento y expedición de permisos de intervención, responsabilidades de mantenimiento y cierres financieros de revitalización de inmuebles y sectores dentro de los perímetros aprobados como área afectada y zona de influencia. En este aspecto, la delimitación urge de un instrumento metodológico de mayor actualización y proximidad a los retos contemporáneos en la integración del centro histórico a las dinámicas de la ciudad reciente. Si bien, hay una brecha de cerca de 20 años en la operatividad de los avances, aceptación e introducción de las inquietudes contemporáneas con relación a la implementación en la protección del patrimonio urbano, se puede interpretar en dos sentidos, la búsqueda de serenidad y el aprendizaje de otras experiencias aportan a la toma de decisión más ajustada a los desafíos locales, definiendo de esta forma un camino propio o, justificando el desfase, o la poca claridad en el horizonte genera

un reconocimiento tardío o una ignorancia aceptada, que refuerza la aceptación de un modo propio de asumir sus estrategias, en casos, el estado actual puede proceder de ambas vertientes. En la próxima década, el PEMP mantendrá la misma trayectoria, debido a que el patrón dominante adquiere un carácter determinista y los cursos de acción alternativos ya no son factibles y están destinados a replicar el camino (Sydow et al., 2009, p. 694). El interés por instaurar el PEMP para los Paisajes Culturales como alternativa para gestionar estos territorios y establecer un diálogo de mayor escala con el fin de ampliar la dinámica conceptual que involucra a los centros históricos declarados, reafirmar la estructura para nuevas ideas relevantes para las exigencias contemporáneas de la protección del patrimonio urbano. Los retos del futuro en el ámbito urbano requieren de los planes de protección para las áreas históricas una sintonía y reconocimiento de las problemáticas de la ciudad contemporánea. Se plantean cinco aspectos generales por el Banco Mundial, a saber:

Gestión gobierno y finanzas

Pobreza urbana

Las ciudades y el crecimiento económico

Urbanismo, ordenación del territorio y vivienda

Entorno urbano, cambio climático y gestión de desastres naturales

Como instrumento de protección, conservación y gestión el PEMP está llamado a reconocer las necesidades del patrimonio local validando su enfoque en la escala de aplicación principal. El retorno a los retos de la escala municipal, a las limitaciones propias de sus realidades en cuanto a la implementación de proyectos simultáneos, actualización y armonización de instrumentos afectados por la condición política de los ciudadanos, las sensibles condiciones económicas y financieras proyectadas en su ámbito de planeación.

## **6.5 Respuesta a las preguntas de investigación**

A continuación, se da respuesta específica a las preguntas de investigación:

### **a. Las políticas públicas urbanas, orientadoras del desarrollo urbano en las áreas históricas**

Las políticas públicas urbanas para las áreas históricas son resultado de medidas que procuran su conservación y al mismo tiempo pretenden la dinamización social, económica y funcional dentro del conjunto urbano, mediante un plan de acciones. La política pública para los centros históricos varía y corresponde con la dinámica de la ciudad, esto quiere decir, que las necesidades de la ciudad o municipio determinan la legislación para el área patrimonial. El desarrollo urbano interviene en las áreas históricas, particularmente en los vacíos en los sectores indeterminados por la norma urbana de conservación y en la identificación minuciosa de oportunidades para el desarrollo residencial, que busca ofrecer dentro sus atributos inmobiliarios las bondades de localización, paisaje y servicios de los centros históricos.

**b. La declaratoria de áreas históricas, herramienta para la protección del patrimonio urbano en Colombia**

La declaratoria es la primera medida de protección del patrimonio urbano en Colombia. Sin embargo, las exigencias de la normatividad y exigencias implícitas de su aplicación revalúan la efectividad de este mecanismo. Dentro de las exigencias implícitas derivadas de la declaratoria se encuentran las económicas, la supervigilancia y control urbano para la conservación, también las dinamizadoras de los aspectos sociales, económicos y funcionales en el marco de la participación ciudadana.

**c. La declaratoria, agente de especulación sobre el valor del suelo, atracción turística, inmobiliaria y económica, y generador de cambios urbanos en la cotidianidad social de las comunidades habituales del municipio reconocido como BIC**

La declaratoria es un agente de inducción de la especulación sobre el valor del suelo en los centros históricos y el contexto regional donde se localiza, pero depende de varios factores, entre ellos el reconocimiento y aplicación de la normativa de conservación, y la apropiación social. La localización del centro histórico en el contexto regional y su cercanía a ciudades intermedias o la capital departamental, es un factor determinante por el fenómeno de la doble residencia e interacción entre estas entidades territoriales. Otro factor relevante, son las dinámicas culturales propias y las creadas como atractivos para el fomento del turismo, además de los atributos naturales y bondades geográficas como el clima. Finalmente, el tiempo, inversiones del gobierno en condiciones de accesibilidad y la “valorización de la exclusividad social”, termina por afectar a las comunidades raizales, acelerando su desarraigo, cambio de actividad económica y pérdida de la identidad autóctona, como los casos de Villa de Leyva y Barichara, debido a que sus efectos de especulación llegan incluso a poblaciones cercanas.

**d. Influencia de las políticas públicas en su propósito de conservación y protección del patrimonio urbano y arquitectónico en Colombia**

La ganancia para los centros históricos, en las últimas dos décadas es el reconocimiento de la conservación dentro de la legislación para el ordenamiento territorial. Sin embargo, la aplicación de las mediades de conservación por parte del ordenamiento territorial no es efectiva, debido a su visión e implementación desde dos visiones: a) la disponibilidad de suelo para desarrollo inmobiliarios dentro de la centralidad económica y funcional de la ciudad o municipio y, b) las exigencias económicas, de control urbano y la participación social de las comunidades como agentes cooperadores en la protección del patrimonio local. De fondo, subyace la preminencia de dos ideas: el sentido de la conservación y la interpretación del desarrollo, que aún son interpretadas como opuestas desde la formulación

de los instrumentos de protección del patrimonio urbano. Las políticas públicas hoy se constituyen en un factor determinante para la protección del patrimonio urbano desde las medidas restrictivas y las consecuencias legales de su no reconocimiento, aún quedan vestigios de la idea de defensa del patrimonio histórico. Queda pendiente la pedagogía de la protección del patrimonio urbano y arquitectónico a la sensibilidad presente, pero sin documentar de la participación ciudadana.

#### **e. Efectos principales de la aplicación o ausencia de la delimitación de las áreas patrimoniales**

La delimitación de las áreas patrimoniales declaradas BIC del ámbito nacional ha sido ejercida por la autoridad local o la autoridad nacional, en muy pocos casos por ambos. En el primer caso, es casi una constante que la delimitación del área de conservación es menor que la considerada por la autoridad nacional. Otra característica frecuente es la manipulación de la delimitación según la autoridad local y por medio de mecanismos legales diversos, entre ellos: los acuerdos municipales, la interpretación de una legislación reciente o simplemente los compromisos políticos locales. En el segundo caso, cuando la delimitación ejercida por la autoridad nacional, el área afectada es mucho mayor, el reconocimiento es integral es el sentido arquitectónico y urbano. A pesar de ello, los efectos principales de la aplicación son: a) deterioro del área de conservación por las limitaciones a la intervención de las edificaciones; b) fenómeno de alta valorización de los inmuebles y cambio del perfil social de residentes y actividades económicas, sociales y culturales; c) rápido deterioro de los bordes de la delimitación, lo que genera presión para la asignación del tratamiento de renovación urbana.

#### **f. Relación entre la planeación urbana y la conservación de las áreas patrimoniales declaradas**

En Colombia, los orígenes de la planeación urbana y de la conservación son completamente opuestos: la primera procede de las doctrinas económicas, mientras la segunda procede de los ideales del patrimonio histórico y los monumentos de la nación. Ambas convergen a finales de los años 80 del siglo XX en la primera legislación sobre los planes de desarrollo municipal. Concuerdan en la necesidad de asignar un tratamiento para conservar edificaciones y zonas de interés histórico, arquitectónico y ambiental. Sin embargo, para el año 1989, momento de surgimiento de la Ley 9 por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, se había comprobado y padecido las limitaciones de la Ley de defensa y conservación del patrimonio histórico de 1959. Era muy tarde para coincidir en una necesidad postergada por 30 años de espera para armonizar la protección del patrimonio urbano desde la cultura y la planeación urbana.

#### **g. Conservación de las características urbanas y arquitectónicas**



Aunque la investigación no abarca centros históricos no declarados BIC, se puede concluir que la conservación depende en buena medida de las limitaciones impuestas a la intervención de edificaciones por parte de sus propietarios y que reposa en la norma de los planes, pero la preservación del conjunto urbano obedece a las acciones colectivas de la sociedad, a partir del reconocimiento del valor del conjunto y el poder de la acción mediante la participación ciudadana. Aunque esta última, es una definición dentro del conjunto normativo de la protección del patrimonio urbano su función en la conservación aún no es visible completamente.

#### **h. Las fases y secuencias del encadenamiento de las políticas públicas de protección del patrimonio urbano como expresión del sentido de la época y de personajes promotores con su surgimiento**

Cada una de las fases de la política y el patrimonio urbano: fase de preformación (1954-1980), formación (1980-1997) y bloqueo (1997-2019) según el MGDТ, han sido desarrolladas por generaciones de profesionales, técnicos e instituciones que han creído en las ideas y movimientos de su época. La singularidad del encadenamiento de las políticas de protección y la misma conformación del patrimonio urbano en Colombia, surgen de manera simultánea y las decisiones no expresan la necesidad de la época, ni el sentido, debido a que las respuestas a las exigencias de la problemática de los centros históricos BIC del ámbito nacional, se dan 20 años después del surgimiento del reto. Si se han inspirado en los fenómenos ideológicos o fundamentales de su momento, pero lo han aplicado las generaciones siguientes sobre la base de las acciones institucionales iniciales, realizadas por la generación precedente.

#### **i. Procedencia de las ideas y referentes subyacentes en los instrumentos de planeación y gestión del patrimonio urbano**

Son diversas las fuentes de procedencia de las ideas y referentes subyacentes de los instrumentos de planeación y gestión del patrimonio urbano, a saber: a) reglamentaciones, convenciones y propuesta internacionales, aceptadas de manera integral o parcial o simplemente aceptadas e integradas a las medidas del momento; b) legislaciones específicas como la española, las ideas del plan urbano para el centro histórico italiano y; c) la orientación e influencia de los programas impuestos por la Unesco y PNUD para Latinoamérica durante los años 70, 80 y 90 del siglo XX. Estas influencias se han integrado a la idea persistente y presente en la dependencia de la trayectoria de la política de protección del patrimonio urbano, procedente de la séptima conferencia panamericana de 1933, aceptada y expresada en la Ley 163 de 1959, ratificado en el Decreto 2358 de 2019: la defensa del patrimonio.

**Figura 6.04 Centro Histórico del municipio de Jericó (Antioquia)**



Fuente: Imagen tomada de [vivelapp.com](https://vivelapp.com)

## BIBLIOGRAFÍA

Abbattista, María (2013). Las políticas de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo en el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (1973-1974) y los modelos latinoamericanos contemporáneos, IV jornadas de historia política.

Disponible en <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34439548/Abbattista>

Alfonso, Oscar (2009). De la convención del poder a la convención del comercio. En Martínez D., María (Comp.), Encuestas de Culturas y Patrimonio Cultural. Desafíos y perspectivas. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.

Almandoz, Arturo (2006). Urban planning and historiography in Latin America. En: Progress in Planning, 65, (pp. 81–123).

Álvarez, Ignasi (1993). Diversidad cultural y conflicto nacional. Talasa ediciones. Madrid

Álvarez, Alfonso (1995). Conservación del patrimonio, restauración arquitectónica y recomposición elitista de los espacios urbanos históricos. Lección de Apertura del Curso Académico 1995-1996. Universidad de Valladolid. España.

Álvarez, Alfonso (2006). El mito del centro histórico. Lupus Inquisitor, México.

Álvarez, Luis (2011). La categoría de paisaje cultural. Revista de Antropología Iberoamericana, Volumen 6, Numero 1, enero-abril, (pp. 57-80)

Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/623/62321332004.pdf>

Álvarez, Alfonso (2017). Prólogo, En Valverde Díaz, Francisco (Autos), Puebla, Calle 11 sur de borde urbano a eje de centralidad (pp. 7-14). Lupus Inquisitor, México.

Álvarez, Tannia (2021). Transformaciones Socioespaciales provocadas por el turismo en Villa de Leyva, Colombia. Tunja: Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia.

Aprile-Gnisset, Jacques (1991). La ciudad colombiana. Prehispánica, de conquista e indiana. Colección textos universitarios. Biblioteca Banco Popular. Bogotá.

Aprile-Gnisset, Jacques (1992). La ciudad colombiana. Siglo XIX y XX. Colección textos universitarios. Biblioteca Banco Popular. Bogotá.

Arango, Silvia (2012). Ciudad y Arquitectura. Seis generaciones que construyeron América Latina. Fondo de Cultura Económica- México, Colombia-. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México.



Arthur, Brian (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. *The Economic Journal*. Vol. 99, N° 394. UK: Royal Economic Society (pp. 111-131). Disponible en <https://doi.org/10.2307/2234208>

Arthur, Brian (1994). *Increasing Returns and Path Dependence in the Economy*, Ann Arbor: University of Michigan Press.

Appelbaum, Nancy (2017). *Dibujar la nación. La comisión corográfica en la Colombia del Siglo XIX*. Universidad de los Andes, Fondo de Cultura Económica.

Ávila, Noelia (2015). Patrimonialización del espacio urbano y producción de centros históricos. En Niglio, Olimpia (Ed.) *Ciudades históricas entre Oriente y Occidente* (pp. 95-105), Italia, edizione scintifiche.

Bandarin, Francesco y Van Oers, Ron (2012). *El paisaje urbano histórico. La gestión del patrimonio en un siglo urbano*. Abada Editores, Madrid.

Barbosa, Juanita (2001). Políticas para el patrimonio inmueble en Colombia. En Calvo, Ana (Comp.), *Políticas y gestión para la sostenibilidad del patrimonio urbano*, Centro Editorial Javeriano. Bogotá.

Barragán Díaz, A. M. y Mendoza Molina, M. (2005). Políticas culturales y participación en Colombia. *Revista Colombiana de Sociología*, (24), (pp.163-183). Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/5515/551556299006.pdf>

Bassanini, A., y Dosi, G. (2001). Cuando y cómo el azar y la voluntad humana pueden torcer los brazos de Clio: un ensayo sobre la dependencia del camino en un mundo de irreversibilidades. In: R. Garud & P. Karnøe (Eds.), *Dependencia y creación de caminos* (pp. 41-68). Lawrence Erlbaum Associates.

Becker, M. (2004). Rutinas organizativas: una revisión de la literatura. *Industrial y Corporativo Cambio*, 13: 643-678.

Beuf, Alice y Martínez, María (2015). Colombia. Centralidades históricas. En Beuf, A y Martínez, M. (Coord.), *Colombia. Centralidades históricas en transformación* (pp. 11-26). Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Beuf, Alice (2017). El concepto de territorio: de las ambigüedades semánticas a las tensiones sociales y políticas, En Beuf, Alice, y Rincón, Patricia (Eds), *Ordenar los territorios. Perspectivas críticas desde América Latina* (pp. 3-22). Universidad de Los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Instituto Francés de Estudios Andinos, Bogotá.

Brewer-Carias, Allan (2008). El modelo urbano de la ciudad colonial y su implementación en Hispanoamérica. Derecho urbanístico No. 1. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.

Borrero, Alfonso (1969). Preservación y conservación de monumentos arquitectónicos y de conjuntos históricos y artísticos. Apuntes: Revista De Estudios Sobre Patrimonio Cultural, (3). Disponible en <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/9224>

Borrero, Oscar (2015). Los precios del suelo en los centros urbanos históricos de ciudades pequeñas e intermedias, En Beuf, Alice y Martínez, María (Coord.), Colombia Centralidades históricas en transformación (pp. 243-276), Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Bogotá D.C.

Boscán de Pacheco, Gisela (2018). Programa SIRCHAL: De una Red de Conocimiento a una Red Interorganizacional (Actores, Acción y @Red\_Visión), Compendium, 2018, 21(40), ISSN: 1317-6099 / 2477-9725. Disponible en <https://revistas.uclave.org/index.php/Compendium/article/view/1660/873>

Bushnell, David (1996). Colombia una nación a pesar de sí misma. Nuestra historia desde los tiempos precolombinos hasta hoy. Crítica. Bogotá.

Brue, S., (2000). The evolution of economic Thought, Orlando, The Dryden Press.

Caballero, Gonzalo (2004). Instituciones e historia económica: enfoques y teorías institucionales. Revista de Economía Institucional, vol. 6, núm. 10, primer semestre, 2004, (pp. 135-157). Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia

Capel, Horacio (2014). El patrimonio: la construcción del pasado y del futuro. Ediciones del Serbal. Barcelona.

Capoccia, G. y Kelemen, R. D. (2007). The study of critical junctures theory, narrative, and counterfactuals in historical institutionalism theory. Washington DC: University of Oxford

Capron, Guénola y Monnet, Jérôme (2003). Una retórica progresista para un urbanismo conservador: la protección de los centros históricos en América Latina, En Ramírez, Patricia (Coord.), Espacio público y reconstrucción de ciudadanía (pp. 105-136), Miguel Angel Porrúa/FLACSO, México D.F. Disponible en <https://shs.hal.science/halshs-00807186/>

Caraballo, Ciro (2000). Centros históricos y turismo en América Latina. Una polémica de fin de siglo. En Carrión, Fernando (Ed.), Desarrollo cultural y gestión en centros históricos. Quito.

Carta de Quito (1977). Conclusiones sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas. Unesco- PNUD, Quito, Ecuador.

Carta de Venecia (1964). Carta Internacional para la Conservación y restauración de los Monumentos y Sitios.

Disponible en [https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/venice\\_sp.pdf](https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/venice_sp.pdf)

Carrasco-Campos, Ángel y Saperas Lapiedra, Enric (2012). La institucionalización del concepto de industrias culturales en el proceso de debate sobre políticas culturales en la Unesco y el Consejo de Europa (1970- 1982). AdComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, 2011, n.º 2, (pp. 143-158).

Disponible en <https://doi.org/10.6035/33>

Carrión, Fernando (2000). Desarrollo cultural y gestión en centros históricos, Flacso Ecuador. Quito.

Carrión, Fernando (2000). Centro histórico: relación social, globalización y mitos. En Carrión, F., (Ed.) Desarrollo cultural y gestión en centros históricos (pp. 179-192), Flacso Ecuador

Carrión, Fernando (2000). Medio siglo en camino al tercer mundo: los centros históricos en América Latina. En Carrión, Fernando (Ed.) Centros históricos de América Latina y el Caribe (pp. 29-93). Flacso Ecuador.

Carrión, Fernando (2000). Lugares o flujos centrales: los centros históricos urbanos. Cepal, División de medio ambiente y asentamiento humanos, Santiago de Chile.

Carrión, Fernando (2004). La Dimensión Temática de los Centros Históricos en América Latina. En M, Martinez (Ed.) *El Centro Histórico: Objeto de Estudio e Intervención*. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá

Carrión, Fernando (2010). El laberinto de las centralidades históricas en América Latina. El centro histórico como objeto de deseo. Quito, Ministerio de Cultura de Ecuador.

Castillo, José (2022). Los límites del patrimonio cultural. Principios para transitar por el desorden patrimonial. España, Grandes temas, Cátedra

Castedo, Leopoldo (1972). Proyecto para la protección y difusión del patrimonio cultural Iberoamericano. Informe final. Circulación restringida. PNUD.

Centeno, Miguel (2014). *Sangre y deuda. Ciudades, Estado y construcción de nación en América Latina*. Instituto de Estudios Urbanos. Bogotá: Editorial UNAL.

Cervellati, Pier, y Scannavini, R. (1976). Bolonia, Política y metodología de restauración de centros históricos. Colección: materiales de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona.

Ciardini, F. y Falini, P. (1978). Los centros históricos. Política urbanística y programas de actuación. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

Ciardini, F. y Falini, P., (1983). Los centros históricos. Política urbanística y programa de actuación. Colección arquitectura perspectivas. Gustavo Gili, Barcelona.

Colcultura (1990). Informe de gestión 1989-1990, Liliana Bonilla Otoy, Bogotá

Colcultura (1990). Colcultura. Un espacio para la cultura. Informe de gestión 1989-1990. Bogotá.

Colcultura (1992). Plan Nacional de Cultura 1992-1994. Colombia: El camino de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI. Santafé de Bogotá.

Colcultura (1992). Informe de gestión, Instituto Colombiano de Cultura –Colcultura- Plan Nacional de Cultura 1992. Santafé de Bogotá. El armadillo, editores Ltda.

Cortés, Rodrigo y Del Castillo, Juan (1995). Manual de reglamentación. Poblados de interés patrimonial. Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, Bogotá D.C.

Cortés, Rodrigo (1996). El sentido del análisis de formas y tipos en los sectores antiguos de algunas ciudades colombianas. En Colcultura (Ed.) Patrimonio urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana, (pp. 93, 110), Bogotá D.C.

Cortés, Mónica (1998). Conflictos urbanos en el siglo XVIII: El caso Socorro- San Gil, En Cuervo, Mauricio (Ed.), La investigación regional y urbana en Colombia. Desarrollo y territorio 1993-1997, Tomo 2, (pp.107-118), Asociación colombiana de investigadores urbano-regionales, Carlos Valencia Editores, Bogotá.

Colón, A y Del Vecchio, E. (1999). Ordenamiento territorial, autonomía y regionalización en Colombia. Fondo de publicaciones de la Universidad del Atlántico.

Collier, R. y Collier, D., (1991). Dar forma a la arena política: Coyunturas críticas, movimiento obrero y dinámica del régimen en América Latina. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press.

Cortés, Rodrigo (2007). Del urbanismo a la planeación en Bogotá (1900-1990). Esquema inicial y materiales para pensar la trama de un relato. Bitácora Urbano Territorial, 11(1), (pp.160–207). Disponible en <https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18636>

Corradine, Alberto (1969). Santa Cruz de Mompo. Estudio Histórico Crítico sobre su arquitectura Colonial. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Corradine, Alberto (1980). Notas sobre restauración de monumentos, Facultad de Artes, Instituto de investigaciones estéticas, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Corradine, Alberto (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana. Volumen- Colonia 1538-1850. Biblioteca de Cundinamarca. Escala Ltda. Bogotá.

Corradine, Alberto (2012): Presentación de un panorama. En Niglia, Olimpia y Hernández, Rubén (Eds.), Experiencias y métodos de restauración en Colombia, Volumen 2. (pp. 13-28), Roma, Aracne Editrice.

Chateloin, Felicia (2008). El centro histórico ¿Concepto o criterio en desarrollo? *Arquitectura y Urbanismo*, XXIX (2-3),10-23. [fecha de Consulta 8 de enero de 2022]. ISSN: 0258-591X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376839855003>

Choay, Françoise (1994). Alegoría del patrimonio. Gustavo Gili, Barcelona

David, Paul (1985). Clío y la economía de QWERTY. *American Economic Review* 75: 332–337. Disponible en [http://www.revistaasturianadeeconomia.org/raepdf/37/23\\_32David.pdf](http://www.revistaasturianadeeconomia.org/raepdf/37/23_32David.pdf)

De Gracia, Francisco (1992). Construir en lo construido. La arquitectura como modificación. Editorial Nerea. Madrid.

De Remes, Alain (2001). Elección racional, cultura y estructura: tres enfoques para el análisis político, Instituto de Investigaciones Sociales. *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 63, núm. 1, enero-marzo, 2001, México, D. F., pp. 41-70. ISSN: 0188-2503/01/06301-02

Desvallées, André (1995). Aparición y desarrollo de la palabra patrimonio. *Musées et Collections Publiques de France*, No. 208, pp. 6-29

Duque, Germán (2012). Salamina patrimonial y emblemática. Disponible en <https://godues.wordpress.com/2012/08/20/salamina-patrimonial-y-emblematica/>

Eggertsson, T. (1990). *Economic Behavior and Institutions: Principles of Neoinstitutional Economics*, New York, Cambridge University Press.

Escovar, Alberto y Cárdenas, Miguel (2018). Historia del patrimonio en Colombia, Aguilar, Bogotá D.C.

Eslava, Adolfo; Orozco, Hernán y Valencia, Germán (2011). Los nuevos institucionalismos como riqueza metodológica para el estudio de la política. *Revista Opera*, (11),5-28. [fecha de Consulta 8 de enero de 2021]. ISSN: 1657-8651. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67529095002>



Ezquiaga, José (1994). El espacio del proyecto urbano. En Colcultura (Ed.) La ciudad como bien cultural. Memorias del seminario (pp. 165-196). Santafé de Bogotá.

Farfán, Guillermo (2007). El nuevo institucionalismo histórico y las políticas sociales. Polis 2007, vol. 3, núm. 1, pp. 87-124.

Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/polis/v3n1/v3n1a5.pdf>

Fedesarrollo (1972). Turismo. Colecciones Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social, (pp. 126,141).

Disponible en <https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/2846>

Feilden, Bernard y Jokilehto, Jukka (1998). Manual para el manejo de los sitios del patrimonio Cultural Mundial. ICCROM. Disponible en

[https://www.iccrom.org/sites/default/files/201802/2003\\_feilden\\_manual\\_manejo\\_spa\\_85882\\_li ght.pdf](https://www.iccrom.org/sites/default/files/201802/2003_feilden_manual_manejo_spa_85882_li ght.pdf)

Feldman, Martha (2000). Organizational Routines as a Source of Continuous Change. Organization Science 11(6):611-629.

Disponible en <https://doi.org/10.1287/orsc.11.6.611.12529>

Feldman, Martha y Pentland, Brian (2003). Reconceptualizing Organizational Routines as a Source of Flexibility and Change. *Administrative Science Quarterly*, 48(1), 94–118. Disponible en <https://doi.org/10.2307/3556620>

Feldman, Martha, y Orlikowski, Wanda (2011). Theorizing Practice and Practicing Theory, [Vol. 22, No. 5, New Perspectives in Organization Science \(September-October 2011\)](#), pp. 1240-1253. Disponible en <https://www.jstor.org/stable/41303116>

Fernández, Víctor (2005). De la protección a la legitimación social del patrimonio urbano en España, Scripta Nova, Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2005, vol. IX, núm. 194 (41).

Disponible en <https://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-41.htm>

Ferrán, Carlos (1998). Restauración, protección y renovación de centros históricos. Criterios y propuestas, En Castillo, Miguel (Ed.), Centros Históricos conservación del patrimonio. (pp. 45-62), Fundación Argentaria, Madrid.

Fonseca Roa, O. Y. (2022). Aproximación a la política pública de protección del patrimonio urbano en Colombia en clave del path dependence (1954-2019). Urbano, 25(46), 68–77. Disponible en <https://doi.org/10.22320/07183607.2022.25.46.06>

Fonseca Roa, O. Y. (2022). Variables, secuencias y rutinas en los instrumentos de protección del patrimonio urbano en Colombia, a partir de la aplicación del modelo de la dependencia de

la trayectoria (MDT). *urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 15, e20220078. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.015.e20220078>

Fontaine, Guillaume (2015). Los aportes del neo-institucionalismo al análisis de políticas públicas. *Revista Andina de Estudios Políticos*, Vol. V, N° 2, pp. 80- 98.

Fontur (2019). Una Nueva Historia: Plan estratégico de desarrollo turístico 2016- 2025. El Socorro, Santander: MinCIT-Fontur. Ministerio de Comercio de Industria y Turismo (Min-CIT) y Fondo Nacional de Turismo (Fontur).  
Disponible en <https://www.scribd.com/document/468905451/PEDT-SOCORRO-pdf>

Fontur (2021). Guía Red turística de pueblos patrimonio de Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fondo Nacional de Turismo (Fontur), Bogotá.

Garavito, Leonardo (2006). El origen del patrimonio como política pública en Colombia y su relevancia para la integración de los vínculos entre cultura y naturaleza. *Revista Opera*, 6(6), 169-197. Disponible en <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/1437>

Garcés, Maria (2009). Una lectura de la Ley 1185 de 2008 desde el ordenamiento territorial y la gestión del patrimonio cultural. En Martínez D., y Maria E. (Coord.) *Encuesta de Culturas y Patrimonio Cultural. Desafíos y perspectivas*. (pp. 59-80), Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

García, Gabriel (1967). *Cien años de soledad*. Editorial Oveja Negra.

García, Raimundo (2013). *Del institucionalismo histórico al neo institucionalismo en la docencia e investigación en el caso mexicano*. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México

Giraldo, Fabio (1999). *Ciudad y crisis. ¿Hacia un nuevo paradigma?* Tercer Mundo Editores. Bogotá.

Gómez, Leonor (2010). *Informe sobre el estado de los centros históricos en Colombia*. Bogotá: Coordinadora Grupo de protección. Dirección de Patrimonio. Ministerio de Cultura.

González, I. (2000). *Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas*. Madrid, Cátedra.

Guerrero A. y Martínez, A. (1996). *La Provincia de Guanentá. Orígenes de sus Poblamientos Urbanos*. Bucaramanga: Ediciones UIS. Colección de Historia Regional. Escuela de Historia UIS.

Gutiérrez, Ramón (1992). *Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica*. Ediciones Cátedra. Madrid.

Gutiérrez, Rodrigo (2009). La conservación y el patrimonio en América Latina: algunos temas de debate - DOI 10.5216/vis.v7i1.18126. *Visualidades*, 7(1).  
Disponible en <https://doi.org/10.5216/vis.v7i1.18126>

Guzmán, Diana (2016). La enseñanza de la lectura como profilaxis: el Decreto Orgánico de Instrucción Pública: entre la caridad y la instrucción. *Historia y MEMORIA*, (13), 121-149.  
Disponible en <https://doi.org/10.19053/20275137.5202>

Hall, P. y Taylor, R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936–957. Disponible en <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x>

Hardoy, J., y Gutman, M., (1992). Impacto de la urbanización en los centros históricos de Iberoamérica: tendencias y perspectivas. Fundación Mapfre. Colección ciudades de Iberoamérica. España.

Heclo, Hugh (1974). Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income Maintenance. Yale University Press, *Politics & Society*, 6(1), 119–119.  
Disponible en <https://doi.org/10.1177/003232927600600110>

Hernández, Eulalia (2021). Travesías por la historia urbana en Colombia, En Mejía, Germán & Martínez, Gerardo (Coord.), *Después de la heroica fase de explotación. La historiografía urbana en América Latina* (pp. 221-272), Universidad de Guanajuato, Pontifica Universidad Javeriana, Flacso Ecuador. Bogotá.

Hoyos, Juan (2016). El esquema de APP para infraestructura social y de vivienda en edificios patrimoniales (pp. 44-55), *Recicla de edificaciones en contextos patrimoniales*, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá.

IGAC (2003). *Gestión del suelo urbano. En el marco del ordenamiento territorial. Aproximación metodológica*. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Imprenta nacional, Bogotá.

Ikenberry, John (1994). *History's Heavy Hand: Institutions and the Politics of the State*, University of Pennsylvania.

Isaza, Juan (1999). El centro histórico de Santa Cruz de Mompox: un ejemplo singular dentro de la conservación urbano y arquitectónica en Colombia. En Martín, M (Coord.) *Cuadernos, Indicadores para la evaluación del estado de Conservación de Ciudades Históricas*. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (pp. 88-101), España.

Jaramillo, Jaime (1980). Decreto orgánico de instrucción pública, noviembre 1 de 1870. Revista Colombiana de Educación. 5: 79-121. Disponible en <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/5024/4110>

Kauffer, E. (2002). Las políticas públicas: algunos apuntes generales. En Ecofronteras, 16, México: Colegio de la Frontera Sur.

Kauffman, S. (1993). Orígenes del orden: auto organización y selección en evolución. Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford.

Lemaire, J. (1997). Stratégies d'internationalisation. París: Dunod.

Levi, Margaret (1997). A Model, a Method, and a Map: Rational Choice in Comparative and Historical Analysis. En Mark I. Lichbach y Alan S. Zuckerman (Eds.), Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, (pp.19-419 Cambridge: Cambridge University Press.

Lombardi, Giorgio (1994). Los instrumentos de análisis para el proyecto urbano de los centros históricos. En Colcultura (Ed.) La ciudad como bien cultural. Memorias del seminario (pp. 155-164), Santafé de Bogotá.

Lombardi, Giorgio (1995). Estrategias de conservación para los centros históricos en América Latina y el Caribe, En Colcultura (Ed.) Reunión de directores de patrimonio de América Latina y el caribe, (pp. 27-30), Santafé de Bogotá.

López L., Liliana; Valverde, Carmen; Fernández, Anna y Figueroa, María E. (2015). Pueblos mágicos. Una visión Interdisciplinaria. Volumen 1. Ciudad de México: Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana.

Lowndes, V., y Roberts, M. (2013). Why institutions matter: the new institutionalism in political science. London: Palgrave MacMillan.

Lucena, Manuel (2016). Extremo Occidente. Ensayos sobre la ciudad hispana en la primera globalización. Instituto de Estudios Urbanos. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Llull, Josué (2005). Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. *Arte, Individuo y Sociedad*, 17, 177 - 206.  
Disponible en <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0505110177A>

Mahoney, J. (2000). Path Dependence in historical sociology. *Theory and Society*, 29(4),507-548 Disponible en <http://www.jstor.org/stable/3108585>

Mahoney, J. y Schensul, D. (2006) Historical context and path dependence. En R. E. Goodin y C. Tilli (eds.), *The Oxford handbook of contextual political analysis*. Oxford, NY: Oxford University Press

Mahoney, J. y Thelen, K. (2010). A theory of gradual institutional change. En J. Mahoney y K. Thelen (eds.), *Explaining institutional change: Ambiguity, agency, and power* (pp. 1-37). Cambridge-Nueva York: Cambridge University Press

Maldonado, Carlos (2009). Complejidad de los Sistemas Sociales: Un reto para las ciencias sociales. *Cinta de moebio*, (36), 146-157.

Disponible en <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2009000300001>

Marcos, Javier (2010). El patrimonio como representación colectiva. La intangibilidad de los bienes culturales, *Gazeta de Antropología*, N° 26 /1, 2010, Artículo 19. Disponible en <http://hdl.handle.net/10481/6799>

Manco, Karina (2010). El Plan director de Le Corbusier y su influencia en el proceso de planeación en Bogotá (1949-1969). Colección Punto Aparte. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

March, James y Olsen, Johan (1989). Elaborating the “New institutionalism. En Rhodes R., Binder S., Rockman B., (Eds.) *The Oxford Handbook of political* (pp. 3-21) *The Oxford Handbook of Political Institutions*. Oxford.

Disponible en <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548460.003.0001>

March, James y Olsen, Johan (1989). *Rediscovering Institutions*. Free Press. NY.

March, James (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. *Organization Science* 2(1):71-87. Disponible en <https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71>

Mejía, Juan (1999). Legislación sobre el patrimonio cultural en Colombia. *Patrimonio Cultural y Derecho*. Bogotá. Fundación AENA, Asociación Hispania Nostra.

Mejía, Juan (2004). ¿Derechos sin Estado? Tres momentos de la Institucionalidad cultural en América Latina en *Pensar Iberoamérica: Revista de Cultura* ISSN-e 1683-3783, N°. 7, 2004 Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1033102>

Mejía, Juan (2009). Apuntes sobre las políticas culturales en América Latina, 1987-2009, publicado en *Pensamiento iberoamericano*, ISSN 0212-0208, N°. 4, 2009 (Ejemplar dedicado a: El poder de la diversidad cultural) (pp. 105-129).

Mejía, Juan (2010). Política para la gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural. En Rey, G. (Comp.) Compendio de políticas culturales (pp. 225-248). Ministerio de Cultura, Bogotá.

Mejía, Germán (2013). La aventura urbana de América Latina. Serie Recorridos 3. Fundación Mapfre. Madrid: Editorial Taurus.

Mejía, Germán y Martínez, Gerardo (2021). Después de la heroica fase de explotación. La historiografía urbana en América Latina. Universidad de Guanajuato, Pontificia Universidad Javeriana, Flacso Ecuador. Bogotá.

Melé, Patrice (1995). La construcción jurídica de los centros históricos: patrimonio y políticas urbanas en México. Revista Mexicana de Sociología, 57(1), 183–206. Disponible en <https://doi.org/10.2307/3540959>

Melé, Patrice (2006). La producción del patrimonio urbano. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. México, D.F., Publicaciones de La Casa Chata.

Melé, Patrice (2010). Producción de los centros y formas de acción pública, En Coulomb, René (Coord), México: centralidades históricas y proyectos de ciudad (pp. 203-242), Olacchi, Quito.

Melo, Jorge (2020). Colombia: una historia mínima. Una mirada integral al país. Crítica. Bogotá.

Mena, Úrsula y Herrera, Ana (1994). Políticas Culturales en Colombia. Discursos estatales y prácticas institucionales. M y H Editoras. Bogotá.

Meneses, Ulpiano (2012). O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas. En: Fórum nacional do patrimônio cultural, I, v. 1, Brasília, DF: Anais... Brasília, DF: IPHAN, 2012. Disponible en: <http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3306>

Mendoza, Camilo (2001). 50 años de arquitectura: apuntes para la historia de la Facultad de Arquitectura y Diseño- 1951-2000. Bogotá CEJA.

Morcillo, Pedro (2009). Derecho urbanístico colombiano. Historia, normativa y gestión. Editorial Temis, Bogotá.

Molano, Olga (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona, Revista Opera, ISSN-e 1657-8651, N° 7, 2007, págs. 69-84, Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4020258>

Murad, Rocío (2003). Estudio sobre la distribución espacial de la población en Colombia. Santiago de Chile: CEPAL.

Mutis, Alvaro (1964). Los trabajos perdidos. Arango Editores.

Mutual, Sylvio (1982). Patrimonio Cultural: Selección de legislaciones en América Latina y el Caribe, Proyecto regional de patrimonio Cultural, Lima.

Mutual, Sylvio (2000). Ciudades y centros históricos de América Latina y el Caribe: 50 años de trayectoria (1950-1999). En Carrión, F (Ed.) Centros Históricos de América Latina y el Caribe (113-138). Flacso, Ecuador, Quito.

Niño, Carlos (1996). Principales momentos de la formación de las ciudades en Colombia. En Colcultura (Ed.) Patrimonio urbano en Colombia (pp.31-44), Bogotá.

Niño, Carlos (2015). Territorio chamánico. Una mirada desde la arquitectura a la manera indígena de construir y ocupar su entorno. Instituto Colombiano de Antropología e historia. Bogotá.

Normas de Quito (1967). Informe final de la reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y artístico. Disponible en <http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/cartas/1967-quito.pdf>

North, D., (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, New York, Cambridge University Press.

North, D. (2001). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica

Organización Mundial del Turismo (2019). Tourism definitions. Disponible en <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858>

Orellana, L. (1998). El programa SIRCHAL de seminario-talleres sobre la revitalización de centros históricos de ciudades de América Latina y el Caribe. En Carrión, F. (1998). Centros históricos de América Latina y el Caribe (pp. 23-27). Ecuador: BID, UNESCO, Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia y FLACSO. Disponible en <http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/11257-opac>

Ospina, Natalia (2015). ¿A quién pertenece el centro histórico? Análisis sobre el proceso de reforma urbana del centro histórico de Santa Marta, En Beuf, A., & Martínez, María E., (Coords.) Colombia Centralidades históricas en transformación (pp. 279-308), Instituto de Patrimonio Cultural, Centralidades 8, Bogotá.

Ostrom, Elinor (1990). *Governing the commons, The evolution of institutions for collective action*. University of Cambridge, United Kingdom



Paláu, Fernando (2012). Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano: historia, realizaciones y archivo planimétrico y documental. *Boletín Cultural y Bibliográfico*, 46(83), 33–59. Disponible en [https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin\\_cultural/article/view/13](https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/13)

Parsons, Wayne (2007). Políticas públicas. Una introducción a la teoría y práctica del análisis de políticas públicas. Flanco México.

Patiño, Mariana (2010). La protección del patrimonio urbano y arquitectónico en Colombia, En Hernández, Rubén & Niglio, Olimpia (Eds.), *Experiencias y métodos de la restauración en Colombia* (pp. 59-82), Aracne Editrice, Roma.

Pérez, L. (2018). El patrimonio monumental bicentenario y la ruta turística “libertadora”. *La Tercera Orilla*, (21), 107-115. Disponible en <https://doi.org/10.29375/21457190.3484>

Pérez L. (2019). Efectos de los planes decenales de cultura en el fomento y proyección de las comunidades municipales. El caso de Piedecuesta (Colombia). *Reflexión Política* 21(42), doi: 10.29375/01240781.3488

Peters, Guy (1999). *Institutional Theory in Political Science. The ‘New Institutionalism’*, Londres-New York, Pinter Publisher

Peters, G. (2003). *El nuevo institucionalismo: la teoría institucional en ciencia política*. Madrid: Gedisa

Pierson, Paul y Skocpol, Theda (2008). El institucionalismo histórico en la ciencia política contemporánea. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 17(1), 7-38. Disponible en [http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1688-499X2008000100001](http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-499X2008000100001)

Pierson, P., (2004). *Politics in time: history, institutions, and social analysis*. Princeton, NJ, Princeton University Press

Pierson, Paul (2017). Rendimientos crecientes, trayectorias dependientes y el estudio de la política. *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública* Departamento de Gestión Pública y Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno Volumen VI, número 2, julio-diciembre 2017 (pp. 11-50).  
Disponible en <http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/223>

Pinilla, Juan (2009). Conservación y preservación del patrimonio inmueble: una lectura de la Ley 1185 de 2008 desde el derecho y la gestión urbanísticos. En Martínez D., María (Comp.), *Encuestas de Culturas y Patrimonio Cultural. Desafíos y perspectivas*. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.



Pizano, Olga (1995). La Convención del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe en Reunión de directores de patrimonio de América Latina y el Caribe. Memorias de la Reunión, mayo 1995, Cartagena de Indias, (pp. 43-45).

Prats, Llorenç (1997). Antropología y patrimonio. Editorial Ariel S.A, Barcelona.

Ramírez, John (2011). La planeación urbana en Colombia: años sesenta-ochenta. Discursos, consultores y comunidades académicas. Revista de Estudios Sociales, (40), 115-125. Disponible en [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0123-885X2011000300011](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2011000300011)

Ramírez, Sebastián y Saldarriaga, Carolina (2013). Usos y abusos del paisaje cultural cafetero: una reflexión desde el concepto de patrimonio. Jangwa Pana, 12(1), 115–128. Disponible en <https://doi.org/10.21676/16574923.776>

Rey, Germán (2010). Las políticas culturales en Colombia: la progresiva transformación de sus comprensiones. En Rey, G. (Comp.), Compendio de políticas culturales (pp. 23-48). Ministerio de Cultura, Bogotá.

Reis, Paulo (1997). El Institucionalismo Norteamericano: orígenes y presente. Revista de Economía Institucional, Vol.9, No. 16, primer semestre /2007, (pp. 315-325). Disponible en <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/94>

Riegl, Aloïs (1987). El culto moderno a los monumentos. La balsa de medusa. Madrid.

Rojas, Eduardo (2001). Financiando la conservación del patrimonio urbano en América Latina y el Caribe: la acción del Banco Interamericano de Desarrollo, En Carrión, Fernando (Ed.), Centros históricos de América Latina y el Caribe (pp.15-22), Flacso, Ecuador

Rosas, Ana (2005). Las disputas por el patrimonio. Transformaciones analíticas y contextuales de la problemática patrimonial en México. En García C., Néstor (Coord.), La Antropología urbana en México (pp. 60-95), Fondo de Cultura Económica, Consejo Nacional para la Cultura de las Artes, y Universidad Autónoma Metropolitana,

Rhodes, R., (1997). *Understanding governance: policy networks, governance, reflexivity and accountability* (Public Policy & Management), Philadelphia, US. Open University.

Roth, André-Nöel (2002). Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación. Ediciones Aurora, Bogotá D.C.

Rutherford, M. (1994). Institutions in Economics, Cambridge, Cambridge University Press.

Saavedra, Saúl (2016). Análisis del desarrollo institucional desde el enfoque institucional histórico. Papel Político, 21(1), 81–100.

Disponible en <https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo21-1.adie>

Sachs, J. (2021). Las edades de la globalización. Geografía, tecnología e instituciones. Editorial Planeta.

Salazar, J., Cortés, R., y Niño, M. (1989). Política cultural para los centros históricos y el patrimonio inmueble, Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, Bogotá

Salazar J., Perfetti V., Niño C., Cortés R., Salcedo J., Samper L., Carrasco L. y Ochoa B., (1991). Manual de reglamentación de poblados, Colcultura, Santafé de Bogotá.

Salazar, José (1994). Los programas de conservación de los centros históricos en Colombia. En Unesco- Oficina Regional de Cultura para America Latina y el Caribe (Ed.) Rehabilitación integral en áreas o sitios históricos latinoamericanos. Una visión retrospectiva (pp. 19- 26) Quito. Ecuador.

Salazar, José (1996). El centro histórico y la ciudad colombiana. En Colcultura (Ed.) Patrimonio urbano en Colombia (pp. 13-20) Bogotá.

Salazar, José (2000). Políticas para el patrimonio cultural inmueble. En Ministerio de Cultura (ed.) políticas para el patrimonio inmueble en Colombia. Seminario de consulta nacional (pp. 75-98). Santafé de Bogotá.

Salcedo, Jaime (1996). Urbanismo hispanoamericano siglos XVI, XVII y XVIII. El modelo urbano aplicado a la América española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico. Centro Editorial Javeriano –Ceja-. Bogotá D.C.

Saldarriaga, Alberto (1996). Tipologías arquitectónicas de interés patrimonial. En Colcultura (Ed.) Patrimonio urbano en Colombia (pp.77-92), Bogotá.

Saldarriaga, Alberto (2002). La arquitectura como experiencia. Espacio, cuerpo y sensibilidad, Villegas Editores, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C

Sanabria, Alberto (sf) Legislación cultural, principios y definiciones. Disponible en <http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/5.%20Lectura%204%20-%20Legislaci%C3%B3n%20cultural.pdf>

Sánchez De Dios, Manuel. (2004). Estudio comparado de Path – dependence del Estado de bienestar en los casos de USA, Suecia, y España”. En: Revista de estudios políticos, abril – junio 2004, p. 95 – 128.

Disponible en <https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/view/45936>

Sewell, William (1996). Three Temporalities: Toward an Eventful Sociology. En Terrance J. McDonald (Ed.) *The History Turn in the Human Sciences*, (pp.245-280). University of Michigan Press.

Sewell, William (2005). Toward an eventful sociology. En Sewell, William (Ed.) *Logics of History. Social Theory and Social Transformation* (pp. 81-123) Chicago: University of Chicago Press.

Sociedad Colombiana de Arquitectos (2000). *Cien años de arquitectura en Colombia*. XVII Bienal de Arquitectura, Bogotá.

Soltan, Uslander y Haugler (1998). *Institutions and Social Order*, The University of Michigan Press.

Sorensen, André (2015). Tomar en serio la dependencia del camino: una agenda de investigación institucionalista histórica en la planificación de la historia. *Perspectivas de planificación*, 30 (1), pp. 17-38. Disponible en [Taking path dependence seriously: an historical institutionalist research agenda in planning history: Planning Perspectives: Vol 30, No 1 \(tandfonline.com\)](https://doi.org/10.1080/01909325.2015.1055555)

Sorensen, André (2017). Nueva Institucionalidad y teoría de la planificación. En Gunder, M; Madanipour, A; Watson, V. (Eds.) *The Routledge Handbook of Planning Theory*, Londres.

Sorensen, André (2018). Historia y teoría de la planificación: instituciones, comparación y procesos temporales. En C. Hein (Ed), *Routledge Handbook of Planning History*. Nueva York.

Stinchcombe, Arthur (1968). *Construyendo teorías sociales*. Universidad de Chicago. Chicago.

Surel, Yves (2006). Relaciones entre la política y las políticas públicas. En Franco, Rolando; Lanzaro, Jorge (Coords.) *Políticas y políticas públicas en los procesos de reforma de América Latina*, Cepal, Flacso México, Buenos Aires.

Sydow, J., Schreyögg, G., y Koch, J. (2009). Organizational path dependence: Opening the black box. *Academy of Management Review*, 34(4), 689–709 Disponible en <https://doi.org/10.5465/amr.34.4.zok689>

Sydow, Jörg (2020). Dependencia del camino y dinámica de rutina en: D'Adderio, L., Dittrich, K., Feldman, MS, Pentland, BT, Rerup, C., & Seidl, D. (Eds.): *Manual de Cambridge de dinámica de rutina*. Cambridge: Cambridge University Press.

Téllez, Germán (1982). La arquitectura y el urbanismo en la época actual 1935 a 1979. En Colcultura (ed.) *Manual de Historia de Colombia, Volumen 2, Siglo XIX*, Bogotá.

Téllez, Germán (1995). Teoría y realidad del patrimonio arquitectónico y urbano. En Colcultura (Ed.) Reunión de directores de patrimonio de América Latina y el caribe (pp. 24-37), Santafé de Bogotá.

Téllez, Germán (1998). Crítica e imagen, Revista Escala, Bogotá

Téllez, Germán (2011). Restauración en Colombia, En Molina, Rubén y Niglio, Olimpia (Eds.) Experiencias y métodos de la restauración en Colombia (pp.11-16), Aracne editrice, Roma.

Thelen, Kathleen (1999). Historical institutionalism in comparative politics. Annual Review of Political Science, 2(1), 369-404. Disponible en <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.369>

Thelen, Kathleen (2004). Cómo evolucionan las instituciones: la economía política de las habilidades en Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón. Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York

Tilly, Charles (2006). Why and How History Matters. En Goodin, Robert E. y Tilly, Charles (ed.). The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis (pp. 417-437). Oxford: Oxford University Press,

Toboso, Fernando (1997). ¿En qué se diferencian los enfoques de análisis de la vieja y la nueva economía institucional?, Hacienda Pública Española 143, pp. 175-192. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=38782>

Tojo, José (2000). La protección del patrimonio urbano, instrumentos normativos. Ediciones Akal, Madrid.

Trigo, Luis (2015). El debate sobre la noción de Path Dependence y su conciliación en un modelo dinámico de análisis institucional, Revista Chilena de derecho y ciencia política, enero-abril 2015, Issn 0718-9389 vol. 6, n° 1, (pp. 81-107). Disponible en <https://doi.org/10.7770/rchdcp-V6N1-art853>

Unesco (1972). Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Disponible en <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>

Unesco (2005). Gestión del patrimonio mundial cultural. Manual de referencia. Disponible en <file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/activity-827-3.pdf>

Unesco (2008). Directrices Prácticas para aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Disponible en <https://whc.unesco.org/archive/opguide08-es.pdf>

Van Hoof, R. (1994). Los instrumentos de análisis para el proyecto urbano de los centros históricos. En Colcultura (Ed.) La ciudad como bien cultural. Memorias del seminario (pp. 132-151), Santafé de Bogotá.

Velásquez, Raúl (2009). Hacia una nueva definición del concepto “política pública” en Desafíos, Bogotá (Colombia), (20): 149-187, semestre I de 2009. Disponible en: <file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/433-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1513-1-10-20100319.pdf>

Vergara, Rafael (2020). Path dependence en el desarrollo histórico-institucional, político-administrativo y sectorial en Colombia (1960-2020), Justicia, 25(37), 85-98. Disponible en <https://doi.org/10.17081/just.25.37.3673>

Viviescas, Fernando (1994). El problema cultural de la ciudad colombiana y la arquitectura. En Colcultura (Ed.) La ciudad como bien culturales, Memorias del Seminario, Colcultura, Santafé de Bogotá.

Viviescas, Fernando (1999). La ciudad colombiana o del urbanismo en busca del pensamiento (notas para una investigación necesaria). Revista de Estudios Sociales, no. 4 (1999): 71-79. Disponible en <https://doi.org/10.7440/res4.1999.05>

Wong, D., Parodi, C. y Monsalve, M. (2014). La mediana empresa familiar peruana y la creación de ventajas competitivas. En M. Monsalve (Ed.), Grupos económicos y mediana empresa familiar en América Latina (pp. 177-199) Lima: Universidad del Pacífico

Yory, Carlos (2002). Del Monumento a la ciudad. El fin de la idea de monumento en el nuevo orden espaciotemporal de la ciudad. Centro Editorial Javeriano. Bogotá D.C.

Zambrano P., Fabio. (2013): Desarrollo urbano en Colombia. Una perspectiva histórica. Disponible en: <http://www.institutodeestudiosurbanos.info/centrodocumentacion/nuevas-adq/item/142-desarrollo-urbano-colombia-perspectiva-historica>

Zambrano P, Fabio (2017). Etapas y sentido del ordenamiento territorial colombiano, En Beuf, Alice; Rincón, P. (Ed.), Ordenar los territorios, perspectivas críticas desde América Latina (pp.85-100) Universidad de Los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Instituto Francés de Estudios Andinos, Bogotá.

Zambrano, Fabio (2022). Cómo se arma un país. Geografía y poblamiento en Colombia. Instituto de Estudios Urbanos, Universidad nacional de Colombia. Bogotá D.C.

### **Documentos oficiales o institucionales**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (1990): La política cultural. Nueva orientación de una política cultural para Colombia. Colcultura. Bogotá: Autor.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (1997): Planeación urbanística en ciudades colombianas. Documentos Unidad de planeación regional y urbana. Bogotá: Autor

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2002): CONPES 3162: Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2011-2010 “Hacia una ciudadanía democrática cultural”. Bogotá: Autor.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2003): CONPES 3255: Lineamientos de política para la distribución del 25% de los recursos territoriales provenientes del incremento del 4% del IVA a la telefonía móvil. Bogotá: Autor.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2005): Visión Colombia Segundo centenario: 2019. Propuesta para Discusión. Bogotá: Autor.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2007): CONPES 3305: Lineamientos para optimizar la Política de Desarrollo Urbano. Bogotá: Autor.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2010): CONPES 3658: Lineamientos de Política para la Recuperación de los Centros Históricos de Colombia. Bogotá: Autor.

MINISTERIO DE CULTURA (2000): Política para el Patrimonio Cultural Inmueble en Colombia. Seminario de Consulta Nacional. Unesco. Bogotá: Autor.

MINISTERIO DE CULTURA (2001): Plan Nacional de Cultura 2001-2010. Hacia una ciudadanía democrática cultural. Un plan colectivo desde y para un país plural. Consulta Ciudadana. Consejo Nacional de Cultura. Bogotá: Autor

MINISTERIO DE CULTURA (2005): Manual para inventarios de Bienes Culturales Muebles. Bogotá: Autor.

MINISTERIO DE CULTURA (2005): Manual para inventarios de Bienes Culturales Inmuebles. Bogotá: Autor.

MINISTERIO DE CULTURA (2010): Compendio de políticas culturales. Bogotá: Autor.

MINISTERIO DE CULTURA (2011): Formulación en implementación de planes especiales de manejo y protección. Bienes inmuebles de interés cultural. República de Colombia. Bogotá.

MINISTERIO DE CULTURA (2013): Legislación y normas generales para la gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural en Colombia. Ley 1185 y su reglamentación. República de Colombia. Bogotá.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (1969, 10 de junio): Decreto 994 de 1969, Por el cual se adoptan los estatutos del Instituto Colombiano de Cultura.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (1978, 03 de agosto): Decreto 1654 de 1978, Por el cual se declara Monumento Nacional el sector antiguo del Municipio de Barichara (Santander).

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (1980, 02 de abril): Decreto 776 de 1980, Por el cual se declara Monumento Nacional el centro histórico de la ciudad de Ambalema (Tolima).

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (1985, 24 de abril): Decreto 1132 de 1985, Por el cual se declara Monumento Nacional el conjunto de la Plaza Principal del Municipio El Jardín.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (1989, 06 de junio): Decreto 1164 de 1989, Por el cual se declara el año de 1989, Año Nacional de la Cultura.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (1989, 29 de agosto): Decreto 1940 de 1989, Por el cual se declara Monumento Nacional un sector del Municipio de Turmequé.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (1990, 17 de abril): Decreto 800 de 1990, por el cual se aprueba el Acuerdo número 0008 del 7 de febrero de 1990, expedido por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Cultura “Colcultura”, mediante el cual se establece su estructura orgánica y se determinan las funciones de sus dependencias.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (1993, 31 de diciembre): Decreto 1940 de 1993, Por el cual se reestructura el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (1996, 02 de diciembre): Decreto 2178 de 1996, Por el cual se declara Monumento Nacional el conjunto de inmuebles de arquitectura republicana localizados en el centro de Manizales, Caldas y se delimita su área de influencia.

MINISTERIO DE TRANSPORTE (1996): Memorias seminario internacional. Patrimonio, ¿Qué Patrimonio? Instituto Nacional de Vías. Subdirección de Monumentos Nacionales. Santafé de Bogotá.

## **Legislación y jurisprudencia**

ALCALDIA MAYOR DE SANTA DE BOGOTÁ D.C. (1997, diciembre 22): Decreto 1192 de 1997, por el cual se reglamentan los permisos para el uso del espacio público para efectos del establecimiento de redes de servicios públicos y de telecomunicaciones en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1913, 5 de noviembre): Ley 4 de 1913, Sobre régimen político y municipal

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1918, 20 de noviembre): Ley 48 de 1918, Sobre fomento de las Bellas Artes.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1936, 22 de enero): Ley 14 de 1936, Por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a adherir al Tratado sobre la protección de muebles de valor histórico.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1936, 20 de febrero): Ley 36 de 1936, Por la cual se aprueba el Pacto Roerich para la protección de las Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1940, 06 de septiembre): Ley 05 de 1940, Sobre monumentos nacionales y realización de algunas obras en la ciudad de Cartagena.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1946, 17 de diciembre): Decreto 3641 de 1954, Por el cual se declara a Villa de Leiva Monumento nacional y se dictan otras disposiciones.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1946, 30 de diciembre): Ley 107 de 1946, Por la cual se reforman varios artículos de la ley 5ª de 1940, sobre monumentos nacionales y realización de algunas obras en la ciudad de Cartagena.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1947, 15 de diciembre): Ley 88 de 1947, Sobre fomento del desarrollo urbano del municipio y se dictan otras disposiciones.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1948, 06 de octubre): Ley 18 de 1948, Por la cual se decreta un auxilio, se da una autorización y se dictan otras disposiciones.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1949, 09 de agosto): Ley 5 de 1949, Por la cual se ordenan unas exenciones.



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1959, 30 de diciembre): Ley 163 de 1959, por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1963, 12 de febrero): Decreto 264 de 1963, por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1967, 28 de diciembre): Decreto 264 de 1967, por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la remuneración y régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se provee al fortalecimiento de la administración fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las partidas presupuestales destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisión Constitucional Permanente en las Cámaras Legislativas.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1968, 28 de octubre): Decreto 2700 de 1968, por el cual se crea la Corporación Nacional de Turismo de Colombia.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1968, 26 de diciembre): Decreto 3154 de 1968, Por el cual se crean el Instituto Colombiano de Cultura y el Consejo Nacional de Cultura.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1968, 26 de diciembre): Ley 60 de 1968, Por la cual se establecen estímulos a la industria del turismo y se dictan otras disposiciones

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1971, 03 de diciembre): Ley 47 de 1971, Por la cual se crea el Fondo de Inmuebles Nacionales y se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1974, 18 de diciembre): Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1978, 15 de diciembre): Ley 61 de 1978, Ley Orgánica del Desarrollo Urbano.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1980, 02 de junio): Decreto 1306 de 1980, Por el cual se reglamenta el artículo 3º de la Ley 61 de 1978 sobre planes integrales de desarrollo, y el artículo 9º de la ley 30 de 1969.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1983, 15 de diciembre): Ley 45 de 1983, por medio de la cual se aprueba la "Convención para la Protección del Patrimonio Mundial,

Cultural y Natural", hecho en París el 23 de noviembre de 1972 y se autoriza al Gobierno Nacional para adherir al mismo.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1986, 25 de abril): Decreto 1333 de 1986, Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1986, 30 de diciembre): Ley 80 de 1986, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero”, hecho en la ciudad de Panamá, el 30 de enero de 1975.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1989, 11 de enero): Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1991): Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1993, 27 de agosto): Ley 80 de 1993, "Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1993, 17 de diciembre): Decreto 2535 de 1993, por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1994, 15 de julio): Ley 152 de 1994, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1997, 24 de julio): Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Autor.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1997, 07 de agosto): Ley 397 de 1997, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. Bogotá: Autor.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1998, 22 de enero): Ley 151 de 1998, Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la compensación en tratamiento de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo. Bogotá: Autor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1998, 14 de julio): Decreto 1420 de 1998, por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley

388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos. Bogotá: Autor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2002, 29 de junio): Decreto 1337 de 2002, Por el cual se reglamenta la Ley 388 de 1997 y el Decreto-ley 151 de 1998, en relación con la aplicación de compensaciones en tratamientos de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo. Bogotá: Autor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2003, 2 de Julio): Ley 814 de 2003, Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia. Bogotá: Autor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2003, 30 de septiembre): Decreto 2755 de 2003, Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario. Bogotá: Autor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2004, 26 de Julio): Ley 902 de 2004, Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Autor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2008, 12 de marzo): Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia. Bogotá: Autor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2008, 23 de abril): Decreto 1313 de 2008, por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 4° de la Ley 1185 de 2008, relativo al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Bogotá: Autor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2008, 5 de septiembre): Decreto 3322 de 2008, por medio del cual se modifica el artículo 3° del Decreto 1313 de 2008. Bogotá: Autor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2009, 10 de marzo): Decreto 763 de 2009, por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. Bogotá: Autor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2009, 6 de agosto): Decreto 2941 de 2009, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial. Bogotá: Autor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2015, 26 de mayo): Decreto 1080 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2015, 26 de mayo): Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2019, 26 de diciembre): Decreto 2358 de 2019 por la cual se modifica y adiciona al Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2020, 14 de septiembre): Decreto 1232 de 2020, Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial.

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2016): Sentencia C-192/ 16. derechos adquiridos en materia de uso de suelos/principios de prevalencia del interés general sobre el particular y las funciones social y ecológica de la propiedad-desde la perspectiva constitucional, no puede hablarse de derechos en materia de usos del suelo frente a las regulaciones que se hacen en el plan de ordenamiento territorial de los municipios y distritos. Bogotá D.C

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1954, 28 de septiembre): Ley 7 de 1946, Sobre monumentos nacionales y realización de algunas obras en la ciudad de Cartagena.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1971, 27 de enero): Decreto 102 de 1971, Por el cual se declara zona histórica un sector de Villa del Rosario de Cúcuta.

## LISTA DE FIGURAS

### Capítulo I

Figura 01 Centro histórico de la ciudad de Santa Marta (Bolívar).....	8
Figura 02 Centro histórico del municipio de Jericó (Antioquia).....	27
Figura 03 Áreas declaradas del patrimonio urbano en Colombia .....	28
Figura 04 Centro histórico del municipio de Monguí (Boyacá).....	35
Figura 05 Definiciones de política pública	
Figura 07 Modelo general de la dependencia de la trayectoria .....	52
Figura 08 Modelo general de la dependencia de la trayectoria para la línea de análisis de la política pública del patrimonio cultural, la planeación y ordenamiento territorial .....	58
Figura 09 Modelo general de la dependencia de la trayectoria para la línea de análisis de los instrumentos de protección del patrimonio urbano .....	59
Figura 10 Centro histórico del municipio de Valledupar (Cesar) .....	67
Figura 09 Centro histórico del municipio de Santa Cruz de Lorica (Cordoba).....	70
Figura 11 Centro histórico del municipio de Guadalajara de Buga (Valle) .....	73

### Capítulo II

Figura 2.01 Municipio El Jardín (Antioquia) .....	84
Figura 2.02 Centro histórico de San Juan de Girón (Santander) .....	91
Figura 2.03 Logotipo Instituto Colombiano de Cultura – Colcultura- .....	105
Figura 2.04 Estructura Interna de Colcultura según el Acuerdo 002 de 1969 (agosto 22) .....	108
Figura 2.05 Estructura Administrativa del Instituto Colombiano de Cultura Colcultura (1974-1990) .....	110
Figura 2.06 Estructura Administrativa del Instituto Colombiano de Cultura- Colcultura- 1990-1997 .....	112
Figura 2.07 Logotipo de Colcultura en su fase final .....	114
Figura 2.08 Centro histórico del Municipio de Manizales (Caldas).....	115
Figura 2.09 Localización del patrimonio urbano BIC del ámbito nacional en Colombia.....	125
Figura 2.10 Primera generación de declaratorias:1954- 1963 .....	127
Figura 2.11 Segunda generación de declaratorias:1971- 1996.....	132
Figura 2.12 Centro Histórico del Municipio de Turmequé (Boyacá).....	134
Figura 2.13 Tercera generación de declaratorias: 1999- 2018 .....	135
Figura 2.14 Periodo sin declaratorias 2006-2017 .....	137
Figura 2.15 Centro histórico del Municipio de Popayán (Cauca) .....	141
Figura 2.16 Municipio de Marinilla (Antioquia).....	144

### Capítulo III

Figura 3.01 Centro histórico del Municipios de Iza (Boyacá) .....	153
Figura 3.02 Centro histórico del Municipio Santafé de Antioquia (Antioquia) .....	168
Figura 3.03 Centro histórico del Municipio de Ambalema (Tolima) .....	177
Figura 3.04 Estructura y contenido del Manual de Reglamentación de los Sectores Urbanos Antiguos .....	183
Figura 3.05 Subprograma Protección de Sectores Antiguos y los cuatro proyectos estratégicos .....	191
Figura 3.06 Centro histórico del Municipio de El Carmen (Norte de Santander) .....	195
Figura 3.07 Ubicación y listado de los sitios del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe .....	187
Figura 3.08 Centro histórico del Municipio de Ciénaga (Magdalena) .....	196

### Capítulo IV

Figura 4.1 Panorámica del centro histórico de la ciudad de San Juan de Pasto (Nariño) .....	209
Figura 4.2 Panorámica del centro histórico del Municipio de Santa Cruz de Mompox (Bolívar) .....	213
Figura 4.3 Imagen representativa de la Red turística de pueblos patrimonio de Colombia .....	217
Figura 4.4 Panorámica de Barichara – Santander- “El pueblo más lindo de Colombia” .....	218
Figura 4.5 Panorámica la Playa de Belén – Santander- “Un pesebre viviente” .....	220
Figura 4.6 Panorámica Centro Histórico de Honda –Tolima - “La ciudad de los puentes” .....	223
Figura 4.7 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y ocupación hotelera en el año 2019 .....	224
Figura 4.8 Panorámica Centro Histórico de la ciudad de Tunja (Boyacá) .....	230
Figura 4.9 Fase 1 Análisis y diagnóstico .....	246
Figura 4.10 Fase 2 Propuesta Integral .....	247
Figura 4.11 Panorámica Centro Histórico del Municipio de Cartago (Valle) .....	266
Figura 4.12 Panorámica Centro Histórico del Municipio de Pore (Casanare) .....	275

### Capítulo V

Figura 5.1 Centro Histórico de la ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar) .....	285
Figura 5.2 Centro Histórico del municipio de San Miguel de Guaduas (Cundinamarca) .....	293
Figura 50. Relación de niveles de intervención, tratamiento urbanísticos y sentido .....	309
Figura 5.3 Panorámica del Centro Histórico del municipio de San Sebastián de Mariquita (Tolima) .....	309
Figura 5.4 Panorámica del Centro Histórico de la ciudad de Bogotá D.C. ....	321
Figura 5.5 Panorámica del Centro Histórico del Municipio de San Gil (Santander) .....	326

Figura 5.6 Panorama general y contexto de los instrumentos de Protección del Patrimonio Urbano .....	333
Figura 5.7 Disposición de los instrumentos de protección de los municipios de la Secuencia 1 en el Modelo de la Dependencia de la Trayectoria .....	339
Figura 5.8 Disposición de los instrumentos de protección de los municipios de la Secuencia 2 en el Modelo de la Dependencia de la Trayectoria .....	342
Figura 5.9 Disposición de los instrumentos de protección de los municipios de la Secuencia 3 en el Modelo de la Dependencia de la Trayectoria .....	335
Figura 5.10 Disposición de los instrumentos de protección de los municipios de la Secuencia 4 en el Modelo de la Dependencia de la Trayectoria .....	339
Figura 5.11 Localización de Villa de Leyva y Barichara en el Departamento de Boyacá y Santander .....	341
Figura 5.12 Plano de Villa de Leyva en 1954 y Zonificación propuesta por la Universidad de Los Andes en el año 1968.....	343
Figura 5.13 Inventario y propuesta de delimitación del centro histórico de Villa de Leyva 1985 .....	344
Figura 5.14 Plano delimitación y clasificación tipológica del centro histórico de Villa de Leyva y sus sectores el año 1985, realizado por el Arquitecto Jaime Salcedo.....	345
Figura 5.15 Plano delimitación del centro histórico de Villa de Leyva y sus sectores 1989, Acuerdo 007 de 1996.....	346
Figura 5.16 Plano delimitación del centro histórico de Villa de Leyva según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 2004. ....	347
Figura 5.17. Panorámica del centro histórico del municipio de Villa de Leyva (Boyacá).....	348
Figura 5.18 Secuencia de subdivisión predial del área urbana y rural de Villa de Leyva: 1954-2018.....	349
Figura 5.20 Panorámica del área suburbana de Villa de Leyva (Boyacá).....	351
Figura 5.21 Distribución área, propietarios y avalúos, sectores urbano y rural .....	352
Figura 5.22 Panorámica del centro histórico del municipio de Barichara (Santander) .....	353
Figura 5.23 Crecimiento urbano del municipio de Barichara .....	354
Figura 5.24 Delimitación de Barichara Acuerdo 002 de 1996 y delimitación Resolución 688 de 2015 (PEMP) .....	355
Figura 5.25 Partidos de las villas de Socorro y San Gil, 1776. ....	356
Figura 5.26. Aerofotografía del municipio de Socorro en 1963.....	358
Figura 5.27 Zonificación propuesta por el proyecto de Código de urbanismo de 1982.....	363
Figura 5.28 Delimitación del Sector Histórico en el municipio de Socorro en 1982.....	365
Figura 5.29 Delimitación del Centro histórico en el municipio de Socorro. EOT 2003 .....	371
Figura 5.30 Panorámica del centro histórico del municipio de El Socorro (Santander) .....	372
Figura 5.31 El Paisaje Cultural Cafetero dentro del Eje Cafetero.....	373
Figura 5.32 Delimitación del Paisaje Cultural Cafetero.....	375
Figura 5.33 Municipio de Salamina en el contexto del paisaje cultural cafetero.....	378

Figura 5.34 Secuencia de generaciones propuestas para la Arquitectura y Urbanismo de América Latina Moderna .....	422
Figura 5.35 Secuencia de generaciones relacionadas con la protección del patrimonio urbano en Colombia .....	423
Figura 5.36 Centro Histórico del Municipio de Aguadas (Caldas) .....	390

## CAPITULO VI

Figura 6.01 Elementos para la interpretación de la política pública de protección y el patrimonio urbano .....	395
Figura 6.02 Fases de la política y protección del patrimonio urbano en el Modelo de la Dependencia de la Trayectoria .....	399
Figura 6.03 Generaciones, rutinas y secuencias en el surgimiento de la protección y el patrimonio urbano en Colombia .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Figura 6.04 Centro Histórico del municipio de Jericó (Antioquia) .....	415

## LISTA DE FUENTE DE FIGURAS

### Capítulo I

Figura 01 Imagen tomada de <a href="https://www.olx.com.co/item/fotografia-aerea-video-con-drone-santa-marta-servicio-de-filmacion-con-dron-alquiler-iid-1115990285">https://www.olx.com.co/item/fotografia-aerea-video-con-drone-santa-marta-servicio-de-filmacion-con-dron-alquiler-iid-1115990285</a>
Figura 02 Imagen tomada de <a href="https://medellinguru.com/jerico-antioquia/">https://medellinguru.com/jerico-antioquia/</a>
Figura 03 Elaboración propia
Figura 04 Imagen tomada de <a href="https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-g7937889-d12813264-Reviews-Hotel_Villa_de_Mongui-Mongui_Boyaca_Department.html">https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-g7937889-d12813264-Reviews-Hotel_Villa_de_Mongui-Mongui_Boyaca_Department.html</a>
Figura 05 Elaboración propia con base a (Kauffer, 2002; Roth, 2002; Surel, 2006)
Figura 06 Elaborado por Sydow, Schreyögg, Koch (2009, p. 692)
Figura 07 Elaboración propia con base al modelo de Sydow, Schreyögg, Koch (2009)
Figura 08 Elaboración propia con base al modelo de Sydow, Schreyögg, Koch (2009)
Figura 09 Imagen tomada de <a href="https://elpilon.com.co/el-centro-historico-y-su-estado-al-cierre-del-2019/">https://elpilon.com.co/el-centro-historico-y-su-estado-al-cierre-del-2019/</a>
Figura 10 Imagen tomada de <a href="https://larazon.co/cordoba/via-en-mal-estado-no-impidio-que-a-lorica-arribaran-2-000-visitantes-en-el-puente-feriado/">https://larazon.co/cordoba/via-en-mal-estado-no-impidio-que-a-lorica-arribaran-2-000-visitantes-en-el-puente-feriado/</a>
Figura 11 Imagen tomada de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Buga#/media/Archivo:Buga_desde_el_faro.JPG">https://es.wikipedia.org/wiki/Buga#/media/Archivo:Buga_desde_el_faro.JPG</a>

### Capítulo II

Figura 2.01 Imagen tomada de <a href="https://www.qhubomedellin.com/premium/liberan-caficultor-secuestrado-hace-2-semanas-en-el-suroeste-de-antioquia/">https://www.qhubomedellin.com/premium/liberan-caficultor-secuestrado-hace-2-semanas-en-el-suroeste-de-antioquia/</a>
--



Figura 2.02 Imagen tomada de <https://qhubobucaramanga.com/asi-paso/24909-por-segundo-ano-consecutivo-no-se-realizaran-las-tradicionales-ferias-de-giron>

Figura 2.03 Imagen tomada de [https://logos.fandom.com/es/wiki/Ministerio\\_de\\_Cultura\\_\(Colombia\)](https://logos.fandom.com/es/wiki/Ministerio_de_Cultura_(Colombia))

Figura 2.04 Elaboración propia con base en el Acuerdo 002 de 1969 (agosto 22) y (Mena, Herrera, 1994; p.119)

Figura 2.05 Elaboración propia con base a (Salazar et al., 1989).

Figura 2.06 Elaboración propia con base a (Salazar et al., 1989).

Figura 2.07 Imagen tomada de [https://logos.fandom.com/wiki/Ministerio\\_de\\_Cultura\\_de\\_Colombia](https://logos.fandom.com/wiki/Ministerio_de_Cultura_de_Colombia)

Figura 2.08 Imagen de Ricardo Quintero Londoño. Tomada de <https://www.destinocafe.com/?p=3242>

Figura 2.09 Elaboración propia

Figura 2.10 Elaboración propia

Figura 2.11 Elaboración propia

Figura 2.12 Fotograma tomado del video “Volando en dorne – Turmequé, cuna del tejo-Boyacá, Colombia” Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=aAa60eY7kl0>

Figura 2.13 Elaboración propia

Figura 2.14 Elaboración propia

Figura 2.15 Imagen tomada de [http://3.bp.blogspot.com/\\_lBWPPsPQZcc/TLg1GGiJgBI/AAAAAAAAAHvg/EFSO9M4k\\_eM/s1600/1.JPG](http://3.bp.blogspot.com/_lBWPPsPQZcc/TLg1GGiJgBI/AAAAAAAAAHvg/EFSO9M4k_eM/s1600/1.JPG)

Figura 2.16 Imagen tomada de [https://www.wikiwand.com/es/Marinilla#Media/Archivo:2018\\_Vista\\_a%C3%A9rea\\_desde\\_el\\_noroeste\\_de\\_Marinilla\\_\(Antioquia\).jpg](https://www.wikiwand.com/es/Marinilla#Media/Archivo:2018_Vista_a%C3%A9rea_desde_el_noroeste_de_Marinilla_(Antioquia).jpg)

### Capítulo III

**Figura 3.01 Fotografía de Lucas Rodríguez. Imagen tomada de <http://izanidoverdeboyacacolombia.blogspot.com/2018/02/blog-post.html>**

Figura 3.02 Imagen tomada de [https://grancolombiatours.com/es/st\\_tour/santa-fe-de-antioquia-heritage-day-tour/](https://grancolombiatours.com/es/st_tour/santa-fe-de-antioquia-heritage-day-tour/)

Figura 3.03 Imagen tomada de <https://newspressservice.com/ambalema-potencia-en-el-pasado/>

Figura 3.04 Elaboración propia con base en información de Resoluciones, acuerdos y (Salazar et al., 1991)

Figura 3.05 Elaboración propia con base en (Colcultura, 1992, p. 57-60)

Figura 3.06 Imagen tomada de [https://www.rotasturisticas.com/estancia\\_vieja\\_de\\_nuestra\\_senora\\_del\\_carmen\\_el\\_carmen\\_cidade\\_ou\\_localidade\\_4930.html](https://www.rotasturisticas.com/estancia_vieja_de_nuestra_senora_del_carmen_el_carmen_cidade_ou_localidade_4930.html)

Figura 3.07 Elaboración propia con base en información de (Unesco,2021)

Figura 3.08 Imagen tomada de <https://pasionporsantamarta.com/estrategia-de-regionalizacion-de-infotep-cienaga-ya-es-una-realidad/>

## Capítulo IV

Figura 4.1 Imagen tomada de <https://www.semana.com/contenidos-editoriales/pasto-tambien-somos-sur/articulo/asi-funciona-la-energia-en-pasto/542456/>

Figura 4.2 Imagen tomada de <https://stock.adobe.com/es/search/images?k=%22santa+cruz+de+mompox%22>

Figura 4.3 Fontur 2021

Figura 4.4 Fuente: Guía RTPPC (Fontur, 2021)

Figura 4.5 Fuente: Imagen tomada de <https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/hostigamiento-en-puesto-de-policia-en-la-playa-norte-de-santander>

Figura 4.6 Fuente: Imagen tomada de [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Honda\\_Tolima\\_-\\_camilogaleano\(.\)com.jpg](https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Honda_Tolima_-_camilogaleano(.)com.jpg)

Figura 4.7 Elaboración propia con base a imagen tomada de [https://www.larepublica.co/economia/estos-son-los-atractivos-turisticos-que-tienen-los-17-pueblos-patrimonio-de-colombia-2813144?utm\\_medium=Social&utm\\_source=Twitter#Echobox=1547067024](https://www.larepublica.co/economia/estos-son-los-atractivos-turisticos-que-tienen-los-17-pueblos-patrimonio-de-colombia-2813144?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1547067024)

Figura 4.8 Imagen tomada de <https://elinformantenoticias.com/la-alcaldia-de-tunja-y-la-uptyc-realizan-estudio-de-vulnerabilidad-del-centro-historico-de-la-ciudad/>

Figura 4.9 Elaboración propia con base en el artículo 11 de la Ley 388 de 1997

Figura 4.10 Elaboración propia con base en el artículo 11 de la Ley 388 de 1997

Figura 4.11 Imagen toma de [https://www.ciudadregion.com/regiones/valle-del-cauca/cartago/cartago-ascendera-a-segunda-categoria-en-2024-un-logro-para-la-capital-del-norte-del-valle#google\\_vignette](https://www.ciudadregion.com/regiones/valle-del-cauca/cartago/cartago-ascendera-a-segunda-categoria-en-2024-un-logro-para-la-capital-del-norte-del-valle#google_vignette)

Figura 4.12 Imagen tomada de [https://twitter.com/colombia\\_hist/status/925926438083186688](https://twitter.com/colombia_hist/status/925926438083186688)

## Capítulo V

Figura 5.1 Imagen tomada de <https://www.ddailymag.com/viajes/ciudad-amurallada-de-cartagena-4-lugares-que-no-te-puedes-perder/>

Figura 5.2 Imagen tomada de <https://redturisticadepueblospatrimonio.com.co/es/pueblos/villa-de-guaduas>

Figura 5.3 Imagen tomada de [https://twitter.com/colombia\\_hist/status/1395464090185654272](https://twitter.com/colombia_hist/status/1395464090185654272)

Figura 5.4 Imagen tomada de [https://es.123rf.com/photo\\_83704313\\_vista-a%C3%A9rea-de-bogot%C3%A1-colombia.html](https://es.123rf.com/photo_83704313_vista-a%C3%A9rea-de-bogot%C3%A1-colombia.html)

Figura 5.5 Imagen tomada de <https://baricharavive.com/vecindades/socorro-3>

Figura 5.6 Elaboración propia

Figura 5.7 Elaboración propia

Figura 5.8 Elaboración propia

Figura 5.9 Elaboración propia

Figura 5.10 Elaboración propia

Figura 5.11 Elaboración propia con base a imágenes de Wikipedia

Figura 5.12 Archivo Colcultura

Figura 5.13 Archivo de Colcultura

Figura 5.14 Archivo de Colcultura

Figura 5.15 Archivo de Colcultura

Figura 5.16 Tomado de (Ministerio de Cultura 2019, p. 43).

Figura 5.17 Villa de Leyva sostenible (Findeter, 2019, p. 2)

Figura 5.18 Tomado de (Álvarez, 2021, p. 192)

Figura 5.19 Tomado de <https://falconsight.com.co/products/villa-de-leyva>

Figura 5.20 Tomado del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Primero Villa de Leyva” (Alcaldía Municipal, 2016, p.28)

Figura 5.21 Imagen tomada de Vanguardia  
<https://www.vanguardia.com/santander/guanenta/marca-barichara-proyecto-para-potenciar-el-turismo-EX3257699>

Figura 5.22 Tomado de (Ministerio de Cultura, 2014)

Figura 5.23 Tomado de (Ministerio de Cultura, 2014, p.)

Figura 5.24 Archivo General de la Nación, Mapas y Planos 4, 450A.

Figura 5.25 Equipo PEMP El Socorro (2019).

Figura 5.26 Elaborado por el equipo consultor. Arq Alberto Corradine, Helga de Corradine, Elisabeth Rubiano, Néstor Gómez, Juan Manuel Sarmiento e Ignacio Guerrero. Septiembre de 1982

Figura 5.27 tomadas de a) elaborado por el equipo consultor. Arq Alberto Corradine, Helga de Corradine, Elisabeth Rubiano, Néstor Gómez, Juan Manuel Sarmiento e Ignacio Guerrero (Septiembre de 1982) y b) el equipo PEMP El Socorro (2019).

Figura 5.28 Tomado de Esquema de Ordenamiento Territorial. 2003.

Figura 5.29 Tomado del Esquema de Ordenamiento Territorial, planimetría delimitación del Centro Histórico y fotografía aérea equipo PEMP.

Figura 5.30 Imagen tomada de <https://www.dronesskyzoom.com/el-socorro-santander-drone/>

Figura 5.31 Elaboración propia con base en información de Ministerio de Cultura, Municipios y entidades oficiales

Figura 5.32 Elaboración propia con base en información de Ministerio de Cultura, Municipios y entidades oficiales

Figura 5.33 Imagen tomada de <https://pelecanus.com.co/es/17-pueblos-patrimonio-de-colombia/#Salamina>

Figura 5.34 Elaborado por (Castellanos, 2020, p.123), a partir de la propuesta de (Arango, 2012, p. 18)

Figura 5.35 Elaboración propia con base a (Salazar et al., 1989; Mutual, 2000; Escovar & Cárdenas, 2018) a partir de (Arango, 2012; Castellanos, 2020)

Figura 5.36 Imagen tomada de

<https://redturisticadepueblospatrimonio.com.co/es/pueblos/aguadas>

## **CAPITULO VI**

Figura 6.01 Elaboración propia

Figura 6.02 Elaboración propia

Figura 6.03 Imagen tomada de <https://www.vivelapp.com/que-hacer-en-jardin-antioquia/>

## **LISTA DE TABLAS**

### **Capítulo I**

Tabla 1.Enfoques de las tres ramas principales del Institucionalismo .....	43
Tabla 2.Tipos de Neo-institucionalismo.....	46
Tabla 3.Cuatro modos de cambio de política .....	51

### **Capítulo II**

Tabla 2.01 Relación de PEMP aprobados entre el año 2005 y 2017 .....	140
--	-----

### **Capítulo IV**

Tabla 4. .... Relación de reglamentaciones de centros históricos declarados en la década de 1990	
Tabla 4.01 Ministerios e Instituciones de Cultura en Iberoamérica .....	212
Tabla 4.02 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: Aguadas, Barichara, Ciénaga y El Jardín .....	226
Tabla 4.03 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: El Socorro, Guadalajara de Buga, Honda y Jericó .....	227
Tabla 4.04 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: La Playa de Belén, Villa de guaduas, Monguú y Salamina .....	228
Tabla 4.05 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: San Juan de Girón, Santa Cruz de Lorica, Santa Cruz de Mompox y Santa Fe de Antioquia .....	229
Tabla 4.06 Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: Villa de Leyva y San José de Pore.....	230

Tabla 4.7 Prueba Piloto Plan Especial de Protección.....	237
Tabla 4.8 Proceso Cronológico de los Planes Especial de Protección .....	241
Tabla 4.11 Denominaciones, estado y relaciones de los POT con la población y el patrimonio urbano .....	265
Tabla 4.12 Jerarquía de la Norma Urbanística en los Planes de Ordenamiento Territorial .....	270

## Capítulo V

Tabla 5.01 Determinación del área afectada y zona de influencia de los Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional.....	290
Tabla 5.02 Definición de Área afectada y Zona de Influencia y aplicación de a BIC Urbanos y rural del ámbito nacional. ....	292
Tabla 5.03 Criterios de Valoración para Declarar Bienes de Interés Cultural -BIC- .....	296
Tabla 5.04 Definición del nivel permitido de Intervención para el grupo arquitectónico y urbano para inmuebles y sectores patrimoniales .....	298
Tabla 5.05 Clasificación de categorías de bienes inmuebles para adopción del PEMP .....	300
Tabla 5.06 Definición del nivel permitido de Intervención para el grupo arquitectónico y urbano para inmuebles y sectores patrimoniales .....	301
Tabla 5.07 Definición del nivel permitido de Intervención para el grupo arquitectónico y urbano para inmuebles y sectores patrimoniales .....	303
Tabla 5.08 Definición de Tratamientos Urbanísticos .....	307
Tabla 5.09 Relación de niveles de intervención, tratamiento urbanísticos y sentido .....	309
Tabla 5.10 Aspectos físico-técnicos para condiciones de manejo para BIC del grupo arquitectónico y urbano para inmuebles y sectores patrimoniales .....	316
Tabla 5. 11 Base gravable, tarifa y destinación de los servicios de telefonía, datos y navegación .....	321
Tabla 5.12 Indicadores de Impacto.....	324
Tabla 5.14 Indicadores de Ejecución.....	325
Tabla 5.13 Indicadores Financieros.....	325
Tabla 5.15 Secuencias a partir de los instrumentos de Protección del Patrimonio Urbano .....	334
Tabla 5.16 Categorización de Distritos y Municipios y su correlación con el Instrumento de Ordenamiento territorial en Colombia.....	335
Tabla 5.17 Secuencia 1: Centros Históricos declarados con Plan de Ordenamiento Territorial.....	338
Tabla 5.18 Secuencia 2: Centros Históricos declarados con Reglamentación y Plan de Ordenamiento Territorial.....	341
Tabla 5.19 Secuencia 3: Centros Históricos declarados con Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Especial de Manejo y Protección .....	332
Tabla 5.20 Secuencia 4: Centros Históricos declarados con Reglamentación, Reglamentación, Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Especial de Manejo y Protección ...	336
Tabla 5.21 Desarrollo urbano de Villa de Leyva: 1954-1994-2018.....	350
Tabla 5.22 Distribución área, propietarios y avalúos, sectores urbano y rural.....	351

Tabla 5. 23 Distribución política, áreas y predios de la zona rural de Villa de Leyva.....	352
Tabla 5.24 Zonificación propuesta por el proyecto de Código de urbanismo de 1982.....	362
Tabla 5.25 Cuadro de Normas Mínimas Proyecto de Código de urbanismo de 1982 .....	364
Tabla 5.26 Cuadro de Exención de Impuestos propuesto por Código de urbanismo de 1982....	366
Tabla 5.28 Área de influencia de inmuebles en el Sector Histórico en el municipio de Socorro. EOT 2003 .....	370
Tabla 5.29 Delimitación del Paisaje Cultural Cafetero .....	376
Tabla 5.30 Atributos del Paisaje Cultural Cafetero para integrar al ordenamiento territorial.....	377

## **ANEXOS**

### **LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO EN COLOMBIA: 1954-2019**

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y EFECTOS URBANÍSTICOS EN LOS CENTROS  
HISTÓRICOS DEL ÁMBITO NACIONAL

#### **ANEXO No. I: LA CULTURA Y COLCULTURA EN LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS, PLANES DE DESARROLLO Y PLANES DE CULTURA DE LOS GOBIERNOS DE 1968 AL AÑO 1997**

Arq. Oscar Yesid Fonseca Roa  
Directora: Dra. María de los Ángeles Castrillo Romón

## 2.1 La cultura y Colcultura en las estructuras administrativas, planes de desarrollo y planes de cultura de los gobiernos de 1968 al año 1997

### 2.1.1 Las cuatro estrategias: 1970-1974

Durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), centra su acción gubernamental en el desarrollo urbano de vivienda y servicios complementarios; incrementos de las exportaciones; aumento de la productividad agraria y optimización de la distribución de la propiedad rural y finalmente la redistribución del ingreso mediante el replanteamiento de la tributación de impuestos, la generación de empleo, política del gasto público hacia la educación, la salud y recreación, siendo éstas “*las cuatro estrategias*”<sup>418</sup>, que dan nombre a su plan de desarrollo económico y social. En lo que se refiere a la cultura, menciona que el Consejo Nacional de Cultura y Colcultura son los entes administrativos y descentralizados encargados de la ejecución de la política determinada por el Ministerio de Educación. Al igual que el cultivo, estímulo y la divulgación de la cultura mediante el folclor nacional, las bibliotecas y museos (Mena & Herrera, 1994), siendo una visión primaria del manejo y comprensión del sentido de la cultura en la sociedad. En el año 1970 la población de Colombia era de 21.480.064, donde 12.548.183 habitantes son urbanos y 8.931.881 habitantes residen en áreas rurales (Murad, 2003).

El primer Plan Nacional de Política Cultural (PNC) fue divulgado en abril de 1974. Coincide con la nueva estructura administrativa de Colcultura aprobada mediante el Acuerdo 003/1974, “*en opinión del director de ese entonces, se daba un paso definitivo para que el Instituto no fuera nacional sino un Instituto de Cultura Popular*”, en ese sentido, el PNC partía de la base “*que la cultura no era solo el producto refinado de una élite sino que era en realidad, la esencia misma de la identidad nacional*”, bajo la idea de la existencia de una cultura colombiana “*suma y mestizaje de las diversas culturas nativas*” (Mena & Herrera, 1994, pp.144-145). Las principales estrategias dentro del PNC para aportar a la descentralización, fue por medio de la creación de cuatro subprogramas: a) Programa de promoción cultural de cobertura nacional; b) la creación de Juntas Seccionales de Cultura, órganos superiores de cultura de los departamentos, intendencias y comisarias<sup>419</sup>, c) conformadas por 9 representantes de los grupos de mayor representatividad de la comunidad y, d) la creación de Centros Culturales, organismos cuyo objetivo es la formación integral del individuo y el desarrollo sociocultural. Otros aspectos relevantes del PNC son la creación de las estaciones antropológicas y la incorporación de la niñez y la juventud, grupo etario objeto del plan en dos sentidos: la incorporación en el currículo de los diferentes niveles de formación de un espacio académico en el área de educación estética y, el fomento a la creación de un público sensible y

---

<sup>418</sup> Departamento Nacional de Planeación. Documento. Bogotá. 1972

<sup>419</sup> Las intendencias y comisarias eran un tipo de subdivisión territorial en Colombia antes de la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991. Las intendencias eran los hoy departamentos de Arauca, Casanare, Putumayo e islas de San Andrés y Providencia. Por su parte, las intendencias eran Amazonas, Caquetá, Chocó, La Guajira y Meta, hoy también departamentos.



comprendido con las diferentes manifestaciones de la cultura. En esta misma línea, el estímulo a la creación en las diferentes especialidades artísticas y plásticas, al igual que la regularización de la lectura y difusión del libro a través de publicaciones (Mena & Herrera, 1994, pp.146-147).

### 2.1.2 Para cerrar la brecha: 1975-1978

“Para cerrar la brecha” se denomina el Plan de Desarrollo Social, Económico y Regional (1975-1978) que corresponde al gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978). El objetivo principal es “lograr un crecimiento de la economía que haga posible la creación masiva de empleo productivo y, por lo tanto, beneficie de manera especial al cincuenta por ciento más pobre de la sociedad colombiana”<sup>420</sup>, estructurado de la siguiente manera:

**Figura 2A.01 Plan de desarrollo social, económico y social “Para cerrar la brecha” 1975-1978**

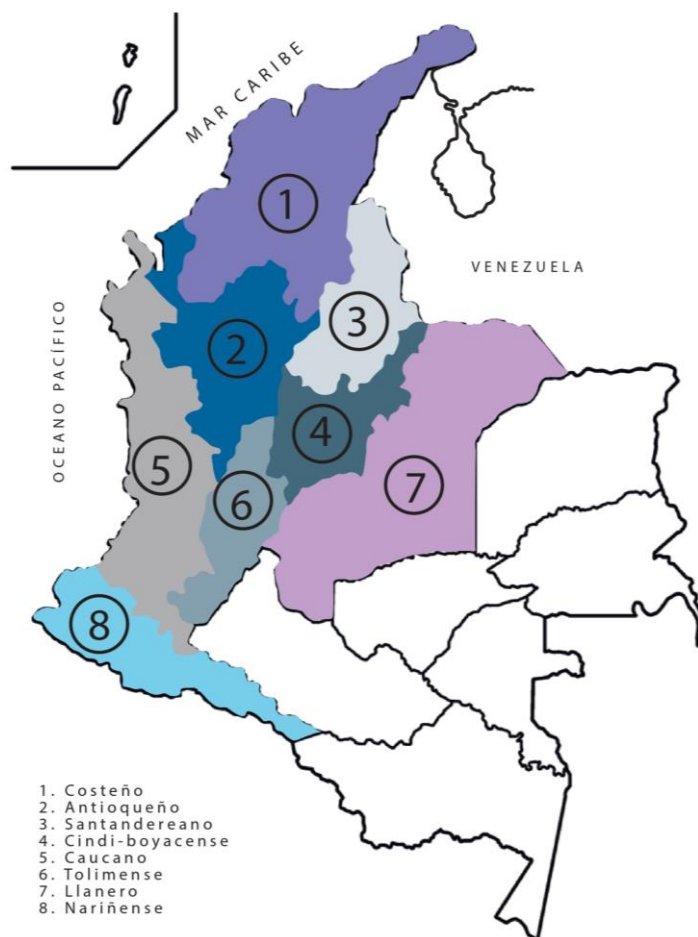
<b>PLAN DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y REGIONAL 1975-1978</b>	<b>PRIMERA PARTE: POLÍTICA MACROECONÓMICA</b>	POLITICA MONETARIA Y FINANCIERA
		POLITICA FISCAL
		POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR
	<b>SEGUNDA PARTE: POLÍTICA SECTORIALES</b>	POLITICA AGROPECUARIA
		POLITICA INDUSTRIAL
		POLITICA DE EXPORTACIONES
		POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL
	<b>TERCER PARTE: PROGRAMAS SOCIALES</b>	PLAN DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
		PROGRAMA DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
		PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN EN ZONAS MARGINALES URBANAS
		PROGRAMA DEL SECTOR EDUCATIVO
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
	<b>CUARTA PARTE: COSTOS Y FINANCIACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE GOBIERNO</b>	COSTOS DE FINANCIACION DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE GOBIERNO

Fuente: Elaboración propia con base a Departamento Nacional de Planeación (1975)

Las prioridades del gasto público se orientan a suministrarle a la población de menos recursos acceso a los servicios sociales básicos: la educación, salud, agua potable en el sector rural como mecanismo para el desarrollo regional equilibrado mediante políticas de desarrollo rural y descentralización administrativa y el fomento del empleo. Dentro del programa de educación no formal e informal “se propone un impulso a los programas educativos a través de la radio y televisión, reforzados con campañas masivas de distribución de libros y material impreso”.

<sup>420</sup> Introducción, Plan de Desarrollo Social, Económico y Regional 1975-1978 “Para cerrar la brecha”. Departamento Nacional de Planeación. Ed. Banco de la República. Bogotá 1975. Recuperado en [https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Lopez\\_Presentacion.pdf](https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Lopez_Presentacion.pdf), consultado el 30 de agosto de 2020.

**Figura 2A.02 Plan de desarrollo social, económico y social “Para cerrar la brecha” 1975-1978**



Fuente: Elaboración propia con base a Departamento Nacional de Planeación. Tomos I y II. Bogotá 1979

En lo específico relacionado con la cultura, se cita una reorientación de las acciones de Colcultura y Coldeportes<sup>421</sup> para universalizar el acceso a la mayor cantidad de población, a su vez de integrarlos como complemento de la educación formal mediante la realización de actividades culturales, deportivas, recreativas para los estudiantes escolares en el tiempo libre generado por la doble jornada (Mena & Herrera, 1994). En el marco del Proyecto Colombia-PNUD-Unesco, denominado COL.72/044 -Desarrollo Cultural- y ejecutados entre los años 1975 y 1976, el propósito fundamental es el apoyo a Colcultura en la realización del

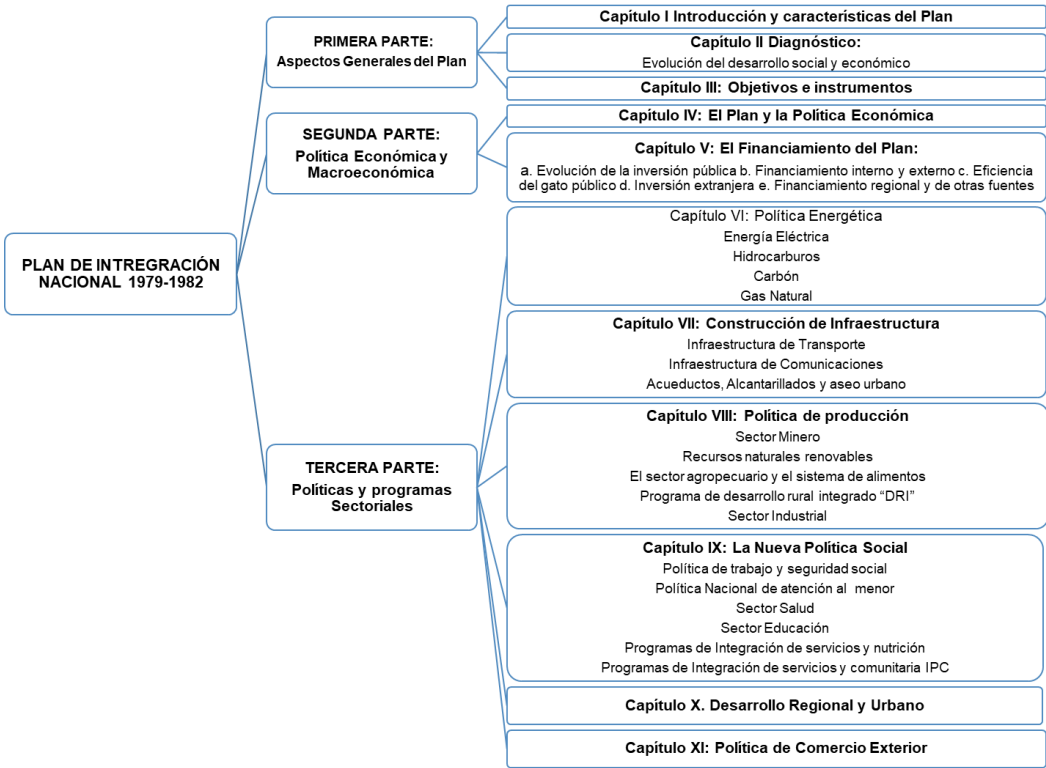
<sup>421</sup> El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes), fue creado mediante el Decreto 2763 de 1968 (noviembre 6), durante la presidencia de Alberto Lleras Camargo. Adscrito al Ministerio de Educación, “tendrá a su cargo el desarrollo y la ejecución de los planes de estímulo y fomento de la educación física, el deporte, las actividades recreativas y de bienestar para la juventud”. Fue sustituido en el año 2020 por el Ministerio del Deporte.

diagnóstico sociocultural del país con el fin de diseñar una política nacional de desarrollo cultural (Rey, 2010). Considerado el primer plan de política cultural del país. Las estrategias del Plan “*Para cerrar la brecha*” en el programa del sector educativo donde se inscribe la cultura, se orienta a la integración de los planes culturales dentro del plan general de desarrollo local, logrando la participación de regiones y comunidades, llegando a integrar en el Plan Nacional de Cultura de 1976 la regionalización de la cultura con la creación en cada una de las 8 regiones identificadas un centro cultural regional y una red de centros culturales de diversas estructuras y actividades.

2.1.3 El Plan de la Integración Nacional: 1979-1982

Durante la presidencia de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), se formula y ejecuta el Plan de Integración Nacional<sup>422</sup>, del cual el objetivo es buscar el desarrollo económico y social del país, materializado mediante el progreso de la infraestructura y descentralización económica como social.

Figura 2A.03 Plan de Integración Nacional 1979-1982



Fuente: Elaboración propia con base a Departamento Nacional de Planeación. Tomos I y II. Bogotá 1983

<sup>422</sup> Departamento Nacional de Planeación. Tomos I y II. Bogotá 1979

El fortalecimiento de la autonomía regional, desarrollo de vías de comunicación y transporte, desarrollo del sector energético y una nueva estructura social. En ese sentido, la educación es considerada un bien social con el fomento del énfasis en lo cultural, científico y tecnológico en varias modalidades de la educación formal, no formal e informal, siendo una novedad al incluir a Colcultura como un mecanismo administrativo para la descentralización en la educación informal a través de los centros populares de cultura y recreación, con la vinculación de planteles escolares y educación para adultos (Mena & Herrera, 1994, p. 133).

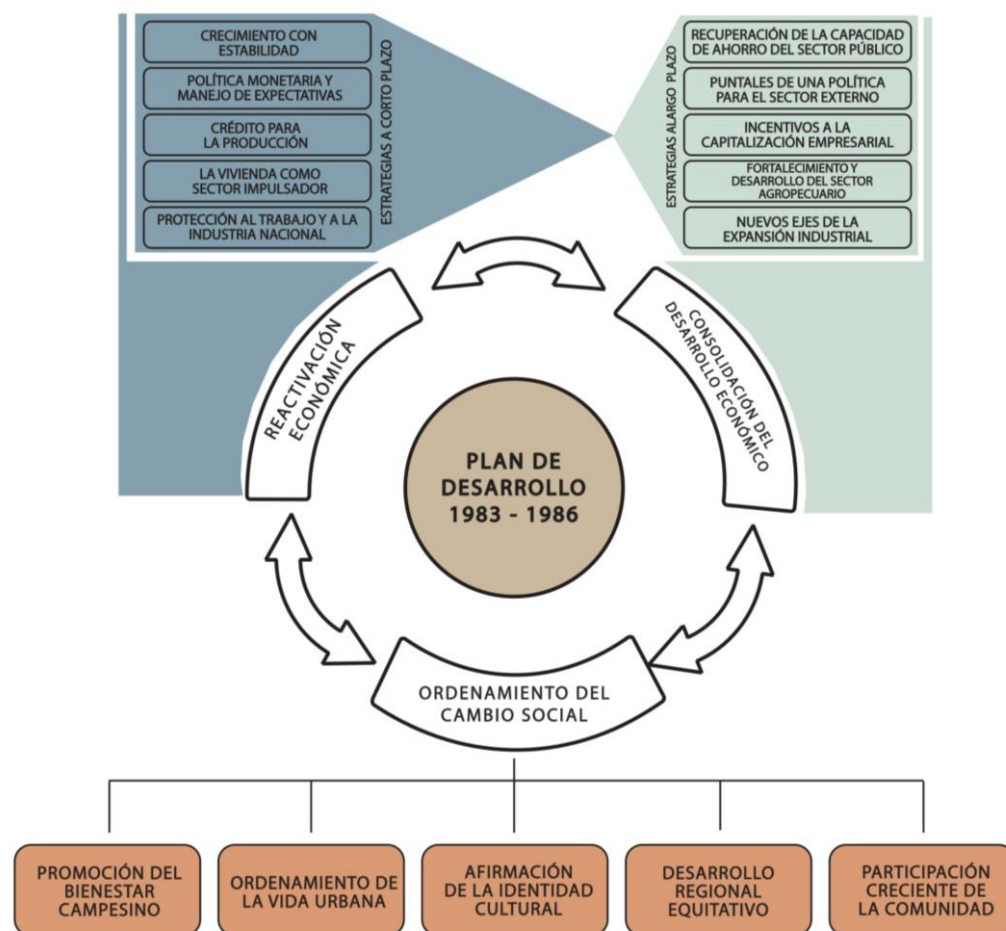
#### **2.1.4 Cambio con equidad: 1983-1986**

El plan de desarrollo “Cambio con equidad”, formulado durante la presidencia del conservador Belisario Betancur Cuartas (1983-1986), es el único en que se aborda de manera explícita la cultura. Por medio de una política integrada al objetivo del ordenamiento del cambio social junto a la reactivación económica y la consolidación del desarrollo económico conforman los tres objetivos del plan de gobierno. Estos objetivos le otorgan al plan; estabilidad, crecimiento y equidad con el propósito de *“salvar la crisis y reactivar la economía, dar rumbo y cauce a una nueva Colombia, soberana en su relaciona internacionales, democrática en sus instituciones políticas, equitativa, justa, y más solidaria en su cultura nacional”* (Mena & Herrera, 1994, p. 134).

Dentro de las propuestas en el aspecto cultural y científico sobresale el planteamiento de la Segunda Expedición Botánica para celebrar el segundo centenario de la primera realizada a finales del siglo XVIII. Con el objetivo de complementar los hallazgos del sabio Mutis. Su propósito principal se centra en el rescate del patrimonio cultural, rehacer la memoria de importantes actividades científicas y técnicas en el campo de la historia y la cultura. Así como el fomento de investigaciones para la identificación y uso racional de los recursos naturales, actividades educativas relacionada con las necesidades de la sociedad mediante investigación científica y divulgación, al igual que programas de intervención para el rescate de bienes y valores en riesgo de desaparición (Ruiz, 1984).

Esta estrategia se complementa con el fortalecimiento de la identidad cultural de la Nación a través de la afirmación y renovación de la pertenencia y lealtad de la cultura heredada, el medio ambiente colombiano para afrontar los retos de la revolución científica y técnica del mundo contemporáneo de entonces. Al interior de la política social denominada “Mayores oportunidades para la superación humana” donde se reafirma la necesidad de robustecer la identidad cultural y los valores constitutivos de la personalidad histórica con arreglo al aprovechamiento crítico y el disfrute de los productos de la sensibilidad estética propia y de otros pueblos (Mena & Herrera, 1994).

**Figura 2A.04 Plan de desarrollo “Cambio con Equidad” 1983-1986**



Fuente: Elaboración propia con base a Departamento Nacional de Planeación. 1987

Para el cumplimiento de la misión de Colcultura, se sugiere un compromiso y vinculación estrecha entre las universidades con la integración de docentes y estudiantes en la misión de la investigación, preservación del patrimonio, creación artística y difusión de la cultura; la ampliación a una tercera cadena de televisión y ampliación de la red de radio para cubrir lugares apartados y fronterizos (Mena & Herrera, 1994). La descentralización de la cultura se considera revertirá en beneficio de la preservación del patrimonio histórico y cultural, mediante la formulación y actualización de un marco legal que efectivamente se realiza, pero nunca será aprobado. Durante este periodo ocurre el terremoto de la ciudad de Popayán en 1983, lo cual lleva a Colcultura y el gobierno a centrar esfuerzo en la reconstrucción del centro histórico. Posterior a la finalización de esta emergencia se constata la importancia de mantener un inventario del patrimonio urbano, lo que lleva a la realización de levantamientos urbanos rápidos basados en recorridos fotográficos siendo considerado un instrumento ágil y efectivo,

ante la urgencia de protección y reglamentación de los centros históricos (Salazar et al., 1989, p. 38-39).

En el transcurso del periodo de dirección de Colcultura de Amparo Siniestra de Carvajal, se formula, pero no se adopta ni publica el Plan Sectorial de Desarrollo Cultural, fundamentado sobre la base del fortalecimiento de la identidad cultural de las regiones y la nación. Se incluyó la democratización de la cultura cuyo propósito es el establecimiento y desarrollo de las condiciones físicas e institucionales, organizativas y presupuestales para el acceso real de los colombianos a los bienes y beneficios de la cultura. Como estrategia se propone la activación del Consejo Nacional de Cultura, la revisión administrativa de Colcultura, conformación del Comité Nacional de Planeación Cultural, un Comité Jurídico Institucional y vinculación de la Universidad al desarrollo cultural (Mena & Herrera, 1994, pp. 157-159).

### **2.1.5 Plan de economía social: 1987-1990**

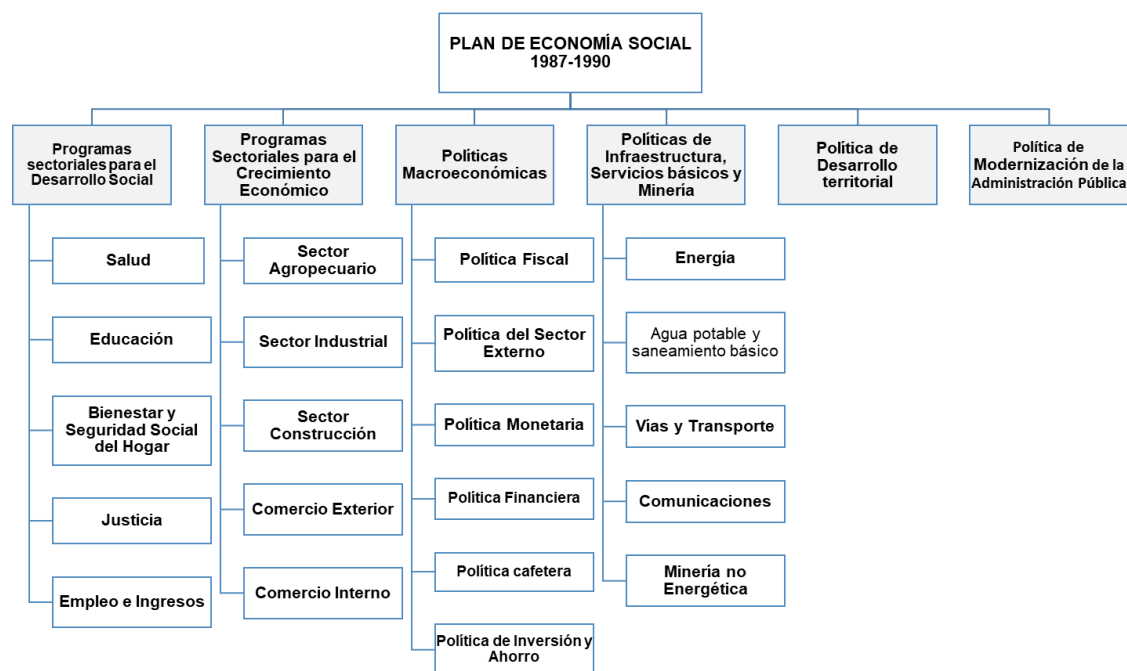
Al gobierno de Betancur lo sucede el liberal Virgilio Barco Vargas (1987-1990), con el plan de desarrollo denominado “Economía social”, el cual contiene una política cultural integrada de manera explícita, asignándole al sector educativo la responsabilidad de las políticas nacionales del desarrollo cultural y acceso al patrimonio social de la cultura. El plan escoge como prioridad para el desarrollo cultural las siguientes áreas:

- a. Rescate, conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural del país.
- b. Preservación del patrimonio cultural a través de la continuación del inventario del patrimonio arqueológico, histórico y artístico, mueble e inmueble según los preceptos de la Ley de Patrimonio de 1959.
- c. Creación del Centro Nacional de Información del Patrimonio Cultural.
- d. Democratización del acceso a la cultura por medio del uso de la infraestructura y servicios culturales para el fortalecimiento de casas de la cultura, aumento de la producción de libros, formación artística en los niveles central, regional y local (Mena & Herrera, 1994, pp. 138-139).

Colcultura mantiene funciones como entidad coordinadora, coejecutora y cofinanciadora en el logro de los objetivos del plan. Las entidades regionales y locales son las responsables de la ejecución junto a las comunidades agrupadas en los Consejos Regionales de Cultura de las seccionales en el país (Mena & Herrera, 1994). Derivado de la experiencia del terremoto de Popayán en relación con los centros históricos, Colcultura desarrolla como instrumentos de trabajo y archivo una nueva ficha de inventario inmueble usada principalmente entre 1987 y el año 1989, a partir del cambio de enfoque de las reglamentaciones. Se incorporan conceptos de planeamiento urbano y análisis de valor regional, revaluando el manejo de los centros urbanos

con valor patrimonial y reconocimiento de elementos de la problemática de la ciudad (Salazar et al., 1989, p.39).

**Figura 2A.05 Plan de Economía Social 1987-1990**



Fuente: Elaboración propia con base a Departamento Nacional de Planeación. Santa Fe de Bogotá, 1991

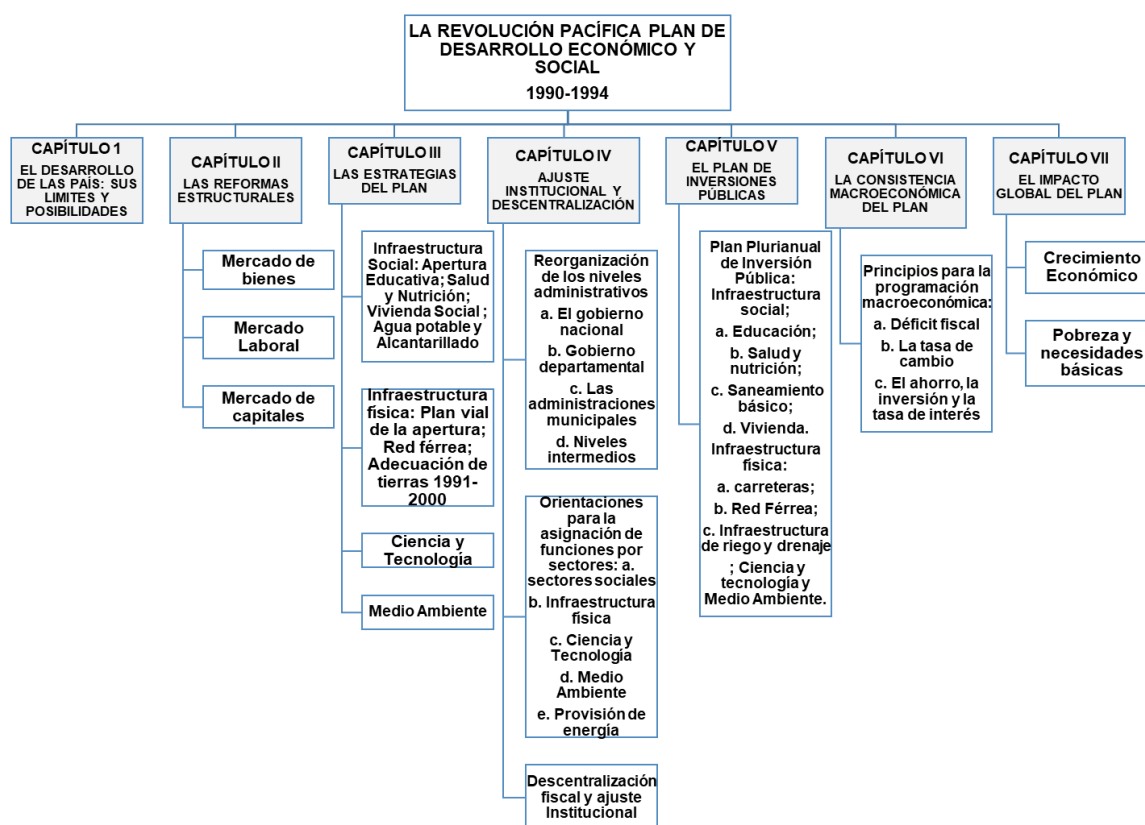
Mientras se desempeñaba como directora de Colcultura Liliana Bonilla Otoy formula el Plan “*Nueva Orientación de una Política Cultural para Colombia*” alineado a las características del patrimonio cultural, necesidades del desarrollo económico y social del país producto de una convocatoria al debate sobre la responsabilidad del Estado frente a la cultura “*en épocas de violencia, la cultura para la democracia y democracia para la cultura*”, bajo la identificación de tres áreas principales: la preservación del patrimonio cultural, la democratización del acceso a la cultura y, formación del talento artístico (Mena & Herrera, 1994, pp. 159-160).

## 2.1. 6 La Revolución pacífica: 1990-1994

Cuando llega a la presidencia el liberal Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994), Colombia tenía 33.156.000 habitantes con una distribución del 67,49% (22.345.678 habitantes) localizados en las cabeceras municipales y el restante 32,60% (10.81.322 habitantes) en las zonas rurales. Formula el Plan de Desarrollo económico y Social “La Revolución Pacífica” -1990/1994- centrado en priorizar la repuesta a la cruenta situación social, recrudecida por la violencia originada en el narcotráfico, la guerrilla y grupo paramilitares, siendo el fenómeno social predominante de su periodo presidencial (Melo, 2020). En correspondencia con esta situación,

la cultura no hace parte de las ocupaciones centrales. La temática vinculante es la educación cuyo objetivo es lograr la cobertura total de la educación primaria, expansión de la educación secundaria, la descentralización y modernización del sector mediante nuevos mecanismos de financiación. Sin embargo, en febrero de 1992 Colcultura presenta el Plan Nacional de Cultura (1992-1994), presuntamente enmarcado dentro del plan de desarrollo del gobierno (Mena & Herrera, 1994).

**Figura 2A.06 Plan de Desarrollo económico y Social 1990-1994 “La revolución pacífica”**



Fuente: Elaboración propia con base a Departamento Nacional de Planeación. Santa Fe de Bogotá, 1994

Durante la presidencia de Gaviria se convoca la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), producto de un proceso de paz con la guerrilla y una guerra frontal con el narcotráfico. Además de la voluntad popular mediante la “séptima papeleta” que hizo parte de las elecciones presidenciales de 1990. El propósito principal de la convocatoria de la ANC era sustituir la Constitución Política de 1886. La Nueva Constitución Política de Colombia fue promulgada el 7 de julio de 1991. La cultura adquiere un lugar relevante que será desarrollado de manera paulatina con el apoyo de Colcultura en los primeros años, momento principal de la



formulación de la Ley General de Cultura de 1997 (Melo, 2020, pp. 276-278). En el periodo de gobierno de 1990 a 1994 se establecen las bases para la política pública definitiva del sector cultura donde el patrimonio cultural se proyecta a un lugar central con continuidad en sus acciones.

El 19 de septiembre de 1990 se posesiona el economista antioqueño Juan Manuel Ospina Restrepo como director de Colcultura con un programa centrado en tres aspectos fundamentales; a) la apertura económica con un reto doble: conservar la identidad cultural y asimilar manifestaciones de otros ámbitos; b) la democracia basada en el diálogo, participación y tolerancia hacia los otros y, c) la descentralización para que el municipio sea el escenario natural de la cultura. Bajo este precepto se formula el Plan Nacional de Cultura (1992-1994), denominado “*Colombia: El camino de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI*” durante la administración de Ramiro Osorio Fonseca como director de Colcultura quien asume el 12 de diciembre de 1991 hasta finales del año 1993. El Plan se centra en el desarrollo de estrategias para la descentralización y modernización del sector cultura; participación comunitaria y responsabilidad compartida; asociación oficial y privada; revisión del marco jurídico y creación de estímulos para la cultura (Mena & Herrera, 1994).

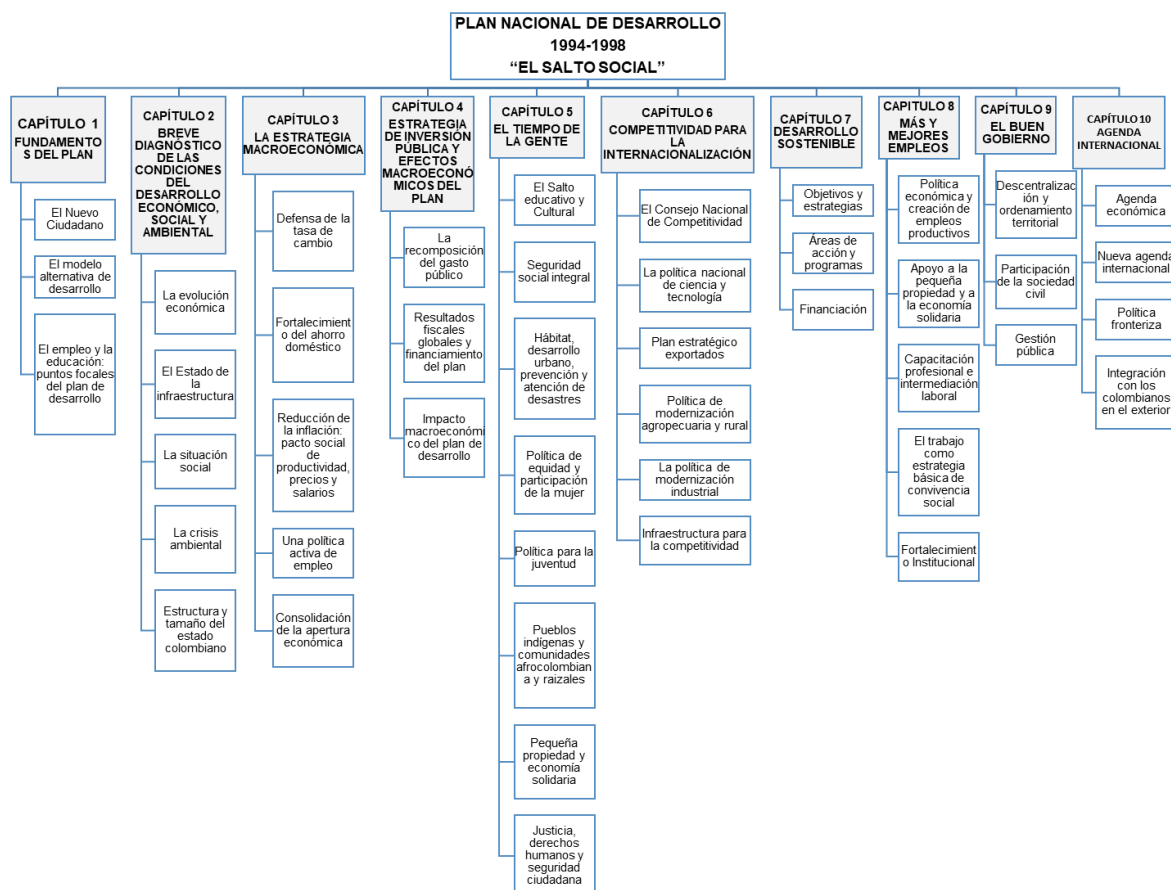
### **2.1.7 El salto social: 1994-1998**

Con cuestionamientos morales sobre la legitimidad de su elección el 7 de agosto de 1994 asume la presidencia el liberal Ernesto Samper Pizano. Es la etapa final de Colcultura bajo el Plan Nacional de Desarrollo Ley de Inversiones 1994-1998 denominado “El Salto Social”. Su logro principal es la expedición de la Ley 397 de 1997 y la creación del Ministerio de Cultura, mediante este mismo acto legislativo.

La transición de Colcultura al Ministerio de Cultura se desarrolla en dos etapas: la primera asumida por el director de Colcultura el abogado Juan Luis Mejía Arango nombrado en diciembre de 1993 y ratificado por el gobierno de Samper. Elabora y sustenta la Ley General de Cultura que crea el Ministerio. Ejerce hasta el año 1996 antes de la aprobación de la Ley por parte del Congreso de la República. Se destaca en esta época el “*Programa de Reciclaje de las Estaciones del Ferrocarril*” ejecutado entre los años 1993 y 1996, por intermedio del convenio interinstitucional 032 de 1992 suscrito entre Colcultura, la Empresa de Vías Férreas de Colombia (Ferroviás), el Banco Central Hipotecario y Corporación Nacional del Turismo.

El objetivo fue “*evidenciar, valorar, proteger el conjunto de estaciones férreas de pasajeros, localizadas en pequeños municipios y poblados por donde atraviesa la red férrea del país*”. Se logra la declaratoria del conjunto de estaciones de pasajeros y el corredor férreo entre Facatativá y Girardot como Patrimonio Cultural de la Nación, además del levantamiento arquitectónico de 227 estaciones de ferrocarril y recuperación de 12 inmuebles (Escovar & Cárdenas, 1998, pp. 215-216).

**Figura 2A.07 Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 “El Salto Social”**



Fuente: Elaboración propia con base a Departamento Nacional de Planeación. Santa Fe de Bogotá, 1994

## LISTA DE FIGURAS

Figura 2A.01 Plan de desarrollo social, económico y social “Para cerrar la brecha” 1975-1978 .....	455
Figura 2A.02 Plan de Integración Nacional 1979-1982 .....	456
Figura 2A.03 Plan de desarrollo “Cambio con Equidad” 1983-1986 .....	458
Figura 2A.04 Plan de Economía Social 1987-1990 .....	460
Figura 2A.05 Plan de Desarrollo económico y Social 1990-1994 “La revolución pacífica” .....	461
Figura 2A.06 Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 “El Salto Social” .....	463

# **LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO EN COLOMBIA: 1954-2019**

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y EFECTOS URBANÍSTICOS EN LOS CENTROS  
HISTÓRICOS DEL ÁMBITO NACIONAL

## **ANEXO II: DETERMINANTES, COMPONENTES Y PROCESOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

Arq. Oscar Yesid Fonseca Roa  
Directora: Dra. María de los Ángeles Castrillo Romón

## 4.4 El Patrimonio Urbano en el Ordenamiento Territorial y en su gestión

### 4.4.1 Determinantes del Plan de Ordenamiento Territorial

Dentro del proceso de elaboración y adopción del POT por parte de las entidades territoriales, deben considerar las siguientes determinantes, las cuales se “... *constituyen en norma de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes...*”<sup>423</sup>, relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales, conservación y protección del patrimonio cultural, la prevención de amenazas y riesgos naturales, de la siguiente forma:

**Tabla 4IV.01 Determinantes del ordenamiento Territorial**

<b>Determinante</b>	<b>Descripción</b>
<b>Recursos Naturales</b>	Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales;
<b>Medio Ambiente</b>	Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica;
<b>Parques Nacionales Naturales</b>	Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales;
<b>Prevención de Amenazas y Riesgos Naturales</b>	Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.
<b>Conservación y preservación del Patrimonio Cultural</b>	Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente

<sup>423</sup> Artículo 10 Determinantes de los planes de ordenamiento territorial, capítulo III Planes de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997 (julio 18) “Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”

<b>Infraestructura básica red vial nacional y regional</b>	El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus áreas de influencia.
<b>Planes Integrales de Desarrollo Metropolitano</b>	Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como las normas generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 128 de 1994 y la presente ley.

Fuente: Elaboración propia a partir del Artículo 10 Determinantes de los planes de ordenamiento territorial, capítulo III Planes de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997 (julio 18)

Las determinantes del ordenamiento territorial se vinculan a dimensiones estructurales y de valor ilimitado por sus características potenciales y significativas en la configuración de las relaciones al interior de las regiones económicas y productivas. Incluidas en los Planes Integrales de Desarrollo Metropolitano; la infraestructura básica compuesta por la red vial nacional y regional. El medio ambiente en su magnitud y diversidad integra los recursos naturales, los parques nacionales y la prevención de amenazas y riesgos. Se sitúan en el mismo nivel de prioridad el patrimonio cultural en su componente material e inmaterial con una función especial dirigida al reconocimiento de los valores integradores de las comunidades, al igual que aquellos elementos asociados a la nacionalidad, las manifestaciones regionales, propias del desarrollo humano, próxima a una función de identidad y cohesión social (Prats, 1997).

#### 4.4.2 Componentes del ordenamiento territorial

El Plan de Ordenamiento Territorial se estructura en tres componentes a saber: a) componente general, b) componente urbano y c) componente rural, además del contenido estructural. Cada uno relacionado con acciones a largo, mediano y corto plazo, Las temporalidades son proporcionales a las estrategias, proyectos y acciones de cada una de las dimensiones destinadas a su ámbito de aplicación. En la -tabla 7- un compendio facilita la comprensión global de los alcances y actividades vinculadas con sus funciones programáticas:

**Tabla 4IV.02 Componentes del Plan de Ordenamiento Territorial**

<b>Componente</b>	<b>Alcance</b>	<b>Actividad</b>
<b>Componente general del Plan</b>	Constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo.	Identificación y localización de las acciones sobre el territorio que posibiliten organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor competitividad.
	Los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo que complementarán, desde el punto de vista del manejo	Definición de las acciones territoriales estratégicas necesarias para garantizar la consecución de los objetivos de desarrollo económico y social del municipio o distrito.
		Adopción de las políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y del

	territorial, el desarrollo municipal y distrital.	conjunto de los recursos naturales.
<b>Contenido Estructural</b>	Deberá establecer, en desarrollo y concreción de la estructura urbano-rural e intraurbana que se busca alcanzar a largo plazo, con la correspondiente identificación de la naturaleza de las infraestructuras, redes de comunicación y servicios, así como otros elementos o equipamientos estructurantes de gran escala.	Los sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural y su articulación con los respectivos sistemas regionales.
		El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, así como de las áreas de conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.
		La determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad.
		La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos para garantizar adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y rurales.
		La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano, en los términos en que estas categorías quedan definidas en el Capítulo IV de la presente ley, y siguiendo los lineamientos de las regulaciones del Ministerio del Medio Ambiente en cuanto a usos del suelo, exclusivamente en los aspectos ambientales y de conformidad con los objetivos y criterios definidos por las Áreas Metropolitanas en las normas obligatoriamente generales, para el caso de los municipios que las integran.
	es un instrumento para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano y suelo de expansión	Las políticas de mediano y corto plazo sobre uso y ocupación del suelo urbano y de las áreas de expansión, en armonía con el modelo estructural de largo plazo adoptado en el componente general y con las previsiones sobre transformación y crecimiento espacial de la ciudad.
		La localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de transporte y la adecuada intercomunicación de todas las áreas urbanas y la proyectada para las áreas de expansión; la disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios públicos a corto y mediano plazo; la localización prevista para los equipamientos colectivos y espacios libres para parques y zonas verdes públicas de escala urbana o zonal, y el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes a dichas infraestructuras.
		La delimitación, en suelo urbano y de expansión urbana, de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales, de conformidad con la legislación general aplicable a cada caso y las normas específicas que los complementan en la presente ley; así como de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales.
		La determinación, en suelo urbano y de expansión

<b>Componente Urbano</b>	urbana, que integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanísticas	urbana, de las áreas objeto de los diferentes tratamientos y actuaciones urbanísticas.
		La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social, incluyendo los de mejoramiento integral, la cual incluirá directrices y parámetros para la localización en suelos urbanos y de expansión urbana, de terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interés social, y el señalamiento de los correspondientes instrumentos de gestión; así como los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación.
		Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad, definiendo sus prioridades, y los criterios, directrices y parámetros para la identificación y declaración de los inmuebles y terrenos de desarrollo o construcción prioritaria.
		La determinación de las características de las unidades de actuación urbanística, tanto dentro del suelo urbano como dentro del suelo de expansión cuando a ello hubiere lugar, o en su defecto el señalamiento de los criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e incorporación posterior.
		La especificación, si es del caso, de la naturaleza, alcance y área de operación de los macroproyectos urbanos cuya promoción y ejecución se contemple a corto o mediano plazo, conjuntamente con la definición de sus directrices generales de gestión y financiamiento, así como la expedición de las autorizaciones para emprender las actividades indispensables para su concreción.
		La adopción de directrices y parámetros para la formulación de planes parciales, incluyendo la definición de acciones urbanísticas, actuaciones, instrumentos de financiación y otros procedimientos aplicables en las áreas sujetas a urbanización u operaciones urbanas por medio de dichos planes.
		La definición de los procedimientos e instrumentos de gestión y actuación urbanística requeridos para la administración y ejecución de las políticas y decisiones adoptadas, así como de los criterios generales para su conveniente aplicación, de acuerdo con lo que se establece en la presente ley, incluida la adopción de los instrumentos para financiar el desarrollo urbano, tales como la participación municipal o distrital en la plusvalía, la emisión de títulos de derechos adicionales de construcción y desarrollo y los demás contemplados en la Ley 9ª de 1989.
		La expedición de normas urbanísticas en los términos y según los alcances que se establecen en el artículo 15 de la presente ley.
		Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los asentamientos humanos

<b>Componente Rural</b>	es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores rurales	localizados en estas áreas.
		El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.
		La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios o de disposición final de desechos sólidos o líquidos.
		La localización y dimensionamiento de las zonas de terminadas como suburbanas, con precisión de las intensidades máximas de ocupación y usos admitidos, las cuales deberán adoptarse teniendo en cuenta su carácter de ocupación en baja densidad, de acuerdo con las posibilidades de suministro de servicios de agua potable y saneamiento, en armonía con las normas de conservación y protección de recursos naturales y medio ambiente.
		La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social.
		La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo y la localización prevista para los equipamientos de salud y educación.
		La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.

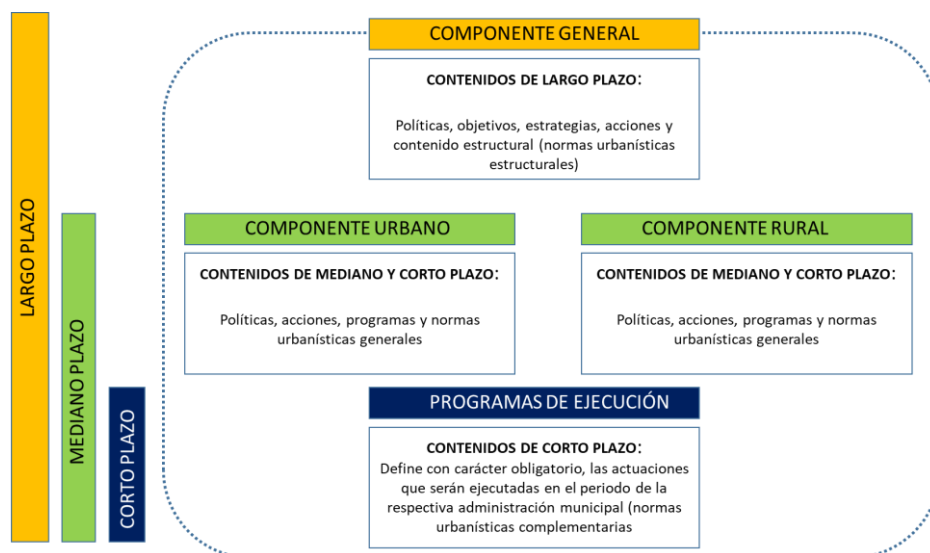
Fuente: Elaboración propia a partir del Artículo 11, artículo 12 y artículo 13, Capítulo III Planes de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997 (julio 18)

El patrimonio cultural como norma de superior jerarquía es de obligatoria identificación en las jurisdicciones de aplicación del POT, mediante la valoración de las dimensiones naturales, históricas, geográficas, culturales, sociales propias y excepcionales localizadas dentro del área administrativa de aplicación del instrumento.

De esta actividad se deriva no solo la protección de las riquezas patrimoniales sino la integración a la dinámica principal del territorio, esto significa la asignación de categorías que superan los límites de su ámbito de aplicación como los paisajes culturales, los corredores bióticos, parques nacionales naturales que implican un diálogo y nivel de planeación centrada en el bien común a una escala de mayor jerarquía.



**Figura 4A.01 Temporalidad de los Planes de Ordenamiento Territorial**



Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 11 de la Ley 388 de 1997

Los componentes del POT, se relacionan de manera integral con la temporalidad de las acciones donde es posible comprender la longevidad y magnitud de los proyectos en el territorio en varios sentidos. Uno de ellos a largo plazo compuesto por políticas y contenidos estructurales establecidos desde su formulación para ser ejecutados mediante la gestión de varias administraciones municipales consecutivas para su consolidación. El factor político y administrativo se posiciona dentro de la misma línea estratégica que requiere de tiempo e inversión económica y financiera permanente. Por su parte, el mediano y corto plazo concentra acciones dirigidas a la ejecución en el ámbito urbano y rural, parte integral o contributiva del componente general, toda vez que estas acciones están integradas por programas orientados a la búsqueda de las mejores condiciones para el contexto donde se desarrollan, con resultados de escala local, demandas de tiempo y recursos ajustadas a los 4 años del periodo de duración de una administración municipal. Son ejecutadas según el plan de desarrollo municipal.

En este sentido, la Corte Constitucional ratifica y

*“define a largo y mediano plazo un modelo de organización y racionalización del territorio municipal o distrital, según el caso, señalando las actividades que debe cumplir la respectiva entidad territorial con miras a distribuir y utilizar de manera ordenada y coordinada el área del municipio o distrito”*<sup>424</sup>

<sup>424</sup> Tomado de la Sentencia C-192/16

La definición de tres temporalidades facilita el logro del modelo de ordenamiento definido como horizonte y objetivo principal del POT:

*El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible<sup>425</sup>.*

El largo plazo promueve el cumplimiento de la vigencia del POT equivalente a tres periodos constitucionales completos, es decir 12 años. El modelo de ocupación de territorio, las políticas del componente general, programas y proyectos se deben formular para una temporalidad equivalente a lo determinado en el Decreto 1232 de 2020 (septiembre 14)<sup>426</sup>. Similar que la etapa de implementación, la cual contiene las vigencias del corto y mediano plazo. Estos últimos se han proporcionado en 4 años y 8 años, respectivamente. Una o dos vigencias sucesivas de la administración municipal. Un alcalde municipal para el cumplimiento de su obligación de mejorar la calidad de vida de sus habitantes cuenta con tres mecanismos:

**Tabla 4IV.03 Instrumentos para la Administración Municipal**

<b>Instrumento</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Equivalencia en periodo administrativas</b>
Plan de Ordenamiento Territorial	12 años	3 periodos administrativos
Plan de Desarrollo Municipal	4 años	1 periodo administrativo
Presupuesto	1 año	Un cuarto del periodo administrativo

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 11 de la Ley 388 de 1997

No hay relación de coordinación temporal entre el POT y el PEMP, ni en los aspectos de la formulación, integración y vigencia de cada instrumento. En la medida que el proceso de elaboración, aprobación y adopción le corresponde a la administración y el concejo municipal, mientras el PEMP se formula en el marco del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos con la integración de la administración y comunidad del municipio, aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y aceptado e integrado al ordenamiento del municipio por medio de la adopción. Los programas y acciones del POT obedecen a un tiempo diferente de los establecidos en el PEMP, incluso en tiempos que superan el periodo de vigencia del primero. Se genera de esta forma una discordia en la ejecución de los proyectos del ordenamiento y protección del patrimonio, procedentes de dos instrumentos diversos integrados por la superior jerarquía, sin mayor armonía que estar formulados para dos sectores urbanos

<sup>425</sup> Artículo 6, Capítulo II ordenamiento del territorio municipal, Ley 388 de 1997 (julio 18).

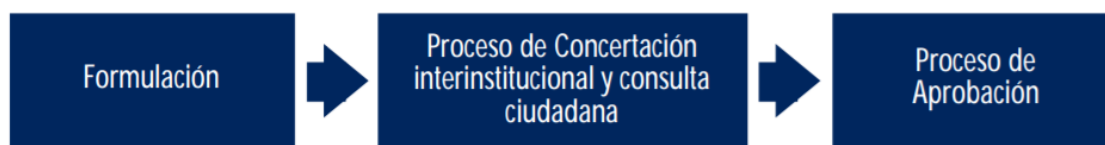
<sup>426</sup> El Decreto 1232 de 2020 (septiembre 14), adiciona y modifica el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial

claramente diferenciados: el centro histórico y el área urbana-rural fuera bajo la misma jurisdicción administrativa.

#### 4.4.3 Proceso de planificación territorial, elaboración, formulación, aprobación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial

El proceso de elaboración, formulación, aprobación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial de acuerdo con la Ley 388 de 1997 integra una serie de procedimientos y actores públicos (Alcaldía, Consejo Municipal, Corporación Autónoma Regional y Consejo Territorial), privados (Gremios Económicos, Inversionistas, promotores y actores inmobiliarios) y comunitarios (población civil, resguardos indígenas, comunidades negras). Convocados para participar activamente en el proceso y tiempos estimados en tres fases:

**Figura 4A.02 Instrumentos para la Administración Municipal**



Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 11 de la Ley 388 de 1997

Para el cumplimiento por parte de las administraciones municipales y distritales de la obligatoriedad de formular y adoptar un POT, la Ley 388 de 1997, define tres etapas, para su consecución: formulación, concertación y adopción. La primera se dirige al desarrollo de las actividades iniciales conducentes al reconocimiento del territorio, la definición de alcances, prediagnóstico, diagnóstico y formulación según los recursos técnicos, económicos y financieros del municipio. Además de la complejidad, extensión y estado al momento de emprender esta etapa inicial. Surtido el proceso de formulación y “antes de la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial a consideración del concejo distrital o municipal, se surtirán los trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana”, inicialmente se somete a consideración de la Corporación Autónoma Regional<sup>427</sup> o la autoridad ambiental para concertar

*“los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, para lo cual dispondrán, de cuarenta y*

<sup>427</sup> La Corporación Autónoma Regional “son entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidro geográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente” y desarrollo sostenible. Artículo 23, Título VI De las Corporaciones Autónomas Regionales, Ley 99 de 1993 (diciembre 22).

*cinco (45) días; solo podrá ser objetado por razones técnicas y sustentadas en estudios”*<sup>428</sup>

En caso de diferencia en la concertación, intervendrá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien tendrá 30 días para subsanar los puntos en discordia. Cuando el municipio haga parte de un área metropolitana, la instancia de concertación se realiza con la Junta Metropolitana, instancia encargada de la vigilancia y armonización de los POT y orientaciones metropolitanas. Superado el proceso de revisión con las autoridades ambientales y metropolitanas se somete a la instancia del Consejo Territorial de Planeación<sup>429</sup>, quien rendirá concepto y podrá “formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes”<sup>430</sup>.

Mientras se surte el proceso de concertación del POT con la Corporación Autónoma Regional, la Junta Metropolitana y el Consejo Territorial de Planeación “la administración municipal o distrital solicitará opiniones a los gremios económicos y agremiaciones profesionales y realizará convocatorias públicas para la discusión del plan, incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales” mediante la exposición de los documentos básicos del Plan:

*“en sitios accesibles a todos los interesados y recogerá las recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio, debiendo proceder a su evaluación, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y concordancia con los objetivos del plan”*

A cargo de las administraciones municipales y distritales, quienes constituirán “los mecanismos de publicidad y difusión del proyecto [...] que garanticen su conocimiento masivo, de acuerdo con las condiciones y recursos de cada entidad territorial”. La consulta democrática se debe implementar y garantizar en la totalidad de fases del POT, diagnóstico, formulación, seguimiento y evaluación<sup>431</sup>. Posterior a que el proyecto de POT surta las etapas de participación democrática y concertación interinstitucional, el alcalde municipal lo presenta al concejo municipal o distrital

---

<sup>428</sup> Artículo 24, Instancias de concertación y consulta, Capítulo III Planes de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997 (julio 19).

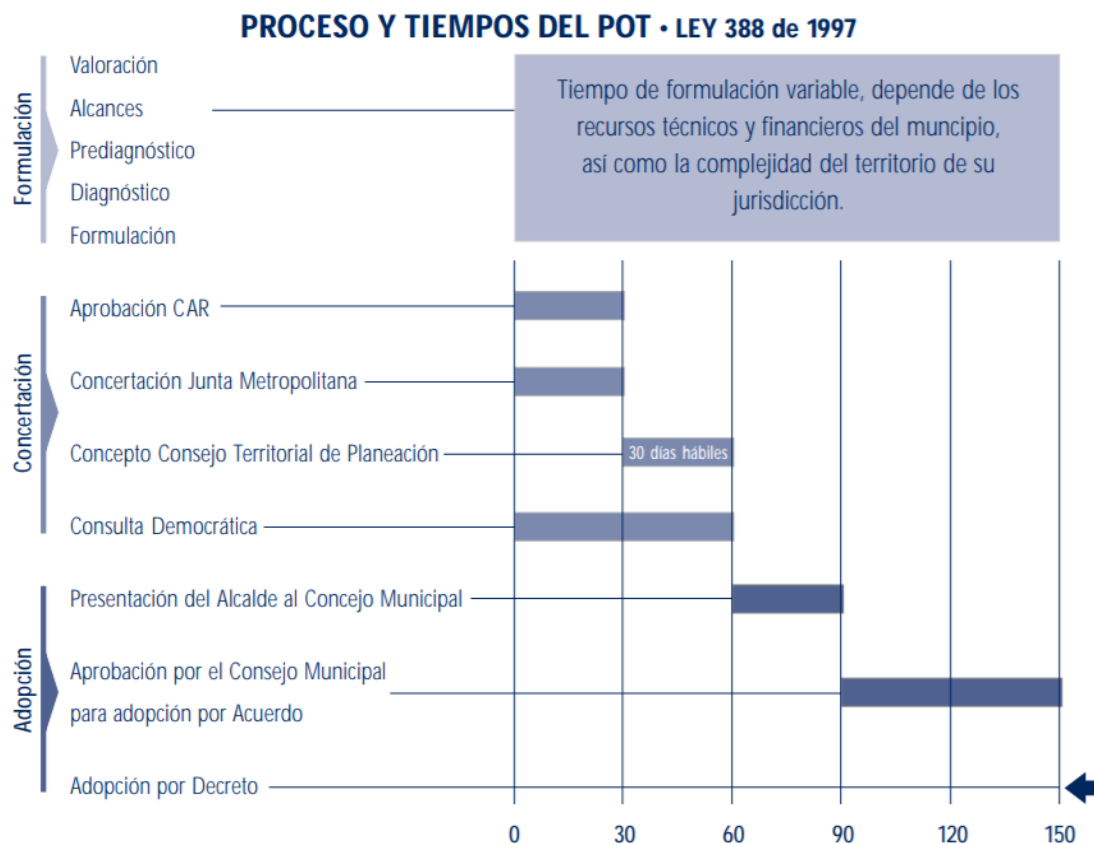
<sup>429</sup> Ibidem,

<sup>430</sup> El Consejo Territorial de Planeación “del orden departamental, distrital o municipal estarán integrados por las personas que designe el Gobernador o el alcalde de las ternas que presenten las correspondientes autoridades y organizaciones, de acuerdo con la composición que definan las Asambleas Departamentales y Consejos Municipales. Dichos consejos deberán estar integrados por representantes de su jurisdicción territorial de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios”. Artículo 34, Capítulo IX Autoridades e instancias territoriales de planeación, Ley 152 de 1994 (julio 15) por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

<sup>431</sup> Artículo 24, Instancias de concertación y consulta, Capítulo III Planes de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997 (julio 19).

dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del concepto del Consejo Territorial de Planeación. En el evento de que el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo deberá contar con la aceptación de la administración<sup>432</sup>.

**Figura 4A.03 Instrumentos para la Administración Municipal**



Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 11 de la Ley 388 de 1997

Después de superados los 60 días desde la presentación del proyecto de POT sin que el concejo municipal o distrital adopte decisión alguna, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto. Los tiempos estimados para la formulación del POT en la Ley 388:

*“...un plazo máximo de dieciocho (18) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las administraciones municipales y distritales con la participación democrática aquí prevista, formularán y adoptarán los planes de Ordenamiento*

<sup>432</sup> Artículo 25, Instancias de concertación y consulta, Capítulo III Planes de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997 (julio 19).

*Territorial, o adecuarán los contenidos de ordenamiento territorial de los planes de Desarrollo...”*

Es decir, hasta el 18 de enero de 1999. Sin embargo, la Ley 507 de 1999 (julio 28): “*por la cual se modifica la Ley 388 de 1997*”, prorroga el plazo máximo para que los municipios y distritos “*formulen, adopten los planes y esquemas de ordenamiento territorial hasta el 31 de diciembre de 1999*”<sup>433</sup>. Con este procedimiento se formulan los 1102 planes de ordenamiento de igual número de municipios hasta la introducción del proceso de planificación territorial mediante el Decreto 1232 de 2020, el cual se realiza por medio de las siguientes etapas:

**Figura 4A.04 Etapas del proceso de planificación territorial**



Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 11 de la Ley 388 de 1997

El proceso de planificación territorial supone una nueva orientación en la formulación de los POT. Después de 23 años de la entrada en vigor de la Ley de desarrollo urbano con un procedimiento basado en la metodología clásica de proyectos con las etapas: diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación. En consideración a que las entidades administrativas cuentan con un POT, en el año 2016, el 83% de los municipios del país (916), presentan un desajuste entre la realidad del territorio y el ordenamiento del mismo. La etapa de diagnóstico, “*deberá permitir conocer el estado actual del territorio, para confrontarlo con la imagen deseada de tal manera que permita formular adecuadamente la planeación del territorio del municipio o distrito*”, con la novedad a diferencia de la anterior metodología en la “*identificación de las áreas o inmuebles declarados patrimonio cultural material, así como los planes de especial manejo y protección -PEMP existentes*”<sup>434</sup>. Un reconocimiento favorable para la protección del patrimonio al integrar al ordenamiento el plan del área o inmueble identificado como BIC.

Las dimensiones abordadas en la etapa de diagnóstico y sus respectivas actividades se sintetizan en la siguiente tabla:

**Tabla 4IV.04 Etapa de Diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial**

ETAPA DIAGNÓSTICO	
Dimensión	Actividades
	Requeridos para la elaboración del plan, su revisión o modificación; así como la identificación de los recursos y actividades necesarias para su desarrollo.
	Análisis de las capacidades técnicas, institucionales y financieras y de los procesos participativos requeridos para la elaboración del plan, su revisión o modificación; así como la identificación de los recursos y actividades necesarias para su desarrollo.

<sup>433</sup> Artículo 1, Ley 507 de 1999 (julio 28): “Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997”.

<sup>434</sup> Artículo 2.2.2.1.2.1.2, Subsección 1, el proceso de planificación territorial etapas, Decreto 1232 de 2020.

<b>Balance de la información disponible</b>	El inventario de la información secundaria disponible (infraestructura, proyectos, estudios y/o cartografía) que sea pertinente como insumo para el proceso, considerando la información de carácter sectorial (agropecuario, industrial, transporte, minero - energético e hidrocarburos y turismo).
	El inventario de las licencias ambientales, licencias urbanísticas, títulos y/o permisos mineros vigentes, así como las áreas adjudicadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción del municipio
	El inventario de los instrumentos que se hayan expedido en la vigencia del Plan, que lo desarrollen y complementen.
	La identificación de las áreas o inmuebles declarados patrimonio cultural material, así como los planes de especial manejo y protección - PEMP existentes.
	La información de detalle de la cual disponen los prestadores de servicios públicos domiciliarios sobre las capacidades de infraestructura y fuentes de abastecimiento, la proyección de la expansión, reposición y/o ampliación de la capacidad de redes para cubrir el déficit de cobertura actual y proyectado, el catastro de redes matrices de las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios así como los planes de expansión para ampliar el denominado perímetro de servicios.
	Establecer la estrategia que permita precisar los mecanismos para garantizar la participación democrática y la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos en los términos de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
<b>Dimensión Ambiental</b>	Caracterización geográfica.
	Caracterización de los elementos que constituyen el sistema biofísico.
	La identificación de las áreas de conservación y protección ambiental, así como de sus planes de manejo y demás instrumentos que haya expedido la autoridad ambiental para garantizar los objetivos de conservación de la misma.
	Caracterización de la cobertura y uso actual del suelo, la aptitud potencial de uso, la identificación y análisis de los factores y áreas de degradación ambiental y la determinación de los conflictos de uso del suelo.
	Los estudios para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial.
<b>Dimensión económico</b>	Caracterizar la estructura predial: análisis del tamaño de los predios.
	Las actividades económicas que se desarrollan por sectores económicos: primario, secundario y terciario.
	El empleo generado por los diferentes sectores.
	La importancia de la economía municipal en el contexto regional y nacional e internacional si se requiere.
<b>Dimensión socio-cultural</b>	Caracterizar y analizar la población, su distribución actual, las dinámicas demográficas, y la tendencia de distribución en el territorio, precisando los grupos étnicos cuando existan. Identificar las relaciones entre la dinámica demográfica y las necesidades socioeconómicas, funcionales y de servicios a resolver.
	Caracterizar y analizar la cobertura de los servicios sociales básicos: educación, salud, bienestar social, recreación y deporte e identificación de déficits existentes.
	Caracterizar y analizar la información poblacional suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, la cual se podrá complementar a partir del uso de fuentes alternativas de información como las del Censo Nacional Agropecuario, las bases de datos del Sistema de Ciudades y el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales SISBEN, así como en las demás con las que cuenten las entidades territoriales.
	Identificar y analizar la ocupación actual del área urbana, rural, regional y caracterización de asentamientos rurales.

<b>Dimensión funcional</b>	Vivienda
	Servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas.
	La localización de las infraestructuras del servicio de comunicaciones (TIC), en especial las centrales telefónicas y las antenas para los celulares, así como las necesidades de expansión de las mismas.
	Espacio público
	Infraestructura de transporte
	Equipamiento
	Patrimonio material, identificar las áreas o inmuebles declarados patrimonio, determinando si cuentan con plan especial de manejo y protección - PEMP, de conformidad con lo establecido en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
<b>Dimensión Institucional</b>	La capacidad de gestión institucional de la administración municipal para establecer los aspectos que se requieren fortalecer con el fin de garantizar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial.
	La capacidad financiera del municipio o distrito, precisando la disponibilidad de los ingresos corrientes para financiar las intervenciones y proyectos propuestos, luego de atender los compromisos de gasto recurrentes tales como: los derivados de la operación y funcionamiento de la administración, las inversiones sectoriales sociales, así como los procesos judiciales, sentencias o conciliaciones en contra del municipio, compromisos de deuda pública, entre otros que considere pertinentes.
	Identificar los conflictos de límites con los municipios vecinos.
<b>Síntesis del diagnóstico territorial</b>	Contiene las principales necesidades, problemáticas y potencialidades del municipio resultado de la valoración de la situación actual desde una perspectiva integral. Con base en la síntesis del diagnóstico se realizarán los análisis que permitan proponer el modelo de ocupación en la formulación.

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 2.2.2.1.2.1.2 del Decreto 1232 de 2020

La etapa de formulación, “*comprende el proceso de toma de las decisiones para el ordenamiento del territorio que se traducen en los componentes y contenidos*”<sup>435</sup>, donde en el componente general se considera estratégico estructurar las áreas de conservación del patrimonio material, que:

Corresponde a las áreas o inmuebles declarados que hacen parte del patrimonio material, sobre los cuales se debe establecer las normas urbanísticas aplicables, sin perjuicio que las mismas se precisen o se establezcan de manera específica en el Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP<sup>436</sup>.

En la misma línea, se aprecia en el componente urbano la necesidad de “*la delimitación de las áreas de conservación y protección del patrimonio material*”<sup>437</sup>, sin mayor claridad en los casos en que el PEMP ha realizado esta actividad en cumplimiento de su alcance. Deja sin mayor

<sup>435</sup> Artículo 2.2.2.1.2.1.2 Etapa de formulación, subsección 1, el proceso de planificación territorial Etapas, Decreto 1232 de 2020.

<sup>436</sup> Artículo 2.2.2.1.2.1.3 Etapa de formulación, subsección 1, el proceso de planificación territorial Etapas, Decreto 1232 de 2020.

<sup>437</sup> Artículo 2.2.2.1.2.1.3 Etapa de formulación, subsección 1, el proceso de planificación territorial Etapas, Decreto 1232 de 2020



orientación cuando se presentan la situación en que ambos instrumentos conciliaran la orientación del desarrollo urbano y la protección del patrimonio. El mismo Decreto 1232 de 2020, ordena “la realización de la concertación, consulta, aprobación y adopción con las siguientes instancias:

- (i) Consejo de Gobierno,
- (ii) Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental correspondiente,
- (iii) Junta Metropolitana para el caso de municipios que formen parte de áreas metropolitanas,
- (iv) el Consejo Territorial de Planeación, y
- (v) (v) el Concejo Municipal”<sup>438</sup>.

**Tabla 4IV.05 Etapa de Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial**

<b>ETAPA FORMULACIÓN</b>	
<b>Dimensión</b>	<b>Actividades</b>
<b>Componente General Contenido Estratégico</b>	Comprende la definición de políticas, objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo, las cuales concretan el modelo de ocupación del territorio; en este contenido se deberá definir:
	Las políticas, objetivos y estrategias para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de recursos naturales, con la definición de las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
	La identificación de las acciones sobre el territorio que posibiliten organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor competitividad en función de la vocación, oportunidades y capacidades territoriales.
	La definición de las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las estrategias de desarrollo económico, ambiental y social del municipio o distrito.
<b>Componente General Contenido Estructural</b>	Comprende la definición del modelo de ocupación del territorio que corresponde a la estructura urbano-rural e intraurbana definida para el largo plazo que fija de manera general la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades, determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece las características de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción entre aquellas actividades espacialmente separadas de conformidad con la identificación y reglamentación de las disposiciones establecidas en el contenido estructural.
	Estructurar las áreas de protección y conservación ambiental
	Estructurar las áreas de conservación del patrimonio material: Corresponde a las áreas o inmuebles declarados que hacen parte del patrimonio material, sobre los cuales se debe establecer las normas urbanísticas aplicables, sin perjuicio que las mismas se precisen o se establezcan de manera específica en el Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP-.
	Las zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos humanos.
	La clasificación del suelo en urbano, rural y de expansión urbana.

<sup>438</sup> Artículo 2.2.2.1.2.1.3 Etapa de formulación, subsección 1, el proceso de planificación territorial Etapas, Decreto 1232 de 2020

	Señalar y localizar las infraestructuras básicas existentes y proyectadas que garanticen las adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y rurales, así como la reglamentación de las áreas de reserva para la infraestructura vial y de transporte, espacio público, los equipamientos, infraestructura de servicios públicos domiciliarios.
<b>Componente urbano</b>	El contenido del componente urbano determina las normas y decisiones para la administración del desarrollo, ocupación y gestión del suelo clasificado como urbano y de expansión urbana.
	Las políticas de mediano y corto plazo sobre uso y ocupación del suelo urbano y de las áreas de expansión, en armonía con el modelo de ocupación del territorio de largo plazo adoptado en el componente general y con las previsiones sobre transformación y crecimiento espacial de la ciudad.
	La delimitación de las áreas de conservación y protección ambiental.
	La delimitación de las áreas de conservación y protección del patrimonio material.
	La delimitación de las zonas con condición de amenaza y zonas con condición de riesgo.
	Las directrices y parámetros para la formulación de planes parciales, las acciones urbanísticas, actuaciones, instrumentos de financiación y otros procedimientos aplicables en las áreas sujetas de urbanización u operaciones urbanas por medio de dichos planes.
	La determinación de las características de las unidades de actuación urbanística, tanto dentro del suelo urbano como del suelo de expansión, cuando a ello hubiere lugar, o en su defecto el señalamiento de los criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e incorporación posterior.
	Los objetivos, las estrategias e instrumentos para la ejecución de programas de vivienda de interés social.
	La determinación de los tratamientos urbanísticos para la totalidad del suelo urbano y de expansión urbana considerando entre otros, los parámetros generales que permitan la zonificación de las áreas receptoras y generadoras de los derechos transferibles de construcción y desarrollo, y, la definición de las normas urbanísticas relacionadas con el trazado (morfología, vías y espacio público) y la edificabilidad (alturas, volumetría, índices, aislamientos, voladizos, entre otros).
	La localización de las áreas de actividad con el correspondiente régimen de usos para la totalidad del suelo urbano
	Las disposiciones o criterios de localización y dimensionamiento de los elementos o áreas de los sistemas generales o estructurantes del territorio aplicables para el suelo urbano así como el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes.
<b>Componente Rural</b>	El componente rural determina las normas y decisiones para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo rural, y las actuaciones públicas tendientes a proporcionar la infraestructura y el equipamiento básico necesario para el servicio de la población rural. Deberá contener:
	Las políticas de mediano y corto plazo para el uso y ocupación del suelo rural de acuerdo con lo establecido en el componente general.
	La reglamentación de actividades y usos del suelo. Los usos del suelo se establecerán para cada área de actividad, en principales, compatibles o complementarios, condicionados o restringidos y/o prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible o complementario, condicionado o restringido se entenderá prohibido.
	El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.
	La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, así como de las zonas de amenaza y riesgo y de las que forman parte del sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios o de disposición de desechos.
	La localización y dimensionamiento las zonas determinadas como suburbanas.
	La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de

	servicios básicos y de equipamiento social.
	La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos y saneamiento básico.
	La localización prevista para los equipamientos de salud y educación.
	La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.
	Las normas para el desarrollo de vivienda en suelo rural para atender las necesidades de la población que habita esta clase de suelo, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.
<b>Programas y proyectos</b>	Los programas y proyectos permiten materializar los objetivos y el modelo de ocupación del territorio para la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial POT. Por lo tanto, se deben definir los programas y proyectos con base en los cuales se deberán elaborar los programas de ejecución que se formulan para cada vigencia del plan de ordenamiento territorial (corto, mediano y largo plazo).
<b>Instrumentos de gestión</b>	Determinan mecanismos administrativos y arreglos institucionales para facilitar la ejecución de actuaciones urbanísticas, la reconfiguración jurídica y física de los inmuebles necesaria para el reparto equitativo de cargas y beneficios, los cuales deben adelantar las entidades públicas y los particulares en el marco de la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, tales como: unidades de actuación urbanística, reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación entre partícipes, transferencia de derechos, enajenación voluntaria, enajenación forzosa, expropiación judicial, expropiación administrativa, declaratorias de desarrollo prioritario y de utilidad pública, derecho de preferencia, banco inmobiliario.
<b>Instrumentos de Financiación</b>	Permiten la disposición de recursos para el desarrollo urbano y territorial y garantizan el reparto equitativo de las cargas asociadas al mismo. Dentro de estos instrumentos se encuentran: la contribución por valorización, la participación en plusvalía, los fondos de compensación, los derechos adicionales de construcción y desarrollo. La definición de la estrategia de financiación del Plan de Ordenamiento Territorial -POT que debe contemplar un análisis de viabilidad financiera de las intervenciones propuestas, el cual debe incluir dentro de las fuentes de financiación los ingresos corrientes disponibles de la administración municipal o distrital y lo proveniente de los instrumentos de financiación que se definan en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT. Las acciones de carácter administrativo, financiero y organizacional que permitan hacer operativo el Plan de Ordenamiento Territorial - POT. Las excepciones a las normas urbanísticas generales para operaciones tales como macroproyectos u otras actuaciones urbanas integrales, con el fin de habilitar la adopción y concertación posterior de normas específicas con propietarios y comunidades interesadas, de conformidad con el numeral 2.7 del artículo 15 de la Ley 388 de 1997 para lo cual en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT se señalarán los instrumentos, parámetros, procedimientos y requisitos que deben cumplirse en tales casos. Las directrices generales sobre los instrumentos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. Las unidades de actuación, la compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otros, son algunos de los mecanismos que garantizan este propósito.

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 2.2.2.1.2.1.3 del Decreto 1232 de 2020

La etapa de implementación inicia después de la aprobación. Comprende la ejecución y puesta en marcha del POT para las vigencias establecidas en el corto, mediano y largo plazo, al igual que el desarrollo de los instrumentos de gestión y financiación<sup>439</sup>. Por su parte, la etapa de

<sup>439</sup> Artículo 2.2.2.1.2.1.4 Subsección 1, el proceso de Planificación Territorial Etapas, Decreto 1232 de 2020.

seguimiento y evaluación sugiere un proceso permanente de supervigilancia al instrumento, con el fin de permitir su ajuste a las necesidades territoriales.

## **LISTA DE FIGURAS**

Figura 4A.01 Temporalidad de los Planes de Ordenamiento Territorial .....	470
Figura 4A.02 Instrumentos para la Administración Municipal.....	472
Figura 4A.03 Instrumentos para la Administración Municipal.....	474
Figura 4A.04 Etapas del proceso de planificación territorial .....	475

## **LISTA DE TABLAS**

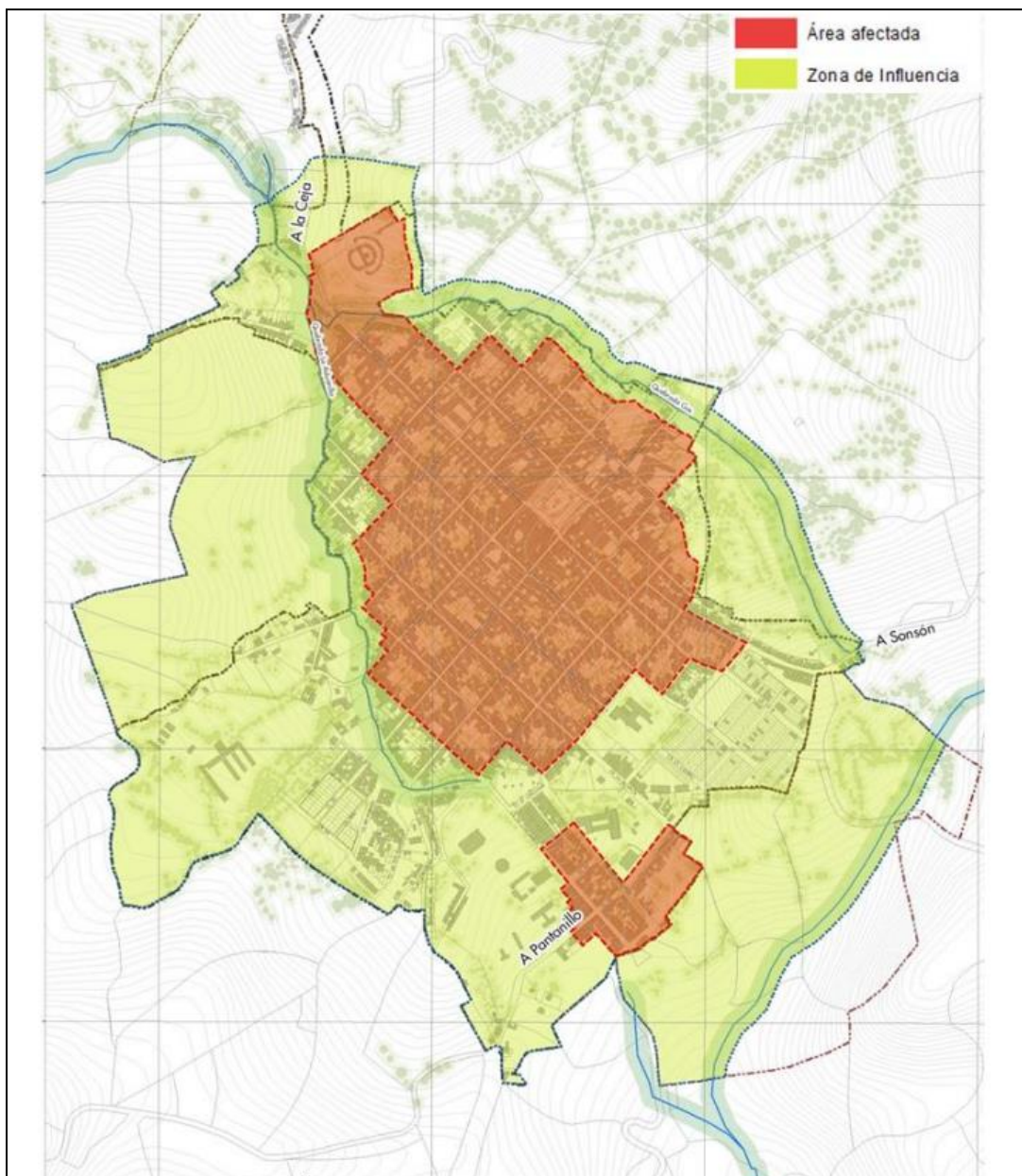
Tabla 4IV.01 Determinantes del ordenamiento Territorial .....	465
Tabla 4IV.02 Componentes del Plan de Ordenamiento Territorial.....	466
Tabla 4IV.03 Instrumentos para la Administración Municipal.....	471
Tabla 4IV.04 Etapa de Diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial.....	475
Tabla 4IV.05 Etapa de Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial .....	478

# **LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO EN COLOMBIA: 1954-2019**

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y EFECTOS URBANÍSTICOS EN LOS CENTROS  
HISTÓRICOS DEL ÁMBITO NACIONAL

## **ANEXO No. III: DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA Y ZONA DE INFLUENCIA DE LOS 45 CENTROS HISTÓRICOS BIC DEL ÁMBITO NACIONAL**

Arq. Oscar Yesid Fonseca Roa  
Directora: Dra. María de los Ángeles Castrillo Romón

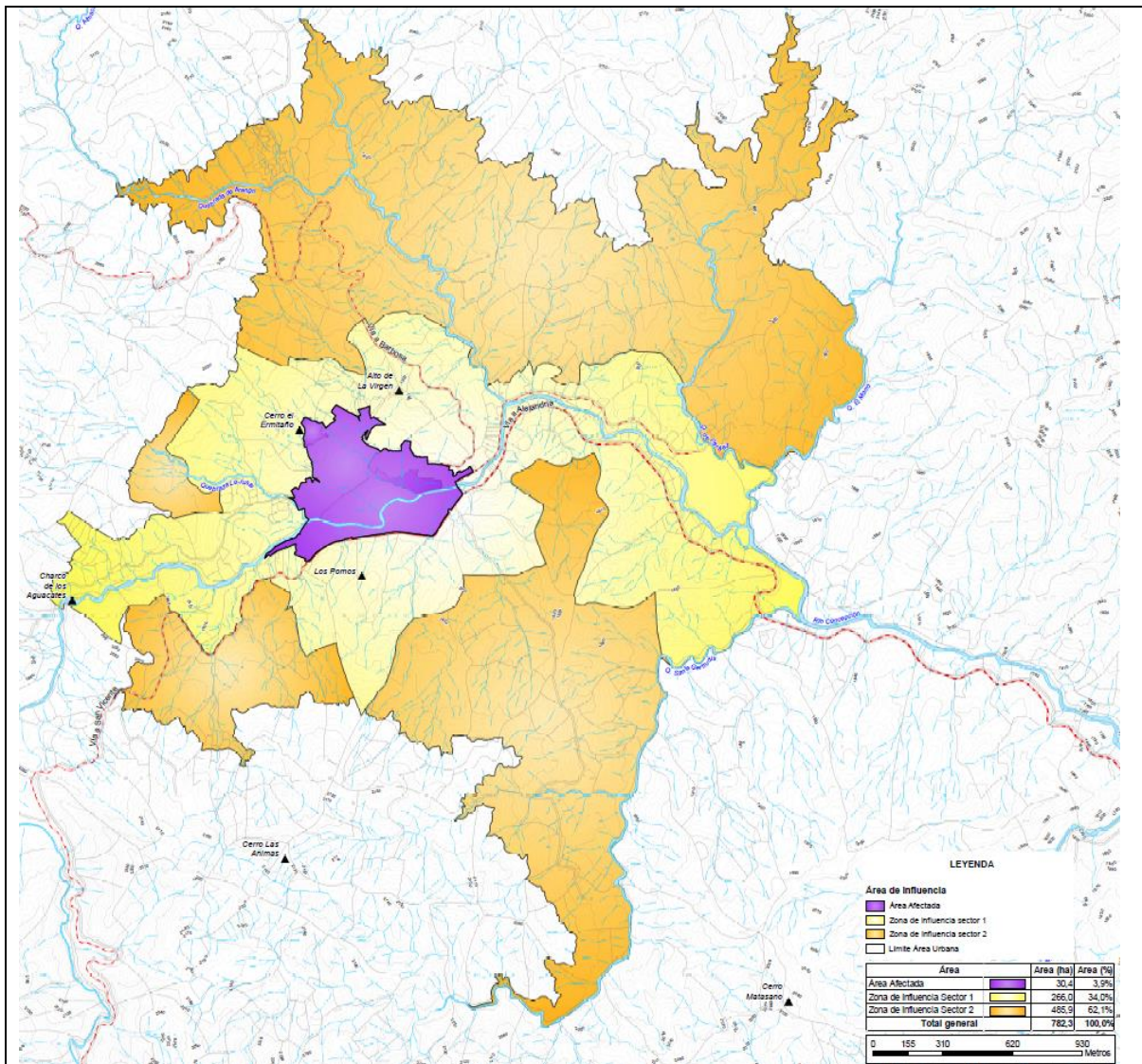


**Tabla 5V.01 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico del Municipio de Abejorral (Antioquia)**

Fuente: Fase II PEMP Abejorral, Antioquia 2013, Consorcio Pueblos Patrimoniales

	Área	Cantidad manzanas	Pedios
Área afectada	39,44 (Ha)	63	1.342
Zona de Influencia	95,87 (Ha)	85	1.232 (Predios urbanos) 16 (Predios rurales)





**Tabla 5V.02 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico del Municipio de Concepción (Antioquia)**

Fuente: Fase II PEMP Concepción, Antioquia 2019, Equipo Técnico PEMP

	Área	Cantidad manzanas	Pedios
Área afectada	30,4 (Ha)	27	798
Área de Influencia Sector 1	266,03 (Ha)		202 (Predios rurales)
Área de Influencia Sector 2	485,9 (Ha)		154 (Predios rurales)

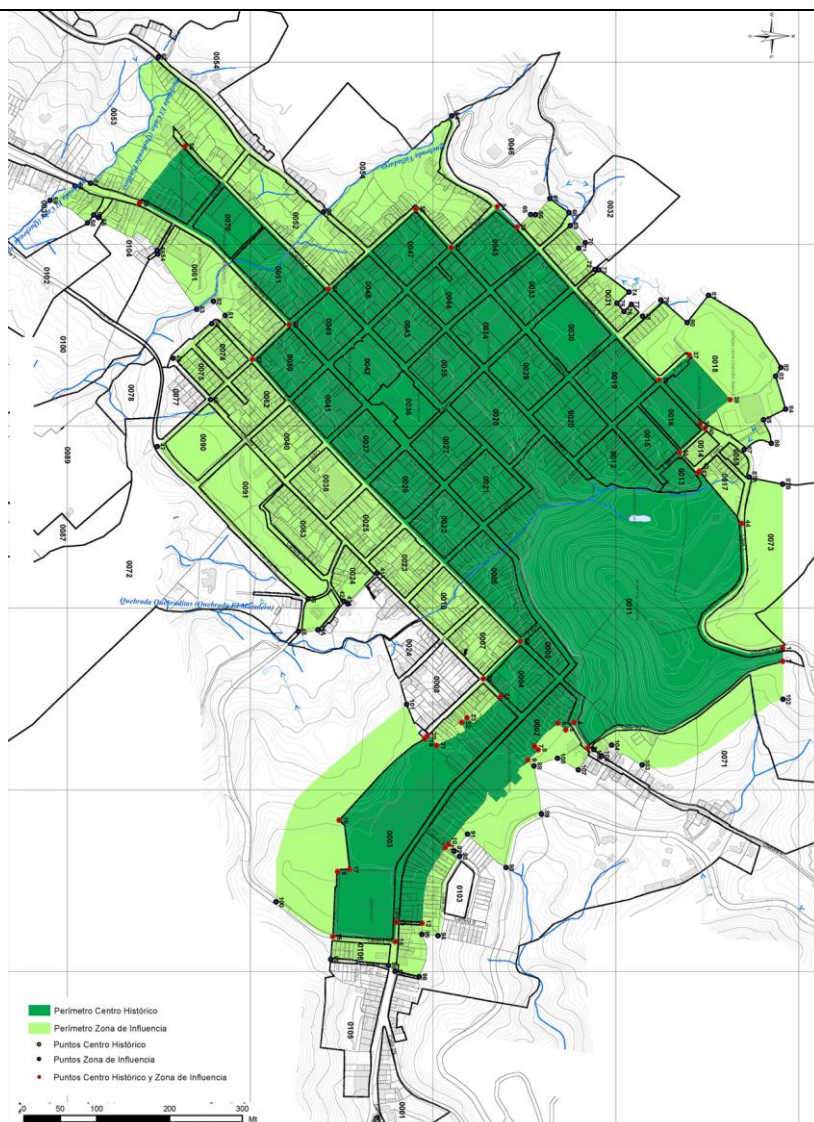


**Tabla 5V. 03 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Barranquilla (Atlántico)**

Fuente: Documento de Formulación, Documento de Formulación, Barranquilla 2003, Alcaldía de Barranquilla- BID

	Área	Cantidad manzanas	Pedios
Delimitación Área afectada	170,7 (Ha)	130	2340
Zona de Influencia	12,3 (Ha)	12	216

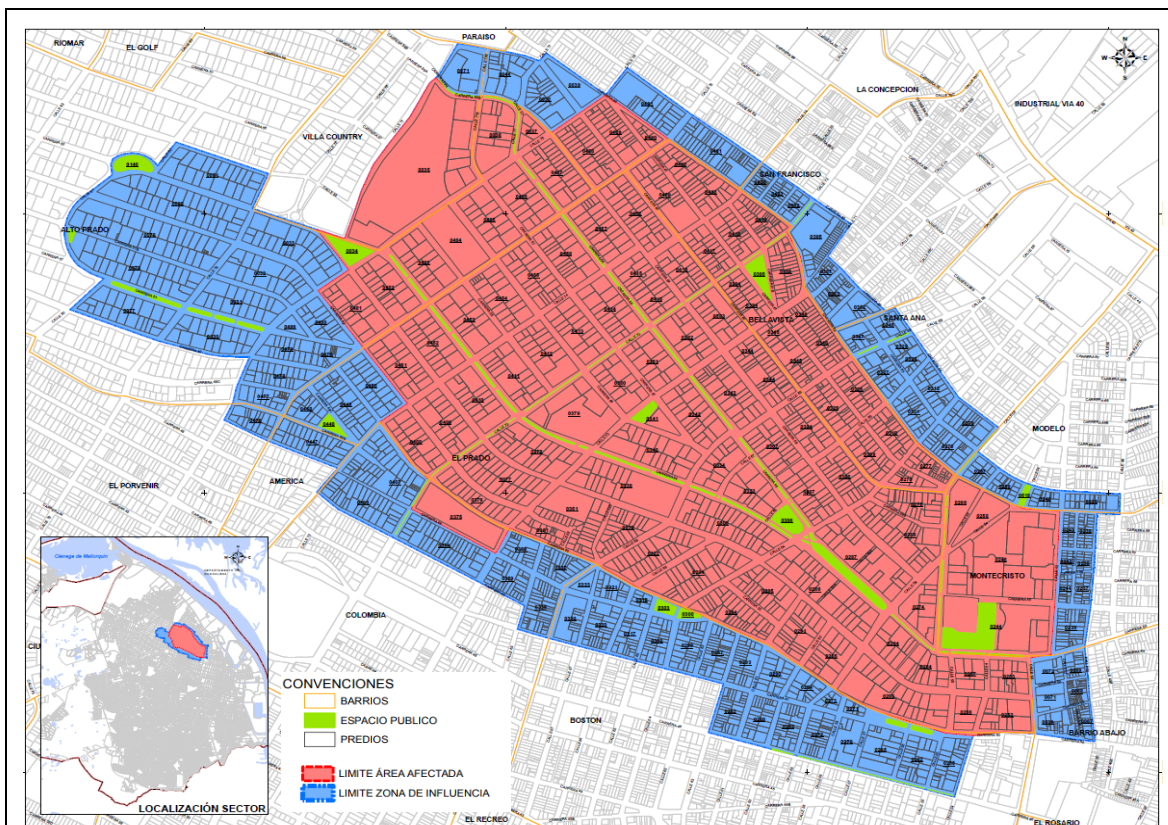




**Tabla 5V. 04 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Jericó (Antioquia)**

Fuente: Documento de Formulación, Fase II, Jericó 2018

	Área	Cantidad manzanas	Pedios
Área zona de influencia	34,23 (Ha)	37	771
Área afectada	24,41 (Ha)	33	612

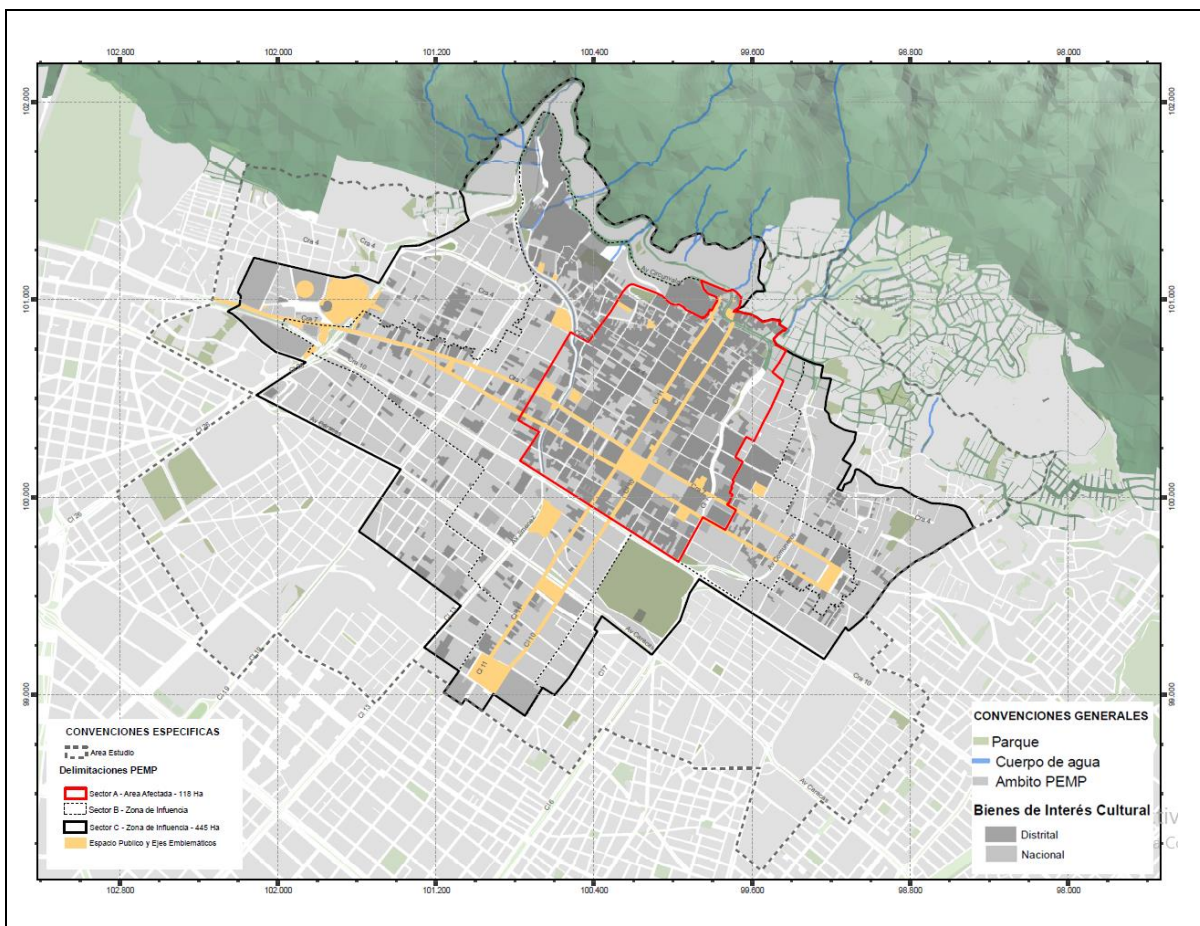


**Tabla 5V. 05 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Barrio El Prado, Bellavista y Altos del Prado de la Ciudad de Barranquilla (Atlántico)**

Fuente: Documento de Formulación PEMP, Volumen II Documento Técnico de Soporte de Formulación de la Propuesta Integral, diciembre 2020, Secretaría Distrital de Planeación, Barranquilla.

	Área	Cantidad manzanas	Predios
Área afectada	202, 24 (Ha)	154	2775
Zona de influencia	112, 613 (Ha)	85	1547

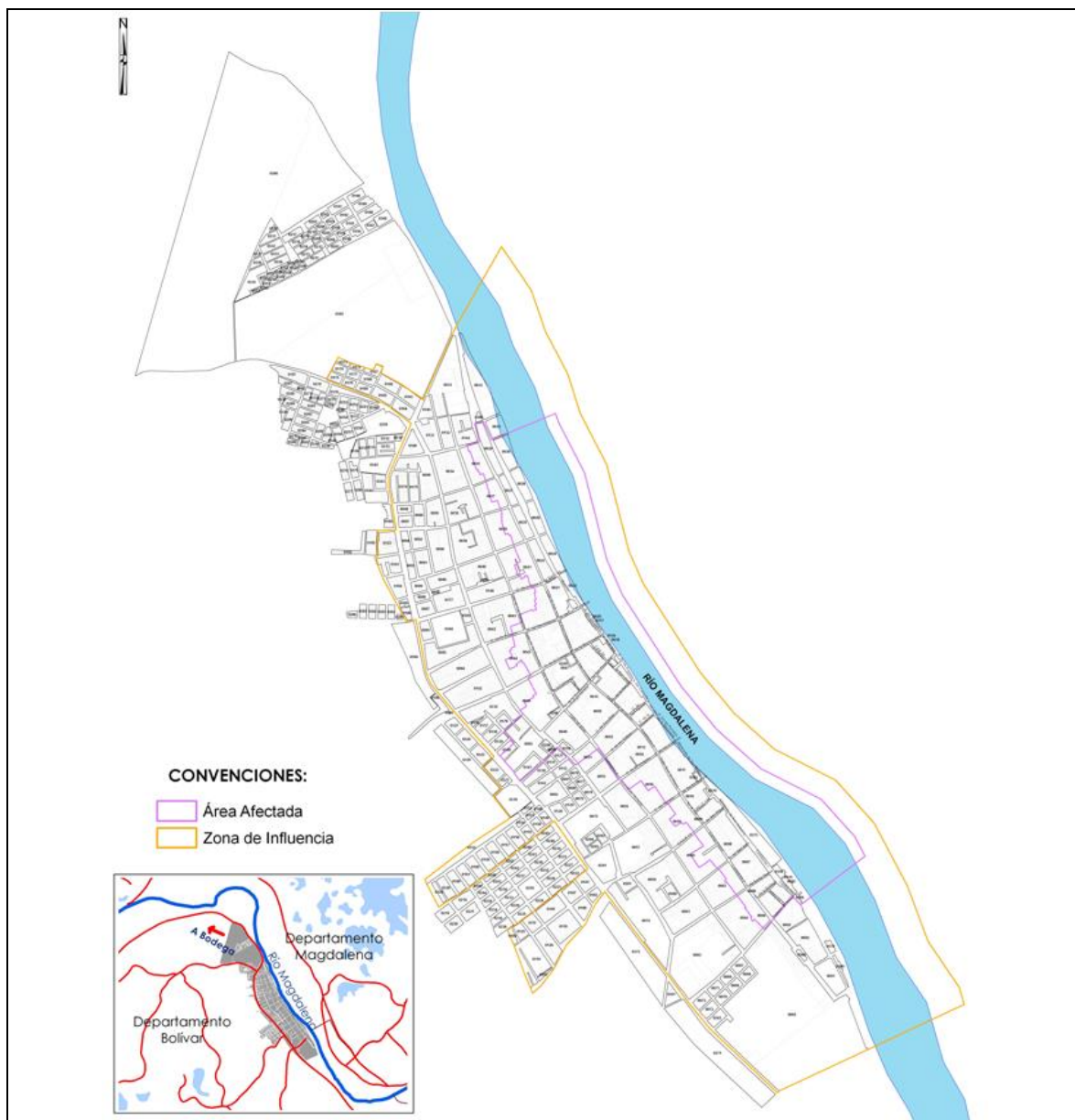




**Tabla 5V. 05 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Bogotá D.C**

Fuente: Documento Técnico de Soporte, Formulación Tomo II PEMP Centro Histórico de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Distrital, 2020

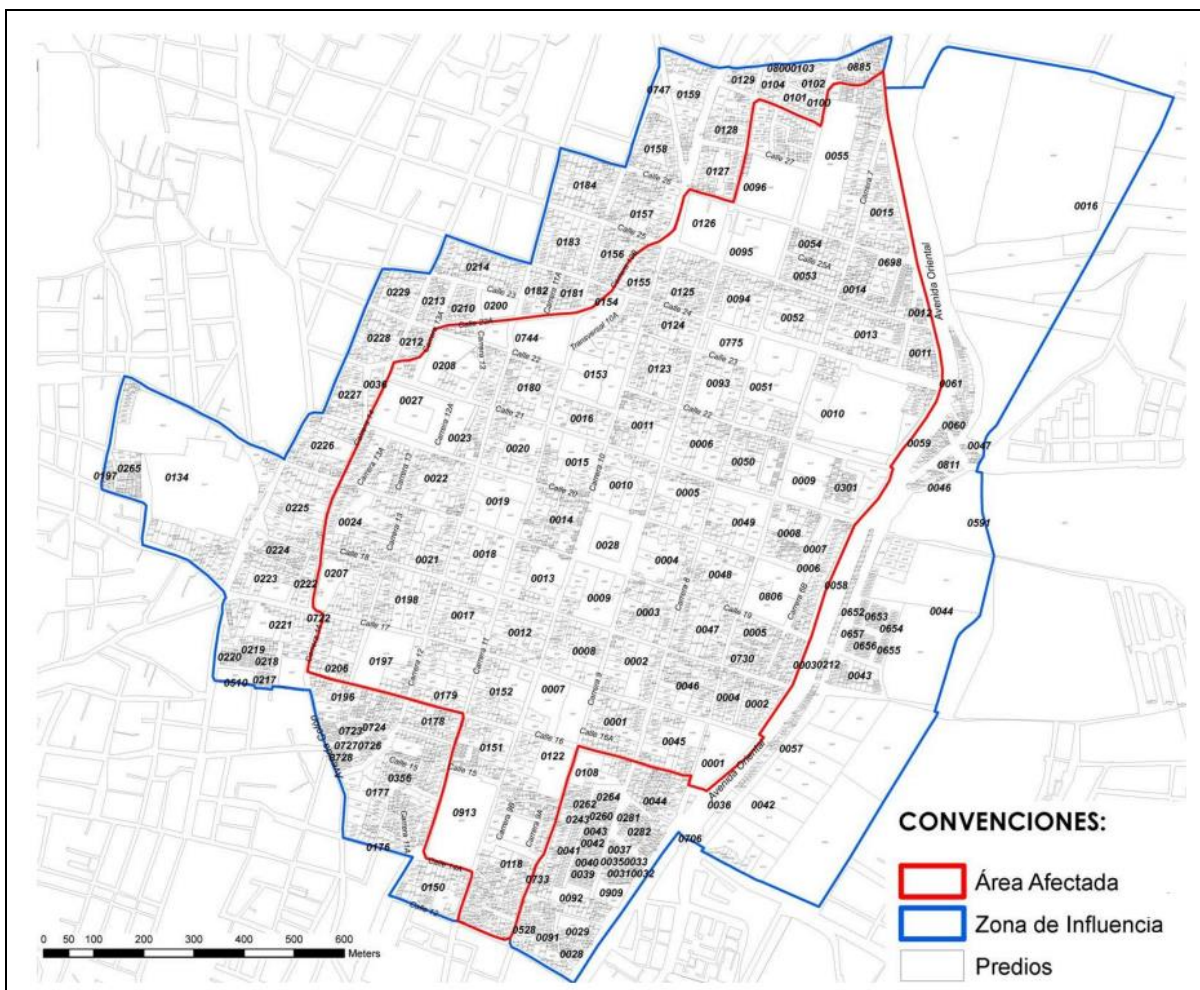
	Área	Cantidad manzanas	Predios
Área afectada	162 (Ha)	123	2.501
Zona de Influencia	673 (Ha)	513	8.253



**Tabla 5V. 06 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Mompox (Bolívar)**

Fuente: Documento Técnico de Soporte, Formulación Tomo II PEMP Centro Histórico de Mompox, 2020

	Área	Cantidad manzanas	Pedios
Área afectada	265,45(Ha)	138	2.484
Zona de Influencia	86,24(Ha)	65	1.250

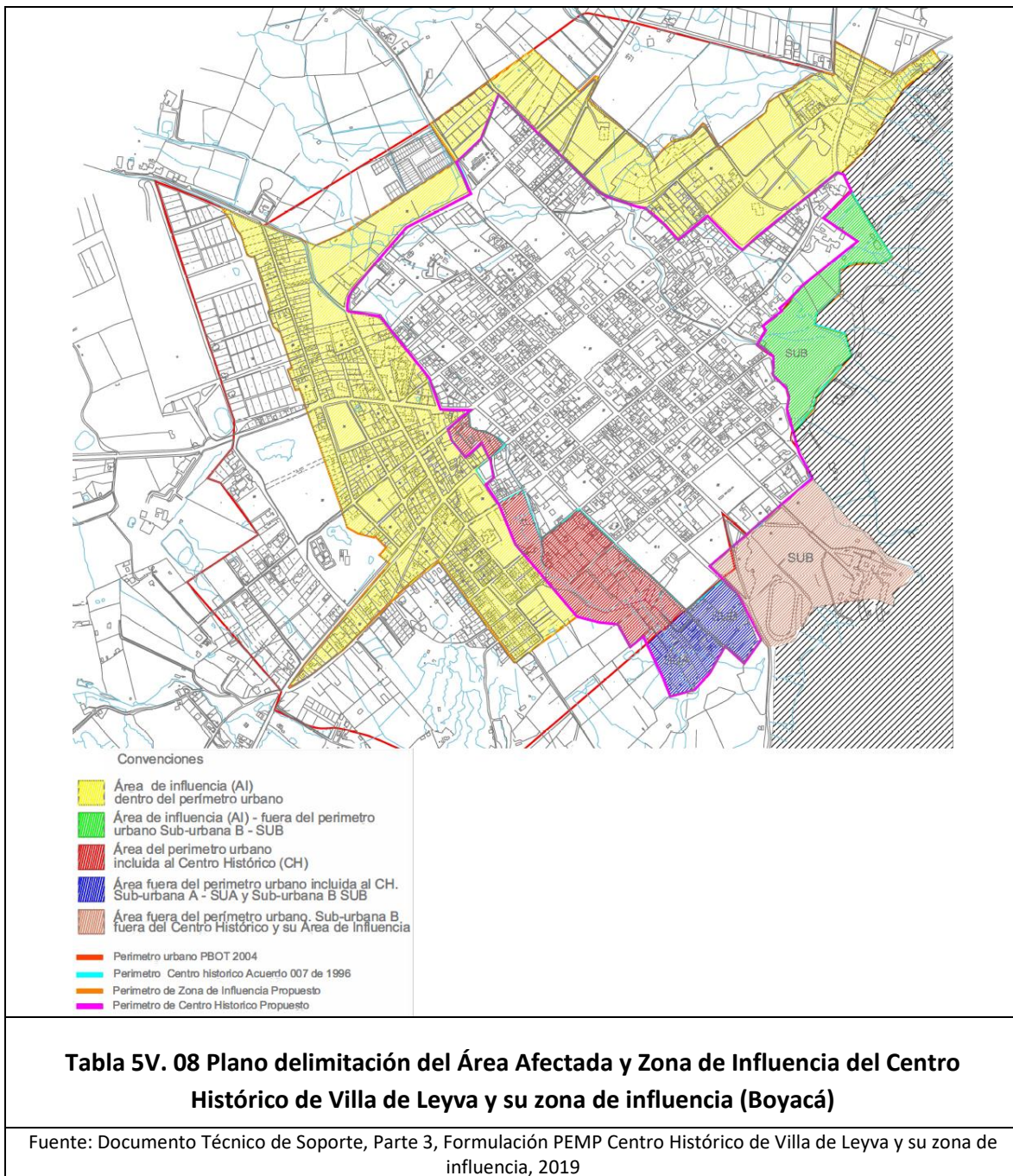


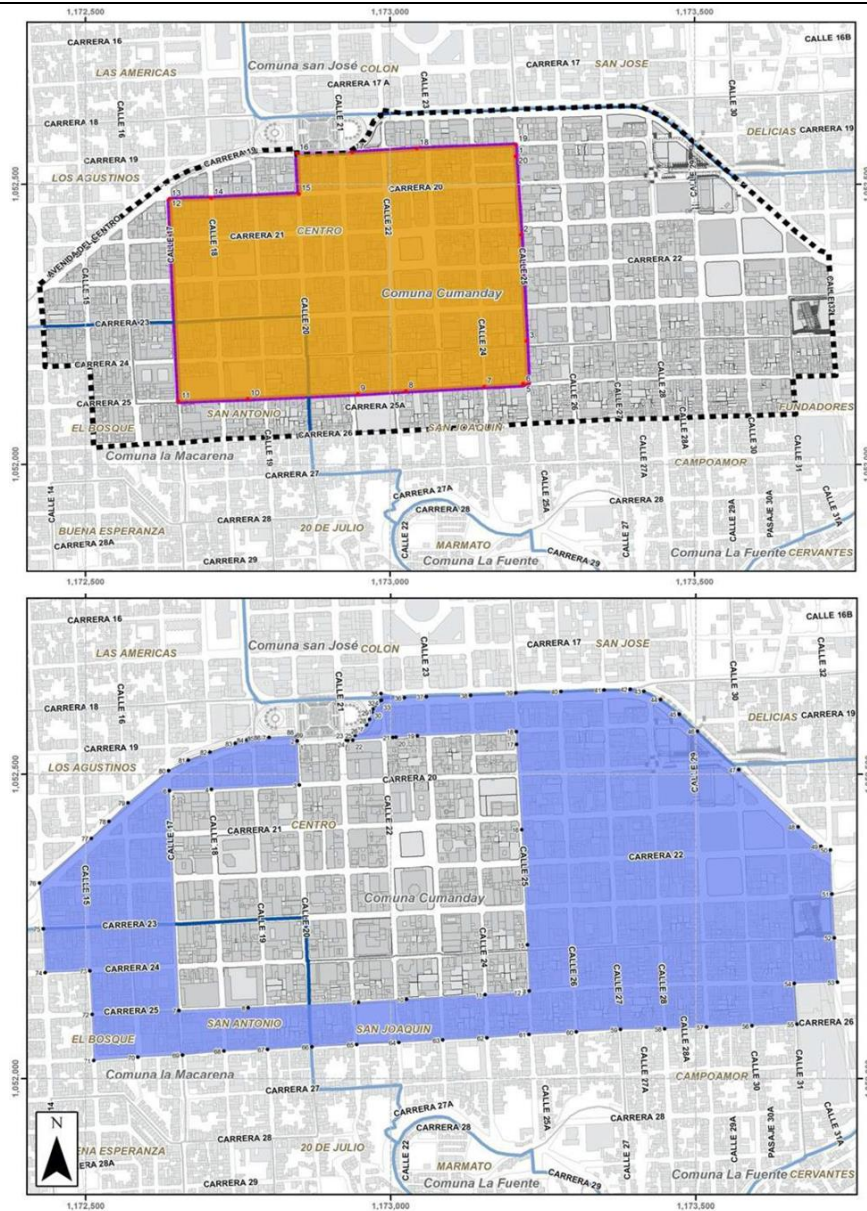
**Tabla 5V. 07 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Tunja (Boyacá)**

Fuente: Documento Técnico de Soporte, Formulación Tomo II PEMP Centro Histórico de Tunja, 2010

	Área	Cantidad manzanas	Pedios
Área afectada	112,41 (Ha)	99	2.411
Zona de Influencia	106,71 (Ha)	108	2.094







**Tabla 5V. 09 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Manizales (Caldas)**

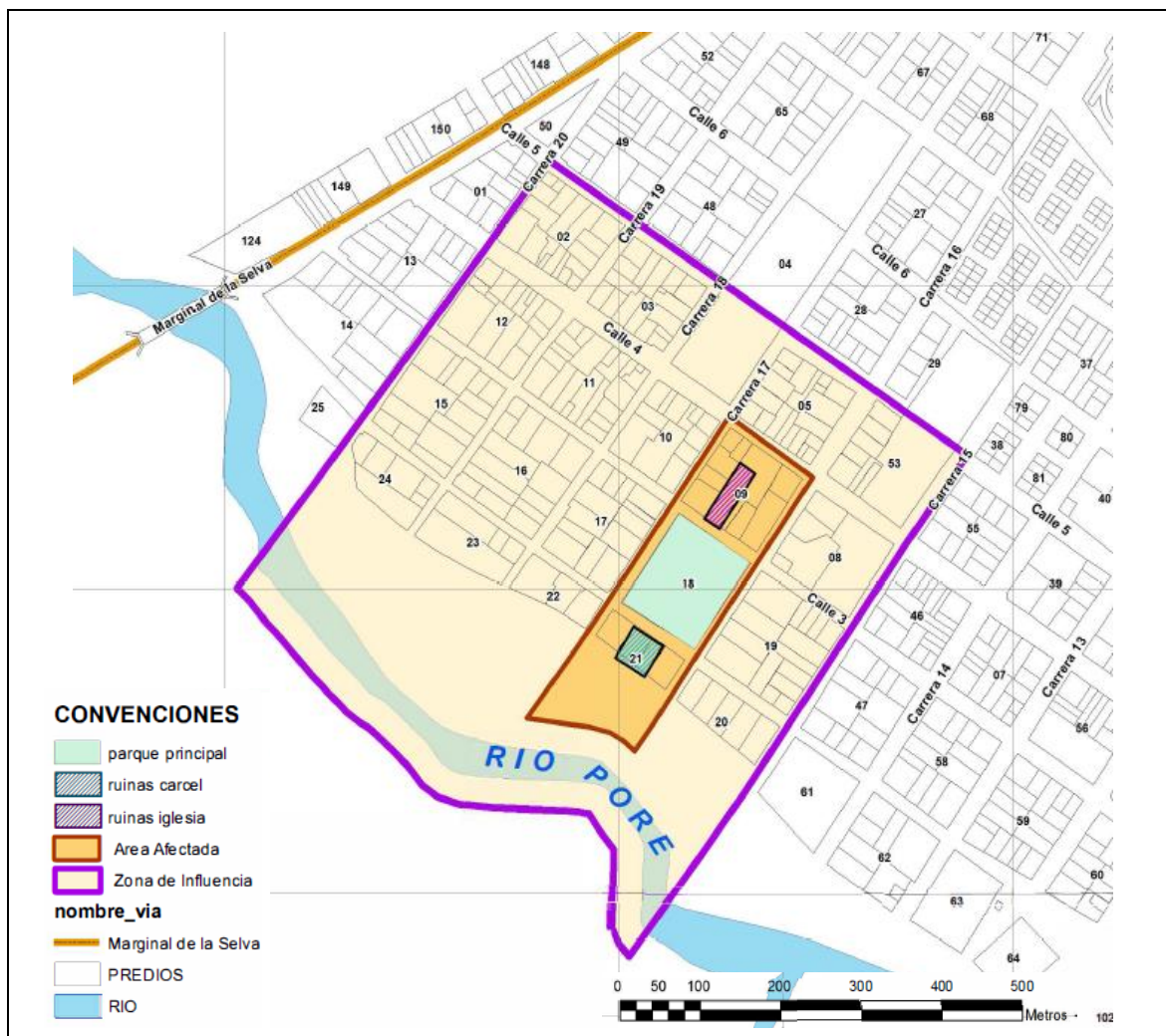
Fuente: Documento Técnico de Soporte, Formulación PEMP Centro Histórico de Manizales, 2019

	Área	Cantidad manzanas	Pedios
Área afectada	62,88 (Ha)	48	865
Zona de Influencia	98,25(Ha)	75	1.357





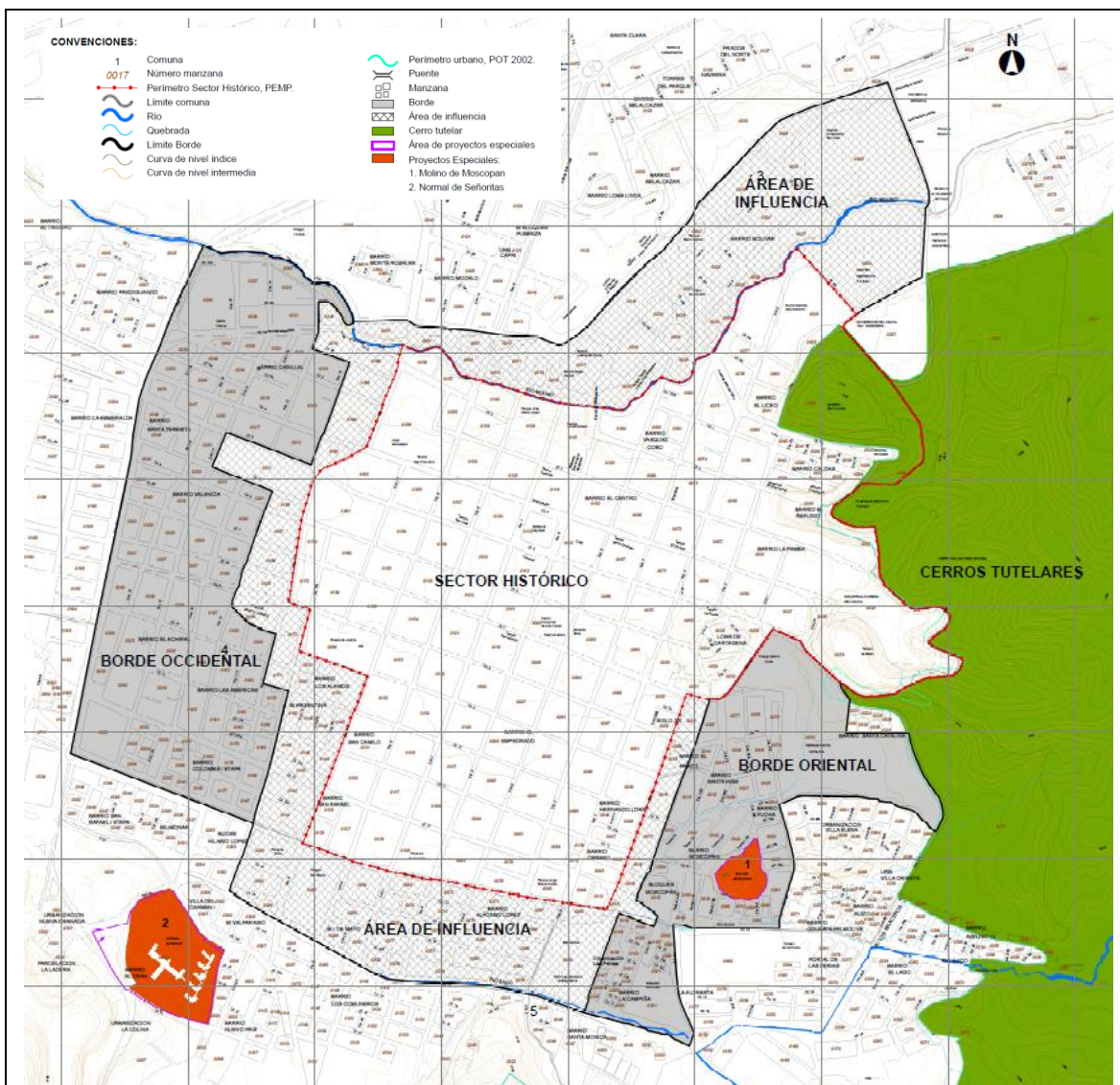




**Tabla 5V. 11 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Pore (Casanare)**

Fuente: Documento Técnico de Soporte, Formulación Tomo II PEMP Centro Histórico de Tunja, 2010

	Área	Cantidad manzanas	Predios
Área afectada	35.144(M2) / 3,51 (Ha)	2	14
Zona de Influencia	254.920 (M2) /25,49 (Ha)	16	192

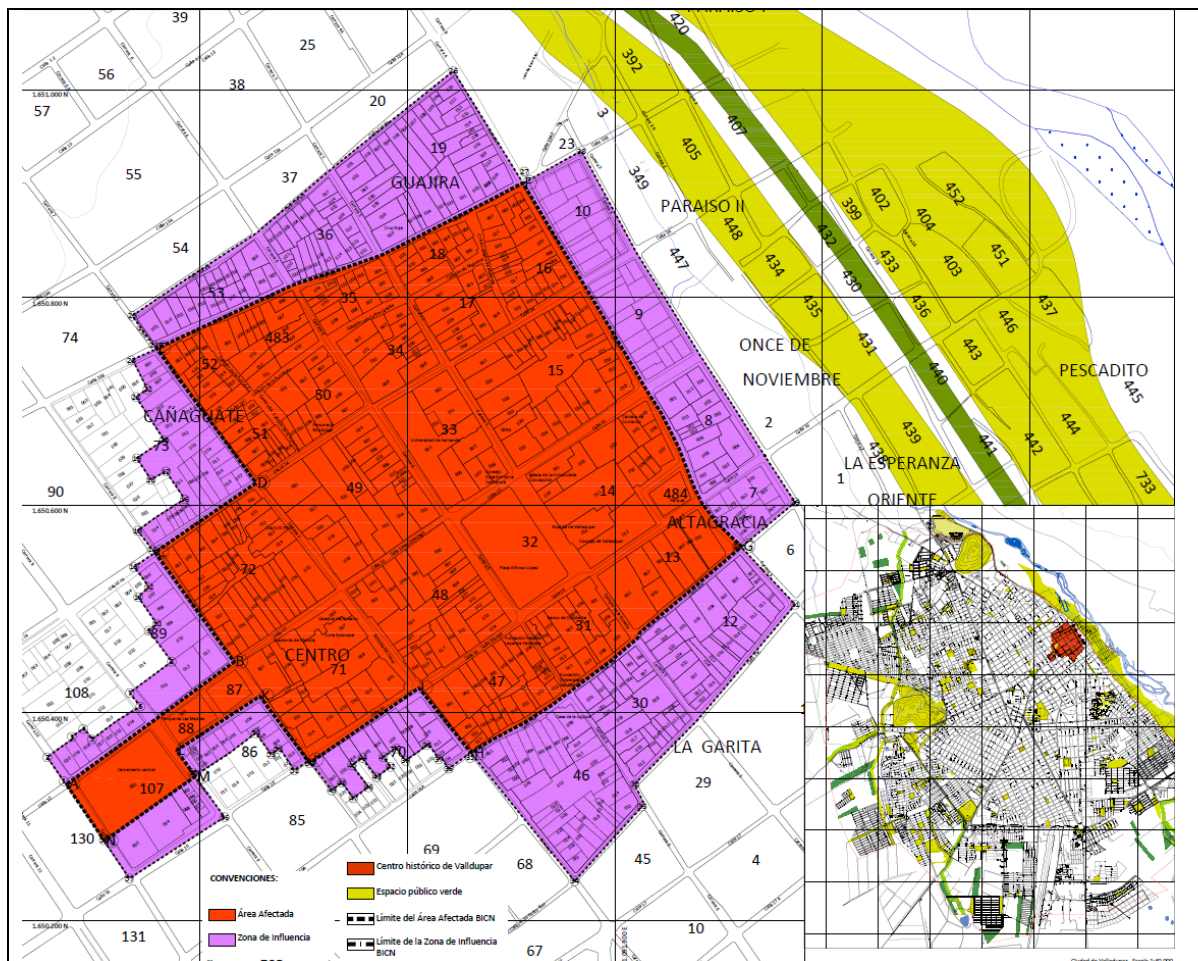


**Tabla 5V. 12 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Popayán (Cauca)**

Fuente: PEMP del sector histórico de Popayán. Popayán, 2008

	Área	Cantidad manzanas	Pedios
Área afectada	35,40 (Ha)	27	1350
Zona de Influencia	78,35 (Ha)	59	1076

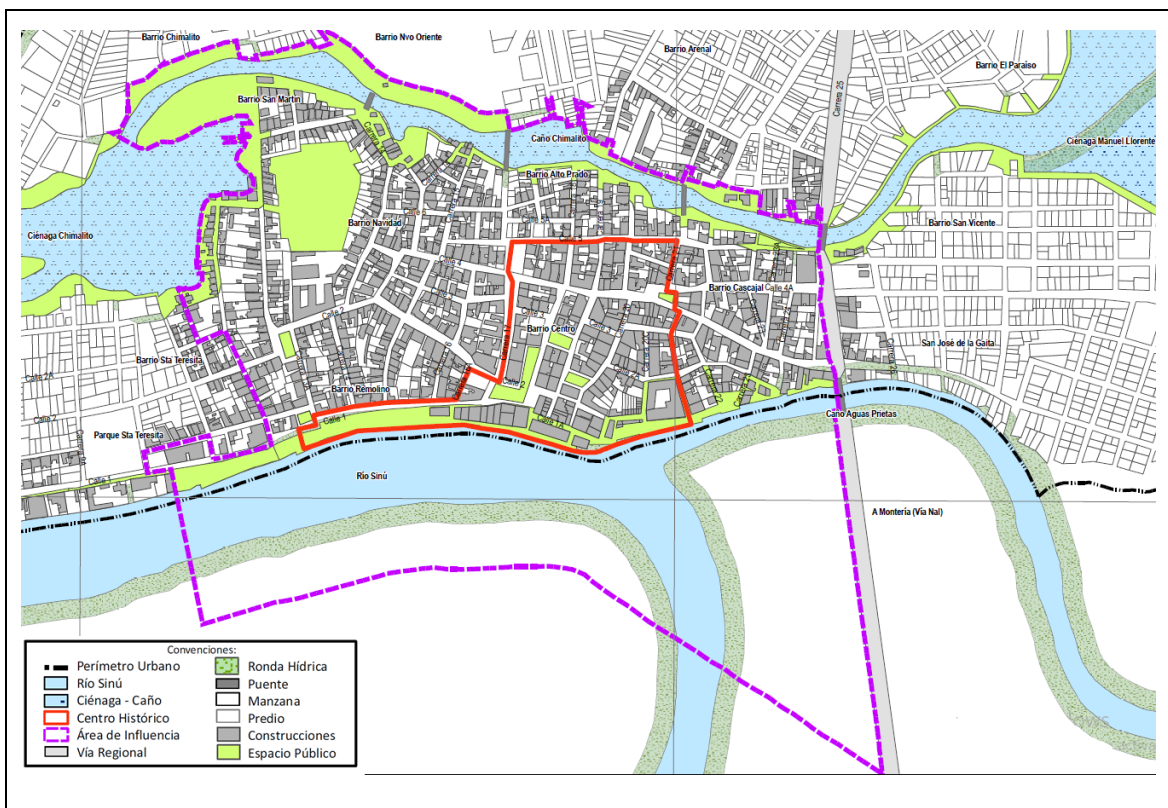




**Tabla 5V. 13 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Valledupar (Cesar)**

Fuente: Formulación y complementación PEMP del Centro Histórico de Valledupar y su zona de influencia, Valledupar, 2013

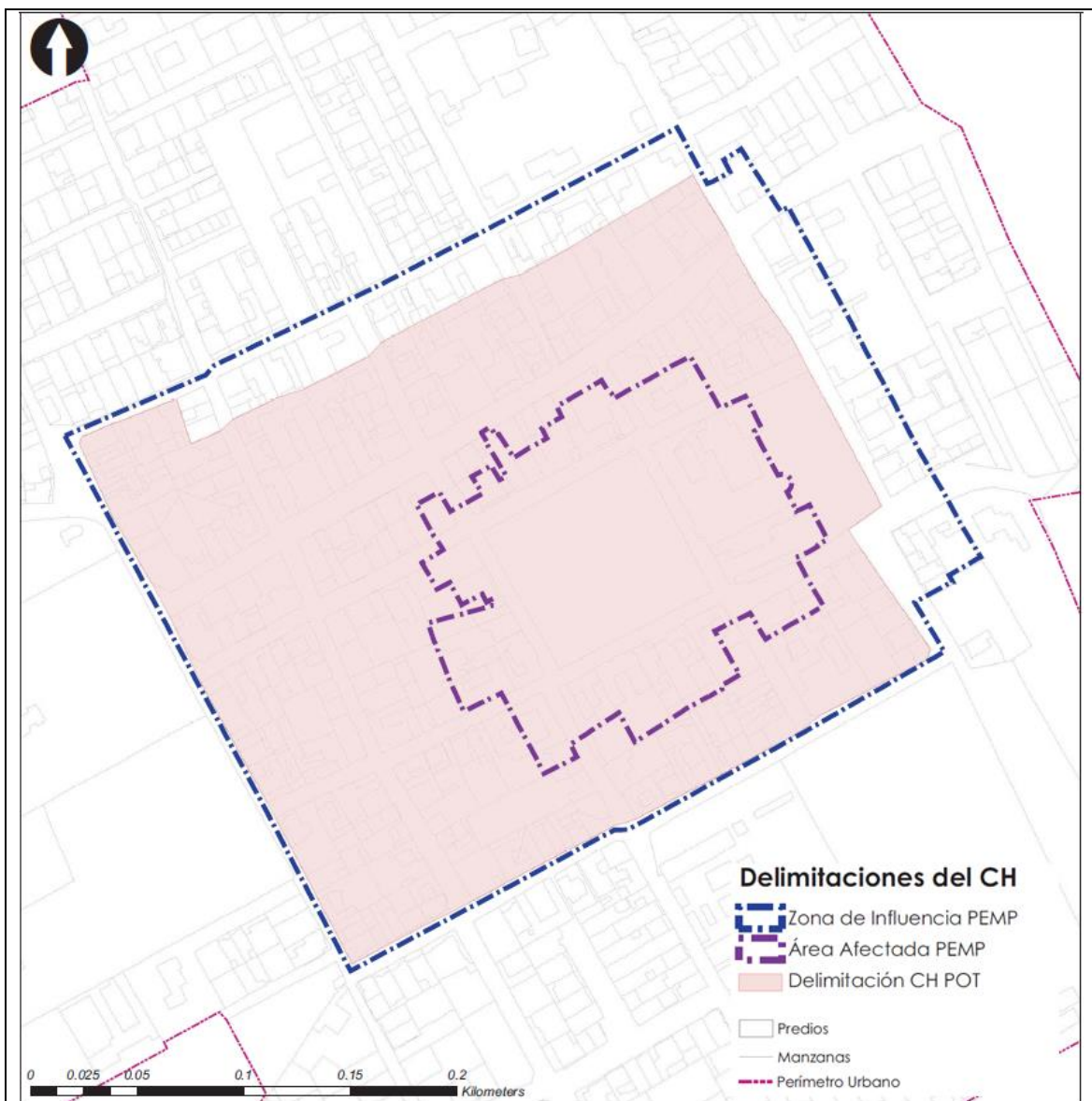
	Área	Cantidad manzanas	Pedios
Área afectada	292.936,02 (M2) / 29,29 (Ha)	22	402
Zona de Influencia	128.441,50 (M2) (12,84 (Ha)	10	185



**Tabla 5V. 14 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Santa Cruz de Lórica (Córdoba)**

Fuente: PEMP Centro Histórico Santa Cruz de Lórica. Lórica, 2010

	Área	Cantidad manzanas	Predios
Área afectada	96.334,45 (M2) / 9,63 (Ha)	27	196
Zona de Influencia	45.312,55 (M2) /4,53 (Ha)	59	655

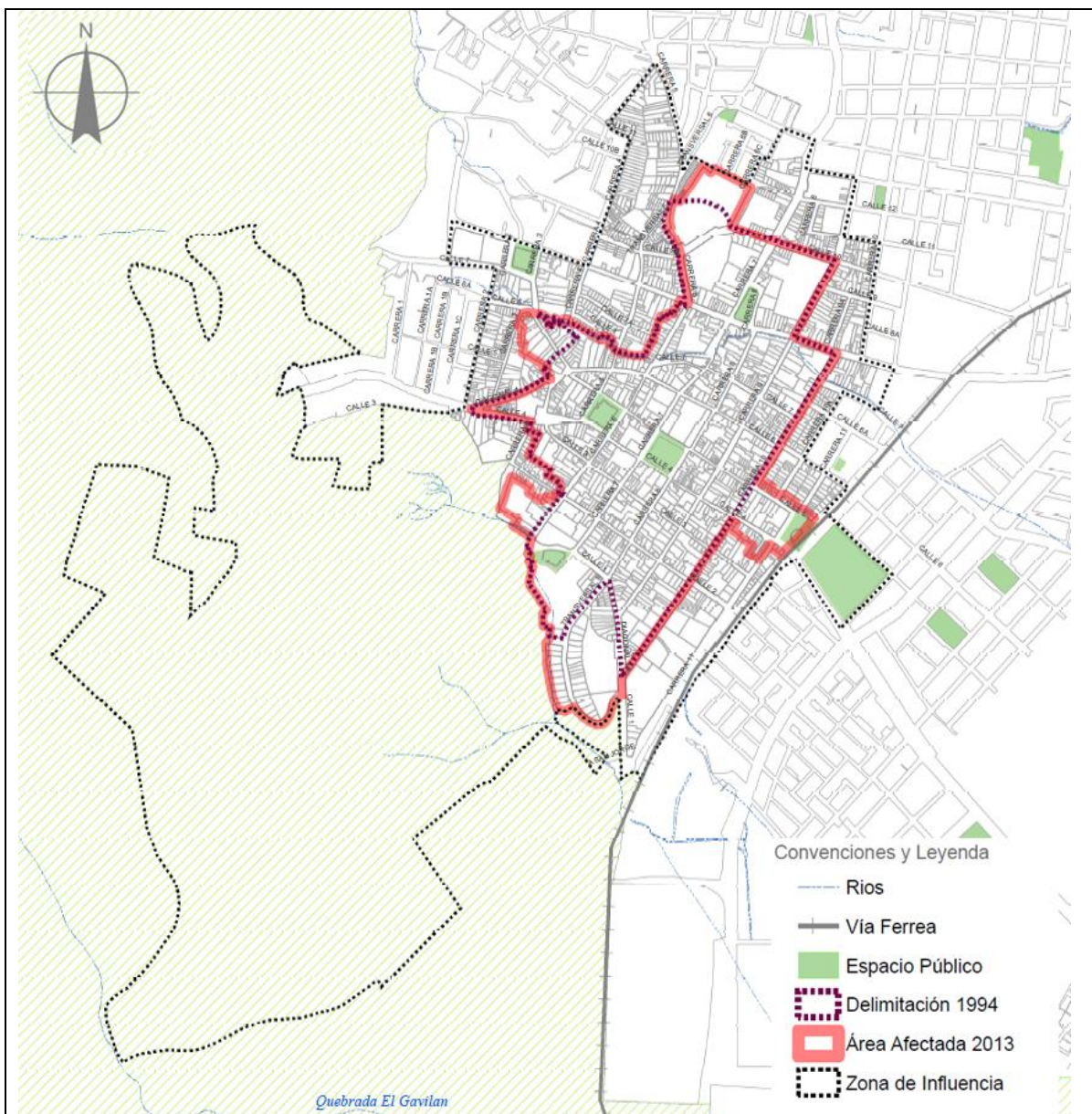


**Tabla 5V. 15 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Tenjo (Cundinamarca)**

Fuente: PEMP Centro Histórico de Tenjo. Tenjo, 2009

	Área	Cantidad manzanas	Predios
Área afectada	11,79 (Ha)	9	31
Zona de Influencia	24,89 (Ha)	19	242



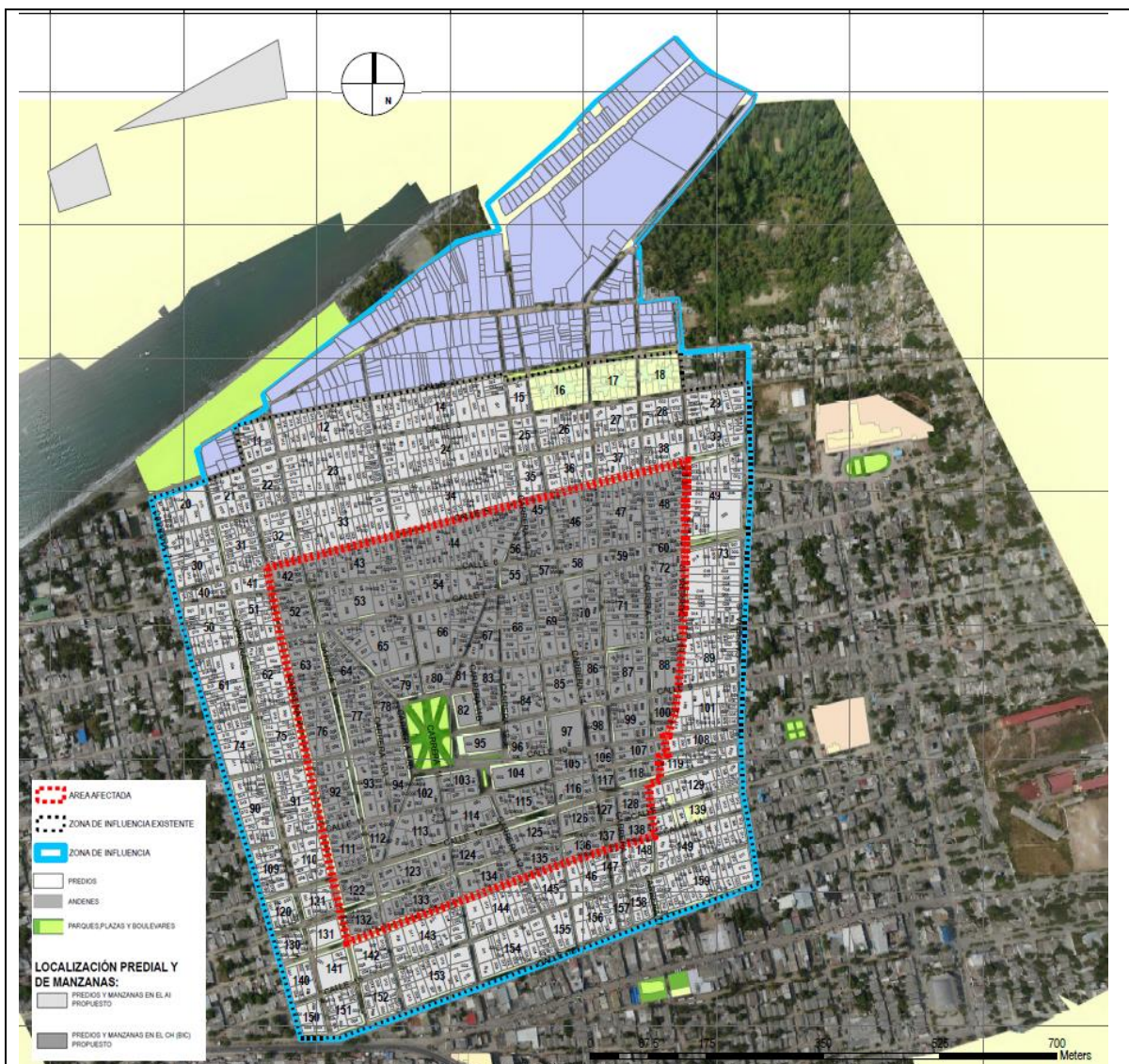


**Tabla 5V. 16 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Zipaquirá (Cundinamarca)**

Fuente: PEMP Centro Histórico de Zipaquirá y su zona de influencia. Tomo II Formulación, 2014

	Área	Cantidad manzanas	Predios
Área afectada	505.535 (M2) / 50,55 (Ha)	62	1116
Zona de Influencia	1.723.255 (M2) / 172,32 (Ha)	33	594

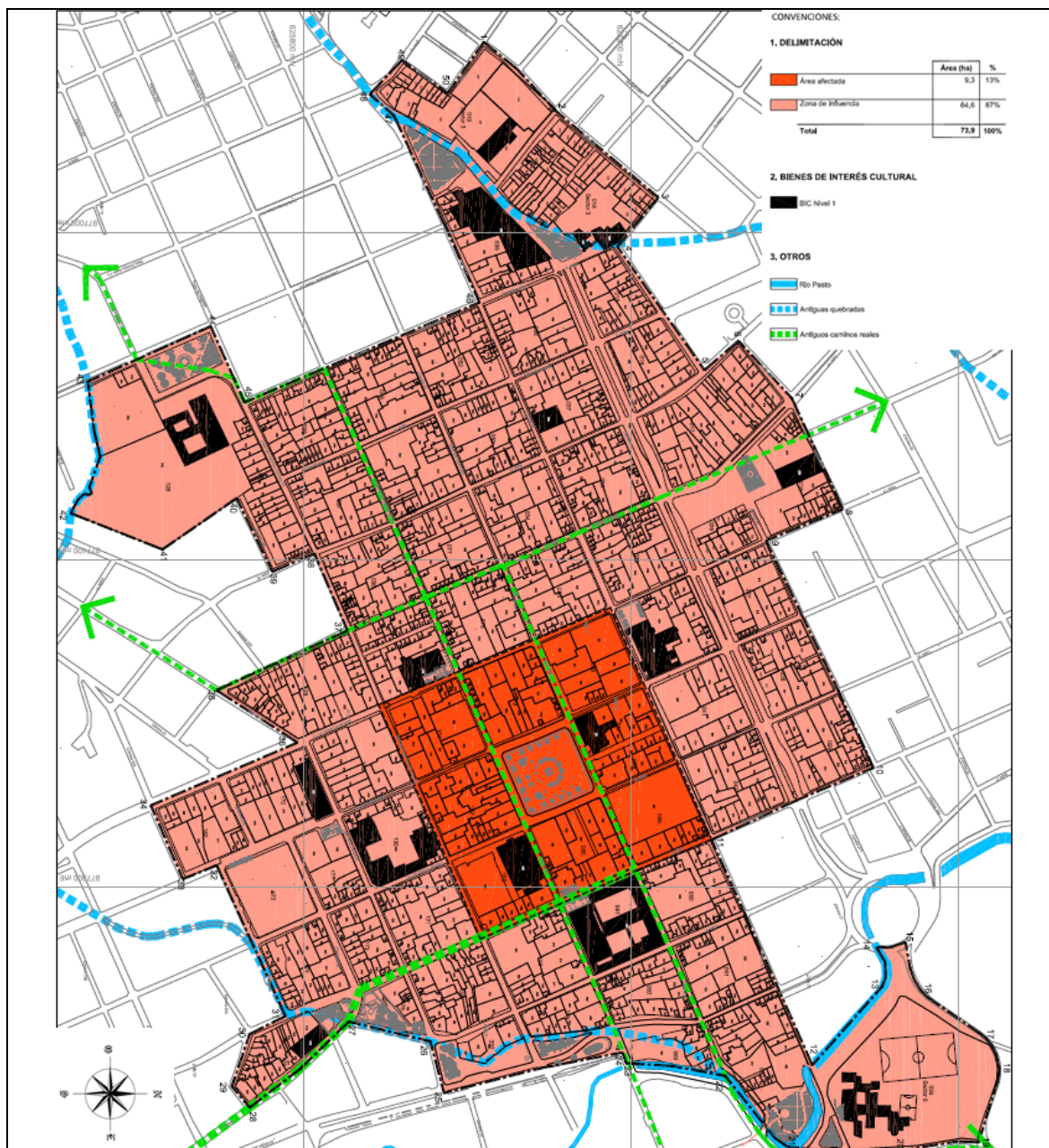




**Tabla 5V. 17 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Ciénaga (Magdalena)**

Fuente: PEMP Centro Histórico de Ciénaga. DTS Formulación, 2016

	Área	Cantidad manzanas	Predios
Área afectada	89,53 (Ha)	76	1596
Zona de Influencia	153,60 (Ha)	128	2688

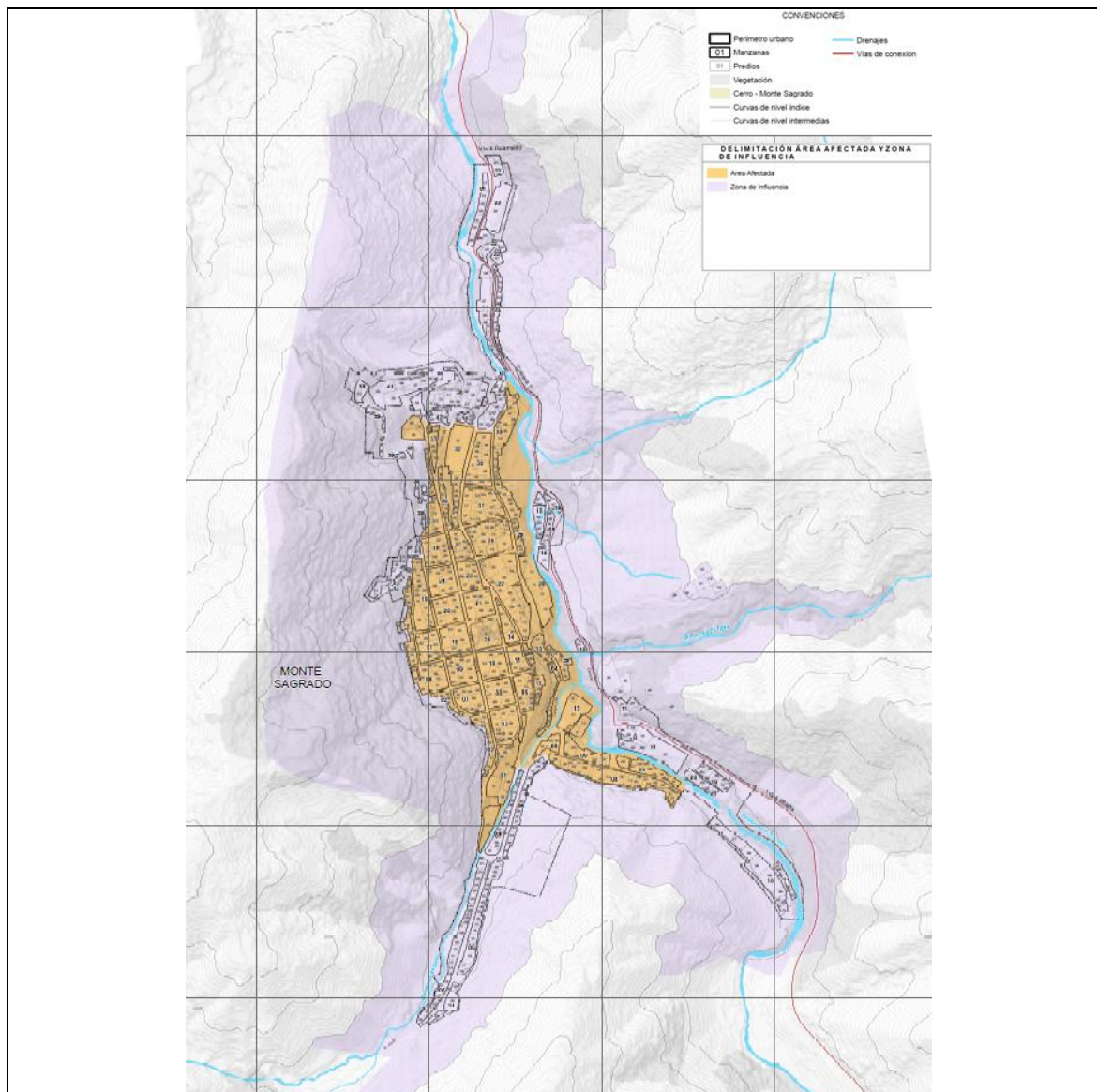


**Tabla 5V. 18 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Pasto (Nariño)**

Fuente: PEMP Centro Histórico de Pasto. Volumen I: Formulación propuesta Integral DTS, 2011

	Área	Cantidad manzanas	Predios
Área afectada	9,3 (Ha)	9	167
Zona de Influencia	64,6 (Ha)	84	1692



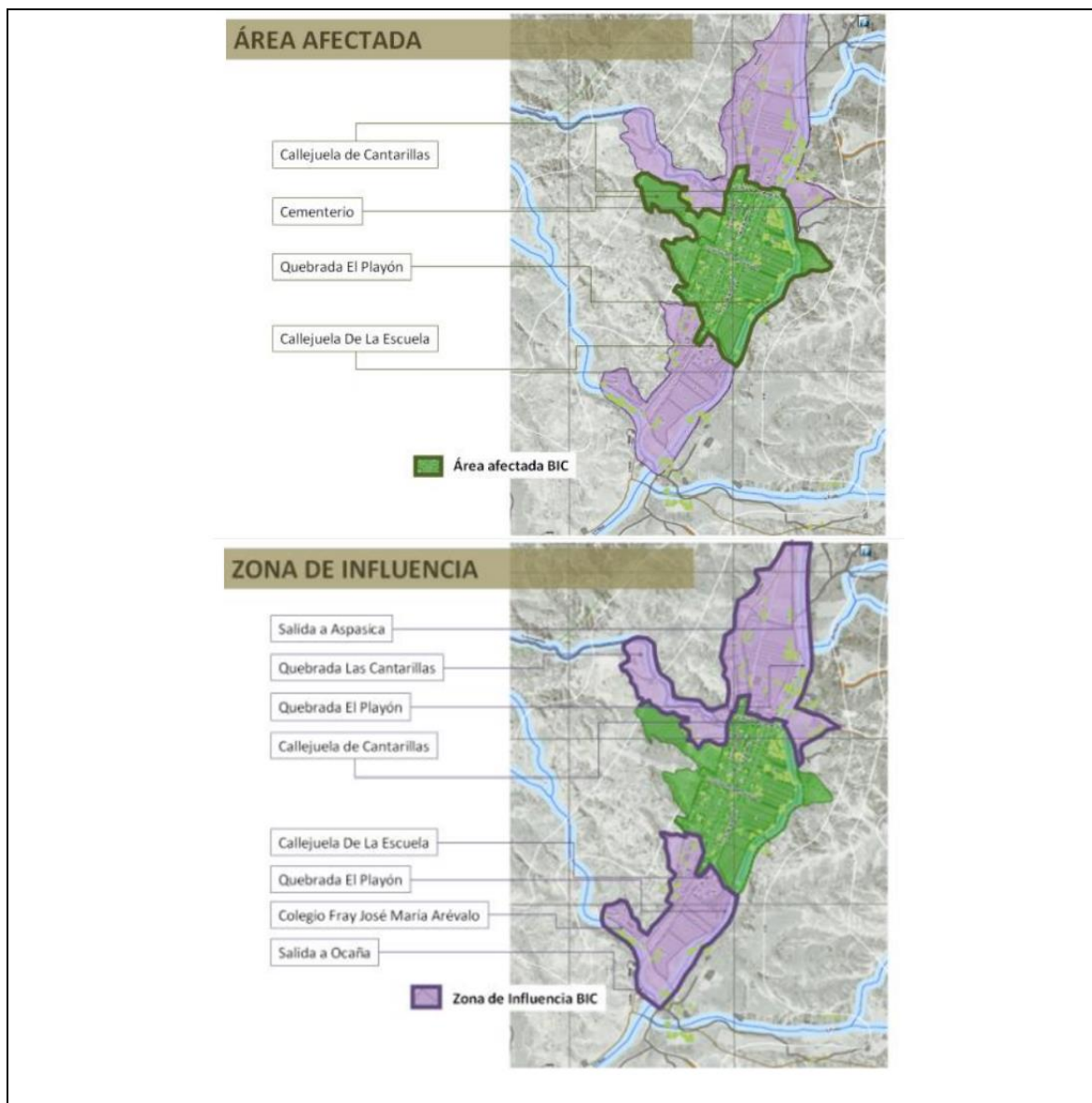


**Tabla 5V. 19 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de El Carmen (Norte de Santander)**

Fuente: PEMP El Carmen. Volumen II: Formulación DTS, 2017

	Área	Cantidad manzanas	Predios
Área afectada	15,12 (Ha)	39	461
Zona de Influencia	88 (Ha)	27	272 (Área urbana) / 31 (Área Rural)



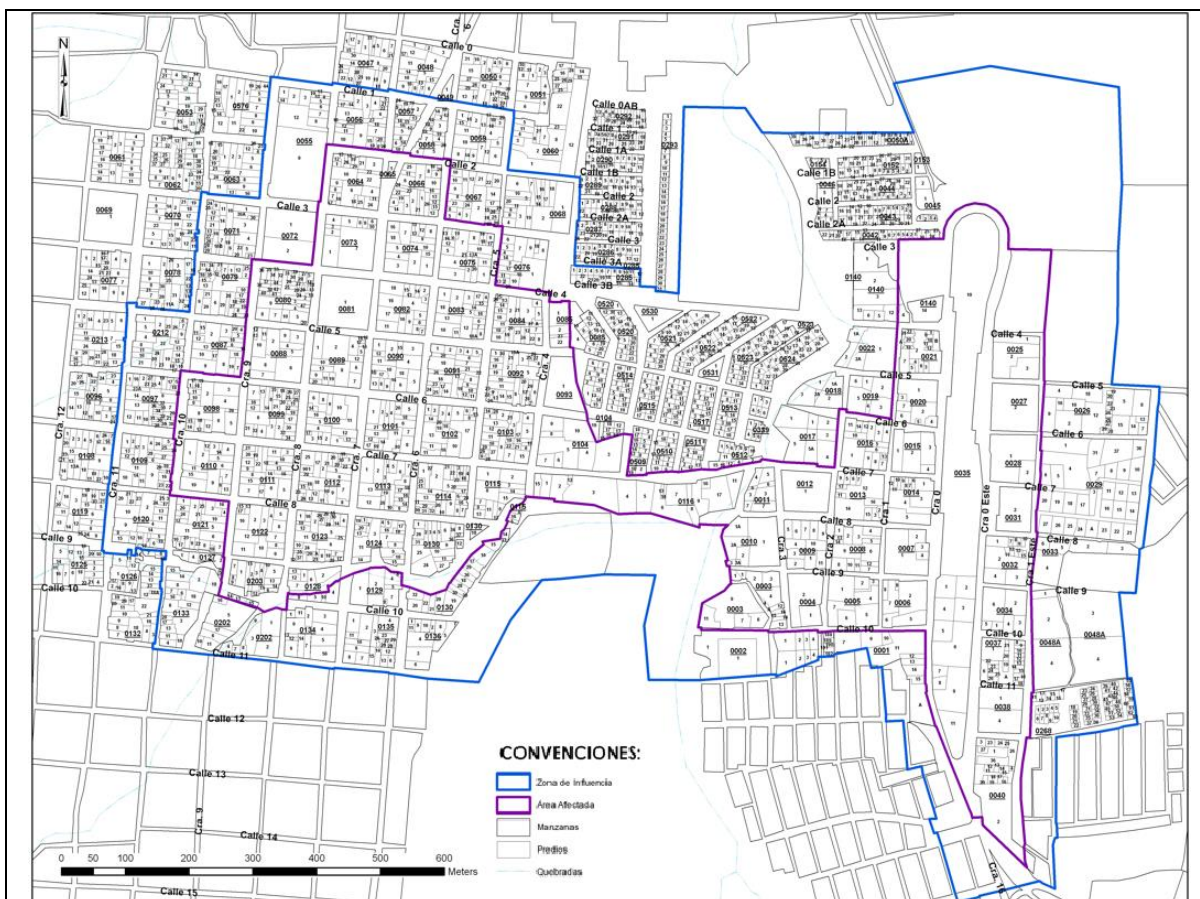


**Tabla 5V. 21 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de la Playa de Belén y su zona de influencia (Norte de Santander)**

Fuente: Fase II PEMP Centro Histórico de Playa de Belén y su área de influencia. Volumen I: Formulación, DTS, 2011, pp. 413-414

	Área	Cantidad manzanas	Pedios
Área afectada	26,2 (Ha)	20	380
Zona de Influencia	7,86 (Ha)	6	128

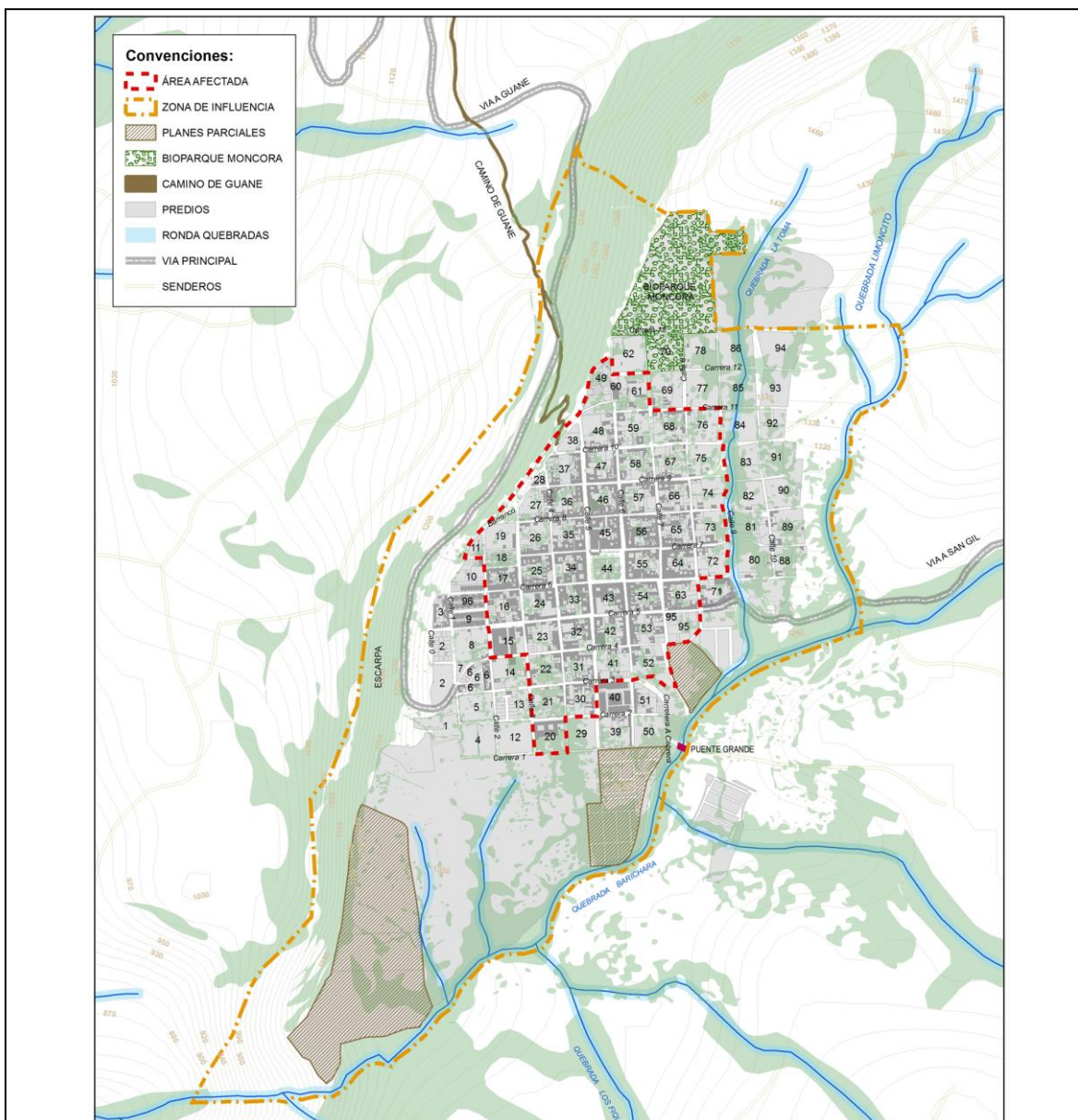




**Tabla 5V. 22 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Villa del Rosario (Norte de Santander)**

Fuente: Fase II PEMP Centro Histórico de Pamplona y su área de influencia. Volumen I: Formulación, DTS, 2009

	Área	Cantidad manzanas	Predios
Área afectada	176,86 (Ha)	135	2565
Zona de Influencia	307,85 (Ha)	235	4935

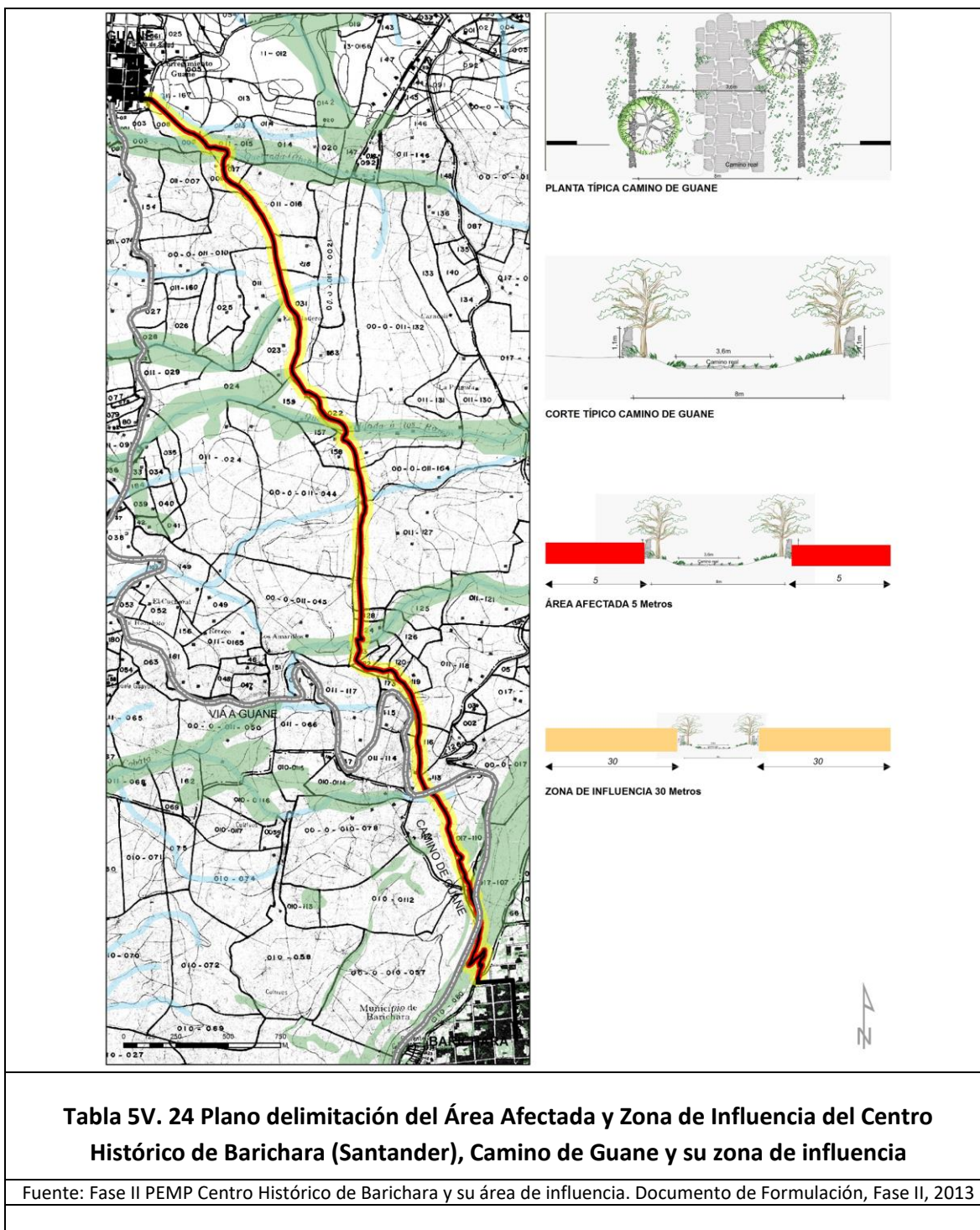


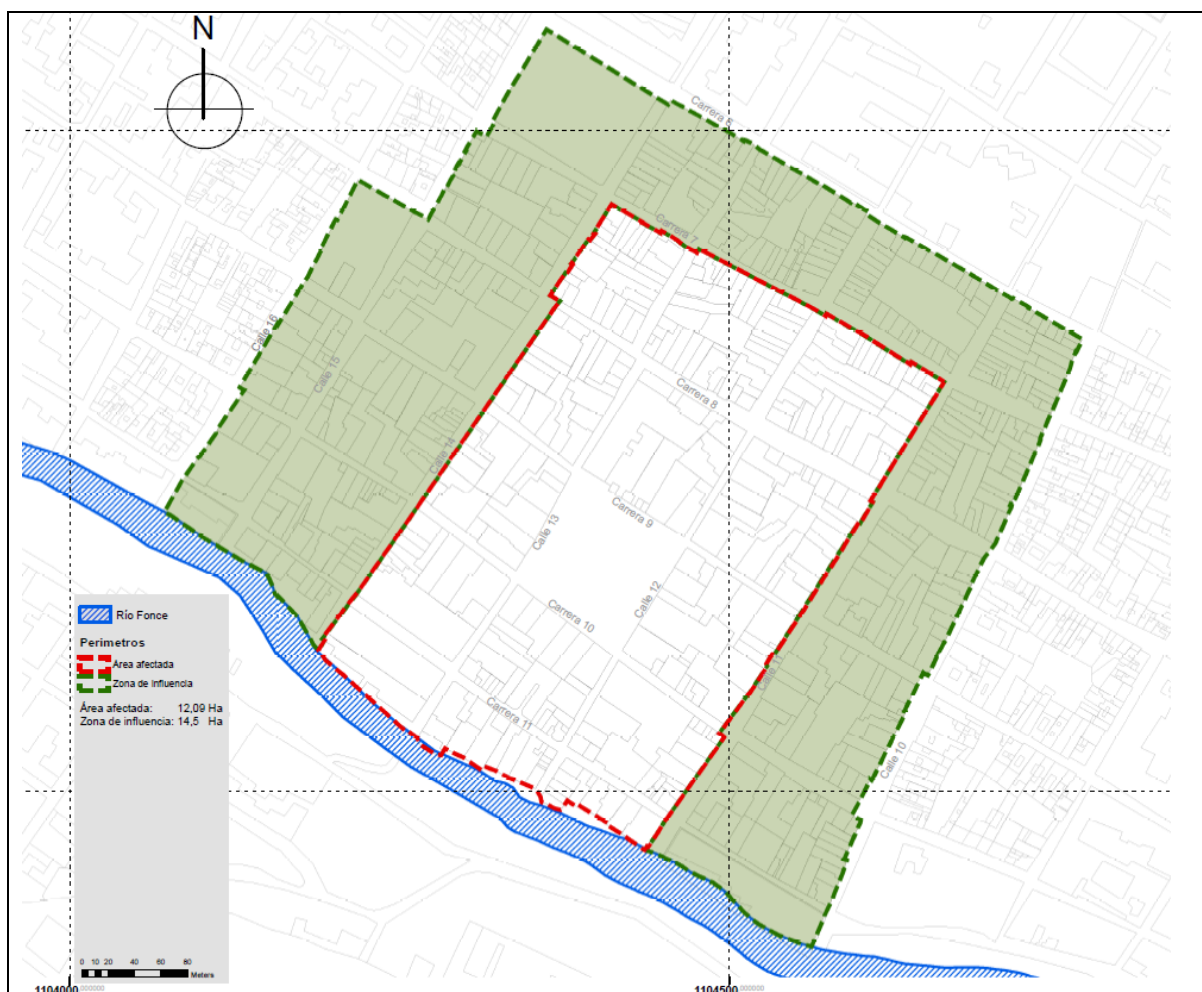
**Tabla 5V. 23 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Barichara (Santander)**

Fuente: Fase II PEMP Centro Histórico de Barichara y su área de influencia. Documento de Formulación, Fase II, 2013

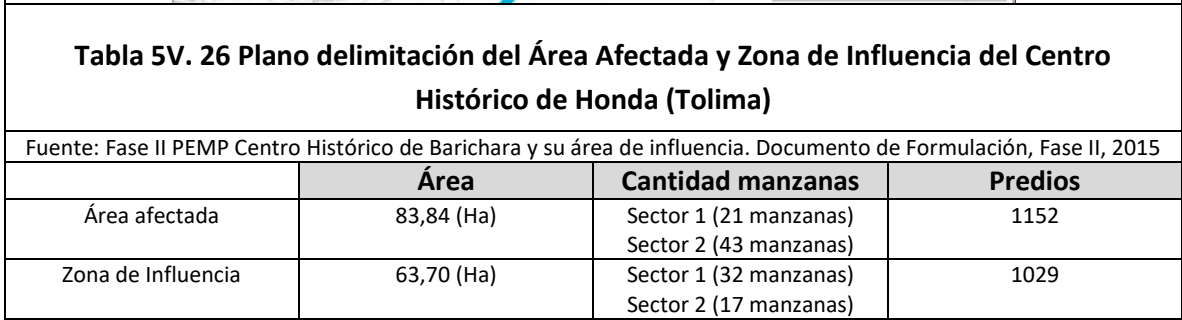
	Área	Cantidad manzanas	Pedios
Área afectada	66,81 (Ha)	51	969
Zona de Influencia	264,24 (Ha)	27	567

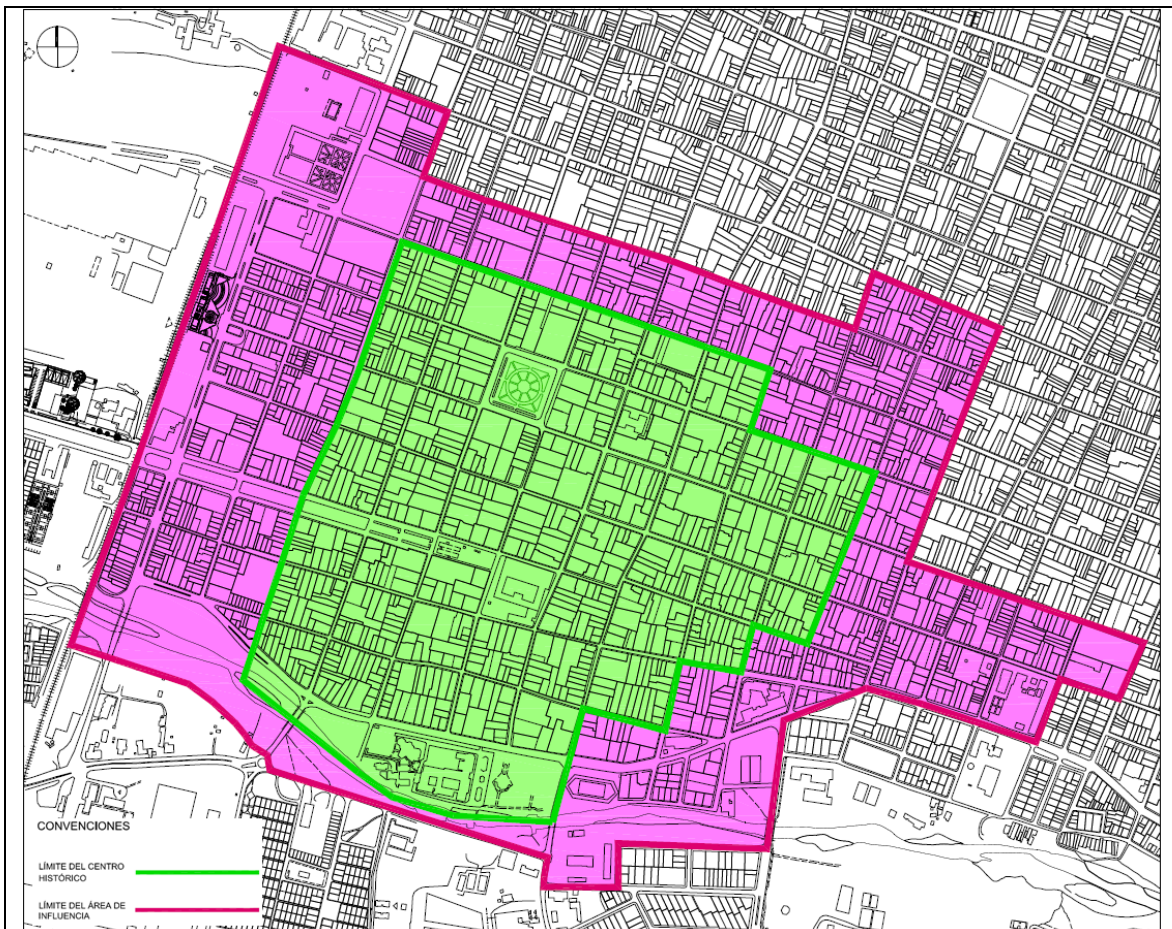












**Tabla 5V. 27 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Guadalajara de Buga (Valle)**

Fuente: Fase II PEMP Centro Histórico de Barichara y su área de influencia. Documento de Formulación, Fase II, 2013

	<b>Área</b>	<b>Cantidad manzanas</b>	<b>Pedios</b>
Área afectada	65,5 (Ha)	50	1050
Zona de Influencia	86,46 (Ha)	66	1452

## LISTA DE TABLAS

Tabla 5V.01 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico del Municipio de Abejorral (Antioquia) .....	483
Tabla 5V.02 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico del Municipio de Concepción (Antioquia).....	484
Tabla 5V. 03 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Barranquilla (Atlántico) .....	485
Tabla 5V. 04 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Jericó (Antioquia).....	486
Tabla 5V. 05 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Barrio El Prado, Bellavista y Altos del Prado de la Ciudad de Barranquilla (Atlántico).....	487
Tabla 5V. 05 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Bogotá D.C.....	488
Tabla 5V. 06 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Mompox (Bolívar) .....	489
Tabla 5V. 07 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Tunja (Boyacá).....	490
Tabla 5V. 08 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Villa de Leyva y su zona de influencia (Boyacá).....	491
Tabla 5V. 09 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Manizales (Caldas).....	492
Tabla 5V. 10 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Salamina (Caldas) .....	493
Tabla 5V. 11 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Pore (Casanare) .....	494
Tabla 5V. 12 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Popayán (Cauca) .....	495
Tabla 5V. 13 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Valledupar (Cesar) .....	496
Tabla 5V. 14 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Santa Cruz de Lorica (Córdoba).....	497
Tabla 5V. 15 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Tenjo (Cundinamarca).....	498

Tabla 5V. 16 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Zipaquirá (Cundinamarca) .....	499
Tabla 5V. 17 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Ciénaga (Magdalena) .....	500
Tabla 5V. 18 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Pasto (Nariño) .....	501
Tabla 5V. 19 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de El Carmen (Norte de Santander).....	502
Tabla 5V. 20 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Pamplona (Norte de Santander) .....	503
Tabla 5V. 21 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de la Playa de Belén y su zona de influencia (Norte de Santander).....	504
Tabla 5V. 22 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Villa del Rosario (Norte de Santander) .....	505
Tabla 5V. 23 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Barichara (Santander).....	506
Tabla 5V. 24 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Barichara (Santander), Camino de Guane y su zona de influencia .....	507
Tabla 5V. 25 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de San Gil (Santander) .....	508
Tabla 5V. 26 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Honda (Tolima).....	509
Tabla 5V. 27 Plano delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia del Centro Histórico de Guadalajara de Buga (Valle) .....	510

# **LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO EN COLOMBIA: 1954-2019**

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y EFECTOS URBANÍSTICOS EN LOS CENTROS  
HISTÓRICOS DEL ÁMBITO NACIONAL

## **ANEXO No. IV: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS 45 CENTROS HISTÓRICOS BIC DEL ÁMBITO NACIONAL**





Arq. Oscar Yesid Fonseca Roa  
Directora: Dra. María de los Ángeles Castrillo Romón

LOCALIZACION INFORMACIÓN CENTROS HISTÓRICOS BIC ÁMBITO NACIONAL ARCHIVO MINISTERIO DE CULTURA								
DEPARTAMENTO	CIUDAD	FUNDACION	DECLARATORIA	ENTIDAD	POT- ADOPCION	PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección)	PEP (Plan Especial de Protección)	CAJA MINISTERIO
ANTIOQUIA	Abejorral	1808	Res. 619 de 2002	MC Declara	Acuerdo 005/ Mar. 15 de 2000	Resolución No.3078 de 2015 Diario Oficial No. 49.957 / Modificación Resolución No. 0934 de 2019		ANT-023
		1760				Resolución 2175 de 2020 Diario Oficial No. 51.555 12 de enero de 2021		ANT-057
	Concepción	1860	Res. 1617 de 1999	MC Declara	Acuerdo 016/ Nov. 30 de 2000	Fase I. Diagnóstico		ANT-078
	Jardín	1709	Dec. 1132 de 1985	ME Declara	Acuerdo 648/ Agost. 26 de 1999	Trámite Resolución		ANT-114/ 119
	Marinilla	1709	Dec. 264 de 1963	ME Declara	Acuerdo 075/ Abr. 6 de 2000	Fase II. Formulación-mpio		ANT-218
	Rionegro	1581	Dec. 264 de 1963	ME Declara	Acuerdo 104/ Ener. 13 de 2000	Resolución No. 4325 de 2018 Diario oficial 50.819 Diciembre 27 de 2018		ANT 2327258
	Santafé de Ant.		Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 010/ Nov. 6 de 2000	Resolución No. 0663 de 2018 Diario Oficial 50.579 Abril 29 de 2018		
ATLÁNTICO	Jérico			MC Declara	Acuerdo 02/ Jul. 17 de 2010		Resolución No. 0746 de 2005. Junio 21. Diario Oficial No. 45995. Modificado Res. 3779 de 2014	ATL-012
	Barranquilla	1629	Res. 1614 de 1999	MC Declara	Decreto 154/ Sept. 6 de 2000			
BOGOTÁ D.C.	Barrio El Prado, Bellavista y Altos del Prado.	1919-1930	Res. 0087 de 2005	MC Declara	Decreto 154/ Sept. 6 de 2000	Resolución No. 0068 de 2021 Diario Oficial N° 51.676 del 16 de mayo de 2021		ATL-013/ 056
	Bogotá D.C.	1538	Dec. 264 de 1963	ME Declara	Decreto 619/ Jul. 28 de 2000	Resolución No. 0088 de 2021 Diario oficial 51.660 mayo 09 de 2021		
BOLIVAR	Cartagena de Indias	1533	Ley 163 de 1959	GN Declara	Decreto 977/ Nov. 20 de 2001	Fase II. Formulación-distrito		BOL-011/ 087
	Santa Cruz de Mompox	1537	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 032/ Dic. De 2001	Resolución 2378 de 2009. Noviembre 17. Diario oficial No. 47609		BOL-195
BOYACÁ	Iza	Siglo XVII	Res. 617 de 11-04-2002	MC Declara	Acuerdo 030/ Feb. 18 de 2003	Resolución No.1811 de 2015. Junio 23. Diario Oficial No. 49584		BOY-027
	Monguí	1601	Res. 0087 2-2-2005	MC Declara	Acuerdo 007/ Abril 21 de 2004	Fase II. Formulación		BOY-034
		1539				Resolución No. 0428 de 2012. Marzo 27. Diario oficial No. 48400. Modificado Res. 1680 de 10 jun y 3275 de 12 nov, ambas de 2015		BOY-127
	Tunja		Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 014/ May. 31 de 2001	Fase II. Formulación-mpio		BOY-127
	Turmequé	Siglo XVI	Dec. 1940 de 1989	ME Declara	Acuerdo 042/ Dic. 23 de 1999	Resolución No. 2407 de 2020 Diario oficial 51.523 de 9 de diciembre de 2020		BOY-217
	Villa de leyva	1572	Dec. 3641/54 Ley 163/5	GN Declara	Acuerdo 021/ Agosto de 2004			
CALDAS	Aguadas	1808-1814	Res. 1883 28-09-2001	MC Declara	Acuerdo 080/ Jun 3 de 2000		Resolución No. 1883 de 2001 Diario oficial 44.580 octubre 12 de 2001	CAL-004
	Manizales	1849	Dec. 2178 2-12-96	ME Declara	Acuerdo 508/ Oct. 12 de 2001		Resolución No. 0785 de 1998	
	Salamina	1827	Res. 0087 2-2-2005	MC Declara	Acuerdo 025/ Sept. 7 de 2001	Resolución No. 127 de 2017 Diario oficial No. 50.181 marzo 20 de 2017		CAL-083
						Resolución No.3914 de 2014. Diciembre 12. Diario Oficial No. 49389		CAS-002
CASANARE	Pore		Ley 936 30-7-2004	GN Declara		Resolución No.2481 de 2009. Noviembre 24. Diario oficial 47684		CAS-002
CAUCA	Popsayán	1536	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 6-7/May. 7 de 2002	Resolución No. 3722 de 2014. Noviembre 27. Diario oficial No. 49360		CAU-051
CESAR	Valledupar	1550	Res. 795 16-6-2000	MC Declara	Acuerdo 064/ Dic. 9 de 1999			
CORDOBA	Santa Cruz de Loricá	1722	Res. 796 16-6-2000	MC Declara	Acuerdo 042/ Dic. 14 de 2001	Resolución No. 2770 de 2010. Diciembre 15. Diario Oficial No. 48018		CORD-006
CUNDINAMARCA	San Miguel de Guaduas	1644	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 036/ Sept. 17 de 2000	Fase II. Formulación-mpio		CUN-118
	Tenjo	1603	Dec. 2530 de 1993	ME Declara	Acuerdo 014/ Jun. 14 de 2000	Resolución No. 0030 de 2010. Enero 6. Diario Oficial No. 47.673		CUN 314-332
	Zpaquirá	1692-1758	Res. 0087 2-2-2005	MC Declara	Acuerdo 012/ Jun. 30 de 2000	Resolución No. 3629 de 2015 Diario oficial No. 49.761 enero 20 de 2016		CUN-381
MAGDALENA	Ciénaga	1538 - 1751	Dec. 2012 de 1996	ME Declara	Acuerdo 024/ Nov. De 2001	Resolución No. 1927 de 2020 Diario oficial 51.428 5 de octubre de 2020		
	Santa Marta	1524	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 005/ May. 30 de 2000		Resolución No. 1800 de 2005. Diciembre 16. Diario oficial No. 46137.	
NARIÑO	San Juan de Pasto	1539	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 026 de 2009	Resolución No. 452 de 2012. Marzo 29. Diario Oficial No. 48477 Documento formulación. / 48400		NAR-034
NORTE DE SANTANDER	El Carmen	1686	Res. 0929 25-07-2005	MC Declara		Resolución No. 2073 de 2020 Diario oficial 51.476 octubre 23 de 2020		NS-055
	Pamplona	1549	Dec. 264 de 1963	GN Declara	Acuerdo 025/ Ago. 31 de 2002	Resolución No. 2111 de 2009. Octubre 14. Diario oficial No. 47667		NS-062
	Playa de Belén	1862	Res. 0928 25-07-2005	MC Declara		Resolución No. 1815 de 2015. Junio 23.		NS-056
	Villa del Rosario	1734	Dec. 102 de 1971	ME Declara		Resolución No. 1500 de 2012. Julio 23. Diario oficial No. 48518		NS-069
SANTANDER	Barichara	1752	Dec. 1654 de 1978	ME Declara	Acuerdo 14/ Jun. 25 de 2003	Resolución No. 0688 de 2015. Marzo 20. Diario oficial No. 49499		SAN-005
	San Gil	1689	Dec. 264 de 1963	GN Declara		Resolución 2970 de 2015 Diario oficial 49.710 noviembre 28 de 2015		SAN -050
	San Juan de Girón	1631	Dec. 264 de 1963	GN Declara	Acuerdo 100 / Nov. 30 de 2010	Fase II. Formulación-mpio		
	Socorro	1683	Dec. 264 de 1963	GN Declara	Acuerdo 011/ Junio 18 de 2003	Fase I. Diagnóstico		SAN -056
TOULIMA	Amalema	S. XVII Y XVII	Dec. 776 de 1980	ME Declara	Acuerdo 012/ Jun. 22 de 2004	Trámite Resolución		TOL-005
	San Sebastián de Maniquita	1549	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 19/ Dic. De 2004	Fase I y II. Diagnóstico y formulación-mpio		TOL-131
	Honda	1560	Dec. 1192 de 1977	ME Declara	Acuerdo 40/ Dic. 29 de 2000	Resolución No. 247 de 2017 Diario oficial 50.283 julio 3 de 2017		TOL-033
VALLE	Guadalupe de Buga	1558-1569	Ley 163 de 1959	GN Declara	Acuerdo 068/ Oct. 30 de 2000	Resolución No. 0304 de 2010. Febrero 20. Diario oficial No. 47659		VAL-017

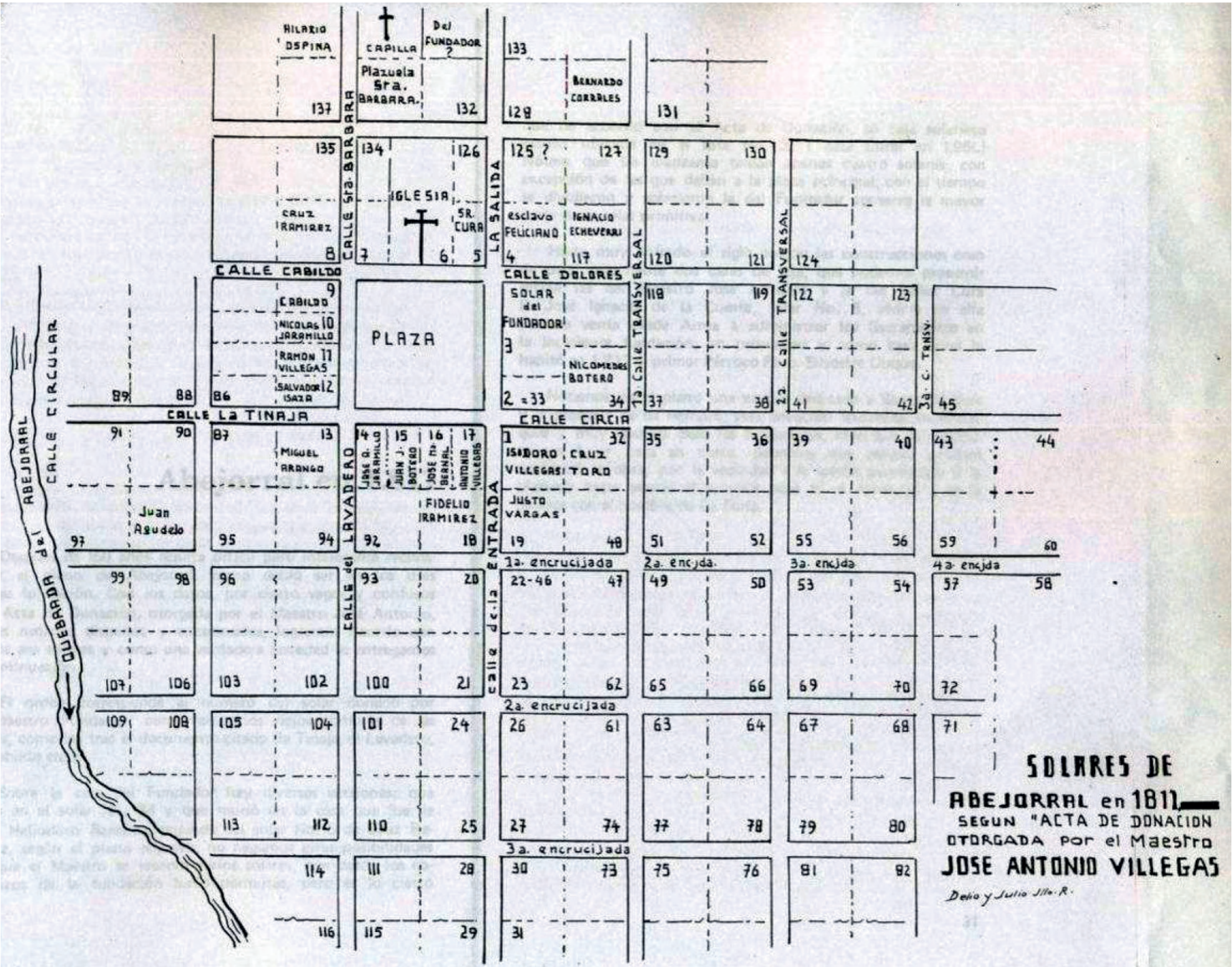
Fuente: Elaboración propia





Municipio: <b>ABEJORRAL</b> Departamento: <b>Antioquia</b>													Declaratoria: Resolución 619 de 2002													 																																																																										
Fundación: Enero 15 de 1811						Fundador: José Antonio Villegas							Por la cual se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el Centro Histórico del municipio de Abejorral, Antioquia													Localización Departamento de Antioquia y Abejorral en el Departamento																																																																										
Altura: 2.125 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 17° C																																																																																														
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																																																																																																				
Censo General 2005																																																																																																				
<table><tr><th>Sector</th><th>Población Censada</th><th>Hogares Censados</th><th>Personas por Hogar</th><th>Viviendas Censadas</th></tr><tr><td>Cabecera</td><td>6.217</td><td>1.642</td><td rowspan="3">3,92</td><td>1.989</td></tr><tr><td>Resto</td><td>13.676</td><td>3.422</td><td>4.208</td></tr><tr><td>Total</td><td>19.893</td><td>5.064</td><td>6.197</td></tr></table>																									Sector	Población Censada	Hogares Censados	Personas por Hogar	Viviendas Censadas	Cabecera	6.217	1.642	3,92	1.989	Resto	13.676	3.422	4.208	Total	19.893	5.064	6.197																																																										
Sector	Población Censada	Hogares Censados	Personas por Hogar	Viviendas Censadas																																																																																																
Cabecera	6.217	1.642	3,92	1.989																																																																																																
Resto	13.676	3.422		4.208																																																																																																
Total	19.893	5.064		6.197																																																																																																
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																																																																																																				
Análisis Cierre de Brechas																																																																																																				
<table><tr><th></th><th>Municipio</th><th>Departamento</th><th>Región</th></tr><tr><td>Cobertura neta educación media (%2015)</td><td>38,6%</td><td>44,6%</td><td>44,7%</td></tr><tr><td>Pruebas saber 11 matemáticas (2016)</td><td>48,1</td><td>48,1</td><td>48,6</td></tr><tr><td>Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)</td><td>11,7%</td><td>8,0%</td><td>7,7%</td></tr><tr><td>Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)</td><td>12,2</td><td>13,1</td><td>12,5</td></tr><tr><td>Cobertura vacunación DTP (2015)</td><td>78,7%</td><td>94,8%</td><td>94,8%</td></tr><tr><td>Cobertura total acueducto (2005)</td><td>64,9%</td><td>85,8%</td><td>87,6%</td></tr><tr><td>Déficit cualitativo de vivienda (2005)</td><td>45,8%</td><td>19,9%</td><td>18,7%</td></tr><tr><td>Déficit cuantitativo de vivienda (2005)</td><td>1,9%</td><td>6,6%</td><td>7,1%</td></tr></table>														Municipio	Departamento	Región	Cobertura neta educación media (%2015)	38,6%	44,6%	44,7%	Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	48,1	48,1	48,6	Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	11,7%	8,0%	7,7%	Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	12,2	13,1	12,5	Cobertura vacunación DTP (2015)	78,7%	94,8%	94,8%	Cobertura total acueducto (2005)	64,9%	85,8%	87,6%	Déficit cualitativo de vivienda (2005)	45,8%	19,9%	18,7%	Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	1,9%	6,6%	7,1%	<table><tr><th>Resultado Esperado 2018**</th><th>Esfuerzo en cierre de brechas</th></tr><tr><td>42,5%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>49,9</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>7,2%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>13,4</td><td>bajo</td></tr><tr><td>91,1%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>85,9%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>20,6%</td><td>medioalto</td></tr><tr><td>1,8%</td><td>bajo</td></tr></table>												Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas	42,5%	mediobajo	49,9	mediobajo	7,2%	mediobajo	13,4	bajo	91,1%	mediobajo	85,9%	mediobajo	20,6%	medioalto	1,8%	bajo	 <table><tr><th>Subregiones</th><th>No. Habitantes</th></tr><tr><td>Bajo Cauca</td><td>225.269</td></tr><tr><td>Magdalena Medio</td><td></td></tr><tr><td>Nordeste</td><td>186.534</td></tr><tr><td>Norte</td><td>259.700</td></tr><tr><td>Occidente</td><td>181.769</td></tr><tr><td>Oriente</td><td>587.512</td></tr><tr><td>Suroeste</td><td>372.665</td></tr><tr><td>Urabá</td><td>557.963</td></tr><tr><td>Valle de Aburrá</td><td></td></tr></table>		Subregiones	No. Habitantes	Bajo Cauca	225.269	Magdalena Medio		Nordeste	186.534	Norte	259.700	Occidente	181.769	Oriente	587.512	Suroeste	372.665	Urabá	557.963	Valle de Aburrá	
	Municipio	Departamento	Región																																																																																																	
Cobertura neta educación media (%2015)	38,6%	44,6%	44,7%																																																																																																	
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	48,1	48,1	48,6																																																																																																	
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	11,7%	8,0%	7,7%																																																																																																	
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	12,2	13,1	12,5																																																																																																	
Cobertura vacunación DTP (2015)	78,7%	94,8%	94,8%																																																																																																	
Cobertura total acueducto (2005)	64,9%	85,8%	87,6%																																																																																																	
Déficit cualitativo de vivienda (2005)	45,8%	19,9%	18,7%																																																																																																	
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	1,9%	6,6%	7,1%																																																																																																	
Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas																																																																																																			
42,5%	mediobajo																																																																																																			
49,9	mediobajo																																																																																																			
7,2%	mediobajo																																																																																																			
13,4	bajo																																																																																																			
91,1%	mediobajo																																																																																																			
85,9%	mediobajo																																																																																																			
20,6%	medioalto																																																																																																			
1,8%	bajo																																																																																																			
Subregiones	No. Habitantes																																																																																																			
Bajo Cauca	225.269																																																																																																			
Magdalena Medio																																																																																																				
Nordeste	186.534																																																																																																			
Norte	259.700																																																																																																			
Occidente	181.769																																																																																																			
Oriente	587.512																																																																																																			
Suroeste	372.665																																																																																																			
Urabá	557.963																																																																																																			
Valle de Aburrá																																																																																																				
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																																																																																																				
Subregiones Departamento de Antioquia																																																																																																				
Fuente: Tomado de Wikipedia																																																																																																				
																																																																																																				
Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 30 de Agosto de 2019																																																																																																				





Esquema fundacional de Abejorral año 1811

Fuente: Tomado del Plan Especial de Protección Centros Históricos de Antioquia. Primera Fase

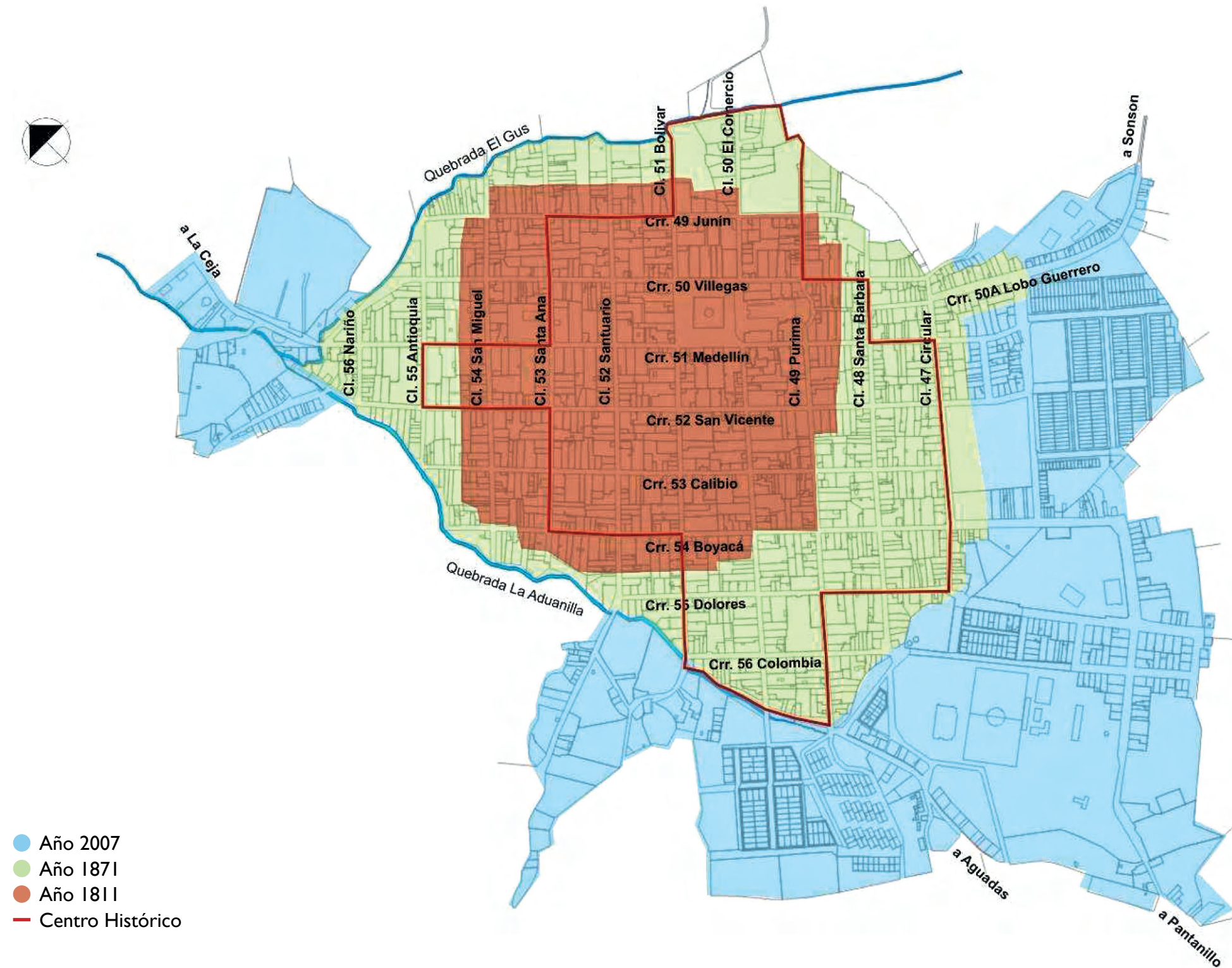




**Aerofotografía Abejorral año 1960**

Fuente: Tomado del Plan Especial de Protección Centros Históricos de Antioquia. Primera Fase

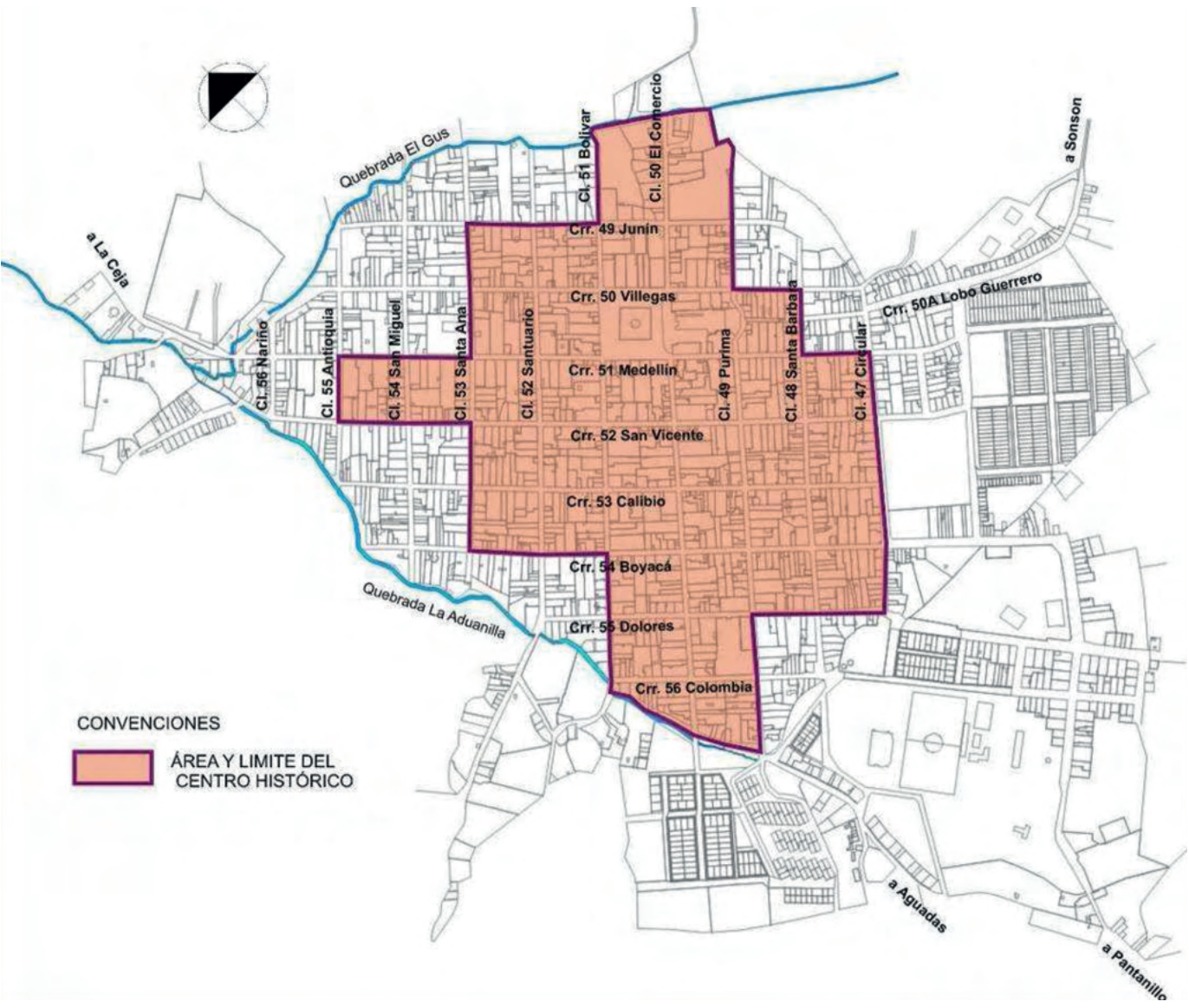




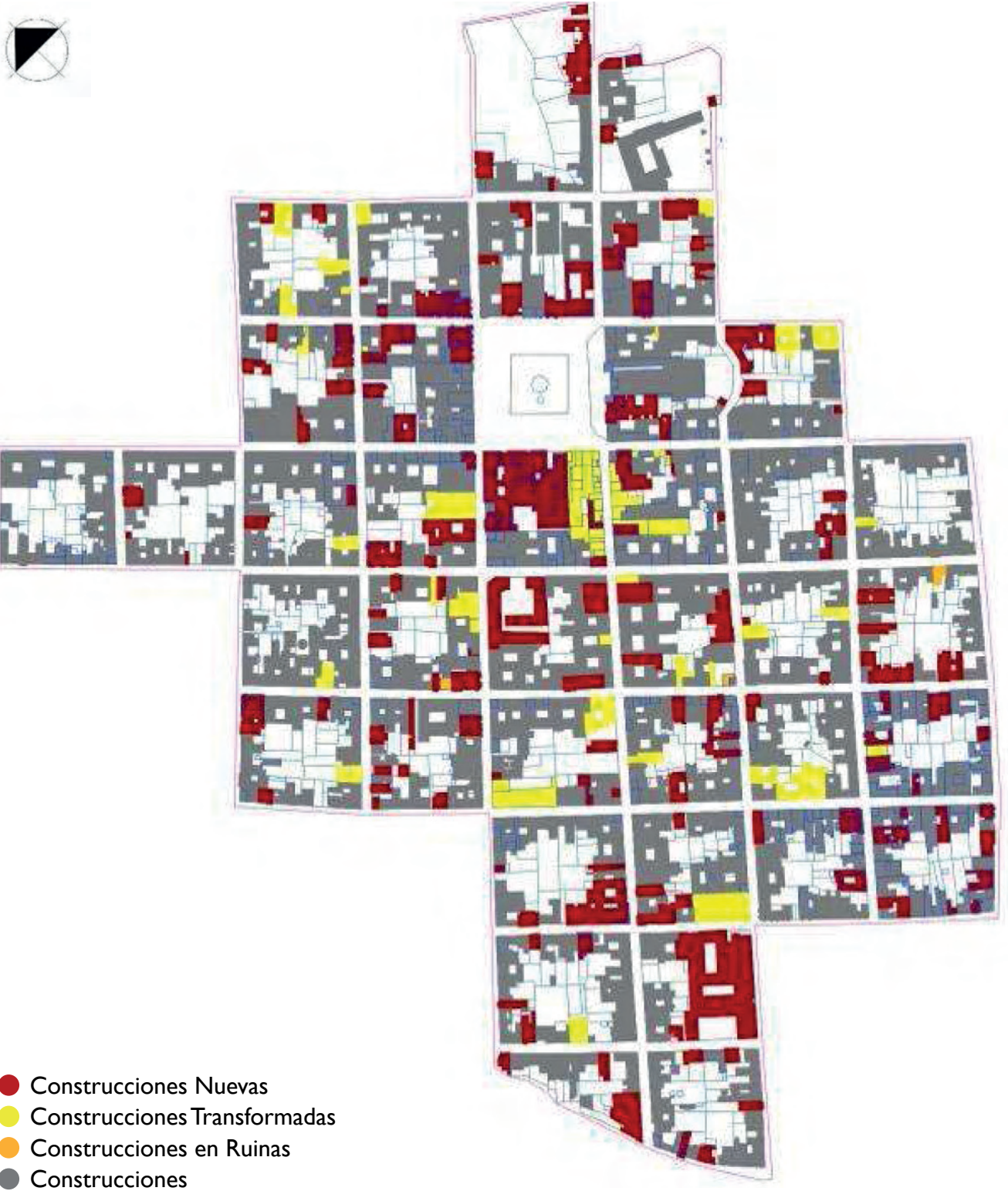
### Crecimiento urbano años 1811, 1871 y 2007

Fuente: Tomado del Plan Especial de Protección Centros Históricos de Antioquia. Primera Fase





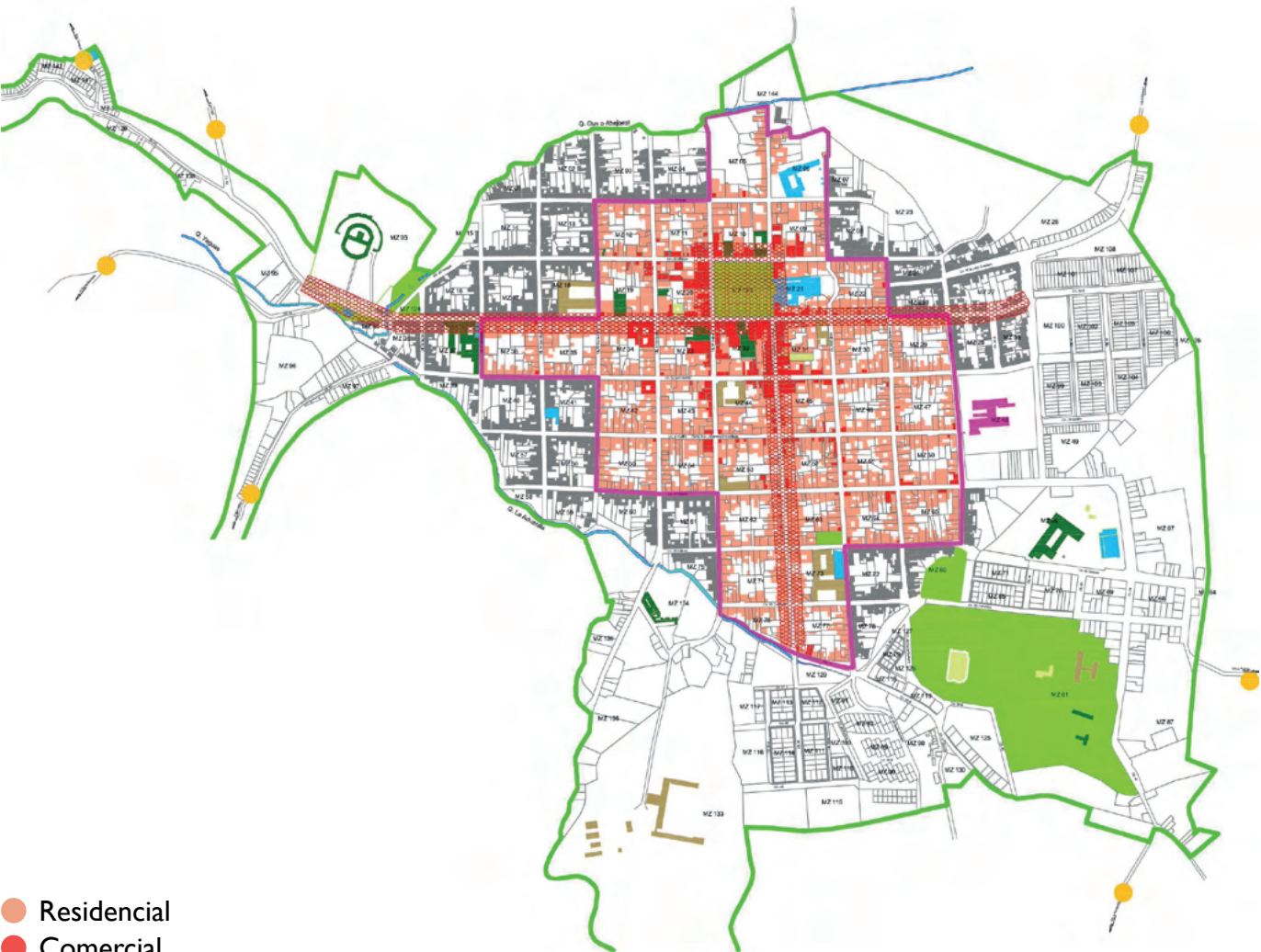
Área y Límete del Centro Histórico



Estado de los inmuebles

Fuente: Tomado del Plan Especial de Protección Centros Históricos de Antioquia. Primera Fase





- Residencial
- Comercial
- Equipamientos Religiosos
- Equipamientos Institucionales
- Equipamientos Educativos
- Equipamientos Recreativos - Espacio Público
- Equipamientos de Salud
- Equipamientos Culturales

Plano de Usos Centro Histórico Municipio Abejorral





- Área Centro Histórico del Municipio de Abejorral Resolución 619 de 2002. Área: 25,2 Ha
- Propuesta Área de Influencia del Centro Histórico del Municipio de Abejorral. Área: 17,1 Ha
- Límite del Centro Histórico Resolución 619 de 2002
- Límite del Área Propuesta como área de influencia del Centro Histórico
- Límite Área Urbana Municipal

Verificación del limite del Centro Histórico del Municipio de Abejorral

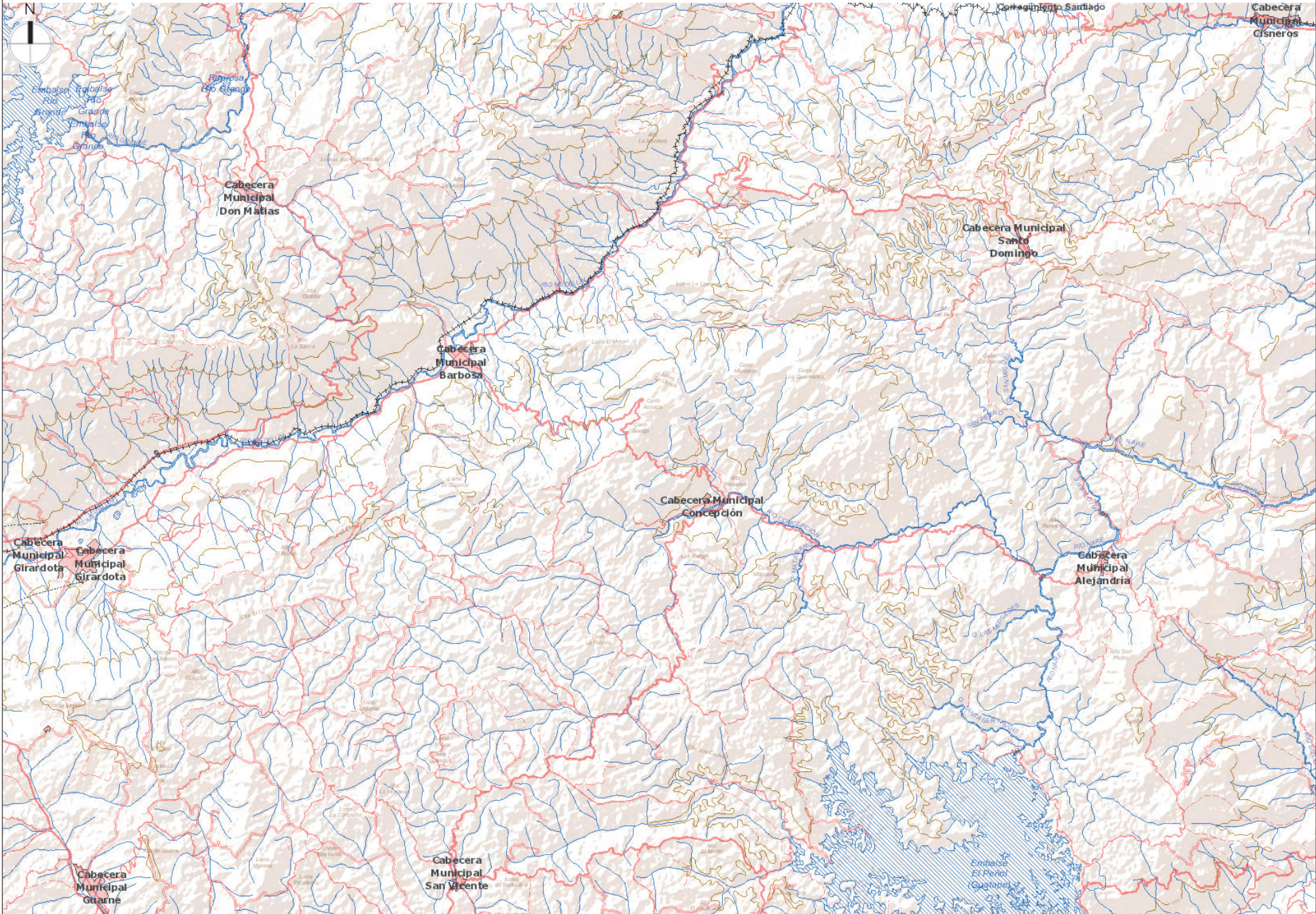
Fuente: Tomado del Plan Especial de Protección Centros Históricos de Antioquia. Primera Fase





Municipio: <b>CONCEPCIÓN</b> Departamento: <b>Antioquia</b>													Declaratoria: Resolución 1617 de 1999													 			
Fundación: Septiembre 08 de 1771						Fundadores: Don Diego de Córdoba, Don Pedro Valencia, Doctor Rafael Montoya, don Matheo Ramírez y doña Gertrudis de Montoya							Por el cual se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter nacional el Centro histórico del Municipio de Concepción-Antioquia y se delimita su área de influencia													Localización Departamento de Antioquia y Concepción en el Departamento			
Altura: 1.875 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 20° C																							
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																													
Censo General 2005																													





**Geografía**

**Descripción Física**

Concepción, la Concha familiarmente, es un pequeño poblado del Oriente Antioqueño, distante de Medellín a 58 Kilómetros.

Es uno de los municipios, de los pocos que aún quedan, que tiene auténtico sabor pueblerino en el sentido estricto de la palabra; sus gentes sencillas, trabajadoras y amables, todavía poseen las sanas costumbres de sus mayores y hacen de este lugar un remanso de paz y tranquilidad que anhelan muchas gentes de las ciudades.

Son muy significados los siguientes elementos de nuestra querida Concha: Su arquitectura, casi toda del siglo XVIII y XIX, aún conserva el trazado inicial y las construcciones realizadas por los mineros fundadores.

Además la Concha tiene bellezas naturales que pueden ser conocidos por todos los Antioqueños: sus apacibles montañas y paisajes invitan al Camping y a la recreación sosegada. Las cristalinas aguas del Río Concha (en sus orillas escribió Carrasquilla una de sus célebres Novelas) se desempeñan en dos hermosas cascadas, la “Planta y San Bartolo”.

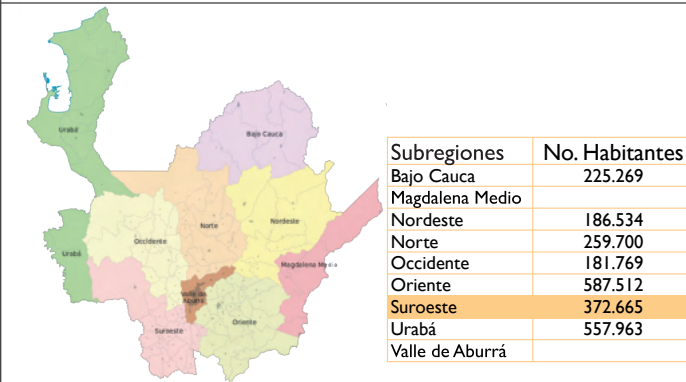
**Límites del municipio**

- Limita al Norte con: municipio de Barbosa.
- Limita al Sur con: municipios de Guatapé y El Peñol.
- Limita al Oriente con: municipios de Santo Domingo y Alejandría.
- Limita al Occidente con: municipio de San Vicente.



### Localización Departamento de Antioquia y Jardín en el Departamento

Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia



### Subregiones Departamento de Antioquia

Fuente: Tomado de Wikipedia



Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 30 de Agosto de 2019









### Estructura predial del casco urbano 1985

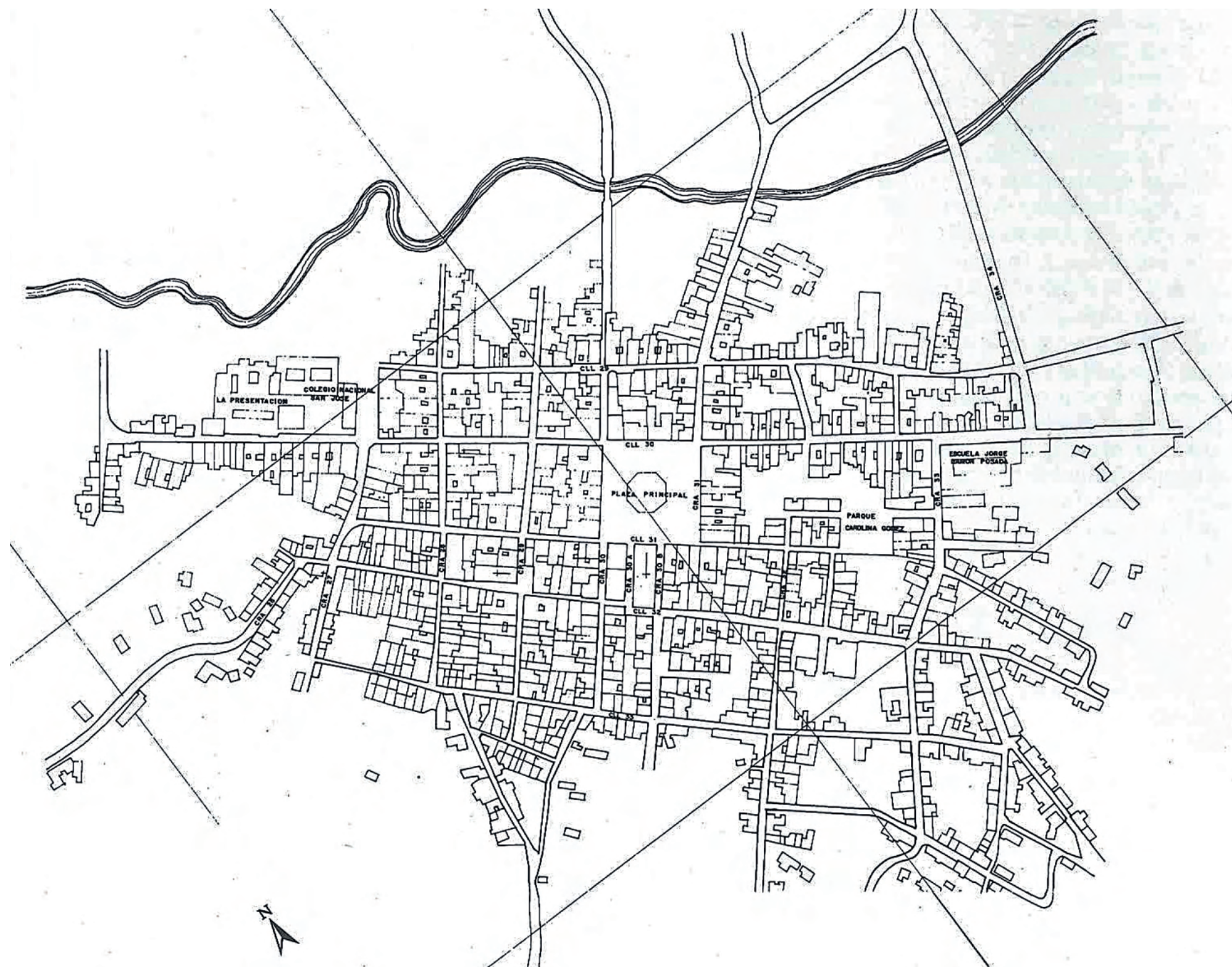
Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 50





Municipio: <b>MARINILLA</b> Departamento: <b>Antioquia</b>													Declaratoria: Decreto 264 de 1963		 																					
Fundación: Noviembre 21 de 1787						Fundador: Jorge Robledo							Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.																							
Altura: 2.120 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 17° C																														
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	Artículo 4º.- En virtud de la autorización conferida por el artículo 6 de la Ley 163 de 1959, y sin perjuicio de otras reservas que puedan decretarse en el futuro, se incluyen en las reservas especificadas en el artículo 4 de dicha Ley los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, San Gil, Pamplona, Rionegro (Antioquia), <b>Marinilla</b> y Girón.																							
Cabecera						4.061	6.419	10.168	14.503	21.054	32.800	42.726																								
Resto						10.212	11.470	13.886	18.974	16.733	12.858	11.460																								
Total						14.273	17.889	24.054	33.477	37.787	45.658	54.186																								
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE													Fuente: Tomado del Decreto 264 de 1963		 <table><tr><th>Subregiones</th><th>No. Habitantes</th></tr><tr><td>Bajo Cauca</td><td>225.269</td></tr><tr><td>Magdalena Medio</td><td></td></tr><tr><td>Nordeste</td><td>186.534</td></tr><tr><td>Norte</td><td>259.700</td></tr><tr><td>Occidente</td><td>181.769</td></tr><tr><td>Oriente</td><td>587.512</td></tr><tr><td>Suroeste</td><td>372.665</td></tr><tr><td>Urabá</td><td>557.963</td></tr><tr><td>Valle de Aburrá</td><td></td></tr></table>		Subregiones	No. Habitantes	Bajo Cauca	225.269	Magdalena Medio		Nordeste	186.534	Norte	259.700	Occidente	181.769	Oriente	587.512	Suroeste	372.665	Urabá	557.963	Valle de Aburrá	
Subregiones	No. Habitantes																																			
Bajo Cauca	225.269																																			
Magdalena Medio																																				
Nordeste	186.534																																			
Norte	259.700																																			
Occidente	181.769																																			
Oriente	587.512																																			
Suroeste	372.665																																			
Urabá	557.963																																			
Valle de Aburrá																																				
Censo General 2005													Plan Especial de Manejo y Protección: Se encuentra en la Fase I de Diagnóstico.																							
													Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Acuerdo No.075 del 06 de abril de 2000.																							
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005													Iglesia Nuestra Señora de La Asunción				Subregiones Departamento de Antioquia																			
Análisis Cierre de Brechas																	Fuente: Tomado de Wikipedia																			
																																				
</																																				





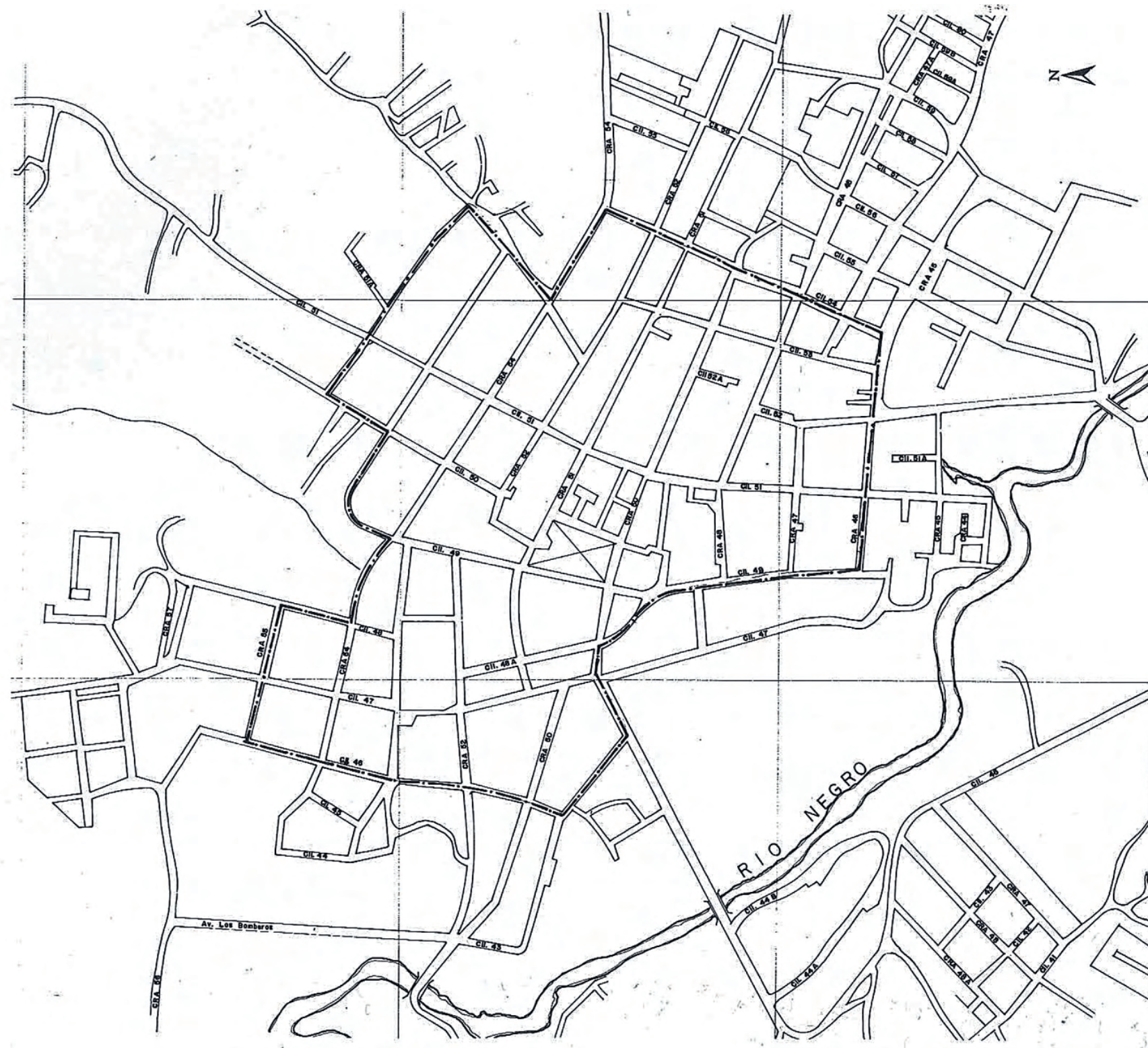
### Estructura predial del sector antiguo año 1986

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 47



PDARQ Programa de Doctorado en Arquitectura ETS Arquitectura





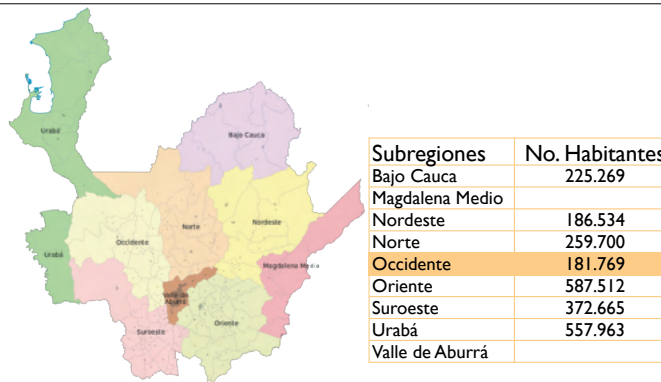



### Plano Sector antiguo Rionegro en el año 1990

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio “Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana” Bogotá, 1997. Pág. 69





Municipio: <b>SANTAFÉ DE ANTIOQUIA</b> Departamento: <b>Antioquia</b>													Declaratoria: <b>Ley 163 de 1959</b>										 																							
<b>Fundación:</b> Diciembre 04 de 1541						<b>Fundador:</b> Mariscal Jorge Robledo							<b>Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación</b>  Artículo 4°.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica).  Artículo 2°.- En desarrollo de lo acordado en la Séptima Conferencia Internacional Americana, reunida en Montevideo en el año de 1933, se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehistórico, los siguientes: a) Los que estén íntimamente vinculados con la lucha por la independencia y con el período inicial de la organización de la República, b) Las obras de la naturaleza de gran interés científico indispensables para el estudio de la flora y la geología.  Parágrafo.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, <b>Santa Fe de Antioquia</b> , Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  Fuente: Tomado de Ley 163 1959  <b>Reglamentación:</b> Resolución No. 042 de 1994. Acuerdo No.021 de 1994.  <b>Plan Especial de Manejo y Protección:</b> Se encuentra en la Fase II de Formulación.  <b>Plan Básico de Ordenamiento Territorial.</b> Acuerdo No.010 del 06 de Noviembre de 2000.																																	
<b>Altura:</b> 550 metros sobre el nivel del mar						<b>Temperatura:</b> 27° C																			<b>Localización Departamento de Antioquia y Santafé de Antioquia en el Departamento</b>  Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia  <table><tr><th>Subregiones</th><th>No. Habitantes</th></tr><tr><td>Bajo Cauca</td><td>225.269</td></tr><tr><td>Magdalena Medio</td><td></td></tr><tr><td>Nordeste</td><td>186.534</td></tr><tr><td>Norte</td><td>259.700</td></tr><tr><td>Occidente</td><td>181.769</td></tr><tr><td>Oriente</td><td>587.512</td></tr><tr><td>Suroeste</td><td>372.665</td></tr><tr><td>Urabá</td><td>557.963</td></tr><tr><td>Valle de Aburrá</td><td></td></tr></table>		Subregiones	No. Habitantes	Bajo Cauca	225.269	Magdalena Medio		Nordeste	186.534	Norte	259.700	Occidente	181.769	Oriente	587.512	Suroeste	372.665	Urabá	557.963	Valle de Aburrá	
Subregiones	No. Habitantes																																													
Bajo Cauca	225.269																																													
Magdalena Medio																																														
Nordeste	186.534																																													
Norte	259.700																																													
Occidente	181.769																																													
Oriente	587.512																																													
Suroeste	372.665																																													
Urabá	557.963																																													
Valle de Aburrá																																														
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																									<b>Subregiones Departamento de Antioquia</b>  Fuente: Tomado de Wikipedia 																					
<b>Censo General 2005</b>																																														
Sector	Población Censada					Hogares Censados					Personas por Hogar	Viviendas Censadas																																		
Cabecera	13.757					3.402					4,03	3.767																																		
Resto	9.101					2.203						2.840																																		
Total	22.858					5.605						6.607																																		
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																																														
<b>Análisis Cierre de Brechas</b>																																														
						Municipio	Departamento	Región					Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas																																
Cobertura neta educación media (%2015)						34,4%	44,6%	44,7%					42,5%	mediobajo																																
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)						44,2	48,1	48,6					47,5	mediobajo																																
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)						15,6%	8,0%	7,7%					7,2%	mediobajo																																
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)						16,1	13,1	12,5					16,0	mediobajo																																
Cobertura vacunación DTP (2015)						100,0%	94,8%	94,8%					100,0%	mediobajo																																
Cobertura total acueducto (2005)						79,0%	85,8%	87,6%					85,9%	mediobajo																																
Déficit cualitativo de vivienda (2005)						36,9%	19,9%	18,7%					20,6%	mediobajo																																
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)						8,1%	6,6%	7,1%					8,1%	bajo																																
Fuente: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación																																														





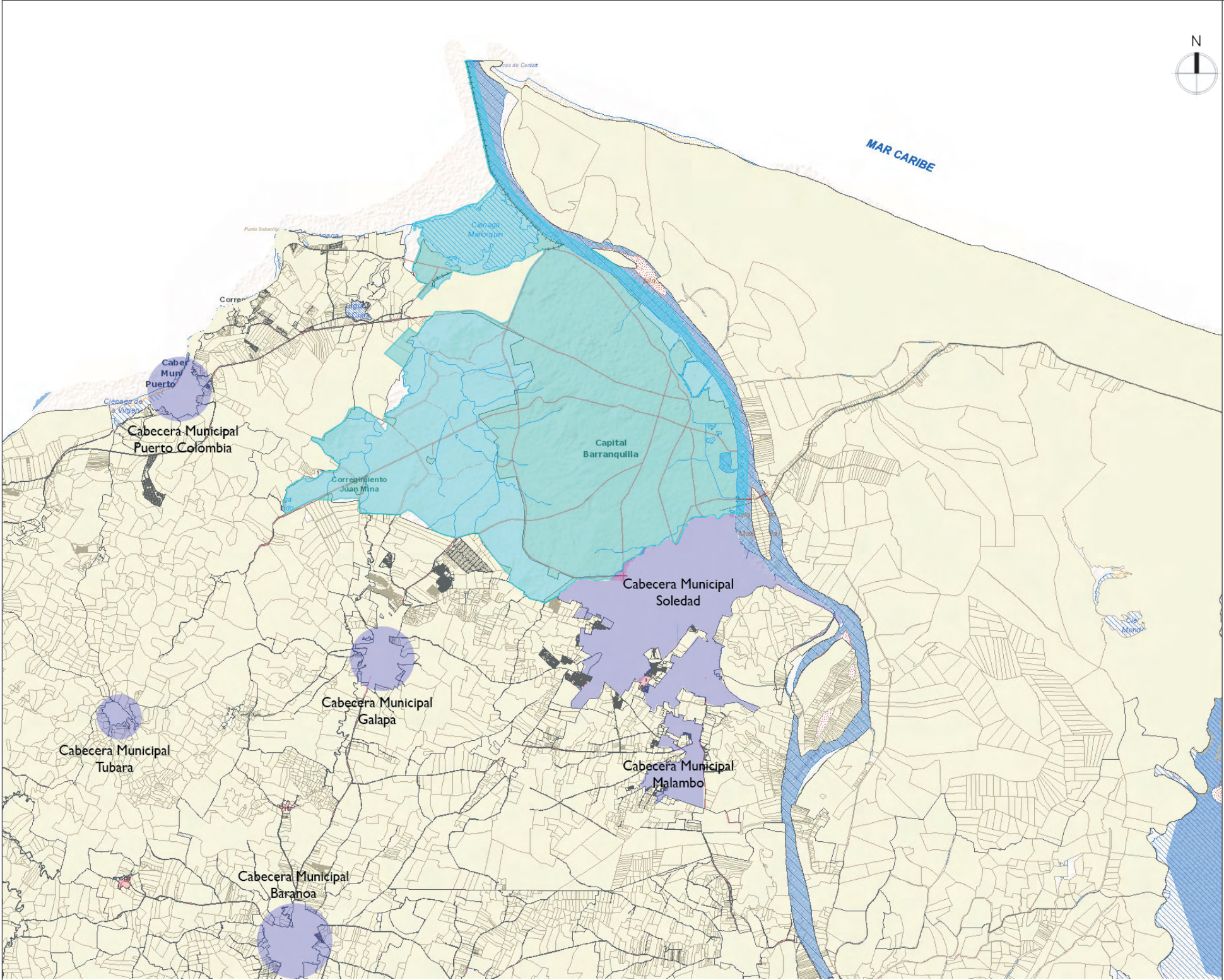
### Estructura predial del casco urbano Municipio Santafé de Antioquia

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 60



PDARQ Programa de Doctorado en Arquitectura ETS Arquitectura





### Geografía

#### Descripción Física

La ciudad está localizada en el vértice nororiental del departamento del Atlántico, sobre la orilla occidental del río Magdalena, a 7,5 km de su desembocadura en el mar Caribe.

El área urbana está edificada sobre un plano ligeramente inclinado cuyas alturas extremas, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, son 4 msnm al oriente y 98 metros al occidente, sobre el nivel del mar. Otras fuentes señalan alturas accidentales en las lomas, hasta de 120 metros fuera de la ciudad.

Barranquilla cuenta con importantes ecosistemas como el río Magdalena, la Ciénaga de Mallorquín y el sistema de caños orientales.

#### Límites del municipio

Limita al Norte con: municipio de Puerto Colombia y con el Mar Caribe.

Limita al Sur con: municipio de Soledad.

Limita al Oriente con: departamento del Magdalena.

Limita al Occidente con: municipios Puerto Colombia, Galapa y Tubará.

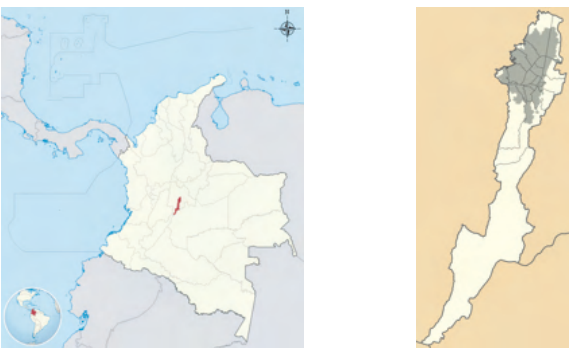



#### Localización del Municipio de Barranquilla. Plano División Predial

Fuente: Elaboración propia con base a información tomada de <http://www.igac.gov.co/igac>, simulador de Catastro. Consultada el 29 de Agosto de 2019

Fuente: Información tomada de la página del Municipio de Barranquilla. [http://www.barranquilla.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=28&Itemid=119](http://www.barranquilla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=119). Consultada el 29 de Agosto de 2019





Municipio: <b>BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL</b>													Declaratoria: Decreto 264 de 1963																																													
Fundación: Agosto 06 de 1538						Fundador: Gonzalo Jiménez de Quesada							Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.																																													
Altura: 2.640 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 14° C																																																				
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	Artículo 4º.- En virtud de la autorización conferida por el artículo 6 de la Ley 163 de 1959, y sin perjuicio de otras reservas que puedan decretarse en el futuro, se incluyen en las reservas especificadas en el artículo 4 de dicha Ley los sectores antiguos de <b>Bogotá</b> , Socorro, San Gil, Pamplona, Rionegro (Antioquia), Marinilla y Girón.																																													
Cabecera						638.562	1.661.935	2.557.461	4.216.887	5.398.510	6.763.325	7.963.379																																														
Resto						9.762	35.376	14.087	8.762	14.974	15.366	16.622																																														
Total					335.506	648.324	1.697.311	2.571.548	4.225.649	5.413.484	6.778.691	7.980.001																																														
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																																																										
Censo General 2005																																																										
													Fuente: Tomado del Decreto 264 de 1963																																													
Reglamentación: Resolución No. 029 de 1994. Decreto 678 de 1994.													 <table><tr><th>Ciudad</th><th>Población 2.016</th></tr><tr><td>Bogotá</td><td>7.980.001</td></tr><tr><td>Soacha</td><td>522.442</td></tr><tr><td>Facatativá</td><td>134.522</td></tr><tr><td>Chía</td><td>129.652</td></tr><tr><td>Zipaquirá</td><td>124.372</td></tr><tr><td>Madrid</td><td>79.120</td></tr><tr><td>Funza</td><td>76.742</td></tr><tr><td>Cajicá</td><td>58.036</td></tr><tr><td>Sibaté</td><td>39.117</td></tr><tr><td>Tocancipá</td><td>32.821</td></tr><tr><td>Tabio</td><td>27.702</td></tr><tr><td>La Calera</td><td>27.878</td></tr><tr><td>Sopó</td><td>27.339</td></tr><tr><td>Cota</td><td>25.432</td></tr><tr><td>Tenjo</td><td>19.963</td></tr><tr><td>Mosquera</td><td>82.750</td></tr><tr><td>Gachancipá</td><td>14.831</td></tr><tr><td>Bojacá</td><td>11.845</td></tr><tr><td>El Rosal</td><td>17.254</td></tr><tr><td>Total</td><td>9.348.588</td></tr></table>				Ciudad	Población 2.016	Bogotá	7.980.001	Soacha	522.442	Facatativá	134.522	Chía	129.652	Zipaquirá	124.372	Madrid	79.120	Funza	76.742	Cajicá	58.036	Sibaté	39.117	Tocancipá	32.821	Tabio	27.702	La Calera	27.878	Sopó	27.339	Cota	25.432	Tenjo	19.963	Mosquera	82.750	Gachancipá	14.831	Bojacá	11.845	El Rosal	17.254	Total	9.348.588
Ciudad	Población 2.016																																																									
Bogotá	7.980.001																																																									
Soacha	522.442																																																									
Facatativá	134.522																																																									
Chía	129.652																																																									
Zipaquirá	124.372																																																									
Madrid	79.120																																																									
Funza	76.742																																																									
Cajicá	58.036																																																									
Sibaté	39.117																																																									
Tocancipá	32.821																																																									
Tabio	27.702																																																									
La Calera	27.878																																																									
Sopó	27.339																																																									
Cota	25.432																																																									
Tenjo	19.963																																																									
Mosquera	82.750																																																									
Gachancipá	14.831																																																									
Bojacá	11.845																																																									
El Rosal	17.254																																																									
Total	9.348.588																																																									
Plan Especial de Manejo y Protección: Se encuentra en la Fase I de Diagnóstico.																																																										
Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Decreto 619 del 28 de Julio de 2000.													<b>Área Metropolitana de Bogotá D.C</b>																																													
Fuente: Tomado de Wikipedia																																																										
																																																										
																																																										
Fuente: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación													Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 01 de Septiembre de 2019																																													



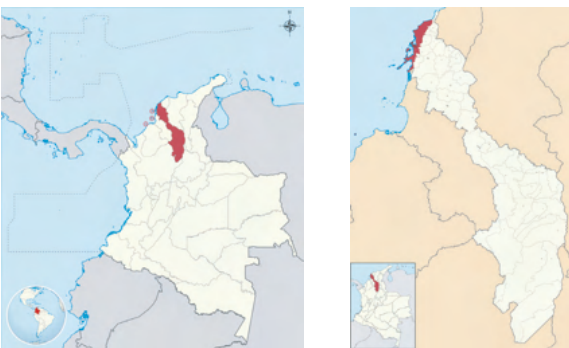




**Estructura Predial del Sector Antiguo año 1995**

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 53





Municipio: <b>CARTAGENA DE INDIAS</b> Departamento: <b>Bolivar</b>													Declaratoria: <b>Ley 163 de 1959</b>						
Fundación: Junio 01 de 1533						Fundador: Pedro de Heredia							Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación					Localización Departamento de Bolivar y Cartagena de Indias en el Departamento	
Altura: 2 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 18° C													
													Artículo 4°.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, <b>Cartagena</b> , Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica).						
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016							
Cabecera						111.291	217.910	311.664	514.242	670.698	845.801	971.592							
Resto						17.586	24.175	37.297	39.851	54.374	49.599	41.797							
Total					84.937	128.877	242.085	348.961	554.093	725.072	895.400	1.013.389							
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE													Artículo 2°.- En desarrollo de lo acordado en la Séptima Conferencia Internacional Americana, reunida en Montevideo en el año de 1933, se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehistórico, los siguientes: a) Los que estén íntimamente vinculados con la lucha por la independencia y con el período inicial de la organización de la República, b) Las obras de la naturaleza de gran interés científico indispensables para el estudio de la flora y la geología.						
Censo General 2005																			
													Parágrafo.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, <b>Cartagena</b> , Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII.					Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 31 de Agosto de 2019	
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005													Fuente: Tomado de la Ley 163 1959						
Análisis Cierre de Brechas													Reglamentación: Resolución No. 043 de 1994. Acuerdo No. 40 de 1994.						
													Plan Especial de Manejo y Protección: Se encuentra en la Fase II de Formulación.						
Fuente: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación													Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Decreto 977 del 20 de Noviembre de 2001.						



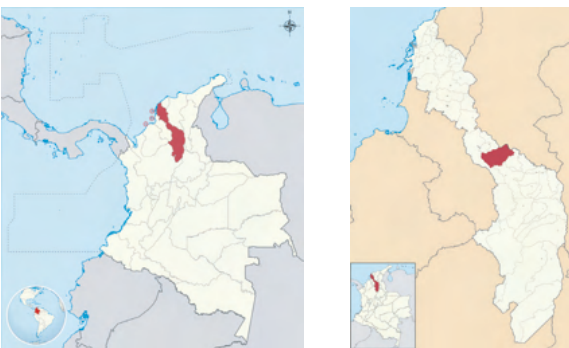


**Estructura predial del sector antiguo año 1994**

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 52





Municipio: <b>SANTA CRUZ DE MOMPOX</b> Departamento: <b>Bolivar</b>													Declaratoria: <b>Ley 163 de 1959</b>														
Fundación: Mayo 03 de 1540						Fundadores: Alonso De Heredia y Juan De Santacruz							Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación													Localización Departamento de Bolivar y Santa Cruz de Mompox en el Departamento	
Altura: 33 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 31° C																					
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	Artículo 4°.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, <b>Mompox</b> , Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica).													Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia	
Cabecera						9.192	10.965	15.310	17.124	19.810	22.650	26.137															
Resto						15.656	27.161	24.578	15.369	18.451	18.676	18.323															
Total						24.848	38.126	39.888	32.493	38.261	41.326	44.460															
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																											
Censo General 2005																											





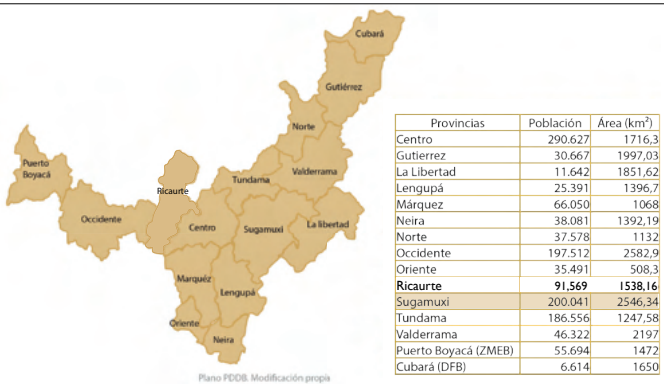




### Ocupación del suelo en el Casco Urbano

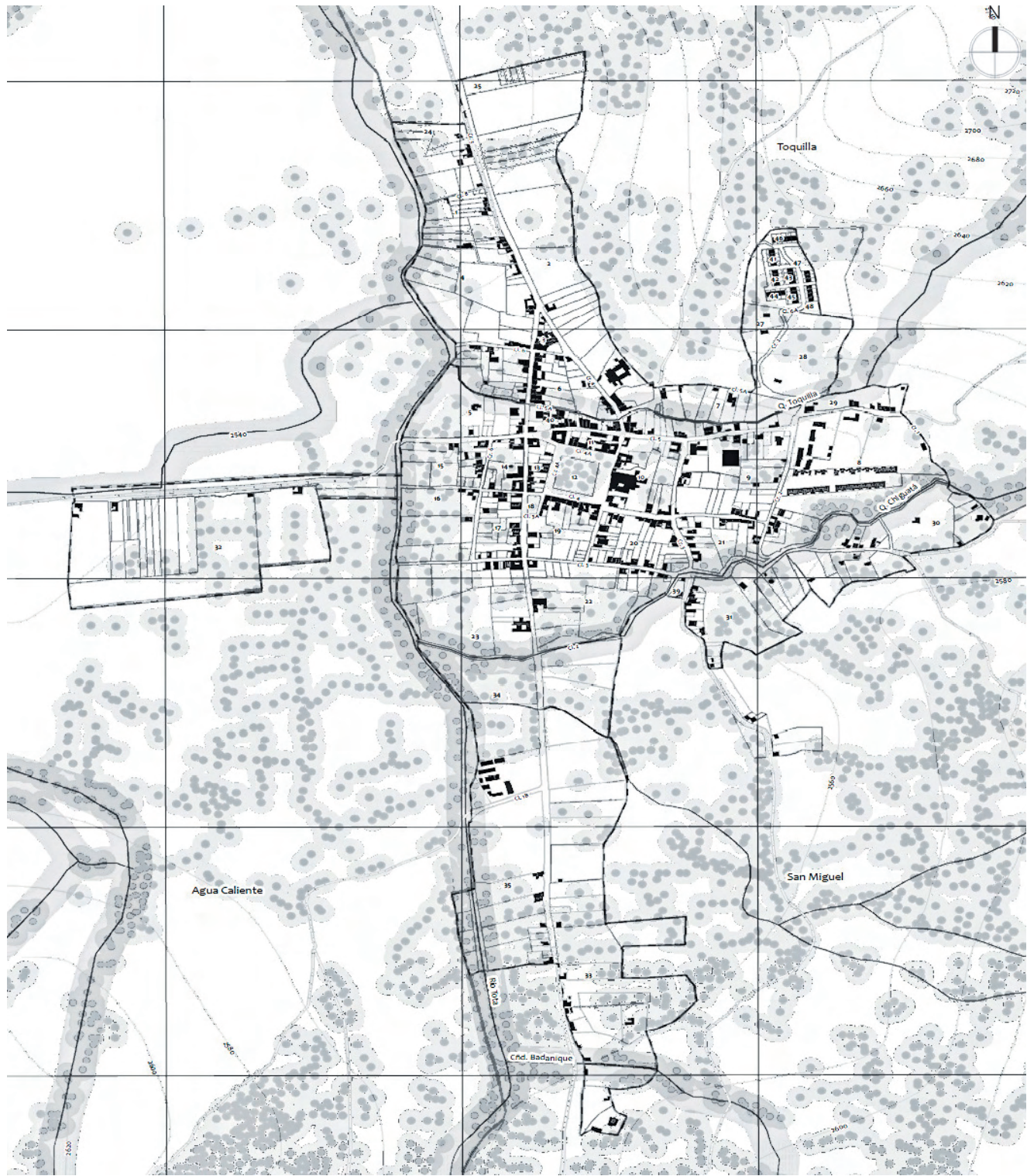
Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 94





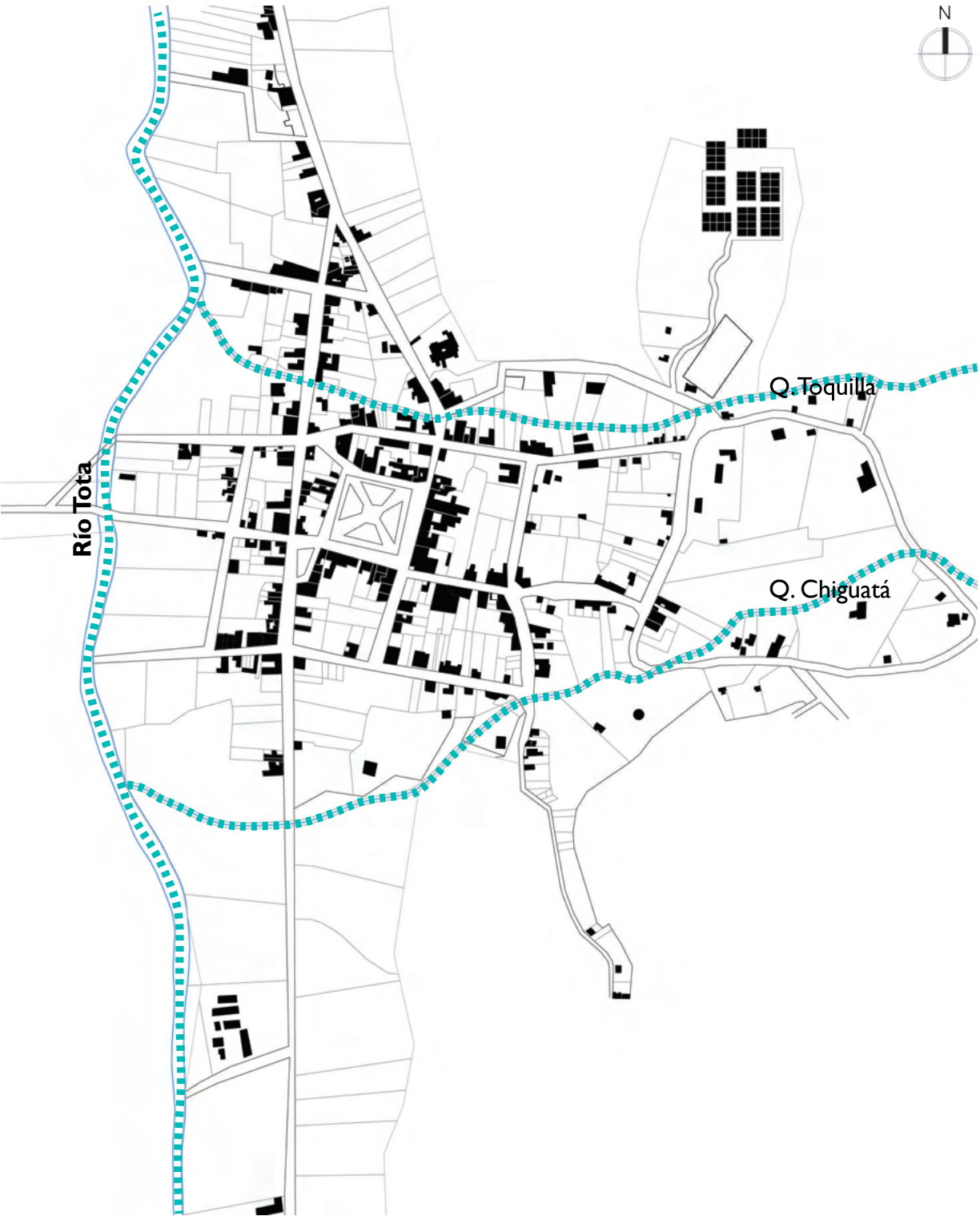
Municipio: <b>IZA</b> Departamento: <b>Boyacá</b>													<b>Declaratoria: Resolución 617 del 11 de Abril de 2002</b>													 						
<b>Fundación:</b> Julio 14 de 1595						<b>Fundador:</b> Rodrigo Egas de Guzman							<b>Por la cual se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el Poblado de Iza - Boyacá</b>													<b>Localización Departamento de Boyacá e Iza en el Departamento</b>						
<b>Altura:</b> 2.560 metros sobre el nivel del mar						<b>Temperatura:</b> 15° C																										
<b>Año</b>	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	Que la Fundación Nido verde presentó al Ministerio de Cultura la solicitud de declaratoria como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional del Poblado de Iza, Boyacá. Que los valores considerados por la Dirección de Patrimonio para recomendar al Consejo de Monumentos Nacionales la emisión del concepto para la declaración como Bien Interés Cultural de Carácter Nacional del Poblado de Iza, Boyacá son: 1. Valores propios de la constitución material (Materiales, estructura, técnica constructiva). 2.Valores de Autenticidad. 3.Valores de Originalidad. 4.Valores formales y estéticos. 5. Representatividad cultural e histórica. a) Representatividad cultural. b) Representatividad histórica. Que para dar cumplimiento al artículo 8° de la Ley 397 de 1997, la Dirección de Patrimonio, en su condición de Secretaría Técnica presentó a consideración del Consejo de Monumentos Nacionales el estudio de solicitud de declaratoria como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional del Poblado de Iza, Boyacá, en su reunión llevada a cabo el día 4 de diciembre de 2001, según consta en Acta número 04 del mismo año y al verificar que posee valores materiales, estructura y técnica y de autenticidad, originalidad, formales y estéticos y representatividad cultural e histórica, decidió emitir concepto favorable y recomendar a la señora Ministra de Cultura su declaratoria de acuerdo a la solicitud presentada.																			
Cabecera						546	606	597	629	725	887	1.037																				
Resto						2.311	1.676	1.152	979	1.010	1.194	1.336																				
Total						2.857	2.282	1.749	1.608	1.735	2.081	2.373																				
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE.													<b>Censo General 2005</b>																			
<b>Sector</b>	<b>Población Censada</b>					<b>Hogares Censados</b>					<b>Personas por Hogar</b>		<b>Viviendas Censadas</b>																			
Cabecera	887					246					3,57		279																			
Resto	1.194					336							538																			
Total	2.081					582							817																			
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005													<b>Análisis Cierre de Brechas</b>																			
						<b>Municipio</b>	<b>Departamento</b>	<b>Región</b>						<b>Resultado Esperado 2018**</b>	<b>Esfuerzo en cierre de brechas</b>																	
Cobertura neta educación media (%2015)						29,2%	49,0%	47,3%						42,5%	mediobajo																	
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)						60,2	53,5	52,0						50,5	mediobajo																	
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)						9,7%	10,0%	8,4%						7,2%	mediobajo																	
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)						13,3	14,9	12,4						11,4	bajo																	
Cobertura vacunación DTP (2015)						100,0%	93,3%	93,6%						100,0%	mediobajo																	
Cobertura total acueducto (2005)						86,7%	78,2%	82,2%						97,2%	bajo																	
Déficit cualitativo de vivienda (2005)						27,5%	33,5%	24,0%						11,1%	mediobajo																	
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)						6,2%	7,1%	11,9%						6,2%	bajo																	
Fuentes: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación													Fuentes: Tomado del Decreto 617 de 2002																			
													<b>Plan Especial de Manejo y Protección:</b> Resolución No. 1811 del 23 de Junio de 2015.Aprobado.																			
													<b>Plan Básico de Ordenamiento Territorial.</b> Acuerdo No. 030 del 18 de Febrero de 2003.																			
Fuentes: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación													Fuentes: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 27 de Agosto de 2019																			





**Plano de Ocupación de suelo en el casco urbano de Iza en el año 2011**

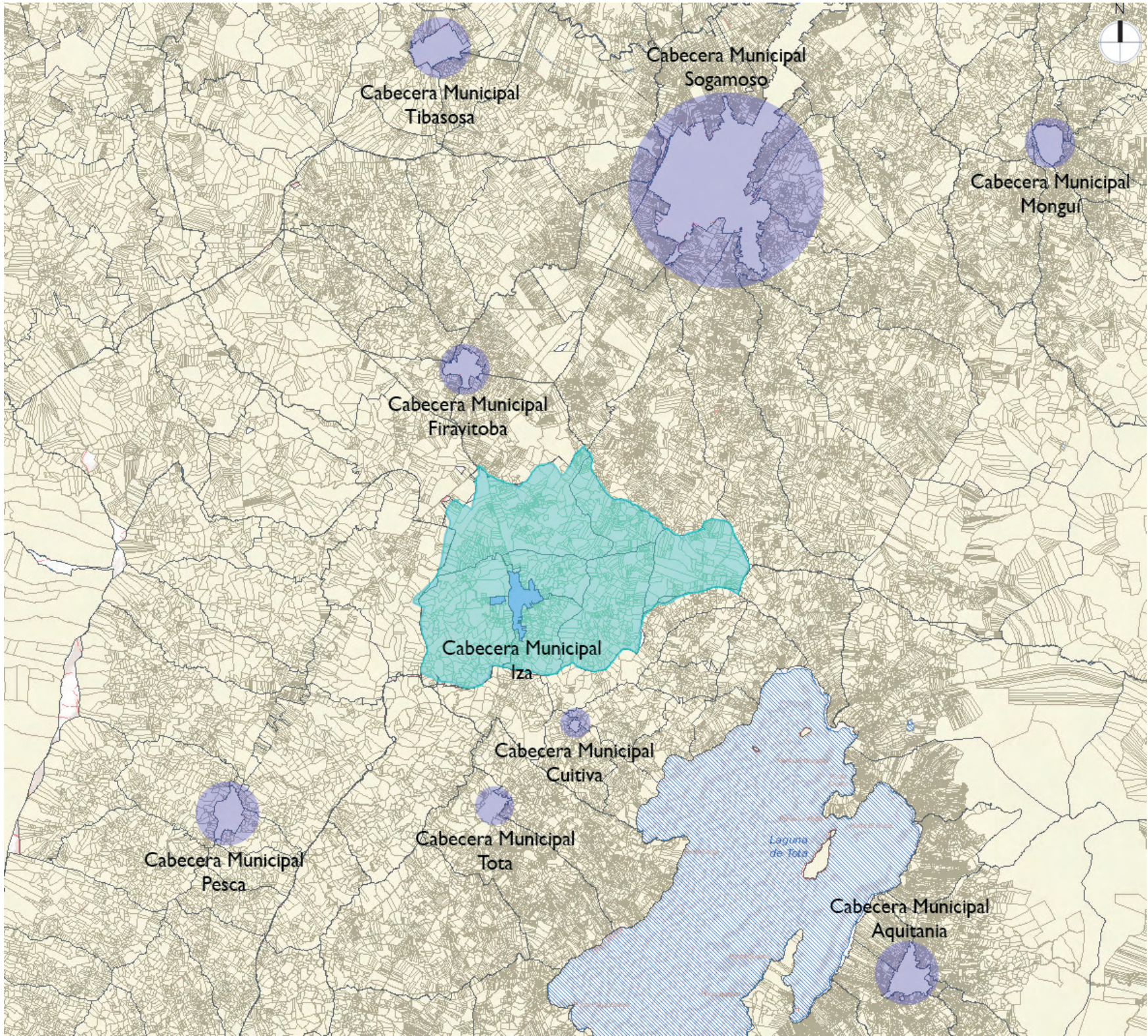
Fuente: Tomado de Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Iza y su área de Influencia



**Plano Lenos y Vacíos año 2016**

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de la Salle, del primer semestre de 2016





Localización del Municipio de Iza. Planos División Predial

Fuente: Elaboración propia con base a información tomada de <http://www.igac.gov.co/igac>, simulador de Catastro. Consultada el 25 de Agosto de 2017

**Geografía**

**Descripción Física**

El municipio de Iza cuenta con una extensión territorial de 54 kilómetros cuadrados, con una altura de 2.560 m.s.n.m. Se encuentra localizado en el piedemonte de las estribaciones de la cordillera oriental y sobre el costado sur del valle del Sugamuxi, y en el centro del departamento de Boyacá. Posee una temperatura promedio entre 12 y 15 °C. Iza es uno de los trece municipios que forman parte de la provincia de sugamuxi. Se encuentra a 90 kilómetros del oriente de Tunja.

Por las características de sus tierras se ha denominado “Valle de Iza”, es una depresión orográfica de la cordillera oriental que sirve de cause al río Tota o Iza, con sus afluentes las quebradas Chiguata y Toquilla, por el costado izquierdo y por el derecho cruz, colorada y fragua.

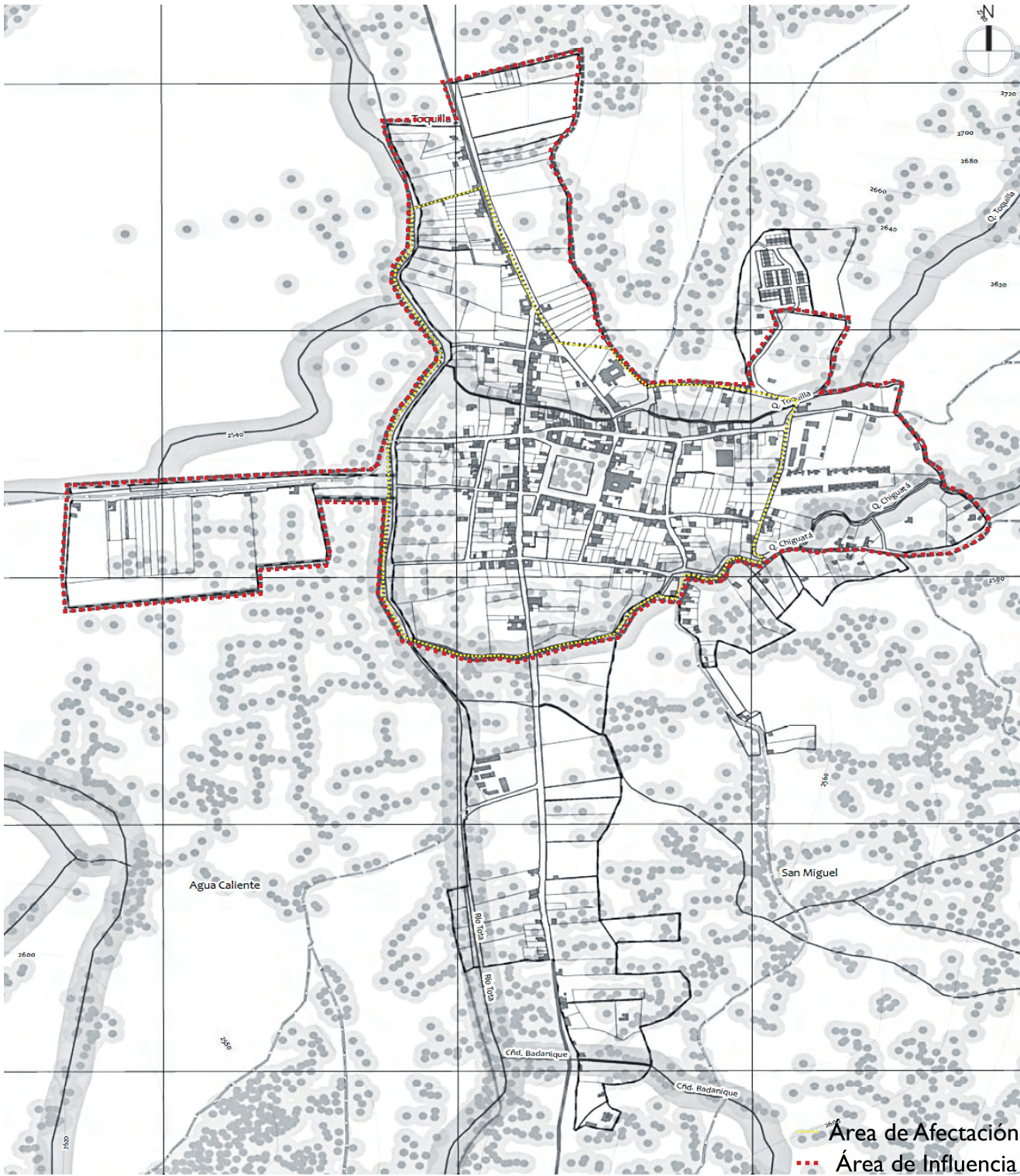
Ideográficamente, Iza hace parte de la gran cuenca del río magdalena, la cual integra como una de sus principales unidades la cuenca del río chicamocha. Dentro del municipio se encuentra la micro cuenca del río Iza, que es alimentada por las quebradas Chiguata, toquilla, la fragua, aguacaliente y carichana entre otras.

**Límites del municipio**

- Limita al Norte con: municipios de Firavitoba y Sogamoso.
- Limita al Sur con: municipio de Cuitiva.
- Limita al Oriente con: municipios de Sogamoso y Cuitiva.
- Limita al Occidente con: municipios de Pesca y Firavitoba.

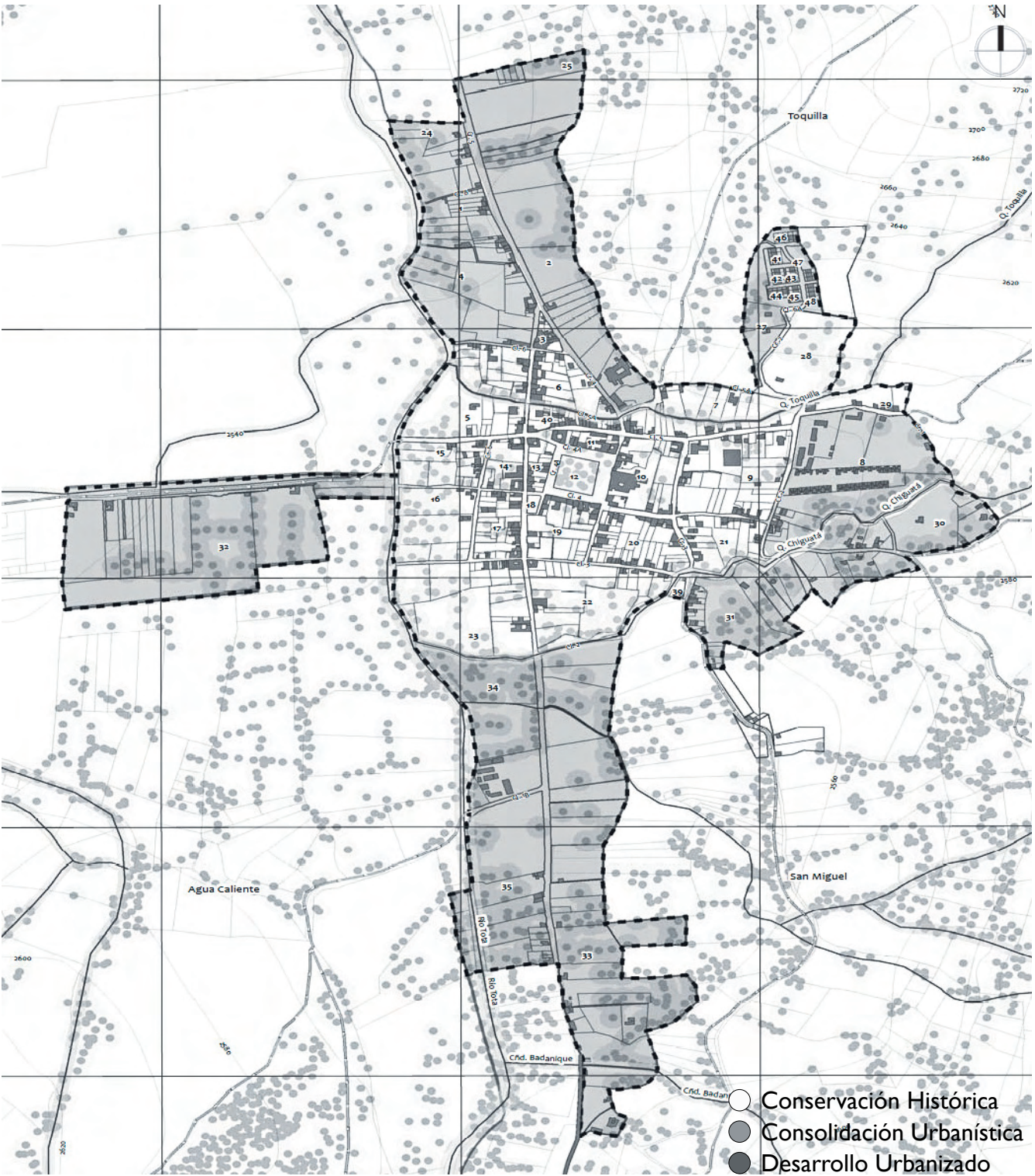
Fuente: Información tomada de la página del Municipio de Iza. [http://www.iza-boyaca.gov.co/informacion\\_general.shtml](http://www.iza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml). Consultada el 27 de Agosto de 2019





**Plano Área Afectada y Área de Influencia 2011**

Fuente: Tomado de Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Iza y su área de Influencia



**Tratamientos Urbanísticos Propuestos**

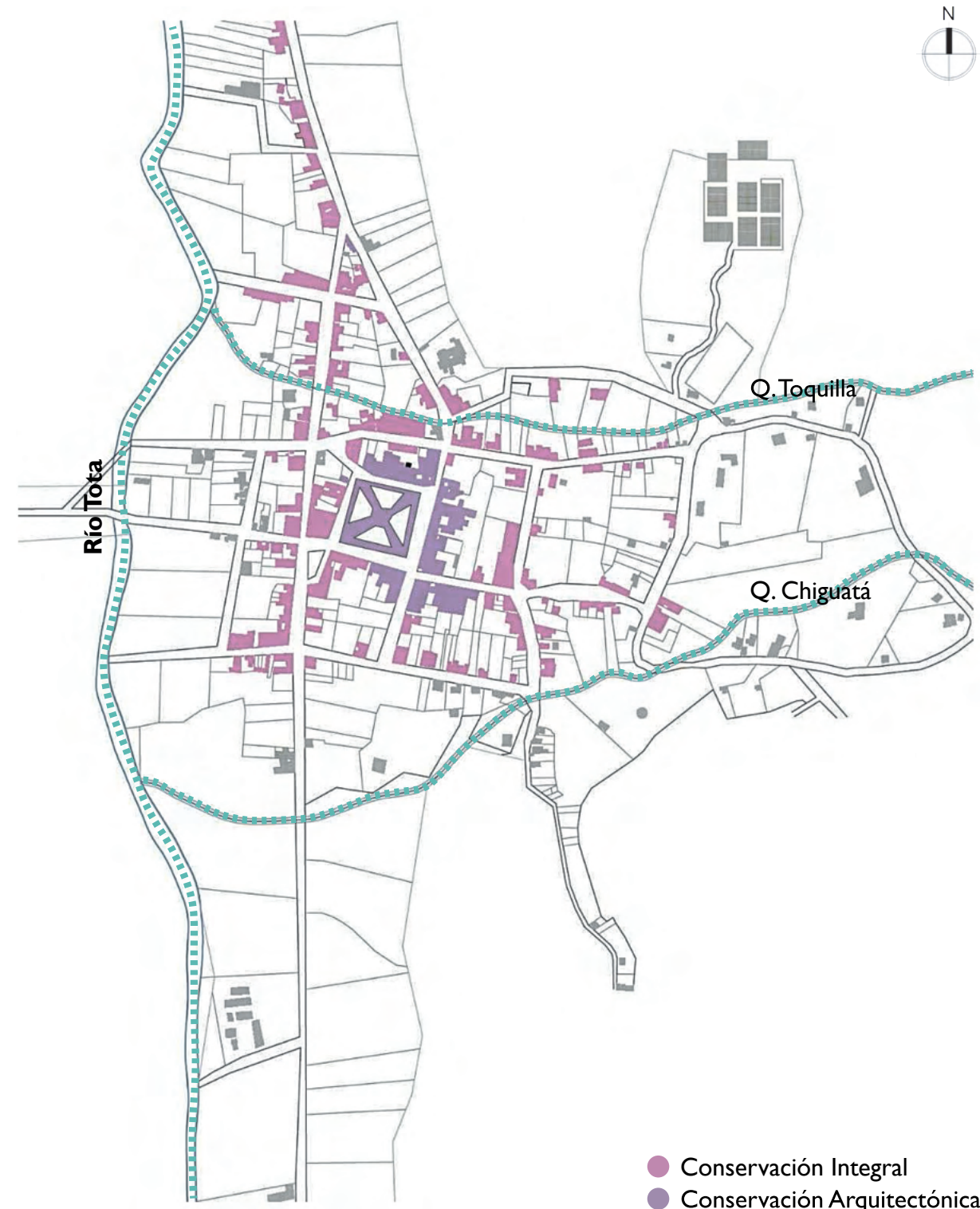
Fuente: Tomado de Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Iza y su área de Influencia





**Plano Niveles de Intervención 2011**

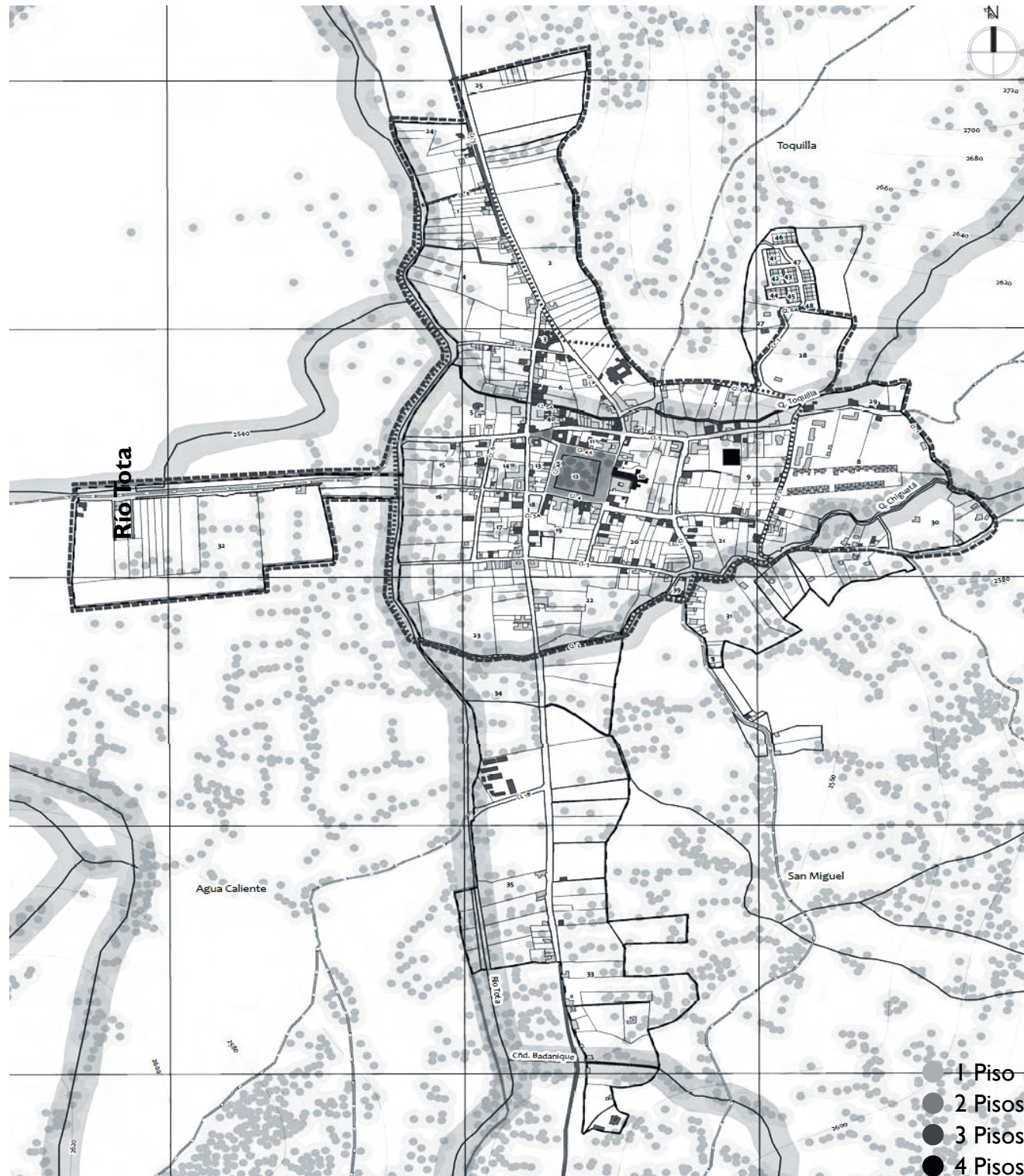
Fuente: Tomado de Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Iza y su área de Influencia



**Plano Inmuebles de Conservación Arquitectónica e Integral 2016**

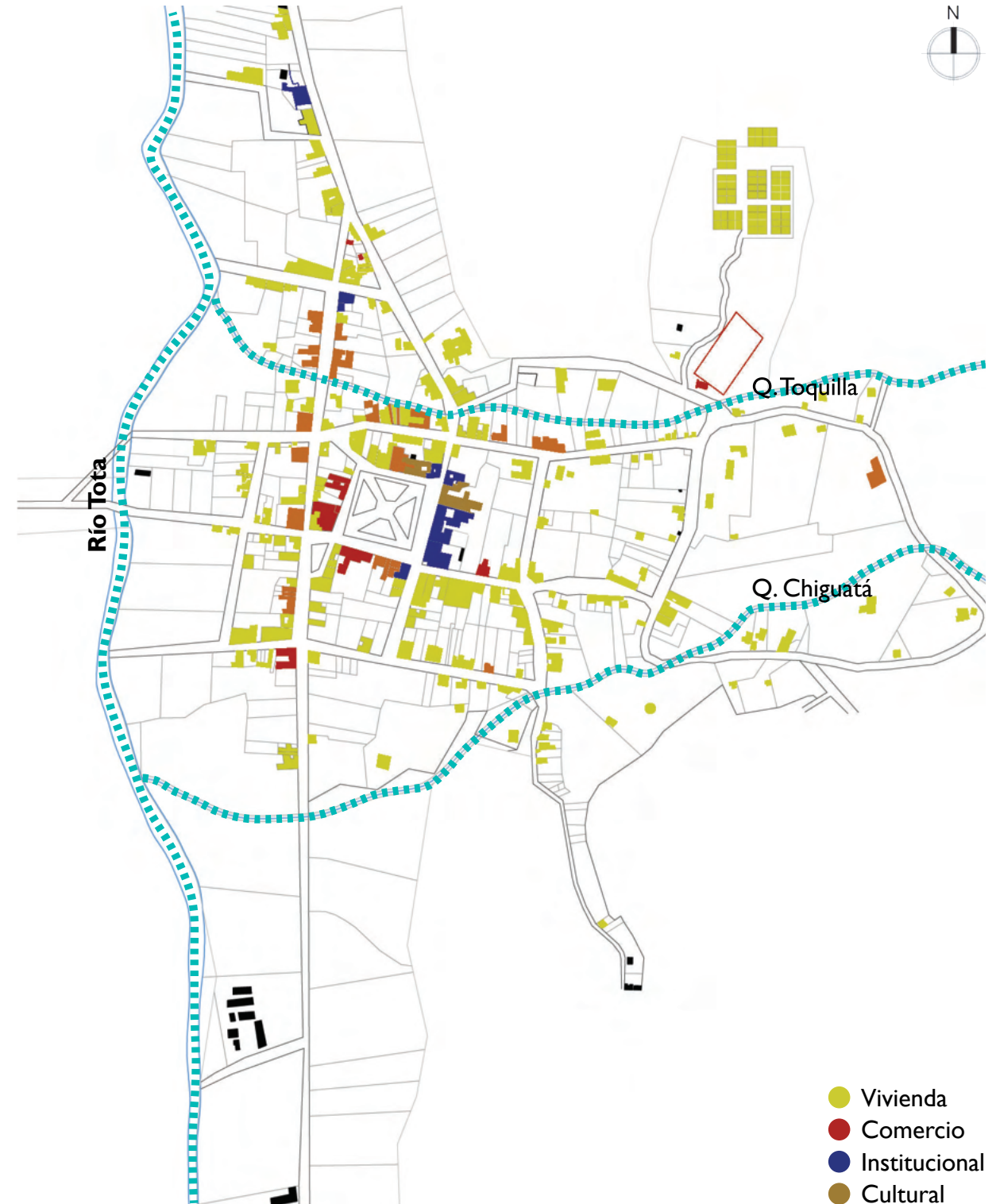
Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de la Salle, del primer semestre de 2016





**Plano de alturas 2011**

Fuente: Tomado de Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Iza y su área de Influencia





**Plano Usos año 2016**


Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de la Salle, del primer semestre de 2016





Municipio: <b>MONGUÍ</b> Departamento: <b>Boyacá</b>													Declaratoria: Resolución 0087 de 2005													 	
Fundación: Diciembre 31 de 1601						Fundador: Alonso Domínguez Medellín y Fray Juan Blas Redondo							Por la cual se declaran cuatro (4) sectores urbanos, localizados en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Caldas y Cundinamarca, como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional													Localización Departamento de Boyacá y Monguí en el Departamento	
Altura: 2.900 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 12° C																					
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016															
Cabecera						859	1.349	2.172	3.479	2.981	2.634	2.816															
Resto						2.754	3.091	2.322	2.744	2.495	2.267	2.169															
Total						3.613	4.440	4.494	6.223	5.476	4.901	4.985															
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE.																											
Censo General 2005																											
Sector	Población Censada					Hogares Censados			Personas por Hogar		Viviendas Censadas																
Cabecera	2.634					696			3,77		666																
Resto	2.267					591					1.067																
Total	4.901					1.287					1.733																
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																											
Análisis Cierre de Brechas																											
						Municipio		Departamento		Región																	
Cobertura neta educación media (%2015)						47,4%		49,0%		47,3%																	
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)						54,3		53,5		52,0																	
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)						9,1%		10,0%		8,4%																	
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)						14,3		14,9		12,4																	
Cobertura vacunación DTP (2015)						69,3%		93,3%		93,6%																	
Cobertura total acueducto (2005)						89,0%		78,2%		82,2%																	
Déficit cualitativo de vivienda (2005)						29,4%		33,5%		24,0%																	
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)						4,5%		7,1%		11,9%																	
Fuente:Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación																											

Declaratoria: Resolución 0087 de 2005												
Por la cual se declaran cuatro (4) sectores urbanos, localizados en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Caldas y Cundinamarca, como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional												
Que los valores considerados por la Dirección de Patrimonio para recomendar al Consejo de Monumentos Nacionales la emisión de concepto para la declaratoria de cuatro (4) sectores urbanos, localizados en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Caldas y Cundinamarca, como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional, son: 1.Valores de orden temporal. 2.Valores del orden físico. - Constitución del bien - Estado actual de conservación - Autenticidad 3.Valores del orden estético. 4.Valores de representatividad histórica. 5.Valores de representatividad cultural. Que para dar cumplimiento al artículo 8° de la Ley 397 de 1997, la Dirección de Patrimonio, nuevamente, sometió a consideración del Consejo de Monumentos Nacionales el estudio de solicitud de declaratoria de los cuatro (4) sectores urbanos, localizados en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Caldas y Cundinamarca, como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, según consta en el Acta número 006 del 6 de agosto de 2004. El Consejo de Monumentos Nacionales al verificar que estos sectores poseen valores de orden temporal, físico, estético, y representatividad histórica y cultural y recomendó a la señora Ministra de Cultura su declaratoria.												
Fuente:Tomado de la Declaratoria Resolución 0087 de 2005												
Plan Especial de Manejo y Protección: Se encuentra en la Fase I de Diagnóstico.												
Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Acuerdo No. 007 del 21 de Abril de 2004.												

Provincias Departamento de Boyacá		
Fuente:Tomado Grupo de Trabajo Unisalle. 2.016		
		
Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 27 de Agosto de 2019		









### Casco Urbano Monguí en el año 1973

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio “Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana” Bogotá, 1997. Pág. 64





Municipio: <b>TUNJA</b> Departamento: <b>Boyacá</b>													Declaratoria: Ley 163 de 1959										 																																															
Fundación: Agosto 06 de 1539						Fundador: Gonzalo Suárez Rendón							Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación										Localización Departamento de Boyacá y Tunja en el Departamento																																															
Altura: 2.782 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 13° C																																																																
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	Artículo 4°.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de <b>Tunja</b> , Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica).																																																									
Cabecera						23.008	40.451	55.166	87.931	101.938	145.138	184.125																																																										
Resto						4.394	12.581	5.114	6.035	6.200	7.281	7.799																																																										
Total					20.236	27.402	53.032	60.280	93.966	108.138	152.419	191.924	Artículo 2°.- En desarrollo de lo acordado en la Séptima Conferencia Internacional Americana, reunida en Montevideo en el año de 1933, se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehistórico, los siguientes: a) Los que estén íntimamente vinculados con la lucha por la inde-pendencia y con el período inicial de la organización de la República. b) Las obras de la naturaleza de gran interés científico indispensables para el estudio de la flora y la geología.																																																									
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																																																																						
Censo General 2005																																																																						
													 <table><tr><th>Provincias</th><th>Población</th><th>Área (km²)</th></tr><tr><td>Centro</td><td>290.627</td><td>1716,3</td></tr><tr><td>Gutiérrez</td><td>30.667</td><td>1997,03</td></tr><tr><td>La Libertad</td><td>11.642</td><td>1851,62</td></tr><tr><td>Lengupá</td><td>25.391</td><td>1396,7</td></tr><tr><td>Márquez</td><td>66.050</td><td>1068</td></tr><tr><td>Neira</td><td>38.081</td><td>1392,19</td></tr><tr><td>Norte</td><td>37.578</td><td>1132</td></tr><tr><td>Occidente</td><td>197.512</td><td>2582,9</td></tr><tr><td>Oriente</td><td>35.491</td><td>508,3</td></tr><tr><td><b>Ricaurte</b></td><td><b>91.569</b></td><td><b>1538,16</b></td></tr><tr><td>Sugamuxi</td><td>200.041</td><td>2546,34</td></tr><tr><td>Tundama</td><td>186.556</td><td>1247,58</td></tr><tr><td>Valderrama</td><td>46.322</td><td>2197</td></tr><tr><td>Puerto Boyacá (ZMEB)</td><td>55.694</td><td>1472</td></tr><tr><td>Cubará (DFB)</td><td>6.614</td><td>1650</td></tr></table>										Provincias	Población	Área (km²)	Centro	290.627	1716,3	Gutiérrez	30.667	1997,03	La Libertad	11.642	1851,62	Lengupá	25.391	1396,7	Márquez	66.050	1068	Neira	38.081	1392,19	Norte	37.578	1132	Occidente	197.512	2582,9	Oriente	35.491	508,3	<b>Ricaurte</b>	<b>91.569</b>	<b>1538,16</b>	Sugamuxi	200.041	2546,34	Tundama	186.556	1247,58	Valderrama	46.322	2197	Puerto Boyacá (ZMEB)	55.694	1472	Cubará (DFB)	6.614	1650
Provincias	Población	Área (km²)																																																																				
Centro	290.627	1716,3																																																																				
Gutiérrez	30.667	1997,03																																																																				
La Libertad	11.642	1851,62																																																																				
Lengupá	25.391	1396,7																																																																				
Márquez	66.050	1068																																																																				
Neira	38.081	1392,19																																																																				
Norte	37.578	1132																																																																				
Occidente	197.512	2582,9																																																																				
Oriente	35.491	508,3																																																																				
<b>Ricaurte</b>	<b>91.569</b>	<b>1538,16</b>																																																																				
Sugamuxi	200.041	2546,34																																																																				
Tundama	186.556	1247,58																																																																				
Valderrama	46.322	2197																																																																				
Puerto Boyacá (ZMEB)	55.694	1472																																																																				
Cubará (DFB)	6.614	1650																																																																				
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005													Provincias Departamento de Boyacá																																																									
Cierre de Brechas													Fuente: Tomado Grupo de Trabajo Unisalle.2016																																																									
																																																																						
													Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 27 de Agosto de 2019																																																									





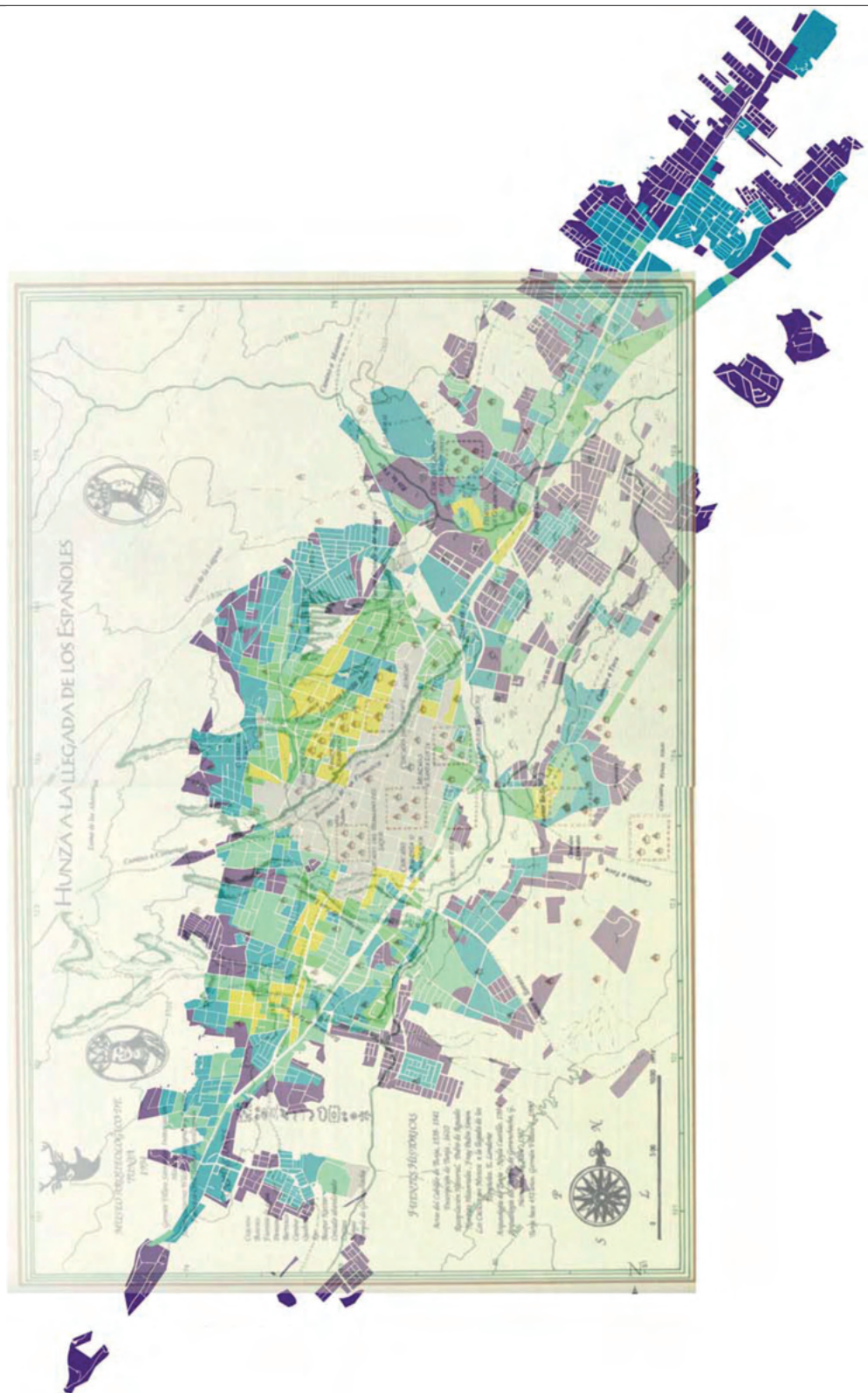
**Estructura predial del sector antiguo en el año 1992**



**Ocupación del suelo en el sector antiguo**

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 58 y 95





Crecimiento urbano años 1939, 1957, 1973 y 2005

Fuente: Museo arqueológico de Tuna y Aerofotografías IGAC



Tunja a la llegada de los españoles

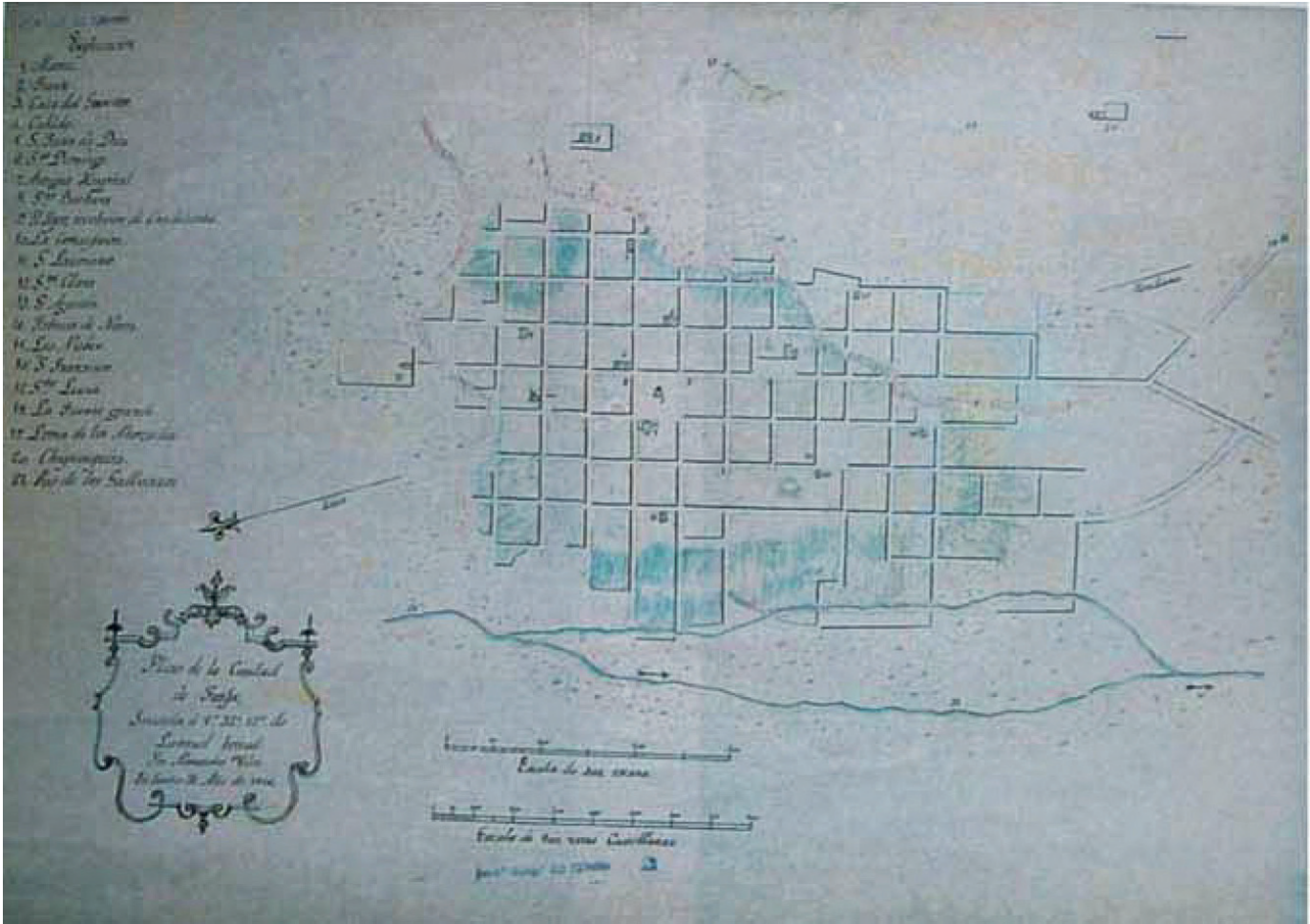
Fuente: Museo arqueológico de Tuna





Plano Tunja en el siglo XVI (1623)

Fuente: Archivo Curia - Tunja



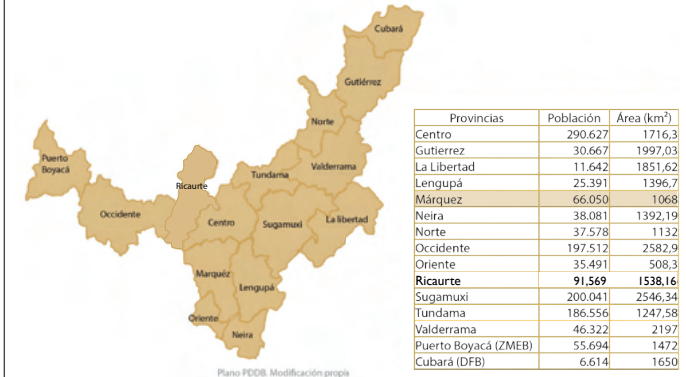
Plano Tunja en el año 1816

Fuente: Centro Geográfico del Ejército Madrid



### Localización Departamento de Boyacá y Turmequé en el Departamento

Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia

**Provincias Departamento de Boyacá**

Fuente: Tomado Grupo de Trabajo Unisalle.2016



Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 27 de Agosto de 2019







**Estructura predial del casco urbano del municipio de Turmequé en el año 1987**

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 48





Municipio: <b>VILLA DE LEYVA</b> (Villa de Nuestra Señora Santa María de Leyva) Departamento: <b>Boyacá</b>													<b>Declaratoria: Decreto 3641 de 1954 Ley 163 de 1959</b>					 																																																																													
<b>Fundación:</b> Junio 12 de 1572						<b>Fundador:</b> Andrés Díaz Venero de Leyva, presidente de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada							<b>Por el cual se declara a Villa de Leiva monumento nacional y se dictan otras disposiciones</b>					<b>Localización Departamento de Boyacá y Villa de Leyva en el Departamento</b>																																																																													
<b>Altura:</b> 2.125 metros sobre el nivel del mar						<b>Temperatura:</b> 18° C																																																																																									
													Que por Decreto 3518 del 09 de noviembre se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República; Que las leyes 5 de 1940 y 107 de 1946 declararon monumentos nacionales de utilidad pública, todos aquello edificios y lugres que por su antigüedad y belleza arquitectónica, o por su tradición histórica, merezcan ser conservados como patrimonio nacional. Que Villa de Leiva fue sede del primer congreso de las provincias unidas de la Nueva Granada, reunido en 1812 bajo la presidencia de Don Camilo Torres; Que en la misma villa nació don Antonio Ricaurte, héroe de San Mateo, y murió don Antonio Nariño, precursor de la Independencia nacional; Que arquitectónicamente Leiva forma un conjunto armónico altamente valioso y representativo del arte colonial, cuya conservación importa al interés público como testimonio que es de una cultura y de un ambiente.					<b>Fuente:</b> Imágenes tomadas de Wikipedia																																																																													
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																																																																																															
<b>Distribución área, propietarios y avalúos, sectores urbano y rural</b>																																																																																															
<table><tr><th>Sector</th><th>No. Predios</th><th>Propietarios</th><th>Área (Ha)</th><th>Área Constrida (Ha)</th><th>Avalúo (Miles de Pesos)</th><th>Avalúo Promedio (Miles de Pesos)</th></tr><tr><td>Rural</td><td>6,017</td><td>9,603</td><td>11.904.22</td><td>409,863</td><td>410.372.671</td><td>68.202</td></tr><tr><td>Urbano</td><td>2,748</td><td>4,292</td><td>164,42</td><td>411,155</td><td>374.362.673</td><td>136.231</td></tr><tr><td>Total</td><td>8,765</td><td>13,895</td><td>12.068.65</td><td>821,018</td><td>784.735.344</td><td>89.531</td></tr></table>													Sector	No. Predios	Propietarios	Área (Ha)	Área Constrida (Ha)	Avalúo (Miles de Pesos)	Avalúo Promedio (Miles de Pesos)	Rural	6,017	9,603	11.904.22	409,863	410.372.671	68.202	Urbano	2,748	4,292	164,42	411,155	374.362.673	136.231	Total	8,765	13,895	12.068.65	821,018	784.735.344	89.531						 <table><tr><th>Provincias</th><th>Población</th><th>Área (km²)</th></tr><tr><td>Centro</td><td>290.627</td><td>1.716,3</td></tr><tr><td>Gutiérrez</td><td>30.667</td><td>1997,03</td></tr><tr><td>La Libertad</td><td>11.642</td><td>1851,62</td></tr><tr><td>Lengupá</td><td>25.391</td><td>1396,7</td></tr><tr><td>Márquez</td><td>66.050</td><td>1068</td></tr><tr><td>Neira</td><td>38.081</td><td>1392,19</td></tr><tr><td>Norte</td><td>37.578</td><td>1132</td></tr><tr><td>Occidente</td><td>197.512</td><td>2582,9</td></tr><tr><td>Oriente</td><td>35.491</td><td>508,3</td></tr><tr><td>Ricaurte</td><td>91.569</td><td>1538,16</td></tr><tr><td>Sugamuxi</td><td>200.041</td><td>2546,34</td></tr><tr><td>Tundama</td><td>186.556</td><td>1247,58</td></tr><tr><td>Valderrama</td><td>46.322</td><td>2197</td></tr><tr><td>Puerto Boyacá (ZMEB)</td><td>55.694</td><td>1472</td></tr><tr><td>Cubará (DFB)</td><td>6.614</td><td>1650</td></tr></table>		Provincias	Población	Área (km²)	Centro	290.627	1.716,3	Gutiérrez	30.667	1997,03	La Libertad	11.642	1851,62	Lengupá	25.391	1396,7	Márquez	66.050	1068	Neira	38.081	1392,19	Norte	37.578	1132	Occidente	197.512	2582,9	Oriente	35.491	508,3	Ricaurte	91.569	1538,16	Sugamuxi	200.041	2546,34	Tundama	186.556	1247,58	Valderrama	46.322	2197	Puerto Boyacá (ZMEB)	55.694	1472	Cubará (DFB)	6.614	1650
Sector	No. Predios	Propietarios	Área (Ha)	Área Constrida (Ha)	Avalúo (Miles de Pesos)	Avalúo Promedio (Miles de Pesos)																																																																																									
Rural	6,017	9,603	11.904.22	409,863	410.372.671	68.202																																																																																									
Urbano	2,748	4,292	164,42	411,155	374.362.673	136.231																																																																																									
Total	8,765	13,895	12.068.65	821,018	784.735.344	89.531																																																																																									
Provincias	Población	Área (km²)																																																																																													
Centro	290.627	1.716,3																																																																																													
Gutiérrez	30.667	1997,03																																																																																													
La Libertad	11.642	1851,62																																																																																													
Lengupá	25.391	1396,7																																																																																													
Márquez	66.050	1068																																																																																													
Neira	38.081	1392,19																																																																																													
Norte	37.578	1132																																																																																													
Occidente	197.512	2582,9																																																																																													
Oriente	35.491	508,3																																																																																													
Ricaurte	91.569	1538,16																																																																																													
Sugamuxi	200.041	2546,34																																																																																													
Tundama	186.556	1247,58																																																																																													
Valderrama	46.322	2197																																																																																													
Puerto Boyacá (ZMEB)	55.694	1472																																																																																													
Cubará (DFB)	6.614	1650																																																																																													
Fuente:Tomado del “Plan de Desarrollo Municipal Primero Villa de Leyva 2016 - 2019” , elaborado con información del Sistema de Información predial del Municipio 2016													Fuente:Tomado del Decreto 3641 de 1954					<b>Provincias Departamento de Boyacá</b>																																																																													
<b>Estimado Poblacional Ajustado para un día temporada alta</b>													<b>Ley 163 de 1959</b>					Fuente:Tomado Grupo de Trabajo Unisalle. 2016																																																																													
													<b>“Artículo 4. Parágrafo:</b> Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena,Mompox,Popayán,Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, <b>Villa de Leyva</b> , Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII”.																																																																																		
													Fuente:Tomado del Artículo 4, Ley 163 de 1959					<b>Reglamentación:</b> Resolución No. 025 del 15 de Junio de 1990. Acta No. 5 del 18 de Julio de 1995.																																																																													
													<b>Plan Especial de Manejo y Protección:</b> Se encuentra en la Fase II de Formulación.																																																																																		
Fuente:Tomado del “Plan de Desarrollo Municipal Primero Villa de Leyva 2016 - 2019” , elaborado con información del Sistema de Información predial del Municipio 2016													<b>Plan Básico de Ordenamiento Territorial.</b> Acuerdo No. 021 de Agosto de 2004.					Fuente:Tomado del “Plan de Desarrollo Municipal Primero																																																																													



Plano de la Primera Fundación de Villa de Leyva

Fuente: Autor desconocido. Tomado del libro: “Villa de Leyva: Huella de los Siglos” Fernando Restrepo Uribe. Bogotá, 1986. Pág. 56

Este plano fue elaborado entre el 12 y el 15 de diciembre de 1572, y en él se indican los nombres de los beneficiarios de los solares. Es el plano de ciudad mas antiguo que se conoce de la fundación de ciudades en Colombia.

Plano de la Segunda Fundación de Villa de Leyva

Segundo plano de Villa de Leyva ordenado mediante auto del 6 de mayo de 1582, cuando se trasladó la Villa del sitio de Saquencipá al actual emplazamiento. Se indican los nombres de cerca 120 adjudicatarios. Además de los conventos de San Francisco y Santo Domingo de las comunidades religiosas franciscanos y dominicos respectivamente, casas de cabildo y carnicería.


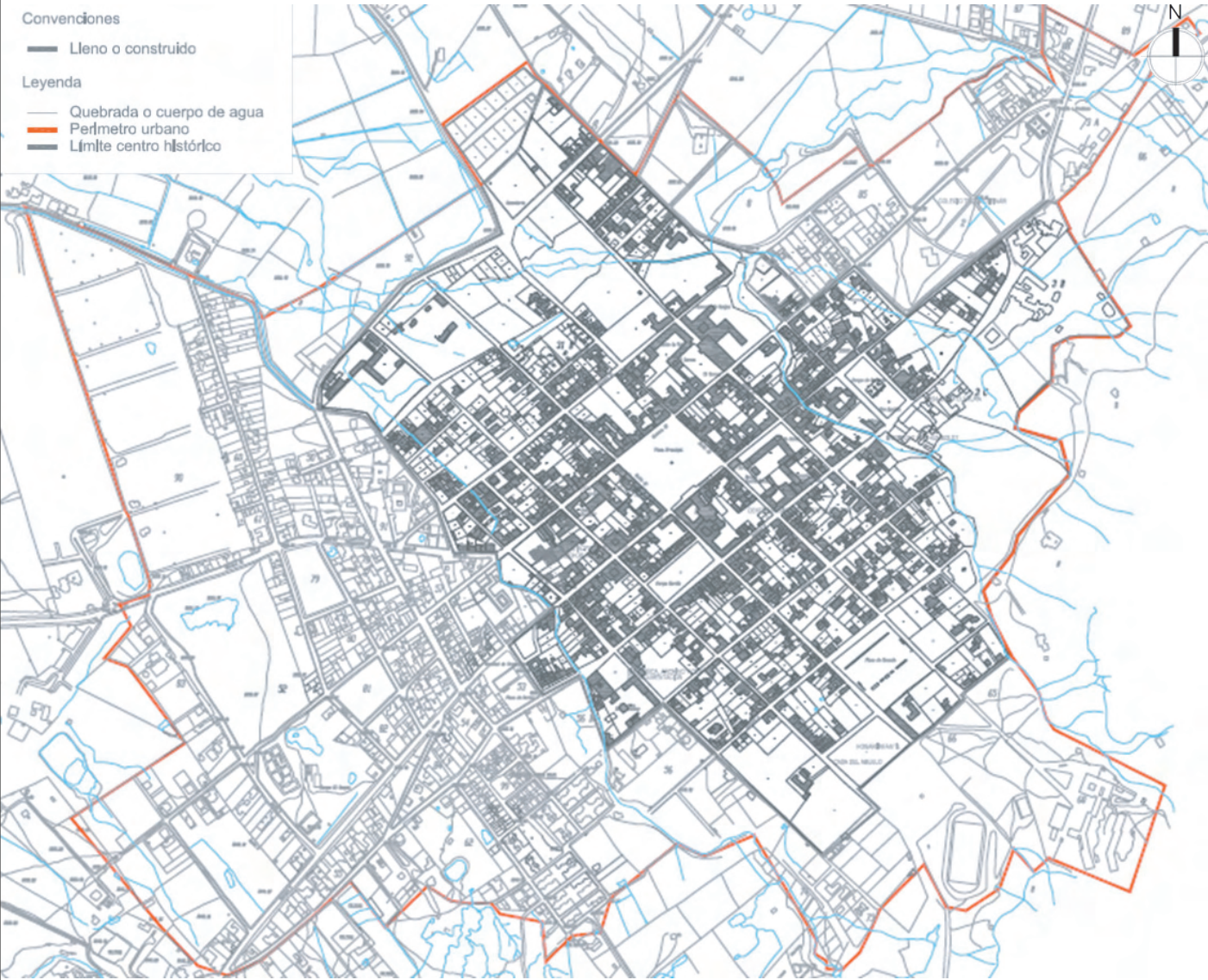


Plano de la Segunda Fundación de Villa de Leyva

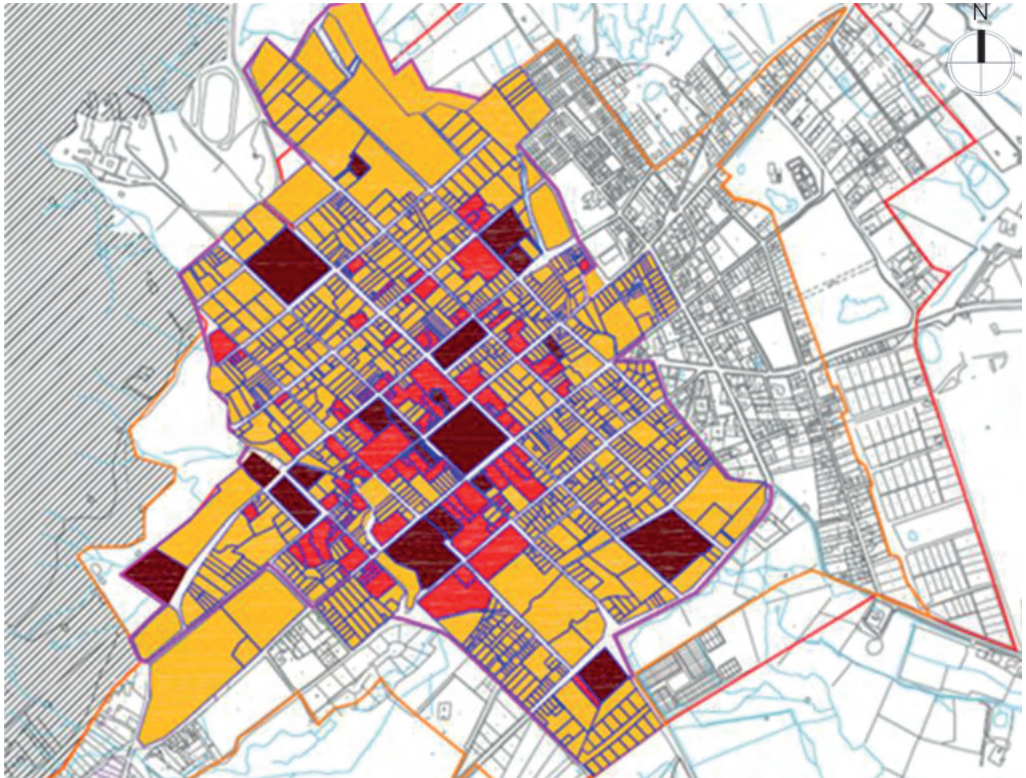
Fuente: Autor desconocido. Tomado del libro: “Villa de Leyva: Huella de los Siglos” Fernando Restrepo Uribe. Bogotá, 1986. Pág. 68





	
<p><b>Plano de Ocupación de suelo en el casco urbano de Villa de Leyva en el año 1993</b></p>	<p><b>Plano Llenos y Vacíos año 2014</b></p>
<p>Fuente: Tomado del libro “Patrimonio Urbano en Colombia” editado por el Instituto Colombiano de Cultura en 1997. Pág. 67. Estudios realizados por el Arq. Jaime Salcedo en 1993, revisados y complementados por la Subdirección de Patrimonio, Programa Centros Históricos desarrollado entre 1994 y 1995</p>	<p>Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Villa de Leyva y su Área de Influencia</p>





**Convenciones**

- Nivel 1
- Nivel 2
- Nivel 3
- Quebrada o cuerpo de agua
- Perímetro urbano PBOT 2004
- Perímetro de Zona de Influencia Propuesto
- Perímetro de Centro Histórico Propuesto

El nivel permitido de intervención, son la pauta o el criterio relacionados con la conservación de los valores del inmueble y su zona de influencia:

- Nivel 1: Conservación Integral
- Nivel 2: Conservación del tipo arquitectónico
- Nivel 3: Conservación Contextual.

Fuente: Tomado del Decreto 763 de 2009. Artículo 20

**Plano de la Reglamentación de Villa de Leyva del Arq. Jaime Salcedo 1989, con Cartas Catastrales actualizadas a 1993 facilitadas por el Municipio**

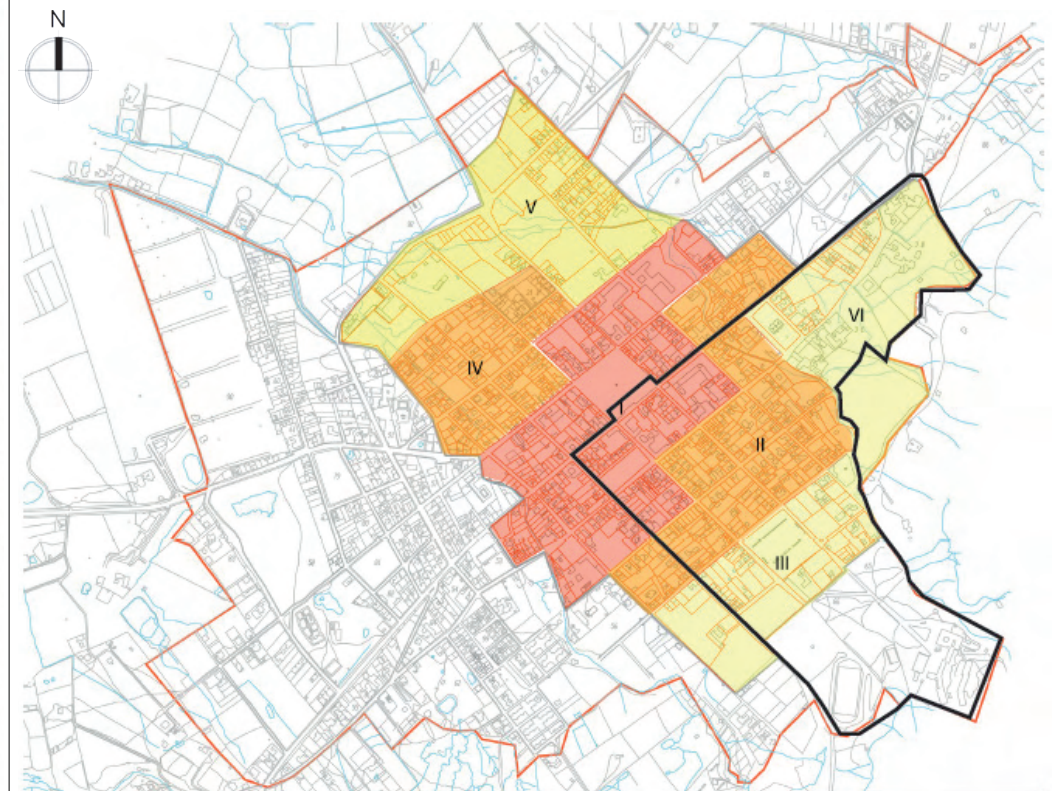
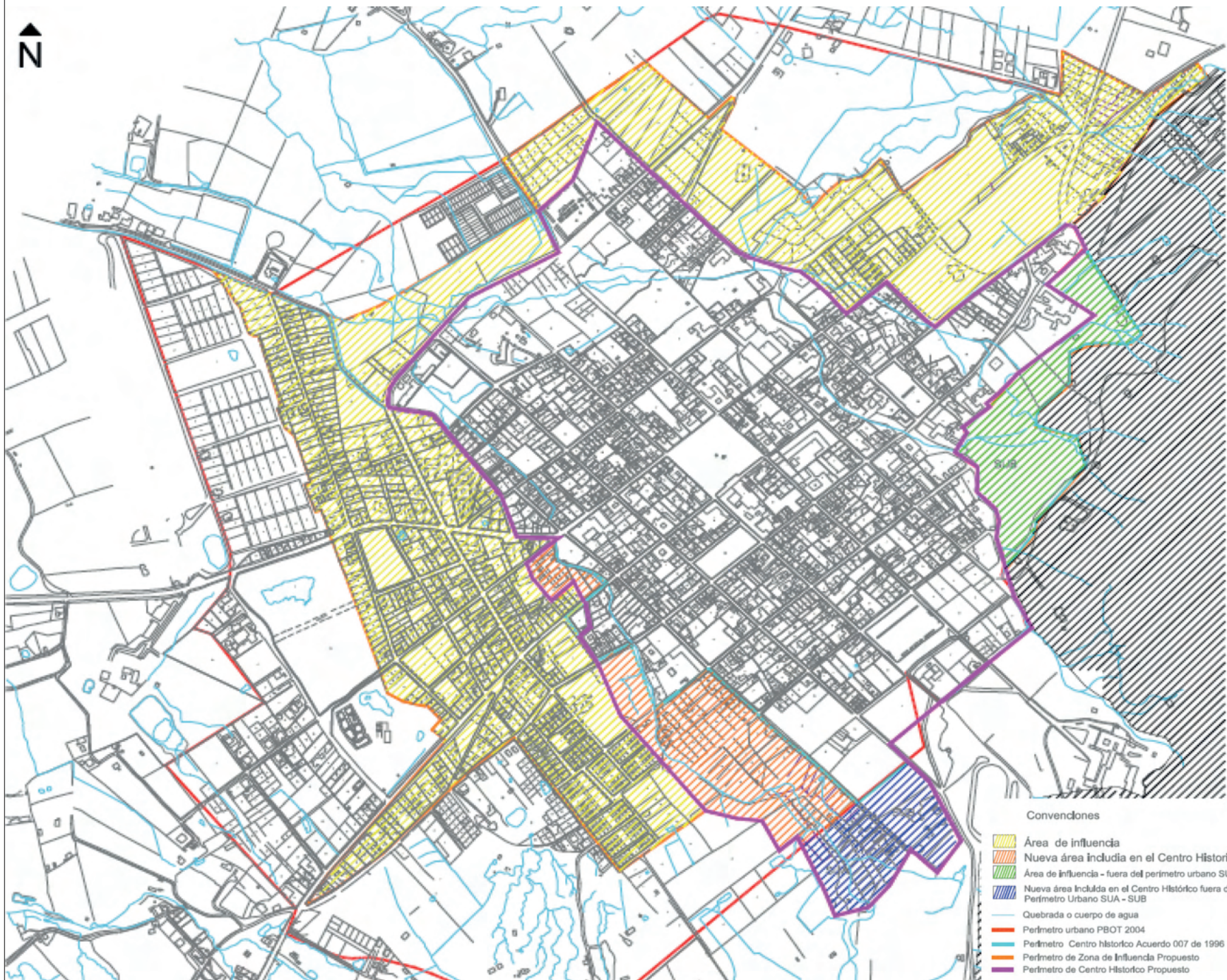
Fuente: Elaborado por la División de Inventario del Patrimonio Cultural, Subdirección de patrimonio Cultural del Instituto Colombiano de Cultura

La línea de puntos corresponde el perímetro del centro histórico en el año de 1994, el perímetro urbano corresponde a la línea de punto y línea

**Plano de Niveles de Intervención permitidos 2014**

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Villa de Leyva y su Área de Influencia



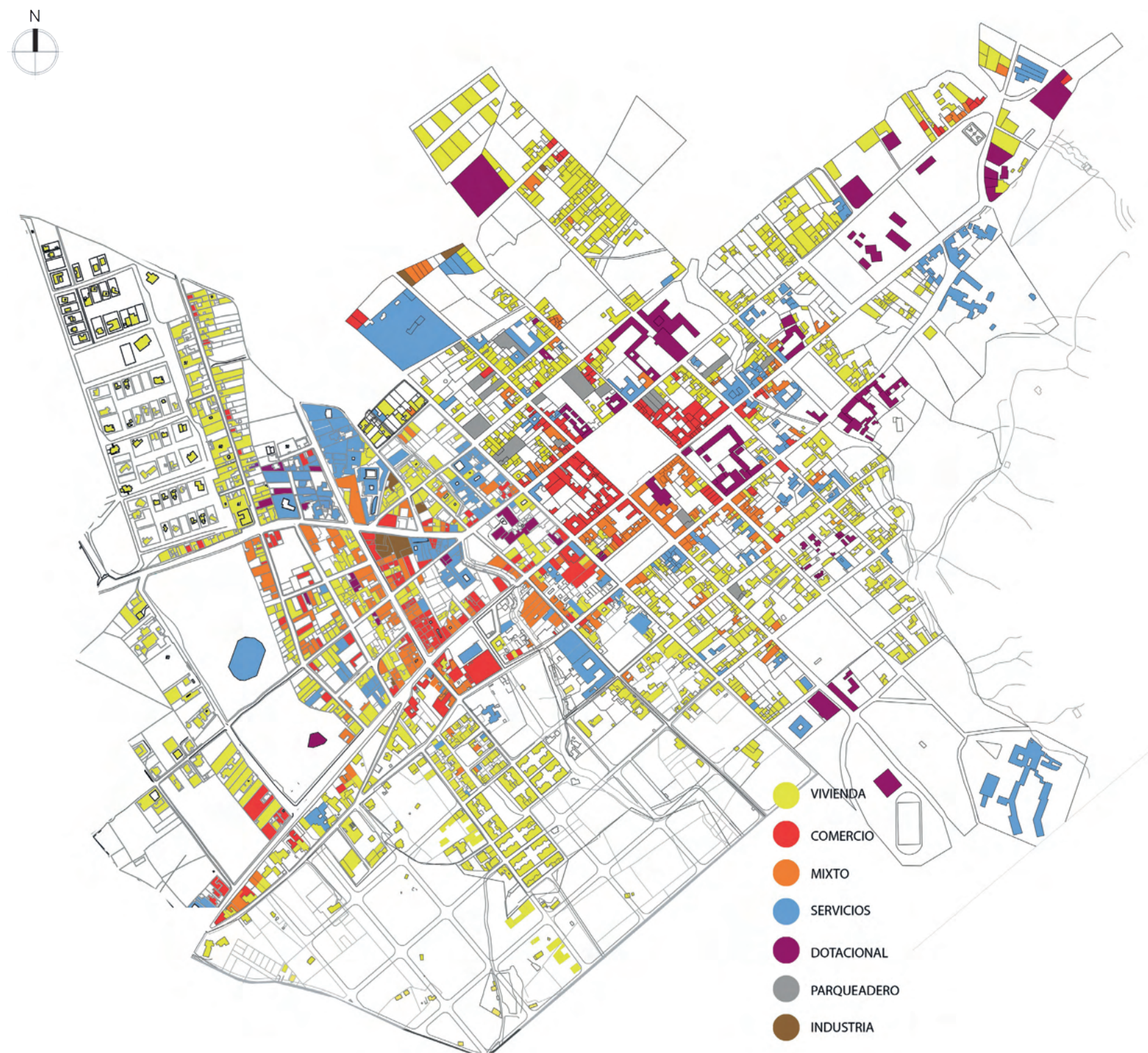


Plano PEMP  
I - Manzanas consolidadas y alta ocupación. Concentración de inmuebles de conservación.  
II y IV - baja ocupación.  
III, V, y VI- Manzanas no consolidadas. Muy baja ocupación.

**Plano Área Declarada y Área de Influencia, año 2014**

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Villa de Leyva y su Área de Influencia





Plano de Usos Villa de Leyva año 2016

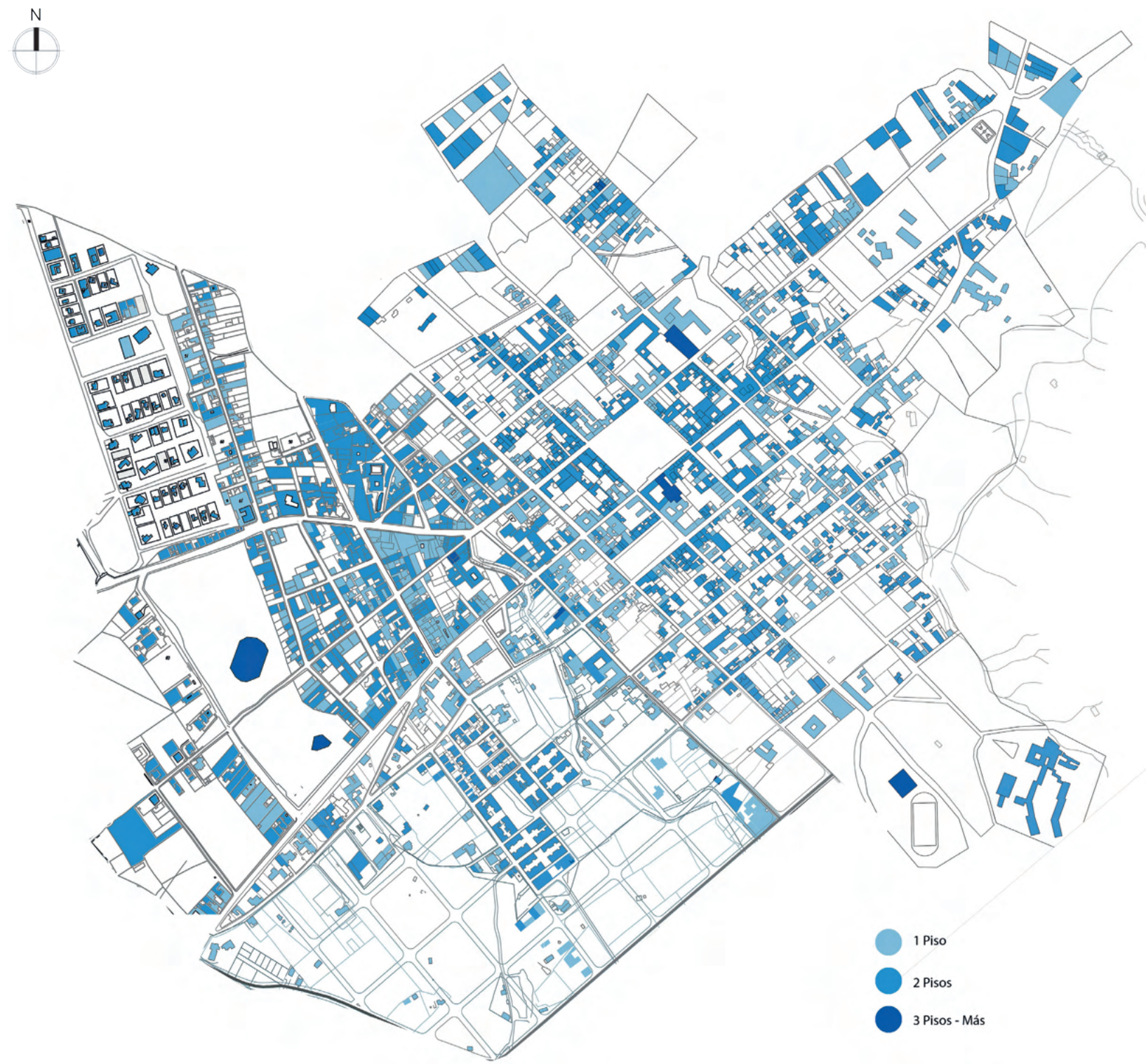
Fuente: Elaborado por el Grupo 4 del espacio académico de Renovación Urbana de la Universidad de la Salle, del primer semestre de 2016



Fotografías Villa de Leyva

Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 20 de Julio de 2019





Plano de Usos Villa de Leyva año 2016

Fuente: Elaborado por el Grupo 4 del espacio académico de Renovación Urbana de la Universidad de la Salle, del primer semestre de 2016



Fotografías Villa de Leyva

Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 20 de Julio de 2019





Fique



Buganvil (Rosado)



Fique



Borrachero (Amarillo)



Cesta de basura



Cayeno



Bancas en madera



Chirlobirlo

Vegetación  
Fotografías Laura Aponte + Modificación propia



Plano Hitos  
Plano base PBOT + Modificación propia



Plaza principal



Iglesia Parroquial



Capilla el Carmen



Parque Nariño



Parque de Ricaurte



Claustro San Francisco



Terminal de transporte



Plaza de mercado

Hitos  
Fotografías Laura Aponte





### Localización Sitios de Interés Villa de Leyva

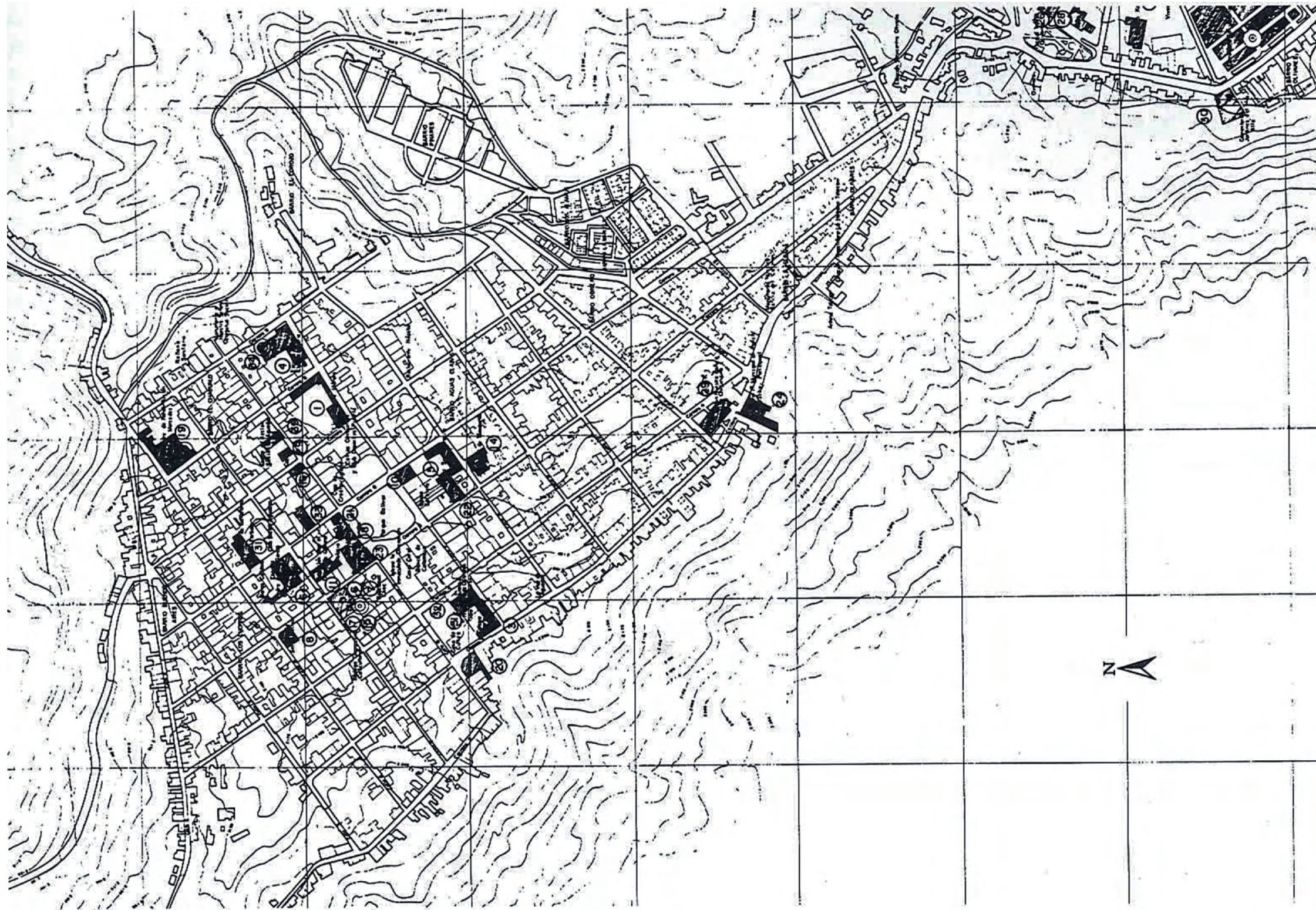
Fuente: Elaborado por el Grupo 4 del espacio académico de Renovación Urbana de la Universidad de la Salle, del primer semestre de 2016. Imágenes inferiores tomadas de Google Imágenes, consultadas el 21 de Julio de 2019





Municipio: <b>AGUADAS</b> Departamento: <b>Caldas</b>													Declaratoria: Resolución No. 1883 del 28 de Septiembre de 2001													 			
Fundación: Junio 05 de 1808						Fundador: José Narciso Estrada							Por la cual se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el Conjunto Urbano de Aguadas - Caldas y se aprueba su correspondiente Plan Especial de Protección													Localización Departamento de Caldas y Aguadas en el Departamento			
Altura: 2.214 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 17° C																						Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia	
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																													
Censo General 2005																													









**Estructura Predial del Sector Antiguo año 1994**

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 71

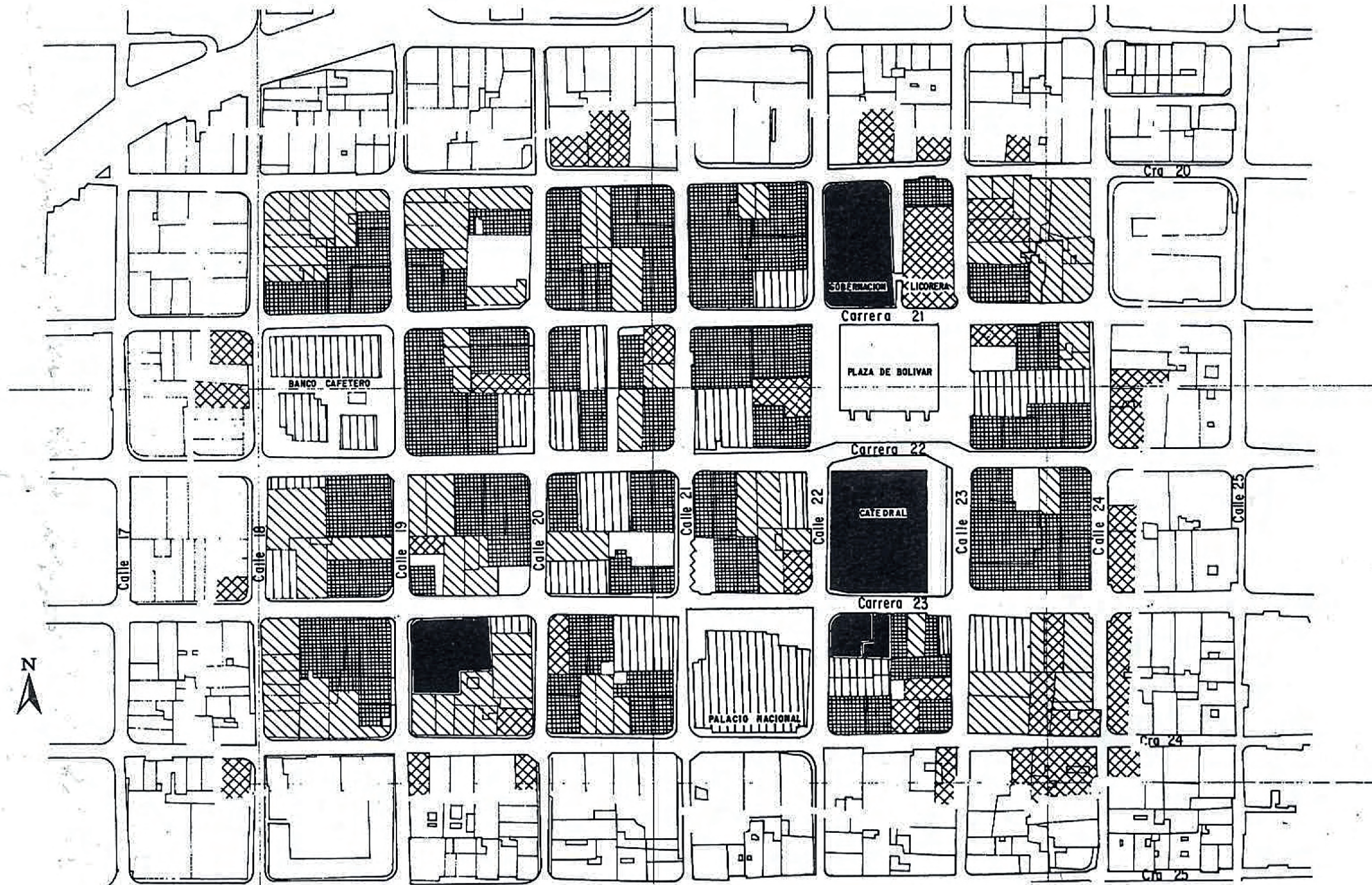




Municipio: <b>MANIZALES</b> Departamento: <b>Caldas</b>													Declaratoria: Decreto 2178 del 02 de Diciembre de 1996										<div></div>																																																					
Fundación: Octubre 12 de 1849						Fundador: Colonos Antioqueños							Por el cual se declara como Monumento Nacional el conjunto de inmuebles de arquitectura republicana localizados en el centro de Manizales, Caldas y se delimitan su área de influencia																																																															
Altura: 2.200 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 17° C																																																																						
Que la Subdirección de Patrimonio de Colcultura con la colaboración de la Universidad Nacional, seccional Manizales y el Centro Filial del Consejo de Monumentos Nacionales, seccional Caldas, realizó una calificación predial comprobando que tan solo el 42.2% del área construida en el primer piso del sector conserva sus características originales en buenas condiciones. Que el trazo urbano del centro de la ciudad de Manizales se encuentra una arquitectura de gran calidad con características del periodo que se ha denominado Republicano y cuya singularidad esta dada por el uso predominante de las técnicas tradicionales de la región, el bahareque metálico, el bahareque de tabla y el denominado bahareque encementado. Que el Consejo de Monumentos Nacionales, en su reunión ordinaria del 31 de Mayo de 1994, según consta en el Acta número 6 del mismo año, estudio la propuesta, y en su reconocimiento de las calidades de la arquitectura tradicional del centro de Manizales y la singularidad de su técnica constructiva, determino proponer al Gobierno Nacional mediante resolución No. 053 del 28 de octubre de 1954 la declaración como Monumento Nacional del conjunto de inmuebles de arquitectura republicana localizados en el Centro de la ciudad de Manizales, Caldas. Que el Consejo de Monumentos Nacionales en sesión ordinaria del 31 de mayo de 1994, según consta en el Acta No. 6 del mismo año, aprobó la propuesta de la definición del área de influencia del conjunto de inmuebles de arquitectura republicana de la ciudad de Manizales.																																																																												
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016																																																																
Cabecera						88.893	190.036	207.607	275.152	304.727	342.620	369.981																																																																
Resto						37.308	31.880	31.533	24.262	24.834	25.813	27.485																																																																
Total					60.492	126.201	221.916	239.140	299.414	329.561	368.433	397.466																																																																
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																																																																												
Censo General 2005																																																																												
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																																																																												
Análisis Cierre de Brechas																																																																												
<table><tr><td></td><td>Municipio</td><td>Departamento</td><td>Región</td></tr><tr><td>Cobertura neta educación media (%2015)</td><td>50,5%</td><td>44,0%</td><td>44,7%</td></tr><tr><td>Pruebas saber 11 matemáticas (2016)</td><td>53,5</td><td>50,1</td><td>48,6</td></tr><tr><td>Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)</td><td>3,6%</td><td>7,0%</td><td>7,7%</td></tr><tr><td>Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)</td><td>9,1</td><td>11,8</td><td>12,5</td></tr><tr><td>Cobertura vacunación DTP (2015)</td><td>99,4%</td><td>95,7%</td><td>94,8%</td></tr><tr><td>Cobertura total acueducto (2005)</td><td>97,4%</td><td>88,1%</td><td>87,6%</td></tr><tr><td>Déficit cualitativo de vivienda (2005)</td><td>5,4%</td><td>15,5%</td><td>18,7%</td></tr><tr><td>Déficit cuantitativo de vivienda (2005)</td><td>6,4%</td><td>6,7%</td><td>7,1%</td></tr></table>														Municipio	Departamento	Región	Cobertura neta educación media (%2015)	50,5%	44,0%	44,7%	Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	53,5	50,1	48,6	Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	3,6%	7,0%	7,7%	Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	9,1	11,8	12,5	Cobertura vacunación DTP (2015)	99,4%	95,7%	94,8%	Cobertura total acueducto (2005)	97,4%	88,1%	87,6%	Déficit cualitativo de vivienda (2005)	5,4%	15,5%	18,7%	Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	6,4%	6,7%	7,1%	<table><tr><td>Resultado Esperado 2018**</td><td>Esfuerzo en cierre de brechas</td></tr><tr><td>53,9%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>51,8</td><td>bajo</td></tr><tr><td>3,2%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>9,3</td><td>bajo</td></tr><tr><td>99,4%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>100,0%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>2,4%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>3,3%</td><td>bajo</td></tr></table>										Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas	53,9%	bajo	51,8	bajo	3,2%	bajo	9,3	bajo	99,4%	mediobajo	100,0%	bajo	2,4%	bajo	3,3%	bajo
	Municipio	Departamento	Región																																																																									
Cobertura neta educación media (%2015)	50,5%	44,0%	44,7%																																																																									
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	53,5	50,1	48,6																																																																									
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	3,6%	7,0%	7,7%																																																																									
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	9,1	11,8	12,5																																																																									
Cobertura vacunación DTP (2015)	99,4%	95,7%	94,8%																																																																									
Cobertura total acueducto (2005)	97,4%	88,1%	87,6%																																																																									
Déficit cualitativo de vivienda (2005)	5,4%	15,5%	18,7%																																																																									
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	6,4%	6,7%	7,1%																																																																									
Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas																																																																											
53,9%	bajo																																																																											
51,8	bajo																																																																											
3,2%	bajo																																																																											
9,3	bajo																																																																											
99,4%	mediobajo																																																																											
100,0%	bajo																																																																											
2,4%	bajo																																																																											
3,3%	bajo																																																																											
Fuente: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación																																																																												

Localización Departamento de Caldas y Manizales en el Departamento																
Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia																
<div><table><tr><td>Subregiones</td><td>No. Habitantes</td></tr><tr><td>Alto Occidente</td><td>86.649</td></tr><tr><td>Alto Oriente</td><td>58.300</td></tr><tr><td>Bajo Occidente</td><td>72.932</td></tr><tr><td>Centro Sur</td><td>509 332</td></tr><tr><td>Magdalena caldense</td><td>38.221</td></tr><tr><td>Norte caldense</td><td>62.217</td></tr></table></div>	Subregiones	No. Habitantes	Alto Occidente	86.649	Alto Oriente	58.300	Bajo Occidente	72.932	Centro Sur	509 332	Magdalena caldense	38.221	Norte caldense	62.217	Subregiones Departamento de Caldas	
Subregiones	No. Habitantes															
Alto Occidente	86.649															
Alto Oriente	58.300															
Bajo Occidente	72.932															
Centro Sur	509 332															
Magdalena caldense	38.221															
Norte caldense	62.217															
Fuente: Tomado de Wikipedia																
<div></div>																
Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 02 de Septiembre de 2019																







### Estructura Predial del Sector Antiguo año 1994

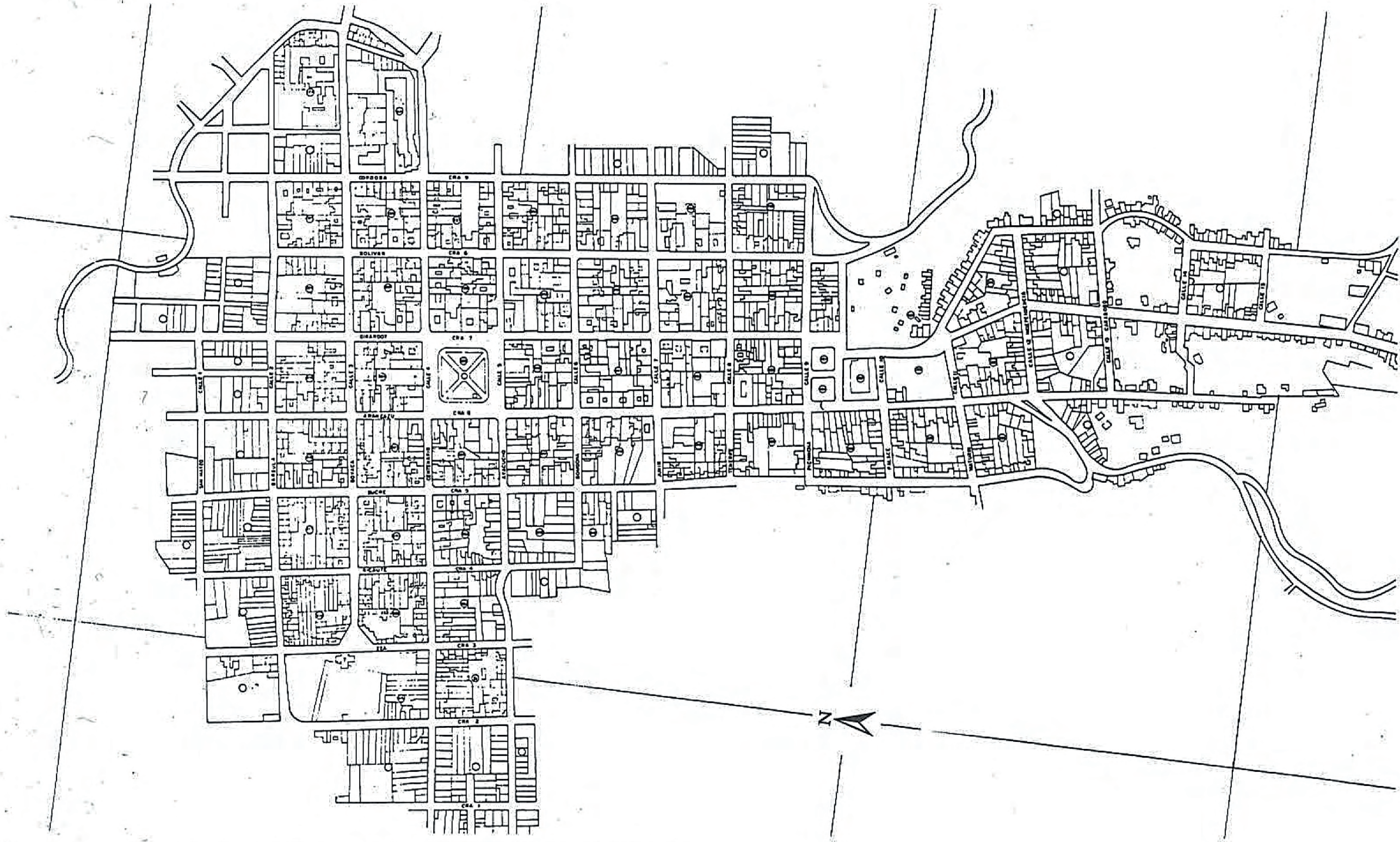
Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 71





Municipio: <b>SALAMINA</b> Departamento: <b>Caldas</b>													Declaratoria: Resolución 0087 del 02 de Febrero del 2005													<div></div>					
Fundación: Junio 08 de 1825						Fundadores: Fermín López, Ana Joaquina Hurtado de López, Manuel, Andrés, Pablo, José María y Antonio López (hijos de Fermín), José Ignacio Gutiérrez, Juan José Hurtado, Juan de J. Ospina, Laureano Delgado de Ospina, Vicente Iván de Jesús, Ramón y Marino Ospina y otros							Por la cual se declaran cuatro (4) sectores urbanos, localizados en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Caldas y Cundinamarca, como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional																		
Altura: 1.822 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 22° C																									
													Que los valores considerados por la Dirección de Patrimonio para recomendar al Consejo de Monumentos Nacionales la emisión de concepto para la declaratoria de cuatro (4) sectores urbanos, localizados en los departamentos de Atlántico, Boyacá, <b>Caldas</b> y Cundinamarca, como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional, son:																		
													1.Valores de orden temporal.																		
													2.Valores del orden físico.																		
													- Constitución del bien																		
													- Estado actual de conservación																		
													- Autenticidad																		
													3.Valores del orden estético.																		
													4.Valores de representatividad histórica.																		
													5.Valores de representatividad cultural.																		
													Que para dar cumplimiento al artículo 8° de la Ley 397 de 1997, la Dirección de Patrimonio, nuevamente, sometió a consideración del Consejo de Monumentos Nacionales el estudio de solicitud de declaratoria de los cuatro (4) sectores urbanos, localizados en los departamentos de Atlántico, Boyacá, <b>Caldas</b> y Cundinamarca, como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, según consta en el Acta número 006 del 6 de agosto de 2004. El Consejo de Monumentos Nacionales al verificar que estos sectores poseen valores de orden temporal, físico, estético, y representatividad histórica y cultural y recomendó a la señora Ministra de Cultura su declaratoria.																		
													Fuentes: Tomado de la Declaratoria Resolución 0087 de 2005																		
													Reglamentación: Resolución No. 027 de 1994.																		
													Plan Especial de Manejo y Protección: Se encuentra en Trámite de Resolución.																		
													Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Acuerdo No. 025 del 07 de Septiembre de 2001.																		
Fuentes: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación													Fuentes: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 02 de Septiembre de 2019																		








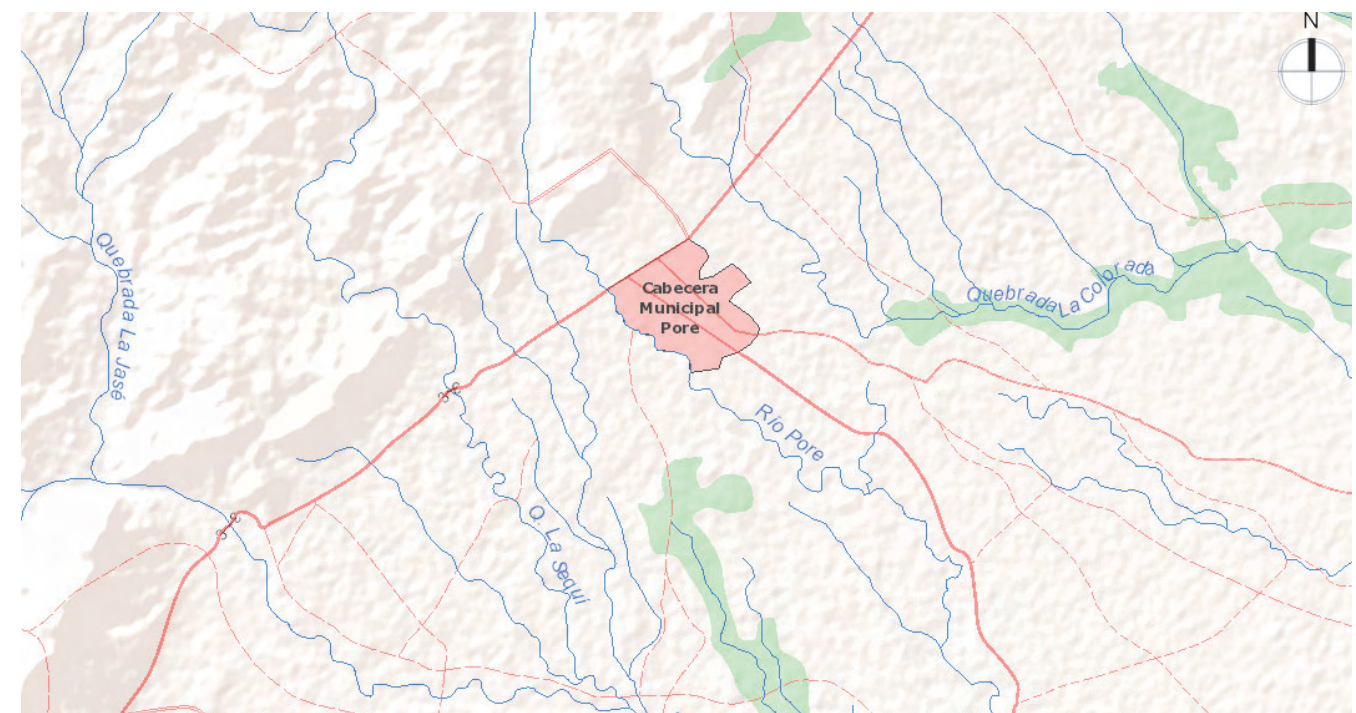
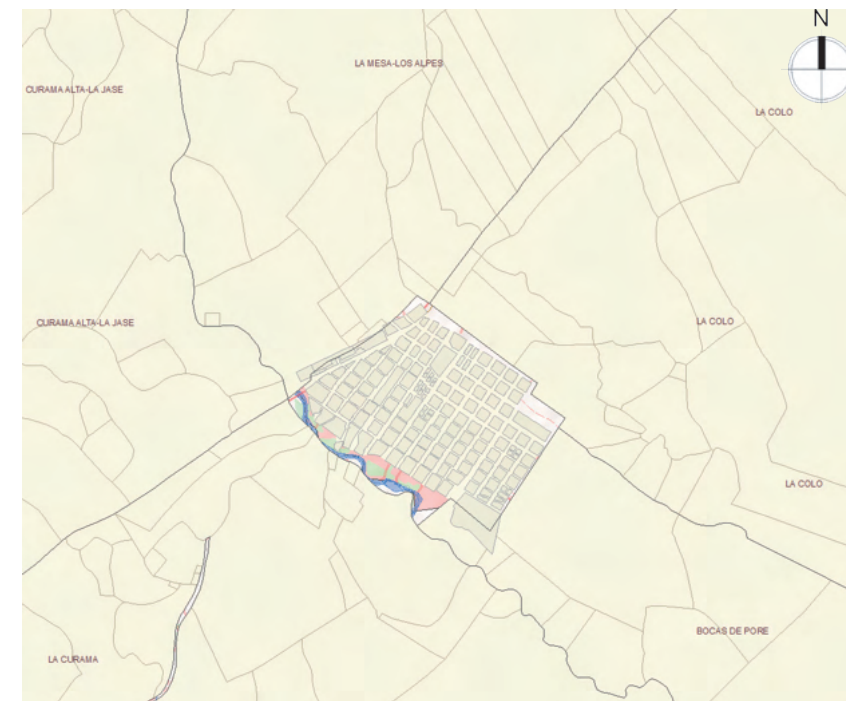
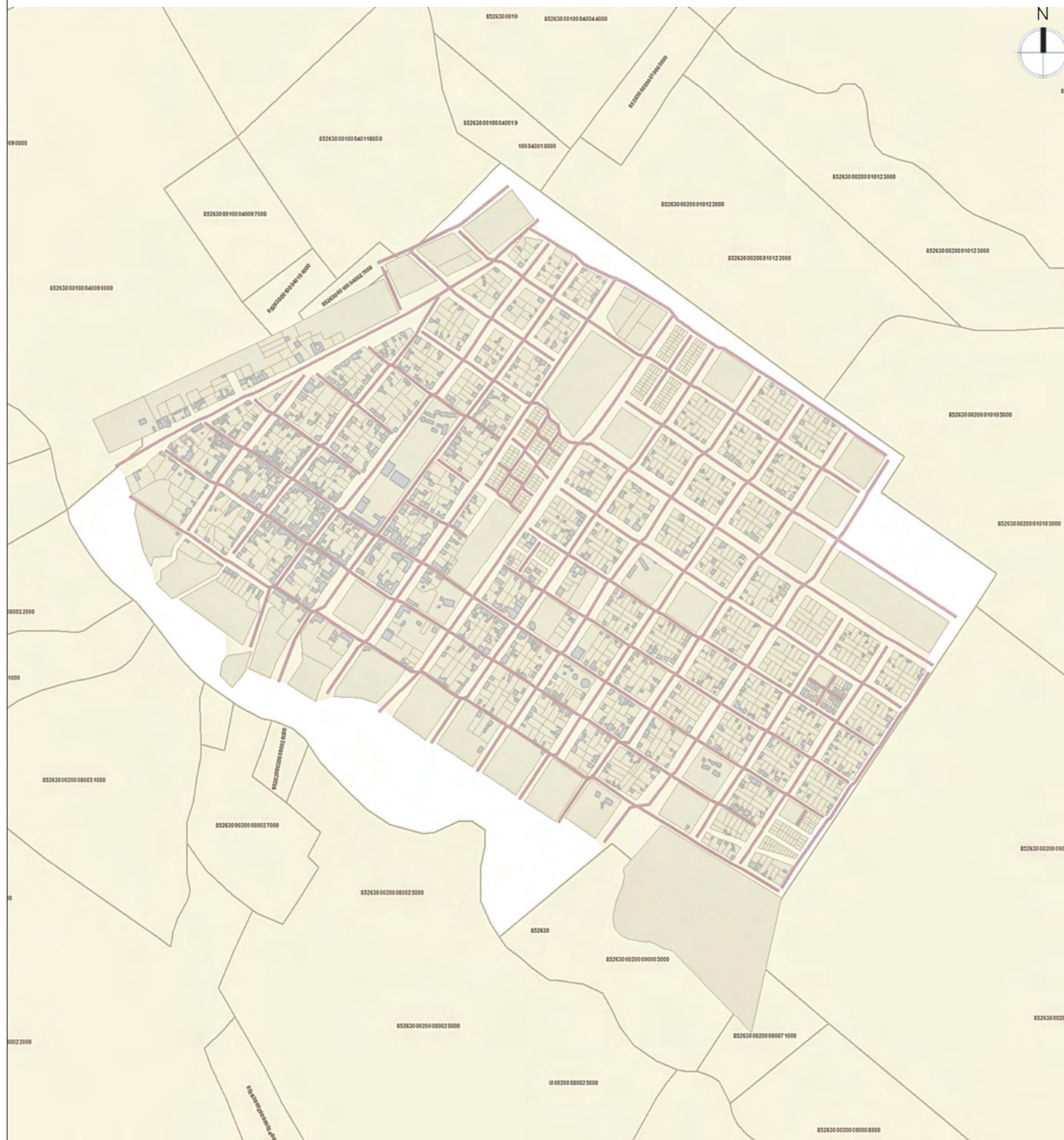
### Estructura Predial del Casco Urbano año 1991

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 49



Municipio: <b>PORE</b> Departamento: <b>Casanare</b>													Declaratoria: Ley 936 del 30 de Julio de 2004	<div></div>																																																					
Fundación: Noviembre 05 de 1644						Fundadores: Adriano Vargas y Francisco Enciso							<b>Por medio del cual se declara patrimonio histórico y cultural de la Nación, el Municipio de Pore, Casanare, y se dictan otras disposiciones</b>																																																						
Altura: 250 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 27° C																																																													
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016																																																							
Cabecera						222			1.988	2.629	3.538	3.979																																																							
Resto						1.619			4.476	5.044	3.952	3.936																																																							
Total						1.841			6.464	7.673	7.490	7.915																																																							
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																																																																			
Censo General 2005																																																																			
Sector	Población Censada					Hogares Censados			Personas por Hogar		Viviendas Censadas																																																								
Cabecera	3.538					881			4,26		871																																																								
Resto	3.952					868					970																																																								
Total	7.490					1.749					1.841																																																								
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																																																																			
Análisis Cierre de Brechas																																																																			
<table><tr><td></td><td>Municipio</td><td>Departamento</td><td>Región</td></tr><tr><td>Cobertura neta educación media (%2015)</td><td>32,4%</td><td>47,2%</td><td>38,1%</td></tr><tr><td>Pruebas saber 11 matemáticas (2016)</td><td>48,6</td><td>49,6</td><td>48,7</td></tr><tr><td>Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)</td><td>12,0%</td><td>8,8%</td><td>9,4%</td></tr><tr><td>Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)</td><td>31,9</td><td>24,5</td><td>23,5</td></tr><tr><td>Cobertura vacunación DTP (2015)</td><td>97,9%</td><td>91,9%</td><td>88,7%</td></tr><tr><td>Cobertura total acueducto (2005)</td><td>53,2%</td><td>70,5%</td><td>72,4%</td></tr><tr><td>Déficit cualitativo de vivienda (2005)</td><td>62,0%</td><td>31,9%</td><td>32,5%</td></tr><tr><td>Déficit cuantitativo de vivienda (2005)</td><td>11,2%</td><td>15,4%</td><td>17,8%</td></tr></table>					Municipio	Departamento	Región	Cobertura neta educación media (%2015)	32,4%	47,2%	38,1%	Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	48,6	49,6	48,7	Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	12,0%	8,8%	9,4%	Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	31,9	24,5	23,5	Cobertura vacunación DTP (2015)	97,9%	91,9%	88,7%	Cobertura total acueducto (2005)	53,2%	70,5%	72,4%	Déficit cualitativo de vivienda (2005)	62,0%	31,9%	32,5%	Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	11,2%	15,4%	17,8%	<table><tr><td>Resultado Esperado 2018**</td><td>Esfuerzo en cierre de brechas</td></tr><tr><td>45,8%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>51,3</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>7,5%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>25,3</td><td>medioalto</td></tr><tr><td>100,0%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>75,7%</td><td>medioalto</td></tr><tr><td>22,4%</td><td>medioalto</td></tr><tr><td>7,6%</td><td>bajo</td></tr></table>				Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas	45,8%	mediobajo	51,3	mediobajo	7,5%	mediobajo	25,3	medioalto	100,0%	bajo	75,7%	medioalto	22,4%	medioalto	7,6%	bajo						
	Municipio	Departamento	Región																																																																
Cobertura neta educación media (%2015)	32,4%	47,2%	38,1%																																																																
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	48,6	49,6	48,7																																																																
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	12,0%	8,8%	9,4%																																																																
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	31,9	24,5	23,5																																																																
Cobertura vacunación DTP (2015)	97,9%	91,9%	88,7%																																																																
Cobertura total acueducto (2005)	53,2%	70,5%	72,4%																																																																
Déficit cualitativo de vivienda (2005)	62,0%	31,9%	32,5%																																																																
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	11,2%	15,4%	17,8%																																																																
Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas																																																																		
45,8%	mediobajo																																																																		
51,3	mediobajo																																																																		
7,5%	mediobajo																																																																		
25,3	medioalto																																																																		
100,0%	bajo																																																																		
75,7%	medioalto																																																																		
22,4%	medioalto																																																																		
7,6%	bajo																																																																		
Fuente:Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación																																																																			
Declaratoria: Ley 936 del 30 de Julio de 2004																																																																			
<b>Por medio del cual se declara patrimonio histórico y cultural de la Nación, el Municipio de Pore, Casanare, y se dictan otras disposiciones</b>																																																																			
ARTÍCULO 1o.																																																																			
Declárese patrimonio histórico y cultural de la Nación, el Municipio de Pore, ubicado en el Departamento del Casanare.																																																																			
ARTÍCULO 2o.																																																																			
Declárese como bien de interés cultural de carácter nacional el complejo arquitectónico conformado por la antigua Iglesia de Pore, la edificación conocida como “la cárcel” y el túnel que comunica a estas dos construcciones.																																																																			
ARTICULO 3o.																																																																			
Autorícese al Gobierno Nacional, efectuar las apropiaciones presupuestales que crea pertinentes para el fomento de las diversas actividades encaminadas a posicionar a Pore como un destino histórico turístico, exaltando el valor de ser el espacio geográfico donde se forjó la gesta libertadora.																																																																			
Fuente:Tomado de Ley 936 de 2004																																																																			
<b>Plan Especial de Manejo y Protección:</b> Resolución No. 3914 del 12 de Diciembre de 2014. Aprobado.																																																																			
<b>Esquema de Ordenamiento Territorial.</b> Acuerdo No.017 del 30 de Junio de 2000.													Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 03 de Septiembre de 2019																																																						





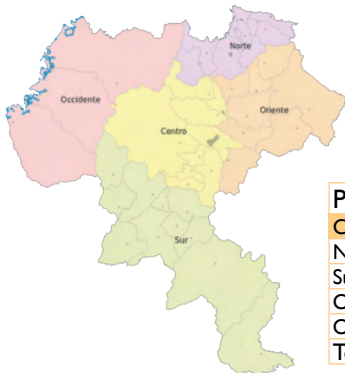




### Cabecera Municipal Pore. División predial del área urbana y rural inmediata

Fuente: Elaboración propia con base a información tomada de <http://www.igac.gov.co/igac>, simulador de Catastro. Consultada el 20 de Agosto de 2019





Municipio: <b>POPAYÁN</b> Departamento: <b>Cauca</b>													Declaratoria: <b>Ley 163 de 1959</b>													 																																																						
Fundación: Enero 13 de 1537						Fundador: Sebastián de Belalcázar							Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación													<b>Localización Departamento de Cauca y Popayán en el Departamento</b>  Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia																																																						
Altura: 1.760 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 19° C																																																																										
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	Artículo 4°.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, <b>Popayán</b> , Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica).													 <table><tr><th>Provincias</th><th>No. Habitantes</th></tr><tr><td>Centro</td><td>246.716</td></tr><tr><td>Norte</td><td>281.029</td></tr><tr><td>Sur</td><td>191.037</td></tr><tr><td>Occidente</td><td>58.668</td></tr><tr><td>Oriente</td><td>195.337</td></tr><tr><td>Total</td><td>972.787</td></tr></table>		Provincias	No. Habitantes	Centro	246.716	Norte	281.029	Sur	191.037	Occidente	58.668	Oriente	195.337	Total	972.787																																							
Provincias	No. Habitantes																																																																															
Centro	246.716																																																																															
Norte	281.029																																																																															
Sur	191.037																																																																															
Occidente	58.668																																																																															
Oriente	195.337																																																																															
Total	972.787																																																																															
Cabecera						31.866	58.500	77.884	147.768	182.752	227.840	250.043	Artículo 2°.- En desarrollo de lo acordado en la Séptima Conferencia Internacional Americana, reunida en Montevideo en el año de 1933, se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehistórico, los siguientes:																																																																			
Resto						12.942	18.068	17.944	17.536	33.228	30.813	30.011	a) Los que estén íntimamente vinculados con la lucha por la independencia y con el período inicial de la organización de la República,																																																																			
Total					30.038	44.808	76.568	95.828	165.304	215.980	258.653	280.054	b) Las obras de la naturaleza de gran interés científico indispensables para el estudio de la flora y la geología.																																																																			
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE													Parágrafo.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, <b>Popayán</b> , Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII.																																																																			
Censo General 2005													Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																																																																			
Sector	Población Censada					Hogares Censados			Personas por Hogar	Viviendas Censadas				Análisis Cierre de Brechas																																																																		
Cabecera	227.840					59.839			3,79	56.060				<table><tr><td></td><td>Municipio</td><td>Departamento</td><td>Región</td></tr><tr><td>Cobertura neta educación media (%2015)</td><td>47,3%</td><td>32,3%</td><td>35,7%</td></tr><tr><td>Pruebas saber 11 matemáticas (2016)</td><td>51,4</td><td>45,8</td><td>48,9</td></tr><tr><td>Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)</td><td>3,9%</td><td>11,5%</td><td>8,8%</td></tr><tr><td>Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)</td><td>10,8</td><td>19,3</td><td>15,7</td></tr><tr><td>Cobertura vacunación DTP (2015)</td><td>95,6%</td><td>87,4%</td><td>91,5%</td></tr><tr><td>Cobertura total acueducto (2005)</td><td>95,2%</td><td>62,8%</td><td>78,8%</td></tr><tr><td>Déficit cualitativo de vivienda (2005)</td><td>9,1%</td><td>43,5%</td><td>28,9%</td></tr><tr><td>Déficit cuantitativo de vivienda (2005)</td><td>15,8%</td><td>13,2%</td><td>13,0%</td></tr></table> <table><tr><td>Resultado Esperado 2018**</td><td>Esfuerzo en cierre de brechas</td></tr><tr><td>69,0%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>50,0</td><td>bajo</td></tr><tr><td>3,4%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>10,0</td><td>bajo</td></tr><tr><td>95,6%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>100,0%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>3,6%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>10,3%</td><td>mediobajo</td></tr></table>														Municipio	Departamento	Región	Cobertura neta educación media (%2015)	47,3%	32,3%	35,7%	Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	51,4	45,8	48,9	Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	3,9%	11,5%	8,8%	Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	10,8	19,3	15,7	Cobertura vacunación DTP (2015)	95,6%	87,4%	91,5%	Cobertura total acueducto (2005)	95,2%	62,8%	78,8%	Déficit cualitativo de vivienda (2005)	9,1%	43,5%	28,9%	Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	15,8%	13,2%	13,0%	Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas	69,0%	bajo	50,0	bajo	3,4%	bajo	10,0	bajo	95,6%	mediobajo	100,0%	bajo	3,6%	bajo	10,3%	mediobajo
	Municipio	Departamento	Región																																																																													
Cobertura neta educación media (%2015)	47,3%	32,3%	35,7%																																																																													
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	51,4	45,8	48,9																																																																													
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	3,9%	11,5%	8,8%																																																																													
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	10,8	19,3	15,7																																																																													
Cobertura vacunación DTP (2015)	95,6%	87,4%	91,5%																																																																													
Cobertura total acueducto (2005)	95,2%	62,8%	78,8%																																																																													
Déficit cualitativo de vivienda (2005)	9,1%	43,5%	28,9%																																																																													
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	15,8%	13,2%	13,0%																																																																													
Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas																																																																															
69,0%	bajo																																																																															
50,0	bajo																																																																															
3,4%	bajo																																																																															
10,0	bajo																																																																															
95,6%	mediobajo																																																																															
100,0%	bajo																																																																															
3,6%	bajo																																																																															
10,3%	mediobajo																																																																															
Resto	30.813					7.585			7.739																																																																							
Total	258.653					67.424			63.799																																																																							
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005													Provincias Departamento de Cauca																																																																			
Análisis Cierre de Brechas													Fuente: Tomado de Wikipedia																																																																			
																																																																																
Fuente: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación													Reglamentación: Resolución No. 0786 de 1998. Acuerdo No. 29 de 1997													Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 03 de Septiembre de 2019																																																						
Plan Especial de Manejo y Protección: Resolución No. 2432 de 2009. Aprobado.													Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Acuerdo No. 6 - 7 del 07 de Mayo de 2002.																																																																			










**Delimitación Área del Centro Histórico y Área de Influencia**

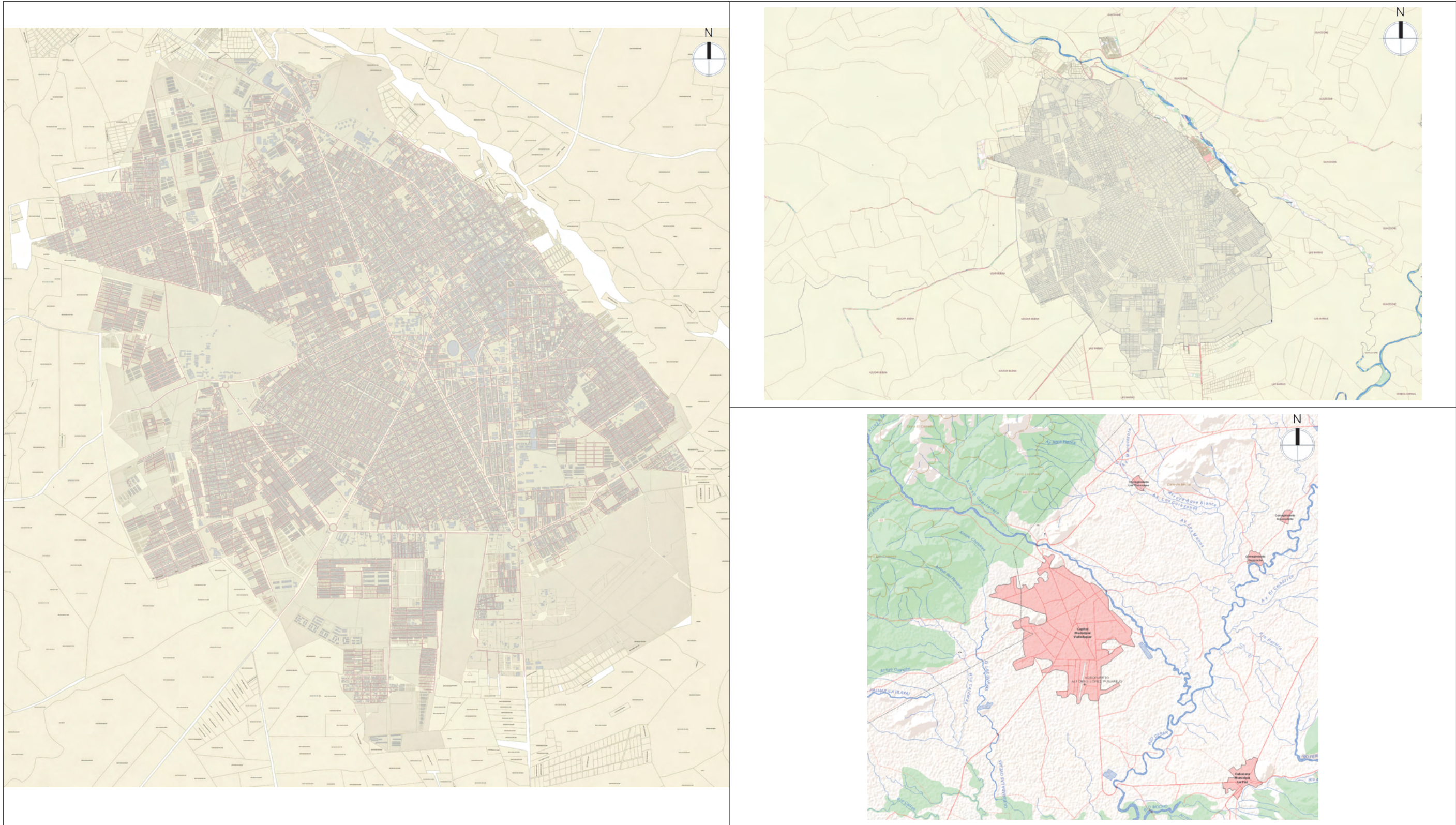
Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Popayán y su Área de Influencia





Municipio: <b>ALCALDÍA DE VALLEDUPAR</b> Departamento: <b>Cesar</b>													Declaratoria: <b>Resolución No. 795 del 16 de Junio de 2000</b>													 																																																											
<b>Fundación:</b> Enero 06 de 1550						<b>Fundador:</b> Capitán Hernando de Santana							<b>Por la cual se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el Sector Fundacional de Valledupar - Cesar y se aprueba el correspondiente Plan Especial de Protección</b>													<b>Localización Departamento de Cesar y Valledupar en el Departamento</b>																																																											
<b>Altura:</b> 168 metros sobre el nivel del mar						<b>Temperatura:</b> 28° C																																																																															
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	Que laAlcaldía Municipal deValledupar y la Fundación Festival Vallenato, presentaron al Ministerio de Cultura la solicitud de declaratoria como Bien de Interés Cultural de Carácter nacional del Sector Fundacional de Valledupar-Cesar, constituido por el conjunto de ocho manzanas Que los valores considerados por la Dirección de Patrimonio para recomendar al Consejo de Monumentos Nacionales la emisión del concepto para la declaración como Bien Interés Cultural de Carácter Nacional del Sector Fundacional de Valledupar - Cesar son: a. Representatividad histórica y cultural. b. Urbano Arquitectónico. Que para dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley 397 de 1997, la Dirección de Patrimonio presentó a consideración del Consejo de Monumentos Nacionales el estudio de solicitud de declaratoria como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional del Sector Fundacional de Valledupar-Cesar, constituido por el conjunto de ocho manzanas situadas alrededor de la plaza, localizado en el costado oriental de lo que se conoce como Sector Central de la misma ciudad, según consta en Acta No. 01 del 21 de febrero de 2000 y al verificar que posee valores de representatividad histórica y cultural y urbano arquitectónicos, decidió emitir concepto favorables y recomendar al señor Ministro de Cultura su declaratoria de acuerdo a la solicitud.													 <table><tr><th>Provincias</th><th>No. Habitantes</th></tr><tr><td>Centro</td><td>142.534</td></tr><tr><td>Norte</td><td>459.020</td></tr><tr><td>Sur</td><td>184.103</td></tr><tr><td>Noroccidental</td><td>92.780</td></tr><tr><td><b>Total</b></td><td><b>878.437</b></td></tr></table>		Provincias	No. Habitantes	Centro	142.534	Norte	459.020	Sur	184.103	Noroccidental	92.780	<b>Total</b>	<b>878.437</b>																																														
Provincias	No. Habitantes																																																																																				
Centro	142.534																																																																																				
Norte	459.020																																																																																				
Sur	184.103																																																																																				
Noroccidental	92.780																																																																																				
<b>Total</b>	<b>878.437</b>																																																																																				
Cabecera						9.011	43.553	98.669	144.750	203.744	294.731	395.860	<b>Censo General 2005</b>													Fuentes: Imágenes tomadas de Wikipedia																																																											
Resto						17.431	24.926	57.487	50.564	56.290	54.259	67.359																																																																									
Total						26.442	68.479	156.156	195.314	260.034	348.990	463.219														<b>Provincias Departamento de Cesar</b>																																																											
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE													<b>Análisis Cierre de Brechas</b>													Fuentes: Tomado de Wikipedia																																																											
<table><tr><th>Sector</th><th>Población Censada</th><th>Hogares Censados</th><th>Personas por Hogar</th><th>Viviendas Censadas</th></tr><tr><td>Cabecera</td><td>294.731</td><td>67.192</td><td rowspan="3">4,43</td><td>69.382</td></tr><tr><td>Resto</td><td>54.259</td><td>10.973</td><td>10.784</td></tr><tr><td>Total</td><td>348.990</td><td>78.165</td><td>80.166</td></tr></table>						Sector	Población Censada	Hogares Censados	Personas por Hogar	Viviendas Censadas	Cabecera	294.731	67.192	4,43	69.382	Resto	54.259	10.973	10.784	Total	348.990	78.165	80.166																																																														
Sector	Población Censada	Hogares Censados	Personas por Hogar	Viviendas Censadas																																																																																	
Cabecera	294.731	67.192	4,43	69.382																																																																																	
Resto	54.259	10.973		10.784																																																																																	
Total	348.990	78.165		80.166																																																																																	
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005						<b>Análisis Cierre de Brechas</b>													Fuentes: Tomado de Wikipedia																																																																		
<table><tr><th></th><th>Municipio</th><th>Departamento</th><th>Región</th></tr><tr><td>Cobertura neta educación media (%2015)</td><td>41,9%</td><td>38,6%</td><td>39,1%</td></tr><tr><td>Pruebas saber 11 matemáticas (2016)</td><td>49,4</td><td>47,8</td><td>46,6</td></tr><tr><td>Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)</td><td>10,4%</td><td>16,2%</td><td>15,6%</td></tr><tr><td>Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)</td><td>12,7</td><td>17,5</td><td>18,2</td></tr><tr><td>Cobertura vacunación DTP (2015)</td><td>92,3%</td><td>94,1%</td><td>91,4%</td></tr><tr><td>Cobertura total acueducto (2005)</td><td>92,0%</td><td>81,7%</td><td>71,0%</td></tr><tr><td>Déficit cualitativo de vivienda (2005)</td><td>25,2%</td><td>39,3%</td><td>44,5%</td></tr><tr><td>Déficit cuantitativo de vivienda (2005)</td><td>9,0%</td><td>11,7%</td><td>16,9%</td></tr></table>							Municipio	Departamento	Región	Cobertura neta educación media (%2015)	41,9%	38,6%	39,1%	Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	49,4	47,8	46,6	Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	10,4%	16,2%	15,6%	Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	12,7	17,5	18,2	Cobertura vacunación DTP (2015)	92,3%	94,1%	91,4%	Cobertura total acueducto (2005)	92,0%	81,7%	71,0%	Déficit cualitativo de vivienda (2005)	25,2%	39,3%	44,5%	Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	9,0%	11,7%	16,9%	<table><tr><th>Resultado Esperado 2018**</th><th>Esfuerzo en cierre de brechas</th></tr><tr><td>42,5%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>49,7</td><td>bajo</td></tr><tr><td>7,2%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>12,4</td><td>bajo</td></tr><tr><td>100,0%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>100,0%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>16,7%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>3,7%</td><td>bajo</td></tr></table>							Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas	42,5%	mediobajo	49,7	bajo	7,2%	bajo	12,4	bajo	100,0%	mediobajo	100,0%	bajo	16,7%	bajo	3,7%	bajo																			
	Municipio	Departamento	Región																																																																																		
Cobertura neta educación media (%2015)	41,9%	38,6%	39,1%																																																																																		
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	49,4	47,8	46,6																																																																																		
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	10,4%	16,2%	15,6%																																																																																		
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	12,7	17,5	18,2																																																																																		
Cobertura vacunación DTP (2015)	92,3%	94,1%	91,4%																																																																																		
Cobertura total acueducto (2005)	92,0%	81,7%	71,0%																																																																																		
Déficit cualitativo de vivienda (2005)	25,2%	39,3%	44,5%																																																																																		
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	9,0%	11,7%	16,9%																																																																																		
Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas																																																																																				
42,5%	mediobajo																																																																																				
49,7	bajo																																																																																				
7,2%	bajo																																																																																				
12,4	bajo																																																																																				
100,0%	mediobajo																																																																																				
100,0%	bajo																																																																																				
16,7%	bajo																																																																																				
3,7%	bajo																																																																																				
																												Fuentes: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 02 de Septiembre de 2019																																																									
Fuentes: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación													<b>Plan Especial de Protección:</b> Resolución No. 3722 del 27 de Noviembre de 2014.Aprobado.																																																																								
													<b>Plan Básico de Ordenamiento Territorial.</b> Acuerdo No.064 del 09 de Diciembre de 1999.																																																																								
Fuentes: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación																																																																																					





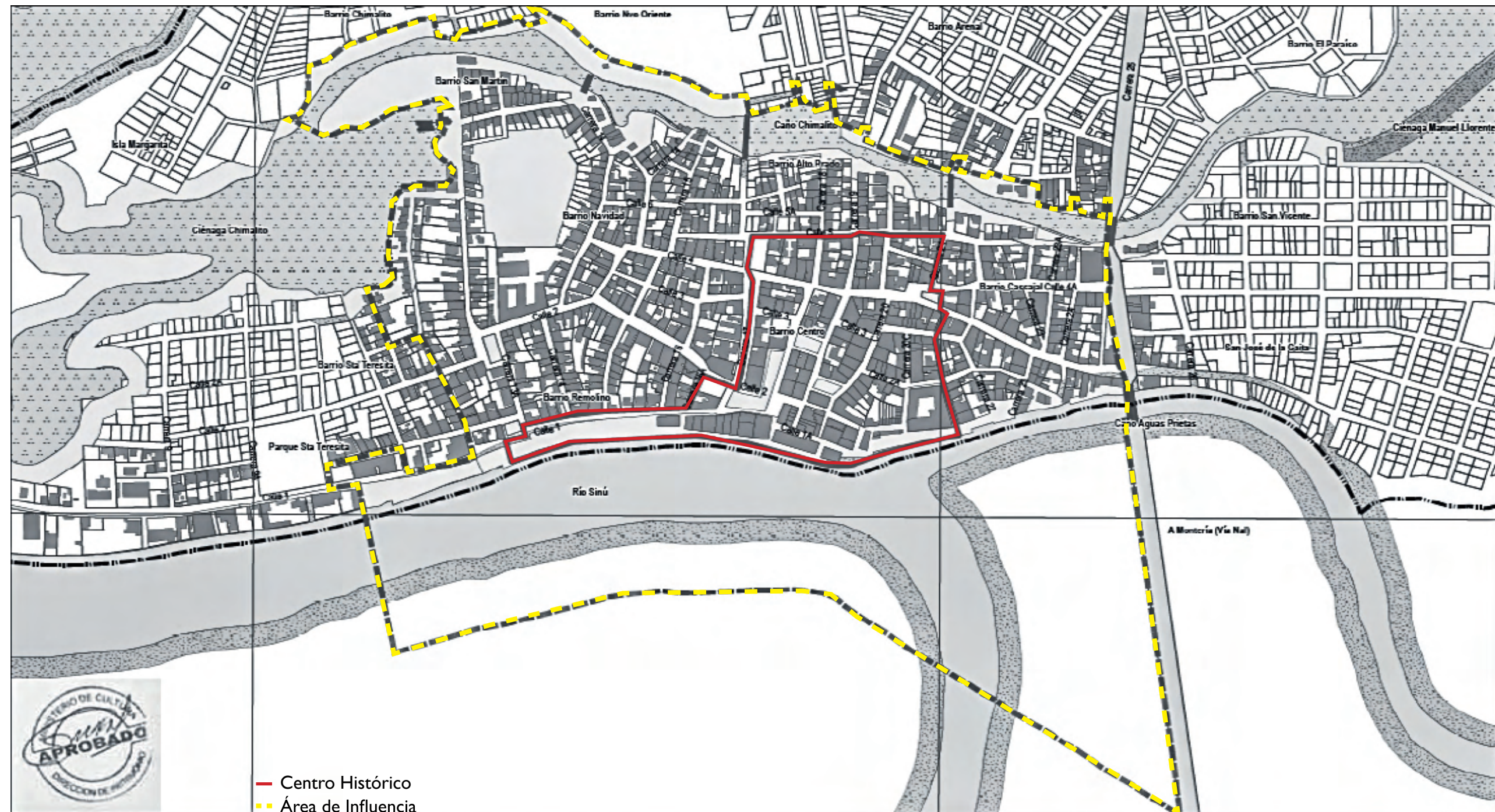
**Cabecera Municipal Valledupar. División predial del área urbana y rural inmediata**

Fuente: Elaboración propia con base a información tomada de <http://www.igac.gov.co/igac>, simulador de Catastro. Consultada el 20 de Agosto de 2019



PDARQ Programa de Doctorado en Arquitectura ETS Arquitectura





### Delimitación Área del Centro Histórico y Área de Influencia

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Santa Cruz de Loria y su Área de Influencia

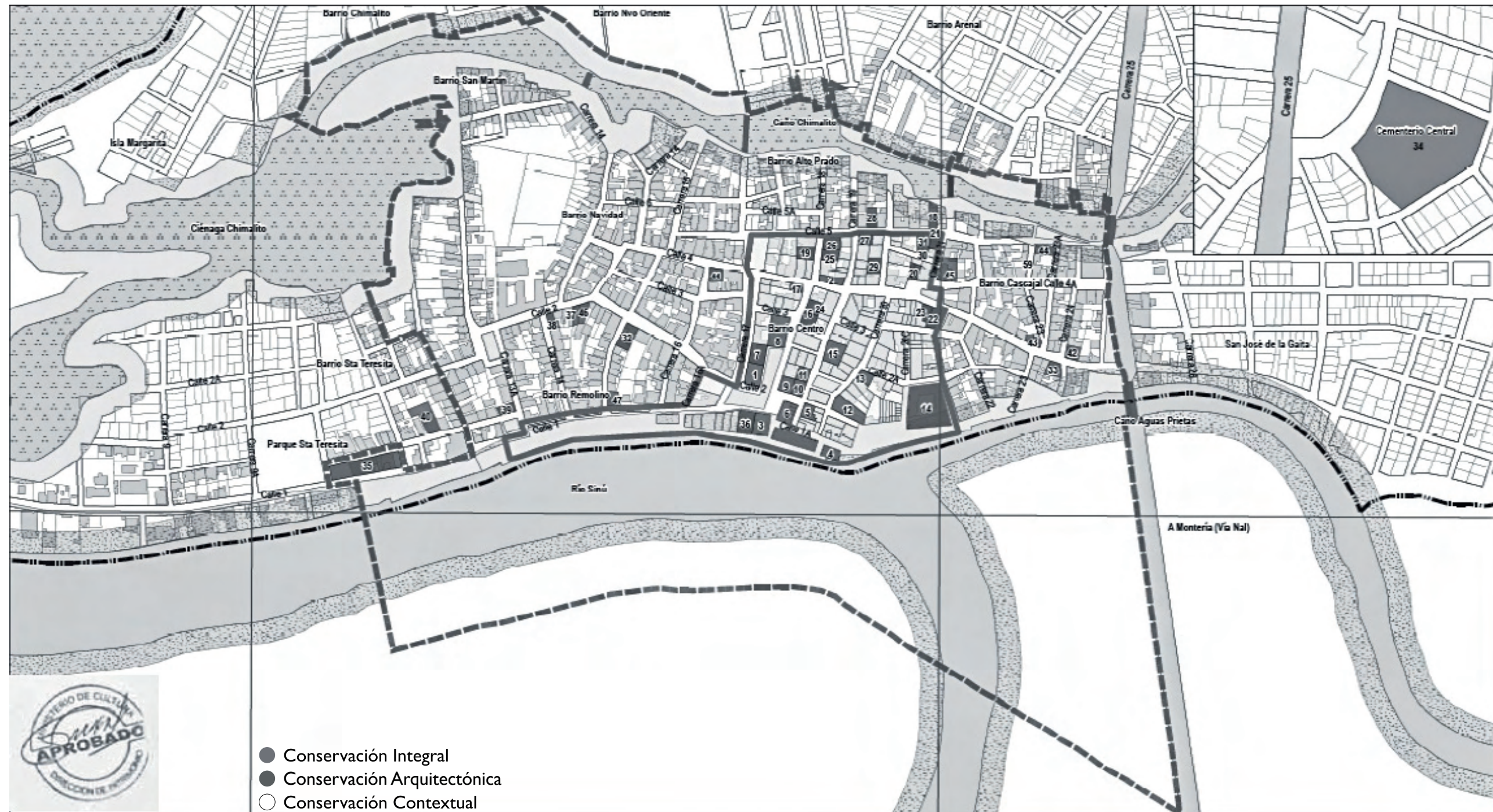




### Plano Tratamientos Urbanísticos del Municipio de Santa Cruz de Llorca

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Santa Cruz de Llorca y su Área de Influencia





### Plano Niveles de Intervención BIC del Municipio de Santa Cruz de Lorica

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Santa Cruz de Lorica y su Área de Influencia





### Plano de Usos del Municipio de Santa Cruz de Llorca

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Santa Cruz de Llorca y su Área de Influencia





### Plano de Alturas Edificabilidad Permitida del Municipio de Santa Cruz de Llorca

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Santa Cruz de Llorca y su Área de Influencia





Municipio: <b>VILLA DE SAN MIGUEL DE GUADUAS</b> Departamento: <b>Cundinamarca</b>													Declaratoria: Ley 163 de 1959																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Fundación: Diciembre 27 de 1644						Fundador: Capitán Francisco Pérez Guzmán							Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Altura: 992 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 23.5° C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	Artículo 4°.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, <b>Guaduas</b> , Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cabecera						2.466	8.827	4.651	8.771	9.806	14.913	19.873																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Resto						13.290	14.191	13.396	15.103	15.076	16.337	19.190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Total						15.756	18.018	18.047	23.874	24.882	31.250	39.063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													Artículo 2°.- En desarrollo de lo acordado en la Séptima Conferencia Internacional Americana, reunida en Montevideo en el año de 1933, se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehistórico, los siguientes: a) Los que estén íntimamente vinculados con la lucha por la inde-pendencia y con el período inicial de la organización de la República. b) Las obras de la naturaleza de gran interés científico indispensables para el estudio de la flora y la geología.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Censo General 2005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													Parágrafo.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, <b>Guaduas</b> , Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Sector	Población Censada				Hogares Censados			Personas por Hogar	Viviendas Censadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cabecera	14.913				3.868			3,62	3.775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Resto	16.337				4.738				5.050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total	31.250				8.606				8.825																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													Fuentes: Tomado de la Ley 163 de 1959																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Análisis Cierre de Brechas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													Fuente: Tomado de la Ley 163 de 1959																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</



Localización Departamento de Cundinamarca y San Miguel de Guaduas en el Departamento

Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia



Subregiones	No. Habitantes
Almeidas	72.891
Alto Magdalena	152.271
Bajo Magdalena	60.275
Gualivá	99.108
Guavio	80.597
Magdalena Centro	28.121
Medina	16.740
Oriente	82.251
Rionegro	71.927
Sabana Centro	347.890
Sabana Occidente	420.444
Soacha	429.461
Sumapaz	185.453
Tequendama	126.968
Ubaté	106.325

Provincias Departamento de Cundinamarca

Fuente: Tomado de Wikipedia



Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 04 de Septiembre de 2019







### Ocupación del suelo en el Sector Antiguo

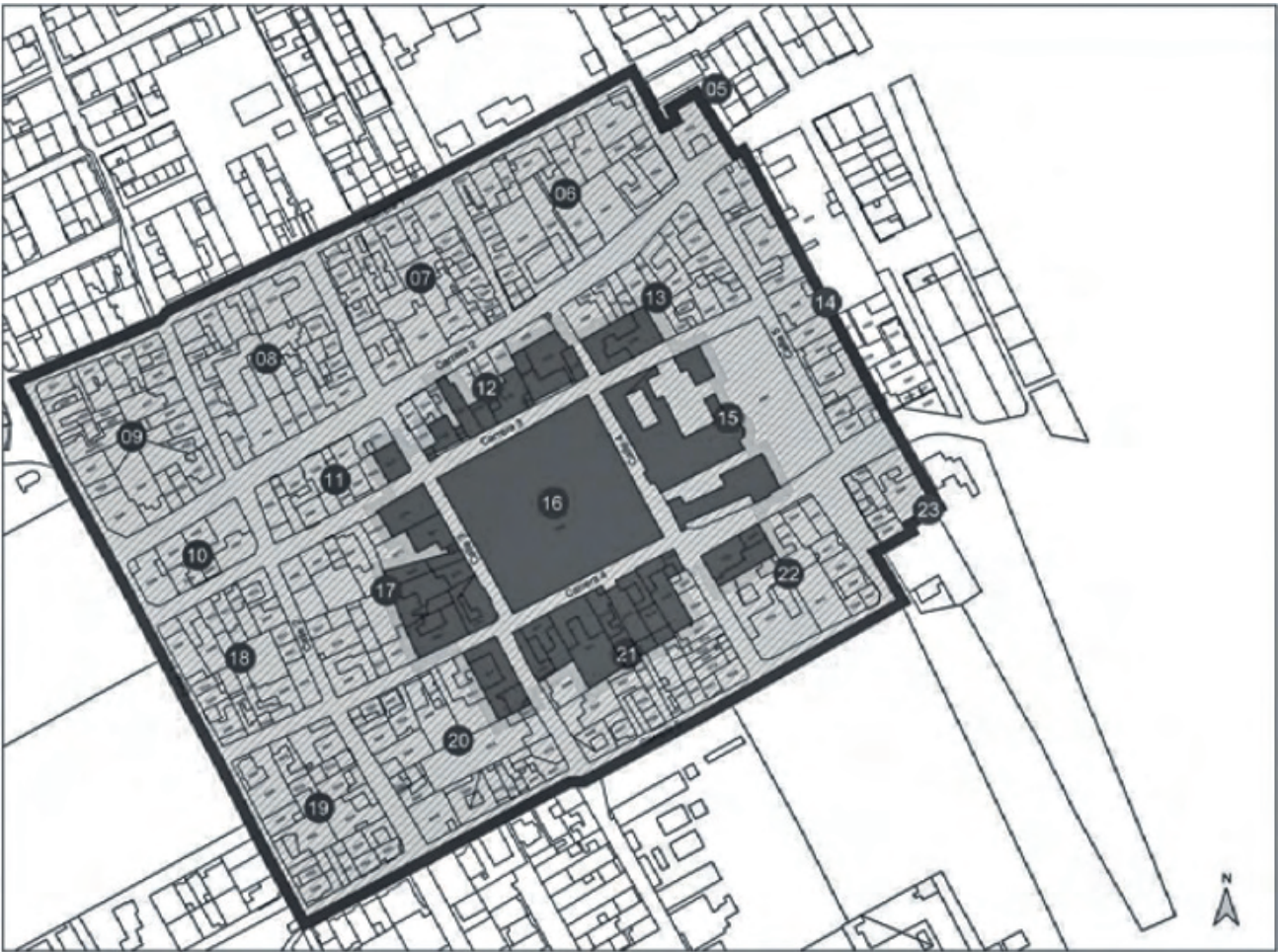
Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 95





Municipio: <b>TENJO</b> Departamento: <b>Cundinamarca</b>													Declaratoria: Decreto No. 2530 de 1993													 																																																																		
Fundación: Abril 08 de 1603						Fundador: Diego Gómez de Mena							Por el cual se declara como Monumento Nacional la plaza principal del municipio de Tenjo Cundinamarca													Localización Departamento de Cundinamarca y Tenjo en el Departamento																																																																		
Altura: 2.587 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 13° C																																																																																						
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	Que el municipio de Tenjo situado en la Sabana de Bogotá, fundado como pueblo doctrinero en 1603, conserva un especial valor ambiental en donde sobresale el conjunto arquitectónico que conforman el marco de la plaza principal. Que la plaza principal del municipio de Tenjo y su marco, comprendido en su mayoría por edificios de un solo piso, cuenta con un templo doctrinero (1602-1637) propuesto como Monumento Nacional por la Resolución 002 del 12 de Marzo de 1982 y con su iglesia de estilo neogótico, construida en este siglo, edificaciones que se ubican en el costado oriental de la plaza. Sobre la calle 3ª se encuentra el edificio de estilo francés donde actualmente funciona la Alcaldía Municipal y contiguo a éste, sobre la carrera 4ª, inmuebles con intervenciones de factura moderna por con afortunadas, que sin embargo no desvirtúan la armonía del conjunto. También se encuentran tres capillas pozas, dos de ellas en el costado occidental de la plaza y la tercera en la esquina de la calle 4ª con carrera 2ª. Que el plan de ordenamiento físico del municipio de 1986, señala los predios que dan frente a la plaza como de conservación. Que la plaza principal del municipio de Tenjo tiene valores arquitectónicos y ambientales en su conjunto, que hacen necesaria su conservación. Que por medio de la Resolución Bo.016 de 1992 de dicho Consejo, se propone al Gobierno Nacional la declaratoria como Monumento Nacional de la plaza principal del Municipio de Tenjo Cundinamarca.																																																																															
Cabecera						480	650	1.168	2.736	2.836	7.962	9.519	Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																																																																															
Resto						3.590	5.427	5.881	8.940	13.333	8.645	10.444																																																																																
Total						4.070	6.077	7.049	11.676	16.169	16.607	19.963																																																																																
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE													Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005													Localización Departamento de Cundinamarca y Tenjo en el Departamento																																																																		
Censo General 2005																																																																																												
Sector	Población Censada					Hogares Censados			Personas por Hogar		Viviendas Censadas																Fuentes: Tomado de Wikipedia																																																																	
Cabecera	7.962					2.052			3,77		1.942																																																																																	
Resto	8.645					2.339					2.639																																																																																	
Total	16.607					4.391					4.581																																																																																	
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005													Fuentes: Tomado de Wikipedia																																																																															
Análisis Cierre de Brechas																																																																																												
<table><tr><td></td><td>Municipio</td><td>Departamento</td><td>Región</td></tr><tr><td>Cobertura neta educación media (%2015)</td><td>96,8%</td><td>51,0%</td><td>47,3%</td></tr><tr><td>Pruebas saber 11 matemáticas (2016)</td><td>51,8</td><td>51,0</td><td>52,0</td></tr><tr><td>Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)</td><td>3,6%</td><td>6,2%</td><td>8,4%</td></tr><tr><td>Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)</td><td>12,7</td><td>12,7</td><td>12,4</td></tr><tr><td>Cobertura vacunación DTP (2015)</td><td>85,7%</td><td>97,3%</td><td>93,6%</td></tr><tr><td>Cobertura total acueducto (2005)</td><td>94,0%</td><td>81,8%</td><td>82,2%</td></tr><tr><td>Déficit cualitativo de vivienda (2005)</td><td>12,9%</td><td>21,1%</td><td>24,0%</td></tr><tr><td>Déficit cuantitativo de vivienda (2005)</td><td>8,3%</td><td>14,7%</td><td>11,9%</td></tr></table>														Municipio	Departamento	Región	Cobertura neta educación media (%2015)	96,8%	51,0%	47,3%	Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	51,8	51,0	52,0	Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	3,6%	6,2%	8,4%	Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	12,7	12,7	12,4	Cobertura vacunación DTP (2015)	85,7%	97,3%	93,6%	Cobertura total acueducto (2005)	94,0%	81,8%	82,2%	Déficit cualitativo de vivienda (2005)	12,9%	21,1%	24,0%	Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	8,3%	14,7%	11,9%	<table><tr><td>Resultado Esperado 2018**</td><td>Esfuerzo en cierre de brechas</td></tr><tr><td>100,0%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>50,9</td><td>bajo</td></tr><tr><td>3,2%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>12,0</td><td>bajo</td></tr><tr><td>91,1%</td><td>medioalto</td></tr><tr><td>100,0%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>7,4%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>8,3%</td><td>bajo</td></tr></table>													Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas	100,0%	bajo	50,9	bajo	3,2%	bajo	12,0	bajo	91,1%	medioalto	100,0%	bajo	7,4%	bajo	8,3%	bajo	Fuentes: Tomado del Decreto 2530 de 1993												
	Municipio	Departamento	Región																																																																																									
Cobertura neta educación media (%2015)	96,8%	51,0%	47,3%																																																																																									
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	51,8	51,0	52,0																																																																																									
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	3,6%	6,2%	8,4%																																																																																									
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	12,7	12,7	12,4																																																																																									
Cobertura vacunación DTP (2015)	85,7%	97,3%	93,6%																																																																																									
Cobertura total acueducto (2005)	94,0%	81,8%	82,2%																																																																																									
Déficit cualitativo de vivienda (2005)	12,9%	21,1%	24,0%																																																																																									
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	8,3%	14,7%	11,9%																																																																																									
Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas																																																																																											
100,0%	bajo																																																																																											
50,9	bajo																																																																																											
3,2%	bajo																																																																																											
12,0	bajo																																																																																											
91,1%	medioalto																																																																																											
100,0%	bajo																																																																																											
7,4%	bajo																																																																																											
8,3%	bajo																																																																																											
Plan Especial de Manejo y Protección: Resolución No. 30 de 2010.Aprobado.													Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Acuerdo No.014 del 14 de Junio de 2000.													Fuentes: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 04 de Septiembre de 2019																																																																		
Fuentes: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación																																																																																												

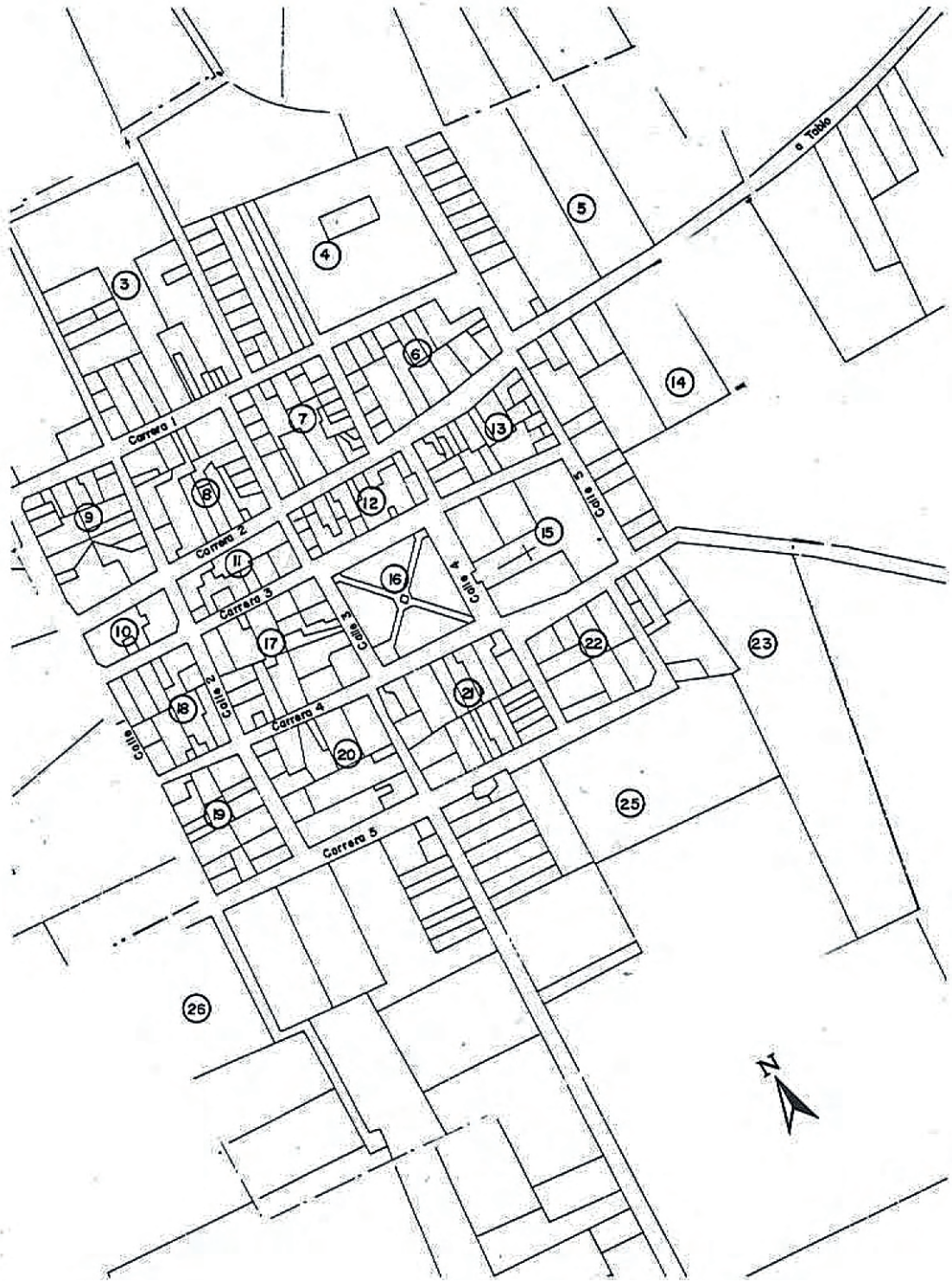




- Área afectada
- Zona de influencia

**Delimitación Área Afectada y Zona de Influencia**

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Tenjo y su Área de Influencia



**Estructura Predial del Sector Antiguo año 1987**

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 64



PDARQ Programa de Doctorado en Arquitectura ETS Arquitectura





**Estructura Predial del Sector Antiguo año 1994**

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 57




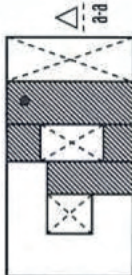
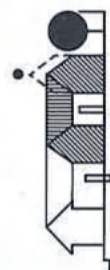
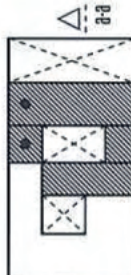

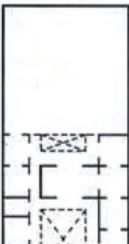
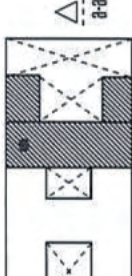

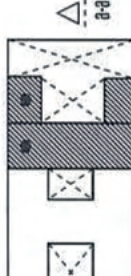


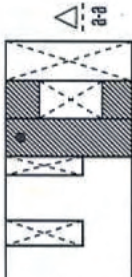


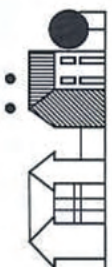


### Morfología y Tipología del Centro Histórico de Zipaquirá

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 78





FICHA DE AMPLIACIÓN (según tipología) * ZIPAQUIRÁ					
TIPO BÁSICO	VARIACIONES				OBSERVACIONES
	EDIFICACIONES DE UN PISO		EDIFICACIONES DE DOS PISOS		
	PLANTA	CORTE	PLANTA	CORTE	
 <b>PATIO Y SOLAR</b>	 Tipología A ■ Crujía nueva □ Crujía antigua	 ● Sobreelevación permitida	 Tipología F, G, H ■ Crujía nueva □ Crujía antigua	 ● Sobreelevación permitida	<ol style="list-style-type: none"><li>Crujía lateral<ul style="list-style-type: none"><li>* Ancho máximo: 5.0 mts.</li><li>* Ancho mínimo: 3.0 mts.</li><li>(Para crujiás cerradas)</li></ul></li><li>Crujía frontal<ul style="list-style-type: none"><li>* Ancho máximo: 7.0 mts.</li><li>* Ancho mínimo: 3.0 mts.</li></ul></li><li>Patio principal</li><li>Traspatio<ul style="list-style-type: none"><li>* Área mínima: 35 mts².</li><li>* Lado mínimo: 5.0 mts.</li></ul></li><li>Aislamiento posterior:<ul style="list-style-type: none"><li>- En 1 (un) piso<ul style="list-style-type: none"><li>* No se exige</li></ul></li><li>- En 2 (dos) pisos<ul style="list-style-type: none"><li>* Lado mínimo: 5.0 mts.</li></ul></li><li>- Para Predios con solar superior a 30 mts.<ul style="list-style-type: none"><li>* Lado mínimo: 10.0 mts.</li></ul></li></ul></li></ol> <p><b>SOBREELEVACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Crujía Sobreelevable<ul style="list-style-type: none"><li>- Sobreelevación máxima<ul style="list-style-type: none"><li>* 2 (dos) pisos</li></ul></li></ul></li></ul>
 <b>DOBLE PATIO Y SOLAR</b>	 Tipología B ■ Crujía nueva □ Crujía antigua	 ● Sobreelevación permitida	 Tipología I ■ Crujía nueva □ Crujía antigua	 ● Sobreelevación permitida	
 <b>PATIO LATERAL</b>	 Tipología D ■ Crujía nueva □ Crujía antigua	 ● Sobreelevación permitida	 Tipología L ■ Crujía nueva □ Crujía antigua	 ● Sobreelevación permitida	

Ficha Tipológica Reglamentaria para Ampliación

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio “Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana” Bogotá, 1997. Pág. 106



PDARQ Programa de Doctorado en Arquitectura ETS Arquitectura





**Estructura Predial del Sector Antiguo año 1993**







**Morfología y Tipología del Centro Histórico del Municipio de Ciénaga**

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 56 y 79





Municipio: <b>SANTA MARTA</b> Departamento: <b>Magdalena</b>													Declaratoria: Ley 163 de 1959		<div></div>	
Fundación: Julio 29 de 1525						Fundador: Rodrigo de Bastidas							Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación			
Altura: 15 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 30° C										
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016				
Cabecera						37.005	89.161	110.161	192.935	273.726	384.189	474.520				
Resto						10.349	15.310	42.164	40.332	49.059	30.198	17.015				
Total					33.245	47.354	104.471	152.325	233.267	322.785	414.387	491.535				
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																
Censo General 2005																
Sector	Población Censada				Hogares Censados				Personas por Hogar		Viviendas Censadas					
Cabecera	384.189				88.523				4,32		85.158					
Resto	30.198				7.090						6.999					
Total	414.387				95.613						92.157					
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																
Análisis Cierre de Brechas																
	Municipio				Departamento				Región		Resultado Esperado 2018**				Esfuerzo en cierre de brechas	
Cobertura neta educación media (%2015)	41,0%				35,8%				39,1%		42,5%				mediobajo	
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	46,1				44,2				46,6		47,5				mediobajo	
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	5,8%				15,6%				15,6%		5,2%				bajo	
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	12,1				16,4				18,2		12,5				bajo	
Cobertura vacunación DTP (2015)	84,9%				89,8%				91,4%		98,3%				medioalto	
Cobertura total acueducto (2005)	78,2%				68,3%				71,0%		98,3%				mediobajo	
Déficit cualitativo de vivienda (2005)	30,5%				49,8%				44,5%		20,6%				mediobajo	
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	13,4%				16,3%				16,9%		10,3%				mediobajo	
Fuente: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación																
Fuente: Tomado de la Ley 163 de 1959																
Reglamentación: Acuerdo No. 027 de 1997.																
Plan Especial de Protección: Resolución 1800 de 2005. Aprobado.																
Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Acuerdo No. 005 del 30 de Mayo de 2000.																

Localización Departamento de Magdalena y Santa Marta en el Departamento															
Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia															
	<table><tr><th>Provincias</th><th>No. Habitantes</th></tr><tr><td>Centro</td><td>135.206</td></tr><tr><td>Norte</td><td>303.186</td></tr><tr><td>Sur</td><td>151.884</td></tr><tr><td>Río</td><td>132.156</td></tr><tr><td><b>Santa Marta</b></td><td><b>499.257</b></td></tr><tr><td>Total</td><td>1.221.689</td></tr></table>	Provincias	No. Habitantes	Centro	135.206	Norte	303.186	Sur	151.884	Río	132.156	<b>Santa Marta</b>	<b>499.257</b>	Total	1.221.689
Provincias	No. Habitantes														
Centro	135.206														
Norte	303.186														
Sur	151.884														
Río	132.156														
<b>Santa Marta</b>	<b>499.257</b>														
Total	1.221.689														
Provincias Departamento de Magdalena															
Fuente: Tomado de Wikipedia															
															
Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 05 de Septiembre de 2019															






### Estructura Predial del Sector Antiguo año 1991

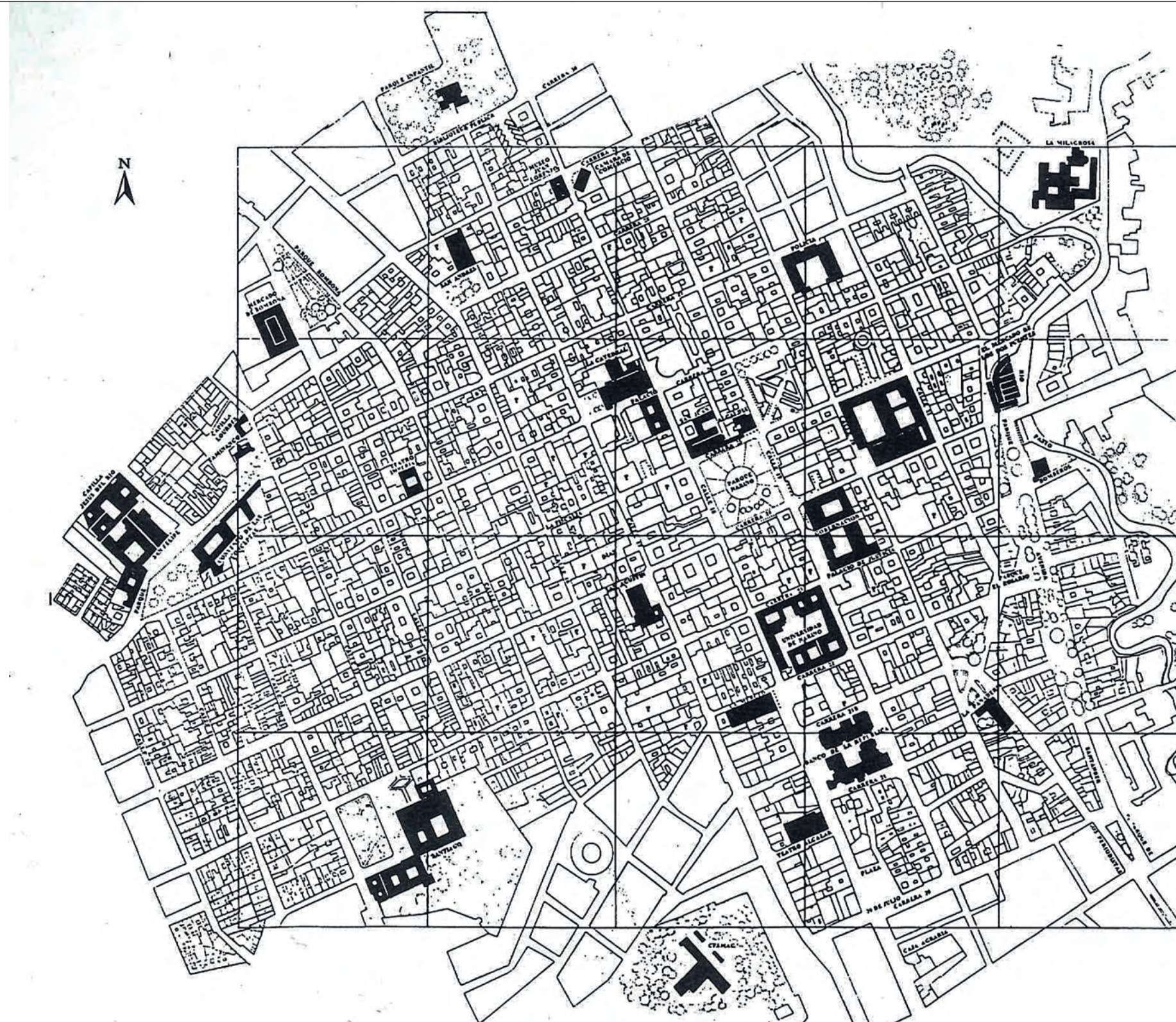
Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 51





Municipio: <b>SAN JUAN DE PASTO</b> Departamento: <b>Nariño</b>													Declaratoria: Ley 163 de 1959							
Fundación: Junio 24 de 1537						Fundador: Sebastián de Belalcázar							Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación							
Altura: 2.527 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 14° C											Artículo 4º.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, <b>Pasto</b> y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica).			
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	Artículo 2º.- En desarrollo de lo acordado en la Séptima Conferencia Internacional Americana, reunida en Montevideo en el año de 1933, se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehistórico, los siguientes: a) Los que estén íntimamente vinculados con la lucha por la inde-pendencia y con el período inicial de la organización de la República. b) Las obras de la naturaleza de gran interés científico indispensables para el estudio de la flora y la geología.							
Cabecera					27.561	48.853	82.546	130.222	222.025	261.212	312.759	371.045								
Resto					22.083	32.250	30.330	32.434	59.182	51.842	71.087	74.364								
Total					49.644	81.103	112.876	162.656	281.207	313.054	383.846	445.409	Parágrafo.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, <b>Pasto</b> , Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII.							
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																				
Censo General 2005																				

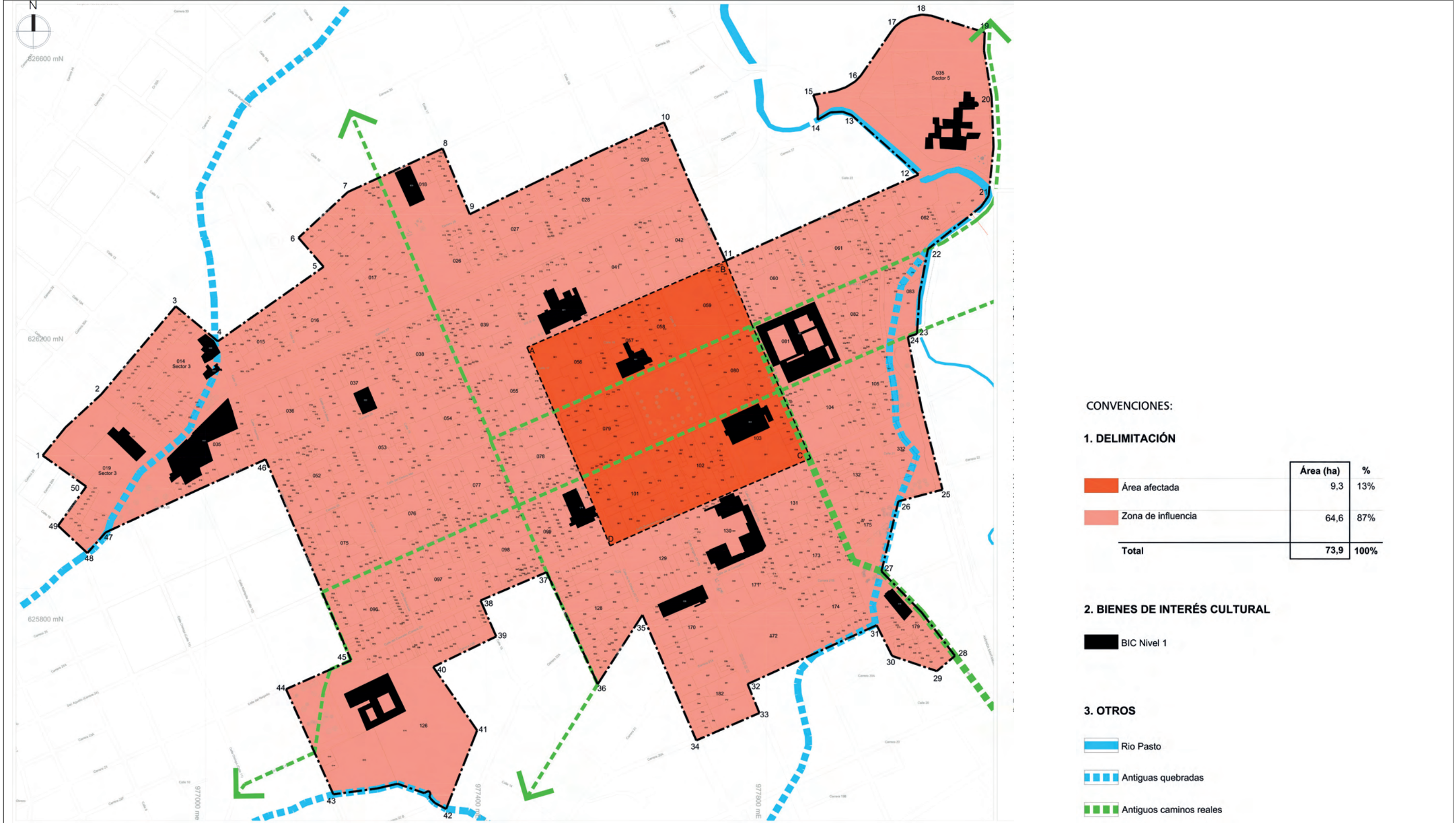




**Estructura Predial del Sector Antiguo año 1995**

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 70

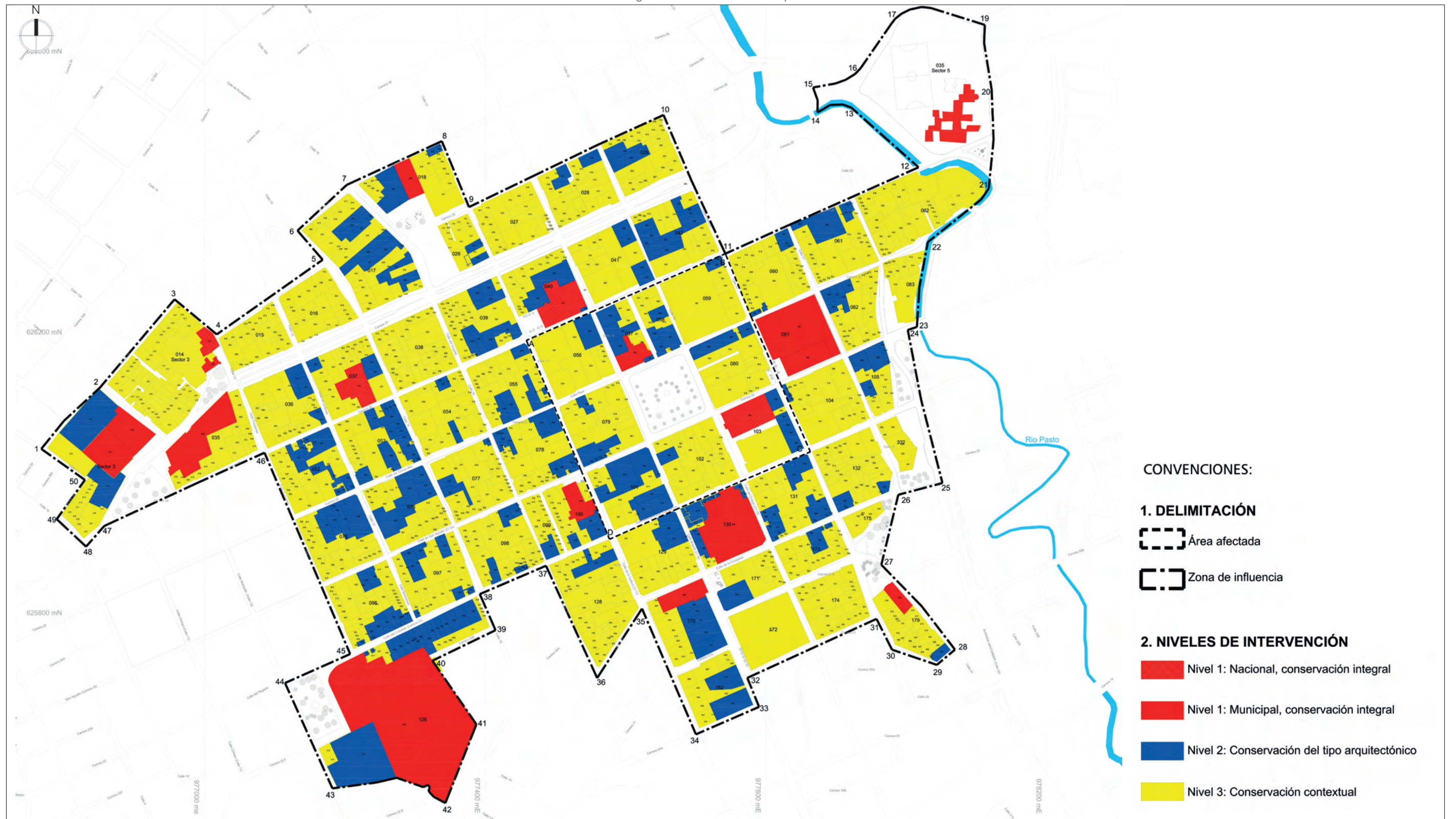




**Delimitación del Área Afectada y su Zona de Influencia**

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de San Juan de Pasto y su Área de Influencia

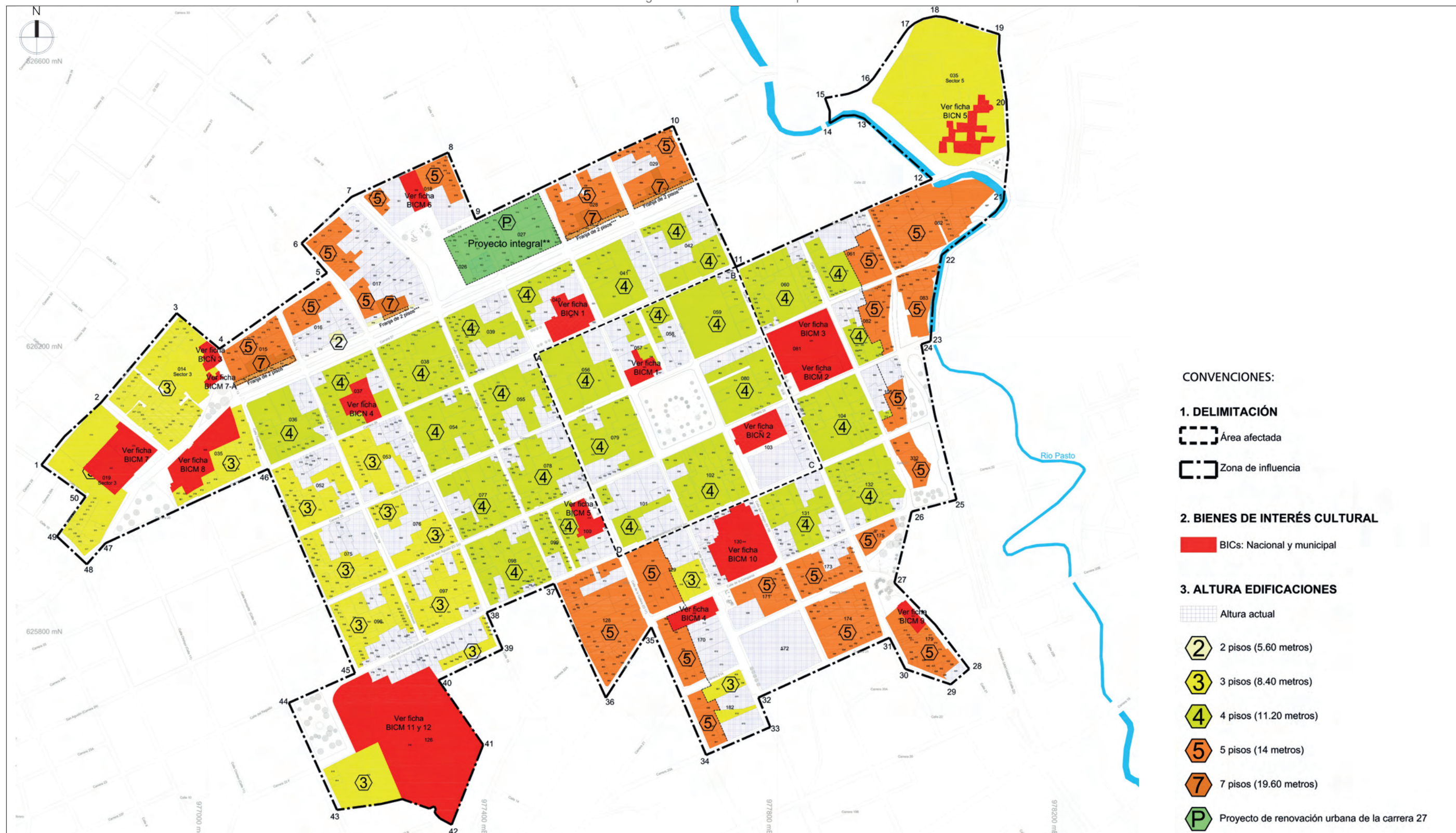




Plano Niveles de Intervención

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de San Juan de Pasto y su Área de Influencia

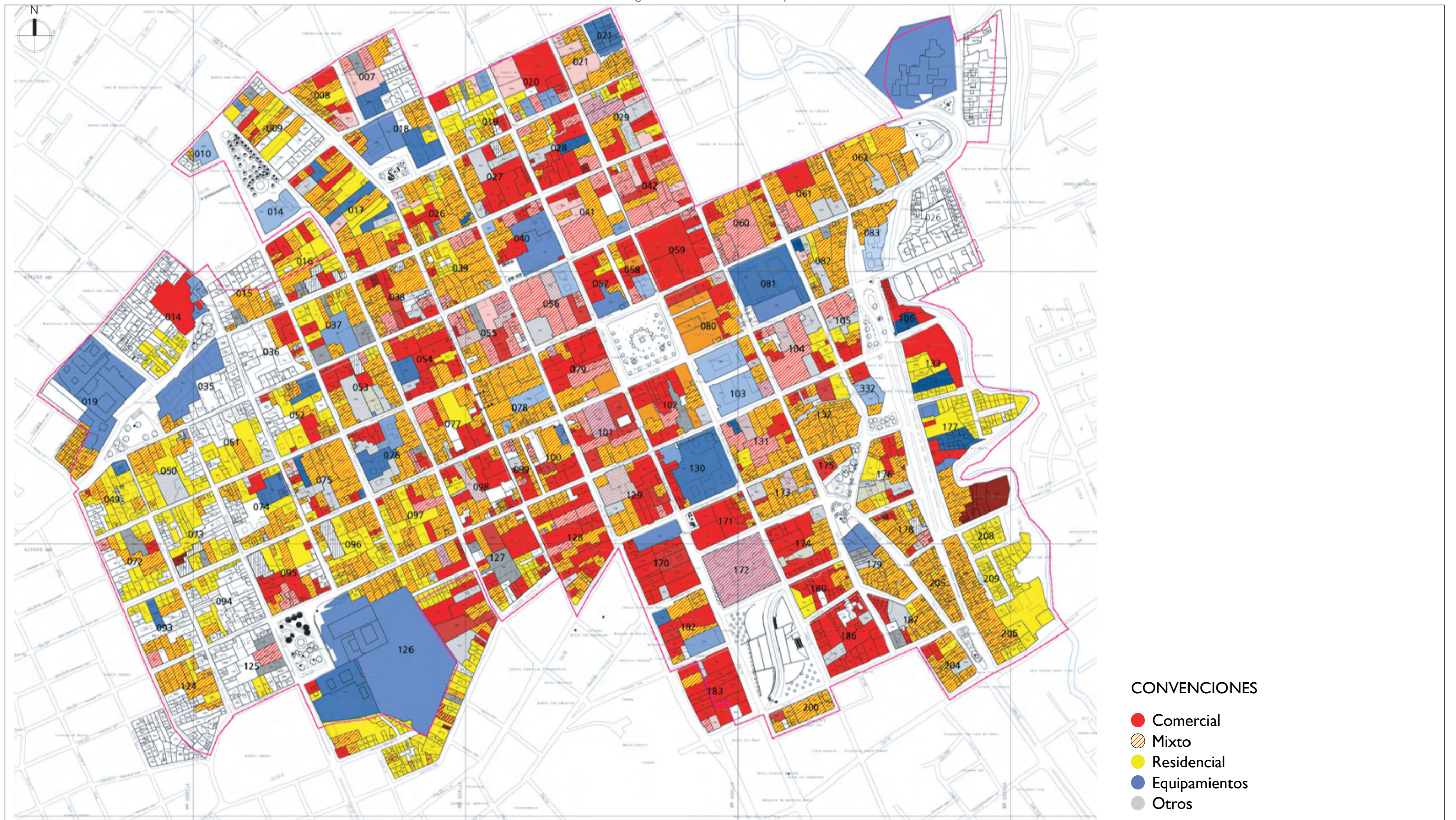




### Plano de Alturas Municipio de San Juan de Pasto

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de San Juan de Pasto y su Área de Influencia







Plano de Usos Municipio de San Juan de Pasto

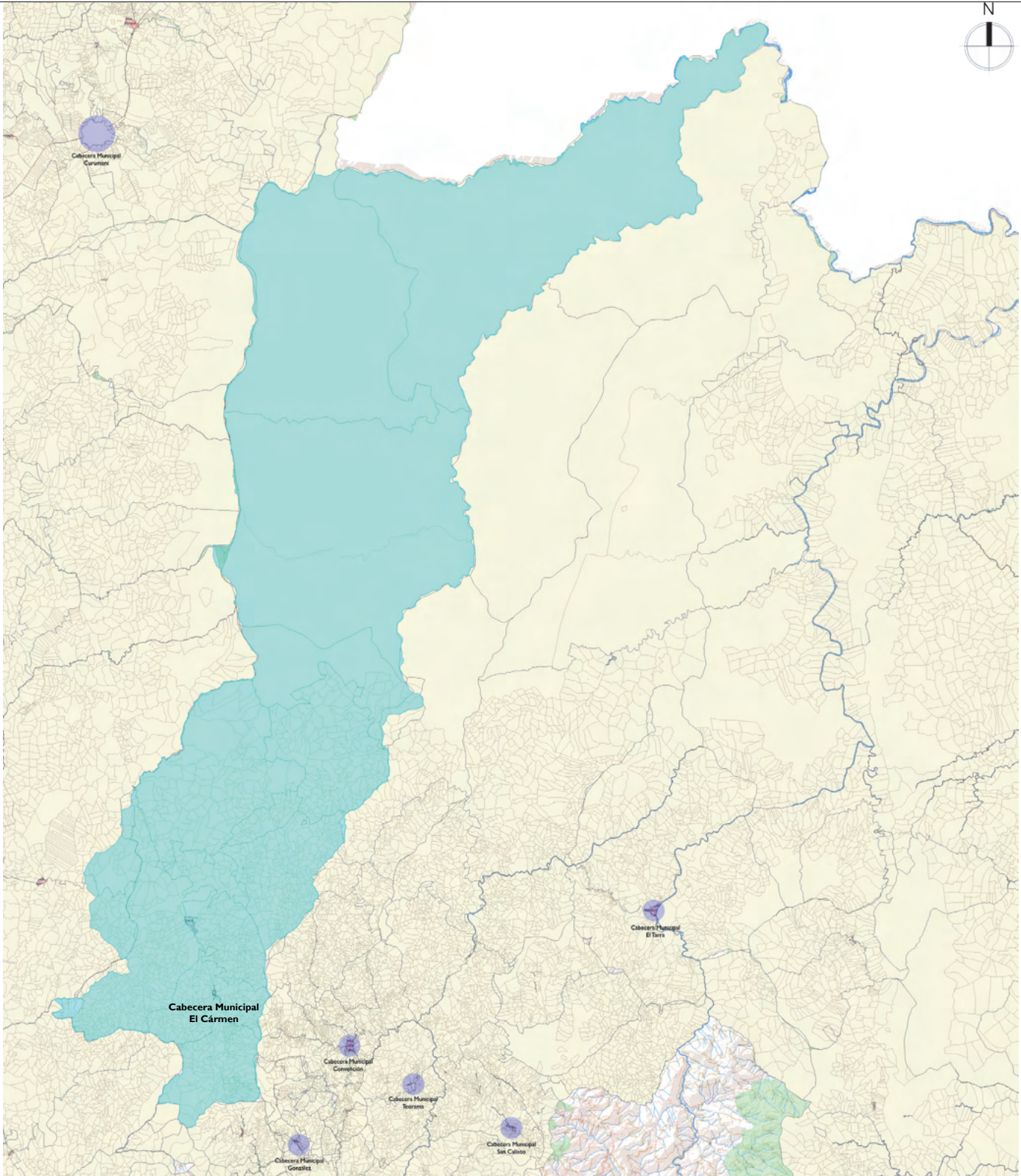
Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de San Juan de Pasto y su Área de Influencia





Municipio: <b>EL CÁRMEN</b> Departamento: <b>Norte de Santander</b>													Declaratoria: Resolución 0929 del 25 de Julio de 2005													 	
Fundación: Julio 16 de 1686						Fundador: Pedro Isabel del Busto							Por la cual se declara el Centro Histórico del Municipio de El Carmen, localizado en el Departamento de Norte de Santander, como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y se delimita su área de influencia													<b>Localización Departamento de Norte de Santander y El Cármén en el Departamento</b>	
Altura: 761 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 21° C																					
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016															
Cabecera						2.587	2.737	2.457	2.901	2.988	2.199	2.315															
Resto						12.010	10.662	9.511	13.501	15.472	13.486	11.475															
Total						14.597	13.399	11.968	16.402	18.460	15.685	13.790															
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE													Que mediante la Ordenanza número 16 de 1991, se declara como Patrimonio Histórico del Norte de Santander la población de El Carmen y mediante el Decreto número 001044 de 2003, se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Departamental la Parte Superior del Casco Urbano, así como el “Monte Sagrado” contiguo. Que los valores considerados por la Dirección de Patrimonio para recomendar al Consejo de Monumentos Nacionales la emisión de concepto para la declaratoria del Centro Histórico del Municipio de El Carmen, localizado en el Departamento de Norte de Santander, como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, son:  VALORES DE ORDEN TEMPORAL (Originalidad) VALORES DE ORDEN FISICO (Constitución del bien, Estado actual de conservación, Autenticidad) VALORES DE ORDEN ESTETICO VALORES DE REPRESENTATIVIDAD HISTORICA VALORES DE REPRESENTATIVIDAD CULTURAL														
Censo General 2005																											
Sector	Población Censada					Hogares Censados			Personas por Hogar	Viviendas Censadas																	
Cabecera	2.199					660			4,15	648																	
Resto	13.486					3.099				3.608																	
Total	15.685					3.759				4.256																	
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005													<b>Subregiones Departamento de Norte de Santander</b> Fuente: Tomado de Wikipedia														
Análisis Cierre de Brechas																											





Geografía

Descripción Física

El municipio de El Carmen está ubicado sobre la cordillera Oriental en una región montañosa.

Su cabecera municipal se encuentra en el piso térmico templado cuya temperatura oscila entre 17 y 24 grados centígrados con una precipitación media anual entre 1000 y 1250 mm.

En el municipio se encuentran 2 de las más grandes cuencas las cuales son la gran cuenca del magdalena y la gran cuenca del Catatumbo; la gran cuenca del magdalena está presente con la cuenca de la quebrada El Carmen, la cual nace en jurisdicción del municipio de Ocaña en el corregimiento de Otare, donde recibe el nombre de Simañita y desemboca al río Magdalena y algunos de sus afluentes son: Zaragoza, el Salobre, el Salto, los Chancos, Viloría, Inane, Astilleros, Mariquita, San Francisco, San Vicente, el Tigre, entre otras. Mientras que la gran cuenca del Catatumbo está presente con la cuenca de la quebrada las Pitas, Las Minas, Las Pajitas, entre otras.

Límites del municipio

Limita al Norte con:Venezuela.

Limita al Sur con: departamento del Cesar y el municipio de Ocaña.

Limita al Oriente con: municipio de Convención.

Limita al Occidente con: departamento del Cesar.



Localización del Municipio de El Carmen. Plano División Predial

Fuente: Elaboración propia con base a información tomada de <http://www.igac.gov.co/igac>, simulador de Catastro. Consultada el 17 de Agosto de 2019

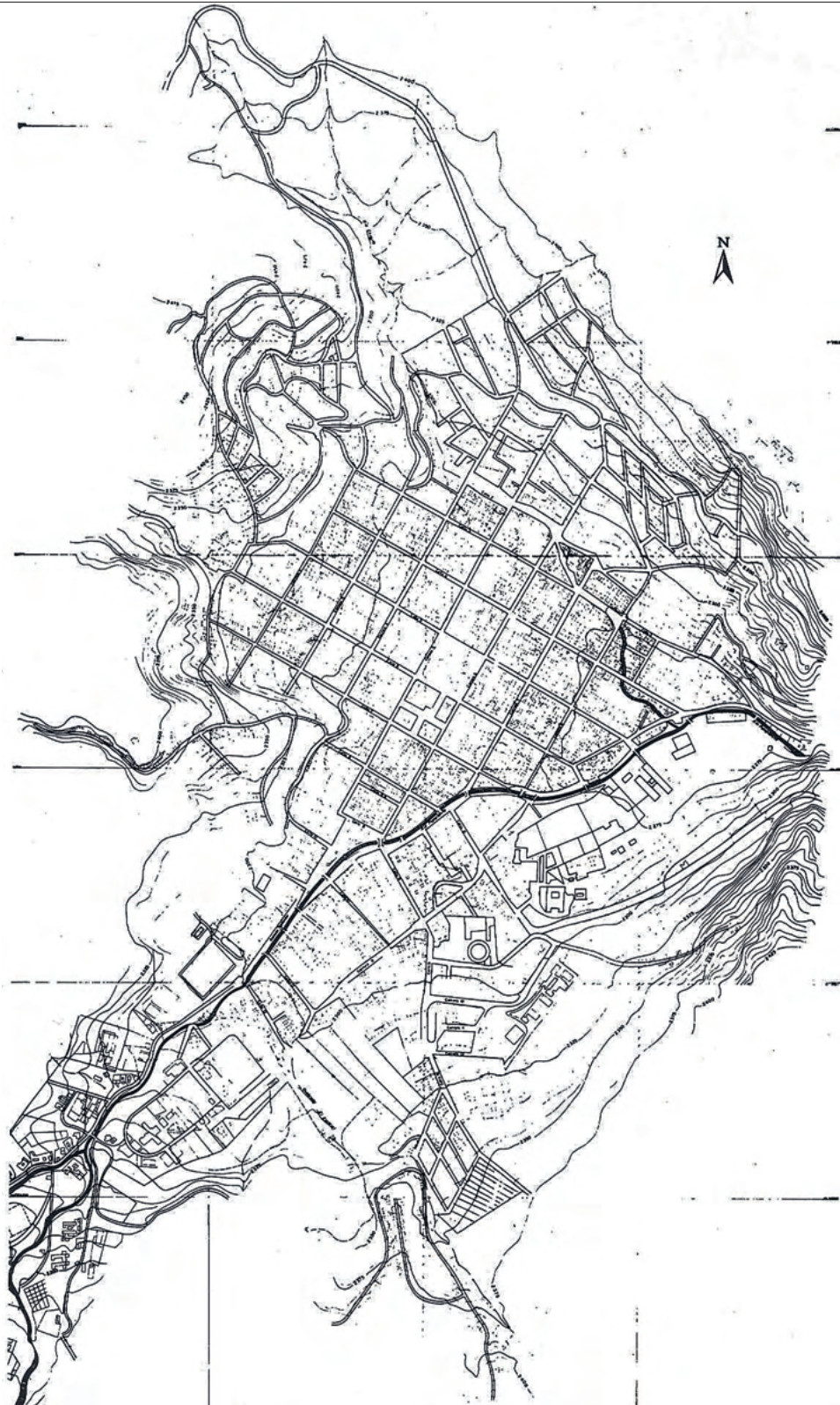
Fuente: Información tomada de la página del Muncipcio de El Cármen. <http://elcarmen-nortedesantander.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx>. Consultada el 07 de Septiembre de 2019



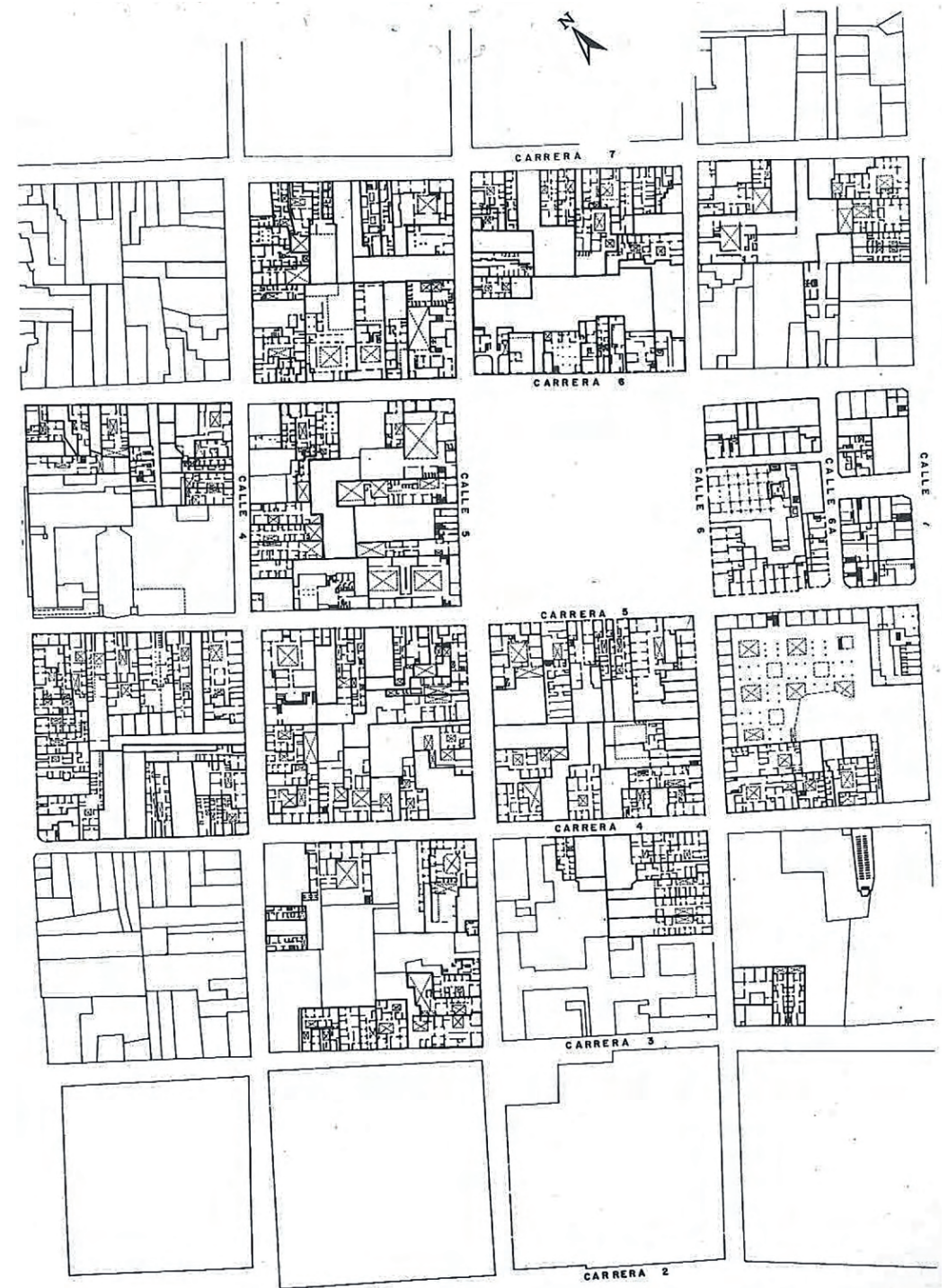


Municipio: <b>PAMPLONA</b> Departamento: <b>Norte de Santander</b>													Declaratoria: Decreto 264 de 1963		 	
Fundación: Noviembre 01 de 1549						Fundadores: Pedro de Ursúa y el capitán Ortún Velázquez de Velasco							Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.			
Altura: 2.200 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 16° C										
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	Artículo 4°.- En virtud de la autorización conferida por el artículo 6 de la Ley 163 de 1959, y sin perjuicio de otras reservas que puedan decretarse en el futuro, se incluyen en las reservas especificadas en el artículo 4 de dicha Ley los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, San Gil, <b>Pamplona</b> , Rionegro (Antioquia), Marinilla y Girón.			
Cabecera						16.396	25.502	32.946	36.536	38.928	48.575	54.894				
Resto						5.221	4.894	18.783	5.237	8.432	4.328	2.909				
Total						21.617	30.396	51.729	41.773	47.360	52.903	57.803				
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																
Censo General 2005																





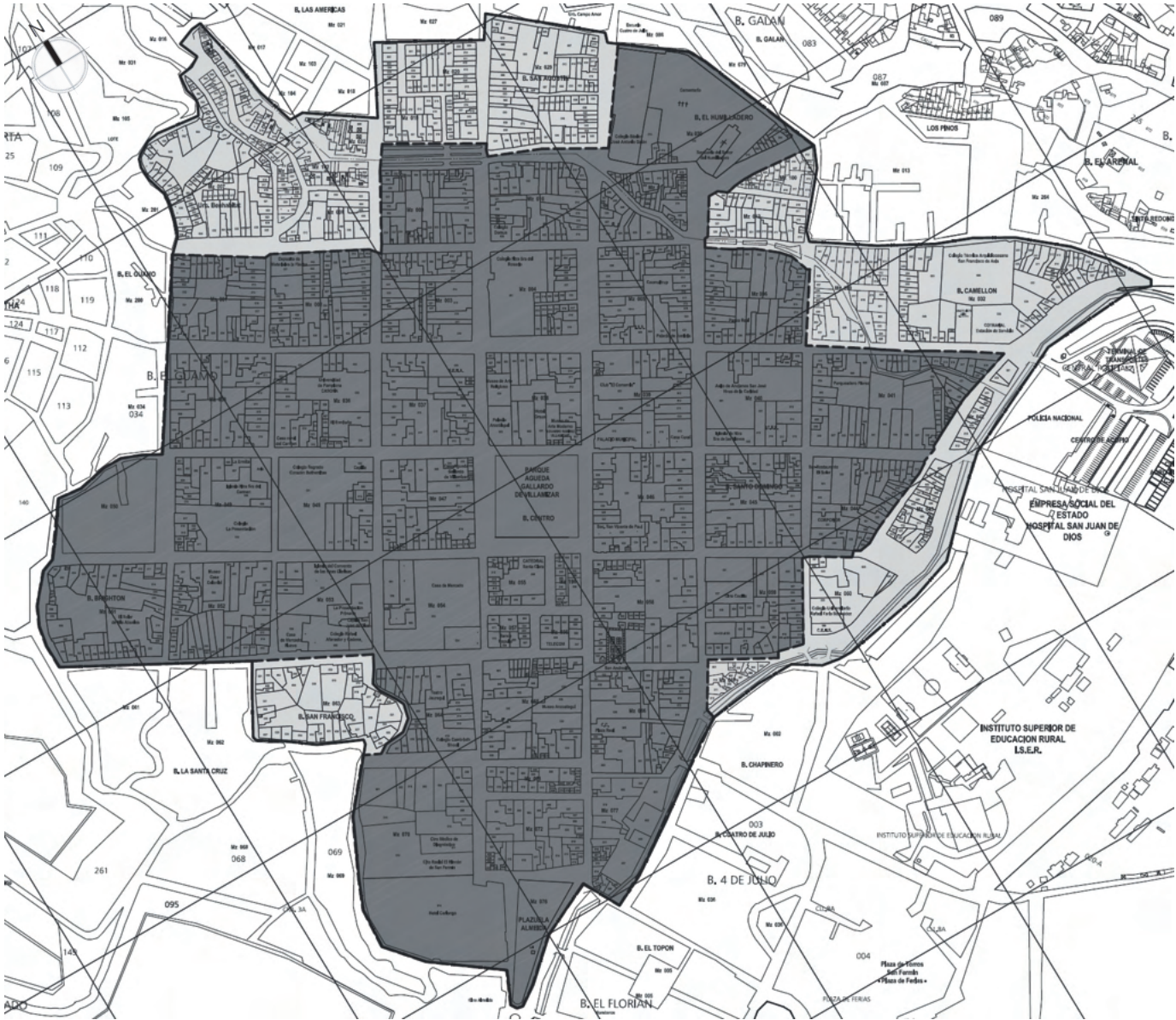
**Estructura Predial del Casco Urbano año 1991**



**Morfología y Tipología del Centro Histórico**

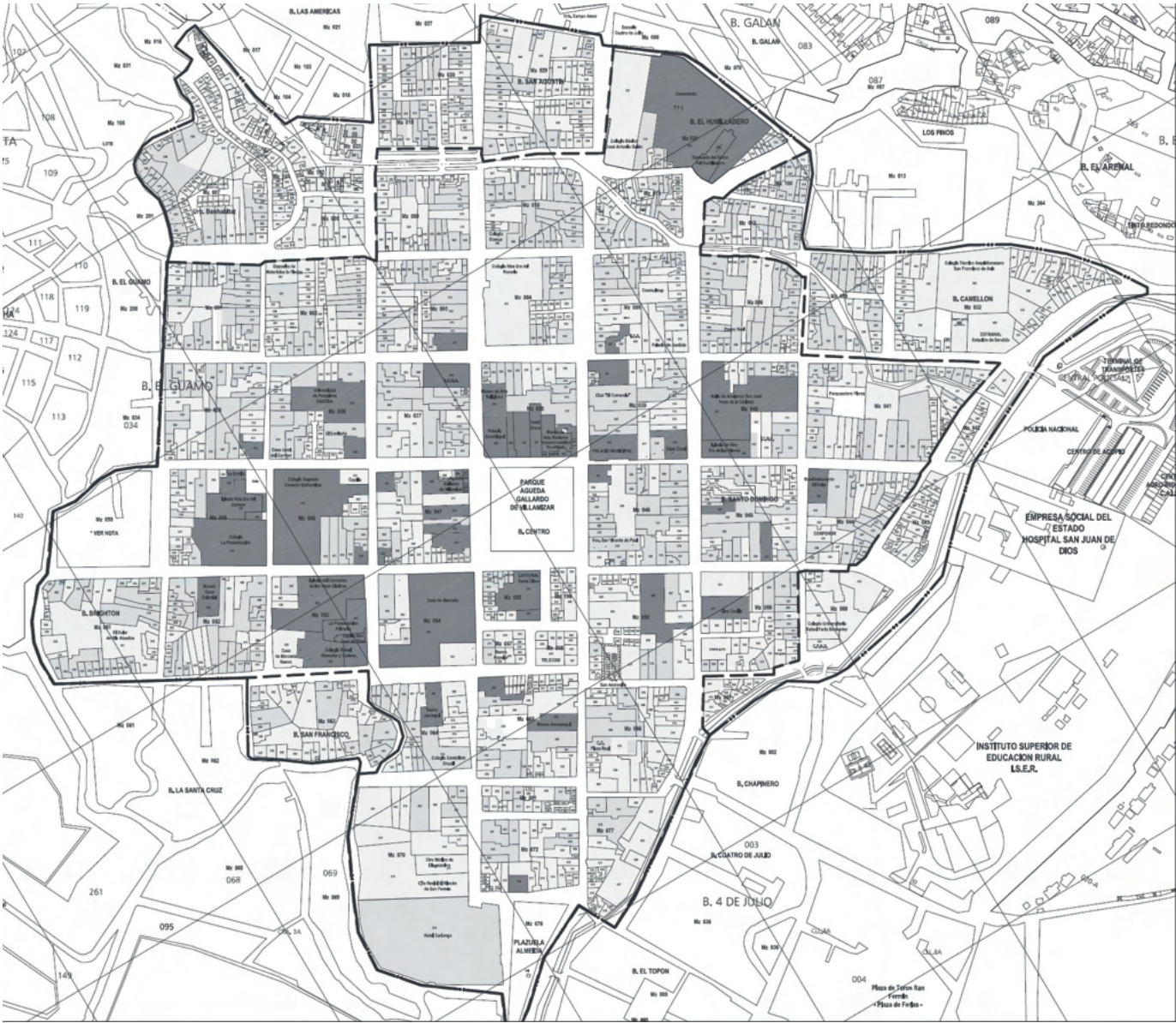
Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 59 y 83





- Convenciones
- Área Afectada
  - Zona de Influencia

Delimitación del Área Afectada y Zona de Influencia

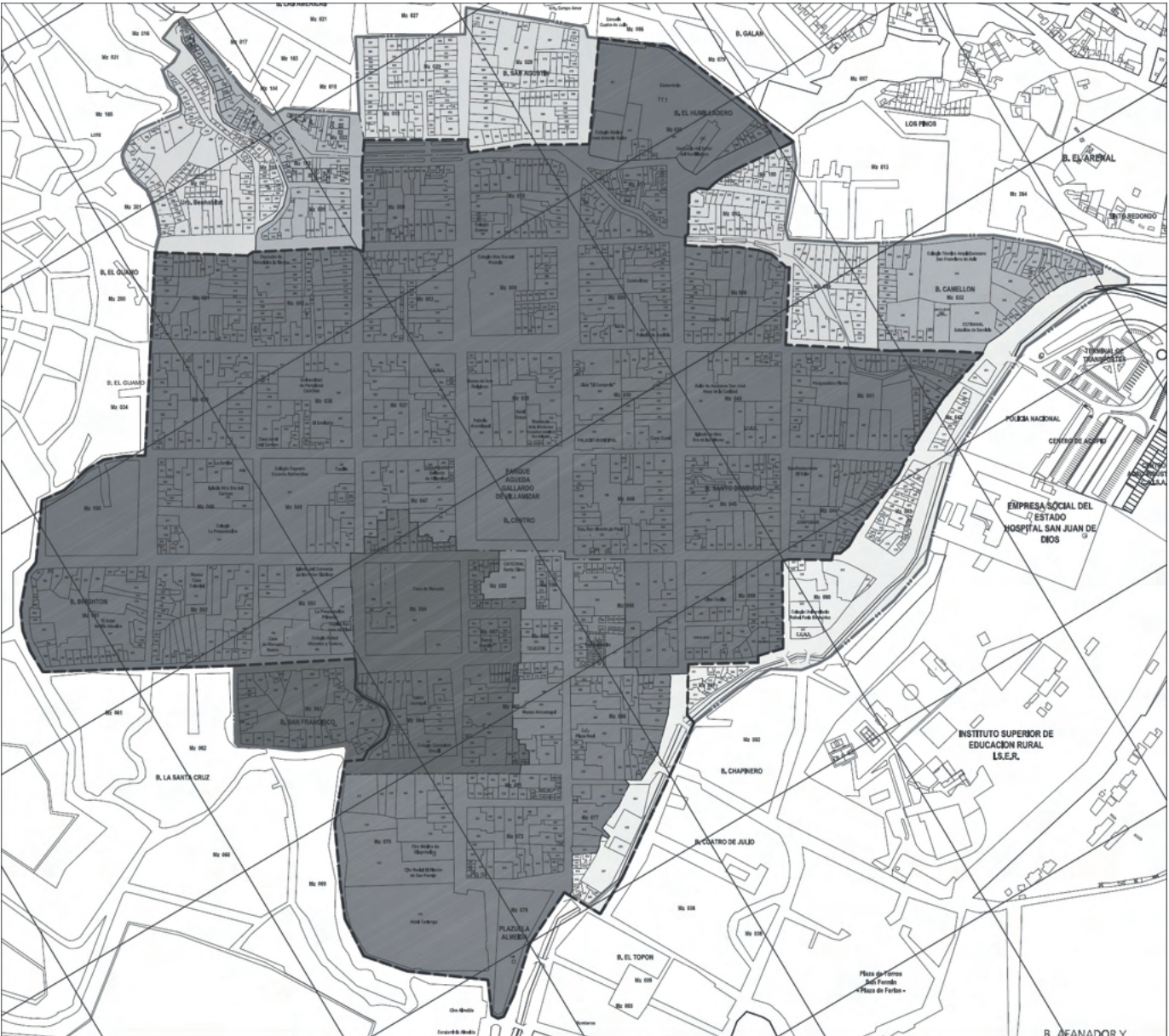


- Convenciones
- Nivel 1: Conservación Integral
  - Nivel 2: Conservación del tipo Arquitectónico
  - Nivel 3: Conservación Contextual

Plano Niveles de Intervención

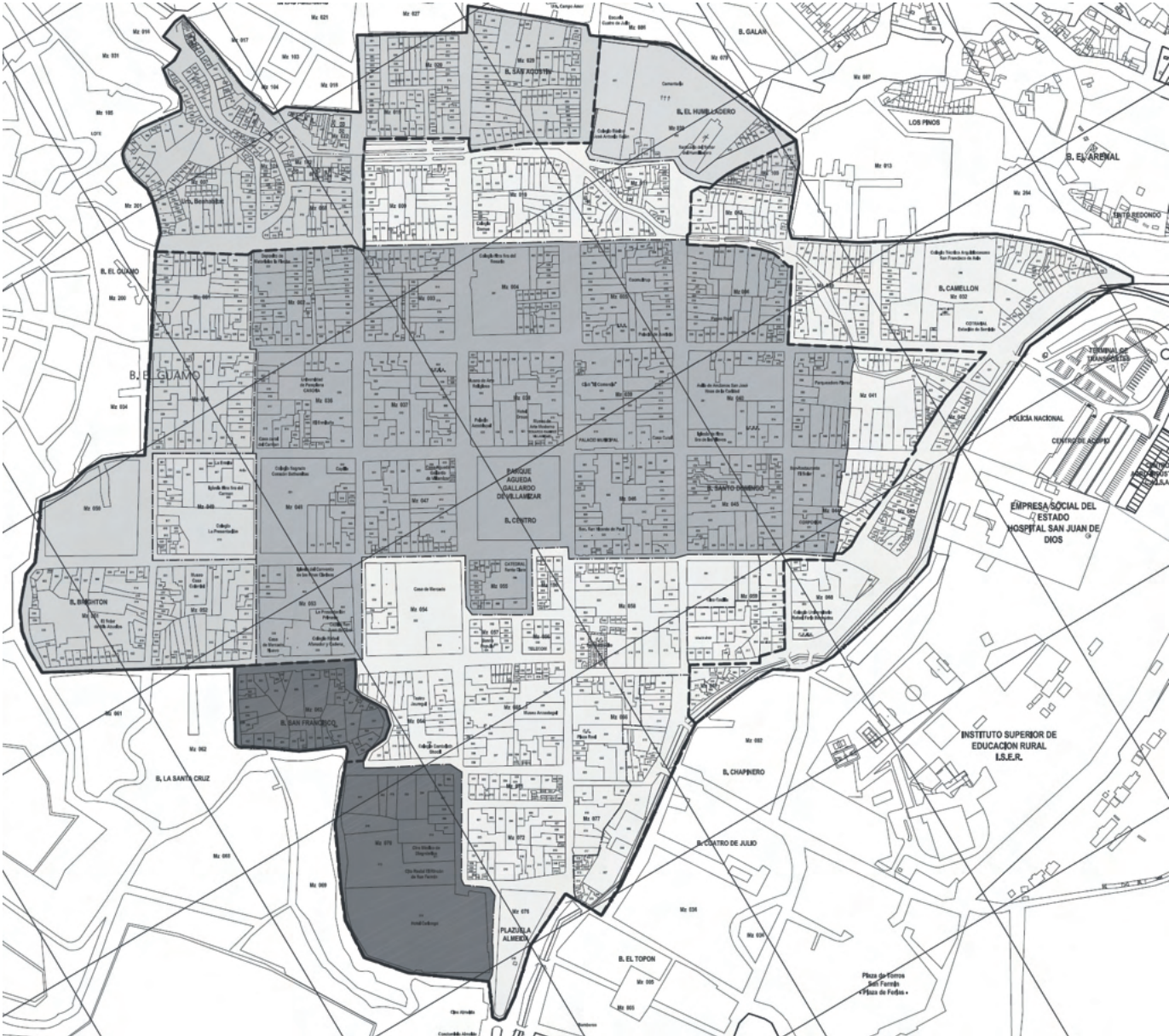
Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Pamplona y su Área de Influencia





CONVENCIONES		
Sector 1: Conservación Urbana		
	CU-1: Conservación de Conjunto Urbano	
	CU-2: Conservación de Trazo urbano con ajuste de patrón arquitectónico.	
Sector 2: Rehabilitación Urbana		
	RH-1: Rehabilitación de Espacio Público e impacto de uso.	
	RH-2: Rehabilitación de espacio público y ajuste de patrón arquitectónico.	
Sector 3: Renovación Urbana		
	RU-1: Renovación del Contexto Urbana.	
	RU-2: Renovación de Estructuras prediales y patrones.	

Plano Sectores Normativos





CONVENCIONES		
Zona de uso múltiple (Z.U.M.)		
	Z.U.M.(1): con énfasis en uso institucional y administrativo	
	Z.U.M.(2): con énfasis en uso comercial	
	Z.U.M.(3): con énfasis en uso de vivienda	
Zona de uso residencial tipo 3 (Z.U.R. 3)		
	Z.U.R.3(1): con énfasis en uso de vivienda	
	Z.U.R.3 (2): con énfasis en uso institucional	
Zona de uso residencial tipo 1. Sector 3 (Z.U.R.1-3)		
	Z.U.R.1-3 (1): con énfasis en uso comercial	

Plano Zonas de Actividad

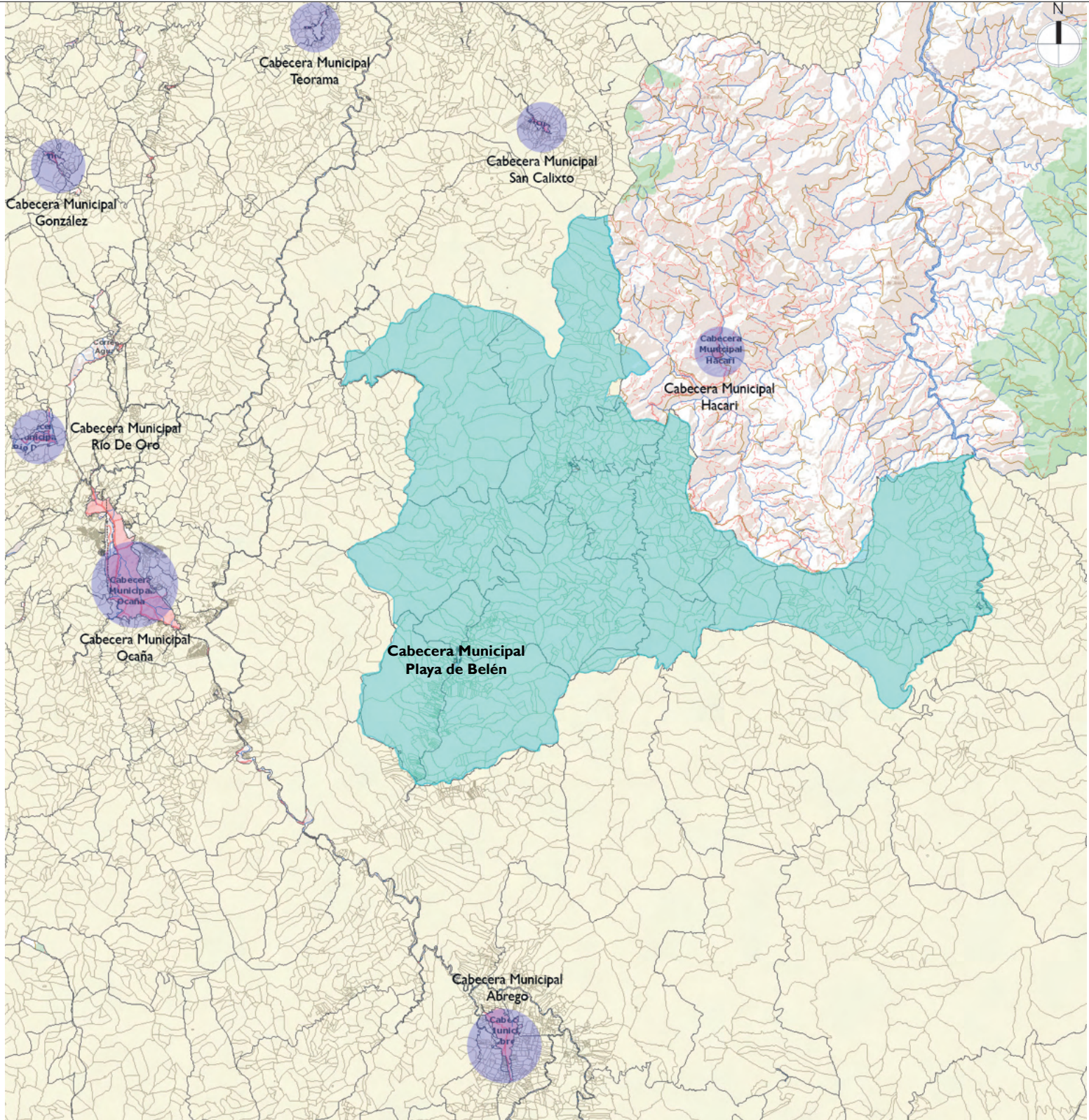
Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Pamplona y su Área de Influencia





Municipio: <b>LA PLAYA DE BELÉN</b> Departamento: <b>Norte de Santander</b>													<b>Declaratoria: Resolución 0928 del 25 de Julio de 2005</b>													 																																																					
<b>Fundación:</b> Diciembre 04 de 1862						<b>Fundadores:</b> Doña María Claro de Sanguino, Jesús Rueda, Tiburcio Alvarez y Juan Esteban Vega							Por la cual se declara el Centro Histórico del Municipio de La Playa de Belén, localizado en el Departamento de Norte de Santander, como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y se delimita su área de influencia.													<b>Localización Departamento de Norte de Santander y Playa de Belén en el Departamento</b>																																																					
<b>Altura:</b> 1.450 metros sobre el nivel del mar						<b>Temperatura:</b> 21° C							Que la Alcaldía Municipal de La Playa de Belén y la Secretaría de Cultura Departamental de Norte de Santander, presentaron a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura la solicitud de declaratoria del Centro Histórico del Municipio de La Playa de Belén como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. Que mediante Acuerdo Municipal número 005 del 30 de mayo de 2000, artículo 27, se declara como Patrimonio Arquitectónico del Municipio el área de Conservación Arquitectónica del centro poblado de La Playa de Belén y mediante Decreto número 001044 de 2003 se declaracomo Bien de Interés Cultural de Carácter Departamental el Templo Parroquial y el Parque y/o Plaza Principal del Municipio La Playa de Belén.																																																																		
<b>Año</b>	<b>1.905</b>	<b>1.912</b>	<b>1.918</b>	<b>1.928</b>	<b>1.938</b>	<b>1.951</b>	<b>1.964</b>	<b>1.973</b>	<b>1.985</b>	<b>1.993</b>	<b>2.005</b>	<b>2.016</b>	Que los valores considerados por la Dirección de Patrimonio para recomendar al Consejo de Monumentos Nacionales la emisión de concepto para la declaratoria del Centro Histórico del Municipio de La Playa de Belén, localizado en el Departamento de Norte de Santander, como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, son:																																																																		
<b>Cabecera</b>						950	631	1.111	904	779	656	640	VALORES DE ORDEN TEMPORAL (Originalidad) VALORES DE ORDEN FISICO ( Constitución del bien, Estado actual deconservación, Autenticidad) VALORES DE ORDEN ESTETICO VALORES DE REPRESENTATIVIDAD HISTORICA VALORES DE REPRESENTATIVIDAD CULTURAL																																																																		
<b>Resto</b>						4.278	7.496	7.705	7.521	7.545	7.060	7.913	Que para dar cumplimiento al artículo 8° de la Ley 397 de 1997, la Dirección de Patrimonio, sometió a consideración del Consejo de Monumentos Nacionales el estudio de solicitud de declaratoria del Centro Histórico del Municipio de La Playa de Belén, localizado en el Departamento de Norte de Santander, como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, según consta en el Acta número 005 del 6 de mayo de 2005. El Consejo de Monumentos Nacionales al verificar que este inmueble posee valores de orden temporal, físico, estético, y representatividad histórica y cultural, recomendó a la señora Ministra de Cultura su declaratoria.																																																																		
<b>Total</b>						5.228	8.127	8.816	8.425	8.324	7.716	8.553	Fuentes: Tomado de Resolución 0928 de 2005																																																																		
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE													<b>Plan Especial de Manejo y Protección:</b> Resolución No. 1815 del 23 de Junio de 2005.Aprobado.																																																																		
<b>Censo General 2005</b>													Fuentes: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación																																																																		
<table><tr><th>Sector</th><th>Población Censada</th><th>Hogares Censados</th><th>Personas por Hogar</th><th>Viviendas Censadas</th></tr><tr><td>Cabecera</td><td>656</td><td>203</td><td rowspan="3">4,16</td><td>198</td></tr><tr><td>Resto</td><td>7.060</td><td>1.641</td><td>1.850</td></tr><tr><td>Total</td><td>7.716</td><td>1.844</td><td>2.048</td></tr></table>													Sector	Población Censada	Hogares Censados	Personas por Hogar	Viviendas Censadas	Cabecera	656	203	4,16	198	Resto	7.060	1.641			1.850	Total	7.716	1.844	2.048	Fuentes: Tomado de Google Imágenes. Consultadas el 06 de Septiembre de 2019																																														
Sector	Población Censada	Hogares Censados	Personas por Hogar	Viviendas Censadas																																																																											
Cabecera	656	203	4,16	198																																																																											
Resto	7.060	1.641		1.850																																																																											
Total	7.716	1.844		2.048																																																																											
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005													<b>Subregiones Departamento de Norte de Santander</b>																																																																		
<b>Análisis Cierre de Brechas</b>													Fuentes: Tomado de Wikipedia																																																																		
<table><tr><th></th><th>Municipio</th><th>Departamento</th><th>Región</th></tr><tr><td>Cobertura neta educación media (%2015)</td><td>27,2%</td><td>36,7%</td><td>47,3%</td></tr><tr><td>Pruebas saber 11 matemáticas (2016)</td><td>46,8</td><td>51,1</td><td>52,0</td></tr><tr><td>Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)</td><td>35,1%</td><td>11,7%</td><td>8,4%</td></tr><tr><td>Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)</td><td>17,9</td><td>12,0</td><td>12,4</td></tr><tr><td>Cobertura vacunación DTP (2015)</td><td>93,4%</td><td>91,0%</td><td>93,6%</td></tr><tr><td>Cobertura total acueducto (2005)</td><td>34,4%</td><td>82,1%</td><td>82,2%</td></tr><tr><td>Déficit cualitativo de vivienda (2005)</td><td>64,9%</td><td>26,6%</td><td>24,0%</td></tr><tr><td>Déficit cuantitativo de vivienda (2005)</td><td>4,2%</td><td>10,4%</td><td>11,9%</td></tr></table>														Municipio	Departamento	Región	Cobertura neta educación media (%2015)	27,2%	36,7%	47,3%	Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	46,8	51,1	52,0	Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	35,1%	11,7%	8,4%	Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	17,9	12,0	12,4	Cobertura vacunación DTP (2015)	93,4%	91,0%	93,6%	Cobertura total acueducto (2005)	34,4%	82,1%	82,2%	Déficit cualitativo de vivienda (2005)	64,9%	26,6%	24,0%	Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	4,2%	10,4%	11,9%	<table><tr><th>Resultado Esperado 2018**</th><th>Esfuerzo en cierre de brechas</th></tr><tr><td>46,6%</td><td>medioalto</td></tr><tr><td>46,7</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>6,9%</td><td>medioalto</td></tr><tr><td>13,1</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>100,0%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>86,9%</td><td>medioalto</td></tr><tr><td>17,8%</td><td>medioalto</td></tr><tr><td>4,2%</td><td>bajo</td></tr></table>													Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas	46,6%	medioalto	46,7	mediobajo	6,9%	medioalto	13,1	mediobajo	100,0%	bajo	86,9%	medioalto	17,8%	medioalto	4,2%	bajo
	Municipio	Departamento	Región																																																																												
Cobertura neta educación media (%2015)	27,2%	36,7%	47,3%																																																																												
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	46,8	51,1	52,0																																																																												
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	35,1%	11,7%	8,4%																																																																												
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	17,9	12,0	12,4																																																																												
Cobertura vacunación DTP (2015)	93,4%	91,0%	93,6%																																																																												
Cobertura total acueducto (2005)	34,4%	82,1%	82,2%																																																																												
Déficit cualitativo de vivienda (2005)	64,9%	26,6%	24,0%																																																																												
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	4,2%	10,4%	11,9%																																																																												
Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas																																																																														
46,6%	medioalto																																																																														
46,7	mediobajo																																																																														
6,9%	medioalto																																																																														
13,1	mediobajo																																																																														
100,0%	bajo																																																																														
86,9%	medioalto																																																																														
17,8%	medioalto																																																																														
4,2%	bajo																																																																														
Fuentes: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación													Fuentes: Tomado de Resolución 0928 de 2005																																																																		
Fuentes: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación													<b>Plan Especial de Manejo y Protección:</b> Resolución No. 1815 del 23 de Junio de 2005.Aprobado.													Fuentes: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 06 de Septiembre de 2019																																																					





Localización del Municipio de Playa de Belén. Plano División Predial

Fuente: Elaboración propia con base a información tomada de <http://www.igac.gov.co/igac>, simulador de Catastro. Consultada el 22 de Agosto de 2019

**Geografía**

**Descripción Física**

La cabecera municipal está situada a una distancia aproximada de 200 kilómetros de Cúcuta, capital de Norte de Santander, Colombia, América del Sur y a 25 de la ciudad de Ocaña.

Su altura sobre el nivel del mar es de 1450 metros, con temperatura media de 21 grados centígrados.

**Población (Censo 2005 DANE):**

Total habitantes: 5.806 Hombres: 3043 Mujeres: 2763 - Cabecera: Hombres: 309 Mujeres: 347 Total: 656 - Resto: Total: 5150 Hombres: 2734 Mujeres: 2416.

Cabecera: Habitantes: 656; viviendas: 198; hogares: 203; unidades económicas: 86

Resto: Habitantes: 5.150; viviendas: 1.421; hogares: 1.195; unidades económicas: 93; unidades agropecuarias: 1.075.






**Límites del municipio**

Limita al Norte con: municipios de San Calixto y Hacarí.  
Limita al Sur con: municipio de Abrego.  
Limita al Oriente con: municipio de Abrego.  
Limita al Occidente con: municipio de Ocaña.

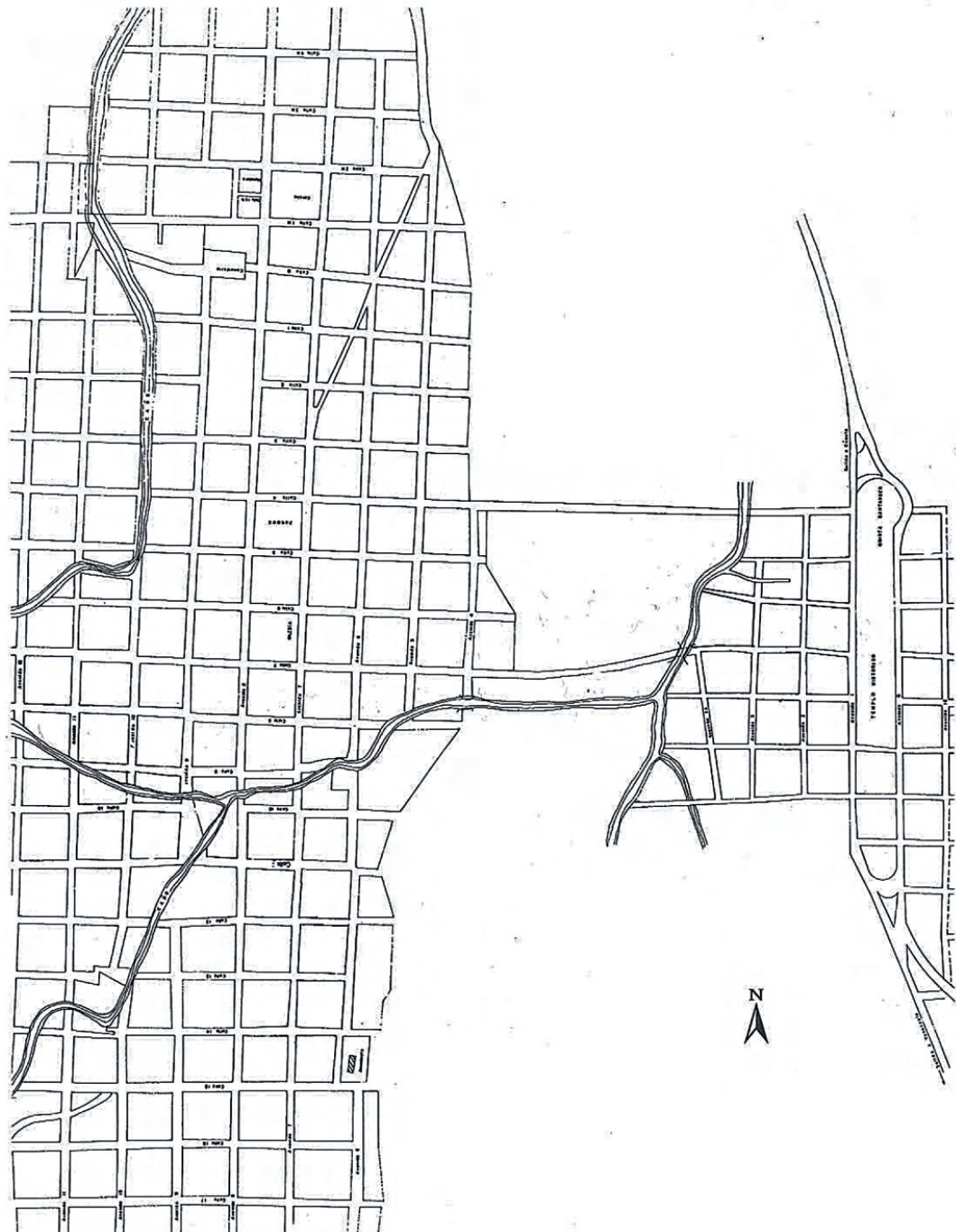
Fuente: Información tomada de la página del Municipio de Playa de Belén.  
[http://laplayadebelen-nortedesantander.gov.co/informacion\\_general.shtml](http://laplayadebelen-nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml).  
Consultada el 07 de Septiembre de 2019





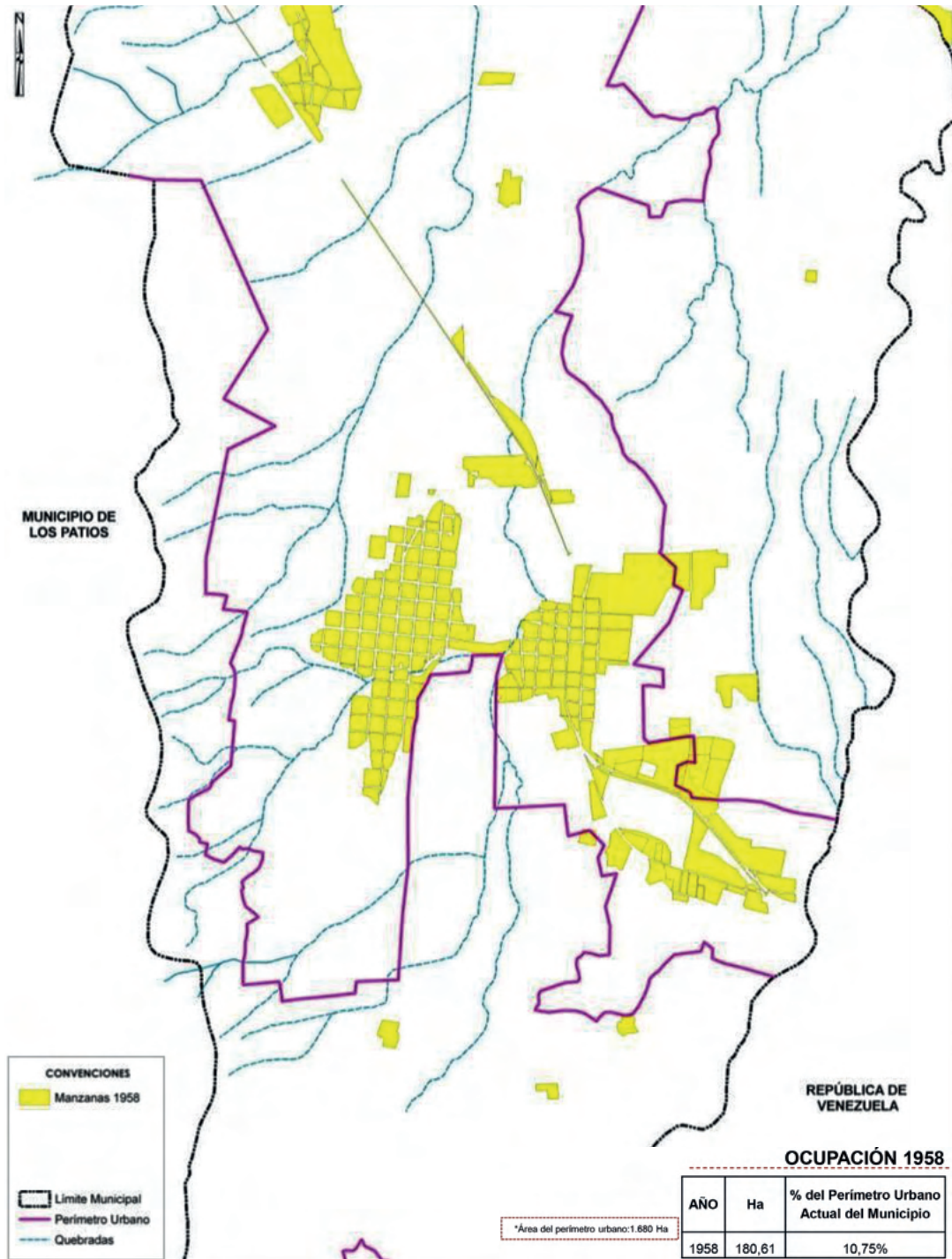
Municipio: <b>VILLA DEL ROSARIO</b> Departamento: <b>Norte de Santander</b>													Declaratoria: Decreto 102 de 1971		 																																																							
Fundación: Agosto 05 de 1761						Fundadores: Ascencia Rodríguez de Morales y José Díaz de Astudillo							Por el cual se declara zona histórica a un sector de Villa de Rosario de Cúcuta. El Consejo de Monumentos nacionales mediante Resolución 003 de 10 de diciembre de 1970, declara zona histórica un sector de Villa de Rosario de Cúcuta.  La declaración se realiza a partir de un estudio realizado por Universidad de Los Andes.		Localización Departamento de Norte de Santander y Villa del Rosario en el Departamento																																																							
Altura: 440 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 30° C																																																																
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016																																																										
Cabecera						2.747	5.184	9.154	59.630	54.044	66.910	86.633																																																										
Resto						4.290	6.629	16.825	2.102	2.473	3.081	3.911																																																										
Total						7.037	11.813	25.979	61.732	56.517	69.991	90.544																																																										
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE															Fuente: Tomado del Decreto 102 de 1971		Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia																																																					
Censo General 2005															Plan Especial de Manejo y Protección: Resolución No. 1500 de 2012. Aprobado.				 <table><tr><th>Subregiones</th><th>No. Habitantes</th></tr><tr><td>Centro</td><td>43.488</td></tr><tr><td>Norte</td><td>64.916</td></tr><tr><td>Occidente</td><td>241.023</td></tr><tr><td>Oriente o Metropolitana</td><td>804.632</td></tr><tr><td>Suroccidente</td><td>79.015</td></tr><tr><td>Suroriente</td><td>57.832</td></tr></table>		Subregiones	No. Habitantes	Centro	43.488	Norte	64.916	Occidente	241.023	Oriente o Metropolitana	804.632	Suroccidente	79.015	Suroriente	57.832																																				
Subregiones	No. Habitantes																																																																					
Centro	43.488																																																																					
Norte	64.916																																																																					
Occidente	241.023																																																																					
Oriente o Metropolitana	804.632																																																																					
Suroccidente	79.015																																																																					
Suroriente	57.832																																																																					
<table><tr><th>Sector</th><th>Población Censada</th><th>Hogares Censados</th><th>Personas por Hogar</th><th>Viviendas Censadas</th></tr><tr><td>Cabecera</td><td>66.910</td><td>16.514</td><td rowspan="3">4,05</td><td>16.076</td></tr><tr><td>Resto</td><td>3.081</td><td>724</td><td>725</td></tr><tr><td>Total</td><td>69.991</td><td>17.238</td><td>16.801</td></tr></table>															Sector	Población Censada	Hogares Censados	Personas por Hogar	Viviendas Censadas	Cabecera	66.910	16.514	4,05	16.076	Resto	3.081	724	725	Total	69.991	17.238	16.801	Templo histórico de Villa del Rosario																																					
Sector	Población Censada	Hogares Censados	Personas por Hogar	Viviendas Censadas																																																																		
Cabecera	66.910	16.514	4,05	16.076																																																																		
Resto	3.081	724		725																																																																		
Total	69.991	17.238		16.801																																																																		
																																																																						
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																																																																						
Análisis Cierre de Brechas																																																																						
<table><tr><th></th><th>Municipio</th><th>Departamento</th><th>Región</th></tr><tr><td>Cobertura neta educación media (%2015)</td><td>33,0%</td><td>36,7%</td><td>47,3%</td></tr><tr><td>Pruebas saber 11 matemáticas (2016)</td><td>51,1</td><td>51,1</td><td>52,0</td></tr><tr><td>Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)</td><td>7,0%</td><td>11,7%</td><td>8,4%</td></tr><tr><td>Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)</td><td>11,2</td><td>12,0</td><td>12,4</td></tr><tr><td>Cobertura vacunación DTP (2015)</td><td>95,1%</td><td>91,0%</td><td>93,6%</td></tr><tr><td>Cobertura total acueducto (2005)</td><td>90,1%</td><td>82,1%</td><td>82,2%</td></tr><tr><td>Déficit cualitativo de vivienda (2005)</td><td>25,2%</td><td>26,6%</td><td>24,0%</td></tr><tr><td>Déficit cuantitativo de vivienda (2005)</td><td>7,4%</td><td>10,4%</td><td>11,9%</td></tr></table>																Municipio	Departamento	Región	Cobertura neta educación media (%2015)	33,0%	36,7%	47,3%	Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	51,1	51,1	52,0	Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	7,0%	11,7%	8,4%	Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	11,2	12,0	12,4	Cobertura vacunación DTP (2015)	95,1%	91,0%	93,6%	Cobertura total acueducto (2005)	90,1%	82,1%	82,2%	Déficit cualitativo de vivienda (2005)	25,2%	26,6%	24,0%	Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	7,4%	10,4%	11,9%	<table><tr><th>Resultado Esperado 2018**</th><th>Esfuerzo en cierre de brechas</th></tr><tr><td>46,6%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>51,4</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>6,2%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>11,1</td><td>bajo</td></tr><tr><td>95,1%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>100,0%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>10,0%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>3,0%</td><td>bajo</td></tr></table>		Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas	46,6%	mediobajo	51,4	mediobajo	6,2%	bajo	11,1	bajo	95,1%	mediobajo	100,0%	bajo	10,0%	mediobajo	3,0%	bajo
	Municipio	Departamento	Región																																																																			
Cobertura neta educación media (%2015)	33,0%	36,7%	47,3%																																																																			
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	51,1	51,1	52,0																																																																			
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	7,0%	11,7%	8,4%																																																																			
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	11,2	12,0	12,4																																																																			
Cobertura vacunación DTP (2015)	95,1%	91,0%	93,6%																																																																			
Cobertura total acueducto (2005)	90,1%	82,1%	82,2%																																																																			
Déficit cualitativo de vivienda (2005)	25,2%	26,6%	24,0%																																																																			
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	7,4%	10,4%	11,9%																																																																			
Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas																																																																					
46,6%	mediobajo																																																																					
51,4	mediobajo																																																																					
6,2%	bajo																																																																					
11,1	bajo																																																																					
95,1%	mediobajo																																																																					
100,0%	bajo																																																																					
10,0%	mediobajo																																																																					
3,0%	bajo																																																																					
Fuente: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación															Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 06 de Septiembre de 2019																																																							





Plano Villa del Rosario Sector Antiguo

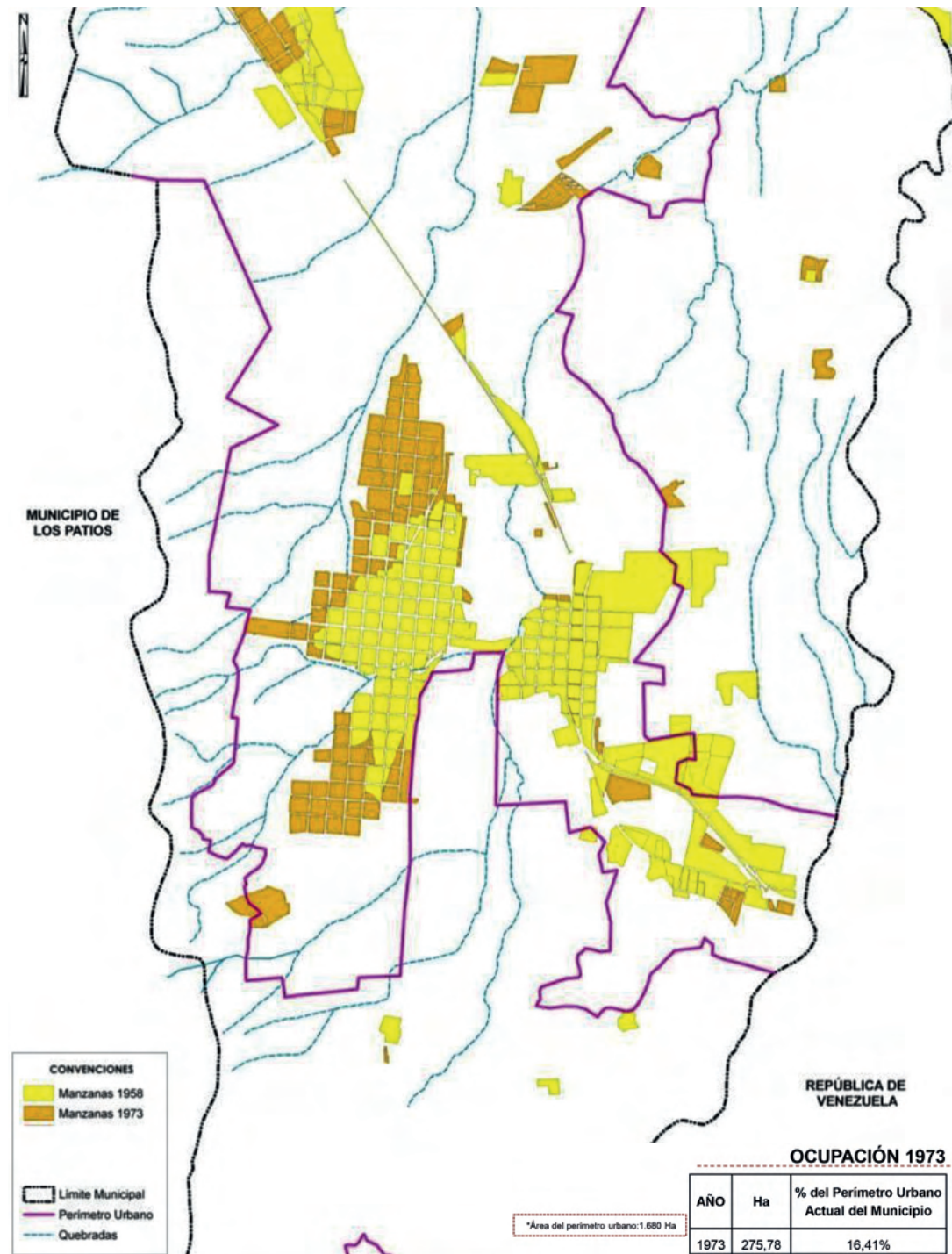
Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio “Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana” Bogotá, 1997. Pág 72.



Crecimiento Urbano de Villa del Rosario 1958

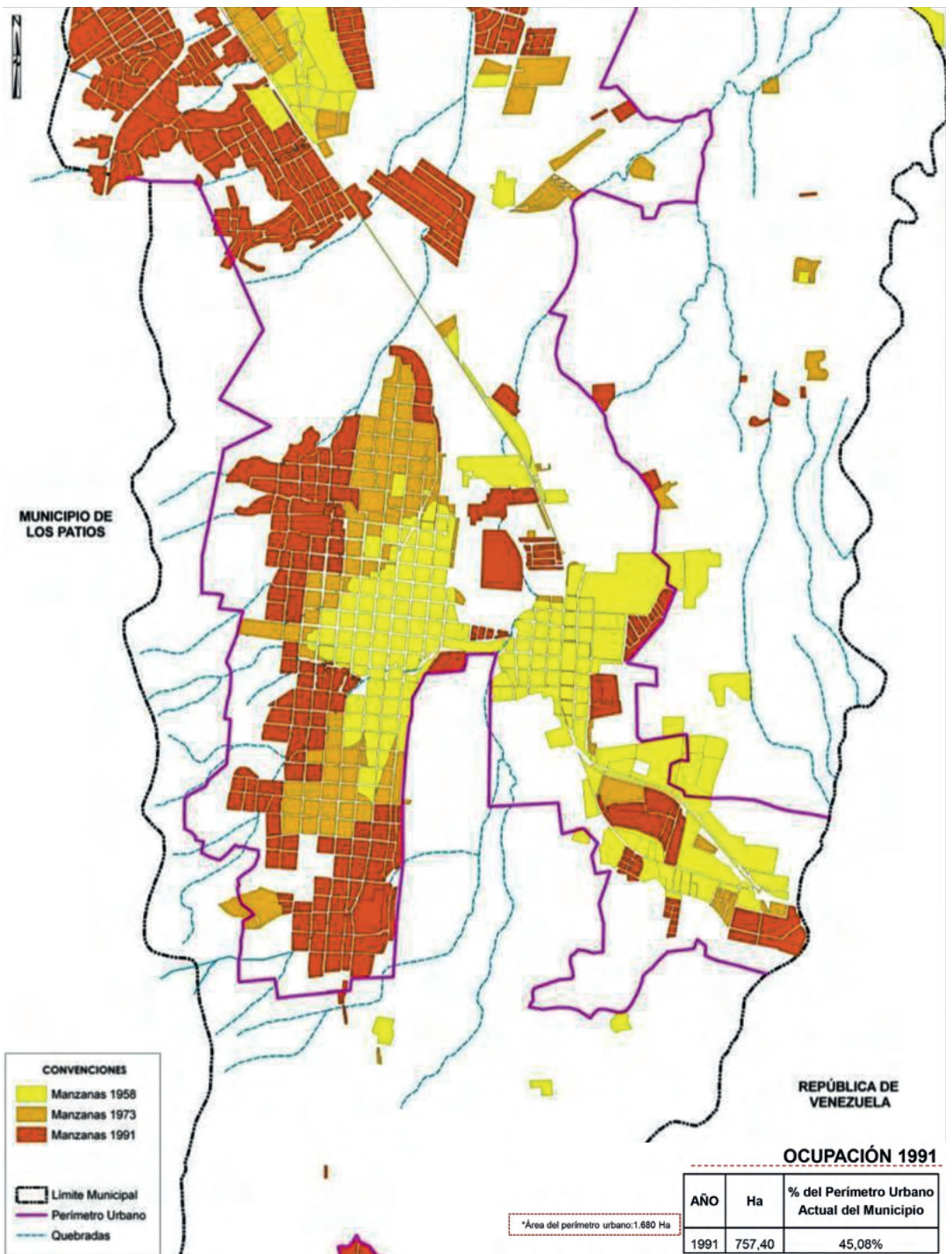
Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





**Crecimiento Urbano de Villa del Rosario 1973**

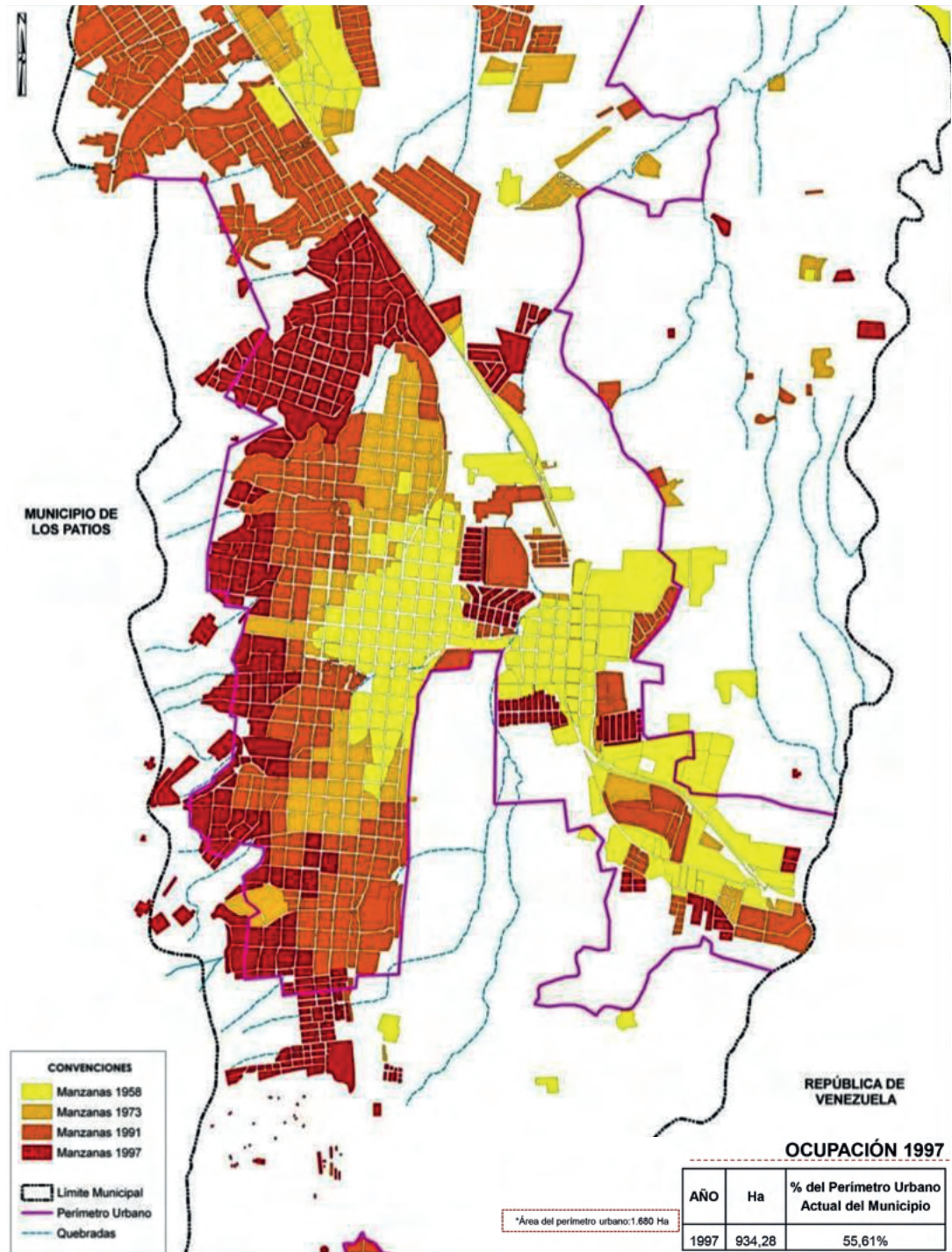
Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016



**Crecimiento Urbano de Villa del Rosario 1991**

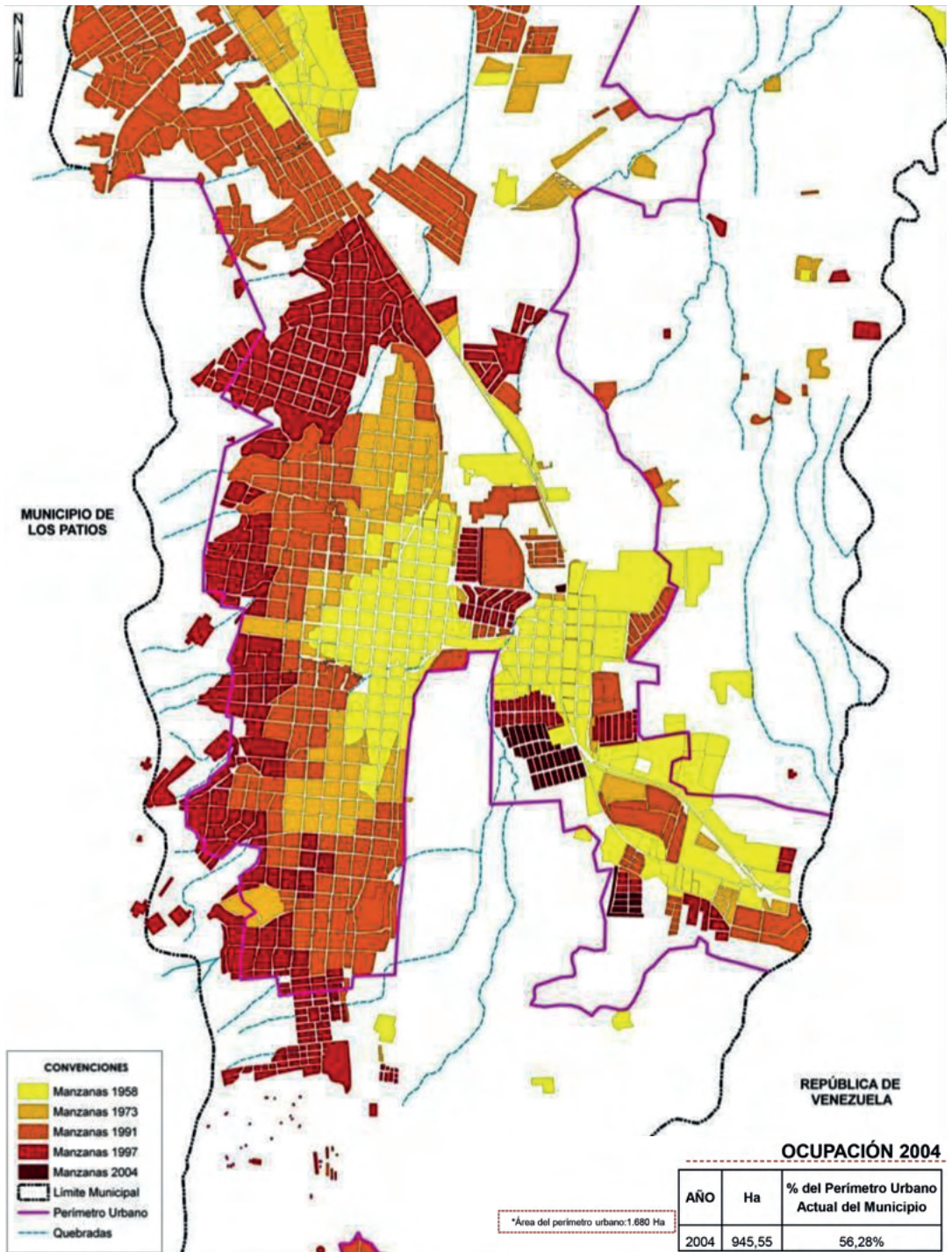
Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





**Crecimiento Urbano de Villa del Rosario 1997**

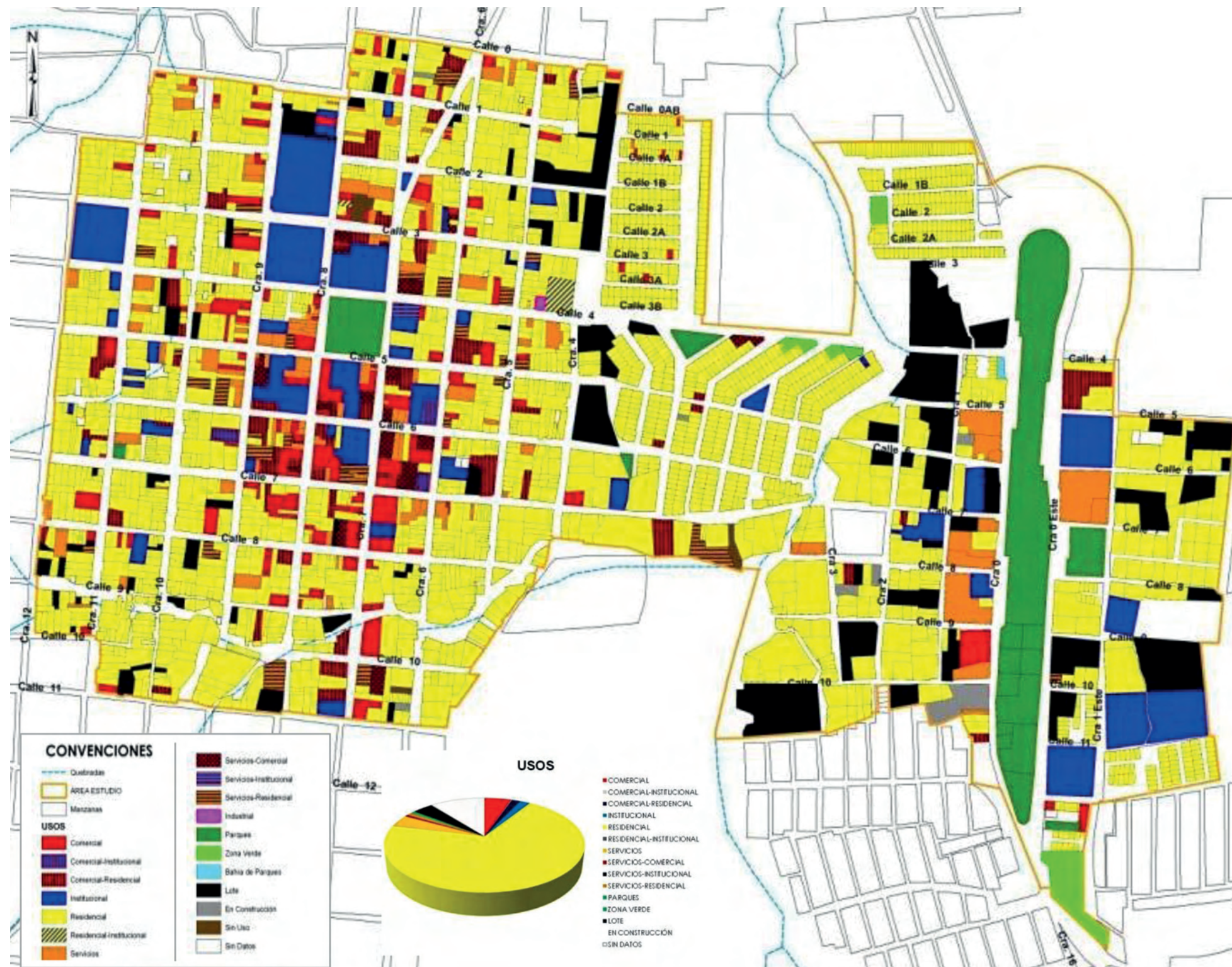
Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016



**Crecimiento Urbano de Villa del Rosario 2004**

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016



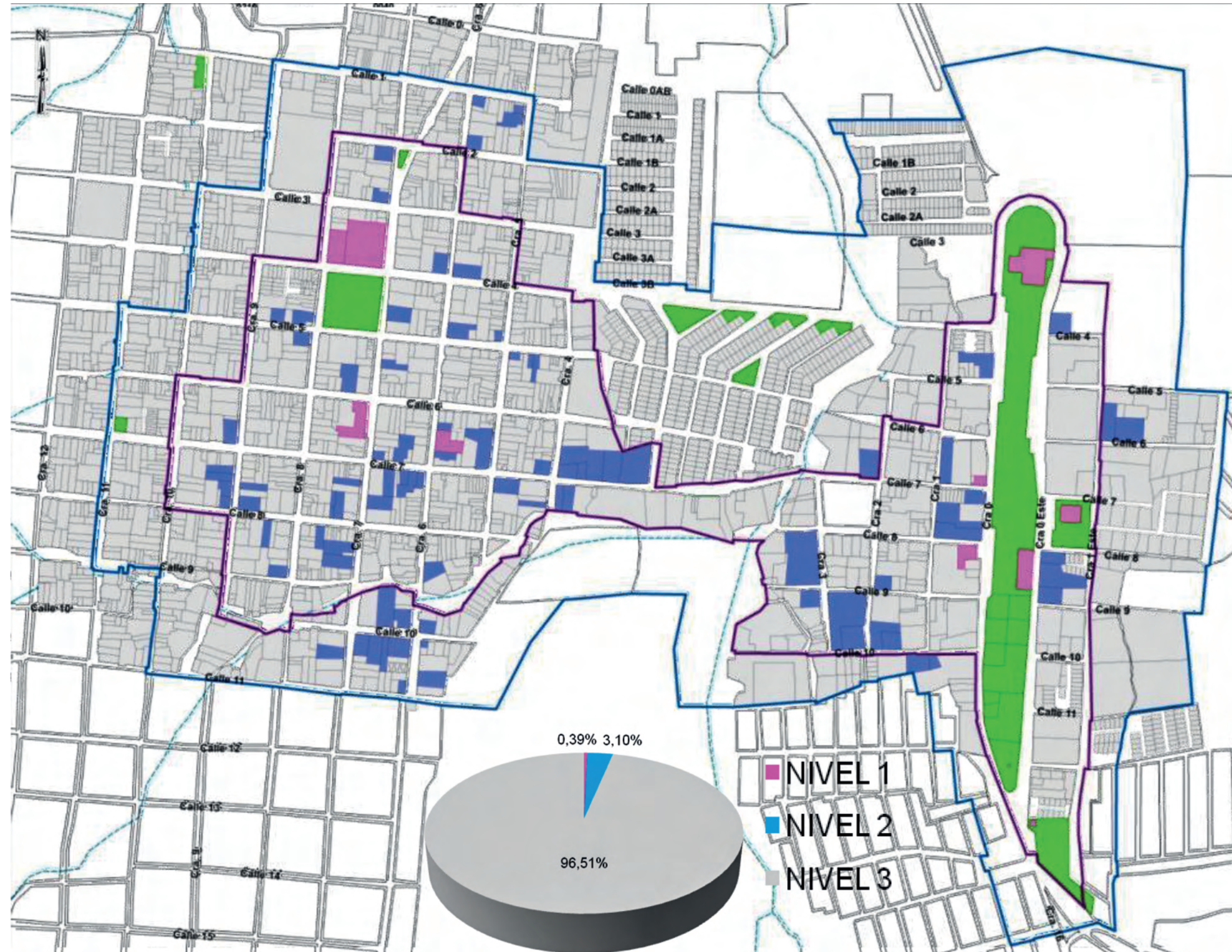


USO	# PREDIOS	%
<b>Residencial</b>	<b>1957</b>	<b>69,8 %</b>
<b>Residencial-Institucional</b>	<b>2</b>	<b>0,1%</b>
<b>Residencial - Servicios</b>	<b>27</b>	<b>1,0%</b>
<b>Residencial - Comercial</b>	<b>47</b>	<b>1,7%</b>
Servicios	114	4,1%
Comercial	146	5,2%
Institucional	55	2,0%
Mixto	22	0,7%
Parques y Zonas Verdes	21	0,7%
En construcción - Varios	412	14%
<b>TOTAL</b>	<b>2803</b>	<b>100%</b>

## Plano Usos Municipio Villa del Rosario

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





Nivel 1: Conservación integral:  
BICreconocidos del complejo histórico  
y algunos del centro urbano con valores  
singulares destacados.

Nivel 2: Conservación del tipo arquitectónico:  
Los inmuebles de arquitectura doméstica/  
tradicional valiosa por ser representativos de  
la historia del desarrollo de la ciudad.

Nivel 3: Conservación Contextual.

NIVELES DE INTERVENCIÓN		
NIVEL	CANTIDADPREDIOS	%
1	11	0.39
2	87	3.09
3	2712	96.5

### Plano Niveles de Intervención Municipio Villa del Rosario

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016



PDARQ Programa de Doctorado en Arquitectura ETS Arquitectura





Estructura Predial del Casco Urbano Año 1993

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio “Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana” Bogotá, 1997.



Crecimiento Histórico Años 1976 y 2010

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Barichara, el Camino de Guane y su área de Influencia





**Delimitación Sector Antiguo y Área de Influencia**

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Barichara, el Camino de Guane y su área de Influencia



**Plano Niveles de Intervención Existente**

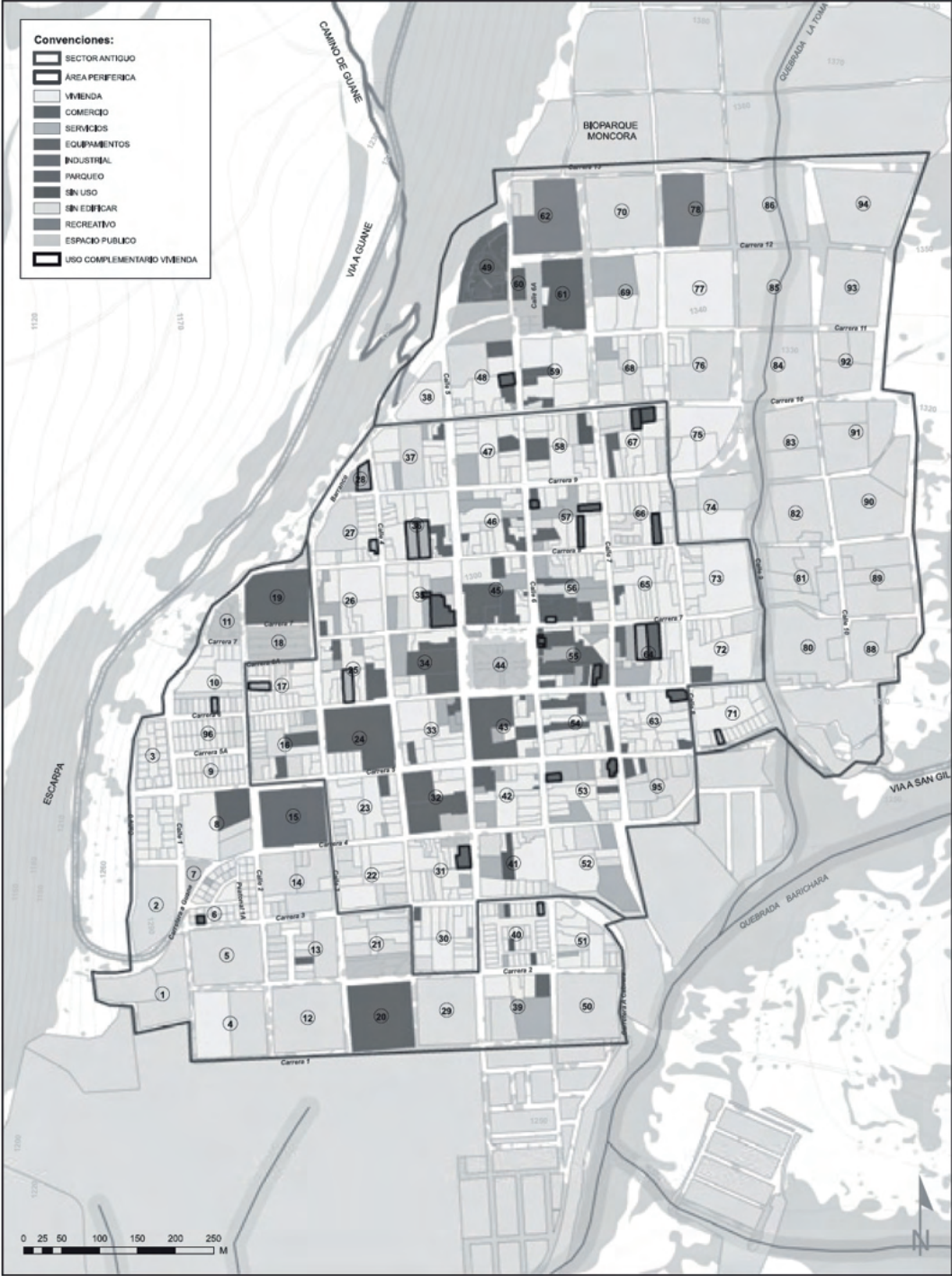
Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Barichara, el Camino de Guane y su área de Influencia





Plano de Alturas Municipio de Barichara

Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Barichara, el Camino de Guane y su área de Influencia








Plano de Usos Municipio de Barichara

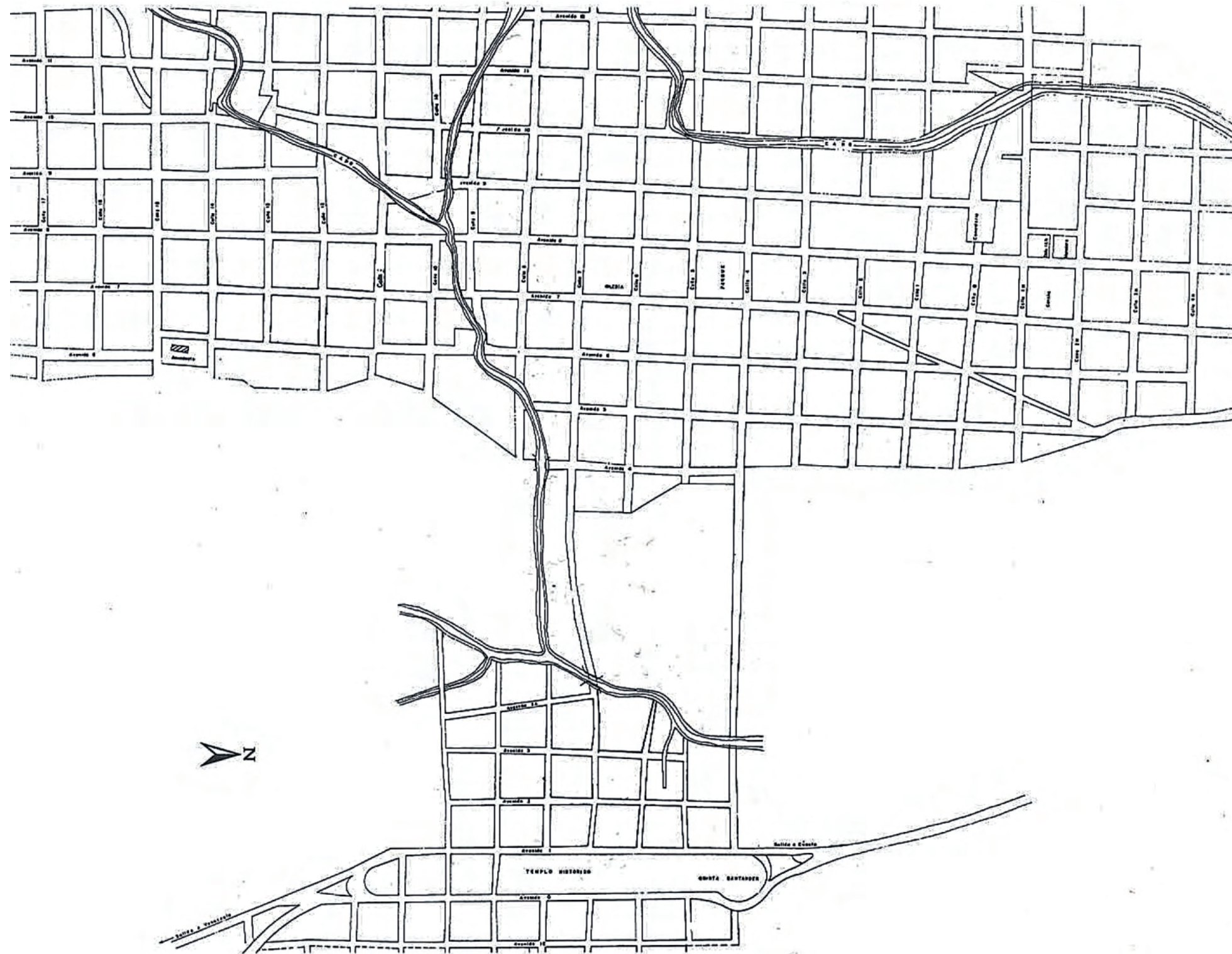
Fuente: Tomado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Barichara, el Camino de Guane y su área de Influencia





Municipio: <b>SAN GIL</b> Departamento: <b>Santander</b>													Declaratoria: Decreto 264 de 1963		 															
Fundación: Marzo 17 de 1689						Fundador: Gil de Cabrera y Dávalos							Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.																	
Altura: 1.114 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 24° C							Artículo 4°.-  En virtud de la autorización conferida por el artículo 6 de la Ley 163 de 1959, y sin perjuicio de otras reservas que puedan decretarse en el futuro, se incluyen en las reservas especificadas en el artículo 4 de dicha Ley los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, <b>San Gil</b> , Pamplona, Rionegro (Antioquia), Marinilla y Girón.																	
													Fuente: Tomado del Decreto 264 de 1963																	
Censo General 2005													Plan Especial de Manejo y Protección: Se encuentra en trámite de Resolución																	
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																														
Sector													Localización Departamento de Santander y San Gil en el Departamento																	
Población Censada													Fuente: Imágenes tomadas de Wikipedia																	
Hogares Censados													 <table><tr><th>Provincias</th><th>No. Habitantes</th></tr><tr><td>Comunera</td><td>96.131</td></tr><tr><td>García-Rovira</td><td>98.714</td></tr><tr><td>Guanentá</td><td>135.793</td></tr><tr><td>Mares</td><td>298.503</td></tr><tr><td>Soto</td><td>1.120.653</td></tr><tr><td>Vélez</td><td>183.466</td></tr></table>				Provincias	No. Habitantes	Comunera	96.131	García-Rovira	98.714	Guanentá	135.793	Mares	298.503	Soto	1.120.653	Vélez	183.466
Provincias	No. Habitantes																													
Comunera	96.131																													
García-Rovira	98.714																													
Guanentá	135.793																													
Mares	298.503																													
Soto	1.120.653																													
Vélez	183.466																													
Personas por Hogar																														
Viviendas Censadas																														
Cabecera													36.748																	
Resto													6.240																	
Total													42.988																	
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005													Catedral de La Santa Cruz																	
Análisis Cierre de Brechas													Fuente: Tomado de Wikipedia																	
																														
																														
Fuente: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación													Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 08 de Septiembre de 2019																	

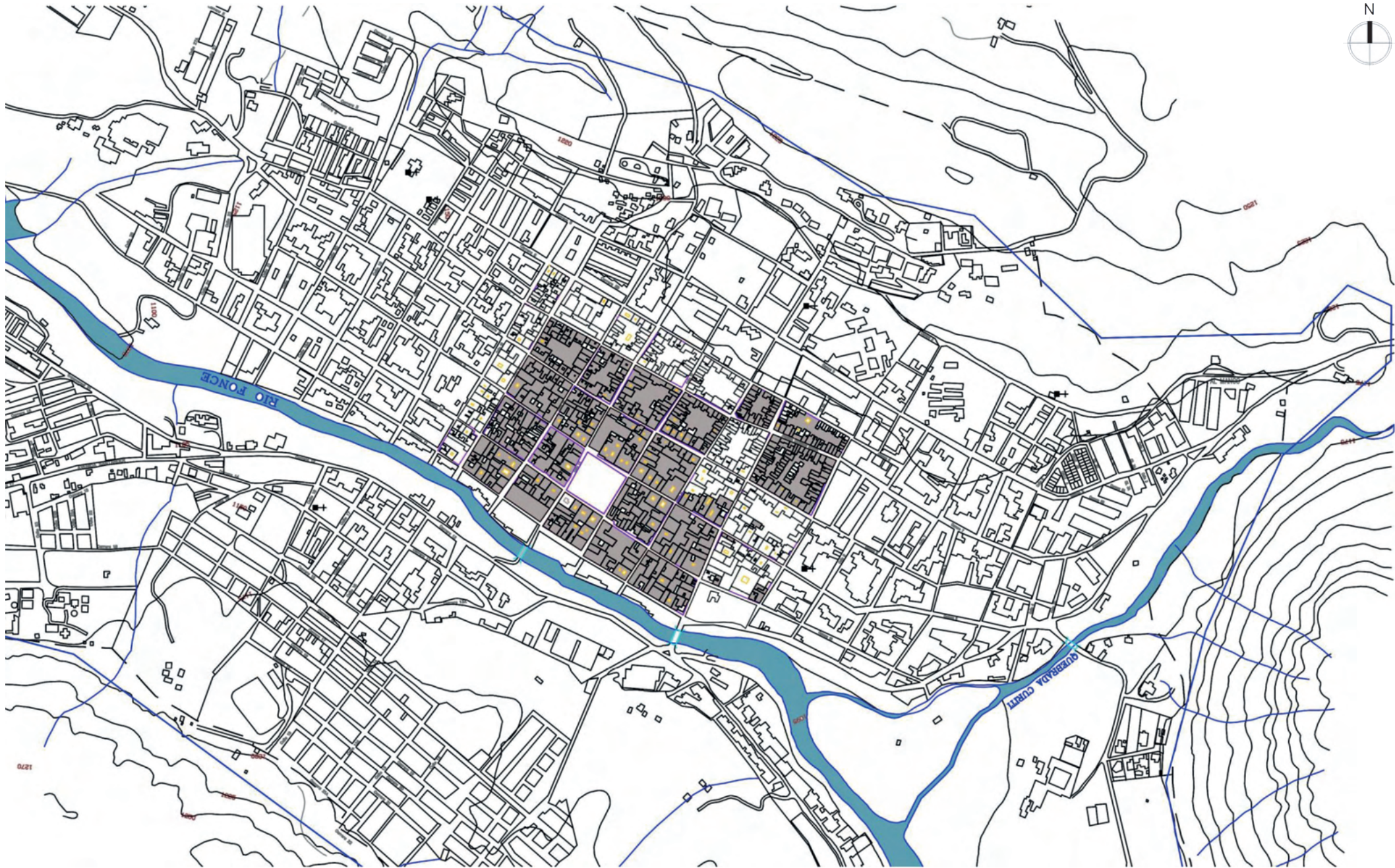




**Plano San Gil Sector Antiguo**

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 61





Las primeras poblaciones surgieron a principios del siglo XVI; otros nacieron a partir del comercio, con el devenir de la civilización y el empuje de la minería, la extracción de la quina, el cultivo del tabaco, la arriería y el truque; las demás, que no nacieron a partir de la economía, fueron “pueblos de indios” y el fin era dominarlos fácilmente y a la vez promover las labores de evangelización; algunas provincias como Charalá y Curití surgieron de esta manera.

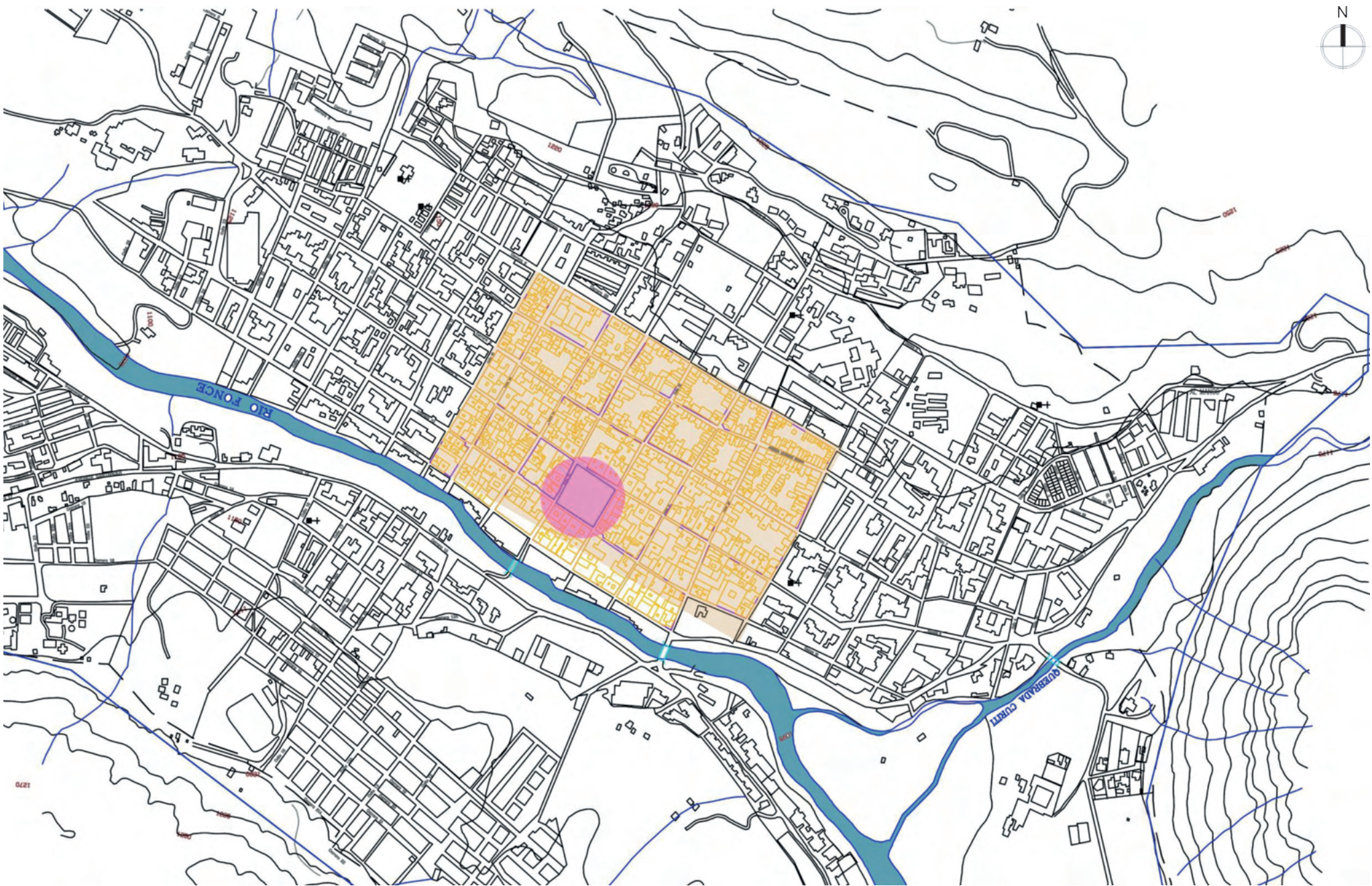
San Gil, por su parte, fue un pueblo de blancos fundado y habitado por españoles. Estos asentamientos afianzaron la colonización y el poblamiento de la provincia durante el período colonial. Debido a esto fue posible la construcción de vías e incluso actualmente se utilizan.

Crecimiento Urbano de San Gil a Comienzo del Siglo XVI

Descripción

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





Área  
33,34 Hectáreas

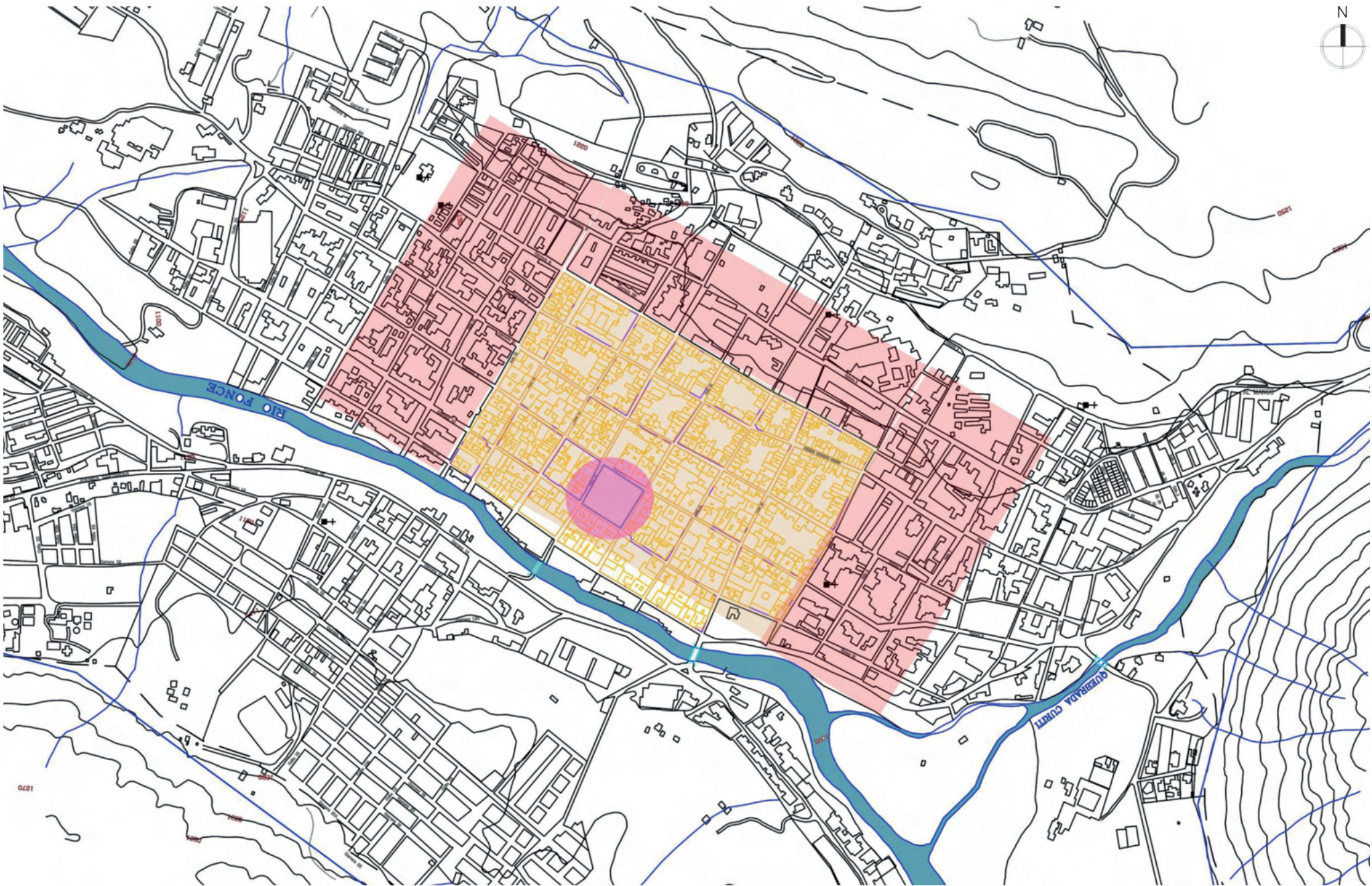
Fundación por el indio Guane Ritoque. El sitio donde San Gil fue trazado parece haber sido desde comienzos del siglo XVII sede de un caserío que alojaba arrieros y pasajeros que vadeaban el río Fonce en su recorrido desde Vélez hacia el distrito minero del río del Oro.

Crecimiento Urbano de San Gil 1850

Descripción

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





Área  
79,99 Hectáreas

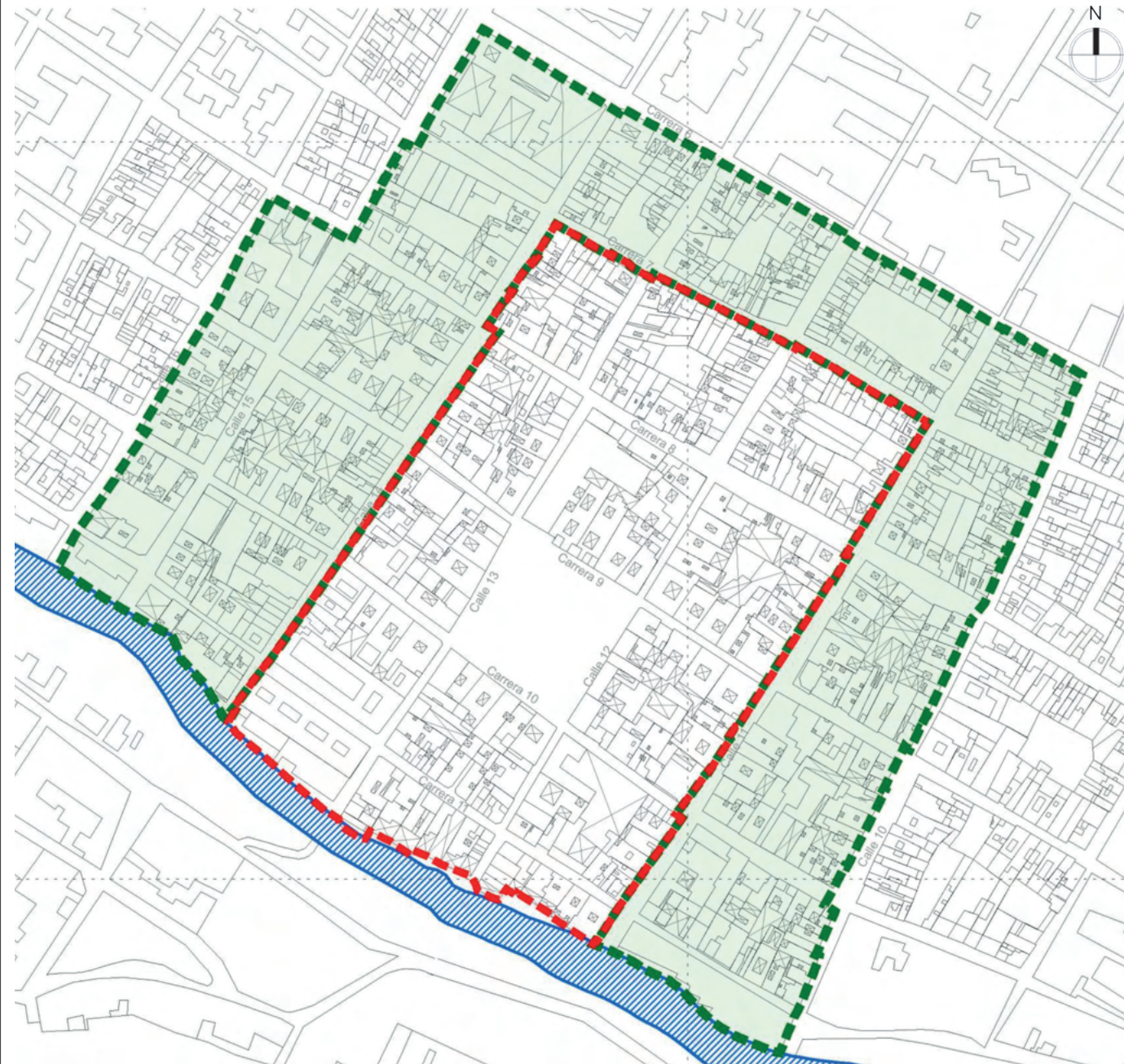
La ciudad consta de 703 casas de habitación distribuidas en 107 manzanas las que están formadas por 17 calles transversales cortadas por 8 carreras longitudinales.

Crecimiento Urbano de San Gil 1907

Descripción

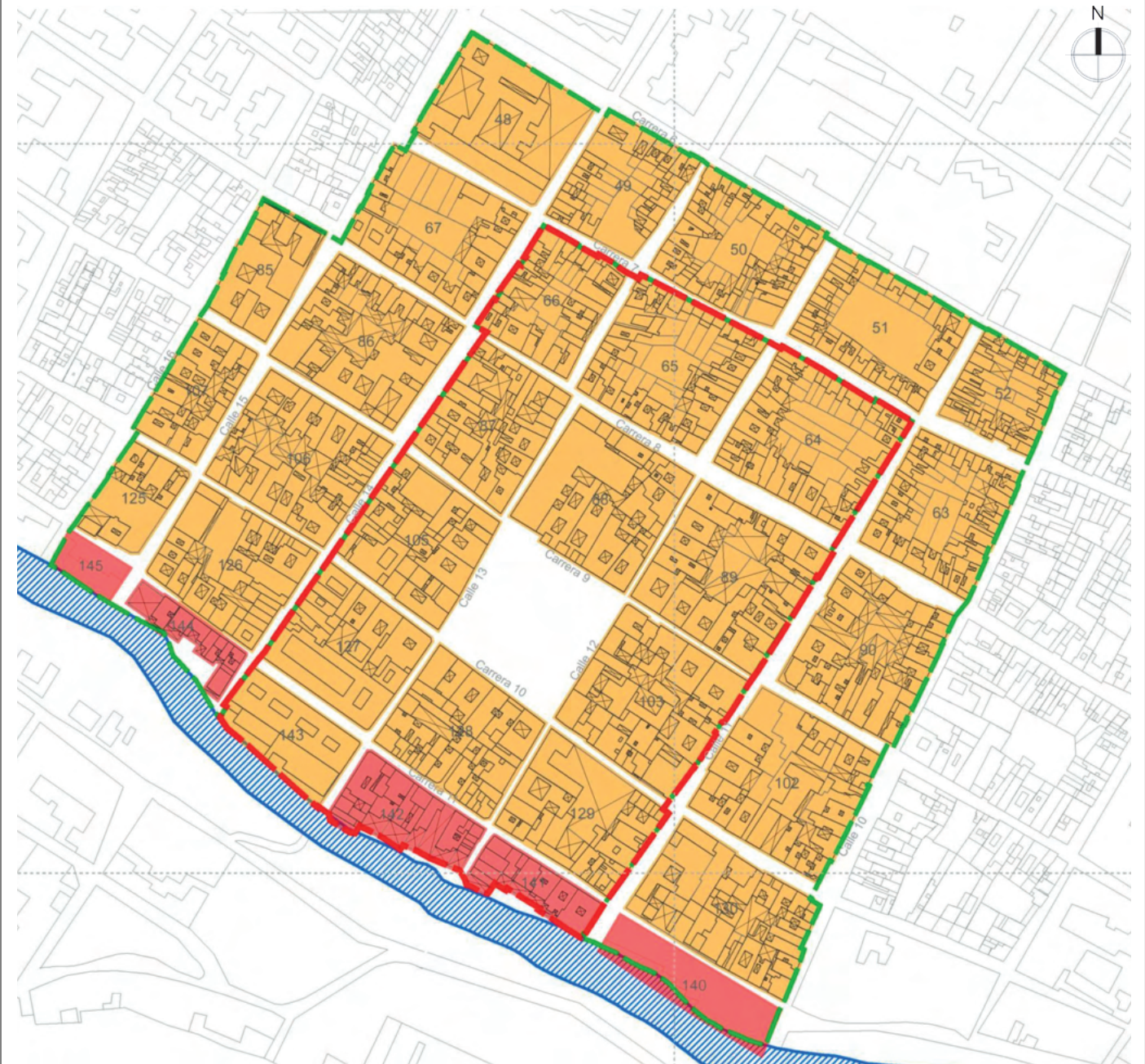
Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





..... Área Afectada 12,09 Hectáreas  
..... Zona de Influencia 14,05 Hectáreas

### Delimitación Área Afectada y Zona de Influencia

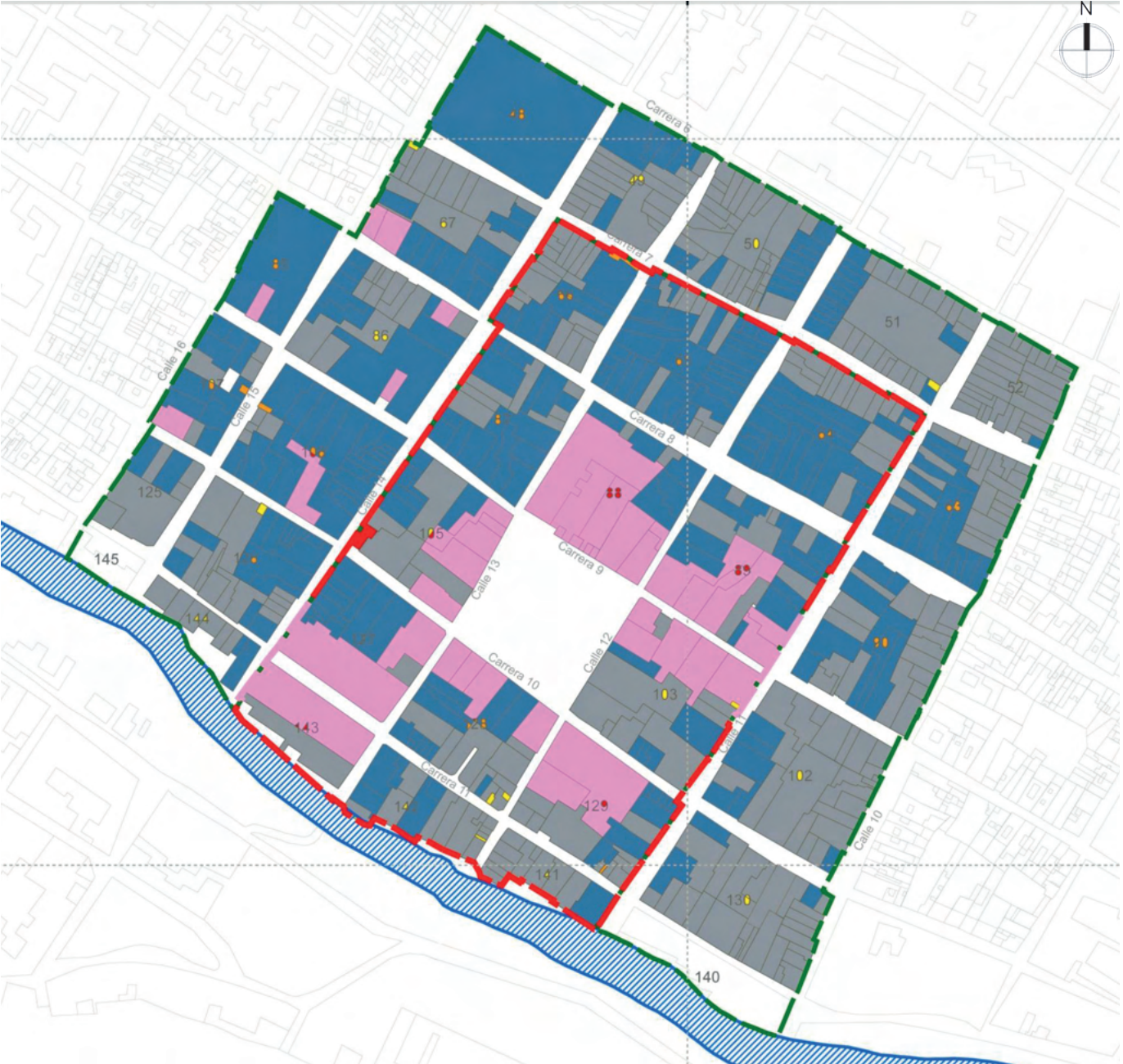


● Conservación  
● Renovación

### Tratamientos Urbanísticos

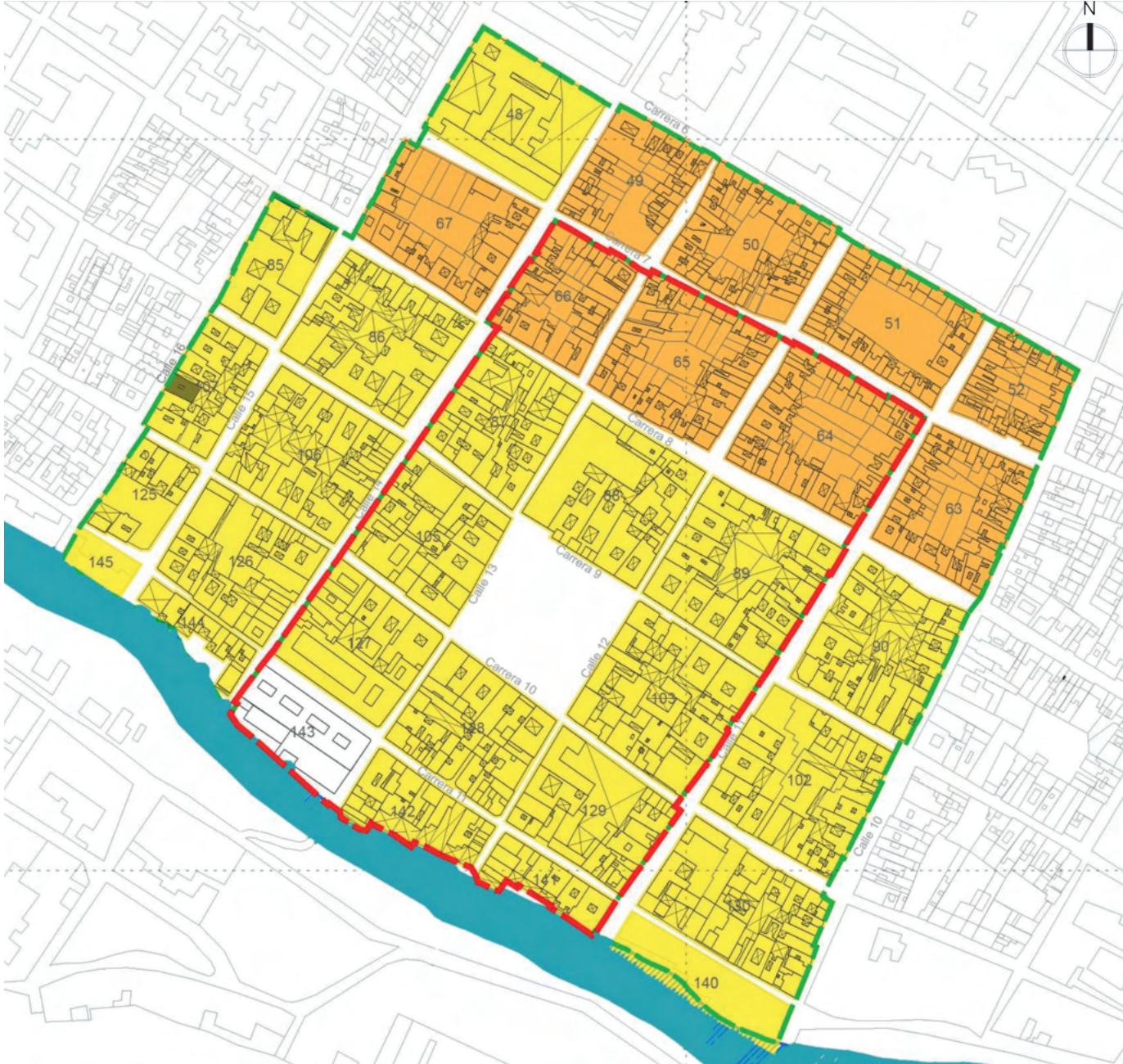
Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





- Nivel 1: Conservación Integral
- Nivel 2: Conservación Arquitectónica
- Nivel 3: Conservación Contextual

Niveles de Intervención

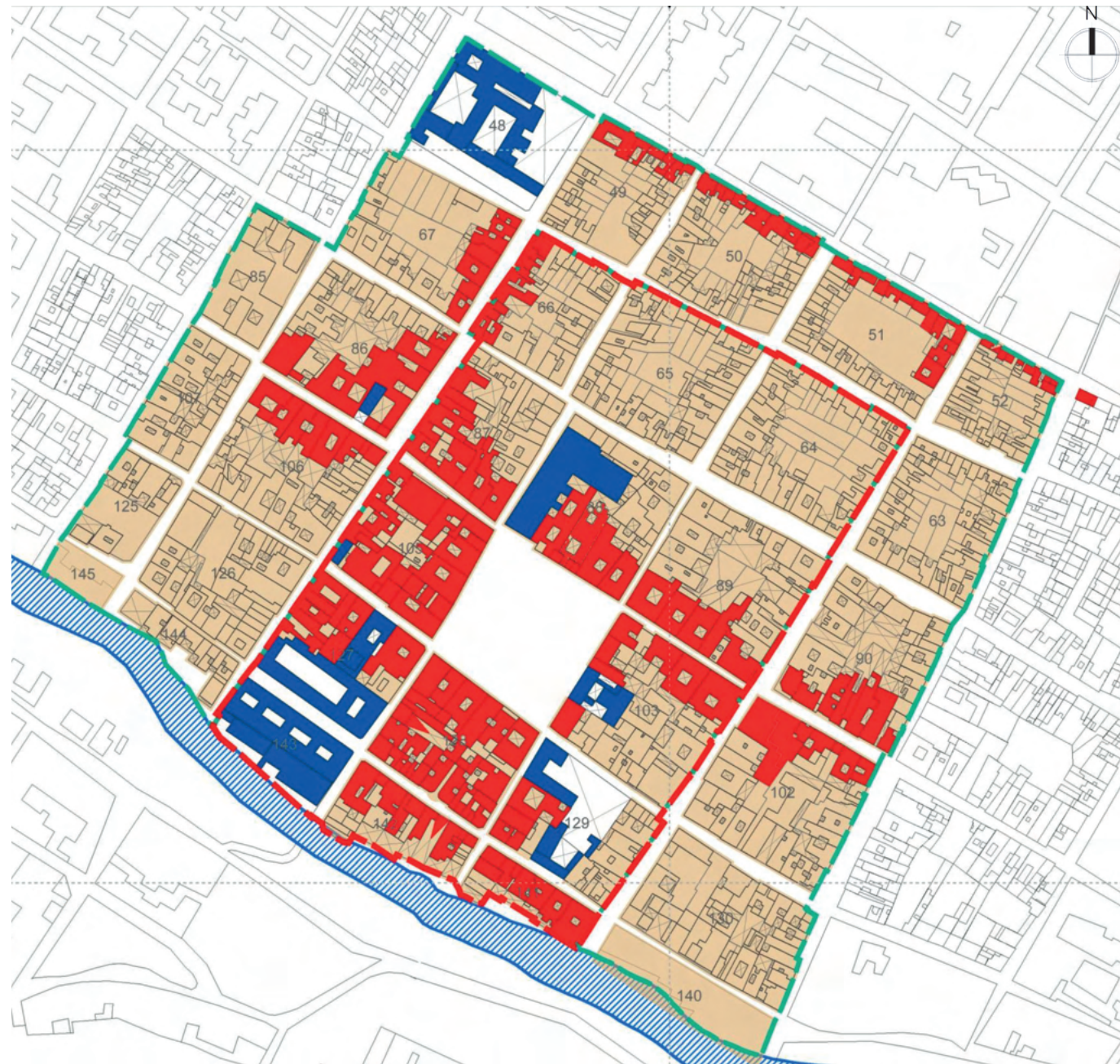


- 2 Pisos
- 3 Pisos

Plano de Alturas Municipio de San Gil

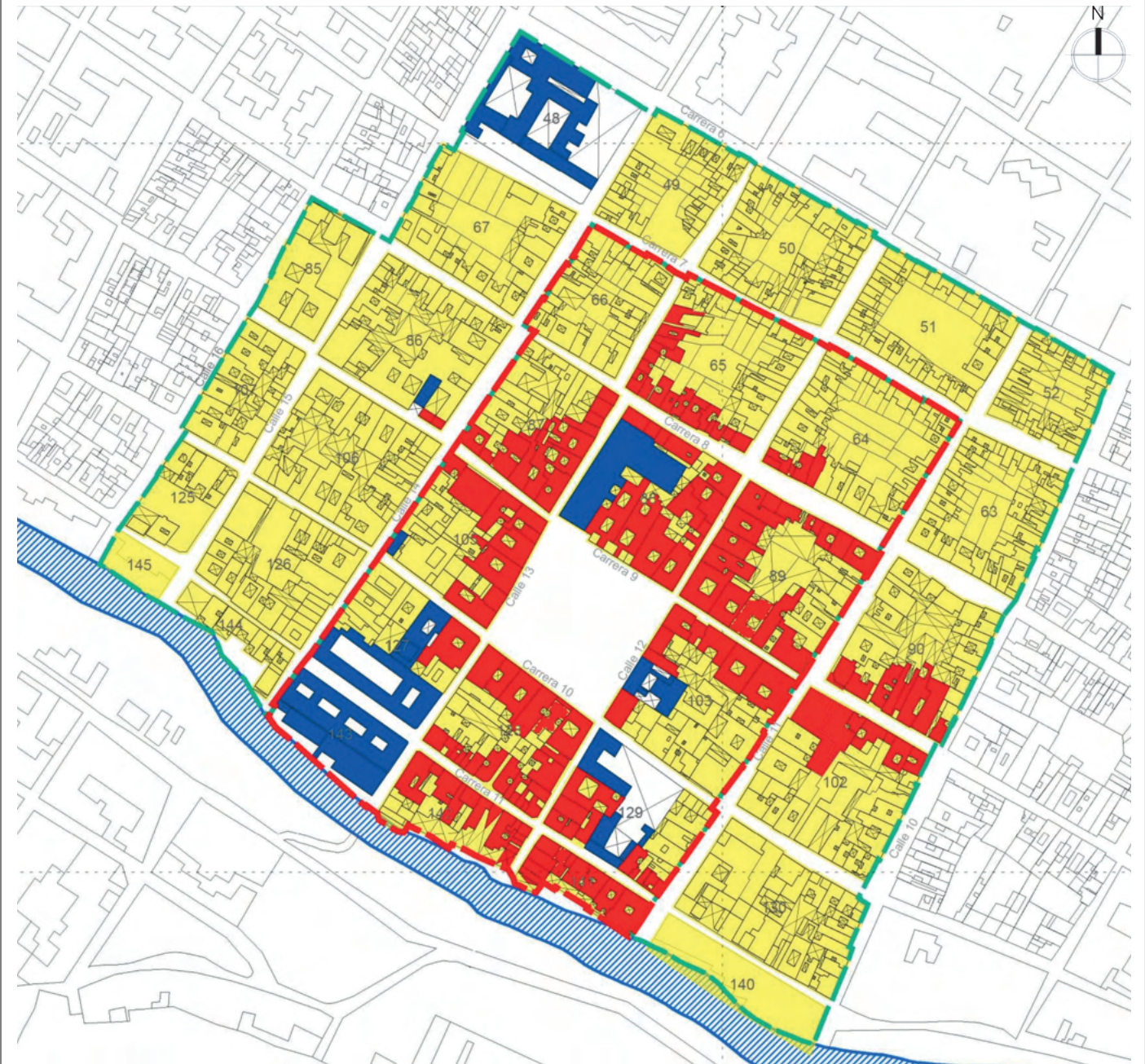
Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





- Institucional - Dotacional
- Comercial
- Residencial y/o Mixto

**Plano Usos Primer Piso**








- Institucional - Dotacional
- Comercial
- Residencial

**Plano Usos Segundo Piso en Adelante**

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





Municipio: <b>SAN JUAN DE GIRÓN</b> Departamento: <b>Santander</b>													Declaratoria: Decreto 264 de 1963		 																																																								
Fundación: Enero 15 de 1631						Fundador: Francisco Mantilla de los Ríos							Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.																																																										
Altura: 777 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 28° C																																																																	
Año	1.905	1.912	1.918	1.928	1.938	1.951	1.964	1.973	1.985	1.993	2.005	2.016	En virtud de la autorización conferida por el artículo 6 de la Ley 163 de 1959, y sin perjuicio de otras reservas que puedan decretarse en el futuro, se incluyen en las reservas especificadas en el artículo 4 de dicha Ley los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, San Gil, Pamplona, Rionegro (Antioquia), Marinilla y <b>Girón</b> .																																																										
Cabecera						2.184	3.889	10.560	46.367	74.322	117.672	166.149																																																											
Resto						10.485	10.299	12.585	11.686	14.650	17.859	19.165																																																											
Total		6.202	7.881	8.250	10.744	12.669	14.188	23.145	58.053	88.972	135.531	185.314	 <table><tr><td>Provincias</td><td>No. Habitantes</td></tr><tr><td>Comunera</td><td>96.131</td></tr><tr><td>García-Rovira</td><td>98.714</td></tr><tr><td>Guanentá</td><td>135.793</td></tr><tr><td>Mares</td><td>298.503</td></tr><tr><td>Soto</td><td>1.120.653</td></tr><tr><td>Vélez</td><td>183.466</td></tr></table>				Provincias	No. Habitantes	Comunera	96.131	García-Rovira	98.714	Guanentá	135.793	Mares	298.503	Soto	1.120.653	Vélez	183.466																																									
Provincias	No. Habitantes																																																																						
Comunera	96.131																																																																						
García-Rovira	98.714																																																																						
Guanentá	135.793																																																																						
Mares	298.503																																																																						
Soto	1.120.653																																																																						
Vélez	183.466																																																																						
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE													Fuente: Tomado del Decreto 264 de 1963																																																										
Censo General 2005																																																																							
Sector	Población Censada				Hogares Censados			Personas por Hogar	Viviendas Censadas																																																														
Cabecera	117.672				29.697			3,99	26.640																																																														
Resto	17.859				3.848				3.958																																																														
Total	135.531				33.545				30.598																																																														
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005																																																																							
Análisis Cierre de Brechas																																																																							
<table><tr><td></td><td>Municipio</td><td>Departamento</td><td>Región</td></tr><tr><td>Cobertura neta educación media (%2015)</td><td>33,5%</td><td>48,4%</td><td>47,3%</td></tr><tr><td>Pruebas saber 11 matemáticas (2016)</td><td>51,7</td><td>53,0</td><td>52,0</td></tr><tr><td>Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)</td><td>5,3%</td><td>7,9%</td><td>8,4%</td></tr><tr><td>Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)</td><td>9,1</td><td>12,8</td><td>12,4</td></tr><tr><td>Cobertura vacunación DTP (2015)</td><td>90,8%</td><td>90,7%</td><td>93,6%</td></tr><tr><td>Cobertura total acueducto (2005)</td><td>86,4%</td><td>83,0%</td><td>82,2%</td></tr><tr><td>Déficit cualitativo de vivienda (2005)</td><td>11,4%</td><td>20,6%</td><td>24,0%</td></tr><tr><td>Déficit cuantitativo de vivienda (2005)</td><td>15,8%</td><td>12,0%</td><td>11,9%</td></tr></table>							Municipio	Departamento	Región	Cobertura neta educación media (%2015)	33,5%	48,4%	47,3%	Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	51,7	53,0	52,0	Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	5,3%	7,9%	8,4%	Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	9,1	12,8	12,4	Cobertura vacunación DTP (2015)	90,8%	90,7%	93,6%	Cobertura total acueducto (2005)	86,4%	83,0%	82,2%	Déficit cualitativo de vivienda (2005)	11,4%	20,6%	24,0%	Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	15,8%	12,0%	11,9%	<table><tr><td>Resultado Esperado 2018**</td><td>Esfuerzo en cierre de brechas</td></tr><tr><td>42,5%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>51,8</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>4,7%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>9,5</td><td>bajo</td></tr><tr><td>100,0%</td><td>mediobajo</td></tr><tr><td>96,9%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>7,7%</td><td>bajo</td></tr><tr><td>10,3%</td><td>mediobajo</td></tr></table>						Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas	42,5%	mediobajo	51,8	mediobajo	4,7%	bajo	9,5	bajo	100,0%	mediobajo	96,9%	bajo	7,7%	bajo	10,3%	mediobajo						
	Municipio	Departamento	Región																																																																				
Cobertura neta educación media (%2015)	33,5%	48,4%	47,3%																																																																				
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	51,7	53,0	52,0																																																																				
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	5,3%	7,9%	8,4%																																																																				
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	9,1	12,8	12,4																																																																				
Cobertura vacunación DTP (2015)	90,8%	90,7%	93,6%																																																																				
Cobertura total acueducto (2005)	86,4%	83,0%	82,2%																																																																				
Déficit cualitativo de vivienda (2005)	11,4%	20,6%	24,0%																																																																				
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	15,8%	12,0%	11,9%																																																																				
Resultado Esperado 2018**	Esfuerzo en cierre de brechas																																																																						
42,5%	mediobajo																																																																						
51,8	mediobajo																																																																						
4,7%	bajo																																																																						
9,5	bajo																																																																						
100,0%	mediobajo																																																																						
96,9%	bajo																																																																						
7,7%	bajo																																																																						
10,3%	mediobajo																																																																						
Fuente: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación															Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 08 de Septiembre de 2019																																																								









**Estructura Predial del Sector Antiguo año 1993**

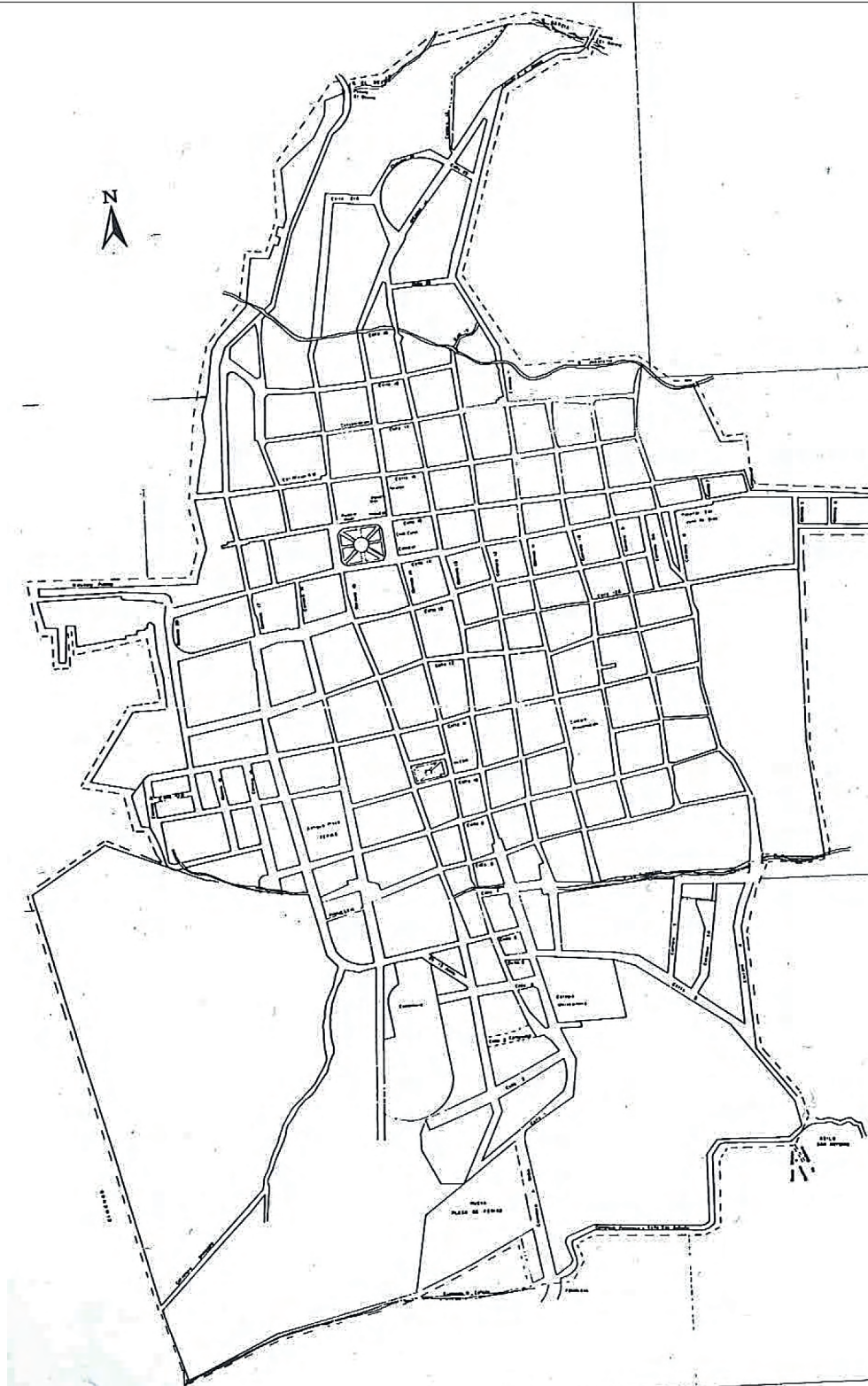
Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 68





Municipio: <b>SOCORRO</b> Departamento: <b>Santander</b>													Declaratoria: Decreto 264 de 1963		 																																					
Fundación: Junio 16 de 1683						Fundadores: Don José de Archila y Don José Díaz Sarmiento							Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.																																							
Altura: 1.300 metros sobre el nivel del mar						Temperatura: 23° C							<p>Artículo 4°.-</p> <p>En virtud de la autorización conferida por el artículo 6 de la Ley 163 de 1959, y sin perjuicio de otras reservas que puedan decretarse en el futuro, se incluyen en las reservas especificadas en el artículo 4 de dicha Ley los sectores antiguos de Bogotá, <b>Socorro</b>, San Gil, Pamplona, Rionegro (Antioquia), Marinilla y Girón.</p> <p>Fuente: Tomado del Decreto 264 de 1963</p>																																							
Fuentes: Datos tomados de los Censos en los años indicados. DANE																																																				
<b>Censo General 2005</b>																																																				
<table><tr><th>Sector</th><th>Población Censada</th><th>Hogares Censados</th><th>Personas por Hogar</th><th>Viviendas Censadas</th></tr><tr><td>Cabecera</td><td>22.807</td><td>6.045</td><td rowspan="3">3,62</td><td>5.546</td></tr><tr><td>Resto</td><td>5.951</td><td>1.372</td><td>1.320</td></tr><tr><td>Total</td><td>28.758</td><td>7.417</td><td>6.866</td></tr></table>													Sector	Población Censada	Hogares Censados	Personas por Hogar	Viviendas Censadas	Cabecera	22.807	6.045	3,62	5.546	Resto	5.951	1.372	1.320	Total	28.758	7.417	6.866																						
Sector	Población Censada	Hogares Censados	Personas por Hogar	Viviendas Censadas																																																
Cabecera	22.807	6.045	3,62	5.546																																																
Resto	5.951	1.372		1.320																																																
Total	28.758	7.417		6.866																																																
Fuentes: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005													<b>Catedral Nuestra Señora del Socorro</b>		Provincias Departamento de Santander																																					
<b>Análisis Cierre de Brechas</b>															Fuente: Tomado de Wikipedia																																					
<table><tr><th></th><th>Municipio</th><th>Departamento</th><th>Región</th></tr><tr><td>Cobertura neta educación media (%2015)</td><td>49,9%</td><td>48,4%</td><td>47,3%</td></tr><tr><td>Pruebas saber 11 matemáticas (2016)</td><td>52,7</td><td>53,0</td><td>52,0</td></tr><tr><td>Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)</td><td>6,2%</td><td>7,9%</td><td>8,4%</td></tr><tr><td>Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)</td><td>9,6</td><td>12,8</td><td>12,4</td></tr><tr><td>Cobertura vacunación DTP (2015)</td><td>92,5%</td><td>90,7%</td><td>93,6%</td></tr><tr><td>Cobertura total acueducto (2005)</td><td>91,6%</td><td>83,0%</td><td>82,2%</td></tr><tr><td>Déficit cualitativo de vivienda (2005)</td><td>9,0%</td><td>20,6%</td><td>24,0%</td></tr><tr><td>Déficit cuantitativo de vivienda (2005)</td><td>13,8%</td><td>12,0%</td><td>11,9%</td></tr></table>														Municipio	Departamento	Región	Cobertura neta educación media (%2015)	49,9%	48,4%	47,3%	Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	52,7	53,0	52,0	Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	6,2%	7,9%	8,4%	Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	9,6	12,8	12,4	Cobertura vacunación DTP (2015)	92,5%	90,7%	93,6%	Cobertura total acueducto (2005)	91,6%	83,0%	82,2%	Déficit cualitativo de vivienda (2005)	9,0%	20,6%	24,0%	Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	13,8%	12,0%	11,9%				
	Municipio	Departamento	Región																																																	
Cobertura neta educación media (%2015)	49,9%	48,4%	47,3%																																																	
Pruebas saber 11 matemáticas (2016)	52,7	53,0	52,0																																																	
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)	6,2%	7,9%	8,4%																																																	
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2014)	9,6	12,8	12,4																																																	
Cobertura vacunación DTP (2015)	92,5%	90,7%	93,6%																																																	
Cobertura total acueducto (2005)	91,6%	83,0%	82,2%																																																	
Déficit cualitativo de vivienda (2005)	9,0%	20,6%	24,0%																																																	
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)	13,8%	12,0%	11,9%																																																	
Fuente: Tomado de las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación													Fuente: Imágenes tomadas de Google Imágenes. Consultadas el 08 de Septiembre de 2019																																							





**Estructura Predial del Casco Urbano 1970**

Fuente: Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Subdirección de Patrimonio "Patrimonio Urbano en Colombia. Estudios sobre la ciudad colombiana" Bogotá, 1997. Pág. 72



**Plano Llenos y Vacíos del Centro Histórico Año 2016**

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016

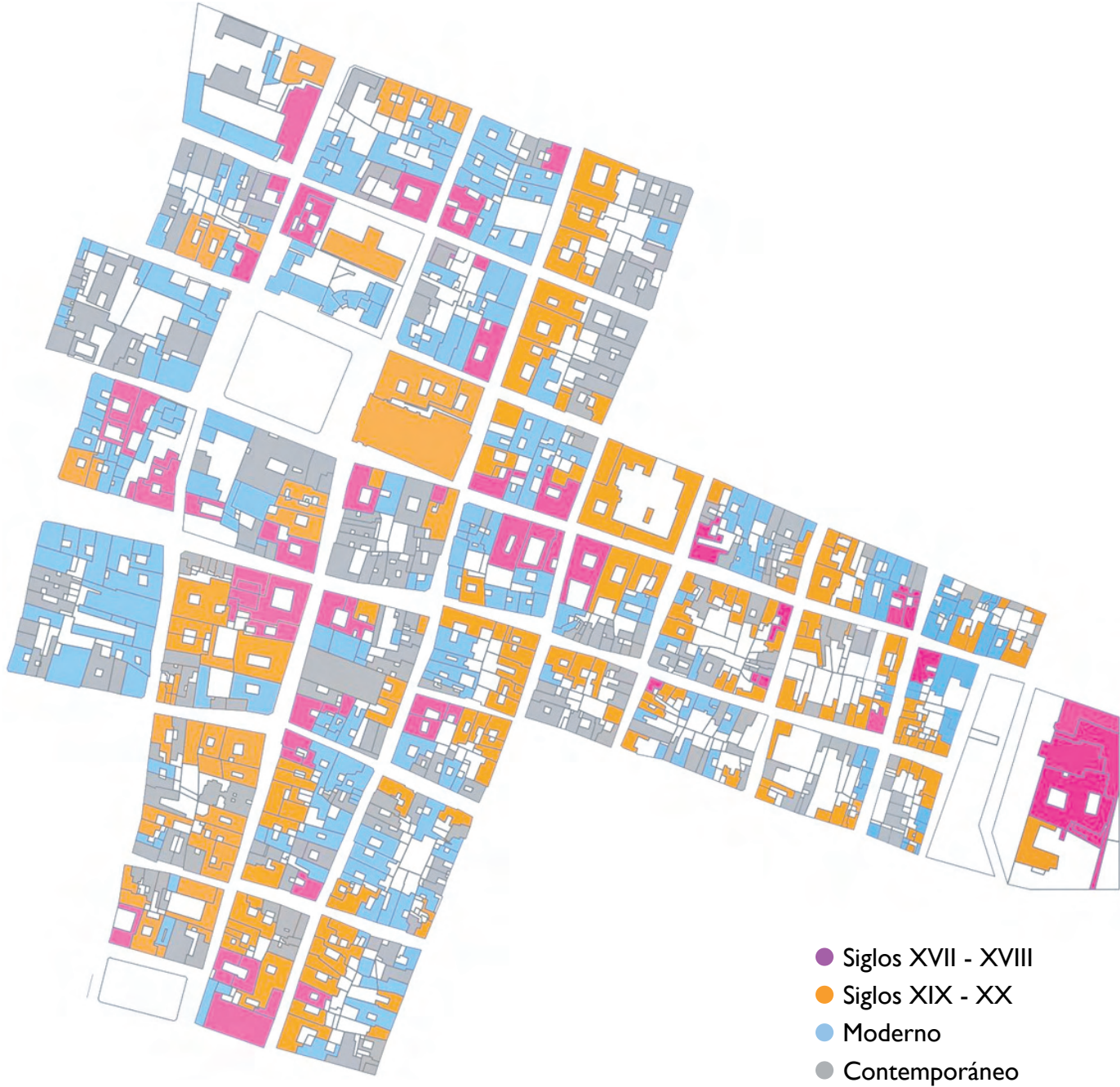




- Conservación Integral
- Conservación Arquitectónica
- Conservación Contextual

Criterios de Intervención Año 2016

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016



- Siglos XVII - XVIII
- Siglos XIX - XX
- Moderno
- Contemporáneo

Edades de las Edificaciones Año 2016

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





- Bueno
- Aceptable
- Regular
- Malo



- Bueno
- Aceptable
- Regular
- Malo
- Parqueadero
- Baldío

Estado de las Edificaciones Año 1981

Estado de las Edificaciones Año 2016

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





**Plano Usos Año 1981**

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016



**Plano Usos Año 2016**

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016





Plano Usos Año 1981

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016



Plano Usos Año 2016

Fuente: Elaborado por estudiantes del espacio académico de Cultura y Patrimonio de la Universidad de La Salle, del primer semestre de 2016